CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2000

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

SALA PRIMERA (CIVIL)

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LCDO. HUMBERTO A. COLLADO T.
SUPLENTE ENCARGADO
PRESIDENTE

LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

LDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

DR. ARTURO HOYOS **LDO. ADAN ARNULFO ARJONA L.**

LDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK **LCDO. HUMBERTO A. COLLADO T.**
SUPLENTE ENCARGADO

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 25 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA NOTA N° DAC-90/SDTTA/DAC DE 27 DE AGOSTO DE 1999, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 3

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO GOTTI CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 5

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. RODRIGO MIRANDA MORALES CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI. (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 7

ACCIÓN DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ESPERANZA VDA. DE BARLETTA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO NO. 185 DE 7 DE JULIO DE 1997, PROFERIDO POR LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO PENAL, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 9

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. BENJAMIN FLORES REYNA, EN REPRESENTACION DE MANUEL MADRID DURAN, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CONSISTENTE EN EL DESALOJO DE UN INMUEBLE. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 10

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LCDO. HÉCTOR CASTILLO RIOS, EN REPRESENTACIÓN DE TUNA PAN PACIFICO, COMPAÑIA ANONIMA, CONTRA LAS ÓRDENES VERBALES DE HACER Y NO HACER, PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 12

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACION DE MARGARITA GARCIA DE CHEN CONTRA EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL, DE LA PROVINCIA DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 14

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA DRA. ALMA LOPEZ DE VALLARINO, EN REPRESENTACION DE VICENTE CARRETERO NAPOLITANO, CONTRA LA JUEZ PRIMERA SUPLENTE DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 16

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. ANDRES ULDEMAR QUIJANO SERRANO EN NOMBRE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

ALIMENTACION, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMA (SITRABEHCOP) CONTRA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 20

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, EN REPRESENTACION DE NETWORKS (PANAMA), INC. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO. CSER117, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 23

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA RAMOS CHUE & ASOCIADOS, EN REPRESENTACION DE GERERARDO RODRIGUEZ STERLING, CONTRA LA RESOLCUION DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 DICTAFA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUDTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JACINTO RODRÍGUEZ LEDEZMA CONTRA EL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). . 29

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ÁLVARO CABAL DUCASA EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO JOSÉ CABAL MIRANDA, CONTRA LA ORDEN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR LA JUEZ SEXTA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VIENTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 31

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS JOVANE, BIEBERACH Y VALDES ROCA CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 32

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO MARTIN MOLINA R., EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JOSUE LEVY LEVY EN CONTRA DEL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 38

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO CESPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-14 N° 50-99, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 14. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 40

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FONSECA, BARRIOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RUTH CELINA RODRÍGUEZ MORENO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 41

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. IVAN GANTES, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ6-44-99 DEL 8 DE JULIO DE 1999, DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 6. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 42

APELACIÓN PROMOVIDA POR EL LICENCIADO LUIS A. CARRASCO MORENO EN REPRESENTACIÓN DE FELIPE CHEN SOLÉ DENTRO DEL PROCESO DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

INTERPUESTO POR LA LICENCIADA CLARIBEL JIMÉNEZ PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL MARÍA SOLÉ JAÉN CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 47

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA LCDA. ALMA CORTEZ, EN REPRESENTACION DE LEONARDO PEREZ VALDIVIESO CONTRA LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CALENDADA 29 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 51

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ALDO REINA BETHANCOURT CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 55

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE HOTELERA PANAMA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 57

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA FORENSE RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS Y ABREGO, EN REPRESENTEción DEL SEÑOR ROGELIO FRAIZ DOCABO, CONTRA LA SUPUESTA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO, DE 9 DE MARZO DE 1998, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 63

RECURSO DE HABEAS CORPUS 68

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID S. VILLARRETA, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 68

DESISTIMIENTO PRESENTADO DENTRO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICDO. MANUEL E. CAJAR M. A FAVOR DE RUDY SUERO, CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 71

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE FERMÍN LARA SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE COCLÉ. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 72

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR EL LICENCIADO JULIÁN GARCÍA TREJOS EN FAVOR DE JOSÉ ISAÍAS BENÍTEZ ROSERO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 74

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUO YUT WAN CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 76

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTOBALINA GONZALEZ CONTRA LA FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 78

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE AZAEL FUENTES BETHANCOURT, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL, PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDILBERTO VASQUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR ROBERTO ALEXANDER LOPEZ DEAN, EN SU PROPIO NOMBRE, CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 82

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL ATENCIO TEJEDOR CONTRA EL JUEZ DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE VERAGUAS. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 83

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARIO ANDRES BALLESTEROS DOMINGUEZ A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO CASTILLO VEGA POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, CONTRA LA FISCAL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA CON SEDE EN SAN MIGUELITO. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 85

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN FRANCISCO MURILLO R. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR MARIO EVERS RUÍZ CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONNETE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 87

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO CONTRA EL JUEZ DE CIRCUITO DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO. (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 89

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMARO FELIX HUAMANCHUMO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 91

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE INDIRA AGUIRRE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 92

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ CONTRA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN QUINTERO ESQUINA CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). . . . 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO CUNNINGHAM CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 97

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO MCBARNETT CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO RAMO PENAL DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 100

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO CONTRA LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 102

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RODRIGO LORENZO CONTRA EL FISCAL TERCERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 104

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AGRIPINO NÚNEZ CONTRA LA FISCALÍA QUINTA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 106

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DEL DOS MIL (2000) 108

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR EL LICENCIADO MAURO OCTAVIO PÉREZ CITADINI EN FAVOR DE JESÚS ANTONIO HERRERA MÉNDEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 111

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALVARO BLANDÓN MELO CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 113

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCELA MUÑOZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 114

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERIC GABRIEL GRAELL REINA CONTRA EL JUEZ SÉPTIMO DE CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 117

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA LICENCIADA MÓNICA GONZÁLEZ SAGEL DENTRO DEL PROCESO DE REINTEGRO DE LA MENOR DANIELA PATRICIA PITTY SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 120

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN SU PROPIO NOMBRE POR EL LICDO. DIENER VINDA, CONTRA LA FRASE "SIN OIR AL DEMANDADO" CONTENIDA EN EL ARTICULO 1952 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 122

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 1999 PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 126

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LCDO. JOSE RAMIRO FONSECA CONTRA EL ARTICULO 2305 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 127

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. EDWIN TORRERO CASTILLO, EN REPRESENTACION DEL GRUPO SILABA, CONTRA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 233 DE LA LEY. NO. 29 DE 1 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO

PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 135

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA ALMA CORTES, EN REPRESENTACION DE CONSTANTINO LEKAS, CONTRA EL ARTICULO 2274 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 137

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL LCDO. ABILIO ROLANDO RODRIGUEZ BUSTAMANTE, CONTRA LA SENTENCIA NO. 88 DE 4 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDO POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 139

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SANTANDER TRISTAN DONOSO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR LA FISCALIA CUARTA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 140

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. LIMBERT OBERTO RIOS M., CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 4 DE MARZO DE 1999, DICTADA POR EL JUEZ MPAL. DEL DTTO. DE SANTA MARTA, Y LA LEY 23 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE HERRERA, RAMO PENAL Y EL PROVEÍDO DE 5 DE FEBRERO DE 1999, DICTADO POR LA PERSONERÍA MPAL. DE SANTA MARTA. (PROCESO PENAL SEGUIDO A CELEDONIO CASTILLO). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000) 143

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LIC. EDUARDA CÓRDOBA CHEN, CONTRA EL ARTICULO 1 DE LA LEY 31 DE 28 DE MAYO DE 1998. (INCIDENTE DE CONTROVERSIA RELATIVO AL SUMARIO EN AVERIGUACIÓN DEL DELITO DE INCENDIARISMO EN PERJUICIO DE LA EMPRESA COSMOS 2000). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 145

ADEVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL BUFETE VALDES EN REPRESENTACIÓN DE JOAQUÍN PERURENA DENGO, CONTRA LA PALABRA "ACTUALES" DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 5 DE 25 DE FEBRERO DE 1993, MODIFICADA POR LA LEY 7 DE 7 DE MARZO DE 1995 Y ALGUNAS FRASES Y PALABRAS CONTENIDAS EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 90 DEL 16 DE AGOSTO DE 1996 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE PRIMERA OPCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDAS ARRENDADAS EN EL ÁREA REVERTIDA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 146

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN CASTRO & YOUNG, SOBRE EL DECRETO No. 3 DEL 4 DE MARZO DE 1980 POR SER CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL PROPUESTO POR IVAN ALBERTO ROMERO VS INDUSTRIAS EDUCATEC, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 147

CONSULTA SOBRE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. ALCIBIADES CAJAR M. DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR (MAUD & MAUD CONTRA EL LCDO. PEDRO MORENO) Y CONTRA LOS ARTICULOS 296, 297 Y 298 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 149

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL POR EL LCDO. EMILIO EDUARDO BATISTA MIRANDA, EN REPRESENTACION DE HIRISNEL SUCRE SERRANO, PIDE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES No. 2053 DE 2 DE AGOSTO DE 1996 Y No. 2036 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL

JUEZ SEPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 153

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN SU PROPIO NOMBRE, CONTRA LA LEY N° 27 DEL 5 DE JULIO DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 154

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GISEPPE BONISSI, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN AROSEMENA, ALBERTO CIGARRISTA, JOSÉ BLANDÓN, MARIO QUIEL Y BOLÍVAR PARIENTE, CONTRA LA LEY N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 1998. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 157

TRIBUNAL DE INSTANCIA 161

SUMARIAS SEGUIDAS A ROBERTO WILL GUERRERO, JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL, RICARDO ALEMÁN, OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF, ELITZA CEDEÑO POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONTRA LA PERSONALIDAD INTERNA DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 162

INCIDENTE DE DESACATO PRESENTADO POR EL LCDO. HILARIO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PROPUESTA A FAVOR DE WALTER FERNANDO SERNA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 163

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA MORENO Y FABREGA EN REPRESENTACIÓN DE AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 13. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 165

SUMARIAS SEGUIDAS A ELITZA CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON Y OSCAR CEVILLE POR DELITO CONTRA LAS LIBERTADES POLÍTICAS CONTRA, LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, DENUNCIA INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS GUILLERMO MORALES, MARIA CARRILLO BRUX Y MIGUEL ANTONIO BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 166

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 167

QUERELLA POR DESACATO PROMOVIDA POR LA LICENCIADA NORA SANTA DE SANCHEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 168

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ADÁN ARNULFO ARJONA, EN LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA LOS ARTS. 1, 3, 5, 8, 15, 28, 29, 30, 31 Y 32 DE LA LEY 49 DE 24 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 169

MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO FERNANDO BASURTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE

23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UN (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 170

QUEJA FORMULADA POR LOS LICENCIADOS IRENE MORA VALDEZ Y EMILIO ROYO LINARES EN REPRESENTACIÓN DE MARIA CECILIA MARTÍNEZ VALENCIA, CONTRA LA MAGISTRADA HAYDEE PAOLO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 171

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 174

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 175

VALENTIN MEDINA DOMINGUEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO DE COBROS JUDICIALES DE HONORARIOS DE ABOGADOS PRESENTADO POR EDWIN ALBERTO MEDINA. ACLARACION DE LA SENTENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 175

APELACION 176

APELACION INTERPUESTA AL RESTO DE LA SALA POR VIRGILIO PICOTA CONTRA LA RESOLUCION DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR EN EL RECURSO DE REVISION PROPUESTO CONTRA EL AUTO N° 2746, DEL 18 DE OCTUBRE DE 1999 EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA, S. A. CONTRA VIRGILIO PICOTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 176

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 178

APELACIÓN INTERPUESTA POR DIAMOND CAMELLIA, S. A. Y MITSUI O.S.K. LINES CONTRA EL AUTO N°. 320 DEL 9 DE JULIO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE LUZ MARINA REYES AGNES MOLINA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 178

APELACIÓN INTERPUESTA POR ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN CONTRA LA SENTENCIA N°. 29 DEL 26 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PESQUERA TABOGUILLA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 181

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. APELA CONTRA LA SENTENCIA NO. 20, DEL 24 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, S. A. Y/O COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES-PANAMA-, S. A. Y/O SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS MARITIMAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALA. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 185

APELACION INTERPUESTA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. CONTRA EL AUTO N° 245, DEL 12 DE MAYO DE 1999 DICTADO POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE A "M/N MINASIS". MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 191

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 194

ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMAS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DE CARMINA DUQUE GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA

Z. PANAMA, TRES (3) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 194

AARON JAMES LANDIS PABILECA Y CARMEN PABILECA RODRIGUEZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FLORIDO GOMEZ CERRUD. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 195

CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ Y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA C., EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ Y HARMODIO DE ICAZA CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 195

JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACION EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 196

FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR CAJA DE AHORROS CONTRA SOCIEDAD ADMINISTRACION DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 197

LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A. THIRD WORLD TRUST COMPANY LTDA. THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD. THIRD WORLD FINANCE, S. A. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE CABINET MAITRE BOUTIN. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 198

ESPIRITU A. RESTREPO B. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A FINANCIERA METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 205

BERNARDINO JARAMILLO GONZALEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A REINA ENEIDA HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 206

ALEXIS SANTOS DE LEON RECURRE EN CASACION CONTRA LA RESOLUCION EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1999, EN EL INCIDENTE DE RESCISION DE DEPOSITO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR ROBERTO MOCK SUCRE CONTRA ESIRA PITTY DE SANTOS Y JOHNNY ACOSTA A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 206

SALOMON JOSEPH SETTON, LEA SOFER DE SETTON; ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. Y PLATINUM TOWER CORP. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE SALOMON JOSEPH SETTON Y LEA SOFER DE SETTON LE SIGUEN A ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. Y PLATINUM TOWER CORP. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 211

HACIENDA LA ROMANA, S. A. Y COCLE AGRICOLA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUEN A CARLOS AGUILAR Y CARLOS ARAUZ ARANGO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 212

CHILE HOLDINGS CAYMAN LIMITED RECURRE EN CASACION EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCION EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 215

LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DUNSHAW PATTON FINANCIAL HOLDING LTDA., S. A. Y

WEXFORT HOLDING LTDA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 216

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAUL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 218

ANA MORENO JARAMILLO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE TITULO DE PROPIEDAD QUE LE SIGUE LUCIA MORENO JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 219

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 220

ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINANRIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 220

ALCIBIADES VARGAS GRAHAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DEYANIRA VARGAS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 221

ERICK SAMUEL SANTOS MURGAS RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION EN GENERAL QUE LE SIGUE A FALCON SECURITY INVESTMENT, INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 222

JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACION EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 223

CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ Y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA CASTILLO, EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ Y HARMODIO DE ICAZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 224

ANTONIO BARRIA RIOS Y JUSTO BARRIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO DE OPOSICION QUE LE SIGUE A ZORAIDA BARRIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). . . . 224

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). . 227

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARCADIO J. VILLALAZ R. L. INTERPONE RECURSO DE CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE LASTENIA AMAYA DE PRADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 228

HACIENDA LA ROMANA, S. A. Y COCLE AGRICOLA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE A CARLOS AGUILAR Y CARLOS ARAUZ ARANGO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). . . 230

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA., RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ELECTRORAMA, S. A. Y MAKOV, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 231

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAUL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 236

TOMAS BERNAL JIMENEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE A ISLAS PARAISO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 237

INMOBILIARIA MARCHENA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE DEL C. PEREZ ANGULO Y/O PEREZ ANGULO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 241

MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 242

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAÚL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 244

ALGIS G. ALVARADO Y ARTURO GARCIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A ERNESTO CARRASCO L. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 245

CONFLICTO DE COMPETENCIA 250

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, RAMO CIVIL Y LE JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR SENEN LOPEZ GONZALEZ CONTRA MARÍA BASILIA GONZALEZ DE ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z.PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). . . . 251

INCIDENTE 252

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MORGAN & MORGAN CON AUDIENCIA DE LOS HONORABLES MAGISTRADOS ELIGIO A. SALAS Y JOSE A. TROYANO EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROPUESTO POR LA NACION ARGENTINA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR AGROMETAL INTERNATIONAL CORP. CONTRA MATMETAL, S. A. Y TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 252

RECURSO DE HECHO 255

EL LICENCIADO SANTIAGO MENDEZ REAL INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR NEFTALI SAUCEDO MURGAS CONTRA BEATRIZ TORRES DE VARGAS Y REGINO TORRES RIVERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 256

EL LICENCIADO JORGE DANIEL SAMUDIO VEGA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 25 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. CONTRA VILLA CORINA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA. ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 257

EL LICENCIADO NELSON CARREYO INTERPONE RECURSO DE HECHO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE ORLANDO JESUS MENDOZA LE SIGUE A ATUNEROS DEL GOLFO DE VENEZUELA, S. A. (AGOVENZA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 258

EL LICENCIADO TEOFANES LOPEZ RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. CONTRA ERICK IVAN MARTINEZ GONZALEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 261

LA FIRMA FORENSE LOPEZ Y VALLARINO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO SUMARIO DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR DIN DIN INC. CONTRA PORTUGUESE PARADISE INCORPORATED. SURANCO, INC. INTERVENCION DE TERCERO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 263

RECURSO DE REVISIÓN 265

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA NACIÓN ARGENTINA CONTRA LA SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 1998, DICTADA POR LA SALA PRIMERA, DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA MATMETAL, S. A.; TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 265

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 268

AUTO APELADO 269

RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS RODRIGUEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE RIGOBERTO PÉREZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, (11) ONCE DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 269

AUTO APELADO EN DONDE SE REVOCA EL LLAMAMIENTO A JUICIO EMITIDO AL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 272

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 276

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUCIO DE TERESA MEDINA DE GÓNDOLA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 276

PROCESO SEGUIDO A MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, SINDICADA POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUCIO DE NIDIA ROSA FIGUEROA (Q. E. P. D.). MAGISTRADO

PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).
. 278

PROCESO SEGUIDO A CARLOS DEMETRIO SANJUR RODRIGUEZ SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE IRVING DARIO ORRIBARRA GALLARDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).
. 279

SE CONFIRMA EL AUTO APELADO EN EL CASO SEGUIDO A MARCOS C. EUSTAQUIO SANJUR, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000.).
. 283

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 286

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A IRMA DEL ROSARIO APONTE, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).
. 286

PROCESO SEGUIDO A ORLANDO MORENO MURILLO, PEDRO JUAN JARAMILLO, NICOLAS PEREZ ORTEGA Y OTROS, SANCIONADOS POR DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 287

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS CARLOS ROSALES SANCIONADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)
. 294

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO FERNANDO LEVY EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR DE OFICIO DE GABRIEL RODRÍGUEZ ACUÑA, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 300

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALBERTO ANTONIO GUTIERREZ HAWKINGS Y OTROS, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL DOS MIL (2000) 301

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ANTONIO ROJAS GRANADOS, MARIO ALBERTO FUNG POSSO y JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)
. 303

PROCESO SEGUIDO A CARLOS EDUARDO VERGARA PACHECO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 321

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ITZEL TERESA JAMES DOWNER SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).
. 322

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MIGUEL ANGEL MELÉNDEZ, SINDICADO POR DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000).
. 324

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MIGUEL ANGEL MELÉNDEZ,

SINDICADO POR DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 325

RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE GRISELDA QUINTANA CUERVO, SINDICADA POR DELITO DE ROBO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO QUEZADA GUERRERO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 326

CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CESAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 327

RECURSO DE CASACION PRESENTADO A FAVOR DE TERESIN CABALLERO VILLARREAL SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 337

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA FIRMA FORENSE VILLALAZ Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, LA CUAL CONFIRMA LA PENA IMPUESTA A HORTENCIO GALLARDO RÍOS POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 338

PROCESO SEGUIDO A EUSEBIO EDILBERTO GARCIA NAVARRO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 339

PROCESO SEGUIDO A EURI MAXDIEL CEBALLOS Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO DE AUTO). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 343

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A OMAR ROBLEDO MOYA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 349

DENUNCIA 352

DENUNCIA POR DELITO DE FALSEDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA IDA ESPERANZA CASTILLERO Y DAVID MIZRACHI RUSSO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 352

DENUNCIA PRESENTADA POR CARLOS GARCÍA CONTRA RUBÉN REYNA, ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA, Y ANA MARÍA LEGENDRE, DIRECTORA DE ASESORÍA LEGAL, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 354

QUERELLA 355

PROCESO SEGUIDO A ERICK AUGUSTO SÁNCHEZ Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 355

SE ORDENA EL ARCHIVO DEL CUADERNO PENAL QUE CONTIENE LA QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA & GUERRA ABOGADOS, CONTRA EL LICENCIADO RAFAEL CARLES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 355

RECURSO DE HECHO 356

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PERJUICIO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 356

RECURSO DE REVISIÓN 357

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SIBIA DE JESUS SANCHEZ MADRID, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 357

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE GERMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO, SANCIONADO POR DELITO DE INCENDIARISMO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 358

LA LICENCIADA TERESA IBAÑEZ, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORA DE OFICIO DE ABELARDO CARBONO, HA FORMALIZADO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA AL IMPUTADO A 4 AÑOS DE PRISIÓN, POR SER RESPONSABLE DEL DELITO DE HURTO DE VEHÍCULOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 359

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR DANNY AGUSTÍN ÁLVAREZ L. CONDENADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 360

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR GABRIEL GUARDIA REINA, CONDENADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 361

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JONNY ERICK RODRÍGUEZ GUTIERREZ, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 361

SENTENCIA APELADA 362

SENTENCIA APELADA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A EDILBERTO ESTRADA ARANDA, POR LA COMISIÓN DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSE CASTRO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SEIS (6) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 362

PROCESO SEGUIDO A ARMANDO MENA BEITÍA Y DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BONIFACIO FRANCISCO JARQUIN JIMENEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 364

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO IVAN ZARRAONANDÍA GONZÁLEZ SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MARIA LUZ BEITIA DE PONCE. MAGISTRADA PONENTE. GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). 370

PROCESO SEGUIDO A ALBERTO A. PERÉZ HERNÁNDEZ Y OTROS SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE CARLOS HERNÁNDEZ R. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) ENERO DEL DOS MIL (2000) 374

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CHARLES EDWARDS SUGASTE, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL DOS MIL

(2000). 378

PROCESO SEGUIDO A LUCIO ROBLEDO MOYA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 381

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 386

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE DAYSI BADILLO M., SINDICADA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MARISOL HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL DOS MIL (2000). 386

SUSTITUCIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 388

SOLICITUD DE REEMPLAZO DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE EMILIO OLIVA LINARES, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN DETRIMENTO DE JORGE L. DELGADO VILLAREAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999). 388

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 390

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE MOTONAVE DORION, S. A., PARA QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ Y A LA NACIÓN AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE B/.636,670.00, MÁS LOS INTERESES Y GASTOS DE GENERADOS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 391

DEMANDA CONTENCIOSO DE INTERPRETACIÓN 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE APELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 003 DE 8 DE ENERO DE 1999, EXPEDIDA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN (RELACIONADO CON EL NOMBRAMIENTO DEL DR. FÉLIX LUCIANI). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 393

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 395

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES TROESTCH EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULITPLES PROFESIONALES, R. L. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA D. E. NO. 150/99 DE 25 DE FEBRERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 395

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL

LCDO. RODRÍGO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 730-96-D. G. DE 24 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 396

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA "SHIRLEY Y ASOCIADOS", EN REPRESENTACIÓN DE MARIELA ACOSTA DE BECKFORD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA DE 16 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR EL JURADADO DE CONCURSO DE LA SUBJEFATURA DE ENFERMERÍA-POSICIÓN 593, MINISTERIO DE SALUD, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 397

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. SERGIO ZUÑIGA, EN REPRESENTACIÓN DE MATIAS MARTINEZ Y VENANCIO MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D. N. 005-99 DE 21 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 398

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADO RAMIRO GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL ANTONIO FERNANDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP DOPA 6158 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 399

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE DELZAI, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.082 DE 8 DE ABRIL DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DEL HIPÓDROMO Y OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, ASI COMO SUS ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 400

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA TILE Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE MEDIMEX, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 18,339-99-J. D. DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO THOMAS MONTALVO, PEDRO BERNAL, HERBERTO BERNAL Y MARISOL DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS AL NO CONTESTAR SUS SOLICITUDES Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 402

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS NIETO MEJIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 26 DE 10 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO JULIO JOVANE DEL CID, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE ASUNTOS DEL CANAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 409

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TILE Y ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA D. M. D., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1281-97. DG, DE 26 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 410

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA PEREIRA & PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ROMERO OROCU, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA GENERAL DE JEAN RENÉ BEAUCHAMP, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP NO. 176-97 DE 21 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 415

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DÍAZ ORDOÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 30 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 422

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCELO A. DE LEÓN PEÑALBA EN REPRESENTACIÓN DE OSMANDO E. AGUILERA P. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA OIRH-48 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS, EL DECRETO EJECUTIVO N°46 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 424

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DÍAZ ORDOÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 27 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 425

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. SANTANA GONZALEZ EN REPRESENTACIÓN DE SANTA LIBRADA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 219-04-308 Y 219-04-309 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 427

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARTA DE ARROCHA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 15002 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN

OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 434

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 435

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS A, ARAÚZ EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRINO JIMENEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 30-97 DE 16 DE JULIO DE 1997, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 435

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO-OESTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 6 DE 16 DE JUNIO DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 437

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE MAYRE GARCIA RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D. N. 9-1588 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 439

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR E. DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE PUBLICIDAD EXTERIOR (UPPEX), PARA QUE SE DECAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 2, 4 Y 5 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 88, DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA RESOLUCIÓN NO. 37, DE 20 DE MAYO DE 1997, DICTADA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 5,211 DE 7 DE JUNIO DE 1994, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO E ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 444

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 122 DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 448

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALISON GARCÍA VELIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA CONTENDIO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4,548 DE 21 DE ABRIL DE 1994, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO Y ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA, S. A., (ZACHE). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ADEMIR MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARYS RODRIGUEZ, PARA QUE SE

DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO.019 DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS BANQUÉ EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 101-40-22 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 456

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARYCEL T. RODRIGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE MEDICINA GENERAL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO DEL CONCURSO DE JEFATURA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS DE 5 DE ABRIL DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 457

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 458

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEOFANES LOPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO GRIMALDO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 27 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000). . 459

IMPEDIMENTO 462

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MURGAS & MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A., AN DE PUY S. A. Y DE PUY GARCIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 462

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO G., EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE COPFA, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: TRABAJADORES DE COPFA-VS-COMISION DE PANAMA/ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 463

JURISDICCIÓN COACTIVA 464

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARTHA MORA ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DE LIDIA ELENA CANO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS LE SIGUE A LIDIA ELENA CANO, NOEMI GUIZADO, BERTA TORRIJOS Y ANGELA DE ZURITA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 464

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INVALIDEZ DEL PAGARÉ, DOBLE PETICIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE ERASMO CASTRO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL JUEZ EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA DE PANAMA S. A., MARCOS FERNANDEZ, ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO Y RAUL

ESKILDSEN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 465

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INVALIDEZ O IMPERFECCIÓN DEL PAGARÉ, DOBLE PETICIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA PANAMA S. A., ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO, RAUL ESKILDSEN Y MARCOS ANTONIO FERNANDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 471

EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE FIANZA SOLIDARIA Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE BANCO NACIONAL DE PANAMA, LE SIGUE A BASEBAL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO ANTONIO FERNANDEZ Y BERNARDO BRENES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 475

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INTERPUESTO POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA, LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA S. A. Y MARCOS FERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 480

INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS LUIS DONADÍO Y EDILIA DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES ANTFI, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A INVERSIONES ANTFI, S. A. Y ANTONIO JOSE BORACE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 483

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANGEL PADILLA BELIZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE INOCENCIO CONTRERAS, DENTRO DEL JUICIO EJRCUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A INVERSIONES NATO, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 484

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 485

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁ, EN REPRESENTACIÓN DE NICOLAS ALFREDO ARMELIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: NICOLAS ALFREDO ARMELINO-VS-INVERSIONES G. E., S. A. (INGESA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 485

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN RUÍZ EN REPRESENTACIÓN DE SULLY SAYAVEDRA DE MORENO, CONTRA LA SENTENCIA DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SULLY SAYAVEDRA DE MORENO -VS- COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 486

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE BOLIVAR MORA SAMUDIO, CONTRA LA SENTENCIA DE

21 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BOLIVAR MORA SAMUDIO -VS- BAMVOL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 490

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANDRÉS QUIJANO EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTIN GONZALEZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HENSERV, S. A. VS AGUSTIN GONZALEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000). 492

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE ABILIO HIGUERA OSORIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABILIO HIGUERA OSORIO VS GANAGRO INDUSTRIAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 498

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 501

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 502

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL FISCAL DÉCIMO ADSCRITO A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO 302637 SEGUIDO CONTRA MARIA CANDELARIA SUÁREZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000) 502

ASISTENCIA JUDICIAL DENTRO DE LA CAUSA N° 99-010853-PE CONTRA STEPHEN A. DRECHSLER Y JAMES CALYBORNE EDWARDS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE FALSEDAD IDEOLÓGICA EN PERJUICIO DE DANILO PALMA GÓMEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000). 503

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL PROVENIENTE DE LA FISCALÍA DEL BARRIO DE ZAVODSKY DE LA CIUDAD DE NIKOLAEV, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE UCRANIA, EN EL PROCESO NO. 97900018 SEGUIDO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ESTATAL "EL ASTILLERO-CHERNOMORKY" POR NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000). 505

TRIBUNAL DE INSTANCIA 507

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DOMINGO BATISTA CONTRA LA LICENCIADA NIVIA ABREGO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, SIETE (7) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000). 507

ACUERDO N° 174 508

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

ENERO 2000

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A FAVOR DE COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 25 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Mendoza, Valle y Castillo en nombre y representación de JUAN PEDRO BALPARDA en su calidad de representante legal de la empresa COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S. A., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución s/n de 25 de agosto de 1999, dictada por el Director General de Trabajo.

Admitido el amparo, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad o en su lugar un informe acerca de los hechos materia de esta acción.

En atención a lo anterior, el Director General de Trabajo envió el expediente que contiene el pliego de peticiones presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Compañía Marítima de Panamá-SITRAECOMAP en contra de la COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S. A.

El amparista establece como fundamento de su acción las siguientes consideraciones:

> **"A. El pliego de peticiones presentado por el Sindicato de COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, se interpuso usando como marco legal el Código de Trabajo y no el Decreto Ley N° 8 de 26 de febrero de 1998 que rige las relaciones laborales marítimas que se verifican en la empresa.**
>
> **B. El Director General de Trabajo no es el idóneo para fungir como funcionario conciliador en los casos en que se aplique el Decreto Ley 8, ya que dicho cuerpo legal señala que los conflictos laborales se manejan a través de un funcionario conciliador de la Autoridad Marítima de Panamá.**
>
> **C. La orden impugnada viola el debido proceso al requerir a nuestra mandante la negociación de una convención colectiva cuando la ley aplicable señala, en su artículo 75, que no existe la obligación de negociarla, al establecer que los armadores podrán celebrar convenciones colectivas, con lo cual se elimina el concepto de obligación.**
> **...**
> **E. En el remoto caso de que fuere aplicable el Código de Trabajo, el pliego de peticiones es ilegal ya que viola el artículo 12 de la Ley 8 de 1981 que señala que las empresas no están obligada a negociar una convención colectiva, dentro de sus dos primeros años de existencia. Nuestra representada existe desde el 8 de junio de 1998, tal como consta en la copia auntenticada del pacto social de la sociedad COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S. A., y en el certificado del Registro Público que adjuntamos". (fs. 2-6).**

Expuestas las consideraciones del amparista, la Corte procede a resolver lo de lugar.

En primer lugar, estima esta Superioridad que le asiste razón al amparista en el sentido de que la normativa legal aplicable a su mandante, la COMPAÑÍA MARITÍMA DE PANAMÁ, S. A., lo es el Decreto Ley N° 8 de 26 de febrero de 1998,

y no las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. Esto se desprende del hecho de que dicha empresa se dedica a las actividades de "asistencia marítima a barcos en tránsito para suministrar todo tipo de productos, equipos, mercancías, repuestos, asistencia con remolcadores en maniobras, rescate y salvamento y cualesquiera otra actividad complementaria que tenga relación con las necesidades de las naves", tal como se desprende claramente de la licencia comercial visible a fs. 13 del expediente.

De esa manera, y siendo que es conocido que la ley especial prima sobre la general, es indudable que en este caso es aplicable el artículo 75 del mencionado Decreto Ley, que a la letra dice lo siguiente:

> "Artículo 75: Los armadores y las organizaciones de la gente del mar podrán celebrar convenciones colectivas".

De lo dicho se colige que siendo facultativo para la COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S. A la celebración o no de una convención colectiva con el Sindicato de Trabajadores de esa empresa, mal podría el Director del Trabajo obligar a la empresa a negociar un pliego de peticiones.

Por otra parte, considera el Pleno, que el Director General de Trabajo es la autoridad competente para intervenir en este tipo de conflictos, pues el Decreto Ley N° 8 no dice nada al respecto, por lo que, en este caso se aplicarían, supletoriamente las normas del Código de Trabajo, mismas que le atribuyen tal facultad al mencionado Director.

De otro modo, en los antecedentes aportados por la Dirección General de Trabajo, no aparece ninguna prueba documental o de otra índole que niegue o reste valor probatorio a las pruebas expuestas, lo cual constituye, a juicio de esta Superioridad, una falta al principio del debido proceso, ya que la documentación presentada justificaba plenamente la no iniciación del procedimiento de conciliación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la COMPAÑÍA MARÍTIMA DE PANAMÁ, S. A. y REVOCA la resolución s/n de 25 de agosto de 1999 dictada por el Director General de Trabajo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA NOTA N° DAC-90/SDTTA/DAC DE 27 DE AGOSTO DE 1999, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE AERONAÚTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado Lorenzo Marquínez

Bolaños en nombre y representación de AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A, "contra la orden de no hacer contenida en la Nota N° DAC-90/SDTTA/DAC en la cual se comunica que la Autoridad Aeronaútica Panameña a (sic) adoptado la decisión de que la Compañía Panameña de Aviación S. A (COPA) opere las cuatro (4) frecuencias establecidas en la Reunión de Autoridades Aeronaúticas del 6 de abril de 1995". (fs. 3-12).

La acción constitucional fue admitida durante la vigencia de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, donde se solicitó a la autoridad demandada que informara acerca de los hechos materia de la acción tal como lo señala el artículo 2611 del Código Judicial, trámite que no se pudo lograr directamente con el funcionario demandado, por las razones que aparecen en los informes allegados a este amparo, pero sí se advierte el envío de la nota No. 870AJ-DAC, suscrita por el Director de Asesoría Jurídica de la Dirección de Aeronáutica Civil, con la que acompaña una serie de documentos que guardan relación con el caso al que se refiere la acción constitucional interpuesta.

De acuerdo con el amparista, la orden impuganada infringe las garantías constitucionales consagradas en los artículos 44, 32 y 17 de la Constitución Nacional, puesto que "desconoce el derecho adquirido que tiene AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A a explotar las cuatro frecuencias semanales que tienen como destino final Buenos Aires, Argentina ...". (fs. 3-12).

Expuestos los elementos principales del caso, esta Superioridad se dispone a decidir sobre la viabilidad de la acción.

A juicio del Pleno, la acción de amparo promovida no es viable, al no cumplir con el principio de definitividad de los actos impugnados por la vía de amparo. Este principio, consagrado en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, establece que la acción de amparo de garantías constitucionales sólo procede contra resoluciones judiciales, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos por la ley para impugnarlas. Reiteradamente el Pleno ha expresado que este principio es aplicable a las resoluciones y actos administrativos, como lo constituye el contenido de la comunicación que, por nota DAC-90/SDTTA-DAC, de 27 de agosto de 1999, suscrita por el Director General de Aeronáutica Civil en ese entonces, Licdo. EUTACIO FABREGA L., dirige al Dr. MANUEL GAMBOA, Director Nacional de Transporte Agrocomercial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la República de Argentina, donde le informa que "la Autoridad Aeronáutica de Panamá a adoptado la decisión de que la Compañía de Aviación, S. A. (COPA) opere las cuatro (4) frecuencias establecidas en la reunión de autoridades aeronáuticas del 6 de abril de 1995".

De otro modo, la acción promovida tampoco cumple con el principio de especialidad, según el cual los procedimientos especiales prevalecen sobre los generales y al tribunal de amparo no compete, como regla general, revocar un acto administrativo por cuanto la competencia sobre el particular corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a la cual podrá ocurrir el interesado por la vía contencioso administrativa, después de agotar la vía gubernativa.

En este sentido podemos citar, entre otros fallos, la sentencia de 22 de agosto de 1997, en la que se expresó:

> "El Pleno de esta Corporación de Justicia ha expresado reiteradamente que el amparo de garantías constitucionales es una acción de naturaleza extraordinaria, que no procede si existen otros remedios jurídicos consagrados en el ordenamiento legal para tutelar el derecho que el justiciable considera violado. En el presente caso, las resoluciones acusadas son actos administrativos que pueden ser impugnados en la vía contencioso administrativa, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, una vez agotados los recursos procedentes en la vía gubernativa, (Cfr. Resolución dictada por el Pleno de la Corte Suprema el 31 de agosto de 1995, en la

> acción de amparo interpuesta por Jesús L. Rosas Ábrego en contra de la orden de hacer contenida en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1 de agosto de 1995)".

Recientemente, en fallo de 9 de diciembre último, el Pleno de esta Corporación manifestó:

> "En este caso se reclama contra un acto administrativo y ha sido doctrina jurisprudencial de esta Corporación de Justicia, que la instauración del proceso contencioso administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia es la vía procesal idónea para ventilar la litis, puesto que en aquella instancia existe la posibilidad de revisar toda la actuación administrativa, practicar pruebas y realizar todos los trámites procesales pertinentes para satisfacer la pretensión del demandante cuando así es del caso, lo cual no es posible dentro de la acción de amparo de garantías."

Por las consideraciones que se dejan dicho, la Corte se encuentra impedida para entrar en mayores consideraciones sobre el fondo de la presente acción.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales promovido por el Licenciado Lorenzo Marquínez Bolaños, en nombre y representación de AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO GOTTI CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Llegó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Samuel E. Marín M. en representación de Ernesto Gotti, contra sentencia recaída el 9 de junio de 1999 en el proceso laboral promovido por el amparista contra Cables & Wireless, Panamá, S. A..

LA RESOLUCION ATACADA

La acción se dirige contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Trabajo de 9 de junio de 1999, que revoca la sentencia PJ-6-2-98 de 2 de abril de 1998, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, y declara probada la excepción de inexistencia de la relación laboral y, en consecuencia, absuelve a Cable & Wireless Panamá, S. A. de demanda interpuesta por Ernesto A. Gotti (f. 19).

HISTORIA DEL CASO

La Junta de Conciliación y Decisión N° 6, mediante sentencia PJ-6-2-98 de 2 de abril de 1998, declaró injustificado el despido de Ernesto Gotti decretado por la empresa Cable & Wireless Panamá S. A., ordenó su reintegro y condenó al pago de los salarios caídos, desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación, a razón de B/. 1,200.00 mensuales (f. 11).

Por su parte, el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, mediante sentencia N° 54 de 26 de octubre de 1998, al resolver otra causa laboral entre las mismas partes, absolvió a la empleadora de la obligación de pagar las prestaciones laborales reclamadas por el trabajador, fundamentando su decisión en la inexistencia de vínculo contractual laboral entre las partes (f. 21).

Ambas resoluciones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Trabajo quien, mediante sentencia del 30 de abril de 1999, confirmó la resolución N° 54 de 26 de octubre de 1998, sosteniendo que la relación existente entre las partes no era de carácter jurídico laboral sino de servicio profesional y declaró probada la excepción de inexistencia de la relación laboral presentada por la empleadora (f. 23). Esta decisión del a-quem fue objeto de recurso extraordinario de casación laboral ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a la resolución de la Junta de Conciliación y Decisión, se tiene que fue revocada por el Tribunal Superior de Trabajo mediante sentencia de 9 de junio de 1999, la que absuelve a la empresa Cable & Wireless Panamá, S. A., fundamentando su decisión en el mismo criterio externado con anterioridad en la sentencia de 30 de abril de 1999.

No obstante, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 30 de septiembre de 1999, al resolver el recurso de casación interpuesto contra la decisión del Tribunal Superior de Trabajo de 30 de abril de 1999, reconoció la existencia de la relación de trabajo entre Ernesto Gotti y Cable & Wireless Panamá, ya que "... a juicio de la Sala los contratos celebrados entre la empresa y el demandante incluyen obligaciones para el licenciado Gotti y derechos a favor de la empresa que son propios de un contrato de trabajo ..." (f. 28) y condenó "a la empleadora a pagar al trabajador la suma de B/.8,045 en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y bonificaciones anuales correspondientes al período laborado del 16 de agosto de 1995 al 31 de diciembre de 1997, más intereses a la tasa de 10 % anual ..." (f. 30).

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Por admitida la iniciativa constitucional se corrió traslado a la autoridad demandada quien, mediante nota N° 1440 de 21 de octubre de 1999, informa acerca de los hechos materia de la demanda, afirmando que la resolución recurrida "... no viola disposición constitucional alguna y menos aún los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República, que establece el debido proceso legal" (fs. 37-38).

De otra parte, expresa que el Tribunal Superior de Trabajo resolvió la controversia laboral "... con apego a las disposiciones legales aplicables al caso, teniendo en cuenta las normas del debido proceso legal y mediante la evaluación objetiva de las pruebas aportadas por las partes, según el trámite procesal correspondiente y las reglas de la sana crítica ..." (f. 38).

DECISION DE LA CORTE

Corresponde en este momento decidir el fondo del proceso.

En primer lugar, la Corte observa que se ha vulnerado lo que en la doctrina constitucional se conoce como debido proceso sustantivo, el que forma parte de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Carta Fundamental.

El análisis de las constancias procesales da cuenta de que, mediante

sentencia de 30 de septiembre de 1999, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo reconoció la existencia de relación laboral entre la parte actora y la empleadora INTEL S. A. o Cable & Wireless Panamá, S. A., decisión esta que, por mandato del inciso final del artículo 203 de la Constitución, pone fin a la causa y es de obligatorio cumplimiento.

Esta sentencia de casación es un instrumento jurídico individualizado, que reconoce la condición de trabajador al amparista, cuyo contenido resulta antagónico a la decisión previa del Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia que se ataca en sede de amparo.

No obstante, la Corte observa que, de la lectura del informe de los hechos remitido por el Tribunal Superior de Trabajo, se desprende su negativa a aceptar el carácter final, definitivo y obligatorio de la decisión proferida por la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia. Ello es así porque, en lugar de reconocer el valor vinculante de la decisión proferida por la Sala Tercera de casación laboral mediante Sentencia de 30 de septiembre de 1999, el Tribunal Superior de Trabajo hace caso omiso de ella y reitera que la sentencia de 9 de junio de 1999 (que tiene como fundamento la resolución casada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), es correcta y conforme a derecho, todo lo cual implica el desconocimiento del principio jura novit curia y de lo dispuesto por el artículo 207 del Estatuto Fundamental.

El artículo 207 de la Constitución expresa:

> Artículo 207. "Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las decisiones proferidas por aquellos".

De la norma transcrita se desprende, sin lugar a dudas, que resulta insostenible una resolución proferida por un inferior jerárquico que contraría lo dispuesto por la Corte o por una de sus Salas.

La resolución que se impugna es un acto jurisdiccional subjetivo que contiene en su parte dispositiva un mandato imperativo que afecta derechos subjetivos del amparista, derechos previamente tutelados por la Sala de lo Contencioso Administrativo. De allí resulta que la resolución atacada en sede de amparo vulnera lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Fundamental, que conmina a las autoridades a asegurar la efectividad de los derechos y a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esta Corporación de Justicia ha sostenido innúmeras veces que el artículo 17 de la Constitución contiene principios y valores que informan todo el ordenamiento positivo panameño y que pueden ser exigidos al ser interpretado sistemáticamente con otros preceptos constitucionales, como es el caso del artículo 207 antes citado.

Resulta entonces evidente que la sentencia atacada por esta vía constitucional subjetiva vulnera el debido proceso legal, por cuanto se opone sustancialmente a la decisión proferida en la sentencia de casación de 30 de septiembre de 1999, por lo que debe ser revocada a fin de garantizar el cumplimiento del principio de seguridad o certeza jurídica, y la tutela efectiva de los derechos subjetivos asegurados por la decisión de la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 9 de junio de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Trabajo, y CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Samuel E. Marín M. en representación de Ernesto Gotti.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. RODRIGO MIRANDA MORALES CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI. (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Vistos:

El licenciado Rodrigo Miranda Morales, en representación de MERCEDES GONZALEZ DE SERRACIN, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 7 de diciembre de 1999, mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial se inhibe de conocer el amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer de 1 de diciembre de 1999, proferida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial consideró que la resolución atacada confirmó la Resolución No. 51-99 de 12 de agosto de 1999, expedida por la Alcaldía Municipal del Distrito de Gualaca, que negó la solicitud de lanzamiento interpuesta por Mercedes González de Serracín contra Magdaleno Vejarano Del Cid, y para recurrir a través de la demanda de amparo es menester que el demandado sea el funcionario que dictó la orden en primera instancia y no el que la confirma, por lo que dicho Tribunal no tenía competencia para conocer dicha acción constitucional.

El apelante en su escrito de sustentación solicita que se revoque dicha resolución y en su lugar se conceda el amparo, señalando que "las resoluciones no ejecutoriadas, pendientes de un recurso de apelación u otro medio de impugnación, es como si no existieran y contra esas resoluciones precarias es que sostiene esa jurisprudencia que deben enfilarse las demandas de amparo" y que "es el Gobernador de la Provincia de Chiriquí quien pone en vigor la resolución impugnada, es decir dicta la orden final que deberá cumplirse".

Observa el Pleno, que efectivamente el recurrente se equivocó al determinar sobre quién recaía la legitimación pasiva en este caso, pues no dirigió el amparo contra el autor de la orden sino contra el superior del mismo.

Partiéndose de esa premisa, en virtud de que el artículo 2607 del Código Judicial señala que son competentes para conocer de la demanda de amparo entre otros, "los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia" y el acto original fue dictado por una autoridad municipal el cual tiene mando y jurisdicción en un distrito únicamente, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no tenía competencia territorial para resolver el amparo propuesto.

En innumerables ocasiones el Pleno ha señalado que la demanda de amparo debe estar dirigida a la orden originaria expedida por el servidor público, y no contra el acto confirmatorio, a menos que dicho acto modifique o revoque la orden originaria.

Con relación a lo anterior, en el fallo de 9 de agosto de 1993 y en el fallo de 9 de julio de 1997 se señaló expresamente:

"Los actos impugnables son aquellos que crean, modifican o extinguen un Estado de derecho". "... cuando una resolución de primera instancia es confirmada en segunda instancia, el acto que debe atacarse mediante el amparo viene constituido por la resolución de primera instancia, por lo que ésta, precisamente, la contiene la orden de hacer o de no hacer, que crea, modifica o extingue un estado de derecho".

"De la lectura de la acción constitucional interpuesta, se aprecia que se impugnan dos órdenes. La primera, pronunciada por la Comisión de Vivienda No. 2 , donde se ordena el lanzamiento; y la otra, emanada de la Dirección Nacional de Arrendamiento, en la que se confirma la decisión emitida por la Comisión de Vivienda No. 2. De conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la demanda de amparo debe ser presentada contra el funcionario o entidad que profiriera la orden original y en el caso presente, sin entrar a considerar si concurren los requisitos legales necesarios para la admisión de la acción promovida, observa el Pleno que carece de competencia para conocer de esta demanda de amparo.

En efecto, la acción debió dirigirse únicamente contra la resolución dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 que fue la autoridad que dictó, en primera instancia, la resolución que ordena el lanzamiento".

Adicionalmente, la Corte observa que en el expediente no consta poder otorgado por la señora Mercedes González de Serracín al licenciado Rodrigo Miranda Morales para que interponga demanda de amparo de garantías constitucionales, requisito exigido por el artículo 2609 del Código Judicial que señala que "las partes deberán nombrar abogado que las represente".

Si bien es cierto que a foja 2 del cuadernillo contentivo de los antecedentes, se observa el escrito mediante el cual la señora Mercedes de Serracín le otorga poder al Licdo. Miranda para que interponga demanda de lanzamiento contra el señor Magdaleno Del Cid González, sin embargo, la demanda de amparo es un proceso autónomo y, por lo tanto, no cabe en esta situación aplicar el artículo 615 del Código Judicial, el cual señala que "constituido un apoderado especial en un proceso se entenderá que lo es también para los procesos accesorios, las incidencias, las medidas, diligencias y recursos que surjan del proceso". (Ver fallos de 21 de enero de 1999; 26 de marzo de 1996 y 9 de noviembre de 1995).

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte, considera que la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada en este caso es inadmisible.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN A. ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO

CRUZ RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ESPERANZA VDA. DE BARLETTA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO NO. 185 DE 7 DE JULIO DE 1997, PROFERIDO POR LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO PENAL, (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Rogelio Cruz Ríos, actuando en nombre y representación de María Esperanza Vda. de Barletta, contra la supuesta orden de hacer contenida en el auto N° 185 de 7 de julio de 1997 proferido por la Juez Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

La alzada se dirige contra la sentencia de 13 de diciembre de 1999, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que resuelve no admitir la acción de amparo impetrada.

El a-quo fundamenta su decisión en el hecho que, en este caso, se produce la situación de amparos sucesivos, pues con anterioridad se interpuso una acción semejante, que fue declarada no viable por la Corte Suprema de Justicia.

Por anunciado el recurso en tiempo oportuno, pasa la Corte a decidirlo.

DECISION DE LA CORTE

Esta Superioridad coincide con el juzgador de primera instancia en que nos enfrentamos a lo que el artículo 2621 del Código Judicial define como amparos sucesivos.

Según la disposición citada, las demandas de amparo sucesivas son aquellas que se proponen contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se presenten ante Tribunales competentes distintos.

Tal cual expresa el Tribunal Superior en la resolución apelada, el recurrente entabló una demanda de amparo similar a la resuelta por esta Corporación de Justicia mediante sentencia de 12 de abril de 1999.

Esta Superioridad ha resaltado que es improcedente la presentación de una nueva demanda contra un acto previamente conocido por el Pleno a través del instituto de amparo, aún cuando en la primera ocasión no se hubiere resuelto el fondo del negocio (Cfr. Sentencia del Pleno de 31 de octubre de 1991). Admitir la posibilidad de que se ejerciten nuevas acciones con relación al mismo conflicto jurídico, atentaría contra el principio de certeza jurídica, y restaría seriedad y eficacia a este mecanismo de protección de los derechos fundamentales.

Por las razones anteriores la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 13 de diciembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. BENJAMIN FLORES REYNA, EN REPRESENTACION DE MANUEL MADRID DURAN, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CONSISTENTE EN EL DESALOJO DE UN INMUEBLE. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Benjamín Flores Reyna, en nombre y representación de MANUEL MADRID DURAN, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales, contra la orden de hacer dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y que reposa en el Oficio N° 1350-DRP-C-50 de 23 de noviembre de 1999.

El Oficio N° 1350-DRP-C-50 de 23 de noviembre de 1999, trata de una notificación que llevó a cabo el Magistrado Carlos Manuel Arze de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, al señor MANUEL MADRID, en el sentido que debía desocupar la casa N° 12, situada en Calle 49 Este del Corregimiento de Bella Vista, inmueble que ocupa en condición de custodio, por razón de que sería ocupada por la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Se procede en primer término, al examen del escrito contentivo de la acción incoada, a fin de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos legales que hacen viable su admisión.

En este punto se percata el Tribunal, que la acción instaurada adolece de defectos que impide darle curso legal a la misma.

En primer lugar, la parte actora no ha aportado el acto acusado debidamente autenticado (ver foja 1 del expediente), tal como la jurisprudencia lo ha reiterado en innumerables Resoluciones, aplicándose el contenido del artículo 2610 del Código Judicial en su parte final, en asocio con el artículo 820 de la misma excerta legal. En este sentido se ha insistido en la imperatividad de acompañar las acciones de Amparo de Garantías Constitucionales, con la copia debidamente autenticada del acto acusado. Veámos que dicen los preceptos comentados:

> **"Artículo 2610. Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener.**
>
> **1. Mención expresa de la orden impugnada;**
>
> **2. Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió;**
>
> **3. Los hechos en que funda su pretensión; y,**
>
> **4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.**
>
> **Con la demanda se presentará la prueba de la orden impartida, si fuere posible o manifestación expresa, de no haberla podido obtener." (Subrayado es nuestro)**
>
> **"Artículo 820. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la**

> custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa." (Subrayado es nuestro)

En efecto, en Resolución de 31 de octubre de 1991 esta Sala Plena, al conocer de una acción de Amparo presentada en condiciones similares a la que nos ocupa, señaló de manera específica lo siguiente:

> "El amparista ha presentado unas fotocopias sin autenticar y a pesar de que a mano se lee `fiel copia de su original', no tiene el respaldo de ninguna firma y menos de persona que, en desempeño de cargo alguno, certifique lo expresado. Es condición de admisibilidad de la demanda presentar autenticadas copias de los documentos que se aportan para sustentar la acción de amparo."

En relación a este mismo punto, son consultables las resoluciones proferidas por esta Superioridad, calendadas 27 de mayo de 1991, 17 de junio de 1992 y 7 de abril de 1995.

En segundo término, y muy relacionado con el punto anterior, si bien es cierto el amparista solicita a esta Superioridad que se oficie lo pertinente para que sea autenticada dicha copia (ver foja 10), no es menos cierto que si este Tribunal procediese a tal requerimiento, estaría violentando la naturaleza jurídica de esta figura constitucional, la cual consiste de enmendar de manera inmediata los agravios ocasionados por las órdenes de hacer o no hacer proferidos por los funcionarios públicos. Esto es que el lapso que pasaría, entre el momento en que se hace la petición de autenticación al funcionario y el momento en que éste contesta, sería dilatado y los efectos de la orden se consumarían, sin darle la oportunidad al PLENO de revisar la actuación. Es por ello que la Ley le exige al interesado la aportación de la prueba sumaria en este proceso constitucional para su inmediata revisión jurisdiccional y así el daño, en el evento de que realmente exista, pueda ser enmendado en tiempo oportuno.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE, la Acción de Amparo de Garantías incoado por el licenciado Benjamín Flores Reyna, en nombre y representación de MANUEL MADRID DURAN.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LCDO. HÉCTOR CASTILLO RIOS, EN REPRESENTACIÓN DE TUNA PAN PACIFICO, COMPAÑIA ANONIMA, CONTRA LAS ÓRDENES VERBALES DE HACER Y NO HACER, PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Héctor Castillo Ríos, actuando en representación de TUNA PAN PACIFICO, COMPAÑIA ANONIMA, ha interpuesto amparo de garantías constitucionales contra las órdenes de hacer dictadas dentro del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado promovido por JORGE PABLO MEDINA contra M/N PAN

PACIFIC.

I. Fundamento de la demanda.

Las órdenes de hacer cuya revocatoria pide el amparista, todas dictadas dentro del proceso antes señalado son las siguientes:

> "I. Orden de hacer por la que el Tribunal pretermitió en el expediente que contiene el Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado, promovido por JORGE PABLO MEDINA .VS. M/N PAN PACIFIC, que personal subalterno haya sustraído del expediente la foja N° 31, contentiva de la resolución de 19 de mayo de 1995, por la que se resolvió el ARCHIVO del expediente y su inscripción en el libro de Salida ..."
>
> II. Orden de Hacer, mediante la cual el Tribunal Marítimo de Panamá, rompe la estabilidad del proceso IN REM, al otorgar al demandante JORGE PABLO MEDINA, certificación cada año durante los últimos ocho (8), en las que hace constar la presentación de la demanda, con el pretexto de interrumpir la prescripción de la acción ..."
>
> III. Orden Verbal de No Hacer, por la que el Tribunal se niega a resolver EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO ..."

En la demanda se formula pretensión consistente en que la misma sea acogida y se requiera al funcionario acusado por la expedición de las órdenes que éstas sean suspendidas y que envíe a esta superioridad un informe acerca de los hechos y el expediente a que se contraen las órdenes acusadas.

Plantea el amparista que las órdenes impugnadas infringen los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la primera orden de hacer atacada, por la que se "pretermiten actos procesales", alega el amparista que la violación del artículo 17 de la Constitución Nacional se produce en conjunción con el artículo 32, en la medida que las garantías del debido proceso legal encuentran fundamento en algún texto de Ley. De ese modo afirma que el artículo 17 subordina al Tribunal Marítimo al texto claro de los artículos 391, en congruencia con el artículo 493 de la Ley 8 de 1982, donde se prevé el procedimiento idóneo que accede y autoriza revisar con posterioridad una resolución, sentencia o auto ejecutoriado por el que se pone fin al proceso.

Lo anterior se trae a colación, pues, en primer lugar, se alega la existencia de la Resolución de 19 de mayo de 1995 expedida por el Tribunal Marítimo, en la que se ordenó el archivo del expediente, razón que a su criterio puso fin al proceso. Ello es así en su opinión, puesto que la resolución en referencia quedó ejecutoriada por el sólo transcurso del tiempo al precluirse el término de que trata el artículo 482 de la Ley 8 de 1982, lo que en consecuencia no admitía recurso alguno según los términos contemplados en el artículo 393 de la misma Ley.

En segundo lugar, el amparista sostiene que la Resolución de 19 de mayo de 1995, fue sustraída del expediente y correspondía al folio 31, previa anotación de su salida en el folio 162 bajo el número 1063 del libro respectivo. La sustracción y su posterior anulación en el Libro de Salida mediante "ocultación, borrones y tachadura", constituye un desconocimiento del debido proceso previsto y autorizado para revisar auto o sentencia que le pone fin al proceso por cualquier circunstancia, inclusive cuando medie error o ignorancia inexcusable de la Ley. Es por ello que se solicita que en este caso se declare que operó el fenómeno jurídico de Cosa Juzgada desde el 19 de mayo de 1995, y que en consecuencia se ordene el archivo del expediente.

Por otro lado, en cuanto a la Orden de Hacer por la que según el amparista

se rompe la estabilidad del proceso IN REM, parte argumentando que el debido proceso legal es de carácter general, por tanto alcanza a todos los procesos, salvo lo que excluye la propia Constitución. Ello incluye el principio de seguridad jurídica que dimana del artículo 55 en congruencia con el artículos 526 de la Ley 8 de 1982, donde se establecen los requisitos que debe contener la demanda que inicie un proceso para hacer valer un crédito marítimo privilegiado, donde se prevé entre otros supuestos, que se deberá indicar si la nave afecta a este crédito se encuentra o se encontrará próximamente en la jurisdicción y se solicitará el secuestro del bien sujeto al crédito marítimo privilegiado, cuya ejecución se demanda. Afirma el recurrente que han transcurrido ocho (8) años y aún la Nave Pan Pacific no se encuentra en la jurisdicción del Tribunal, lo que imposibilita su aprehensión física, requisito necesario para que se trabe la litis en virtud del ejercicio de una acción empleada en un proceso especial para la ejecución de un crédito marítimo privilegiado. A ello añade que el artículo 165 de la misma Ley, advierte la obligación de que la petición de secuestro se formalice con el respectivo libelo de demanda, donde se hará constar la información que tenga el peticionario en cuanto al lugar, fecha y hora en que puede hacerse efectivo el secuestro, si va dirigido a una nave o su carga; en este caso, apunta el amparista, al Tribunal además de conocer que la Nave no se encuentra en su jurisdicción, sabe y le consta que en la demanda no se solicitó el secuestro, por lo que resulta imposible realizar la notificación de la demanda. Es por ello, que se rompe la estabilidad del proceso IN REM al aceptar y mantener activa una demanda con defectos que denotan infracción de los requisitos esenciales exigidos por la Ley.

En apoyo a su tesis, el amparista destaca que las deficiencias e imperfecciones procesales tienen su explicación por haberse omitido la evaluación de la prueba indiciaria o prima facie antes de recibir la demanda y mediante providencia motivada acreditar la existencia de aquellas formalidades, para poder evaluar sus cambios y transformación en el tiempo. En ese orden de ideas, expresa que el Tribunal ha perdido de vista que por el sólo transcurso del tiempo cambiaron las consideraciones fácticas que constituían la "evidencia prima facie" que la convencieron para recibir la demanda, por lo que resulta inaceptable que un procedimiento tardío prevalezca sobre el mandato legal.

Finalmente, en cuanto a la orden de no hacer por la que el Tribunal se niega a resolver excepciones de previo y especial pronunciamiento, expresa que por presentada la demanda opera el principio de impulsión del proceso, que es la fuerza o actividad que pone en movimiento el proceso y lo hace avanzar hasta su fin una vez iniciado, por lo que resulta consustancial, el que le den las partes y el Juez, observando los mandatos que la Ley le impone y los plazos que la misma prescribe, impulsar su marcha sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo. En este caso, ante la imposibilidad jurídica de notificar la demanda o practicar el secuestro en un período de ocho años, y atendiendo a la naturaleza del proceso IN REM, se revela la pública y notoria ausencia de una acuciosa administración del proceso, omitiendo emplearse las herramientas procesales que le permiten sanearlo o archivarlo por incumplimiento de los elementos esenciales.

Pues bien, tras analizar la pretensión del recurrente, advierte el Pleno que, en primer lugar, hay que ventilar lo relativo al procedimiento a seguir cuando se trata de actos que ponen fin al proceso, en este caso, la Resolución de 19 de mayo de 1995 por la que se ordenó el ARCHIVO del expediente, previa anotación de su salida en el libro de registro respectivo. Debe tenerse presente, que al examinar el informe del Tribunal Marítimo sobre los hechos planteados en el amparo, es evidente que no se discute la existencia de la Resolución en mención, sino que se argumenta que la expedición de la misma, sin fundamento que justifique el archivo del expediente, se debió a un error que pudo ser cancelado oficiosamente por el Secretario, aunado a que no se pudo determinar en qué momento se decidió borrar del Libro de Salida el error cometido, luego que el Juez conversara con los funcionarios encargados en ese entonces del caso, pues, no estaba en ese momento encargado del Tribunal.

A criterio del Pleno, lo antes planteado no ubica al amparista en un estado

de indefensión, pues, en principio, no debe perderse de vista que la estructura del proceso sólo permite que la controversia sea llevada a juicio por aquellos a quienes el ordenamiento considera titulares de la situación o de la relación controvertida o por sus representantes, y en este caso, quien recurre en amparo de garantías constitucionales, TUNA PAN PACIFICO COMPAÑIA ANONIMA, no está constituida como parte en el Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado que JORGE PABLO MEDINA le sigue a la M/N "PAN PACIFIC". El Juez Marítimo en el informe que en su momento rindiera sobre los hechos plantados en el amparo, destaca que el amparista no es parte debidamente constituida en el mencionado proceso marítimo privilegiado, pues, no se ha trabado la litis ante la falta de notificación a la persona del demandado (la nave), y de conformidad a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 8 de 1982, la solicitud de intervención de un tercero se resolverá luego de efectuada la notificación de la demanda.

Pese a lo expuesto, el Pleno estima conveniente manifestar en cuanto a la supuesta irregularidad de sustraer la foja 31 del expediente, contentiva de la Resolución de 19 de mayo de 1995, donde se resolvió el "Archivo" del expediente, y borrar su inscripción del Libro de Salida, que todo indica que, en efecto, se trató de un error que pudo ser subsanado, más aun cuando se trata de una resolución que por su naturaleza, es decir, que pone fin al proceso, debía estar debidamente motivada con los fundamentos jurídicos pertinentes, tal como lo ordena el artículo 387 de la Ley 8 de 1982. A foja 17 del expediente el Pleno advierte que aparece copia simple de la Resolución de 19 de mayo de 1995, donde no se identifica a las partes ni se hace referencia a ningún proceso, ni aparece debidamente motivada como lo contempla la Ley.

En otro orden, en cuanto a la demanda contra la orden de hacer por la que se rompe la estabilidad del proceso IN REM y contra la orden de hacer por la que el Tribunal se niega a resolver Excepciones de Previo y Especial Pronunciamiento, el Pleno es del criterio que no es dable efectuar mayores pronunciamientos con respecto a las mismas, toda vez que ha quedado claramente establecido que TUNA PAN PACIFICO COMPAÑIA ANONIMA, no es parte debidamente constituida en el proceso marítimo privilegiado, y mediante la anteriores demandas se busca formalizar incidencias actuando como terceros, cuando aún no se ha trabado la litis ante la falta de notificación personal al demandado, es decir, la M/N "PAN PACIFIC".

Es con fundamento en lo anteriormente expresado por lo que la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el Lcdo. Héctor Castillo Ríos, en representación de TUNA PAN PACIFICO COMPAÑIA ANONIMA contra las órdenes de hacer y no hacer antes señaladas, proferidas por el Tribunal Marítimo.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) HUMBERTO H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACION DE MARGARITA GARCIA DE CHEN CONTRA EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL, DE LA PROVINCIA DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la firma forense BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS, en representación de la señora MARGARITA GARCIA DE CHEN, quien dice actuar "en calidad de esposa del señor PAUL AUGUSTO CHENG RAMIREZ" en contra del JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO, RAMO PENAL, DE LA PROVINCIA DE COLON.

Se observa que la alzada se dirige contra la Resolución de 5 de octubre de 1999, emanada del Primer Tribunal Superior, en la cual se declaró "NO VIABLE" la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta.

Procede la Corte a decidir lo que en derecho corresponde.

DECISION DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR

El Primer Tribunal expresa la opinión de la que la acción de amparo interpuesta resulta ser manifiestamente improcedente. En ese sentido considera, en primer lugar, que la señora MARGARITA GARCIA DE CHEN, es la que comparece al Tribunal y otorga poder en el que manifiesta hacerlo "en calidad de esposa del señor PAUL AUGUSTO CHEN RAMIREZ.". El Tribunal A-quo señala que la Corte se ha pronunciado aclarando la extensión de la frase "de cualquier persona" contenida en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 2606 del Código Judicial. En segundo lugar, el Tribunal Superior manifestó, que el acto impugnado, no constituye una orden de hacer o de no hacer, por cuanto es una resolución que decide un incidente de nulidad, según lo tiene señalado la doctrina jurisprudencial.

DECISION DE LA CORTE SUPREMA

En primer lugar, el Pleno observa que la acción de amparo es interpuesta por persona distinta de la que es titular de los derechos constitucionales supuestamente violados.

En reiterada jurisprudencia la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la expresión "o por cualquier persona" contenida en el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 2606 del Código Judicial.

Veamos que en Sentencia de amparo de 17 de julio de 1991, el Pleno señaló:

> "Aquí aparecen obviamente traslapados los intereses de la demandante con los de su esposo, siendo que el último carece de legitimación en esta causa porque no es parte de la misma. Es fácil advertir que la "orden de no hacer" que se impugna no le concierne jurídicamente; la parte resolutiva del acto jurisdiccional que la contiene no viola ningún derecho o garantía consagrado a su favor por la Constitución Nacional como es la exigencia tanto de los artículos 50 de la Carta Magna y 2606 del Código Judicial. No está entonces investido de legitimación activa, y por no ser parte en el negocio -lo que le niega la titularidad de alguno de los derechos procesales básicos- no pueden ser anunciadas pretensiones en su nombre. De allí que esta presunta violación se refiere a un elemento extraño al proceso, por lo que no puede ser considerada favorablemente".

En otro fallo de 21 de mayo de 1996, la Corte dijo:

> "El Pleno se ha pronunciado recientemente por el alcance que tiene la frase "o por cualquier persona" que contiene el artículo 50 de la Constitución Política, señalando, en primer lugar, en la sentencia de amparo de 5 de noviembre de 1990, que el tercero está legitimado en la medida en que no pueda ser extraño al interés de la persona contra la cual se haya expedido la orden que se estima violatoria de algún derecho fundamental, o por lo menos, que no tenga un interés opuesto al destinatario de la orden de hacer o de no hacer".

En segundo lugar, según consta en el expediente, el acto que se pretende impugnar mediante la presente acción constitucional es la Resolución No. 66 del 29 de septiembre de 1998, que "NIEGA el Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento por Falta de Competencia presentado por la Firma Forense Botello, Aparicio y Asociados dentro del negocio seguido a PAUL AUGUSTO CHENG R."; y tal como lo señaló el Primer Tribunal Superior, la jurisprudencia en materia de Amparo de Garantías Constitucionales ha establecido su criterio sobre las acciones de amparo que se promuevan contra resoluciones que deciden un incidente. Así las cosas, estos actos no contienen en su parte dispositiva ningún mandato o prohibición dirigida a un particular o a una autoridad.

Mediante Resolución de 11 de febrero de 1999, la Corte Suprema dijo lo siguiente:

> "De la lectura del libelo de demanda se observa que el objeto procesal no constituye una orden de hacer, sino una mera decisión que acoge un incidente de nulidad.
>
> Esta Corporación de Justicia ha sido sumamente clara al establecer su criterio sobre las acciones de amparo que se promueven contra resoluciones que deciden un incidente de nulidad. A saber, estos actos no contienen en su parte dispositiva ningún mandato o prohibición dirigida a un particular; presupuesto procesal indispensable para la admisión de toda demanda de esta naturaleza."

En vista de las consideraciones que anteceden, lo procedente es confirmar el fallo del tribunal a-quo.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 5 de octubre de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior, llegada en grado de apelación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA DRA. ALMA LOPEZ DE VALLARINO, EN REPRESENTACION DE VICENTE CARRETERO NAPOLITANO, CONTRA LA JUEZ PRIMERA SUPLENTE DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PANAMA, APELACION. MAGISTRADO ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen, actuando en nombre y representación de la licenciada DANITZA VASQUEZ ORTEGA, Juez Primera de Niñez y Adolescencia Suplente, interpuso recurso de apelación contra la resolución No. 2-A.G.C. T. de 21 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, con motivo de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la doctora Alma López de Vallarino, apoderada judicial del señor Vicente Carretero.

Por su parte, la señora Laura Hernández, contraparte del señor Vicente Carretero, compareció al proceso de amparo por medio de su apoderado judicial,

el licenciado Alvaro Cedeño Barahona.

El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia concedió la presente acción de garantías constitucionales por considerar que la resolución impugnada, es decir, la resolución No. 633 de 7 de octubre de 1997 "no puede ser la decisión más acorde a los derechos de la niña, ya que la misma la consideramos contraria al debido proceso porque se fundamentó en los argumentos que fueron valorados en la Resolución N° 2P. T. de 6 de febrero de 19997 (sic) y por todas las repercusiones que ello conlleva".

Advierte el Pleno que la demanda de amparo interpuesta está dirigida contra una orden de hacer contenida en la sentencia N° 633 S. A. del 7 de octubre de 1999, dictada por la Juez Primera de Niñez y Adolescencia del Circuito de Panamá y cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

> "1. DECLARAR, que no hay mérito para continuar, imponiendo medida de protección a favor de la menor PAOLO CARRETERO HERNANDEZ, por haberse declarado un SOBRESEIMIENTO a favor de la señora LAURA HERNANDEZ DE FIGUEROA, dentro del proceso penal, que por delito de maltrato al menor se le seguía ante el Juzgado Décimo Cuarto del Circuito Penal, del Primer Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá
>
> 2. REINTEGRAR, a la menor PAOLA CARRETERO HERNANDEZ, al hogar de su madre LAURA LORENO, HERNANDEZ quien mantendrá la Guarda, Crianza Provisional de la prenombrada menor, a partir de la presente resolución.
>
> 3. ESTABLECER, un seguimiento técnico, a favor de la menor PAOLA CARRETERO HERNANDEZ, a cargo del Equipo Interdisciplinario de este Despacho, una vez por mes.
>
> 4. PROHIBIR, la realización de evaluaciones técnicas e interrogatorios en la persona de la menor PAOLA CARRETERO HERNANDEZ, que no sean autorizados por autoridad competente.
>
> 5. ESTABLECER, un régimen de comunicación y visita provisional de la menor PAOLA CARRETERO HERNANDEZ, para con relación a su progenitor VICENTE CARRETERO NAPOLITANO, sujeto a las siguientes cláusulas:
> ...
> 6. ORDENAR, el cierre y archivo del presente proceso de maltrato.
>
> 7. ORDENAR se traslade al proceso de GUARDA, CRIANZA Y EDUCACION, a la Sección de Familia de este Juzgado a fin de que continúe con los trámites de rigor establecido en el Código de la Familia. proceso de maltrato.
>
> 8. Establecer, el día 28 de enero del 2000, a las ocho de la mañana (8:00 a. m.), como fecha de audiencia dentro del proceso de Guarda, Crianza y Educación.
>
> 9. REMÍTASE el presente proceso a la Fiscalía de Familia para su conocimiento."

El Pleno observa que los apelantes sostienen que la presente acción de amparo de garantías constitucionales no debió admitirse porque el señor Vicente Carretero, antes de interponer dicha acción, debió agotar las vías de impugnación que cabían contra la sentencia No. 633 S. A. del 7 de octubre de 1999, dictada por la Juez Primera de Niñez y Adolescencia del Circuito de Panamá.

La Corte comparte los razonamientos expuestos por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia con respecto a que la resolución No. 633 de 7 de octubre de 1999 no es la decisión más adecuada a los derechos de la niña, toda vez que la

misma es contraria al debido proceso, pues se fundamentó en los argumentos que fueron valorados en la resolución No. 2-P. T. de 6 de febrero de 1997. En este sentido, del artículo 791 del Código de la Familia se colige, como indicó el Tribunal Superior, que las sentencias emitidas dentro de los procesos de guarda y crianza, no hacen tránsito a cosa juzgada, pero para ser modificadas necesitan de nuevas pruebas o hechos que hayan modificado la situación anterior y que para decretar las medidas tutelares provisionales necesarias para la defensa de los derechos del niño, debe presentarse la respectiva solicitud, la cual deberá tramitarse acatando los procedimientos legales como si se tratara de un nuevo proceso y aportando las pruebas que acrediten que debe modificarse las decisiones que con anterioridad fueron resueltas. Ello no ocurrió en este caso, pues en la solicitud presentada por la señora Laura Hernández no se acreditó lo demandado, razón por la cual no podían dictarse medidas cautelares y en su lugar se debieron recabar las pruebas pertinentes y fijar fecha de audiencia ante la presencia del Ministerio público. Sin embargo, el Pleno observa que se hizo todo lo contrario, pues la juez acusada ordenó el "reintegro" de la niña a su madre y fijó la fecha de audiencia para el 28 de enero de 2000.

De igual forma, coincide el Pleno con el criterio expuesto por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en el sentido de que el principio del interés superior de la niña se encuentra en un estado susceptible de ser afectado por la situación especial que rodea al presente proceso. Cabe señalar al respecto que la Corte ha reiterado en diversos fallos que la protección constitucional de los derechos de los menores forman parte de los derechos humanos de segunda generación mencionados de forma general en el artículo 52 de la Constitución Nacional y, por esta razón, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño constituye un complemento a ese texto constitucional, al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor. Este concepto de interés superior del menor, implica el derecho del niño a una protección especial y a la primacía de sus intereses. La Corte ha señalado que esa norma (artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño) integra el bloque de la constitucionalidad, tal como consta en los fallos de 20 de marzo de 1996, 13 de marzo de 1998 y 22 de julio de 1998.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corporación considera que lo procedente es confirmar la resolución apelada y, en consecuencia, conceder el amparo interpuesto.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución No. 2-A.G.C. T. de 21 de octubre de 1999, mediante la cual el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado por la doctora Alma López de Vallarino, actuando en nombre y representación del señor VICENTE CARRETERO, contra la orden de hacer contenida en la sentencia N° 633 S. A. del 7 de octubre de 1999, dictada por la Juez Primera de Niñez y Adolescencia del Circuito de Panamá.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(con salvamento de voto) (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(con salvamento de voto)

(fdo.)CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTOS DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
Y CÉSAR PEREIRA BURGOS

Con nuestro acostumbrado respeto manifestamos que disientimos de la decisión adoptada por la mayoría, por las razones que a continuación exponemos:

El licenciado Miguel Deen, en representación de la licenciada DANITZA VÁSQUEZ ORTEGA, Juez Primera de Niñez y Adolescencia Suplente, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia N° 2-A.G.C.T., dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, con motivo de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la doctora Alma López de Vallarino, en representación del señor VICENTE CARRETERO.

La contraparte del señor CARRETERO, señora LAURA HERNÁNDEZ, también apeló de la sentencia de amparo por medio de su apoderado judicial, el licenciado Alvaro Cedeño Barahona.

Los apelantes sostienen que la presente acción de amparo de garantías constitucionales no debió admitirse porque el actor (VICENTE CARRETERO), antes de interponer dicha acción, debió agotar las vías de impugnación que cabían contra la Sentencia N° 633 S. A. del 7 de octubre de 1999, dictada por la Juez Primera de Niñez y Adolescencia del Circuito de Panamá (Cfr. fs. 231 y 243, respectivamente).

Estimamos que le asiste razón a los apoderados judiciales de los recurrentes. En efecto, la Sentencia objeto del presente amparo es la N° 633 S. A. del 7 de octubre de 1999, dictada por la Juez Primera de Niñez y Adolescencia del Circuito de Panamá, cuya parte resolutiva dispone lo siguiente:

> 1. DECLARAR, que no hay mérito para continuar, imponiendo medida de protección a favor de la menor PAOLA CERRETERO HERNÁNDEZ, por haberse declarado un SOBRESEIMIENTO a favor de la señora LAURA HERNÁNDEZ DE FIGUEROA, dentro del proceso penal, que por delito de maltrato al menor se le seguía ante el Juzgado Décimo Cuarto del Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.
>
> 2. REINTEGRAR, a la menor PAOLA CERRETERO HERNÁNDEZ, al hogarde su madre LAURA LORENA HERNÁNDEZ, quien mantendrá la Guarda, Crianza Provisional de la prenombrada menor, a partir de la presente resolución.
>
> 3. ESTABLECER, un seguimiento técnico, a favor de la menor PAOLA CERRETERO HERNÁNDEZ, a cargo del Equipo Interdisciplinario de este Despacho, una vez por mes.
>
> 4. PROHIBIR, la realización la realización de evaluaciones técnicas e interrogatorios en la persona de la menor PAOLA CERRETERO HERNÁNDEZ, que no sean autorizados por autoridad competente.
>
> 5. ESTABLECER, un régimen de comunicación y visita provisional de la menor PAOLA CARRETERO HERNÁNDEZ, para con relación a su progenitor VICENTE CARRETERO NAPOLITANO, sujetos a las siguientes cláusulas:
> ...
> 6. ORDENAR, el cierre y archivo del presente proceso de maltrato.
>
> 7. ORDENAR se traslade el proceso de GUARDA, CRIANZA Y EDUCACIÓN, a la Sección de Familia de este Juzgado a fin de que continúe con los trámites de rigor establecido en el Código de la Familia.
>
> 8. Establecer, el día 28 de enero del 2000, a las ocho de la mañana (8:00 a. m.), como fecha de audiencia dentro del proceso de Guarda, Crianza y Educación.
>
> 9. REMÍTASE el presente proceso a la Fiscalía de Familia para su conocimiento."

Según puede apreciarse a foja 1867 vuelta, la doctora Alma López de Vallarino, apoderada judicial de la amparista, se notificó de la resolución parcialmente transcrita y no la impugnó a través del recurso de apelación.

Ante esta realidad procesal, el tribunal de amparo debió aplicar el contenido del numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que en forma clara establece que "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución de que se trate". En este punto es necesario aclarar, que si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley N° 32 del 23 de julio de 1999 (Por la cual se creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía), introdujo ciertas modificaciones al citado artículo 2606 del Código Judicial, éstas sólo se referían a los cuatro primeros párrafos de este artículo y no incluían el aludido numeral 2, que estaba vigente para la fecha en que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia decidió sobre la admisión de la presente acción de amparo de garantías constitucionales, esto es, para el 11 de octubre de 1999 (Cfr. f. 177).

Debe anotarse, asimismo, que aun cuando el penúltimo párrafo del artículo 2610 del Código Judicial (adicionado por el artículo 19 de la Ley N° 32 de 1999), establecía que "El Tribunal de amparo deberá siempre pronunciarse sobre el fondo ..." del negocio, ello se refería exclusivamente al hecho de que dicho tribunal no podía declarar inadmisible una acción de amparo por el incumplimiento de los "requisitos formales" que, de acuerdo con esa norma, debía contener toda demanda de amparo. Se trata, como puede verse, de una situación distinta a la regulada por el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, en virtud del cual sí era jurídicamente posible que el Tribunal de primera instancia inadmitiera el amparo promovido por el señor CARRETERO, por no haber apelado de la resolución que ahora se impugna por medio de esta acción de carácter extraordinario.

Por lo anterior, estimamos que como en este caso la resolución contentiva de las órdenes atacadas no fue oportunamente impugnada por la parte afectada a través de recurso de apelación, no se cumplió el presupuesto procesal establecido en el precepto citado, por lo cual, debe revocarse la sentencia de amparo apelada y declararse no viable la acción impetrada. En sentencia de amparo fechada el 30 de octubre de 1998, el Pleno de esta Corporación de Justicia se pronunció en iguales términos (Registro Judicial de octubre de 1998, págs. 43-44).

La acción de amparo de garantías constitucionales es, por naturaleza, una acción de carácter extraordinario establecida para la protección de las garantías fundamentales reconocidas porla Constitución Política a los particulares. De allí, que no sea viable en este tipo de negocio el examen de situaciones de hecho y de derecho cuyo conocimiento compete a los tribunales de instancia. Con mayor razón es así, en el presente caso, en el que se debaten situaciones concernientes a las relaciones familiares de la menor PAOLA CARRETERO HERNÁNDEZ con sus padres y pueden tomarse disposiciones especiales que limiten la comunicación y la visita de uno o ambos padres y las resoluciones que se dicten por la autoridad competente pueden ser modificadas en cualquier tiempo, cuando varíen las circunstancias de hecho (artículos 330 y 331 del Código de la Familia).

Además, los Jueces de la Niñez y de la Adolescencia, por la inmediación procesal, su especialización en la materia y por tener a su disposición un equipo interdisciplinario para evaluar cada caso, son los que pueden proteger más eficientemente los derechos constitucionales de los niños y adolescentes y velar para que el interés superior de los menores prevalezca en todas sus decisiones, tal como lo preceptúa el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño.

Por lo expuesto, respetuosamente salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. ANDRES ULDEMAR QUIJANO SERRANO EN NOMBRE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACION, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMA (SITRABEHCOP) CONTRA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado ANDRES ULDEMAR QUIJANO SERRANO, actuando en nombre y representación del señor JUAN BAUTISTA CHIRU MARISCAL, Secretario General y/o Representante Legal del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACION, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMA (SITABEHCOP), ha presentado Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la "ORDEN DE NO HACER contenida en la RESOLUCION -NOTA No. 197.DOS.99 de 28 de junio de 1999, proferida por el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral", con el objeto de que se revoque y se deje sin efecto dicha resolución.

EL ACTO IMPUGNADO

El acto impugnado objeto de la presente acción constitucional consta a foja 8 del expediente y es del tenor siguiente, en su parte sustancial:

> **"1. La empresa HENSEV, S. A. a través de su gerente de recursos humanos, Beryl de García solicitó a este despacho se le certificara si VICTORIANO SANCHEZ, con cédula de identidad personal No. 3-121-676 ocupaba algún cargo en la Junta Directiva, representación sindical o si estaba postulado para algún cargo de elección en el SITABEHCOP. Esta solicitud fue contestada negativamente mediante certificación 573.DOS.99 del 14 de Junio de 1999.**
>
> **2. La empresa HENSERV, S. A., el día 21 de junio de 1999 envase (sic) a nuestra certificación despide al trabajador VICTORIANO SANCHEZ y envía una nota fechada del mimo día a este departamento de organizaciones sociales y al ministro de desarrollo laboral advirtiendo el despido del trabajador y una posible introducción de fuero sindical por parte del SITABEHCOP.**
>
> **3. En el día de hoy, lunes 28 de Junio de 1999, el secretario de organización de SITABEHCOP, presenta documentos para su inscripción en donde se escogió al señor VICTORIANO SANCHEZ como REPRESENTANTE SINDICAL el día 14 de Junio de 1999 del SITABEHCOP ante el establecimiento KENTUCHY No. 10.**
>
> **Que como quiera que este despacho, el día de hoy 28 de Junio de 1999 tiene conocimiento que el trabajador VICTORIANO SANCHEZ con cédula de identidad No. 3-121-676, ya no laborara en la empresa HENSEV, S. A. (propietaria y administradora de los Kentuchy) no se admite al SITABEHCOP la documentación presentada."**

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS

La parte actora manifestó en su demanda de amparo de garantías constitucionales, que la orden de no hacer antes mencionada, viola los artículos 17, 18, 32 y 73 de la Constitución Política de la República de Panamá, violación que establece como "manera directa al actuarse con extralimitación de funciones y abuso de autoridad, y al no aplicarse y desconocerse el debido proceso legal, así como el acceso a la tutela jurisdiccional".

Manifestó que se violenta el debido proceso legal por cuanto que la nota

se dicta "al margen de toda regulación legal o procedimiento y autoridad legal al efecto", que con dicha actuación, se ha impedido a la parte actora recurrir a la vía jurisdiccional respectiva en demanda de justicia, "ejerciendo sus respectivos derechos de defensa, a través del proceso monitorio de reintegro o las impugnaciones que correspondan (procesos abreviados), para hacer valer su posición en juicio, incluído el derecho a aducir y practicar pruebas". Agrega también que se conculca la garantía fundamental del bebido proceso al desconocer "el derecho de mi representado a ser oído o escuchado, tanto ante el funcionario o servidor público que impartió la orden como eventualmente se pone en peligro o conculca éste derecho para recurrir ante un funcionario con competencia jurisdiccional al efecto, es decir, ante el juez natural".

Además agrega el amparista, que se faltó al debido proceso legal al no hacerse las notificaciones respectivas al representante legal del Sindicato o a su apoderado legal y que como consecuencia del acto que se impugna a través de la presente acción constitucional, se impide "el acceso al Juez natural para la protección del fuero sindical que la Constitución y la Ley reconoce para la protección del sindicalismo."

ADMISION DE LA DEMANDA E INFORME DE LA AUTORIDAD ACUSADA

Acogida como fue la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales, se solicitó el informe respectivo al funcionario demandado, dando respuesta tal como consta de fojas 17 a 18 del expediente.

De dicho informe se desprende que la empresa HENSERV, S. A., solicitó al despacho del funcionario acusado que certificara si el señor VICTORIANO SANCHEZ, era directivo, representante sindical o estaba postulado para cargo de elección de SITABEHCOP; lo que fue contestado negativamente mediante Certificación No. 573.DOS.99, de fecha 14 de junio de 1999. Que el día 21 de junio de 1999, en base a dicha certificación, la empresa despidió al trabajador VICTORIANO SANCHEZ, enviando nota al referido Despacho de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; que el día 28 de junio de 1999, "el Secretario de Organización del SITABEHCOP, Sr. Marcos Allen, presenta a este departamento, documentación para su inscripción, donde supuestamente se había elegido al Sr. Victoriano Sánchez como Representante Sindical el día 14 de junio de 1999, ante el establecimiento Kentuchy No. 10". Ese mismo día 28 de junio de 1999, se le emitió a través de Nota No. 197.DOS.99, la No Admisión de la documentación presentada por el SINTABEHCOP.

Posteriormente, el Licenciado ANDRES ULDEMAR QUIJANO, en representación del SITABEHCOP, presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio, el cual fue contestado mediante Nota No. 211.DOS.99. Esta nota consta a foja 23 del expediente, en la cual se señala que: "Las impugnaciones y recursos serán procedentes cuando el acto o acuerdo haya sido registrado en el Departamento de Organizaciones Sociales; el acto recurrido por usted, no fue admitido"; que "Los recursos de apelación y reconsideración se aplican a los procesos; en este caso se trata de una nota en donde se le explica al peticionario las razones por las cuales no se le admiten sus documentos" y, que "En el evento que se tratara de un proceso, usted tenía un plazo de dos (2) días para recurrir; en este caso su petición será extemporánea."

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Vistos los planteamientos en que se sustenta la presente acción constitucional, se pasa a resolver en base a las siguientes consideraciones:

El acto impugnado lo constituye una orden de no hacer emanada del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que es el encargado de registrar todos los actos provenientes de todas las organizaciones sociales contempladas en el Código de Trabajo; las funciones las realiza a nivel nacional. Lo anterior, para los efectos de la determinación de la competencia para conocer de la presente acción de amparo.

La Ley 53 de 28 de agosto de 1975, en su artículo 29, concede los recursos de reconsideración y apelación contra las "resoluciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social". Dichos recursos fueron utilizados por el ahora actor en el amparo de garantías y fueron resueltos, en el sentido de no admitirlos por considerarse que no se trataba de un proceso y que, en el evento que lo fuese, serían extemporáneos.

El acto atacado es de orden administrativo y la negativa del funcionario acusado en conceder los recursos interpuestos por el apoderado judicial de la organización social dejaba agotada la vía gubernativa, correspondiéndole a él recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo para que se revocase y dejase sin efecto la decisión que considere contraria a sus derechos.

Luego del estudio correspondiente, conviene reiterarle al amparista que la Corte Suprema de Justicia ha sentado en diversos fallos, el criterio de que el amparo de garantías constitucionales es una acción de naturaleza extraordinaria, y en consecuencia, no se puede recurrir a ella hasta tanto no se hayan agotado todos los medios de defensa establecidos en la Ley.

Por lo tanto, es evidente que al Pleno no le corresponde otra decisión que no sea la de denegar el amparo impetrado, toda vez que mientras los actos de los servidores públicos tengan remedio, ya ante la vía administrativa o ante la jurisdiccional, no es posible recurrir a la vía extraordinaria de amparo.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales propuesto por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACION, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMA (SITABEHCOP) contra la Orden de No Hacer contenida en la Resolución-Nota No. 197.DOS.99 de 28 de junio de 1999, del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, EN REPRESENTACION DE NETWORKS (PANAMA), INC. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA NO. CSER117, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC., debidamente representada por la firma forense INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, ha promovido acción de Amparo de Garantías Constitucionales en contra de la Orden de Hacer contenida en la Nota No. CSER-117 de fecha 23 de noviembre de 1999, proferida por el Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Públicos. La acción prenombrada fue admitida por esta Corporación de Justicia, mediante Resolución de 14 de diciembre de 1999, requiriéndose del funcionario demandado las actuaciones correspondientes, o en su defecto un informe acerca de los hechos, materia del Amparo. Además, se ORDENO LA SUSPENSION INMEDIATA de los efectos de la orden

impugnada mientras se decide el recurso.

Dando cumplimiento a lo ordenado, y dentro del término correspondiente, el Director Presidente a.i. del Ente Regulador de los Servicios Públicos, RAFAEL A. MOSCOTE, remitió para la consideración meritoria, el Informe de su actuación administrativa, mediante Nota DPER-3832, de 16 de diciembre de 1999, así como también la actuación administrativa contenida en el expediente número 016-99, en el que intervienen El Ente Regulador de los Servicios Públicos, en virtud de la denuncia presentada por la empresa concesionaria CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. contra la empresa WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC.

Cumplidas las ritualidades procesales que la Ley exige para esta clase de demandas, en su aspecto formal, se encuentra el Pleno de la Corte en condiciones de resolver sobre las consideraciones de fondo del amparista, a ello se pasa previa las siguientes consideraciones.

EL ACTO IMPUGNADO

El Acto impugnado lo constituye la Nota No. CSER-117 de fecha 23 de septiembre de 1999, dictada por el Comisionado Sustanciador del Ente Regular de los Servicios Públicos, cuyo texto es el siguiente:

"Panamá, 23 de noviembre de 1999
Nota No. CSER-117

Señor
Ronald Burleson
Gerente General
Cable & Wireless Panamá, S. A.
E. S. D.

Nos referimos a su Nota NS/INCG/99-194 del 22 de noviembre de 1999, mediante la cual solicita se realice investigación relacionada con la empresa WORLDQUEST NETWORKS PANAMA Inc., el Ente Regulador de los Servicios Públicos, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley, practicó diligencias de investigaciones con el propósito de esclarecer los hechos denunciados.

Luego de practicadas dichas diligencias y vistos los resultados obtenidos, solicitamos la desconexión de los números telefónicos que se indican a continuación:

El DID correspondiente a los números que van del 210-4200 hasta el 210-4299 El DID correspondiente a los números que van del 210-4600 hasta el 210-4699

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, nos suscribimos de usted

Atentamente,
FDO. Ascensión I. Broce
Comisionado Sustanciador"
(Fs. 1)

Señala la amparista que, mediante Resolución No. CT-433 de fecha 27 de julio de 1998, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, expide concesión para la prestación del servicio de telecomunicaciones identificado con el No. 211, denominado SERVICIO DE INTERNET PARA USO PUBLICO para uso comercial por un período de veinte (20) años; igualmente, bajo la Resolución No. CT-442 de 27 de julio de 1998, se expide concesión para la prestación del servicio de telecomunicaciones identificado con el No. 212, denominado SERVICIO DE RETRANSMISION DE FACSIMIL para uso comercial por un período de veinte (20) años; que como consecuencia de la mencionada Nota No. CSER-117, de fecha 23 de

noviembre de 1999, su representada se ha vista impedida de ejercer su labor profesional, que consiste en brindar servicios de internet para uso público y servicio de retransmisión de facsímil. Por otro lado agrega, que el Ente Regulador de los Servicios Públicos hasta la fecha no ha formulado cargo alguno en contra de su representada, y dicha nota atenta de manera directa contra la sociedad WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC.

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN INFRINGIDAS

La parte actora manifestó en su demanda de amparo de garantías constitucionales, que la orden de hacer contenida en la Nota No. CSER-117, de 23 de noviembre de 1999, viola las siguientes normas constitucionales:

Artículo 32 de la Constitución Nacional, "La orden impugnada viola en concepto de violación directa por omisión este precepto constitucional porque para que se cumpla con el debido proceso no basta que los individuos puedan accionar y defenderse en juicio, sino que es necesario también que el proceso se desarrolle con todas las garantías procesales".

Artículo 33 de la Constitución Nacional, "El mencionado precepto constitucional ha sido violado en concepto de violación directa por comisión, por la autoridad demandada, como consecuencia de haber infringido los derechos fundamentales del recurrente, en cuanto a que taxativamente la precitada norma constitucional señala cuales son los casos excepcionales, en los cuales, sin la existencia de un juicio previo, se pueden imponer pena, y la orden de hacer recurrida no tiene en ninguno de los casos excepcionales señalados".

Artículo 17 de la Constitución Nacional, "El mencionado precepto constitucional ha sido violado en concepto de violación directa por comisión, por la autoridad demanda (sic) como consecuencia de haber infringido los derechos fundamentales del recurrente en lo que atañe a la seguridad jurídica que constituye una condición esencial en el desenvolvimiento de las persona en una sociedad y que representa la garantía de la aplicación ...".

Artículo 18 de la Constitución Nacional, "El mencionado precepto constitucional ha sido violado en concepto de violación directa por comisión, toda vez que la autoridad demandada con la emisión de la orden de hacer violó las garantías constitucionales del recurrente en cuanto a tener un juicio previo, de poder ser oído, de presentar sus pruebas y de ejercer los recursos ordinarios correspondientes.

Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 15 de 1967, "El mencionado precepto constitucional ha sido violado en concepto de violación directa por comisión, en virtud de que todas las garantías que se describen en el precepto constitucional transcrito han sido totalmente violadas, y no reconocidas por la autoridad demandada."

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

con fecha 16 de diciembre de 1999, el Director Presidente a.i. del Ente Regulador de los Servicios Públicos, RAFAEL A. MOSCOTE, remitió el informe solicitado, en el que se manifiesta en su parte medular lo siguiente:

> "La denuncia presentada por la empresa Cable & Wireless Panamá, S. A. se fundamenta en que la empresa WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC. esta enrutando tráfico internacional desde Panamá hasta el exterior, a través de rutas alternas a la Central Internacional de Cable & Wireless Panamá, S. A.
>
> La empresa Cable & Wirelees Panamá, S. A. goza hasta el primero de enero del año 2003 de un régimen de exclusividad temporal para la prestación de servicios de larga distancia internacional, larga distancia nacional, telefonía básica, circuitos dedicados de voz y

terminales públicos semi-públicos.

De conformidad con las investigaciones realizadas a la fecha y resumidas en el Pliego de Cargos que exige el Artículo 59 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, mismo que esta contenido en el expediente que le remitimos en la presente ocasión, la empresa WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC. ha cometido infracción en materia de telecomunicaciones al prestar un servicio de telecomunicaciones básica internacional sin la correspondiente concesión y por la terminación de tráfico internacional como ruta alterna a la Central Internacional de Cable & Wireless Panamá, S. A.

El Pliego de cargos en referencia en el momento en que hemos recibido la comunicación correspondiente al Amparo de Garantías que ha sido interpuesto, precisamente se encontraba en trámite de notificación dentro del procedimiento administrativo que se le sigue a la empresa WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC. en virtud de la denuncia presentada

Cabe destacar que las infracciones cometidas están debidamente tipificadas en los Numerales 1 y 9 del Artículo 56 de la Ley No. 31 de 1996 en referencia y que las mismas han sido comprobadas a través de diligencia notarial contenida en el expediente a foja 116 y vuelta del mismo, que demuestra que la empresa WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC. estaba realizando actividades fuera de la Ley. (fs. 22 a 23).

Por otro lado, consta de fojas 25 a 28 del expediente principal, las comunicaciones respectivas por parte del Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Públicos a la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., en la que se le solicita la Suspensión de los efectos de la orden impugnada, de conformidad con lo que dispone el articulo 2612 del Código Judicial y en cumplimiento de lo ordenado por esta Corporación mediante Resolución de 14 de diciembre de 1999.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al entrar a considerar la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, en representación de WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA), INC., el Pleno pasa a verificar los argumentos del demandante frente a los valores, principios y normas que constituyen la naturaleza de esta institución de garantía constitucional.

Para una mejor comprensión del asunto es necesario hacer un análisis breve y sustancial de lo acontecido. En primer lugar, vemos que mediante Nota No. NS/INCG-99-194, de 24 de noviembre de 1999, el Presidente Ejecutivo y Gerente General de la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. señala al Ente Regulador de los Servicios Públicos que se ha detectado que líneas telefónicas registradas a nombre de WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC., ubicada en Calle 50, Edificio Plaza Panamá, oficina No. 1706, piso 17, a través de la línea E- 210-4600, ha estado utilizando números de líneas telefónicas de servicio local ubicadas en la República de Panamá, a través de las cuales se permite a terceros que, por este medio, pueden realizar llamadas internacionales de Panamá hacia el exterior, sin utilizar la red de telecomunicaciones internacionales de CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

En virtud de lo anterior, el Ente Regulador de los Servicios Públicos procedió a adelantar las diligencias de investigación, tal como lo dispone la Ley No. 31, de 8 de febrero de 1996 y el Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997.

Veamos lo que señala el Artículo 59 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996:

"Artículo 59. El Ente Regulador de los Servicios Públicos impondrá las sanciones previstas en el numeral 1 del artículo 57, previo cumplimiento del procedimiento que se indica a continuación:

1. El procedimiento administrativo se impulsará de oficio, ajustándose a los principios de economía procesal, celeridad, eficacia, simplificación de trámties, ausencia de formalismo, publicidad e imparcialidad, todo ello con pleno respeto al derecho de iniciativa y de defensa del acusado;

2. Recibida la denuncia correspondiente, o de oficio, por conocimiento de una acción u omisión que pudiese constituir una infracción de la presente Ley o una contravención administrativa, el Ente Regulador designará un comisionado sustanciador, que adelantará las diligencias de investigación y ordenará cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de las responsabilidades correspondientes. El sustanciador puede delegar estas facultades en un funcionario subalterno.

Para la investigación se señala al sustanciador un término improrrogables de hasta treinta (30) días.
...".

De acuerdo con los antecedentes, el Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Públicos, llevó a cabo una Diligencia Notarial el 22 de noviembre de 1999, que fue practicada por el Notario Duodécimo de Panamá, en la cual se realizaron llamadas telefónicas accesando la Red Pública Conmutada Internacional de Cable & Wireless, tal como consta a fojas 116 y vta. del expediente principal. Por otro lado, ese mismo día, se realizó también la Diligencia de Allanamiento y Registro en las oficinas de la sociedad WORLDQUEST NETWORKS PANAMA, ubicadas en el Edificio Plaza Panamá, Credicorp Bank. Calle 50, Oficina No. 1706, con la finalidad de ubicar equipos de telecomunicaciones que permitieran comprobar los hechos en que se fundamentó la solicitud de investigación presentada (fs. 120-121).

Lo anterior dio origen a que el día 23 de noviembre de 1999, el Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Público, mediante Nota No. CSER-117, le solicitara al Gerente General de CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. "la desconexión de los números telefónicos que se indican a continuación: El DID correspondiente a los números que van del 210-4200 hasta el 210-4299, El DID correspondiente a los números que van del 210-4600 hasta el 210-4699".

Ahora bien, el citado artículo 59, de la Ley 31 de 8 de febrero de 1999, en su numeral 9 señala:

"9. El Ente Regulador podrá, en caso de urgencia o daño irreparable, y hasta tanto se agote la vía gubernativa, ordenar provisionalmente la suspensión del acto que motive el procedimiento sancionador.

No obstante lo anterior, el Ente Regulador podrá, a solicitud de parte afectada, suspender los efectos de la orden emitida con base en el presente numeral, siempre y cuando el afectado consigne la caución que, a juicio del Ente Regulador, sea necesaria para responder por los daños que pueda causar el acto objeto del procedimiento sancionador, mientras se agote la vía gubernativa.

Para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el Ente Regulador, basado en este artículo, el interesado deberá acompañar, si fuere el caso prueba de haber cumplido con la suspensión prevista en el numeral 9, anterior".

Aunado a lo anterior, el Artículo 57 de la citada Ley 31 de 8 de febrero

de 1996, dispone:

> "Artículo 57. Existen dos tipos de sanciones administrativas para las infracciones señaladas en el artículo anterior, sin perjuicio de la resolución administrativa del contrato de concesión, en los casos en que esto último proceda:
>
> 1. Multa de mil balboas (B/.1,000.00) hasta un millón de balboas (B/.1,000.000.00), dependiendo de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño correspondiente, o
>
> 2. Para los casos que requiera una acción inmediata, multa de cien balboas (B/.100.00) a diez mil balboas (B/.10,000.00) por día, dependiendo de la gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño correspondiente. Estas multas serán reiteradas, esto es, se causarán por día hasta que se dé cumplimiento a la orden impartida por el Ente Regulador. Este tipo de sanción conllevará una orden de hacer o no hacer, para subsanar el incumplimiento de las normas vigentes en materia de telecomunicaciones, o una orden de suspender el acto prohibido

Esgrime la amparista que la orden atacada a través de la presente acción constitucional viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, porque para que se cumpla con el debido proceso no basta que los individuos puedan accionar y defenderse en juicio, sino que es necesario también que el proceso se desarrolle con todas las garantías procesales. Sobre el particular, el Pleno debe señalarle a la amparista que el Ente regulador de los Servicios Públicos tiene la facultad de ordenar sanciones en los casos en que se requiera una acción inmediata, es decir, en caso de urgencia o daño irreparable, y hasta tanto se agote la vía gubernativa; no obstante, y tal como lo señala el artículo transcrito, la parte afectada podrá consignar la caución, que a juicio tenga el Ente Regulador, para suspender los efectos de la orden emitida. Por lo tanto, la orden atacada a través de esta acción de amparo no es violatoria del Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

En relación al artículo 33, el cual dispone quiénes y en qué casos se puede sancionar sin juicio previo, el amparista señala que se infringió los derechos fundamentales del recurente, en cuanto a que taxativamente la norma precitada señala cuales son los casos excepcionales en que se puede imponer pena sin un juicio previo. Sin embargo, ya hemos señalado que la Ley faculta al Ente Regulador para imponer sanciones en los casos en que se requiera una acción inmediata hasta tanto se agote la vía gubernativa, ordenar provisionalmente la suspensión del acto que motive el procedimiento sancionador.

En lo concerniente a los artículos 17 y 18 de la Constitución, los cuales contemplan la misión de las autoridades y la responsabilidad de los particulares y las autoridades, los mismos son normas declarativas o programáticas que no contienen derecho alguno, por lo que no son susceptibles de ser violadas, a menos que su violación se alegue junto con otras disposiciones. Como quiera que, el Pleno ha concluido que no se ha dado violación a garantías constitucionales alguna, mal pueden haberse violado estas normas de carácter programáticas.

Tal como consta en el antecedente, y con vista en las diligencias practicadas por el Ente Regulador, se formuló un Pliego de Cargos, en el que se exponen los hechos imputados, encontrándose actualmente pendiente de notificación personal al Representante Legal y/o Apoderado Especial de la sociedad WORKDQUEST NETWORKS (PANAMA), S. A., tal como lo señala el procedimiento administrativo contemplado en el Artículo 59 de la Ley 31, de 8 de febrero de 1996. En ese mismo acto de notificación, se le corre traslado del mismo y se el concede un término de quince (15) días calendario para que lo conteste y que en el mismo escrito de contestación, propongan las pruebas y demás cargos que estimen convenientes. Por lo tanto, en caso de que los resultados sean adversos al amparista, éste podrá en su momento interponer los medios de defensa que la ley estipula.

Finalmente, es preciso señalar que la violación del debido proceso se da cuando se omiten los trámites esenciales del procedimiento establecido en la Ley, tendiente a garantizar una efectiva y amplia defensa de los derechos subjetivos de quienes acuden a los tribunales de justicia. No obstante, en el presente caso se observa que no se han omitido trámites esenciales en el proceso ni que la orden impugnada infrinja garantías procesales de la accionante del amparo, por lo que al Pleno no le corresponde otra decisión que no sea la de denegar el amparo impetrado.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovido por la firma forense INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, en representación de WORLDQUEST NETWORKS (PANAMA) INC. contra el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, y ORDENA LEVANTAR la suspensión decretada por esta Corporación de Justicia, mediante resolución de 14 de diciembre de 1999.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA RAMOS CHUE & ASOCIADOS, EN REPRESENTACION DE GERERARDO RODRIGUEZ STERLING, CONTRA LA RESOLCUION DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 DICTAFA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUDTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Ramos Chue & Asociados, actuando en nombre y representación de GERARDO RODRIGUEZ STERLING, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución de 30 de septiembre de 1998 y la resolución de 17 de diciembre de 1998, ambos dictados por el Segundo Tribunal Superior.

En dicha demanda se formula una pretensión consistente en que la Corte Suprema revoque la orden expedida por el Segundo Tribunal Superior, contenida en la resolución de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual revoca la sentencia N.SA-14 de 28 de abril de 1998, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá y en su lugar declara penalmente responsable a los señores Miguel Antonio Dean y a la señora Graciela Hernández Córdoba, a la pena de 12 años de prisión y al señor Gerardo Rodríguez Sterling, a la pena de 5 años de prisión. De igual forma, el amparista solicita que la Corte deje sin efectos la resolución de 30 de septiembre de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior y que aclara la resolución anterior en el sentido de condenar a Gerardo Rodríguez Sterling a ocho (8) años de prisión, de los cuales se le hizo un descuento de tres años producto de la colaboración que proporcionó dentro de las sumarias, por lo que deberá cumplir la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período, como el autor del delito de posesión agravada de drogas.

La actora alega que la resolución por ella impugnada ha violado los artículos 22 y 32 de la Constitución Nacional, ambos en concepto de violación directa por comisión.

En cuanto a la indicación de la orden impugnada, se observa que se detallan dos resoluciones contentivas de dos supuestas órdenes de hacer, que lesionan derechos y garantías fundamentales del amparista. Cabe señalar que esta Corporación de Justicia ha manifestado en distintos fallos que la acción de amparo de garantías constitucionales procede, primeramente contra un acto que revista la forma de un mandato que imponga una norma de conducta a una persona, lesiva de sus derechos y garantías fundamentales. Por lo tanto, no procede contra varias órdenes impugnadas en una misma acción de amparo, que es lo que acontece en este caso.

Por otra parte, de la lectura del libelo se observa que el amparista señala que las dos resoluciones impugnadas no toman en consideración la certificación expedida por el Instituto de Medicina Legal, "en el sentido de que GERARDO RODRIGUEZ STERLING se enmarca en el Artículo 25 del código Penal, es decir, con imputabilidad disminuída".

Por lo tanto, lo planteado en el amparo no tiene rango constitucional para ser considerado mediante la presente acción, ya que el amparista se refiere a la valoración probatoria efectuada en el proceso y el desconocimiento de normas de rango legal. En este sentido, la Corte ha sostenido en innumerables fallos, que los posibles errores de juicio cometidos por el juez en la interpretación de las disposiciones legales aplicables, no son susceptibles de reparos por medio de una demanda de amparos, puesto que ello convertiría al tribunal que conoce de este tipo de demanda en una instancia más del proceso, lo que resultaría incompatible con la finalidad del amparo, cuyo propósito es el de obtener la invalidación de un acto que afecta al impugnante por ser violatorio de una garantía constitucional.

Por las razones expuestas, la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma Ramos Chue & Asociados, en nombre y representación de GERARDO RODRIGUEZ STERLING.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JACINTO RODRÍGUEZ LEDEZMA CONTRA EL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ha ingresado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales propuesta por el licenciado Didacio Ibarra Sánchez, en representación de Jacinto Rodríguez Ledezma, contra el Auto N°. 268 de 10 de febrero de 1999, proferido por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí.

La alzada se dirige contra la Sentencia Civil del 12 de octubre de 1999, mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resuelve no conceder la acción de amparo.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 13 de octubre de 1997, el activador procesal presentó incidente de nulidad con la finalidad de que se declarara la nulidad de todo lo actuado, a partir de la foja 71 del expediente contentivo del proceso ejecutivo seguido a su poderdante por Inocencio Isaac Rivera.

Como fundamento de su pretensión, el recurrente argumentó que el Juzgado Quinto de Circuito, al embargar sus derechos posesorios sobre el inmueble ejecutado, omitió el fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1676 y 1677 del Código Judicial, lo que, a su criterio, resta validez al avalúo efectuado el 4 de agosto de 1992 (fs. 1-4, cuaderno de incidente de nulidad).

El a-quo rechazó por improcedente el incidente propuesto, mediante auto N°. 268 de 10 de febrero de 1999, el cual fue apelado en término por el recurrente (fs. 27-28, cuaderno de incidente de nulidad).

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resolvió la apelación mediante auto civil de 23 de agosto de 1999 y confirmó la decisión de primera instancia, enfatizando que:

> "... cuando se practicó el secuestro sobre los derechos posesorios del demandado se llevó a cabo la diligencia de avalúo y depósito; diligencia esta que pudo ser objeto de acciones por parte del demandado si no estaba de acuerdo, o si consideraba que dicha diligencia no se había efectuado cumpliendo con los requerimientos de ley, o no estaba de acuerdo con el avalúo o el depósito (numeral 8 del artículo 521 y concordantes del C. J.) ..." (cuaderno de amparo, f. 58).

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial conoció en primera instancia de esta causa constitucional subjetiva, declarando sustracción de materia (cuaderno de amparo, fs. 99-102). Esta decisión se fundamentó en que, al solicitar el informe de rigor, el Juez de la causa le comunicó sobre la existencia del auto N°. 2281 del 8 de octubre de 1999, resolución esta que desaprueba el remate efectuado el 30 de julio de 1997, debido a que ese día se presentó una tercería excluyente, lo que impide proceder al remate en virtud del artículo 1790 del Código Civil (fs. 95-97).

DECISION DE LA CORTE

Como quiera que el recurso de apelación se interpuso en tiempo oportuno, procede la Corte a decidir lo que en derecho corresponde.

Considera el Pleno que no asiste la razón al a-quo cuando declara que se ha producido sustracción de materia en esta causa constitucional.

Sobre el particular la jurisprudencia de esta Corte ha dejado sentado que la sustracción de materia se produce con la desaparición del objeto litigioso.

Mediante sentencia de 30 de mayo de 1995, está Corporación expresó:

> "El fenómeno de la sustracción de materia, conocido también como "obsolescencia procesal", se produce con la extinción del objeto litigioso. En materia de amparo, la pérdida del objeto de la acción tiene lugar cuando la autoridad acusada revoca la orden violatoria de derechos fundamentales, por lo que el amparo deviene sin objeto,

operando así la sustracción de materia" (Sentencia de 30 de mayo de 1995).

Estima la Corte que el auto atacado por esta vía constitucional subjetiva, al no aprobar el remate efectuado no acarrea la pérdida del objeto procesal. Ello es así debido a que la pretensión del recurrente se dirige contra un auto que rechaza un incidente de nulidad que pretende dejar sin efecto todo lo actuado, a partir del avalúo del bien embargado efectuado en 1992 (fs. 51 y 61, antecedentes de proceso ejecutivo). No obstante, los efectos del auto que resuelve no aprobar el remate, se limitan a impedir que se efectúe la adjudicación definitiva del bien embargado hasta que se resuelva la tercería excluyente (art. 1788 y 1790 C. J.), por lo que hasta ese momento procesal se mantiene la validez de todo lo actuado por el Juzgado Quinto de Circuito de Chiriquí dentro del proceso ejecutivo planteado.

Por estas razones queda claro que bajo ninguna circunstancia ha existido la sustracción de materia a que hace alusión el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Por otro lado, el recurrente anuncia una pretensión completamente extraña a este instituto de garantías constitucionales. En efecto, solicita que se revoque la pieza venida en apelación y se declare nulo lo actuado por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí (f. 109).

Esta Superioridad en numerosas ocasiones ha manifestado que el auto que niega un incidente no contiene intrínsecamente una orden de hacer o de no hacer, ya que se limita a resolver una cuestión incidental del proceso sin ordenar al recurrente una conducta capaz de lesionar un derecho subjetivo tutelado constitucionalmente, por lo que no es susceptible de ser examinado por esta vía constitucional subjetiva (Cfr. Sentencia del Pleno del 7 de octubre de 1996).

De otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no es una instancia procesal adicional, por lo que no pueden las partes pretender que se convierta en un tribunal de apelaciones de la jurisdicción ordinaria, que realice la revisión integral de la actuación del juez de la causa (Cfr. sentencia del Pleno del 25 de noviembre de 1996).

Por último, observa la Corte que el acto atacado ha sido objeto de diferentes recursos legales dirigidos a lograr la declaratoria de nulidad de un avalúo que, como se menciona en líneas anteriores, fue realizado en agosto de 1992, por lo que resulta evidente que el activador dejó transcurrir demasiado tiempo para ejercer las facultades o remedios permitidos por la ley. No debe perderse de vista que el amparo de derechos fundamentales contiene los conceptos de oportunidad y utilidad de la acción, aparejados a la eficacia de la tutela jurídica, todo lo cual condiciona su admisibilidad o procedencia (Cfr. Sentencia del Pleno del 7 de mayo de 1996).

Por lo antes expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la Sentencia Civil del 12 de octubre de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y en su lugar DECLARA NO VIABLE, la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por el licenciado Didacio Ibarra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ÁLVARO CABAL DUCASA EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO JOSÉ CABAL MIRANDA, CONTRA LA ORDEN CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, PROFERIDA POR LA JUEZ SEXTA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VIENTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó, en grado de apelación, a la Corte Suprema de Justicia, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado Álvaro Cabal Ducasa, en nombre y representación del ING. ÁLVARO JOSÉ CABAL MIRANDA, ante el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, contra la orden de hacer contenida en la resolución de 30 de septiembre de 1999, proferida por la Juez Sexta de Ciruito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La orden que se ataca por medio de este amparo, lo constituye la resolución de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual la Juez Sexta de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, Licenciada Ana Luisa Vásquez, al resolver manifestación de impedimento solicitado por el Licenciado Enrique Paniza para que se le declarara impedido dentro del recurso de hecho, interpuesto por el Licenciado Carlos Eugenio Carrillo G., decidió no admitir dicha solicitud.

El Tribunal Superior, al conocer del amparo propuesto, en resolución de fecha 20 de octubre de 1999, inadmitió la acción impetrada por considerar "que la resolución atacada no contiene una orden de hacer o no hacer que son los actos contra los cuales procede la acción de amparo a que alude el artículo 50 de la Constitución Nacional ...". (fs. 22-25).

El amparista, al sustentar el recurso anunciado, señaló que "lamentablemente el Primer Tribunal Superior de Justicia no se pronunció sobre la flagrante violación del debido proceso cometido por la Juez Sexta de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá". (fs. 27-31).

El Pleno estima que le asiste razón al Primer Tribunal, en el sentido de que el acto impugnado no es una orden de hacer propiamente tal, por cuanto no constituye un mandato emanado de la autoridad, dirigido a imponer la ejecución de un acto que lesione el goce de algun derecho reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. Tal como señaló el Tribunal A-Quo, la resolución atacada constituye más bien una decisión jurisdiccional, que no contiene una orden de hacer o no hacer y que, por ende, no es susceptible de ser impugnada por la vía del amparo, puesto que tal como lo preceptúa el artículo 2606 del Código Judicial, esta acción "puede ejercerse contra toda clase de acto ... que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer ...".

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, esta Superioridad debe confirmar la decisión del Tribunal Superior, por ajustarse a derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo de 20 de octubre de 1999, proferido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que NO ADMITIÓ el amparo propuesto por el Licenciado Álvaro Cabal Ducasa, en nombre y representación del ING. ÁLVARO JOSÉ CABAL MIRANDA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA **(fdo.) ARTURO HOYOS**
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS **(fdo.) ELIGIO A. SALAS**
(fdo.) JOSE A. TROYANO **(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA**

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS JOVANE, BIEBERACH Y VALDES ROCA CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN COCLE Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense JOVANÉ, BIEBERACH & VALDÉS ROCA presentó en la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, en nombre y representación de MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR y JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, acción de amparo de garantías constitucionales a fin de que sea revocada y se deje sin efecto legal la orden de no hacer contenida en la Resolución de 27 de agosto de 1999 emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En dicha Resolución, se inhibió de pronunciarse el Tribunal sobre el fondo del auto N° 155 de 7 de mayo de 1998, dictado por el Juez Primero del Circuito de lo Penal de la Provincia de Coclé, que reemplazó la pena de prisión de 36 meses que le había impuesto a ARSENIO ROSALES CENTENO mediante sentencia de 13 de noviembre de 1996, al encontrarlo responsable de la comisión del delito de homicidio culposo, en perjuicio de los esposos DOMICIANO DEL CARMEN JAÉN SOLÍS (Q. E. P. D.) y MARÍA DE LA CRUZ AGUILAR DE JAÉN (Q. E. P. D.), quienes eran los padres de las amparistas.

Los antecedentes del caso revelan que los esposos JAÉN AGUILAR fallecieron el 5 de mayo de 1994, víctimas de una colisión del automóvil en que se encontraban con el autobús de la ruta Santiago-Panamá que iba conducido por ARSENIO ROSALES CENTENO, cuyo manejo desordenado, negligente y su velocidad desmedida -según las actoras- provocaron los decesos.

La mencionada sentencia de primer grado fue apelada por el inculpado, siendo confirmada la decisión primaria por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante fallo de 10 de abril de 1997; esta decisión fue recurrida en casación, confirmando la decisión la Sala de lo Penal de esta Corporación de Justicia, al no casar esta sentencia, mediante fallo de 3 de febrero de 1998.

Al regresar el expediente al Juzgado de origen, para ejecutar la decisión y, pese a constituirse cosa juzgada, y en lugar de cumplir la norma anterior, el Juez Primero del Circuito de lo Penal de Coclé "de modo inexplicable", el 1° de junio de 1998 dictó una resolución suspendiendo la ejecución de la sentencia por él impuesta hacía más de dos (2) años, y tres (3) meses después de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictaminó no casar la sentencia del ad-quem, que confirmaba la del a-quo.

Esta sentencia de suspensión condicional de la pena fue anulada en apelación por el Tribunal de segundo grado mediante fallo de 19 de octubre de 1998, porque no se le había corrido traslado de la solicitud de suspensión a la acusación particular.

Entonces el Juez Primero del Circuito Penal de Coclé dictó el auto N° 155 de 7 de mayo de 1999, mediante el cual reemplazó la pena de tres (3) años de prisión que le había impuesto a ARSENIO ROSALES CENTENO, por la de 225 días-multa; ésta última decisión fue apelada ante el ad-quem, quien se inhibió mediante el fallo impugnado mediante este proceso constitucional de amparo.

Además, las amparistas presentan varios hechos colaterales a los del procedimiento, que consisten en lo siguiente:

Que el justiciado ROSALES CENTENO nunca fue detenido porque nunca ha dejado de gozar del beneficio de una fianza de excarcelación establecida por el a-quo, en la suma de B/.1,500.00 -pese a ocasionar dos muertes-, sin perjuicio de que continúa ejerciendo su ocupación de conductor de bus.

Que, pese a que el artículo 2398 del Código Judicial establece que es al momento de dictar sentencia definitiva, cuando el Juzgador puede suspender condicionalmente la ejecución de la pena, o reemplazar la pena de prisión no mayor de tres (3) años sino es posible la suspensión de la ejecución de la pena, el Juez Primero del Circuito Penal de Coclé dictó el 1° de junio de 1998 la resolución objeto de este amparo, que ordenó la suspensión de la ejecución de la pena de tres (3) años de prisión impuesta a ARCENIO ROSALES CENTENO.

Añade el letrado que el mismo día que el Licdo. Tomás Tristán Barrios recibió el poder en sustitución del Licdo. Raúl A. Núñez Cárdenas -28 de mayo de 1998-, presentó la solicitud de reemplazo de la pena de prisión por la de días-multa, en concordancia con los artículos 2382 del Código Judicial y 82 del Código Penal, siendo que habían transcurrido más de dos meses desde que terminó el proceso, luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema decidió no casar la sentencia del ad-quem, por lo que esta última sentencia había hecho tránsito a cosa juzgada.

Que por ende, el Licdo. Núñez Cárdenas no tenía ya poder que sustituir, siendo nulas ambas actuaciones sustitución de poder y solicitud de reemplazo de la pena.

Que por ser tramitada la solicitud de reemplazo de la pena como un incidente, el mismo era susceptible de recurso de apelación.

Considera los representantes de las actoras que de ser factible, el reemplazo de la pena debió aplicarse al dictarse la sentencia de primer grado, o durante su ejecutoria -según lo dispone el artículo 2398 del Código Judicial-, y no como se hizo.

Que el artículo 82 del Código Penal -que fundó el fallo recurrido en amparo- establece la posibilidad de reemplazo de penas de prisión no superiores a un (1) año, y la pena aquí impuesta fue de tres (3) años, por lo que la norma no es aplicable.

Que el artículo 2398 del Código Judicial, como norma de derecho adjetivo, no puede ser aplicada por encima del artículo 82 del Código Penal, que es de derecho sustantivo.

Contra la resolución de 7 de mayo de 1999 se interpuso y sustentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, inhibiéndose éste mediante resolución de 27 de agosto de 1999, refutada en amparo, infringiendo -a juicio del actor- el principio del debido proceso, toda vez que "prohíja una resolución dictada en contra de lo dispuesto por claras disposiciones legales."

En cuanto a las razones de derecho, aduce el actor que el ad-quem ya conocía el fondo del asunto, y que por ello, debió conocer este recurso de apelación contra la resolución que reemplazó la pena privativa de libertad.

Finalmente afirma el letrado que la resolución de 27 de agosto de 1999 del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que se inhibió de resolver el reemplazo de la pena por parte del Juez Primero del Circuito de lo Penal de Coclé, infringe los artículos 18 y 32 de la Constitución Nacional.

El segundo -artículo 32- fue infringido porque el ad-quem no se ajustó a

los trámites legales, y al inhibirse de conocer el recurso de apelación precitado, pretextando la inapelabilidad del mismo, incumplió los deberes que establecen los numerales 1, 7, 8, 9, 10 y 11 del Código de Procedimiento, y violado el principio del resarcimiento de los daños materiales y morales ocasionados, en transgresión a una nulidad declarada por el mismo Tribunal acusado.

Y el artículo 18 de la Carta Magna fue infringido según el amparista, porque el ad-quem incumplió el ordinal 9° del artículo 199 del Código Judicial que determina como deber, responsabilidad y facultad de los Magistrados y Jueces, prevenir, remediar y sancionar todo acto en contra de la justicia, así como todo acto que pretenda burlar el proceso, obtener fines prohibidos legalmente.

Recibida la acción, la Magistrada Sustanciadora de la Sala Quinta, Mariblanca Staff Wilson, ordenó por Secretaría requerir del funcionario demandado el envío del Informe acerca de los hechos materia de la demanda, así como la copia de la actuación.

Dicha orden fue cumplida por la Magistrada Delia de Martínez, mediante el Oficio N° 1092 de 22 de octubre del año que decurre.

En él, admitió haber emitido la resolución de 27 de agosto de 1999; señaló que el amparo invocó hechos realizados por el a-quo, no por esa Colegiatura.

Que el expediente arribó en alzada, mediante la apelación de la sentencia de primer grado; luego, mediante apelación de la resolución de 1° de junio de 1998 -que suspendió provisionalmente la ejecución de la pena-, y en cuanto al auto N° 155 de 7 de mayo de 1999, que provocó la apelación que produjo la inhibición del Tribunal, atacada en amparo.

Enfatizó el Informe, que el auto de 27 de agosto de 1999 -inhibitorio- señaló su imposibilidad de conocer el recurso de apelación, porque la resolución impugnada no estaba comprendida entre las resoluciones apelables del artículo 2429 del Código Judicial, considerando también que la presente acción debió enfocarse contra el auto N° 155 de 7 de mayo de 1999.

Encontrándose el caso en etapa de resolver, la Asamblea Legislativa emitió la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999, por la cual se derogó la Ley N° 32 de 1999, que había creado la Sala Quinta de Instituciones de Garantía; los artículos 29 y 30 (transitorios) de la Ley N° 49, este negocio fue recibido por la Secretaría General de esta Corporación de Justicia, y repartido al Magistrado Ponente.

Entrando al fondo del negocio, el Pleno, en primer lugar, debe señalar que la abundante jurisprudencia producida por esta Colegiatura ha establecido y mantenido que este artículo -18- de la Carta Fundamental es de naturaleza programática, por cuanto no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser violados; sólo cuando la violación atribuida contra esta norma es relacionada expresamente con la transgresión de otra norma del mismo rango, que sí contiene algún derecho susceptible de ser violentado, entonces puede considerarse la posible infracción de esta norma -artículo 18-, ya que la contravención de la norma contentiva del derecho subjetivo violable puede producir de manera indirecta la violación objetiva de este artículo.

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 32 Constitucional por parte de la resolución discutida, que se inhibió de conocer el recurso de apelación contra la resolución que reemplazó la pena privativa de libertad por la pecuniaria, al considerar que no era apelable, es ostensible que de los tres aspectos que conforman constitucionalmente el principio del debido proceso -el ser juzgado por autoridad competente, conforme los procedimientos legales, y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria-, es la segunda, el juzgamiento mediante el cumplimiento de los trámites legales, la destinataria del esfuerzo impugnativo del actor.

En este sentido, al inhibirse el Tribunal de conocer el recurso de apelación impetrado, se rehusó -según el amparista- a cumplir con sus deberes y responsabilidades, así como ejercer las facultades que como Magistrados, le confiere el artículo 199 del Código Judicial, a través de sus numerales 1, 7, 8, 9, 10 y 11; veamos si se ha infringido el principio del debido proceso.

El numeral 1° es del siguiente tenor:

"ARTICULO 199. Son deberes en general de los Magistrados y Jueces:

1. Dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las medidas para impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por lo cual será responsable de cualquier demora que en él ocurra;"

Este numeral no es aplicable al caso que nos ocupa, porque la resolución atacada en amparo, no ha impedido la dirección e impulso del proceso, independientemente de que la decisión sea o no, correcta.

Tampoco se observa que la resolución de 27 de agosto de 1999 haya impedido o estorbado la rápida solución del problema -enfatizando que es sin perjuicio de que la decisión sea errónea- ni lo ha paralizado; es decir, no ha tenido incidencia en la celeridad del proceso.

El numeral 7° dice así:

"ARTICULO 199. ...
1. ...
7. Resolver expresamente las cuestiones planteadas por las partes y decidir la litis dentro de los límites en que fue propuesta por éstas cuando la Ley exige su iniciativa; o fuera de estos límites, cuando la Ley así lo faculte;"

Definitivamente, el incumplimiento de este numeral constituiría -de probarse- una falta directa al principio constitucional que se pretende defender. Según dicen las amparistas, el Tribunal debió "resolver expresamente" su recurso de apelación en vez de inhibirse.

En el fallo impugnado, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial adujo que "... el auto emitido por el A-quo no es susceptible del recurso de apelación, ya que no se encuentra contemplado dentro de las resoluciones judiciales que permite tal recurso, consagradas en el artículo 2429 del Código Judicial. Al respecto sobre los subrogados penales solamente es apelable el auto que 'decide o concede la suspensión de la ejecución de la pena', más no el que reemplaza la pena como la dictada en este proceso en el auto No. 155 de 7 de mayo de 1999."

Para resolver la controversia, el Pleno trae a colación dos fallos:

El primero, de 16 de julio de 1999, emitido por este Pleno, que resolvió la acción de habeas corpus presentada a favor de Zoraida Morris Sosa contra la Dirección General del Sistema Penitenciario; dicha sentencia se ocupa de aclarar la competencia para decidir medidas modificativas de la aplicación de las penas; una porción del fallo sostuvo lo siguiente:

"En ese orden de ideas, se estima que, estando los tribunales facultados para suspender condicionalmente la ejecución de las penas (art. 77), reemplazar las penas cortas de privación de libertad (art. 82) e incluso suspender el cumplimiento de la pena cuando el condenado padezca enfermedad mental (art. 76) también están facultados para conocer del aplazamiento de la ejecución de la pena por razón de enfermedad grave o gestación de quien deba cumplirla." (Negrilla de la Corte)

Es decir, corresponde a los tribunales judiciales que conocieron el caso, decidir las solicitudes de reemplazo de la pena.

Por otro lado, citamos también la resolución de 26 de enero de 1993, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que resolvió la apelación de la sentencia condenatoria dentro del sumario seguido a Aminta María Núñez de Vega, por el delito de peculado en perjuicio del Instituto Nacional de Cultura.

En dicho fallo, el Tribunal estudiaba la viabilidad de conceder la suspensión condicional de la pena de la justiciada, que fue la petición que fundó dicho recurso; empero, al resolver dicho recurso de apelación, el Tribunal decidió reemplazar la pena impuesta a la Sra. Núñez de Vega, lo cual se evidencia en el párrafo que a continuación se transcribe:

> "No obstante, los tribunales están facultados para reemplazar la pena privativa de libertad ambulatoria por otros sustitutos, tales como la conversión a días multa y en esta ocasión nos parece justo favorecer a la procesada con el reemplazo de la pena privativa de libertad ambulatoria a días multa, porque no hay ninguna condición especial sobre la personalidad de la imputada que lo impida y por tales motivos aplicamos las reglas del artículo 84 del Código Penal dejando una pena de días multa en setenta y cinco días multa, los cuales computados a razón de B/.26.07, arrojan una pena líquida de B/.1,955.25 en concepto de días multa, según lo estipulado por el artículo 48 del Código Penal."

Es decir, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia consideró que era dable aplicar la medida de "desprisionalización" de reemplazo de la pena privativa de prisión, ya que la justiciada reunía las condiciones para aplicarla, pese a que el recurso de apelación no pedía el reemplazo, sino la suspensión provisional de la pena.

Ambas medidas -suspensión provisional de la pena y reemplazo de la misma- constituyen parte del instituto penal lo que, según señala el fallo invocado, la doctrina ha denominado "desprisionalización, cuya finalidad es la de evitar los efectos negativos de la pena privativa de libertad ambulatoria menor de tres años, en cuanto a los delincuentes primarios con buena conducta anterior, cuya reflexión lo lleve al arrepentimiento del hecho punible cometido y el interés de resarcir los perjuicios ocasionados a la víctima." (f. 4 del fallo)

Por lo que se observa, el Segundo Tribunal Superior de Justicia reemplazó la pena impuesta al resolver el recurso de apelación, lo que nos induce a considerar que la medida de reemplazo de la pena sí es susceptible del recurso de apelación.

Además, la práctica ha demostrado que las solicitudes de reemplazo de la pena siempre se presentan luego de ejecutoriada la sentencia que la impone, y no en la sentencia que es lo que debería ser, según lo establece el artículo 2398 del Código Judicial; por lo tanto, considera el Pleno que el reemplazo de la pena, aún cuando esta medida se dicte mediante una resolución separada, debe considerarse como una prolongación o parte de la sentencia, porque fue allí donde debió aplicarse.

De lo antes dicho, tiene el Pleno que colegir que si la sentencia que impone una pena es apelable, también lo deber ser el auto que reemplaza dicha pena, razonamiento este que no hace más que confirmar la aplicación del principio de derecho de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

Eso demuestra que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial efectivamente, infringió el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, prosperando así, la pretensión de las amparistas.

En cuanto a la posible infracción del numeral 8° del artículo en estudio, 199 de la Excerta Adjetiva, es decir,

"ARTICULO 199. ...
...
8. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en éste con legalidad y seguridad;"

Considera la Corte que la infracción ya reconocida implica de manera directa la violación de este numeral, pues el inhibirse de resolver un asunto planteado, debiendo hacerlo, desmedra la igualdad de las partes en el proceso, ya que no reconoció la oportunidad impugnativa de los amparistas, reconocida jurisprudencialmente, vulnerando de igual manera la legalidad y seguridad del proceso.

El numeral 9° es del siguiente tenor:

"ARTICULO 199. ...
...
9. Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares;"

De igual manera, se ha infringido este numeral, que consagra la obligación del Juzgador de proteger, a priori o a posteriori, todo atentado contra la buena marcha del proceso, acaecida de manera clara en el presente negocio.

Por su parte, el numeral 10°, establece como deber del Juzgador, "Ejercer de oficio las funciones de saneamiento previstas en este Código."

La supuesta infracción de este numeral corre la misma suerte de la anterior, pues es ostensible la violación al principio del debido proceso.

Y el numeral 11° dispone como deber del Tribunal:

"ARTICULO 199. ...
...
11. Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales, a conformar adecuadamente el litis consorcio necesario y eliminar los otros motivos de sentencias inhibitorias;"

Debió el ad-quem acoger y resolver el recurso de apelación impetrado, para continuar el procedimiento correspondiente, y evitar la violación del principio constitucional infringido.

En cuanto al argumento de las actoras, de que la resolución que reemplazó la pena de prisión por la de días multa fue tramitada como incidente, el Pleno está en desacuerdo con esta postura, pues el artículo 686 del Código Adjetivo define como incidentes las cuestiones accidentales que la Ley disponga que se debatan "en el curso del proceso" y requieran decisión especial.

La resolución precitada fue emitida en virtud de una solicitud realizada después de ejecutoriada la sentencia de primer grado, por lo que el proceso ya había concluido; por tanto, no puede catalogarse la solicitud de reemplazo de la pena como incidente, y por ende, no prospera el argumento de la firma representante en juicio, de las actoras.

Por lo tanto, esta Corporación de Justicia concluye que en el presente proceso se ha violado el principio constitucional del debido proceso, y así ha de declararlo.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado por la firma forense Jované, Bieberach y Valdés en representación de MIRIAM JAÉN DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR y JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, contra la orden de no hacer contenida en la resolución de 27 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, y en consecuencia, LE ORDENA resolver el recurso de apelación presentado contra el auto N° 155 de 7 de mayo de 1999, proferido por el Juez Primero de Circuito de Coclé.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO MARTIN MOLINA R., EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JOSUE LEVY LEVY EN CONTRA DEL JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MARTIN MOLINA R., en representación del señor JOSUE LEVY LEVY ha presentado solicitud de aclaración de la resolución expedida el 26 de noviembre de 1999 por el Pleno de esta Corporación de Justicia, dentro de la acción constitucional de amparo de garantías promovida por el actor contra la sentencia de 24 de abril de 1997, proferida por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Como se indicó, la resolución respecto de la cual se solicita la aclaración, es la expedida el 26 de noviembre de 1999 por el Pleno la Corte Suprema de Justicia, cuya parte resolutiva señala "En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 14 de septiembre de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado Martín Molina R. en representación de JOSUE LEVY LEVY."

En primera instancia, conviene referirse a la resolución cuya aclaración se pide. El artículo 986 del Código Judicial dispone claramente que la aclaración procede o resulta viable sólo respecto de sentencias. La norma en cuestión es del tenor siguiente:

"Artículo 986. ...

También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo."

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 974 del Código Judicial, las sentencias son resoluciones judiciales que deciden pretensiones o excepciones en los procesos ordinarios y sumarios, es decir, las que resuelven el fondo de la controversia. En el presente caso, la resolución cuya aclaración se pide resolvió el recurso de apelación propuesto contra la resolución del Primer Tribunal

Superior de Justicia que declaró inadmisible la acción de amparo de garantías constitucionales incoada por el actor, de manera que dicha resolución decidió la admisibilidad de la acción constitucional propuesta, no así el fondo de la misma, con lo que llega esta Superioridad a la conclusión que la resolución objeto de la solicitud de aclaración no constituye sentencia y por tanto, no procede la petición formulada respecto de la misma.

En cuanto a los puntos cuya aclaración se pide, enumera el aclarante cinco (5), los cuales considera el Pleno conveniente reproducirlos:

> "1. Que la resolución del 14 de septiembre de 1999, del Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, dictaminó fallo inhibitorio en el recurso de amparo promovido por nuestro representado contra la sentencia 35 de 24 de abril de 1997, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.
>
> 2. Que la demanda fue interpuesta conforme los requisitos exigidos por la Ley 32 del 23 de julio de 1999, que estaba vigente en esa fecha.
>
> 3. Que no obstante lo anterior, la Honorable Sala consideró inaplicable las disposiciones de la Ley 32 de 23 de julio de 1999, por haber sido la misma derogada el 24 de octubre de 1999, con posterioridad a la interposición de la demanda y sentencia de primera instancia del recurso de amparo de garantías constitucionales promovido en nombre y representación de JOSUE LEVY LEVY.
>
> "Sin embargo, al derogarse la Ley 32 de 23 de julio de 1999 mediante Ley 49 de 24 de octubre de 1999, esta Superioridad debe resolver la presente acción constitucional conforme a las reglas previstas antes de la creación de la Sala Quinta."
>
> 4. Que el demandante debió entonces formalizar su demanda conforme disposiciones distintas a las que se encontraban vigentes al momento de la interposición del recurso de amparo de garantías constitucionales.
>
> 5. Que el demandante está obligado a formalizar su demanda de amparo conforme las nuevas reglas que regulan la materia de amparo de garantías constitucionales."

Advierte esta Superioridad que los aspectos de la resolución que se piden sean aclarados, hacen relación a la motivación de dicha resolución, no así a la parte resolutiva que, de conformidad con lo estipulado en los artículo 986 y 2559 del Código Judicial, es la única parte de la sentencia que puede ser objeto de aclaración. Así por demás, lo ha sostenido la Corte en distintos fallos, entre los cuales merece mención el del 22 de junio de 1992, cuya parte medular se transcribe:

> "La solicitud de aclaración de sentencia es un remedio que la ley concede a la situación jurídica que se presenta cuando una resolución judicial contiene puntos oscuros en su parte resolutiva. ... De los artículos (986 y 2559 del Código Judicial) se puede observar que la parte resolutiva de la sentencia puede ser objeto de la solicitud de aclaración, siempre y cuando lo que se pida tenga que ver con frutos, intereses, daños y perjuicios, costas, etc., de lo contrario no es procedente. La aclaración de sentencia no es otra instancia en que pueda debatirse las motivaciones de la resolución, o las razones por la cuales se negaron las pretensiones del demandante, puesto que no es ésta la naturaleza jurídica de la institución."

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ACCEDE a la aclaración de la resolución 26 de noviembre de 1999, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, formulada por el Licenciado MARTIN MOLINA R., en representación de JOSUE LEVY LEVY.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO CESPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-14 N° 50-99, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION N° 14. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado PEDRO MORENO CÉSPEDES, en su calidad de apoderado especial de la COOPERATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, R. L., ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra LA ORDEN DE HACER contenida en la sentencia de primera instancia P-J14 No. 50-99 de 6 de septiembre de 1999, proferida por LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 14.

El Pleno procede a decidir la admisibilidad de esta demanda, previas las siguientes consideraciones:

Según se puede apreciar en el libelo de demanda, el amparo está dirigido contra una resolución que en primera instancia declaró injustificado un despido y en consecuencia condenó al empleador (amparista) a pagar "B/.861.74 en concepto de indemnización y B/.1305.00 en concepto de salarios caídos". Esta resolución fue apelada y posteriormente confirmada por Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 7 de diciembre de 1999.

Alega el demandante que la orden de hacer impugnada viola el principio constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 32 de nuestra Carta Fundamental, porque, a su juicio, la carta de despido presentada por la COOPERATIVA NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, R. L. cumplió con todos los requisitos del artículo 214 del Código de Trabajo, de manera que al declararse no valida dicha carta, se le dejó en estado de indefensión. Así, concluye señalando que el trabajador incurrió en causal de despido por haber faltado tres días injustificadamente, tal como lo prevee el artículo 213, numeral 11 del Código Judicial.

Considera esta Corporación que, aún cuando la demanda esté debidamente formulada, es manifiestamente improcedente pues la violación del debido proceso acusada se basa en que el sentenciador no valoró debidamente una prueba, al estimar que no cumplía los requisitos legales pertinentes.

Resulta evidente que en este caso se busca utilizar el amparo de garantías como una tercera instancia, ya que se pretende que la Corte, como tribunal constitucional, entre a evaluar una de las pruebas aducida por una de las parte (el amparista), porque, a juicio de ésta, no fue debidamente apreciada por el

juzgador en la resolución atacada, sosteniendo que por tal motivo la decisión final le fue adversa. En reiterada jurisprudencia se ha expresado que, respecto a la violación del debido proceso legal en cuanto al derecho de presentar pruebas y contradecirlas, lo que se tutela mediante la acción de amparo es el derecho de aducirlas y practicarlas, pero la labor de darles mérito legal corresponde sólo al sentenciador dentro del proceso ordinario, ya que en el proceso extraordinario de amparo dicha evaluación es completamente extraña a su naturaleza. (Cfr. Fallos de 15 de enero de 1993 y 30 de diciembre de 1996).

El examen y el valor que a las pruebas le otorga el tribunal natural en uso de sus facultades legales, no tiene que ver con violaciones a garantías constitucionales, de allí que la acción constitucional que nos ocupa resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado PEDRO MORENO CÉSPEDES, en representación de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS contra LA ORDEN DE HACER contenida en la Sentencia PJ-14 No. 50-99, proferida por LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 14.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FONSECA, BARRIOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RUTH CELINA RODRÍGUEZ MORENO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Firma Fonseca, Barrios y Asociados, actuando en nombre y representación de RUTH CELINA RODRÍGUEZ MORENO, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 14 de diciembre de 1999, mediante la cual declaró no viable la acción de amparo de garantías constitucionales presentado contra el auto de 27 de junio de 1999, proferido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial.

La resolución de 27 de junio de 1999 confirmó el auto de 13 de mayo de 1998, dictado por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, mediante el cual negó el incidente de nulidad promovido por la amparista dentro del proceso penal incoado a ésta por supuesto delito de estafa en perjuicio de JOEL GAITÁN.

El Primer Tribunal Superior decidió declarar no viable el amparo de garantías constitucionales, porque la amparista persigue la revocatoria del auto de 27 de junio de 1999, que confirmó el auto de 13 de mayo de 1998, a pesar que el Pleno de la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que la acción de amparo debe dirigirse contra la orden originaria y no contra el acto que contiene la decisión confirmatoria. El Primer Tribunal Superior fundamentó su decisión así:

"Observa este Tribunal que la resolución judicial impugnada es confirmatoria de la resolución de 13 de mayo de 1998, proferida por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal lo que indica que la resolución originaria, es contra la cual debe dirigirse la acción ...". (fs. 20-23).

Al sustentar la alzada, el apoderado de la amparista solicita que la resolución atacada sea revocada, alegando que, a su juicio, la acción propuesta es viable, puesto que se "impugna una orden dictada por un Tribunal de Apelaciones y Consultas integrado por Jueces de Circuito". (fs. 24-25).

Advierte esta Superioridad, que la orden de no hacer impugnada consiste en una resolución expedida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial, en virtud de apelación interpuesta contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal. Es evidente, tal como lo señaló el Primer Tribunal Superior, que la orden que se impugna no constituye el acto originario, que es la que podría vulnerar los derechos fundamentales que tutela la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, sino el auto que resuelve el recurso de apelación.

En ese sentido, el Pleno reiteradamente ha señalado que la orden contra la cual debe ir enderezada la acción de amparo de garantías constitucionales, es la orden originaria y no la orden confirmatoria o decisoria del medio de impugnación utilizado por el titular del derecho fundamental supuestamente lesionado, a menos que dicha decisión de segunda instancia revoque la decisión apelada, lo que no ha sido acreditado por la amparista. Así se ha pronunciado en sentencias de 30 de septiembre de 1993, 25 de febrero de 1993 y 5 de agosto de 1994, por citar algunas.

Por las consideraciones que se dejan dicho, es necesario confirmar la resolución apelada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo de 14 de diciembre de 1999, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia que declaró NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales promovido por la firma Fonseca, Barrios y Asociados, en representación de RUTH CELINA RODRÍGUEZ MORENO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. IVAN GANTES, EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ6-44-99 DEL 8 DE JULIO DE 1999, DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 6. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Iván A. Gantes en nombre y representación de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. ha propuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Junta de Conciliación N° 6.

ARGUMENTOS DEL AMPARISTA

Considera básicamente el demandante, que dentro del proceso laboral Henry Troctch González -vs- INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 incurrió en falta al debido proceso provocando la indefensión de la empresa, cuando al intentar notificar a la apoderada judicial de dicha sociedad, tanto la fecha de audiencia, como de la Sentencia de primera instancia, no se cumplió con lo estrictamente normado en el artículo 888 del Código Laboral, el cual fue invocado por ese Tribunal para surtir el trámite de notificación.

Prosigue indicando el amparista, que la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, acogiéndose a lo estipulado en el artículo 888 del Código Laboral, optó por enviar el Oficio N° 216 de 24 de junio de 1999, y con posterioridad fijó un Edicto, dando por notificada la fecha de audiencia para el 8 de julio de 1999. Que según dicho artículo del Código de Trabajo, el edicto y el envío del correo debió ser simultáneo y tenía que agregarse al expediente el recibo de la Dirección de Correos y Telégrafos de Panamá. Que dicho recibo no se adjuntó al proceso, por lo que era imposible que la abogada de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. pudiera estar notificada o enterada de la fecha de audiencia. Que la vía procedimental utilizada para su notificación fue incorrecta.

También expresa el recurrente que la Junta de Conciliación y Decisión cometió el error de notificar la Sentencia de 8 de julio de 1999 por edicto, situación ésta irregular dado que contraviene lo dispuesto en el artículo 877 ordinal b, del Código Laboral, el cual obliga a notificar las sentencias de primera instancia personalmente a las partes. Que no es hasta el 4 de octubre de 1999 que se emite el Oficio N° 356, por medio del cual se envían copias por correo y supuestamente dan por notificada a la abogada de la sociedad demandada; pero no hay constancia del envio por correo y mucho menos el recibo de la administración de Correos de Panamá.

Finalmente que la actuación irregular de la Junta de Conciliación dejó en la indefensión a la empresa, puesto que no le permitió utilizar los recursos para impugnar la Sentencia de 8 de julio de 1999 interesados.

Mediante Resolución de 27 de diciembre de 1999, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda de amparo y ordenó la suspensión inmediata de los efectos de la orden impugnada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2612 del Código Judicial. De igual manera, se le solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad, o, en su defecto, un informe de los hechos materia de esta acción de amparo.

El funcionario demandado, Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, envió la actuación procesal surtida en su Despacho y rindió un informe de los hechos que se suscitaron en el negocio laboral Henry Troctch González -vs- INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC.

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Con fecha de 28 de diciembre de 1999, el Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 informó a este Tribunal Colegiado, que la licenciada Nadia Espinosa Hernández para todos los efectos del proceso, era la apoderada constituida en representación de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., a quien luego de varios intentos fallidos de notificación, se optó por aplicarle la fórmula que establece el artículo 888 del Código de Trabajo, produciéndose el Oficio N° 216 de 24 de junio de 1999, el cual fue enviado por correo en la Zona 5, a las 3:10 P. m. del mismo día; posteriormente se fijó el Edicto N° 370 de 30 de junio de 1999, el cual fue desfijado el 1 de julio del mismo año. Que el artículo 888 del Código de Trabajo establece que los edictos se fijarán por lo menos tres días después del envío por correo de la copia de la Resolución respectiva, procedimiento que se cumplió a cabalidad.

Comenta finalmente el Coordinador, que en lo que respecta a la notificación de la Sentencia que decidió el fondo de la causa, la Ley 7 de 1975 le impone al Tribunal que debe hacerse mediante Edicto que permanecerá fijado por 48 horas en los estrados del Tribunal donde se celebró la audiencia, trámite éste que se cumplió satisfactoriamente. Que la decisión oral no fue notificada en virtud del artículo 888, sino de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Nª 7 de 1975.

Encontrándose el amparo en este estado los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DEL TRIBUNAL

Los antecedentes de esta acción de amparo guardan relación con un proceso laboral surtido ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 por despido injustificado, propuesto por Henry Troctch González contra INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. Se colige de la demanda de amparo que la incomodidad del actor estriba en dos situaciones a saber: a)- la primera que la providencia que señala la fecha de audiencia no fue notificada en debida forma, dado que no se siguió el procedimiento del artículo 888 del Código de Trabajo; y b)-, que la Sentencia de 8 de julio de 1999, de igual manera fue notificada indebidamente, ya que dicha notificación según el amparista debió hacerse personalmente y no por edicto. Es obligante por ello examinar cada uno de los temas objeto de este amparo por separado, para realizar un mejor estudio de los cargos endilgados a las actuaciones de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Las normas que considera el amparista que han sido violadas por la Junta de Conciliación y Decisión, al no notificar debidamente las resoluciones que señala fecha de audiencia y la que decide la litis son: artículo 32 correlativamente con el artículo 17 de la Constitución Política. Estas disposiciones son del tenor siguiente:

> "Artículo l7: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".
>
> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

El demandante sustenta la infracción a las normas transcritas, señalando fundamentalmente que los artículos 877, 881, 883, 888 y 889 del Código Laboral preceptúan la obligatoriedad de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 de notificar la providencia que fija fecha de audiencia y notificar personalmente a la parte interesada de la Resolución final de primera instancia. Alega el proponente del amparo, que la autoridad demandada presuntamente no le aseguró, con su actuación, los derechos procesales de la empresa INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC.

CUESTIONES PREVIAS

Las Juntas de Conciliación y Decisión fueron creadas mediante Ley N° 7 de 25 de febrero de 1975. En esta Ley no sólo se regula lo concerniente a la conformación de las Juntas, sino también, se prevé todo lo relativo al procedimiento que debe surtirse en estos tribunales de trabajo.

Cabe destacar, que, a pesar de que la Ley N° 7 de 1975 recoge el procedimiento aplicable a los casos que se ventilan en las Juntas de Conciliación y Decisión, esta normativa jurídica no agota todo lo alusivo al mecanismo procesal que debe imprimirse a las demandas que allí se presenten. Por ende, deben los funcionarios, que conforman esos Tribunales de Trabajo Especiales,

aplicar las normas del Código de Trabajo frente a los vacíos que aquella tenga al momento de que se presente a una situación concreta. Sobre el particular el artículo 16 de la Ley N° 7 de 1975 indica:

> "Artículo 16. Para los efectos de esta Ley las Juntas de Conciliación y Decisión tendrán todas las facultades que en el Código de Trabajo y disposiciones complementarias se atribuyen a los Jueces Seccionales de Trabajo y sus mienbros gozarán de todas las prerrogativas y privilegios reconocidos a los mismos".

NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA QUE FIJA FECHA DE AUDIENCIA

Dentro de este contexto procesal, una de las disconformidades del amparista está dirigida a invalidar la notificación de la Providencia de 9 de junio de 1999, la cual fijaba la fecha de audiencia a verificarse en los estrados de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, pues a su parecer la gestión procesal no se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley.

Un detenido examen de la actuación, ha puesto de manifiesto al Pleno de esta Corporación que la Providencia in examine se notificó con apego a lo previsto en el artículo 888 del Código de Trabajo, el cual es la disposición de excepción aplicable a la notificación de las resoluciones judiciales, en el evento de que el poderado judicial, ya constituido en el proceso, no pudiere ser localizado. Y es que en la Ley N° 7 de 1975 no existe norma para surtir la notificación de los apoderados cuando ha sido imposible ubicarlos en su domicilio. Sobre el particular el artículo 11 de la citada Ley regula la notificación personal de la fecha de audiencia, siempre y cuando lógicamente, sea localizado el abogado de la parte interesada. Es de suma importancia, afin de evitar equívocos, que se tome en cuenta que esta situación procesal, difiere por completo de la notificación que se lleva a cabo por estrados de conformidad con el artículo 562 del Código De Trabajo (dentro del Título I, Capítulo I que trata sobre demanda y contestación de demanda), la cual sólo se justifica cuando es imposible poner en conocimiento de la demanda a la parte demandada, que aún no ha nombrado apoderado judicial para que la represente en juicio. Esta premisa, como se ha señalado, no se configura con las circunstancias propias del caso que nos ocupa. La disposición, en la parte que nos interesa, reza así:

> "Artículo 562.- Cuando se ignore el paradero de quien deba ser notificado personalmente, y previo juramento de la parte interesada, que se considerará prestado por la presentación de la solicitud, el Juez, luego de cerciorarse de su competencia, emplazará al demandado por medio de un edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la Secretaría del Tribunal por el término de cinco días. Este edicto será firmado por el Secretario.
>
> Desde que se fije el edicto, se publicará copia de él en un periódico de la localidad, si lo hubiere, o de otro lugar siempre que circule regularmente en la sede del Tribunal, durante dos días distintos. Si el demandante suministrare al Tribunal la dirección postal del demandado, o el Secretario del Tribunal advierta que su nombre aparece en el directorio telefónico o por cualquier otro medio conociere su dirección, se le remitirá a éste copia de la demanda y de los documentos presentados, por correo recomendado. Si a pesar de este llamamiento, no compareciere el demandado transcurridos cinco días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará por el juez defensor escogido de listas de abogados previamente por las respectivas organizaciones sociales con quien se seguirá el proceso"... (Subrayado es del Pleno)

Retomando la idea inicial, el Pleno observa de los antecedentes remitidos con motivo del amparo, que debido a la dificultad manifiesta de localización de la licenciada Nadia Espinosa, procuradora judicial de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., para hacerle partícipe la fecha de esta etapa procesal (ver informes

consecutivos del notificador de las Juntas en los antecedentes), la Dirección General de las Juntas de Conciliación y Decisión, haciendo uso de la solución ofrecida por el artículo 888 del Código de Trabajo, expidió el Oficio N° 216 DG-JCD de 24 de junio de 1999, a través del cual remitió copia debidamente autenticada de dicha providencia y en la que además, consta el sello de los Correos y Telégrafos de Panamá (ver foja 116 de los antecedentes). Esto evidencia, en primer lugar, el envío de la copia de la resolución a su destinatario, como lo era la apoderada de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., por medio del servicio de correspondencia.

Aunado a lo anterior, y en segundo término, a foja 117 de los antecedentes, reposa el Edicto N° 3070 de 30 de junio de 1999, que fue desfijado el 1 de julio de ese mismo año, cumpliéndose así en forma correcta y concreta el mandato del precepto legal antes enunciado, en vista de que tres días después de remitida la Providencia de 9 de junio de 1999 por medio de los correos, se fijó el referido Edicto en los estrados del Tribunal. Para mayor ilustración transcribimos el contenido del artículo 888 del Código Laboral el cual preceptúa:

> "Artículo 888. Si el apoderado de una parte ya constituido en el proceso que hubiere de ser notificado personalmente, no pudiere ser hallado para ese objeto, el portero hará constar en el expediente esa circunstancia, con indicación del día y la hora en que fue a hacer la notificación personal.
>
> En este caso el Secretario del tribunal, de modo propio, procederá a fijar el edicto en los estrados del tribunal y simultáneamente enviará copia de la resolución que deba notificarse, por correo recomendado, a la dirección postal dada por el apoderadio, y a falta de ella, a su oficina, en su defecto, a Entrega General. En estos casos los edictos se fijarán por lo menos tres días después del envío por correo de la copia de la resolución respectiva. Después de la desfijación del edicto se entiende hecha la notificación personal al apoderado. Se agregará al expediente el recibo de la Administración de Correo." (Subrayado es del Pleno)

En consecuencia, luego de hecho el riguroso examen de este cargo que plantea el amparista, se concluye que la violación alegada por la empresa INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., respecto a lo dispuesto en el artículo 888 el Código de Trabajo no se ha configurado y, por tanto, en este aspecto no se ha vulnerado la garantía del debido proceso.

NOTIFICACION DE LA SENTENCIA

Por otro lado, en lo que atañe a la no notificación personal de la Resolución de 8 de julio de 1999, que decidió la controversia entre Henry Troctch González e INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC., el artículo 10 de la Ley N° 7 de 1975, preceptúa con claridad meridiana, cómo deben notificarse las Sentencias que dictan las Juntas de Conciliación y Decisión, recalcando que cuando la decisión se adopte fuera de la audiencia o una de las partes no hubiera comparecido, como ocurrió en el presente caso, la notificación se hará mediante edicto que permanecerá fijado por 48 horas en el despacho donde se celebró la audiencia. Esta excerta legal está estrechamente ligada a lo que establece el artículo 9 del mismo Cuerpo Legal, el cual advierte que "la audiencia se celebrará el día y la hora previamente fijados, con cualquiera de las partes que concurra". Cabe recordar en este punto, que ya hemos dejado claro que la Providencia de 9 de junio de 1999, que es la que fijó la fecha de audiencia, fue debidamente notificada, lo que no disculpa la no comparecencia de la apoderada judicial de la empresa en las Juntas para la evacuación de esta fase procesal, además que se desvirtúan las afirmaciones del amparista, en el sentido de que se le dejó en le indefensión.

A continuación reproducimos el contenido del artículo 10 cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 10. ...
La audiencia se llevará a cabo en una sola comparecencia. La decisión se pronunciará al finalizar la audiencia y notificará en el acto a las partes, salvo que a juicio de la junta fuere indispensable la práctica de pruebas adicionales.

Cuando la decisión se adopte fuera de la audiencia o una de las partes no hubiera comparecido, la notificación se hará mediante edicto que permanecerá fijado por 48 horas en el Despacho donde se celebró la audiencia"... (Subrayado es del Pleno)

Esa prescripción legal hace inaplicable el artículo 888 del Código de Trabajo en el caso sub-júdice que, según el amparista, debió ser la norma utilizada. Esta circunstancia anotada deja clara la fórmula de interpretación de la primacía que tiene la ley especial, que, en este caso, es la Ley N° 7 de 1975, sobre la general, representada por el Código de Trabajo. Esto fue aclarado por el Coordinador de la Junta N° 6, al comentar los hechos que acaecieron en el proceso laboral en que INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. fue demandado (ver fojas 21 y 22 del expediente de amparo).

Finalmente, y no menos importante, consideramos pertinente formular una respetuosa observación al actor en este proceso constitucional, en el sentido que, en el expediente no milita la certificación del Registro Público que acredite que OLMEDO ARROCHA, tiene la calidad de representante legal de la empresa, tal como lo exige el artículo 582 del Código Judicial, en su parte pertinente, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 582 ...
Las personas jurídicas de derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el Presidente; por su falta, el Vicepresidente o el Secretario y por la falta de ellos el Tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título.

En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá presentar documento del Registro comprobatorio de la representación".

Sin embargo, por el principio indubio pro libertate, esta Corte conceptuó que como se había aducido un motivo que presuntamente atentaba contra el debido proceso, obvió tal circunstancia anómala y procedió a conocer en el fondo, a pesar del defecto formal que presentaba la demanda de amparo.

DECISION

Hilvanados todos los hechos suscitados en el proceso laboral, concluye esta Corte, que la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 no ha quebrantado lo previsto en el artículo 32 y 17 de la Constitución Política, pues reiteramos que se han cumplido cada uno de los pasos procesales estatuidos en las Leyes laborales, como se corrobora de foja 94 a 116 y de foja 121 a 131 de los antecedentes contentivo del proceso laboral surtido en esa dependencia judicial.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por Iván A. Gantes en nombre y representación de INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY INC. y LEVANTA LA SUSPENSION ordenada mediante Resolución de 27 de diciembre de 1999.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) EMETERIO MILLER R.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN PROMOVIDA POR EL LICENCIADO LUIS A. CARRASCO MORENO EN REPRESENTACIÓN DE FELIPE CHEN SOLÉ DENTRO DEL PROCESO DE AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA CLARIBEL JIMÉNEZ PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL MARÍA SOLÉ JAÉN CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Carrasco Moreno, en representación de Felipe Chen Solé, contra la resolución de 23 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

La resolución atacada, concede el amparo de derechos fundamentales promovido por la licenciada Claribel Jiménez Peralta, en representación de Manuel María Solé Jaén, contra la orden de hacer contenida en el oficio N°. 1694 de 6 de diciembre de 1999 y los autos N°. 873 de 23 de noviembre de 1999 y N°. 797 de 27 de octubre de 1999, proferidos por el Juez Primero de Circuito de Coclé.

Por anunciada la apelación en tiempo oportuno, pasa la Corte a decidir lo que en derecho corresponde.

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

El expediente contentivo de esta causa constitucional da cuenta que el 13 de marzo de 1999 falleció Ricardo Solé Jaén (cuaderno de Sucesión Testamentaria, f. 1), dejando como heredero universal de sus bienes a Felipe Chen Solé, mediante testamento abierto fechado de 28 de enero de 1998 (cuaderno de Sucesión Testamentaria, f. 2).

Dentro del correspondiente proceso de sucesión testamentaria, el juez de la causa ofició al Banco Nacional de Panamá, para que certificara si Ricardo Solé Jaén (q. e. p. d), mantenía cuenta en dicha institución bancaria (Cfr. f. 19). A través de la nota de 24 de agosto de 1999, visible a foja 28 del cuaderno de sucesión testamentaria, el Banco Nacional de Panamá informó que, a nombre de Ricardo Solé Jaén, "... registramos cuentas N° 13147285 con saldo a la fecha de B/. 3,194.73; además certificado a Plazo fijo N° 0408 por la suma de B/.65,000.00 a/n de RICARDO SOLE JAEN ó MANUEL MARIA SOLE JAEN ..." (El resaltado es de la Corte).

El 27 de octubre de 1999, el Juzgado Primero de Circuito de Coclé profirió el Auto N° 797 que "... APRUEBA la diligencia de inventario y avalúo efectuada en la sucesión testamentaria de RICARDO SOLE JAEN y señala en la suma de ciento dos mil cuatrocientos noventa y cuatro balboas con setenta y tres centavos (B/. 102,494.73), el activo de la presente sucesión ..." (cuaderno de amparo, f. 43), incluyendo en la masa herencial la totalidad del plazo fijo N° 0408 del Banco Nacional de Panamá.

El 23 de noviembre de 1999, el Juzgado Primero de Circuito de Coclé profirió el Auto Civil N° 873, declarando que Felipe Chen Solé está en legítima posesión de la herencia del causante Ricardo Solé Jaén y en el numeral cuarto de

su parte resolutiva ordena:

> "... Que el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Penonomé, entregue al heredero declarado Felipe Chen Solé ... la cantidad que mantiene en esa institución bancaria el causante Ricardo Solé Jaén (q. e. p. d.), con cédula de identidad personal número dos-treinta y uno-seiscientos siete (2-31--607), en la cuenta número trece-ciento cuarenta y siete-doscientos ochenta y cinco (13147285), así como también el plazo fijo número cero-cuatro-cero-ocho (0408) por la suma de sesenta y cinco mil balboas (B/. 65,000.00) (cuaderno de Sucesión Testamentaria, f. 46. Resalta la Corte).

Lo anterior, fue informado al Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Penonomé, a través del oficio número 1694 de 6 de diciembre de 1999 (vid. cuaderno de amparo, f. 7). No obstante, por medio de la nota de 14 de diciembre de 1999, el Banco Nacional comunicó al juez de la causa su imposibilidad de atender lo resuelto respecto a la cuenta de depósito a plazo fijo N° 0408 por B/. 65,000.00, debido a que, al encontrarse registrada en sus libros a título de "o", obliga a la institución bancaria a "... respetar y atender los Derechos que se le reconocen a un titular sobreviviente, en este tipo de cuentas (Ley 42 de 1984) ...", por lo que somete a la consideración del tribunal tales apreciaciones (cuaderno de Sucesión Testamentaria, f. 49).

El 17 de diciembre de 1999, la licenciada Claribel Jiménez en su condición de apoderada del otro cuentahabiente Manuel María Solé Jaén, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, la acción de amparo de derechos fundamentales que origina el presente proceso constitucional.

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Mediante oficio N° 1711 de 17 de diciembre de 1999, el Juez Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, al rendir el informe de rigor expresa que, si bien la Ley 42 de 8 de noviembre de 1984 alude en el ordinal 4 de su artículo 3 al supuesto de que fallezca uno de los cuenta-habientes de una cuenta vencería tipo "o", reconociéndole al otro derecho sobre los dineros, "... nada dice sobre la situación jurídica del heredero ..." (f. 23).

Aclara que el amparista "... no compareció al proceso de sucesión en calidad de tercero como era su derecho hacerlo (art. 590 y ss. del C. Judicial), pero la Ley es sabia al no reconocerle carácter de cosa juzgada a las decisiones emitidas en los procesos sucesorios (art. 1566 del C. J.), las cuales pueden ser impugnadas por la vía sumarial ..." (f. 23).

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en sentencia de 23 de diciembre de 1999 concedió el amparo propuesto y revocó el oficio N° 1694 de 6 de diciembre de 1999, el auto N° 873 de 23 de noviembre de 1999 y el auto N° 797 de 27 de octubre de 1999, todos proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Coclé, por considerar que infringen lo dispuesto por los artículos 18 y 44 de la Norma Fundamental.

En la resolución antes citada, el a-quo manifiesta que:

> "... las órdenes emanadas por el Juez Primero Civil de Circuito de Coclé, consistente en que el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Penonomé, entregue a FELIPE CHEN SOLE el plazo N° 0408 por la suma de sesenta y cinco mil balboas (B/. 65,000.00), afecta notablemente el derecho de propiedad de MANUEL MARIA SOLE JAEN surgido de su condición de cuenta-habiente, bajo la conjunción "o", con RICARDO SOLE JAEN, en el citado plazo fijo, conforme lo exige la Constitución y la ley ..." (cuaderno de amparo, f. 39).

De otra parte, el Tribunal de primera instancia expresa que "... no corresponde al juez disponer de la Propiedad del plazo fijo, a nombre de Ricardo Solé Jaén o Manuel María Solé Jaén, ante el fallecimiento del primero ..." (f. 38). Estima que lo anterior obedece a que "... este acto de disposición corresponde a los cuenta-habientes en ejercicio de su derecho de goce y disposición, que surge de una relación de confianza más que de naturaleza mercantil, al punto de que la muerte de uno de los cuenta-habientes no soslaya ni limita el derecho del otro, ni lo sujeta a las normas del derecho hereditario ..." (f. 38).

APELACION A LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

El licenciado Luis Carrasco Moreno, presentó recurso de apelación en representación de Felipe Chen Solé, contra la decisión de primera instancia. El apelante, quien actúa en su calidad de tercero, solicita la revocatoria de la resolución proferida por el a-quo, por considerar que no han sido violadas las garantías fundamentales contenidas en los artículos 18 y 44 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Sostiene que la acción propuesta por la amparista debió declararse no viable, ya que contiene errores de forma en cuanto a la identificación de la orden impugnada y, adicionalmente, el oficio impugnado es una mera comunicación que no contiene una orden de hacer (Cfr. cuaderno de amparo, f. 50). En cuanto al fondo de la controversia constitucional, el apelante estima que al reconocerse a su representado como heredero universal testamentario de Ricardo Solé Jaén, se reconoce también su derecho de propiedad sobre la cuenta de plazo fijo N° 0408 del Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Penonomé,"... lo que le da derecho a él a disponer de los fondos de la misma ..." (cuaderno de amparo, f. 52. Resalta la Corte).

Agrega que la muerte de un titular de una cuenta "o" no constituye una condición absolutoria que permite a otros cuenta-habientes disponer de la totalidad de los fondos, y que el depósito a Plazo Fijo N° 0408-3 forma parte del patrimonio dejado por el causante a su heredero testamentario; admitir lo contrario, conlleva el desconocimiento tanto del derecho de propiedad del causante, transmitido vía testamentaria a su representado, como de la institución de la herencia y del proceso sucesorio realizado, que nadie ha refutado como falso o ilegal (Cfr. cuaderno de amparo, f. 55).

OBJECIONES A LA SUSTENTACION DE LA APELACION

La amparista presentó libelo de objeciones a la sustentación de la apelación, solicitando la confirmación de la resolución proferida en primera instancia por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (fs. 58-61).

En dicho escrito, la letrada manifiesta que su representado no compareció a la Sucesión Testamentaria de Ricardo Solé Jaén, debido a que "... no se le comunicó vía Tribunal que en el inventario y avalúo de la masa herencial se estaba incluyendo la cuenta a plazo fijo comentada ..." y que éste "... se enteró cuando el Juez Primero del Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil ordenó al banco la entrega de dicha cuenta y el banco lo comunicó a nuestro representado ..." (cuaderno de amparo, f. 60). Expresa que el derecho de propiedad de su representado sobre la totalidad de la cuenta vencería en litigio, no se pierde, por el solo hecho de no haber comparecido al proceso de sucesión de Ricardo Solé Jaén (vid. f. 60).

De otra parte, sostiene que el juez de la causa fue informado por el Banco Nacional de que la cuenta a plazo fijo N° 0408-3 era de tipo "o" y que, por ende, debió aplicar el contenido de la ley 42 de 1984, que confiere al cuentahabiente sobreviviente el derecho de propiedad sobre la totalidad de dicha cuenta (cuaderno de amparo, f. 59).

DECISION DE LA CORTE

En primer lugar, estima el Pleno que asiste razón al apelante al señalar que el oficio N° 1694 de 6 de diciembre de 1999, no puede considerarse como una orden de hacer, ya que se trata de un acto de mera comunicación, accesorio a una orden principal, del que no puede derivarse un virtual o actual desconocimiento de derechos subjetivos del amparista (Cfr. Sentencias del Pleno de 22 de octubre de 1993, 18 de diciembre de 1996 y 27 de marzo de 1998).

En lo referente a los autos N° 797 de 27 de octubre de 1999 y N° 873 de 23 de noviembre de 1999, debe esta Superioridad externar algunas consideraciones.

La lectura de los antecedentes permite constatar que, tanto los argumentos del amparista como los del apelante, persiguen que esta Superioridad les reconozca, en vía de amparo, el derecho de propiedad absoluto sobre el Plazo Fijo N° 0804-3 del Banco Nacional de Panamá. En ese orden de ideas, para resolver el conflicto que se origina, se debe determinar la situación jurídica del heredero universal de un cuenta-habiente de un plazo fijo tipo "o", frente al derecho que, sobre la totalidad de la cuenta, reclama el otro cuenta-habiente.

A juicio de la Corte, nos encontramos en presencia de un asunto cuyo conocimiento ha sido atribuido por Ley a la jurisdicción civil ordinaria y que, erróneamente, ha llegado a conocimiento de la jurisdicción constitucional.

Esta Superioridad ha manifestado en innumerables ocasiones que, en virtud del numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, para la viabilidad de la acción de amparo, se requiere que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. De lo anterior, se colige un rol supletorio del instituto de amparo, a fin de que opere luego de utilizados, sin éxito, los medios ordinarios de ley.

Tal como expresa la autoridad demandada en el informe visible a fojas 21 a 23 del cuaderno de amparo, quien se considere agraviado por las resoluciones proferidas dentro de un proceso de sucesión testamentaria, puede impugnarlas mediante proceso sumario (vid. art. 1566 del Código Judicial); medio del que, hasta el momento, no ha hecho uso el beneficiario de esta iniciativa constitucional subjetiva.

De otra parte, no se evidencia actualmente, un agravio de tal naturaleza al patrimonio del amparista, que permita obviar la exigencia del agotamiento de los medios judiciales ordinarios. Ello es así, porque el Banco Nacional de Panamá, ha ejercitado respecto al plazo fijo N° 0408-3, su derecho de abstenerse de atender instrucciones contradictorias o incompatibles (art. 5 de la ley 42 de 1984), hasta tanto se esclarezca de manera definitiva a quien debe ser entregado el mismo.

Así las cosas, esta Superioridad concluye que, por cuanto el conflicto de fondo que genera esta causa constitucional no ha sido examinado por la vía ordinaria, no puede la Corte realizar el examen constitucional, objetivo y completo, del fondo de la controversia.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de 23 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá y declara NO VIABLE la acción de amparo de amparo de derechos fundamentales promovida por la licenciada Claribel Jiménez Peralta, en representación de Manuel María Solé Jaén.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA LCDA. ALMA CORTEZ, EN REPRESENTACION DE LEONARDO PEREZ VALDIVIESO CONTRA LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CALENDADA 29 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Alma L. Cortés A. interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de amparo de garantías constitucionales en representación de LEONARDO PÉREZ VALDIVIESO, contra la Resolución No. 1-R.H.-H. calendada 29 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia, que negó el recurso de hecho presentado por el amparista, y que a su juicio viola sus garantías constitucionales.

Dicho recurso se interpuso contra la resolución N° 427 S.F. dictada por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, dentro del proceso de alimentos que TERESITA CARREÑO propuso contra LEONARDO PÉREZ VALDIVIESO, que negó el recurso de apelación contra la orden de hacer contenida en el acta de audiencia de 3 de mayo de 1999, que impuso a PÉREZ VALDIVIESO -entre otras medidas- una pensión alimenticia de B/.250.00 mensuales a favor de su menor hijo LEONARDO PÉREZ CARREÑO.

Los hechos de la acción cuentan que, en virtud del proceso ya expuesto, se celebró la respectiva audiencia oral el día 3 de mayo de 1999, habiendo notificado a las partes, el Juzgado precitado.

El mismo día de la audiencia, el abogado de PÉREZ VALDIVIESO, Licdo. Mario Molino -quien estaba notificado del acto de audiencia- sustituyó el poder en la Licda. Alma Cortés, quien a su vez se manifestó incapacitada para asistir a dicho acto, incapacidad que fue desestimada por la Juez; la audiencia se celebró con la comparecencia de TERESITA CARREÑO, madre del menor.

En la audiencia, la Juez Suplente, Licda. Danitza Vásquez, tomó la decisión de imponer al señor PEREZ VALDIVIESO una pensión alimenticia provisional por la suma de B/.250.00 mensuales, a razón de B/.125.00 quincenales, mientras ordenaba varias diligencias para cerciorarse de la situación económica de dicho Sr., determinación ésta que consta al final del acta de audiencia.

Inconforme con la medida tomada, la representante del amparista arguyó haber interpuesto recurso de apelación contra la decisión expuesta, plasmada en el acta de audiencia, siendo negada la misma por la Juez Primera Suplente mediante Resolución N° 427 S.F. de 4 de agosto de 1999.

Contra ésta última decisión, la Licda. Cortés presentó recurso de hecho ante el Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, que emitió la Resolución N° 1 -R.H. -H. de 29 de octubre de 1999, que negó el recurso y que fue impugnada mediante la presente acción de amparo.

A juicio del amparista, ésta Resolución infringió los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional.

La primera infracción, de manera directa por omisión, estriba en que tanto la a-quo como el ad-quem, "son autoridades instituidas y facultadas por la Constitución y la Ley, precisamente y entre otras responsabilidades, la de asegurar que a los particulares, se le respeten y se le garantice la efectividad de sus derechos individuales."

El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que:

> "ARTICULO 17. Las autoridades de la República están constituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; segurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Considera la letrada que se advierte claramente que el Tribunal Superior incumple la norma expuesta, toda vez que el ad-quem no ha cumplido lo allí establecido al no reconocer el derecho de defensa del amparista, lo que le impidió ejercer su derecho fundamental como el de impugnar la decisión por los medios legales establecidos en los procesos orales, ya que la pensión alimenticia impuesta al Sr. PÉREZ VALDIVIESO no es cónsona con su situación económica y social.

Por su parte, el artículo 32 Constitucional, contentivo del principio del debido proceso, fue infringido -según la Licda. Alma Cortés- ya que el Sr. PÉREZ VALDIVIESO fue víctima de una "imposición y exigencia" que limitó y desconoció sus derechos "personalísimos", y se le desconoció su derecho a participar en la audiencia oral, dentro del proceso de alimentos, por lo antes expuesto.

Por ello, no ha sido juzgado -según la letrada- según los trámites legales del proceso especial de alimentos contenido en los Códigos de la Familia y Judicial, en lo atinente a los procesos orales, los trámites de notificaciones y otras gestiones aplicables al presente proceso, entre ellos, el artículo 828 del Código de la Familia.

Añade que es notorio el daño infringido al Sr. PÉREZ VALDIVIESO, por la renuencia del Juzgador a reconocer y aplicar el debido proceso establecido en materia de juicios orales, en lo tocante a la formalidad de los fallos dictados, ejecutoriedad de las decisiones de fondo así como la formalidad judicial de notificación personal a la parte afectada por el dictamen final, siendo la primera resolución del proceso contra el afectado.

Por lo tanto, se privó al amparista de ser juzgado conforme lo establece la ley -según la Licda. Cortés-, y se le imprimió un "trámite OFICIOSO que no dispone la Ley", lo cual infringió el artículo 32 Constitucional.

Pues bien, para emitir su decisión, la Corte debe hacer los siguientes señalamientos.

El amparista considera la impugnación de los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional; la abundante jurisprudencia producida por este Pleno ha establecido que el artículo 17 de nuestra Carta Magna es de naturaleza programática, por cuanto no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser infringidos.

Sólo en caso de que la infracción de ésta norma se relacione de manera expresa con la violación de otra norma constitucional que sí contenga algún derecho subjetivo susceptible de ser violado -lo que no ocurre en el presente caso-, puede entonces considerarse la violación del artículo 17 en comento, ya que sólo entonces, al reconocerse la violación de algún derecho subjetivo contenido en otra norma, la misma puede implícitamente llegar a afectar la integridad de la norma de naturaleza programática.

Por lo tanto, no prospera la pretensión del actor de que se reconozca la violación de este artículo constitucional.

En cuanto la infracción del principio del debido proceso contenido en el artículo 32 íbidem, la Corte debe verter las siguientes consideraciones.

La esencia de la Resolución N° 1 -R.H. -H. de 29 de octubre de 1999 -que negó el recurso de hecho e impugnada en amparo- estriba en que el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia, al considerar en la documentación aportada para el recurso de hecho, el certificado de incapacidad presentada por la Licda. Alma Cortés como abogada sustituta, conceptuó que su incapacidad cambió la situación del abogado principal, ya que debió asistir a la audiencia, por cuanto era su obligación.

Por otro lado, estimó el ad-quem que el recurso de apelación no fue negado -según dice la recurrente-, ya que se le reconoció su derecho a apelar; lo que ocurrió -a su juicio- fue que el recurso fue presentado extemporáneamente, ya que la medida resuelta en el acto de audiencia se tiene por notificada a todas las partes el mismo día de la audiencia, en base a lo normado por el artículo 992 del Código Judicial.

Añade el Tribunal que la Licda. Cortés presentó su libelo de apelación luego de un (1) mes después de realizada la audiencia, lo que evidencia el no desconocimiento del principio de bilateralidad, porque se aplicaron las normas pertinentes al proceso especial de alimentos establecido en los Códigos de la Familia y Judicial; por lo tanto, los perjuicios sufridos por el recurrente no fueron originados por la juzgadora primaria.

Pues bien, en primer lugar, en cuanto a lo resuelto por el ad-quem al señalar que la condición de sustituta de la Licda. Alma Cortés, al presentar certificado médico donde constaba su imposibilidad de presentarse a la audiencia, hacía imperiosa la comparecencia del abogado principal, Licdo. Mario Molino -notificado con antelación del acto de audiencia, considera la Corte que le asiste la razón a la autoridad acusada, toda vez que el artículo 618 del Código Judicial -subsidiariamente aplicable al caso que nos ocupa en virtud del artículo 828 del Código de la Familia y el Menor- señala que

> "ARTICULO 618. El apoderado puede sustituir el poder aunque en este no se le haya otorgado facultad especial para ello. ...
> ...
> Para sustituir el poder no es necesario que el apoderado lo haya aceptado o ejercido.
>
> La sustitución no requiere presentación personal.
>
> Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual no quedará revocada la sustitución, salvo que se haga manifestación expresa en contrario." (Negrilla de la Corte)

Lo resaltado de la norma demuestra que el abogado que sustituye el poder a él otorgado, puede volver a reasumirlo en cualquier momento, sin que ello signifique la revocación de dicha sustitución; es decir, que el abogado sustituto puede también ejercer el poder conferido, nuevamente.

Por su parte, el artículo 621 íbidem, señala que tanto los apoderados principales como los sustitutos, pueden revocar las sustituciones de los poderes a ellos conferidos, sin necesidad de tener facultad expresa para ello.

Lo anterior implica que la sustitución del poder no excluye del proceso al apoderado que la otorga, sino que permite la actuación de otro litigante mientras él -apoderado principal- no esté actuando en el caso.

Por su parte, el artículo 627 de la excerta de procedimiento, dice que:

> "ARTICULO 627. El apoderado que se haya presentado a nombre de su poderdante en el proceso, deberá atender su trámite hasta el final, a menos que se le revoque su poder o que renuncie. Si se ausenta o se separa arbitrariamente, sin que el poderdante haya nombrado otro apoderado, quedará sujeto a la responsabilidad que pueda exigirle el

poderdante por el abandono del poder." (Negrilla del Pleno)

Señala la norma que el deber de los apoderados es atender el caso hasta el final, y señala como excepciones la revocatoria del poder -por parte de su poderdante- o su renuncia -del propio apoderado-; el caso de sustitución del poder no se encuentra incluido en la norma, por lo que, en asociación con lo ya comentado del artículo 618, el apoderado principal sigue siendo parte del proceso, quedando expuesto a reclamación por parte del poderdante en caso de ausencia injustificada por abandono del poder a él otorgado.

Inclusive, para mayor aclaración del punto debatido, el segundo párrafo del artículo 640 de la excerta en estudio, dice que:

> "ARTICULO 640. ...
> Para que actúe un apoderado sustituto no es necesaria la manifestación del principal de que va a separarse o de que no puede actuar. La actuación del sustituto se tendrá como válida, siempre que el principal, dentro de los términos en que deban efectuarse las gestiones, no haya comparecido previamente a hacerla." (Negrilla de la Corte)

La parte resaltada demuestra la vigencia del abogado principal dentro del proceso, aunque el sustituto esté actuando, al punto que sólo cuando aquel -principal- no haya gestionado previamente, tendrán valor las gestiones del abogado sustituto.

Luego entonces, si la Licda. Alma Cortés, como abogada sustituta, estaba notificada de la audiencia ya que presentó certificado de incapacidad antes de la celebración del acto, no podía asistir a la misma por razón de ella -incapacidad-, el Licdo. Moreno, abogado principal, tenía que comparecer al acto celebrado el 3 de mayo de 1999, máxime que no estaba incapacitado.

En otro orden de cosas, la Resolución criticada en amparo, estableció que no le fue negado a la actora su derecho a apelar, sino que su recurso de apelación fue interpuesto extemporáneamente, porque la medida resuelta dentro del acto de audiencia, fue apelada después de un (1) mes después de su celebración, siendo que la misma se tiene por notificada a las partes el día de su celebración, según lo norma el artículo 992 del Código Judicial, aplicable supletoriamente.

A este planteamiento, señaló la representante del amparista en el hecho noveno de su libelo, que el artículo 806 del Código de la Familia y del Menor -atinente al proceso especial de alimentos- establece que pese a la inasistencia del demandado, previamente notificado, el mismo día del acto de audiencia se fijará la cuota de alimentos, y se adoptarán simultáneamente medidas para hacerla efectiva de inmediato; pero que dicha norma no se refiere a la ausencia justificada de una de las partes, ni a la notificación y ejecutoria judicial de la decisión.

Empero, la misma actora señala que ante este "vacío jurídico", el artículo 828 del Código de la Familia y del Menor dispone que respecto a las notificaciones, se aplica el proceso establecido en el Código Judicial.

Pues bien, es aquí donde nos remitimos al artículo 992 del Código Judicial.

Para mayor claridad del problema planteado, veamos lo que dice la norma:

> "ARTICULO 992. Las providencias y medidas que se dicten o adopten en el curso de las audiencias y diligencia, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no haya concurrido una de las partes."

La lectura del acta de audiencia -f. 9 de la fotocopia del expediente

principal- revela que la Juez ordenó una medida "provisional", y no definitiva con carácter de sentencia.

En efecto, al final de la foja 9 dice el acta que "... el Tribunal pedirá de oficio que se oficie a la Mueblería San Martin (sic) para que nos manifieste qué cargo ocupa el sño (sic) señor LEONARDO PEREZ VALDIVIESO y qué salario devenga y cuales (sic) son las deducciones que presenta, oficiar a la caja del Seguro social al Depto. de Cuentas Individuales a fin de que nos informe si el señor en mención cotiza en la actualidad con alguna empresa, esta Juzgadora asigna la suma de B/.250.00 mensuales como pensión alimenticia provisional a razón de B/.125.00 quincenales, ...".

Es decir, la decisión de la Juez Primera Seccional de Menores, Suplente, no era definitiva, sino una medida provisional mientras averiguaba los ingresos y gastos del Sr. LEONARDO PÉREZ VALDIVIESO.

Por no ser entonces una decisión final con carácter de sentencia sino una medida adoptada en el desarrollo de la audiencia, de carácter transitoria, debe considerarse notificada a las partes desde ese mismo día, tal como lo enseña el artículo 992 en estudio.

Lo anterior significa que le asiste la razón al Tribunal Superior de la Niñez y la Adolescencia, ya que el escrito donde la Licda. Alma Cortés se dio por notificada y anunció recurso de apelación contra esa decisión, es a todas luces, extemporáneo, y por lo tanto, no se violó el principio de bilateralidad del proceso, ni por ende el principio constitucional del debido proceso.

Por todo lo anterior, no le queda otra alternativa a la Corte que negar la pretensión de la actora.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por la Licda. Alma Cortés en representación del señor LEONARDO PÉREZ VALDIVIESO, contra la Resolución N° 1-R.H.-H. de 29 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ALDO REINA BETHANCOURT CONTRA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado JAVIER ANTONIO AROSEMENA ELLIS, en representación del señor ALDO REINA BETHANCOURTH y en contra de la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PANAMA.

Al encontrarse la presente acción constitucional en estado de resolver, a

ello se pasa, previa las siguientes consideraciones:

Observa esta Corporación de Justicia que la resolución atacada mediante el recurso vertical, resulta ser la Sentencia de 17 de diciembre de 1999, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales arriba descrita, la cual DENEGO la referida acción.

Así las cosas, observamos que el promotor de la presente acción constitucional, ahora recurrente Licenciado JAVIER ANTONIO AROSEMENA ELLIS, actuando en su condición de apoderado judicial especial del señor ALDO REINA BETHANCOURTH, pretende con la alzada, que se revoque la Sentencia de 17 de diciembre de 1999, antes mencionada, en la cual el inferior jerárquico decidió DENEGAR la acción de amparo interpuesta contra la orden de hacer "contenida en la Resolución de primero (1°) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999) emitida por la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PANAMA, por la cual se "rechaza de plano, como en efecto rechaza, por improcedente el recurso de apelación presentado dentro del Proceso de Tránsito procedente de la Alcaldía Municipal del Distrito de Arraiján en donde son partes: ALDO REINA B. .vs. EDBIN BARRIA, ambos de generales descritas en autos. DEVOLVER, como en efecto devuelve, el presente expediente a su lugar de origen".

El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, al resolver en primera instancia el amparo de garantías constitucionales decidió denegarlo, basándose fundamentalmente en el Artículo 124 del Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993, por medio del cual se establece el Reglamento de Tránsito. Su decisión fue motivada en los siguientes términos:

> "Ello es así, por cuanto que la disposición legal en cita, si bien prevé que, en materia como la que se trae en el amparo, la resolución de la autoridad administrativa inferior, en este caso, la de la Alcaldía del Distrito de Arraiján, pueda ser impugnada por vía del recurso de apelación, la viabilidad del aludido medio ordinario de impugnación, conforme el acápite a) del referido artículo 124 del Decreto Ejecutivo No. 160, esta supeditado a que en la respectiva resolución se le haya impuesto al recurrente pena "de arresto o de multa mayor de B/.15.00" y, se advierte, a fojas 11 de los antecedentes, que el Alcalde del Distrito de Arraiján impuso multa al proponente del amparo por la suma de B/.15.00." (Fs. 39).

Al sustentar la alzada, el apoderado del amparista manifestó lo siguiente:

> "La colisión sufrida por mi representado, no sólo se trata de la Multa o sanción impuesta de B/.15.00, sino de los derechos y obligaciones de (sic) emanan de dicho accidente los cuales son de gran envergadura, por razón de los daños y perjuicios que de allí pueden emanarse.
>
> Nuestro representado tiene derecho a que la Decisión del Alcalde del Distrito de Arraiján sea examinada por su Superior Jerárquico, la Gobernación de Panamá, representándose así el Principio de la Doble Instancia, consagrada para los Accidentes de Tránsito en el Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993, principalmente en su artículo 113.
>
> La letra intención o espíritu del Artículo 124 del Decreto Ejecutivo No. 160 de 7 de junio de 1993, en forma alguna pretende coartar el principio de la doble instancia consagrado para los accidentes de tránsito por colisión." (Fs. 45)

El Pleno advierte que la esencia del problema constitucional censurado, consiste en hábersele negado acceso al recurso de apelación, sobre la base de una mala interpretación del reglamento de tránsito, al aplicar, según el recurrente, una disposición general, contenida en el artículo 124 del reglamento de tránsito,

que de forma alguna coarta el principio de la doble instancia, de manera preferente al artículo 113.

Luego de lo anterior, corresponde al Pleno analizar si la negativa del recurso de apelación por parte de la Gobernación de la Provincia de Panamá constituye una violación al debido proceso, al haberse desconocido, en apreciación del recurrente, el principio de la doble instancia.

Como bien lo ha señalado la doctrina nacional: "El derecho a hacer uso de los recursos contra resoluciones judiciales previstos en la ley constituye, claramente, un elemento de la garantía constitucional del debido proceso legal, y, por lo tanto, serán violatorios de dicha garantía los actos administrativos o resoluciones judiciales que arbitrariamente impidan o nieguen a una persona la utilización de los medios de impugnación consagrados por la ley contra sentencias, autos u otras resoluciones judiciales". (Arturo Hoyos. "El Debido Proceso", Editorial Temis, 1996, Pág. 74).

Ello es así, por cuanto que, el acto mediante el cual no se concede el recurso con fundamento en normas procesales no constituye una orden que viole derechos sustanciales o procesales del recurrente, más bien, una decisión jurisdiccional, que, adoptada con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable, sencillamente determina la no procedencia de un recurso. El Pleno se ha pronunciado así en la Sentencia de 30 de enero de 1997, entre otras.

Por consiguiente, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 17 de diciembre de 1999, en la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el Licenciado JAVIER ANTONIO AROSEMENA ELLIS, en representación de ALDO REINA BETHANCOURTH, contra la Resolución emitida el 1 de febrero de 1999, por la GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PANAMA, en el proceso de Tránsito en donde son partes: ALDO REINA BETHANCOURTH y EDBIN BARRIA.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE HOTELERA PANAMA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán en representación de Hotelera El Panamá, S. A., interpuso demanda de amparo de garantías constitucionales contra la resolución expedida el 21 de octubre de 1999, por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Mediante la resolución atacada el Director General de Trabajo entregó a la empresa amparista el pliego de peticiones presentado por el Sindicato de

Trabajadores del Hotel el Panamá (SITRAHOPA) y le concedió cinco días hábiles para contestarlo.

Los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política son los preceptos que se consideran infringidos. Es conveniente señalar que los artículos 17 y 18 no pueden, por sí solos, fundamentar una demanda de amparo por su carácter programático, sin embargo, pueden estimarse infringidos en conjunto con otras normas que consagren garantías constitucionales, como el artículo 32 de la Constitución Política.

Según la apoderada judicial de la amparista, las normas constitucionales citadas fueron violadas, debido a que el funcionario demandado ordenó correr traslado a su representada del pliego de peticiones presentado por el SITRAHOPA, sin tomar en consideración la existencia de un convenio colectivo vigente desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 de septiembre del 2003, negociado entre la empresa y el 78% de los trabajadores no organizados, quienes cumplieron con los procedimientos formales establecidos en los artículos 423 y 430 del Código de Trabajo.

En resumen expresó que la referida infracción del debido proceso se dió porque, con el traslado del pliego de peticiones, el funcionario demandado pretende obligar a su representada a conciliar con una organización sindical que no representa a los trabajadores, que ha utilizado listas con firmas obtenidas para otro fin y que pretende desconocer la existencia de un convenio suscrito con la gran mayoría de los trabajadores no organizados, con el pretexto de negociar una nueva convención colectiva y obligar a Hotelera El Panamá, S. A. a renunciar los derechos que la ley consagra a su favor, bajo la amenaza de huelga y posiblemente de cierre definitivo ante las actuales circunstancias económicas.

Luego de analizados los cargos de violación de las normas constitucionales citadas y el concepto en que la amparista considera que se han producido dichas infracciones, a juicio del Pleno de la Corte, el amparo solicitado debe concederse, porque la autoridad demandada corrió traslado a la empresa de un pliego de peticiones para negociar con los trabajadores, a pesar que tenía conocimiento que en sus archivos reposaba el convenio colectivo suscrito el 4 de octubre entre los trabajadores no organizados y la empresa, tal como se desprende del contenido de la Nota N° 692-DGT-99 de 12 de noviembre de 1999, mediante la cual el Director General de Trabajo desestima el incidente de previo y especial pronunciamiento interpuesto por la empresa, en relación al pliego de peticiones presentado por SITRAHOPA. En dicha nota el funcionario hace alusión al convenio previo celebrado por la empresa con los trabajadores no organizados de la siguiente forma:

> "Manifiestan ustedes que suscribieron un acuerdo con la mayoría de los trabajadores y por esa razón no está obligada a suscribir otra convención colectiva.
>
> Al respecto esta Dirección le manifiesta, que el artículo 401 de nuestra compilación laboral nos dice: 'sólo los sindicatos tienen la facultad de celebrar convenciones colectivas con las empresas donde tengan afiliados' y en el presente caso, según documentación presentada, lo que suscribió la empresa con un grupo de trabajadores fue un arreglo directo, acción ésta permitida por el artículo 423 del Código de Trabajo.
>
> El artículo 430 de la misma excerta laboral, en relación al porcentaje de trabajadores que se exige para presentar un pliego es de 30%, cuando se trata de trabajadores no organizados, empero cuando lo solicita un sindicato la ley no le pide ningún requisito numérico especial (f. 100 del expediente de la actuación demandada)"

Contrario a lo expresado por la autoridad de trabajo, el artículo 407 del Código de Trabajo establece que toda convención colectiva obliga a las partes y

a las personas en cuyo nombre se celebre o sea aplicable. Por tanto, los convenios colectivos son ley entre las partes y las obligan desde su vigencia y hasta que expire.

A este respecto el artículo 15 de la Ley 8 de 1981 establece que durante el período de vigencia de las convenciones colectivas de trabajo no se admitirán pliegos de peticiones que tengan por objeto introducir modificaciones directas o indirectas, o cláusulas nuevas a la convención colectiva.

Esto es precisamente lo que pretende el Sindicato de Trabajadores denominado SITRAHOPA, negociar un nuevo y diferente convenio colectivo con la empleadora Empresa Hotelera El Panamá, S. A., y al admitir y correrle traslado a dicha petición, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social desconoció lo dispuesto en el mencionado artículo 15 de la ley 8 de 1981, violando directamente el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, porque no es procedente la celebración de una nueva colección colectiva sin la existencia de los presupuestos consignados en la ley para ello.

Sin la voluntad de ambas partes para negociar una nueva convención colectiva de trabajo o modificar el convenio existente, deberá respetarse el mismo hasta su vencimiento, en este caso en particular hasta el 30 de septiembre del 2,003, luego de lo cual podrá cualquiera de las partes solicitar la negociación de una nueva en los términos que establece el artículo 416 del Código de Trabajo.

En reciente precedente dictado por el Pleno de la Corte Suprema para resolver una demanda de amparo de garantías constitucionales similar la presente señaló lo siguiente:

> "La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha sido consistente en sostener que es responsabilidad de la Dirección General de Trabajo, antes de dar inicio al procedimiento de conciliación, verificar si el pliego de peticiones resulta admisible a la luz de las disposiciones laborales y hacer uso de los medios investigativos necesarios para confirmar la certeza de las afirmaciones del sindicato que solicita la conciliación (Sentencia de 9 de junio de 1998).
>
> En este orden de ideas la Corte ha expresado que:
>
> 'Resulta procedente, pues, para asegurar las garantías constitucionales de unos y de otros, procurar que cada vez que un pliego comience a tramitarse en el Ministerio de Trabajo se adopten aquellas medidas que impidan, por un lado, la vulneración de los derechos de los trabajadores y, por el otro, la comisión de abusos que puedan perjudicar el interés de las empresas'
>
> En vista de que el pliego presentado por los trabajadores no reúne los requisitos que exigen los artículos 427 y 428 del Código de Trabajo y por no concurrir en este caso los presupuestos que la ley exige para el inicio de la negociación de una nueva convención colectiva, debe el Pleno concluir que la orden atacada vulnera la garantía del debido proceso legal, por lo que concede la pretensión anunciada." (Sentencia de 3 de diciembre de 1999, dictada en la demanda de amparo interpuesta por Bilfinger + Berger de Panamá, S. A. contra la orden de hacer contenida en la Nota de 8 de septiembre de 1999, proferida por la Sección de Mediación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral).

Por lo antes expuesto, corresponde al Pleno conceder el amparo impetrado y revocar la orden de hacer contenida en la resolución dictada el 21 de octubre de 1999 por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por ser violatoria del artículo 32 de la Constitución Política Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales promovido por la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, en representación de la HOTELERA EL PANAMA, S. A., y REVOCA la resolución dictada el 21 de octubre de 1999, por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) EMETERIO MILLER R.
(fdo.) ROBERTO GONZÁLEZ R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR THE GERMAN CONSULTING GROUP, S. A. CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad THE GERMAN CONSULTING GROUP., S. A., por medio de su apoderado judicial, la firma de abogados WATSON & ASOCIADOS, ha propuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la ORDEN DE NO HACER contenida en la Resolución de 10 de diciembre de 1999, dictada por el Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Públicos, dentro del trámite procedimental de resolución de Pliego de Cargos que al caso ha formulado dicha instancia administrativa.

La parte actora manifestó en su demanda de amparo de garantías constitucionales, que la orden de no hacer, contenida en la Resolución de 10 de diciembre de 1999, violenta los derechos procesales que integran el principio constitucional del debido proceso legal, por el hecho de que negó la extensión del período de práctica de pruebas con el consecuencial movimiento de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de los alegatos de rigor, limitándose así, las posibilidades de defensa de la amparista ante el Ente Regulador.

La accionante argumentó como normas infringidas, de manera directa por comisión, el artículo 32 de la Constitución Nacional, así como el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual forma parte del llamado "Bloque de la Constitucionalidad", que amplía el concepto del debido proceso.Finalmente la amparista manifestó como violados en nuestro Sistema Jurídico, la propia Ley 31 de 1996 regulatoria de las telecomunicaciones en Panamá, en su artículo 59, numeral 4, al establecer que el instructor del expediente que tramita el Ente Regulador de los Servicios Públicos, acordará la apertura de un período que no será superior a veinte (20) ni inferior a ocho (8) días, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas se juzguen pertinentes.

De lo anterior, el accionante esgrime que conforme a las reglas procesales generales, el término que concedió el Ente Regulador para la práctica de pruebas es de días hábiles y no de días calendarios, toda vez que conforme el artículo 499 del Código Judicial, los términos legales corren por ministerio de la ley, y los de días teniendo únicamente los hábiles, por lo que en el ínterin del

término concedido, concurrían dos fechas inhábiles como son el sábado 11 y domingo 12 de diciembre de 1999.

Cumplidos los trámites de reparto, mediante providencia de 4 de enero del 2,000 (fs. 15), se admitió la acción presentada y se requirió de la autoridad demandada, dentro del término de ley, el envío de los antecedentes del caso o de un informe sobre los puntos que versa esta acción. Como respuesta a lo pedido, el Director Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, señaló como parte medular, lo que se transcribe:

> "Que como consta en foja 95 del expediente, la firma forense WATSON & ASOCIADOS solicitó dentro del proceso administrativo que se le sigue a la empresa THE GERMAN CONSULTING GROUP, S. A., mediante memorial sin fecha y recibido en el Ente Regulador el día 10 de diciembre de 1999, la extensión del período probatorio a fin de que los peritos designados por ella pudiesen emitir sus opiniones al respecto sobre la materia, basando su petición en lo señalado en el Artículo 779-A del Código Judicial, y en la imposibilidad de los peritos que designó de concurrir en las fechas previamente establecidas, para lo cual dicha firma solicitó se fijara nueva fecha a fin de que los peritos contaran con un término mayor para la presentación de su dictamen pericial.
>
> Adicionalmente, como consta en foja 80 del expediente, la firma forense WATSON & ASOCIADOS, adujo como prueba que se admitieran los señores Jesse Stanziola y Louis Emilio Forton, con la finalidad de que explicaran detalladamente el funcionamiento del servicio "NET2PHONE" y otros detalles que se pueden apreciar en dicha foja, por lo que se consideró que como no habían otras pruebas que practicar, sobraba la necesidad de ampliar el periodo probatoria establecido.
>
> Dentro de este proceso como puede observarse en fojas 102 y 103 del expediente, al momento en que fueron posesionados los peritos nombrados por la firma forense WATSON & ASOCIADOS, éstos solicitaron la extensión del plazo para la presentación de su informe pericial.
>
> El Comisionado Sustanciador del Ente Regulador de los Servicios Públicos, en vista de las solicitudes formuladas por los peritos al momento de tomar posesión como tales, y en atención a lo dispuesto por el Artículo 959 del Código Judicial, mediante Providencias calendadas 15 y 16 de diciembre de 1999, concedió la extensión del plazo para la presentación de los informes periciales, plazo que vence precisamente el día de hoy 6 de enero de 2000."

Adjunto al informe, se envió el expediente que contiene el proceso administrativo en referencia, el cual consta de 123 fojas útiles, por lo que el Pleno de esta Corporación pasa a resolver la presente controversia.

El apoderado judicial de la empresa demandante alega que se ha infringido el artículo 32 de la Constitución Política el cual establece la garantía constitucional del debido proceso.

Este Pleno, en sentencia de 22 de marzo de 1999, bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos, señaló que ha dejado sentado en innumerables fallos que la garantía constitucional del debido proceso, contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional constituye una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolla sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto a las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos (Ver sentencia de 29 de julio de 1992).

En materia administrativa, la Corte destaca lo sostenido por el Magistrado Ponente del presente caso, en un ensayo sobre el debido proceso en el ámbito administrativo en el que se señala que "debe admitirse su aplicación sin reservas ni excepciones este principio, porque lo demanda la evolución del debido proceso en sentido progresivo desde su aplicación al campo penal hasta su aplicación a todo procedimiento, el cual debe asegurar la tutela judicial en sentido lato en todas las relaciones intersubjetivas en el campo jurídico, sea éstas relaciones Estado-administrado o dirimidas por organismos jurisdiccionales o administrativos de éste con respecto a pretensiones contenciosas entre particulares". (FABREGA ZARAK, Rogelio A. La Procedencia de la garantía del debido proceso en las actuaciones administrativas. Estudios Procesales. Tomo III. Editora Jurídica Panameña. Panamá. 1990. Pág. 867).

Es cierto que existen notorias diferencias entre proceso judicial y procedimiento administrativo. En el primero un juez imparcial decide sobre pretensiones que formulan las partes, mientras que el segundo se refiere a las formalidades que se siguen en la Administración Pública para la elaboración de los actos administrativos. GUY ISAAC, al precisar el objeto del procedimiento administrativo no contencioso como la "reglamentación de la operación de emisión del acto administrativo en conjunto" añade que aquél debe ser definido como el "conjunto de reglas relativas al procedimiento de elaboración del acto, a su forma y a su publicidad, así como a su cuestionamiento" (Citado por ALAN R. BREWER-CARIAS, Principios del Procedimiento Administrativo. Madrid, Editorial Civitas, 1990, págs. 29 y 30).

"Si bien ambos son distintos existe una tendencia, a la judicialización del procedimiento administrativo no contencioso y, sobre todo, al procedimiento administrativo sancionador, que con frecuencia ejerce la Administración Pública en nuestros países. Esta judicialización conlleva crecientemente el reconocimiento del derecho de defensa y, el algunos casos, del mismo debido proceso en el procedimiento administrativo." (Cfr. ARTURO HOYOS, El Debido Proceso, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Editorial Temis, S. A., 1996, págs. 94 y 95).

Ahora bien, el debido, proceso en ciertos aspectos es aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores que sí se asemejan a un proceso judicial. Dicho principio incluye en el procedimiento administrativo sancionador aspectos tales como el derecho del administrado a ser oído; a que se le notifique; a ser sancionado por una entidad competente; a que se produzca la contradicción, es decir, que se le brinde a la persona la oportunidad de tomar posición y de pronunciarse sobre la pretensión punitiva de la Administración; el derecho a aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del procedimiento administrativo así como a contradecir aquellas aportadas por la Administración; y sobre todo, la facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la Ley 135 de 1943 contra el acto administrativo sancionador.

El derecho a la tutela judicial efectiva, que forma parte integrante del debido proceso, es un derecho de prestación, no de libertad y, por lo tanto, de configuración legal, por lo que sólo puede ser ejercido por los cauces y en las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento que las regula, sin que, en ningún caso se pueda desconocer su contenido esencial (véase Joan Picó i Junoi, "Las garantías constitucionales del proceso", Editorial José Mª Bosch, Barcelona, pág. 42).

El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación

legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales.

El derecho a la prueba, que forma parte sustancial del derecho de defensa y el debido proceso, implica que las pruebas han de regirse por las disposiciones procesales que la gobiernan, que, en el caso que ocupa al Pleno, corresponde a los procesos sancionadores, por lo que el período de prueba tiene un plazo mínimo que no debe ser inferior a 8 días hábiles ni exceder el término de 20 días hábiles, por lo que, en la medida en que el funcionario de instrucción acuerde un período probatorio que no se encuentre dentro de estos parámetros, como es el caso bajo estudio, encierra una limitación del derecho a la prueba no consentida por la Constitución y constituye, en efecto, una vulneración al principio constitucional del debido proceso. El derecho a la prueba exige que las pruebas sean propuestas dentro del término correspondiente, que se practiquen dentro del término que integra la fase probatoria en el procedimiento sancionador, que se trate de pruebas pertinentes, es decir, relacionadas con el objeto del proceso sancionador y que no se trate de pruebas ilícitas, sea por haber sido traído al proceso con menoscabo en el rito procesal que motive la indefensión de la parte, o por tratarse de pruebas que hayan obtenido con violación a los derechos fundamentales.

Una lectura del expediente (que, por cierto, no se encuentra foliado), refleja que el período probatorio fue fijado entre el período comprendido entre el 9 de diciembre y el 16 de diciembre del año 1999, y que, por tanto, no se ha respetado el mínimo que debe contener el período probatorio, y se han incluído, también, días inhábiles. No obstante, la resolución que fijó el período probatorio, la resolución de 1° de diciembre de 1999 entre el período comprendido entre el día 9 de diciembre hasta el día 16 de diciembre de 1999, no ha sido objeto de la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, sino, por el contrario, la que negó la extensión del período probatorio solicitada el día 10 de diciembre de 1999, por lo que la aludida resolución de 1° de diciembre de 1999 no será objeto de pronunciamiento por parte de este Pleno.

De otro lado, percibe el Pleno la solicitud formulada el día 10 de diciembre de 1999 para la extensión del período probatorio, indispensable para la práctica de la prueba pericial solicitada, la que fué objeto de decisión por parte del funcionario de instrucción, extendiendo el plazo para la presentación del informe pericial, hasta el día 6 de enero de 1999, para que el perito Jessee Stanziola Ceballos y el perito Louis Emilio Fortou, presentasen su informe pericial, satisfaciendo de manera parcial la aspiración del recurrente, por lo que el objeto de la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, la revocatoria de la Resolución que negaba la extensión del período adicional de prueba para la práctica pericial carece en la actualidad de objeto, habiéndose producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, que es una fórmula jurisprudencial para destacar que el objeto del proceso ha perdido su eficacia.

Sea propicia la ocasión, para que el Pleno la recuerde a la autoridad acusada, la necesidad de que en el otorgamiento de plazos o términos para la realización de determinadas formalidades procesales, sólo se tomen en consideración los hábiles, descartando de su fijación y cómputo los que no tengan ese carácter, así como la necesidad de que todo expediente venga debidamene foliado y numerado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el Amparo de Garantías

Constitucionales propuesto por la firma WATSON & ASOCIADOS y, en consecuencia, DECLARA que, con respecto al acto procesal de negación de la extensión del período probatorio, objeto del recurso de amparo, se ha producido el fenómeno de sustracción de materia.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) EMETERIO MILLER R.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA FORENSE RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS Y ABREGO, EN REPRESENTECIÓN DEL SEÑOR ROGELIO FRAIZ DOCABO, CONTRA LA SUPUESTA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO, DE 9 DE MARZO DE 1998, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, este Máximo Tribunal de Amparo conoce de la demanda de amparo promovida por el señor Rogelio Fraiz Docabo, debidamente representado por la firma de abogados Rubio, Alvarez, Solís & Abrego, incoada contra el Juez Primero Seccional de Familia del Circuito de Panamá, específicamente contra la supuesta orden de hacer contenida en Resolución sin número, de 9 de marzo de 1998, expedida por el tribunal circuital de la jurisdicción de familia, a través de la que se emplaza por edicto al señor Fraiz Docabo.

Antes de entrar a decidir el fondo o mérito de la presente acción, es de lugar hacer un recuento de la actuación procesal que antecede a la petición de amparo meritada.

Esta acción de tutela de derechos constitucionales accede al proceso de divorcio que instauró la señora Maruquel Castroverde Crosthwaite contra el señor Rogelio Fraiz Docabo, ante el Juzgado Primero Seccional de Familia, invocando la causal de "trato cruel psíquico", prevista en el artículo 212 del Código de la Familia.

El demandado Fraiz Docabo, dentro de la causa principal y mediante apoderado judicial, promovió incidente de nulidad por indebida notificación, que fue negado por el Tribunal A quo, según Auto No. 1143, de 20 de noviembre de 1998, y confirmado en todas sus partes, tras haber sido apelado, por el Tribunal Superior de Familia, conforme sentencia fechada el 13 de abril de 1999 (Ver fojas 13 hasta la 24, inclusive, del cuadernillo de amparo).

La demanda de amparo se fundamentó principalmente en que la señora Maruquel Castroverde otorgó poder especial a la licenciada Xenia Ortiz de Palma para la tramitación de un proceso de divorcio contra el señor Rogelio Fraiz Docabo basado en el motivo señalado, y en dicho poder se señaló la dirección exacta del demandado, de allí que la dirección de Docabo era conocida en todo momento; no obstante, el funcionario demandado ordenó, mediante Resolución sin numero, fechada el 9 de marzo de 1998, el emplazamiento por vía edictal del señor Fraiz Docabo, incumpliendo los requisitos de ley, según el amparista, pues no consta

en el proceso manifestación de parte, bajo la gravedad del juramento, de que ésta desconoce el paradero del demandado, tal como lo prevé el artículo 1002 del Código Judicial invocado como sustento jurídico de esta infracción.

Con todo, expresa el amparista que el procedimiento o trámite de notificación por medio de edicto emplazatorio, que le hizo el Juzgado Primero Seccional de Familia, a pesar de conocer su domicilio, es violatorio del artículo 32 de la Constitución Política de la República, que consagra la fundamental garantía del "debido proceso legal".

La resolución apelada del Primer Tribunal Superior de Justicia, de 13 de diciembre del año que acaba de culminar, denegó la acción de amparo propuesta. Dicha resolución, medularmente, se cimenta en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

> "Cabe señalar que la garantía constitucional invocada, y consagrada en el Artículo 32 de la Constitución Política de la República que se destaca por ser una institución instrumental de carácter general que alcanza a todos los procesos, según nuestra jurisprudencia busca asegurar a la (sic) partes la oportunidad para ser oídas, por un Tribunal competente, independiente e imparcial, que se pronuncie respecto de las pretensiones y manifestaciones de la (sic) partes, permitiendo aportar pruebas lícitas, y de contradecir las aportadas, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la Ley, de manera tal que las personas puedan defender sus derechos. (Cfr. Debido Proceso, Arturo Hoyos, Edit. Temis, 1996, pag. 54)." (sic).
>
> Contrario a lo dicho por el amparista, dentro del proceso de divorcio a que accede este amparo, el Juez de la causa procuró por lo (sic) medios a su alcance notificar al demandado señor ROGELIO FRAIZ DOCABO la demanda incoada en su contra y para ello realizó cinco (5) intentos de notificación que se corroboran a foja 10, 11, 12, 13-14 y 17, todos infructuosos, de los cuales se desprende de manera inequívoca de que tanto la actora como el propio Tribunal desconocían el paradero actual del demandado y en atención a ello ordenó el emplazamiento.
>
> No hay que olvidar lo estipulado por el artículo 471 del Código Judicial, que permite al Juez como director del proceso, darle a la solicitud, petición o recurso el trámite que legalmente corresponda, en el caso de marras la solicitud de emplazamiento, (fs. 15) sumada a la declaración de la propia demandante (fs. 16), ostenta la probidad necesaria para efectuar el emplazamiento, no obstante se haya consignado en el poder y la demanda el domicilio del demandado. Vale señalar que el emplazamiento es apenas una forma de lograr que el demandado se entere del proceso que se ha presentado en su contra, y así comparezca a hacer valer sus derechos dentro del juicio y solamente ante su falta de comparecencia es que se le designa un defensor.
>
> Cabe señalar que los posibles errores de juicio cometidos en la interpretación de las disposiciones legales aplicables no son susceptibles de reparos mediante el ejercicio de la demanda de amparo, ello convertiría al tribunal que conoce de este tipo de demandas en una instancia más del proceso, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, cuyo objeto es el de obtener la invalidadción de un acto que afecta al impugnante por ser violatorio de una garantía constitucional, y no de rango legal. (Cfr. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 16 de febrero de 1996)" (Ver fojas 35-36).

Por su parte, el recurrente de dicha Resolución fundamenta su disconformidad en escrito que corre de fojas 39 a la 41 del cuadernillo de

amparo, reiterando los conceptos de la demanda extraordinaria inicial, esencialmente en lo siguiente:

1. Que en el poder otorgado a su apoderado judicial la señora Maruquel Castroverde señaló las generales de la persona contra quien dirigió su demanda de divorcio, que incluía su dirección o domicilio. Una de las direcciones aportadas fue la del Edificio Brisas de Obarrio, apartamento 10C, Calle San José, Obarrio. Información que posteriormente fue actualizada en la demanda de divorcio presentada y memoriales dirigidos al Tribunal de instancia por la apoderada de la parte actora, licenciada Xenia Ortiz;

2. Que una vez admitida la demanda mediante Auto No. 96, de 2 de febrero de 1998, debió ser notificada a Fraiz Docabo en la dirección suministrada;

3. Que ante solicitud de la apoderada de la demandante, mediante Resolución sin número, de 9 de marzo de 1998, "sin cumplir los requisitos de ley", se procedió al emplazamiento por edicto de Fraiz Docabo. Asimismo, aduce que el artículo 1002 del Código Judicial, en su párrafo segundo, fue incumplido, cercenándose el legítimo derecho de Fraiz Docabo "a oponerse o contradecir las pretensiones de la demandante obviándose una garantía constitucional la cual constituye una de las piedras angulares dentro del curso del debido proceso como lo es el derecho de contradicción, que surge precisamente con la notificación de la demanda que por disposición de la Ley debe ser personal en este caso". (Cfr. fojas 39-40).

Para apoyar su tesis de infracción al debido proceso, en particular del derecho a ser oído, el amparista cita doctrina obtenida del libro "Instituciones de Derecho Procesal", cuya autoría es del procesalista colombiano Hernando Davis Echandía, y aduce dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 18 de junio y 19 de agosto de 1992, que según asevera, anularon notificaciones por edicto de "... cierto auto o sentencia cuya notificación se estipula debe ser personal" (Demanda de amparo propuesta por Maribel Correa de Arze y la demanda de inconstitucionalidad presentada por Decoraciones Modernas, S. A, respectivamente).

Luego de esta reseña de las actuaciones que han originado la competencia del Pleno para conocer de la presente alzada dentro del proceso especial de amparo, este Tribunal desea recordar, como lo ha expresado en numerosas ocasiones precedentes, que el amparo como acción independiente tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos (Cfr. Sentencia de 5 de mayo de 1999, Registro Judicial, p. 7). Además, este recurso extraordinario procede en los supuestos de violación del debido proceso cuando han sido incumplidos requisitos y trámites esenciales capaces de lesionar la garantía constitucional para un adecuado proceso de ley, que prevé el artículo 32 constitucional.

Al respecto, esta superioridad ha sentado copiosa doctrina que reafirma que el debido proceso "... solamente se infringe cuando se desconocen trámites esenciales del mismo, cuya observancia es indispensable para asegurar la adecuada o efectiva defensa de los derechos de cada una de las partes ..." (Sentencia del Pleno de 13 de noviembre de 1996, ante la demanda de amparo promovida por José Manuel Faúndes Hijo, contra la orden de no hacer contenida en la Resolución No. 45, de 21 de agosto de 1996, expedida por el Pleno de la Asamblea Legislativa). Esta sentencia reitera la doctrina legal sentada desde la década de 1980 sobre el efecto que genera la omisión de trámites esenciales en el juzgamiento de las causas procesales (Cfr. sentencia de 15 de septiembre de 1982, ante la demanda de inconstitucionalidad incoada por Rafael Collins contra Resolución de la Junta de Conciliación y Decisión No. 6).

Tomando como premisa esta reiterada manifestación jurisprudencial y tras el previo análisis de los argumentos de las partes y de las autoridades jurisdiccionales inferiores, el Pleno estima que no existe razón para revocar la sentencia recurrida, y en tal evento conceder el amparo solicitado. A esa conclusión arriba esta Corporación fundada en las siguientes razones:

La actuación del Juzgado Primero Seccional de Familia de notificar mediante edicto la demadanda de divorcio insturada por la señora Maruquel Catroverde Crosthwaite contra el señor Rogelio Fraiz Docabo no ha violado el debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República, pues contrario a lo expresado por el amparista, a éste se le ha brindado desde sus inicios toda la oportunidad establecida en la Ley para conocer de la causa instaurada en su contra; es decir, el proceso de divorcio incoado contra él no se ha seguido a sus espaldas, lo que de haber ocurrido sí hubiese sido motivo de infracción a la garantía fundamental invocada.

El Pleno está convencido de ello porque en autos constan diligencias claras de notificación hechas por el Tribunal de instancia, o sea, el Juzgado Primero Seccional de Familia, con el objeto de notificar de manera personal, como lo ordena la Ley, la demanda de divorcio que contra el señor Rogelio Fraiz Docabo instauró ante esa sede judicial la señora Maruquel Castroverde, el día 26 de enero de 1998, y recibida a las tres y once minutos. Esas constancias se reflejan en los informes secretariales rendidos por el citador, que reposan desde fojas 10 hasta la 14, del expediente principal, en la que el citador hace saber a sus superiores que en tres ocasiones distintas, ocurridas los días 3, 4 y 16 de febrero de 1998, se apersonó al Edificio Torre Omega, sexto piso, ubicado en esta ciudad, a cumplir con la notificación de la demanda de divorcio al señor Fraiz Docabo, dirección que aparentemente, de acuerdo al poder otorgado por la señora Maruquel Castroverde, es el domicilio laboral del demandado.

A fojas 13 y 14 de los autos, el citador del Tribunal de instancia narra cómo el día 16 de febrero de 1998 montó guardia en los predios del mencionado Edificio Omega para cumplir la diligencia de notificación al señor Fraiz Docabo; ese día, luego de un tiempo de espera, avista al señor Docabo quien abordó un vehículo a motor; el citador le hizo señal de alto pero éste no se detuvo, mas sí se percató de su presencia porque sólo le dirigió un saludo al funcionario durante su retirada. Posteriormente, se hace otro intento de notificación, también infructuoso, el 27 de febrero de 1998 (foja 17 del dossier principal).

En virtud de lo anterior, y a instancia de parte, el Tribunal de la causa consideró viable acceder a la petición de emplazamiento por edicto del demandado, mediante Resolución de 9 de marzo de 1998 (foja 18), luego de los cinco intentos fallidos, cuatro en la oficina del demandado y uno en su residencia, sin que éste diera muestras de comparecer a los estrados del Tribunal a estar a derecho.

Esto es importante porque impele a determinar si en el proceso dentro del cual se presentó la acción de amparo en estudio se han omitido trámites que se configuran o constituyen esenciales para un debido proceso, y muy especialmente, si la notificación por vía de edicto lesiona el debido proceso, para el caso particular, el derecho a ser oído que esgrime el amparista, cuando la ley manda que la notificación del acto procesal (traslado de demanda) o resolución de que se trate sea de tipo personal, está dentro del catálogo de actuaciones y garantías procesales de corte esencial para el respeto de la garantía instrumental comentada.

Esta operación ya ha sido hecha en el recuento de las constancias procesales que anteceden, observándose que el asunto de divorcio al que accede la presente acción, el Juzgado Primero Seccional de Familia de Panamá ha procedido de acuerdo al derecho vigente al aplicar disposiciones expresas del Código de la Familia para evitar dilaciones injustificadas en la causa sometida a su consideración, máxime si se refiere a asuntos propios del derecho de familia, dentro de los que se prevé el impulso oficioso del Tribunal, cuidando al mismo tiempo las garantías procesales y derechos de las partes.

El artículo 741 del Código de Familia establece que "El impulso y dirección del proceso corresponde al Juez, quien cuidará de su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes e interesados. Iniciado el proceso, el Juez tomará las medidas para evitar su paralización", todo esto bajo apercibimiento al Juez de ser suspendido o destituido del cargo, conforme a los

procedimientos establecidos en el Código Judicial.

El Código de la Familia, (artículo 828) en ciertas materias incluyendo el tema de las notificaciones, salvo disposiciones especiales de dicho Código, remite a las normas respectivas del Código Judicial.

El Código Judicial, sin embargo, no prevé el supuesto de notificación personal del traslado de la demanda a una persona cuyo paradero es conocido, pero que pese a los diversos intentos no se logra hacer formalmente dicha diligencia debido al comportamiento evasivo de quien debe ser notificado.

Ante los varios intentos de notificación personal al señor Fraiz Docabo de la demanda de divorcio instaurada en su contra y para evitar dilaciones que atentan contra el debido proceso, se procedió legalmente a emplear otra de las vías válidas previstas en la Ley para hacer de su conocimiento formalmente el juicio que se le sigue, adoptándose al mismo tiempo las medidas necesarias para evitar indefensión del demandado nombrándosele un defensor de ausente. (Cfr. fojas 23 y 27).

En efecto, al señor Fraiz Docabo para velar por la defensa de sus derechos y ante su no comparecencia personal se le designó un defensor de ausente, cargo que recayó en el licenciado José Gabriel Carrillo Acedo, quien una vez posesionado y en ejercicio del mismo procedió a dar contestación a la demanda de divorcio, negando, como lo manda la Ley, la pretensión en su contra y el derecho aducidos por la parte actora, según se aprecia a fojas 29 y siguientes del expediente principal.

El artículo 726 del Código Judicial establece los supuestos en que la falta de notificación de la demanda no produce nulidad, y en su numeral 2 preceptúa que no hay nulidad "Cuando cuando se ha solicitado esa declaratoria y ha sido denegada".

En el presente proceso de divorcio la primera gestión del señor Fraiz Docabo a través de su apoderado judicial una vez comparció personalmente a los estrados del Juzgado Primero Seccional de Familia, fue promover un incidente de nulidad por indebida notificación, el día 28 de septiembre de 1998, solicitud que le fue negada por el A-quo, mediante Auto 1143, de 20 de noviembre de 1998, y confirmado por el Tribunal Superior de Familia, por medio de la Sentencia de 13 de abril de 1999. (Cfr fojas 1-5; 19-24; y 50-55 del cuaderno incidental).

Esto significa que la demanda de amparo como tal no procede, ya que las instancias jurisdiccionales competentes han denegado la solicitud de nulidad del acto de notificación de la demanda, lo que se traduce en un ejercicio abusivo del derecho de litigar por parte del ahora amparista.

Con todo, a fojas 15 reposa una solicitud de emplazamiento por edicto a cargo de Rogelio Fraiz Docabo, hecha por la licenciada Xenia Ortiz de Palma, apoderada de la demandante, y a foja 16, consta la comparecencia de la señora Maruquel Castroverde para poner en conocimiento al Tribunal de los distintos intentos de notificación infructuosos de la demanda por ella instaurada y pide a la autoridad jurisdiccional que se evalúe dicha situación.

El Pleno estima que no se ha conculcado el derecho a ser oído que asiste al demandado en la causa, ahora amparista, porque incluso el mismo compareció posteriormente al proceso otorgando poder especial inicialmente al abogado Hernán Antonio Bonilla (foja 87), quien posteriormente sustituyó el mandato judicial a cargo de la firma forense Rubio, Alvarez, Solís & Abrego (foja 92), actuales representantes del amparista.

Este Máximo Tribunal aprovecha la oportunidad para expresar que en el presente caso no estamos ante un asunto de infracción de derechos constitucionales que requieren ser protegidos mediante la jurisdicción constitucional de amparo, como lo es el del debido proceso alegado, lo que se

hace patente en la inexistencia dentro de la secuela del asunto de familia bajo examen de actuaciones de hecho, antijurídicas o al margen de la Ley, que conculquen la garantía fundamental. Estamos ante un asunto de mera legalidad procedimental, en el que la autoridad jurisdiccional haciendo uso de la facultades que le otorga el artículo 741 del Código de la familia ha velado por el impulso y rápida tramitación de un asunto sometido a su consideración, lo que es enteramente válido siempre y cuando se resguarden los derechos e igualdad procesal de las partes exigidos por la Ley.

El derecho de defensa del señor Fraiz Docabo, aún durante el término de su no comparecencia fue respetado, y una vez éste se apersonó al proceso, le ha sido igualmente tutelado su derecho de intervenir como parte interesada que es dentro del juicio de divorcio contra él instaurado, y se ha defendido interponiendo las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico prevé.

Las actuaciones del A-quo no revelan violaciones directas a derechos constitucionales del amparista, por cuanto el proceso dentro del cual es parte se ha desarrollado con la regularidad de las formas previstas legalmente y con respeto de los derechos que asisten a los sujetos procesales, especialmente, aquellos propios de las partes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoriad de la Ley, confirma en todas sus partes la Resolución de 13 de diciembre de 1999, emitida por el Primer Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante la cual DENIEGA el amparo de garantías constitucionales incoado por Rogelio Fraiz Docabo contra la orden de hacer contenida en la Resolución sin número de 9 de marzo de 1998, proferida por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Circuito de Panamá, dentro del juicio de divorcio que le sigue la señora Maruquel Desiree Castroverde Crosthwaite.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID S. VILLARRETA, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor David Villarreta, actuando en su propio nombre, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Señala el actor que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ha dictado auto de llamamiento a juicio en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de José De La Cruz Iguala, hecho ocurrido el 7 de marzo de 1987.

Agrega en su escrito que por ese delito fue detenido en la Cárcel Modelo desde el día de los hechos, en donde se mantuvo recluido hasta el 29 de octubre de 1989, fecha en que salió de ella para trabajar en la finca del Mayor Luis Alfonso Puleyo.

Señala que así lo hizo hasta junio de 1992, cuando el prenombrado Puleyo le manifestó que se podía ir sin preocupación alguna.

Considera que en su caso se ha violado el Debido Proceso, porque han transcurrido desde entonces trece años sin que se haya celebrado audiencia alguna, razón por la cual "no se puede mantener este proceso como legal".

También señala el señor VILLARRETA que desde la fecha en que el Mayor Puleyo lo dejó ir, se ha mantenido en su casa a donde las autoridades nunca acudieron a buscarlo.

Finalmente, indicó que todos estos argumentos le sirven como fundamento para solicitar le sea otorgada su inmediata libertad, "basada y fundamentada en la violación al debido proceso, a la presunción de inocencia y al cumplimiento de la normas y leyes" (fs. 2-7 del cuadernillo de habeas corpus).

Acogida la acción de habeas corpus y librado el mandamiento respectivo, el Magistrado Wilfredo Saenz, en su calidad de sustanciador, contestó en los siguientes términos:

> "A. No hemos ordenado la detención preventiva del señor DAVID SAMUEL VILLARRETA, la misma fue decretada por el funcionario de instrucción y es ratificada por este Tribunal, mediante resolución dictada el día 14 de julio de 1988, por medio de la cual formulamos cargos de enjuiciamiento contra los señores ABILIO DIAZ ROJAS Y DAVID SAMUEL VILLARRETA, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio del señor JOSE DE LA CRUZ IGUALA ARENA, hecho ocurrido el día 7 de marzo de 1987.
>
> B. La detención preventiva del señor DAVID SAMUEL VILLARRETA está fundamentada en el señalamiento que en su contra hacen los testigos presenciales Fabián Zárate Díaz, Agustín Padilla Sevillano y José Manuel Iguala Arenas, quienes explican que DAVID VILLARRETA le dio golpes a la víctima con un serrucho, mientras ABILIO DIAZ lo lesionó con el cuchillo y, los motivos obedecen a que los procesados se negaron a pagar el pasaje del autobús que conducía el sujeto pasivo. Estos argumentos están sustentados en el auto de enjuiciamiento.
>
> El auto de enjuiciamiento fue impugnado y la Sala Penal de la Honorable Corte de Justicia por medio de resolución dictada el 18 de mayo de 1990, visible de fojas 355 a 364, confirmó el auto de enjuiciamiento impugnado.
>
> En vista de que el señor VILLARRETA no estaba registrado como detenido en ninguno de los centros penitenciarios, fue necesario ordenar su captura y notificarle por edicto emplazatorio la fecha de la audiencia fijada para el día 19 de octubre de 1998 (fs. 393-404), luego de publicado el edicto se le declaró en rebeldía y, no fue posible celebrar la audiencia porque el abogado defensor del otro procesado desempeñaba un cargo en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia y fue necesario suspender la audiencia (fs. 405-406).
>
> Fijamos el día lunes 14 de junio de 1999 como nueva fecha de audiencia (fs. 408) y tampoco fue posible llevar a cabo la Vista Oral, porque el abogado defensor del procesado VILLARRETA presentó un incidente de nulidad (fs. 419), por tanto una vez agotado el

trámite procesal respectivo, denegamos el incidente de nulidad por medio de resolución dictada el 10 de agosto de 1999, visible de fojas 441 a 447 y ese fallo no fue impugnado, en consecuencia la nueva fecha de audiencia ha sido fijada para el 27 de marzo del 2000 (fs. 456).

De acuerdo con información suministrada por el Sub-teniente Félix Manzane, con placa 6712, mediante nota de 13 de agosto de 1999, visible a fojas 423, el señor DAVID SAMUEL VILLARRETA fue aprehendido el 12 de agosto de 1999.

La acción penal en esta causa no está prescrita porque la interrumpió el auto de enjuiciamiento, una vez quedó ejecutoriado con el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el día 18 de mayo de 1990, tampoco el señor VILLARRETA ha guardado detención preventiva por un período de tiempo, que corresponda al mínimo de la pena contemplada para el homicidio en cualesquiera de sus modalidades.

C. A partir de la fecha, hemos remitido el Oficio N° 468-S. F., al Lcdo. Armando Avendaño, Director del Centro de Resocialización La Joya, para que filie al señor DAVID MANUEL VILLARRETA, portador de la cédula de identidad personal N° 2-109-801, sindicado por el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de JOSE DE LA CRUZ IGUALA, bajo la responsabilidad del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia y, remitimos a la Honorable Magistrada Sustanciadora el expediente en referencia." (fs. 12-13)

A juicio del Pleno de la Corte, la detención del señor DAVID SAMUEL VILLARRETA es legal, porque fue dictada por autoridad competente, o sea el señor Fiscal Auxiliar de la República, el 3 de abril de 1987 y permanece detenido bajo órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en virtud de que éste abrió causa criminal en su contra mediante el auto dictado el 14 julio de 1988, y confirmado mediante resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 18 de mayo de 1990 (fs. 355 a 364 del sumario).

Observa el Pleno que la orden de detención (f. 99 del sumario) y el referido auto que abre causa criminal en contra del señor DAVID SAMUEL VILLARRETA, visible de fojas 296 a 306 del expediente de las sumarias, no son violatorios de las exigencias establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, ni de las normas constitucionales sobre la materia.

Además, es importante aclararle al actor que el hecho de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial haya dictado auto de enjuiciamiento en su contra, implica que éste ha encontrado plena prueba de la existencia del hecho punible y graves indicios de responsabilidad en su contra.

En efecto, al imputado VILLARRETA lo vinculan al hecho punible, entre otras pruebas, las declaraciones de Ernesto Rojas (fs. 61 a 64 del sumario), Fabián Zárate (fs. 179-182 del sumario), y Agustín Padilla Sevillano (fs. 183 a 185 del sumario).

Así las cosas, procede la declaratoria de legalidad de la detención ordenada y mantenida sobre el señor DAVID SAMUEL VILLARRETA.

Finalmente, esta Superioridad estima conveniente aclararle al actor que la Ley 43 de 1997 a la que hace referencia en su escrito, no contempla ninguna disposición que sea aplicable a su caso.

Dicha Ley establece lo siguiente:

"Artículo 1. Se adiciona el artículo 2148-A al Código Judicial, así:

Artículo 2148-A. La detención preventiva será revocada por el juez sin más trámites, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la Ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las constancias procesales. En estos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial.

Las resoluciones que dicte el Organo Judicial con el objeto de cumplir lo dispuesto en este artículo, no admitirán recurso alguno.

Artículo 2. El artículo 2147 del Código Judicial queda así:

Artículo 2147. Si al dictar sentencia condenatoria resultare que ya el imputado ha cumplido en prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surta la consulta o apelación.

Si la sentencia fuese absolutoria, la apelación no impedirá que el reo sea puesto inmediatamente en libertad. Sin embargo, en el caso de imputados por narcotráfico o delitos conexos, el juez sustituirá la detención preventiva por otra medida cautelar que garantice la presencia del imputado en el juicio.

Artículo 3: Se ordenará la inmediata libertad de las personas sujetas a detención preventiva o condenadas que, conforme a dictamen del Instituto de Medicina Legal, se encuentren en la fase terminal de alguna enfermedad. Esta medida se adoptará con presindencia del delito por el cual ha sido sindicada la persona.

En el caso de la detención preventiva, ésta será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial.

En el caso de los detenidos condenados, la libertad será condicional conforme lo establece el Capítulo IX de del Título III del Libro I del Código Penal".

Como se observa, el artículo 2 hace referencia a detenidos cuyas sentencias condenatorias hayan sido consultadas o apeladas, mientras que el artículo 3 se refiere a aquellas personas que, encontrándose detenidas, están en la fase terminal de alguna enfermedad.

Evidentemente el señor VILLARRETA no se encuentra en ninguna de esas circunstancias.

Tampoco le es aplicable el artículo 2148-A, ya que éste beneficia solamente a personas cuya detención preventiva efectiva haya sobrepasado el mínimo de la pena que la Ley señala para el delito que se le imputa.

En el presente caso, el imputado reconoce que fue detenido en marzo de 1987 y que estuvo recluído en la Cárcel Modelo hasta el 29 de octubre de 1989, fecha en que salió de ésta para ir a trabajar a la Finca del Mayor Puleyo, lo que hizo hasta junio de 1992, cuando él le manifestó que se podía ir. Agrega que desde es momento hasta el día 12 de agosto de 1999, fecha en que fue nuevamente detenido, vivió en su residencia ubicada en Agua Buena de Chilibre (fs. 3 y 4 del cuadernillo de habeas corpus).

Además, a fojas 423 del sumario se lee el informe de novedad rendido por el Sub-teniente Felix Manzane, en donde se indica que el imputado VILLARRETA fue nuevamente detenido el día 12 de agosto del presente año.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de DAVID SAMUEL VILLARRETA , quien se encuentra a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA B.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DESISTIMIENTO PRESENTADO DENTRO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICDO. MANUEL E. CAJAR M. A FAVOR DE RUDY SUERO, CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema, la acción de habeas corpus presentada por el licenciado MANUEL E. CAJAR a favor de RUDY SUERO, contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "... a) No es cierto que se ordeno la detención del ciudadano Rudy Suero.
>
> b) No se ha ordenado la detención, por tanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho para la misma.
>
> c) El señor Rudy Suero, fue remitido a las oficinas de Migración central para verificar su status migratorio, después de analizar su expediente y percatarnos de que el mismo se encuentra legal, procedimos a liberarlo, por tanto no se encuentra en nuestra custodia ni bajo nuestras órdenes."

Así las cosas, advierte el Pleno que el favorecido con la presente acción constitucional se encuentra gozando de libertad, con lo cual se configura el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia; y consecuentemente sería infructuoso iniciar un procedimiento de habeas corpus. Procede entonces, ordenar el cese del procedimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el CESE del procedimiento en la presente acción de habeas corpus; y en consecuencia, DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE FERMÍN LARA SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE COCLÉ. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada GLORIA CONTE DE QUIROS, Defensora de Oficio del Circuito de Coclé, ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, de fecha 1 de diciembre de 1999, por medio de la se decreta legal la detención preventiva de FERMÍN LARA SÁNCHEZ.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al conocer en primera instancia de la acción constitucional propuesta, decidió declarar legal la detención preventiva expedida originalmente por el Fiscal de Circuito de Coclé. La resolución comentada se basó en que de las piezas procesales se colige que la medida cautelar cumple con las formalidades constitucionales y legales pertinentes, debido a que tal medida obedece a que el señor FERMÍN LARA SÁNCHEZ se encuentra sindicado por el delito Contra el Patrimonio, sumarias éstas que se inician con la denuncia suscrita por la señora MAYRA VICTORIA MONTAÑO GORDÓN, así como la aceptación parcial de los hechos por parte del sindicado.

Aprecia el PLENO a foja 13 del expediente principal que, en su parte pertinente, la resolución apelada se basa en;

> Analizando el presente recurso bajo las premisas que señala nuestra legislación para la aplicación de medidas cautelares (art. 2147 del Código Judicial), consideramos que si bien es cierto, no existe peligro en la adquisición o pérdida de pruebas ni existe peligro de fuga del sindicado, ya que consta en el expediente la denuncia de la ofendida y la aceptación parcial de los hechos por parte del sindicado, sí podemos observar que el procesado se encuentra bajo investigación por hechos similares al que hoy se investiga y de los cuales gozaba de una medida cautelar diferente a la detención preventiva (f. 42-43), por la cual consideramos que se ha cumplido con las formalidades del artículo 2159 del Código Judicial, acreditamiento del hecho punible, comprobación de la vinculación subjetiva del detenido, además de existir indicios de peligrosidad en la personalidad del imputado de continuar cometiendo delitos de esta índole, ya que el hecho que nos ocupa se suscitó en un callejón a plena luz del día."

Por su parte la recurrente, fundamenta su disconformidad con la sentencia proferida por el Tribunal Superior en el sentido de que no se ha configurado el delito de robo, toda vez que el mismo quedó en grado de tentativa, y que esto se debe a la propia declaración de la víctima, la cual señala que hubo forcejeo, que en ese momento ella gritó y que el señor FERMÍN LARA SÁNCHEZ salió corriendo, sin despojarla de sus pertenencias.

Procede esta Superioridad al análisis de las piezas de instrucción allegadas al expediente, así como de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, que consideró que había plena legitimidad formal en la medida de privación de libertad adoptada.

El sumario se inicia con la Nota dirigida a la Corregidora de Penonomé suscrita por el Director de la Zona de Policía de Coclé (fs. 1) donde adjunta

Informe de Novedad que da cuenta que a las 3:20 de la tarde, mediante llamada de radio de comunicación a agentes de la Policía, les informaron que en la altura del Callejón de la "Z", saliendo al mercado, la señora MAYRA VICTORIA MONTAÑO GORDÓN fue atacada por un sujeto de nombre FERMÍN LARA SÁNCHEZ, donde éste le agarró, forcejeándola con intenciones de tomar su cartera, pero al no lograr sus intenciones se dio a la fuga siendo capturado por la facción de grupo de ciclista de la Policía Área "A" de Penonomé frente al Bar Mingo.

En base al informe antes anotado, la Corregiduría de Penonomé, así como posteriormente la Fiscalía de Circuito de Coclé ordenaron realizar todas las diligencias necesarias a objeto de acreditar la existencia del hecho punible así como la responsabilidad penal que le cabe al responsable.

Visible a foja 4 del expediente que contiene las sumarias, se ja constancia de la denuncia de la ofendida señora MAYRA VICTORIA MONTAÑO GORDÓN, quien manifestó que el día sábado 20 de noviembre de 1999, a eso de las 3:00 de la tarde, saliendo del callejón de la "Z", donde se toman los buses hacia Antón, el sujeto investigado la agarró, forcejearon, el sujeto la golpeó en el pecho y la aruñó en la mano izquierda.

Consta a foja 15 del expediente penal el examen médico legal realizado a la ofendida en el Instituto de Medicina Legal de la Provincia de Coclé, quien presenta excoriación de 1 cm., superficial, en dorso de muñeca izquierda.

Se aprecia en las sumarias (fs. 18-20) la declaración indagatoria rendida por el sindicado FERMÍN LARA SÁNCHEZ, donde niega que pensó robarle a la denunciante, que no sabe lo que sucedió para hacerle esa fuerza y que se encuentra arrepentido de lo que pasó, ya que él estaba embriagado.

El Pleno comparte las motivaciones de la resolución recurrida, por las razones que considera conveniente exponer.

Es evidente que la detención preventiva puede realizarse cuando, a pesar de no darse las circunstancias que permite esta medida extrema de naturaleza personal, cuando así lo aconsejen las circunstancias especiales que han rodeado la comisión del delito que se imputa al autor, por las particularidades de su autor, y que reflejen su peligrosidad, como ha ocurrido con ocasión de la apelación que ocupa al Pleno. La comisión del delito, aún frustrado, se produjo en horas de la tarde, como se acredita en el informe de novedad, visible a foja 2 del expediente, estando la víctima, quien estaba acompañada de una menor, robo que no pudo consumarse, por la resistencia de su víctima, que frustró el acto delictivo.

Aprecia, además, el Pleno, que el detenido, quien había sido beneficiado con una medida cautelar (foja 42) distinta a la detención preventiva por la Fiscalía del Circuito Judicial de Coclé, a pesar de lo cual participó en el hecho delictivo similar al perpetrado en la ocasión anterior, y que denota la peligrosidad del detenido y la ausencia absoluta de arrepentimiento, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida en apelación, con fundamento en el literal c) del artículo 2147-C del Código Judicial, en relación con el artículo 2148 del Código Judicial.

Es evidente que la disposición contenida en el artículo 2148 del Código Judicial, conforme la redacción que le introdujo el artículo 80 de la Ley 42 de 1999, ha de ser interpretado en forma sistemática con otras normas de la ley procesal-penal, en particular con el artículo 2147-C, literal c) del Código Judicial, interpretación que, desde luego, habrá de realizarse a la luz de las circunstancias específicas que han motivado la detención preventiva del sindicado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 1° de diciembre de 1999, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO

JUDICIAL, y, como consecuencia, MANTIENE la detención preventiva de FERMÍN LARA SÁNCHEZ, decretada; y ordena que sea puesto a órdenes de la Fiscalía del Circuito Judicial de Coclé.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR EL LICENCIADO JULIÁN GARCÍA TREJOS EN FAVOR DE JOSÉ ISAÍAS BENÍTEZ ROSERO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus propuesta por el licenciado Julián García Trejos, en favor de José Isaías Benítez Rosero contra la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El beneficiario de esta iniciativa constitucional subjetiva, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joyita, luego de haber sido condenado a la pena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, por la comisión del delito de robo agravado en perjuicio de Bernarda Gómez Moreno.

De conformidad con el actor procesal, la ilegalidad de la privación de libertad se fundamenta en que José Isaías Benítez Rosero, ha sido víctima de un delito Contra la Administración de Justicia. Alega, que la identidad del imputado fue suplantada por Saúl Rivera, que es el verdadero autor del delito de robo por el cual se mantiene recluido a su representado.

HISTORIA DEL CASO

Los antecedentes dan cuenta que el 17 de julio de 1991, fueron detenidos José Isaías Benítez Rosero y Javier Alexis Mudarra Gómez por presunto delito de robo en perjuicio de Bernarda Gómez Moreno (antecedentes, f. 4).

En dicho proceso, José Isaías Benítez Rosero fue encontrado culpable y condenado a tres años de prisión mediante sentencia de 30 de octubre de 1997, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal (antecedentes, fs. 4-9). La resolución aludida, le fue notificada mediante edicto emplazatorio, debido a que se encontraba prófugo (f. 162) y fue puesto a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario el 16 de abril de 1998 (f. 175).

Mediante nota suscrita el 4 de agosto de 1999, el recurrente hace de conocimiento del Ministerio Público que, en ejercicio de sus funciones como defensor de oficio, ha "... descubierto la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la administración de justicia ..." consistente en que "... el ciudadano SAUL RIVERA fue la persona detenida el 17 de julio de 1991 junto con JAVIER ALEXIS MUDARRA, pero simuló ante la autoridad llamarse "JOSE BENITEZ ROCERO" (sic) ..." (antecedentes, f. 1).

A raíz de tal denuncia, se inicio la instrucción de un sumario por delito

contra la Administración de Justicia en perjuicio de José Benítez Rosero.

Mediante providencia de 6 de octubre de 1999, la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá ordenó la práctica de una diligencia pericial de cotejo, a fin de determinar si las huellas dactilares del sujeto que fue aprehendido el 17 de julio de 1991 en La Chorrera (quien aparece registrado con el nombre de José Isaías Benítez Rosero), coinciden con las huellas dactilares del ciudadano que aparece recluido en La Joyita, identificado como José Isaías Benítez Rosero, con cédula 8-368-626 (f. 203).

En respuesta a la solicitud anterior, los peritos concluyen que:

> "... El ciudadano que se encuentra interno en el Centro Penitenciario La Joyita, en el Pabellón # 2, Sección # 4, bajo el nombre de JOSE ISAIAS BENITEZ ROSERO, no es la misma persona que aparece reseñada en la Agencia de Chorrera el día 17 de julio de 1991, con las fichas CH-2999 y A-62501. Además informamos que la persona que aparece reseñada en la Agencia de la Chorrera, para la fecha de 17 de julio de 1991, corresponde al ciudadano SAUL AUGUSTO RIVERA HENRIQUEZ, cedulado 8-375-347; debido a que este ciudadano al momento de ser detenido en Chorrera, suplantó la identidad del ciudadano JOSE ISAIAS BENITEZ ROSERO ..." (antecedentes, f. 208).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte a determinar la legalidad de la detención punitiva en que se mantiene a José Isaías Benítez Rosero.

En primer lugar, debe la Corte manifestar que, si bien, no es objeto natural del proceso de habeas corpus la evaluación rigurosa de los elementos de prueba allegados a la encuesta penal, resulta imprescindible en esta causa, la consideración del informe pericial rendido por el Departamento de Criminalística, Servicios Periciales y Laboratorio de Ciencias Forenses de la Policía Técnica Judicial (vid. fs. 206-209).

Del precitado informe se colige que, efectivamente, ha ocurrido una suplantación de identidad en perjuicio de José Isaías Benítez y que no existe vinculación entre el beneficiario de esta iniciativa constitucional subjetiva y el ilícito por el cual se le mantiene privado de libertad, con lo que queda sin fundamento legal su reclusión (f. 20).

La acción de habeas corpus, establecida en el artículo 23 de la Constitución Nacional, tiene por finalidad primordial garantizar que ninguna persona permanezca privada de su libertad fuera de los casos que prescriben la Constitución y la Ley (Cfr. sentencia de 27 de julio de 1999).

El Pleno observa que, en el caso sub judice nos encontramos ante una situación excepcional, a la que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 2592 del Código Judicial que señala:

> "Si la detención o prisión carece de fundamento legal, el Tribunal de Habeas Corpus así lo hará costar en una resolución y ordenará la libertad inmediata de la persona detenida o presa arbitrariamente ...".

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la prisión en que se mantiene a José Isaías Benítez Rosero, por la comisión de delito de robo, en perjuicio de Bernarda Gómez Moreno, decretada mediante sentencia de 30 de octubre de 1997, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal y ORDENA que el detenido sea puesto en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUO YUT WAN CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis A. Carrasco Moreno, presentó el 13 de diciembre de 1999 escrito ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la aclaración de la sentencia dictada el 25 de noviembre de 1999 por el Pleno de esta Corporación de Justicia, para resolver el habeas corpus interpuesto en favor de la menor Luo Yuhuan, de nacionalidad china, detenida y puesta a órdenes del Juzgado Seccional de la Niñez y Adolescencia del Segundo Circuito Judicial con sede en San Miguelito y posteriormente puesta a órdenes del Director de Migración y Naturalización (fs. 1 a 4).

En la sentencia de 25 de noviembre de 1999, esta Superioridad resolvió el habeas corpus ordenando el cese del proceso y el archivo del expediente por las siguientes razones:

> "Al estudiar el presente negocio, el Pleno de esta Corporación de Justicia observa que el Director de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia no ha ordenado la detención de la menor LUO YU HUAN, sino que la Juez de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Circuito de la Provincia de Panamá dispuso su internamiento en el Centro Casa Hogar de Tocumen para protegerla porque es una menor de edad en situación de riesgo social, ya que no habla el idioma español, no tiene parientes en el territorio nacional y la parte actora no ha aportado pruebas con la demanda de habeas corpus que demuestren que el señor Wu Shi Hui (fs. 5-7), es tío de la menor LUO YU HUAN.
>
> La acción de habeas corpus puede ser preventiva o reparadora y ambas acciones tienen como presupuesto procesal necesario la existencia de una orden de detención escrita, que no se ha dado en este caso.
>
> Como no existe orden de privación de libertad girada contra la menor LUO YU HUAN, ni ha sido detenida, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial."

El licenciado Carrasco Moreno pidió al Pleno que le aclare quién mantiene bajo su custodia a la menor Luo Yuhuan. Esta solicitud la hizo en los siguientes términos:

> "1. El informe de conducta presentado por el Director Nacional del Departamento de Migración y Naturalización indica que no es cierto que ordenó la custodia de la menor en cuyo favor se interpuso este recurso; manifiesta en contrario, que fue el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de Panamá quien según

Resolución 1433-99 de 7 de octubre de 1999 ordenó su custodia y protección. Pero al revisar el texto de la resolución, cuya copia autenticada obra en Autos (sic) lo siguiente:

'2. PONER al menor LUO YOU WANG de 13 años de edad, de nacionalidad asiática, bajo órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, a fin de definir el Status Jurídico Migratorio de la prenombrada menor.

3. OFICIAR a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización para que realicen los trámites pertinentes.'

2. A pesar de la manifestación (sic) manifestada en el informe de conducta por el Director de Migración en el mismo indica: 'Por imperio de la Ley ponemos a órdenes de la Suprema Corte de Justicia a la menor LUO YUHUAN, de nacionalidad China.' Nuestra aclaración se solicita en los siguientes términos:

1. Si la menor no está a órdenes del Director de Migración, porqué la pone a disposición de pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por razón de este recurso.

2. Solicitamos se nos aclare si mediante resolución judicial, que obra en autos la menor se pone a órdenes de la Dirección de Migración, porqué el Director en su informe de conducta manifiesta justo lo contrario.

3. Pese a lo anterior, la menor no está, según lo dispuesto por esta Corte, a órdenes de la Dirección de Migración, y según lo señalado en la Resolución 1433-99 de 7 de octubre de 1999 del Jugado de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de la Provincia de Panamá fue puesta a órdenes del funcionario acusado, quien es responsable de la privación de libertad que viene sufriendo dicha menor."

Tal como lo señaló esta Superioridad en la sentencia de 25 de noviembre de 1999, la menor Luo Yuhuan no ha sido detenida preventivamente, puesto que contra los menores de edad no cabe dicha medida cautelar de privación de la libertad, sin embargo en los casos de menores en circunstancias especialmente difíciles, existen ciertas medidas de protección que el Juez de la Niñez y la Adolescencia puede aplicar para salvaguardar su seguridad.

En los artículos 495, 496, 497 y 498 del Código de la Familia, se establece cuándo se entiende que un menor está en circunstancias difíciles y qué medidas deberá tomar el juez para solventar esta situación. Específicamente en los artículos 495 y 496 de dicho cuerpo legal se señala que en los casos de menores que se encuentran en situación de riesgo social, el Juez de Menores podrá ubicarlos en colocación familiar u hogar sustituto por un período provisional, y en este caso la representación del menor será ejercida por la persona que el juez designe.

Por otra parte, el artículo 498 del Código de la Familia señala que un menor será considerado en situación de riesgo social, entre otros casos cuando: "3. Abandone el domicilio de sus padres o guardadores;". Este es precisamente el caso de la menor Luo Yuhuan, quien ha abandonado el domicilio de sus padres y por ello el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Segundo Circuito Judicial de Panamá ordenó que fuera ingresada al Centro Casa Hogar de Tocumen, como medida de protección a su integridad física y moral y no como medida cautelar de detención preventiva o de privación de su libertad, hasta tanto pueda resolverse su status migratorio.

El Juez de la Niñez y la Adolescencia también ordenó lo conducente para que la Dirección de Naturalización y Migración, quien es la autoridad legalmente

facultada para ello, hiciera las gestiones necesarias para repatriar a la menor a su lugar de origen, porque la misma llegó ilegalmente a Panamá en un barco proveniente de Colombia y no existe ninguna prueba que acredite que tiene familiares o alguna persona que puedan responsabilizarse legalmente por ella en nuestro país.

El artículo 986 del Código Judicial establece que el juez, de oficio o a petición, puede completar, modificar o aclarar la sentencia en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, dentro de los tres días siguientes a su notificación. Señala dicho artículo que, dentro del mismo término, puede el juez que dictó una sentencia aclarar la parte resolutiva en lo que se refiere a frases obscuras o de doble sentido.

El último párrafo del artículo citado establece que toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error cometido.

El caso que nos ocupa no es de los contemplados en los supuestos del artículo 986 del Código Judicial, porque la solicitud de aclaración y corrección de sentencia no se refiere a la parte resolutiva de la Sentencia de 25 de noviembre de 1999, sino a su parte motiva y a los elementos de juicio utilizados por el Pleno para resolver el habeas corpus presentado y de los que, según se infiere de la solicitud de la parte actora, no fueron considerados por esta Superioridad para tomar una decisión de fondo.

Además, la parte resolutiva de la sentencia objeto de esta solicitud, al ordenar el cese del procedimiento congruente con el hecho de que la menor ha sido ingresada al centro Casa Hogar de Tocumen para protegerla mientras se decide su estatus migratorio por la autoridad competente y dicha sentencia no contiene en su parte resolutiva ningún punto oscuro o dudoso, o algún error aritmético o de escritura que deba ser corregido.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de la sentencia de 25 de noviembre de 1999, presentada por el licenciado Luis Carrasco Moreno.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTOBALINA GONZALEZ CONTRA LA FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Martha Sánchez, en representación de CRISTOBALINA GONZALEZ, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial.

Al respecto la abogada de la prenombrada CRISTOBALINA GONZALEZ expresó lo siguiente:

> PRIMERO: Mi poderdante se encuentra privada de su libertad desde mayo del presente año en el Centro de Rehabilitación Femenino por órdenes de la Fiscal Segunda Superior.
>
> SEGUNDO: A la misma se le acusa por el delito genérico contra la Vida y la Integridad en perjuicio de la menor ROXANA GONZALEZ.
>
> TERCERO: Conceptuamos que la detención que sufre nuestra poderdante es ilegal habida consideración de las piezas procesales demuestran que no fue ella quien causó las lesiones que le produjeron la muerte a su menor hija.
>
> ... las pruebas hasta ahora incorporadas a la investigación no vinculan de ninguna manera a nuestra defendida con el hecho criminal que nos ocupa; toda vez que estas se dirigen contra el concubino de nuestra representada y lo vinculan como la persona que intencionalmente causó las lesiones que le ocasionaron la muerte a la menor.
>
> ... las pruebas que integran el expediente no la comprometen al grado que se haya decretado su detención preventiva. De allí que somos del criterio que su detención no se ajusta a derecho y por tanto debe ser objeto de una medida cautelar distinta de la detención preventiva (fs. 1-3).

MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Mediante providencia de 7 de diciembre de 1999, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia libró mandamiento de habeas corpus a favor de CRISTOBALINA GONZALEZ contra la Fiscal Superior del Primer Distrito Judicial, quien remitió su informe mediante el Oficio N° 1884 de 9 de diciembre de 1999, en donde expresó que:

> "A) Esta agencia del Ministerio Público no ordenó la detención preventiva de CRISTOBALINA GONZALEZ VEGA, la misma fue ordenada por el señor Fiscal Auxiliar de la República; licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA, mediante providencia fechada 7 de Mayo de 1999, visible de fojas 83 a 87 del sumario, y mantenida por este Despacho con la providencia con fecha 11 de mayo de 1999, visible de fojas 94-95.
>
> B) Los motivos de hecho y de derecho que consideró el funcionario de instrucción para ordenar la detención preventiva de CRISTOBALINA GONZALEZ VEGA, aparecen consignados en la mencionada providencia, como es el informe preliminar de Necropsia visible a fojas 11, que demostró el hecho punible. Aunado al informe visible a fojas 25, sobre las observaciones y resultado del examen efectuado por el doctor VICENTE PACHAR a la víctima, (niña de 3 años de edad), y del informe del Hospital del Niño (fojas 33-34), indicando que el día 29 de abril ingresó la niña a ese hospital, con "Diagnóstico de Trauma Cráneo Encefálico y Observación por Maltrato Físico y Negligencia". Así mismo se tiene la declaración de la propia imputada, las contradicciones y falsedades, corraborada en su versión de los hechos y con lo declarado por su concubino ALEJANDRO CORDOBA LAGUNA. Todo lo cual constituye graves indicios en su contra.
> ...
> C) En la actualidad la señora CRISTOBALINA GONZALEZ VEGA, se encuentra en el Centro de Rehabilitación Femenino, a órdenes de la suscrita, y se ha mantenido su detención por su participación de acción por omisión, al haber permitido, según declara la propia imputada en diligencia de fojas 13-18, que su concubino maltratara

> y causara lesiones mortales a la niña ROXANA MARUQUEL de tres años de edad, según consta en le protocolo de Necropsia a fojas 98-104; y demás pruebas adicionadas, la declaración del médico forense de fojas 208-210, y diligencia de Reconstrucción de los Hechos de fojas 343-351" (fs. 6-7).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Para comprobar la legalidad de la orden de detención decretada contra CRISTOBALINA GONZALEZ por el Fiscal Auxiliar de la República y mantenida por la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, es necesario examinar tanto la diligencia en que se decretó como el sumario, a fin de determinar si ésta se ajusta a las exigencias establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Para ello procedemos a transcribirlos:

> "Artículo 2148. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva".
>
> "Artículo 2159. En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará:
>
> 1. El hecho imputado;
> 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible;
> 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena".

A juicio de esta Superioridad en el presente caso se ha cumplido con los requisitos señalados en las normas transcritas.

En primer lugar, a la sindicada se le investiga por un supuesto delito de homicidio, delito que tiene señalada pena mínima mayor de dos años de prisión y cuya existencia se encuentra comprobada por los elementos probatorios que obran en el sumario.

También ha quedado acreditada la vinculación de la sindicada GONZALEZ VEGA a este hecho punible.

En efecto, en el Protocolo de Necropsia suscrito por el doctor José Vicente Pachar, visible a fojas 99 a 103 del sumario, se acreditan plenamente las lesiones que configuran el delito investigado.

Asimismo, consta en el sumario (fs. 208-210) la declaración jurada del doctor José Vicente Pachar en donde señala: " ... debo agregar que de acuerdo a mi conocimiento y experiencia se trataba de un caso de maltrato físico infantil de consecuencias fatales".

También se leen en el expediente de antecedentes las declaraciones indagatorias rendidas por la sindicada y su concubino, Alejandro Córdoba.

La sindicada Cristobalina González declaró que:

> "Cuando yo regresé la niña estaba aruñada en la cara y él me dijo que se la había llevado para allá atrás de la Pepsi y ella se había aruñado con un palo. Después que comimos él se la llevó a eso de las ocho de la noche cuando estábamos en la Pepsi, en el estacionamiento se llevó a la niña a la fuerza para el comedor de la Pepsi. Cuando

> me la trajo estaba golpeada, es decir en la boca y en la frente. Yo le pregunté que le había pasado a la niña y él me dijo que ella estaba corriendo y que se había caído y golpeado ... Al siguiente día ... a las nueve y media ... el cogió a la niña a la fuerza y se la llevó para el comedor de la Pepsi. Como a las diez y media me la trajo desmayada ..." (fs. 67 a 73)

Las declaraciones de su concubino también la vinculan directamente al hecho punible que se le imputa (fs. 57-66, 173-177).

Por otro lado, considera esta Superioridad que, dada la circunstancia de que los sindicados mantienen una relación afectiva, se encuentra latente el peligro de que la recurrente desatienda el proceso, ya que su declaración vincula directamente al sindicado Alejandro Córdoba al hecho que se le imputa.

En cuanto al artículo 2159 del Código Judicial, considera esta Corporación de Justicia que en la presente causa la orden de detención se ajusta a lo dispuesto en él, ya que al revisar la diligencia mediante la cual se ordena la detención, visible a fojas 83 a 87 del sumario, se aprecia con toda claridad que en ella aparece expresado el hecho imputado, los elementos que lo comprueban y la vinculación de la sindicada CRISTOBALINA GONZALEZ VEGA al mismo.

La orden de detención girada contra la sindicada debe declararse legal porque se ajusta completamente a los preceptos transcritos y no viola las normas constitucionales sobre la materia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de CRISTOBALINA GONZALEZ VEGA en el presente caso y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE AZAEL FUENTES BETHANCOURT, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL, PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDILBERTO VASQUEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez ha interpuesto dos acciones de habeas corpus preventivo a favor de AZAEL FUENTES BETHANCOURT: uno contra el Director de la Policía Nacional y otro contra el Fiscal Auxiliar de la República.

En ambos escritos el licenciado Vásquez señaló que:

> "PRIMERO: A lo largo del sumario, por motivo del robo cometido al Banco General de Chanis, no existe ningún señalamiento directo o

indirecto que indique que el señor AZAEL FUENTES BETHANCOURT sea uno de los autores del delito denunciado.

SEGUNDO: Las personas que estuvieron presentes al momento de la ocurrencia de los hechos, han acudido a los libros de registro de delincuentes a fin de tratar de reconocer a los sujetos que perpetraron dicho ilícito, diligencias estas que han arrojado resultados negativos, aunado al hecho de que las características físicas mencionadas por estas personas no corresponden a la de nuestro representado.

TERCERO: El DIIP de Ancón, como siempre "según informaciones" de ellos señalan que nuestro cliente fue una de las personas que cometió dicho ilícito y por tal motivo se le quiere detener, informaciones estas que no tienen ningún soporte legal que fundamenten las mismas y por el capricho de estos funcionarios se pretende privarlo de su libertad." (fs. 1-2 y 9-10)

Acogidas las acciones, se libraron sendos mandamientos de habeas corpus contra de las autoridades demandadas a fin de que rindieran el informe de rigor.

Al respecto, el Director General de la Policía Nacional, manifestó lo siguiente:

"A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano AZAEL FUENTES BETHANCOURT, ni por escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.

C. No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes a la persona que se ha mandado a presentar. El mismo no ha estado en las instalaciones de la Policía Nacional." (f. 6)

Por su parte, el Fiscal Auxiliar de la República indicó que:

"A) No es cierto que se haya ordenado la detención preventiva del señor AZAEL FUENTES BETHANCOURT;
B) No es aplicable en base a la respuesta del punto anterior;
C) El señor AZAEL FUENTES BETHANCOURT no se encuentra bajo nuestra custodia y tampoco se ha transferido a órdenes de otro despacho, de acuerdo a las respuestas anteriores." (f. 14)

Posteriormente, mediante resolución de 20 de diciembre de 1999, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso acumular ambas acciones en atención a que en ellas se solicitaba se declarase ilegal la detención de la misma persona.

Ahora bien, esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que en las acciones de habeas corpus preventivo, es necesario la existencia de una orden de detención. En el presente caso, se ha comprobado plenamente que las autoridades demandadas no han emitido ninguna orden de detención contra el señor FUENTES BETHANCOURT ni ha sido detenido, por tanto, no existe uno de los presupuestos procesales que dan vida a esta acción.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de habeas corpus promovido por el licenciado Edilberto Vásquez, en representación de AZAEL FUENTES BETHANCOURT, y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR ROBERTO ALEXANDER LOPEZ DEAN, EN SU PROPIO NOMBRE, CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor ROBERTO ALEXANDER LOPEZ DEAN, actuando en su propio nombre, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus contra la Directora General del Sistema Penitenciario.

El actor sustentó su pretensión en los siguientes hechos:

> "Mi disconformidad consiste en que a la fecha estoy a órdenes del Sistema Penitenciario Estatal y no he sabido quién me condenó y cuando fui a una audiencia, qué fiscal tuvo el caso y que juez me condenó y cuándo fui condenado y cual fue la causa de la condena".

Acogida la presente acción de habeas corpus por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento contra la Directora General del Sistema Penitenciario, quien mediante Nota N° 2030-DGSP-al. de 17 de diciembre de 1999, rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "A. La suscrita en calidad de Directora General del Sistema Penitenciario no ha impartido orden de detención en contra del prenombrado, verbalmente ni por escrito.
>
> B. No podemos hacer referencia a los motivos o fundamentos de hecho o de derecho porque no la hemos ordenado.
>
> C. El señor ROBERTO ALEXANDER LOPEZ DEAN, se encuentra actualemente a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, recluido en el Centro Penitenciario La Joya, fue sentenciado el 10 de junio de 1999 por le Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá a la pena de veinticuatro meses de prisión, por el delito de Lesiones Personales en perjuicio de Osvaldo Antonio Sánchez y César Carcía. Dicha pena fue puesta en ejecución el día 26 de mayo de 1999, por lo que cumplirá las dos terceras partes de la pena el 26 de septiembre del 2000, y la totalidad de la misma el 26 de mayo del 2001, según consta en el mandamiento N° 2001-DGSP del 17 de diciembre de 1999" (fs. 7-8).

Del informe rendido por la Directora General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, se desprende que Roberto Alexander López Dean está cumpliendo a órdenes de esa Dirección, pena de prisión de 24 meses, por el delito de lesiones personales, que le impuso el Juez Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y por tanto su detención es legal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención del señor ROBERTO ALEXANDER LOPEZ DEAN en el presente caso y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL ATENCIO TEJEDOR CONTRA EL JUEZ DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE VERAGUAS. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación llegó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia Acción de Hábeas Corpus Preventivo presentada por el Licenciado SILVIO QUIÑONEZ CORDOBA, con el objeto de que se declare ilegal la orden de apremio corporal contra el señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR proferida por la JUEZ DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS.

La alzada se dirige contra la Resolución N° 4 H. C. -C.- de 7 de octubre de 1999 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, que declara legal la orden de apremio corporal contra el señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR contenida en la Resolución N° 154 S. F. de 6 de septiembre de 1999 dictada por la Juez Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas, actualmente por mandato legal Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Veraguas.

En el libelo de sustentación de la apelación (fs. 34-40), el activador de la acción constitucional manifiesta su disconformidad con el fallo del Tribunal Superior por el hecho de que al no notificársele personalmente al señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR la Resolución N° 154 S. F. de 6 de septiembre de 1999 proferida por el Juzgado de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Veraguas, se ha expedido una orden de apremio corporal sin cumplirse con las formalidades legales exigidas en los artículos 21 y 32 de la Constitución Nacional.

Los hechos relacionados con este Hábeas Corpus se dan con motivo del Acta de Audiencia celebrada el día 2 de junio de 1999 en el Proceso de Pensión Alimenticia solicitado por MARIBEL PIEDAD VÁSQUEZ DE ATENCIO contra ARIEL ATENCIO TEJEDOR a favor de sus menores hijos PIEDAD MARÍA DEL CARMEN, MARIBEL y ARIEL ATENCIO VÁSQUEZ, donde la Juez Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas fijó una pensión alimenticia provisional al señor ATENCIO TEJEDOR en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) por mes, y en la que la demandante solicita desacato (véase foja 67) por incumplimiento de la pensión alimenticia, morosidad que a la fecha de la solicitud asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS (B/.655.00).

Esta Máxima Corporación de Justicia al estudiar minuciosamente las piezas que componen la resolución impugnada así como el expediente del Proceso de Pensión Alimenticia, advierte que de acuerdo a la información que se explaya en el libelo de demanda de Hábeas Corpus, el ciudadano ARIEL ATENCIO TEJEDOR no ha sido aprehendido en la actualidad, por lo que estamos en presencia de una acción constitucional de carácter preventivo, tal como lo expresa el Licenciado SILVIO QUIÑONEZ, por el hecho de existir una amenaza cierta de detención como es la orden de apremio corporal visible en el Oficio N° 6472-99 de 28 de septiembre de 1999. (véase foja 84 del antecedente)

De lo anterior, tenemos que determinar si la orden de detención decretada

contra el señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR se ajusta a las formalidades constitucionales y legales que regulan el apremio corporal que se ha dispuesto por parte de la Juez de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Veraguas.

Antes de resolver el fondo de este negocio, el Pleno considera importante transcribir lo esencial de la argumentación utilizada por el Tribunal Superior para negar la pretensión y declarar legal la orden de apremio corporal contra el señor ATENCIO TEJEDOR.

> "Sobre el particular este Tribunal Superior considera que el señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR ha sido notificado personalmente de la resolución N° 154 S. F., con base en el artículo 1007 del Código Judicial en el que se precisa de que la persona de que si la persona a quien se debe notificar de una resolución se refiere en escritos suyos ... dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces para la persona que lo hace, los efectos de una notificación personal. En consecuencia, resulta indubitable que la presentación del escrito del Habeas Corpus en el que se precisa la existencia y contenido de la resolución citada da lugar a determinar la notificación personal del señor ARIEL ATENCIO TEJEDOR."

De lo transcrito se advierte que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia realiza una interpretación errada al caso en estudio, conculcando el valor de la garantía del debido proceso.

De conformidad con el artículo 18 de nuestro Estatuto Fundamental, los servidores públicos tienen el deber de cumplir con la Constitución y la Ley. En esa línea de pensamiento, quienes administran justicia no pueden hacer cosa distinta de lo preceptuado por las normas jurídicas, como lo sería implementar un procedimiento alternativo del ordenamiento procesal para notificar una resolución judicial, cuando la persona que debe conocer su contenido se oculta o evade la notificación personal, casos para los cuales el Código Judicial organiza procedimientos eficaces de notificación.

La doctrina procesal enseña que el acto de comunicación más importante es el de la notificación. Como garantía insoslayable de sus derechos, resulta fundamental que las partes conozcan las resoluciones que dicta el Juez, para que puedan surtir los efectos que le son propios (artículo 1008 Código Judicial). Por consiguiente, un acto procesal que debe ser notificado personalmente, y sólo tiene eficacia jurídica desde el momento en que ha sido puesto efectivamente en conocimiento de la parte, con las formalidades de la ley, para que pueda ejercitar su derecho de defensa. De otra parte, la notificación personal es la que se hace al propio interesado o a su apoderado, a menos que la ley disponga que deba hacerse directamente al agraviado, como acontece con la notificación de la "resolución en que se decreta apremio corporal al afectado" (artículo 989, numeral 9, Código Judicial).

Por lo que se indica resulta claro que la omisión procesal de la notificación personal del demandado, tal como lo preceptúa el artículo 989 ejúesdem géneris en la que incurrió el Juzgado Seccional de Menores de la Provincia de Veraguas, actualmente Juzgado de Niñez y Adolescencia, produce la ineficacia de la orden de apremio corporal decretada hasta que la notificación se surta. El aludido vicio radica en que la orden que impone la restricción de libertad corporal de ARIEL ATENCIO TEJEDOR, Resolución N° 154 S. F. de 6 de septiembre de 1999, no fue notificada personalmente al apremiado. Según lo declara sentencia de Pleno de 18 de julio de 1996, la invalidación ocurre por desconocimiento del artículo 21 de la Carta Constitucional, al no haber sido "expedida de acuerdo con las formalidades legales".

No obstante, el acto de notificación o la falta de ella no afecta la orden de detención, si cumple con los requisitos legales, sino que su eficacia quede diferida hasta tanto se realice el acto de comunicación procesal.

La máximas de que "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales ..." (art. 32, C. N.), y de que "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento ... expedido de acuerdo con las formalidades legales (art. 21, C. N.), consagran el principio del debido proceso de ley, garantía o valor insoslayable del Estado de Derecho.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de apremio corporal en contra de ARIEL ATENCIO TEJEDOR.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A.TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARIO ANDRES BALLESTEROS DOMINGUEZ A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO CASTILLO VEGA POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, CONTRA LA FISCAL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA CON SEDE EN SAN MIGUELITO. APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce esta Corporación de Justicia del recurso de apelación interpuesta por el licenciado MARIO ANDRES BALLESTEROS DOMINGUEZ, contra la resolución expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 25 de noviembre de 1999, en la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor RICARDO CASTILLO VEGA, por el licenciado MARIO ANDRES BALLESTEROS DOMINGUEZ, contra la Fiscal Segunda del Segundo Circuito de Panamá.

En la resolución apelada se declaró legal la detención preventiva decretada por la Fiscalía Segunda del Segundo Circuito Judicial, contra el señor RICARDO CASTILLO VEGA, dentro del proceso penal que se le sigue al detenido por la supuesta comisión del delito, genéricamente denominado, "Contra el Pudor y la Libertad Sexual", en perjuicio de FRANCISCA SOTO GONZALEZ.

La ilegalidad de la detención preventiva impugnada por vía de la presente acción constitucional radica, a juicio del apoderado legal del detenido, en la ausencia de elementos probatorios que vinculen al prenombrado CASTILLO VEGA con el ilícito, cuya comisión se le atribuye. Señala el licenciado BALLESTEROS que lo único que vincula a su defendido con el ilícito, es el reconocimiento fotográfico del sindicado que hace la víctima a fojas 26 del sumario y del cual, se retractó posteriormente, según consta en la ampliación de la denuncia que aparece a foja 216 del sumario.

En cuanto a los señalamientos que hace el accionante respecto a la detención preventiva decretada contra su defendido, concluyó el Segundo Tribunal Superior de Justicia en la resolución recurrida, "que a pesar de lo manifestado por la afectada, de que las fotografías que le fueron mostradas por el apoderado judicial del imputado no corresponden a la persona que abusó sexualmente de ella la tarde del 6 de junio de 1998, observa el Tribunal que ésta aún no ha tenido percepción propia para saber, sin lugar a dudas, que el encartado es quien cometió el ilícito, por lo que se hace indispensable la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, ordenada por el juzgador en la

ampliación emitida en la audiencia intermedia, donde quedará despejada dicha incógnita." f. 17-18).

Cabe reparar, entonces, sobre las razones o fundamentos de hecho en que basó el juzgador de primera instancia su decisión. En torno a este aspecto, es conveniente precisar que el artículo 2159 del Código Judicial dispone la condición esencial de que existan en el sumario instruido, elementos probatorios que vinculen al sindicado por el ilícito que se le imputa, para que opere la privación temporal de la libertad personal. Dichos elementos probatorios, además, deben producir certeza jurídica acerca del acto y su posible comisión por el imputado, conforme se desprende de lo pautado en el artículo 2148 del Código Judicial, modificado por la Ley 42 de 31 de agosto de 1999.

En el presente caso, advierte el Pleno, el único elemento probatorio que reposa en el expediente contra el detenido, el reconocimiento fotográfico hecho por la víctima (foja 24) no produce certeza jurídica acerca de la vinculación del detenido con el ilícito que se le imputa, puesto que en la declaración rendida por la afectada, FRANCISCA SOTO GONZALEZ, ante notario y que figura a foja 189, varía el señalamiento hecho contra el detenido, al retractarse del reconocimiento hecho. Cabe agregar que, de dicha declaración se ratificó la prenombrada SOTO GONZALEZ, en la ampliación de la denuncia visible a foja 216.

De manera, pues, que estima esta Superioridad que de los elementos probatorios que obran en el sumario instruido, valga advertir, de manera muy deficiente, no se deducen indicios claros de la posible comisión por parte del detenido, RICARDO CASTILLO, del delito que se le imputa, de ahí que corresponda declarar la ilegalidad de la detención preventiva practicada en el presente caso, sin perjuicio de que, en la eventualidad de que aparezcan nuevas pruebas que arrojen certeza jurídica acerca de la posible vinculación del señor RICARDO CASTILLO con el delito indicado, pueda ordenarse nuevamente su detención.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la acción detención preventiva decretada contra el señor RICARDO CASTILLO VEGA, por la Fiscalía Segunda del Circuito de Panamá, y SE ORDENA su inmediata libertad sin no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDWIN FRANCISCO MURILLO R. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada MYRNA DE LOS RIOS ha interpuesto Acción de Hábeas Corpus a favor de EDWIN FRANCISCO MURILLO ROMAÑA y en contra del FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada quien, mediante Oficio No. 17072, de 17 de diciembre de 1999,

rindió el informe correspondiente, en el que da cuenta de lo siguiente:

> C) Cabe señalar que el detenido EDWIN FRANCISCO MURILLO ROMAÑA, hasta el momento se encuentra bajo custodia de la Dirección del Sistema Penitenciario a órdenes de la Fiscalía Séptima de Circuito de Panamá, mediante oficio No. 16624, del 15 de diciembre del año en curso, Despacho, al cual se remitió el presente sumario, a fin que continuara con la Institución Sumarial."

En virtud de que EDWIN FRANCISCO MURILLO ROMAÑA se encuentra a órdenes de la Fiscalía Séptima de Circuito de Panamá, la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer de la presente acción de hábeas corpus, toda vez que el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial establece que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial son competentes para conocer de la acción de hábeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual se aplica a la presente acción constitucional; por lo tanto, procede declinar el conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de hábeas corpus presentada por la Licenciada MYRNA DE LOS RIOS a favor de EDWIN FRANCISCO MURILLO ROMAÑA, y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se le dé el trámite que la Ley establece.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR MARIO EVERS RUÍZ CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONNETE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus propuesta por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, en beneficio de Víctor Mario Evers Ruíz contra la Juez Tercera del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

La alzada se dirige contra la resolución de 2 de diciembre de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declara legal la detención preventiva del imputado en el proceso que se le sigue por delito Contra el Patrimonio, en grado de tentativa, en perjuicio de Gilberto Quintana Quiróz.

El tribunal de primera instancia, motiva su decisión en que "... la detención preventiva fue dispuesta por autoridad competente para ello, a través de diligencia razonada de 15 de noviembre de 1999 (fs. 209-218), por un hecho punible tipificado y sancionado con prisión de más de dos años ..." (f. 10). Sostiene además que "... en el caso que nos ocupa existen evidencias en el expediente (fs. 176-187) indicativas de que ... EVERS RUIZ, ha incurrido en otras

conductas delictivas ..." (f. 10).

Por su parte, el recurrente solicita que se declare la ilegalidad de la detención de Evers Ruíz, debido a que el delito cuya comisión se le imputa es el de robo en grado de tentativa, "... cuyo tipo penal encaja en el ámbito del artículo 185 ó 186 en conjunción con los artículos 44 y 60 del Código Penal, el que es castigado con pena de prisión mínima de 20 meses ..." (f. 12).

DECISION DE LA CORTE

Por anunciado el recurso dentro del término de ley, procede la Corte a resolver si la medida cautelar de carácter personal que se impugna cumple con lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo normado por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

La lectura de las sumarias pone en evidencia que el hecho imputado a Víctor Mario Evers Ruíz, lo constituye delito contra el patrimonio, en grado de tentativa, en perjuicio de Gilberto Quintana Quiróz, tal como lo expresa la Juez Tercera de Circuito de lo Penal a foja 216 del cuaderno de antecedentes.

Tal posición, se fundamenta en la denuncia presentada por el ofendido Gilberto Quintana Quiróz (antecedentes, f. 2) y en la declaración jurada rendida por el agente Ariel Ernesto Pernett López, quien intervino en la captura del imputado (antecedentes, f. 10).

No obstante, la Corte difiere del criterio expuesto por el Segundo Tribunal Superior en la resolución apelada. Ello es así, ya que esta Superioridad ha manifestado que, cuando el delito de robo es en grado de tentativa, la pena aplicable corresponde a un tercio de la pena mínima, que equivale a veinte meses de prisión por lo que resulta ilegal mantener privado de libertad al imputado.

En sentencia de 2 de mayo de 1997, el Pleno manifestó:

> "... La transcripción anterior demuestra que el robo agravado se configuró en grado de tentativa, por lo que, de conformidad con el artículo 60 del Código Penal, la sanción que lleva parejada la conducta punible es de 20 meses de prisión, comprobación que, conforme a lo normado por el artículo 2148 del Código Judicial, excluye la aplicación de la medida cautelar restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado" (Sentencia de 2 de mayo de 1997).

Por otra parte, el a-quo manifiesta que, la restricción de la libertad corporal de Evers Ruíz, responde a la existencia de documentos que señalan que el imputado ha participado en la comisión de otros hechos punibles (f. 10).

Sobre el particular, es preciso aclarar que, el auto de proceder atacado por esta vía constitucional subjetiva, califica exclusivamente la vinculación del imputado con el supuesto delito Contra el Patrimonio en perjuicio de Gilberto Quintana Quiróz (fs. 209-218).

De allí que, el tribunal de habeas corpus se encuentra imposibilitado de analizar lo concerniente a hechos delictivos distintos del discutido en la resolución atacada, ya que no es materia a considerar en este proceso constitucional.

Esta Corporación de Justicia ha manifestado que la exigencia legal que la resolución o diligencia que ordena la detención indique el hecho imputado, implica que durante la sustanciación del proceso no puede incurrirse en una variación del tipo penal. En consecuencia, la legalidad o ilegalidad de la detención preventiva decretada por un delito distinto, tendría que ser decidida mediante un nuevo proceso de habeas corpus (Cfr. sentencia de 19 de mayo de 1997).

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 2 de diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar, DECLARA ILEGAL la detención de Víctor Mario Evers Ruíz ordenada por la Juez Tercera de Circuito de lo Penal, mediante Auto N° 117 de 15 de noviembre de 1999, que decreta la apertura de causa criminal contra el imputado por el delito genérico de robo, ocurrido en perjuicio de Gilberto Quintana Quiróz, correspondiente a la denuncia Número 2A-317-99 de 2 de abril de 1999, y ORDENA que el detenido sea puesto en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO CONTRA EL JUEZ DE CIRCUITO DE LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO. (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado FERNANDO STAFF GÓMEZ a favor de RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO, en contra de la Sentencia Penal proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, de fecha 16 de diciembre de 1999.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, al conocer en primera instancia la acción propuesta, decidió mediante Sentencia Penal de 16 de diciembre de 1999, declarar legal la detención preventiva aplicada al señor RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO por la Personería Segunda Municipal del Distrito de Changuinola, por considerar que la misma se ajusta a derecho y cumple con los presupuestos legales exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

Al momento de notificarse de esta decisión jurisdiccional, el Licenciado Fernando Staff Gómez, apeló; por lo que se concedió el presente recurso en el efecto suspensivo para que se surta la alzada.

Se sustenta el recurso de apelación en tiempo oportuno el que en su parte medular contiene lo siguiente:

> "Nuestra inconformidad para con el fallo apelado consiste en que se han tomado en cuenta solamente aquellas pruebas que hasta cierto punto pudieran considerarse como elementos que vinculan a mi representado al supuesto hecho investigado. Sin embargo, las pruebas que se han practicado y que demuestran la no ejecución del acto que se le atribuye no han sido tomadas en consideración, ni siquiera, deducimos de la lectura de la sentencia impugnada fueron analizadas, puesto que de lo contrario, el criterio hubiera sido diferente.

Hemos citado por ejemplo, cómo la Honorable Corte Suprema de Justicia ha ido aplicando los conceptos evolutivos concernientes a la aplicación de la Detención preventiva y que se han ido transmitiendo a través de los últimos seminarios dictados durante el año 1999, de los que concretamente se entiende, pues los fallos emitidos recientemente (16 de noviembre de 1999), que esa Augusta Corporación no comparte el criterio de la detención preventiva como única medida cautelar en casos graves como el presente que se está dilucidando, tal como lo ha dicho sobre "la necesidad de sumisión a los presupuestos generales de las medidas cautelares, marginando, incluso en relación con delitos graves, la consideración de la pena imponible."

Si estos conceptos no pueden ser aplicables al caso de mi representado, pudiéramos estar hablando entonces de exclusividad y por ende entonces, se convertiría en una notable falla en la administración de justicia.

En consecuencia, solicito muy respetuosamente a esa Honorable Corporación de Justicia, que luego de analizado profundamente este caso, REVOQUEN la Sentencia recurrida y en su lugar se DECLARE ILEGAL la detención de mi representado, tal como lo hemos planteado."

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Esta Corporación de Justicia pasa a exponer algunos de los hechos más relevantes contenidos en el expediente penal para resolver la acción de Hábeas Corpus.

Observa el pleno de la Corte, que la presente investigación penal tiene su génesis con la denuncia (fs.4-7) por el delito de secuestro, presentada ante la Policía Técnica Judicial por el señor Rigoberto Quintana Montenegro. El denunciante manifiesta que el día 6 de septiembre de 1999 el señor RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO se introdujo a la residencia de la familia Quintana Lozada, ubicada en el área de la Zona de Finca No. 8 y por medio de la violencia y la fuerza privó de su libertad a la señora MARÍA PATRICIA LOZADA DE QUINTANA, quien se encontraba en ropa de dormir dentro de una habitación de la residencia, luego de amenazarla con un arma de fuego la subió a su vehículo camioneta explorer de color verde, en donde posteriormente abuso sexualmente de ella.

Rinde declaración jurada la señora VERÓNICA VÁLDEZ GIRALDO, (fs.8-11) quien señaló entre otras cosas que fue testigo de los hechos ocurridos en la residencia de la señora LOZADA DE QUINTANA, ya que vió cuando el señor DAVISON CEREZO la forzaba para que subiera a su carro y que a pesar de advertirle que lo denunciaría a la Policía no le importó logrando su propósito.

Consta a fojas 12-16 del expediente penal, la declaración jurada de la señora ANASTACIA PALACIOS DE SANTO en la que manifestó que vió cuando el señor DAVISON CEREZO por medio de la fuerza obligó a la señora MARÍA PATRICIA LOZADA a subirse a su vehículo, además que ésta se encontraba en ropa de dormir.

Rinde declaración jurada la ofendida (fs. 21-25), quien señala directamente al señor RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO como la persona que abusara sexualmente de ella el día 6 de septiembre de 1999, por lo que corrobora la versión del denunciante.

El Doctor José Anderson, Director de la Medicatura Forense de la Provincia de Bocas del Toro certificó a través de un examen médico legal practicado a la señora MARÍA PATRICIA LOZADA , que la misma presentaba señales de violencia externa e interna producto de abuso sexual; además de considerar su evaluación y tratamiento de trauma Psicológico por medio de un Psiquiatra Forense. (Fs. 38)

Al momento de rendir sus descargos, RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO, acepta todos los hechos que ya han sido narrados por los testigos, sin embargo niega los hechos relativos a que él hubiese abusado sexualmente de la señora MARÍA PATRICIA LOZADA.

La Personería Municipal del Distrito de Changuinola, expide el día 7 de septiembre de 1999, una resolución motivada en la que ordena la detención preventiva de RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO, por considerar que se reúnen los elementos de juicio en su contra para ordenar tal medida. (Fs. 56-60)

Luego de las anteriores consideraciones, el Pleno considera que el beneficiario de la acción de Hábeas Corpus se encuentra vinculado al delito Contra El Pudor y La Libertad Sexual, no sólo por la acusación directa que le hace el denunciante Rigoberto Quintana Montenegro, sino del propio señalamiento directo que hace la ofendida María Patricia Lozada en su contra, aunado a los testimonios de las señoras Anastacia Palacios De Santos, Verónica Váldez Giraldo y la propia declaración indagatoria del encartado que no niega en su totalidad los hechos lo que constituyen indicios en su contra; así como también el certificado del examen médico legal practicado a la ofendida el cual arrojó resultados positivos de abuso sexual.

En consecuencia, esta Corporación de Justicia considera que la detención preventiva del recurrente es legal, por cuanto existe orden de detención debidamente fundamentada, pues la misma cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

DECISIÓN DEL PLENO

En mérito de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia penal de 16 de diciembre de 1999 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL que DECLARA LEGAL la detención de RICARDO ARTURO DAVISON CEREZO.

Copiese, Notifiquese y Devuelvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMARO FELIX HUAMANCHUMO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Evelia Aurora Montenegro de Huamanchumo ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de AMARO FELIX HUAMANCHUMO y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Mediante escrito fechado el 11 de enero de 2000 (f. 5), la señora Evelia Aurora Montenegro de Huamanchumo presentó desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta, por lo que el Pleno procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho

para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta por la señora Evelia Aurora Montenegro de Huamanchumo a favor de AMARO FELIX HUAMANCHUMO.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE INDIRA AGUIRRE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado GONZALO MONCADA LUNA ha interpuesto acción de hábeas corpus a favor de INDIRA AGUIRRE y contra el Director de la Policía Nacional.

Acogido el recurso se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada, quien remitió su informe de conducta mediante oficio AL-3597-99 de 28 de diciembre de 1999, manifestando lo siguiente:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención de la recurrente ni por escrito ni verbalmente.
>
> B. La presencia de la señora Aguirre en las instalaciones de la Policía Nacional se dio de manera voluntaria, con el propósito de colaborar con las investigaciones. Retirándose a su residencia en hora de la tarde del día 24 de diciembre del presente año.
>
> C. No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes a la persona que se ha mandado a presentar ni ha sido transferida a ningún otro lugar." (Fs. 5).

Del informe transcrito se infiere claramente que contra la beneficiaria de la presente acción constitucional, la autoridad demandada no ha ordenado su detención, que no la tiene bajo sus órdenes ni que la haya transferido a otra autoridad.

En el presente caso, se observa que la persona en favor de la cual se promovió la acción se encuentra en libertad, por consiguiente, no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2572 del Código Judicial..

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento de hábeas corpus promovida a favor de INDIRA AGUIRRE.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ CONTRA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Basilio Jaramillo Domínguez ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante el oficio No. FD2-T15-6276-99 de 29 de diciembre de 1999, rindió el siguiente informe:

> **"PRIMERO: Esta Agencia del Ministerio Público mediante resolución calendada 3 de diciembre de 1997 y consultable a fojas 87-89 del infolio ordenó la detención preventiva del señor BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ.**
>
> **SEGUNDO: En cuanto a los motivos o fundamentos de hecho, tenemos que el 27 de Noviembre de 1997, unidades de investigación de la Policía Técnica Judicial de Panamá destacados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se apersonaron a la empresa de carga Intertrade en la cual se habían recibido dos (2) cajas destinadas a la ciudad de Miami, contentiva cada una de veinte (20) paquetes forrados con cinta adhesiva de los cuales, al ser perforados, brotó un polvo blanco que al ser sometido a la prueba de campo arrojó resultados positivos para la presencia de la droga conocida como cocaína.**
>
> **En virtud de las pesquisas realizadas y en base a la descripción del ciudadano que presentó la carga para su envío, proporcionada por el funcionario de Intertrade que lo atendió, se procedió a la localización y detención del señor MARCOS CALLENDER quien finalmente fue conducido a este despacho. El mismo identificado como la persona que llevó las cajas contentivas de las sustancias ilícitas decomisadas a la empresa Intertrade, con el fin de enviarlas a la ciudad de Miami, consignadas a nombre de JOSE LUIS VALENCIA.**
>
> **Sometido a los rigores de la declaración indagatoria, el señor CALLENDER OVALLE manifiesta que un ciudadano de nombre "DENIS" le pide que le cortara una guía para enviar una mercancía a la ciudad de Miami por lo que él lo contactó con un conductor de la empresa INTERTRADE llamado JARAMILLO, para que éste le hiciera el trabajo de cortarle la guía y entregara la carga en la línea aérea. Afirma que DENIS entregó a JARAMILLO dos (2) cajas con supuesta cocaína y que JARAMILLO le pidió los datos para poder cortar la guía, por lo que él (CALLENDER) llamó a la joven XENIA de la empresa CENTRAL CARGO quien envió un fax con los datos de INTERTRADE y JARAMILLO procedió a cortar la guía en cuestión. Manifiesta que por su participación en este hecho, le ofrecieron trescientos balboas (B/.300.00). Al solicitarle la descripción de los señores DENIS y JARAMILLO, el**

mismo señaló que DENIS era de tez blanca, contextura gruesa, baja estatura, cabello lacio y podía ser localizado al teléfono 229-4136 o al beeper 264-5155 Código MARIO VALENCIA. En cuanto a JARAMILLO manifestó que era alto, contextura delgada, tez trigueña, cabello negro, de lentes, localizable al 238-4300.

Rinde declaración indagatoria JARAMILO DOMINGUEZ quien declara que si conoce (sic) CALLENDER OVALLE (sic) recibióun fax guía de la carga con sustancias ilícitas destinadas a Miami. En cuanto a los sujetos apodados BETO y DENIS, manifestó que posiblemente los conoce de vista. Igualmente niega haber recibido o introducido en la empresa de carga las cajas de madera con los paquetes de droga (F. 83-86).

XENIA AVILA MARCOS rinde declaración jurada, manifestando que conocía al señor CALLENDER desde 1988 y que para la fecha del 27 de noviembre de 1997 este le solicitó que si podía ayudarlo a cortar la guía, dándole una serie de datos; que eran dos bultos; que eran relojes, no le dio peso, le dictó una compañía CIP INTERNACIONAL como consignatario y no le dio nombre del embarcador. Por último señaló que CALLENDER le solicitó que si le podra (sic) pasar fax a Panamá, el número empezaba con 238, que el estaba en el lugar (sic).

El laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial de Panamá certificó que la sustancia analizada resultó positiva para la determiación de cocaína en la cantidad de 43,290.00 gramos (F. 1296).

El fundamento de derecho para ordenra (sic) la detención preventiva del señor BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

TERCERO: El señor BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ ha sido puesto a órdenes de la Corte Suprema de Justicia mediante el Oficio No. FD2-T15-6277-99 enviado al centro penitenciario "La Joya". (fs. 11-13).

Anteriormente el Pleno de esta Corporación, bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos conoció de una acción similar a favor de la misma persona, bajo la entrada No. 39-99 y mediante resolución de 23 de marzo de 1999 se declaró legal su detención.

Cabe señalar que el artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus:

"Artículo 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Habeas Corpus,no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten."

Esta Corporación ha señalado en distintas ocasiones que es viable revisar el proceso de habeas corpus que ha finalizado con una sentencia declarativa de la detención de un imputado, siempre y cuando se invoquen nuevos elementos probatorios que ameriten modificar la situación procesal del detenido.

En el presente caso, el Pleno observa que no se han presentado nuevas pruebas que modifiquen el status del detenido, lo que conduce a que esta nueva acción de habeas corpus carezca de mérito suficiente para justificar un nuevo examen de la situación del detenido, por lo que debe mantenerse la medida cautelar aplicada.

En consecuencia, EL PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor BASILIO JARAMILLO DOMINGUEZ y, por tanto, dispone que los

detenidos sean puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN QUINTERO ESQUINA CONTRA LA FISCALIA SEGUNDA DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresa a esta Corporación de Justicia, resolución de 24 de diciembre de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de RUBÉN QUINTERO ESQUINA.

Notificada dicha resolución, el señor QUINTERO ESQUINA, apela, por lo que se concede en el efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta la alzada.

EL ACCIONANTE

Sostiene el beneficiado con la presente acción, que desde el día 18 de diciembre de 1999, se encuentra privado de su libertad, toda vez que agentes de la Policía Técnica Judicial de Chiriquí, lo llevaron a una sub-estación y lo detuvieron bajo investigación por 24 horas, por el caso de un señor de apellido "Landau".

Señala, que desconoce del asunto por el cual se le investiga, toda vez que a la fecha en que es detenido, se encontraba cobrando un dinero en un taller y a la vez visitando a una amiga.

Agrega, que está detenido preventivamente, sin que se le haya hecho una declaración formal, violentando así, sus derechos constitucionales y legales; y que solamente se le notificó, que había una persona que lo señalaba como responsable de un supuesto delito de hurto.

Por lo anterior solicita, se levante la medida cautelar de detención preventiva y en consecuencia se le otorgue su libertad. (fs. 19-23)

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la resolución objeto de apelación, en su parte medular expuso:

> "Claramente se colige de lo declarado por la joven Viviana Rodríguez (fs. 15-18 y 156), y de José Aníbal Bósquez Fuentes (fs. 24-27 y 155) la vinculación de Rubén Quintero con el ilícito perpetrado. Aunado a lo señalado por el señor Moisés Montenegro Miranda (fs. 28-31 y 152-153) quien el 31 de marzo, a eso de las 7:50 p. m. aproximadamente, trasladara en su vehículo de transporte selectivo, el taxi 4T-618, de Boquete a David específicamente a la terminal de

> transporte de buses que conducen de David a Panamá (Padafront), a dos sujetos que describió: de tez morena, altos, de contextura mediana, cabello apretado ...
>
> En el proceso instruido tanto al precitado como a Mark Anthony Howard Valerín se ha adelantado hasta la audiencia preliminar, designándosele a cada uno su defensor técnico, por ende, no se vulnera con ello el debido proceso, ni los ha colocado en la indefensión." (fs. 12-16)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

El Tribunal A-Quo nos remite el sumario seguido a RUBEN QUINTERO ESQUINA y ANTONIO MARK ANTHONY, sindicados por el supuesto delito de Robo en perjuicio del señor GUILLERMO LANDAU, contentivo de 174 fojas útiles. Ahora bien, nos corresponde como Tribunal de Habeas Corpus, examinar la situación procesal del beneficiado con la presente acción a fin de verificar si se han cumplido las garantías constitucionales y legales para mantenerle privado de su libertad corporal.

La génesis de este proceso tiene lugar el día 1 de abril de 1999, cuando el señor GUILLERMO LANDAU RÍOS acude ante la Policía Técnica Judicial de Chiriquí y presenta formal denuncia, debido a que había sido víctima de delito de robo a mano armada.

Señala el denunciante, que el día 31 de marzo de 1999, aproximadamente a las 6:30 p. m., se encontraba en su residencia ubicada en el Distrito de Boquete, cuando dos sujetos de tez negra, uno más alto que el otro, el más bajo media como 1.75 metros, de cabello apretado, entre la edad de 20 y 25 años de edad, los cuales con cuchillo en mano, lo agredieron físicamente, lo amordazaron, le sujetaron los brazos y pies con un pedazo de sábanas, y le quitaron cincuenta balboas (B/.50.00) que cargaba en el bolsillo del pantalón. Además, dichos sujetos lograron llevarse dos armas de fuego, una calibre 22 de cañón largo y otra calibre 38 marca Smith & Wesson, las cuales se encontraban en la habitación del señor LANDAU.

A esta investigación rinde declaración jurada la joven VIVIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIRÓZ, quien es la empleada del señor LANDAU RÍOS, la cual manifestó conocer a las personas que cometieron el hecho punible; que las mismas responden a los nombres de RUBEN y ANTHONY, los cuales residen en Colón, y que los conoció el día 29 de marzo de 1999, por medio de su novio de nombre JOSÉ ANIBAL BOSQUEZ, quien hospedó a RUBEN en su residencia ubicada en Boquete. Agrega la declarante, que el día de los hechos, se encontraba en la residencia del señor LANDAU RÍOS, observando una colisión de un bus de la ruta David-Boquete y un auto pequeño, de pronto llegó ANTHONY en una bicicleta y le preguntó:

> "... que hacia dentro de esa casa y yo le mencioné que en ese lugar yo trabajo y luego me preguntó quien vive en esa casa y le contesté que el señor Landau y me preguntó que si era viejo y le manifesté que estaba bien mayor, luego me preguntó que si ese señor tenía pistola y le contesté que creía que tenía pistola de allí me preguntó que si tenía tele y dinero y VHS y le contesté que si" (f. 17)

Posteriormente, la joven VIVIANA llegó a su casa, en donde nuevamente se encontró con ANTHONY, quien estaba acompañado de RUBEN, y le preguntaron a ésta, que si la puerta de la entrada de la casa del señor LANDAU se podía empujar con facilidad y ella le contestó que sí, y luego se fueron los dos. (fs. 15-18)

Por su parte el joven JOSÉ ANIBAL BÓSQUEZ (fs. 24-27), manifiesta que los presuntos responsables de este hecho punible son RUBÉN QUINTERO ESQUINA y ANTONIO MARK ANTHONY, quienes fueron muy insistentes en preguntarle a su novia VIVIANA RODRÍGUEZ sobre la conformación de la casa del señor LANDAU. También indica

BÓSQUEZ, que el día de los hechos fue informado por su hermana, que RUBÉN QUINTERO había llegado a su casa, aproximadamente a las 10:00 p. m., en un taxi, en donde buscó su maletín y se retiró.

Igualmente, rinde declaración jurada el señor MOISÉS MONTENEGRO MIRANDA (fs. 28-31), conductor del taxi 4T-618, el cual señala, que el día 31 de marzo de 1999, en horas de la noche, transportó de Boquete a David, específicamente a la piquera de buses Padafront, a dos sujetos de tez morena, altos, de contextura mediana, cabello apretado, uno de ellos se distinguía porque tenía casquillos de oro en la parte de arriba de los dientes. Agrega, que al abordar el auto, uno de los sujetos le pidió que lo transportara a la Barriada Villa La Paz en Boquete, para recoger unos abrigos, al llegar al lugar el sujeto se bajó y regresó con un maletín color negro.

De las pruebas presentadas, se desprende que existen serios indicios contra el señor RUBÉN QUINTERO ESQUINA para mantenerlo privado de su libertad, toda vez, que es señalado como una de las personas que irrumpió en la residencia del señor LANDAU, dado que junto a su compañero MARK ANTHONY, fueron muy insistentes en preguntarle a la joven RODRÍGUEZ sobre los objetos de valor que se encontraban dentro de la casa del denunciante, y la manera en que estaba estructurada.

Además, la descripción física dada por la joven VIVIANA RODRÍGUEZ y JOSÉ BÓSQUEZ, de RUBÉN QUINTERO ESQUINA, concuerda con las descripciones hechas por el conductor de taxi y la del denunciante, señor GUILLERMO LANDAU, indicando que el beneficiado por esta acción constitucional, es un sujeto moreno, de cabello apretado, de estatura 1.75 metros, y con dientes de oro o plata en la parte superior de la boca.

De otra parte el recurrente ha manifestado que en el presente proceso se le han violado sus garantías fundamentales debido a que no se le ha tomado una declaración formal. A ello debemos señalar, que al hacer un examen exhaustivo del sumario, observamos que se han cumplido todas las garantías constitucionales y legales, máxime que a foja 46-49, se observa resolución calendada 25 de mayo de 1999, en donde la Fiscalía Segunda de Chiriquí, ordenó recibirle declaración indagatoria al prenombrado QUINTERO ESQUINA.

Además, a foja 50-52, se observa, la orden de detención preventiva dictada contra QUINTERO ESQUINA, la cual cumple con los requisitos legales exigidos en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial.

Dadas las consideraciones expuestas, el Pleno de esta Corporación de Justicia, concluye, que existen serios indicios contra el señor RUBÉN QUINTERO ESQUINA para mantener la medida cautelar de privación de libertad, por lo que la resolución objeto de apelación debe mantenerse.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución fechada 24 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSO CUNNINGHAM CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, las acciones de hábeas corpus interpuestas por ALFONSO CUNNINGHAM YANGUEZ y Ángela Yanguez, contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas a favor de ALFONSO CUNNINGHAM YANGUEZ. De acuerdo con el artículo 108 del Código Judicial, los negocios fueron acumulados oportunamente, a fin de sustentarlos y fallarlos en una misma sentencia.

Acogida la acción de hábeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado Patricio Elías Candanedo M., quien mediante Oficio No. FD2-T9-6086-99 de 10 de diciembre de 1999 (fs. 5 a 7), rinde el siguiente informe indicando, entre otras cosas, que:

> **"QUINTO: Consideramos pertinente esgrimir los evidentes y concretos elementos vinculatorios que militan en contra del ciudadano ALFONSO CUNNINGHAM con la presente encuesta penal, los cuales han dado fundamento para que este Despacho ordene la aplicación de su detención preventiva. Los elementos aludidos son del tenor siguiente:**
>
> **-Se tiene que en contra de ALFONSO CUNNINGHAM existen señalamientos directos hechos por los imputados del presente sumario DIGOBERTO DELANO HENRY GUSTAVE, MARÍA DEL CARMEN DIAZ DE BETEGON, MIGUEL ÁNGEL TENAS, entre otros, en donde se le apunta como una de las personas que participo (sic) en el tumbe de drogas realizado en el Taller MARLON, señalamientos los cuales quedan acreditados en las respectivas ampliaciones y declaraciones indagatorias hechas por aquellos, así como en las sendas Diligencias de Careo realizadas entre CUNNINGHAM y estos, en donde todos se afirman y ratifican de los cargos formulados en contra de este (sic), aunado a el hecho igualmente acreditado en la presente investigación, de que comparecen ante el MIGUEL TENAS y MARIANELA DIAZ DE BETEGON con el objetivo de identificar plenamente mediante vista fotográfica a el prenombrado CUNNINGHAM, identificación que como ya se ha dicho resulta positiva por parte de estos para el reconocimiento de aquel, reafirmándose aun (sic) mas (sic) los señalamientos hechos por estos en contra de ALFONSO CUNNINGHAM." (f. 6).**
>
> **-Se cuenta con el correspondiente análisis efectuado por los respectivos funcionarios idóneos a las sustancias incautadas en donde se obtiene el consabido resultado positivo para la presencia de la droga conocida como COCAÍNA, en donde tomandose (sic) en cuenta la gran cantidad de droga, evidencia del actual sumario, nos percatamos que nos encontramos en presencia de una Organización Criminal dedicada presuntamente a delitos relacionados con drogas, de la cual se infiere que presuntamente forme parte el Señor ALFONSO CUNNINGHAM". (fs. 4-7).**

El recurrente en la parte medular de su escrito solicita que se revoque la orden de detención decretada contra ALFONSO CUNNINGHAM, alegando que la misma es ilegal.

De acuerdo a las constancias procesales, la presente encuesta penal se inicia cuando luego de haber recibido información de que en un Taller de Chapistería de nombre Marlon, se guardaban sustancias ilícitas, la Fiscalía

ordena el allanamiento de dicho inmueble. En esa diligencia, no se encontró sustancia ilícita alguna, pero sí materiales que posiblemente eran utilizados para embalar droga, tales como cinta adhesiva, envoltorios plásticos, sacos de henequén. (fs. 11-12). Como se tenía información que con anterioridad al allanamiento realizado se había efectuado en ese taller un "tumbe" de drogas, y se había mantenido vigilancia en algunas residencias donde habitaban personas vinculadas con la operación, se dispuso el allanamiento correspondiente, lo que dió como resultado la incautación de la cantidad de 21,593.30 gramos de cocaína y la captura de varias personas, entre ellas la de los señores MARIANELA DEL CARMEN DIAZ DE BETEGÓN, MIGUEL ÁNGEL TENAS GUADALUPE y DIGOBERTO DELANO HENRY GUSTAVE, quienes en sus respectivas declaraciones indagatorias, señalan al beneficiario de esta acción constitucional, como uno de los supuestos organizadores del "tumbe" de drogas que se realizó en el Taller Marlon.

En vista de esos señalamientos, el Fiscal Segundo de Drogas, ordenó mediante resolución motivada de 11 de febrero de 1998, la detención del señor ALFONSO CUNNINGHAM YANGUEZ (fs. 156-161), lográndose su captura el 19 de agosto del presente año, fecha en que rinde su primera declaración indagatoria.

En ese orden, el imputado HENRY GUSTAVE, a fs. 227-237 indica:

> "El viernes seis (6) de febrero como a las siete (7:00 p.m) u ocho de la noche (8:00 p.m) yo me encontraba sentado en la orilla de la calle, en la acera de mi casa en calle cuarta Río Abajo, casa 12 apartamento 10, piso dos (2), apareció el señor de nombre MIGUE manejando el taxi Corolla blanco con el señor ALFONSO, para decirme sobre un "TUMBE" de drogas que le había dado una amiga de ALFONSO. El señor ALFONSO me hablo (sic) sobre el tema y le contesté que yo no soy de ese temple para ese tipo de cosas, entonces me pregunto (sic) por mi hermano de nombre ALEJANDRO GUSTAVE, le contesté que no sabía si el (sic) podía, le di su ubicación, que en esos momentos estaba en calle siete (7) Río Abajo, y lo fuimos a buscar los tres (3) en el taxi, lo encontramos y regresamos a calle cuarta los cuatro (4) dejándome ahí y ellos se fueron en el taxi al lugar donde iban a suceder los hechos, o sea en San Miguelito, no le puedo explicar exactamente el lugar porque no me dijeron el nombre del área. Cuando ALFONSO llegó, me dijo que una amiga suya le habían (sic) dado un dato de dónde había droga y que él (ALFONSO) quería robarse esa droga desesperadamente, ahí fue que yo le dije que no y él preguntó por mi hermano y ahí lo buscamos ... después regresaron para calle cuarta ese mismo día diciendo ALFONSO que ya había conseguido a la gente, después esperó una llamada de los supuestos tipos que iban a hacer el trabajo y se dirigieron allá cuando recibió la llamada, a él lo llamaron al celular en esos momentos ...".

A su vez, MIGUEL ÁNGEL TENAS GUADALUPE en declaración jurada que consta a fs. 309-315 del expediente, coincide con lo señalado por HENRY GUSTAVE cuando explica:

> "Señor Fiscal, el viernes como a las seis de la tarde del seis de febrero, ALFONSO me llamó a la piquera de taxi, que lo recogiera en la casa donde lo había dejado, o sea en la casa de la señora MARI, yo lo llevé a Calle Cuarta Río Abajo, él habló con DIGO, que es un muchacho al que yo le manejo un taxi a su mamá, él habló con DIGO sobre que iban a recoger la droga esa. El (sic) dijo que ALEJANDRO no estaba y después DIGO se montó en la camioneta que yo iba manejando y fuimos a buscar a ALEJANDRO a calle Séptima Río Abajo, allí fue donde ALEJANDRO salió de una barraca, pero no vi el apartamento exacto de donde salió, se montó en el carro fuimos a Calle Cuarta. ALFONSO le estaba explicando todo a ALEJANDRO, sobre lo que había en el taller ya que la señora MARI le había dicho a ALFONSO que en ese lugar había mucha droga. Después ALEJANDRO hizo

> una llamada en el celular si no me equivoco fue a JUAN a quien llamó y ALFONSO le preguntó a ALEJANDRO quién era JUAN ... luego nos fuimos al lugar de los hechos, me dijo que lo llevara allá a ver, fuimos, regresamos de nuevo a la Calle Cuarta, de allí esperaron que JUAN llamara a ALEJANDRO y después quedaron en que se iban a encontrar en el taller".

De otro modo, la imputada MARIANELA DEL CARMEN DIAZ DE BETEGON, al rendir indagatoria, (fs. 78-84), manifiesta que el imputado ALFONSO, en la noche del sábado 7 de febrero de 1998, le llevó a su casa un maletín para que se lo guardara y "me dijo que dentro del maletín había un dinero envuelto en una liga y que regresaría dentro de una o dos horas a buscarlo y se retiró" y horas después "... llegaron las unidades del DIIP y nos dijeron que nos quedáramos afuera del vehículo a esperar que llegara el fiscal y al llegar éste con varias unidades más del DIIP, revisaron el vehículo y encontraron el maletín en la parte donde yo estaba sentada y al verificarlo encontraron la droga ...". De los cargos que formula la indagada DIAZ DE BETEGÓN a ALFONSO CUNNINGHAM se ratifica en declaración jurada que aparece a fs. 99 del cuaderno principal.

Por otro lado, se tiene que consta a fs. 269-307 el registro de llamadas suministrado por la empresa BELLSOUTH que fueron realizadas desde la línea celular que utilizaba en ese momento CUNNIGHAM YANGUEZ, que evidencia claramente la comunicación constante y permanente que éste mantuvo con distintos celulares, pertenecientes a otros imputados, el día en que ocurrieron los hechos. Esto viene a corroborar lo señalado por HENRY GUSTAVE y TENAS GUADALUPE, en el sentido de que CUNNINGHAM YANGUEZ se comunicaba por medio de su teléfono celular con las personas que participaron en el "tumbe" de drogas.

De otro modo, a pesar de que el favorecido con esta acción niega haber participado en el "tumbe" de drogas, no podemos dejar de destacar que el mismo admite haber recibido "el dato" de la señora DIAZ DE BETEGÓN así como también haber contactado a las personas que cometieron el ilícito. Así se desprende de su declaración indagatoria visible a fs. 1283-1296 en la que expresa lo siguiente:

> "... el marido de MARIANELA trabajaba con unos colombianos que transportaban mercancía, droga, de Colombia hacia acá y él se la movía a diferentes partes de la ciudad ... MARIANELA me preguntó que si yo tenía amigos para robar esa mercancía, yo le dije que los amigos que tenía yo del tiempo de mi amigo difunto JUAN ya no los frecuentaba, ya muchos se habían quedado tranquilos, otros se habían casado, pero mi amigo del taxi, el señor MIGUEL TENAS, los dueños del taxi que él manejaba tenían amigos que podían hacer eso, entonces MARIANELA le manifestó a MIGUEL TENAS, él fue el que me llevó donde MARIANELA, ella le preguntó, y él le dijo que sí que le iba a conseguir unos amigos ...".

Como quiera que en este caso la orden de detención fue dictada por autoridad competente, por escrito y mediante resolución motivada en delito penado con un mínimo superior a los dos (2) años de prisión; y en razón de que existen suficientes elementos probatorios contra ALFONSO CUNNINGHAM YANGUEZ se cumple en este caso con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y procede declarar legal la orden de detención impugnada mediante esta acción constitucional.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra ALFONSO CUNNIGHAM y, por consiguiente, ORDENA que sea filiada nuevamente a órdenes de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO MCBARNETT CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO RAMO PENAL DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de habeas corpus promovida por la licenciada Zulay Rodríguez, a favor de ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE y contra la Jueza Tercera de Circuito Judicial de Panamá.

ANTECEDENTES

Mediante Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1999, el Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención preventiva de ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE (fs. 21-25).

En la parte motiva de la resolución apelada, este Tribunal señaló lo siguiente:

> "Los delitos imputados al procesado admiten la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva, pues la posible pena mínima a imponer supera los dos años de prisión, aunado a ello se cumplieron las formalidades establecidas en el artículo 2159 del Código Judicial.
>
> Queremos recordar a la proponente que el recurso de habeas corpus tiene como finalidad exclusiva determinar si la medida cautelar (detención preventiva) ejercida sobre algún ciudadano, ha sido efectuada de acuerdo a los parámetros legales, situación que se da en este caso, no se trata de determinar si es responsable o no del hecho punible.
>
> De otro lado, observa este Tribunal que se libró contra el detenido la correspondiente orden de detención, debidamente fundamentada, por lo que se ha dado cumplimiento al primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Nacional." (fs. 21-25)

ESCRITO DE APELACION

La apoderada judicial de ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE, sustentó su apelación en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: El segundo Tribunal Superior de Justicia declara legal la detención del señor ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE porque consideran que se encuentran frente a la comisión de dos delitos es decir falsificación de documento público y estafa ya que los documentos que prueban el ilícito así lo indican y que el recurso de habeas corpus tiene como finalidad exclusiva determinar si la medida cautelar (detención preventiva) ejercida sobre algún ciudadano ha sido efectuada de acuerdo a los parámetros legales y que considera el Tribunal Superior que la orden de detención se encuentra

debidamente fundamentada en base a lo estipulado por el artículo 21 de la Constitución Nacional. Así mismo, considera que el debido proceso no ha sido infringido en cuanto a la regulación de dicha medida cautelar.

SEGUNDO: Queremos señalar en contra de lo establecido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que se ha establecido en el proceso que a otras dos personas que están siendo investigadas si se les ha otorgado una medida cautelar ... por lo que se ha utilizado un criterio selectivo y discriminativo en contra de nuestro representado ...
TERCERO: De igual forma, queremos señalar también que existe numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que siempre y cuando la legislación procedimental penal no lo prohiba, se le debe aplicar la medida cautelar menos gravosa a los procesados.
...
SEXTO: Queremos señalar, en ese mismo orden de ideas, que el Juzgador A-quo ha aplicado la medida de detención preventiva como regla general y no como la excepción, cuando el mismo Código Judicial señala que la medida de detención preventiva, únicamente se aplicará cuando todas las otras medidas cautelares resulten inadecuadas, lo cual no se ha comprobado en el presente proceso seguido a ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE.

SEPTIMO: Queremos señalar que existe una total falta de justificación para aplicar las otras medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, ya que no existe ninguna de la circunstancias excepcionales señaladas en el Artículo 2147-C, que impida otorgar una medida cautelar distinta a la detención preventiva. No demostrándose la inconveniencia de la misma.

OCTAVO: Que el imputado ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE ha cooperado en las investigaciones, el mismo ha señalado a otras personas que participaron dentro del ilícito que se le imputa. Es primera vez que delinque en esta clase de ilícito, no es una persona peligrosa, es un ciudadano panameño que no se va a fugar de su país, ya que toda su familia se encuentra en Panamá y el delito cometido no es un delito grave, ni lesivo para la humanidad, sino que solamente atenta contra los intereses privados de una empresa en particular." (fs. 27-34)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

En el presente caso, observa esta Superioridad que la orden de detención preventiva dictada por el Fiscal Auxiliar de la República, mediante resolución de 16 de julio de 1998, contra ROBERTO ANTONIO MCBARNETTE, cumple con las formalidades que contemplan la Constitución y la ley.

En efecto, en dicha orden aparecen claramente expresados los delitos que se le imputan (falsificación de documento público y estafa), así como los elementos probatorios que comprueban el delito y aquellos que figuran en el proceso contra el imputado.

Además, al examinar el sumario esta Sala Plena ha comprobado la existencia del hecho punible y la vinculación del imputado al mismo, razón por la cual estima que la detención es legal.

De hecho, al señor ROBERTO MC BARNETTE lo vinculan al delito en cuestión, entre otros elementos probatorios, las declaraciones de Zulma Doret Young Arosemena (fs. 44-50), y Vionel Angulo (fs. 160-166).

En cuanto a la solicitud planteada por la apoderada del imputado, en el

sentido de que a éste le sea aplicada una medida cautelar distinta a la detención preventiva, esta Superioridad considera pertinente aclararle, que la acción de habeas corpus tiene por finalidad determinar si una persona se encuentra o no ilegalmente privada de su libertad, y que por lo tanto ésta no es la vía idonea para plantear ese tipo de solicitud.

Además, es preciso destacar que mediante Auto N° 3 de 23 de febrero de 1999, expedido por el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, al señor ROBERTO MC BARNETTE, se le otorgó el beneficio de fianza de excarcelación.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 9 de diciembre de 1999, mediante la cual declara LEGAL la detención preventiva del señor ROBERTO ANTONIO MC BARNETTE.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO, en su propio nombre, ha interpuesto a su favor Acción de Hábeas Corpus contra el Juez Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal de Panamá, por considerar que se le ha violado el debido proceso al ser juzgado más de una sola vez por el mismo hecho ilícito.

Surtidos los trámites correspondientes, el Segundo Tribunal Superior de Justicia libró mandamiento de Hábeas Corpus contra el funcionario acusado, quien mediante Oficio N° 2065 de 26 de noviembre de 1999 contestó lo siguiente:

> "1. No ordené la detención del citado ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO, la misma se produce con la decisión vertida por el Juzgado Nocturno de Policía, del 17 de noviembre de 1995 y por el cual lo sanciona a ciento ochenta días, informo además que tal decisión (Juzgado Nocturno) fue declarada nula por la Dirección Legal y Justicia de la Alcaldía del Distrito Capital. (fs. 9)
>
> 2. No tuve razones de hecho ni de derecho para ordenar la detención de Eloy Enrique Camargo Quintero.
>
> 3. Eloy Enrique Camargo Quintero, no se encuentra a órdenes de este Despacho, ya que no consta filiación hecha por la Fiscalía Sexta de Circuito, quien perfeccionó la investigación.
>
> 4. Por lo expuesto en los puntos anteriores, no he ordenado por el momento la detención del mandante."

En virtud del informe transcrito por la autoridad acusada, el Oficial Mayor

del Segundo Tribunal Superior de Justicia comunica al Magistrado Sustanciador que el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal de Panamá sentenció a 40 meses de prisión en el año 1998 al señor Eloy Camargo, por lo que filiaron a órdenes de corrección. Así las cosas, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dictó la resolución calendada 14 de diciembre de 1999 donde SE INHIBE del conocimiento de la presente acción constitucional y remite a este PLENO, por el hecho de que carece de competencia.

Surtidos los trámites de reparto, ha ingresado el negocio a esta Superioridad para resolver, por lo que se endereza la presente acción contra la Dirección General del Sistema Penitenciario de conformidad con el artículo 2588 del Código Judicial.

La Directora General del Sistema Penitenciario rindió su informe mediante Nota N° 2100-DGSP. al de 24 de diciembre de 1999, expresando lo siguiente:

> "A. La suscrita en calidad de Directora General del Sistema Penitenciario, no ha impartido, verbalmente ni por escrito, orden de detención en contra del prenombrado.
>
> B. No podemos hacer referencia de los motivos o fundamentos de hecho o de derecho que motivan la detención, porque no lo hemos ordenado.
>
> C. El señor ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO, con cédula de identidad personal N° 8-325-652, cuenta con múltiples ingresos y egresos a saber:
>
> 1. Ingreso el 26 de noviembre de 1989, por hurto mediante sanción de 180 días de arresto, impuesta por el Corregidor del Chorrillo. Por esta falta se le conmuta la pena a partir del 23 de abril de 1990, mediante Resuelto N° 11 del 5 de abril de 1990.
>
> 2. Reingreso el día 21 de junio de 1990, por sanción de 45 días de arresto, por darse a la fuga y no portar cédula, impuesta por el Corregidor del Chorrillo, mediante Boleta 212-DNC de 20 de julio de 1990, se le conmuta la sanción impuesta.
>
> 3. Reingresa el 18 de noviembre de 1995, en virtud de sanción de 180 días de arresto impuesta por Hurto, impuesta por el Juzgado Nocturno de Policía. Dicha sanción fue conmutada por el Resuelto 866 de 13 de diciembre de 1995, quedando en libertad por este caso el 16 de febrero de 1996, según consta en la boleta N°. 1067-DNC del 13 de diciembre de 1995.
>
> 4. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joya, en virtud de la condena impuesta el 29 de diciembre de 1997 por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a la pena de cuarenta (40) meses de prisión por el delito de Robo, en perjuicio de Nidia de Chávez, fue detenido el 3 de julio de 1997, por lo que cumplió las 2/3 partes de la pena impuesta el día 23 de septiembre de 1999 y cumple el total de la pena el 3 de noviembre del 2000, según Mandamiento N° 2206-DNC del 23 de diciembre de 1999."

Del informe rendido por la funcionaria acusada, se colige que ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO se encuentra detenido en el Centro Penitenciario La Joya, cumpliendo una condena de cuarenta (40) meses de prisión por el delito de Robo en perjuicio de Nidia de Chávez. Además a fojas 208-211 del expediente penal, se observa la Sentencia de 17 de febrero de 1998 dictada por el Tribunal Superior, donde se condenó a ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO a la pena de treinta y siete (37) meses de prisión por el delito de Robo en perjuicio de Viviana Camargo y Donald Domínguez, así como anunció apelación, confirmándose la citada sentencia (fs. 226-230), y anunciándose recurso de casación, declarada desierta (fs. 241-

242).

Esta Superioridad observa que la presente acción de Hábeas Corpus en esencia pide que se cancele la pena y que, en efecto, se está ejecutando por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Para el PLENO, resulta que el señor CAMARGO QUINTERO se encuentra cumpliendo una pena que le dispuso el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal y que culmina el 3 de noviembre del año 2000, por lo que su detención tiene su fundamento en la Ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ELOY ENRIQUE CAMARGO QUINTERO, y en consecuencia, ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RODRIGO LORENZO CONTRA EL FISCAL TERCERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado NÉSTOR EGBERTO UREÑA BATISTA, Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas, ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, de fecha 9 de diciembre de 1999, por medio de la cual se declara legal la detención preventiva dictada en contra del señor RODRIGO LORENZO, por el Fiscal Tercero del Circuito de Veraguas.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al conocer la acción constitucional propuesta, declaró legal la detención preventiva dictada contra el señor RODRIGO LORENZO, en virtud de que, según detalla en la resolución apelada, la orden de detención fue decretada por autoridad competente y por escrito, en relación a un delito que tiene pena de prisión superior a los dos (2) años, además de existir la vinculación material del detenido con los hechos comprobados.

Aprecia el PLENO a foja 13 del sumario instruido que, en su parte pertinente, la resolución apelada se basa en;

> "... Es de observar que el delito imputado es el contenido en el Capítulo I, Título IV del Libro II del Código Penal, que regula la pena para el Hurto y que la forma en que se cometió el delito, rompiéndose el techo y saliendo por una puerta destinada a evitar la entrada de extraños al lugar, hasta ahora reúne las condiciones de Hurto Gravísimo, castigado con pena de treinta (30) meses a seis (6) años de prisión, mayor que el mínimo que se exige para la detención preventiva."

Por su parte el recurrente, no sustentó su disconformidad con la sentencia proferida por el Tribunal Superior, por lo que sólo resta a esta Superioridad proceder al análisis de las piezas de instrucción allegadas al expediente, así como de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, que consideró que había plena legitimidad formal en la medida de privación de libertad adoptada.

El sumario se inicia con el Informe de Novedad suscrito por el Detective de la Policía Técnica Judicial BAYRON MEDINA (véase foja 2), el cual cuenta de que por medio de una llamada telefónica tienen conocimiento de un hurto ocurrido en el Almacén Cotito Sport ubicado en Calle novena de Santiago, realizándose posteriormente las investigaciones de rigor.

Al realizar los agentes de la Policía Técnica Judicial una inspección en el local objeto del hurto (véase foja 3), se percataron que se habían metido por el techo y que se habían llevado una impresora de computadora marca "OLIMPIC", un fax y varios calzados de niños marca "Patrix", zapatillas y tacos de fútbol, así como diferentes juegos de ropa deportiva.

Visible a fojas 6-10 y 13-14 del expediente que contiene las sumarias, se deja constancia de la denuncia y ampliación, respectivamente, suscrita por la señora MARIXENIA ABREGO DE MANSILLA, esposa del propietario del negocio denominado MANSI SPORT, S. A., señor MIGUEL MANSILLA, quien mencionó y presentó facturas de los artículos hurtados.

Consta a fojas 31-32 del expediente penal el Informe de Novedad suscrita por el Cabo 1ro JAVIER WILLIS de la Subdirección de Información e Investigación Policial (Sub-DIIP) de la Zona de Policía de Veraguas, donde señala que el sábado 6 de noviembre de 1999 en horas de mediodía se inició un allanamiento a la residencia de la señora CELESTINA HERNÁNDEZ IGUALADA, ubicada en Barriada Don Bosco, toda vez que tenían información que en dicha residencia se mantenía mercancía supuestamente hurtada en locales comerciales. Al efectuarse el allanamiento, en uno de los cuartos, se encontraba el señor RODRIGO LORENZO, así como diferentes mercancías y evidencias.

Se aprecia en las sumarias (fs. 81-83 y 107-116) la declaración indagatoria rendida por el sindicado RODRIGO LORENZO AGUILA, donde niega que haya participado en el hurto al Almacén Cotito Sport o Mansi Sport, S. A., ubicado en Calle Novena de la ciudad de Santiago.

Del examen de las piezas que componen la encuesta penal en estudio, se advierte que la detención de RODRIGO LORENZO se ajusta a las formalidades constitucionales y legales que regulan la medida cautelar personal aplicada, al haberse comprobado:

1. La existencia del hecho punible: La denuncia penal presentada ante las autoridades por la señora JUANA MARIXENIA ABREGO DE MANSILLA, esposa del propietario del local comercial denominado MASI SPORT, S. A. (fs. 6-10) por el delito Contra el Patrimonio; la declaración jurada rendida por la señora ITZI JANETTE HENRÍQUEZ MENDOZA (fs -27-29), quien labora en el local comercial objeto del ilícito; presentación de facturas que prueban la propiedad y existencia de los artículos hurtados, y el informe suscrito por el Detective de la Policía Técnica Judicial RAMÓN TAM que señala la inspección ocular realizada al local comercial.

2. La vinculación del imputado con el hecho punible: Pesa sobre el imputado el señalamiento directo que le hace el menor RUBIEL GONZÁLEZ (alias) "CHECA" (véase fojas 95-99 de las sumarias), donde manifiesta que RODRIGO YOURIELL LORENZO le vendió mercancía, además de encontrarse en un allanamiento realizado en la residencia de la señora CELESTINA HERNÁNDEZ, y donde estaba el joven RODRIGO LORENZO, artículos pertenecientes al Almacén Cotito Sport.

Al detenido se le imputa, la comisión del delito de hurto agravado,

sancionado con pena de prisión revasa los dos años mínimos exigidos por la Ley procesal penal, de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I, Título IV del Libro II del Código Penal, de ahí que estime el Pleno que en el presente caso se dan los presupuesto constitucionales y legales para la detención preventiva, de manera que procede el mantenimiento de la medida cautelar limitativa de la libertad personal decretada en contra del señor RODRIGO LORENZO, por la Fiscalía Tercera del Circuito de Veraguas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 9 de diciembre de 1999, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, en la acción constitucional de habeas corpus interpuesta por el Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas en favor del señor RODRIGO LORENZO, por lo que se pone a órdenes de la autoridad competente.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AGRIPINO NÚNEZ CONTRA LA FISCALÍA QUINTA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 29 de diciembre de 1999, dentro de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Florencio Castillo en representación de AGRIPINO NÚNEZ RIVERA y contra el Fiscal Quinto de Circuito de Chiriquí.

En la demanda de habeas corpus interpuesta ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el apoderado judicial del detenido AGRIPINO NÚNEZ alegó que su detención es ilegal, toda vez que está detenido desde el 20 de diciembre de 1999 sin haber rendido declaración indagatoria.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de AGRIPINO NÚNEZ RIVERA, fundamentando su sentencia en los siguientes términos:

"...
Nelly Evelina Núñez Rivera declaró ante la Personería Municipal del Distrito de Boquerón que su menor hija Omayra Elizabeth Espinosa Núñez había sido abusada sexualmente por su hermano Agripino Núñez Rivera, hecho que fue corroborado por la menor ofendida, quien al rendir declaración jurada (fs. 9-12), expresó que para septiembre de este año cuando se encontraba estudiando y sus hermanos y abuela durmiendo, entre las ocho y nueve de la noche, su tío Agripino Núñez, la agarró, la amenazó con punzón y abusó de ella, luego en octubre volvieron a tener relaciones sexuales, que no le había informado a su mamá porque éste la tenía amenazada.

El examen médico practicado a la agraviada (f. 16), certifica que la misma está desflorada y el himen anular presenta ruptura antigua.

> Mediante diligencia fechada 20 de diciembre último, la Personería Municipal del Distrito de Boquerón dispuso ordenar la detención preventiva de Agripino Núñez Rivera por considerarlo infractor de lo dispuesto en el artículo 216, numerales 1 y 4 del Código Penal, cuya pena estipulada rebasa los dos años de prisión. En dicha diligencia la funcionaria instructora hizo un análisis de las incipientes sumarias y dio por probado el hecho ilícito investigado y la vinculación del encartado en la presunta comisión del mismo (fs. 27-29).
>
> Ahora bien, la violación de los artículos 22 y 25 de nuestra Carta Magna, alegados por el abogado accionante no han ocurrido en la presente investigación, pues el funcionario de instrucción inicial dispuso tomarle indagatoria al imputado mediante diligencia de 6 de diciembre último (fs. 19-20), llevándose a cabo la misma el 20 de diciembre; no obstante, el indagado decidió abastenerse y acogerse a sus derechos constitucionales (f. 26). (la negrita es nuestra)
>
> Del examen de lo actuado, estima la colegiatura que concurren suficientes elementos probatorios que vinculan a Agripino Núñez Rivera con el ilícito investigado, siendo procedente entonces mantener su detención preventiva que ha sido decretada por autoridad competente para ello y cumple las formalidades legales correspondientes. Sin perjuicio de que al cabo de la investigación se pueda emitir otro pronunciamiento jurisdiccional distinto.

Consta como elemento de prueba contra el imputado, la querella suscrita por la señora Nely Evelina Núñez, visible a fojas 2, 5-8 del sumario, en la cual declara que su hija de 12 años fue violada sexualmente por su tío, el señor, AGRIPINO NÚÑEZ. De fojas 9 a 12, se lee la declaración jurada rendida por la menor Omaira Elizabeth Espinosa Núñez, en la cual narra cómo fue violada por su tío en varias ocasiones.

Se pueden constatar también como elementos probatorios del hecho punible, el resultado del reconocimiento médico legal que se le practicó a la menor Omaira Elizabeth Espinosa Núñez, en el cual consta que está desflorada y que el hímen anular tiene ruptura antigua (f. 16).

Siendo esto así, el Pleno estima necesario señalar a la parte actora, que en el sumario instruido se investiga la comisión de un delito contra el pudor y la libertad sexual y, que tal como lo establece el artículo 2223 del Código Judicial, la comprobación del hecho punible y la declaración de la ofendida y su curadora, son pruebas suficientes para enjuiciar al señor AGRIPINO NÚÑEZ.

En cuanto a las objeciones del recurrente, esta Superioridad observa, que en forma alguna se han violado los artículos 22 y 25 de la Constitución Nacional. Veamos porqué.

Mediante diligencia de 6 de diciembre de 1999, la Personera Municipal del Distrito de Boquerón dispuso que AGRIPINO NÚÑEZ, rindiese declaración indagatoria (fs. 19-20). El 20 de diciembre de 1999, AGRIPINO NÚÑEZ compareció al Despacho de la Personería Municipal del Distrito de Boquerón a fin de cumplir con lo ordenado mediante la precitada diligencia, no obstante, luego de ser informado de que tenía derecho a ser asistido por un abogado, el mismo se negó a rendir declaración indagatoria hasta que aquél estuviese presente (f. 26). En consecuencia, el 23 de diciembre del año pasado, AGRIPINO NÚÑEZ le otorgó poder al licenciado Florencio Castillo Espinosa, para que lo represente en el presente proceso, razón por la cual éste solicita que AGRIPINO NÚÑEZ rinda declaración indagatoria e interpone una acción de habeas corpus a favor de su representado, el 23 y el 27 de diciembre de 1999, respectivamente (fs. 38-41).

Ante esta realidad procesal, a juicio del Pleno de esta Corporación de Justicia la Sentencia de Habeas Corpus dictada por el Tribunal Superior del

Tercer Distrito Judicial se ajusta a derecho y debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 29 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se declara LEGAL la detención preventiva del señor AGRIPINO NÚÑEZ ordenada por la Personera Municipal del Distrito de Boquerón y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad demandada.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN A. ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMTERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado UZZIEL MORÁN TORIBIO acude ante esta Corporación Judicial, con la finalidad de interponer acción de habeas corpus a favor de EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME, y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

EL ACCIONANTE

Sostiene el licenciado MORÁN TORIBIO, que dentro de lo incipiente de la investigación no se ha logrado determinar la existencia de elementos probatorios que puedan relacionar al señor EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME con el delito investigado.

Señala el recurrente, que al realizarse la diligencia de allanamiento previa venta controlada de droga, en la residencia del señor ROLANDO OSBOURNE (A) PUTY, ubicada en La Mata del Coco de La Chorrera, no se encontró ninguna sustancia ilícita, sin embargo, en el Acta de Allanamiento se establece, que los cuatro billetes de un balboa entregados al informante para la compra controlada, se encontraron dentro de un cofre ubicado en un cuarto con puerta de hierro; de lo cual expresó el señor ROLANDO OSBOURNE, que era su habitación, y además, que el dinero encontrado en el cofre, le pertenecía.

Por último, manifiesta el licenciado MORÁN TORIBIO, que la presencia de su patrocinado en la casa objeto del allanamiento se debió a forma circunstancial, dado al hecho de que se encontraba visitando a su madre, pues su residencia actual es en el sector de Amaya en La Pesa de La Chorrera.

Por lo anterior, solicita, se declare ilegal la detención preventiva del señor EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME y en consecuencia se le otorgue su libertad. (fs. 1-4)

SUSTANCIACIÓN

Por medio de providencia de 21 de diciembre de 1999, se libra mandamiento

de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio No. FD1-T13-5990-99 de 23 de diciembre de 1999, manifestó, que a través de resolución de seis (6) de diciembre de 1999, ordenó la detención preventiva del señor EDUARDO OSBOURNE, con fundamento en los siguientes hechos:

> "... la detención preventiva de EDUARDO OSBORNE, se basan en que el día 3 de diciembre del presente año, se procede a realizar diligencia de compra controlada de sustancias ilícitas en La Chorrera, corregimiento de la Mata del Coco, casa sin número, toda vez que se tenía información que en dicha residencia se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas. Producto de la compra controlada de drogas, se logra obtener cuatro (4) carrizos plásticos transparentes, contentivos de polvo blanco en su interior, los cuales fueron comprados con cuatro (4) billetes de un balboa debidamente autenticados y fotocopiados por este despacho.
> ...
> Adicional se encontraba en el lugar EDUARDO OSBORNE (a) BUDA, sujeto que se encuentra reseñado en el informe de inteligencia como vendedor de sustancias ilícitas de su hermano ROLANDO OSBORNE ... Dentro de la habitación del señor EDUARDO OSBORNE se encontraron cuatro (4) billetes de un balboa (B/.1.00) utilizados para la compra controlada de drogas." (fs. 42-43)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La autoridad demandada nos remite el sumario seguido a EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME y OTROS, sindicados por la supuesta comisión de Delito Contra La Salud Pública, contentivo de 68 fojas (copias autenticadas).

Ahora bien, corresponde a esta Corporación de Justicia, examinar las pruebas allegadas al sumario, a fin de verificar si se han cumplido las garantías constitucionales y legales, para ordenar la detención preventiva del beneficiado con la presente acción.

La génesis de este proceso tiene lugar cuando unidades de la SUB-D.I.I.P. de la Zona Policial de Panamá Oeste solicitan a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, realice una Diligencia de Allanamiento y Registro previa Venta Controlada de Droga, en la residencia del señor ROLANDO OSBORNE (a) PUTY, ubicada en el Distrito de La Chorrera, Corregimiento del Coco, sector La Mata del Coco, casa sin número color rosado, toda vez, que se obtuvo información de que éste sujeto junto a sus hermanos se dedican a la venta ilícita de drogas y armas de fuego.

Según consta en el Acta de Diligencia de Allanamiento y Registro, visible de fojas 28-30, el día tres (3) de diciembre de 1999, se efectuó la operación de compra simulada de droga con la suma de cuatro (4) billetes de un balboa debidamente fotocopiados y autenticados, en donde el informante comprador manifestó, que un sujeto vestido de suéter blanco y jeans azul le vendió cuatro (4) carrizos plásticos transparentes contentivos de un polvo blanco, que al realizarse la prueba de campo arrojó resultados positivos para la determinación de droga (cocaína) (f. 40). Agrega el informante, que dicho sujeto buscó la sustancia dentro de un cuarto que tenía una puerta de hierro.

Posteriormente, la autoridad demandada, procedió a realizar la diligencia de allanamiento y registro, logrando encontrar en efecto los billetes marcados, dentro de una taza color negra que estaba dentro de una de las gavetas de un anaquel ubicado en el cuarto con puerta de hierro que describió el informante comprador; además, se logra identificar a ROLANDO OSBOURNE como el sujeto que estaba vestido de suéter blanco y jeans azul.

En declaración indagatoria, manifestó ROLANDO OSBOURNE (fs. 46-50), que el día de los hechos se encontraba vestido con suéter blanco, jeans celeste y zapatillas grises; además, señala, que el dinero encontrado en la taza color

negra que estaba en su habitación, era producto de una venta de relojes.

Por su parte, EDUARDO OSBOURNE señaló, que no tiene que ver nada con el delito que se le endilga. (f. 53)

De las pruebas anteriormente presentadas, observamos, que la situación procesal de EDUARDO OSBOURNE JEROME, no se ajusta a los requisitos contemplados en el artículo 2159 del Código Judicial, que requiere, que concurran serios indicios para decretar la detención preventiva, por lo que contrario a lo expresado por la Fiscalía de Drogas en la orden de seis (6) de diciembre de 1999, el hecho de encontrarse en el lugar de marras no constituye prueba suficiente contra el prenombrado para vincularlo con el ilícito. Pues, desde los inicios de la investigación, solo se tienen informes contra el señor ROLANDO OSBOURNE, de que éste se dedica a la venta ilegal de drogas y armas de fuego.

Además, en la Diligencia de Allanamiento y Registro previa Venta Simulada de Droga, se desprende, que fue ROLANDO OSBOURNE, vestido de suéter blanco y jeans azul como lo describió el informante quien realizó la venta de los cuatro (4) carrizos de droga; además el dinero marcado fue encontrado dentro de su habitación.

Es por lo anterior, que el Pleno de la Corte Suprema considera, que no se encuentran reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial para mantener la detención preventiva del señor EDUARDO OSBOURNE JEROME, por lo que debemos ordenar su inmediata libertad, toda vez que no hay pruebas concretas que lo involucren con la comisión de un Delito Contra la Salud Pública.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor EDUARDO RAÚL OSBOURNE JEROME, y en consecuencia se ordena su inmediata libertad de no tener otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L.

Con todo respeto, me veo en la necesidad de expresar mi rotundo desacuerdo con el criterio que en este caso prohija esta resolución, por cuanto que, en mi concepto, del estudio de los antecedentes remitidos con motivo de este Habeas Corpus, emergen un número plural de elementos que, a mi modo de ver, sustentan la legalidad de la detención decretada en contra del señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome. Tales elementos, son los siguientes:

1. En los antecedentes constan ocho (8) informes policiales que dan cuenta que el señor Rolando Osbourne Gerome, (alias Puty), según estas investigaciones, encabeza junto a sus hermanos una banda que se dedica a la venta de estupefacientes a los estudiantes de la Escuela Primaria del Coco y del Primer Ciclo Balboa, ubicados en la Barriada La Mata del Coco de La Chorrera (véanse fojas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 y 16 de los antecedentes).

2. Los informes de inteligencia recabados por las autoridades policiales identifican como parte relevante de este grupo a un hermano del señor Rolando

Osbourne, quien es apodado "BUDA", apelativo que coincide con el apodo del señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, como lo admitió claramente su propio hermano Rolando en la declaración indagatoria practicada el 6 de diciciembre de 1999. (véanse fojas 15 y 50 de los antecedentes)

3. La detención del señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, se produjo durante el allanamiento realizado por la Policía a la residencia de su hermano Rolando Osbourne (alias Puty) inmediatamente después de efectuada una compra simulada de droga con la intervención de un agente encubierto. De acuerdo a las investigaciones, la residencia en la que fue detenido el señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, junto a su hermano Rolando ha sido allanada en múltiples ocasiones por los agentes policiales. (véase foja 15 de los antecedentes)

4. Las constancias policiales indican que el área en donde opera el grupo al cual se vincula al señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, es escenario frecuente de reiterados actos de violencia que mantienen en estado de alarma a la comunidad. (véase foja 4 y 5 de los antecedentes)

5. Al practicarse la detención del señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, durante el allanamiento a la residencia identificada como centro de expendio de droga en la comunidad, éste contaba en su poder la suma de dieciocho balboas (B/.18.00) en denominaciones de un balboa (B/.1.00), lo cual es un indicio comúnmente asociado con esta actividad ilícita. (véase foja 50 de los antecedentes)

6. La detención del señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome, se dió en el marco de un operativo policial gestado durante varios meses en el sector el cual se encaminaba a desmantelar una banda que se dedica a la venta de drogas a la juventud y a la niñez de esa comunidad.

7. Cuando se detuvo al señor Eduardo Raúl Osbourne, con ocasión del allanamiento realizado por la Policía, luego de la compra simulada de droga, se encontró el dinero utilizado en esa transacción, lo que aunado a los demás antecedentes, permite razonablemente deducir que quienes se encontraban en esa residencia en ese momento no ignoraban las actividades que se realizaban en la misma. (indicios de presencia y oportunidad)

8. Considero que decretar la libertad del señor Eduardo Raúl Osbourne, en el estado incipiente en que se encuentra este proceso de investigación puede ser contraproducente al resultado del mismo, toda vez que, las autoridades policiales están intentando el desmantelamiento de una presunta banda que opera a pesar de las constantes denuncias de la comunidad.

9. Por lo expresado, conceptúo que, en esta etapa de la investigación que se adelanta existen suficientes y atendibles elementos que comprometen al señor Eduardo Raúl Osbourne Jerome con las razones que justificaron su detención, motivo por el cual considero que dicha medida cautelar de carácter personal tiene el respaldo necesario para ser considerada legal, y por ello, respetuosamente, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA POR EL LICENCIADO MAURO OCTAVIO PÉREZ CITADINI EN FAVOR DE JESÚS ANTONIO HERRERA MÉNDEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Mauro Octavio Pérez ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus en favor de Jesús Antonio Herrera Méndez, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

El recurrente manifiesta que el beneficiario de esta iniciativa constitucional subjetiva, permanece privado de su libertad, sin que se le haya podido vincular a sustancia ilícita alguna (Cfr. cuaderno de habeas corpus, f. 1).

En el informe de rigor, fechado el 18 de enero del 2000, la autoridad demandada manifiesta que ordenó la detención de Herrera Méndez, mediante resolución de 11 de enero de 2000 "... por considerar que existían suficientes elementos que ameritaban aplicarle la más grave de las medidas cautelares ..." (cuaderno de habeas corpus, f. 9).

De otra parte, agrega que "... Las sustancias incautadas fueron remitidas al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, sin embargo, el resultado del análisis practicado sobre la evidencia no ha sido remitido a la fecha (cuaderno de habeas corpus, f. 10).

HISTORIA DEL CASO

Los antecedentes dan cuenta que el 11 de enero del 2000, unidades del departamento de Fiscalización Aduanera del Aeropuerto de Tocumen, en una inspección de rigor, detectaron en la Guía American Airline N° 001-845-3035, la presencia de dos mandarines cuyo interior se veía rústico y con olor a pintura. A dichos objetos, se les realizaron dos pruebas de campo, que arrojaron supuestos resultados positivos para la detección de la sustancia ilícita conocida como heroína (antecedentes, f. 3).

La guía de embarque de los objetos incautados, tenía como remitente a Jesús Antonio Herrera con pasaporte # 79355-727, con dirección en el Hotel Plaza Paitilla, habitación 915, República de Panamá (vid. Antecedentes, f. 7).

Con fundamento en lo anterior, el mismo día 11 de enero de 2000, se realizó el allanamiento de la habitación N° 915 del hotel Plaza Paitilla Inn, dando como resultado la detención de Herrera Méndez (f. 57).

DECISION DE LA CORTE

La lectura de la resolución que ordena la detención preventiva, expresa que la detención de Herrera Méndez, se fundamenta en su supuesta participación en la comisión de un delito de tráfico internacional de droga.

En dicha diligencia, el funcionario de instrucción expresa que:

> "... se encuentra acreditado el CUERPO DEL DELITO, con las diligencias de PRUEBA DE CAMPO que dictaminaron la presencia de HEROINA, lo que por ende da margen al HECHO PUNIBLE CON LAS DILIGENCIAS el cual se basa en las pruebas de campo y de igual manera probada esta (sic) la vinculación subjetiva del encartado al delito con ese caudal de documentos que lo señalan directamente como el REMITENTE o EMBARCADOR del material contentivo de HEROINA ..." (Antecedentes, f. 68).

No obstante, el cuaderno contentivo de esta causa constitucional subjetiva da cuenta de la existencia del informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, fechado el 13 de enero del 2000, el cual contiene copia debidamente autenticada del resultado definitivo de la prueba pericial realizada a los

adornos de porcelana china, que se presumía contenían heroína. El precitado informe concluye que "... las muestras analizadas resultaron negativas por DROGA ILICITA ..." (cuaderno de habeas corpus, f. 15).

Adicionalmente, mediante oficio FD-O-298-00 de 24 de enero de 2000, el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Encargado, remite copia auténtica del oficio de la misma fecha, enviado por el Director en Panamá de la Drug Enforcement Administration (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (cuaderno de habeas corpus, f. 18), por el cual se informa que:

> "... luego de someter a análisis pericial una muestra de la evidencia incautada dentro de las sumarias que, por delito Contra la Salud Pública, Relacionado con Drogas, se sigue a JESUS ANTONIO HERRERA MENDEZ, se obtuvo resultado negativo para la presencia de cualquier sustancia ilícita ..." (f. 17, cuaderno de habeas corpus. Resalta la Corte).

El artículo 2159 del Código Judicial exige que la orden que decreta la medida privativa de libertad personal, exprese cuales son los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y las pruebas que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena (num. 2 y 3, art. 2159 C. J.).

Por cuanto el único cargo que pesa sobre Herrera Méndez, se refiere a la ilicitud de la sustancia detectada en las figuras de porcelana, transportadas bajo la guía American Airline N° 001-845-3035, en la que figura como remitente, y, habiéndose demostrado que tales sospechas no son ciertas, queda sin sustento fáctico y jurídico su detención.

Por las consideraciones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que es ILEGAL la detención de JESUS ANTONIO HERRERA MENDEZ ordenada por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga, y ORDENA que el detenido sea puesto en inmediata libertad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALVARO BLANDÓN MELO CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresa a esta Corporación de Justicia, resolución de 17 de diciembre de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de ALVARO BLANDÓN MELO, sindicado por Delito Contra El Pudor y La Libertad Sexual en perjuicio de la menor RAQUEL RUÍZ MENA.

Notificada dicha resolución, la licenciada YARIELA MELO DE PIERRE,

apoderada judicial del señor BLANDÓN MELO, apela, por lo que se concede en el efecto suspensivo, a fin de que sea resuelta la alzada.

LA ACCIÓN

Sostiene la licenciada MELO DE PIERRE, que en la presente encuesta penal no se ha acreditado aún la responsabilidad de su patrocinado, señor ALVARO BLANDÓN MELO, toda vez, que el Tribunal A-Quo en la resolución objeto de apelación, no valoró adecuadamente las pruebas documentales (Examen de Medicatura Forense) ni las pruebas testimoniales (Declaraciones juradas de IVÁN PÉREZ BLANDÓN y WALTER MORENO).

Por lo que solicita, se declare ilegal la detención preventiva que sufre el beneficiado de esta acción constitucional. (f. 25)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

El Tribunal A-Quo nos remite el sumario seguido al señor ALVARO BLANDÓN MELO, sindicado por la supuesta comisión de delito de Violación Carnal en perjuicio de RAQUEL RUÍZ MENA, contentivo de 103 fojas (Copias autenticadas).

Ahora bien, nos corresponde como Tribunal de Habeas Corpus, examinar la situación procesal del beneficiado con la presente acción a fin de verificar si se han cumplido las garantías constitucionales y legales para mantenerlo privado de su libertad corporal.

La génesis de este proceso tiene lugar el día 5 de octubre de 1999, cuando la señora MARGARITA MENA CÓRDOBA interpone formal denuncia ante la Policía Técnica Judicial (División de Delitos Contra El Pudor y La Libertad Sexual, debido a que su menor hija de 13 años de edad, RAQUEL MENA RUIZ, había sido abusada sexualmente por ALVARO BLANDÓN MELO, quien era un conocido de la familia. (fs. 1-2).

Al momento de rendir declaración la menor ofendida RAQUEL RUÍZ MENA, señaló, que el día 19 de junio estaba en el parque con la joven AKIARA RODRÍGUEZ, de pronto se le presentó ALVARO BLANDÓN MELO, la agarró de la mano y se la llevó en un taxi para una casa desconocida en donde la obligó a tener relaciones sexuales; y al día siguiente la violó de nuevo, luego se la llevó para los alrededores del estadio Juan Demóstenes Arosemena en donde la dejó tirada. (fs. 3-4)

Por otra parte se encuentra el examen médico legal practicado por la Dra. MERCEDES R. LASSO, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, el día 6 de octubre de 1999, en donde determinó que la menor RAQUEL RUIZ MENA presentaba Desfloración de Vieja Data. (f. 20)

Aunado a lo anterior, a foja 54-55 se encuentra Informe de Evaluación Psicológica practicado por el Instituto de Medicina Legal a la menor RAQUEL RUIZ MENA, en donde se determinó que evidencia estrés post-traumático.

Por su parte, ALVARO BLANDÓN MELO en su declaración indagatoria, niega los cargos que se le formulan. (fs. 37-40)

De lo expuesto, debemos señalar, que existen serios indicios que vinculan a BLANDÓN MELO con la supuesta comisión del Delito de Violación Carnal, toda vez que de la declaración de la menor RAQUEL RUIZ y de los exámenes médico legales practicados a su persona, se comprueba la existencia del hecho punible, lo que da lugar a que en este tipo de delitos contra el pudor y la libertad sexual, se decrete la detención preventiva del sujeto activo del hecho punible.

Además, el delito por el cual está siendo investigado BLANDÓN MELO conlleva pena de prisión que oscila en entre tres (3) a diez (10) años de prisión.

Por último, a foja 41-42, se observa, la orden de detención preventiva dictada contra QUINTERO ESQUINA, la cual cumple con los requisitos legales exigidos en el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial.

Dadas las consideraciones expuestas, el Pleno de esta Corporación de Justicia, concluye, que existen serios indicios contra el señor ALVARO BLANDÓN MELO para mantenerlo privado de su libertad, por lo que la resolución objeto de apelación debe confirmarse.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución calendada 17 de diciembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCELA MUÑOZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado VICTOR OROBIO, presentó el día 14 de enero de 2000 ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Hábeas Corpus a favor de la señora MARCELA MUÑOZ contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

ANTECEDENTES DEL CASO

La presente investigación tiene su génesis con el Informe de Novedad suscrito por las unidades policiales del Área "A" de San Felipe, Javier Murillo y Nicanor Carvajalino, quienes manifestaron que el día 8 de octubre de 1999, aproximadamente a la 1:45, ambos se encontraban en un recorrido en el sector de calle K y calle Estudiante, cuando a la altura de la cantina Panamericana se les acercó una señora la cual les informó que en la cantina Haway, ubicada entre calle Estudiante y calle J, se encontraba una joven de tez morena que vestía traje largo color chocolate, la cual se estaba dedicando a la venta de sustancias ilícitas (droga).

Ante tal información, las unidades policiales procedieron al lugar indicado, percatándose que dentro del local a un costado de las máquinas de juego se encontraba una joven con las descripciones proporcionadas, la cual al notar su presencia se puso nerviosa y pudieron observar cuando ésta tiró algo detrás de una máquina de juegos, por lo que inmediatamente procedieron a solicitarle su identificación respondiendo al nombre de MARCELA MUÑOZ.

Al verificar lo que la ciudadana había tirado detrás de la máquina, pudieron observar que se trataba de cuatro (4) carrizos plásticos transparentes que en su interior contenían un polvo blanco que fue presumido como droga.

Igualmente se encontró en el mismo lugar tres (3) carrizos plásticos contentivos también de un polvo blanco y dos (2) carrizos plásticos transparentes que en su interior también contenían un polvo blanco que fue presumido como droga.

Finalmente, señalan que la joven fue trasladada a la base Policial de San Felipe en donde le efectuaron el registro correspondiente, encontrándosele en el seno izquierdo un envoltorio de papel higiénico color blanco el cual contenía en su interior once (11) carrizos plásticos transparentes igualmente contentivo de un polvo blanco, y en su seno derecho, dieciséis (16) carrizos transparentes contentivos también de un polvo blanco presumido como droga, por lo cual en su totalidad hacen un total de treinta y seis (36) carrizos transparentes con presunta sustancia ilícita(fs. 1-3). Cabe señalar que este informe de novedad fue posteriormente ratificado por las unidades policiales ante el funcionario de instrucción. (Fs. 30-34)

De inmediato, la sustancia incautada fue sometida a la correspondiente prueba de campo, arrojando la misma resultados positivos para la presencia de Cocaína. (Fs. 7)

Es así como la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas dicta providencia de indagatoria (fs. 12-13) y posterior detención para la ciudadana MARCELA MUÑOZ.

Al momento de rendir sus descargos, la sumariada MUÑOZ no niega los hechos que se le atribuyen, sin embargo argumenta que sólo le pertenecen los veintisiete (27) carrizos que le fueron encontrados en su poder, por lo que no se hace responsable de los otros nueve (9) carrizos también encontrados por las unidades policiales. Agrega que no se dedica a la venta de sustancias ilícitas, que la droga que le fue decomisada era utilizada para su consumo personal ya que ella es consumidora de cocaína desde que tenía la edad de veinticinco (25) años. (Fs. 14-17)

El Laboratorio Técnico Especializado en Drogas analizó las muestras remitidas por el funcionario de instrucción y certificó que las mismas resultaron positivas para la determinación de Cocaína, en la cantidad de 1.37 gramos. (Fs. 25)

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS

La Defensa Técnica manifiesta entre otras cosas, que es un hecho cierto que la droga incautada fue encontrada en poder de su patrocinada, pero que a raíz de ello no se puede presumir que el hecho de tener una sustancia en su poder con la escasa cantidad de 1.37 gramos sea para la venta, ya que esto hay que probarlo, y es esta la obligación del Ministerio Público, porque a su criterio no existe en el expediente ningún otro elemento adicional que lleve al juzgador a demostrar como lo exige el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, que la droga encontrada en posesión de MARCELA MUÑOZ era para la venta.

Que no existe en el expediente ningún informe previo que indique que la imputada se dedicaba a la venta de droga, y que lo que existe, es simplemente un supuesto señalamiento de una persona desconocida a la que no se describe con ninguna de sus generales, y a la que nunca se le tomo ningún tipo de declaración, por lo que en nuestro Derecho Positivo esa información carece de toda validez. Continúa señalando el accionante que no existe compra controlada con billetes marcados, no existe ningún testimonio que indique que le hayan comprado o visto a su poderdante vender droga o dedicarse a esa actividad aunado a que en ese lugar donde se encontró la droga es público y concurre mucha gente. Además agrega que no existe ninguno de los instrumentos utilizados para la preparación de la sustancia ilícita en carrizos listos para la venta, que tampoco existe lo fundamental para comprobar la venta lo cual es el dinero, y a su patrocinada no se le encontró ningún centavo.

Finalmente, el Licenciado Victor Orobio solicita a esta Honorable

Magistratura que se declare ilegal la detención preventiva que sufre su patrocinada, toda vez que a la luz de nuestro Derecho Positivo vigente, la medida cautelar de Detención Preventiva aplicada a la señora MARCELA MUÑOZ viola las garantías Constitucionales y Legales y no se ajusta al cumplimiento del mandato Legislativo que estableció los requisitos sine qua non para que la autoridad competente proceda a ordenar la detención preventiva de una persona como lo es el artículo 2148 del Código Judicial que señala que para que tal medida proceda, el delito por el cual se investiga debe tener pena mínima de dos (2) años, el cual a su juicio no es el caso que nos ocupa, ya que según las piezas procesales contenidas en el expediente estamos en presencia de un delito de posesión simple de sustancia ilícita que lleva aparejada pena mínima de un (1) año de prisión, por lo que solicita sea revocada la medida restrictiva de la libertad personal que le fue aplicada a su representada.

ARGUMENTOS DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

EL Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, PATRICIO CANDANEDO, al rendir su informe mediante Oficio N° FD2-T00-191-2000 de 17 de enero de 2000, manifestó haber sido el funcionario de instrucción que ordenó la detención preventiva de la ciudadana MARCELA MUÑOZ, y para ello se fundamentó en los elementos probatorios constituidos en los informes de novedad, los señalamientos directos efectuados bajo la gravedad del juramento por los agentes captores, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se desprenden del hecho de encontrarse la recurrente en la cantina Haway, previa a la acción tomada por ésta, en los precisos momentos en que observó a las unidades policiales en el lugar de los hechos, es decir tratar de deshacerse del cuerpo del delito, la mala justificación de la imputada al momento de efectuar sus descargos, aunado a la diligencia de Prueba de Campo, la cual dio resultados positivos para la determinación de Cocaína, acreditada ésta por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, las cuales dieron un total de 1.37 gramos.

Por otro lado señala, que este tipo de fraccionamiento o distribución de estas clases de sustancias, son comunes en la actividad de venta y traspaso de estupefacientes, pues facilita su manipulación, adquisición y entrega, permitiendo a su vez que las personas que se dedican a este tipo de comercio ilegal, aduzcan la posesión simple para consumo personal con la intención de evadir la represión pública al momento de ser sorprendidos.

Finalmente, agrega el funcionario demandado que a su criterio, los indicios de presencia y oportunidad que hasta el momento vinculan a la imputada MARCELA MUÑOZ, se hacen innegables. (Fs. 14-16)

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

Esta Corporación de Justicia procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el expediente sumarial remitido por el Ministerio Público, en vías de verificar si la medida cautelar aplicada a MARCELA MUÑOZ se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales contenidas en dichas disposiciones.

Teniendo estos parámetros como marco, procedemos a determinar la procedencia o no de esta acción.

Luego de haber efectuado un análisis previo de los antecedentes del caso, de los argumentos de la defensa técnica y de la repuesta del funcionario demandado, esta Corporación de Justicia considera que en el caso que nos ocupa, la orden de detención aplicada a la señora MARCELA MUÑOZ, reúne los requisitos que establece el artículo 2159 del Código Judicial, ya que fue dictada por autoridad competente, en ella se determina el hecho punible y la existencia de elementos probatorios que vinculan a la beneficiaria de la presente acción

constitucional con la comisión del mismo.

No obstante, considera el Pleno de la Corte que no se ha cumplido con lo que establece el artículo 2148 del Código Judicial, ya que los elementos probatorios allegados al proceso hasta este momento guardan relación con el delito de posesión de drogas, que de conformidad con el artículo 260 del Código Penal es sancionado con pena de prisión mínima inferior a dos (2) años. Por otro lado, en reiteradas jurisprudencia, sobre esta misma materia, se ha establecido que, en los casos de la posesión de pequeñas cantidades de droga, el propósito de venta se puede demostrar por la concurrencia de otros elementos como son, el hallazgo de dinero fraccionado, pesas, máquina selladora de carrizos, papel especial y otros insumos necesarios para la fabricación y distribución de la droga, elementos estos que no fueron encontrados en posesión de la imputada, momento en que fue detenida por las unidades policiales.

También se observa que en el expediente no existe, hasta el momento ninguna información adicional referente a la imputada o señalamientos de terceras personas que la comprometan o vinculen a la venta y traspaso ilegal de sustancias ilícitas.

Por todas las consideraciones expuestas, esta Magistratura considera que los argumentos de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas no son suficientes para mantener la detención de MARCELA MUÑOZ ya que se fundan en indicios de presencia y oportunidad que no son confirmados con otros elementos probatorios, por lo que le asiste la razón a la defensa técnica en cuanto a que el delito tipificado en este caso, es el de consumo de drogas, el cual no es susceptible de detención preventiva, y por tanto, lo que procede es declarar ilegal tal medida ordenada.

Esta decisión no debe entenderse como un pronunciamiento de esta Magistratura que desvincule a la imputada del delito que se le imputa; quedando sujeta al resultado del proceso penal que se le sigue, y sin perjuicio de que sea detenida nuevamente si se presentan nuevos elementos que así lo ameriten.

En mérito de lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de la señora MARCELA MUÑOZ y ORDENA su inmediata libertad de no existir ninguna otra causa pendiente en su contra.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ERIC GABRIEL GRAELL REINA CONTRA EL JUEZ SÉPTIMO DE CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 21 de diciembre de 1999, dentro de la acción de habeas corpus promovida por ERIC GRAELL contra el Juez Séptimo de Circuito de lo Penal de Panamá.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de ERIC GABRIEL GRAELL REINA, fundamentando su sentencia en los siguientes términos:

"...

FUNDAMENTOS LEGALES

PRIMERO: Al hacer un análisis de la presente encuesta penal se observa que el día 10 de febrero de 1998 a eso de las 10:25 de la mañana el Juez Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Audiencia Preliminar dispuso en la parte resolutiva SOBRESEER PROVISIONALMENTE a ERICK GABRIEL GRAELL REINA de los delitos de "Rapto, Asociación Ilícita para Delinquir y Robo", pero ABRIÓ CAUSA CRIMINAL contra ERIC GABRIEL GRAELL REINA por los delitos de "Violación Carnal, Estupro y Abuso Deshonesto" (fs. 903-1076).

SEGUNDO: Mediante resolución de 3 de septiembre de 1998, este Tribunal CONFIRMO en todas sus partes la resolución del Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 10 de febrero de 1998 (fs. 1115-1128).

Se tiene que el Juzgado Séptimo de Circuito de los Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el día 1 de marzo de 1999, en Autos Varios N° 43, ordenó la reposición del proceso a partir de la foja 903 del expediente y remite lo actuado para ante el Juzgado de Circuito de lo Penal en Turno del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por razones de competencia (fs. 1196-1200).

Dicha resolución fue recurrida por el Fiscal de Primera Instancia y el Segundo Tribunal Superior de Justicia en resolución del 1 de julio de 1999, DECLARÓ la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de enjuiciamiento del 10 de febrero de 1998, mediante Audiencia preliminar de fojas 903 y DECLINA el conocimiento del presente sumario ante el Juez de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá (La Chorrera), en Turno (fs. 1245-1247).

Por tanto, la resolución por la cual el Juez a quo, calificó los delitos contra los imputados, no se encuentra en firme, primero porque en dicha resolución fue declarada la nulidad de todo lo actuado el día 1 de julio de 1999 y segundo porque se anunció recurso de casación contra la resolución del uno (1) de julio de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior.

TERCERO: Ahora bien, la Sala luego de hacer un estudio de la presente encuesta, estima que la detención preventiva fue dispuesta por autoridad competente para ello, a través de diligencia razonada de la Fiscalía Especial del Circuito Judicial de Panamá, Área de Ancón, el 25 de julio de 1997 (fs. 122-142), por un hecho punible tipificado y sancionado con prisión de más de dos años según la ley. En consecuencia, se concluye en mantener la medida de detención preventiva impartida contra ERIC GABRIEL GRAELL REINA.

En su escrito de apelación al igual que en la demanda de habeas corpus, ante el Segundo Tribunal Superior, el detenido ERIC GRAELL alegó que su detención preventiva no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2038, 2148-A y 2565 del Código Judicial modificados por la Ley N° 42 de 27 de agosto de 1999 ni con los artículos 61 y 216 del Código Penal, toda vez que es sólo un cómplice secundario que ya cumplió con el mínimo de la pena que le correspondería por este grado de participación en el delito de violación carnal y debe ser puesto en libertad o aplicarse una medida cautelar distinta de la detención preventiva.

Mediante la presente acción de habeas corpus, el Pleno debe examinar la orden de privación de libertad decretada para determinar si cumple con los requisitos constitucionales y legales. En el caso en estudio, se observa que la detención preventiva de ERIC GRAELL REINA fue decretada por la Fiscal Especial del Circuito Judicial de Panamá, Área de Ancón, mediante Resolución fechada 25 de julio de 1997, en la que se exponen claramente las razones que le sirven de base para decretar su detención en la comisión de los delitos investigados, así como los fundamentos legales que avalan esta decisión.

En el sumario instruido constan los hechos que a continuación se enumeran.

1. El día 13 de junio de 1997 la joven Mitalia Gómez denunció que fue violada sexualmente por los sujetos, a los cuales le aceptó el ofrecimiento de llevarla a su casa luego de salir de la discoteca La Herradura en Chorrera, mareada y con vómitos. (fs. 4-12).

2. El resultado del examen médico legal practicado a la joven Mitalia Gómez determinó que tenía señales de violencia con fines sexuales, tres laceraciones sangrantes en la región anal y perineal, un edema leve en la región frontal izquierda, dos escoriaciones en la rodilla derecha y cuatro escoriaciones en la espalda, entre otros (f. 21).

3. El señor Arturo Alexander Gordón afirma haber ayudado a Mitalia Gómez, el día 13 de junio de 1997 luego de verla golpeada y con la ropa rasgada, corriendo por el sector de Licona pidiendo ayuda por haber sido violada (fs. 30-32).

4. Jaber Mohammad quien también se encontraba en el Club La Herradura el día de los hechos, afirma haber visto llegar a ese lugar a cinco amigos, entre ellos: TITI (CARLOS IVÁN AYALA SHEFFER), ERIC GRAELL REINA "alias" ERITO y JUAN TERCERO en una camioneta americana, color azul, aproximadamente de los años 1978 ó 1979, la cual era conducida por el joven apodado "TITI" (f. 52-54).

5. Mediante declaración jurada, ERIC GRAELL REINA, aseveró que el día de los hechos sus amigos le dijeron a la joven Mitalia Gómez que la iban a llevar a su casa y que Carlos Ayala "alias" Titi, quien conducía el auto siguió en dirección hacia la carretera que conduce a la ciudad de Panamá, lo cual ocasionó que la "joven dijera que no vivía para allá y pidió que la llevaran a su casa". No obstante, agrega que Titi "continuó manejando hasta llegar al área de la zona donde había densa maleza", y ahí "sacó la camioneta de la carretera". Afirma que Carlos Iván Ayala Sheffer "alias" Titi, Rogelio Fernández, Marco Antonio Díaz y Juan Agustín Tercero fueron los que mantuvieron relaciones sexuales con la ofendida (fs. 93-95).

6. Posteriormente, ERIC GRAELL REINA, mediante declaración indagatoria afirma que el día 13 de junio de 1997, se encontraba en compañía de Carlos Iván Ayala apodado Titi, Marcos Antonio Díaz Mena (PEPE), Federico Abdiel, Juan Tercero y Rogelio Fernández (fs. 194-197).

5. Marcos Antonio Díaz Mena aseveró mediante declaración indagatoria que el día de los hechos ERIC GRAELL REINA, Federico, Titi, Rogelio y Juan Tercero "se bajaron en el lote baldío" (Cfr. fs. 326-330) y que ignora lo que sus compañeros le hicieron a la joven Mitalia Gómez en ese lugar.

6. La Fiscal Especial del Circuito Judicial de Panamá, Área de Ancón, con fundamento en la denuncia presentada por la joven Mitalia Gómez, y en las pruebas allegadas al expediente dictó la providencia fechada 25 de julio de 1997, decretó la detención preventiva del imputado ERIC GABRIEL GRAELL REINA y los otros imputados (fs. 122-142).

7. A foja 160 del sumario está legible el resultado de la evaluación sicológica practicada a Mitalia Gómez, en el que consta la prenombrada padece de una reacción de estrés agudo por abuso sexual.

8. ERIC GRAELL REINA amplió su declaración indagatoria y aseguró que viajó a la Chorrera en la camioneta de la mamá de Carlos Iván Ayala Sheffer "alias" Titi y señala que desconoce quienes se bajaron del auto cuando Ayala Sheffer, detuvo el carro a un costado de la carretera (área del canal) que conduce a la ciudad capital pero que el conductor, Ayala Sheffer, estaba al lado de él cuando se quedó dormido (fs. 194-197). Posteriormente, de fojas 253 a 258, ERIC GRAELL REINA contradice lo expuesto al afirmar que Carlos Ayala Sheffer "alias" Titi y él, escuchaban cuando Rogelio Fernández, Abdiel Espino, Marcos Díaz y Juan Tercero se peleaban el turno para violar a la joven Mitalia Gómez y, además, aseguró que Carlos Iván Ayala Sheffer "alias" Titi se acercó al lugar donde estaba el resto del grupo ultrajando a Mitalia Gómez para decirles que se apuraran y, después de cinco o seis minutos regresó riéndose "como si hubiera tenido algo" con la ofendida.

9. Al ampliar su declaración indagatoria Marco Antonio Díaz Mena, afirmó que el 12 de junio de 1997 se dirigió a la discoteca La Herradura en compañía de ERIC GRAELL REINA, Juan Tercero, Federico y Carlos Iván Ayala Sheffer "alias" Titi, siendo éste último el conductor de la camioneta color azul. Agrega que cuando se retiraban de la discoteca, Federico forzó a Mitalia Gómez para que subiera al carro y que ésta pedía durante el trayecto hacia la ciudad capital que no la tocaran y la dejaran tranquila. También aseguró que cuando el carro se detuvo en el camino (cerca de la base de Rodman), bajaron del mismo a Mitalia Gómez y Federico, ERIC GRAELL REINA, Carlos Iván Ayala Sheffer "alias" Titi, Rogelio y Juan Tercero y se dirigieron con ella hacia un lote baldío; que cuando regresaron al carro sin la joven, le dijeron que no había pasado nada y que si hablaba ya sabía lo que le iba a pasar (fs. 229-235).

10. De fojas 444-450 Marcos Antonio Díaz Mena, agrega que sus compañeros demoraron en ese lugar aproximadamente entre 12 a 15 minutos y que se bajaron en el siguiente orden: Carlos Ayala, Federico Espinosa y ERIC GRAELL REINA y que cuando regresaron al automóvil venían diciendo que Federico había tomado las prendas de la joven Mitalia Gómez.

Esta Corporación de Justicia debe señalar al detenido GRAELL REINA tal como lo hizo el Tribunal a quo, que el Auto de Enjuiciamiento fechado 10 de febrero de 1998, mediante el cual se le llamó a juicio por el delito de violación carnal, estupro y abusos deshonestos y, lo sobreseyó por los delitos de rapto, asociación ilícita para delinquir y el patrimonio, no está en firme; toda vez que fue declarado nulo por el Juez Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial mediante sentencia de 1 de marzo de 1999 la cual fue confirmada en todas sus partes por el Segundo Tribunal Superior mediante Resolución de 1 de julio de 1999 y contra esta última se anunció recurso de casación.

Por tanto, la medida precautoria de privación de la libertad ambulatoria decretada contra GRAELL REINA mediante diligencia fechada 25 de julio de 1997, por la comisión de los delitos de Asociación Ilícita para delinquir, robo violación, estupro y abusos deshonestos y rapto fue dictada por autoridad competente cumpliendo con las formalidades legales, porque los elementos probatorios hasta ahora allegados al sumario vinculan a GRAELL REINA con la comisión de dichos delitos.

Con relación a las objeciones formuladas por el detenido ERIC GABRIEL GRAELL REINA, el Pleno de la Corte estima necesario señalar, que no es procedente, mediante la presente acción constitucional dilucidar el grado de participación del prenombrado en la comisión de uno de los delitos investigados (violación carnal) y si la sanción a imponer es menor o mayor de 3 años, ya que es al Tribunal del conocimiento quien califica el sumario, previa la tipificación definitiva de los delitos y la determinación de la vinculación de cada imputado con la comisión de los mismos.

Por estas razones, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la detención del procesado es legal y así debe declararse.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la sentencia apelada que declara LEGAL la detención preventiva dictada por la Fiscal Especial del Primer Circuito Judicial contra ERIC GABRIEL GRAELL REINA "alias" ERITO mediante providencia de 25 de julio de 1997.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA LICENCIADA MÓNICA GONZÁLEZ SAGEL DENTRO DEL PROCESO DE REINTEGRO DE LA MENOR DANIELA PATRICIA PITTY SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Mónica González Sagel, quien actúa como apoderada judicial de Luis Fernando Pitty, presentó advertencia de inconstitucionalidad contra los Acuerdos N° 6 del 11 de febrero de 1998, N° 7 de 30 de julio de 1998 y N° 8 de 2 de septiembre de 1998, proferidos por el Tribunal Superior de Menores, dentro del proceso de reintegro de la menor Daniela Patricia Pitty seguido ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Panamá.

Se procede a examinar si esta iniciativa constitucional se produce con apego a los presupuestos formales que estatuyen el inciso segundo del numeral primero del artículo 203 de la Ley Fundamental y el artículo 2549 del Código Judicial, en concordancia con el 2551 de la misma excerta, así como profusa jurisprudencia de la Corte sobre la materia.

La lectura del libelo permite advertir, de inmediato, la pretermisión de algunas formalidades.

En primer lugar se observa que el libelo de advertencia no señala expresamente la disposición constitucional que se estima infringida (art. 2551, num. 2, C. J.), limitándose a expresar que "... los Magistrados del Tribunal Superior de Menores ... han violado la garantía constitucional del debido proceso y el principio a la tutela jurisdiccional consagrados en la Constitución Nacional de la República de Panamá ..." (f. 4).

Por otro lado, observa la Corte que la advertencia se dirige contra tres acuerdos suscritos por el Tribunal Superior de Menores, que según expresa la demandante, se encuentran "... en abierta violación a lo preceptuado por los artículos 777 y 793 del Código de la Familia ..." (f. 4).

Esta Superioridad ha reiterado en numerosas ocasiones, el deber ineludible del activador de referirse, por separado, a cada uno de los preceptos o actos que considera infringen la normativa superior, debiendo indicar si la infracción a la Carta Fundamental se produce en el fondo o en la forma (Cfr. Sentencias de 3 de febrero de 1999 y 30 de septiembre de 1999).

De otra parte, la jurisprudencia ha señalado que el planteamiento constitucional en vía incidental o indirecta requiere, como presupuesto fundamental, que los preceptos legales o reglamentarios resulten aplicables para resolver la pretensión (art. 2549 C. J.). En el caso que nos ocupa, el Pleno observa que los acuerdos que se impugnan ya han sido aplicados en el proceso originario, según se desprende de la lectura de los hechos cuarto y quinto del libelo de advertencia (vid. f. 8), lo que produce la inadmisibilidad de la iniciativa constitucional incoada (Cfr. Sentencia del Pleno de 23 de junio de 1999).

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA,PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la licenciada Mónica González Sagel contra los Acuerdos N° 6 del 11 de febrero de 1998, N° 7 de 30 de julio de 1998 y N° 8 de 2 de septiembre de 1998 proferidos por el Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA EN SU PROPIO NOMBRE POR EL LICDO. DIENER VINDA, CONTRA LA FRASE "SIN OIR AL DEMANDADO" CONTENIDA EN EL ARTICULO 1952 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado DIENER VINDA, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad contra la frase "sin oir al demandado" contenida en el artículo 1952 del Código Judicial.

El demandante estima que dicha frase viola directamente el contenido de los artículos 32 y 45 de la Constitución Nacional y señala como concepto de la infracción lo siguiente:

> "El artículo 1952 del Código Judicial, al regular el procedimiento del proceso de expropiación por razones de urgencia, y disponer que el Juez sin oir al demandado, resolverá sobre la expropiación, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional y por tanto, se viola directamente este precepto constitucional.
>
> La frase 'sin oir al demandado' del artículo 1952 del Código Judicial, viola directamente el artículo 45 de la Constitución Nacional porque esta norma dispone que 'puede hacer expropiación mediante juicio especial e indemnización', y la misma presupone la existencia de un proceso formal conforme lo regula el capítulo primero del título XVI del mismo código y en ninguna parte de este precepto se dispone que por razones de urgencia no debe oirse al demandado dentro del proceso de expropiación. De haber sido otra la intención o el espíritu de esta norma constitucional, así lo hubiesen consignado los constituyentes.

> La existencia de la mencionada frase dentro del artículo 1952 del Código Judicial excede el marco constitucional del artículo 45 en perjuicio del derecho de defensa del propietario o demandado en un proceso de expropiación."

Corrido el traslado al señor Procurador General de la Nación, éste opinó que le asiste la razón al demandante en cuanto a la inconstitucionalidad de la frase acusada, pero indicó que las normas que resultaban violentadas eran los artículos 32 y 47 constitucional, no así el artículo 45 ibídem señalado por el actor. La parte medular de la Vista expresa lo siguiente:

> "Ha ocurrido, pues en el asunto que nos ocupa, la violación del artículo 32 constitucional, porque la frase impugnada produce el desconocimiento de una de las garantías fundamentales que tienen todos los individuos frente a un proceso, de ser oídos y de oponerse a las pretensiones que existan en su contra, en este caso, participar en la determinación del valor del bien expropiado. Observamos, sin necesidad de otras explicaciones la violación de tal postulado por la frase: 'sin oir al demandado' contenida en el artículo 1952 del Código Judicial.
>
> El recurrente cita como violado en artículo 45 de la Constitución, al respecto, estimamos que este precepto no es pertinente al objeto o pretensión de inconstitucionalidad planteado, pues el mismo se refiere a la expropiación ordinaria y la disposición 1952 del código de procedimiento pertenece al capítulo que regula la expropiación en casos de urgencia en el referido Código Judicial.
> ...
> En el segundo caso (expropiación extraordinaria), la indemnización es siempre posterior al cese de las causas que motivaron dicho acto expropiatorio y la expropiación ocasionada por los motivos de necesidad extrema mencionados en la norma constitucional respectiva; es ordenada por el Organo Ejecutivo. De manera que impedir la participación del demandado en la determinación del valor del bien expropiado, viola el principio del debido proceso legal porque cuando se inicia el proceso el bien ha sido ya materialmente tomado en posesión y obviamente han desaparecido las causas de apremio que motivaron dicho acto expropiatorio. Así que no vemos justificación alguna para que el proceso sea sumario o excepcional y se impida participar al demandado violándose, así una de las garantías del debido proceso, la cual debe cumplirse en todos los juicios.
> ...
> Es clara también la infracción del artículo 47 constitucional, ya que éste prescribe taxativamente que; 'el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada'. De modo que si nos ajustamos al sentido de la frase: 'el Juez resolverá, dentro de los dos días siguientes, sobre la expropiación, sin oir al demandado;' resulta patente la inconstitucionalidad de la pretensión planteada porque sólo el Ejecutivo puede decretar la expropiación, correspondiéndole al juez, únicamente, fijar la indemnización.
> ...
> En síntesis la expropiación ordinaria debe ser definida por el legislador, es decir, promulgada en ley y debe ser decidida por sentencia judicial con indemnización previa a su ejecución. La expropiación de emergencia o extraordinaria la decreta el Ejecutivo y solamente la indemnización es dictada por el juez y es, lógicamente, posterior. Por ello, no encontramos razonable que se impida participar al demandado en la determinación de la indemnización, pues han desaparecido las causas que apremiaron a la administración a decretarla.
> ...
> Una exégesis literal del párrafo que contiene la frase sometida al control de constitucionalidad conduciría a pensar que el juez

> decidirá sobre la expropiación extraordinaria, excepcional o de emergencia en si misma y, si decide concederla, determinará la indemnización que corresponda.
>
> Tal interpretación es errónea. Consideramos que el legislador incurrió en una falla al momento de crear la norma, pues de la redacción indicada no se percibe lo que conforme a la Constitución debe entenderse: que el juez lo único que puede decidir es sobre el justiprecio del bien expropiado o que fue ocupado.
> ...
> Como corolario de lo expuesto, este despacho estima que la Honorable Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la frase: 'sin oir al demandado' contenida en el artículo 1952 del Código Judicial por ser violatoria de los artículos 32 y 47 de la Constitución e interprete dicha norma, a su vez, con el parámetro respectivo de la Constitución, es decir, el propio artículo 47 de dicha excerta fundamental." (los paréntesis son nuestros)

Cumplidos todos los trámites procesales inherentes al presente recurso de inconstitucionalidad se encuentra el negocio pendiente de decisión para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

La presente demanda de inconstitucionalidad se propone, como se ha visto, contra la frase "sin oir al demandado" contenida en el artículo 1952 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 1952.
>
> Inmediatamente que el representante de la respectiva entidad estatal reciba la orden de promover el proceso junto con los documentos correspondientes, procederá a proponer la acción.
>
> Si el Juez considerare que faltan algunas pruebas, las exigirá inmediatamente, señalándolas con toda claridad. Si la documentación le pareciera completa, procederá al avalúo correspondiente.
>
> Completadas las pruebas y hecho el avalúo, el Juez resolverá, dentro de los dos días siguientes, sobre la expropiación, sin oir al demandado; y si la concede, fijará la indemnización." (lo resaltado es nuestro)

Afirma el demandante que la norma transcrita vulnera el principio del debido proceso contenido del artículo 32 de la Constitución Política porque la posibilidad de que el Juez determine el monto de la indemnización sin la participación del titular del bien expropiado infringe el contradictorio del proceso judicial, impidiendo la oposición y el derecho de defensa del demandado quien deberá acogerse al arbitrio del juzgador. Igualmente sostiene que se vulnera el artículo 45 constitucional pues al no tener el propietario del bien ocupado o expropiado la posibilidad de ser escuchado, no se desarrolla el proceso formal que exige esa norma.

En cuanto a la infracción de esta última disposición constitucional -artículo 45- la Corte coincide con la opinión del Jefe del Ministerio Público en cuanto a que la norma contentiva de la frase acusada de inconstitucional -artículo 1952 del Código Judicial- y todas las contenidas en el Capítulo II del Título XVI del Libro II de dicha excerta legal se refieren a la denominada expropiación extraordinaria que se realiza "en caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exigan medidas rápidas ..." contemplada a nivel constitucional en el artículo 47, y no a la llamada expropiación ordinaria que presupone un proceso judicial e indemnización previos, desarrollada en el Capítulo I, Título XVI, Libro II del Código Judicial y en el artículo 45 constitucional.

La distinción entre ambas instituciones ya fue aclarada por esta Corporación en fallo de 31 de agosto de 1994:

> "Tal como lo ha expresado el Pleno de esta Corporación en fallos anteriores ... la expropiación, que es la figura mediante la cual el Estado se hace dueño de un bien perteneciente a un particular, con el objeto de destinarlo a la satisfacción de un interés público o social, puede ser de carácter ordinaria o extraordinaria. La expropiación es ordinaria cuando una ley declara los motivos de utilidad pública o de interés social que el bien que va a ser expropiado debe satisfacer. En este caso, es un Juez el que debe decretar la expropiación, fijar el monto de la suma que recibirá el expropiado como indemnización la cual deberá pagar el Estado antes de que se haga la transferencia del bien. Por otro lado, la expropiación extraordinaria la decreta el Ejecutivo en casos de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente. En estos casos, el Ejecutivo puede ocupar inmediatamente el bien expropiado sin siquiera haber pagado la indemnización, la cual puede ser pagada con posterioridad al acto de expropiación y ocupación del bien."

El artículo 32 de la Constitución Nacional que consagra el principio del debido proceso, ha sido interpretado por la doctrina nacional como: "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (HOYOS, Arturo. El Debido Proceso, Editorial Temis, S. A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1996, pág. 54) (lo resaltado es nuestro).

Asimismo, en cuanto al derecho de defensa que constituye el centro de la mencionada garantía constitucional, el doctor Hoyos señala que "... si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados por ley ... ante el tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional." (Ibídem, págs. 89-90).

Ahora bien, el artículo 1952 del Código Judicial establece, al igual que el resto del articulado del Capítulo II, Título XVI, Parte II del Libro II de dicha excerta legal titulado "Expropiación en casos de Urgencia", el procedimiento a seguir en tales casos conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Nacional.

El mencionado artículo constitucional es del tenor siguiente:

> "Artículo 47. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.
>
> Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación sólo será por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.

> El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación." (lo resaltado es nuestro)

Como hemos señalado en líneas anteriores, nuestra Carta Magna reconoce dos formas de expropiación: la común u ordinaria que se dispone por razones de utilidad pública e interés social y requiere definición legal, sentencia judicial e indemnización previa (art. 45); y la irregular, de urgencia o extraordinaria, que procede en caso de guerra, grave perturbación del orden público o interés social urgente que exigen medidas rápidas y es dispuesta por el Organo Ejecutivo con indemnización posterior (art. 47).

El artículo 47 reconoce también la fórmula de la ocupación de urgencia y al respecto indica que "cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado" el Ejecutivo la decretará y ésta durará solamente "el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado". Respecto al concepto de ocupación, el doctor CESAR QUINTERO nos dice: "La ocupación -en derecho público- es el acto por el cual el Estado aprehende o toma un bien de otra persona, pero sin ánimo de adquirirlo. Es decir, sin intención de privar al dueño de su dominio o propiedad sobre el bien ocupado. Por tanto, la ocupación es, en principio, temporal." (QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Tomo I, Panamá, 1967, pág. 209)

En ambos casos -expropiación de urgencia y ocupación de urgencia- el Estado es responsable de los daños y perjuicios y deberá pagar su valor "cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación y ocupación".

De la disposición constitucional examinada -artículo 45- se desprende que, en el supuesto de la expropiación común u ordinaria, la posesión material del bien por parte del Ejecutivo no se verifica sino después de cumplirse con un trámite que incluye la aprobación de una Ley que ordena la expropiación y la dictación judicial de la sentencia que determina el monto de la indemnización (artículos 1937 a 1950 del Código Judicial en concordancia con el artículo 45 de la Constitución Política). En este caso, el Juez no decide sobre la procedencia o improcedencia de la medida expropiatoria ni entra a considerar si existe un motivo de utilidad pública o interés social para adoptarla, simplemente fija el monto de la indemnización y no autoriza la ocupación material hasta tanto no se haya verificado el pago.

En el caso de la expropiación de urgencia o extraordinaria, como la propia palabra lo dice, la medida es adoptada urgente y unilateralmente por el Ejecutivo quien ocupa el bien de inmediato, invocando para ello motivos de guerra, grave perturbación del orden público o interés social urgente; sólo después de que ha cesado el motivo determinante de la expropiación, procede a indemnizar al titular del bien por los daños y perjuicios causados, en base al monto que determine el juez competente. Para ello debe cumplir con el trámite previsto en los artículos 1951 a 1955 del Código Judicial, es decir, promover el proceso ante el Juez competente, quien ordenará las pruebas que falten, procederá al avalúo del bien y luego resolverá -conforme al artículo 1952- "dentro de los dos días siguientes, sobre la expropiación, sin oir al demandado". Es en éste último punto donde el proceso previsto en el Capítulo II del Título XVI, Parte II del Libro II del Código Judicial vulnera la Constitución.

El artículo 47 de nuestra Carta Fundamental señala claramente que es el Ejecutivo quien, con carácter de urgencia, decreta la expropiación del bien en caso de guerra, grave perturbación del orden público e interés social urgente y sólo después que hayan cesado dichos motivos, es decir, cuando haya desaparecido la urgencia, se hará responsable por los daños y perjuicios así causados. Ello significa que, cuando el Estado promueve ante el Juez el proceso, la urgencia ha desaparecido y no hay razón para que éste resuelva "dentro de los dos días siguientes" y mucho menos "sobre la expropiación," que ya se ha decretado y verificado por el Ejecutivo. Peor aún, decide "sin oir al demandado", negándole

así la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y violándose el contradictorio sin razón alguna.

Ante las consideraciones planteadas, resulta evidente la infracción por parte de la frase "sin oir al demandado" del artículo 32 de la Carta Fundamental, pues además de violar el derecho de defensa del particular titular del bien expropiado, priva al Juez de un elemento de juicio valioso para establecer el monto de la indemnización a conceder, ya que las apreciaciones del propietario, quien conoce bien las características del bien, permiten tener un concepto más claro de sus atributos y por tanto, de los beneficios que brinde o siga brindando al Estado.

Igualmente infringido resulta el artículo 47 constitucional, pues la frase impugnada -así como el resto del artículo 1952 del Código Judicial- parte del supuesto de que el Juez es quien decreta urgentemente la expropiación y por ello debe decidir en el término perentorio de dos días y "sin oir al demandado". Nada más alejado del espíritu de la disposición constitucional, pues el Juez sólo debe decidir -una vez desaparecidas las razones que dieron lugar a decretar la expropiación por parte del Ejecutivo- sobre el monto de la indemnización que éste debe pagar y podría hacerlo utilizando el mismo procedimiento establecido para la expropiación ordinaria o común, es decir, dando participación efectiva al demandado, pues la urgencia ha desaparecido una vez que se ha superado la circunstancia que dio motivo a la expropiación.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno concluye que la frase "sin oir al demandado" contenida en el artículo 1952 del Código Judicial es violatoria de los artículos 32 y 47 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "sin oir al demandado" contenida en el artículo 1952 del Código Judicial.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 1999 PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 20 de octubre de 1999, esta Corporación de Justicia decidió la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Francisco Espinosa Castillo dentro del proceso ordinario de mayor cuantía seguido por Adela Escobar Guillén contra Corporación Inmobiliaria URBE, S. A., contra el numeral 4 del artículo 1116 del Código Judicial.

La resolución enunciada en el párrafo anterior, declaró que no es inconstitucional la disposición atacada e impone al recurrente multa por la suma de trescientos balboas (B/. 300.00), a favor de la Dirección General de Ingresos

del Ministerio de Economía y Finanzas.

En un inusual libelo, el recurrente ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de revisión en cuanto a la multa impuesta a su persona (vid. f. 46). El letrado argumenta que la advertencia propuesta fue "... encaminada al interés superior de la Ley, que actuó de buena fe y "... en ninguna forma he faltado a los principios consagrados en el artículo 462 del Código Judicial ... " (fs. 46-47).

El párrafo final del artículo 203 de la Norma Fundamental establece que las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de control de constitucionalidad son finales, definitivas y obligatorias, criterio este que es reiterado por el artículo 2564 del Código Judicial. Por tal motivo, resulta procedente negarle curso legal a la iniciativa procesal bajo examen.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de reconsideración contra la sentencia de 20 de octubre de 1999 proferida por el Pleno de esta Corporación de Justicia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LCDO. JOSE RAMIRO FONSECA CONTRA EL ARTICULO 2305 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, ha presentado Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 2305 del Código Judicial, subrogado por el artículo 59 de la Ley 3 de 1991.

Cumplidos todos los tramites procesales concernientes al proceso constitucional en mención, pasa la Corte a decidir la Inconstitucionalidad planteada.

El artículo 2305 del Código Judicial, subrogado por el artículo 59 de la Ley 3 de 1991, tal como aparece en la Gaceta Oficial No. 21.710 del 23 de enero de 1991, acusado de inconstitucionalidad por el demandante, establece lo siguiente:

> "Artículo 2305. Al agente del Ministerio Público se le notificarán todas las resoluciones que se dicten en el proceso.
>
> Este funcionario se considerará legalmente notificado transcurridas cuarenta y ocho horas contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.
>
> El agente del Ministerio Público deberá devolver inmediatamente, en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su notificación, el expediente al tribunal competente, salvo que se le

hubiere corrido traslado del mismo en los términos de la ley".

El concepto de la infracción del artículo 32 de la Constitución, que regula el debido proceso, lo explica el promotor de la inconstitucionalidad de la siguiente manera:

"El artículo citado, ha sido violado de manera directa por omisión, puesto que la norma adjetiva acusada de vulnerar la Carta Magna, infringe el Principio de Igualdad Procesal entre las partes.

Ahora bien, esa Corporación de Justicia, ha establecido en reiteradas ocasiones, que el artículo 32 de la Constitución Nacional regula lo relativo al Debido Proceso en nuestro medio, es decir, el precepto bajo estudio garantiza el eficaz cumplimiento del Debido Proceso, sea éste en materia Penal, Civil, Administrativa, Familiar, Menores, Comercial, Laboral, Bancario, etc., al extremo que el artículo 212 de la Constitución Política, en su numeral 2do. dispone que, el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley Substancial, siendo uno de esos derechos que la propia ley contempla en su texto, el Principio Procesal de Igualdad entre las partes.

En efecto, son varios los artículos del compendio judicial que consagran este postulado procesal.

Así debo comentar que el numeral 8tavo. del artículo 199 de la excerta bajo examen, le impone a los Magistrados y Jueces como Deberes, Responsabilidades y Facultades la de "Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en ésta con legalidad y seguridad", empero, es el artículo 464 del mismo texto legal, el que regula algunos de los principios rectores del Debido Proceso en la República de Panamá, para lo cual basta revisar dicho artículo, en virtud del cual el legislador plasmó entre otras cosas que, "... de manera que se observe el debido proceso, la igualdad procesal de las partes, la economía y la lealtad procesal", con lo cual demuestro que el Principio de Igualdad forma parte de la ley substancial patria y por ende forma parte del Debido Proceso regulado de manera diáfana en el artículo 32 ibídem.

De otro lado, la violación del principio de igualdad entre las partes, provoca la vulneración del Debido Proceso, porque al romper este postulado legal a favor de alguna de las partes en detrimento de las otras, crea privilegios que traen consigo la disparidad procesal entre unos y otros dentro de cualquier negocio legal.

Ya sobre este tema, o sea, sobre el Principio de Igualdad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el día 21 de marzo de 1997, se pronunció en los siguientes términos:

`Tal como lo sostiene la doctrina procesal moderna más autorizada, el principio de igualdad procesal implica, en primer término, que toda persona (natural o jurídica), en su calidad de parte, tiene derecho a que se le brinden idénticas oportunidades a las otorgadas a su contraparte, es decir, que todas las partes del proceso tengan las mismas oportunidades para su defensa; por otro lado, y como corolario de lo anterior, no debe reconocerse privilegio alguno a ninguna de las partes durante la tramitación del proceso'.

No obstante, resulta evidente que el artículo tildado de inconstitucional por el suscrito, es decir, el artículo 2305 del Código Judicial, subrogado por el artículo 59 de la Ley 3 de 1991, implica por su redacción, una violación del Debido Proceso en materia Penal, puesto que se hace imperioso para todo juzgador, sea

Magistrado o Juez, so pena de nulidad, proceder a notificar de manera personal al Ministerio Público, de todas y cada una de las resoluciones que se dicten en el proceso.

La forma como ha sido editado el precepto adjetivo bajo análisis, exige que a todos los agentes del Ministerio Público, en la faceta plenaria del proceso, se les notifiquen de manera personal, todas las resoluciones que dicten los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, este artículo crea un privilegio increíble entre el Ministerio Fiscal y los imputados y sus defensores y el otro acusador particular, hoy querellante, porque el trato dado a estas partes, esta huérfano de igualdad y de equidad procesal.

En ese sentido, el artículo 2304 del Código Judicial, determina que, `Durante el plenario, al imputado y a su defensor se les notificará personalmente las siguientes resoluciones:

1- El auto de enjuiciamiento (que ya no es apelable por mandato de la ley 1 de 1995);

2- La providencia que señala el día para la celebración de la audiencia; y

3- La Sentencia de primera instancia ...'.

El artículo 2306, estipula que, `Al acusador particular, si lo hubiere, y al defensor, se les notificará personalmente el auto de enjuiciamiento y además, las siguientes providencias:

1- La que concede término para aducir pruebas;
2- La que señale día y hora para la celebración de la audiencia; y
3- La que señale día y hora, en los juicios de jurados, para efectuar el sorteo de éstos y celebrar la audiencia.

Las demás resoluciones les serán notificadas por edicto'.

Luego de realizar un estudio comparativo a los dos (2) artículos que regulan las notificaciones de los defensores y de los acusadores versus el artículo 2305 que regula que las notificaciones del Ministerio Público tienen que ser personales, no cabe duda que existe un privilegio increíble que vulnera el Debido Proceso porque quiebra el Principio de Igualdad, porque a una de las partes llamada Ministerio Público (Procuradores de la Administración y General de la Nación, Fiscales Superiores, de Circuito y Personeros Municipales) se les tienen que notificar todas las resoluciones de manera personal y a las demás contrapartes, llamadas Defensores y Acusadores Particulares (hoy querellantes) no, pese a que todas las partes en el Debido Proceso cuentan con los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, lo cual vulnera el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Así tenemos que ese privilegio que irrumpe drámaticamente el postulado legal del Principio de Igualdad entre las partes, se profundiza en la práctica forense, cuando por ejemplo, la parte denominada Ministerio Público anuncia recurso de apelación en contra de un auto o una sentencia, el término de lista para sustentar su discrepancia, se le comunica de manera personal a través de la dictación de una providencia y éste sin ningún problema sustenta su disconformidad, sucediendo lo mismo cuando se le notifica personalmente que cuenta con el lapso de tres (3) días hábiles para oponerse a la apelación de la contraparte.

Empero, a las demás partes en el proceso penal, se les notifica la fijación en lista del término para sustentar una apelación por el término de tres (3) días, por medio de edicto que se fija en la Secretaría del Tribunal que dictó el fallo; igualmente se produce cuando es el Ministerio Fiscal el recurrente, porque el período para oponerse a la postura del Fiscal, se notifica también por Edicto, en merma del Principio de Igualdad.

Cuando se dictan las sentencias de segunda instancia, al Ministerio Público se le notifica de manera personal lo resuelto por el Tribunal a quem, mientras que al Defensor o al Acusador o Querellante se les notifica por medio de edictos.

Ello reduce la oportunidad de las dos últimas partes en mención de recurrir en Casación ante la Sala Segunda de vuestra Corporación en el supuesto que el fallo a quem le sea desfavorable, pero con la contraparte llamada Ministerio Público, en caso de no ser favorable a su aspiración el fallo de segunda instancia, se le brinda en bandeja de plata la oportunidad de anunciar Recurso de Casación, precisamente porque todas las resoluciones se les tienen que notificar personalmente, pese a que es una parte que cuenta, supuestamente (solamente en papel) con los mismos Deberes, Derechos y Obligaciones que el defensor y el Acusador.

Cuando hay que formalizar el Recurso de Casación, si el Fiscal es el recurrente, se le notifica en su despacho que cuenta con quince (15) días para formalizar el recurso, pero a las contrapartes, se les notifica ese período por edicto.

Todo lo antes narrado forma parte de la realidad en nuestro medio forense penal, situación que viola el principio de igualdad pregonado en la ley substancial consagrada en el artículo 32 de la Carta Fundamental.

Si sumamos lo antes plasmado, al hecho que por mandato Constitucional, el Ministerio Público es el encargado de instruír el sumario, que a su vez constituye la primera fase del Proceso Penal, lo cual también desfavorece al defensor y al acusador por razones obvias, podemos observar que en la fase Plenaria el legislador le concedió a los agentes del Ministerio Fiscal, en todas sus categorías, privilegios procesales que vulneran el Debido Proceso, simple y llanamente porque resulta evidente a todas luces que se resquebraja el Principio de Igualdad entre las partes y ello no debe ser discutido bajo el prisma que el Fiscal está muy ocupado, tiene mucho trabajo, etc., debido a que todas las Fiscalías (Superiores y de Circuito), las Personerías Municipales y las Procuradurías (General y Administración) cuentan con Asistentes bien remunerados económicamente que pueden y deben estar pendientes de cada caso, aunado a que cada Fiscalía de Circuito y cada Personería trabajan con un Juzgado determinado, así por ejemplo, la Fiscalía Quinta del Circuito de Panamá trabaja directamente con el Juzgado Décimo del Circuito Penal de Panamá, la Personería Segunda Municipal trabaja con el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá y los Fiscales Superiores con el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, los cuales deben velar por el interés de la Agencia de Instrucción que representan y el de la Sociedad.

Dentro de la óptica jurídica enarbolada en el presente ensayo, en cierne a que la dotación de privilegios excesivos a favor del alguna de las partes trae consigo la Violación del artículo 32 de la Constitución por vulnerarse el Principio de Igualdad, el Pleno de esa Corporación, el día 21 de marzo de 1997, se pronunció así:

`El concepto de igualdad de las partes en el proceso representa una concreción de los principios fundamentales de no discreminación y de igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 19 y 20 de la Carta Política'...

El Pleno de la Corte, en la parte del fallo resaltada, logra encápsular en un sólo párrafo los argumentos que hemos venido desarrollando a lo largo de este memorial, en cuanto a que el Debido Proceso se lesiona y así se infringe el artículo 32 del texto supremo constitucional, cuando se vulnera el Principio de Igualdad, cuando a una parte se le otorgan desmedidos privilegios como el que introdujo al Código Judicial, el artículo 59 de la Ley 3 de 1991, que subrogó el artículo 2305 ibídem, pero para decir verdad, fue el legislador de los años 1984 y 1986, el que le regaló al Ministerio Público el privilegio que todas las resoluciones que se emitan en el proceso penal, se les deben notificar en forma personal, privilegio que constriñe el derecho de las demás contrapartes en un proceso punitivo, por las razones de hecho y de derecho explicadas en este libelo.

A nuestro humilde criterio, no existe razón jurídica que sustente el hecho que a una parte se le tiene que notificar todas las resoluciones que se expidan en un expediente de manera personal y a los demás sujetos procesales no, situación que crea privilegios a favor del Ministerio Público, rompen el Principio de Igualdad entre las partes, lesionan el Debido Proceso y vulneran el artículo 32 de la Constitución patria".

El Procurador General de la Nación se opone a la inconstitucionalidad demandada y expone en defensa de la norma acusada los argumentos siguientes:

"El artículo 32 de la Constitución Política, consagra la garantía constitucional del debido proceso, institución procesal que propugna garantizar a las partes, el desarrollo del proceso en igualdad de condiciones, entendiéndose por tal, que las partes tengan igualdad de oportunidades de ser oídas por el Tribunal competente, manifestarse respecto a las alegaciones de las contrapartes, aportar las pruebas lícitas que estime pertinente y contradecir las de la parte contraria, utilizar los medios de impugnación previstos en la ley, y en general, ejercer las demás acciones encaminadas a la defensa efectiva de sus derechos.

Los principios y elementos que conforman la garantía del debido proceso, han sido ampliamente debatidos y determinados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, delimitación que se observa en los siguientes fallos:

`... el Pleno ha indicado en oportunidades anteriores que la garantía constitucional del debido proceso únicamente se viola cuando se pretermiten o desconocen trámites esenciales del procedimiento (como el traslado de la demanda, la presentación de pruebas sobre los hechos de la demanda, la impugnación de las resoluciones judiciales, en los casos previstos por la ley, entre otro), de modo que se impida con aquella conducta a una o a ambas partes, el pleno ejercicio de su defensa o se le coloque en estado de indefensión (Cfr. Sentencia del 13 de septiembre de 1967, Registro Judicial, pág. 32 y 8 de agosto de 1997, Registro Judicial, pág. 126)'. (Fallo de 21 de julio de 1998, Registro Judicial, p. 162).

`El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo,

obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medio de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales'. (Sentencia de 15 de abril de 1999, que resuelve la constitucionalidad del artículo 2043 del Código Judicial).

El demandante cuestiona la carencia de igualdad de las partes, respecto al Ministerio Público frente al resto de las partes procesales, como uno de los elementos que integran la garantía del debido proceso, toda vez que la norma cuya inconstitucionalidad se solicita, establece la obligación de notificar personalmente al Ministerio Público de todas las resoluciones que se dicten dentro del proceso, procedimiento que varía para el resto de las partes, respecto a ciertos actos procesales, por lo que para mejor claridad, en provecho del debate presentado, se hace necesario efectuar algunas puntualizaciones respecto al rol del Ministerio Público como parte en el proceso.

El Estado, de manera exclusiva, asume y ejerce el ius puniendi, monopolio cuya titularidad es ejercida a través del Ministerio Público, a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal.

Al Ministerio Público le atañe, en general, vigilar la conducta de los funcionarios públicos, defender los intereses del Estado, y perseguir los delitos.

Es en esta última atribución, que importa el campo procesal penal, que esta institución ejerce múltiples roles, los cuales varían de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentre. En ese sentido, en la etapa sumaria, le corresponde llevar a cabo las investigaciones pertinentes para comprobar la existencia del hecho punible y la responsabilidad de los autores y cómplices, garantizando el fin del proceso penal, cual es, el esclarecimiento de la verdad material, y una vez concluida la investigación, demandar la responsabilidad de quienes resulten vinculados.

En la etapa intermedia y en la plenaria, dependiendo del resultado de las investigaciones, asumirá el papel de acusador, en representación de la sociedad, por lo que la ley lo ha considerado como uno de los sujetos procesales obligatorios, es decir, que indispensablemente debe actuar dentro del proceso.

El Código Penal, tipifica determinadas conductas cuya comisión u omisión, ha sido rechazada por la sociedad, por lo que al incurrirse en alguno de estos tipos, la sociedad resulta afectada y exige la sanción correspondiente, de tal manera que se restablezca el orden jurídico violentado. De allí surge el concepto teórico de que, por regla general, el delito afecta a toda la sociedad, y por consiguiente aquella se encuentra interesada en su persecución, labor que le ha sido encomendada al Ministerio Público.

En ese orden de ideas, Juan Montero Aroca, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de España, explica la creación y papel del Ministerio Público:

`El Ministerio Público o Fiscal es, por consiguiente, una creación artificial que sirve para hacer posible el proceso, manteniendo el esquema básico de éste, y de ahí que se le convierta en parte acusadora que debe respetar el principio de legalidad. Con ello estamos indicando los dos caracteres esenciales de la figura: es una parte, si bien pública, que responde a la idea de que el delito afecta a toda la sociedad estando ésta interesada en su persecución, y en su persecución, y su actuación ha de basarse en la legalidad. (JUSTICIA Y SOCIEDAD).

`La Garantía Procesal Penal y el Principio Acusatorio'. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, p. 532).

Todo lo anterior me lleva a colegir, que si bien el Ministerio Público se constituye como parte del proceso, debido a su rol de representante de la sociedad, y de las atribuciones constitucionalmente conferidas, se constituye una parte con cualidades especiales con respecto a las otras, por lo que no puede ser colocado en un plano de total igualdad frente a los demás, siempre y cuando ello no implique alguna lesión a los derechos de las restantes partes procesales.

Así se explica, por qué el legislador estableció a través de un precepto, la obligación de notificar personalmente al Ministerio Público de todas la resoluciones que se dicten en el proceso, garantizando de esta manera que los intereses de la sociedad se verán siempre representados y protegidos.

Respecto a este tipo de notificación, el Dr. Jorge Fábrega explica, que `el Código contempla la figura que se conoce como notificación mixta, que se da cuando una resolución deba notificarse personalmente a una parte y por edicto a otra, especificando que se hará en primer término la notificación personal. Esta circunstancia se da normalmente cuando interviene el Ministerio Público, al cual, por la calidad del cargo la Ley dispone que se le notifiquen personalmente las resoluciones. (Estudios Procesales, T.I, Panamá: Editora Jurídica Panameña, 1983, p. 403).

El papel del Ministerio Público, y la importancia de las notificaciones personales, ha sido objeto de debate ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo de 18 de enero de 1993, expresó:

`La circunstancia anotada adquiere mayor gravedad, toda vez que los agentes del Ministerio Público representan al conglomerado social dentro del proceso penal. Y si el funcionario de instrucción, no ejercita los derechos que el ordenamiento jurídico pone a sus manos, la sociedad pierde representación en el proceso. De nada valdría entonces que la ley se preocupe por establecer aquellos dos principios cardinales: a) el que los funcionarios del Ministerio Público deben ser notificados personalmente siempre de todas las resoluciones que se dicten en el proceso; b) el que las actuaciones en las que no se le haya dado participación al Ministerio Público están viciadas de nulidad.

Por ello, resulta indispensable que se adquiera conciencia sobre el papel que debe cumplir el Ministerio Público dentro del proceso penal'.

Las partes en todo proceso, deben estar colocadas en un plano de igualdad. El maestro, Ignacio Burgoa, al definir jurídicamente la igualdad, indica que esta se traduce `en que varias personas, en número indeterminado, que se encuentren en una determinada

situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y de contraer las mismas obligaciones que emanan de dicho estado'. (LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. México: Editorial Porrúa, S. A., 1995, p. 251).

La igualdad será considerada, cuando una persona que sea titular de ciertos derechos y obligaciones, se encuentre en igual situación jurídica con respecto a otras personas. `Por exclusión, no puede entablarse una relación igualitaria entre la posición concreta que guarde una persona colocada en una situación determinada, con la que tiene un individuo perteneciente a otro estado de derecho particular diferente'. (Burgoa, op. cit., p. 252-253).

Esta concepción ha sido prohijada y reiterada, en diversidad de ocasiones, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien el Ministerio Público, a partir de la etapa intermedia, participa en el proceso penal como una parte procesal, debido a su naturaleza y funciones, derivadas de las atribuciones constitucionalmente otorgadas, como defensor de los intereses de la sociedad y no de los propios, excepcionalmente no se encuentra en un plano de igualdad con respecto a las otras partes, circunstancia que no puede ser considerada violatoria de la garantía procesal del debido proceso, toda vez que no implica un desconocimiento de los derechos y garantías de las otras partes, y por tanto, no les causa ningún perjuicio.

La comunicación procesal efectuada mediante las notificaciones, son indispensable dentro del proceso, en respeto a los principios del contradictorio y la bilateralidad. A través de la notificación personal al Ministerio Público, siendo este el mecanismo más eficaz de comunicación de los actos procesales, se le garantiza a la sociedad su representación dentro del proceso.

Igual proceder es utilizado para notificar al imputado, al defensor y al acusador de los principales actos dados durante el plenario, como lo son el auto de enjuiciamiento, la resolución que concede término para aducir pruebas, la providencia que señala el día para la celebración de la audiencia y la sentencia de primera instancia.

Al Ministerio Público, le son aplicables las mismas normas que al resto de las partes, sobre los términos de presentación de los medios de impugnación, sustentación y oposición, no existiendo una desventaja procesal que vulnere la garantía del debido proceso, como sería el caso de no existir una igualdad de oportunidades de ser oídas ante el Tribunal competente, de contradecir los argumentos de las partes, o de utilizar los medios de impugnación establecidos en la ley la norma censurada, al no pretermitir los trámites procesales y no colocar en estado de indefensión al resto de las partes, permitiendo la bilateralidad y la contradicción, no produce una afectación a las garantías constitucionales".

Expuestos los argumentos legales de ambas partes, entra el Pleno de la Corte a desatar la controversia constitucional.

En primer lugar, la norma que exige que se le notifiquen personalmente las resoluciones al Ministerio Público de manera expresa, es el numeral 10 del artículo 989 del Código Judicial, que relacionado con el artículo 2308 del mismo Código es aplicable al proceso penal. La mencionada norma del proceso civil, aplicable en el proceso penal, no fue acusada por el demandante. Esa norma, el numeral 10 del artículo 989 del Código Judicial, trae la razón fundamental por la cual se le hacen las notificaciones personales al Ministerio Público, y es por razón de sus funciones. Ya lo sostuvo el representante del Ministerio Público en

su alegato, que éste representa a la sociedad, y por tanto, no está colocado en un plano de total igualdad frente a los demás sujetos procesales, por la calidad del cargo que desempeña. El Ministerio Público es funcionario instructor en la etapa sumaria del proceso penal y su condición en esta etapa es totalmente distinta a la de los otros sujetos procesales. En la etapa plenaria del proceso penal, también se dan ventajas para el defensor del imputado, ya que habla último en las audiencias, el imputado puede utilizar además del defensor, un vocero y esto de ninguna manera se estima contrario al principio de igualdad de las partes.

El Ministerio Público tiene mando y jurisdicción, las otras partes no, el Ministerio Público tramita el sumario, las otras partes no. El Ministerio Público puede dictar medidas cautelares y revocarlas, multar a los sujetos procesales, las otras partes no. El Ministerio Público representa a la sociedad y no lo hace en nombre propio como si lo hacen las otras partes. Todas estas diferencias demuestran que no son partes exactamente iguales en el proceso penal.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 2305 del Código Judicial, subrogado por el artículo 59 de la Ley 3 de 1991.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. EDWIN TORRERO CASTILLO, EN REPRESENTACION DEL GRUPO SILABA, CONTRA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 233 DE LA LEY. NO. 29 DE 1 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edwin Torrero Castillo, en nombre y representación del GRUPO SÍLABA, S. A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S. A. ha propuesto advertencia de inconstitucionalidad contra el numeral 3 del artículo 233 de la Ley N° 29 de 1 de febrero de 1996, dentro del proceso de protección al consumidor incoado por Keith Gregory Lindsay contra GRUPO SÍLABA, S. A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S. A.

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE

La advertencia de inconstitucionalidad se fundamenta principalmente, en el hecho de que el numeral 3 del artículo 233 de la Ley 29 de 1996, infringe los artículos 17, 19 y 32 de la Constitución, ya que a criterio del demandante, viola garantías fundamentales como el no tener fueros o privilegios, garantizar la efectividad de los derechos individuales y sociales y cumplir con el proncipio del debido proceso. Continúa exponiendo el actor, que al GRUPO SÍLABA, S. A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S. A. le asiste el derecho de que la Corte Suprema, mediante el recurso de Casación, revise la Sentencia de 4 de agosto de 1999, expedida por el Tercer Tribunal Superior de Justicia.

De la advertencia de inconstitucionalidad se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien en tiempo oportuno, expuso su criterio.

OPOSICIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

La Procuradora de la Administración, por medio de la Vista N° 440 de 8 de septiembre de 1999, se opuso a las pretensiones de inconstitucionalidad del interesado. La Funcionaria del Ministerio Público fundamentó su oposición en el hecho de que el legislador ha establecido un límite para hacer uso del recurso de casación, consistente en la cuantía del monto a que asciende la condena. Que sólo podrá utilizarse el recurso de casación en aquellos casos que la condena sea de B/.500,000.00 o más. Que en legislador está plenamente facultado para establecer los parámetros legales bajo los cuales se regirán los particulares y las personas jurídicas.

Expresa también la funcionaria, que la advertencia propuesta por GRUPO SÍLABA, S. A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S. A., evidencia, que la disconformidad radica en la condena impuesta por los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Superior de Justicia, por impedirle el uso del recurso de casación, dado que no cumplían con los requisitos indicados en el artículo 233 de la Ley N° 29 de 1996.

Concluye la Procuradora de la Administración, que es evidente que los fines perseguidos por estas sociedades a través de esta advertencia de inconstitucionalidad, es que se revise la Sentencia proferida por el Tercer Tribunal Superior de Justicia.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran el Pleno de la Corte, proceden a resolver la presente advertencia.

DECISION DEL PLENO

De acuerdo a lo expresado en líneas anteriores, la parte interesada indica que el numeral 3, del artículo 233 de la Ley 29 de 1996, infringe los artículos 17, 19 y 32 de la Constitución.

El artículo 233, numeral 3 de la Ley 29 de 1996 es del tenor siguiente:

> "Artículo 233. Recursos. El recurso de casación tendrá lugar, contra las resoluciones de segunda instancia proferidas por el tribunal superior de apelaciones, en los siguientes casos:
> 1 ...
> 2 ...
> 3. Cuando se trate de sentencias que impongan condenas por un monto de quinientos mil balboas (B/.500,000.00);"

El primer cargo de inconstitucionalidad que hace el demandante al numeral tres (3) del artículo 233 de la Ley 29 de 1996, es que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional. Como puede apreciarse el principal reparo de inconstitucionalidad que se le hace a la norma acusada, es que no permite el recurso de casación en los negocios cuya cuantía sea inferior al monto de quinientos mil balboas (B/.500,000.00).

Este Tribunal debe recalcar que la jurisprudencia nacional, de conformidad con la doctrina generalmente aceptada, insiste en considerar esta norma entre las de naturaleza directiva o programática que consagra la Constitución, con efectos generales y en consecuencia, sin eficacia reparadora autónoma en el ámbito individual, salvo aquellos casos en que se asocie con otros artículos del Texto Fundamental relacionados de manera específica con el tema en debate, situación última que claramente no se da en este caso. El contenido de dicho artículo es:

> "Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".

En lo que respecta a la violación del artículo 32 de la Constitución, se desprende de la misma que el requisito constitucional del debido proceso está compuesto por varios elementos concurrentes: autoridad competente, por los trámites legales y por el juzgamiento por una sola vez, en causas penales, policivas o disciplinarias. En este sentido, el debido proceso consiste fundamentalmente en los trámites que hay que adelantar y que fija la ley para todas las causas que a nivel administrativo y judicial se propongan.

En el caso que nos ocupa, es evidente que si el legislador estableció parámetros o limitantes para la utilización del recurso de casación, lo hizo en atención a las facultades constitucionales que le han sido conferidas en razón de su cargo; es decir, que la Constitución no recoge de manera expresa lo relativo a este recurso extraordinario, lo que trae como resultado que sea el legislador quien se encargue de reglar esta figura procesal. Lo malo estaría en que el legislador al momento de delimitar un procedimiento judicial, lo haga dejando en la indefensión a algunas de las partes, situación ésta que a todas luces no presenta la norma demandada de inconstitucional.

En materia procesal, nuestra Constitución sólo regula el control de la constitucionalidad mediante la figura de la acción, consulta y advertencia constitucional, amparo de garantías constitucionales, el habeas corpus, y la objeción de inexiquibilidad. Regula así mismo en materia procesal el control de la legalidad, a través de las acciones de nulidad, plena jurisdicción, de interpretación y el de aperciación de validez. Reiteramos pues, que el recurso de casación es de creación legal, y sólo la ley le compete señalar qué casos procede. Este criterio fue sostenido en caso similar, en donde el Pleno de la Corte, mediante Sentencia de 10 de diciembre de 1993, resolvió una acción de inconstitucionalidad referente al recurso de casación en materia laboral.

Cabe destacar, que lo que realmente pretenden las empresas demandantes es que se revise una vez más la decisión emitida por los Magistrados del Tercer Tribunal Superior de Justicia, en la Sentencia de 4 de agosto del presente año (ver foja 6 del expediente). El artículo 32 de la Constitución prevé:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria"

En vista de lo expresado no prospera el cargo endilgado.

Por último, las empresas GRUPO SÍLABA, S. A. y SCANDINAVIAN MOTORS, S. A. manifiestan que el artículo 233, numeral 3 de la Ley 29 de 1996, que trata sobre la defensa de la competencia, quebranta el principio constitucional recogido en el artículo 19 de la Carta Magna, el cual reza así:

> "Artículo 19. No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas"

El precepto constitucional contiene una prohibición de fueros y privilegios personales y distingos por razón de condiciones en ellos señaladas, es decir, la creación de situaciones injustas de favor o exención en beneficio de determinadas personas, o de limitaciones o restricciones injustas o injuriosas que entrañen un trato desfavorable o favorable para quienes en principio se encuentren en la misma situación que otras por razón de nacimiento, condición social, raza, etc.

De acuero a lo anterior, coincidimos con los planteamientos expuestos por la Procuradora de la Administración, en el sentido de que consideramos que la norma constitucional transcrita no puede ser aplicada a las personas jurídicas, como ocurre en el caso in examine, pues la jurisprudencia ha establecido que dicha disposición sólo puede invocarla una persona natural, que es quien presenta características de sexo, religión, clase social, raza, nacimiento o ideas políticas y que a su vez se encuentra en plano de igualdad frente a otras (ver

Sentencia de 30 de octubre de 1987).

Lo anterior permite colegir que al ser las demandantes personas morales o jurídicas, le está vedado invocar la violación a dicho precepto constitucional. Es por todo esto que no se acepta la transgresión alegada.

En mérito de todo lo expuesto, los Magistrados que integran el PLENO de la Corte Suprema administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el numeral 3 del artículo 233 de la Ley 29 de 1996.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA ALMA CORTES, EN REPRESENTACION DE CONSTANTINO LEKAS, CONTRA EL ARTICULO 2274 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortés, actuando en nombre y representación de CONSTANTINO LEKAS, ha interpuesto advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2274 del Código Judicial, dentro del sumario instruido a Constantino Lekas por el supuesto delito contra el honor en perjuicio de María Bagatelas de Papadimitriu.

En este momento le corresponde a la Corte pronunciarse sobre la admisibilidad de la consulta, es decir, si cumple con los parámetros establecidos por el inciso segundo del numeral uno del artículo 203 de la Constitución Nacional y los artículos 2549, 2551 y 2552 del Código Judicial.

Observa el Pleno que la advertencia cumple con los requisitos que disponen las normas procesales y el precepto constitucional citado.

Sin embargo, advierte el Pleno que existe un pronunciamiento previo sobre la constitucionalidad de la norma objeto de la presente iniciativa procesal. En este sentido mediante la resolución de 18 de marzo de 1991 se declaró que no es inconstitucionales la frase inicial de artículo 2274 del Código Judicial que dice: "después de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento".

Es necesario señalar que si bien en el escrito de la presente iniciativa constitucional, la apoderada judicial advierte la constitucionalidad de la totalidad de la referida norma legal, de la lectura del libelo se infiere que la pretensión de la actora es la inconstitucionalidad de la frase "después de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento". Esto se desprende de los hechos décimo primero y décimo segundo de la advertencia que expresa lo siguiente:

> "DECIMO PRIMERO: Que el artículo 2274 del Código Judicial, en atención a su redacción constituye una limitante al derecho de defensa que tiene todo sindicado por la comisión de un delito, derecho reconocido por la Constitución Política de la República en

su artículo 22, y consagrado de acuerdo a este tenor literal en el artículo 2038 del Código Judicial, en el cual establece que todo imputado puede hacer valer sus derechos de acuerdo con la Constitución y la Ley "desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del proceso".

DECIMO SEGUNDO: La existencia del artículo 2274 del Código Judicial, objeto de nuestra impugnación, en cuando (sic) a su redacción, limita a todo imputado su derecho de defensa, de hacer valer todos los recursos, gestiones, derechos y excepciones diferentes a las consagradas en sus números clausus, de acuerdo al tenor e interpretación literal del mismo, encontrándose precisamente subsumido en un impedimento procesal el Incidente por Excepción de Nulidad presentado en esta instancia procesal, en beneficio de la defensa técnica de nuestro representado, ya que no se encuadra dentro de las tres únicas causales señaladas en el comentado artículo 2274."

Por otra parte, en cuanto al concepto de la infracción del artículo 22 de la Constitución, manifiesta que la norma advertida "limita el tiempo dentro del proceso penal en marcha para que únicamente en ese plazo- que se extiende desde la ejecutoria del enjuiciamiento, hasta la providencia que fija fecha de audiencia-, el imputado puede oponer excepciones o promover incidentes en su favor, está violando directamente, por omisión, la garantía de defensa consagrada en el artículo 22 de la Constitución Política."

En razón de lo anteriormente expuesto, no procede una nueva revisión de la norma acusada de inconstitucional, ya que tal como lo dispone el artículo 203 de la Constitución Nacional y el artículo 2564 del Código Judicial, las decisiones emitidas por esta Corporación son finales, definitivas y obligatorias y, por lo tanto, el contenido de dicha advertencia es cosa juzgada.

En consecuencia, EL PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2274 del Código Judicial, dentro del sumario instruido a Constantino Lekas por el supuesto delito contra el honor en perjuicio de María Bagatelas de Papadimitriu, por haberse producido el fenómeno procesal de cosa juzgada.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR EL LCDO. ABILIO ROLANDO RODRIGUEZ BUSTAMANTE, CONTRA LA SENTENCIA NO. 88 DE 4 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDO POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Vistos:

El licenciado Abilio Rolando Rodríguez Bustamante, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado, ante esta Corporación de Justicia,

demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia No. 88 de 4 de agosto de 1998, expedida por la Juez Octava de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El negocio se encuentra para decidir sobre la admisibilidad de la demanda, a la luz de lo que establecen los artículos 2151 y 654 del Código Judicial, consagratorios de los presupuestos procesales que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, conforme lo ha venido señalando la jurisprudencia de esta Corporación.

Observa el tribunal que el libelo de demanda está redactado de una manera confusa. El recurrente se avoca a definir términos y expresiones, hace planteamientos de tipo doctrinal y cita jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema y del Primer Tribunal Superior de Justicia, apartándose con ello de la técnica propia de esta acción constitucional.

Asimismo, al indicar las disposiciones infringidas y el concepto de la infracción, el demandante arguye que la sentencia demandada vulnera los artículos 32, 44, 49, 158, 207, 212 y 294 de la Constitución Nacional. Sin embargo, al explicar el concepto de violación de cada uno de ellos, señala que se han vulnerados artículos del Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de marzo de 1939, el Decreto No. 28 de 4 de septiembre de 1974, los artículos 989 y 993 del Código Judicial, los artículos artículos 2005 y 2012 del Código Administrativo, la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 y la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, planteando infracciones que se ubican en el plano de la legalidad y no en el de la constitucionalidad, desvirtuando, en consecuencia, la naturaleza de esta acción. (fs. 21-24)

Por otro lado, se observa que el recurrente cuestiona la interpretación de la ley y la valoración de pruebas que realizó la juez al momento de dictar el acto demandado, con lo que lo perseguido por el proponente es la revisión, en sede extraordinaria y por medio de una acción constitucional objetiva, del negocio ventilado en primera y segunda instancia donde tuvo la oportunidad de atacar las irregulares procesales que, en su opinión, ocurrieron en el desarrollo del proceso.

Estima la Corte pertinente citar al respecto la sentencia de 28 de agosto de 1996, que señaló lo siguiente:

> "Conviene reiterar lo ya sostenido en profusa jurisprudencia de este tribunal, en el sentido de que la acción de inconstitucional no es un mecanismo procesal idóneo o una vía abierta para promover una tercera instancia, como manera de obtener que el tribunal constitucional examine nuevamente el caudal probatorio de un proceso, como tampoco para que se adentre en consideraciones obre interpretación de la ley, tareas que corresponde únicamente al juez de la causa y al tribunal de alzada. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como interprete-operador de la Ley Fundamental, no puede pasar entonces a la verificación de supuestos errores in iudicando, tal como se pretende en esta iniciativa procesal".

En razón de lo expuesto, lo procedente es no admitir la demanda que se examina, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2552 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Abilio Rolando Rodríguez Bustamante, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia No. 88 de 4 de agosto de 1998, proferida por la Juez Octava de Circuito Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SANTANDER TRISTAN DONOSO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR LA FISCALIA CUARTA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado SANTANDER TRISTAN DONOSO ha presentado demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución de 21 de abril de 1999 dictada por la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Admitida la demanda se corrió traslado de la misma a la Procuraduría de la Administración para que emitiera concepto, debido a lo cual esta entidad del Ministerio Público recomendó "que se deniegue la petición contenida en esta demanda de inconstitucionalidad" pues en su opinión los presupuestos contenidos en los artículos 19, 20 y 32 de la Constitución, al igual que el resto del articulado constitucional, "no han sido violados en el caso bajo examen" (fs. 20).

El acto acusado de inconstitucional es la resolución de 21 de abril de 1999, dictada por la Fiscal Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, que en su parte resolutiva dispone "Rechazar, por improcedente, la solicitud del licenciado HECTOR HUERTAS GONZALEZ". El contenido de esta resolución es el siguiente:

> "...
> El Lcdo. HECTOR HUERTAS GONZALEZ, quien indica ser apoderado legal del Lcdo. SANTANDER TRISTAN DONOSO, presentó escrito ante esta Agencia de instrucción, el 20 de abril de 1999, en el que hace dos peticiones.
>
> Sin entrar a decidir en el fondo lo solicitado, es necesario precisar que en el presente sumario el Lcdo. HECTOR HUERTAS GONZALEZ y el Lcdo. SANTANDER TRISTAN, no tienen la calidad de partes. Si bien es cierto la querella que da inicio al sumario se presenta en contra de TRISTAN, no es menos cierto que en su contra no se han formulado los cargos que le den la calidad de imputado, caso en el cual, de conformidad con el artículo 2036 del Código Judicial, se convierte en el sujeto pasivo de la acción penal.
>
> De conformidad con lo que establece el artículo 2038 de dicha excerta, el imputado puede hacer valer sus derechos de acuerdo con la Constitución y la Ley, entre los cuales se encuentran el de poder presentar escritos y peticiones, en ejercicio de su defensa. No obstante, al no haberse formulado cargo alguno, inexiste la razón de la defensa que extemporáneamente pretende ser ejercida.
>
> De acuerdo con lo anotado y por no haberse llegado al momento de la imputación del delito querellado, ante la falta de legitimidad para actuar, deviene en improcedente y, por tal debe ser rechazado, lo solicitado en el escrito a que hemos hecho referencia.

Por las razones antes expuestas, la Suscrita Fiscal Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, DISPONE: Rechazar, por improcedente, la solicitud del Lcdo. HECTOR HUERTAS GONZALEZ.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2036 y 2038 del Código Judicial.
CUMPLASE,
La Fiscal,
(fdo) MGTER, MARIBEL CORNEJO DE LOPEZ"

(Fs. 9 a 10)

Seguidamente el Pleno procede al examen de los cargos formulados en la demanda, a fin de determinar si realmente se vulnera el contenido de las normas constitucionales que se dicen infringidas.

En los hechos que sirven de fundamento a la demanda se expresa:

Que el 26 de marzo de 1999 el Procurador General de la Nación, JOSE ANTONIO SOSSA, presentó Querella por el delito de Calumnia contra SANTANDER TRISTAN DONOSO (demandante). Las sumarias fueron abiertas para la investigación del ilícito ante la Fiscalía Auxiliar de la República.

Que el 31 de abril se solicitó por conducto del licenciado Héctor Huertas la suspensión del proceso de calumnia de conformidad con el artículo 177 del Código Penal. La Fiscalía Auxiliar dictó una resolución donde se rechazó la solicitud y se le dio curso a las sumarias.

Que el 20 de abril de 1999, el licenciado Huertas reitera la solicitud de suspensión del proceso de calumnia y pide copias autenticadas del expediente. En atención a esta solicitud, la Fiscalía Cuarta de Circuito profirió la resolución de 21 de abril de 1999, que es el acto acusado de inconstitucional, donde dispone "Rechazar por improcedente, la solicitud del Lic. Héctor Huertas", por considerar que Santander Tristán no es imputado y por ende no es parte del proceso de calumnia, de conformidad con el artículo 2038 del Código Judicial.

Como disposiciones constitucionales infringidas se citan los artículos 19, 20 y 32 de la Constitución.

Sobre el artículo 19 de la Constitución, que establece "No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas", sostiene el accionante que ha sido vulnerado ya que en la Querella por calumnia promovida por el Procurador General de la Nación existe una total discriminación contra su persona por parte del Agente Instructor, debido a que no se le ha considerado parte del proceso al no estimársele como imputado, quedando en total indefensión pues no puede presentar incidente de controversia, solicitar copia autenticada del expediente ni presentar contrapruebas.

A juicio de la Corte, lo resuelto por la Fiscal Cuarta del Primer Circuito Judicial en la resolución de 21 de abril de 1999, no implica alguna forma de discriminación contra el licenciado SANTANDER TRISTAN DONOSO ya que la actuación de esta funcionaria se ajustó a lo dispuesto por la ley (artículo 2036 y 2038 del Código Judicial), en el sentido de rechazar por improcedente un escrito de su apoderado judicial por falta de legitimación para actuar, pues hasta ese momento no se había llegado a imputar el delito querellado, por lo que al no habérsele formulado cargos no tenía la calidad de sujeto pasivo de la acción penal (art. 2036 C. J.) y en consecuencia no existía razón para el ejercicio de su defensa, mediante la presentación de escritos y peticiones.

Lo cierto es que en caso contrario (de haberse acogido las peticiones formuladas en un escrito presentado por el apoderado de quien no tiene la calidad de parte en la instrucción sumarial que se estaba iniciando), sí hubiese existido un privilegio a favor de dicha persona, por no habérsele dado el trato que

equitativamente establece la ley en relación con los que pudiesen encontrarse en una situación semejante a la del licenciado Tristán.

Para mayor ilustración sobre este tema, relativo a cuándo se considera que el sujeto pasivo de la relación procesal posee la calidad de imputado, resulta pertinente transcribir parte del Auto de la Sala Penal de esta Corporación de 15 de octubre de 1992, citado por la Procuradora en su Vista, que dice lo siguiente:

> "...
> `De conformidad con el artículo 2036 del Código Judicial, `El sujeto pasivo de la acción penal es el imputado y es tal toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito'. Sin embargo no basta que a determinada persona se le considere ipso facto como imputado o sindicado, pues la ley procesal ha establecido el mecanismo mediante el cual de manera formal se le atribuye la calidad de imputado a quien se considere probablemente vinculado con el hecho punible que se investiga.
>
> En efecto, el artículo 2115 del Código Judicial establece los presupuestos que han de concurrir para que la persona a quien se le pretende vincular con la comisión de un hecho punible se constituya en sujeto pasivo de la acción penal y, por ende, en parte del proceso penal de que se trate.
>
> Por ello, desde el momento en que se dicta la resolución razonada a que alude el citado precepto o desde el momento en que una persona es detenida y se procede conforme a los artículos 2112 y 2123 del Código Judicial, sólo entonces es posible hablar de imputado y, en consecuencia, en ese momento, el sospechoso se convierte en parte del proceso con total autoridad y legitimación para ejercer cualquier medio impugnativo y de defensa que la ley tiene establecido.
>
> En el caso que nos ocupa, a la fecha en que el licenciado Fonseca interpuso el incidente de nulidad, el señor NIVALDO MADRIÑAN, no poseía la calidad de imputado, la cual, como se ha visto, se adquiere una vez se le haya recibido declaración indagatoria al sujeto pasivo de la relación procesal. Precisamente la falta de aquella legitimación procesal a la que la doctrina ha denominado legitimatio ad procesum, sin la cual resulta imposible trabar adecuada y legítimamente la relación procesal de que se trate, es la que surge como obstáculo a la pretensión del recurrente, toda vez, que al no reputarse parte en este proceso, carece de capacidad de gestionar y, en consecuencia, para elevar peticiones al tribunal, oponerse a la pretensión de la contraparte y en fin para ejercer ningún derecho de los previstos por el ordenamiento procesal para las partes. De ahí que el señor MADRIÑAN ni su apoderado puedan intentar promover el presente incidente de nulidad'
> ..."
> (Fs. 17 a 18)

Por lo que se deja expuesto, el cargo relativo a la vulneración del artículo 19 de la Constitución, no prospera.

Igualmente, esta Superioridad estima que la resolución demandada no ha conculcado el principio de igualdad contenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental pues, como se señaló previamente, la actuación de la funcionaria del Ministerio Público se circunscribió a lo establecido por la ley, en el sentido de no aceptar un escrito improcedente por extemporáneo, al pretenderse actuar en defensa de una persona que no había adquirido la calidad de imputado. De allí que no le asiste razón al demandante cuando asegura que el funcionario de instrucción violó la citada norma fundamental al interpretar el artículo 2038 con un criterio restrictivo, por lo que se le colocó en estado de indefensión y se le desconoció

su calidad de imputado, al igual que la igualdad de las partes en el proceso.

Finalmente sostiene el actor que se violó de manera directa el artículo 32 de la Constitución porque, a su juicio, la Fiscalía restringió el concepto de imputado y con ello vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, creando una indefensión procesal en su contra.

Esta última imputación es básicamente igual a las anteriores y en consecuencia no resulta acertada, puesto que, como ya se dijo, para arribar a la resolución demandada, la Fiscal se ajustó a la definición de imputado que contiene el artículo 2036 del Código Judicial, que señala como tal a "toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito". De manera que sólo cuando se adquiere esa calidad de imputado, por ser acusado como autor o partícipe de un hecho punible, el afectado podrá hacer uso de los medios impugnativos y de defensa que la ley tiene establecidos. Por tanto, la funcionaria del Ministerio Público, en este caso, no podía acceder a la solicitud de suspensión del proceso formulada por quien carecía de legitimación para ser parte del mismo.

Por consiguiente, esta Corporación concluye, al igual que la Procuradora lo hace en su Vista, que al momento en que se emitió la resolución de 21 de abril de 1999, la representante del Ministerio Público había cumplido con lo dispuesto en las normas que sobre la materia contiene el Código Judicial y, por ello, no violó el principio constitucional del debido proceso.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO ES INCONSTITUCIONAL la resolución de 21 de abril de 1999 dictada por la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, puesto que no transgrede los artículos 19, 20, 32, ni otros de la Constitución Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. LIMBERT OBERTO RIOS M., CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 4 DE MARZO DE 1999, DICTADA POR EL JUEZ MPAL. DEL DTTO. DE SANTA MARTA, Y LA LEY 23 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE HERRERA, RAMO PENAL Y EL PROVEÍDO DE 5 DE FEBRERO DE 1999, DICTADO POR LA PERSONERÍA MPAL. DE SANTA MARTA. (PROCESO PENAL SEGUIDO A CELEDONIO CASTILLO). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante oficio No. 446 de 27 de septiembre de 1999, el Juzgado Municipal del Distrito de Santa María, de la provincia de Herrera, remitió la Advertencia de Inconstitucionalidad que el licenciado LIMBERT OBERTO RIOS H., interpusiera contra los artículos 2073 y 2115 del Código Judicial, dentro del proceso penal seguido a CELEDONIO CASTILLO.

Corresponde al Pleno de la Corte, en esta etapa, examinar si la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada cumple con los requisitos y presupuestos

legales para ser admitida.

Esta acción deberá revestir la forma de una demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 654 del Código Judicial; además de cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial, es decir, la transcripción literal de la disposición, norma, o acto acusado de inconstitucional, así como la indicación de las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción, siendo indispensable que la norma acusada de inconstitucional no haya sido aplicada; aportando la copia autenticada del acto o disposición objeto de la censura; y hacer mención del proceso que motiva la acción inconstitucional interpuesta.

En esta ocasión y luego del examen de rigor, el Pleno observa que el escrito adolece de la enumeración de los hechos en que funda su pretensión, por lo que incumple lo dispuesto en el artículo 654 del Código Judicial.

Sobre este tema, el Pleno señaló en sentencia de 8 de febrero de 1994 que:

> "... esta Corporación de Justicia ha reiterado la necesidad de que el peticionario cumpla con la exigencia que establece el citado artículo 2551 de la excerta procesal, concerniente a "los requisitos comunes a toda demanda". Entre tales requisitos figura la expresión de los hechos, debidamente numerados, los que deberán contener una narración o descripción de la secuencia del proceso jurisdiccional que origina la iniciativa constitucional ..." (Registro Judicial de Febrero de 1994).

Por otro lado el advirtiente incumple con lo dispuesto en el artículo 2151 del Código Judicial relativo a la transcripción literal de las normas acusadas de inconstitucionales, como de las normas constitucionales presuntamente infringidas, por lo que la inobservancia de ellas conlleva la inadmisibilidad de la advertencia.

A ello se agrega, que como bien manifestó el peticionario las normas acusadas de inconstitucionales (artículos 2073 y 2115 del Código Judicial) ya fueron aplicadas por la autoridad competente al resolver la solicitud que el licenciado RIOS presentara el 29 de enero de 1999.

En tal sentido reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido "... que la advertencia de inconstitucionalidad procede antes de que se aplique la disposición consultada y, como ello no ocurre en el presente caso, la advertencia formulada resulta extemporánea y, por tanto, inadmisible." (Registro Judicial de Enero de 1997, pág 130)

En otro orden de ideas, el Pleno observa que el peticionario formula en el escrito una serie de interrogantes a esta Corporación con respecto a la constitucionalidad de resoluciones judiciales proferidas por la Personería Municipal del Distrito de Santa María, y del Juzgado Municipal del Distrito de Santa María, sin lograr determinar en qué consiste la advertencia de inconstitucionalidad.

Esta Corporación ha percibido la inconformidad del peticionario con la decisión de la autoridad jurisdiccional de no formularle cargos al señor CELEDONIO CASTILLLO, promoviendo la revisión de actuaciones que se encuentran en el plano de la legalidad. Ante esta situación, el Pleno de esta Corporación de Justicia debe recordar que no puede constituirse en una tercera instancia ya que los supuestos vicios que señala el advirtiente se refieren a criterios valorativos del caudal probatorios que reposa en ese proceso penal.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la advertencia de

inconstitucionalidad promovida por el licenciado LIMBERT OBERTO RIOS H. dentro del proceso penal seguido a CELEDONIO CASTILLO.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LIC. EDUARDA CÓRDOBA CHEN, CONTRA EL ARTICULO 1 DE LA LEY 31 DE 28 DE MAYO DE 1998. (INCIDENTE DE CONTROVERSIA RELATIVO AL SUMARIO EN AVERIGUACIÓN DEL DELITO DE INCENDIARISMO EN PERJUICIO DE LA EMPRESA COSMOS 2000). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN ha presentado formal ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 31 DE 28 DE MAYO DE 1998, en relación con el Incidente de Controversia promovido por el licenciado JERÓNIMO MEJÍA dentro del sumario En Averiguación por delitos CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA en perjuicio de la empresa COSMO 2000.

Expresa la advirtiente que esa norma legal vulnera de manera directa por omisión lo dispuesto en el artículo 212 de nuestra Carta Magna.

Corresponde al Pleno de esta Corporación, en esta etapa, examinar si la advertencia de inconstitucionalidad cumple con los requisitos y presupuestos legales para ser admitida.

En consecuencia debemos señalar que la advirtiente cumplió con lo dispuesto en los artículos 654 y 2551 del Código Judicial.

Debemos considerar igualmente como requisito para la admisibilidad lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución, que establece la improcedencia de este acción cuando la norma ha sido aplicada, en tal sentido la referida norma señala que:

> "1. ...
> Cuando en un proceso público el funcionario encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.
>
> Las partes sólo podrán formular tales advertencias una vez por instancia".

El Pleno entra a determinar la inconstitucionalidad de la norma advertida cuando no ha sido aplicada, pues de lo contrario es extemporánea, pudiendo las partes formular tales advertencias una vez por instancia.

En consecuencia, siendo que el artículo 1 de la ley 31 de 28 de mayo de

1998 constituyó el fundamento jurídico del Incidente de Controversia formulado por el licenciado MEJÍA y dicha norma fue aplicada por el juzgador en primera instancia, es evidente que ya existe un pronunciamiento al respecto, por lo que no es posible advertir la inconstitucionalidad de normas que ya han sido objeto de estudio.

Por todo lo anterior no es posible admitir la advertencia promovida por la licenciada CÓRDOBA CHEN, y así lo ha de declarar esta Corporación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la licenciada MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN contra el artículo 1 de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADEVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL BUFETE VALDES EN REPRESENTACIÓN DE JOAQUÍN PERURENA DENGO, CONTRA LA PALABRA "ACTUALES" DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 5 DE 25 DE FEBRERO DE 1993, MODIFICADA POR LA LEY 7 DE 7 DE MARZO DE 1995 Y ALGUNAS FRASES Y PALABRAS CONTENIDAS EN EL DECRETO EJECUTIVO N° 90 DEL 16 DE AGOSTO DE 1996 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE PRIMERA OPCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDAS ARRENDADAS EN EL ÁREA REVERTIDA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Juez Primero de Circuito De Lo Civil del Primer Distrito Judicial, Licenciado Pedro O. Bolívar E., remitió a esta Corporación la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el Bufete Valdés, en nombre y representación de JOAQUÍN PERURENA DENGO, contra la palabra "actuales" del artículo 43 de la Ley N° 5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la Ley N° 7 de 7 de marzo de 1995; y algunas frases y palabras contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 90 de 16 de agosto de 1996, dentro del proceso de pago por consignación que ese juzgado instruye contra la Autoridad de la Región Interoceánica.

El demandante estima que la palabra "actuales" del artículo 43 de la Ley N° 5, y las frases y palabras del Decreto Ejecutivo N° 90 vulneran el contenido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional.

Una vez admitida la demanda y corrido el traslado respectivo a la señora Procuradora de la Administración, Licenciada Alma Montenegro de Fletcher, externó su opinión mediante la correspondiente Vista en la que considera que en la presente acción se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, y en su parte medular indica lo siguiente:

> "Este Despacho es de la opinión que, en el caso in examine, ha operado el fenómeno jurídico denominado Sustracción de Materia, toda vez que la palabra 'actuales' contenida en el primer párrafo del

> Artículo 43 de la Ley N° 5 de 1993, desapareció con la modificación realizada por la Asamblea Legislativa, mediante Ley N° 22 fechada 30 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 23,832 de 5 de julio de 1999 ...
> ...
> El accionante también estima que algunas frases y palabras contenidas en los artículos 1, 3, 5 y 12 del Decreto Ejecutivo N° 90 de 16 de agosto de 1996, han infringido los supracitados artículos 19 y 20, de nuestra Carta Política Constitucional.
>
> Al respecto, es menester indicar que la Procuraduría de la Administración tampoco puede entrar a analizar las infracciones alegadas, pues, al producirse la aludida modificación del artículo 43 de la Ley N° 5 de 1993, en lo referente a la eliminación de la palabra 'actuales' -a través de la Ley N° 22 de 1999-, el elenco de normas contenidas en el Reglamento de Primera Opción de Compra de Viviendas Arrendadas en las Áreas Revertidas, comprendidas en el Decreto Ejecutivo N° 90 de 16 de agosto de 1996, deben ser aplicadas en forma integral frente a lo estipulado en el artículo 43 de la Ley N° 5 de 1993, conforme quedó modificado por la Ley N° 22 de 1999
>
> En la eventualidad que exista alguna disposición Reglamentaria, contraria a lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 5 de 1993, con la reforma introducida por la Ley N° 22 de 1999, el funcionario encargado de aplicar la norma deberá ceñirse a la Ley".

Cumplidos todos los trámites procesales en esta acción constitucional, pasa el Pleno a resolver.

Ciertamente, tal como lo señala la señora Procuradora, observa la Corte que, el artículo 43 de la Ley N° 5 de 1993 en el cual se contenía la palabra "actuales" fue modificado mediante la Ley N° 22 de 30 de junio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 23,832 de 5 de julio de 1999 y que entró en vigencia a partir de su promulgación. El texto de la misma señala lo siguiente:

> "Artículo 1. Se modifica el primer párrafo del artículo 43 de la Ley 5 de 1993, modificado por la Ley 7 de 1995, así:
>
> Artículo 43. Los arrendatarios de viviendas revertidas, o por revertir hasta el 31 de diciembre de 1999, que según el Plan General puedan ser objeto de venta, tendrán la primera opción de compra sobre estos inmuebles, incluyendo los terrenos, siempre que los inmuebles sean para uso residencial y que no implique más de una vivienda por familia. Al establecer el precio de venta de las viviendas cuyos actuales ocupantes, arrendatarios de la Autoridad de la Región Interoceánica, opten por adquirir, deberá prevalecer un criterio social.
> ...".

Siendo la mencionada palabra el objeto procesal de la advertencia de inconstitucionalidad planteada, y como quiera que ha desaparecido del mundo jurídico en razón de la modificación del artículo que la contenía, resulta evidente que carece de objeto resolver sobre lo pedido en este negocio constitucional, pues se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

Por otro lado, en cuanto a las frases y palabras acusadas contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 90, esta Superioridad estima que le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración, en cuanto a que siendo que dicho decreto "adopta el Reglamento de Primera Opción de Compra de Viviendas Arrendadas en el Área Revertida", sus disposiciones deben ajustarse a la ley que le da origen, que en este caso es la Ley N° 5 de 1993, modificada por la Ley N° 22 de 1999. Por consiguiente, en caso discrepancia entre ambos, prima la norma jurídica de mayor

jerarquía, que en el caso sub-júdice es la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la presente demanda de inconstitucionalidad y ORDENA EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) ROBERTO GONZALEZ R. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN CASTRO & YOUNG, SOBRE EL DECRETO No. 3 DEL 4 DE MARZO DE 1980 POR SER CONTRARIA A LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, DENTRO DEL PROCESO LABORAL PROPUESTO POR IVAN ALBERTO ROMERO VS INDUSTRIAS EDUCATEC, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense ARROCHA, BLANDÓN CASTRO & YOUNG, ha formulado Advertencia de Inconstitucionalidad, dentro del Proceso Laboral propuesto por IVAN ALBERTO ROMERO vs INDUSTRIAS EDUCATEC, S. A., en contra del Decreto No. 3 del 4 de marzo de 1980.

Recibida y repartida la acción, procede la Corte a examinarla, a la luz de los postulados legales y jurisprudenciales, a fin de determinar su admisibilidad. El Código Judicial en los artículos 2551 y 2552 establece las formalidades que debe cumplir este tipo de demanda, indicando, además que debe contener los requisitos comunes a toda demanda.

Después de la lectura del escrito presentado por el demandante, y de realizar la Corte un esfuerzo por sintetizar y extraer del libelo los puntos más acordes con la acción presentada, se observa que la demanda bajo examen incumple con las exigencias básicas para que opere su admisión.

Así pues, observa el Pleno que la inobservancia, por parte del recurrente, del requisito consignado en el numeral 2 del artículo 2551 del Código Judicial, en el sentido de que, si bien es cierto, identificó las disposiciones constitucionales que a su juicio han sido vulneradas, no ha desarrollado a cabalidad el concepto de la infracción de las normas constitucionales que estima conculcadas; así pues, tenemos que con relación al artículo 62 no explica mayormente la manera como se ha dado la violación constitucional denunciada, y en cuanto a los artículos 63 y 75 ni siquiera hace referencia a cómo se dio infracción a las mismas. De manera de poder realizar debidamente la confrontación del acto acusado con el cargo formulado en relación con cada precepto, lo que trae como consecuencia su inadmisión, puesto que dicho apartado es el de mayor importancia al momento de fallar lo de lugar.

Para que se entienda cumplido el requisito contenido en el numeral 2° del artículo 2551 del Estatuto Procesal, ha indicado este Pleno (sentencias de 24 de septiembre de 1999, de 11 de enero de 1999 y de 9 de marzo de 1998, entre otras) que es necesario que se indique, en la demanda que contiene la pretensión de inconstitucionalidad, no solamente la disposición constitucional que estima el

actor que ha vulnerado el acto impugnado, sino ha de contener además, una explicación de la forma, manera o especie de cometerse la violación constitucional denunciada, es decir, en enjuiciamiento lógico jurídico que pueda llevar a conocimiento del Pleno, el alcance y la extensión de la violación constitucional denunciada. No se cumple, naturalmente, mediante alegaciones retóricas o haciendo referencia a aspectos fácticos, sino, como se dijo, en una argumentación lógico-jurídica de la norma impugnada a la luz de los principios que se encuentran en la base de los enunciados jurídicos contenidos en las disposiciones constitucionales.

Con base a lo anterior, el Pleno concluye que el escrito inconstitucional resulta carente de los requisitos que establece el artículo 2551 de la citada excerta legal, sobre todo en lo referente a el concepto de la infracción, lo que genera la aplicación del último párrafo del artículo 2552 del Código Judicial que establece. "La inobservancia de los requisitos a los que se refieren los artículos anteriores producirá la inadmisibilidad de la demanda."

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por la firma forense ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG.

Notifiquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA SOBRE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. ALCIBIADES CAJAR M. DENTRO DE LA QUEJA PRESENTADA POR (MAUD & MAUD CONTRA EL LCDO. PEDRO MORENO) Y CONTRA LOS ARTICULOS 296, 297 Y 298 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del proceso disciplinario por queja promovido por la firma forense Mauad & Mauad contra el Licenciado PEDRO IVÁN MORENO GONZÁLEZ, Secretario del Tribunal Superior Segundo Distrito Judicial, el representante legal de éste, Licdo. ALCIBIADES CAJAR, advirtió la inconstitucionalidad de los artículos 296, 297 y 298 del Código Judicial, por ser violatorios de los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional, advertencia que se encuentra en etapa de resolver en el fondo, luego de cumplidos todos los trámites establecidos por el Código Judicial, para ello.

Además de los hechos ya expuestos, el actor fundamentó su libelo, en que el artículo 297 del Código Judicial infringe el artículo 17 de la Constitución Nacional -impone el deber de los servidores públicos de proteger a los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción, y asegurar la efectividad de los derechos establecidos en la Constitución y la ley- de forma directa por omisión, ya que al establecer las sanciones aplicables a los funcionarios subalternos y secretarios, no fijó los parámetros que señalen en qué casos se debe imponer cada tipo de sanción; no define lo que es falta grave, falta leve y levísima, para sancionar.

Sostuvo que un jefe puede tener algún tipo de antipatía hacia algún subalterno, pudiéndole aplicar una sanción grave por una falta que no la merezca.

Por su parte, el artículo 298 íbidem -señala que el procedimiento disciplinario aplicable es el del artículo 289 y los Secretarios y subalternos pueden utilizar el recurso de reconsideración-, es acusado de infringir el artículo 32 de la Carta Magna -que establece el principio del debido proceso legal- de manera directa por omisión, porque no permite a los subalternos recurrir ante el superior jerárquico en apelación, cuando el jefe directo impone una sanción al subalterno; es decir, que no existe la doble instancia, lo que puede dar lugar a fallos arbitrarios de los juzgadores.

Finalmente, el actor consideró que el artículo 32 constitucional fue infringido por el artículo 296 ibid, de manera directa por omisión; esta violación se relaciona con la del artículo 297, ya que "existiendo pluralidad de procesos disciplinarios contra un subalterno y arbitrariamente sancionarlo tres veces privándolo de su sueldo y suspendiéndolo de su cargo para luego despedirlo, mediante la disposición bajo estudio, se viola el debido proceso porque entre una sanción y otra debe establecerse un lapso de tiempo para determinar si el funcionario ha corregido sus faltas y para ello se crea el proceso disciplinario."

También señala el Licdo. Cajar que la norma en comento desvirtúa el carácter correccional de las sanciones disciplinarias, aunado a la falta de doble instancia, quedando el acusado en manos de su superior jerárquico, y sin asidero legal para acumular tres -3- sanciones para proceder a su destitución.

Se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera su opinión, haciéndolo a través de la Vista N° 30 de 25 de julio de 1994.

Refiriéndose al artículo 17 Constitucional, afirmó el Jefe del Ministerio Público que la jurisprudencia dice que dicha norma es de naturaleza programática, por lo que no puede ser objeto de violación directa, sino solo en relación con otra norma creadora de algún derecho.

Como norma perteneciente al Título constitucional que establece los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, es de carácter "declarativo-universal", señala los objetivos generales de las autoridades de la República, y los fines y principios que se transforman en garantías y derechos específicos.

El aspecto medular de la opinión del Procurador en cuanto a la presunta inconstitucionalidad del artículo 298 del Código Judicial, estriba en que todos los procesos permiten dos instancia o grados, salvo que la ley los sujete a una sola instancia, como en el caso que nos ocupa, que sólo admiten recurso de reconsideración.

Trajo a colación el artículo 458 íbidem, que señala que todos los procesos permiten dos instancias, excepto los que la ley expresamente los sujete a una sola instancia.

Considera el señor Procurador que en este caso es evidente que el artículo 298 no infringe el principio del debido proceso, del artículo 32 Constitucional, sino que, por el contrario, establece el procedimiento a seguir en los casos disciplinarios.

Finalmente, en cuanto a la presunta infracción constitucional del artículo 296 del Código Procedimiental perderá su cargo un servidor del Escalafón Judicial o del Ministerio Público de igual categoría cuando se le haya impuesto más de 2 veces la sanción de suspensión con privación de sueldo en el lapso de 2 años, y se le sancione nuevamente- dijo el Opinador que "No logra esta Procuraduría comprender cuál es el concepto de la infracción señalado por el recurrente, ya que el mismo no ha expresado de manera clara y explícita el vicio de inconstitucionalidad que endilga a la norma atacada; enfatizó que la

jurisprudencia nacional dice que es necesario explicar suficientemente por qué se da la infracción".

Por ello, consideró que no era posible establecer el vicio constitucional denunciado.

Pues bien, se dispone la Corte a emitir su decisión, previas las siguientes consideraciones.

El actor señala -en primer lugar- que el artículo 297 del Código Judicial -facultad de la autoridad nominadora para sancionar disciplinariamente a los Secretarios y personal subalterno cuando cometan algún supuesto del artículo 285 ibid, y cuando reincidan en llegar tarde, estableciendo las sanciones para ello- infringió el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Tal como lo señaló el señor Procurador, esta norma es de naturaleza programática; es decir, no contiene derechos subjetivos susceptibles de ser violados, sino que establece los deberes generales que tienen todos los servidores públicos en este país, los cuales se regulan con la tutela de los diversos derechos subjetivos amparados de manera concreta por la Carta.

Por ello -como lo señala el Procurador-, no es posible la infracción de esta norma sino cuando su violación está vinculada con la de otra norma contentiva de un derecho subjetivo específico; como éste no es el caso, no prospera la pretensión del advirtente.

En cuanto a la presunta contravención del artículo 32 Constitucional por parte del artículo 298 del Código Adjetivo, debemos hacer los siguientes señalamientos.

El artículo 32 de la Constitución Nacional, a la letra dice:

> "ARTICULO 32: Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámite legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

Según el denunciante, esta excerta es vulnerada por el artículo 298 porque omite la vía por la que el funcionario encausado disciplinariamente pueda recurrir ante el superior jerárquico cuando la decisión de su jefe directo le perjudique; en otras palabras, no dispone la doble instancia.

El artículo 298 dice así:

> "ARTICULO 298. El procedimiento será el señalado en el artículo 289. Los Secretarios y demás subalternos pueden usar el recurso de reconsideración." (Negrilla y Subraya de la Corte).

Considera esta Corporación de Justicia que, tal como afirmó el Representante del Ministerio Público, los procesos admiten dos instancias o grados, excepto cuando la ley estipula que un procedimiento específico se sujete a una sola instancia, como en el caso que nos ocupa, máxime cuando existe una norma que lo permite.

En efecto, el artículo 458 del Código Judicial dice:

> "ARTICULO 458. Todos los procesos admiten dos instancias o grados, salvo que la ley los sujete expresamente a una sola instancia."

Las excepciones al sistema de doble instancia no contrarían el principio del debido proceso, ya que, en primer lugar, ni la norma que lo consagra -artículo 32- ni ninguna otra de la Constitución Nacional establece específicamente el sistema de doble instancia.

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema ya ha apuntado que los procesos que constan de una sola instancia no violentan el principio señalado.

El fallo del Pleno, de 4 de julio de 1980, bajo la Ponencia del Magistrado Américo Rivera, que resolvió la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por PACLANTIC INVESTMENT CORPORATION INC., dentro del proceso especial de quiebra que le propuso la Firma MORENO Y FÁBREGA, señaló lo siguiente:

> "La tendencia procesalista moderna es la de reducir la vía impugnativa, estableciendo límites expresos tanto en lo objetivo como en lo subjetivo.
> ...
> La Corte concluye, entonces, que el establecimiento de la única o doble instancia es tema de política procesal. Es la Ley y no la Constitución la que, en todo caso, establece la competencia funcional del Tribunal ad-quem para atender, como Tribunal de segunda instancia, mediante la interposición oportuna de los recursos legalmente establecidos."

Por consiguiente, es en el ámbito legal y no en el constitucional, en el que se establece excepcionalmente la pertinencia del sistema de un solo grado, por motivo de política procesal, sin que con ello se infrinja el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 Constitucional.

Por su parte, en otro fallo de 19 de noviembre de 1993, bajo la Ponencia de la Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz, al resolver la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 202 del Código Judicial por parte del Licdo. Marco Antonio Herrera Mow, el Pleno consideró que

> "... es decir, es este un proceso especial, independiente y de distinta naturaleza de los procesos civiles o penales que consagra el Código Judicial. En este aspecto hay que resaltar que es precisamente la naturaleza o razón de ser de la contienda la que va a establecer la clase de procedimiento con que se surtirá la misma.
> ...
> Admitir que por esa razón viola el principio de la doble instancia equivale a considerar violatorias todas las normas del Código Judicial que resuelven situaciones en las que por su naturaleza sólo pueden impugnarse a través del recurso de reconsideración; y peor aún, esto conduciría a dejar sin efecto más de diez normas de dicho Código que establecen la irrecurribilidad de algunas decisiones, es decir, ni siquiera es admisible el recurso de reconsideración."

En efecto, conforme lo expuesto en la porción transcrita, el proceso disciplinario es de naturaleza distinta al penal o civil, por lo que su naturaleza es la que determina el tipo de procedimiento a utilizar, para dirimir el litigio.

Por silogismo simple, al considerar esta norma como violatoria del debido proceso, habría que considerar de igual manera todos los procesos especiales que establecen la única instancia y los que no admiten el recurso de reconsideración, como inconstitucionales, atentando probablemente contra la naturaleza de esos procesos especiales.

Por lo tanto, concluye el Pleno que no es inconstitucional el artículo 298 del Código Judicial.

Finalmente, el actor advirtió que el principio del debido proceso del artículo 32 Constitucional, también fue violado por el artículo 296 de la excerta en estudio, que a la letra dice:

> "ARTICULO 296. Cuando a un servidor público del Escalafón Judicial o del Ministerio Público de igual categoría, se le haya impuesto más de dos veces la pena de suspensión con privación de sueldo en el lapso de dos años y se haga acreedor a nueva sanción de la misma índole, perderá su cargo."

Del contenido de la norma emerge, a criterio de la Corte, que si dentro del término de dos -2- años el Funcionario Judicial o del Ministerio Público ha sido suspendido y privado de su sueldo más de dos veces, de ser sancionado nuevamente luego de ese período, se hará acreedor a la pérdida del puesto.

Ahora bien, el cargo de inconstitucionalidad que el Licdo. Cajar le endilga a la norma en estudio, lo enmarca en tres aspectos, a saber:

Que el artículo 296 está relacionado con el 297, al sancionar "arbitrariamente" tres -3- veces por procesos disciplinarios a un subalterno, suspendiéndolo del cargo y del sueldo, para luego despedirlo, se infringe el debido proceso porque debe haber un lapso entre una sanción y la otra para determinar si ha corregido sus faltas.

Considera esta Corporación de Justicia que, en primer lugar, no puede calificarse a priori de "arbitrarias" las sanciones que se le apliquen a algún subalterno por motivo de proceso disciplinario, como lo hace el actor, ya que está aduciendo de antemano que toda sanción contra un subalterno del Órgano Judicial o el Ministerio Público, es injusta, y ello no puede ser aceptado por esta Colegiatura.

No encuentra el Pleno ninguna violación al principio del debido proceso inmersa en la norma en estudio, cuando indica que debe establecerse un lapso para determinar si el funcionario ha corregido sus faltas; y ello es así, por cuanto la sanción disciplinaria tiene como fin la corrección del funcionario para que no reincida en la falta de que se trate; ello significa que, según se desprende de la letra y del espíritu de la norma, el cumplimiento de la sanción trae como consecuencia directa la rectificación del subalterno en su error, y no hay que esperar para determinar si se ha corregido.

No prospera el segundo argumento, atinente a que lo recién expuesto desvirtúa el carácter correccional de las medidas disciplinarias; la inexistencia de la doble instancia en el proceso disciplinario, ya fue objeto de análisis, por lo que no será observado nuevamente, como tampoco lo será el tercer argumento, que el mismo insiste en la necesidad de la doble instancia, para aminorar los errores en la decisión.

En consecuencia, esta Corporación de Justicia debe coincidir con el criterio de la Vista Fiscal, por lo que no prospera la pretensión del actor.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 297, 298 y 296 del Código Judicial, advertidos por el Licdo. Alcibíades Cajar en representación del Licdo. PEDRO IVÁN MORENO GONZÁLEZ, Secretario del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso disciplinario que por queja le sigue la firma forense MAUAD & MAUAD.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL POR EL LCDO. EMILIO EDUARDO BATISTA MIRANDA, EN REPRESENTACION DE HIRISNEL SUCRE SERRANO, PIDE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES No. 2053 DE 2 DE AGOSTO DE 1996 Y No. 2036 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1999, EMITIDA POR EL JUEZ SEPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Emilio Eduardo Batista Miranda, en representación del Sr. HIRISNEL SUCRE, Legislador de la República, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema, demanda de inconstitucionalidad contra los autos N° 2053 de 2 de agosto de 1996, y N° 2036 de 18 de octubre de 1999, dictados por el Juez Séptimo de Circuito del Primer Circuito Civil de Panamá.

Dichas resoluciones contienen orden de embargo y de remate, respectivamente, sobre bienes pertenecientes a los demandados, AGROGARICÍN, S. A., DESARROLLO AGRÍCOLA DEL ISTMO, S. A., HIRISNEL SUCRE SERRANO Y OTROS, siendo que -según el actor- el legislador SUCRE SERRANO es titular del 98% del total de las acciones de DESARROLLO AGRÍCOLA DEL ISTMO, S. A., propietaria a su vez de una serie de fincas, que forman parte del patrimonio de SUCRE SERRANO, cuyo embargo y remate fueron ordenados por las resoluciones consideradas inconstitucionales.

Consideró el demandante, que los autos N° 2053 de 2 de agosto de 1996 y N° 2036 de 18 de octubre de 1999 infringen la parte final del artículo 149 de la Constitución Nacional, que determina que los legisladores pueden ser demandados civilmente, pero no puede decretarse contra ellos secuestros u otras medidas cautelares contra su patrimonio, desde el día de la elección hasta el vencimiento de su período.

También señala que si la norma es aplicable a medidas precautorias, también lo es para el embargo.

Por encontrarse el negocio en etapa de admisión, el Pleno procederá, a renglón seguido, a determinar si el libelo cumple los requisitos procesales para admitirlo.

La lectura del libelo revela que éste cumple con los requisitos normales de las demandas, contenidos en el artículo 654 del Código Judicial; transcribe literalmente las resoluciones consideradas inconstitucionales; indica la norma constitucional violada, y el concepto de su violación, y aporta copia autenticada de ambas resoluciones, objeto de la demanda.

Empero, los antecedentes del caso revelan que existe un defecto crítico que impide su admisibilidad, y que estriba en la falta de agotamiento de los recursos disponibles para interponer esta iniciativa constitucional.

En efecto, la jurisprudencia de la Corte ha establecido éste, como requisito sine qua non, toda vez que en este tipo de casos la Corte Suprema no se constituye en un Tribunal de tercera instancia, sino como un Órgano de derecho público cuya finalidad es la defensa de la integridad de la Constitución.

En este sentido, citamos un extracto de los fallos de 12 de mayo y 10 de diciembre de 1993:

> "Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público, y como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debido formas y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda estar dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia.
>
> ... tampoco se cumplió con el requisito del agotamiento de los medios de impugnación correspondientes, antes de acudir ante la Corte Suprema, lo cual es imperativo dado que la Corte actúa en estos proceso, no como Tribunal de Justicia, sino como Organismo de Derecho Público garante de la integridad de la Constitución."

De lo expuesto por el activador constitucional, no se observa por ninguna parte que éste haya interpuesto los recursos ordinarios o extraordinarios que de acuerdo a la ley se pueden interponer contra dichas resoluciones, razón por la cual, en virtud de la jurisprudencia vertida, no es posible admitir la presente demanda.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licdo. Emilio Eduardo Batista Miranda en representación del Honorable Legislador HIRISNEL SUCRE SERRANO, contra los autos N° 2053 de 2 de agosto de 1996, y N° 2036 de 18 de octubre de 1999, proferidos por el Juez Séptimo del Circuito Civil de Panamá.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN SU PROPIO NOMBRE, CONTRA LA LEY N° 27 DEL 5 DE JULIO DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAUL TRUJILLO MIRANDA, en su propio nombre, interpuso acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 27 del 5 de julio de 1999, a través de la cual la Asamblea Legislativa concedió al Organo Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir Decretos-Leyes, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política.

Cumplidos los trámites propios de este negocio, el Pleno pasa a pronunciarse sobre el fondo del mismo.

De acuerdo con el licenciado Trujillo Miranda, la Ley impugnada violó el primer párrafo del numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política, que establece lo siguiente:

"Artículo 153. La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

1. ...
16. Conceder al Organo Ejecutivo, cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante Decretos Leyes.
..."

Una lectura exhaustiva de la demanda permite apreciar que el licenciado Trujillo formula tres cargos específicos de violación del precepto transcrito. En primer lugar, señala a foja 16 que el Proyecto de Ley por medio del cual se pidió a la Asamblea Legislativa la concesión de facultades extraordinarias, debió ser "presentado por el Presidente de la República y los Ministros de Estado que constituyen el Organo Ejecutivo, sino (sic) por el Consejo de Gabinete que está constituido por el Presidente de la República, los Vice Presidentes y los Ministros de Estado y que no tiene dicha atribución".

Con relación a este primer cargo, consta en los documentos aportados por el demandante que, efectivamente, el Consejo de Gabinete autorizó al señor Ministro de la Presidencia para solicitar a la Asamblea Legislativa la concesión de facultades extraordinarias. Sin embargo, ello no viola el precepto constitucional transcrito, porque, precisamente, el Consejo de Gabinete es una de las formas o mecanismos a través de las cuales el Organo Ejecutivo ejerce sus atribuciones constitucionales y legales. Así se advierte muy claramente en el texto de los artículos 170 y 171 de la Constitución Política. La primera de estas normas señala que el Organo Ejecutivo "está constituido por el Presidente de la República y todos los Ministros de Estado, mientras que la segunda, establece que "El Presidente de la República ejerce sus funciones por sí solo o con la participación del Ministro del ramo respectivo, o con la de todos los Ministros en Consejo de Gabinete, o en cualquier otra forma que determine esta Constitución." (El subrayado es del Pleno)

Por otra parte, el hecho de que haya sido el señor Ministro de la Presidencia quien presentó el Proyecto de Ley N° 034 (aprobado como Ley N° 27 de 1999), obedece a que este funcionario actuó como órgano de comunicación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. El artículo 2 de la Ley N° 15 de 1958, establece a este respecto que el Ministerio de la Presidencia es "... el órgano de comunicación del Presidente de la República y del Consejo de Gabinete con los demás órganos del Estado ...". Por todos estos motivos, el Pleno descarta el primero de los cargos.

En cuanto al segundo cargo de violación del artículo 153 (numeral 16) ibidem, el licenciado Trujillo sostiene que la Ley N° 27 no establece en su texto que las facultades extraordinarias allí concedidas, fueron otorgadas a solicitud del Organo Ejecutivo, ni tampoco indica cuál era la "necesidad" que hacía necesario el otorgamiento de tales facultades. En concepto del Pleno, estas alegaciones del licenciado Trujillo carecen de todo fundamento, primero, porque el artículo 153, numeral 16 ibidem, no exige que tales aspectos se consignen o establezcan en la Ley que concede al Organo Ejecutivo facultades extraordinarias. Segundo, porque en nuestro medio, la motivación de las leyes por parte de la Asamblea Legislativa no constituye una "obligación", sino una "facultad" que ésta puede o no ejercitar, tal como se desprende de la parte inicial del artículo 168 de la Constitución Política, que expresa que "Las Leyes podrán ser motivadas y ... " (Subraya el Pleno).

Finalmente, el actor considera que el numeral 16 del artículo 153 de la Carta Fundamental resultó violado porque el Organo Legislativo se desprendió de la facultad de expedir las leyes para otorgársela al Organo Ejecutivo sin que

existiese alguna "necesidad" que así lo justificara.

Contrario a lo expresado por el actor, el Pleno estima que en el presente caso existen algunos elementos que determinan el cumplimiento del requisito relativo a la "necesidad", al cual alude el precepto que se cita como violado. Fundamentalmente, interesa destacar el hecho de que las materias sobre las cuales se concedieron tales facultades requerían de una rápida reglamentación y ello en modo alguno sería posible, habida cuenta de que los miembros de la Asamblea Legislativa elegidos en 1994, estaban por culminar su última legislatura ordinaria (la cual fenecía el 30 de junio de 1999, según el art. 143, constitucional) y de que en la "legislatura extraordinaria" a la cual fueron llamados, mediante el Decreto Ejecutivo N° 66 del 6 de julio del mismo año, éstos discutirían otras materias.

Otro elemento que debe mencionarse en torno a este punto, es que algunas de las materias enumeradas en la Ley N° 27 impugnada, ya habían sido objeto de anteproyectos de leyes, que el propio Organo Ejecutivo había presentado a la Asamblea Legislativa para que ésta los discutiera y aprobara mediante leyes formales, tal como se expresa en la Exposición de Motivos con la cual se presentó el Anteproyecto de Ley N° 034 (aprobado como Ley N° 27 de 1999) (Cfr. f. 2). Todos estos razonamientos llevan, pues, al Pleno, a descartar los cargos de inconstitucionalidad formulados respecto del artículo 153, numeral 16, de la Constitución Política.

Por último, el licenciado Trujillo estima violado el artículo 2 de la Constitución Política, el cual recoge el conocido principio de "separación de poderes", al señalar que el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Numerosos tratadistas han formulado comentarios respecto del mencionado principio, llegando a la ineludible conclusión de que la separación de poderes no es absoluta y que, en consecuencia, las ramas del poder público han de ejercer sus funciones "en armónica colaboración". El jurista panameño, doctor Dulio Arroyo, después de ofrecer diversos ejemplos relativos a esa "armónica colaboración", expresa que ésta no es más que un ejercicio armónico de funciones entre las ramas del Poder Público, que "sólo puede darse y prestarse en los casos señalados expresa y taxativamente por la Constitución y las Leyes de la República. Es decir, se trata de una colaboración reglamentada, limitada, a los supuestos autorizados por la Constitución y la leyes" (ARROYO, Dulio. "Sentido y alcance del artículo 2° de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 antes de la reforma introducida en 1983", en Estudios de Derecho Constitucional panameño. Compilado por Jorge Fábrega. Editorial Texto, Ltda. San José. págs. 151-152).

En el caso bajo examen, no advierte el Pleno la violación del principio de separación de poderes, en primer lugar, porque la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 27 de 1999 en ejercicio de la "función legislativa", la cual consiste "en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado" declarados en la Constitución Política y, en especial, para regular las materias que enumera el artículo 153 de ese cuerpo de normas supralegales. En ejercicio de aquélla función, el Organo Legislativo discutió el proyecto de Ley sobre concesión de facultades extraordinarias y decidió, en base a la votación afirmativa y mayoritaria de sus miembros, acceder a la solicitud de facultades extraordinarias que previamente le había formulado el Organo Ejecutivo.

En segundo lugar, porque la Ley N° 27 impugnada se dictó en cumplimiento de la atribución que el numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política le otorga al Organo Legislativo y que consiste "Conceder al Organo Ejecutivo, cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante Decretos Leyes". De esta misma norma se infiere la facultad que el constituyente reconoció al Organo Ejecutivo para ejercer tales "facultades extraordinarias", mediante la expedición de Decretos-Leyes y con arreglo a los

parámetros jurídicos allí establecidos. Por estos motivos, el Pleno desestima también el cargo de violación del artículo 2 de la Constitución Política.

Como la Ley impugnada no infringe los preceptos que se cita como violados, ni ninguna otra disposición de la Constitución Política, no es inconstitucional y así procede el Pleno a declararlo.

Antes de concluir, el Pleno estima necesario recordar al demandante que, de conformidad con la parte final del artículo 153, numeral 16, de la Constitución Política, cada uno de los Decretos-Leyes cuya expedición fue autorizada por medio de la Ley N° 27 de 1999, puede ser derogado, modificado o adicionado sin limitación de materias y en cualquier tiempo, a iniciativa propia del Organo Legislativo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Ley N° 27 del 5 de julio de 1999.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GISEPPE BONISSI, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN AROSEMENA, ALBERTO CIGARRISTA, JOSÉ BLANDÓN, MARIO QUIEL Y BOLÍVAR PARIENTE, CONTRA LA LEY N° 1 DEL 2 DE ENERO DE 1998. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Giuseppe Bonissi, en representación de Rubén Arosemena, José Blandón, Alberto Cigarruista, Bolívar Pariente y Mario Quiel, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 1 del 2 de enero de 1998, por medio de la cual la Asamblea Legislativa concedió al Organo Ejecutivo facultades extraordinarias, conforme los dispone el numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política.

Cumplidos los trámites propios de este negocio, corresponde al Pleno pronunciarse sobre el fondo del mismo.

Para una mejor comprensión de los cargos de ilegalidad planteados en la demanda, el Pleno estima necesario referirse a los hechos o antecedentes esbozados por el licenciado Bonissi en su demanda, a saber:

1. El día 30 de diciembre de 1997, aproximadamente a las 10:30 a. m. se inició el segundo debate del Proyecto de Ley N° 76, por el cual se conceden al Organo Ejecutivo facultades extraordinarias, conforme al artículo 153 (numeral 16) de la Constitución Política;

2. Aproximadamente a las 3:35 p. m., luego de volver de un receso, el Legislador Leopoldo Benedetti solicitó que se le informase a qué hora comenzó la sesión, a lo cual, el Subsecretario General contestó que a las 11:40 a. m.;

3. Luego, un Legislador Suplente del Partido Revolucionario Democrático pidió al Pleno que se declarase en sesión permanente, pese a que la sesión ordinaria, en ese momento, llevaba más de cuatro horas de duración;

4. En la votación consiguiente 36 Legisladores votaron a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo cual no existía quórum y la sesión debió darse por terminada;

5. Pese a lo anterior, ese mismo día se aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley N° 76 y el día 31 de diciembre, fue aprobado en tercer debate;

6. El día 3 de enero de 1998, en la Gaceta Oficial N° 23,452, se publicó la Ley N° 1 del 2 de enero de 1998, por la cual se concedió facultades extraordinarias al Organo Ejecutivo para expedir Decretos-Leyes;

7. Paralelamente, en la Gaceta Oficial N° 23,453, del 5 de enero de 1998, se publicó el Decreto Ejecutivo N° 3 del 2 de enero de 1998, por el cual el Organo Ejecutivo convocó a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias, las cuales iniciaron el 7 de enero de 1998, (fs. 14-15);

Tomando como base los hechos afirmados, el licenciado Bonissi estima que durante la discusión del Proyecto de Ley N° 76, ahora Ley N° 1 de 1998, se violaron los artículos 2, 153 (numeral 16), 159 y 160 de la Constitución Política.

En opinión del aludido letrado, la Ley impugnada violó el artículo 2 constitucional porque delegó facultades extraordinarias al Organo Ejecutivo, a pesar de que no existía la necesidad de hacerlo y de que la Asamblea Legislativa en esos momentos no estaba en receso. Se atenta, incluso, contra el funcionamiento armónico de ambos Órganos del Estado, pues, no puede haber armonía a costa de sacrificar la independencia y las atribuciones inherentes de un Organo en beneficio de otro.

El artículo 2 de la Constitución Política, que recoge el conocido principio de "separación de poderes", establece que el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Numerosos tratadistas han formulado comentarios respecto del mencionado principio, llegando a la ineludible conclusión de que la separación de poderes no es absoluta y que, en consecuencia, las ramas del poder público han de ejercer sus funciones "en armónica colaboración". El jurista panameño, doctor Dulio Arroyo, después de ofrecer diversos ejemplos relativos a esa "armónica colaboración", expresa que ésta no es más que un ejercicio armónico de funciones entre las ramas del Poder Público, que "sólo puede darse y prestarse en los casos señalados expresa y taxativamente por la Constitución y las Leyes de la República. Es decir, se trata de una colaboración reglamentada, limitada, a los supuestos autorizados por la Constitución y la leyes" (ARROYO, Dulio. "Sentido y alcance del artículo 2° de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 antes de la reforma introducida en 1983", en Estudios de Derecho Constitucional panameño. Compilado por Jorge Fábrega. Editorial Texto, Ltda. San José. págs. 151-152).

En el caso bajo examen, no advierte el Pleno la violación del principio de separación de poderes, en primer lugar, porque la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 1 de 1998 en ejercicio de la "función legislativa", la cual consiste "en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado" declarados en la Constitución Política y, en especial, para regular las materias que enumera el artículo 153 de ese cuerpo de normas supralegales. En ejercicio de aquélla función, el Organo Legislativo discutió el proyecto de Ley sobre concesión de facultades extraordinarias al Organo Ejecutivo y, luego de una votación afirmativa y mayoritaria de sus miembros, decidió acceder a la solicitud de facultades extraordinarias que previamente le había formulado el Ejecutivo.

En segundo lugar, porque la Ley impugnada se dictó en cumplimiento de la atribución que el numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política le otorga al Organo Legislativo y que consiste "Conceder al Organo Ejecutivo, cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante Decretos Leyes". De esta misma norma se infiere la facultad que el constituyente reconoció al Organo Ejecutivo para ejercer tales "facultades extraordinarias", mediante la expedición de Decretos-Leyes y con arreglo a los parámetros jurídicos allí establecidos. Como la autorización concedida al Organo Ejecutivo a través de la citada Ley tiene claro fundamento en el citado precepto constitucional, el Pleno considera que el primero de los cargos formulados es infundado.

De la lectura de los cargos relativos al numeral 16 del artículo 153 de la Constitución Política se infiere que, en realidad, los demandantes sólo estiman violado el párrafo primero de esta norma al cual ya se hizo referencia. Según el licenciado Bonissi, la violación se dio porque la Asamblea Legislativa concedió al Organo Legislativo facultades extraordinarias a través de la Ley demandada sin que existiese una necesidad que así lo exigiera y que justificara delegar la función legislativa en otro Organo del Estado. También estima violado dicho precepto por otras razones, a saber:

> "La Asamblea Legislativa, a nuestro juicio, deja de estar en receso cuando se encuentra en sesiones, sean éstas ordinarias o extraordinarias. En consecuencia, las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo dejan de tener sentido, justificación y vigencia al momento en que la Asamblea inicia sesiones, ordinarias o extraordinarias. En este caso en particular, la Asamblea entra en receso el 31 de diciembre de 1997 y ya el 2 de enero se le convoca a sesiones extraordinarias, las cuales inician formalmente el 7 de enero de 1998. Es decir, según se quiera interpretar, la Asamblea dejó de estar en receso el 2 ó el 7 de enero del presente año. A partir de alguna de esas dos fechas, es nuestro parecer que deviene en inconstitucional cualquier actuación del Ejecutivo en función de la Ley N° 1 de 2 de enero de 1998, así como la misma Ley." (f. 21)

De la lectura del precepto que se cita como violado, se infiere que el elemento relativo a la "necesidad", ciertamente, es uno de los requisitos que la Asamblea Legislativa debe observar al conceder facultades extraordinarias al Organo Ejecutivo para legislar a través de Decretos Leyes. En concepto de la Sala, este requisito se cumplió en la medida en que las materias respecto de las cuales se concedieron las facultades extraordinarias requerían de una rápida reglamentación, habida cuenta de su estrecha vinculación con el programa económico que el Organo Ejecutivo adelantaba en esos momentos. Además, algunas de esas materias ya habían sido objeto de anteproyectos de leyes, que el propio Organo Ejecutivo había presentado a la Asamblea Legislativa para que ésta los discutiera y aprobara mediante leyes formales. Con relación a este hecho, el H. L. Roberto Abrego, en la sesión del 30 de diciembre de 1997, expresaba que entre esos anteproyectos estaba el relativo a la creación de la Autoridad Marítima de Panamá, al igual que aquél por el cual se adicionaba un parágrafo del artículo 1057-v del Código Fiscal; el anteproyecto para regular el trabajo en el mar y en las vías navegables y el anteproyecto de ley para la creación de la Dirección General de Auditoría y Fiscalización Interna del Ministerio de Hacienda y Tesoro (Cfr. f. 70).

En lo que concierne al segundo cargo de violación del numeral 16 del artículo 153 ibidem, se desprende de las afirmaciones del licenciado Bonissi, que éste considera que la Ley N° 2 de 1998 es inconstitucional porque faculta al Organo Ejecutivo para legislar a través de Decretos-Leyes a pesar de que la Asamblea Legislativa no estaba en receso, pues, fue llamada a sesiones extraordinarias mediante el Decreto Ejecutivo N° 3 del 2 de enero de 1998.

No obstante estas afirmaciones, el Pleno considera que el licenciado

Bonissi no ha probado debidamente el citado cargo de inconstitucionalidad, toda vez que se limita a mencionar la fecha en que la Asamblea Legislativa supuestamente inició las sesiones extraordinarias, mas no prueba esta afirmación ni mucho menos la fecha en que culminaron dichas sesiones. Tampoco aporta prueba alguna con relación al momento en que el Organo Ejecutivo ejerció las facultades extraordinarias que le fueron concedida mediante la Ley impugnada.

Sobre este particular el Pleno observa, que las pruebas a las cuales alude el licenciado Bonissi en su demanda, particularmente, las Gacetas Oficiales N° 23,452 del 3 de enero y N° 23,453 del 5 de enero de 1998, respectivamente, únicamente prueban la fecha en que fueron promulgadas la Ley impugnada y el Decreto Ejecutivo N° 3 del 2 de enero de 1998, mas no prueban el momento en que ambos Organos, efectivamente, ejercieron las facultades que recíprocamente se concedieron mediante estos instrumentos jurídicos. En lo que concierne a las Actas de las sesiones celebradas los días 30 y 31 de diciembre de 1997, incorporadas a los autos a solicitud del licenciado Bonissi y ante la imposibilidad de obtenerlas, éstas guardan relación con hechos relativos al momento en que se discutía el Proyecto de Ley N° 76, es decir, con hechos anteriores a la expedición de la Ley impugnada y del Decreto N° 3 ibidem.

Con relación a estos razonamientos, el Pleno debe recordar que en aquéllos negocios en los que el análisis de los cargos de inconstitucionalidad depende o está ligada al examen de circunstancias de hecho, como en este caso, es fundamental que el demandante aporte con su libelo las pruebas sustentatorias de sus afirmaciones, a fin de probar adecuadamente las infracciones constitucionales que alega. Así lo ha expresado la Corte en innumerables precedentes, entre ellos, el de 30 de septiembre de 1994 y 30 de diciembre de 1999. En la primera de estas sentencias el Pleno expresó lo siguiente:

> "Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia observa que a lo largo de toda la demanda de inconstitucionalidad el apoderado judicial del actor ha formulado numerosos cargos de violación al debido proceso, sin embargo, el doctor Mottley no acompañó con su demanda los elementos probatorios que permitieran a esta Superioridad determinar con toda claridad y seguridad el acaecimiento de las violaciones alegadas. Esta omisión reviste fundamental importancia, ya que, para pedir la declaratoria de inconstitucionalidad en un caso como el que ahora nos ocupa, no basta la simple exposición de los hechos que se estiman constitutivos de las alegadas violaciones, sino que también es imprescindible probarlos. Así lo expuso el Pleno de esta Corporación de Justicia en su fallo de 11 de junio de 1993. (Registro Judicial, pág. 83-86)." (Registro Judicial, pág. 86)

Por todos estos motivos, el Pleno descarta también el segundo de los cargos de violación del artículo 153 (numeral 16) de la Constitución Política.

La tercera disposición constitucional que los demandantes consideran violada es el artículo 159, que preceptúa que ningún "proyecto será Ley de la República si no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en tres debates, en días distintos y sancionado por el Ejecutivo en la forma que dispone esta Constitución". Para fundamentar este cargo el licenciado Bonissi citó los artículos 90, 92, 93 y 167 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (contenido en la G. O. N° 22.111 del 31 de agosto de 1992), según los cuales, las sesiones de este Organo del Estado tienen una duración de cuatro horas y la proposición de cualquier legislador para que la sesión sea declarada "permanente", debe formularse media hora antes de que termine la sesión respectiva.

La supuesta infracción estriba en que, para el momento en que el H. L. Mendoza propuso al Pleno de la Asamblea que declarase "permanente" la sesión del 30 de diciembre de 1997, ya habían transcurrido más de cuatro horas desde su inicio (10:30 a. m.), por lo cual era obvio que dicha sesión había terminado.

En concepto del Pleno de la Corte, las afirmaciones hechas por el licenciado Bonissi carecen de fundamento, primero, porque según el Acta de la sesión del 30 de diciembre de 1997, ésta se inició a las 11:40 a. m. y no a las 10:30 a. m., como dicho letrado afirma; segundo, porque en dicha Acta ni siquiera consta la hora en que el H. L. José Mendoza propuso al Pleno de la Asamblea Legislativa que la referida sesión fuese declarada "sesión permanente", es decir, que no consta en esa acta que la proposición del H. L. Mendoza fue hecha cuando la sesión del 30 de diciembre de 1997 había terminado por haberse cumplido más de cuatro horas desde su inicio (Cfr. f. 71). De allí, que el Pleno estime que la afirmación esencial a la cual se refiere este tercer cargo, no ha sido probada.

Debe anotarse, igualmente, la grave contradicción en la que incurrió el licenciado Bonissi al sustentar este tercer cargo de inconstitucionalidad, pues, mientras a foja 22 sostiene "que la Ley impugnada no fue aprobada en tres debates, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa", en los hechos 7° y 8° de su demanda (f. 15), afirma que el Proyecto de Ley N° 76, que corresponde a la Ley N° 1 de 1998, fue aprobado en segundo y tercer debate los días 30 y 31 de diciembre de 1997, respectivamente.

Por todos estos motivos, el Pleno descarta la violación del artículo 160 constitucional.

Finalmente, se estima violado el artículo 159 de la Constitución Política, cuya parte pertinente expresa que las leyes orgánicas necesitan para su expedición, en segundo y tercer debates, del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa". En el concepto de la infracción sólo se argumenta lo siguiente:

> "Lo dicho con relación al artículo 160 se aplica en gran medida al presente artículo. Además, debemos tomar en consideración que, al momento de la votación, sólo votaron 36 legisladores y, siendo que el quórum reglamentario está compuesto de un mínimo de 37 legisladores, ello significa que no existía el quórum reglamentario en ese momento, razón adicional para afirmar que dicha sesión debía terminar en ese momento" (f. 23). (Subraya el Pleno)

Lo primero que cabe aclarar en torno a este cargo es que, aunque el licenciado Bonissi no indica expresamente a qué votación se refiere, alude a la votación realizada por el Pleno el 30 de diciembre de 1997, respecto de la proposición presentada por el H. L. José Mendoza para que el Pleno declarara "permanente" la sesión de esa fecha, tal como se vio anteriormente. En opinión de este letrado, dicha sesión debió terminar una vez culminada la aludida votación, porque como en ella sólo votaron un total de 36 legisladores, no existía el quórum reglamentario, compuesto por 37 legisladores.

Según consta en el Acta de la mencionada sesión, en la votación a la cual nos venimos refiriendo ciertamente emitieron su voto un total de 36 legisladores, es decir, que el número de votantes fue inferior al quórum reglamentario. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el licenciado Bonissi, este hecho no determinaba automáticamente la terminación de la sesión, tal como se desprende del artículo 191 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 191. No habrá votación cuando el total de votantes fuese inferior al quórum. En este caso el Presidente procederá a ordenar a la Secretaría la verificación del quórum. Posteriormente se realizará la verificación nominal de la votación."

Como resulta fácil advertir, de acuerdo con la norma transcrita, la votación relativa a la proposición del H. L. Mendoza, en la que sólo participaron 36 legisladores, jurídicamente, no existió. Por ello, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, el Presidente de

este organismo pidió que se verificara nuevamente el resultado de dicha votación y, acto seguido, ordenó al Secretario General que pasara a lista para verificar el quórum respectivo. El Secretario determinó entonces que un total de cuarenta y cuatro (44) legisladores respondieron el llamado a lista y luego, a solicitud del Presidente de la Asamblea, se realizó la votación de la proposición del H. L. Mendoza, la cual recibió el voto favorable de cuarenta y un (41) legisladores, cero en contra y cero abstensiones. Declarada así la sesión permanente, se continuó con la discusión del Proyecto de Ley N° 76, hasta aprobarse en segundo debate (Cfr. f. 71 y 71 vuelta).

Por todos estos motivos, el Pleno estima que tampoco le asiste razón al licenciado Bonissi en cuanto al último de los cargos de inconstitucionalidad esbozados en su demanda.

Antes de concluir, el Pleno estima necesario recordar a los demandantes que, de conformidad con la parte final del artículo 153, numeral 16, de la Constitución Política, cada uno de los Decretos-Leyes cuya expedición fue autorizada por medio de la Ley N° 1 de 1998, puede ser derogado, modificado o adicionado sin limitación de materias y en cualquier tiempo, a iniciativa propia del Organo Legislativo.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Ley N° 1 del 2 de enero de 1997.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS SEGUIDAS A ROBERTO WILL GUERRERO, JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL, RICARDO ALEMÁN, OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF, ELITZA CEDEÑO POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONTRA LA PERSONALIDAD INTERNA DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la denuncia presentada por el Licenciado Luis Fuentes Montenegro en nombre y representación del Honorable Legislador Francisco J. Ameglio S., contra los señores ROBERTO WILL GUERRERO, JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL, RICARDO ALEMÁN, OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF y ELITZA CEDEÑO por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, usurpación de funciones públicas y delitos contra la personalidad interna del estado.

Aprehendido el conocimiento de la presente denuncia, el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., mediante Vista N° 38 de 28 de octubre de 1999, después de exponer las consideraciones jurídicas que estimó procedentes, finaliza su exposición en los siguientes términos:

"...

De allí que al no comprobarse los cargos reseñados anteriormente, ni tampoco los de usurpación de funciones públicas, por no existir evidencias que corroboren que una vez aprobada, sancionada y publicada la ley que derogó la citada Sala Quinta, las personas que fungían como Magistrados y Suplentes de los mismos, hayan continuado ejerciendo funciones públicas, considere que esta encuesta penal debe ser cerrada con un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal. No obstante, y como quiera que por imperativo de la Ley N° 49 los licenciados OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF y ELITZA CEDEÑO, dejaron de ser Magistrados, perdiendo con ello la Asamblea Legislativa la competencia para conocer el presente negocio, es por lo que se remite el mismo al Honorable Pleno solicitando, respetuosamente, declinarlo a la esfera circuital, para que en su momento el Tribunal jurisdiccional a quien le corresponda decida la situación jurídica de todas las personas que aparecen denunciados". (fs. 61-70).

En efecto, tal como se expresa en el párrafo transcrito, tanto los señores OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF y ELITZA CEDEÑO al igual que ROBERTO WILL GUERRERO, JOSÉ DE LA CRUZ BERNAL y RICARDO ALEMÁN, que son las personas denunciadas en el presente caso, por mandato del artículo 28 de la ley 49 de 24 de octubre de 1999 dejaron de ser Magistrados titulares los tres primeros y suplentes los tres últimos de la Corte Suprema, razón por la cual no tenía competencia la Asamblea Legislativa para conocer del presente negocio y compete, en consecuencia, a la esfera circuital correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 159 del Código Judicial, conocer y decidir acerca de los hechos expuestos y de la situación jurídica de cada una de las personas denunciadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del comocimiento de la presente denuncia; y por consiguiente, DECLINA competencia ante el Juzgado de Circuito Penal, en turno, del Primer Distrito Judicial de la Provincia de Panamá.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO PRESENTADO POR EL LCDO. HILARIO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS PROPUESTA A FAVOR DE WALTER FERNANDO SERNA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA, actuando en nombre y representación de WALTER FERNANDO SERNA GUTIÉRREZ, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Incidente de Desacato con el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas por haber ordenado la detención de Walter Serna mediante resolución fechada 24 de noviembre de 1999.

El Licenciado Rodríguez sustenta el Incidente de Desacato en los siguientes términos:

> PRIMERO: Que el día 12 de octubre de 1999 a las 3:00 p. m. la secretaria de la fiscalía de droga, Carmen Sinisterra (sic), en compañía del inspector José Almanza, efectuaron una inspección ocular a la empresa Bell South, quienes fueron recibidos por el señor David Mulgrave, el cual recopiló la información y documentos requeridos por la fiscalía de droga mediante oficio 4731-4977, la cual reposa a foja 327-357 del expediente.
>
> SEGUNDO: Que el día 18 de octubre de 1999, a las 3:15 p. m. la secretaria de la fiscalía de droga, Carmen Sinisterra (sic) en compañía del inspector José Almanza efectuaron una inspección ocular al Hotel Costa Inn, en donde se le proporcionó por el personal del hotel, la información requerida por el funcionario de instrucción, sobre las llamadas efectuadas por el señor Jeffrey David Klein durante su estadía en dicho hotel.
>
> TERCERO: Que el día 20 de octubre de 1999, la Honorable Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la detención de Walter Fernando Serna y ordenó su inmediata libertad por esta causa.
>
> CUARTO: Que el día 24 de noviembre de 1999, el fiscal segundo especial en delito relacionados con droga, ordena la detención de Walter Fernando Serna dado que según su criterio surgen con posterioridad a la declaratoria de ilegalidad, nuevos indicios que vinculan al prenombrado con la causa criminal que se instruye"

El Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, en su contestación de traslado del Incidente de desacato, de fecha 14 de diciembre de 1999, solicitó a esta Corporación de Justicia negar la solicitud impetrada por el Lcdo. HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA dentro del presente Incidente de Desacato. Como fundamento de su opinión, citamos la parte medular que el representante del Ministerio Público expresó:

> "... Como quiera que la Acción de Hábeas Corpus no suspende la instrucción del sumario se realizan diligencias varias, entre ellas las Inspecciones Oculares del 12 y 18 de octubre mencionadas por el petente y encaminadas a obtener ciertas pruebas de suma importancia en la instrucción y solicitadas desde el mes de agosto sin poder obtener respuestas de las instituciones requeridas..
>
> El 20 de octubre de 1999 la Honorable Corte Suprema de Justicia en Pleno DECRETA ILEGAL la orden de Detención de WALTER FERNANDO SERNA GUTIÉRREZ ordenando su libertad inmediata.
>
> En esta forma queda probado en autos como todas aquellas diligencias realizadas por este Despacho con posterioridad al 24 de septiembre pasan a formar parte de la fundamentación jurídica de la nueva orden de detención proferida el 24 de noviembre del año en curso, con base en el artículo 2595 del Código Judicial, y la cual no ha sido declarada ILEGAL hasta la fecha ..."

El Pleno procede a resolver el presente incidente, previas las siguientes consideraciones.

Acota el funcionario demandado, que si bien es cierto la Corte declaró previamente la ilegalidad de la detención preventiva ordenada el día 20 de octubre de 1999 contra el señor WALTER FERNANDO SERNA GUTIÉRREZ, ello obedeció a la circunstancia única de que la acción de Hábeas Corpus no suspendió la instrucción del sumario, por lo que se realizaron inspecciones oculares a fin de obtener ciertas pruebas de suma importancia solicitadas desde el mes de agosto sin poder obtener respuestas de las instituciones requeridas, circunstancia que tenía que operar a favor del detenido.

En esta segunda ocasión, el Ministerio Público expide una nueva orden de detención contra el señor WALTER SERNA, mediante resolución calendada 24 de noviembre de 1999 (véase fojas 381-386), donde en base a nuevos elementos probatorios incorporados al sumario se observa que surgen nuevos indicios en contra del sindicado WALTER SERNA los cuales lo vinculan a la presente investigación, como son las diligencias de inspección ocular a la empresa BELLSOUTH DE PANAMA, S. A. (fs. 325-326) y HOTEL COSTA INN (fs. 360), en la que se determina que la unidad de teléfono celular 614-5226 no fue dada de baja para el 15 de febrero de 1999 como manifestó WALTER SERNA a foja 223, y que lo que existió fue una desconexión temporal del 22 al 26 de febrero del presente año por motivos de viaje, por lo que se colige que al estar el teléfono en servicio se dieron las comunicaciones entre el sindicado JEFFREY DAVID KLEIN y WALTER FERNANDO SERNA, desde el teléfono 614-5226 al Hotel Costa Inn el 15 de febrero de 1999 a las 20:56 horas.

El Fiscal de Drogas considera en estas circunstancias, que se acredita la legitimidad de la medida restrictiva de la libertad impuesta sobre WALTER SERNA, puesto que el nuevo hecho probatorio que se acopia al proceso atenúa el principio del artículo 2595 del Código Judicial.

La Corte al examinar la detención preventiva dispuesta a través de la resolución de 24 de noviembre de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, arriba a la conclusión de que existen en las sumarias, los elementos que evidencian la legitimidad de la medida aplicada, pese a que con anterioridad, una orden de detención preventiva impuesta sobre el señor WALTER SERNA, por estos hechos, había sido declarada ilegal.

Como es sabido, el artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada en materia de Hábeas Corpus; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que es viable revisar mediante la acción de Hábeas Corpus la situación procesal de un detenido a quien antes le hubiere sido resuelta una acción constitucional de la misma naturaleza (véase sentencias de 19 de octubre de 1995, 24 de noviembre de 1995 y 6 de septiembre de 1996), pero no así mediante un Incidente de Desacato.

Observa este Pleno que ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia fue interpuesto el presente incidente el día 3 de diciembre de 1999, y para el día 22 de octubre del presente año el proceso constitucional de Hábeas Corpus a favor de Walter Serna, el cual se declaró ilegal su detención, ya había sido ejecutoriado, por lo que mal podría interponerse un incidente dentro de una Acción de Hábeas Corpus que ya culminó. Lo procedente de haber nuevas evidencias, era ordenar nuevamente la detención por quien adelanta la fase sumarial, como en efecto ocurrió.

De lo expuesto se colige que el presente incidente no es la vía adecuada para atacar la supuesta infracción del artículo 2595 del Código Judicial cometida por el funcionario de instrucción, tal como lo expresa el incidentista, aunado a que el artículo 686 de la excerta legal citada que trata de las disposiciones generales sobre incidentes, es claro en señalar que los incidentes son las controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial, y en los procesos de Hábeas Corpus no se permite incidente alguno.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el Incidente de Desacato interpuesto por el Licenciado HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA contra el FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, dentro de la Acción de Hábeas Corpus propuesta a favor de WALTER FERNANDO SERNA.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CAROS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA MORENO Y FABREGA EN REPRESENTACIÓN DE AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A. CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 13. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado ADAN ARNULFO ARJONA, mediante escrito fechado 5 de enero de 2000, solicita al resto del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se le declare impedido para conocer de la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma MORENO Y FABREGA en representación de AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A. contra LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 13.

El referido escrito de impedimento, es del tenor siguiente:

"MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO
ADÁN ARNULFO ARJONA

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

Manifiesto a ustedes con todo respeto que considero estoy impedido para conocer del presente amparo de garantías constitucionales, interpuesto por la firma forense MORENO & FÁBREGA, en representación de AMERICAN INTERNATIONAL IMPORTS, S. A. contra la Junta de Conciliación y Decisión No. 13.

La razón de mi imposibilidad para conocer de esta causa es que soy amigo personal del Dr. Jorge Fábrega Ponce, quien forma parte de la firma MORENO & FABREGA, que interpone la acción que nos ocupa.

Por el motivo expuesto, solicito a ustedes declaren legal el impedimento que manifiesto y me separen del conocimiento del presente negocio.

Panamá, 5 de enero de 2000
(fdo) Magistrado Adán Arnulfo Arjona"

Para resolver la citada solicitud, se debe considerar que respecto al conocimiento, en particular, de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales por parte de magistrados y jueces, únicamente constituirá impedimento el ser pariente de las partes o de sus apoderados dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o, haber participado en la expedición del acto. Ambas causales contempladas en el artículo 2619 del Libro IV del Código Judicial.

En base a lo que se deja expuesto y a la circunstancia manifestada por el Magistrado Arjona, a juicio del resto del Pleno de la Corte, no es procedente su separación del conocimiento de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales impetrada.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO ES LEGAL el impedimento

manifestado por el Honorable Magistrado ADAN ARNULFO ARJONA y DISPONE que continúe conociendo del caso.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A ELITZA CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON Y OSCAR CEVILLE POR DELITO CONTRA LAS LIBERTADES POLÍTICAS CONTRA, LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, DENUNCIA INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS GUILLERMO MORALES, MARIA CARRILLO BRUX Y MIGUEL ANTONIO BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Procuraduría General de la Nación con Vista No. 37 del 28 de octubre de 1999 ha enviado al PLENO DE LA CORTE SUPREMA, para su valoración legal, el expediente contentivo de la denuncia presentada por los licenciados Guillermo Morales, María Carrillo Brux y Miguel Antonio Bernal contra los licenciados ELITZA A. CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON, OSCAR CEVILLE, ROBERTO WILL GUERRERO, RICARDO ALEMAN, JOSE DE LA CRUZ BERNAL y NELSON ROJAS AVILA, por la presunta comisión de delitos contra las libertades políticas, contra la personalidad jurídica del Estado, y usurpación de funciones públicas.

El Procurador General de la Nación concluyó su Vista señalando que, a su juicio no se comprobaron los cargos formulados contra los denunciados, por lo que considera que la encuesta penal debe ser cerrada con un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal. No obstante, señaló que, como quiera que por imperativo de la Ley No. 49 de 24 de octubre de 1999 los licenciados OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF y ELITZA CEDEÑO dejaron de ser Magistrados de la Corte, la Asamblea Legislativa perdió la competencia para conocer el presente negocio y recomienda al Pleno que decline el conocimiento de estas sumarias ante la esfera circuital, para que el tribunal jurisdiccional a quien corresponda decida la situación jurídica de todas las personas que aparecen denunciados (fs. 44).

Esta Corporación comparte el criterio del Ministerio Público en cuanto a que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para conocer el presente negocio, dado que los señores OSCAR CEVILLE, MARIBLANCA STAFF y ELITZA CEDEÑO dejaron de ser Magistrados titulares de la Corte, al igual que ROBERTO WILL GUERRERO, JOSE DE LA CRUZ BERNAL y RICARDO ALEMAN dejaron de ser sus suplentes personales, por mandato del artículo 28 de la Ley 49 de 24 de octubre de 1999. Sin embargo, a pesar de que la competencia para conocer esta denuncia corresponde a funcionarios de la esfera circuital, debido al estatus actual de la mayoría de los denunciados, esta Corporación advierte que en el caso de la licenciada ELITZA CEDEÑO el conocimiento del caso debe ser asumido por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte, en virtud de lo dispuesto por el numeral primero del artículo 95 del Código Judicial, puesto que la misma actualmente ocupa el cargo de Magistrada del Primer Tribunal Superior de Justicia, como consta en la certificación y copia de nombramiento incorporada a este expediente por la Secretaría General de la Corte.

Por tanto, el Pleno procede a declinar el conocimiento de este negocio a la Sala Segunda de lo Penal de esta Corporación para que conozca y decida lo

pertinente en cuanto a las acusaciones que se hacen contra la Magistrada Elitza Cedeño y para que disponga las declinaciones que estime procedentes en relación a los otros denunciados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente denuncia y, DECLINA la competencia del presente negocio a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Adán A. Arjona L. solicitó que se le separe del conocimiento de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, en representación de HOTELERA EL PANAMÁ, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 21 de octubre de 1999, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La manifestación de impedimento mencionada se expone en los siguientes términos:

> "Debo manifestar a ustedes que estoy impedido para conocer de la presente demanda, porque, antes de ingresar a esta Corporación de Justicia, formé parte de la firma forense ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, abogados del amparista en este caso.
>
> Esta manifestación de impedimento se fundamenta en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, que literalmente preceptúa, en lo pertinente:
>
> ARTÍCULO 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 13. Estar vinculado el Juez o Magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión".

En esta jurisdicción el precepto aplicable es el artículo 2619 del Código Judicial que a continuación se transcribe:

> "Artículo 2619: Los magistrados y jueces que conozcan esta clase de asuntos se manifestarán impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de

las partes o de sus apoderados o hayan participado en la expedición del acto".

Aún cuando la causal invocada no está contemplada expresamente, el Magistrado Arjona ha afirmado que formó parte de la firma forense apoderada de la amparista, hecho que, tratándose de una persona jurídica, equivale a haber promovido la demanda. Ante esta realidad, debe declararse el impedimento manifestado, observando el principio de transparencia que debe regir las actuaciones judiciales.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL, el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Adán A. Arjona L., en la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán en representación de Hotelera El Panamá, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 21 de octubre de 1999, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA POR DESACATO PROMOVIDA POR LA LICENCIADA NORA SANTA DE SANCHEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada NORA L. SANTA DE SANCHEZ concurre ante el Pleno de esta Corporación para formalizar QUERELLA POR DESACATO contra el Director de la Policía Nacional, CARLOS BARES, por negarse a cumplir una orden impartida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En los hechos que fundamentan esta querella se expresa que, mediante sentencia de 23 de agosto de 1999 dictada en grado de casación, se condenó a la Policía Nacional a responder subsidiariamente por el daño que se le ocasionó en el ojo al señor DIEGO LOBON BALTAN, por parte del agente ALFREDO SUGAR. Sin embargo, alega que el Director Barés, luego de haber tenido conocimiento de la sentencia, se niega a pagar los DOSCIENTOS NUEVE MIL DOLARES a que fue condenado. En consecuencia, se solicita que se le conmine a cumplir la orden impartida por los tribunales de justicia.

Según se aprecia, en este caso mediante una querella interpuesta ante el Pleno de la Corte, se gestiona el cobro de una indemnización a la que fue condenado el Estado, en virtud de sentencia judicial, dictada a raíz de una lesión que le causó un servidor público a un particular.

Evidentemente esa no es la vía para obtener la ejecución de este tipo de resoluciones judiciales. Es el Juez de la causa quien debe enviar copia autenticada de la sentencia condenatoria al Ministerio de Economía y Finanzas o al representante legal de la entidad respectiva para que proceda a darle el debido cumplimiento. La ley regula este procedimiento, así como lo pertinente

cuando, en caso de que se hayan realizado las gestiones correspondientes, no se hubiese satisfecho el pago de la obligación líquida. Veamos lo que sobre el particular dicen los artículos 1033 y 1034, incluidos en la sección 3a. ("Ejecución contra el Estado"), Capítulo VI, Título VIII, Libro II del Código Judicial:

> "ARTICULO 1033. Si la sentencia en la que se condena a pagar una suma de dinero ha sido dictada contra el Estado, el Municipio o cualquier otra entidad descentralizada, autónoma o semiautónoma, el Juez enviará copia autenticada de ella al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, o al representante legal de la entidad de que se trate, para que proceda a darle cumplimiento, si está dentro de sus facultades. Si no lo está, la autoridad a quien haya sido comunicada la sentencia, dará cuenta de ella dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la comunicación del Juzgado, al Consejo de Gabinete o al Consejo Municipal o a la corporación correspondiente, según el caso, para que disponga lo conveniente a fin que el fallo sea cumplido.
>
> Si transcurrido un año desde la fecha en que se envió la comunicación, no se ha dado cumplimiento a la sentencia, el Tribunal solicitará por conducto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la República, al Alcalde del Distrito o al Presidente de la Corporación de que se trate, que se disponga lo necesario para el cumplimiento de aquélla.
>
> ARTICULO 1034. Si a pesar de estas gestiones, hubiese transcurrido más de tres años de la ejecutoria de la resolución que decreta la ejecución y no se hubiese satisfecho una obligación líquida, el acreedor podrá solicitar al Juez que haga saber al Banco Nacional que debe poner, de la cuenta del Estado o de la institución correspondiente, a la orden del mismo juzgado, una suma equivalente al monto de la ejecución, a lo que debe proveerse dentro del plazo de un mes. Confirmada por el Banco Nacional la disponibilidad de la suma, el juez librará orden de pago a favor del acreedor."

Por las consideraciones expuestas, la querella por desacato interpuesta contra el Director de la Policía Nacional resulta improcedente para efectos de ejecutar la sentencia judicial que le impone a la Policía Nacional la obligación de pagar, subsidiariamente, la indemnización por el daño que uno de sus miembros le ocasionó a DIEGO LOBON BALTAN.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA POR IMPROCEDENTE la QUERELLA POR DESACATO promovida por la Licenciada NORA SANTA DE SANCHEZ contra EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ADÁN ARNULFO ARJONA, EN LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA LOS ARTS. 1, 3, 5, 8, 15, 28, 29, 30, 31 Y 32 DE LA LEY 49 DE 24 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J.

DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito calendado 4 de enero de 2000, el Magistrado ADÁN ARNULFO ARJONA ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Licdo. CARLOS EUGENIO CARRILLO, en representación de MIGUEL BUSH RÍOS, contra la Ley N° 31 de 1999, que dentro de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Quinta, de Instituciones de Garantía.

La solicitud del Magistrado ARJONA se fundamenta en que, durante la discusión pública sobre la creación de la Sala Quinta, expresó su punto de vista técnico, señalando que la consideraba innecesaria, inconveniente y onerosa.

Ahora bien, el artículo 2562 del Código Judicial regula las causales de impedimento en materia de inconstitucionalidad:

1. El parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, con el demandante o su apoderado;

2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; y,

3. Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad interés en la decisión del caso.

Como quiera que la manifestación de impedimento del Magistrado ARJONA no encuentra sustento jurídico en las precitadas causales de impedimento, el Pleno considera que no es viable acceder a lo solicitado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ADAN ARNULFO ARJONA y DISPONE que siga conociendo del caso.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO FERNANDO BASURTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UN (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema que se le declare impedido y, en consecuencia, se le separe del conocimiento de la Demanda de Inconstitucionalidad formulada por el licenciado FERNANDO BASURTO, en representación de la POLICÍA NACIONAL, contra la Resolución de 23 de agosto de 1999, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado COLLADO T., fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "...
> Como quiera que esa resolución fue suscrita por mi persona, en mi condición de Magistrado integrante de la Sala Penal, de conformidad con lo señalado en el numeral segundo del artículo 2562 del Código Judicial solicito que se me declare impedido para el conocimiento de la presente causa.
> ... "

El Pleno observa que el artículo aludido por el Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T.., pertenece a las normas especiales de impedimentos que establece el artículo 2562 en el numeral 2 , para las demandas de inconstitucionalidad, por lo que procede el impedimento solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento del Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., para actuar en la Demanda de Inconstitucionalidad presentada a favor de POLICÍA NACIONAL, contra la Resolución de 23 de agosto de 1999, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar a un Magistrado Suplente que sea elegido mediante sorteo, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifiquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA FORMULADA POR LOS LICENCIADOS IRENE MORA VALDEZ Y EMILIO ROYO LINARES EN REPRESENTACIÓN DE MARIA CECILIA MARTÍNEZ VALENCIA, CONTRA LA MAGISTRADA HAYDEE PAOLO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los licenciados IRENE MORA VALDEZ y EMILIO ROYO LINARES presentaron escrito ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual promueven, en nombre y representación de MARIA CECILIA MARTÍNEZ VALENCIA, formal queja contra la Magistrada del Tribunal Superior de Trabajo, licenciada HAYDEE PAOLO "con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Nacional, ... a causa de la MORA JUDICIAL en que viene incurriendo desde hace aproximadamente un año".

Esta Superioridad procedió a darle al escrito presentado el trámite de queja previsto en el Capítulo IX, Título XII del Libro I del Código Judicial referente a las correcciones disciplinarias y en virtud de ello, mediante

providencia de diecinueve (19) de abril de 1999, el sustanciador dispuso llamar a los quejosos para que se notificaran si a bien lo tenían, de los cargos formulados contra la funcionaria acusada presentandose ante la Secretaría General de la Corte Suprema la licenciada IRENE MORA VALDES a fin de cumplir con dicho trámite, como se observa a fojas 8-9.

Posteriormente se corrió traslado de la queja a la Magistrada HAYDEE PAOLO (f. 12-14), quien oportunamente remitió su informe de conducta.

Siendo ésta la situación jurídica, advierte el Pleno que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 288 y 289 del Código Judicial y por ello es menester proceder al examen de la queja planteada a fin de determinar si, a tenor del artículo 290 del Código Judicial, procede imponer una corrección disciplinaria o por el contrario declarar que no hay lugar a ello.

En primer lugar, se observa que la queja de los licenciados IRENE MORA VALDES y EMILIO ROYO LINARES se refiere a la supuesta mora judicial en que ha incurrido la Magistrada HAYDEE PAOLO, al no resolver en el término de un año la apelación de la sentencia proferida dentro del proceso laboral que interpusiera la representada de los quejosos -MARÍA CECILIA MARTÍNEZ VALENCIA- contra KANELLOS KARNAKIS y SOFÍA DE KARNAKIS ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 16.

Afirman los quejosos que no existe razón aparente para la mora judicial de la Magistrada PAOLO "pues manifestó hace meses que no podía fallar porque 'tenía mucho trabajo con expedientes en su Despacho'" y que con su demora la Magistrada PAOLO "está REVICTIMIZANDO a la Víctima, y tirando por calle e ignorando su violación al Principio de la Economía Procesal". Sostienen que "no existe justificación RACIONAL alguna en dilatar una apelación, cuando por desgracia, esta pobre campesina necesita utilizar su dinero TRABAJADO Y GANADO PERO QUE JAMÁS LE FUE ENTREGADO EN SUS 15 AÑOS DE TRABAJO. La excusa que dió (sic) la Magistrada PAOLO hace daño a la Imagen (sic) del Tribunal, a la inteligencia de los abogados y de quienes sabemos que es un 'actuar muy particular'. La expresión que virtió (sic) la Magistrada PAOLO es sumamente vaga y resulta poco feliz desde el punto de vista objetivo, laboral, técnico y tribunalicio"; "no queremos pensar que pareciera que se esperan 'filustrías', ahora en el Tribunal Superior de Trabajo, al esperar nuevamente a la Audiencia Penal Ordinaria, para que se FALLE el Caso Laboral, lo cual crearía suspicacia, pues estaríamos en igual posición tal como ocurrió con la Resolución de la Junta de Conciliación y Decisión N° 16, hace exactamente un año".

Corrido el traslado a la Magistrada PAOLO para que rindiera su informe de conducta dentro de la presente queja, ésta negó haber sostenido conversación con los apoderados de la demandante respecto al estado del proceso, por lo que en ningún momento pudo manifestarles que tenía mucho trabajo con expedientes en su despacho y que por ello no se fallaba el proceso. Agregó que ella sólo puede apreciar lo que consta en el proceso y no puede referirse a la actuación de las Juntas de Conciliación y Decisión N° 16 dentro del proceso promovido por MARÍA CECILIA MARTÍNEZ contra KANELOS KARNAKIS y SOFÍA KARNAKIS; que al modificarse el Código de Trabajo por la Ley 44 de 1995 fueron creadas cinco nuevas Juntas de Conciliación y Decisión lo que incrementó sensiblemente el ingreso de procesos al Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, por lo que estableció en su despacho un sistema de control de los procesos que ingresan para fallar, consistente en la clasificación de procesos para resolvcer en el estricto orden de entrada, salvo los procesos que por disposición de Ley deben ser resueltos de forma inmediata, como los abreviados, los secuestros, las ilegalidades de huelga, conflictos de competencia, etc.. Explica la Magistrada PAOLO que además se les da prioridad a aquellos procesos que hayan incurrido en alguna causal de nulidad, se ha omitido algún trámite o se requiere la práctica de alguna prueba y que el proceso de MARÍA CECILIA MARTÍNEZ se encuentra en el número 17 de los casos pendientes para fallar, por lo que existen 16 procesos que ingresaron con anterioridad al suyo "que también tienen derecho a que sus causas sean resueltas, por lo que la suscrita no puede darle prioridad, sin una causa justificada, a su proceso, máxime cuando el expediente que reposa en nuestro

despacho consta de 550 fojas y se demandan prestaciones por un monto de B/118,695.48. Por último, la Magistrada PAOLO aclara que:

> "... contrario a lo que señalan los quejosos en su escrito, en el proceso consta que a la Lic. Irene Mora le precluyó el término para interponer recurso de apelación, por lo que resulta incierto que hubiera apelado por razón de la cuantía de la condena.
>
> No obstante lo anterior, la Lic. Mora ha pretendido, tanto en el escrito de oposición a la apelación, como en los escritos que ha presentado con posterioridad, que este Tribunal le practique pruebas testimoniales y periciales con el propósito de verificar los daños que tiene la víctima debido a la privación de la libertad, a fin de que se finiquite y se aclaren exactamente los daños y la suma correcta a pagársele.
>
> Sin embargo, nuestro despacho no ha considerado necesaria la práctica de tales pruebas.
>
> Del escrito de queja parece desprenderse que éste es el motivo principal de la misma, que esta Superioridad no ha procedido a practicarle las pruebas solicitadas por la Lic. Irene Mora, las cuales son de resorte exclusivo de este Tribunal.
>
> Reiteramos, que a nuestro juicio, no existe mora judicial, ya que nuestro despacho siempre ha tratado de resolver los procesos en el menor tiempo posible, no obstante, no podemos darle prioridad a un proceso sobre otros que ingresaron con anterioridad y que se encuentran en igual situación de necesidad que la poderdante de los Licenciados Irene Mora Valdés y Emilio Royo Linares." (fs. 46-47)

El Pleno advierte, en primer lugar, que las acusaciones de morosidad judicial presentada no justifican la aplicación de una sanción disciplinaria contra la Magistrada del Tribunal Superior de Trabajo, HAYDEE PAOLO. Ello es así por cuanto que la queja presentada se refiere, por un lado, a supuestas irregularidades en el proceso seguido en la Junta de Conciliación y Decisión N° 16, a la no admisión de ciertas pruebas que solicitaron dentro de ese proceso y a la condición psicológica y médica de su representada, lo cual no guarda relación alguna con la actuación de la Magistrada PAOLO en la segunda instancia del mencionado proceso laboral.

Por otro lado, se advierte a lo largo del confuso escrito presentado por los licenciados MORA y ROYO una serie de apreciaciones de carácter subjetivo en perjuicio de la Magistrada PAOLO y de la Junta de Conciliación y Decisión N° 16, que no encuentran sustento probatorio alguno, pues la queja no fue acompañada de ningún medio de prueba.

La Corte estima que los descargos presentados por la Magistrada PAOLO son fundados, pues, en efecto, el volumen de trabajo asignado al Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, a raíz de las últimas reformas al Código de Trabajo, se aumentó considerablemente con la creación de cinco nuevas Juntas de Conciliación y Decisión cuyas apelaciones debe conocer el Tribunal Superior.

En ese sentido, la Magistrada PAOLO ha sido muy precisa al indicar que su despacho sigue un estricto orden de fechas de entrada para resolver los expedientes que allí ingresan, según un esquema cronológico, es decir, del más antiguo que ha ingresado al más reciente, con excepción de aquellos que por ley deben ser resueltos con prioridad. Igualmente ha precisado que el proceso de MARÍA CECILIA MARTÍNEZ se encuentra en el número 16 en la lista de expedientes que esperan por ser resueltos, de manera que no es injustificada ni intencional la demora en la resolución de dicho proceso, sino que obedece a una situación de estricto orden cronológico de resolución de expedientes en dicho despacho. Siendo así, tal como indica la Magistrada PAOLO, el proceso de MARÍA CECILIA MARTÍNEZ

debe esperar su turno para ser resuelto, pues los dieciséis (16) casos que se encuentran con anterioridad a éste también merecen ser resueltos con la premura que exige la ley.

Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusión de que en el proceso disciplinario que tuvo origen con la queja presentada por los licenciados IRENE MORA VALDÉS y EMILIO ROYO LINARES contra la Magistrada del Tribunal Superior de Trabajo, HAYDEE PAOLO, no hay lugar a la aplicación de una corrección disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO HAY LUGAR A CORRECCION DISCIPLINARIA dentro de la queja presentada por los licenciados IRENE MORA VALDÉS y EMILIO ROYO LINARES, contra la Magistrada del Tribunal Superior de Trabajo, licenciada HAYDEE PAOLO, para que en proceso disciplinario se le sancionara por supuesta mora judicial; y en consecuencia, ORDENA EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General
=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

ENERO 2000

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

VALENTIN MEDINA DOMINGUEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO DE COBROS JUDICIALES DE HONORARIOS DE ABOGADOS PRESENTADO POR EDWIN ALBERTO MEDINA. ACLARACION DE LA SENTENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado EDWIN ALBERTO MEDINA D., actuando en su propio nombre y representación, ha solicitado Aclaración de la Sentencia de 29 de diciembre de 1999, dictada por esta Sala de lo Civil de la Corte, en virtud del recurso de casación interpuesto por VALENTIN MEDINA DOMINGUEZ dentro del proceso sumario de cobro judicial de honorarios instaurado por EDWIN ALBERTO MEDINA D.

La solicitud de aclaración consiste en lo siguiente:

> "1- QUE SE ACLARE COMO SE HA CONTEMPLADO QUE VALENTIN MEDINA DOMINGUEZ, RECIBIO B/.1,000.00 DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, SI LA RESOLUCION QUE LE CONCEDIA DICHA SUMA FUE DECLARADA ILEGAL MEDIANTE SENTENCIA DE 22 DE ENERO DE 1997 DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Y EN ESTA SE ORDENA RECONOCER Y CONCEDER A VALENTIN MEDINA DOMINGUEZ, B/.1,500.00 DE PENSION MENSUAL RETROACTIVAMENTE A PARTIR DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993, ACLARAR Y EXPLICAR SI NO EXISTE INCREMENTO PORQUE SE HA CONSIDERADO DE LA SUPUESTA EXISTENCIA DEL MISMO. NO EXISTE B/.1,000.00 DE PENSION MENSUAL.
>
> 2. PORQUE RAZON NO SE HA CONDENADO EN COSTAS AL DEMANDADO, SI LA LEY SOLAMENTE ESTABLECE LA BUENA FE EN EL DEMANDANTE Y NO EN EL DEMANDADO. ACLARAR Y EXPLICAR, LA LEY INDICA QUE NO HAY CONDENA EN COSTAS SOLO AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
>
> 3. ACLARE SI NO EXISTE B/.1,000.00 DE PENSION MENSUAL Y NO EXISTE INCREMENTO DE B/.500.00 MENSUALES, ELLO FUE DECLARADO ILEGAL Y POR ELLO NO EXISTE, PORQUE SE CONTEMPLA LA EXISTENCIA." (fs. 268).

Como se puede apreciar de lo expresado en el escrito previamente transcrito, únicamente el segundo punto guarda relación con lo dispuesto por el artículo 986 del Código Judicial, en cuanto a los aspectos de una sentencia que pueden ser aclarados, pues se refiere al tema de las costas.

Sobre el particular se le solicita a esta Sala que aclare porqué razón no se ha condenado en costas al demandado, si la ley solamente establece la buena fe en el demandante.

La Sala debe señalar que esta apreciación del solicitante no es correcta, pues la ley no excluye a ninguna de las partes litigantes en favor de las cuales el juez pueda decidir la exoneración de costas, en razón de considerar que ha actuado con evidente buena fe. En este sentido los artículos 1057 y 1060 disponen:

> "ARTICULO 1057. En toda sentencia o auto se condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie, salvo que a juicio del Juez haya actuado con evidente buena fe, sobre lo cual se motivará expresamente en la resolución. En ese caso de buena fe, el Juez podrá condenar sólo a los gastos del proceso.
> ...
> ARTICULO 1060 ...
> En caso de apelación contra alguna sentencia, el superior condenará en las costas de ambas instancias si revocare la sentencia

recurrida, salvo que se encuentre que haya litigado con evidente buena fe la parte contra la cual se pronuncie, caso en el cual podrá condenar sólo a los gastos del proceso ..."

Debido a que el texto de la ley es claro, en cuanto al tema de la exoneración de costas a cualquiera de los litigantes contra quien se pronuncie la resolución y que haya actuado de buena fe, a juicio de la Sala en este caso no hay nada que aclarar respecto a la sentencia dictada por esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de Aclaración de Sentencia formulada por el licenciado EDWIN ALBERTO MEDINA D.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala de lo Civil
Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION

APELACION INTERPUESTA AL RESTO DE LA SALA POR VIRGILIO PICOTA CONTRA LA RESOLUCION DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR EN EL RECURSO DE REVISION PROPUESTO CONTRA EL AUTO N° 2746, DEL 18 DE OCTUBRE DE 1999 EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA, S. A. CONTRA VIRGILIO PICOTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos R. Ayala, en representación del señor VIRGILIO PICOTA, ha interpuesto recurso de revisión contra el Auto N° 2746 dictado por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil el 18 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario en etapa de ejecución de sentencia propuesto por VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA, S. A. contra la parte recurrente.

El negocio ingresó a esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Magistrado Sustanciador, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Judicial, lo rechazó de plano mediante resolución fechada 18 de noviembre de 1999.

El recurrente interpuso recurso de apelación contra esa decisión ante el resto de los Magistrados de la Sala Civil, apelación que se procede a decidir.

El Magistrado Sustanciador consideró que el presente recurso es manifiestamente improcedente, en vista de que la resolución atacada no es susceptible de impugnación mediante las causales de revisión a las cuales parece referirse el recurrente en su libelo; puesto que, tratándose de los autos de los que habla el artículo 1190 del Código Judicial, dentro de los cuales se encuentra la resolución atacada, sólo cabe la revisión con fundamento en la causal contenida en el ordinal 8 del artículo 1189 ibidem, que no ha sido invocada en esta oportunidad.

Por su parte, el recurrente al sustentar su apelación aclara, en primer lugar, que la causal en la cual fundamenta su recurso corresponde al numeral 7 del artículo 1189, que contempla la posibilidad de revisar una resolución, "Si

existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso".

En segundo lugar, sostiene que no existe ninguna disposición legal que prohíba expresamente la revisión de autos con fundamento en una causal distinta a la que señala el ordinal 8 del artículo 1189, sobre todo cuando se trata de resoluciones que impiden la defensa de las partes, como sucede en el presente caso. En abono a lo anterior señala que nuestra ley de procedimiento, "en general asume como semejantes las sentencias ejecutoriadas y los autos que pongan fin al proceso pues el efecto jurídico de ambos es el mismo y consiste en que no admiten recurso ordinario alguno"; razón por la cual contra ambos cabe la interposición de los recursos extraordinarios que la ley otorga, lo que no puede hacer distinción entre uno y otro pues ello equivaldría como ocurre en el presente caso, a impedir la defensa del afectado con dichos autos, contraponiéndose al espíritu de la Ley en materia de recursos extraordinarios." (Fs. 18-19)

Al revisar el libelo del recurso de revisión la Sala observa que, efectivamente, tal como señalara el Magistrado Sustanciador en la resolución apelada, no se incluyó ninguna causal de revisión; pero, de los hechos que le sirven de sustento, y tal como lo indica el propio recurrente en su escrito de apelación, debe entenderse que se trata de la causal contenida en el numeral 7 del artículo 1189 del Código Judicial.

Ahora bien, la resolución que se pretende revisar es el Auto N° 2746 de 18 de octubre de 1999, dictado por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante el cual se ordenó la ejecución de la sentencia N° 48 de 24 de junio de 1998, que decidió el proceso ordinario instaurado por VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA, S. A. contra el señor VIRGILIO PICOTA.

El artículo 1190 del Código Judicial establece que pueden ser objeto de recurso de revisión, además de las sentencias en los casos a los que se refiere el artículo 1189 ibidem, "... los autos que en proceso ordinario, oral o ejecutivo, ejecuten sentencias, libren mandamientos de pago, decreten embargos, ordenen o aprueben remates"; por lo que en principio, la resolución atacada sería recurrible por su naturaleza mediante este recurso extraordinario.

No obstante, esa misma disposición legal aclara que sólo podrá pedirse la revisión de dichos autos, "En los casos a que se refiere el ordinal 8 del artículo anterior" que, a su vez, señala lo siguiente:

> "ARTICULO 1189. ...
> 8. Si hubo colusión en el proceso en perjuicio de acreedores de una de las partes o si la resolución se fundó en actos o contratos reales o simulados, celebrados en fraude de acreedores; o hubo colusión entre los apoderados de las partes. En estos casos se requiere que tales hechos hayan sido declarados en sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; ..."

En estas circunstancias, le asiste razón al Magistrado Sustanciador al concluir que para que procediera la admisión del presente recurso, era necesario que la revisión estuviese fundamentada en el citado numeral 8 del artículo 1189 del Código Judicial; criterio que ha sido sostenido reiteradamente por esta corporación de justicia. (Confrontar resolución fechada 12 de agosto de 1998, Registro Judicial, agosto 1998, págs. 251-253; resolución de 13 de octubre de 1998, Registro Judicial, octubre 1998, págs. 273-277)

Por tanto, se debe confirmar la decisión apelada porque se ajusta a derecho.

Por las razones expuestas, el resto de los Magistrados que integran la SALA DE LO CIVIL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución proferida por el Magistrado Sustanciador el 18 de noviembre de 1999, que rechaza de plano el recurso de

revisión presentado por el Licenciado Carlos R. Ayala, en representación del señor VIRGILIO PICOTA, contra el Auto N° 2746 de 18 de octubre de 1999, dictado por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario en etapa de ejecución de sentencia instaurado por VIDRIOS Y ESPEJOS AMERICA, S. A. contra la parte recurrente.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

APELACIÓN INTERPUESTA POR DIAMOND CAMELLIA, S. A. Y MITSUI O.S.K. LINES CONTRA EL AUTO N°. 320 DEL 9 DE JULIO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE LUZ MARINA REYES AGNES MOLINA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense CARREIRA PITTI P. C. ABOGADOS, en su condición de Gestores Oficiosos de LUZ MARINA REYES Y OTROS ha promovido demanda ordinaria marítima contra MITSUI O. S. K. LINES y DIAMOND CAMELLIA, S. A., y ha promovido igualmente medida cautelar de secuestro sobre la nave M/N BIG SKY de registro panameño, derivado de los daños y perjuicios causados a los sobrevivientes, miembros de la tripulación; así como a los herederos sobrevivientes de los tripulantes que perdieron la vida en el hundimiento de la nave SEA PROSPECT. Presentada la demanda con los documentos que estima como prueba para fundamentar su pretensión, así como la fianza que, por razón de la medida cautelar propuesta, previene el Código de Procedimiento Marítimo, el Juez Marítimo resolvió decretar el secuestro mediante Auto N° 320, de 9 de julio de 1999, resolución esta que fue objeto del recurso de apelación promovido por la firma MORGAN & MORGAN, actuando en condición de Gestores Oficiosos de las empresas demandadas contra la expresada decisión del Tribunal Marítimo.

En efecto, se aprecia del auto impugnado, visible a fojas 440-441, que el Juez, al motivar su decisión, se basó fundamentalmente, en primer término, en que los peticionarios han aportado pruebas indiciarias o "prima facie" que demuestran la legitimidad de su pretensión, y que, además, la solicitud de secuestro se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Marítimo.

El recurrente, por su parte, censura la resolución impugnada por tres razones, a saber: Primero, que el Tribunal Marítimo erró en derecho al decretar el secuestro bajo el ordinal 2 del artículo 162, que trata sobre adscribir la competencia; cuando este debió enmarcarse bajo el ordinal 1 de dicho artículo, es decir, con la finalidad de evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, empeore, grave o disipe bienes susceptibles de tal medida.

Señala el recurrente que una sociedad panameña aun sin sus dignatarios y directores residen en el país, está dentro del ambito jurisdiccional del Tribunal Marítimo, "o sea que el Juez Marítimo tiene poder o autoridad sobre ella por estar éste constituida y existir como persona jurídica bajo las leyes de la República de Panamá" (f. 509).

Segundo, que el Auto N° 320 que decretó el secuestro contra la M/N BIG SKY

infringió el artículo 18 del Código de Procedimiento Marítimo, ya que según el recurrente, los hechos que se establecen en la demanda se tratan de causas de índole laboral, por lo que escapa de la jurisdicción o competencia del Tribunal Marítimo, siendo competencia privativa de los Tribunales Laborales panameños.

Y tercero, los Gestores Oficiosos de las empresas demandadas expresan que el Auto impugnado infringió los artículos 166, 205 y 387 del Código de Procedimiento Marítimo, toda vez que el Juez Marítimo tenía la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de exponer el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde, así como establecer que los autos que emita el Tribunal deben ser debidamente motivados y expresar los fundamentos jurídicos en que se basan.

En primer lugar, el recurrente sostiene la tesis de que una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, con independencia del lugar en que se encuentren domiciliados la misma sociedad o sus directores o dignatarios, se rije por las leyes de la República de Panamá, siendo, por lo tanto, innecesario discutir la jurisdicción del Tribunal Marítimo, jurisdicción que en todo caso tendrá por razón del domicilio de una de las sociedades demandadas. La Sala estima que el domicilio real del demandado es lo determinante para ubicar la jurisdicción del Tribunal Marítimo, como se desprende muy claramente del artículo 17, numeral 2 del Código de Procedimiento Marítimo, en relación con el numeral 2° del artículo 164 del Código Procesal Marítimo. El secuestrante ha presentado pruebas negativas de su domicilio en la República de Panamá, como lo son la certificación de la Caja de Seguro Social, y la relacionada con la inexistencia de Licencia comercial, que, como se sabe, se requiere para ejercer el comercio dentro de la República de Panamá (véase fojas 430 y 434). De otra parte, a foja 427, en que consta la licencia de radio, se tiene como domicilio de la sociedad DIAMOND CAMELIA, S. A. una dirección en Tokyo, Japón; y también en el directorio marítimo de LLoyds's aparece la mencionada sociedad DIAMOND RAMELIA, S. A., elementos indicadores del domicilio de la sociedad, aparte del hecho, admitido por el apelante, del domicilio extranjero de los directores y dignatarios.

Es sabido que nuestro país se caracteriza por explotar su condición geográfica, en particular el centro de organización de sociedades anónimas que no operen dentro del territorio nacional, sino fuera de él. Lo importante, como antes se ha expresado, para determinar la aplicabilidad del artículo 162, numeral 2° del Código Procesal Marítimo, es atender el domicilio efectivo de la sociedad a los efectos de determinar en que circunstancias el secuestro puede ser utilizado, entre otras razones, para atraer la jurisdicción del Tribunal Marítimo, con respecto a sociedades que, organizadas en la República de Panamá, tengan su domicilio fuera de ella.

Dentro del marco señalado en el párrafo que antecede, la segunda censura consiste en cuestionar, como ya se ha dicho, que el presente caso se trata de causas de índole laboral, por lo que escapa de la jurisdicción o competencia del Tribunal Marítimo, siendo competencia privativa de los Tribunales Laborales panameños.

El artículo 18 del Código de Procedimiento Marítimo señala:

> "ARTICULO 18: Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, las acciones que surjan de las disposiciones de la Legislación Laboral de la República de Panamá, son de competencia privativa de los Tribunales Laborales panameños. Sin embargo, las acciones civiles que surjan para reclamar el resarcimiento de daños o perjuicios enmarcados en los supuestos contemplados en el artículo anterior, serán de competencia de los Tribunales Marítimos cuando las mismas ocurran como consecuencia de un accidente de trabajo causado por dolo, culpa o negligencia del empleador o de un tercero."

El Código de Procedimiento Marítimo, en efecto, ubica privativamente en las

autoridades jurisdiccionales laborales los conflictos de esa naturaleza, mas reserva la jurisdicción del Tribunal Marítimo para conocer los reclamos que, por responsabilidad extracontractual, se produzcan como consecuencia de la relación laboral.

Resulta, por lo tanto, natural que las pretensiones indemnizatorias derivadas de accidentes laborales, tengan su sede natural en la jurisdicción marítima, como ha señalado el artículo 18, arriba transcrito, del Código de Procedimiento Marítimo, y también, como ha señalado el opositor al recurso de apelación, el artículo 130, numeral 3° del Decreto-Ley n° 8, de 28 de febrero de 1998, que reglamenta el trabajo en el mar.

El Derecho Marítimo, como se sabe, es un derecho caracterizado por su internacionalización y por la existencia de reglas comunes acordadas en convenios internacionales, cuyos principios deben, a juicio de la Sala, coadyuvar en la interpretación de las normas contenidas en el ordenamiento marítimo. Uno de esos convenios es el Convenio de Bruselas de 1926. Sobre el mismo, destaca CARMEN ALONSO LEDESMA:

> "La atribución de un privilegio a las indemnizaciones debidas por los daños causados a las personas tiene lugar en el ámbito internacional en el Convenio de 1926, en el cual figura en el apartado 4 del art. 2, dentro de un epígrafe de confusa redacción en el que se agrupan distintos créditos de diverso carácter cuyo presupuesto común es la responsabilidad del deudor, sea esta contractual o extracontractual.
>
> En dicho apartado se indica, en efecto, que gozan del privilegio las indemnizaciones por abordaje u otros accidentes de navegación, así como por los daños causados en las obras de los puertos, docks y vías navegables; las indemnizaciones por lesiones corporales a los pasajeros y a las tripulaciones; las indemnizaciones por pérdidas o averías de la carga o de los equipos."
>
> (CARMEN ALONSO LEDESMA. "Los Privilegios Marítimos", Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1995, pág. 424).

Al interpretar la norma contenida en el instrumento de Derecho Marítimo Internacional, la especialista española destaca que "... la intención del legislador internacional fue la de considerar que en la expresión indemnizaciones por lesiones corporales quedaban incluidas también las debidas por causa de muerte. Y ello no sólo porque de no haber sido así lo normal es que se hubiera justificado el cambio de actitud respecto a lo mantenido en proyectos anteriores, sino también porque resultaría carente de sentido, además de falto de equidad, circunscribir el privilegio únicamente a las indemnizaciones por lesiones excluyendo de la garantía, en cambio, las debidas en caso de muerte". (CARMEN ALONSO LEDESMA. "Los privilegios Marítimos", Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1995, pág. 427).

No obstante, el análisis que precede deberá realizarse por el Tribunal Marítimo, cuando decida sobre el fondo de la controversia, momento ése que no puede trasladarse al momento procesal en el cual se encuentra la Sala, con motivo de la resolución del recurso de apelación interpuesto.

La solicitante del secuestro presentó como pruebas de la ausencia de actividad económica del demandado en la República, la inexistencia de una licencia comercial, de declaraciones de renta, de pago de impuestos municipales, certificaciones del Ministerio de Trabajo, de la Caja de Seguro Social, que acreditan que la sociedad DIAMOND CAMELLIA, S. A. no ejerce actividad en el territorio de la República de Panamá, por lo que se cumple con el requisito que establece el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 8ª de 1982, referente a que el secuestro tendrá como finalidad adscribir la competencia cuando el demandado está fuera de la jurisdicción de Panamá, aparte de que las anteriores pruebas que

tienen una connotación negativa, han de complementarse con otras que acreditan el domicilio de la sociedad DIAMOND CAMELIA, S. A. fuera de la República de Panamá, y concretamente en Tokyo, Japón.

El tercer argumento del apelante hace referencia a la valoración equivocada de las pruebas con arreglo a los parámetros, que, para su valoración, estatuye la norma procesal marítima, extremos éstos que no pueden ser analizados por el Tribunal Marítimo, a la luz de la restricción qure le impoone su artículo 483.

Aprecia la Sala, que existe, en efecto, las pruebas prima facie o bien en a los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Marítimo para conceder la solicitud de secuestro, y así tener la finalidad de adscribir la competencia del Tribunal Marítimo de la República de Panamá, toda vez que el representante legal de la sociedad propietaria de la nave secuestrada se encuentra, según las pruebas aportadas, fuera del territorio nacional. Además, la finalidad del secuestro no es sólo la medida precautoria, sino también la de adscribir a la competencia de los tribunales marítimos el conocimiento de los procesos que surjan dentro o fuera del territorio nacional.

Los criterios externados aquí permiten a la Sala descartar los cargos contra la resolución atacada.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, el Auto N° 320 de 9 de julio de 1999, dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del Proceso Ordinario que los señores LUZ MARINA REYES Y OTROS le siguen a DIAMOND CAMELLIA, S. A. y MITSUI O. S. K. LINES.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN CONTRA LA SENTENCIA N°. 29 DEL 26 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PESQUERA TABOGUILLA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SEIS (6) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado RUBEN E. PECCHIO OSPINO, apoderado judicial de la señora ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia N° 29 del 26 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Marítimo dentro del proceso ordinario promovido por PESQUERA TABOGUILLA, S. A. contra ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN.

La demanda se interpuso con el objeto de que se obligara a ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN, persona natural, propietaria de la nave "ARENERA JUAN DÍAZ", al pago de la suma de doce mil setecientos cincuenta balboas (B/.12,750.00) por los daños causados por embarcación de su propiedad, causados al Muelle de San Francisco, dado en concesión a la empresa demandante.

Por su parte, la demandada, por intermedio de su apoderado judicial, contestó la demanda, negando los hechos y aduciendo en su favor que la barcaza

carece de fuerza propulsora, lo que hace imposible que exista imputabilidad de sus dueños.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, el Juez Marítimo dictó sentencia en los siguientes términos:

> "1. CONDENAR a la señora ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN, portadora de la cédula de identidad personal N° E-8-13964, a pagarle al demandante PESQUERA TABOGUILLA, S. A. la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.12,750.00), en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios causado al demandante.
>
> 2. CONDENAR igualmente a la demandada, ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN, al pago de las costas por el trabajo en derecho, las cuales fijamos en la cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.1,275.00), más los intereses, gastos y demás costas del juicio, las cuales serán calculadas por Secretaría en su oportunidad.
>
> 3. NO ACCEDER a la condena en concepto de lucro cesante pedida por el actor."

Contra esta decisión se ha interpuesto el recurso de apelación que la Sala procede a resolver, previas las siguientes consideraciones.

APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

El apelante, Licenciado RUBÉN E. PECCHIO OSPINO, sostiene que la copia del Contrato N° 2-013-92 suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y Pesquera Taboguilla, S. A. no cumple los requisitos que para las reproducciones de documentos exige la Ley 8 de 1982, cuando en su artículo 288 expresamente señala que éstas deberán ser autenticadas por el funcionario o persona encargada de la custodia del original, la cual es omitida por la parte actora.

Igualmente, el recurrente sostiene que al incorporarse al proceso una copia simple, la demandante no ha acreditado de manera alguna legitimidad de personería para actuar en este proceso, además la Autoridad Portuaria Nacional no le ha cedido a la demandante los derechos para demandar.

Por otro lado, la disconformidad con la sentencia del Tribunal Marítimo se fundamenta en que la demandante para acreditar los daños y la cuantía que por dichos daños demanda, presentó junto con el libelo de ésta un documento firmado por el Arquitecto Edgar Muñoz, de fecha 9 de abril de 1996, donde señala haber inspeccionado los daños ocasionados al Muelle cuantificando los daños por DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.12,750.00), y que posteriormente en declaración jurada rendida ante el Tribunal Marítimo, el Arquitecto Muñoz se limitó a señalar que la cuantificación de los daños podría corresponder a 75% de materiales y 35% por mano de obra, sin presentarse siquiera documentos que afirmaran lo externado, aunado a que la demandante no ha probado los supuestos daños con inspección ocular, fotografías y facturas de compras de materiales.

En consecuencia, el recurrente solicita previa revocatoria del fallo apelado, se absuelva a ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN, además de que se declare temeraria la acción y se condene en costas a la demandante.

OPOSICIÓN DE LA APELACIÓN

La firma forense FONSECA Y FONSECA, en su condición de apoderados judiciales de PESQUERA TABOGUILLA, S. A., se oponen al recurso de apelación en base a las consideraciones señaladas a continuación:

Advierte el opositor referente a la validez del Contrato N° 2-013-92, suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y Pesquera Taboguilla, S. A., y

la capacidad de esta última para demandar o reclamar daños causados a un bien del Estado dado en concesión a su favor, que su validez fue claramente aceptada por el Juez de primera instancia al momento de la Audiencia Preliminar y por el propio demandado en ese instante, toda vez que el mismo fue resuelto dentro del Incidente de Nulidad por Ilegitimidad de Personería que presentó el apoderado judicial de la demandada y que fue fallado en su contra, resolución que se encuentra ejecutoriada y es ley del proceso.

Finalmente expresa el opositor en cuanto a los daños sufridos al Muelle por la Barcaza "ARENERA JUAN DÍAZ", que el capitán o el propietario de la nave tomó la decisión de acodarse a un muelle privado, sin pedir autorización, por lo que se le dieron las advertencias al mismo para que desalojaran el muelle, y que debido a la negativa se tuvo que recurrir a funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional.

POSICIÓN DE LA SALA

En primer lugar, el recurrente se refiere a que la copia del Contrato N° 2-013-92, suscrito entre la Autoridad Portuaria Nacional y Pesquera Taboguilla, S. A. , es una copia simple que no ha sido autenticada por la Autoridad Portuaria Nacional, por lo que no se acredita la legitimidad de personería para actuar en el presente proceso.

De lo anterior, la SALA advierte que este tema ya fue abordado dentro del Incidente de Nulidad por Ilegitimidad de Personería que presentó el Licenciado PECCHIO en representación de la demandada apelante, el cual es ley del proceso, razón por la cual se ha de desestimar esta objeción.

El segundo cargo al que se refiere el apelante, es decir, que la sentencia considera plenamente acreditados hechos, como es, ser concesionaria de un muelle ubicado en Boca La Caja, Corregimiento de San Francisco, y que en realidad no han sido debidamente probados conforme la Ley, está estrechamente ligado con el anterior, puesto que sostiene que en los daños reclamados no se acredita la fecha exacta de esos supuestos daños, toda vez que el Contrato N° 2-013-92 fue firmado el 13 de noviembre de 1992 y que tenía una duración de cinco (5) años a partir de su perfeccionamiento, por lo que no se ha probado que dicho contrato se encontraba vigente, lo que debió probarse con una certificación de la Autoridad Portuaria Nacional.

Es evidente que la censura a la sentencia recurrida, en parte, es por haber valorado de manera incorrecta el material probatorio, por lo que no le cabe a la Sala pronunciarse sobre este aspecto de la censura, por encontrarse dentro de la limitación que, en cuanto a la competencia para conocer y decidir el recurso de apelación en causas marítimas, consagra el ordenamiento jurídico procesal marítimo. La Sala ha podido apreciar que, en efecto, el apelante pretende que la Sala examine los criterios valorativos del Tribunal Marítimo, lo que dice relación inmediata de la postura del Tribunal Marítimo frente a la fijación de los hechos y su correspondiente peso en la solución de la controversia, aspectos éstos para los cuales claramente su competencia se encuentra restringida para la Sala, y no puede, por lo tanto, pronunciarse sobre estos aspectos contenidos en el recurso de apelación. Al analizar detenidamente los cargos contenidos en el recurso, se han expuesto las razones por las cuales toda materia relacionada con los hechos y su valoración por el Tribunal, lamentablemente deben quedar por fuera de la decisión, pues de lo contrario la Sala estaría conociendo materias, en grado de apelación, que escapan a sus facultades. Ello es así, además, porque el legislador, al diseñar el recurso de apelación en causas marítimas, estableció un sistema un tanto especial con respecto a la generalidad de los casos, tomando en cuenta que la inmediación del juzgador con la prueba presentada y valorada, se da sustancialmente en la primera instancia de estos procesos. Esta opción del legislador no es en modo alguno censurable, si restringe el derecho al recurso, pues existen otros casos en el derecho comparado en que el conocimiento del material probatorio en los recursos (el de casación, por ejemplo) queda reservado al juzgador de instancia.

A este respecto, se pronunció la Sala en sentencia de 30 de julio de 1996, en los términos que se permite transcribir:

> "Debe la Sala, como cuestión previa, determinar la competencia y sus límites, para conocer y decidir el recurso interpuesto. Por ello, debe analizar la naturaleza de la competencia que, para conocer el recurso de apelación contra las sentencias del Tribunal Marítimo, le confiere el ordenamiento jurídico procesal en la materia. Lo primero que debe reiterar la Sala, es que la competencia para conocer el recurso de apelación, viene limitado o restringido al tipo de ejercicio de la función jurisdiccional, le adscribe el ordenamiento.
>
> Es decir, la jurisdicción marítima, en caso de apelaciones contra las sentencias, viene limitada o restringida, en cuanto a la decisión, a los aspectos meramente jurídicos de la decisión apelada, y carece, por lo tanto, de competencia para pronunciarse y analizar los aspectos probatorios que han sido tomados en cuenta por el Tribunal Marítimo.
>
> En dos ocasiones, al menos, ha tenido oportunidad la Sala de pronunciarse sobre estos aspectos, mediante sentencia de 24 de febrero de 1994, y mediante sentencia de 28 de septiembre de 1995. En la primera de ellas, se expresó en los siguientes términos.
> "...
> Cuando la ley procedimental marítima señala que en esta instancia solamente pueden discutirse asuntos de derecho, significa que le está vedado al sentenciador de segunda instancia entrar a realizar cualquier análisis del elemento probatorio obrante en autos, ya se trate de apreciación o de valoración. Es evidente que la apelación en materia marítima es mucho más restrictiva que la casación porque no contempla los errores probatorios, lo cual a todas luces resulta lógico debido a esa percepción directa que tiene el juez marítimo con la prueba que le permite formarse un mejor concepto sobre el poder demostrativo de la misma ..."
> (Registro Judicial, Julio de 1996, pág. 179).

La segunda de las sentencias citadas expresó, en lo pertinente, lo que a continuación se transcribe:

> "...
> 1. La apelación, en materia marítima, es controladora no renovadora, todo ello, como consecuencias del mandato claro y expreso contenido en la ley procedimental marítima en el sentido de que el proceso marítimo ha de ser sustanciado y resuelto <u>fundamentalmente</u> en la primera instancia, lo cual guarda una estrecha relación con el principio de la oralidad. Dicho principio descansa en la concentración y en la inmediación.
>
> 2. Dentro de los principios que informan el proceso marítimo se encuentra el de que "Los juicios marítimos serán de única instancia, pero, admitirán, el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente".
>
> Al estudiar las normas que contemplan la apelación (Arts. 481 hasta el art. 492) nos encontramos ante una excerta legal que es la piedra angular en el ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil. Se trata del artículo 483, cuya letra es así:
>
> "ARTÍCULO 483: En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia."
>
> La norma legal en comento es diáfana y no dejas dudas al respecto: en la apelación marítima, como regla general, no se contemplan los

errores probatorios (de contratación o de valoración), dada la percepción directa que tiene el juzgador marítimo con la prueba.

3. El principio genérico al que hemos hecho alusión no es óbice para esta Sala, puesto que, si al momento de revisar las causas marítimas observa que se presentan errores en la labor de contastación de los hechos realizada por el tribunal a-quo, en donde los mismos (errores) tienen como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la norma de derecho establezca en beneficio de alguna de las partes, a dicho estudio se adentrará. La labor que realiza la Sala en estos casos marítimos es individual."

(Registro Judicial. Septiembre de 1995. Págs. 172-173)

Expuestas las consideraciones que anteceden, relativas a las restricciones que se le han impuesto a la Sala por el ordenamiento procesal marítimo, se procederá a analizar las otras causas que sean estrictamente de derecho.

Referente a los daños sufridos al muelle y reclamados por la empresa demandante, al Capitán de la nave **ARENERA JUAN DÍAZ** se le advirtió que su abordaje era perjudicial al muelle, toda vez que el tamaño y tonelaje no era apta para atracar, y que un documento de 9 de abril de 1996 firmado por el Arquitecto **EDGAR MUÑOZ** dirigido a **PESQUERA TABOGUILLA, S. A.** cuantifica los daños por un costo total de B/.12,750.00. La Sala advierte que el artículo 1645 del Código Civil ha señalado que existe responsabilidad por la infracción de los deberes de vigilar o de elegir las personas que, a su nombre o por su conducto actúa, siendo el presente caso el de la propietaria de la nave **ARENERA JUAN DÍAZ**, señora **ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN**, es decir, una responsabilidad "cuasiobjetiva"; aunque nuestro ordenamiento jurídico postula en esta materia responsabilidades por actos a quienes se debe vigilancia, en los casos señalados en el artículo 1645 del Código Civil, en adición a ello, establece también una responsabilidad objetivada en razón de que algunos deben responder por los hechos de aquellas personas que se encuentren bajo su supervisión, y han de acreditar que en esta obligación "in vigilando" desplegaron toda la diligencia que el caso ameritaba, lo que contradice la actuación del Capitán a quien se le imputa la responsabilidad del accidente.

De lo anterior se colige una presunción de culpa de las personas a quienes los liga una determinada relación, y que produce una inversión en la carga de la prueba, para acreditar que actuó de manera diligente, toda vez que la responsabilidad se presume que existe por culpa, pero que el responsable indirecto puede desprenderse de su responsabilidad, probando que la persona que causó el daño actuó en forma culposa y dolosa, y, además, que el responsable indirecto actuó con la debida diligencia para prevenir el daño.

La **SALA** observa que el Tribunal Marítimo utilizó acertadamente un criterio razonable en otorgar la responsabilidad de los daños producidos al muelle por parte de la barcaza **ARENERA JUAN DÍAZ**, toda vez que la demandante probó la existencia del daño, la existencia de un criterio de imputabilidad de la señora **ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN**, propietaria de la nave, y una relación de causalidad entre el daño y la conducta culposa de la demandada, aunado a que la empresa demandante utilizó toda la diligencia para prevenir el daño al muelle, como son las advertencias hechas al Capitán de la barcaza **ARENERA JUAN DÍAZ**.

El Tribunal Marítimo, sobre la responsabilidad de la barcaza que causó el daño, señaló:

"...

Es la propietaria de la nave, a través de su personal, quien ha debido tomar las precauciones y actuar con la pericia que exigían las circunstancias, para evitar o precaver que la colisión no ocurriera, cosa que no ha sido probada; sino que existe el hecho claro, que el daño del muelle, lo causó la Barcaza de propiedad de la demandada, y que se causó por culpa o negligencia de la

propietaria de la barcaza o de sus empleados." (Fs. 142-143)

Por tanto, la Sala concluye que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, toda vez que se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N° 29 de 26 de agosto de 1999 dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario marítimo instaurado por PESQUERA TABOGUILLA, S. A. contra ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. APELA CONTRA LA SENTENCIA NO. 20, DEL 24 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, S. A. Y/O COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES-PANAMA-, S. A. Y/O SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS MARITIMAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALA. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

Vistos:

La representación judicial de COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. en el Proceso Ordinario Marítimo que le sigue a COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, S. A. y/o COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES-PANAMA-, S. A. y/o SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS MARITIMAS, S. A., ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo el 24 de agosto de 1998, mediante la cual se desató el juicio en primera instancia.

La resolución cuestionada ante la Sala absolvió a los demandados y condenó a la parte demandante al pago de las costas fijadas en B/.10,878.96, más los gastos provocados por el proceso.

Antes de adentrarnos en el análisis de los planteamientos empleados por la parte actora para sustentar la alzada, es preciso poner atención, tanto a lo medular de lo pretendido con la demanda, como a lo sustancial del fallo dictado por el Tribunal Marítimo.

Lo pretendido por COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. en este proceso consiste en que se condene a las demandadas a que le paguen la suma de B/.97,139.60, cantidad que, en su calidad de aseguradora de la carga embarcada, reconocíole al consignatario de la misma por la pérdida de una parte sustancial de la mercancía transportada, hecho que, sostiene, ocurrió durante el período dentro del cual los bienes se encontraban bajo la custodia del cargador. La compañía aseguradora ha hecho uso en este caso de la acción subrogatoria que la ley le confiere para demandar, de los responsables de la pérdida, el reembolso de la indemnización pagada al asegurado.

La sentencia del Tribunal Marítimo que, como se ha indicado, culminó con la absolución de todos los demandados, abordó la controversia advirtiendo que dos de las compañías demandadas (SUDAMERICANA DE VAPORES-PANAMA, S. A. y COMPAÑIA

SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS y MARITIMAS, S. A.) carecían de legitimidad pasiva para que se les pudiese tener como partes en este juicio, pues ambas resultaban ajenas a la celebración del contrato de transporte del cual emanan las obligaciones reclamadas en el proceso.

Así mismo, el Tribunal encontró que, conforme al contrato celebrado, la ley sustancial aplicable es la chilena; legislación donde el Código de Comercio ha incorporado las Reglas de Hamburgo para regular esta clase de transacciones y controversias.

Se reconoce en la sentencia apelada que obra en autos prueba suficiente que acredita la existencia del contrato de transporte de la mercancía. También se acepta en esta resolución que, en el contrato o en su evidencia representada por el Conocimiento de Embarque emitido, fue descrita la mercancía a ser transportada, así como su cantidad; datos corroborados por la lista de empaque en el denominado Bill of Sell, donde se consignan 192 bultos de zapatillas con un valor que, de conformidad a la factura de venta, era de B/.101,682.20. La existencia de la carga también se logra acreditar con la póliza de seguro allegada al expediente.

En este punto conviene hacer la observación de que, cuando la mercancía transportada arribó al puerto de Iquique en Chile, lugar de su destino final, al ser abierto el contenedor sellado dentro del cual hiciera la travesía, el consignatario halló que, en vez de 192 bultos, sólo se encontraba en su interior la cantidad de 23 bultos de zapatillas.

El Tribunal Marítimo, en la tarea de analizar el Conocimiento de Embarque, documento que sirvió de evidencia del contrato celebrado entre el embarcador y el transportista, tomó en cuenta que, si bien dicho documento señala que se trata de un "clean on board", o sea un conocimiento de los denominados "limpio a bordo", lo cual es prima facie prueba del buen estado y condición de la carga, dicho Conocimiento de Embarque incluía varias reservas y observaciones introducidas por el transportista. Así, observó que el Conocimiento de Embarque contiene una cláusula que expresamente indica "shipper load and count", lo cual significa que la mercancía fue cargada y contada por el embarcador. Prosiguió el juez de instancia anotando que "De igual forma vemos una anotación que dice que el transportista se encuentra incapacitado de verificar el peso, la cantidad y las condiciones de la carga, debido a que ésta fue empacada, 'containerizada' y sellada en el lugar de origen por el embarcador o sus representantes".

Sobre las consecuencias y los efectos que, a juicio del Juzgador, producen esas reservas, el Tribunal fue categórico y concluyente:

> "El Tribunal desea señalar, en base a la sana crítica que en los casos en que se contrata que la mercadería va a ser transportada mediante la reserva de "shipper load and count", y máxime si se señala que el transportista no ha podido verificar el peso de la misma porque ésta fue estofada por el mismo embarcador, ello significa que al transportista no le consta el contenido del empaque, ya sea un contenedor o similar, si se presenta un conflicto o controversia el embarcador será quien tendrá que evidenciar o probar que, efectivamente, existían las cantidades que se señalan, porque el conocimiento de embarque dice: 'Said to contain', lo cual significa 'dice contener'. Ello indica que es el embarcador quien afirma que ha entregado una cantidad determinada de mercancía, pero al transportista no le consta por percepción directa." (fs. 366-367).

Además, agregó: "Entonces, de acuerdo al contrato respectivo, lo que se pactó fue transportar un contenedor bajo la modalidad 'full count and load', lo que significa que se debe transportar el contenedor lleno, contado y cargado por el mismo embarcador y se colocará a un costado del buque."

Basándose en la interpretación de la ley chilena, de las Reglas de Hamburgo y de los International Commercial Terms (INCOTERMS), el Juez arribó a la conclusión de que debe entenderse que la responsabilidad del transportista empezó en el momento en que la carga fue puesta a su disposición al costado del buque. Observó que, en este caso, según lo indica el Conocimiento de Embarque, la carga fue estofada y depositada en el contenedor respectivo por los embarcadores, quienes cerraron y sellaron el "container". El Juez Marítimo destacó que hubo una etapa del transporte de la mercancía (la comprendida entre el día en que fue sellado el contenedor, o sea el 8 de marzo de 1995, y el día en que el contenedor fue colocado a disposición del transportista, el 11 de marzo de 1995, cuando efectivamente quedó bajo su custodia) en la cual no regía el contrato de transporte celebrado por la COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, S. A. y el embarcador. Ese contrato de transporte, según el Conocimiento de Embarque, cubría la transportación, desde el puerto de Balboa en Panamá, hasta el puerto de Iquique en Chile. El contrato de transporte no fue de los que se celebran de bodega a bodega, o de puerta a puerta, por lo que lo consignado en el Conocimiento de Embarque no comprende, no se extiende ni tiene validez, en cuanto a la responsabilidad del transportista, respecto a lo que haya podido ocurrir antes de colocar la mercancía al costado del buque. En tal sentido, anotó el Juzgador que las pruebas indicaban que el contenedor se terminó de llenar y se cerró entre las 4:45 p.m. y las 5:45 p. m. del día 8 de marzo, y que ese mismo día le fue entregado a Transporte Buitrago en la Zona Libre de Colón, para que ese transportista lo trasladara al puerto de Balboa por tierra. Dicho traslado se produjo el 9 de marzo, efectuándose el embarque el día 11 de marzo cuando le fue entregado al transportista, por lo que desde el cierre y sellado del contenedor habían transcurrido tres días, sin que se sepa que pudo haber pasado con la mercancía durante ese tiempo.

En opinión del Tribunal Marítimo la expresión que contiene el Conocimiento de Embarque de "limpio a bordo" no debe entenderse como que el transportista garantizaba la buena condición de la mercancía, pues la leyenda simplemente quiere decir que la mercancía estaba "in aparent order and condition". En otras palabras, que se percibía a simple vista que estaba en buen orden y condición, "y desde luego si el contenedor está sellado o cerrado, ellos (sic.) no pueden hacer referencia a lo que está dentro, porque no les consta sencillamente".

La sentencia refiere que, cuando el contenedor llegó al puerto de Arica en Chile, las autoridades expidieron el documento de recepción correspondiente, en el cual no se hizo referencia a irregularidad alguna, y que, de haber existido anomalías, estas pasaron desapercibidas, porque la apariencia indicaba que todo estaba en orden. El contenedor partió, por tierra, de Arica y fue recibido en Iquique el 27 de marzo (al día siguiente), pero al momento de su recepción tampoco se notaron irregularidades. Al recibir el contenedor, el consignatario no hizo ninguna referencia a ruptura de sellos "y no fue sino cuando el consignatario a través de sus agentes, abre los contenedores (sic.), que observaron (sic.) que solamente había 23 cajas en vez de las 192 que debieron existir." Se buscó entonces a los "surveyors de Lloyd's" quienes levantaron un informe en el cual expresan que su intervención tuvo lugar cuando el contenedor ya había sido abierto por el consignatario. Así las cosas, los inspectores de Lloyd's deciden llamar a un experto en soldadura quien emitió una certificación en el sentido de que "al parecer pudieron haber sido soltados los seguros del contenedor y extraído el contenido del mismo."

Finalmente, el Tribunal termina estimando que en este caso concreto le correspondía al embarcador probar que el faltante de la mercadería se produjo en el lapso que transcurrió desde que el buque tomó la custodia de la carga -11 de marzo de 1995- y la carga fue llevada al puerto de Iquique -27 de marzo de 1995-. Para el Tribunal, las evidencias que obran en autos no demuestran que fue dentro de dicho período que se produjo la pérdida, razón por la cual dictaminó en favor de la parte demandada y la absolvió de todos los cargos impetrados en su contra.

Contra la resolución dictada la parte actora enarboló como argumento el supuesto error en que incurrió el Juez Marítimo por desconocer que, conforme al

derecho aplicable (las Reglas de Hamburgo incorporadas en el Código de Comercio de Chile), la carga de la prueba recaía sobre el porteador, es decir, sobre COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES, S. A. En respaldo de su tesis invocó el numeral 1 del artículo 5 de las Reglas de Hamburgo, el cual prescribe: "El porteador será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida o el daño de las mercancías, ... si el hecho que ha causado la pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando las mercancías estaban bajo su custodia en el sentido del artículo 4, a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias."

Sostiene el recurrente que, conforme a la legislación chilena (artículo 984 del Código de Comercio) en conexión con la regla citada, surge contra el porteador, en estos casos, la presunción de culpa o negligencia traducida en una responsabilidad agravada. Alega que el contenedor fue entregado y recibido "limpio a bordo", sin que se hicieran observaciones, reservas o protestas al momento de su recepción por parte del cargador. Por otro lado, aduce como prueba de que el contenedor fue efectivamente llenado y sellado tal como se le entregó al transportista, el informe de preembarque elaborado por la Firma TRIDEX, fechado el 8 de marzo de 1995, donde se certifica que los 192 bultos de zapatillas fueron debidamente estibados en el contenedor. Más adelante hace referencia a que el transportista incumplió con su obligación de adoptar las medidas razonables que impidieran la pérdida, extremo que relaciona con los cuidados que la compañía transportista se obliga a cumplir como lo expresa en una hoja que se publica en el Internet.

Para el recurrente ha quedado establecido que la pérdida se dio mientras el contenedor se encontraba bajo la responsabilidad del transportista, sin que éste haya podido probar que la entrega de la mercancía al consignatario fue hecha en buen estado, sino todo lo contrario, como fue evidenciado al momento de abrir el contenedor, descubriéndose que la mercancía había sufrido una merma sustancial. Considera que el transportista se ha convertido en el responsable de la pérdida a la luz de las disposiciones pertinentes del Código de Comercio de Chile y de las Reglas de Hamburgo.

En defensa de su representada, los apoderados de la parte demandada se oponen al recurrente sosteniendo que, según indica el Conocimiento de Embarque emitido por el transportador, su compromiso se reducía a transportar un contenedor de 20 pies, cerrado y sellado y no 192 bultos de zapatillas como lo asegura la parte demandante.

En primer lugar, estima que el informe de TRIDEX (empacador de la mercancía en el contenedor) no prueba que el contenido de ese recipiente al momento en que le fue entregado a las autoridades del puerto de Balboa y mucho menos en el momento en que fue situado al costado del buque para ser embarcado, correspondía a los 192 bultos de zapatillas. Agrega que no es cierto que el Conocimiento de Embarque se hubiese emitido sin observaciones ni reservas. Destaca que el Conocimiento de Embarque contiene estampada la siguiente reserva:

> "el transportista se encuentra incapacitado de verificar el peso, contenido y condición de la carga, debido a que la misma fue empacada, contenedorizada y sellada en el lugar de origen por el embarcador o sus representantes."

Alude a que también contiene la reserva denominada "shipper's load and count", que significa que la mercancía fue contada y cargada en el contenedor por el propio embarcador, aparte de que en la casilla correspondiente a la descripción de la mercancía se indica expresamente: "DICE CONTENER 192 BTOS." La frase "DICE CONTENER" o "SAID TO CONTAIN", en su opinión, significa que es el embarcador quien afirma lo que supuestamente se encuentra dentro del contenedor, algo que no puede ser verificado por el transportista, a quien se le entrega el contenedor cerrado y sellado sin que éste lo pueda abrir para verificar su contenido o el estado, la condición y la cantidad de las mercaderías que se transportan.

En cuanto a la condición de "limpio a bordo" con que se emitió el Conocimiento de Embarque, el oponente reduce su significación al buen orden y condición externa del contenedor y descarta que tenga que ver con el estado y condición de la carga contenida en el recipiente.

El oponente formula algunos comentarios relacionados a la apertura del contenedor en el lugar del destino de la carga (Iquique). Señala que dicha operación la hizo exclusivamente el consignatario el día 27 de marzo de 1995 y que no fue sino hasta el día siguiente que procedió a solicitar la inspección a cargo de los surveyors de Lloyd's, con la que supuestamente se detectaron, el día 29 de marzo, ciertas anomalías en los cierres de las puertas del contenedor; evidencias que fueron descubiertas por peritos especializados en la materia. Resalta que tales anomalías, no percibidas ni por las autoridades portuarias chilenas a quienes se les hizo entrega del contenedor ni por el propio consignatario en el momento en que lo recibiera, no son capaces de desdecir el hecho de que el transportista no hubiese entregado en su destino el contenedor como era su obligación hacerlo: con sus sellos intactos y en la misma condición en que fue recibido en su origen.

Concluye el oponente sosteniendo que la parte actora no pudo establecer un "caso prima facie" de que el faltante de las mercancías se hubiese producido cuando se encontraban bajo la custodia del transportista; condición exigida por el artículo 5 numeral 1 de las Reglas de Hamburgo para que surja la presunción de culpabilidad en contra del transportista. Era de la incumbencia del embarcador probar que la pérdida ocurrió durante esa etapa y al no haberlo logrado no puede cobrar vida tampoco la presunción de culpabilidad del porteador. Se insiste en que el transportista hizo uso en el Conocimiento de Embarque de las reservas permitidas por las Reglas de Hamburgo, con lo cual destruyó el valor probatorio que pudiese tener la información que aparece en dicho documento, proveniente de los datos suministrados exclusivamente por el embarcador.

Por último, precisa la parte demandada que sus obligaciones se reducían a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 de las Reglas de Hamburgo, las cuales hacen relación con recibir el contenedor llenado, cerrado y sellado al costado del buque; estibarlo a bordo y entregarlo en el lugar de destino con los sellos de origen intactos. Afirma que así ocurrió, pues el transportista cumplió con la obligación asumida de entregar el contenedor en las mismas condiciones en que lo recibiera en el puerto de Balboa.

POSICION DE LA SALA

Como es sabido, el empleo de los contenedores en el tráfico marítimo de mercancías es una modalidad introducida en tiempos relativamente recientes y su incremento obedece a las ventajas que ese tipo de transporte ofrece. Fletes más reducidos, agilidad en los movimientos portuarios, menor espacio en los buques, costos de almacenaje inferiores, rapidez en la carga y descarga, son algunas de las razones responsables del desarrollo de este sistema de transporte, cuyas implicaciones ni siquiera fueron previstas por las Reglas de la Haya de 1924, pero acerca de las cuales sí se tomó nota en las denominadas Reglas de Hamburgo, convenidas con mucha posterioridad.

Aún cuando se encuentran contempladas en las Reglas de Hamburgo, las características y las particularidades que presenta este tipo de transporte por mar siguen obligando a los tribunales de justicia a tener que resolver las controversias que se les presentan, en relación con la responsabilidad de los transportistas, teniendo muy presente la singularidad de cada uno de los casos concretos sometidos a su consideración.

El criterio predominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, ha sido que, cuando un transportista emite un Conocimiento de Embarque "limpio" respecto a un contenedor que no ha sido provisto, llenado, cerrado y sellado por el cargador sino por el embarcador, se debe entender que "el buen orden y condición" que la leyenda representa no está referida a su contenido, motivo por

el cual el transportista queda autorizado para estampar en el Conocimiento de Embarque la anotación "said to contain" o "dice contener", leyenda que, si se ha introducido, es un factor que favorece al transportista cuando se presentan reclamaciones en su contra.

También de mucha importancia en cada caso resulta comprobar si, (habiéndole correspondido al embarcador seleccionar el contenedor, corriendo por su cuenta el embalaje de la mercancía y la sellada del recipiente en su depósito, sin que en tales operaciones el transportista haya intervenido o haya tenido la oportunidad de observar las condiciones y las cantidades de la carga), en el Conocimiento de Embarque se ha incluido alguna reserva insertada por el porteador en donde éste aduzca que tiene razones de peso para suponer inexactitudes en cuanto a las marcas, número, cantidad, etc. de las mercancías que se declaran. De acuerdo al artículo 16 numeral 1 de las Reglas de Hamburgo, si en la reserva se hace mención especial de las razones o de la imposibilidad que se ha tenido para saber si los datos suministrados por el embarcador representan con exactitud las condiciones de las mercancías que efectivamente se han cargado, en virtud de que se carece de medios razonables para verificar esos datos, la presunción de responsabilidad que obra contra el porteador quedará destruida y correrá por cuenta del embarcador demostrar que los bienes fueron entregados para su transportación en el estado y en las condiciones por él declaradas. De darse el anterior supuesto se produce una inversión de la carga de la prueba. Tal es la interpretación que, de acuerdo con la Sala, se le debe dar al artículo 16 numeral 1 de las Reglas de Hamburgo, sobre todo si, como ocurre en el presente caso, el contenedor empleado fue de la modalidad conocida como FCL/FCL (full container load) y no del tipo LCL/LCL (less than a container load). Tratándose de un FCL/FCL, el contenedor es entregado al transportista después de haber sido consolidado, cerrado y sellado por el embarcador y, en consecuencia, sin que el cargador haya participado en esas operaciones. En cambio, si el contenedor es LCL/LCL, el embarcador entrega al transportista bultos o mercancías sueltas para que sea este último quien se encargue de consolidarlos en un contenedor que el mismo suministra.

En el caso subjudice es patente que el transportista tomó la precaución de estampar en el Conocimiento de Embarque varias reservas; entre ellas la conocida como "said to contain", cuyo significado claramente indica que no es el cargador el que afirma que el contenedor fue entregado con 192 bultos de zapatillas, sino que esa aseveración la hizo el propio embarcador.

El Conocimiento de Embarque emitido incluyó también la reserva "shipper's load and count", que quiere decir que la mercancía fue contada y cargada en el contenedor por el propio embarcador sin intervención del transportista.

Sin embargo, de mayor significado, en nuestra opinión, es la reserva que incorporó el transportista en el Conocimiento de Embarque que ya fue transcrita textualmente en esta sentencia y en la cual se expresa que estaba incapacitado para verificar el peso, el contenido y la condición de la carga, en virtud de que todas estas operaciones, incluyendo el sellado del contenedor, fueron realizadas por el embarcador en el lugar de origen.

En opinión de la Sala fue acertado el examen y las consideraciones que le sirvieron de fundamento al Juez Marítimo para arribar a la decisión adoptada en primera instancia. El Juez, a la hora de fallar la controversia, no podía inadvertir ciertos hechos y circunstancias de naturaleza irrebatible que constan en el proceso. Fue el embarcador quien, por su cuenta y sin la intervención del porteador, corrió con la estiba de la mercancía y procedió al sellado de las puertas del contenedor. Pasaron tres días desde que el contenedor fue sellado hasta que fue puesto al costado del buque bajo la custodia del transportista, sucediendo que, en el transcurso de ese tiempo, el contenedor cargado estuvo manipulado por una empresa de transporte terreste (Transporte Buitrago), contratada por el embarcador (no por el porteador) para que lo trasladara de la Zona Libre de Colón al puerto de Balboa.

El faltante de mercancías reclamado sólo se vino a descubrir cuando el consignatario abrió el contenedor, luego de su arribo al puerto de destino y luego de que, en cumplimiento del contrato, la carga fuera entregada a las autoridades chilenas correspondientes, sin que éstas hubiesen notado ninguna irregularidad en cuanto a los cierres y sellos del recipiente. Sólo cuando intervienen los inspectores que contrató el consignatario (dos días después que éste recogiera la carga), se pudieron detectar, mediante la intervención de agentes especializados, ciertas anomalías en el cierre de las puertas del contenedor. En otras palabras, es necesario deducir que, si los sellos estaban intactos y siendo la irregularidad detectada por los inspectores de aquellas que no pueden ser notadas a simple vista, por ser imperceptibles, ninguna evidencia existe tampoco de que la violación de las puertas del contenedor hubiese ocurrido a partir del momento en que éste quedó bajo la responsabilidad del transportista, el día 11 de marzo de 1995, tres días después de que fuera cargado y sellado en la Zona Libre de Colón.

Si a las circunstancias anteriores se suma el conjunto de reservas que el transportista introdujo en el Conocimiento de Embarque, con base a que no tenía los medios razonables para verificar los datos y demás pormenores atinentes a la mercancía puesta bajo su custodia, es obligante concluir, al igual que lo hiciera el Juez Marítimo, que no existen méritos para acceder a las pretensiones del actor, en virtud de que no pudo establecer en su reclamo por el faltante de la carga un "caso prima facie" de que las mercancías se perdieron mientras se encontraban bajo la custodia del transportista de las mismas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 24 de agosto de 1998 dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá.

Las obligantes costas de segunda instancia se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).

Notifiquese y Devuelvase,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil
Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. CONTRA EL AUTO N° 245, DEL 12 DE MAYO DE 1999 DICTADO POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE A "M/N MINASIS". MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN, en su condición de apoderado judicial de CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A., ha interpuesto Recurso de Apelación contra el Auto No. 245 de 12 de mayo de 1999.

En el escrito presentado para sustentar la apelación, se expresa lo siguiente:

Como antecedentes del caso se manifiesta que:

1- El día 26 de junio de 1998 la demandante (COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.) interpuso una demanda Especial de Ejecución de Crédito Marítimo

Privilegiado contra la M/N MINASIS, solicitándose su secuestro en virtud de lo dispuesto por el artículo 526 de la Ley 8 de 1982.

2- El 27 de junio de 1998 se publicó en un diario el certificado del Secretario del Tribunal Marítimo, donde consta la presentación de la demanda (art. 55 de la Ley 8 de 1982).

3- Con la presentación de la demanda se persigue la ejecución de un crédito marítimo privilegiado e interrumpir el término de prescripción de la acción, conforme a los artículos 1509 y 1649 del Código de Comercio.

4- El Tribunal Marítimo, de oficio, dictó resolución de 12 de mayo de 1999 donde decreta el levantamiento del secuestro sobre la nave MINASIS y ordena archivar el expediente, debido a que hasta ese momento no se había podido secuestrar dicha nave.

5- La parte actora presentó recurso de apelación contra la citada resolución, el 14 de mayo de 1999.

Los principales argumentos que sirven de fundamento al recurso de apelación son los siguientes:

Sostiene el apelante que el Juez Marítimo no está facultado para ordenar de manera oficiosa el levantamiento de un secuestro y el archivo de un proceso in rem, por el mero hecho de no haberse practicado el secuestro de la nave en un determinado período de tiempo.

Se alega que la demanda cumplía con los requisitos formales establecidos por el artículo 526 del Código de Procedimiento Marítimo. Además, que el Tribunal Marítimo de Panamá es competente para conocer de la presente causa en virtud de los artículos 557 (10) y 17 (4) del citado Código, ya que el embarque de la mercancía amparada bajo el Conocimiento de Embarque se dio en puerto panameño.

La demandante es una compañía de seguros panameña que interpuso demanda (in rem) contra la M/N MINASIS para ejecutar el crédito marítimo privilegiado que le confiere el artículo 1507 (núm. 5 y 11) del Código de Comercio y para interrumpir la prescripción de su acción. Si bien desde que se presentó la demanda la nave no ha dado señales de arribo a puerto panameño, dicha situación no es imputable a la parte actora, de manera que el juez marítimo sin fundamento en la Ley 8 ni en la jurisprudencia establecida por la Sala Civil sobre esta materia levantó el secuestro y ordenó archivar el expediente.

En este sentido, el apelante cita jurisprudencia de 8 de enero de 1991, de la Sala Civil de la Corte (ALETA AMARILLA vs M/N TERUEL), en la cual se expresó que no existe en el ordenamiento jurídico normativo de la Ley 8a. de 1982 disposición que faculte al juzgador para que de oficio decrete el levantamiento de un secuestro en determinado tiempo, luego de que el tribunal lo ha librado para cualquiera de las finalidades que establecen los numerales del artículo 164 de dicha excerta legal.

Se comenta que en este caso también había transcurrido más de un año de decretado el secuestro, sin que se hubiera dado la aprehensión física de la motonave.

Finalmente se alega que el término de 30 días que menciona el a-quo en el auto impugnado, se refiere al término que tiene la demandada para contestar la demanda, después que se ha notificado por la práctica del secuestro.

Seguidamente, veamos lo que plantea el Tribunal Marítimo en el auto de 12 de mayo de 1999, que es objeto del presente recurso de apelación:

"...
Dentro del presente Proceso de Ejecución de Crédito Marítimo

> Privilegiado que COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. le sigue a la M/N "MINASIS", se observa que la demanda fue presentada el día 26 de junio de 1998 y en esa misma fecha se decreta formal secuestro contra la nave, por tratarse de un proceso "in rem", y se admite la respectiva demanda, por razón que la motonave, según expresa el actor, se encontraba próxima a llegar al Puerto de Coco Solo, en Colón.
>
> Sin embargo, han transcurrido más de diez (10) meses sin que dicha nave arribe a aguas jurisdiccionales panameñas o al menos que el interesado nos indique que se encuentra próxima arribar, lo que hace necesario a este juzgador levantar la medida decretada y el archivo del expediente, por razón que mantener un secuestro bajo éstas condiciones desvirtúa el proceso "in rem", que como se sabe, se inicia con la aprehensión física de la nave, y al no existir la misma en tan largo período, obliga al suscrito ejercer tal acción, ya que en concepto de este juzgador la parte demandada contaba con el término de treinta (30) días para contestar la demanda luego de ejecutado físicamente el secuestro, tal y como se desprende del auto de admisión de demanda, y como el mismo no ha ocurrido, no se ha trabado la litis, por tanto no existe un proceso propiamente tal, lo que conlleva decretar el levantamiento del secuestro decretado.
>
> En mérito de lo expuesto, quien suscribe JUEZ DEL TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA, DECRETA el LEVANTAMIENTO DEL SECUESTRO decretado mediante auto No. 360 de 26 de junio de 1998 en contra de la M/N MINASIS y a favor de la CONPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. y en consecuencia ORDENA el ARCHIVO del expediente, previa anotación de su salida en un libro respectivo y la devolución de las fianzas consignadas.
>
> FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 165 de la Ley 8 de 1982 reformada por la Ley 11 de 1986.
> ..."
> (Fs.51-52)

De lo que se deja expuesto se colige que el Tribunal Marítimo fundamentó su decisión de levantar el secuestro en el hecho de que ha transcurrido un largo período de tiempo (10 meses) sin que se haya podido llevar a cabo la aprehensión física de la nave, porque la misma no ha arribado a aguas panameñas y ni siquiera el interesado (demandante) ha informado que dicha nave próximamente llegará. Esto, a juicio del juzgador, desvirtúa el proceso "in rem", que se inicia con la aprehensión física de la nave.

Al revisar los argumentos que plantea la censura contra el citado fallo del Tribunal Marítimo, hay que aclarar que en éste no se llegó a la decisión de levantar el secuestro porque la demanda no cumpla con determinados requisitos o porque el tribunal considere que no es competente para conocer la causa, como argumenta el apelante. Lo que sí es cierto es que en el ordenamiento marítimo panameño no existe una norma que faculte al juzgador para que de oficio decrete el levantamiento de un secuestro porque haya transcurrido determinado período de tiempo sin que el mismo se hubiera practicado.

Vemos que el Juez Marítimo fundamentó su decisión de levantar el secuestro en el criterio de que, de mantenerlo indefinidamente, sin que al menos mediara una actuación del demandante-interesado a través de la cual informara el tiempo en que arribaría la nave a nuestros puertos, traería como consecuencia que el proceso in rem quedara desvirtuado. En este sentido únicamente cita como fundamento de derecho, el artículo 165 de la ley marítima, que en lo pertinente dice:

> "ARTICULO 165: La petición de secuestro deberá formalizarse con el respectivo libelo de demanda; y en ella se hará constar la

información que tenga el peticionario en cuanto a lugar, fecha y hora en que puede hacerse efectivo el secuestro, si este va dirigido contra una nave o su carga.
..."

Según se puede observar la norma previamente transcrita no obliga al peticionario del secuestro a estar informando constantemente al tribunal sobre el paradero de la nave y el momento en que llegará a puerto panameño, para poder practicar el secuestro. Tampoco preceptúa que de no proporcionarse esta información, se sancionará al secuestrante decretando el levantamiento de dicha medida, como parece interpretarlo el juzgador al adoptar la decisión impugnada.

En este caso, aún no se ha trabado la litis, puesto que el secuestro no se ha hecho efectivo y todavía no se ha notificado la demanda al demandado, de manera que no se puede considerar que se haya constituido, propiamente, el aludido proceso in rem, el cual, según el juzgador a-quo, resultaría desvirtuado de mantenerse pendiente la orden de practicarse el secuestro.

Luego del análisis de todo lo expuesto esta Sala de la Corte concluye que es suficiente razón para revocar el auto recurrido el hecho de que de que no exista una norma que regule el supuesto de facultar al Tribunal Marítimo para que de oficio pueda decretar el levantamiento de un secuestro y archivar el expediente, porque, pasado cierto período prolongado de tiempo, tal medida no se haya practicado por no encontrarse la nave en nuestro país.

Por tanto, se accede a la petición del apelante de que se revoque la resolución del Tribunal Marítimo que decretó el levantamiento del secuestro y el archivo del expediente en la presente causa.

En mérito de lo expresado, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de 12 de mayo de 1999 dictada por el Tribunal Marítimo y, en consecuencia se mantiene pendiente el secuestro decretado contra la M/N MINASIS dentro del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado que COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. le sigue a M/N MINASIS.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) EMETERIO MILLER R.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMAS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONYA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN INTESTADA DE CARMINA DUQUE GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TRES (3) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Se han presentado sendos recursos de casación en el fondo; por una parte aparece la firma de abogados ROSAS Y ROSAS en representación de los señores GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE, GABRIELLA ALTAMIRANO DUQUE, MARÍA ISABEL K. DE BAZAN, GLORIA ALTAMIRANO DUQUE (q. e. p. d.), ARISTIDES TYPALDOS VALENCIA, MARÍA ESTHER TYPALDOS DE CHAMORRO, MARIO LUIS TYPALDOS VALENCIA, IRENE MARCELA TYPALDOS

VALENCIA DE ANGUIZOLA, MARIANELA TYPALDOS LASO DE LA VEGA, ALVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS, EDUARDO ENRIQUE GORMAZ TYPALDOS y RODRIGO GERARDO GORMAZ TYPALDOS, y, por otro lado, aparece el licenciado RODRIGO A. VIVES RUIZ, como apoderado judicial de los señores ALEJANDRO A. DUQUE VILLARREAL, TOMAS GERARDO DUQUE VILLARREAL, GABRIELLA DUQUE DE MITCHELL, SONIA DUQUE DE GREEN, DORA DUQUE DE SPUTO, RITA BALBINA DUQUE DE GARCÍA, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ, quienes recurren en casación contra la resolución de 14 de junio de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término de seis (6) días, para que dentro de los tres (3) primeros la parte opositora al recurso alegue sobre la admisibilidad; y dentro de los tres (3) siguientes para que el recurrente replique, período aprovechado sólo por una de las partes recurrentes, tal como se lee de fojas 134-136.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 y del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

En el primer recurso de casación se invoca una sola causal: Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución.

Con respecto a los motivos y la citación de las normas de derecho, con su debida explicación, la Sala considera que los mismos reúnen de manera general, los requisitos exigidos por la ley, procediendo su admisibilidad.

En cuanto al segundo recurso de casación, presenta una causal, correctamente invocada, según lo establecido en la ley.

Al igual que en el recurso anterior, tanto los motivos como la citación de las normas de derecho, con su debida explicación, reúnen de manera general los requisitos que se exigen para el presente recurso extraordinario, procediéndose a su admisibilidad.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE los recursos de casación, en el fondo, presentados por firma de abogados ROSAS Y ROSAS y el licenciado RODRIGO A. VIVES RUIZ respectivamente.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AARON JAMES LANDIS PABILECA Y CARMEN PABILECA RODRIGUEZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FLORIDO GOMEZ CERRUD. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Berríos y Berríos, apoderada especial de los señores AARON

JAMES LANDIS PABILECA y CARMEN PABILECA RODRIGUEZ, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 17 de septiembre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor FLORIDO GOMEZ CERRUD contra la parte recurrente.

El recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, por lo que procede la Sala a decidir sobre la misma.

En primer lugar, se observa que la resolución impugnada es recurrible en casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1148 del Código Judicial y el ordinal 2 del artículo 1149 ibidem.

En segundo lugar, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y presentado dentro del término correspondiente, por persona hábil.

En tercer lugar, se advierte que el escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general, todos los requisitos exigidos por el artículo 1160 del Código Judicial; y las dos causales de fondo invocadas son de las contempladas en el artículo 1154 de ese mismo Código.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por AARON JAMES LANDIS PABILECA y CARMEN PABILECA RODRIGUEZ, dentro del proceso ordinario que les sigue FLORIDO GOMEZ CERRUD.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ Y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA C., EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ Y HARMODIO DE ICAZA CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Marchosky, Rojer & Ameglio Moncada, en su condición de apoderada especial de los señores CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 26 de abril de 1999, dentro del proceso ordinario que le siguen los recurrentes a ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA CASTILLO, EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ y HARMODIO DE ICAZA.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, procede la Sala a decidir si el recurso de casación cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

En ese sentido, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil; y que la resolución impugnada es recurrible en casación por su naturaleza y también por la cuantía del proceso.

El recurso es en el fondo y se invoca como única causal, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución

recurrida.

Se observa que los motivos que le sirven de fundamento han sido expuestos con claridad y son congruentes con la causal.

No obstante, se puede constatar que entre las disposiciones legales que se estiman infringidas el recurrente incluye el artículo 770 del Código Judicial, el cual consagra el principio de la sana crítica del juzgador; razón por la cual guarda relación con la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y no con la invocada en esta oportunidad. Igualmente, al revisar las explicaciones de las infracciones del resto de las normas de derecho violadas, se advierte que en cada una de ellas se hace una exposición bastante extensa que se asemeja a un alegato y que, por tanto, no corresponde a esta etapa del proceso, como ha señalado esta corporación judicial en reiteradas ocasiones.

Consecuentemente, se debe ordenar la corrección del recurso en los términos señalados.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo interpuesto por CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ, dentro del proceso ordinario que le siguen a ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA Y OTROS, para lo cual se les concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACION EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Darío Carrillo Gomila, en su condición de apoderado judicial de los señores GABRIEL TAWACHI y JAIME TAWACHI, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 24 de agosto de 1999, dentro de la solicitud de declaratoria de quiebra del BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA -BANAICO-, S. A. presentada por la parte recurrente.

Cumplidos los trámites procesales correspondientes, debe la Sala examinar el negocio con el objeto de determinar si reúne los requisitos legales para ser admitido.

En ese sentido, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por persona hábil; y que la resolución impugnada es recurrible en casación por su naturaleza y por la cuantía del proceso.

En cuanto al escrito de formalización se observa que se trata de casación en la forma y que se invoca como única causal, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley", la cual se encuentra consagrada en el numeral 1 del artículo 1155 del Código Judicial.

Al revisar los motivos que le sirven de fundamento la Sala advierte que son

congruentes con la causal invocada, con excepción del motivo octavo que es ajeno a la situación de hecho planteada en el resto de los motivos.

Igualmente, se observa que entre las disposiciones legales que se estiman infringidas se incluye el artículo 1534 del Código de Comercio, el cual es una norma sustantiva y, como tal, no es susceptible de impugnación mediante casación en la forma.

Consecuentemente, se debe corregir el recurso en atención a los puntos señalados.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado judicial de los señores GABRIEL TAWACHI y JAIME TAWACHI, para lo cual se les concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR CAJA DE AHORROS CONTRA SOCIEDAD ADMINISTRACION DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el 3 de diciembre de 1999, esta corporación judicial ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo interpuesto por la FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 23 de junio de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por CAJA DE AHORROS, S. A. contra SOCIEDAD ADMINISTRACION DE SEGUROS, S. A., COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. y OTROS.

En vista de que se presentó el escrito de corrección del recurso dentro del término que la ley concede con ese propósito, corresponde a la Sala decidir en forma definitiva sobre su admisibilidad.

Luego de analizar el nuevo libelo, la Corte considera que el recurrente corrigió satisfactoriamente los defectos formales que se le habían indicado, de manera que el recurso reúne ahora los requisitos necesarios para ser admitido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la FISCALIA SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, dentro del proceso ordinario propuesto por CAJA DE AHORROS, S. A. contra SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE SEGUROS, S. A., COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. y OTROS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A. THIRD WORLD TRUST COMPANY LTDA. THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD. THIRD WORLD FINANCE, S. A. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE CABINET MAITRE BOUTIN. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CINCO (5) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante auto de 29 de septiembre de 1999, esta Sala no admitió la segunda causal y ordenó la corrección de la primera causal del recurso de casación en la forma interpuesto por el Licenciado Emeterio Miller Ramírez en representación de la FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A., THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD. y THIRD WORLD FINANCE, S. A. dentro del proceso ejecutivo interpuesto en contra de estas empresas por CABINET MAITRE BOUTIN.

Corregido el recurso dentro del término de ley, y debidamente atendidos y enmendados los defectos formales de que adolecía, el mismo fue admitido mediante resolución expedida por la Sala, de fecha 19 de octubre de 1999.

El recurso se interpuso contra la Resolución de fecha 17 de mayo de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que confirma el auto No. 44 de 8 de enero de 1998 emitido por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se "ADMITE el Desistimiento de la pretensión propuesto por la parte ejecutante exclusivamente respecto a la empresa ejecutada THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD.", y se condena al pago de la suma de B/.10.000.00 en concepto de costas a la ejecutante CABINET MAITRE BOUTIN.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y vencido el término de alegatos, que fue aprovechado por ambas partes, se procede a dictar la sentencia de mérito, previa las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

De acuerdo a las constancias procesales, la sociedad civil CABINET MAITRE BOUTIN otorgó poder al Licenciado ARIEL I. CORBETTI para que interpusiera demanda ejecutiva en contra de las empresas LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A.; THIRD WORLD FINANCE, S,A; THIRD WORLD TRUST COMPANY. LTD. y la empresa THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY, a fin de que fueran obligadas a pagarle la suma de B/.1.001.438.60, que se le adeuda en concepto de honorarios profesionales, más las costas, gastos e intereses.

El Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, de Panamá, mediante Auto N 2030 de 19 de septiembre de 1997, "LIBRA ORDEN DE MANDAMIENTO DE PAGO" en contra de las cuatro empresas demandadas, por la suma de B/.1.107.246.46 en concepto de capital y gastos provisionales.

Después de notificado el auto que libra mandamiento de pago, la parte demandante CABINET MAITRE BOUTIN mediante escrito presentado al Tribunal el día 24 de septiembre de 1997 (fs.56-57), solicitó se decrete embargo sobre los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a las deudoras, es decir, "las empresas LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A., THIRD WORLD FINANCE, S. A., THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD ...", solicitud a la que accede el Tribunal mediante Auto N 2107 de fecha 26 de septiembre de 1997, decretando el embargo solicitado en contra de todas y cada una de las empresas demandadas, embargo que es comunicado a los Bancos de la localidad (f. 59), así como también practicada la diligencia de avalúo y depósito de los bienes muebles de propiedad de las demandadas (F. 63-79).

Mediante auto No.2180 de 8 de octubre de 1997, se ordena hacer entrega a la parte demandante, de la suma de B/.883,226.34 que se mantenía embargada a la demandada THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD. en el Banco Do Brasil, indicándose en el referido auto, que luego de la entrega de la suma antes referida, aún existe a favor de la demandante la suma de B/.224.020.10 (f. 81-82).

Es de mencionar que la orden de entrega de las sumas embargadas en Banco Do Brasil no se llegó a ejecutar en virtud de secuestro decretado por otro Tribunal sobre las resultas del proceso y que fuera comunicado por el Juez Séptimo del Circuito mediante oficio N . 5490-246/97 sec, de fecha 16 de octubre de 1997 (f. 85).

A fojas 101-103, consta el Auto N 2263 dictado por el Juzgado Sexto del Circuito, mediante el cual se levanta el embargo decretado mediante Auto N 2107 de 26 de septiembre de 1997 en contra de las demandadas LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD., toda vez que mediante Nota SETAC-97/531, de 17 de octubre de 1997, del Banco Do Brasil, le informa que se mantiene embargada y retenida a la demandada THE MARC. M. HARRIS TRUST COMPANY LTD., la suma de B/.1.107.246.46, suma ésta por la cual se decretó el embargo originalmente y con la que se asegura el cumplimiento de la obligación que originó la ejecución.

Con posterioridad, el día 28 de octubre de 1997 comparece al Tribunal el señor MARC MATTHEW HARRIS y en representación de una de las demandadas la sociedad THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., se notifica del auto N 2030 de 19 de septiembre de 1997, el cual libra orden de mandamiento de pago, entre otras, en contra de la sociedad que él representa (f. 113-114).

Mediante escritos presentados los días 29 y 30 de octubre de 1997, la sociedad THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., a través de su apoderado judicial, Licenciado Emeterio Miller R., anuncia recurso de apelación contra el Auto N 2030 de 19 de septiembre de 1997, mediante el cual se libra mandamiento de pago y contra el auto N 2107 de 26 de septiembre de 1997, mediante el cual se decreta embargo sobre los bienes de su representada.

Consta a fojas 119 del expediente, escrito presentado el día 7 de noviembre de 1997, mediante el cual la ejecutante CABINET MAITRE BOUTIN desiste de la pretensión en favor de la sociedad THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., "... a fin que se le excluya única y exclusivamente a ésta sociedad del proceso de ejecución incoado en su contra ...", escrito de desistimiento al cual se OPONE la sociedad demandada THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., tal como consta de fojas 121 a 123 del proceso.

El escrito de desistimiento referido anteriormente, fue resuelto por el Juez Sexto del Circuito mediante auto N . 44 de fecha 8 de enero de 1998 (fs. 204-606), en el que se resolvió admitir el desistimiento de la pretensión propuesto por la parte ejecutante exclusivamente respecto a la empresa ejecutada THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. y se condena a la ejecutante al pago de la suma de B/.10.000.00, en concepto de costas.

La ejecutada THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. apeló de dicho Auto N . 44, dando como resultado la dictación de la Resolución fechada 17 de mayo de 1999, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que confirmó el fallo del a-quo y además condenó a la recurrente al pago de la suma de B/.75.00 en concepto de costas.

Es contra esta última resolución que se interpone el recurso de casación, el cual analizamos a continuación.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en la forma en el que se invoca como

causal "por haberse omitido algún trámite considerado esencial por la Ley".

La causal invocada viene sustentada en tres motivos que transcribimos a continuación:

> "PRIMERO: La resolución Judicial impugnada cometió el error jurídico de considerar que en este proceso no hay litisconsorcio necesario, cuando la ley así lo estipula, lo que constituye una clara violación a la ley.
>
> SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, sostuvo que como no hay litisconsorcio necesario, es válido el desistimiento promovido por la contraparte, provocando la desintegración de la resolución procesal, cuando la ley obliga al Tribunal, en caso de litisconsorcio necesario a integrar adecuadamente la relación procesal, lo cual produce una clara violación a la ley.
>
> TERCERO: Los errores jurídicos a que hemos aludido, condujeron al Tribunal a confirmar la Resolución N . 44 de 8 de enero de 1998, lo que indica que dichos errores influyeron en la parte dispositiva del auto recurrido, en violación a la Ley, y en perjuicio de nuestras representadas."

Observa la Sala que los cargos de injuricidad de la Resolución impugnada, contenidos en los motivos de este recurso, consisten, básicamente, en que la misma consideró que en el proceso que nos ocupa no se da el litisconsorcio necesario y que como consecuencia de ello, es válido de desistimiento presentado por la parte demandante ejecutante en favor de una sola de las demandadas, errores estos que según el recurrente, influyeron en la parte dispositiva del auto recurrido, en violación a la Ley.

En otro sentido, el impugnante expresó como disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo fueron, los artículos 667, 1073, 1080 y 1081, todos del Código de Procedimiento.

CRITERIO DE LA SALA

Para decidir la viabilidad de los cargos expuestos, debe considerar la Sala si, efectivamente, como lo sostiene la ejecutante en sus alegatos, es legalmente procedente admitir el desistimiento de la pretensión en contra de uno de los demandados, en caso de litisconsorcio, siendo que lo que se ejecuta es una obligación solidaria cuyas normas sustantivas que la regulan, le otorgan al acreedor el derecho facultativo de demandar y exigir la prestación a uno de los deudores, a todos a la vez, o sucesivamente.

Es en base a la anterior premisa que la sentencia impugnada mantiene el criterio de que en el presente caso, dado que todos los demandados se obligaron solidariamente, gozando el acreedor de un derecho de elección, no estamos frente al llamado litisconsorcio necesario y por tanto se puede desistir de la pretensión en contra de uno de los demandados sin su consentimiento.

Por su parte, la recurrente sostiene la existencia de un litisconsorcio necesario, caso en el cual no se puede desistir de la pretensión en contra de una de las demandadas ya que ello produce la ruptura de la relación procesal.

Nuestra legislación procesal regula el litisconsorcio necesario en el artículo 667 del Código Judicial, el cual reza así:

> "Cuando la demanda recaiga sobre actos o relaciones jurídicas a cuya formación hayan contribuido varias personas, o que por su naturaleza o por disposición legal no sea posible resolver en el fondo sin que al proceso comparezcan las personas que intervinieron en dichos actos o relaciones, la demanda deberá promoverse o dirigirse en

contra de todas ellas.
..."

Si como indica el artículo transcrito, tomamos en cuenta la naturaleza de la relación jurídica que originó la demanda, observamos que la misma trata de una obligación solidaria que por disposición legal, es decir de acuerdo a lo establecido en los artículos 1024 a 1035 del Código Civil, que regulan las obligaciones de este tipo, facultan al acreedor para exigir a uno o a todos el cumplimiento de la obligación, pareciera que en la vía procesal puede el demandante escoger frente a quién o quiénes va a hacer valer su pretensión, sin que ésto afecte la integración procesal, precisamente por la naturaleza de la relación obligacional.

Sobre el litisconsorcio necesario, el procesalista patrio, Doctor Jorge Fábrega, nos comenta que "Se da en los casos en que es indispensable el C. J. y la lógica jurídica lo requieren que concurran varias personas al proceso como demandantes o demandados, ya que se trata de una relación indivisible común a varias personas", y el mismo autor nos comenta, citando a Calamandrei, que en este litisconsorcio "La relación sustancial es única para varios sujetos, de modo que las modificaciones a ella para ser eficaz deben operar conjuntamente enfrente a todos. En estos casos de litisconsorcio necesario, la legitimación pertenece conjunta y no separadamente a varias personas". (Instituciones de Derecho Procesal Civil; pág. 412,1998).

Frente al litisconsorcio necesario, nuestra legislación también contempla el denominado litisconsorcio facultativo o voluntario, según la doctrina, al cual se refiere el artículo 590 del Código Judicial en los siguientes términos:

> "Salvo disposición en contrario, los litisconsorte facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso".

JAIRO PARRA QUIJANO, Profesor de Derecho en la Universidad Nacional Externado de Colombia al comentar este tipo de litisconsorcio, contenido en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, cuya redacción es similar al artículo 590 del Código Panameño, transcrito anteriormente, nos señala lo siguiente:

> "Para no romper con la tradición, hablaremos aquí de litisconsorcio voluntario, así la denominación no corresponda al contenido; este término significa comunidad de suerte, y en esta modalidad de litisconsorcio no hay esa comunidad de suerte sino una pluralidad de partes que aprovechan, por así decirlo, un mismo procedimiento.
>
> Lo anterior significa que no hay una parte integrada por varias personas, sino tantas partes como personas; cada persona es una parte, pero unidas por el procedimiento que se ha de seguir. El Código de Procedimiento Civil, acoge este criterio (art. 50): "Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso".
>
> Ya hemos dicho con anterioridad que su formación depende de la voluntad de los demandantes en integrarse para demandar conjuntamente, o bien cuando uno o varios demandantes demandan a varias personas en el mismo proceso. Esos varios demandantes pueden demandar separadamente, pero prefieren hacerlo conjuntamente, o los demandantes podían demandar separadamente, pero prefieren hacerlo en el mismo proceso".

(JAIRO PARRA QUIJANO; Derecho Procesal Civil, Editorial Temis, Colombia, 1992, pág. 181).

En este último sentido también coincide el autor y abogado LUIS CESAR PEREIRA MONSALVE al indicarnos que en el litisconsorcio facultativo, "la intervención depende exclusivamente de la voluntad del interviniente, de su espontánea y libre facultad para intervenir que puede ser ejercitada o no y tiene su fundamento en un principio de armonía y economía procesal. Aquí al contrario de lo que ocurre en el necesario el fallo puede tener un resultado con respecto a uno de los litis consortes y otro perfectamente contrario para otro u otros:" (Código de Procedimiento Civil, Jurisprudencia. Doctrina Comentarios. Concordancias Medellín. 1988, pág. 96).

Al analizar la situación planteada a la luz de las figuras litisconsorciales antes comentadas, la Sala tiene necesariamente que manifestar su desacuerdo por lo planteado tanto por el Tribunal Superior en la sentencia recurrida así como por lo planteado por el recurrente, respecto al tipo de litisconsorcio que integra la relación procesal en la presente litis.

Ello es así por cuanto que si nos remontamos a la génesis de la controversia, podemos observar que la pretensión consiste en obtener el pago de una suma de dinero a través de un juicio ejecutivo cuya obligación que se reclama nace de un contrato en el que varias personas jurídicas se obligaron solidariamente, delimitándose así la naturaleza jurídica de la relación contractual que en el campo procesal, de acuerdo a la doctrina y legislación, debe ser analizada desde el punto de vista de la necesidad o el interés que tengan los integrantes de la misma de participar en la controversia.

En este sentido, se puede observar que de la naturaleza de la relación jurídica que origina la deuda, se desprende la existencia de una obligación solidaria que puede ser dividida o cobrada íntegramente a uno de los codeudores, o a varios o a todos, por disponerlo así la ley. Esta característica que se puede presentar en la relación procesal, nos pone de relieve la existencia del litisconsorcio facultativo anteriormente comentado.

Pero asimismo, en el presente caso, si bien la obligación es indivisible, característica singular de los litisconsorcios necesarios, al tratarse la relación sustancial, de una relación contractual única para todos los codeudores, pues estamos en presencia de una obligación solidaria con consecuencias jurídicas entre éstos, dependiendo cuál o cuáles de ellos sean obligados a satisfacer la obligación, todos ellos, por este hecho, están legitimados para comparecer como demandados y tienen el derecho a hacerlo, aún cuando el acreedor haya hecho uso de su derecho de elección, por cuanto que, repetimos, se trata de una relación única para varios sujetos donde las acciones ejercitadas contra uno de ellos perjudica a todos y en igualdad de condiciones, las excepciones que dentro del proceso favorezca a uno, les favorece a todos. (Artículos 1028, 1032 y 1035 del Código Civil).

Dicho de otro modo, tratándose de una obligación solidaria nacida de un contrato, al trasladarla al campo procesal, nos encontramos ante una modalidad intermedia de litisconsorcio que la doctrina denomina "litisconsorcio cuasinecesario" y que según Fairén Guillén, citado por el Doctor Jorge Fábrega Ponce en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, se da bajo las siguientes circunstancias:

> "Cuando varias personas se hallan, ante un determinado evento jurídico, en situación de igual calidad, de tal modo que, teniendo legitimación con referencia al asunto cada una de ellas, sin embargo la resolución que los tribunales puedan adoptar les afectará a todos, por ser única la relación que exista entre ellas y el evento, y modificado éste, se modifica esta relación unitaria derivada de la citada entidad. (Sobre Litis Consorcio, pág. 143). En estos casos la decisión debe ser "uniforme para todos los litisconsorte" como reza

el artículo 591, o sea, que la decisión debe ser uniforme para todos aquéllos, que por una de las partes, se encuentra en litisconsorcio.

Tratándose, por ejemplo, de obligaciones solidarias, dispone el C.C. que "Las acciones ejercitadas contra cualesquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos éstos" (ob. Cit., pág. 414, 415).

Sobre el litisconsorcio cuasinecesario, cuya figura representativa que utiliza la doctrina como ejemplo es precisamente el de las obligaciones solidarias, JAIRO PARRA QUIJANO nos expone, para su mejor comprensión, algunas características y explicaciones que por su importancia nos permitimos reproducir:

"En el litisconsorcio cuasi-necesario, uno o todos tienen legitimación para intervenir, pero uno solo que sea demandante o demandado, es suficiente. La sentencia será de fondo, porque la legitimación no radica en todos, sino en cada uno de ellos.

Para que se dé este tipo de litisconsorcio se requiere, en nuestro criterio, que exista una relación material que la ley regula, dándoles a varios sujetos legitimidad para intervenir en determinados casos que se refieren a esa relación material. La doctrina cita como casos de litisconsorcio necesario (sic) las obligaciones solidarias (relación material) reguladas por la Ley (norma), en virtud de las cuales se puede demandar a todos los deudores o sólo a uno

...

Como se ha dicho, el litisconsorcio cuasinecesario se presenta cuando existe una relación material regulada por la ley, que atribuye a varios sujetos legitimidad para intervenir en determinados eventos que se refieren a esa relación. Es decir, que existe una relación material que para determinados eventos la ley regula y al regularla les da legitimidad a varios sujetos (a todos a uno) (JAIRO PARRA QUIJANO, ob. cit. Pág. 190-191).

El citado autor considera regulado el litisconsorcio cuasinecesario en el párrafo tercero del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, el cual es similar al párrafo segundo del artículo 591 del Código de Procedimiento Civil Panameño, que reza así:

"Artículo 591 ...

Podrán intervenir en un proceso como litisconsorte de una de las partes y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimadas para demandar o ser demandadas en el proceso sin que dada la naturaleza de la relación sustancial debatida, sea obligatoria su situación."

En opinión de la Sala, el párrafo segundo del artículo 591 de nuestro Código Judicial consagra la modalidad del litisconsorte que la doctrina denomina "litisconsorte cuasinecesario" cuyos requisitos sobresalientes, analizados a la luz de la disposición transcrita y del caso bajo estudio, podemos enumerar así:

1) El tercero que desea intervenir en un proceso del que se le excluye, o se le pretende excluir como litisconsorte de una de las partes, debe ser titular de una relación material a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia.

La demandada THIRD WORLD TRUST COMPANY, LTD. es parte y por tanto titular de una obligación solidaria que al ser ejecutada, sus efectos jurídicos le alcanzarán en virtud de la aplicación de las normas sustantivas que regulan la relación entre los codeudores solidarios.

2) Si a la relación se extienden los efectos jurídicos de la sentencia y el interesado en la intervención es parte de esa relación, queda por ello legitimado para intervenir.

Como dijéramos, a THIRD WORLD TRUST COMPANY, LTD. como codeudor solidario le alcanzarán los efectos jurídicos de este proceso por ser parte de la relación que originó la ejecución y por tanto goza de suficiente legitimación pasiva para intervenir.

3) El interesado en la intervención no está obligado a intervenir por cuanto su presencia no es necesaria en el proceso por tratarse precisamente de una obligación solidaria cuyo cumplimiento se puede exigir a uno o todos los codeudores. Pero, el interventor puede voluntariamente intervenir y no se requiere que sea citado pues está legitimado para ello, intervención que no se le puede negar en virtud del pleno derecho que ostenta, ligado a la relación sustancial de que es parte.

Si bien a THIRD WORLD TRUST COMPANY, LTD., se le trató de excluir del proceso a través del desistimiento de la pretensión que el demandante-acreedor presentó en su favor, la demandada presentó oposición al desistimiento (fs. 121-123), mostrando con ello su interés de permanecer como litisconsorte pasiva.

4) La intervención se puede dar en cualquier momento y en el estado en que se encuentra el proceso ya que no involucra una pretensión propia ni nueva, si bien, en el caso del litisconsorte pasivo se puede hacer uso de excepciones y defensas pero en relación con la misma pretensión.

A THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD., se le pretende excluir como litisconsorte después de habérsele notificado del mandamiento ejecutivo y haber anunciado que presentará las excepciones correspondientes (Fs. 113-114), mostrando con ello su interés, como parte de una relación sustancial, de participar en el proceso en su defensa.

Lo anterior pone de relieve que en el presente caso estamos frente a la modalidad del litisconsorte cuasinecesario que hemos analizado con lujo de detalles y no del litisconsorcio facultativo ni necesario como indica el recurrente, de manera que en opinión de la Sala no se han producido las violaciones de los artículos 667, 1073 ni 1080 del Código Judicial.

Sin embargo, es de observar que la sentencia impugnada, como ha quedado plasmado, no consideró la existencia del litisconsorcio cuasinecesario, lo que llevó al Tribunal Superior a violar de manera directa, por omisión, el artículo 1081 del Código Judicial.

El referido artículo en su primer párrafo dispone:

> "Artículo 1081. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el demandante podrá desistir de la pretensión. No se requerirá conformidad del demandado, debiendo el Juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el proceso en caso afirmativo.
> ..."

Tal como lo indica la norma, si bien en términos generales no se exige la conformidad del demandado para desistir de la pretensión en su contra, ello no exime al juzgador de examinar, por el contrario le fija el deber de examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio (subrayado nuestro), que en el presente caso, como quedó explicado, tratándose de una obligación solidaria que conlleva a la modalidad del litisconsorcio cuasinecesario, en el que uno de los litisconsorte desea participar del proceso al manifestar su oposición al desistimiento, se debió declarar la improcedencia de tal desistimiento tal cual lo faculta el artículo que se estima violado, y reconocerle así el derecho que le asiste a la ejecutada THIRD WORLD TRUST COMPANY, LTD. de que se le tenga como

litisconsorte en el proceso a fin de que la relación procesal quede integrada debidamente, en lugar de dar por terminado el proceso, como lo hizo, con respecto a esta demandada.

Desde otra perspectiva, al no quedar integrada debidamente la relación procesal, como ha ocurrido en el presente caso, se le estaría negando a una persona afectada por la relación sustancial, la oportunidad efectiva de participar en un proceso y hacer posible su derecho de contradicción y defensa y la oportunidad de tomar posición respecto de las manifestaciones y pretensiones de la contraparte, violentándose de esta manera el debido proceso legal, que como es sabido, constituye una garantía constitucional que la Sala no puede desconocer.

En estas condiciones, estima la Sala que la causal invocada en casación tiene méritos para prosperar y, por tanto lo procedente es casar la sentencia impugnada e invalidar la resolución dictada por el Juez Sexto del Circuíto.

Antes de finalizar, la Sala quiere llamar la atención al Juez a-quo sobre algunas irregularidades observadas en la tramitación del expediente.

En este sentido tenemos que a fojas 54 y 55 comparece ILKA MARIA BARRIA ZERNA en su calidad de Representante Legal de sólo tres de las demandadas, a nombre de quienes se notifica del auto que libra mandamiento de pago. Sin embargo, a fojas 58 aparece el auto #2107, mediante el cual el Juez decreta embargo en contra de THIRD WORLD TRUST COMPANY, LTD., una de las demandadas que no había sido notificada del auto que libra mandamiento de pago, comunicándose este embargo a los bancos de la localidad mediante oficio N 1723 de 26 de septiembre de 1997 (F. 59).

Por otra parte consta en el proceso a fojas 84, 115 y 116, que el Licenciado Emeterio Miller R. en representación de una de las demandadas, anunció recurso de apelación contra tres autos distintos dictados por el Juez de Instancia, sin que se diera ningún pronunciamiento por parte del Tribunal sobre los recursos anunciados y no obstante se concede el recurso de apelación contra el auto N 44 de fecha 8 de enero de 1998, que fuera anunciado con posterioridad a los comentados anteriormente (FS. 222,223).

Si bien tales anomalías o irregularidades no causan la nulidad del proceso y han sido subsanadas por quien legítimamente puede reclamar, para la Sala no pueden pasar desapercibidas por lo que llama la atención sobre el cuidado que se debe tener con el trámite de los expedientes y el deber de " Resolver expresamente las cuestiones planteadas por las partes ..." tal cual lo indica el ordinal 7 del artículo 199 del Código Judicial.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución de fecha 17 de mayo de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el presente proceso ejecutivo que CABINET MAITRE BOUTIN le sigue a LA FIRMA DE MARC M. HARRIS, S. A.; THE MARC M. HARRIS TRUST COMPANY LTD.; THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD. y THIRD WORLD FINANCE, S. A.; ANULA el auto No. 44 de fecha 8 de enero de 1998 dictado por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y ORDENA devolver el expediente a su Tribunal de origen a fin de que se continúe con los trámites del proceso, teniendo como litisconsorte de las demandadas a la empresa THIRD WORLD TRUST COMPANY LTD.

Cópiese, Notifiquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ESPIRITU A. RESTREPO B. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A FINANCIERA METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado César Tejedor A., en su condición de apoderado especial del señor ESPIRITU RESTREPO, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de septiembre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra FINANCIERA METRO, S. A.

Cumplidos los trámites de rigor, la Sala procede a decidir si el recurso de casación reúne los requisitos formales para ser admitido.

En ese sentido, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil; y, también, que la resolución impugnada es recurrible en casación, en atención a lo dispuesto en los artículos 1148 y 1149, ordinal 1 del Código Judicial.

Al revisar el libelo del recurso se observa que se trata de casación en el fondo, en la que se invocan dos causales que se encuentran consagradas en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento a cada una de ellas, al igual que las disposiciones legales que se estiman infringidas con sus correspondientes explicaciones de cómo lo han sido, resultan aceptables en su aspecto formal; razón por la cual las dos causales deben admitirse.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor ESPIRITU RESTREPO, dentro del proceso ordinario que le sigue a FINANCIERA METRO, S. A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado De la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BERNARDINO JARAMILLO GONZALEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A REINA ENEIDA HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta corporación judicial el 21 de diciembre de 1999, se admitió la primera causal y se ordenó la corrección de la segunda causal del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial del señor BERNARDINO JARAMILLO GONZALEZ, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 12 de julio de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra la señora REINA ENEIDA HERNANDEZ.

En vista de que el nuevo escrito de formalización fue presentado dentro del término que se le había concedido con ese propósito, la Sala debe decidir en forma definitiva sobre su admisibilidad.

El análisis del libelo corregido pone en evidencia que la parte recurrente enmendó debidamente los errores formales que se le habían señalado; de manera que la segunda causal reúne ahora los requisitos que exige la ley.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la segunda causal del recurso de casación en el fondo interpuesto por el señor BERNARDINO JARAMILLO GONZALEZ, dentro del proceso ordinario que le sigue a la señora REINA ENEIDA HERNANDEZ.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALEXIS SANTOS DE LEON RECURRE EN CASACION CONTRA LA RESOLUCION EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1999, EN EL INCIDENTE DE RESCISION DE DEPOSITO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR ROBERTO MOCK SUCRE CONTRA ESIRA PITTY DE SANTOS Y JOHNNY ACOSTA A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado OMAR ELIAS SOLANO APARICIO, en calidad de apoderado judicial de ALEXIS SANTOS DE LEON, ha presentado recurso de casación en el fondo, contra la sentencia de 14 de junio de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el incidente de rescisión de depósito propuesto por el señor ALEXIS SANTOS DE LEON dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía que le sigue ROBERTO MOCK SUCRE a los señores JOHNNY ACOSTA y ESIRA PITTY DE SANTOS.

Una vez cumplido todo el procedimiento requerido para la admisión y argumentación de las partes en cuanto al fondo del recurso, y considerando que el término para presentar alegato sólo fue aprovechado por la parte recurrente, procede la Sala al estudio del recurso, para lo cual se dejan expuesto, previamente, los antecedentes fácticos del caso.

ANTECEDENTES

Dentro del Proceso Ejecutivo instaurado por ALEXIS SANTOS DE LEON contra AGENCIAS CHIRICANAS DE CARGAS, S. A. decretó el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá a favor del demandante, el embargo del vehículo tipo mula, color rojo, marca Fregliner, modelo F1C12064T, motor 11105982, año 1984 y matrícula N° 801069 y un remolque marca Fruehauf, placa N° 4R-126, mediante resolución N° 2508 de 2 de octubre de 1998.

Mediante exhorto N° 102 de 12 de octubre de 1998, comisionó el Juzgado Segundo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá al Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, Ramo Civil, la práctica de la diligencia de inventario y avalúo. Al proceder a realizar la diligencia encomendada, advirtió el juzgador comisionado que los vehículos embargados, habían sido objeto de una medida cautelar, decretada en el proceso ordinario declarativo de mayor cuantía

promovido ante el propio Juzgado comisionado por ROBERTO MOCK SUCRE contra los señores JOHNY ACOSTA ACOSTA y ESIRA PITTI DE SANTOS, mediante Auto N° 530 de 11 de agosto de 1998.

En virtud de lo anterior, promovió el apoderado legal del señor ALEXIS SANTOS DE LEON incidente de rescisión de depósito en el secuestro decretado, mediante Auto N° 530 de 11 de agosto de 1998, por el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas dentro del proceso declarativo de mayor cuantía que a los señores ACOSTA Y PITTI le sigue el señor ROBERTO MOCK, por pesar sobre los bienes objeto del secuestro, un embargo decretado en virtud de una hipoteca inscrita en el Registro Público.

Mediante resolución de 4 de febrero resolvió en primera instancia el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, Ramo Civil, el incidente de rescisión de depósito presentado, declarándolo no probado. De dicha resolución apeló la parte incidentista, correspondiéndole su conocimiento en segunda instancia al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En resolución de 14 de junio de 1999 decidió el ad-quem mantener la decisión de primera instancia, por lo que contra la misma anunció y formalizó en tiempo oportuno el incidentista el recurso de casación que ocupa la atención de la Sala.

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

El recurso se interpuso en el fondo y se invoca como única causal, la "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo".

Con el propósito de comprender mejor la censura que se hace a la sentencia, pertinente es transcribir los cuatro (4) motivos en que se fundamenta la causal invocada:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al decidir en segunda instancia la causa, incurre en error de apreciación, en la medida que dejó de atribuir el valor que tiene conforme a la ley, el documento público que consiste en la copia auténtica del Auto 2508 de 2 de octubre de 1998, dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, tal como aparece aportado al proceso de foja 11 a foja 15 y a la certificación autorizada por el Juez y Secretario puesta en ese documento, y el cual consistió en que, a pesar que conforme a esta certificación de fecha de 22 de octubre de 1998, se dice que la hipoteca que dio origen al proceso, en que se dictó el referido Auto se encuentra inscrita y vigente a la fecha, en la Resolución recurrida se consideró que el incidentista no comprobó el hecho de que sobre los bienes pesaba un gravamen que estaba vigente.
>
> SEGUNDO: El error de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, se tradujo en infracción de la norma sobre valoración de los documentos públicos auténticos que postula que estos hacen fe sobre sus fechas y la certificación que en ellos haga el servidor que los expide. Hubiese bastado con que la Resolución recurrida le hubiera atribuido el valor de convicción a la certificación contenida en la copia auténtica del Auto 2508 para que el Tribunal declare probado el Incidente de Rescisión de Depósito al cual esa resolución le servía de fundamento.
>
> TERCERO: El error de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior que lo condujo a la conclusión equivocada de que, el Auto de embargo dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, sólo demostraba la

existencia de un embargo sobre estos bienes y no así el gravamen hipotecario que sobre ellos se había constituido, se tradujo en infracción de las normas sustantivas que se refieren al efecto contra terceros de la escritura contentiva de gravamen inscrito en el Registro Público y que precisamente, el Auto de embargo dictado sobre los bienes depositados en un Proceso Ejecutivo Hipotecario da derecho a que se rescinda el depósito de esos bienes dentro de un proceso cautelar.

CUARTA: La infracción de la norma sustantiva de derecho en que incurrió el Tribunal Superior, a causa del error de apreciación, influyó sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución impugnada, en la medida que al confirmarla desconoció un derecho que tiene el Incidentista a que se rescinda el depósito en virtud de su hipoteca inscrita y vigente en el Registro Público como garantía real para el cumplimiento de una obligación, cualquiera sea su poseedor, lo que no hubiese sucedido sin ese error probatorio porque la conclusión, necesariamente, debió ser otra, la declarar probado el Incidente de Rescisión de Depósito". (f. 70-77)

La disconformidad del recurrente con la sentencia impugnada, como se advierte de los motivos transcritos, recae sobre la valoración de la prueba que aparece de foja 11 a la 15 del expediente. La mala valoración de la prueba consiste en que pese a que en la prueba indicada, consistente en copia auténtica del Auto 2508 expedido el 2 de octubre de 1998, por el Juzgado Segundo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, aparece una certificación del Juez y Secretario de dicho Juzgado, en la que se señala la existencia del gravamen hipotecario alegado por el recurrente, sobre el vehículo mula tantas veces referido, el ad-quem estimó que dicha certificación no era suficiente y que la circunstancia alegada debió acreditarla el incidentista mediante certificación del Registro Público, omitiendo, en consecuencia, otorgar el valor que de acuerdo a la Ley procesal le corresponde a los documentos públicos.

Las normas que, a juicio del casacionista, viola el fallo censurado, son las contenidas en los artículos 549 numeral 2 y 823 del Código Judicial, el 24 del Decreto Ley 2 de 24 de mayo de 1955 y 1566 del Código Civil.

La Sala al examinar la resolución impugnada, consultable de foja 61 a la 62, advierte que, en efecto, como lo manifiesta el recurrente, el ad-quem desestimó la petición del incidentista por considerar que el recurrente no había aportado la certificación del Registro Público que acreditara la vigencia del gravamen hipotecario alegado por el recurrente, respecto de los bienes muebles objeto del incidente de rescisión de secuestro. En cuanto a la copia auténtica del Auto N° 2508, señalada como prueba mal valorada por el recurrente, estimó el ad-quem que el mismo resultaba idóneo para acreditar la existencia del embargo sobre los vehículos referidos, pero no para demostrar el gravamen hipotecario que según el recurrente pesaba sobre dichos vehículos; al respecto expuso el ad-quem en la resolución impugnada:

"Observa este Tribunal que el incidentista no presentó la Certificación del Registro Público que de fe de la vigencia del gravamen, que a nuestro parecer era la prueba más importante dentro del de este incidente para esclarecer las dudas que existían dentro del mismo, en lo referente a que sobre estos bienes no pesa gravamen hipotecario alguno, tal como lo prueban las certificaciones de la Tesorería Municipal de Bugaba (fojas 21-22) aportadas por el demandante en el proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por Roberto Mock Sucre contra Esira Pitty de Santos y Johnny Acosta A.

Por otro lado el auto de embargo dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá representa una prueba para establecer que existe un embargo sobre estos bienes, pero no comprueba el hecho de que pesa sobre ellos un

gravamen." (f. 62)

En relación con lo expuesto, conviene precisar en primera instancia, que lo pretendido en el proceso dentro del cual se recurre es la rescisión del secuestro decretado respecto de los vehículos tantas veces referidos, por el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, Ramo Civil, mediante el Auo N° 530 de 11 de agosto de 1998, dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía promovido por ROBERTO MOCK SUCRE contra los señores JOHNNY ACOSTA y ESIRA PITTI DE SANTOS, en virtud de la existencia de un gravamen hipotecario respecto de dichos bienes, supuestamente inscrito antes de que se practicara el secuestro cuya rescisión se pide, según lo informa el recurrente. Es, en consecuencia, a partir de dicho presupuesto que debe determinarse el medio probatorio idóneo para acreditar la existencia del gravamen hipotecario alegado. Al respecto, cabe aplicar al caso en cuestión el artículo 549, en su numeral 2° del Código Judicial, el cual regula la rescisión de depósito de una cosa, cuando mediare hipoteca inscrita respecto del bien secuestrado. La norma en cuestión es del tenor siguiente:

> Artículo 549. Se rescindirá el depósito de una cosa, con la sola audiencia del secuestrante, en los siguientes casos:
> 1. ...
> 2. Si al Tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de los bienes depositados, dictado en proceso ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y su Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el proceso ejecutivo, la fecha del auto de embargo y que dicho embargo esté vigente. ...
> ..." (subrayado de la Corte)

De conformidad con el texto de la norma transcrita parcialmente, la prueba por excelencia para dejar acreditada la existencia del gravamen hipotecario en virtud del cual se solicita el levantamiento del secuestro de los vehículos tantas veces referidos, lo es, la copia auténtica del Auto de embargo decretado en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por el recurrente en virtud de la hipoteca inscrita anterior a la práctica del secuestro que se intenta rescindir. En dicho auto, precisa la norma, debe aparecer una certificación del Juez y Secretario, donde se indique la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el proceso ejecutivo, la fecha del Auto y que dicho embargo está vigente. Agrega el precepto citados, que sin estos requisitos la copia no surtirá efecto.

Advierte la Sala que el auto cuya valoración probatoria por parte del Tribunal ad-quem cuestiona el recurrente, es el N° 2508, expedido el 2 de octubre de 1998 por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ejecutivo hipotecario de bienes muebles, promovido por el señor ALEXIS SANTOS DE LEON contra AGENCIAS CHIRICANAS DE CARGAS, S. A., el cual fue aportado en copia auténtica, de conformidad con lo exigido en el artículo 549, numeral 2°, antes citado (foja 11-14). Al pie de dicho auto aparece la certificación del Juez y el Secretario del Juzgado respectivo, donde aparece la fecha del embargo, y los detalles de inscripción de la hipoteca, conforme lo requiere la norma indicada, siendo la inscripción de la hipoteca de fecha anterior a la del secuestro, de ahí que considere la Sala que dicha prueba resulta suficiente para dejar acreditado la existencia del gravamen hipotecario alegado por el recurrente.

No comparte, por tanto, esta Superioridad la tesis del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial respecto a que la certificación del Registro Público constituía el medio probatorio idóneo para acreditar la existencia del gravamen hipotecario alegado por el recurrente. Si bien, la hipoteca mobiliaria, de acuerdo con lo regulado en el Decreto Ley 2 de 24 de mayo de 1955, para que pueda oponerse a terceros requiere que se le inscriba en el Registro Público, el supuesto ante el que nos encontramos es distinto, puesto que, lo que se persigue

en el presente caso no es acreditar la propiedad de los bienes muebles descritos anteriormente, caso en el cual la certificación del Registro Público cobraría su importancia probatoria, sino la rescisión de dichos bienes, para lo cual el artículo 549, numeral 2, antes citado, dispone claramente que el medio probatorio indicado para acreditar la existencia del gravamen hipotecario es el Auto que decreta el embargo.

Resulta conveniente señalar que esta Superiordad, en cuanto al valor legal de las certificaciones del Registro Público ha tenido la oportunidad de referirse, entre otras sentencias, en la sentencia de 19 de mayo de 1998, advirtiendo que las mismas resultan idóneas para acreditar la propiedad, en cuyo caso no es posible sustituirla por otra prueba. La resolución aludida es del tenor siguiente:

> "La prueba en mención, decretada para acreditar quien era el propietario de la finca sobre la cual se encontraba la residencia del señor Oscar Navarro, que éste afirmaba ser de su propiedad, es particularmente esencial, toda vez que, a juicio de la Sala, constituye la prueba idónea para acreditar el derecho de propiedad que se alega, no siendo posible sustituirla con otras pruebas, ... De allí que las referencias periciales o testimoniales referentes a la titularidad del derecho de propiedad de un bien inmueble, sin acompañar como prueba la certificación del Registro Público, no son idóneas para acreditar la propiedad inmobiliaria."

También resultan idóneas las certificaciones del Registrador Público para probar la existencia de contratos, cuando estos deban inscribirse, conforme tuvo oportunidad la Corte señalar en la sentencia de 6 de noviembre de 1981 citada por el profesor DULIO ARROYO C. en su obra sobre 5 años de Jurisprudencia Civil y Contencioso Administrativo, señala:

> "CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO. Su valor probatorio.
>
> Estas certificaciones constituyen documentos auténticos idóneos para comprobar plenamente la celebración de los contratos mencionados (de compraventa), especialmente porque en nuestra legislación, en la que impera el sistema de título y el modo para la transmisión del dominio sobre los inmuebles, la fuente idónea para comprobar tales actos jurídicos es precisamente la proveniente del Registro Público. Así lo disponen los artículos 1753, ordinal 1, 1756 y, específicamente, el artículo 1791 del Código Civil.
>
> Por tanto de nada serviría presentar las escrituras públicas como prueba de la celebración de los contratos, si no consta que las mismas fueron inscritas en el Registro Público, requisito que, como ya se expresó, fue comprobado plenamente en el presente caso.
>
> Sentencia de 6 de noviembre de 1981.
> Registro Judicial, noviembre, 1981, pp. 1-9."
>
> (DULIO ARROYO CAMACHO, "5 años de jurisprudencia de las Salas Primera (de lo Civil) y Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1981-1985"; Panamá, 1988: p. 288)

Es evidente, y así lo reconoce la Sala, que para acreditar circunstancias que aparecen en el Registro Público, las certificaciones que tal institución expida guardan especial relevancia como probanza de los hechos inscritos, a los efectos de su afección a terceros, y por regla general será ésta la prueba óptima para acreditar los hechos registrados. Sin embargo, en el caso de la rescisión de secuestros como consecuencia de autos de embargos recaídos con anterioridad sobre los mismos bienes, es evidente para la Sala que, sin perjuicio de derecho del incidentista de poder acreditar tal circunstancia por las certificaciones

registrales correspondientes, es suficiente la certificación a que se refiere el numeral 2° del artículo 549 del Código Judicial, por lo que su desestimación constituye una vulneración al ordenamiento procesal en materia de valoración probatoria, incurriéndose por la sentencia recurrida en una defectuosa valoración de la prueba, en este caso del auto de embargo contentivo de la certificación a que alude el artículo 549, numeral 2° del Código Judicial, como ha ocurrido en este incidente, por lo que es evidente que la censura que le imputa al recurrente a la sentencia recurrida en casación prospera, y así debe declararlo esta Sala, casando la sentencia recurrida, y, actuando como tribunal de instancia, corregir el yerro de juzgamiento incurrido.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 14 de junio de 1999, en el incidente de rescisión de secuestro propuesto por el señor ALEXIS SANTOS ACOSTA dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía promovido por ROBERTO MOCK SUCRE contra los señores JOHNNY ACOSTA y ESIRA PITTY DE SANTOS, y actuando en calidad de Tribunal de instancia REVOCA el Auto No. 75 de 4 de febrero de 1999 proferida por el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO CIVIL, y en consecuencia RESUELVE:

DECLARAR probado el incidente de rescisión de depósito decretado, por el Juzgado Segundo de Circuito de Veraguas, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por ROBERTO MOCK SUCRE contra JOHNNY ACOSTA y ESIRA PITTY de SANTOS y en consecuencia LEVANTA el secuestro decretado por dicho tribunal mediante Auto No. 530 de 11 de agosto de 1998, pero únicamente en cuanto a los bienes muebles consistentes en un remolque marca Freuhauf, motor N° MAMAM86416, de 28 toneladas, placa N° 4R-126, y la mula color rojo, marca Freighliner, modelo F1C1264T, motor N° 11105982, placa 801069, año 1984.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SALOMON JOSEPH SETTON, LEA SOFER DE SETTON; ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. Y PLATINUM TOWER CORP. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE SALOMON JOSEPH SETTON Y LEA SOFER DE SETTON LE SIGUEN A ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. Y PLATINUM TOWER CORP. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 22 de diciembre de 1999, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la corrección de la primera causal del recurso de casación presentado por la parte demandante y de la segunda causal del recurso de casación formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia 7 de julio 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por SALOMON JOSEPH SETTON y LEA SOFER DE SETTON contra ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. y PLATINUM TOWER CORP.

En vista de que la presentación de los nuevos escritos se hizo dentro del término que la ley concede con ese propósito, corresponde a la Corte resolver en forma definitiva su admisibilidad.

Al revisar los libelos corregidos se observa que ambas partes enmendaron los defectos formales que se les habían indicado; de manera que reúnen ahora los

requisitos necesarios para ser admitidos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la primera causal del recurso de casación presentado por la parte demandante y la segunda causal del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, dentro del proceso ordinario instaurado por SALOMON JOSEPH SETTON y LEA SOFER DE SETTON contra ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. y PLATINUM TOWER CORP.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HACIENDA LA ROMANA, S. A. Y COCLE AGRICOLA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUEN A CARLOS AGUILAR Y CARLOS ARAUZ ARANGO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Berríos y Berríos, como apoderada judicial de las sociedades HACIENDA LA ROMANA, S. A. y COCLE AGRICOLA, S. A. dentro del proceso ordinario por ellas instaurado contra CARLOS AGUILAR ALBAEZ y CARLOS ERNESTO ARAUZ ARANGO, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial el día 15 de julio de 1999, con la que se confirmó la proferida el 18 de febrero de 1997 por el Juez Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil. La resolución declaró la nulidad de todo lo actuado en este caso, debido a que se estimó que no era la civil la jurisdicción correspondiente para conocer del negocio.

En la demanda con que se originó este juicio se solicita que los demandados sean condenados a indemnizar daños y perjuicios (lucro cesante y daño emergente) por haber incurrido en la conducta ilícita de utilizar ilegalmente las aguas del Río Antón, en detrimento de las sociedades demandantes que se vieron perjudicadas en la explotación de dos fincas de su propiedad dedicadas al cultivo de arroz. Se afirma que esos predios no pudieron ser cultivados en su totalidad por la falta de agua, a pesar de contar con la autorización correspondiente emanada del INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (INRENARE), y a causa de que los demandados, sin ninguna clase de permiso, utilizaron ilegalmente el agua del río antes mencionado.

En la sentencia dictada por el Tribunal Superior, así como en la de primera instancia, se estimó que, conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 70 de 27 de julio de 1973, por el cual se reglamenta el otorgamiento de permisos para el uso de aguas, es el INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES (INRENARE), hoy AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, la entidad competente para conocer de los conflictos que pudiesen surgir entre los usuarios y quienes utilizan aguas sin la autorización correspondiente. A criterio del Tribunal, el caso bajo examen se encuentra entre tales supuestos y, por lo tanto, era ante aquella institución donde teníase que ventilar la controversia, de allí que decidiera confirmar lo resuelto por el a quo declarando la nulidad de todo lo actuado.

El recurso de casación presentado está compuesto de dos causales de fondo. La primera causal que se invoca es la de infracción de las normas sustantivas de derecho en el concepto de indebida aplicación de las normas sustantivas de

derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La segunda causal es la de infracción de las normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Analicemos la primera causal invocada.

Sostiene el recurrente, en el apartado correspondiente a los motivos del recurso, que el Tribunal Superior aplicó indebidamente las normas sustantivas especiales que regulan el uso de las aguas de nuestro país a una reclamación de naturaleza extracontractual que está regida por el Código Civil y cuyo fundamento radica en la conducta culposa de la cual se acusa a los demandados.

Considera el recurrente que la disposición en cuya aplicación indebida incurrió el Tribunal es el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 70 del 27 de julio 1973 que preceptúa lo siguiente:

> "Si se trata de conflictos entre usuarios y quienes usan aguas sin la autorización correspondiente, se aplicará a los usuarios no autorizados las sanción que corresponda y solamente después de cancelada la multa, podrán estos proceder a llenar la respectiva solicitud."

Cuando nos remitimos a la lectura de la resolución que se ataca en casación, efectivamente se comprueba que el Tribunal Superior basó su decisión en la aplicación que hiciera de la norma legal que la censura señala como indebidamente aplicada.

Siendo así lo anterior, debe convenir la Sala en que al recurrente le asiste completa razón cuando argumenta en el sentido de que al aplicarle esa norma a los supuestos de hecho que se discuten en esta causa, incurrió el juzgador en la aplicación indebida de la disposición legal denunciada.

El artículo 12 y el resto de las disposiciones integradas en el Decreto Ejecutivo No. 70 del 27 de julio de 1973, por el cual se reglamenta el otorgamiento de permisos y concesiones para el uso de aguas y se determina el funcionamiento del Consejo Consultivo de Recursos Hidráulicos, nada tiene que ver con el reconocimiento, el rechazo o la tramitación de las reclamaciones que por daños y perjuicios se pudiesen interponer, en razón de la conducta ilícita en que los particulares llegasen a incurrir en el manejo y empleo de las aguas de uso o de dominio público. Las disposiciones del Decreto Ejecutivo que regulan esta materia le confieren al INRENARE (actualmente AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE) la facultad de dirimir los conflictos que surjan entre los usuarios, así como la de otorgar licencias y permisos a favor de los particulares, concesionando el uso de las aguas a partir de la aplicación de una política que garantice el más racional y el mejor aprovechamiento de ese recurso en beneficio de todos aquellos que lo requieran y demanden. Incluso, dentro de las atribuciones que se le otorgan al INRENARE está la facultad de aplicar sanciones a quienes no cumplan con las normas y reglamentos establecidos. Pero muy lejos se encuentra el cuerpo de normas mencionado de contemplar aspectos que tienen que ver con las indemnizaciones a las que puedan dar lugar o derivarse de las conductas ilícitas o culposas que lleguen a ocasionar daños a terceros en razón de la responsabilidad extracontractual, materia reservada por excelencia, tanto en Panamá como en casi todas partes, a la competencia de la jurisdicción civil ordinaria.

Criticable le parece a la Sala que en la presente actuación procesal el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, y el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial hayan eludido el deber de decidir en el fondo esta causa, aduciendo la falta de jurisdicción o de competencia, cuando su obligación elemental era la de verificar sí, a la luz de los hechos y las pruebas, carecía o no de fundamento jurídico la pretensión de la parte actora; en otras palabras, resolver si es cierto o no que hubo de parte de los demandados

una acción culposa y si ese accionar causó un daño a los demandantes por cuya indemnización debieran responder, clásica materia que entra dentro de la competencia de los tribunales civiles de la República de Panamá.

Tendrá la Sala, en consecuencia y después de casar la resolución atacada, que dictar sentencia de reemplazo porque inexplicablemente los jueces inferiores dejaron de cumplir con la tarea que a ellos les tiene asignada la ley.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Según se afirma en los hechos de la demanda, HACIENDA LA ROMANA, S. A. y COCLE AGRICOLA, S. A. sufrieron daños y perjuicios porque, aún cuando estando autorizados por el INRENARE para utilizar las aguas del Río Antón en el riego de 325 hectáreas de arroz en dos fincas de su propiedad, éstas no se pudieron sembrar en su totalidad debido a la falta de agua ocasionada porque CARLOS AGUILAR ALBAEZ y CARLOS ERNESTO ARAUZ ARANGO (los demandados) tomaron aguas del mencionado río para irrigar varias hectáreas de su propiedad, sin contar con el permiso correspondiente, "con lo cual, han afectado aproximadamente la irrigación de 50 hectáreas de los predios pertenecientes a la parte demandante."

Tratándose de una demanda en que se reclama indemnización basada en la responsabilidad extracontractual, porque supuestamente la parte demandada se condujo ilícitamente, habrá que determinar, en primer lugar, si se ha acreditado en autos la comisión del hecho culposo, para así quedar en condiciones, y en caso de que lo primero sea cierto, de establecer en qué consistió el daño que aquella conducta ocasionó y si existe una relación de causalidad que apropiadamente demuestre la conexión entre el hecho culposo y el daño causado. Ha de tenerse en cuenta, por supuesto, que la parte demandada ha rechazado la veracidad de esos extremos, entre otras razones, porque alega que mal pudo haberse causado un daño a la contraparte cuando lo pretendido es que se reconozca que se le afectó la irrigación de aproximadamente 50 hectáreas de arroz que nunca fueron sembradas.

Para decidir no queda otro camino que el de examinar las pruebas que reposan en autos, a fin de establecer, si a través de ellas, la parte actora demostró los datos o hechos en que se fundamenta su pretensión, pues, como se sabe, la culpa no se presume y es necesario que quien lo reclama demuestre que se ha sufrido el daño, por lo cual la prueba del mismo y su cuantificación son, esencialmente, de incumbencia de la parte demandante.

En principio, no parece caber dudas que los demandados, en efecto, hicieron uso del agua del Río Antón sin contar en su haber con el permiso o la autorización otorgada por el INRENARE. Es lo que se reprende de la propia contestación que le fue dada a la demanda. En tales condiciones, a los demandados se les puede considerar como responsables de haber incurrido en un hecho ilícito o culpable, materializado en la conducta de haber obrado al margen de las normas legales establecidas para garantizar el uso racional del recurso agua en beneficio de la mayor cantidad de cultivos agrícolas y de las explotaciones ganaderas de la región.

Ahora bien, no basta que exista una conducta culpable para que surja la obligación de indemnizar. Es necesario que quien demande al culpable esté en capacidad de demostrar que su proceder fue la causa del daño que se asegura haber sufrido.

En el caso subjudice, la única prueba que reposa en el expediente apuntando en la dirección de responsabilizar a la parte demandada del daño que se aduce sufrió la parte demandante -- no haber podido cultivar una determinada cantidad de hectáreas de arroz por falta de agua, debido a que ésta fue usada sin autorización por los demandados --lo constituye el dictamen que los peritos CARLOS DOYEN (de la parte actora) y CONCEPCION VALDERRAMA (del Tribunal) rindieron con motivo de la inspección judicial practicada durante el proceso y que se llevó a cabo en los predios o fincas de los demandantes.

El perito DOYEN dictaminó que, aguas arriba del canal A, se instalaron bombas de agua que le restaron caudal al río por lo que sólo quedó disponible agua para regar un máximo de 7 hectáreas. Observa la Sala que el informe presentado por este perito no arroja luz acerca de quién o quiénes instalaron las bombas de agua a que se refiere, ni identifica los predios en donde esas bombas estaban instaladas, sin que tampoco nos aclare el perito, si llegó a constatar la existencia de esa maquinaria por percepción directa o propia.

El perito del Tribunal, CONCEPCION VALDERRAMA, fue todavía más parco en su informe. Ninguna referencia hace a las posibles causas concretas que provocaron la escasez de agua que supuestamente impidiera el cultivo de arroz en un área más extensa dentro de los predios perteneciente a los demandantes.

La prueba pericial de la cual nos ocupamos no estableció con suficiente claridad técnica cuál fue la causa cierta de la falta de agua, y para lo que nos interesa en este caso, no nos indica si el agua que hizo falta para regar los predios de la parte demandante tuvo como única causa la conducta ilícita en que incurriera la parte demandada. El dictamen pericial no ilustra al juzgador sobre las razones técnicas que tuvieron los peritos para arribar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, ninguna explicación convincente se da de cómo se estableció el área de 64 hectáreas que según ellos corresponde a la superficie que no se pudo cultivar. El dictamen de los peritos no logra producir en el ánimo del juzgador la certeza necesaria acerca de la causa que provocó la falta o escasez del agua que impidió irrigar las 50 o más hectáreas, o de que la causa de que no llegaran a sembrarse ocurriese debido al aprovechamiento indebido del agua por parte de los demandados.

En cuanto a la prueba testimonial empleada por la parte actora, una vez examinadas las declaraciones de los cuatro testigos aportados por ella, no es posible obtener ninguna información que acredite los hechos en que se funda la demanda.

Al no haberse logrado demostrar la relación de causalidad que nos permita establecer la necesaria conexión entre el hecho culposo y el daño alegado, preciso es resolver esta encuesta decretando la absolución de la parte demandada.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 15 de junio de 1999 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, REVOCA la sentencia No. 06 de 18 de febrero de 1997 dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, y, en su lugar DECLARA ABSUELTA a la parte demandada.

Las obligantes costas a cargo de la parte demandante se fijan en la suma de DOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala de lo Civil
Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CHILE HOLDINGS CAYMAN LIMITED RECURRE EN CASACION EN LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCION EN GENERAL PRESENTADAS CONTRA LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario que CHILE HOLDING (CAYMAN) LIMITED le sigue a LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LIMITED, actualmente en estado de resolver recurso de casación contra resolución sobre medidas conservatorias o de protección general, los apoderados de ambas parte han presentado solicitud de suspensión del proceso.

Como se aprecia en este expediente la firma forense ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, en representación del demandante, y la firma SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, como apoderados de la parte demandada, solicitan por segunda vez la suspensión de este proceso por el plazo de tres meses, en esta ocasión, contado a partir del 11 de enero de 2000.

Como se resolvió anteriormente, la Sala considera procedente acceder a la solicitud formulada, pues el artículo 486 del Código Judicial establece como requisito que la petición sea manifestada por ambas partes de común acuerdo y, además, permite que lo hagan cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, siempre que, cada vez que se haga, la suspensión solicitada no exceda de tres meses.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACCEDE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO que CHILE HOLDING (CAYMAN) LIMITED le sigue LAITH TRADING AND CONTRACTING COMPANY LTD., por el término de tres meses contados a partir del 11 de enero de 2000.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala de lo Civil
Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DUNSHAW PATTON FINANCIAL HOLDING LTDA., S. A. Y WEXFORT HOLDING LTDA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada Damaris Espinosa, apoderada judicial de LATINOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., (LARSA) ha formalizado recurso de casación contra la sentencia de 21 de julio de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por la recurrente contra DUNSHAW PATTON FINANCIAL HOLDING LTD y WEXFORD HOLDING.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que únicamente aprovechó la representación de la parte demandante, como se observa en el escrito que consta de fojas 404 a 412 del expediente.

La Corte procede a determinar si el recurso cumple con los presupuestos señalados en el artículo 1165 del Código Judicial, en concordancia con las exigencias formales del artículo 1160 del citado Código.

Se trata de resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía, y se advierte que el recurso fue anunciado y presentado dentro

de los términos correspondientes y por persona hábil.

En el libelo de casación se invoca como única causal "la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

El recurrente fundamenta su recurso de casación en cinco (5) motivos que se establecen como fundamento de la causal; expresa lo siguiente:

> PRIMERO: A pesar de haberse acreditado la existencia de un contrato mercantil de compraventa entre la demandante y las demandadas la sentencia no le concedió el valor probatorio correspondiente al contenido de los documentos que acreditan el cumplimiento por parte del comprador-en el pago de los bienes objeto del contrato- y la consiguiente obligación del vendedor a entregar la cosa debida, por lo cual se absolvió a las demandadas.
>
> SEGUNDO: A pesar de haberse acreditado y aportado al expediente documentación -consistente en cheques, certificados de propiedad expedido por la demandada, escritura de hipotecas- que en su conjunto acreditan el derecho de nuestra representada a solicitar tanto la resolución del contrato como el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, la sentencia objeto del presente recurso no les concedió el valor probatorio correspondiente y desestimó la pretensión.
>
> TERCERO: A pesar del reconocimiento efectuado por Laurencio Jaén Ocaña visible a (foja 197) de los documentos que constan a (fojas 18-21) en los que se acreditó tanto el cumplimiento del contrato por parte de LARSA, como la existencia de la obligación por parte de Dunshaw Patton Financial Holding y Wexford Holding, y el monto de estas obligaciones, la sentencia no le asignó el valor probatorio correspondiente y, manifestó que LARSA no probó haber cumplido su obligación y tampoco acreditó el monto del incumplimiento de las demandadas y en consecuencia las absolvió.
>
> CUARTO: LARSA acreditó-mediante cheques, pruebas periciales, documentos públicos remitidos por la Superintendencia Reaseguros, documentos privados reconocidos en el proceso-su propio cumplimiento, el incumplimiento de las demandadas y el monto de la misma. Sin embargo, la sentencia no les concedió el valor probatorio que al contenido de los mismos les correspondía y absolvió a las demandadas.
>
> QUINTO: A pesar que se aportó Escritura Pública, certificado de propiedad y documentos públicos emanados de la Superintendencia de Reaseguros que acreditan el incumplimiento de la demandada Wexford Holding con el monto de dicho incumplimiento, la sentencia no les concedió valor probatorio al indicio grave existente en contra de la demandada por su no comparecencia al proceso y en consecuencia las absolvió en el presente caso".

Al revisar cada uno de los motivos, la Sala observa que en el motivo primero no se establece de manera clara el cargo de injuricidad que se trata de imputar a la sentencia de segunda instancia, ya que en forma vaga se limita a señalar que "la sentencia no le concedió el valor probatorio correspondiente al contenido de los documentos que acreditan el cumplimiento por parte del comprador ...", pero no precisa cuáles son esos documentos, por qué afirma que el sentenciador valoró erradamente las pruebas no especificadas, en qué consiste la indebida apreciación que le atribuye el sentenciador y menos aún cuál fue la consiguiente infracción de la ley sustantiva, o la incidencia del cargo en lo dispositivo del fallo, quedando como un señalamiento abstracto el cargo que en

contra del fallo se formula. Los motivos son datos concretos y precisos de cargos contra la resolución recurrida, no generalidades o simples alegatos.

Aún cuando en los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto se especifica algunas pruebas, la recurrente reitera en cada uno el mismo cargo de injuricidad contra la sentencia, lo cual no es cónsono con la técnica del recurso extraordinario de casación.

Es importante insistir en que cada motivo debe contener un cargo de infracción legal y su demostración, ya que los mismos están destinados a justificar la causal invocada.

Por otro lado, en el apartado correspondiente a la citación y explicación de las normas vulneradas, incurre en el error de citar primero las de carácter sustantivo y después las de contenido probatorio cuando es lógico y se ha indicado reiteradamente que se debe hacer en forma contraria.

En cuanto a las normas invocadas, también hay que observar que la recurrente cita normas de derecho ajenas a la causal de fondo enunciada.

Señala como primera norma infringida el artículo 1132 del Código Civil, referente a la interpretación de los contratos, por lo que no hay congruencia con la causal expresada. La cita de dicha norma es propia de la causal de interpretación errónea o violación directa causales que en todo caso no son idóneas para atacar la operación probatoria realizada por el fallo.

Igualmente, cita el artículo 769 del Código Judicial que tampoco compagina con la causal invocada, puesto que dicha norma es propia con otra causal probatoria, el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Por todo lo anterior, el recurso de casación en el fondo resulta ininteligible y debe declararse inadmisible.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por DAMARIS ESPINOSA en su condición de apoderada especial de LATINOAMERICANA DE SEGUROS, S. A., (LARSA) contra la sentencia de 21 de julio de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por la recurrente contra DUNSHAW PATTON FINANCIAL HOLDING LTD y WEXFORD HOLDING.

Las costas de casación se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifiquese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil
Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAUL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 27 de diciembre de 1999, esta corporación judicial no admitió la primera causal y ordenó la corrección de la segunda causal del recurso de casación en el fondo, interpuesto por el apoderado judicial de la señora GABRIELA MUTIS contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 15 de julio de 1999, dentro del proceso sumario propuesto por la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.) contra la recurrente.

La Sala ha podido constatar que se presentó el nuevo escrito de casación dentro del término que la ley establece, por lo que debe decidirse definitivamente sobre la admisibilidad del recurso.

En la resolución que ordenó la corrección se le señaló al recurrente que debía corregir los motivos, especificando los errores probatorios que le imputaba a la sentencia de segundo grado, puesto que dichos cargos se referían a la incorrecta valoración de un número plural de pruebas.

Al revisar el libelo corregido se advierte que si bien el recurrente introdujo pequeñas modificaciones en la redacción de los motivos, las mismas no son suficientes; ya que se limitan a señalar que los documentos acusados no fueron valorados "por la regla de la sana crítica", pero sin indicar, como tampoco lo hizo en el recurso anteriror, a qué pruebas se refiere específicamente y cómo su valoración pudo influir en la decisión impugnada.

En vista de que los motivos se mantienen en el mismo nivel de abstracción que los anteriores, se debe rechazar la segunda causal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la segunda causal del recurso de casación en el fondo interpuesto por la señora GABRIELA MUTIS, dentro del proceso sumario que le sigue la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.).

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA MORENO JARAMILLO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE TITULO DE PROPIEDAD QUE LE SIGUE LUCIA MORENO JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos G. Quirós, actuando en nombre y representación de la señora ANA MORENO JARAMILLO, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 30 de septiembre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora LUCIA MORENO JARAMILLO contra la recurrente.

Cumplidos los trámites correspondientes, la Sala debe decidir si el recurso reúne los requisitos para su admisibilidad, que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Al revisar las constancias procesales se ha podido determinar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil; y,

también, que la resolución impugnada es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

El recurso consta de una causal de forma y una de fondo.

La causal de forma es la contenida en el literal a, numeral 7, del artículo 1155 del Código Judicial: "Por no estar la sentencia en consonancia con la demanda o con las excepciones del demandado, porque se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia".

Si bien el único motivo que le sirve de sustento es congruente con la causal, el mismo no resulta suficiente para explicar la situación de hecho de esta causal; es decir, los cargos que el recurrente le imputa a la sentencia de segunda instancia. Consecuentemente, se debe ordenar la corrección de esta causal, de manera que se subsane este punto y se expongan los defectos del fallo atacado con mayor claridad.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y la explicación de cómo lo han sido, las mismas resultan aceptables en su aspecto formal.

La causal de fondo consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida; la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Al igual que en la causal de forma, el recurrente incluye un solo motivo para fundamentar esta causal de fondo, el cual no describe con debida propiedad la realidad concreta de los cargos probatorios que le imputa al fallo de segundo grado; defecto que debe ser subsanado.

Por otra parte, al revisar las normas legales que se estiman violadas se advierte que se han citado los artículos 773, 823 y 825 del Código Judicial, los cuales son incongruentes con la causal invocada. Sin embargo, no se han incluido la o las disposiciones legales que consagran la existencia de las pruebas que se atacan en esta oportunidad, como corresponde cuando se utiliza la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Por tanto, se debe corregir también la causal de fondo, en atención a los puntos que se le han señalado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de la señora ANA MORENO JARAMILLO, para lo cual se le concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RHONE DEVELOPMENT, S. A. RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION QUE LE SIGUE A BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro de la solicitud de medida conservatoria o de protección propuesta por RHONE DEVELOPMENT, S. A. contra BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION y OTROS, la apoderada judicial de la parte actora interpuso recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 7 de octubre de 1997.

Encontrándose dicho recurso pendiente de decisión en el fondo, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron solicitud de suspensión del proceso por tres meses, la cual fue decretada por esta corporación de justicia mediante resolución fechada 19 de octubre de 1999.

El 7 de enero de 2000 las partes presentaron ante la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, escrito solicitando suspensión del presente negocio por un plazo de tres meses más, contados a partir del 11 de enero de 2000.

Al respecto, el artículo 486 del Código Judicial contempla la posibilidad de que las partes soliciten, de común acuerdo, cuantas veces y por el tiempo que tengan a bien, la suspensión del proceso, siempre que no exceda de tres meses.

En vista de que en el caso que nos ocupa, la solicitud se ajusta a lo prescrito en la citada disposición legal, se debe acceder a lo pedido.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSION del presente proceso por el término de tres (3) meses, contados a partir del día once (11) de enero de 2000.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINANRIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Sergio Tulio Vidal Castillo, apoderado judicial de ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 4 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía interpuesto por EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ contra ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.

La Sala debe decidir en esta oportunidad si el recurso es admisible, atendiendo para ello los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Al examinar las constancias procesales se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil. Además, se observa que la resolución impugnada es recurrible en casación, tanto por la naturaleza como por la cuantía del negocio.

En relación con el escrito de formalización, se observa que se invoca como única causal "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, la cual se encuentra consagrada, como

tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos, que son cinco, encuentra la Sala que los mismos no sólo contienen un vicio de ilegalidad contra la sentencia impugnada, sino que además éste guarda relación con la causal enunciada.

En el aparte de normas infringidas aprecia la Sala que se citan tanto normas de naturaleza probatorias como sustantivas, además, las explicaciones que se ofrecen sobre la manera como se cometieron las violaciones a las normas citadas como tal, resultan congruente con lo expuesto en los motivos y la causal enunciada.

De lo que viene expuesto se concluye que el escrito, mediante el cual se presenta el recurso de casación examinado, reúne los requisitos y formalidades de ley para su viabilidad, por consiguiente debe la Sala declararle admisible.

En virtud de lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA CIVIL, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación presentado por el licenciado Sergio Tulio Vidal Trujillo en representación de ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., contra la Sentencia dictada por EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALCIBIADES VARGAS GRAHAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DEYANIRA VARGAS GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado MANUEL J. BENNETT M., apoderado judicial del señor ALCIBIADES VARGAS GRAHAM, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 19 de octubre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que le sigue DEYANIRA VARGAS GONZÁLEZ.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo que procede la Sala, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que se trata de una resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

La Sala observa, que con excepción del cuarto motivo, en el resto no se aprecian cargos concretos contra la sentencia recurrida. La causal invocada exige no solamente la identificación de la prueba mal valorada, sino en que consistió la errada valoración que se le imputa a la sentencia recurrida, como ha sostenido en reiteradas ocasiones esta Sala; no obstante que esta Sala ha determinado que esta circunstancia no es suficiente para declarar el recurso inadmisible, si del contexto general de los motivos, o de uno de ellos individualizados, se desprende el cargo a la sentencia. Con la claridad expositiva que lo caracteriza, el casacionista colombiano HUMBERTO MURCIA BALLÉN (q. e. p. d.), se ha pronunciado

en términos que la Sala no puede sustraerse de exteriorizarlos, para ilustración del recurrente y de los sucesivos recurrentes que acuden a este medio de impugnación extraordinario.

Dice así el ilustre expositor, o, mejor, quienes se dedicaron a preparar una nueva edición (la 4ª) de este clásico en materia del recurso de casación civil:

> "Como la casación adopta una posición de combate a la sentencia así recurrida, el recurrente censura, por considerarlas contrarias a derecho, las conclusiones del fallo, dando las razones en que apoya su ataque o su objeción, y esto no hace por conducto de los cargos. El cargo es, pues, en casación, la réplica, la objeción o la censura, o en conjunto de réplicas, objeciones, censuras o ataques que el recurrente hace al juicio del fallador de instancia, con miras a que la Corte Suprema le restaure el derecho presuntamente quebrantado por la sentencia que impugna.
>
> Resulta así que las causales de casación vienen a constituir el piso o la base sobre las cuales se deben edificar los cargos, los ataques, las objeciones o las censuras, términos estos que al fin y al cabo, son sinónimos, y que el recurrente le formula a la sentencia impugnada. ...".
>
> (Humberto Murcia Ballén, "RECURSO DE CASACIÓN CIVIL", 4ª edición actualizada, pág. 273, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1996).

En efecto; los motivos no guarda relación con la causal invocada, los cuales no contienen un cargo específico a la sentencia, no obstante que el conjunto de ellos se desprende la existencia de la censura. En estos casos, en lugar de declarar inadmisible el recurso, debe ordenarse su corrección.

Por tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo presentado por ALCIBIADES VARGAS GRAHAM contra la Sentencia de 19 de octubre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ERICK SAMUEL SANTOS MURGAS RECURRE EN CASACION EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCION EN GENERAL QUE LE SIGUE A FALCON SECURITY INVESTMENT, INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la medida conservatoria o de protección en general propuesta por ERICK SAMUEL SANTOS MURGAS contra FALCON SECURITY INVESTMENT, INC., la representación judicial de la parte actora ha interpuesto recurso de casación contra la resolución que decidió en segunda instancia dicha solicitud, la cual fue dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 13 de octubre de 1999.

El recurso se encuentra en etapa de admisibilidad, por lo que procede la Sala a decidir sobre la misma.

En primer lugar, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por persona hábil.

En segundo lugar, se observa que la resolución impugnada es recurrible en casación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1148 y 1149, ordinal 4 del Código Judicial.

En tercer lugar, se advierte que el escrito de formalización reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 1160 ibidem y la única causal de fondo que se ha invocado, es de las contempladas en la ley.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la apoderada judicial de ERICK SAMUEL SANTOS MURGAS, dentro de la medida conservatoria o de protección en general interpuesta contra FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACION EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 5 de enero de 2000, esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado judicial de los señores GABRIEL TAWACHI y JAIME TAWACHI, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 24 de agosto de 1999, dentro de la solicitud de declaratoria de quiebra del BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA -BANAICO-, S. A. presentada por los recurrentes.

En vista de que ha vencido el término para la corrección del recurso y que la presentación del nuevo escrito se hizo dentro del término que la ley concede con ese propósito, corresponde a la Corte resolver en forma definitiva su admisibilidad.

Se observa que la parte recurrente corrigió satisfactoriamente los defectos formales que se le habían señalado, de manera que el recurso reúne ahora los requisitos necesarios para ser admitido.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en la forma interpuesto por los señores GABRIEL TAWACHI y JAIME TAWACHI, dentro de la solicitud de quiebra del BANCO AGRO-INDUSTRIAL DE PANAMA -BANAICO-, S. A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ Y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA CASTILLO, EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ Y HARMODIO DE ICAZA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 4 de enero de 2000, esta corporación de justicia ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 26 de abril de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ contra ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA, GABRIELA ISABEL DE ICAZA CASTILLO, ELIDA MERCEDES DE ICAZA CASTILLO, EMERITA DE ICAZA FERNANDEZ y HARMODIO DE ICAZA.

En vista de que se presentó el escrito de corrección del recurso dentro del término que la ley concede con ese propósito, corresponde a la Sala decidir en forma definitiva sobre su admisibilidad.

Luego de analizar el nuevo libelo, la Corte observa que el recurrente corrigió satisfactoriamente los defectos formales que se le habían indicado, de manera que el recurso reúne ahora los requisitos necesarios para ser admitido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la apoderada judicial de CONRADO OTTO ROJER JIMENEZ y RAUL ESTEBAN ROJER RUIZ, dentro del proceso ordinario que le siguen a ESTHER MARIA CASTILLO DE DE ICAZA y OTROS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANTONIO BARRIA RIOS Y JUSTO BARRIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO DE OPOSICION QUE LE SIGUE A ZORAIDA BARRIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante auto de fecha 13 de enero de 1998, esta Sala admitió la causal única de fondo del recurso de casación interpuesto por el Licenciado Octavio Ochoa Guillén, en representación de los señores JUSTO BARRIA HERNANDEZ y ANTOLINO BARRIA RIOS dentro del proceso ordinario de Oposición a Título de Dominio que éstos le siguen a la señora ZORAIDA BARRIA QUINTERO.

El recurso se interpuso contra la sentencia de 30 de junio de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que CONFIRMA la sentencia No. 29 de 25 de abril de 1997, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera y que resolvió negar las pretensiones de la parte actora, ahora recurrente, siendo además condenada en costas en ambas instancias.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y precluido el término de alegatos, se procede a dictar la sentencia de fondo, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

Las constancias procesales revelan que el presente negocio tuvo su origen en virtud de demanda de oposición a título de dominio que los señores JUSTO BARRIA HERNANDEZ y ANTOLINO BARRIA RIOS interpusieran ante el Juez Primero del Circuito de Herrera, en contra de ZORAIDA BARRIA QUINTERO quien solicitó a la Reforma Agraria la adjudicación de un lote de terreno ubicado en el Borriguero, Corregimiento de Cerro Paja, Distrito de Los Pozos, Provincia de Herrera.

Cumplidas las etapas correspondientes a este tipo de procesos, el Juez Primero del Circuito de Herrera, mediante Sentencia No. 29 de 25 de abril de 1997, resolvió negar las pretensiones formuladas por los demandantes, condenándolos, además, a pagar la suma de B/.150.00 en concepto de costas.

Esta sentencia fue apelada por el apoderado judicial de los demandantes, correspondiéndole al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante sentencia proferida el 30 de junio de 1997, confirmar la sentencia apelada, decisión que ahora se impugna mediante recurso extraordinario de casación.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el que la causal única invocada consiste en "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual ha influído sustancialmente en lo dispositivo de la resolución (art. 1154 del Código Judicial)."

Dicha causal se sustenta en tres motivos que se reproducen a continuación:

> "PRIMERO: La Sentencia impugnada dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con fecha 30 de junio de 1997, no apreció, ni valoró, según las reglas de la sana crítica los testimonios de: LORENZO APARICIO (f. 223); ADOLFO RIOS BARRIA (f. 224); ROMAN MENDOZA (f. 225); ELADIO PINTO CRUZ (F. 226); GREGORIO RIOS PEREZ (f. 228); RAFAEL BARRIA HERNANDEZ (f. 247-248); JULIAN BARRERA MARIN (F. 249-250) y ANGELICA AVILA CRUZ (f. 251-252), cuyos testimonios no fueron valorados debidamente, ya que la Sentencia impugnada considera dichos testimonios como contradictorios y en algunos casos sospechosos cuando no es cierto ya que coinciden en circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que hubo un error en la valoración y en la sana crítica que de haberlo hecho el Tribunal Superior en su justa dimensión se le hubiese concedido a mis mandantes los derechos posesorios en litigio.
>
> SEGUNDO: La sentencia recurrida le dio mayor valor probatorio a la diligencia de inspección ocular visible a f. 238-239 y a las declaraciones de testigos sospechosos los cuales son de familia de ZORAIDA BARRIA, como el testimonio de ISMAEL BARRIA QUINTERO (f. 255), quien es hermano de la demandada, por lo tanto al darle mayor valor probatorio a la inspección ocular y a la declaración de ISMAEL BARRIA QUINTERO el Tribunal Superior consideró esta prueba como suficiente y no valoró en sana crítica los testimonios aludidos en el hecho anterior, ya que los testigos desvirtúan la versión de ZORAIDA BARRIA en cuanto que señalan que han sido mis mandantes los que han trabajado ese globo de terreno, mientras que la inspección ocular quiere hacer ver lo contrario, por lo tanto se incurrió en un error de apreciación de la prueba porque se le dio valor probatorio a un testigo sospechoso.

TERCERO: Los testimonios de LORENZO APARICIO (f. 223), ADOLFO RIOS BARRIA (F. 224), ROMAN MENDOZA (F. 225), ELADIO PINTO CRUZ (F. 226), GREGORIO RIOS PEREZ (F. 228), RAFAEL BARRIA HERNANDEZ (F. 247- 248), JULIAN BARRERA MARIN (F. 249-250) y ANGELICA AVILA CRUZ (F. 251-252) señalan claramente que el globo de terreno objeto de este proceso ha sido trabajado limpiado y cultivado por mis mandantes y esta prueba debió tener mayor valor probatorio que la inspección ocular, sin embargo el Tribunal Superior le dio mayor valor probatorio a la inspección ocular y no así a estos testimonios los cuales coinciden en circunstancias de modo, tiempo y lugar, que ANTOLINO BARRIA y JUSTO BARRIA son las personas que siempre han trabajado el globo de terreno en litigio, mientras que ZORAIDA BARRIA, jamás ha trabajado, ni cultivado esa tierra." (Fs. 302-303)

Como normas violadas y explicación de cómo lo han sido, el casacionista cita los artículos 770 y 904 del Código Judicial y los artículos 606 y 423 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

El cargo de injuricidad contenido en el primer motivo, estriba en que en su fallo el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, no valoró ni apreció debidamente y según las reglas de la sana crítica por considerarlos contradictorios y sospechosos, los testimonios de las siguientes personas: LORENZO APARICIO (F. 223); ADOLFO RIOS BARRIA (f. 224); ROMAN MENDOZA (F. 225); ELADIO PINTO CRUZ (f. 226); GREGORIO RIOS PEREZ (F. 228); RAFAEL BARRIA HERNANDEZ (F. 247-248), JULIAN BARRERA MARIN (f. 249-250) y ANGELICA AVILA CRUZ (f. 251-252).

Al observar la sentencia impugnada en relación con los testimonios citados por el recurrente, y otros, se denota que el fallo consideró que los referidos testigos se expresaban con las mismas palabras lacónicas, sin profundidad e inexactitudes. En otras palabras, los referidos testimonios, por su propio contenido, no lograron el suficiente grado de convicción en la mente del juzgador que lo llevara a dar por probado los hechos de la demanda en cuanto a la posesión alegada por los demandantes.

Igualmente, de acuerdo a la sentencia impugnada, el Tribunal Superior consideró, después de valorar la inspección ocular realizada al lote en litigio, que con dicha prueba se constata que la parte demandante no ejerció posesión alguna sobre la propiedad.

En contraposición a las declaraciones que el recurrente considera mal valoradas, se observa también que el Juez ad-quem valoró y tomó en cuenta otras pruebas testimoniales aportadas por la parte demandada que demuestran, de manera fehaciente, que ésta es la poseedora del bien en disputa.

Para la Sala, el Tribunal Superior, contrario a lo alegado por el recurrente, sí actuó según las reglas de la sana crítica, valorando en su conjunto las pruebas allegadas al proceso y en especial al apreciar los testimonios en la forma en que lo hizo, y en concurrencia con las otras pruebas del expediente.

En los motivos segundo y tercero el recurrente reitera la mala apreciación que de los testimonios hizo el Tribunal Superior para lo cual nos remitimos a lo expuesto en el motivo anterior respecto a la sana crítica utilizada por el juzgador.

Con respecto a la prueba de la inspección ocular, según el casacionista se le dio mayor valor probatorio que a ciertos testimonios que prueban la posesión de los demandantes, considerando por tanto esta prueba de inspección como mal valorada.

Al observar los comentarios de la sentencia respecto a la prueba de inspección ocular, sobre la misma se indica que con ella se demostró que en el lote en litigio "no existen pastos para ganado, siembros, ni cercas en buen estado, con lo que se comprueba que los demandantes no están ejerciendo derechos de posesión alguno sobre la propiedad en litigio ..." (F. 278).

La diligencia de inspección ocular, que fue solicitada por los demandantes y que consta a fojas 238-239 del expediente, la realizó el Juez Municipal de los Pozos en asocio de testigos y con ella se pudo constatar, como se indica en la propia diligencia, que el terreno en disputa:

> "... no tiene cultivos, ni pasto para ganado, ni tiene ninguna construcción o mejoras dentro del terreno, la misma presenta matorales (sic) a manera de monte, y se encuentra descuidada, cerca descuidada, en parte 2 hilos, No tiene estacones en buen estado. Punto 3, no tiene mejoras, según se observa en esta inspección en los últimos 3 años no se ve animo (sic) de dueño."

La verificación anterior, no tiende más que a comprobar que la posesión que alegan los demandantes en los hechos de su demanda no ha sido probada pues no hay que perder de vista que, de acuerdo al último párrafo del artículo 945 del Código Judicial, la inspección judicial constituye una prueba más o menos completa, según la naturaleza de su contenido y de lo que mediante ella se observe, y la misma debe ser apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Además, es de observar que tal como consta en dicha diligencia, a fojas 237 y 239, los demandantes fueron participes de la misma y sobre este punto de la inspección no presentaron observación alguna a pesar de tener dicha facultad que le otorga el tercer párrafo del artículo 945 ibidem.

De lo anterior resulta que no se ha producido la alegada infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto la apreciación de la prueba y al no incurrir el Tribunal Superior en la causal de fondo invocada, no existen méritos para casar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el día 30 de junio de 1997 dentro del proceso ordinario de Oposición a la Adjudicación de Título interpuesto por ANTONIO o ANTOLINO BARRIA RIOS y JUSTO BARRIA HERNANDEZ contra ZORAIDA BARRIA QUINTERO.

Las costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria De la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada SELENIA ISABEL CANTO DE RUIZ, apoderada judicial de LUIS FELIPE ESTENOZ, recurre en casación contra la Sentencia de 9 de agosto de 1999

proferida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio promovido por LUIS FELIPE ESTENOZ contra FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Posteriormente se le dio traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera su concepto, dada la naturaleza del negocio, recibiendo la Sala la Vista N° 23, de 21 de diciembre de 1999 (fojas 180-182).

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además que el mismo procede por razón de que se trata de un proceso de divorcio y la resolución que se impugna es recurrible en casación.

En el presente recurso extraordinario, se presentan dos causales, la primera de ellas es: "error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". Se observa que tanto los motivos, como las normas de derecho consideradas infringidas; así cómo su respectiva explicación, cumplen de manera general con los requisitos que exige la ley.

En cuanto a la segunda causal, "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución", el recurrente presenta cinco motivos, en el primero de ellos no determina cuáles son las pruebas que considera apreciadas erróneamente; es decir, no individualiza a que fojas descansan las pruebas supuestamente mal valoradas. En cuanto a los demás motivos, se encuentran formulados adecuadamente.

Con respecto a la citación de las normas infringidas y la explicación de cómo lo han sido, el casacionista hace alegaciones, conteniendo en ellas situaciones fácticas que extrae del proceso, las que no son propias de la formalidad de este recurso, pues en el mejor de los casos deben plantearse en los motivos, siempre que, naturalmente, se formulen en forma de censura a la sentencia y que las mismas constituyan cargos contra el fallo. Dentro de la citación de las normas, el recurrente debe concretarse a una breve explicación de la forma en que se ha dado la violación de las disposiciones.

Los errores anotados deben ser subsanados por el recurrente.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la primera causal y ORDENA LA CORRECCIÓN de la segunda causal del recurso de casación en el fondo promovido por LUIS FELIPE ESTENOZ, mediante apoderada judicial, para lo cual le concede el término de cinco (5) días, tal como lo pauta el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil.

Notifiquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER R.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARCADIO J. VILLALAZ R. L. INTERPONE RECURSO DE CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE LASTENIA AMAYA DE PRADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado RAUL GARCIA C., en nombre y representación de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARCADIO VILLALAZ R. L., interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial el 21 de octubre de 1999, en el proceso ordinario de mayor cuantía que a la recurrente le sigue la señora LASTENIA AMAYA DE PRADO.

Repartido el recurso, se le mandó a poner en lista por el término de ley para alegatos de admisibilidad, siendo aprovechado por las partes. Habiendo vencido la fase procesal de alegatos, corresponde a la Sala el examen del escrito contentivo del recurso, para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1166 del Código Judicial, inherentes a este tipo de recurso.

El recurso fue formalizado en tiempo, contra resolución recurrible en casación y dentro de un proceso con una cuantía superior a los diez mil balboas (B/.10,000.00).

El casacionista invoca una sola causal de fondo, "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 de la Ley procesal.

En sustento de la causal se presentan tres motivos. En los mismos se refiere el casacionista como prueba mal valorada, a las copias del proceso penal seguido a la señora LASTENIA AMAYA DE PRADO, parte demandante en el proceso que se recurre, por el delito contra la propiedad en perjuicio de la demandada, COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARCADIO VILLALAZ; no obstante, no precisa el casacionista en que consistió la mala valoración de dicha prueba ni la forma como la mala valoración del medio probatorio indicado pudo influir en la decisión recurrida.

El cargo de injuricidad que se presenta en el segundo de los motivos, hace relación a la errónea aplicación por parte del ad-quem de la Ley 31, de 28 de mayo de 1998, situación que configura una causal diferente a la invocada, por lo que no resulta viable el cargo contenido en el motivo examinado.

El tercer motivo, tampoco contiene cargo de injuricidad preciso contra la sentencia de segundo grado, por el contrario, incurre el casacionista en alegaciones y argumentaciones no propias de este aparte del recurso, de ahí que valga manifestar, como en ocasiones anteriores lo ha hecho la Sala, que los motivos del recurso no son un aparte para alegar ni exponer apreciaciones personales acerca del fallo censurado, sino para exponer, exclusivamente, el vicio de ilegalidad que se denuncia contra la sentencia recurrida, es decir, la violación legal en la que, supuestamente, ha incurrido el ad-quem al proferir la decisión recurrida.

Las normas de derecho que se dicen infringidas son, la contenida en los artículos 770, 772, 773, 782 del Código Judicial; y en los artículos 1 y 2 de la Ley 31 de 1998, 1 del Código Penal y 43 de la Constitución Nacional.

Respecto de las normas citadas como infringidas, debe señalar esta Sala que sólo la primera, que se refiere a la sana crítica como sistema legal de valoración probatoria aplicable por el ad-quem, resulta congruente con la causal que se invoca. El resto de las disposiciones citadas no guardan relación con la

valoración del medio probatorio indicado por el casacionsita, inclusive incurre el recurrente en el error de citar una norma de rango constitucional, cuando la casación es un recurso para impugnar, exclusivamente, infracciones legales o reglamentarias.

De otro lado, tampoco cita el casacionista normas de carácter sustantivo, es decir, las que consagran el derecho sustantivo que, producto del error probatorio, resulta desconocido. Cabe reiterar aquí el criterio esbozado por la Sala en innumerables fallos acerca del error probatorio, el cual por si sólo no es convalidable, sino, cuando de dicho error probatorio resulte un perjuicio a un derecho legal consagrado.

De lo que viene expuesto, resulta que el escrito contentivo del recurso no cumple con los requisitos inherentes al recurso, por lo que procede la inadmisión del recurso, conforme lo dispone la ley procesal.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo presentado por COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARCADIO VILLALAZ R. L., mediante apoderado legal, en el proceso ordinario de mayor cuantía que a la recurrente le sigue la señora LASTENIA AMAYA DE PRADO.

Notifíquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER R.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HACIENDA LA ROMANA, S. A. Y COCLE AGRICOLA, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE A CARLOS AGUILAR Y CARLOS ARAUZ ARANGO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense, BERRIOS Y BERRIOS, como apoderada judicial de HACIENDA LA ROMANA, S. A. Y COCLE AGRICOLA, S. A., parte demandante en el proceso ordinario de mayor cuantía que le sigue a CARLOS AGUILAR ALBAEZ y CARLOS ERNESTO ARAUZ ARANGO, presentó a esta Sala de lo Civil SOLICITUD DE MODIFICACION DE COSTAS de la sentencia dictada por esta Corporación el 17 de enero de 2,000.

La solicitud de modificación de costas presentada establece en su parte medular lo siguiente:

> "Solicitamos se reforme la sentencia fechada 17 de enero de 2000 en cuanto a la condena en costas por la suma de B/.2,000.00; ya que las sociedades demandante (sic) actuaron de buena fe y, por lo tanto, el único extremo que no se probó, según esta alta Corporación, fue la relación de causalidad entre el daño causado la conducta de los demandados."

Del texto reproducido anteriormente se desprende claramente que la apoderada judicial de la demandante considera que las costas son muy elevadas y pretende que se declare que no hay lugar a las mismas, debido a que las demandantes actuaron con evidente buena fe.

El artículo 986 del Código Judicial al respecto en su primer párrafo señala lo siguiente:

> "Artículo 986: la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término".

A juicio de la Sala, las costas impuestas a la parte contra la cual se dictó la sentencia dentro del recurso interpuesto son cónsonas con las actuaciones que se han observado en este caso y, por ello, deben mantenerse en la suma fijada.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de modificación de costas de la sentencia de 17 de enero de 2,000 dictada por esta Sala de la Corte, que decide el recurso de casación interpuesto dentro del proceso ordinario que HACIENDA LA ROMANA, S. A., Y COCLE AGRICOLA, S. A., le siguen a CARLOS AGUILAR ALBAEZ y CARLOS ERNESTO ARAUZ ARANGO.

Notifíquese y Archívese,

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) EMETERIO MILLER R.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA., RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ELECTRORAMA, S. A. Y MAKOV, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procede la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a decidir los méritos del recurso de casación propuesto por el apoderado judicial de NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA., contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 15 de mayo de 1997, dentro del proceso ordinario que le sigue la sociedad recurrente a ELECTRORAMA, S. A. y MAKOV, S. A.

El presente negocio se inició ante el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, cuando NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA. (en adelante NATIONAL) interpuso demanda ordinaria para obtener las siguientes declaraciones:

> "PRIMERO: Que ELECTRORAMA, S. A. en su condición de propietaria del establecimiento comercial "ELECTRORAMA", ubicado en la Avenida Central #18-47 de la Ciudad de Panamá; lugar donde se produjo un incendio el día 24 de diciembre de 1991, es responsable de los daños causados por mojadura y humo causados a la propiedad de EMPRESAS ARROCHA y está obligada a reembolsar a la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. A. la suma que dicha aseguradora pagó a su asegurado EMPRESAS ARROCHA, por los daños causados por el mencionado incendio, cuyo valor fue de OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS (B/.87,264.00).
>
> SEGUNDO: Que MAKOV, S. A. en su condición de propietaria del inmueble donde se produjo y tuvo su origen el incendio ocurrido el 24 de diciembre de 1991 en la ciudad de Panamá, el cual causó daños a la propiedad EMPRESAS ARROCHA está también legalmente obligada, en

> su condición de propietaria de la finca causante de los daños, y debe reembolsar a la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. A. por la suma pagada por dicha aseguradora como indemnización por los daños causados a EMPRESAS ARROCHA, por razón del incendio indicado, cuyo monto total es de OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BALBOAS (B/87,264.00).
>
> TERCERO: Que en caso de oposición, ELECTRORAMA, S. A. y MAKOV, S. A. deben ser condenadas al pago de las costas y gastos e intereses legales de este proceso." (Fs. 44-45)

Una vez cumplidos todos los trámites procesales correspondientes a la primera instancia de estos negocios, el Juez Séptimo dictó sentencia N° 76 fechada 27 de diciembre de 1995, en la que declaró lo siguiente: 1) No probadas las excepciones de fuerza mayor y caso fortuito propuestas por la demandada ELECTRORAMA, S. A.; 2) Probada la excepción de inexistencia de la obligación interpuesta por MAKOV, S. A. y, en consecuencia, la absolvió de toda responsabilidad derivada del siniestro ocurrido en el local comercial de ELECTRORAMA, S. A.; 3) Condenar a ELECTRORAMA, S. A. a pagarle a NATIONAL la suma de dinero reclamada en la demanda, por considerarla responsable de los daños causados por mojadura y humo a la propiedad de EMPRESAS ARROCHA, S. A. durante el incendio; 4) Declarar desiertos los incidentes que al momento de dictarse dicha sentencia, no estaban fallados; y, 5) Condenar a ELECTRORAMA, S. A. al pago de las costas causadas con motivo de la tramitación de este proceso.

Tanto el apoderado judicial de NATIONAL, como el de ELECTRORAMA, S. A. apelaron de esa decisión y el Primer Tribunal Superior de Justicia la confirmó en la sentencia que ahora se impugna en casación, fechada 15 de mayo de 1997.

El recurso de casación interpuesto por NATIONAL consta de dos causales de fondo, que la Sala procede a resolver con la debida separación que requiere la ley.

La primera consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En los motivos que le sirven de sustento, el recurrente alega que el fallo de segundo grado infringió las disposiciones legales que le imponen responsabilidad al propietario de todo edificio, por los daños y perjuicios que resulten de la ruina de todo o parte de él o que sobrevengan de la falta de las reparaciones necesarias; o, también, por la explosión de máquinas e inflamación de sustancias no colocadas de manera segura y adecuada en el área de su finca, al igual que por los humos excesivos que sobrevengan de su propiedad.

Añade que en vista de la falta de aplicación de dichos preceptos legales sustantivos, el Tribunal Superior absolvió a la demandada MAKOV, S. A., en lugar de haberla condenado solidariamente en su condición de propietaria del inmueble desde el cual se causaron los daños y perjuicios reclamados.

Como consecuencia de estos cargos considera que fueron violados el numeral 1 del artículo 28 de la Ley 93 de 1973 y los artículos 1306, 1649 y 1650 del Código Civil.

Efectivamente, al revisar el fallo atacado se advierte que el Tribunal Superior concluyó que, como arrendataria del local incendiado, a ELECTRORAMA, S. A. le era aplicable el artículo 1311 del Código Civil, que a la letra dice:

> "Artículo 1311. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve plazo posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada.

> También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con la misma urgencia, la necesidad de todas las reparaciones comprendidas en el número 2 del artículo 1306.
>
> En ambos casos será responsable el arrendatario de los daños y perjuicios que por su negligencia se ocasionaren al propietario." (Enfasis de la Sala)

El fallo impugnado consideró que ELECTRORAMA, S. A. faltó a la obligación que le impone la disposición legal anteriormente transcrita puesto que, a pesar de que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá le indicó que el tendido eléctrico del local que ocupaba se encontraba en mal estado y debía ser reparado, tal como consta en el documento consultable a foja 167, ésta no se lo comunicó al propietario del inmueble, MAKOV, S. A.; situación que a juicio del Tribunal Superior, exonera de responsabilidad al propietario y excluye la solidaridad de ambas demandadas para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaron a EMPRESAS ARROCHA, en cuyos derechos se subrogó la demandante recurrente, NATIONAL.

Por el contrario, la recurrente argumenta que el propietario del inmueble, es decir MAKOV, S. A., sí es solidariamente responsable en el caso que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1649 del Código Civil que es del tenor siguiente:

> "Artículo 1649. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de las reparaciones necesarias.
>
> Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro-indiviso, se dividirá entre ellas la indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio."

El casacionista afirma que el Tribunal Superior infringió directamente por omisión la norma citada, porque aun cuando se comprobó que la ruina del inmueble propiedad de MAKOV, S. A. sobrevino por falta de las reparaciones necesarias del cableado eléctrico interno de dicho edificio, la resolución atacada exoneró de responsabilidad a dicha sociedad, que es la propietaria del mismo.

La Sala observa que para que surja la obligación del propietario de un edificio de la que habla el citado artículo 1649 del Código Civil, es preciso que concurran los siguientes elementos: 1) La ruina de todo o parte del edificio; 2) Que los daños sean consecuencia de la ruina de ese edificio; y, 3) Que la ruina haya sido causada por falta de las reparaciones necesarias.

Consecuentemente, se debe determinar si en el presente caso se dieron las circunstancias que requiere la mencionada disposición legal, para que surja la responsabilidad del propietario del inmueble de indemnizar los daños reclamados por la recurrente.

LUIS DE GASPERI y AUGUSTO M. MORELLO, en su "Tratado de Derecho Civil" (Tomo IV, Responsabilidad Extracontractual, Buenos Aires, Argentina, 1964), incluyen la siguiente definición de "ruina":

> "g) Ruina. Noción: El significado legal de la palabra ruina se reserva para la destrucción total o parcial del edificio en una de sus partes esenciales, y no en sus implementos secundarios o accesorios." (Pág. 482)

Por su parte, GILBERTO MARTINEZ RAVE, en su obra "Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia", (Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, Colombia, 1995, 8ª edición) define la ruina de un edificio en los siguientes términos:

> "2) Ruina. Inicialmente se puede entender por ruina de un edificio

> su caída, su desmoronamiento. Pero si realmente esas situaciones quedan incluidas en el término ruina no quiere decir que siempre se exigirá que la caída o destrucción sea total. Ruina sería también la caída o destrucción parcial del edificio. Es decir que en el término ruina se incluiría la caída o destrucción total o parcial del edificio o de los materiales que lo componen. No se refiere a la caída de cosas del edificio sino a la caída o destrucción total o parcial de los materiales o elementos que conforman el edificio." (Pág. 282)

Pero, al referirse a la necesidad de que los daños ocasionados a terceros sean consecuencia directa de la ruina del edificio, este último autor aclara lo siguiente:

> "3) Debe existir un nexo indiscutible entre la ruina del edificio y el daño. Daños que tengan por causa un hecho distinto a la ruina no quedan englobados en esta disposición. Por eso se ha sostenido que los daños provenientes de un incendio del edificio no están incluidos en las normas citadas y por lo tanto la responsabilidad que nace de esta situación debe ventilarse a través de las normas generales de responsabilidad. No hay presunción en este caso". (Op. cit., pág. 282) (Enfasis de la Sala)

El fallo atacado consideró que el "agente generador del daño lo constituyó el incendio ocurrido el día 24 de diciembre de 1991, en el local comercial ocupado por ELECTRORAMA, S. A., ubicado en la Avenida Central N° 18-47, el cual se extendió a las instalaciones de EMPRESAS ARROCHA, causándole perjuicios a la propiedad de este tercero." (f. 412)

En otras palabras, el Tribunal Superior estimó que los daños sufridos por EMPRESAS ARROCHA (en cuyos derechos se subrogó NATIONAL) fueron consecuencia del incendio del primero y no de la ruina de dicho inmueble por falta de las reparaciones necesarias del mismo, como prescribe el artículo 1649 del Código Civil. Igualmente, consideró que se había probado la culpa de ELECTRORAMA, S. A. en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados a FARMACIAS ARROCHA y, por tanto, su obligación de resarcirlos.

Habiéndose dado por probados estos hechos, no correspondía la aplicación del artículo 1649 del Código Civil como acertadamente concluyó el fallo impugnado; sino la del artículo 1644 ibidem, que consagra el principio general de las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia y que a la letra dice:

> "Artículo 1644. <u>El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado</u>.
>
> Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados." (Subraya la Sala)

La Sala considera que la conclusión a la que arribó la resolución de segunda instancia se ajusta a derecho; razón por la cual no incurrió en la violación directa por omisión del artículo 1649 del Código Civil.

Por otra parte, tampoco infringió los artículos 28, numeral 1 de la Ley 93 de 1973 y 1306 del Código Civil, que se refieren a las obligaciones del arrendador y que, por tanto, resultan ajenos a este aspecto de la controversia; al igual que los numerales 1 y 2 del artículo 1650 del Código Civil, los cuales consagran la responsabilidad que tiene el propietario de un bien por los daños causados por la explosión de máquinas; inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado; y por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a la propiedad; situación de hecho que al igual de la ruina de los edificios, no corresponde a la del caso en estudio.

Consecuentemente, se descarta la primera causal.

La segunda causal invocada consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

A continuación se transcriben los motivos que le sirven de fundamento:

"PRIMERO: Mediante Sentencia del 15 de mayo de 1997, el Primer Tribunal Superior de Justicia absolvió a MAKOV, S. A. de la demanda de pago de daños y perjuicios, que le fue formulada por la NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA., aseguradora que se subrogó en los derechos de EMPRESAS ARROCHA, por daños y perjuicios sufridos por esta última, por razón de un incendio ocurrido en el edificio de propiedad de MAKOV, S. A. situado en la Ave. 7ª Central, de la ciudad de Panamá, el día 24 de diciembre de 1991.

SEGUNDO: La Sentencia absolutoria del Primer Tribunal Superior de Justicia fundamenta su decisión en la valoración probatoria de un contrato de arrendamiento suscrito entre MAKOV, S. A. y una señora de nombre VEENA COPICHAND NATHANI, supuestamente celebrado el día 24 de septiembre de 1990. (Fs. 286-289), y presume que el solo hecho de la ocupación material de un local, demuestra la existencia de una relación contractual de arrendamiento. (sic)

TERCERO: La absolución se hace descansar por el Honorable Tribunal Superior, en el supuesto hecho de que conforme a la cláusula CUARTA del Contrato de arrendamiento mencionado en el motivo anterior, la responsabilidad de todo lo relacionado con el edificio se hacía recaer en ELECTRORAMA, S. A., (supuesto arrendatario) quedando MAKOV, S. A. propietario del mismo, relevado de toda responsabilidad con respecto al edificio de su propiedad.

CUARTO: ELECTRORAMA, S. A., a quien el fallo impugnado tiene y ha considerado como arrendatario de MAKOV, S. A. conforme al contrato erróneamente meritado. Y mal puede esta última sociedad, desvincularse de su responsabilidad legal, fundándose en dicho contrato suscrito con un arrendatario diferente y que ni siquiera es director y/o dignatario de la sociedad ELECTRORAMA, S. A. (Ver fs. 13).

QUINTO: Al apreciar la prueba del contrato de arrendamiento suscrito entre MAKOV, S. A. con la señora VEENA COPICHAND NATHANDI (Fs. 286-289), como aplicable a la sociedad ELECTRORAMA, S. A., el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA incurre en un error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que le da un valor a dicho documento que no le reconoce la ley.

SEXTO: La errónea valoración legal de la prueba del contrato de arrendamiento, determinó el reconocimiento de una Excepción de inexistencia de la obligación e influyó de manera sustancial en la absolución de MAKOV, S. A. de la demanda de resarcimiento que le fue presentada por la aseguradora demandante.

SEPTIMO: De haber valorado adecuadamente la prueba del contrato de arrendamiento indicado, el Tribunal habría llegado a conclusiones diferentes en cuanto al reconocimiento de una excepción de inexistencia de la obligación totalmente improcedente." (Fs. 433-434)

Como consecuencia de los cargos probatorios expuestos, el recurrente alega la violación del artículo 872 del Código Judicial y de los artículos 974 y 1108 del Código Civil.

El cargo planteado por el recurrente en los motivos se circunscribe a la valoración realizada por el Tribunal Superior del documento consultable a fojas 286-289, en el cual consta el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor RAFAEL SCHWARTZ, en representación de MAKOV, S. A. como arrendadora y VEENA GOPICHAND NATHANI, como arrendataria.

La parte recurrente sostiene que el fallo de segundo grado apreció erróneamente dicho contrato de arrendamiento, al considerar como arrendataria a ELECTRORAMA, S. A., a pesar de que la persona que lo firmó no es siquiera director y/o dignatario de dicha sociedad.

Concluye señalando que ese error probatorio incidió directamente en la decisión del Tribunal Superior de absolver de toda responsabilidad a MAKOV, S. A., quien es la propietaria del inmueble incendiado y, como tal, responsable de los daños ocasionados a EMPRESAS ARROCHA.

Al revisar el documento atacado la Sala observa que, efectivamente, el contrato de arrendamiento fue suscrito entre las personas que indica el recurrente; es decir, que ELECTRORAMA, S. A. no aparece en dicho contrato como arrendataria del inmueble incendiado.

No obstante, dicho documento fue aportado por el apoderado judicial de MAKOV, S. A., mediante escrito de pruebas consultable a fojas 284 y 285 en el que se señala lo siguiente:

> "a) Copia debidamente autenticada por la Notaría Décima del Circuito de Panamá del Contrato de Arrendamiento vigente desde el 1° de octubre de 1990 hasta el 1° de octubre de 1993, suscrito por nuestra representada Makov, S. A. con Electrorama, S. A., sobre el local donde ocurrió el siniestro, y que en su cláusula Cuarta establece la responsabilidad de EL Arrendatario, de mantener el espacio arrendado y todas y cada una de las partes mencionadas en el mismo en buen estado de aseo y conservación, incluyendo los sistemas eléctricos."

El documento al que nos venimos refiriendo no fue impugnado por ELECTRORAMA, S. A. quien, por el contrario, en todo momento reconoció que ocupaba, en calidad de arrendataria, el local comercial que se destruyó en el incendio. Así lo señaló expresamente en la contestación del hecho segundo de la demanda, cuando manifestó lo siguiente:

> "El día 24 de diciembre de 1991, en el inmueble N°. 18-47 de Santa Ana, Avenida Séptima Central, se produjo por causas fortuitas y sin mediación de cualesquier tipo de culpa o negligencia, un incendio que produjo la destrucción total del inmueble. Las causas del incendio se debieron principalmente, a una sobrecarga o fluctuación anormal del voltaje o corriente eléctrica servicio de alumbrado eléctrico público, que provoco (sic) un corto circuito en las instalaciones eléctricas del inmueble en mención.
>
> En un local del inmueble mencionado estaba ubicado el negocio comercial de propiedad de nuestra representada, el cual quedo (sic) completamente destruido por acción del siniestro. Nuestra representada ocupaba el local a título de arrendataria." (F. 53) (Enfasis de la Sala)

En vista de que ELECTRORAMA, S. A. aceptó su condición de arrendataria del local incendiado, propiedad de MAKOV, S. A. y al no haber impugnado el documento consistente en la copia autenticada ante Notario del contrato de arrendamiento aportado como prueba por esta última, debe entenderse que reconoció tácitamente su validez y contenido.

Igualmente, cabe señalar que el demandante recurrente tampoco se opuso en la etapa correspondiente al contrato que ahora pretende impugnar; etapa durante

la cual tenía la oportunidad de alegar todas las objeciones que a bien tuviera, en cuanto a la inconducencia o ineficacia de dicho documento.

Por otra parte, tal como lo reconocieron las sentencias de primera y segunda instancia, quedó demostrado, sin lugar a dudas, que ELECTRORAMA, S. A. ocupaba el local comercial donde se produjo el incendio, lo cual se evidencia con la Licencia Comercial expedida a favor de dicha sociedad por la autoridad correspondiente, en la que se hace constar que esa empresa operaba en dicho inmueble (f. 12); al igual que con el informe de inspección para la prevención de incendios de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que corrobora la presencia física de ELECTRORAMA, S. A. en el local comercial N° 17-47, ubicado en la Avenida Central (f. 167) y en el que se le ordena la reparación del tendido eléctrico y se le hacen otras recomendaciones; todo lo cual la hace responsable directa de los daños causados a EMPRESAS ARROCHA.

En estas circunstancias, debe concluirse que el Tribunal Superior no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación del documento consultable a fojas 286-289 ni, por tanto, en la violación de los artículos 872 del Código Judicial y 974 y 1108 del Código Civil.

En vista de que no hay otros cargos que considerar, la Sala concluye que no existen méritos para casar la sentencia impugnada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 15 de mayo de 1997, dentro del proceso ordinario propuesto por NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, PA. contra ELECTRORAMA, S. A. y MAKOV, S. A.

Las costas de casación se fijan en trescientos cincuenta balboas (B/.350.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAUL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso sumario instaurado por la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.) contra la señora GABRIELA MUTIS, el apoderado judicial de la parte demandada ha presentado solicitud de reforma en cuanto a las costas que le fueron impuestas, mediante resolución dictada por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero de 2000.

Como fundamento de su solicitud alega lo siguiente:

> "En el negocio indicado al margen superior del presente escrito, solicitamos se reforme la sentencia fecha (sic) el día 17 de enero del 2000, en cuanto a la condena en costas por la suma de B/.75.00; ya que, la demandada actuó de buena fe y, por lo tanto, no se

justifica dicha condena.

Esta solicitud se fundamenta en el artículo 986, del Código Judicial, en relación con el artículo 1181 de la misma excerta legal.

En virtud de las consideraciones antes anotadas, solicitamos se reforme la sentencia in examine en el sentido de eliminar la condena en costas a cargo de la demanda (sic); ya que, ésta actuó -como se ha dicho antes- de buena fe." (F. 272)

La Sala observa que la resolución que se pretende reformar declaró inadmisible la segunda causal del recurso de casación interpuesto por la señora GABRIELA MUTIS, en vista de que no corrigió los defectos formales que se le habían señalado en la resolución dictada por esta misma corporación judicial, el 27 de diciembre de 1999.

Al respecto, el artículo 1166 del Código Judicial prescribe lo siguiente:

"ARTICULO 1166. Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas de setenta y cinco (B/.75.00) balboas a quinientos cincuenta (B/.550.00) balboas, según la cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al tribunal del conocimiento." (Enfasis de la Sala)

De la norma transcrita se colige que en el caso que nos ocupa, la condena en costas es el resultado de una imposición legal; razón por la cual no procede su reforma.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de reforma en cuanto a la condena en costas, de la resolución dictada por esta corporación judicial el 17 de enero de 2000, dentro del proceso sumario instaurado por la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.) contra la señora GABRIELA MUTIS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TOMAS BERNAL JIMENEZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE A ISLAS PARAISO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Juan Antonio Morales G., en su condición de apoderado judicial del señor TOMAS BERNAL JIMENEZ, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 8 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario que le sigue la parte recurrente a ISLAS PARAISO, S. A.

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el

recurso de casación en la forma y admitió el de fondo, el cual se procede a resolver, previas las siguientes consideraciones.

El señor TOMAS BERNAL JIMENEZ interpuso demanda ordinaria que le correspondió al Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, contra la sociedad ISLAS PARAISO, S. A., con el objeto de obtener las siguientes declaraciones:

> "A- Que TOMAS BERNAL JIMENEZ, ha adquirido, mediante, el fenómeno jurídico de la prescripción adquisitiva de dominio, la plena propiedad sobre la mitad de la finca número OCHENTA Y CINCO (85), inscrita en el Registro Público de la propiedad, sección provincia de Chiriquí al tomo seis (6), folio TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO (348), que consiste en la Isla denominada BOLAÑOS, situada en el Océano Pacífico.
>
> B- Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al director General del Registro Público de la propiedad, cancelar la inscripción, en cuanto a la mitad se refiere, de la finca Número OCHENTA Y CINCO (85), inscrita al folio trescientos cuarenta y ocho (348) del tomo seis (6), de la sección de la propiedad, provincia de Chiriquí, que consiste en la isla Bolaños, situada en el Océano Pacífico, a nombre de ISLAS PARAISO Sociedad Anónima, y en su lugar se inscriba a nombre de TOMAS BERNAL JIMENEZ, con cédula de identidad personal Número CUATRRO (sic) GUION CIENTO TREINTA Y CINCO GUION CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO (4-135-451).
>
> C- Que en caso de oposición se condene en costas a la demandada." (Fs. 2-3)

Una vez surtidos todos los trámites correspondientes a la primera instancia de estos procesos, el Juzgado Quinto de Chiriquí dictó Sentencia N° 29 de 16 de mayo de 1997, en la que deniega la pretensión del demandante y, en consecuencia, no accede a realizar las declaraciones pedidas por éste; con la respectiva condena en costas que ascienden a la suma de B/.4,500.00.

Inconforme con esa decisión el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la sentencia que ahora se impugna en casación fechada 8 de agosto de 1997, en la que confirmó la resolución de primera instancia.

El recurso de casación consta de una sola causal de fondo: Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En los motivos que le sirven de fundamento, el recurrente alega que el Tribunal Superior valoró erróneamente una serie de pruebas que constan en el proceso, de las cuales se desprende que el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ ejerció la posesión, por más de quince años, sobre la mitad de la Isla Bolaños.

Como consecuencia de dichos errores probatorios alega que la sentencia impugnada incurrió en la violación de los artículos 770, 904 y 906 del Código Judicial y del artículo 1696 del Código Civil, que consagra la prescripción extraordinaria de dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles, por su posesión no interrumpida durante 15 años, sin necesidad de título ni de buena fe.

En primer lugar, el recurrente afirma que el fallo de segundo grado le dio mayor valor a las declaraciones rendidas por los testigos de la parte demandada, señores LEONEL QUIROZ, JOSE ANGEL ARAUZ CONTRERAS y ERNESTO PONCE CABRERA; que a las de los testigos aducidos por él, señores PEDRO DUQUE DIAZ, EDILBERTO BERNAL JIMENEZ y FRANCISCO GONZALEZ, los cuales se analizarán a continuación.

1) LEONEL QUIROZ (fs. 148-157): Trabaja para el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENARE), como Director del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, al cual pertenece la Isla Bolaños.

Manifiesta que tiene veintiún años de trabajar en INRENARE y que conoce la Isla Bolaños desde los años 80. Igualmente, señala que nunca había visto a nadie viviendo en forma permanente en dicho lugar, "salvo los últimos meses que he ido hay una persona allí, he visto y hablado con 3 personas diferentes en el área".

Por último, declara que además de una casa de madera que fue construida aproximadamente en noviembre de 1995, no ha visto ninguna otra construcción, cercas, estaquerías, ranchos de penca, siembras, desmontes o crías de animales domésticos en la Isla Bolaños.

2) JOSE ANGEL ARAUZ CONTRERAS (fs. 158-164): Trabaja en INRENARE desde el 17 de abril de 1984 como guardaparque; labora, específicamente, en el Parque Marino Golfo de Chiriquí, desde su creación en el año de 1994.

Conoce la Isla Bolaños desde hace aproximadamente veinte años y no conoce a ninguna persona que haya residido en ella ni, tampoco, la existencia de edificaciones, siembras o crías de animales domésticos dentro de dicha isla.

3) ERNESTO PONCE CABRERA (fs. 166-179): Es funcionario de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) desde 1989, y ocupa el cargo de Director Regional en la Provincia de Chiriquí desde el año 1994.

Señala que la sociedad ISLAS PARAISO, S. A. suscribió un contrato de servicios técnicos con ANCON el 12 de septiembre de 1994, por medio del cual dicha sociedad le cedió la custodia de las Islas Games y Bolaños a ANCON; asociación que labora en colaboración con INRENARE en el Parque Marino Golfo de Chiriquí.

Al igual que los dos testigos anteriores, afirma conocer la Isla Bolaños y nunca haber visto a ninguna persona habitando permanentemente en él, ni la existencia de construcciones, siembras o cría de animales domésticos en ella.

4) PEDRO DUQUE DIAZ (fs. 47-52): Este testigo afirma conocer la Isla Bolaños y reconoce como dueño de la misma al señor TOMAS BERNAL JIMENEZ, quien se dedicaba a sembrar palmas de coco y a criar puercos en ella, por más de treinta años. Igualmente, sostiene que el demandante recurrente había construido un rancho de pencas y que la última vez que visitó la isla fue en el año de 1985.

5) EDILBERTO BERNAL JIMENEZ (fs. 53-58): Se trata del hermano del recurrente y declara que éste ocupó con ánimo de dueño la Isla Bolaños, hasta la fecha de su muerte, en el año de 1996. Añade que su hermano "tenía palmas de coco, tenía unos puercos y unos tallitos creo que tenía por allí solamente." (F. 56)

6) FRANCISCO GONZALEZ (fs. 59-63): Declara que conoció al recurrente hace muchos años y que también conoce Isla Bolaños. Alega que el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ es quien ha estado ocupando y manteniendo dicha isla, con ánimo de dueño, por veintiún años aproximadamente; en la que tenía una siembra de palmas de coco y cría de puercos.

Por último señala que tiene alrededor de cinco años de no visitar la Isla Bolaños, en la cual estuvo tres veces.

La Sala observa que el recurrente se refiere a la valoración de las declaraciones rendidas por tres testigos aducidos por cada una de las partes, las cuales resultan contradictorias. Al respecto, el artículo 906 del Código Judicial dispone lo siguiente:

"ARTICULO 906. Cuando las declaraciones de los testigos presentados

por una misma parte o por ambas sean contradictorias entre sí, de manera que respecto de cada parte haya número plural de testigos hábiles, debe el Juez tomar en cuenta la vinculación que los testigos tengan o puedan tener con alguna de las partes y si afecta su imparcialidad; lo fundado de la razón de su dicho; el resultado del careo, si hubiere, y asimismo las demás circunstancias que puedan formar su convicción, conforme las reglas de la sana crítica."

La Sala considera que el fallo de segundo grado no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba testimonial examinada, porque los testimonios aportados por la demandada provienen de personas que no tienen relación con ninguna de las dos partes en litigio y que han declarado sobre hechos que les constan por percepción propia, puesto que laboran en la Isla Bolaños.

Por el contrario, se observa que uno de los testigos del recurrente es su hermano, relación de parentesco que podría afectar su imparcialidad. En cuanto a los otros dos testigos, además de declarar que no han visitado la isla desde hace cinco años aproximadamente, se limitan a señalar, sin mayores explicaciones ni elementos de convicción, que el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ es quien la ha venido ocupando, porque sembró palmas de coco en ella y tenía una cría de puercos.

Ahora bien, en cuanto al informe pericial rendido por los técnicos topógrafos FRANCISCO GONZALEZ NIETO y ALCIBIADES ROMERO, consultable a fojas 86-94, a diferencia de lo que manifiesta el recurrente, el mismo no contribuye a probar que el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ ocupó con ánimo de dueño la Isla Bolaños por más de quince años, puesto que en el informe se hacen las siguientes afirmaciones, que más bien comprueban lo contrario: 1) Las personas que ocupan actualmente la Isla Bolaños son los sucesores de TOMAS BERNAL JIMENEZ, pero no aclaran desde cuándo se da dicha ocupación; 2) Existen dos plantaciones de palmas de coco, pero "Sobre quién plantó dichas palmas resulta imposible determinar en una Inspección el nombre de quién lo hizo" (f. 86); 3) Existe una edificación de dos años aproximadamente; y, 4) "... no pudimos constatar la existencia de crianza de animales domésticos de ninguna clase". (F. 87)

Ello, aunado a la Escritura Pública N° 148 de 8 de febrero de 1995, consultable a fojas 111-112, en la que el propio señor TOMAS BERNAL JIMENEZ declara que "desde el año mil novecientos noventa y tres (1993), ejerce los derechos de posesión, derecho que ha venido ejerciendo quieta y pacíficamente en forma exclusiva sobre las extensiones de las islas denominadas: BOLAÑOS, BERRACO y BOLAÑITO", desvirtúan los dichos de los testigos aportados por la parte demandante, los cuales afirman que el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ es quien ha ocupado la Isla Bolaños por más de quince años.

Tampoco contribuye a la posición del recurrente el último documento al cual se refiere en su escrito de casación, visible a foja 110 y reverso, puesto que, en primer lugar, se trata de una copia fotostática que no se encuentra debidamente autenticada, conforme a lo dispuesto en el artículo 844 del Código Judicial.

En segundo lugar, se observa que en dicho documento el señor LEONARDO VASQUEZ le vende al señor TOMAS BERNAL JIMENEZ, "... los derechos posesorios que tiene sobre la extensión de la denominada ISLA BOLAÑOS ubicada en el Archipiélago de Las Paridas ..." los cuales "... ha venido ejerciendo el VENDEDOR con ánimo de dueño, durante más de doce -12- años, en forma exclusiva; habiéndola recibido de manos del difunto NICK MAYER, quien anteriormente la poseía; ...". No obstante, no se ha presentado prueba de que, efectivamente, el señor LEONARDO VASQUEZ ejerciera la posesión como allí se declara.

Por último, cabe señalar que tanto en los testimonios aducidos por la parte actora, como en los hechos segundo y tercero del libelo de demanda, se sostiene

que el señor BERNAL JIMENEZ es quien "... a (sic) ocupado y retenido con ánimo de dueño ...", "... en forma pública, pacífica y no interrumpida, por más de veinte -20- años, la Isla Bolaños ..." (f. 3); y no, como sugiere el documento consultable a foja 110, que estuviere completando el término necesario para la prescripción adquisitiva, uniendo el tiempo de su posesión a la del señor LEONARDO VASQUEZ.

En estas circunstancias, la Sala concluye que no existen méritos para casar el fallo impugnado, puesto que el Tribunal Superior no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de las pruebas analizadas ni, por ende, en la infracción de los artículos 770, 904 y 906 del Código Judicial y del artículo 1696 del Código Civil.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 8 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor TOMAS BERNAL JIMENEZ contra ISLAS PARAISO, S. A.

Las costas de casación se fijan en trescientos balboas (B/.300.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INMOBILIARIA MARCHENA, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE DEL C. PEREZ ANGULO Y/O PEREZ ANGULO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Diener Vinda, apoderado especial de la sociedad INMOBILIARIA MARCHENA, S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 8 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario que le sigue la sociedad recurrente a JOSE DEL CARMEN PEREZ ANGULO y/o PEREZ ANGULO, S. A.

Cumplidos los trámites de rigor, procede la Sala a determinar si el negocio cumple con los requisitos que la ley exige para su admisibilidad.

En ese sentido se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por persona hábil; y que la resolución impugnada es recurrible en casación por su naturaleza y también por la cuantía del proceso.

En cuanto al escrito de formalización se observa que se invoca una sola causal de fondo: infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida; causal que se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Al analizar los motivos que le sirven de fundamento la Corte observa que en los cuatro primeros, el recurrente ataca la valoración de la prueba documental y testimonial aportada por ella; pero limitándose a señalar que se les "negó el valor probatorio de documentos públicos"; que se "violó el ordenamiento jurídico al negarle a unos y restarle a otros el correcto valor que le otorga la Ley"; concluyendo en el motivo quinto que el Tribunal Superior se equivocó "en la

apreciación de todas las pruebas aportadas por la parte actora en el proceso". (F. 213)

En la manera como han sido expuestos, los motivos no sustentan debidamente la causal invocada. Es preciso reiterar que el recurso de casación no constituye una tercera instancia en la que debe revisarse todo el proceso, sino un recurso extraordinario dirigido contra el fallo de segundo grado y los posibles vicios concretos en los que según el casacionista se haya incurrido.

Por tanto, en el apartado correspondiente a los motivos, el recurrente debe hacer los cargos precisos contra esa decisión y, tratándose de la causal de error de derecho, debe explicar cómo cada una de las pruebas que considera erróneamente valoradas, influyeron en la decisión atacada.

Ahora bien, al revisar las disposiciones legales que se estiman infringidas y la explicación de cómo lo han sido, la Sala advierte que el recurrente ha incluido los artículos 769, 682 y 978 del Código Judicial, los cuales son incongruentes con la causal invocada en esta oportunidad.

Consecuentemente, se debe corregir el recurso conforme a lo que se ha señalado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de INMOBILIARIA MARCHENA, S. A., para lo cual se le concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Luis Alberto Romero Araúz, apoderado especial de la señora MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ, interpuso recurso de casación contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 19 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario propuesto por la recurrente contra CAJA DE SEGURO SOCIAL.

El recurso de casación fue admitido por esta corporación judicial, razón por la cual se procede a decidir el mérito del mismo, previas las siguientes consideraciones.

La señora HUEMER DE PEREZ promovió demanda ordinaria ante el Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, con el objeto de obtener las siguientes declaraciones:

> "PRIMERA: Que la demandante, MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ y la CAJA DE SEGURO SOCIAL, no están obligadas a cumplir por error judicial cometido en perjuicio de MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ, la Resolución de 29 de Abril de 1996, proferida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la

demanda de Plena Jurisdicción propuesta por MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ, para que se declarasen nulas por ilegales, los siguientes actos procesales, a saber:

(a) La nulidad de la resolución N° 0849-95 de 31 de Enero de 1995, mediante la cual se removió de su cargo a la Sra. María Luisa Huemer de Pérez, y de su acto confirmatorio;

(b) Que se declare el silencio administrativo, puesto que han pasado dos meses desde que se presentó la apelación del acto confirmatorio Resolución N° 1729-95 de 14 de marzo de 1995 y que se declare que la vía gubernativa se encuentra agotada;

(c) El restablecimiento del derecho subjetivo vulnerado por la Resolución N° 0849-95 de 31 de Enero de 1995 y su acto confirmatorio, y que en consecuencia,

I. Se declaren nulas estas resoluciones;

II. Se restituya a la Sra. María Luisa H. de Pérez a su cargo de Sub-Agente Administrativo en la Agencia de David;

III. Que se le reconozcan y peguen sus salarios dejados de percibir;

IV. Se le reconozcan (sic) el pago de su mes de vacaciones.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, la CAJA DE SEGURO SOCIAL, está obligada a restituír (sic) a la señora MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ, en su cargo de Sub-Agente Administrativo de la Agencia de David;

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores la CAJA DE SEGURO SOCIAL, está obligada a indemnizar por daños y perjuicios a la señora MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ, la suma de SETECIENTOS SETENTA BALBOAS (B/.770.00) por mes, a partir del día 1 de Febrero de 1995 y los meses que se sigan venciendo a partir de esa fecha, hasta que la señora MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ sea restituida en su cargo de Sub-Agente Administrativo de la Agencia de David, de la Caja de Seguro Social." (Fs. 3-4)

Al momento de revisar la demanda el Juzgado Quinto concluyó que la misma era improcedente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 203 de la Constitución Nacional y 100 del Código Judicial; razón por la cual la rechazó mediante Auto N° 780 de fecha 12 de mayo de 1997.

La demandante apeló de esa decisión y el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial la confirmó en la resolución que ahora se impugna en casación, fechada 19 de agosto de 1997.

La única causal de forma invocada se encuentra consagrada en el ordinal 2 del artículo 1155 del Código Judicial: "Por haber sido dictada por un Tribunal integrado en contravención a la ley".

En los motivos que le sirven de fundamento a dicha causal, la parte recurrente alega que la resolución atacada es un auto que le pone fin al presente proceso ordinario y que entraña la extinción de la pretensión, puesto que rechazó la demanda ordinaria por considerarla improcedente. Consecuentemente, estima que dicho auto debió ser resuelto por el Pleno del Tribunal Superior; es decir, por el voto de los tres Magistrados que integran dicha corporación judicial y no por el de dos como en efecto ocurrió; contraviniendo así el artículo 137 del Código Judicial, que a la letra dice:

"ARTICULO 137. En el Primer y Segundo Tribunal Superior de Justicia,

> las sentencias serán firmadas por el Sustanciador y por los dos Magistrados que le siguen en orden alfabético. En los otros Tribunales Superiores, las firmarán los Magistrados que integran la Corporación.
>
> Los autos serán firmados por dos Magistrados y las providencias por el Sustanciador. Se exceptúan los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, los cuales serán firmados de acuerdo al inciso anterior." (Enfasis de la Sala)

En primer lugar, se ha podido constatar que, efectivamente, el auto impugnado se encuentra firmado únicamente por dos de los Magistrados que integran el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

En segundo lugar, la Sala considera que le asiste razón a la parte recurrente cuando sostiene que la resolución atacada es un auto que entraña la extinción de su pretensión; puesto que tratándose del auto que confirma la decisión de primera instancia que rechazó la demanda ordinaria por considerarla improcedente, no se puede continuar con dicho proceso.

En estas circunstancias, debe concluirse que se ha incurrido en la causal de forma invocada, puesto que la resolución impugnada fue dictada por un Tribunal integrado en contravención a la ley, violando como consecuencia de ello el citado artículo 137 del Código Judicial.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, INVALIDA la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 19 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario instaurado por MARIA LUISA HUEMER DE PEREZ contra CAJA DE SEGURO SOCIAL y, conforme a lo dispuesto en el artículo 1183 del Código Judicial, ORDENA devolver el expediente a dicho Tribunal para que dicte la resolución correspondiente, con la firma de los tres Magistrados que lo integran.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GABRIELA MUTIS RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE LA SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD B. (REPRESENTADA POR DORIS E. PIAD DE JELENSZKY, ESTELA I. PIAD H., MICHELLE J. PIAD H., CARLOS RAÚL PIAD H. Y RODOLFO E. PIAD H. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso sumario instaurado por la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.) contra la señora GABRIELA MUTIS, el apoderado judicial de la parte demandada ha presentado solicitud de reforma en cuanto a las costas que le fueron impuestas, mediante resolución dictada por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero de 2000.

Como fundamento de su solicitud alega lo siguiente:

> "En el negocio indicado al margen superior del presente escrito, solicitamos se reforme la sentencia fecha (sic) el día 17 de enero

> del 2000, en cuanto a la condena en costas por la suma de B/.75.00; ya que, la demandada actuó de buena fe y, por lo tanto, no se justifica dicha condena.
>
> Esta solicitud se fundamenta en el artículo 986, del Código Judicial, en relación con el artículo 1181 de la misma excerta legal.
>
> En virtud de las consideraciones antes anotadas, solicitamos se reforme la sentencia in examine en el sentido de eliminar la condena en costas a cargo de la demanda (sic); ya que, ésta actuó como se ha dicho antes de buena fe." (F. 272)

La Sala observa que la resolución que se pretende reformar declaró inadmisible la segunda causal del recurso de casación interpuesto por la señora GABRIELA MUTIS, en vista de que no corrigió los defectos formales que se le habían señalado en la resolución dictada por esta misma corporación judicial, el 27 de diciembre de 1999.

Al respecto, el artículo 1166 del Código Judicial prescribe lo siguiente:

> "ARTICULO 1166. Si el recurso adolece de defectos de forma, la Corte ordenará su corrección, señalando al recurrente las deficiencias o defectos. Si el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco días, la Corte declarará inadmisible el recurso, con costas de setenta y cinco (B/.75.00) balboas a quinientos cincuenta (B/.550.00) balboas, según la cuantía o la importancia del asunto y devolverá el proceso al tribunal del conocimiento." (Enfasis de la Sala)

De la norma transcrita se colige que en el caso que nos ocupa, la condena en costas es el resultado de una imposición legal; razón por la cual no procede su reforma.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de reforma en cuanto a la condena en costas, de la resolución dictada por esta corporación judicial el 17 de enero de 2000, dentro del proceso sumario instaurado por la SUCESION INTESTADA DE CARLOS RAUL PIAD (Q. E. P. D.) contra la señora GABRIELA MUTIS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALGIS G. ALVARADO Y ARTURO GARCIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A ERNESTO CARRASCO L. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de fecha 14 de mayo de 1999 dictada por la Sala, se admitió, después de ser corregido, el recurso de casación en la forma interpuesto por el Licenciado CANDELARIO SANTANA VASQUEZ en su condición de apoderado judicial de los señores ALGIS G. ALVARADO y ARTURO GARCIA, dentro del proceso ordinario instaurado por éstos en contra de ERNESTO CARRASCO L.; ADA MARIA

VERGARA; OLMEDO VILLARREAL; JORGE E. VILLARREAL DIAZ Y MARTA GISELA VILLARREAL DE GONZALEZ.

El recurso se interpuso contra la sentencia de 10 de abril de 1997 y la Resolución de 21 de julio de 1997 que resuelve Solicitud de Aclaración de Sentencia, ambas dictadas por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y concluido el término de alegatos, que fue aprovechado por el recurrente, procede la Sala a dictar la sentencia de mérito, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

Las constancias procesales revelan que los señores ALGIS G. ALVARADO y CARLOS ARTURO GARCIA, a través de apoderado judicial interpusieron proceso ordinario de mayor cuantía en contra de los señores ERNESTO CARRASCO L.; ADA MARIA VERGARA; OLMEDO VILLARREAL; JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ y MARTA GISELA VILLARREAL DE GONZALEZ, a fin de que fueran condenados a pagar a los demandantes la suma de B/.28.000 en concepto de daños y perjuicios, lucro cesante, costas e intereses.

La reclamación, de acuerdo a los demandantes, se originó a consecuencia de la colisión de automóviles ocurrida el día 28 de diciembre de 1993 y en el que resultó responsable, según Resolución No. 1175 de 14 de marzo de 1994 del Juzgado Segundo de Tránsito, el señor ERNESTO CARRASCO L., conductor de uno de los vehículos (Autobus 8B-511), que resultó ser propiedad de ADA MARIA VERGARA y que en virtud de secuestro a favor de JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ, el referido vehículo se encontraba bajo la responsabilidad de la depositaria judicial MARTA GISELA VILLARREAL DE GONZALEZ.

Como consecuencia de los daños causados al vehículo (autobús 8B-177) de propiedad de uno de los demandantes, el señor OLMEDO VILLARREAL se comprometió a su reparación sin que se cumpliera con este compromiso, devolviendo el vehículo a su propietario sin funcionar adecuadamente, resultando una pérdida total, de donde de acuerdo a la parte actora, todos quedan obligados solidariamente a responder por los perjuicios causados.

Sometida la demanda a las reglas del reparto, la misma le es adjudicada al Juez Primero del Circuito de lo Civil, quien después de correrla en traslado a los demandados y agotar todas las etapas procesales correspondientes, dicta la sentencia No. 39 de 19 de julio de 1996, mediante la cual se resuelve no acceder a las pretensiones de los demandantes de condenar a los demandados al pago de la indemnización solicitada.

La sentencia fue apelada por el apoderado de los demandantes, apelación que fue resuelta por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante fallo de 10 de abril de 1997 que revocó la sentencia apelada y en su lugar condena en abstracto a ERNESTO CARRASCO L.; ADA MARIA VERGARA y MARTA GISELA VILLARREAL DE GONZALEZ a pagarle a los demandantes el lucro cesante dejado de percibir, producto de la colisión, fijándose en el fallo las bases para la liquidación correspondiente.

Dentro del término correspondiente, el apoderado de los demandantes presentó Solicitud de Aclaración de Sentencia, solicitud que recaía sobre varios puntos, siendo resuelta mediante resolución de 21 de julio de 1997 (fs. 203-206) en el sentido de acceder únicamente a adicionar la sentencia de 10 de abril de 1997 y absolver de la pretensión de la demanda, a los demandados OLMEDO VILLARREAL y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ.

Es en contra de estas dos últimas resoluciones proferidas por el Primer Tribunal Superior que se ha anunciado y formalizado el recurso de casación en la forma, que ahora nos ocupa.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en la forma, cuya causal única que se invoca es "Por contener la decisión en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones ambiguas o contradictorias que subsisten a pesar de haberse pedido en tiempo aclaración de ella". "La referida causal está contemplada en el numeral 8 del artículo 1155 del Código Judicial.

El impugnante estableció como único motivo para fundamentar dicha causal, el que a continuación se transcribe:

> "MOTIVO UNICO: El cargo de injuricidad contra la Resolución dictada en Segunda instancia por el Primer Tribunal Superior de justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que sustenta la causal invocada, consiste en que, a pesar de haberse solicitado aclaración de la Sentencia, la Resolución que la desata persiste en mantener declaraciones ambiguas y contradictorias en su parte resolutiva.
>
> Los Hechos que constituyen las faltas de la Resolución atacada y que configuran la causal invocada se concretizan en los siguientes aspectos:
>
> a). La Resolución atacada revoca la Sentencia de Primera Instancia; sin embargo, no guarda congruencia entre su parte motiva y su parte resolutiva al condenar en abstracto sin dereminar (sic) el daño emergente y el lucro cesante.
>
> b). Que la Resolución impugnada y su aclaración no fija claramente el período que cubre el lucro cesante, dejando de lado si el mismo corre hasta la presentación de la Demanda o hasta la ejecutoria de la Resolución del Juzgado Segundo de Tránsito (Resolución N . 1175 de 14 de marzo de 1994) o hasta el momento de la reparación del daño (en el entendimiento de que hubo pérdida total).
>
> c). Que por vía de la aclaración se resuelve adicionar el fallo principal absolviendo a los demandados OLMEDO VILLARREAL y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ, de manera incongruente e irregular en contradicción con el Artículo 986 del Código Judicial que cita en su parte motiva." (Fs. 234-235).

En otro sentido, el impugnante expuso como disposición legal violada y explicación de cómo lo ha sido, el artículo 986 del Código Judicial.

CRITERIO DE LA SALA

Advierte la Sala que el cargo de injuricidad expuesto en el motivo único que sustenta la causal, consiste, básicamente, en que la Resolución dictada por el Tribunal Superior para aclarar la sentencia proferida por dicho Tribunal, persiste en mantener declaraciones ambiguas y contradictorias en su parte resolutiva.

En tal virtud, prosigue manifestando el casacionista, la sentencia recurrida continúa manteniendo fallas ya que la misma no guarda congruencia entre su parte motiva y la parte resolutiva al condenar en abstracto sin dirimir lo relativo al daño emergente y el lucro cesante; que ni la sentencia ni su aclaración, fijan claramente el período que cubre el lucro cesante y finalmente, que la aclaración, al adicionar la sentencia, absolviendo a los demandados OLMEDO VILLARREAL y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ, incurre en contradicción con el artículo 986 del Código Judicial que cita en la parte motiva de la resolución aclaratoria.

Es importante transcribir lo que expuso el fallo de segunda instancia en lo relativo a la indemnización por los daños y el lucro cesante reclamado por los demandantes, así como también lo que indicó en su parte resolutiva:

"Los daños materiales que en esta oportunidad se reclaman de parte del actor, se refieren a los señalados en la resolución administrativa que los contiene (fs. 6). No obstante, la posibilidad de la existencia de daños mecánicos, las dejó el Juez de Tránsito a la demostración por parte del afectado, ya que, al quedar tal elemento obligacional, atribuible al responsable de la colisión, consignado en dicho fallo, su reconocimiento no era implícito, sino sujeto a comprobación.

Tal elemento, a decir del fallo de grado, no es reconocido por no ser sustentado con prueba contundente al respecto. En efecto, al estar el actor sometido por el artículo 773 del Código Judicial, a sostener la carga probatoria de los hechos que contienen su pretensión, su deber era presentar los elementos de prueba suficientes que dieran pie para lograr una sentencia que le reconociera el rubro de los daños mecánicos.

La prueba pericial existente a fojas 69-75, que pudiera dar luces sobre los posibles daños mecánicos del autobús afectado en la colisión, no encuentra pertinencia en este proceso, pues no hay constancias en él sobre la inmediación del juez en dicha prueba, tal como lo exige el artículo 771 del código Judicial. Al no existir constancia mediante acta levantada el día en que se llevó a cabo tal prueba, tal elemento probatorio se ve disminuido en el proceso.

De allí entonces, que el criterio de este Tribunal, tienda a desestimar el reconocimiento de los daños mecánicos reclamados por el actor, al no estar dicho rubro comprobado en el proceso.

En cuanto a los demás daños ocasionados sobre la carrocería del autobús propiedad del actor, los mismos quedan excluídos de esta reclamación, pues tal daño fue objeto de reparación, según se infiere de las pruebas aportadas por la parte demandada, con el propósito de enervar los efectos de la pretensión formulada en ese aspecto.

En efecto a fojas 85, reposa un documento suscrito por el señor Cesar Mathews, quien en su condición de representante legal del taller Auto Servicio Augusto, S.A., informa sobre las reparaciones de chapistería a las que fue sometido el autobús con matrícula 8B-177, propiedad del demandante, además de la fecha de ingreso y salida del mismo y las condiciones en que quedó luego de ser reparado (fs. 89-90).

La pertinencia de las pruebas señaladas para ser reconocida como elemento de convicción en la encuesta, dimana del reconocimiento de la firma y su contenido dentro del proceso por parte de su suscriptor y de las personas mencionadas en el mismo (fs. 102, 108 y 121-122), así como de las fotografías existentes en el subjudice. (Fs. 113).

Esos documentos privados, aportados al proceso por la parte demandada, y que emanan de terceros, reúnen las condiciones deparadas por el artículo 858 del Código Judicial, para ser considerados como plena prueba, lo cual viene a desvirtuar la reclamación del actor en ese sentido." (fs. 191-193).

Con respecto al lucro cesante manifestó la sentencia, lo siguiente:

" III DEL LUCRO CESANTE
Este rubro solicitado por el actor y que no fue considerado por el fallo que se revisa, encuentra su permisibilidad, al contemplarlo así la resolución administrativa que le impone la sanción al

conductor del vehículo culpable de la colisión; puesto que al quedar sentenciado por el a-quo, que los daños materiales fueron cubiertos por la parte demandada, se mantenía para el actor el derecho a reclamar el lucro cesante derivado del perjuicio ocasionado por la colisión, al ser su vehículo colisionado de los destinados al servicio de transporte público.

El lucro cesante como figura jurídica encuentra su regulación en nuestro medio sustantivo en el artículo 991 del Código Civil, cuando dispone lo siguiente:

"Artículo 991. La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo, el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos anteriores".

No obstante, las divisas económicas que dicho servicio de transporte público generaba para su propietario, al no encontrar demostración palpable de parte del actor en este proceso, indica la necesidad de realizarlo mediante la fórmula permitida por el artículo 983 del Código Judicial, para lo cual este Tribunal fijará las bases de su liquidación". (fs. 194-195).

De lo expuesto, el Primer Tribunal Superior concluyó, que el único rubro a reconocer, como perjuicio causado, fue el relativo al lucro cesante, pero cuyo monto, por no haberse demostrado, quedaba sujeto a establecerse mediante la fórmula contenida en el artículo 983 del Código Judicial y a instancia de ello, sentenció, luego de revocar la sentencia de primera instancia, así:

"... CONDENA EN ABSTRACTO a ERNESTO CARRASCO L. y ADA MARIA VERGARA y MARTA GISELA VILLARREAL DE GONZALEZ a pagarle a ALGIS G. ALVARADO y CARLOS ARTURO GARCIA, el lucro cesante dejado de percibir, producto de la colisión ocurrida el día 28 de diciembre de 1993, cuyas sumas será (sic) determinada mediante la liquidación motivada que deberán presentar los demandantes ante el Juez de la causa, la cual deberá formularse sobre las siguientes bases:

1. La cantidad promedio por día que se obtiene de la operación de un autobús de la ruta Ciudad Bolívar-Tumba Muerto.

2. El tiempo a computarse para el establecer la indemnización a que tiene derecho el actor en ese aspecto, será calculado desde el día en que ocurrió el accidente, es decir, el 28 de diciembre de 1993 hasta el 20 de enero de 1994, fecha de su entrega. Para lo cual se deberá escuchar el concepto de peritos o de asociaciones ligadas a esta actividad comercial.

Las costas de primera instancia, quedarán sujetas a lo que resulte de la determinación de la condena, en base a lo que declara la tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos.

Las costas de segunda instancia, se fijan, por disposición del artículo 1060 del Código Judicial, en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Regule el Secretario del Juzgado de primera instancia, los gastos de su resorte." (F. 196).

Como ha quedado expuesto, la sentencia antes referida fue objeto de aclaración a solicitud del recurrente y al resolver sobre ella el Tribunal Superior resolvió adicionar la sentencia que había dictado, fechada 10 de abril de 1997, "en el sentido de incluir como un punto, luego de la condena proferida, que: ABSUELVE a los demandados OLMEDO VILLARREAL y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ

de la pretensión ejercida en su contra por la parte demandante". (f. 206).

Dado que el recurso encierra dos resoluciones, que según el recurrente son contradictorias, la Sala se avoca a su necesario análisis, concluyendo que no le asiste la razón al casacionista, avalando lo actuado por el Primer Tribunal Superior, por considerar su actuación ajustada a derecho, como pasamos a ver, teniendo como punto de partida la solicitud de aclaración, la que el recurrente expuso en los términos siguientes:

> "PRIMERO: Como quiera que el Fallo de la Alzada establece una PREVIA REVOCATORIA (total) de la Sentencia de la Primera Instancias, y condena a los Demandados en ABSTRACTO; conviene que se esclarezca a las Partes si la liquidación puede incluir la reparación o resarcimiento del Daño emergente o parte él?
>
> SEGUNDO: Que vuestra Decisión al establecer el término para fijar el lucro cesante lo hace en un período corto e irrisorio desde el 28 de Diciembre de 1993 al 20 de Enero de 1994; por tanto nos interesa se aclare se (sic) dicho término puede correr hasta la presentación de la Demanda o hasta la dictación del Fallo del Juzgado Segundo de Tránsito (Resolución N . 1175 de 14 de marzo de 1994, ante la reclamación de mis mandantes que consideran que el mismo fue indebidamente?
>
> TERCERO: Que en la Parte Resolutiva de la condena no aparece mencionados los señores OLMEDO VILLARREAL, a quien se le menciona en supuesta reparación del vehículo y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ; por lo que es dable aclarar sí son condenados o absueltos de su responsabilidad?." (f. 199)

Lo peticionado por el recurrente en su solicitud de aclaración, específicamente los puntos 1 y 2 , como bien lo dijera el Tribunal Superior, se aparta de la finalidad y razón de ser de las normas regulatorias de las aclaraciones, específicamente del artículo 986 del Código Judicial que señala con claridad meridiana cuándo puede ser aclarada la parte resolutiva de una sentencia que si bien incluye los daños y perjuicios como elemento susceptible de aclaración, ello no es posible cuando estos constituyen lo principal de la pretensión tal como lo indica la citada disposición. Por ello, no es posible, como lo pretende el recurrente, que se considere nuevamente lo relativo al resarcimiento del daño emergente o parte del mismo, siendo que la sentencia recurrida fue clara respecto a este tema al concluir que unos daños (mecánicos) no fueron probados y otros daños (carrocería) fueron debidamente reparados (f. 192), de manera que referirse a ellos en la aclaración solicitada, desvirtuaría la finalidad de la aclaración de sentencias en los términos contenidos en el artículo 986 ibidem.

Con respecto a la aclaración en relación con el término o período de tiempo dentro del cual debe calcularse el lucro cesante a que tiene derecho el demandante, tampoco accedió el Tribunal Superior por considerar "que la parte resolutiva establece con precisión cuáles son las bases para la liquidación de la condena proferida".

En efecto, sobre el tiempo a computarse para determinar el período a indemnizar por lucro cesante, la sentencia puntualizó:

> "2. El tiempo a computarse para establecer la indemnización a que tiene derecho el actor en ese aspecto, será calculado desde el día en que ocurrió el accidente, es decir, el 28 de diciembre de 1993 hasta el 20 de enero de 1994, fecha de su entrega ..." (f. 196).

Considera la sala que no hay lugar a la aclaración solicitada pues la sentencia ha sido suficientemente explícita y hacer lo contrario significaría entrar nuevamente al debate de lo ya resuelto, que no es repetimos, la finalidad

de esta medida subsanadora.

Con respecto al último tema, relativo a que según el casacionista por vía de aclaración se está absolviendo a dos de los demandados (OLMEDO VILLARREAL DIAZ y JORGE ENRIQUE VILLARREAL DIAZ), siendo esta actuación incongruente y contradictoria con el artículo 986 del Código Judicial, el Pleno de la Sala se muestra en desacuerdo con tal posición por cuanto que entendida correcta y lógicamente la sentencia de 10 de abril de 1997, cuya aclaración se solicitó, quedó claramente establecido quiénes son los demandados que legalmente están obligados a reponer o indemnizar los daños causados.

No obstante, la sentencia omitió pronunciarse en la parte resolutiva, en lo relativo a los otros demandados que quedaron exentos de responsabilidad y que si bien su situación procesal y sustantiva está inserta en la parte motiva del fallo, ello no es óbice para que aprovechando la solicitud de aclaración, que además hace petición en este sentido (f. 200), el Tribunal Superior se pronunciara de manera expresa sobre la absolución, sin que ello signifique incurrir en la contradicción alegada por el recurrente ya que con ello no entró el Tribunal Superior a debatir puntos nuevos, ni a reconsiderar puntos ya resueltos sino a adicionar una sentencia para eliminar cualquier ambiguedad, de manera que quedara en ella incluida expresamente y a manera de corolario, lo demostrado en el proceso con respecto a los demandados OLMEDO VILLARREAL y JORGE ENRIQUE VILLARREAL, actuación esta que tiene fundamento no sólo en el artículo 986 del Código Judicial, sino también en el artículo 1108 ibidem, que es concordante con el anteriormente mencionado y que reza así:

> "1108. Sin perjuicio de lo anterior, los autos y sentencias de segunda instancia dentro del término de ejecutoria admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea contradictoria o ambigua, siempre y cuando se trate de autos y sentencias de única instancia".

Por otra parte, no hay dudas en cuanto a que uno de los puntos controvertidos en este proceso era la responsabilidad o no que podría caberle a todos los demandados, incluyendo a los señores VILLARREAL, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 470 del Código Judicial sobre lo que debe recaer la decisión o sentencia, le incumbía al Tribunal Superior pronunciarse necesariamente respecto a la situación jurídica de los referidos señores.

Concluye la Sala que el cargo de injuricidad que se le atribuye a la sentencia y su aclaración no está justificado y por tanto no se ha dado la violación del artículo 986 del Código Judicial, citado por el recurrente como disposición legal infringida.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 10 de abril de 1997 y la Resolución de 21 de julio de 1997, dictadas por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Las costas de casación a cargo del recurrente se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, RAMO CIVIL Y LE JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR SENEN LOPEZ GONZALEZ CONTRA MARÍA BASILIA GONZALEZ DE ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z.PANAMA, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Juzgado Primero de Circuito de Veraguas, Ramo de lo Civil, ha remitido a esta Corporación de Justicia, el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero del Circuito Civil, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, con sede en San Miguelito y el Juzgado Municipal del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por SENEN LÓPEZ GONZÁLEZ contra MARÍA BASILIA GONZÁLEZ DE ATENCIO.

Con fundamento al artículo 93, ordinal 3° del Código Judicial, deberá asumir esta Sala el conocimiento "De las cuestiones de competencia en materia civil suscitadas entre Tribunales que no tengan otro superior común".

Encontrándose en la fase de admisión de la demanda, el Juez Primero del Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, dictó el Auto N° 3181 de fecha 25 de mayo de 1999, mediante la cual declinó la competencia del proceso en favor del Juzgado Municipal del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, Ramo Civil, con fundamento a los artículos 174 y 255 del Código Judicial. La motivación fáctica del Juzgador se fundamentó en que, como regla general en los procesos civiles, el Juez competente es el del domicilio del demandado, además de que los Jueces Municipales conocerán en primera instancia de los procesos civiles que versen sobre la cuantía mayor a CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00) sin exceder de MIL BALBOAS (B/.1,000.00), y el libelo de demanda menciona que la demandada reside en la Provincia de Veraguas, además que el bien inmueble objeto de la demanda tiene un valor catastral de CUATROCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON NOVENTA CENTÉSIMOS (B/.440.90), por tanto declinó la competencia del mismo.

Por su parte, el Juzgado Municipal del Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, Ramo Civil, promueve conflicto de competencia dentro del presente negocio (fs. 29-30), fundamentándose en que "Nuestro Código de Procedimiento en el artículo 174, en cuanto a los Jueces Municipales, dentro de sus atribuciones no está conocer del proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Más bien el artículo 159 en su numeral 16 dice que los Jueces de Circuito conocerán en primera instancia de los procesos civiles y penales que no están atribuídos por la ley expresamente a otra autoridad y todos los que le atribuyan las leyes."

La Sala estima que en el caso en estudio, se ha demostrado con las pruebas que físicamente el inmueble se encuentra en el Distrito de San Miguelito, y evaluando los trámites procesales que se han dado por parte del tribunal de la causa, los cuales de manera inequívoca determinan que se ha producido la prórroga tácita por parte del demandante cuando éste ocurre a determinado Tribunal interponiendo la demanda, tal como señala el artículo 248 del Código Judicial.

Además, el artículo 258, Caso Cuarto, del Código Judicial expresa que "En los procesos en que se ejerce la acción reivindicatoria sobre bienes inmuebles, es Juez competente el del lugar donde está ubicado el inmueble o su mayor extensión".

Es por ello que deberá seguir conociendo el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio el tribunal donde tuvo origen el mismo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA

del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por SENEN LÓPEZ GONZÁLEZ CONTRA MARÍA BASILIA GONZÁLEZ DE ATENCIO, en el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CON SEDE EN SAN MIGUELITO.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MORGAN & MORGAN CON AUDIENCIA DE LOS HONORABLES MAGISTRADOS ELIGIO A. SALAS Y JOSE A. TROYANO EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROPUESTO POR LA NACION ARGENTINA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR AGROMETAL INTERNATIONAL CORP. CONTRA MATMETAL, S. A. Y TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del recurso extraordinario de revisión instaurado por LA NACIÓN ARGENTINA contra la sentencia del dos de octubre de 1998 dictada por la Sala Primera, de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario interpuesto por AGROMETAL INTERNATIONAL CORP. contra MATMETAL, S. A. y TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO, la apoderada judicial de la recurrente ha presentado incidente de recusación de los Honorables Magistrados Eligio A. Salas y José A. Troyano, el 25 de noviembre de 1999. El aludido incidente persigue que los Honorables Magistrados recusados sean separados del conocimiento del recurso de revisión al cual accede el presente incidente, fundamentada para ellos en los numerales 5 y 12 del artículo 749 del Código Judicial.

La recusación ha sido fundamentada en ocho hechos, cuyo contenido textual es el siguiente:

> "1. LA NACIÓN ARGENTINA ha propuesto recurso de revisión contra la sentencia de 2 de octubre de 1998, dictada por la Sala Primer de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, dentro del proceso ordinario seguido por AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION contra MATMETAL, S. A. y TANQUE ARGENTINO MEDIANDO SOCIEDAD DEL ESTADO, en el cual se prosiguió ejecución contra la Nación Argentina.
>
> 2. La sentencia cuya revisión se pide fue firmada, entre otros, por los H. H. M. M. Rogelio A. Fábrega Z., Eligio Salas y José A. Troyano, miembros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
>
> 3. El recurso de revisión interpuesto pro la Nación Argentina correspondió en reparto al Magistrado Rogelio A. Fábrega Z., quien manifestó impedimento, conforme el numeral 5 del artículo 479 del Código Judicial.
>
> 4. Al resolver el impedimento manifiesto por el Magistrado Fábrega Z., el resto de Sala lo declaró ilegal, mediante auto de 18 de octubre de 1999, lo que implica que el Magistrado Fábrega Z. aprehenderá el conocimiento del proceso de revisión.
>
> 5. La presentación de proyecto y otras actuaciones que requieran la

intervención de los demás Magistrados que integran la Sala Primera, posteriormente llevará ante los H. H. M. M. Salas y Troyano el conocimiento del recurso de revisión propiamente tal.

6. En los H. H. M. M. Salas y Troyano concurren las causales de impedimento y de la consiguiente recusación previstas en los numerales 5 y 12 del artículo 749 del Código Judicial.

7. Procede separar a los H. H. M. M. Salas y Troyano antes de que entren a conocer del recurso de revisión propiamente tal, con vista en las normas legales citadas.

8. Sobre las causales de recusación invocadas existen procedentes emanados de la propia Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como lo son, entre otros los autos de 7 de enero de 1999, dictado en el recurso de revisión propuesto por Rogelio De La Cruz Alvendas y otros contra sentencia de 24 de octubre de 1997 y el auto de 25 de enero de 1999, dictado en el recurso de revisión interpuesto por Sterling Metro, S. A. contra sentencia de 3 de febrero de 1997, dictada por el Juez Primero del Circuito de Colón".

Adicional a los hechos que hemos transcrito, el escrito que contiene el incidente también presenta una serie de consideraciones jurídicas que resumiremos así:

1. Los criterios externados por la Sala en el auto de 18 de octubre de 1999, en lo atinente a la reflexión que se hace sobre la inconveniencia de que los suplentes conozcan del recurso de revisión interpuesto por el hecho que los titulares se manifiestan impedidos para conocer y resolver el mismo (recurso de revisión), no es compartido por cuanto que, los suplentes existen para conocer y resolver los asuntos en los cuales estén impedidos los jueces o magistrados principales.

2. La separación de las Salas y sus especialidades no se puede llevar a una concepción absoluta, lo cual podría llevar a una denegación de justicia por la ausencia artificial de un organismo independiente e idóneo que pueda dictar una decisión en un caso determinado en que el tribunal de competencia natural esté impedido por alguna causa prevista en la ley.

3. La absoluta independencia e imparcialidad de la justicia y la proyección externa que de ese principio surja de la actuación de cada tribunal de la república, a juicio de los recusantes, es más importante que la separación de las Salas.

Expuestos los hechos y las consideraciones jurídicas del incidente de recusación presentado es del caso decidir el negocio, y a ello se procede, previa las siguientes consideraciones:

Antes de pasar al fondo del estudio de la recusación presentada en contra de los Honorables Magistrados que integran el resto de esta Sala de la Corte, es preciso realizar dos acotaciones desde el punto de vista procesal.

1. El recurso de revisión interpuesto por La Nación Argentina contra la sentencia del 2 de octubre de 1998 dictada por la Sala Primera, de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso ordinario seguido por Agrometal International Corporation contra Matmetal, S. A., Tanque Argentino Mediano, Sociedad del Estado ingresó a la Sala bajo el asiento No. 160-99, el 29 de setiembre de 1999. En la misma fecha, el negocio fue llevado al despacho del Magistrado Sustanciador para proveer, pero, se manifestó impedimento para conocer del mismo, fundamentado en el numeral 5° del artículo 749 del Código Judicial. Mediante auto de 18 de octubre de 1999 el resto de la Sala declaró que no era legal el impedimento manifestado. Morgan y Morgan, inconforme con la decisión de la Sala presentó incidente de recusación para que se declarara el ponente

separado del conocimiento del recurso de revisión. La Sala declaró sustracción de materia en el incidente de recusación, habida cuenta que el tema en cuestión ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación. La firma forense solicitó reconsideración de la resolución dictada por la Sala; recurso este que fue rechazado de plano, por improcedente, el 22 de diciembre de 1999. Posteriormente, el 25 de noviembre de 1999, día en que es desfijado el edicto de notificación a las partes interesadas de la resolución dictada en el recurso de reconsideración, Morgan y Morgan presenta el incidente de recusación que ocupa nuestra atención. Después de este recuento, se destaca que, al recurso extraordinario de revisión interpuesto por La Nación Argentina no se le ha imprimido trámite procesal alguno, como consecuencia de la manifestación de impedimento y recusaciones que se han dado dentro del negocio. Se ha obviado el bastanteo del poder otorgado a la firma forense Morgan y Morgan por parte del Procurador del Tesoro de la Nación Argentina, tal como lo prescribe el artículo 617 del Código Judicial; y, si bien, la ilegitimidad de personería no es causal de nulidad cuando exista en el expediente poder legal, aunque no haya sido expresamente admitido, este requisito de carácter legal debe cumplirse.

2. El artículo 754 del citado Código dispone que "El Juez o Magistrado en quien concurra algunas de las causales expresadas en el artículo 749 debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal ...". Es sabido que, en tribunales colegiados el sustanciador debe tramitar el expediente que se le adjudique hasta ponerlo en estado de ser decidido por la Sala, o sea, es su deber dictar todos los autos y providencias para delantar el proceso y redactar el proyecto de resolución correspondiente; y, bajo este prisma, resulta extemporáneo el incidente presentado por cuanto que mientras el expediente no ingrese al despacho de los Magistrados que integran el resto de la Sala de lo Civil para que estudien el proyecto de sentencia elaborado por el Magistrado ponente, no se computa el término legal de que trata el artículo 754 antes citado para que el funcionario en quien concurre alguna causal de impedimento la manifieste. El primer párrafo del artículo 755 de la lex citae, es claro al señalar que

> "Artículo 755. Si el funcionario en quien concurre alguna causal de impedimento no la manifestare dentro del término legal, la parte a quien interese su separación puede recusarlo en cualquier estado de la respectiva instancia, hasta dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del último trámite".

A continuación expone el sustanciador su opinión en cuanto a los hechos y consideraciones jurídicas contenidas en el memorial que contiene la recusación en el mismo orden en que fueron presentados.

1. En primer lugar hay que aclarar que en realidad los hechos que fundamentan el incidente, parten de una sola premisa: la separación de los Honorables Magistrados Salas y Troyano antes de que entren a conocer del recurso de revisión propiamente tal, con vista en los numerales 5 y 12 del artículo 749 del Código Judicial. Sobre el particular, en líneas que preceden, al realizar un análisis de los artículos 754 y 755 del Código en cita, el Sustanciador ya ha tenido oportunidad de referirse a este tema.

La firma forense recusante cita precedentes emanados de la propia Sala Primera, de lo Civil de la Corte Suprema de justicia, como lo son: 7 de enero de 1999, 24 de octubre de 1999, perdiendo de vista que nada obsta para que la Corte varíe de doctrina cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores. Mediante auto del 18 de octubre de 1999 dictado por la Sala al calificar el impedimento, manifestado por el ponente, se citó jurisprudencia no sólo de esta Sala sino también de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo. Con posterioridad al auto mencionado, en el recurso de revisión interpuesto por Panama Timber Products Corporation contra la sentencia del 18 de julio de 1999 dictado por el Juzgador Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 19 de noviembre de 1999, se reiteró el criterio que "... no deben declararse legales los

impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sala, en los recursos de revisión interpuestos contra resoluciones que han sido impugnadas en casación ante esta corporación judicial, como sucede en el caso que nos ocupa ni, tampoco, cuando la revisión se dirige contra la sentencia dictada por la propia Sala Civil al resolver recurso de casación ..."

En lo atinente a las consideraciones jurídicas expuestas en el caso bajo estudio, la situación planteada es sustancialmente igual a la que se analizó en el auto de la Corte que declaró ilegal el impedimento manifestado por el suscrito para conocer del recurso de revisión interpuesto por las ahora recusantes, por ende, se reitera el criterio de la Sala tal como se explica a continuación.

Como acertadamente lo ha señalado esta Sala, la ley le confiere la calidad de cosa juzgada a las sentencias firmes, y como regla general no permite el reexamen de lo actuado. El respeto a la cosa juzgada es esencial para la existencia de una sociedad cuya convivencia está fundada en la existencia de un orden jurídico. De allí que, la característica distinta del recurso de revisión es que permite la invalidación de una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando con posterioridad a su emisión se produce una causa grave taxativamente prevista en la ley procesal. Se trata, por ello, de un recurso extraordinario cuya admisibilidad está restringida a aquellas situaciones que la propia ley señala expresamente, y no es en manera alguna una tercera instancia para obtener un nuevo examen de una sentencia dictada en un proceso que ya concluyó (Véase Auto del 29 de setiembre de 1999 dictado en la apelación ante el resto de la Sala dentro del recurso de revisión interpuesto por Argelis del C. Melendez contra la sentencia No. 4, de 5 de febrero de 1998 dictada por el Juzgado Quinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en el proceso ordinario incoado por Kista, S. A. contra Argelis del C. Melendez). Tal como se colige de lo señalado, cuando esta Sala de la Corte entra a examinar un recurso de revisión, en el evento de que el mismo sea admitido, dilucidaría puntos distintos a los resueltos en un recurso de casación, ya que la competencia de la Sala se circunscribe a realizar un estudio de las causales invocadas por el recurrente, ya se trate de casación en la forma (artículo 1155 del Código Judicial). En materia Civil, el recurso de revisión sólo es admisible cuando se esté en presencia de alguno de los nueve supuestos básicos contemplados en el artículo 1189 del Código Judicial.

A juicio de la recusante "los suplentes existen para conocer y resolver los asuntos en los cuales estén impedidos los jueces o magistrados principales o titulares", plantamiento este que no encuentra sustento jurídico, puesto que, la Ley No. 32, del 23 de julio de 1999, que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, modificó artículos del Código Judicial y dictó otras disposiciones, fue derogada mediante Ley 49 de 24 de octubre de 1999, publicada el mismo día en la Gaceta Oficial N° 23,914.

El artículo 6 de la Ley 49, de 24 de octubre de 1999, se lee así:

"ARTICULO 6. El artículo 78 del Código Judicial queda así:

ARTICULO 78. En los impedimentos y recusaciones de un Magistrado, lo reemplazará el suplente respectivo, si se trata de negocio atribuido al Pleno; y si el negocio es del conocimiento de una Sala, lo reemplazará el Magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético de apellidos. Si el caso ocurre en la de Negocios Generales, el Magistrado impedido o recusado será sustituido por el que se escoja a la suerte".

Aclarado este punto, tenemos que los impedimentos y recusaciones de un Magistrado de la Sala lo reemplazará el Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, conforme al orden alfabético de apellidos.

Los anteriores razonamientos le bastan al Sustanciador para rechazar de plano el presente incidente de recusación.

En vista de lo expuesto, el MAGISTRADO SUSTANCIADOR de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de recusación presentado por la firma forense MORGAN y MORGAN contra los Honorables Magistrados ELIGIO A. SALAS y JOSE A. TROYANO, dentro del recurso de revisión propuesto por LA NACIÓN ARGENTINA contra la Sentencia de 2 de octubre de 1998, dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en el proceso incoado por AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION contra MATMETAL, S. A. y TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO.

Notifíquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER R.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO SANTIAGO MENDEZ REAL INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR NEFTALI SAUCEDO MURGAS CONTRA BEATRIZ TORRES DE VARGAS Y REGINO TORRES RIVERA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado SANTIAGO MENDEZ REAL ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 9 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio instaurado por NEFTALI SAUCEDO MURGAS contra REGINO TORRES RIVERA y BEATRIZ TORRES DE VARGAS.

En la decisión impugnada el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no concedió el término para formalizar el recurso de casación anunciado por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal el 18 de octubre de 1999, la cual resolvió en segunda instancia el citado proceso ordinario.

El análisis de las constancias procesales pone de manifiesto que el presente recurso de hecho cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 1141 del Código Judicial; por lo que la Sala debe decidir los méritos del mismo; es decir, determinar si la resolución contra la cual se anunció recurso de casación es susceptible de ser impugnada mediante ese recurso.

La negativa del Tribunal Superior de conceder el término para formalizar el recurso de casación anunciado se fundamentó en que "... En la demanda del juicio ordinario aparece estipulada una cuantía de B/.5,000.00, la cual, para efectos de interponer el recurso de casación, no es cónsona con lo establecido por el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial, modificado por el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 31 de 1998, que señala: "Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de diez mil balboas (B/.10,000.00) ...". (F. 18)

Por su parte, el recurrente sostiene que la resolución contra la cual pretende recurrir en casación sí admite dicho recurso, puesto que proviene de un proceso cuyas actuaciones y diligencias se iniciaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998; puesto que la demanda que originó el presente negocio se interpuso el 29 de junio de 1993.

Como fundamento legal cita el artículo 32 del Código Civil que a la letra dice:

> "Artículo 32. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación". (Enfasis de la Sala)

De la norma legal transcrita se colige que, como regla general, las leyes procesales son aplicables desde la fecha en que empiezan a regir. Pero, como excepción a dicha regla, la disposición prescribe que los términos, actuaciones y diligencias iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva ley de procedimiento, se regirán por la ley que se encontraba vigente al momento en que se iniciaron.

La parte recurrente alega que la resolución que se pretende impugnar en casación encaja en la excepción de la citada disposición, ya que la ley vigente al iniciarse el presente proceso (1993) prescribía que eran recurribles en casación las resoluciones dictadas dentro de un proceso cuya cuantía no fuera menor de cinco mil balboas (B/5,000.00); requisito con el cual se cumple en el caso que nos ocupa.

No obstante, cabe aclarar que esta corporación de justicia ha sostenido en reiteradas ocasiones que en el caso del recurso de casación, la excepción consagrada en el citado artículo 32 del Código Civil es aplicable únicamente cuando la resolución de segunda instancia que se pretenda recurrir en casación, haya sido dictada antes de la entrada en vigor de la nueva ley procesal. (Confrontar resolución de 22 de julio de 1987, Registro Judicial, julio de 1987, págs. 45-49; resolución de 25 de julio de 1991, Registro Judicial, julio de 1991, págs. 78-80; y resolución de 26 de abril de 1999, Registro Judicial, abril de 1999, págs. 179-182).

En el caso que nos ocupa, la Ley 31 de 1998 que aumentó la cuantía de los procesos recurribles en casación a diez mil balboas (B/10,000.00) entró en vigencia a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 29 de mayo de 1998; y la resolución que se pretende recurrir en casación fue dictada el 18 de octubre de 1999, es decir, cuando ya se encontraba vigente la nueva ley.

Por tanto, debe entenderse que el trámite del recurso de casación se inició bajo la vigencia de la Ley 31 de 1998, que es, en consecuencia, la que regula lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del mismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Civil.

En vista de lo anteriormente señalado, la Sala concluye que la resolución dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 18 de octubre de 1999 no es recurrible en casación, puesto que no cumple con el requisito de la cuantía que establece el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, según fue reformado por la Ley 31 de 28 de mayo de 1998.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado SANTIAGO MENDEZ REAL, contra la resolución proferida por el Tribunal Superior de Justicia el 9 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por NEFTALI SAUCEDO MURGAS contra REGINO TORRES RIVERA y BEATRIZ TORRES DE VARGAS.

Las costas del recurso se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO JORGE DANIEL SAMUDIO VEGA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 25 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. CONTRA VILLA CORINA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA. ONCE (11) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JORGE SAMUDIO VEGA, actuando en nombre y representación de VILLA CORINA, S. A., ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de octubre de 1999, en la que niega el término para la formalización del recurso de casación anunciado por la sociedad recurrente, contra el auto proferido por ese mismo tribunal el 21 de septiembre de 1999, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. contra VILLA CORINA, S. A.

Procede la Sala a decidir si debe admitirse el presente recurso de hecho, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 1141 del Código Judicial.

Al respecto, se ha podido constatar que el recurso de hecho fue interpuesto en tiempo y que las copias que acompañan el libelo del mismo fueron solicitadas y retiradas dentro de los términos señalados y, con ellas, el interesado se presentó ante esta corporación de justicia en la debida oportunidad.

En vista de que el recurso de hecho que nos ocupa cumple con los requisitos formales exigidos por nuestra legislación, se debe determinar si la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 21 de septiembre de 1999, es recurrible en casación.

El Tribunal Superior consideró que dicha resolución no es susceptible de impugnación mediante este recurso extraordinario, porque "... no se encuadra dentro de los supuestos del artículo 1149 del Código Judicial, según fue reformado por el artículo 33 de la Ley N° 15 de 9 de julio de 1991". (F. 18)

Efectivamente, el artículo 1149 del Código Judicial establece que el recurso de casación tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Justicia y, a continuación, hace una enumeración taxativa de las resoluciones que, por su naturaleza, son recurribles mediante este recurso.

En el presente caso, la resolución que se pretende recurrir en casación confirmó el Auto N° 1762, dictado por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil el 29 de junio de 1999, el cual "NO ADMITE por improcedentes y extemporáneas las solicitudes de caducidad de la instancia y desembargo de bienes presentadas por la parte demandada dentro del proceso ejecutivo hipotecario propuesto por BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. contra VILLA CORINA, S. A.". (F. 41 y reverso)

La Corte advierte que la parte recurrente al sustentar su recurso no señala en cuál de los supuestos consagrados en el artículo 1149 del Código Judicial, considera que encuadra la resolución que se intenta recurrir en casación. Más bien sus alegaciones se refieren a las razones que, a su juicio, existen para reformar el fondo de dicha decisión, lo cual no es propio del recurso de hecho.

No obstante, al revisar el negocio la Sala observa que dicha resolución no corresponde al supuesto contenido en el numeral 2 del artículo 1149, ya que se trata de una resolución que no admitió una solicitud de caducidad de la instancia y de desembargo de bienes y no de una que decreta dicha caducidad; la cual sí sería recurrible en casación, en atención a lo dispuesto en el citado numeral. En otras palabras, no se trata de un auto que le pone fin al proceso; que extingue o entraña la extinción de la pretensión; o imposibilite la continuación del proceso.

Por otra parte, dicha resolución tampoco encaja en ninguno de los otros supuestos recogidos en la citada disposición legal, como acertadamente consideró el Tribunal Superior; por lo que se concluye que, por su naturaleza, no es susceptible de impugnación mediante el recurso de casación.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado JORGE SAMUDIO VEGA, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de octubre de 1999, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por BANCO CONFEDERADO DE AMERICA LATINA, S. A. contra VILLA CORINA, S. A.

Las costas del recurso se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO NELSON CARREYO INTERPONE RECURSO DE HECHO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE ORLANDO JESUS MENDOZA LE SIGUE A ATUNEROS DEL GOLFO DE VENEZUELA, S. A. (AGOVENZA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado NELSON CARREYO C., en su condición de apoderado judicial del señor ORLANDO MENDOZA, en el proceso ordinario marítimo instaurado contra la sociedad ATUNERO DEL GOLFO DE VENEZUELA (AGOVENSA), ha interpuesto Recurso de Hecho contra el Auto N° 415 de 20 de septiembre de 1999, dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá, el cual NIEGA la solicitud de EMBARGO, presentada contra la Sentencia N° 10, de 21 de abril de 1998.

El presente recurso se fundamenta en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Encontrándose en firme la Sentencia dentro del proceso, mediante el escrito visible a foja 1245 pedimos la Ejecución de la misma la cual fue acordada mediante la Resolución fechada 9 de septiembre de 1988 visible a foja 1246 también ejecutoriada así como una petición de complemento de ejecución de Sentencia acordada a foja 1250-1.

SEGUNDO: Habiéndose iniciado el Proceso de Ejecución pedimos el Embargo de la motonave CONQUISTA (Foja 1253-6) el día 26 de enero de 1999, presentando impulsos procesales los días 2 de febrero (foja 1257), 22 de febrero (foja 1258), 7 de abril (foja 1259), y 20 de septiembre (foja 1260) cuando finalmente se pronunció el a quo negando la solicitud.

> TERCERO: Habiéndonos notificado de la negación del embargo interpusimos oportunamente el correspondiente Recurso de Apelación el cual para nuestra sorpresa también nos fue negado tácitamente. Dicho recurso fue negado en primer lugar por un informe secretarial visible a foja 1275 fechado 8 de octubre y en segundo lugar mediante el Auto N° 453 de la misma fecha y visible en la misma foja 1275-6.
>
> CUARTO: El a quo negó la apelación y convirtió oficiosamente dicho recurso en Reconsideración.
>
> QUINTO: El auto mediante el cual se niega el Recurso de Apelación no tiene coherencia al manifestar que "En vista del Informe Secretarial que antecede ... este Tribunal mediante Auto N° 415 de fecha 20 de septiembre del presente año, NEGÓ la solicitud de EMBARGO sobre la M/N CONQUISTA, solicitada por la parte demandante."
>
> SEXTO: El Auto mediante el cual se niega la apelación no fue motivado salvo por la expresión de que "el auto en comento (es decir el que niega el embargo) no se encuentra dentro de las RESOLUCIONES que taxativamente establecen los Artículos 481 y 482 de la Ley de Procedimiento Marítimo como APELABLES."
>
> SÉPTIMO: La parte demandada presentó Oposición al Recurso de Reconsideración exponiendo hechos que son falsos; si el a-quo nos permitiera la posibilidad de probar, así lo evidenciaríamos. Nos apoyamos en instituciones laborales como la solidaridad entre la empresa enajenante y la empresa adquirente de la M/N CONQUISTA, conforme lo establece el Derecho Laboral Venezolano."

Sostiene el recurrente como "argumento de derecho" (f. 4), que en jurisprudencia de esta Sala (Véase Sentencia de 18 de mayo de 1999), se ha concedido apelación contra los autos que se refieran a medidas de embargo. Además, que el juzgador de instancia ha impedido que la SALA conozca de un recurso de apelación que interpusiera oportunamente, al convertir dicho recurso oficiosamente en recurso de reconsideración, señalando al respecto el artículo 482, el cual establece:

> "Serán apelables en la forma señalada en el artículo 481 y en el efecto establecido en el artículo 488, las siguientes resoluciones:
> ...
> 2. Las relativas a medidas precautorias
> ...".

Advierte la SALA, que el embargo es una medida de ejecución y no una medida precautoria, por consiguiente, la solicitud de embargo lleva o debe llevar la prueba de la existencia de la obligación cuya ejecución se solicita. En cambio, el secuestro sí es una medida precautoria tendiente a asegurar el resultado de la litis; presupone no probada la existencia de la obligación, razón por la cual se exige al que solicita que preste caución suficiente para responder de los perjuicios que con él pueda causar. Siendo así, los autos dictados donde se niega solicitud de embargo dentro de un proceso ordinario marítimo, no son susceptibles de ser recurridos en recurso de apelación, ya que así lo expresa taxativamente la norma antes reproducida.

En efecto; conforme a lo establecido en el artículo 478 del Código de Procedimiento Marítimo, solamente es admisible el recurso de reconsideración, por ser el Auto N° 415, de 20 de septiembre de 1999, una resolución no susceptible del recurso de apelación.

En otro sentido, el presente caso se encuentra en una etapa de ejecución de sentencia, por la cual la única excepción que puede interponer la parte condenada es que la resolución haya sido invalidada o cumplida. En este sentido, el Código de Procedimiento Marítimo, en la sección referente a la ejecución de

resoluciones judiciales, en su artículo 409 establece:

> "ARTÍCULO 409: Si al cumplirse el primer plazo señalado en el artículo 408 la parte condenada no ha hecho el pago, la parte favorecida podrá denunciarle bienes ante el Tribunal Marítimo para que sean embargados y rematados en el mismo juicio, siguiéndose para ello lo dispuesto en el Capítulo VI del Título V de esta Ley (Artículos 546 a 556). El embargo de bienes se decretará sin oír al deudor y no le será notificado mientras no hayan sido debidamente asegurados dichos bienes, ya sea inscribiendo el embargo en el Registro Público, o depositándolos con las formalidades legales. En esta ejecución la parte condenada sólo podrá oponer la excepción de que la resolución ha sido invalidada o cumplida."

Vale la ocasión para destacar que la norma contenida en el artículo 409 del Código de Procedimiento Marítimo no es aplicable al secuestro (medida cautelar), sino al embargo, justamente para la ejecución de la resolución judicial.

Esta Superioridad, al realizar un análisis de lo solicitado por el actor observa que, en el proceso que nos ocupa, se pretende la ejecución de la sentencia condenatoria proferida por el juzgador primario, mediante solicitud de EMBARGO de la M/N CONQUISTA, cuyo propietario actual es REMATUN C. A., tal como lo expresa el demandante a foja 1254 del Tomo III que contiene los antecedentes del caso, señalando que de acuerdo al derecho venezolano establece la responsabilidad solidaria del nuevo propietario.

La Sala, precisamente mediante la resolución que cita el recurrente, se ocupó de deslindar la diferencia conceptual entre el secuestro, medida cautelar por excelencia y el embargo, con miras a la ejecución de lo decidido. De lo dicho se requiere que las normas procesales sobre el secuestro no pueden trasplantarse, sin más, al embargo, dada su naturaleza distinta.

Así, por ejemplo, la resolución de 18 de mayo de 1999, sobre el mismo tópico, externó:

> "Debe quedar claro que las reglas relativas a los secuestros no son extensivas a los embargos y viceversa, ya que entre estas dos figuras existen notables diferencias, enumeradas por esta Sala en diversos casos como sigue:
>
> "1. El secuestro es susceptible de ser sustituido por uno liberatorio, mientras que el embargo permanece inalterable hasta vender el bien y con su producto cancelar la obligación.
>
> 2. A quien solicita el secuestro se le exige que asegure el cumplimiento de la obligación, no así a quien pide el embargo.
>
> 3. La solicitud de embargo lleva o debe llevar, la prueba de la existencia de la obligación reclamada, de modo que lo que se pide es su ejecución, o sea, proceder a la retención de bienes para rematarlos y cubrir la obligación. El secuestro es tan solo una medida precautoria tendiente a asegurar el resultado de la litis; presupone no probada la existencia de la obligación, razón por la cual se exige al que solicita que preste caución suficiente para responder de los perjuicios que con él pueda causar.
>
> 4. El secuestro se propone para asegurar una pretensión de la cual el actor carece de título. El embargo se decreta y practica porque ya se tiene un título, con el objeto de iniciar la fase de la jurisdicción coactiva, de la ejecución. Se explica por ello el fenómeno de la conversión del secuestro a embargo. Es por todo lo dicho que las reglas relativas al embargo no son extensivas a los secuestros judiciales, por más que se parezcan".

(Cfr. Sentencia de 7 de febrero de 1991, R. J. fs. 32-33, Apelación interpuesta por VICENTE SOLER PORRAS contra resolución de 6 de marzo de 1990 dictada por el Tribunal Marítimo en el juicio seguido contra VENATUN, S. A. (M/N NAPOLEON).” ...”. (fs. 4-5)

La Sala considera que la resolución atacada no es recurrible en apelación, por las razones que ya se han dejado externadas. De otro lado, la Sala observa que el recurrente, en su solicitud de embargo, no aportó copias debidamente autenticada que prueben que el derecho venezolano permite establezca la responsabilidad solidaria de las obligaciones derivada de la ley o de los contratos cuando un propietario, posterior a la enajenación de un bien, continúe realizando las labores de dicha empresa, o el nuevo patrono continúe con el ejercicio de la actividad anterior, en detrimento de lo que dispone el artículo 210 del Código de Procedimiento Marítimo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el recurso de hecho presentado por el Licenciado NELSON CARREYÓ contra el Auto N° 415, de 20 de septiembre de 1999, dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO TEOFANES LOPEZ RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR BUDGET RENT A CAR DE PANAMA, S. A. CONTRA ERICK IVAN MARTINEZ GONZALEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Teófanes López, apoderado especial de BUDGET RENT A CAR PANAMA, S. A., ha interpuesto recurso de hecho contra la resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 24 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario propuesto por la recurrente contra el señor ERICK IVAN MARTINEZ.

En dicha resolución el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial rechazó de plano el recurso de casación que había anunciado la sociedad recurrente, contra la sentencia que dictó ese mismo Tribunal el 28 de octubre de 1999, la cual resolvió el citado proceso en segunda instancia.

Al revisar el presente negocio la Sala ha podido constatar que el recurso de hecho que nos ocupa, reúne los requisitos formales que exige el artículo 1141 del Código Judicial. Por tanto, se debe determinar ahora si la resolución contra la cual se hizo el anuncio de casación, es recurrible mediante ese recurso extraordinario.

El Tribunal Superior rechazó de plano el recurso de casación porque consideró "... que si bien es cierto se trata de un proceso que implica el ejercicio de pretensiones de una parte frente a otra, se señala en el mismo una cuantía, que no califica dentro de los parámetros que establece el artículo 1148 del Código Judicial". (F. 5)

Por su parte, el apoderado judicial de la empresa recurrente alega que el

Tribunal Superior no tomó en consideración al rechazar el recurso de casación, que "... a la fecha de interposición de la demanda la cuantía vigente no era la de B/.10,000.00 sino de B/.5,000.00, ya que la cuantía de B/.10,000.00 solamente entró en vigencia a partir de la Ley 31 de 1998, y no antes, pues no puede darse de (sic) efecto retroactivo a la Ley 31 de 1998, en consecuencia la resolución es perfectamente recurrible con base en la cuantía de B/5,000.00 que estaba vigente antes de la expedición de la Ley 31 de 1998 es decir de acuerdo con el numeral II del artículo 1148 del Código Judicial antes de ser reformado." (F. 28)

El artículo 32 del Código Civil establece, como regla general, que las leyes procesales son aplicables desde la fecha en que empiezan a regir. Sin embargo, como excepción a dicha regla general, señala que "los términos que hubieran empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

En relación con la interpretación de esta norma legal para el caso del recurso de casación, la Sala ha sostenido reiteradamente que la excepción que consagra el artículo 32 del Código Civil, únicamente es aplicable cuando la resolución de segunda instancia contra la cual se pretende recurrir en casación, haya sido dictada antes de la entrada en vigor de la nueva ley procesal. (Confrontar resolución de 22 de julio de 1987, Registro Judicial, julio de 1987, págs. 45-49; resolución de 25 de julio de 1991, Registro Judicial, julio de 1991, págs. 78-80; resolución de 26 de abril de 1999, Registro Judicial, abril de 1999, págs. 179-182; y resolución de 4 de enero de 2000, que resolvió el recurso de hecho propuesto por el Licenciado Santiago Méndez Real, contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 9 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario incoado por NEFTALI SAUCEDO MURGAS contra BEATRIZ TORRES DE VARGAS y REGINO TORRES RIVERA)

En el presente caso se observa que la cuantía que se fijó en la demanda era de B/.8,960.00 (f. 21). La Ley 31 de 1998 que aumentó en diez mil balboas (B/.10,000.00) la cuantía de los procesos recurribles en casación, entró en vigencia a partir de su promulgación, la cual tuvo lugar el 29 de mayo de 1998; mientras que la resolución contra la que se intenta recurrir en casación fue dictada el 28 de octubre de 1999, es decir, cuando ya estaba vigente la nueva ley.

En estas circunstancias debe entenderse que en el presente caso, el trámite del recurso de casación se inició bajo la vigencia de la Ley 31 de 1998, que es, en consecuencia, la ley que regula lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del mismo, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 32 del Código Civil.

Por tanto, la Sala considera que le asiste razón al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial al concluir que la sentencia dictada por ese mismo Tribunal el 28 de octubre de 1999 dentro del presente proceso, no es recurrible en casación; en vista de que no cumple con el requisito de la cuantía que establece el ordinal 2 del artículo 1148 del Código Judicial, según fue reformado por la Ley 31 de 28 de mayo de 1998.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado Teófanes López, en representación de BUDGET RENT A CAR PANAMA, S. A., contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 24 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario que le sigue la parte recurrente al señor ERICK IVAN MARTINEZ.

Las costas del recurso se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) EMETERIO MILLER R. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FIRMA FORENSE LOPEZ Y VALLARINO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO SUMARIO DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA INCOADO POR DIN DIN INC. CONTRA PORTUGUESE PARADISE INCORPORATED. SURANCO, INC. INTERVENCION DE TERCERO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER R. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense LOPEZ Y VALLARINO, actuando en su condición de apoderados judiciales de SURANCO INC, ha interpuesto Recurso de Hecho, ante esta Sala, contra la Resolución de 15 de octubre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

El Primer Tribunal Superior en la decisión impugnada mediante el presente recurso de hecho, no concedió el recurso de apelación anunciado contra la resolución de 22 de septiembre de 1999 proferida por ese mismo Tribunal Superior, la cual decidió negar la intervención de tercero presentada por la sociedad SURANCO INC. dentro del proceso sumario declarativo de mayor cuantía incoado por DIN DIN INC. contra PORTUGUESE PARADISE INCORPORATED.

Se ha podido constatar que el recurrente cumplió con los requisitos formales que exige el Código Judicial, por lo que debe determinarse si la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de 22 de septiembre de 1999, es susceptible de recurso de apelación.

Para negar el recurso de apelación, el Primer Tribunal Superior se fundamentó en que: "... como quiera que el auto de fecha 22 de septiembre de 1999 fue dictado por esta Superioridad dentro de un negocio civil cuyo conocimiento de primera instancia corresponde a los Juzgados de Circuito y no a un Tribunal Superior, y siendo que, como consecuencia de lo anterior, el auto en cuestión no ha sido dictado por el tribunal de primera instancia, dicha decisión judicial no es apelable ..."

Por su parte, el recurrente alega, entre los puntos más importantes en su disconformidad, lo siguiente:

> "SEXTO: El artículo 592 del Código Judicial, permite que la intervención de Terceros Adhesiva o Litisconsorcial se pueda presentar en cualquiera de las instancias desde la notificación de la demanda ...
>
> El Auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo. Esta norma que permite la intervención de Terceros en cualquiera instancia del proceso y que reconoce el derecho de apelar en contra del auto que acepte o niegue la intervención, no distingue si el derecho a apelar se produce en el Juzgado de Circuito (por haberse interpuesto la demanda de intervención en esta etapa) o el Tribunal Superior (por haberse interpuesto la demanda de Intervención de Tercero en esta etapa procesal), por lo que al no distinguir la norma deberá ser interpretada en el sentido de que así como la intervención puede darse en cualquiera instancia, el Recurso de Apelación puede interponerse contra el Auto que acepte o niegue la intervención en cualquiera instancia. Donde la Ley no distingue, no le es dable al

juzgador distinguir".

En el alegato presentado ante esta Sala de la Corte, concluye que:

"... El Auto apelado no resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por DIN DIN INC., el Auto apelado resuelve No Admitir a SURANCO INC., dentro del proceso. La Sección 2a. Del Capítulo II-Título IV del Libro Primero del Código Judicial "Reglas Relativas a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial" establece que los Autos serán firmados por dos (2) Magistrados y las providencias por el Sustanciador. Se exceptúan los Autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, los cuales serán firmados por el Sustanciador y por los dos (2) Magistrados que le siguen en orden alfabético.

En el caso que nos ocupa el Auto emitido por el Primer Tribunal Superior no le pone fin al proceso ni imposibilita su continuación, por tanto debió ser firmado por dos (2) Magistrados y no por tres (3) Magistrados ..."

Como es sabido, el recurso de apelación procede para que el Tribunal Superior de Justicia, actuando como autoridad jurisdiccional superior, "examine la decisión dictada por el Juez de Primera instancia y la revoque o reforme", como certeramente viene dispuesto por el artículo 1116 del Código Judicial.

La intervención de un tercero, con arreglo al artículo 592 del Código Judicial, puede realizarse tanto en la primera instancia que se surte ante los Juzgados del Circuito, como en la segunda instancia, que se surte ante los Tribunales Superiores de Justicia. La Resolución que se dicte, en cualquiera de las instancias en que se encuentre el proceso, es apelable según lo dispone la parte final del citado artículo del Código Judicial.

Lo anterior, en opinión de la Sala, significa, contrario a lo expresado por el Tribunal Superior en el fallo que se recurre, que al solicitarse la intervención de tercero encontrándose el proceso en el Tribunal Superior en virtud de la interposición de otro recurso, lo convierte por ese hecho en Tribunal de Primera instancia teniendo que surtirse el recurso de apelación ante la Sala Primera de la Corte como Tribunal de Segunda Instancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del Código Judicial.

Es la Ley específicamente el artículo 592 del Código Judicial, la que en atención a la naturaleza de la resolución, e independientemente de la instancia en la que se encuentre el proceso, la que determina, como ocurre en el caso bajo estudio, si la resolución que concede o niega la intervención es apelable y siendo ello así la Sala no encuentra razón jurídica para el Primer Tribunal Superior niegue o no se conceda el recurso de apelación promovido por la sociedad SURANCO, INC.

Por otra parte, de no concederse el recurso de apelación contra la resolución que se origina en el Primer Tribunal Superior, equivaldría a otorgar un trato desigual y más ventajoso para aquél que pretende intervenir como tercero en la primera instancia, quien en caso de no accederse a su solicitud sí podría hacer uso del recurso de apelación que le concede la ley, posibilidad que sin embargo se le estaría negando a quien con igual derecho pretende intervenir en el proceso encontrándose el expediente en segunda instancia.

Además, considera la Sala que al no concederse el recurso de apelación interpuesto, se le estaría negando al recurrente el único medio de defensa que le otorga la ley para intervenir en un proceso, por cuanto que el auto que niega la intervención de terceros a un proceso no es susceptible del recurso extraordinario de casación, ya que si bien el auto que niega dicha intervención es dictado por el Tribunal Superior, no se trata de un auto que pone fin al proceso ni imposibilita la continuación del mismo, además, como ha quedado

plasmado, no se trata de un auto dictado como Tribunal de Segunda Instancia, requisitos estos que son exigidos, entre otros, para poder recurrir en casación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, admin.istrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, CONCEDE el Recurso de Hecho interpuesto por la firma de abogados LOPEZ Y VALLARINO en representación de la sociedad SURANCO INC., contra la Resolución de 15 de octubre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso sumario declarativo interpuesto por DIN DIN INC. contra PORTUGUESE PARADISE INCORPORATED y en consecuencia, ORDENA al Primer Tribunal Superior de Justicia que SUSPENDA el procedimiento y remita a la Sala Civil, el expediente respectivo.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) EMETERIO MILLER R.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA NACIÓN ARGENTINA CONTRA LA SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 1998, DICTADA POR LA SALA PRIMERA, DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA MATMETAL, S. A.; TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO. MAGISTRADO PONENTE: EMETERIO MILLER. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN, ha interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de 2 de octubre de 1998, proferida por esta Sala dentro del proceso ordinario interpuesto por AGROMETAL INTERNATIONAL CORPORATION contra MATMETAL, S. A. y TANQUE ARGENTINO MEDIANO SOCIEDAD DEL ESTADO (TAMSE), mediante la cual "la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, actuando como Tribunal de Instancia, REVOCA el Auto No. 1229, dictado por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 3 de agosto de 1994 y, en su lugar, RECONOCE la validez de la transacción extrajudicial aprobada por la Resolución N° 910 de 6 de julio de 1990, dictada por el Ministro de Defensa de Argentina e incumplida por el Estado Argentino y ORDENA su ejecución hasta la concurrencia de quince millones de balboas (B/.15,000.000.00) en concepto de capital, más las costas de esta ejecución que, en cuanto a trabajo en derecho se fijan en la suma de un millón cincuenta y tres mil novecientos veinte balboas (B/.1,053.920.00) de acuerdo con la tarifa de abogados, rebajadas en un treinta por ciento (30%), en atención a lo dispuesto en el artículo 1064 del Código Judicial, más los intereses legales correspondientes desde la fecha del incumplimiento de la transacción, a favor de la ejecutante AGROMETAL INTERNATIONAL CORP. y a cargo del ESTADO ARGENTINO, y en consecuencia, DECRETA EMBARGO hasta la concurrencia de veintitrés millones doscientos cincuenta y tres mil novecientos veinte balboas (B/.23,253.920.00), en concepto de capital, costas de ejecución e intereses legales sobre cualquier cuenta bancaria o sub-cuenta, depósitos a plazo fijo o a la vista que posea el Estado Argentino en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Panamá, o saldos disponibles o créditos vencidos o por vencer, quedando autorizados los demandantes a denunciar, al momento de la diligencia, cualquier otra cuenta o sub-cuenta, depósitos a plazo fijo o a la vista o bienes muebles o inmuebles de propiedad del deudor. Se ORDENA al Juez Primero del Primer Circuito Judicial de

Panamá, Ramo Civil, que comunique lo resuelto al Banco de la Nación Argentina, para los fines legales correspondientes y que se encarque de todo lo relacionado con la ejecución de esta sentencia" (fs. 1 y 2 del expediente principal),

Una vez cumplidos los trámites de reparto, ha ingresado el expediente al Despacho del Magistrado Sustanciador, con el propósito de que se fije la fianza que establece el artículo 1196 del Código Judicial, para que el recurso de revisión pueda ser acogido. No obstante, antes de proceder con lo anteriormente señalado, es preciso revisar el libelo del recurso, con las piezas procesales que le acompañan, a objeto de determinar si cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Ley, pues, en el caso que el recurso sea manifiestamente improcedente, el Magistrado Sustanciador puede rechazarlo de plano, en base a lo dispuesto en el artículo 1197 de la citada excerta legal.

La firma forense MORGAN & MORGAN no ha acreditado la representación legal del Estado Nacional de Argentina, a través del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. RODOLFO ALEJANDRO DÍAZ, así como tampoco la titularidad y vigencia del cargo señalado.

A fojas 35-39 consta Escritura Pública N° 10,453, de 29 de septiembre de 1999, "por medio de la cual se protocoliza el documento que contiene la copia auténtica de la Escritura Pública DOSCIENTOS UNO (201) del veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), otorgada ante la Notaría de Buenos Aires, Argentina, la cual contiene el Poder Especial Judicial a favor del doctor EDUARDO MORGAN, Jr. y otros", sin embargo, se observa que al presente expediente no se ha acompañado copia autenticada del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 21 de fecha 8 de julio de 1995, por medio del cual se designa al doctor RODOLFO ALEJANDRO DÍAZ como Procurador del Tesoro de la Nación Argentina.

En este mismo orden de ideas, tampoco consta el Decreto del Poder Ejecutivo número 20 de fecha 14 de enero de 1999 que acredita la intervención del Procurador del Tesoro de la Nación en nombre y representación del Estado Nacional Argentino.

En consecuencia, no se ha cumplido con lo preceptuado en el artículo 622 del Código Judicial.

Vale la pena acotar que, en términos generales, el recurso de revisión procede contra las sentencias o autos que tengan efecto de cosa juzgada material, que hayan sido proferidas, en primera instancia, por un Juez de Circuito, por un Tribunal Superior o, incluso, por la propia Corte, cuando dichos tribunales actúan en primera instancia o, actuando en segunda instancia, el recurso de apelación presentado no se haya surtido, es decir, que no se haya tramitado por algún motivo. Por ello, es contra dichas resoluciones que procede exclusivamente el recurso de revisión, el que, como es consustancial a los recursos extraordinarios o excepcionales, sólo puede apoyarse en las causas que taxativamente señala la ley, en nuestro ordenamiento jurídico-procesal, por el artículo 1189, sin perjuicio de que el Código Judicial, en la reglamentación de otras materias permita, a texto expreso el mencionado recurso.

Adicional a ello, señala el Sustanciador que la Jurisprudencia de la Sala Civil ha establecido que dentro de los procesos de doble instancia, como es este caso en que se recurre contra una decisión de la Corte, no es dable el recurso extraordinario de revisión, como así fue expuesto en las resoluciones de 18 de mayo de 1999, de 30 de abril de 1999 y la de noviembre de 1999, pág. 165-166, que el Sustanciador considera conveniente reproducir en su parte pertinente:

> "Es precisamente el carácter extraordinario y excepcional lo que originó que el legislador dispusiera de normas restrictivas para su regulación pues no puede desconocer, como ya la Sala lo ha manifestado anteriormente, que en el fondo el recurso de revisión va dirigido a dejar sin efecto la autoridad de cosa juzgada de que está revestida la sentencia ejecutoriada cuya revisión se solicita. De

> allí la consideración de que ello sea posible, por vía de excepción, por las razones y bajo las circunstancias que señala la ley, de manera que la revisión de una sentencia no se puede utilizar, como pretenden algunos, como una tercera instancia, sino en los casos que taxativamente se señala y en los que por razones extraordinarias suscitadas dentro de los procesos, como por ejemplo, fuerza mayor, dolo, fraude, etc., y otras circunstancias que dan paso a que se culmine con una sentencia viciada, cuya revisión se hace necesaria para corregir tales anomalías y purificar el proceso con miras a una correcta y justa administración de justicia.
>
> En el recurso de revisión que nos ocupa y tal como se desprende del proceso principal en el que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita, no sólo se surtieron las dos instancias, sino que además se recurrió en casación, correspondiéndole a esta Sala no admitir el recurso ...
>
> En vista de lo anterior, y dado que el proceso en el que dictó la sentencia cuya revisión se solicita, no es de aquellos para los que se prevé el recurso de revisión como remedio para subsanar anomalías. ya que para ello se dieron las instancias dentro del proceso y con ello la oportunidad de que estrados diferentes revisasen la actuación, no es factible la revisión solicitada".

En mérito de lo expuesto, el MAGISTRADO SUSTANCIADOR, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de revisión propuesto por la firma MORGAN & MORGAN contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 2 octubre de 1998.

Notifiquese y Archívese.

(fdo.) EMETERIO MILLER
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

ENERO 2000

AUTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS RODRIGUEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE RIGOBERTO PÉREZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, (11) ONCE DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Tribunal de alzada, del recurso de apelación interpuesto por el Licdo. MOISÉS ESPINO BRAVO a favor de ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ, contra el auto de 2 de diciembre de 1999, emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, por el cual se niega la solicitud de medida cautelar diferente a la detención preventiva.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El Licdo. ESPINO BRAVO manifiesta que en la resolución objeto de impugnación se acepta que no se ha comprobado que hubo acuerdo entre ANTONI DE JESÚS RODRÍGUEZ con su padre (FERNANDO RODRIGUEZ), para la comisión del hecho que se investiga y que solamente se presume de conformidad con las sumarias instruidas por las autoridades investigativas que hubo premeditación, por lo que se violan claros principios procesales que establecen la obligatoriedad por parte del Estado de probar ambos hechos.

Continua el recurrente indicando que se impone el otorgamiento de la medida solicitada (sustitución de la detención preventiva), máxime que FERNANDO RODRÍGUEZ aceptó la responsabilidad de la comisión del ilícito y todos los testimonios así lo confirman, amén de que el artículo 2147-F del Código Judicial también establece la posibilidad de que se otorgue la medida cautelar personal sin tomar en cuenta las agravantes del delito. (F. 20)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL A-QUO

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, tras analizar las constancias procesales, señaló que la conducta del imputado ANTONI DE JESÚS RODRÍGUEZ se enmarca dentro de una complicidad primaria, toda vez que está plenamente probado que mantenía sometido al hoy occiso RIGOBERTO PÉREZ agarrándolo por detrás y poniéndole un cuchillo en el cuello mientras su padre lo agredía. (F. 16)

El Tribunal de primera instancia consideró que en el caso en examen nos encontramos ante la figura del homicidio que lleva aparejada pena de cinco (5) a doce (12) años de prisión, en su modalidad simple, y de doce (12) a veinte (20) años de prisión, si resultare agravado, por lo tanto, indicó que el imputado no tiene derecho a fianza de acuerdo al artículo 2181 del Código Judicial.

Por otro lado, explica el Tribunal A-quo que, teniendo en cuenta el contenido del artículo 2147-D del Código Judicial, las circunstancias en que se produjo el Homicidio de RIGOBERTO PÉREZ, quien fue inmovilizado por ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ con la amenaza de un cuchillo en su cuello, para que fuera acuchillado por su padre, FERNANDO RODRÍGUEZ, revela cierto grado de peligrosidad que franquea la medida cautelar que se pretende sustituir. (F.17)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente negocio tiene su génesis en horas de la tarde del 26 de septiembre de 1998, en el Club 20 de Julio, de la comunidad de Las Guabas, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos, donde se encontraba RIGOBERTO PÉREZ tomando licor en compañía de otras personas, cuando llegaron FERNANDO

RODRÍGUEZ, ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ, VÍCTOR JUSTINIANI RODRÍGUEZ HERRERA y ALBERTO LUIS MELGAR, a quienes les ofreció un trago. En ese momento, ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ agarró a RIGOBERTO PÉREZ por la espalda y le puso un cuchillo en el cuello mientras que su padre, FERNANDO RODRÍGUEZ, lo apuñaleaba.

El hecho se encuentra acreditado a través de las siguientes piezas procesales: Diligencia de Inspección Judicial, Reconocimiento, Levantamiento y Traslado de un Cadáver (Fs. 28-31); Protocolo de Necropsia, en el que se observa que la causa de muerte de PÉREZ fue a consecuencia de Shock Hemorrágico Agudo, Laceración Hepática y Vasos Mesentéricos y Renales y Pared Aórtica Abdominal; Cuatro Heridas por arma blanca(F.356); y la certificación oficial expedida por la Dirección Regional del Registro Civil en relación a la inscripción de la defunción del señor PÉREZ. (F. 479)

Consta en las sumarias que los presuntos responsables del hecho son los señores FERNANDO RODRÍGUEZ y ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ; el abogado de este último ha solicitado la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar, razón por la cual entramos a examinar si existen los elementos que dan lugar a lo solicitado por el recurrente.

En principio, para la aplicación de una medida cautelar se requiere que existan graves indicios de responsabilidad contra el imputado y en el caso en estudio, existen en el expediente una serie de declaraciones juradas de las que se infiere la vinculación de ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA con la muerte violenta de RIGOBERTO PÉREZ.

EUCLIDES GONZÁLEZ se encontraba en el mostrador del Jardín 20 de julio de Las Guabas, eran como las 5:30 de la tarde cuando le dijeron que había un problema afuera, cuando miró y vio que un tal "Tony", o sea ANTONIO RODRÍGUEZ, llevaba a RIGOBERTO PÉREZ con un cuchillo puesto en el cuello, mientras que el papá le iba dando no sabe si era con la mano o era el cuchillo y se veía que era un arma pequeña (Fs. 8-9)

VÍCTOR JUSTINIANI RODRÍGUEZ HERRERA, señala que el día de los hechos, llegó en compañía de su padrino "Yiyo", su papá (FERNANDO RODRÍGUEZ) y su hermano (ANTONIO DE JESÚS), a Las Guabas arriba, al Club 20 de julio, allí se encontraba RIGOBERTO PÉREZ que estaba en una mesa con cuatro personas tomando licor. Ellos los saludaron y RIGOBERTO, se levantó de la mesa y les brindó un trago. Su hermano ANTONIO estaba detrás del hoy occiso y ahí le puso el cuchillo en el cuello mientras su papá lo apuñaleaba. El declarante indica que ANTONIO y su papá llevaban los cuchillos en la pretina del pantalón y no le vio ningún arma a PÉREZ. (Fs. 19-20)

ALBERTO LUIS PÉREZ MELGAR manifiesta que llegaron como a las 4:00 p.m al jardín 30 de noviembre, propiedad de BENIGNO GUTIÉRREZ y estaban tomando seco herrerano; a eso de las 5:00 y sencillo llegó RIGOBERTO PÉREZ en un caballo, andaba sólo, dando a entender que él era más hombre que los demás, ya que hacía tiempo le había pegado a FERNANDO en el Club 20 de julio porque estaba gritando, y de eso hacía como ocho meses más o menos.

Entonces el compadre "Nando" (FERNANDO) dijo que él se sacaba ese clavo, de ese pescozón que le había pegado por el gusto y al rato se fueron para el jardín 20 de julio para seguir tomando, cuando llegaron allá se encontraron con RIGOBERTO y apenas los vio llegar pegó a reírse de ellos, dándoles a entender que era más hombre que ellos, entonces su primo (ANTONIO) lo cogió por el cuello y le dijo que qué le pasaba con ellos y ahí entonces FERNANDO lo apuñaleó, cree que por la barriga y su primo no le hizo nada, sólo lo agarro por el cuello. De ahí se fueron para la casa. (F. 36)

Su primo Antonio cargaba el cuchillo en la mano derecha y con la otra mano le agarró el cuello. (F. 38)

ALCIBÍADES DOMÍNGUEZ PÉREZ iba pasando por el Club 20 de julio cuando lo

llamaron los señores "Quille" y Oscar Vega para que los acompañara a tomarse unos tragos; RIGOBERTO PÉREZ se encontraba en la misma mesa. En eso llegaron FERNANDO RODRÍGUEZ, "Yiyo" y los dos hijos de FERNANDO; también estaba otro hijo de éste que le dicen "Guinchi". Los que llegaron se quedaron de pie y RIGOBERTO se paró y llamó a ANTONIO. Luego "Yiyo" le tiró un trago de seco en la cara a ALCIBÍADES y a "Quille", entonces miró hacia donde estaba RIGOBERTO y vio que ANTONIO lo tenía agarrado por atrás con un cuchillo por el cuello y allí llegó FERNANDO RODRÍGUEZ y lo apuñaleó por la barriga. (Fs. 75-76)

OSCAR LUIS VEGA VELÁSQUEZ manifiesta que se encontraba sentado en una mesa afuera del el Club 20 de julio, vendiendo camarones y yuca, y estaban con él. EUCLIDES GONZÁLEZ, ALCIBÍADES ESCOBAR, "Guinchi" RODRÍGUEZ. Luego RIGOBERTO llegó en un caballo, lo amarró y se sentó a la mesa con ellos. Como a los 15 ó 20 minutos llegaron FERNANDO RODRÍGUEZ, "Yiyo", VÍCTOR RODRÍGUEZ y "Tony" RODRÍGUEZ quienes llegaron y se pararon al lado de la mesa. Después "Tony" tenía a RIGOBERTO cogido por el cuello con una cuchilla blanca grande y le puso una llave con el brazo derecho; entonces el papá le dio con el cuchillo a RIGOBERTO y "Tony" le dijo a "Máquina" (FERNANDO) que se apurara que lo tenía agarrado y éste le daba con el cuchillo de frente. (Fs. 132-133)

En declaración indagatoria, ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA señaló que estaba en el jardín 30 de noviembre en compañía de su papá, su hermano VÍCTOR y LUIS ALBERTO GONZÁLEZ. En eso llegó RIGOBERTO PÉREZ y se puso a tomar ahí; ellos se fueron a la cantina, compraron una botella de seco se pusieron a tomar y se quedaron en ese jardín; RIGOBERTO se fue. Después, a VICTOR le dio ganas de jugar billar y entonces se fueron al jardín 20 de julio de Las Guabas, llegaron y saludaron a la gente que estaba allí.

El indagado señala que se fue al servicio y le pasó por el lado a RIGOBERTO éste se paró y comenzó a darle vueltas y creía que lo iba a golpear, por lo que lo jaló, le metió la mano por la barriga y le puso el cuchillo en el cuello, miró para otro lado cuando sintió que RIGOBERTO se quejó, entonces miró y era su papa que lo había apuñaleado. (F. 181)

RODRÍGUEZ HERRERA comenta que era enemigo de RIGOBERTO porque en una fiesta éste le pegó con un palo en la espalda y de allí en adelante no se hablaban, pero cuando se encontraban por el camino RIGOBERTO le decía que no le tenía miedo a nadie y un día lo amenazó con una escopeta y lo agarró a patadas. Cada vez que se encontraban lo amenazaba y le pegó una cachetada a su papá, de allí comenzaron los problemas. (F. 182)

El cuchillo que llevaba era grande, de cacha blanca y lo cargaba desde hace tres meses más o menos porque RIGOBERTO le dijo que tenía que prepararse porque él tenía un arma blanca y uno de los dos tenía que ser muerto. (F. 183)

El señor FERNANDO RODRÍGUEZ padre de ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ HERRERA rindió declaración indagatoria y manifestó que el día de los hechos, había tomado licor desde las nueve de la mañana y no recuerda mucho de lo sucedido pero explica que vio a su hijo que tenía agarrado por el cuello al hoy occiso y éste le tenía el brazo echado por la espalda, por lo que pensó que RIGOBERTO iba a pegarle a su hijo y antes de que lo hiciera le dio con un cuchillo, no era con intención de matarlo sino para darle un escarmiento. (F. 195-196)

Las normas que regulan las medidas cautelares personales determinan que "cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado" (Artículo 2147-D del Código Judicial) y en relación con su aplicación dice que "sólo se tendrá en cuenta la pena prevista por la ley para cada delito" (artículo 2147-F Ibid).

La Sala infiere, del contenido de las declaraciones, que estamos en presencia de un delito contra la vida y la integridad personal, por el momento Homicidio doloso cuya pena mínima en su modalidad simple es 5 años de prisión y se ha acreditado la vinculación del señor RODRÍGUEZ HERRERA a este hecho.

Es por ello que, con fundamento en las previsiones normativas citadas, esta Corporación de Justicia concluye que debe mantenerse la detención preventiva decretada contra ANTONIO DE JESÚS RODRÍGUEZ.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto 2 de diciembre de 1999, emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO EN DONDE SE REVOCA EL LLAMAMIENTO A JUICIO EMITIDO AL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 16 de mayo de 1997, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en la cual se abre causa criminal contra el señor JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de homicidio doloso cometido en detrimento del señor ABRAHAM GILBERTO BENÍTEZ AGUILAR y lo sobresee en forma definitiva con relación al delito de Homicidio Doloso Imperfecto cometido en perjuicio del señor MARIANO SOLANILLA SEGURA.

TRIBUNAL A-QUO

Como se observa en el auto recurrido, el Segundo Tribunal Superior consideró que las piezas probatorias comprueban que el sujeto activo, es decir, JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA, disparó contra el señor MARIANO SOLANILLA SEGURA ocasionándole la pérdida de la visión del ojo izquierdo con carácter permanente, hecho que fue calificado como una tentativa acabada de homicidio doloso, pues el agente no logró su objetivo porque el ofendido salió huyendo y sólo le ocasionó una lesión grave. (F. 252)

Sin embargo, fue sobreseído definitivamente de ese cargo porque se consideró que VALIENTE BATALLA actuó en legítima defensa, lo que se desprende de los testimonios de los detectives ORLANDO GONZÁLEZ MIRANDA y LORENZO AVILA V., y PABLO ENRIQUE CORSÉN PRETTO, miembro de la Policía Nacional, quienes coinciden en que la primera persona que disparó fue el señor MARIANO SOLANILLA SEGURA, quien presenta antecedentes conflictivos con el imputado por asuntos de delito contra el patrimonio, pues VALIENTE BATALLA denunció ante las autoridades competentes a SOLANILLA SEGURA, ya que éste, utilizando arma de fuego y en compañía de otras personas, logró apoderarse de varios bienes de su propiedad. (F. 252)

Señala el Tribunal de primera instancia que el imputado incurrió en el delito de homicidio en detrimento del señor ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR, porque uno de los disparos dirigidos a SOLANILLA SEGURA hicieron impacto en la

cabeza de BENITEZ AGUILAR y le produjo la muerte, acción que enmarca en lo que denomina la doctrina como el error en el golpe o aberratio ictus que, de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal, exige su procesamiento, para dilucidar la culpabilidad y no está amparado por la excluyente de antijuridicidad que lo favorecía con respecto a la otra persona. (F. 252-253).

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

Sostiene la defensa técnica de VALIENTE BATALLA que éste fue llamado a juicio por el homicidio doloso en perjuicio de ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR, bajo la figura denominada error en el golpe o aberratio ictus, y al ser favorecido con un sobreseimiento definitivo por encontrarse bajo una excluyente de antijuridicidad, en el caso del delito de lesiones personales en perjuicio de MARIANO SOLANILLA SEGURA, debió igualmente ser favorecido con un sobreseimiento definitivo por el delito de homicidio en perjuicio de ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR. (F. 272)

El defensor de oficio señala que su patrocinado se defendió de MARIANO SOLANILLA SEGURA, ya que éste le disparó primero, y ,amparado por la legítima defensa por error mata a ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR, lo que establece que VALIENTE BATALLA no es responsable del homicidio doloso. Indica el Licdo. FERNÁNDEZ que, quien debe ser llamado a responder penalmente por este delito es SOLANILLA SEGURA por ser el causante de manera indirecta de esa muerte, toda vez que, si éste no hubiera efectuado los disparos, su patrocinado tampoco hubiese efectuado disparo alguno, y no se hubiera llamado a responder en juicio a ninguna persona por delito de homicidio. (F. 273)

El recurrente considera que no se está en presencia de la figura del "aberratio ictus", pues su patrocinado no ha cometido acto delictuoso equivocado y no actuó con dolo sino de manera legítima, amparado por el derecho que le corresponde para salvar su vida. (F. 275)

Por otro lado, el apelante plantea que en el caso en estudio no se está ante un homicidio culposo porque VALIENTE BATALLA no pudo preveer que podría matar a otra persona, pues se encontraba en un momento en donde lo único que debía por derecho hacer, era proteger su vida, de manera que no iba a preveer la muerte de un tercero no involucrado, si lo que estaba era viendo como defendía su propia vida. (Fs. 279-280)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, Licdo. EDWIN R. GUARDIA ALVARADO, señala que difiere de lo manifestado por el defensor de oficio, ya que la legítima defensa no es extensible a las causas de la muerte violenta de ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR, dado que el mismo muere a consecuencia de un error en el golpe, lo que se fundamenta en el hecho que el proyectil que causó la occisión de BENITEZ AGUILAR, era dirigido inicialmente en contra de SOLANILLA SEGURA, produciéndose entonces un homicidio doloso imperfecto, el cual es explicado de manera diáfana en el auto recurrido. (Fs. 284-385)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consta en el expediente que en la Calle 10ª y Avenida Amador Guerrero de la Ciudad de Colón, Provincia de Colón, se produjo un tiroteo en el que resultó herido MARIANO SOLANILLA SEGURA, quien fue lesionado en su ojo izquierdo perdiendo la visión permanentemente. Igualmente, ABRAHAM GILBERTO BENITEZ AGUILAR fue herido y se produjo su deceso en la Caja de Seguro Social, hecho que se comprueba con el Acta de Reconocimiento de un Cadáver (F. 77); Informe de Investigación Preliminar (Fs. 82-83); Vistas Fotográficas (Fs.86-88); Protocolo de Necropsia en que se señala que la Causa de Muerte es a consecuencia de Herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. (F. 191-197); vistas fotográficas de la autopsia (Fs. 199-203); y la certificación oficial expedida por la

Dirección General del Registro Civil en relación a la inscripción de la defunción del señor BENÍTEZ AGUILAR. (F. 177)

Se tiene como presunto responsable del hecho al señor JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA y en este estado del proceso corresponde entrar al examen de las constancias procesales para pronunciarnos sobre la pretensión del recurrente.

Consta en el expediente que los Sargentos ORLANDO GONZÁLEZ MIRANDA y LORENZO ÁVILA VARGAS, suscribieron Informe de Novedad donde señalan que estando de turno recibieron el reporte de lo sucedido en Calle 10ª y Amador Guerrero, al llegar al lugar detuvieron al Sr. JOSÉ DEL C. VALIENTE que portaba un arma de fuego calibre 9mm BROUMING con Serie #352604, con permiso vigente de portar Arma #17932 y doce (12) balas vivas.

VALIENTE BATALLA les manifestó que un sujeto apodado "Cuellito", lo había asaltado tres semanas atrás y, al visualizarlo, el asaltante sacó a relucir un arma de fuego, detonándole varios disparos, teniendo que hacer uso de arma de fuego de su propiedad para defender su vida; supuestamente el tal "Cuellito" también recibió un impacto de bala en el cuello, dándose a la fuga por los callejones del lugar. (F. 9). Los Agentes se ratificaron del Informe como se observa de fojas 59 a 63.

El señor JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA al rendir declaración indagatoria manifestó que el día de los hechos se encontraba solo, en el pasillo de la casa de una tía, eran las 4:00 p. m., cuando de repente observó a "Cuellito" (SOLANILLA SEGURA) parado en la esquina de un restaurante y éste lo observaba en tono amenazante, después se quitó de la esquina. Luego el indagado explica que caminó rápido para ver donde se encontraba SOLANILLA SEGURA y así poder llamar a la Policía para que lo capturaran.

VALIENTE BATALLA llegó a la esquina y "Cuellito" comenzó a dispararle, iba corriendo y disparándole, por lo que él le hizo un disparo y siguió persiguiendolo para ver donde se metía y vio que "Cuellito" subió a una casa. VALIENTE BATALLA vio a un sargento de la Policía parado frente a la Mueblería y Joyería SITTIN; sacó su permiso de portar arma y se lo enseñó al sargento, a quien le explicó que estaba persiguiendo a "Cuellito" porque tenía una denuncia de robo en su contra. (F. 30)

VALIENTE BATALLA y el sargento subieron a la casa pero todos los cuartos estaban cerrados y no ubicaron a "Cuellito". Cuando bajaron del inmueble, el sargento le dijo que no había más nada que hacer, que iba a pedir apoyo para ver si encontraban al sujeto. (F. 30)

PABLO ENRIQUE CORSEN PRETTO, quien labora en la Fuerza Pública, en el Departamento de Operaciones de la Dirección de Tránsito en Ancón, explica en declaración jurada que se encontraba en la Mueblería SITTIN y salió a tomar un café. Cuando venía por las inmediaciones del Hotel Carltton, había un ciudadano (SOLANILLA SEGURA) parado en un kiosco ubicado en calle 10 Avenida Amador Guerrero, éste comenzó a dispararle a otro sujeto (VALIENTE BATALLA) que se encontraba en un salón de belleza; este último también hizo disparos, tenía un arma 9mm. SOLANILLA SEGURA se cayó al suelo, se incorporó y salió corriendo por las barberías, mientras que VALIENTE BATALLA salió detrás correteandolo. (F. 107)

El declarante manifiesta que SOLANILLA SEGURA fue el que comenzó a disparar y señala que detuvo a VALIENTE BATALLA, quien voluntariamente le entregó el arma y el permiso para portarla. Explica que personas del lugar le notificaron que SOLANILLA SEGURA llevaba una mano en la cara, que iba sangrando, por lo que procedió a llamar un patrulla y se presentó en el lugar el sargento GONZÁLEZ, a quien le entregó a VALIENTE BATALLA con el arma, el permiso y el proveedor. (F. 107-109)

Del contenido de las declaraciones se infiere que la vida de VALIENTE BATALLA fue puesta en peligro por los disparos que le hizo el señor SOLANILLA

SEGURA y aquél utilizó el único medio con que contaba para repeler el ataque, un arma de fuego al igual que su agresor. Aunado a ello, se advierte que hubo falta de provocación suficiente por parte de VALIENTE BATALLA.

Por lo anterior, la Sala considera que la actuación de VALIENTE BATALLA se dio en el ejercicio de la legítima defensa y al irse corriendo detrás de su agresor lo hizo con la intención de saber donde se ocultaba y avisarle a la policía para que atraparan al sujeto porque le había robado, tal como consta en la denuncia que interpuso ante la Policía Técnica Judicial. (Fs. 43-44)

En cuanto al hecho cometido en perjuicio de BENITEZ AGUILAR, se observa en la encuesta penal que el proyectil que le fue extraído al finado y el arma que le fue incautada a VALIENTE BATALLA, fueron remitidos a la Sección de Balística Forense. De las pruebas periciales se llegó a las siguientes conclusiones:

> "Luego de finalizar con todos los procesos técnicos descritos, se obtuvo el siguiente resultado:
>
> 1. El arma de fuego (pistola) sometida a análisis es idónea para producir disparos.
>
> 2. El proyectil incriminado descrito en el Punto B, fue disparado por el arma de fuego Pistola cal. 9mm, marca FM, con serie N° 352604, descrita en el Punto A.
>
> 3. La Numeración de serie del arma de fuego analizada, presenta registro en nuestros archivos balísticos a nombre de JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE B., Cédula N° 3-84-1720." (F. 217)

MARTÍN JAIRO SEGURA AGUILAR, hermano del hoy occiso, manifiesta que ellos iban pasando por la Calle 10, con dirección a la Avenida Amador Guerrero y al encontrarse entre un Kiosco y la Mueblería SITTIN, se escucharon varias detonaciones de armas de fuego y le dijo a su hermano que VALIENTE BATALLA le estaba tirando bala a SOLANILLA SEGURA y al mirar hacia el lado derecho vio a su hermano en el suelo. (F. 21)

Por su parte, VALIENTE BATALLA dijo que en ningún momento vio al hoy occiso, toda vez que cuando estaba disparandole a SOLANILLA SEGURA el lugar estaba desierto no había nadie, la gente al escuchar los disparos se escondieron. Indica que solamente hizo un disparo y cuando entregó el arma al sargento que cuida el Almacén SITTIN, solamente le hacía falta una bala. (F. 31)

Si bien se evidencia que VALIENTE BATALLA es la persona que causó la muerte de BENITEZ AGUILAR, conforme al peritaje de balística, se debe indicar que llama la atención que el Tribunal de primera instancia considerara que se está en presencia de un homicidio doloso, pues si ha señalado que hay una causa de justificación, ello presupone que se ha eliminado la acción descrita en la ley, lo que se extiende a la muerte violenta de BENÍTEZ AGUILAR, razón por la cual, según la apreciación del Segundo Tribunal Superior, hubo ausencia de dolo y culpa.

Al respecto, el tratadista colombiano Orlando Gómez López expresa lo siguiente:

> "También de una situación objetiva de legítima defensa puede resultar daño no solo al injusto agresor sino también a terceros inocentes, como cuando por ejemplo, el disparo de quien se defiende impacta a un curioso; este supuesto contiene una acción dirigida a la defensa que se ha orientado por parte del agredido en contra del agresor, y que solo por error, apresuramiento, impericia, susto, da en otro, sin haber sido esa la intención. Si la acción defensiva era necesaria la lesión al tercero quedará justificada por fuerza mayor, pues aunque hay un daño no doloso a un bien jurídico inocente,

frente a tales circunstancias impera la necesidad de la defensa, que solo se desvió por el apremio de la agresión.(El Homicidio, Tomo II, Segunda Edición, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1997. p. 71)

La actuación de VALIENTE BATALLA fue con el propósito de salvaguardar su vida y se observa que solamente hizo un disparo ante la agresión de la cual era objeto. Aun cuando se causó un daño a un bien jurídico de igual relevancia (la vida de BENITEZ AGUILAR), la acción desplegada por el agente queda justificada toda vez que en el momento que ejerce su derecho a defender su vida, no podía preveer que su acción traería como consecuencia la muerte de BENITEZ AGUILAR.

En consecuencia, no cabe tipificar la conducta de VALIENTE BATALLA bajo la figura del homicidio culposo, pues éste no pudo observar el deber de cuidado que se exige a quien maneja un arma de fuego, dada la rapidez con que se dio la agresión de que era objeto, ni mucho menos estamos ante un homicidio doloso, ya que en su actuar hubo ausencia de animus necandi, pues no tenía la intención de herir al hoy occiso.

En virtud de lo anterior, se debe señalar que la acción desplegada por parte del señor VALIENTE BATALLA, en las circunstancias que evidencia la investigación, dan lugar a que se reforme el auto apelado y se acceda a lo pedido por el apelante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA el auto apelado solo en el sentido de revocar el llamamiento a juicio emitido contra JOSÉ DEL CARMEN VALIENTE BATALLA y lo SOBRESEE en forma definitiva.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE A ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL COMETIDO EN PERJUCIO DE TERESA MEDINA DE GÓNDOLA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó, en grado de apelación, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el auto de 25 de agosto de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que abre causa criminal contra el señor ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en relación con el Capítulo VI, Título II, Libro I del mismo cuerpo legal, referente al delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de TERESA MEDINA DE GÓNDOLA.

Al momento de ser notificados de la resolución encausatoria, tanto el imputado como su defensor anunciaron recurso de apelación contra lo decidido, el que fue sustentado oportunamente por el defensor de NIVAR DE LA CRUZ, Licenciado Alberto R. Mendoza, quien en su escrito de sustentaciòn solicita a esta Sala,

luego de formular una serie de apreciaciones subjetivas, que si existe "un convencimiento de que si ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ debe ser procesado sea por la supuesta comisiòn de delito contra la vida e integridad personal, especìficamente lesiones agravadas, pero no por homicidio en grado de tentativa porque nunca hubo la intenciòn de matar a TERESA MEDINA GONDOLA ...".

Corrido el traslado respectivo, al agente del Ministerio Pùblico para que formulara sus objeciones, manifiesta a la Sala que se confirme el auto recurrido puesto que conforme con el caudal probatorio allegado al expediente se ha "... establecido la intencionalidad del sujeto activo al causarle las lesiones a la ofendida ...". (fs. 255-258).

Las constancias procesales nos indican que la presente encuesta penal se inicia cuando la señora TERESA MEDINA DE GÓNDOLA se presenta ante el Centro de Recepciòn de Denuncias de la Policìa Tècnica Judicial con el fin de interponer formal denuncia contra el señor ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ, expresando que el día 9 de julio de 1998 habìa sido objeto de una agresiòn por parte de èste, explicando la forma en que se produjo el ataque de que fue vìctima.

En este proceso, el elemento objetivo del hecho punible se encuentra acreditado mediante diversos medios de prueba, entre los que destacan: el examen médico legal visible a fs. 5 y 78 del expediente; las fotos de la ofendida que muestran las heridas que le fueron causadas visibles a fs. 22 y 23; y el examen realizado por la Médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Dr. Aquiles Espino que reposa a fs. 113-114.

En cuanto al elemento subjetivo o vinculación del imputado con el hecho punible, tenemos, por una parte, el señalamiento directo que le hace al imputado la ofendida TERESA MEDINA DE GÓNDOLA, quien al momento de denunciar los hechos relata lo siguiente:

> "El día 9 de julio del presente año (9/7/1998), a las ocho y quince minutos de la noche aproximadamente me dirigí a la casa No. 3143 ... al llegar a la casa, salió a recibirme el señor ISIDRO NIVAL (sic) DE LA CRUZ de nacionalidad dominicana, quien es el esposo de ANA SILVIA y cuando le pregunté por su señora, lo que hizo fue reclamarme ... Al ver que este sujeto se estaba poniendo cada vez mas (sic) agresivo y gritaba muy fuerte me asusté, en eso me estrelló una silla plástica que tenía ... en ese momento salió ANA SILVIA, diciéndome que mejor me fuera ... no había terminado ANA SILVIA de decirme esto, cuando escuche (sic) una voz de algún (sic) vecino que me gritó cuidado TERESA. Al escuchar el llamado de atención, volteé para ver y en eso observé a ISIDRO NIVAL (SIC) DE LA CRUZ, con una tabla de madera 2x4 y bien larga en sus manos. Este (sic) se acercó a mí con el madero y me tiro (sic) a matar ya que el madero iba dirigido a mi cabeza al momento de la agresión, pero para que el madero no me diera en la cabeza, me cubrí con los brazos; dándome primeramente, un fuerte golpe en el brazo, ya que yo al ver la intención de este (sic) puse el brazo para cubrirme ... pero a ISIDRO NIVAL, no le vasto (sic) un solo golpe y me volvió a tirar con el madero en mención y esta vez no pude cubrirme y con el madero este sujeto me dió un golpe tan fuerte e impactante en la cabeza, que inmediatamente perdí el conocimiento". (fs. 1-3).

También constan en el expediente las declaraciones de varios testigos presenciales, quienes coinciden en señalar al señor NIVAR DE LA CRUZ como el autor del ilícito. Así lo declaran bajo juramento los señores VIOLETA MONTERO DE GONZÁLEZ (fs. 11-14), LUIS ÁNGEL CONCEPCIÓN PÉREZ (fs. 15-20) y WILFREDO ARNALDO RODRÍGUEZ CHÁVEZ (fs. 147-150) quien en declaración visible a fs. 148, después de mencionar que dichas personas se encontraban presentes el día de los hechos, expresa:

> "... ISIDRO NIVAR agarró un banco, es como una silla de plástico y

con esa silla de plástico le pegó a la señora Teresa ... Cuando ANA SILVIA trataba de sacar a TERESA de allí, le decía 'Deja eso así, deja eso así', allí vino ISIDRO NIVAR, y de la parte de atrás de la puerta principal agarró un palo de 2x4, el palo es de madera ... y le da con ese palo a la señora TERESA, la señora metió el brazo derecho, ella al recibir ese golpetazo en el brazo casi se cae, allí vino ISIDRO y le da otro golpetazo con el mismo palo a TERESA en la cabeza ...".

La defensa no cuestiona la vinculación del imputado con el hecho ocurrido sino que su disconformidad radica en la calificación de homicidio tentado que del hecho formula el Tribunal de la causa, alegando que la acción desplegada por su defendido "... más bien fue la reacción de una acción ejecutada por la ofendida TERESA MEDINA DE GÓNDOLA" y las lesiones causadas "... no se consumaron con la intención de matar como lo exige la norma ...".

En cuanto a que las lesiones fueron causadas como reacción a una agresión por parte de la ofendida -como alega la defensa- se debe señalar que no está probado en el expediente esa circunstancia y por el contrario de los testimonios obrantes en el proceso se arriba a la conclusiòn que el hecho se produjo sin que mediata provocaciòn alguna por parte de la vìctima y menos se encuentra acreditado que esta portara arma blanca -ni de ninguna otra naturaleza- con la que pretendiera lesionar a su agresor.

En reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que el factor que determina la diferencia entre un delito de lesiones y un delito de tentativa de homicidio lo constituyes la intención con la cual el actor comete el hecho punible y dicha intencionalidad puede determinarse -con las obvias limitaciones inherentes al conocimiento de la mente humana- conforme a las circunstancias que rodean al hecho, el arma utilizada, la forma en que se utiliza, el lugarel cuerpo en que se causa la lesiòn, etc.

En el presente caso, consta en el expediente que MEDINA DE GÓNDOLA fue atacada sin que existiera motivo alguno serio que lo justificara, primero con una silla y luego con una pieza de madera 2X4, utilizada por el agente para la seguridad de la puerta de su residencia causàndole heridas en su brazo derecho y en la cabeza, de una intensidad tan fuerte que la vìctima cayò y perdiò el conocimiento y dejada en ese estado, ISIDRO, como lo expone el testigo LUIS ANGEL CONCEPCIÒN PÈREZ "se va para la casa donde èl de vez en cuando va que es la casa donde vive SILVIA ..."

Como en ocasiones anteriores lo ha señalado la Sala, lo fundamental para estimar un hecho como tentativa de homicidio lo constituye la realizaciòn de un acto que deberìa producir el resultado internamente deseado, -la muerte- y que no se alcanza por circunstancias agenas a la voluntad del agente y en ese orden se aprecia en el presente caso que la intenciòn inequìvoca del imputado no fue la de causar lesiones a la vìctima sino de causarle la muerte, dado el arma utilizada en la ejecuciòn del hecho, el lugar en que se causò la lesiòn, la fuerza con la que se diò el golpe, que produjo la pèrdida del conocimiento de la vìctima, todo lo cual, unido a las consideraciones que se dejan expuestas, dejan evidenciado que se dan las exigencias requeridas por el artículo 2222 del Código Judicial para proferir encausamiento criminal contra ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ y proceder en la forma que lo ha hecho el Segundo Tribunal Superior.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 25 de agosto de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se ABRE CAUSA CRIMINAL contra ISIDRO NIVAR DE LA CRUZ por el delito de homicidio, en grado de tentativa, en perjuicio de TERESA MEDINA DE GÓNDOLA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, SINDICADA POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUCIO DE NIDIA ROSA FIGUEROA (Q. E. P. D.). MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingreso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el auto de 8 de julio de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, como presunta infractora de las disposiciones legales contenidas en el Capitulo I, Titulo I, del Libro II del Código Penal, en perjuicio de NIDIA ROSA FIGUEROA, conforme hecho de sangre ocurrido el 7 de abril de 1998, en el sector 3 de Mañanitas, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.

Al momento de ser notificada de la resolución encausatoria, la imputada MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y en uso de la defensa natural que le asiste, presento escrito sustentatorio de la alzada (fs. 334-335), donde fundamentalmente expresa que su actuación el día en que perdiera la vida la señora NIDIA ROSA FIGUEROA, se produjo en defensa de su integridad física, por cuanto vio peligrar su vida al verse atacada por la hoy occisa, señalando que ella fue a la residencia de NIDIA ROSA FIGUEROA, con el único fin de conversar con el Sr. PEDRO LUNA, para que éste se decidiera entre ella (MARIA) y la Sra. NIDIA FIGUEROA, y al ser informada que no se encontraba optó por retirarse pero al hacerlo la Sra. NIDIA la insultó, profiriendo palabras obscenas en su contra, hasta llegar a una confrontación, donde NIDIA pretendió atacarla con un cuchillo, logrando ella quitárselo, "pero ella estaba empeñada que ese día era su oportunidad con acabar con mi vida, yo eche para atrás y me caí y ella logró agarrarme y cogió una piedra y yo alce la mano para que no me diera con la piedra y de momento y de miedo se me olvidó que tenía el cuchillo en la mano. Yo no sabia que la había matado, porque por primera vez me sucede algo así ..."

El Ministerio Público, por conducto de la Fiscalía Segunda Superior, en su escrito de oposición al recurso presentado, manifiesta que de las piezas procesales que reposan en el expediente y de la versiones de los testigos, se concluye que en este proceso se encuentran reunidas las exigencias requeridas por el art. 2222 del C. Judicial para encausar penalmente a la procesada, dado que en su actuar "no resplandece absolutamente ninguna causa de justificación a su favor como alega, y menos la legítima defensa" que se invoca.

Cabe señalar que en la presente encuesta penal el elemento objetivo del hecho punible se encuentra acreditado con la documentación existente en autos, como lo son la diligencia de reconocimiento del cadáver fs. 2 a 6, las vistas fotográficas fs. 112 a 212; certificado de defunción fs. 244; y el protocolo de necropsia visible a fs. 105 a 111, donde se señala como causa de muerte de la Sra. NIDIA ROSA FIGUEROA SAMANIEGO, taponamiento cardíaco, hemepericardio, perforación cardíaco y de la aorta por objeto punzocortante.

De la lectura de las constancias procesales se aprecia que la Sra. MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, por su propia iniciativa, en la fecha en que ocurre el trágico suceso, se dirige a la casa de NIDIA ROSA FIGUEROA, y al llegar encuentra a esta sentada en una alcantarilla, afuera de su residencia, la toma por el cabello y comenzaron a forcejar hasta que en un momento cayó al suelo y fue

cuando NIDIA recibe las heridas, causadas por el arma blanca que portaba MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, y que finalmente le causaron la muerte.

La excepción de antijuridiciad que alega la imputada no se encuentra acreditada, bajo la condiciones que exige el art. 21 de nuestro Código Penal, donde se establecen como requisitos esenciales de esta causal de justificación la existencia de una agresión injusta, de carácter actual o inminente, la utilización de una medio racional para impedir o repeler la agresión, la imposibilidad de evitarla o eludirla de otra manera y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Contrario a lo que expresa la enjuiciada, los elementos probatorios existentes en autos, como lo son los testimonios de ALBERTO CALIXTO MONTENEGRO MARQUEZ, YENY MABEL FIGUEROA, PEDRO LUNA, y DAYRA EDILMA RIVAS, visibles a fojas 21, 25, 35 y 241, respectivamente dan cuenta que los hechos sucedieron en forma muy distinta a la señalada por la imputada, apreciándose del conjunto de esas declaraciones que MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ es la que va a la residencia de la victima en su búsqueda, que NIDIA ROSA no portaba ninguna arma y se encontraba tranquilamente sentada, cuando llega MARIA y comienza ha agredirla, procurando vanamente NIDIA escaparse del peligro solicitando auxilio, que nunca llego, hasta que recibe las heridas que le ocasionaron su muerte.

En esas circunstancias no es del caso reconocer la legítima defensa que alega la imputada y contrario a ello se debe preservar la decisión apelada.

En mérito de lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, confirma el auto de 8 de julio de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual abre causa criminal contra MARIA DEL CARMEN MARISCAL RUIZ, como supuesta infractora de las normas contenidas en el Capitulo I, Título I, Libro II, del Código Penal, en perjuicio de NIDIA ROSA FIGUEROA (Q. E. P. D.)

Notifiquese y Devuelvase

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A CARLOS DEMETRIO SANJUR RODRIGUEZ SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE IRVING DARIO ORRIBARRA GALLARDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante auto de 6 de octubre de 1999, ABRIÓ CAUSA CRIMINAL contra CARLOS DEMETRIO SANJUR RODRÍGUEZ, de generales conocidas, como presunto infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, o sea, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Irving Darío Orribarra Gallardo.

Esta decisión jurisdiccional fue apelada por el licenciado Rafael Santamaría, defensor del imputado y por el licenciado Samuel Quintero Vásquez, querellante dentro del presente proceso penal.

Terminado el término concedido a los apelantes, sólo hizo uso de su oportunidad el querellante, no así el defensor del imputado (f. 614).

Del escrito de apelación presentado, se le corrió traslado al señor Fiscal Segundo Superior, licenciado Fernando Fabián Gutiérrez, quien se notificó pero no dio respuesta al mismo (f. 615).

Por medio de resolución de 26 de noviembre de 1999, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado y concedió en el efecto suspensivo el recurso presentado por el licenciado Quintero. Siendo notificado el licenciado Gutiérrez, Fiscal Superior (fs. 622-623).

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Samuel Quintero, manifiesta estar de acuerdo con el auto de llamamiento a juicio emitido contra el sindicado Carlos Demetrio Sanjur Rodríguez, medida que solicita se confirme.

Sin embargo discrepa en la decisión del Tribunal de mantener la medida cautelar decretada por la Fiscalía Segunda Superior.

Manifiesta que la medida cautelar que otorgó el Fiscal Segundo Superior al sindicado mediante providencia de 27 de julio de 1998, se fundamentó principalmente en que a juicio del funcionario instructor, el imputado Carlos Demetrio Sanjur actuó bajo la eximente de responsabilidad o causa de justificación, como lo es, la legítima defensa.

No obstante, el auto recurrido discrepa en ese sentido, dado que al calificar el sumario, no considera que el imputado esté amparado por la legítima defensa como causa de justificación, indicando que de haber sido así, hubiese dictado un auto de sobreseimiento definitivo en favor del encartado.

Indica además, que el Código Judicial permite que el funcionario de instrucción ordene la detención preventiva siempre que el delito por el que se procede tenga pena mínima superior a los dos años de prisión, o bien que el autor o participe haya sido sorprendido en flagrante delito.

Considera que la detención preventiva es un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de la pena y un instrumento empleado con la finalidad de asegurar efectivamente el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

Sostiene que se está frente a un delito de homicidio con pena mínima de 5 años de prisión, que fue cometido con premeditación y ventaja salvaje por parte del sindicado, quien le profirió más de 13 puñaladas al hoy occiso.

Por otro lado, señala que el imputado mantiene una medida cautelar distinta a la detención preventiva razón por la que hasta antes de tener conocimiento que fue llamado a juicio, no presentaba peligro de que se diera a la fuga, pero que ahora que conoce su situación jurídica existe peligro de que intente evadir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer de resultar culpable, lo que lo convertiría en un reo prófugo.

Finalmente solicita que se revoque la medida cautelar existente y en su defecto se ordene el arresto del sindicado, al existir el riesgo de que no comparezca a la audiencia, haciendo alusión a que se trata de un delito grave (homicidio) y a la forma como fue ejecutado (fs. 606-613).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Respecto al único aspecto objetado por el licenciado Samuel Quintero, el Tribunal A Quo consignó en el auto apelado, que la medida cautelar otorgada al imputado por la Fiscalía Segunda Superior el 27 de julio de 1998 se estaba haciendo efectiva.

Indica que no consta en el sumario que esa medida esté resultando ineficaz;

y luego de citar un fallo de esta Sala (Noviembre 16 de 1998), concluye que la medida cautelar aplicada es viable y la mantiene con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2147-C y 2148 del Código Judicial, este último reformado por la Ley 44 de 27 de agosto de 1999 (fs. 593-594).

En efecto, por medio de providencia del 27 de julio de 1998 (fs. 282-285), el Fiscal Segundo Superior, Fernando Fabián Gutiérrez P., al estimar que en la presente investigación se había producido los requisitos exigidos en el artículo 21 del Código Penal referente a la causa de justificación de Legítima Defensa, dispuso sustituirle al imputado Carlos Demetrio Sanjur Rodríguez la medida cautelar de detención preventiva, por las siguientes medidas cautelares:

> "1. La prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial;
>
> 2. El deber de presentarse el lunes de cada semana ante el despacho de la Fiscalía Segunda Superior.
>
> 3. La obligación de residir dentro de los límites de la Provincia de Chiriquí.
>
> 4. Prohibición de visitar sitios de expendio de licor".

Ahora bien, al encausar criminalmente al señor Sanjur Rodríguez por el delito de homicidio, el Tribunal A-Quo no acogió la sugerencia del representante del Ministerio Público, quien a través de dos vistas fiscales (fs. 288-316 y 566-569) solicitó se sobreseyera de manera definitiva al imputado, al estimar que actuó en Legítima Defensa.

Para mantener las medidas cautelares impuestas, el Tribunal de Primera Instancia se apoyo en el artículo 2147-C del Código Judicial que se refiere a los casos en que son aplicables las medidas cautelares.

También utilizó como fundamento jurídico el artículo 2148 del Código Judicial que de manera específica se refiere a la detención preventiva y al ser reformado mediante ley 42 de 27 de agosto de 1999, textualmente señala:

> "Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva. Si el imputado fuere una persona con discapacidad, el funcionario, además tomará las precauciones necesarias para salvaguardar su integridad personal" (Gaceta Oficial 23,876).

Primeramente es importante indicar que el Código Judicial denomina "Medidas Cautelares y Excarcelación del Imputado" al Capítulo VI, del Título II del Libro III referente al Procedimiento Penal.

El mencionado capítulo enuncia cuales son las medidas cautelares, entre ellas, la detención preventiva (art. 2147-B), cuando deben ser aplicadas (art. 2147-C); estableciendo que cada medida debe ser proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado; y que la detención en establecimientos carcelarios sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas; indica los casos en los cuales no se decretara la detención preventiva (art. 2147-D).

También orienta que al momento de aplicar una medida cautelar personal "sólo se tendrá en cuenta la pena prevista por la ley para cada delito" (art. 2147-F).

El capítulo en comento tiene una sección denominada "Detención Preventiva" donde encontramos el artículo 2148 que fue utilizado por el Tribunal de Primera Instancia en la decisión impugnada y del cual hemos transcrito su contenido.

Pero también de manera exclusiva se encuentra una sección denominada "Exclusión del derecho de Excarcelación" compuesto sólo por el artículo 2181 del código Judicial, que establece en seis numerales, los delitos que están excluidos del derecho de excarcelación bajo fianza.

Así, de manera categórica en su numeral 1 el artículo 218 del Código Judicial, excluye a los imputados por delito que la ley penal sanciona con pena mínima de cinco años de prisión.

Lo que significa, que siendo la detención preventiva la medida cautelar más severa, se aplica necesariamente a aquellos delitos -entre otros,- que dada su gravedad la ley le asignó una pena mínima de cinco años de prisión.

Es decir, que el mismo legislador consideró que en los delitos que por su naturaleza tengan pena mínima de cinco años de prisión, se debe aplicar al imputado de manera específica, la detención preventiva. Es decir, que no le concedió al juzgador la facultad de evaluar según su criterio cuál medida cautelar imponer. Es un mandato categórico de la ley. Situación que sólo podría variar, de presentarse un cuadro fáctico extremo definido en la ley.

En el caso bajo examen, se está ante el delito de homicidio cuya pena mínima es de cinco años y dada su vinculación con el mismo, el imputado Sanjur Rodríguez ha sido llamado a responder criminalmente.

Dado el fundamento jurídico presentado, se impone reformar el auto tal como lo sugiere el apelante.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA el auto apelado SOLAMENTE en el sentido de ORDENAR LA DETENCIÓN PREVENTIVA de CARLOS DEMETRIO SANJUR RODRÍGUEZ.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO T.

Pienso que debieran mantenerse las medidas cautelares impuestas al procesado, proferidas por el agente del Ministerio Público en la fase instructora.

A mi juicio, el argumento del apelante para que se reemplacen las medidas cautelares fijadas por la de detención preventiva, dada la posibilidad de fuga del imputado, ahora que ha sido llamado a juicio, no tiene mayor respaldo procesal, pues el expediente da cuenta que las medidas fueron impuestas desde el 27 de julio de 1998 y hasta la fecha el procesado ha cumplido con ellas.

Tampoco estimo procedente la argumentación, que se hace en el proyecto de que "en los delitos que por su naturaleza tengan pena mínima de cinco (5) años de prisión, se debe aplicar al imputado de manera específica la detención preventiva". El hecho de que, en términos generales el delito de homicidio doloso no admita el derecho a obtener libertad bajo caución, no es absoluto, porque ya

en ocasiones anteriores esta Sala ha concedido fianza de excarcelación a imputados por un hecho de esta naturaleza como igualmente ha reemplazado la detención preventiva por otras medidas cautelares distintas.

En el presente caso, las medidas cautelares impuestas al enjuiciado fueron otorgadas por el Fiscal instructor de la causa, con fundamento en los razonamientos que expuso en su resolución de fojas 282-285, donde estimó que en la encuesta se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 21 del Código Penal para reconocer la causal de justificación de legítima defensa.

El Tribunal Primario, al calificar el delito, si bien pronunció un auto encausatorio en contra del procesado, de la lectura de esa pieza procesal se aprecia que no se refiere a la argumentación de la Fiscalía y muy superficialmente motiva su decisión, concretándose primordialmente a exponer razones por las cuales se debe mantener las medidas cautelares decretadas por el funcionario instructor, bajo el criterio, presumo de que fuera el cuerpo de jurados el que decidiera, en su momento, si se daba la excepción de antijuricidad conocida como la legítima defensa.

Como el criterio que expongo no es el del resto de mis Honorables Colegas, con todo respeto me aparto de la decisión mayoritaria.

Fecha: Ut Supra

(Fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(Fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE CONFIRMA EL AUTO APELADO EN EL CASO SEGUIDO A MARCOS C. EUSTAQUIO SANJUR, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000.).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante auto de 26 de octubre de 1999, ABRIÓ CAUSA CRIMINAL contra EUSTAQUIO SANJUR MARCUCCI, como presunto infractor de normas contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código penal, o sea por un delito de Homicidio cometido en perjuicio de la menor Marina Montezuma Sánchez (fs. 138-143).

La licenciada Micaela Morales Miranda, Defensora de oficio del imputado, al momento de notificarse del auto en comento, anunció recurso de apelación. Presentado el escrito respectivo en tiempo oportuno, se concedió el recurso en el efecto suspensivo, por lo que corresponde a esta Sala realizar el examen respectivo.

FUNDAMENTO DE LA APELANTE

La licenciada Morales Miranda sostiene que de las pruebas que reposan en autos como las testimoniales e incluso la declaración indagatoria, se desprende que el señor Eustaquio Sanjur Marcucci al momento que se originarse la muerte de la menor Marina no estaba en completo dominio de sus facultades mentales por la ingesta de chicha de maíz fuerte, confundiendo a la menor con una abusión que lo agredía, y que inclusive la propia madre de la infortunada menor lo señala agrediéndola, tanto a ella como al padre de la menor.

Opina que su representado no pensó ni se representó como posible el resultado de su acción, no existía el conocimiento y la voluntad de dar muerte a la menor.

Por lo que al existir prueba en el expediente de lo expresado, que contradice lo señalado por el dictamen médico psiquiátrico, considera que debe decretarse la inimputabilidad del señor Eustaquio Sanjur, dado que el dictamen médico psiquiátrico no es vinculante para el juzgador, quien es en suma, el que maneja la totalidad del expediente.

Sostiene que el dolo o intención de ocasionar la muerte de la menor Marina no se ha acreditado en esta investigación.

En consecuencia solicita se revoque el auto de marras y se declare inimputable a su representado o de lo contrario, se decrete la ampliación del sumario, ordenando que se le efectúe una evaluación psiquiátrica forense, por un equipo de psiquiatras de la ciudad capital (fs. 147-150).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Fernando Fabián Gutiérrez P., Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, se refiere a las declaraciones de Banjelila Sánchez Marcucci y Julio Montezuma Marcucci.

Explica que coinciden en manifestar que Eustaquio Sanjur estaba pateando a la niña Marina y cuando la madre intentó quitársela, él quiso quitarle el otro niño que ella llevaba en la chácara y la haló por el cabello, forcejaron, el padre agarró a la niña herida, y ambos salieron corriendo por el monte y Eustaquio los perseguía, logrando esconderse hasta que se alejara del lugar.

Se refiere a que Ángel Marcucci Montezuma, quien estuvo en la junta de la finca de Julio Montezuma, declaró que a las dos y media de la tarde se pusieron a tomar chicha hasta las seis de la tarde, cuando se acabó, y que Eustaquio Sanjur lo vio sentado no sabe si estaba borracho, pero estaban tomando iguales, y él se encontraba medio mareado.

Sostiene que el examen psiquiátrico forense practicado a Eustaquio Sanjur se certifica que sí tenía discernimiento de los actos que ejecutó y capacidad de comprender la licitud o ilicitud de los mismos, y que es imputable por sus actos.

Cita el representante del Ministerio Público un fallo de esta Sala Penal de 30 de enero de 1995 donde se recuerda que la embriaguez sólo llega a tener el carácter de causa de inimputabilidad cuando es involuntaria, fortuita y completa.

En consecuencia de lo expresado, solicita se confirme el auto apelado (fs. 153-154).

ANÁLISIS DE LA SALA

Específicamente la disensión del apelante se centra en sostener que su defendido, el señor Eustaquio Sanjur Marcucci es inimputable y por tanto no debe ser llamado a juicio criminal.

La presente investigación penal se refiere a la muerte violenta de la menor de 4 años de edad, Marina Montezuma Sánchez, en horas de la noche del día 19 de marzo de 1999 en Quebrada Plata, corregimiento de San Juan, al recibir "trauma contuso en cráneo que provoca hemorragia intracraneal, conllevando a descomposición neuro hemodinámica y su muerte", según consta en el protocolo de Necropsia N° 69-99 signado por la doctora Luz E. Silvera, Médico Forense Auxiliar del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público (fs. 63-65).

Vinculado a esa muerte se tiene al señor Eustaquio Sanjur Marcucci, quien según lo declarado por los padres de la occisa, fue quien le propinó los golpes que le ocasionaron la muerte.

En ese sentido, la señora Banjelina Sánchez Marcucci o Vangelista Sánchez Marcucci (fs. 10-13), madre de la niña, afirma que el día de los hechos su marido

Julio Montezuma tenía una junta para tumbar el monte, que empezó a las 11 de la mañana, y que estuvieron presentes los señores Justiniano Sánchez, Santiago Marcucci, Ángel Marcucci, Eustaquio Sanjur y su marido, quienes tomaron chicha de maíz; y se terminó como a las seis de la tarde, sin ningún problema.

Indica que salió como a las siete de la noche hacia la casa en compañía de sus dos hijos y su marido, que éste se regresó a buscar su machete y ella siguió el camino con sus hijos, que se encontró a Eustaquio Sanjur quien la siguió y luego se bajo del caballo, tomó a la niña diciendo que la iba a llevar a la casa y salió corriendo en el caballo; que esperó a su marido y cuando llegaron al portón de una finca, allí estaba Eustaquio pateando a su hija en el suelo, trató de apartarlo pero no pudo; que su marido le quitó a la niña, y Eustaquio trato de matar a su otro hijo, al lograr soltarse se escondieron en un monte. Muriendo su hija en la casa a la media noche (fs. 10-13).

En el mismo, sentido declara Julio Montezuma Marcucci, padre de la niña (fs. 14-18).

Por su parte, Eustaquio Sanjur Marcucci, al rendir declaración indagatoria (fs. 24-29) señala que estuvo en la junta de Julio Montezuma para tumbar un monte, que había chicha de maíz en dos tanques amarillos de 5 galones cada uno, que tomó bastante y la misma estaba bien pasada; y que la comida tenía frijoles.

Narra que después de las seis de la tarde se fue sólo a caballo a su casa; que llegando al corral de la finca de Julian Marcucci, sintió que una mujer lo tenía agarrado por la cintura, que el caballo no quería caminar y textualmente señala: "yo sentí que era Chogaly, espíritu malo, sentí que me tumbo al suelo, allí comencé a luchar con la abución, no me recuerdo si le pegué, de allí parece que me fui pa (sic) mi casa" (f. 25)

Agrega que en el lugar donde dicen lo encontraron pegándole a la niña, hacía un año que su caballo no quiso pasar por allí, por eso dice que sale abución, por eso le pegó a la mujer o cosa que lo estaba agarrando atrás ese 19 de marzo de 1999, que fue en la noche, todo estaba oscuro y al caer al suelo y sintió que era un cuerpo grandote y no se recuerda con que le pegó.

Manifiesta que quería a la niña, y que si hizo eso fue pensando que era abusión, que estaba bien borracho y no recuerda nada.

Estas son las pruebas que constan en el expediente y tales declaraciones fueron consideradas por el Tribunal de Primera Instancia.

Sostiene la licenciada Morales Miranda que las pruebas en el expediente contradicen lo señalado por el dictamen médico psiquiátrico, y que éste dictamen no es vinculante para el juzgador, por lo que debe decretarse la inimputabilidad del señor Eustaquio Sanjur.

Advierte esta Sala que siendo un caso con especiales características, el Tribunal Superior no haya mencionado siquiera el examen médico psiquiátrico a que se refiere la defensa, el cual es de gran importancia en el presente caso.

Mediante oficio PSIQ. N° 887-99 de 27 de septiembre de 1999, el doctor Manuel E. Núñez, Médico Psiquiatra Forense del instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Dirección Regional, Chiriquí-Bocas del Toro, informa que realizó evaluación médico legal psiquiátrica al señor Eustaquio Sanjur Marcucci de 32 años de edad, en cinco sesiones (9 de mayo, 22 de junio, 1, 8 y 16 de julio de 1999). Al respecto certifica lo siguiente:

"1) El examinado actualmente no presenta alteración de sus facultades mentales.

2) No presenta signos o síntomas de perturbación mental.

3) Si tiene discernimiento de los actos que ejecutó y capacidad de comprender la ilicitud o ilicitud de los mismos.

4) Si es imputable por sus actos.

5) No requiere del internamiento en un centro hospitalario, tampoco de laguna medida de seguridad curativa.

6) No es dependiente físico o psíquico de algún tipo o clase de droga o estupefaciente.

7) El examinado en todo momento ha mantenido una actitud cooperadora con buen nivel de atención. Sin embargo resulta llamativo que afirma que no recuerda absolutamente nada como una manera de defensa con el paso de los día se ha reafirmado en dicho postura, cuando en su primera declaración hace referencia a diferentes sucesos que detalla en dicha indagatoria.

8) Certificación que efectuamos en nuestra condición de Médico Psiquiatra Forense del instituto de Medicina Legal de David" (f. 118).

En el mismo oficio se adiciona la Evaluación Psiquiátrica y en sus consideraciones médicos legales, el galeno señala:

"El examinado es un adulto que no presenta trastorno de conducta y en su referencia en cuanto a sus hábitos y costumbres explica que suele ingerir bebidas alcohólicas toda vez que se da una actividad grupal. Y en esta oportunidad en la declaración que hace de su actividad en el día de los hechos, efectúa una relación pormenorizada de los mismos y hasta refiere la "lucha que libró esa noche". Sin embargo posteriormente repite que no recuerda nada e insiste en que no sabe que pasó, "que estaba inconsciente de la mente en ese momento". Y reitera que no sabe absolutamente nada, que no recuerda nada. Afirmación posterior que contradice su primera declaración" (f. 121).

Como lo ha certificado el especialista en la materia, el señor Eustequio Sanjur Marcucci es imputable.

Ahora bien, en cuanto que el imputado no estaba en pleno dominio de sus facultades mentales por haber ingerido chicha de maíz fuerte, ello no es motivo para declararlo inimputable.

Tal como lo citó el representante del Ministerio Público en la presente causa, esta Sala Penal de conformidad con lo normado en el Código Penal ha reiterado "que la embriaguez sólo llega a tener carácter de causa de inimputabilidad cuando es involuntaria, fortuita y completa" (Enero 30 de 1995).

Tal situación no se ha presentado, toda vez que de manera voluntaria libó chicha de maíz en la junta.

Por otra parte, en el apartado de los antecedentes personales de la Evaluación Psiquiátrica del señor Sanjur al referirse al alcohol se consigna: "16 años chicha de maíz y allí la primera intoxicación. Luego guarapo de caña siempre terminaba "borracho", pero dice que hacía buena bebida. Tomaba en ambarres, cortando monte, leña en trabajo comunitario" (f. 120).

Por lo expuesto, esta Sala no accede a la solicitud hecha por la licenciada Morales Miranda.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A IRMA DEL ROSARIO APONTE, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala de lo Penal del recurso extraordinario de casación interpuesto por el licenciado Cesar Raily de Boutad Vega, en representación de IRMA DEL ROSARIO APONTE. Dicho recurso fue interpuesto contra sentencia de 27 de mayo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a la procesada a la pena de 4 años y 7 meses de prisión.

Una vez cumplido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde entrar a examinar los presupuestos formales que estructuran el libelo presentado, a objeto de verificar si reúne los requisitos relativos a su admisibilidad.

En este sentido, se observa que la historia concisa del caso no refiere adecuadamente el relato de los hechos que originaron la causa penal sub júdice, aunque hace énfasis en los aspectos procesales mas relevantes.

La causal invocada es la de Violación directa de la ley sustancial, establecida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación a los motivos que se aducen para sustentar la causal de la referencia, la Sala observa que en esta sección del recurso el recurrente consigna en 4 incisos (A, B, C y D) afirmaciones de las que no se deriva en modo alguno cargos de injuridicidad tendientes a demostrar el vicio de ilegalidad que se atribuye al fallo censurado, conforme a la técnica de este medio de impugnación extraordinario.

En lo que concierne a las disposiciones legales infringidas, se observa que el censor aduce que la resolución impugnada conculca los artículos 2431 y 1133 del Código Judicial. A propósito del artículo 2431, señala en casacionista que dicha norma ha sido violada directamente, sin expresar si se trata de violación directa por comisión o por omisión. Asimismo se observa que el recurrente omite la explicación que sustenta la infracción de dicha disposición legal. De otro lado, en cuanto al artículo 1133 ibídem, prima facie se advierte que el proponente de la iniciativa procesal sub júdice no expresa el concepto de infracción correspondiente, como lo exige la técnica casacionista.

Ante la comprobación de que el libelo bajo examen carece de sustento lógico jurídico, porque no cumple con los presupuestos que establece el numeral tercero del artículo 2443 del Código Judicial, es viable declararlo inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ORLANDO MORENO MURILLO, PEDRO JUAN JARAMILLO, NICOLAS PEREZ ORTEGA Y OTROS, SANCIONADOS POR DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebración de la audiencia oral, corresponde a este Tribunal Colegiado resolver dos recursos de Casación en el Fondo interpuestos por los licenciados RUBEN D. MONCADA LUNA y ORLANDO MORENO MURILLO, en representación de los señores PEDRO JUAN JARAMILLO y NICOLAS PEREZ ORTEGA, respectivamente, quienes fueron condenados a la pena de setenta y dos meses de prisión (72), por haber sido encontrados culpables del delito de PECULADO POR APROPIACION.

La condena fue proferida por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá el 26 de enero de 1998 y confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 15 de junio de 1998.

HISTORIA CONCISA

El día 25 de febrero de 1996 en horas de la madrugada se cometió un hurto por el orden de los sesenta y tres mil dólares (B/.63,000.00) en el almacén El Fuerte de San Miguelito.

Posteriormente el antisocial abordó un taxi con el producto de lo hurtado, cuyo conductor era DIOMEDES MONTENEGRO, minutos después el vehículo es detenido por miembros de la Policía Nacional (sargento SEBASTIAN GONZALEZ, y los cabos PEDRO JARAMILLO y NICOLAS ORTEGA); al ser revisado encuentran en el maletero armas de fuego y la suma de dinero arriba indicada.

Sin ser avisados por la radio de control se presenta al lugar el subteniente VICTOR OSPINO y el sargento RAFAEL BUTLER, procediendo a repartirse el dinero producto del ilícito cometido en el ente comercial arriba descrito.

Los procesados fueron condenados a seis (6) años de prisión por la comisión del delito de PECULADO.

Con relación a PEDRO JUAN JARAMILLO el casacionista manifiesta que la descripción de los hechos no se compadece con el tipo penal utilizado, ya que por ser funcionarios públicos se le aplicó la norma de PECULADO dejando de lado la disposición que recoge los hechos desplegados por los procesados, que de acuerdo al recurrente es Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito. Señala que la causal infringida se denomina infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación de esta al caso juzgado.

Por su parte, el defensor técnico de NICOLAS PEREZ ORTEGA, señala que se cometió un error de derecho al calificar el delito, de allí que se le impuso a su representado la pena de 72 meses de prisión.

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO A FAVOR DE PEDRO JUAN JARAMILLO

El licenciado RUBEN MONCADA LUNA solicita casar la sentencia proferida por el Segundo tribunal Superior de Justicia y que su defendido sea absuelto del delito de PECULADO.

CAUSAL DE FONDO INVOCADA

Infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación de esta al caso juzgado". (Artículo 2434, numeral 1).

MOTIVOS

El casacionista sustenta su causal en tres motivos.

Como bien se manifestó en la resolución que admitió el presente recurso, el primer motivo resulta ininteligible, por lo que no se efectuaran comentarios al respecto.

Con relación al segundo motivo el casacionista considera que la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia tipifica una conducta distinta (PECULADO) a la desplegada por PEDRO JUAN JARAMILLO dentro del proceso. Expresa que se fundamentó en la calidad de funcionarios públicos que tenían los imputados, por lo que se aplicó una norma sustantiva que no regula los hechos, utilizando la que no correspondía.

En su tercer motivo señala el casacionista, que la sentencia erróneamente sostuvo que los miembros del orden público al aprehender a los ladrones y apropiarse de lo que estos habían sustraído, significa que esos bienes les fueron confiados a los procesados por razón del cargo que ostentaban, por lo que el ente jurisdiccional asumió que la administración, percepción o custodia le había sido confiada al Estado, representada en los miembros del orden público.

En estos motivos estriban los cargos de injuridicidad.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

El casacionista señala que el fallo atacado vulneró los artículos 322 y 364 del Código Penal.

Sostiene el postulante que se infringió el artículo 322 del Código Penal de manera directa por comisión porque el tribunal aplicó una proposición jurídica que no corresponde a los hechos planteados.

Explica el licenciado MONCADA LUNA que su representado, PEDRO JUAN JARAMILLO ejercía funciones públicas como policía, pero este cargo no le daba la calidad de administrador de bienes que no pertenezcan al Estado, ya que eran el producto de un ilícito.

Agrega, que el Estado sólo puede dar en administración al servidor público los dineros, bienes, valores u otros objetos "que nacen a la vida jurídica mediante el presupuesto nacional", de allí que es necesario que el funcionario público tenga la posesión de los bienes vía mandato de la ley, y ello no ha ocurrido en este caso.

Concluye señalando el recurrente la posición doctrinal del PECULADO que señala que, cuando la posesión se da en forma delictuosa, el apoderamiento del bien configura otro delito y no el Peculado.

Con respecto al artículo 364 del Código Penal, manifiesta el casacionista que la norma fue infringida de manera directa por omisión, porque es el tipo penal que debió aplicarse.

Agrega que la conducta típica desplegada por PEDRO JUAN JARAMILLO consistió en aprehender a los antisociales y ocultar los dineros y valores que sabían o presumían pertenecían a un hecho punible.

Expresa finalmente el recurrente, que en el delito de PECULADO los bienes y valores provienen de la administración pública, mientras que en el delito de Aprovechamiento de Cosas Proveniente del delito (artículo 364 del Código Penal) se exige que los bienes provengan de un hecho punible.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

De fojas 1059 a 1079 el licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R. emite su opinión con respecto al recurso que nos ocupa. Es del criterio que la sentencia proferida por el tribunal de segunda instancia no debe ser casada ya que no se acreditó la causal invocada.

Externa el Señor Procurador con relación a los motivos, que el primero es ininteligible, mientras que los otros dos fueron esbozados de manera incompleta, de allí que el cargo de injuridicidad es deficiente, porque el casacionista señaló que la norma utilizada de manera incorrecta era el PECULADO, pero no identificó la norma sustantiva que se debió aplicar.

Al referirse a las disposiciones legales infringidas, manifiesta el postulante que el casacionista erró al establecer el concepto de la infracción, ya que no es violación directa, sino indebida aplicación porque al señalar que:

> "... se vulneró de manera directa por comisión, significa que el censor considera que es aquella la disposición que regula el caso y, por consiguiente, la norma que se debió aplicar, cuando la tesis defendida por el impugnante radica en que su defendido no cometió delito de peculado y que por lo tanto no se le debió aplicar el artículo 322 ..."

Al referirse al artículo 364 del Código Penal, expresa la representación social que no comparte el criterio del censor porque los agentes de la fuerza pública por mandato legal asumían la función de custodios de los dineros hasta entregarlos a las autoridades competentes, de allí que la conducta desplegada se ubica en el delito de PECULADO.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACION

La causal de fondo invocada por el casacionista como vulnerada es "infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación de esta al caso juzgado", ella surge cuando el tribunal al seleccionar la norma aplicable al caso incurre en el error de escoger la que no encaja a la situación planteada en el proceso, esta causal requiere necesariamente la inaplicación de la norma correcta al caso planteado.

El letrado MONCADA LUNA sustenta, que la norma que recoge la actuación de PEDRO JUAN JARAMILLO es el Aprovechamiento de Cosas Proveniente del Delito y no la del Peculado Por Apropiación, de allí que el Segundo Tribunal Superior de Justicia erró al establecer la norma sustantiva sancionadora.

Al efectuar el análisis que exige la rigurosa técnica casacionista con respecto a la estrecha relación y coordinación que debe existir entre la historia concisa, los motivos y las disposiciones legales infringidas, así como el concepto de la infracción, que dará como resultado la causal invocada, nos adentraremos al estudio de los motivos.

Como bien manifestamos, a foja 1044 el primer motivo fue sustentado de tal manera que resulta ininteligible, de allí que no procede su análisis.

A propósito de este motivo y cumpliendo con nuestras funciones didácticas

es pertinente recordar al casacionista que la sencillez y precisión al externar las distintas secciones que componen este recurso constituyen los requisitos fundamentales para que el tribunal de Casación pueda comprender en profundidad su pensamiento.

Por existir correlación es pertinente analizar de manera conjunta el segundo y tercer motivo.

El Ad-Quem para sustentar su fallo es del criterio que la conducta desplegada por PEDRO JUAN JARAMILLO y OTROS, se enmarca dentro del delito de PECULADO porque al momento de la aprehensión ellos ejercían funciones públicas y tenían la custodia de los bienes recuperados por el ilícito, mientras no fueran puestos a órdenes de la autoridad competente.

Frente a estas aseveraciones la Sala comparte los criterios contenidos por la segunda instancia, porque el artículo 322 del Código Penal requiere como presupuesto la calidad de servidor público para el sujeto activo, así como que los bienes le fueran confiados por razón de su cargo, ya que si el servidor público labora para el Estado es este en su calidad de empleador quien le otorga la administración, percepción o custodia de "esos bienes".

En tal sentido se observa, que la doctrina ha señalado que lo que determina este tipo penal no es, en suma, la persona o propietaria de los bienes, sino la ofensa que recibe el Estado por el comportamiento de ese funcionario público, ya que quebrantó su deber de fidelidad y probidad para con la administración pública. (MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, vol. III, Colombia, editorial Temis, 1972, pág. 173).

En esa línea de pensamiento URIEL FRANCO en su obra El Peculado manifiesta que:

> "A veces el bien puede no pertenecerle propiamente al Estado, ni tampoco a un particular por haberle sido, digamos, decomisado; pero estarle atribuida al primero potestad dispositiva, en cuyo caso el empleado oficial comete peculado si se lo apropia" (FRANCO, Uriel, El Peculado editorial Temis Colombia, 1987, pág. 59)

Existe, en consecuencia, un criterio compartido por la doctrina en el sentido, que los bienes no necesariamente tienen que se públicos o pertenecer al Estado, ni mucho menos encontrarse regulados en el presupuesto nacional para configurar el tipo penal de Peculado.

En esta ocasión los bienes son de procedencia ilícita y los miembros del orden público responden a la Constitución, a la ley y se encuentran en la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, ello significa que bajo el verbo rector "custodiar" los policías pueden cometer delitos de los contenidos en el Título X(Contra la Administración Pública) del Libro II del Código Penal.

Con respecto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, señala el recurrente el 322 y 364 del Código Penal.

Con relación al artículo 322, que regula el Peculado por Apropiación, fue vulnerado, de acuerdo al casacionista de manera directa por comisión.

Pero este concepto de la infracción no se compadece con la causal invocada, porque la violación directa por comisión se manifiesta cuando el juzgador aplica la norma que regula la situación en controversia, pero lo hace de manera incompleta desconociendo un derecho claramente consignado en el texto, de allí que no es viable para acreditar la "infracción de la ley sustancial penal por indebida aplicación de esta al caso juzgado".

En tal sentido existe jurisprudencia que se ha expresado en estos términos,

para lo cual hacemos uso de la sentencia de 18/12/98 bajo la ponencia del magistrado HUMBERTO COLLADO cuando señaló que:

> "La violación directa por comisión se genera cuando el juzgador selecciona correctamente la norma que regula la situación controvertida, pero la aplica en forma incompleta, desconociendo un derecho claramente consignado. En el proceso bajo examen, la causal invocada es la indebida aplicación de la ley sustancial al caso juzgado. Esta causal se produce, como se señaló ut supra, cuando el tribunal al seleccionar la norma aplicable a la controversia, escoge la que no encaja en la situación del hecho que se ventila."

En cuanto a la violación directa por omisión del artículo 364, que regula el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, explica el casacionista que esta es la norma sustantiva que regula la actuación de su representado y que no fue aplicado por el Ad-Quem.

Sobre el particular no comparte la Sala el criterio del casacionista porque este tipo penal que forma parte de los contenidos Contra la Administración de Justicia, recoge la actuación de los miembros del orden público que no participaron en el delito, presumiendo su procedencia intervienen en su adquisición, receptación u ocultación. En el caso que nos ocupa, ellos tenían la función de custodiar temporalmente los bienes recuperados, faltaron al juramento de fidelidad para con el Estado porque se apropiaron de los bienes recuperados producto de las funciones que realizaban como entes encargados de prevenir el delito.

En otro orden de ideas, este tribunal no puede soslayar el yerro cometido por el casacionista al señalar el concepto de la infracción, de allí que por distintas consideraciones la sentencia de 15 de junio de 1998 no será casada.

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO A FAVOR DE NICOLAS PEREZ ORTEGA

Paralelamente al recurso de Casación interpuesto a favor de PEDRO JUAN JARAMILLO, el licenciado ORLANDO MORENO MURILLO interpuso otro a favor de NICOLAS PEREZ ORTEGA, en el que solicita se case la sentencia de 15 de junio de 1998 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia contra su representado y se le absuelva de los cargos a él formulados.

En el referido fallo el Ad-Quem confirmó la sentencia de 26 de septiembre de 1997 emitida por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, en la que se condenó a PEREZ ORTEGA a la pena de setenta y dos (72) meses de prisión.

CAUSAL DE FONDO INVOCADA

"Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo". (Artículo 2434, numeral 3)

MOTIVOS

El cargo de injuridicidad es sustentado en dos motivos.

Sustenta el peticionario en el primer motivo, que la sentencia de 15 de junio de 1998 califica erróneamente la conducta desplegada por NICOLAS PEREZ como PECULADO por la calidad que ostentaba como funcionario público (era miembro de la fuerza pública) aunque no era un empleado de manejo de fondos, ni se le confiaron los mismos para su administración o custodia.

En el segundo motivo expresa el recurrente, que el fallo impugnado califica la conducta de PEREZ ORTEGA como PECULADO, aunque de acuerdo al casacionista es un desacierto jurídico porque el comportamiento de su representado no se enmarca

en ese tipo penal, ya que la sentencia deja de lado que, cuando los miembros del orden público toman posesión del dinero, ya se había consumado el delito de hurto.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y
EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

Las disposiciones legales infringidas, de acuerdo al recurrente, son los artículos 322 y 364 del Código Penal. Veamos:

Indica el casacionista que el artículo 322 fue infringido en concepto de indebida aplicación porque el único presupuesto que tenía su representado con respecto al delito de PECULADO POR APROPIACION, era que ostentaba la calidad de servidor público.

Agrega que el delito cometido por su representado fue el de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTE DEL DELITO y que el infringir la ley, abusando del cargo de servidor público constituye únicamente una agravante conforme lo dispuesto en el artículo 67, numeral 6 del Código Penal.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

La primera figura del Ministerio Público externa apreciaciones similares a las proferidas en el recurso de casación de PEDRO JUAN JARAMILLO, es decir, recomienda que no se case la sentencia, por no lograr el casacionista acreditar la causal invocada.

Agrega el Señor Procurador que el cabo II, NICOLAS PEREZ ORTEGA como miembro de la Fuerza Pública tenía el deber de garantizar la paz, la seguridad ciudadana, cumpliendo con la Constitución y las leyes de la República y al apropiarse de esos dineros incumplió sus deberes como servidor público.

Externa el Ministerio Público que el delito cometido fue el de PECULADO, porque JARAMILLO ostentando la calidad de funcionario público adquirió la custodia temporal de los bienes apropiados y agrega que el delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito le hubiera sido aplicado a JARAMILLO, si este no hubiera ostentado el cargo de funcionario público o si ostentándola dentro de sus atribuciones no se encontrara la custodia de bienes.

Por ello considera que no se acreditó la causal invocada y por ende la sentencia no debe ser casada.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACION

El recurrente sustenta la causal de error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo.

Esta causal nace al mundo jurídico, cuando el juzgador al calificar el hecho punible incurre en el error de ubicarlo en un tipo diferente.

Al verificar los cargos de injuridicidad sustentados en los dos motivos que presenta el casacionista, este tribunal se percata que el mismo sustenta, de manera reiterativa, la calificación errónea por parte de la segunda instancia cuando calificó la conducta de NICOLAS PEREZ ORTEGA como PECULADO POR APROPIACION sólo por ostentar la investidura de miembro de la fuerza pública, ya que el resto de los presupuestos que exige el 322 del Código Penal no se encuentran presentes en la actuación desplegada por su representado.

Frente a esas afirmaciones quedan inconclusos los motivos, ya que no explica la causal presuntamente infringida por el Ad-Quem, por lo que no logra materializar los cargos de injuridicidad.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, este tribunal de

casación observa que el recurrente indica que el artículo 322 del Código Penal, fue la norma sustantiva utilizada por el Ad-Quem para confirmar la sentencia condenatoria de NICOLAS PEREZ ORTEGA; fue infringida en concepto de indebida aplicación, pero al sustentar el concepto de la infracción retoma los mismos señalamientos vertidos en los dos motivos que sustentan su escrito, de allí que no aporta nuevos elementos en esta sección que permitan a esta superioridad determinar, inequívocamente, la existencia de la causal aducida.

Reitera el casacionista, que la segunda instancia utiliza como fundamento la calidad de funcionario público de su representado, cuando ello constituye una agravante del delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito (que de acuerdo al casacionista recoge los presupuesto de la actuación ilícita de su representado) conforme lo dispuesto en el artículo 67, numeral 6 del Código Penal.

Con respecto al artículo 364 del Código Penal señala que el recurrente que fue infringido de manera directa por omisión, ya que esta es la norma penal que debió ser aplicada a NICOLAS PEREZ ORTEGA y no la de PECULADO, por la que fue condenado.

Lo cierto es que al observar el fallo atacado, visible a folio 990 -995, éste utiliza los siguientes fundamentos jurídicos para confirmar la sentencia de primera instancia:

> "1. La conducta de los sindicados JARAMILLO, ORTEGA, GONZALEZ, OSPINO y BUTTLER se encuentra tipificada dentro del delito de Peculado, puesto que éstos al momento de aprehender a los delincuentes, como funcionarios públicos, tenían la custodia de los bienes recuperados del ilícito hasta que fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Como miembros de la Policía Nacional, dichos imputados han faltando a su juramento de proteger la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos.
>
> 2. Queda debidamente probado que los hechos realizados por los imputados constituyen el delito de peculado (sic), ya que estaban investidos de plena identidad como funcionarios públicos, En cualesquiera delitos es responsabilidad de la Policía Nacional el recabar evidencias y presentarlas ante la autoridad para su posterior inventario y custodia.
>
> 3. Ante tales circunstancias, exigen suficientes indicios para que se dicte sentencia condenatoria, por lo que debemos confirmar el auto apelado, por cuanto realiza una correcta aplicación de las normas procesales y sustantivas penales."

Esta sentencia responde directamente a los cargos por los que fue procesado NICOLAS PEREZ ORTEGA, es decir, por el Libro II, Título X, Capítulo I del Código Penal, de allí que el casacionista no logró formular la causal presuntamente cometida por la segunda instancia.

En tal sentido y cumpliendo con las funciones didácticas que debe tener cada pronunciamiento por parte del tribunal de casación al proferir su fallo, nos permitimos utilizar un extracto de la obra CASACION de los autores JORGE FABREGA y AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, cuando al explicar esta causal a página 321 presentan el siguiente ejemplo:

> "En el supuesto de que un particular que no tiene el manejo, administración ni disposición de bienes de Estado, se apropiare de los mismos por cualquier medio de ejecución idóneos, estaríamos ante un caso de hurto o de apropiación indebida, pero el juzgador lo califica como peculado por apropiación. Allí no solo se da una calificación que influye en la determinación del tipo, sino también en la posible extensión de la penalidad aplicable al caso."

Vemos entonces que para que proceda esta causal es necesario que el imputado haya sido sancionado por un hecho punible distinto por el que fue encauzado o sea que la sentencia condenatoria no sea la consecuencia directa de los cargos formulados a través del auto de llamamiento a juicio, si la actuación del Segundo Tribunal Superior de Justicia se enmarca dentro de estos presupuestos es claro, que el recurrente tiene la razón, de lo contrario, le mismo ha utilizado la causa incorrecta para sustentar el error advertido en la sentencia del Ad-Quem.

Existe profusa jurisprudencia que sustenta este criterio, para lo cual haremos uso de la Sentencia de 23 de febrero de 1999 que se expresa en los siguientes términos:

> "... La Corte ha establecido que esta causal se manifiesta cuando "el juzgador sanciona al imputado con un delito no comprendido en el capítulo o título del Código Penal que sirvió de fundamento para la apertura de la causa o llamamiento a juicio"".

Lo que nos lleva a señalar que el casacionista erradamente utilizó la causal contenida en el artículo 2434, numeral 3, cuando la que debió utilizar fue la causal de indebida aplicación de la ley sustancial(2434, numeral 1) pues lo que ha intentado expresar el recurrente es que el Segundo Tribunal Superior de Justicia aplicó la norma sustantiva a una situación no regulada por ella.

Debe recordar el casacionista que este recurso de carácter extraordinario conlleva, además de la estructura formal una adecuada sustentación con contenido lógico jurídico en las distintas secciones que lo integran que determine, sin lugar a dudas, la infracción de la ley, ya que de lo contrario, el mismo no tiene razón de ser, por lo que de existir incongruencias en los motivos y en las, disposiciones legales infringidas, no se acredita la causal de fondo invocada.

Por ello no le queda a esta Sala otra alternativa que no casar la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida a favor de PEDRO JUAN JARAMILLO y NICOLAS PEREZ ORTEGA.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS CARLOS ROSALES SANCIONADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensora oficiosa, CARMEN LUISA DE STAGNARO actuando en nombre y representación de LUIS CARLOS ROSALES ha interpuesto recurso de Casación en el Fondo contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el pasado 4 de diciembre de 1998, en atención al cual se confirmó la condena de

cuarenta (40) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término por la comisión del delito de Actos Libidinosos en perjuicio de la menor JESIBETH JULISSA CORTÉZ REYES.

Considera la casacionista que el Ad-Quem al estimar el caudal probatorio cometió errores de derecho en su apreciación, los que conllevaron la confirmación del fallo impugnado.

HISTORIA CONCISA:

A raíz de los señalamientos que le formula la menor JESIBETH CORTÉZ a LUIS CARLOS ROSALES éste es procesado y condenado por el delito de Actos Libidinosos por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá a cuarenta (40) meses de prisión.

Narra la ofendida, que desde el 20 de diciembre de 1996 era objeto de agresiones sexuales por parte del procesado, afirmaciones que son confirmadas clínicamente, ya que al ser sometida a los exámenes psicológicos los galenos certificaron que padece de "estrés post traumático por abuso sexual".

Entre las pruebas que fueron valoradas incorrectamente, de acuerdo a la casacionista, por la segunda instancia, además de la deposición de la ofendida, se encuentra la evaluación psicológica proferida por el Instituto de Medicina Legal y las declaraciones de las señoras AURISTELA SIBAUSTE DE NELATON y LELIA ERNESTINA AGUILAR DE BORBUA, quienes depusieron lo que a ellas le constaba, así como los comentarios que la madre de la menor, EYRA LASTENIA REYES DE CORTEZ les había manifestado. sobre los hechos que nos ocupan.

CAUSAL DE FONDO INVOCADA:

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado" (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS:

La casacionista fundamenta la causal expuesta en tres motivos, los cuales se desarrollan a continuación:

PRIMERO: Manifiesta la casacionista que el Segundo Tribunal Superior de Justicia apreció incorrectamente el testimonio de la menor ofendida JESIBETH JULISSA CORTEZ REYES (fojas 9-12), ya que ese testimonio contiene afirmaciones que le restan fuerza probatoria porque la denuncia se presenta en enero de 1998 y los hechos ocurrieron el 20 y 24 de diciembre de 1996 y 25 de diciembre de 1997, es decir, mucho tiempo antes de informar lo sucedido a las autoridades investigativas. En ello estriba el cargo de injuridicidad.

SEGUNDO: Manifiesta la casacionista como otro cargo de injuridicidad, que del dictamen psicológico (foja 17) surgieron indicios suficientes para vincular a LUIS CARLOS ROSALES, soslayando que en el lapso transcurrido entre la evaluación y las fechas en que se dieron los tocamientos "... no es posible relacionar en forma unívoca el estado psíquico de la menor ofendida al momento de la evaluación psicológicas (sic), con las acciones ilícitas que se atribuyen a nuestro representado."

TERCERO: Advierte la recurrente que las declaraciones de las testigos, AURISTELA SIBAUSTE DE NELATON (fs. 21-249) y LELIA ERNESTINA AGUILAR DE BORBUA (fs. 25-28) fueron evaluadas incorrectamente por la segunda instancia, porque de estos testimonios se intenta determinar el cambio de conducta de la menor, pero no se especifica la fecha en que se dio el inicio de este comportamiento, de allí que no puede generar indicios en contra de su representado.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

La peticionaria en fundamento a la causal de fondo invocada señala los artículos 904, 967 y 972 como disposiciones adjetivas infringidas, las que se contienen en el Código Judicial. Señala como norma sustantiva vulnerada el artículo 220 del Código Penal.

Con relación al artículo 904 expresa la recurrente, que fue vulnerado de manera directa por omisión porque la sentencia da por probado, que a partir de la declaración de la menor ofendida el procesado ejecutó los actos libidinosos y ello se opone a la Sana Crítica porque los señalamientos se dan de hechos que datan de un año atrás por lo que se "... demerita la capacidad de evocar hechos pasados en la forma en que los ha narrado la presunta víctima ..."

Al señalar el artículo 967, externa la recurrente que fue infringido por violación directa por omisión porque la sentencia deduce del dictamen pericial psicológico una relación directa entre la ofendida y los supuestos actos desplegados por su representado.

Agrega la casacionista que tal apreciación se opone a las reglas de la Sana Crítica ya que la experticia se realizó un año después de ejecutados los actos libidinosos, por lo que se impide tener una "... relación unívoca entre el estado psíquico de la menor y las presuntas acciones ilícitas de nuestro representado."

Como última norma adjetiva vulnerada, señala la peticionaria el artículo 972 en concepto de violación directa por omisión.

Llega a esta conclusión porque el Ad-Quem al ponderar los testimonios de las señoras AURISTELA SIBAUSTE DE NELATON y ERNESTINA AGUILAR DE BORBUA deduce graves indicios en contra de LUIS CARLOS ROSALES.

Estas deposiciones dan fe del cambio de conducta de la menor ofendida, pero no señalan la fecha en que se percibió esa variación en el comportamiento, constituyendo este aspecto la valoración incorrecta del juzgador.

Como norma penal infringida por indebida aplicación, señala la recurrente el artículo 220 porque a consecuencia del error de derecho en la apreciación de la pruebas no se demostró que LUIS CARLOS ROSALES haya ejecutado actos libidinosos en perjuicio de la menor JESIBETH JULISSA CORTEZ.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA, Procurador General de la Nación recomienda a esta superioridad no casar la sentencia de 4 de diciembre de 1998, ya que no se ha demostrado por parte de la casacionista el quebrantamiento de la ley sustancial penal.

Con relación a los motivos, externa la representación social que la valoración efectuada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia es cónsona con el caudal probatorio que reposa en el expediente, de allí que no se comprobaron cargos de injuridicidad.

Al referirse a las disposiciones legales infringidas al pronunciarse con respecto al artículo 904 del Código Judicial, expresa el Señor Procurador que el testimonio de la ofendida no ofrece dudas sobre la veracidad y certeza de lo narrado.

Con relación al 967 externa, que "el argumento de la censora es subjetivo, al pretender demeritar el resultado del examen psicológico, a pesar que no existe en el expediente ninguna otra prueba que científicamente cuestione la experticia psicológica", se refiere al informe médico legal de foja 17 del proceso.

Al manifestar su opinión sobre las aseveraciones vertidas por la casacionista con respecto al artículo 972 del Código Judicial, expresa el licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRIGUEZ que el cambio de actitud advertido por

las testigos AURISTELA DE NELATON y LEILA AGUILAR DE BORBUA demuestran los problemas psicológicos que la menor padecía, los que confirman el examen clínico, por lo que concluye que la norma citada no fue conculcada por el Ad-Quem.

Con relación a la norma sustantiva infringida, artículo 220 del Código Penal, el representante de la vindicta pública es del criterio que no ha sido vulnerada, recordando que en las causales probatorias debe acreditarse en primera instancia la vulneración de la norma adjetiva, por lo que si ello no ha sido comprobado por parte de la casacionista, no puede señalarse como vulnerado por indebida aplicación el artículo 220 del Código Penal.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACION

La causal de "error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo", se presenta cuando se objeta la valoración o calificación que se hace de la prueba, la que resulta incompatible con la ley que la regula.

Requiere como requisito indispensable para que la causal prospere, que el error cometido influya de manera directa en el pronunciamiento del juzgador, es decir, en el fallo.

Señalado lo anterior procede este tribunal colegiado a determinar la existencia o no de la causal señalada en el párrafo anterior para lo cual se procederá a estudiar los motivos que la sustentan.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al valorar el testimonio de la ofendida (fojas 9-12) se expresó en los siguientes términos:

> "Un estudio a las piezas procesales de marras, nos llevan a la conclusión que la sentencia atacada debe ser confirmada, toda vez que está plenamente acreditada la responsabilidad del procesado en los hechos investigados, lo cual emerge del señalamiento de la ofendida, quien narra de manera diáfana y contundente los diferentes actos impúdicos de que fue víctima".

Para concluir de esta manera, el Ad-Quem valoró en toda su extensión el testimonio de la ofendida y no se observa la existencia de una errada apreciación, ya que es de recordar que el artículo 2223 del Código Judicial le otorga una fuerza probatoria al testimonio del ofendido en este tipo de delitos, el cual se emitió cumpliendo con las formalidades de ley, aunado al hecho que las aseveraciones allí vertidas no se contradicen ni carecen de lógica o coherencia en su exposición.

Por otro lado llama la atención a la Sala, que la casacionista indique que de acuerdo a la lógica y a un elemental razonamiento el testimonio de JESIBETH JULISSA CORTEZ REYES no tiene mayor fuerza probatoria porque los hechos que narra datan de años atrás.

Sobre el particular, observamos que los hechos se ejecutaron en fechas especiales o de fácil recordación: 20 de diciembre, 24 y 25 de diciembre, por lo que si para el común de las personas es fácil rememorar acontecimientos ocurridos en fechas tan especiales como esas, con mayor razón lo debe hacer una menor cuya libertad sexual le fue vulnerada.

En consecuencia respecto de éste primer motivo, la Sala concluye que no se materializa el cargo de injuridicidad señalado por la casacionista.

Con respecto al segundo motivo, es de recordar que el examen médico legal es elaborado por profesionales idóneos en la materia, es decir, por peritos que cuentan con la preparación científica, técnica y la experiencia para atender este tipo de vejámenes sexuales.

Al examinar la prueba que se reputa como mal valorada a foja 17, éste Tribunal de Casación aprecia que el psicólogo forense LUIS E. RODRIGUEZ certifica que:

"...
1. la evaluación se realizó el día 28 de enero del presente en el IMEL;

2. la evaluada se presentó atenta, cooperadora, consciente, buena memoria, sin presentar alteración de pensamiento, pseudopercepción o disfunción psicomotora;

3. La evaluada tiene un coeficiente de inteligencia promedio cónsono con su edad cronológica;

4. La evaluada dice que su tío Luis Carlos Rosales desde el 28 de octubre de 1996 hasta marzo de 1997 ha (sic) estado besándole sus partes, el sujeto la amenazaba y la obligaba a dejarse hacer lo que el quería hacerle. Nunca llegó a penetrarla. El sujeto es consumidor de droga y dejo de abusar de ella porque cayo detenido;

5. La menor evaluada por la angustia, vergüenza y temor intentó cortarse las venas;

6. La evaluada evidencia estrés post traumático por abuso sexual;

7. Se recomienda psicoterapia para la evaluada." (negritas nuestras)

Las conclusiones a las cuales arribó el galeno, constituyen el producto de su apreciación y percepción de los hechos, luego de tratar clínicamente a la ofendida, y, por lo que recomendó seguimiento clínico a la menor.

Además de este peritaje el Segundo Tribunal Superior de Justicia fundamentó su fallo en el examen psiquiátrico (fojas 42-44) y el psiquiatra forense coincide con las conclusiones del psicólogo al externar, que el relato de la menor es coherente y cronológico; por lo que ambos peritajes se complementaron y permitieron al juzgador de primera instancia y luego al de segunda, concluir que lo narrado por la menor es el producto de las vivencias sexuales que contra su voluntad vivió y que definitivamente afectaron su normal desenvolvimiento como niña de 12 años de edad, la cual para la fecha en que se dieron los hechos, conforme a lo expresado por ella a foja 9, aun no había entrado a la pubertad.

Esta Sala comparte las estimaciones valorativas efectuadas por el "Ad-Quem" a este peritaje, por lo que deshecha el cargo de injuridicidad propuesto.

Con respecto a los testimonios aducidos en el tercer motivo, este Tribunal de Casación estima que las deposiciones de AURISTELA SIBAUSTE DE NELATON (fojas 21-24) y LELIA ERNESTINA AGUILAR DE BORBUA (fojas 25-28) no fueron decisivas para proferir la sentencia condenatoria de LUIS CARLOS ROSALES ya que al efectuar las ponderaciones pertinentes esos testimonios sólo fueron empleados para ratificar el estado anímico de la ofendida, ya que ninguna de las dos tenía conocimiento por percepción propia de lo sucedido entre LUIS CARLOS ROSALES y JESIBETH CORTEZ.

De allí que estas declaraciones no han incidido de una manera directa en la confirmación de la sentencia condenatoria de LUIS CARLOS ROSALES, por lo que la casacionista debe recordar que estas pruebas no pueden constituir los motivos que sustentan la causal alegada.

En conclusión, tampoco se materializa en este motivo el cargo de injuridicidad que se acusa.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la casacionista aduce la violación directa por omisión del artículo 904 del Código Judicial.

Como se ha indicado en reiteradas oportunidades, la norma citada en el párrafo anterior, determina los parámetros que debe seguir el juzgador para precisar el valor probatorio de la prueba testimonial, utilizando las reglas de la Sana Crítica, amén de las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerzas de las distintas declaraciones.

En tal sentido la recurrente indica que el 904 fue vulnerado porque el Ad-Quem, acredita el hecho punible a partir del señalamiento que la menor hace a LUIS CARLOS ROSALES, ya que de acuerdo a la Sana Crítica los hechos narrados datan de fechas que exceden un año por lo que disminuyen su fuerza probatoria.

Sobre el particular, la Sala retoma los criterios vertidos en párrafos anteriores al descartar el cargo de injuridicidad del primer motivo.

De allí que sólo es pertinente reiterar el concepto de la Sana Crítica como sistema de valoración, conforme a la doctrina. Veamos:

> "Se debe analizar la prueba en conjunto, esto es, la valoración de cada medio en función de todos los otros medios. Comparar las testificaciones con los documentos, los documentos con los resultados de las inspecciones judiciales y relacionar estos a su vez con los dictámenes de los peritos, etc., a fin de comprobar si el conjunto forma un todo unitario y coherente" (CABRERA ACOSTA, BENIGNO, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 6ta. edición).

En este mismo orden de ideas, la Sala observa que haciendo uso de este sistema de valoración el Segundo Tribunal Superior de Justicia, foja 157, se pronuncia en los siguientes términos:

> "La ausencia de rasgos de violencia física y de golpes en la anatomía de la víctima no es óbice para asegurar que no hubo actos libidinosos, debido a que de las constancias en autos y de la declaración de la menor, se desprende que éste ejercía amenazas e intimidación sobre ella, lo que hacía de fácil realización por parte del encartado el ilícito contra el decoro, aunado al hecho probado de los indicios de presencia y oportunidad, que se derivan de haber convivido bajo el mismo techo en casa de la ofendida."

Otra norma que aduce la casacionista fue violada de manera directa por omisión, es el artículo 967 del referido Código Judicial.

La recurrente considera que esta norma fue infringida por el valor otorgado al peritaje efectuado por los galenos del Instituto de Medicina Legal en el que certifican, que la menor ofendida padece de stress post traumático.

Observa la casacionista, que ello se opone a las reglas de la Sana Crítica porque el peritaje se efectúa un año después de haberse dado el hecho, lo que impide establecer el estado psíquico de la menor, así "como las presuntas acciones ilícitas de nuestro representado". Por ello considera que el artículo 967 ha sido infringido de manera directa por omisión.

La Sala tampoco comparte este criterio porque las pruebas fueron valoradas en su conjunto.

El artículo 967 establece los parámetros de valoración que debe seguir el juez frente a un dictamen pericial y si confrontamos esta norma con los señalamientos que sobre su vulneración señala la recurrente, no se observa su incumplimiento, ya que es de recordar que esta prueba en conjunto con el resto de las acopiadas al proceso, fueron estimadas por el Ad-Quem para confirma el fallo condenatorio.

Como última norma procesal infringida, el recurrente menciona el artículo

972 e indica que también fue infringido de manera directa por omisión por los indicios de vinculación que surgieron en contra del procesado por los testimonios de las señoras SIBAUSTE Y AGUILAR.

En este sentido son válidas las consideraciones expresadas por este tribunal en los motivos, específicamente el tercero.

La Sala sólo agrega que, comparte el criterio del Ad-Quem cuando al estimar los testimonios de las señoras SIBAUSTE y AGUILAR expresó que:

> "... si bien no fueron testigos presenciales de los hechos denunciados, sus versiones dan fe del cambio de conducta de la víctima, ya que la conocen desde pequeña, lo que desencadenó en su intento de quitarse la vida, situación que a esa corta edad, es difícil imaginar que se pueda fingir".

El artículo 972 determina la forma en que el juez valorara los indicios, y esas declaraciones no constituyen señalamientos directos en contra del procesado, pues es suficiente leer el pronunciamiento del tribunal para llegar a esa conclusión.

Como corolario a lo expresado, si observamos el caudal probatorio que reposa en el proceso contra LUIS CARLOS ROSALES concluimos que el Ad-Quem no los ha estimado de manera incorrecta o aislada que conlleve la infracción de la norma adjetiva que señala la casacionista por lo que no se ha demostrado la infracción de la referida norma procesal.

Finalmente la casacionista indica que la norma sustantiva infringida por indebida aplicación es el artículo 220 del Código Penal.

Sobre el particular y sin entrar en mayores consideraciones nos hacemos eco de la reiterada jurisprudencia, que con respecto a esta causal probatoria existe en nuestro país.

Señala esa fuente del derecho que en las causales de naturales probatoria, la infracción de las normas sustantivas ocurre de manera indirecta a consecuencia de la infracción de la disposición adjetiva, por lo que al no probarse la violación de la norma adjetiva, no se demuestra la vulneración de la sustantiva.

En conclusión, al no acreditarse la causal alegada, ni la infracción de las disposiciones legales, no procede casar la sentencia.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia recurrida por la defensa oficiosa de LUIS CARLOS ROSALES.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO FERNANDO LEVY EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR DE OFICIO DE GABRIEL RODRÍGUEZ ACUÑA, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Fernando Levy, en su condición de defensor de oficio, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra sentencia de 14 de mayo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual, previa reforma, condena a Gabriel Rodríguez Acuña a la pena de 40 meses de prisión, como autor del delito de posesión agravada de drogas ilícitas.

En esta oportunidad procesal corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso presentado. Con tal objeto, se observa que el recurrente aduce la causal prevista en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, es decir, cuando la sentencia del Tribunal Superior ha incurrido en la infracción de la ley sustancial por indebida aplicación. La jurisprudencia de la Sala Penal ha establecido con claridad que al invocarse la causal de indebida aplicación "no se discute la prueba del hecho, es decir, se tiene por descontado que el hecho está probado; lo que se discute es la aplicación al caso de una norma que no regula esa situación, en vez de aplicar aquella que la regula efectivamente" (sentencia de 20 de julio de 1992. Registro Judicial, julio de 1992, p. 11).

La causal invocada se apoya en tres motivos. De entre ellos, se expone el argumento de que la actuación del imputado ha sido ubicado "indebidamente" (f. 140) en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, cuando los antecedentes del caso revelan que su comportamiento se adecua al párrafo primero de esa normativa penal, que se refiere a la posesión de drogas con ánimo de consumo. Como se observa, ese razonamiento no se compadece con la causal que invoca el recurrente, toda vez que el debate no está encaminado a comprobar la aplicación de una norma que no regula el caso. A juicio de la Sala, ese argumento configura perfectamente otra causal de casación en el fondo que no ha sido invocada por el recurrente. Nos referimos al supuesto en que la sentencia atacada infringe la ley sustancial penal en concepto de violación directa por comisión, ya que el Tribunal aplica la norma correcta pero sin tomar en consideración su claro contenido.

En cuanto a las disposiciones legales que se dicen infringidas, la Corte observa que el casacionista cita de manera deficiente el concepto de la infracción del artículo 260 del Código Penal (f. 141), ya que sostiene que esa norma penal ha sido infringida, simultáneamente, de dos maneras: por comisión y por omisión.

Con motivo de los defectos señalados, se concluye que el libelo de casación no cumple con el requisito estipulado en el numeral 3, literal c del artículo 2443 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Fernando Levy, en su condición de defensor de oficio, contra sentencia de 14 de mayo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual, previa reforma, condena a Gabriel Rodríguez Acuña a la pena de 40 meses de prisión, como autor del delito de posesión agravada de drogas ilícitas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALBERTO ANTONIO GUTIERREZ HAWKINGS Y OTROS, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE:

GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada BEATRIZ HERRERA PEÑA, en su condición de defensora oficiosa del señor ALBERTO ANTONIO GUTIÉRREZ HAWKINS, anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo dentro del proceso penal seguido a su representado, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO.

Vencido el término de lista al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, entra la Sala a examinar la admisibilidad de esta acción extraordinaria.

El examen del libelo permite advertir que la casacionista aduce dos causales de casación en el fondo, denominándolas ambas como: "... Por error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba", de allí que, seguidamente, se analizará el cumplimiento de los presupuestos y requisitos para la procedencia de este recurso extraordinario de manera separada.

La recurrente narra la historia concisa de manera incorrecta porque la misma efectúa una descripción de las distintas etapas del proceso sin establecer de manera clara, objetiva y sucinta, como lo exige la técnica casacionista, los principales elementos del caso que permitan a la Sala conocer su inconformidad con la sentencia de 7 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Aunado a lo anterior, la peticionaria sustenta esta sección con los argumentos esgrimidos por ella al presentar el recurso de apelación, lo que riñe con las exigencias de éste apartado, en especial.

Con respecto a la primera causal, (que se reitera en la segunda) prima facie se observa que ha sido enunciada de manera deficiente, ya que se dice: "... Por error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba".

Al cotejar la causal aludida con la establecida en el artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial, se observa que allí no se encuentra contenida esa causal, es decir, el legislador consagra el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el de derecho en cuanto a la apreciación de ella, que implican infracción de la ley sustancial, por lo que la causal esgrimida por la casacionista resulta inexistente y, no se encuentra contenida en el artículo 2434 del ya referido Código de Procedimiento como incorrectamente se expone en el libelo.

Adolece igualmente este recurso, de la identificación de la prueba que se alega no valorada, al igual que las fojas en que se encuentran. Sobre este particular, la jurisprudencia ha señalado, que en las causales de naturaleza probatoria, como las que nos ocupan, el recurrente debe identificar plenamente las fojas del proceso en donde reposa la prueba no valorada o si es el caso valorada inadecuadamente (fallo de 30/7/98. Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal).

En lo relativo a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, dada la rigurosidad de este recurso, la técnica casacionista, exige que los requisitos tengan un orden estructural, ya que su omisión violenta el carácter formalista otorgado al mismo.

Ello significa que enunciada la disposición legal infringida, debe señalarse seguidamente el concepto de la infracción por separado y su respectiva explicación, lo que ha sido obviado por la recurrente.

En este sentido se ha pronunciado la Sala en reiterada jurisprudencia. Así,

mediante fallo de 16 de agosto de 1999, con respecto a esta sección expresó:

> "... debemos señalar que la técnica casacionista requiere que las disposiciones legales infringidas se señalen como una sección autónoma; que en ella se transcriban las disposiciones pertinentes y se explique luego de cada transcripción el concepto en que según el recurrente ha sido infringido el precepto".

Por otra parte, la recurrente indica como disposición legal infringida el artículo 770 del Código Judicial cuando dicho artículo no es congruente con la causal de error en cuanto a la existencia de la prueba, ya que esta norma procedimental sólo señala la forma en que deben ser valoradas las pruebas, por lo que se requiere aportar otra norma que acredite, que un medio probatorio no ha sido estimado en base a lo que determina el 770 del Código Judicial.

Con respecto a la segunda causal, fue denominada de manera similar a la primera, es decir: "Por error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba", ésta como bien señalamos es desconocida en nuestro derecho positivo. En conclusión, como quiera que la causal ha sido enunciada de manera incorrecta, ello impide determinar a cual de las dos causales contenidas en el numeral 1 del artículo 2434 se refiere, dado que el enunciado de la primera causal es similar al de la segunda y ambas han sido formuladas de manera incorrecta.

Al persistir la incorrecta denominación de la causal que impide que este tribunal logre descifrar la que se desea invocar, lo procedente es negar su admisión.

Con relación al motivo que sustenta la segunda causal, así como las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, reiteramos los criterios ya esbozados con respecto a la primera.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE, el recurso de casación penal en el fondo promovido por la licenciada BEATRIZ HERRERA PEÑA a favor de ALBERTO ANTONIO GUTIERREZ HAWKINS.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE ANTONIO ROJAS GRANADOS, MARIO ALBERTO FUNG POSSO y JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Corresponde resolver el fondo de los recursos de casación presentados por la firma Forense QUIROS MURILLO Y ASOCIADOS, el Licenciado Orlando Moreno Murillo y la Licenciada Miriam Jaén de Salinas, defensores, respectivamente, de los imputados JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, MARIO ALBERTO FUNG POSSO y ANTONIO ROJAS GRANADOS, contra la sentencia de 7 de noviembre de 1997 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante la cual se condenó a los sindicados a la pena de ocho (8) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, por Delito Contra la Salud Pública.

ANTECEDENTES

El dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), el Director de la Dirección de Aeronáutica Civil, mediante la nota respectiva, se dirigió al Fiscal de Drogas de la Procuraduría General de la Nación, informándole que uno de sus departamentos había tenido conocimiento de una organización que se dedicaba al tráfico internacional de estupefacientes desde el Aeropuerto de Tocumen, sugiriéndole la realización de una operación encubierta para identificar a las personas responsables de la expresada organización.

Iniciada la investigación del caso, el treinta (30) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), el inspector Rolando Reyna Jáen y el detective Franklin Brewster, ambos de la división de estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, suscriben informes acerca de la entrega vigilada de veintitrés (23) paquetes contentivos de una sustancia, presuntamente cocaína, señalando que un individuo de rasgos asiáticos y mediana estatura, entregó en los estacionamientos del Supermercado 24 Horas de Balboa, al agente encubierto designado por la Fiscalía de Drogas, las llaves de un vehículo y después de darle las correspondientes instrucciones, el agente encubierto procedió a darle marcha al vehículo, llegó hasta los estacionamientos del Club de Yates y Pesca, abrió la puerta trasera donde se encontraba una maleta con ropa variada de hombre y la cantidad de veintitrés (23) paquetes contentivos presuntamente de cocaína, haciéndole entrega al funcionario de la Fiscalía la cantidad de ocho mil balboas que serían utilizados para el movimiento de la droga, la que sería enviada a Canada, donde finalizaría la operación con el arresto de los otros miembros de la organización criminal.

Carlos Ríos Saldaña, quien actuó como agente encubierto, al rendir declaración jurada manifestó que, por referencia del señor Erick Aikman, se presentó a su puesto de trabajo en el Aeropuerto de Tocumen, un sujeto apodado Chino (Mario Fung) y otro conocido como Jairo, solicitándole su ayuda para enviar un paquete urgente a Toronto, Canadá.

Para iniciar operaciones, el día viernes veinte (20) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) se le entregó, en el Hotel Granada, la suma de mil balboas, lugar donde oyó mencionar a un tal Rojitas o Jefecito; expresa que sostuvo una serie de conversaciones con Chino (Mario Fung) y acordó encontrarse con éste en los estacionamientos del Supermercado 24 Horas de Balboa, el lunes treinta (30) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), fecha en que le entregó las llaves de un vehículo Ford Vans Aero Star, de color azul en el que llegó con la mercancía ilícita y le indicó que en la guantera del automóvil había la cantidad de ocho mil balboas. Agrega que posteriormente, en el lobby del Aeropuerto le entregó a Jairo las colillas y luego se reunió en el Restaurante Tierra Firme de Tocumen con Chino, Jairo y otro colombiano que se encontraba supervisando la operación de embarque.

Concluida las investigaciones, por auto de veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) se decretó apertura de causa criminal contra Jairo Alberto Builes Molina, Mario Alberto Fung Posso y Antonio Rojas como supuestos infractores de las normas contenidas en el capítulo quinto, Título VII del Libro 2 del Código Penal y celebrada la audiencia correspondiente, mediante sentencia de 16 de febrero de 1996, el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró responsable a Mario Alberto Fung Posso (A) Chino del delito de tráfico internacional de drogas, condenándolo a la pena de ocho (8) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período y absolvió a Jairo Alberto Builes Molina y Antonio Rojas Granados (a) "Jefecito Y Rojitas" de los cargos formulados en el auto de proceder.

La decisión del a-quo fue censurada tanto por la defensa de Mario Alberto Fung Posso como por el Fiscal Especial de Drogas y después de controversias surgidas acerca de la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el Agente Fiscal, finalmente se concedió dicho recurso y el Segundo Tribunal

Superior de Justicia, al conocer en segunda instancia del proceso, reformó la sentencia apelada y declaró también culpables a los imputados Builes Molina y Rojas Granados, imponiendoles a cada uno de ellos la pena de ocho (8) años de prisión y la accesoría de inhabilitación para ejercicio de funciones públicas por igual período.

El pronunciamiento del ad-quem motivó que la defensa de los tres imputados anunciaran y formalizaran recurso de casación contra lo resuelto por lo que separadamente pasamos a exponer las causales y fundamentos que se han presentado en este caso.

RECURSO DE JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA

La defensa técnica del imputado BUILES MOLINA aduce una causal de forma y dos de fondo.

A. CAUSAL DE FORMA.

La primera causal invocada es la de falta de competencia del tribunal, la que se apoya en tres motivos y como disposiciones legales infringidas cita los artículos 1121, 2297, 2428, 2429 del Código Judicial y el articulo 2 del Código Penal, todos en concepto de violación directa por omisión.

B. CAUSALES DE FONDO.

El casacionista invoca dos causales de fondo. La primera de ellas Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba que implica violación de la Ley Sustancial y que ha influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada, la que sustenta en dos motivos. Como disposiciones legales infringidas, a propósito de esta primera causal de fondo, cita los artículos del Código Judicial 905, en concepto de violación directa por omisión y 2135, en concepto de violación directa por comisión.

La segunda causal de fondo invocada es el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que implica violación de la ley sustancial y ha influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada. Esta causal se apoya en dos motivos. Las disposiciones legales que se citan con motivo de esta causal son los artículos 970 y 972 del Código Judicial, ambos en concepto de violación directa por omisión y como norma sustantiva infringida se cita el artículo 255 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación y el articulo 38 ibidem en concepto de violación directa por comisión.

RECURSO DE ANTONIO ROJAS GRANADOS

La defensa del procesado ANTONIO ROJAS GRANADOS invoca una causal de forma y otra de fondo.

A. CAUSAL DE FORMA.

La causal de forma invocada es la de falta de competencia del tribunal, que viene apoyada en dos motivos y en cuanto a las disposiciones legales que se estiman como infringidas, en relación con esta causal, la casacionista cita los artículos 2305, 2429, 1121, 2428, 1133 y 2297 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión.

B. CAUSAL DE FONDO.

Como única causal de fondo se invoca la de error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la lay sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, la que viene apoyada en cuatro (4) motivos. Como disposiciones legales infringidas, en relación con esta causal, se citan los artículos 905, 970 y 972 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión y como norma sustantiva penal vulnerada se indica

el artículo 255 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

RECURSO DE MARIO ALBERTO FUNG POSSO

El defensor del imputado MARIO ALBERTO FUNG POSSO invoca como causal de fondo la de error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, la que apoya en cinco motivos y como disposiciones legales infringidas, señala los artículos 905 y 972 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión. Asimismo indica la infracción del articulo 255 del Código Penal, del que afirma, fue violado en concepto de indebida aplicación.

OPINION DE LA PROCURADURIA

Mediante vista N . 82 de doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Licenciado José Antonio Sossa R. Procurador General de la Nación expone como cuestion previa que el recurso de casación en la forma interpuesto por la licenciada Miriam Jaen de Salinas a favor de Antonio Rojas Granados no cumple con lo estipulado en el artículo 2452 del Código Judicial que estabnlece que éste tipo de recursos para ser admitido ha de haberse advertido las irregularidades denunciadas, en la etapa procesal en que tuvieron lugar, esto es, en la instancia en que se acusa fueron cometidos los yerros, por lo que al no acreditarse en el expediente tal advertencia por parte de la licenciada Jaén de Salinas, el recurso no debió ser admitido.

Por otra parte agrega que respecto a éste mismo recurso tanto resepcto a la causal de forma como la de fondo alegadas por la recurrente, que no se ha acreditado el vicio de ilicitud que se le endilga a la sentencia, por lo que considera que no se vulneraron las disposiciones legales que se alegan infringidas.

Respecto al recurso de casación interpuesto por el doctor Javier Alexis Quiroz, considera el señor Procurador General que en lo relativo a la causal de forma, por haber coincidencia con el recurso promovido en éste sentido por la licenciada Jaén de Salinas, tampoco se produjo la infracción de que se acusa a la sentencia recurrida, por lo que concluye en el mismo sentido, es decir, que no procede acceder a lo pedido por el recurrente. En cuanto a la primera causal de fondo, señala que no se encuentra acreditado el vicio de ilicitud endilgado a la sentencia, toda vez que tras el análisis integral de las prubas, el Tribunal de segundo grado concluyó que la responsabilidad de JAIRO BUILES MOLINA en el delito de Tráfico Internacional de Drogas estaba plenamente probado, al tiempo que resalta la contradicción que emerge de la lectura de las disposiciones legales que se dicen infringidas en recurso de casación formalizado segunda causal, toda vez que mientras que se cita el artículo 2135 del Código Judicial, al referirse a su contenido se transcribe el texto del artículo 2135-A.

Respecto de la segunda causal de fondo, considera el señor Procurador General de la República que la misma no prospera toda vez que el argumento ensayado por el casacionista es contradictorio con la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba por cuanto que de la lectura del concepto de la infracción de los aríciulos, se observa que las pruebas aducidas fueron valoradas por el juzgador de segunda instancia.

Respecto del recurso de casación interpuesto por el licenciado Orlando Moreno Murillo, el cual fue admitido solo en cuanto a la causal de fondo, considera el señor Procurador General de la Nación que tampoco ha quedado acreditada, dicha causal, por lo que solicita al tribunal de casación que NO SE CASE la sentencia impugnada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Recursos de casación en la forma propuestos por los defensores de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS.

La Sala se referirá en forma conjunta a los recursos de casación en la forma interpuestos por la defensa de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS, señalando previamente lo siguiente:

En la vista correspondiente, la Procuraduría General de la Nación expresó la improcedencia del recurso de casación en la forma propuesto por la defensa de ROJAS GRANADOS, dado que en su oportunidad no alegó el hecho que motivó la presentación del recurso de casación, tal como se encuentra previsto en el artículo 2452 del código judicial sin embargo, como ya en ocasión anterior lo ha expresado la sala, como por ejemplo en la resolución de doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho y en el fallo de 17 de diciembre de 1998, "es criterio jurisprudencial de esta sala penal, en armonía con lo preceptuado por el articulo 1160 del Código Judicial, que una vez admitido el recurso se está en la obligación de resolverlo en el fondo".

Sentado lo anterior, la Sala aprecia que, en los motivos que sirven de fundamento a la causal de forma alegada, tanto por la defensa de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA como por la defensora de oficio de ANTONIO ROJAS GRANADOS, básicamente se señala que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial carecía de competencia funcional para conocer del proceso sub-judice, en segunda instancia, respecto de la situación jurídica de ambos procesados, que fueron absueltos por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, porque la apelación interpuesta por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra la sentencia de primer grado fue declarada extemporánea por el Tribunal de instancia y contra esta decisión no se ejercieron los remedios procesales que autoriza la ley.

Dentro de este contexto, la Sala procede a examinar si la apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia se presentó dentro del término legal establecido para esa finalidad y si, ante la declaratoria de extemporaneidad del recurso, manifestada por el a-quo a través de la resolución de 21 marzo de 1996, visible a fojas 680-688, se ejercieron las acciones procesales idóneas para llevar el proceso a conocimiento de la segunda instancia.

En ese sentido, precisa señalar que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1117 del Código Judicial, aplicable en el proceso penal conforme lo dispone el articulo 2431 ibidem, el recurso de apelación contra la sentencia debe interponerse en el acto de la notificación personal o dentro de los tres días siguientes a la notificación. Por otro lado, el artículo 2305 de la misma excerta legal señala que el agente del Ministerio Público se considera legalmente notificado, transcurridas 48 horas contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.

Partiendo del mandato legal explicado, la Sala observa que en el caso sub-judice el expediente contentivo de la sentencia de primera instancia fue entregado en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el día lunes 26 de febrero de 1996, según consta a fojas 679, para los efectos de la notificación del fallo citado, no obstante, no se indica la hora en que se produjo el registro del ingreso efectivo del expediente a dicho despacho de instrucción.

Siendo ello así, y por cuanto que el término contemplado en el párrafo sgundo del artículo 2305 del Código Judicial (notificación del agente del Ministerio Público) se cumple transcurridas 48 horas contadas a partir del ingreso del expediente al despacho del Fiscal, tal como se ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada, al no indicarse la hora exacta en que se produjo el ingreso del expediente al despacho, el cómputo del término de 48 horas ha de iniciarse a partir de la primera hora hábil del día siguiente, es decir, en el caso que nos ocupa el término debió computarse a partir de las 8:00 de la mañana del día 27 de febrero de 1996, para culminar el 29 de febrero del mismo año, tomando en cuenta que la fecha de ingreso del expediente a la Fiscalía de Drogas fue el 26 de febrero de 1996, sin indicación de la hora en que fue recibido.

Como consecuencia de lo anterior, observa la Sala que el término de tres días hábiles para que el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas pusiera en conocimiento al Tribunal "A Quo" de su pretensión de apelar, se extendía del 3 al 5 de marzo de 1996; en consecuencia, habiéndose devuelto el expediente al despacho del tribunal de conocimiento el día cinco de marzo de 1996, tal como consta en el libro de registro de ingreso del expediente, siendo las 4:15 de la tarde de dicha fecha, contrario a lo planteado por los recurrentes, el anuncio del recurso de apelación se produjo dentro del término estipulado por nuestro ordenamiento procesal penal.

En ese orden, el jurista Edgardo Pallares sostiene que la preclusión "es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor "que el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal" (Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 5 edición, Editorial Porrua, S. A., Méjico 1966, páginas 574 y 721.

Por su parte, el fallecido maestro Eduardo Couture nos indica que "los plazos son pues, los lapsos dados para la realización de los actos procesales" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Décima Quinta reimpresión inalterada, Ediciones de Palma, Buenos Aires 1990, página 174).

Abundando en la materia de la preclusión del término, considera la Sala que siendo que el término en cuestión era de horas, conforme lo dispuesto en el artículo 510 del Código Judicial, el cómputo se iniciaba a partir de la hora siguiente del recibo del expediente en la Fiscalía de Drogas, mas, como quiera que la hora en que fue recibido nunca se registró, carecemos del elemento esencial para determinar a partir de qué hora del mismo día en que fue recibido dicho expediente, comenzaba a correr el término.

En consecuencia, la Sala comparte el criterio esbozado por el señor Procurador en el sentido que el término de 48 horas debe computarse como se expresa en líneas anteriores, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 510 del Código Judicial, pues de lo contrario, se estaría violentando el debido proceso en desmedro de una de las partes, lo cual resulta tanto más grave, por cuanto que la omisión de anotar la hora de ingreso del expediente al despacho del Fiscal Especial de Drogas es atribuible al Juzgado Séptimo de Circuito Penal, y no a la Fiscalía pues es aquel quien conocía del proceso.

Sobre ésta materia, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, Doctor Pedro J. Barsallo, al referirse al principio de preclusión explica: "En síntesis la vigencia de este principio en el proceso hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del tribunal, dentro de fases o períodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia" (Barsallo, Pedro J.). Los Principios Fundamentales del Proceso Civil. Estudios procesales, tomo 1 , compilado por Jorge Fábrega Ponce, Editora Jurídica Panameña, Panamá 1989.

Examinemos por otro lado, la situación procesal planteada frente a la resolución de 21 de marzo de 1996 que corre de fojas 680 a fojas 688, mediante la cual se negó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Drogas.

En lo que respecta a la competencia funcional del Tribunal Superior para conocer del recurso de apelación formulado por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, estima la Sala que es preciso examinar las varias piesas que conforman el expediente de la causa a fin de dilucidar éste aspecto.

En éste orden se observa a fojas 646, que el Pleno de la Corte, mediante

sentencia de fecha 21 de enero de 1997, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la procuradora judicial de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, contra la resolución de 31 de octubre de 1996 por medio de la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia no acogió la acción de amparo de garantías constitucionales formulada contra la resolución de 11 de abril de 1996, la cual fue emitida por el Juez Séptimo de Circuito de Panamá, Romo Penal.

En ésta última resolución, se concedió la apelación interpuesta contra la resolución del 21 de marzo de 1996. Al respecto, ya el Pleno de la Corte se pronunció en cuanto a que la resolución dictada por el Juzgado Séptimo del Circuito Penal, accedía a una gestión de la procuradora judicial de JAIRO BUILES MOLINA en relación con la resolución dictada por dicho juzgado de fecha 16 de febrero de 1996.

En consecuencia, si bien el artículo 1121 del Código Judicial expresamente señala en su primer inciso que:

> "La resolución que niega la concesión del recurso de apelación o entrañe su negativa o lo conceda en un efecto distinto al que corresponda, solo admite recurso de hecho" (subraya la Sala).

En su oportunidad el Pleno de la Corte apreció que dada la naturaleza de la gestión realizada por la representación de BUILES MOLINA, es decir, constituyendo una gestión incidental, como tal debió ser tratada por la resolución que accedió a su petición la cual es la resolución del 21 de marzo de 1996.

Abundando sobre este aspecto, el Tribunal de Casación observa que a fojas 604 del expediente se tiene un informe secretarial de fecha 15 de abril de 1996 en el cual de manera precisa se señala que "en el proceso seguido a MARIO ALBERTO FUNG, JAIRO BUILES y ANTONIO ROJAS, se han presentado cuatro (4) solicitudes a las cuales se les ha imprimido el trámite de incidental", entre las cuales se encuentra precisamente la formulada por la licenciada Nivia Abrego M. a favor de Jairo Builes M., en la que solicita la aplicación y cumplimiento del artículo 2305 del Código Judicial.

Del mismo modo, el citado informe secretarial se refiere al Incidente de Nulidad presentado por el Fiscal Especial de Drogas, aunado a otras dos solicitudes, para concluir finalmente indicando que "con respecto al primer cuadernillo, el mismo se encuentra surtiéndose el trámite para conceder la apelación presentada por el Fiscal de Drogas ...".

Adentrándonos un poco más en el examen del expediente, observa la Sala que a fojas 657 se tiene otro Informe Secretarial fechado 21 de febrero de 1996 mediante el cual se comunica a la Juez que en el proceso penal seguido a MARIO ALBERTO FUNG POSSO, JAIRO BUILES y ANTONIO ROJAS, se han presentado cuatro (4) solicitudes a las cuales se le ha imprimido el trámite incidental. En dicho documento se indica en los puntos número uno y dos que se trata de la solicitud para que se le de aplicación y cumplimiento al artículo 2305 del Código Judicial, (formulada por la licenciada Nivia Abrego), al igual que al Incidente de Nulidad presentado por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Más adelante, a fojas 675 encontramos otra solicitud nuevamente formulada por la licenciada Ábrego a través de la cual pide a la Juez Séptima de Circuito se dé aplicación y cumplimiento de lo estatuído en el artículo 2305 del Código Judicial y que se certifique con los libros del Tribunal que el expediente salió y llegó a la Fiscalía el día 26 de febrero de 1996, a las 11:00 de la mañana, siendo recibido en dicha fecha por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

A foja siguiente, es decir, a fojas 676, se observa otro Informe Secretarial de fecha 19 de marzo de 1996, mediante el cual se deja constancia que se pasa al despacho de la Juez para fallar el Incidente relacionado con el

artículo 2305 del Código Judicial, dentro del presente negocio.

Mediante resolución de 21 de marzo del mismo año, (fjs. 680 a 688 y vuelta.), la Juez Séptima de Circuito Penal expresa que la solicitud formulada por la licenciada Abrego se le imprimió el trámite incidental mediante la providencia calendada 5 de marzo de 1999.

Como se observa, al no tratarse de una resolución que niega el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia, si no contra un auto que decide un incidente, contrario a lo que sostienen los recurrentes, no correspondía aplicar el contenido del artículo 1137 del Código Judicial, en el caso sub-judice. Más bien, lo procedente era apelar, al tenor de lo establecido en el artículo 2429 del Código Judicial, el cual señala los casos en que se da la apelación, e indica en su numeral 3, que la misma procede contra los autos que deciden los incidentes.

En consecuencia, siendo que la pretensión del apelante (Fiscal de Drogas) era enervar la decisión contenida en la resolución aludida (Auto del 21 de marso de 1996), a juicio de éste tribunal de casación, era procedente recurrir en apelación y no irse por la vía del recurso de hecho; por lo que las alegadas violaciones a los artículoS 2305, 2428, 2429, 1121, 1133 y 2297 del Código Judicial no se han producido.

Siendo la causal analizada una de forma, y como sustento de ella se han formulado como violadas las disposiciones adjetivas indicadas, aunado al artículo 2 de Código Penal, la Sala, luego de realizado el examen de los cargos de injuridicidad que se le formulan a la sentencia de segunda instancia, al igual que el concepto de la violación de dichas disposiciones alegadas por la representación legal de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA como la de ANTONIO ROJAS GRANADOS, concluye que tampoco se ha violado el artículo 2 del Código Penal, por lo que la causal de forma aducida en ambos recursos de casación se desestima.

CAUSALES DE FONDO EN EL RECURSO PROMOVIDO POR JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA:

Primera Causal

El casacionista alude al Error de Derecho en cuanto a la Apreciación de la Prueba, sustentada en dos motivos en los que manifiesta que el Segundo Tribunal Superior de Justicia realizó una incorrecta valoración de la declaración del agente encubierto Carlos Ríos Saldaña, al otorgarle pleno valor probatorio a pesar de su singularidad; mientras que en el segundo motivo lo que se impugna es el reconocimiento fotográfico realizado por el agente encubierto de la persona de Jairo Alberto Builes Molina, por considerar que dicha fotografía fue incorporada al expediente sin ajustarse a los requerimientos de la ley.

Al examinar la declaración del señor Carlos Ríos Saldaña que aparece de fojas 22 a 27, observa éste Tribunal de Casación que en la misma se describe con lujo de detalles una serie de elementos que hacen parte de una operación de tráfico internacional de estupefacientes, la cual era monitoreada y controlada por las autoridades panameñas, a través de la operación encubierta de la cual el señor Ríos Saldaña era parte, y en la que se describe los distintos momentos, circunstancias y lugares en los cuales interviene el procesado Builes Molina.

Aunado a lo anterior, éste Tribunal de Casación observa que además de las declaraciones del agente encubierto Ríos Saldaña, la sentencia impugnada tomó como elementos probatorios, algunos de los cuales constituyen graves indicios de incriminación contra el procesado Builes Molina, las declaraciones de Ronaldo Ernesto Reyna Jaen (fs. 300 a 302), Ricardo Gutiérrez Pérez (fs. 306 a 310), Misael Abner Munóz Cortéz (fs. 308 a 310), entre otras; al igual que otras pruebas documentales como el video tomado al momento de la entrega de la droga, por lo que no fue la sola declaración del testigo Carlos Ríos Saldaña la que sirvió de fundamento al tribunal "A Quem".

En consecuencia, en lo que respecta al primer motivo, la causal invocada carece de fundamento por lo que la pretención del casacionista resulta inviable.

Respecto del segundo motivo, en primer lugar se observa que el recurrente no indica la foja en que se encuentra la diligencia a la cual hace referencia, como tampoco indica con claridad en qué consiste la irregularidad que denuncia, por lo que no es posible identificar en qué consiste el cargo específico de injuridicidad que se le formula a la sentencia impugnada.

A éste respecto resulta pertinente reiterar lo que la jurisprudencia en materia de casación ha venido insistiendo en el sentido que cuando la causal que se invoca es una de naturaleza probatoria, al formalizar el recurso es imprescindible identificar la foja o fojas en las cuales se encuentran las pruebas cuya incorrecta valoración se alega. Aunado a ello, es de la escencia del recurso de casación que los cargos de injuridicidad que se le atribuyen a la sentencia, estén claramente formulados, de manera que puedan ser adecuadamente ponderados y determinar de éste modo, la fundamentación que le cabe al recurrente en su reclamo.

Como ya se ha dicho, en el segundo motivo en el cual el recurrente pretende sustentar la causal probatoria alegada, no se ha indicado la foja en la cual aparece la pueba cuya incorrecta valoración se acusa, como tampoco se ha formulado el cargo de injuridicidad de manera inteligible, por lo que no prospera ésta causal.

En cuanto a las disposiciones legales se señalan como infringidos los artículos 905 y 2135 del Código Judicial, que se refiere, en el caso del primero, a la fuerza probatoria del testimonio único, indicándose que dicha disposición ha sido transgredida en concepto de violación directa por omisión. En sustentación de lo anterior, el recurrente reitera los argumentos presentados en la formulación del motivo primero, por lo que le son aplicables las mismas consideraciones que ya ha expresado éste Tribunal de Casación al analizar el primer motivo.

En cuanto a la alegada violación directa por omisión del artículo 2135 del Código Judicial, como consecuencia de la alegada identificación irregular de la persona que aparece a fojas 111 del expediente, realizada por Carlos Ríos Saldaña en su declaración de fojas 249 a 251, se aprecia claramente que dicha declaración consistió en una ampliación rendida ante la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas a solicitud formal de la defensa de Mario Alberto Fung Pozo.

En la citada ampliación de declaración que como queda dicho se produce a petición de la defensa de uno de los procesados, la cual fue debidamente informada de la comparecencia del testigo para la practica de dicha diligencia en la hora fijada, el señor Carlos Ríos Saldaña reconoce a varias personas que aparecen en las fotografías de fojas 111, 112 y 113 que le son presentadas y que fueron incautadas en la diligencia de allanamiento pacticada a la residencia de BUILES MOLINA, resultando como uno de los reconocidos, el imputado JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA.

Si bien, en la citada diligencia la defensa de Builes Molina no se encontraba presente, ese hecho en sí mismo no constituye una pretermisión procesal de lo dispuesto en el artrícunlo 2135 del Código Judicial, toda vez que lo estatuído en dicha norma, dice reclación a la diligencia de reconocimiento que se practica de los archivos fotográficos de la Policía Técnica Judicial, mientras que en la ampliación de la declaración del testigo Ríos Saldaña, realizada a solicitud de la defensa de uno de los implicados en el delito por el cual está siendo procesado JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA entre otros, se trataba de la identificación de los sujetos que aparecen en las fotografía incautadas en la diligencia de allanamiento pacticada a la propia residencia del procesado BUILES MOLINA, mismas que además se encontraban incorporadas al expediente.

Aunado a lo anterior, considera la Sala que dicho reconcimiento por sí solo no constituye un elemento que incida de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, al extremo que su omisión hubiera de producir una alteración sustancial en la parte dispositiva de la sentencia. Ello es así por cuanto que son varios los elementos en que se apoya la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia para arribar a la conclusión de que JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA es una de las personas que formaba parte de la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, y que intentó transportar o enviar los 23 paquetes de la droga conocida como cocaína a Canadá, como quedó demostrado.

En cuanto a la violación del artículo 255 del Código Penal en concepto de indebida aplicación es el criterio de la Sala que como quiera que la causal invocada al igual que las disposiciones procesales en que se ha pretendido sustentar dicha causal no han sido probadas, por carecer de fundamento en el caso bajo examen, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia en materia de casación cuando se trata de causales probatorias, tampoco procede la alegada violación de la ley sustancial.

Como quiera que los vicios de injuridicidad que se han formulado a la sentencia de segunda instancia no han sido probados, al igual que tampoco han quedado acreditadas las alegadas violaciones a las disposiciones legales que se citan como infringidas, la primera causal de fondo en que se sustenta el presente recurso de casación, se desestima.

Segunda Causal

Como segunda causal se invoca también una de naturaleza probatoria, siendo ésta el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, la cual viene sustentada en dos motivos. En el primero se señala que el Segundo Tribunal Superior comete error al deducir indicios del informe de comisión de fojas 7-8, al igual que del informe secretarial de fojas 17-18 y el video tomado al momento de la entrega de la droga incautada, aún cuando, según señala el casacionista, en tales documentos no aparece, ni se menciona o tiene relación alguna con su representado Jairo Alberto Builes Molina, por lo tanto considera que no tienen existencia material en el proceso en lo que respecta a su defendido.

Al revisar la sentencia impugnada observa la Sala que el juzgador al momento de volorar las puebas existentes en el expediente,efectivamente reconoce y hace referencia en la parte motiva de dicha sentencia a las pruebas que el recurrente considera incorrectamente valoradas por considerar que carecen de existencia material en el proceso respecto a su defendido.

Ante dicha formulación, éste Tribunal de Casación se ve en la necesidad de hacer algunas consideraciones en cuanto a la cuestión probatoria, que en materia de delitos nuevos y específicos como aquellos relacionados con drogas cobran mayor relevancia.

Como es sabido, ante la aparición de las nuevas modalidades de conducta criminal que ha dado orígen a nuevos tipos penales, la doctrina ha reiterado el principio de unidad de la prueba que además de no ser novedoso, trasciende la escueta consideración aislada e individual de cada medio probatorio, y persigue el propósito de alcanzar la verdad en los proceso de juzgamiento.

En tal sentido, dada la complejidad y diversidad de formas que adquieren los delitos relacionados con drogas, tanto en lo relativo a la elaboración de la droga, su tráfico, blanqueo de capitales, así como el tráfico y fabricación de precursores entre otros aspectos, las modernas legislaciones en materia procesal han hecho énfasis en el concepto doctrinal que establece el deber del juez de analizar los medios de prueba de manera islada, pero procurando comprobar el grado de vinculación y correspondencia entre los mismos, estableciéndose a partir de éste mecanismo, la coherencia que exista entre unas y otras pruebas, para finalmente, apreciarlas globalmente. Así, el exámen conjunto de todas las piezas procesales, la adecuada ponderación de los indicios graves y el deber que le cabe

al juez de tomar ilimitadamente la prueba a favor o en contra de cualquiera de las partes, con total abstracción de quien la aportó, consituyen los ejes de la actuación del juzgador en el proceso valorativo que debe desplegar. (Vease Jorge Fábrega P., "Teoría Geneal de la Prueba", Edición 1997).

En éste mismo orden de ideas, nos expresa el maestro Jorge Fábrega Ponce en la obra citada (Teoría General de la Prueba), que el juez en ejercicio de su deber de admitir y apreciar los medios probatorios, debe tener presente que "todos los elementos probatorios integran una unidad y el juez debe analizar los medios aisladamente y comprobar hasta qué punto coinciden y en qué puntos divergen y examinar la vinculación interna entre ellos y apreciarlos en conjunto". (Fábrega P., Jorge, ob. cit., p. 121).

En éste sentido, debe leerse lo consagrado en el numeral 2 del artículo 977 del Código Judicial:

> "Las sentencias se dictarán de conformidad con las reglas siguientes:
>
> ...
> 2. En párrafos separados se hará una relación de los hechos que hubieron sido alegados oportunamente y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse. Se hará referencia a las pruebas que obran en el expediente y que hayan sevido de base al Juez para estimar probados tales hechos;".

Expresado lo anterior, la Sala se manifiesta contraria a las consideraciones vertidas por la defensa de BUILES MOLINA, en cuanto a los motivos en que sustenta ésta segunda causal, por cuanto que la alegada inexistencia material de la prueba, para referirse al video tomado al momento de la entrega de la droga incautada, al igual que al informe de comisión y el informe secretarial, así como a las declaraciones de RONALDO REINA y GUSTAVO CHONG HO, por no contener mensión de la persona de JAIRO ALNERTO BUILES MOLINA, según expresa, además de que ciertamente constituyen graves indicios en contra del imputado, en tanto convergen plenamente con los informes de la operación encubierta que se realizó, al igual que con las declaraciones rendidas por Carlos Ríos Saldaña (fs. 22 a 27; 249 a 251) formando un todo coherente que permite deducir con certeza la participación del imputado en los hechos y demás pruebas que reposan en el voluminoso expediente, tales argumentos resultan absolutamente contradictorios con la causal invocada.

El casacionista adujo la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, sin embargo, contrario a la técnica de éste recurso, incurre en el desacierto de presentar en los motivos en los cuales intenta sustentar dicha causal, argumentos que corresponden a una causal distinta.

El error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba se produce cuando el juzgador deja de valorar un medio de prueba que existe en el proceso, o bien cuando valora una prueba que no tiene existencia material en el proceso.

Como se aprecia, los argumentos esayados por el casacionista apuntan hacia la valoración de pruebas que existen en el proceso, pero que desde su punto de vista, no comprometen a su representado.

Dicho razonamiento contradice totalmente el sentido de la causal que ha sido esgrimida, por cuanto que por una parte se reconoce la existencia de la prueba, al igual que el hecho de haber sido valoradas por parte del Tribunal, mas sin embargo, lo que se impugna es que de dicha valoración se deducen indicios graves que vinculan a BUILES MOLINA con el tráfico internacional de drogas.

Tal argumento corresponde a la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual se produce cuando el juzgador aprecia un medio de prueba que hace parte del proceso y le asigna un valor distinto al que la ley

le concede, o, como apunta el casacionista, se examina una prueva válida del expediente pero se infieren de ella conclusiones que contradicen su contenido.

En virtud de los señalamientos expuestos, la Sala concluye que los razonamientos con los cuales el censor pretende sustentar la segunda causal de casación en el fondo en los dos motivos presentados, son contradictorios con la causal por lo que la misma no prospera.

En cuanto a las disposiciones legales que se aduce han sido infringidas, éste Tribunal de Casación concluye que los artículos 970 y 972 del Código Judicial han sido adecuadamente ponderados por el "A Quem" tal como queda expresado en las consideraciones ya adelantadas en el análisis de los motivos en que se sustenta la causal de error de hecho en cuanto a la inexistencia de la prueba, en consecuencia, el concepto de violación directa por omisión no ha sido acreditado.

En el mismo sentido, como quiera que las disposiciones legales adjetivas que fueron aducidas como violadas no han quedado acreditadas, como tampoco la transgresión jurídico procesal que se le endilga a la sentencia, estima la Sala que la violación de los artículos 255 en concepto de indebida aplicación, así como el 38 en concepto de violación directa por comisión, ambas normas del Código Penal, no proceden.

Habiéndose descartado, al igual que la primera, ésta segunda causal del recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA contra la sentencia de segunda instancia, la Sala estima que debe mantenerse la resolución recurrida.

PRIMERA CAUSAL DE FONDO EN EL RECURSO DE CASACIÓN DE ANTONIO ROJAS GRANADOS:

La licenciada Miriam Jaén de Salinas en la única causal de fondo aducida, que es la contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, consistente en el error de derecho en la apreciación de la prueba, presenta cuatro motivos, explicando en el primero que el yerro de la sentencia de segunda instancia se produjo al valorar la declaración del agente encubierto Carlos Ríos Saldaña y dar por comprobado que ANTONIO ROJAS GRANADOS se reunió con dicho agente encubierto con el propósito de traficar drogas ilícitas, siendo éste, según su criterio, el único elemento del proceso que se refiere a dicha circunstancia. En el segundo motivo por su parte, sostiene la casacionista que la sentencia de segunda instancia cometió error en cuanto a la apreciación de los informes de comisión de fojas 7-8 y secretarial de fojas 17-18, al igual que al valorar el video documental registrado de fojas 207 a 113, por cuanto dedujo indicios para determinar que ANTONIO ROJAS GRANADOS se runió con el agente encubierto Carlos Ríos Saldaña para acordar el envío de la droga a Canadá (23 paquetes de cocaína), aún cuando su representado no es mencionado en tales elementos probatorios, ni los mismos se relacionan con él.

En el tercer y cuarto motivo, la impugnación recae sobre la labor valorativa desplegada por el "A Quem" de los testimonios de Rolando Reina (fs. 300 a 302), Gustavo Chon Ho (fs. 311 a 312, Ricardo Gutiérrez (fs. 306 a 307) y Misael Agner Muñoz (fs. 308 a 310), toda vez que según expone la recurrente, en el caso de los dos primeros se dedujeron indicios para acreditar que ANTONIO ROJAS GRANADOS acordó con el agente encubierto la operación ilícita de tráfico de drogas a Canadá, aún cuando dichos testimonios no se refieren a su representado; mientras que en el caso de los dos últimos, el error consistió en deducir indicios en el mismo sentido, a pesar que dichos testigos no estuvieron presentes en las reuniones que sostuvo ROJAS GRANADOS con el señor Carlos Ríos Saldaña.

Por ser los dos primeros motivos idénticos al primer y segundo motivo formulado por la defensa de Jairo Alberto Builes Molina en la segunda causal de casación en el fondo interpuesta contra la sentencia de segunda instancia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al igual que sostuvo la Sala al

examinar dicho recurso, contrario a la apreciación de la recurrente, al examinar la sentencia impugnada, se observa claramente que fueron varios los elementos probatorios en los cuales se apoyó el "A Quem" para emitir su fallo. En consecuencia, dada la identidad de los motivos y la plena correspondencia con las consideraciones ya adelantadas por éste Tribunal de Casación, siendo que nos encontramos ante un delito de participación múltiple, en el cual los elementos probatorios han sido analizados de conjunto como ya se ha dicho, se concluye que los argumentos y razonamientos de la casacionista carecen de fundamento.

En el tercer motivo la recurrente alude al error de derecho en la apreciación de los testimonios de Ronaldo Reina (fs. 300 a 302) y Gustavo Chon Ho (fs. 311 a 312), pro cuanto considera que de dichos testimonios el Segundo Tribunal Superior dedujo indicios para acreditar que su defendido acordó con el agente encubierto el envío de 23 paquetes de cocaína hacia Canadá, a pesar que dichas declaraciones no se refieren a su representado.

Al examinar las pruebas aludidas por la representante de ANTINIO ROJAS GRANADOS, la Sala encuentra nuevamente que la recurrente incurre en el mismo error que la defensa de Builes Molina, toda vez que de acuerdo a la técnica de valoración probatoria empleada por el Tribunal de segunda instancia, no fueron los testimonios citados, los únicos elementos probatorios considerados, y de los cuales emanaron indicios graves de vinculación de ROJAS GRANADOS. Muy por el contrario, y en reiteración de lo ya expuesto, la sentencia impugnada aplicó el principio conocido en la doctrina como "Principio de la Unidad de la Prueba" a partir del cual la labor valorativa no debe circunscribirse al examen individualizado de cada medio de prueba, si no que, luego de realizada dicha labor, dichos medios de prueba deben ser apreciados en forma global, es decir, como una integralidad que conduzca a la comprensión fáctica de los hechos que se investigan, y de cuya autoría se hace imputable al sujeto activo, a fin de determinar la relación que en efecto existe entre uno y otro medio de prueba.

Sobre éste particular, si se examinan de conjunto las citadas declaraciones juradas, los informes secretarial y de comisión, el viedeo tomado de la operación encubierta, la declaración del agente encubierto y la prueba documental que reposa de fojas 207 a 213, habrá de concluirse que todos éstos elementos, mantienen una interrelación lógica que revela la secuencia de una operación bien planificada, en la cual existen varios sujetos que cumplen tareas distintas, pero que están estrechamente vinculados como parte de una organización criminal que realizó un trasiego internacional de estupefacientes (cocaína), con destino cierto (Canadá), la cual se consumó.

De lo anterior se deduce que los cargos de injuridicidad formulados por la licenciada Miriam Jaén de Salinas en éste motivo no prosperan.

En cuanto al cuarto motivo, ocurre algo similar al anterior, al tiempo que observa la Sala que éste motivo es idéntico al motivo edentificado como quinto en la primera causal del recurso de casación en el fondo, formulado por la defensa de Jairo Alberto Builes Molina.

Como ya se ha dicho, la cuestión de fondo que se cuestiona es la valoración que realizó el Segundo Tribunal Superior de Justicia, sobre el caudal probatorio acopiado dentro del proceso. A pesar de la forma segmentada (en cuatro motivos) como ha sido expuesto por la defensa de ANTONIO ROJAS GRANADOS, la disconformidad es única, consistente en que, de los elementos de prueba enunciados, considera la casacionista que de ellos no emanan los indicios que pudieran conducir al tribunal a determinar la responsabilidad de su defendido.

Sin embargo, la Sala coincide con la opinión vertida por el Procurador General de la Nación a éste respecto, y concluye que los cargos que se formulan a la resolución emitida en segunda instancia, carecen de fundamento jurídico procesal.

En cuanto a la alegada violación del artículo 905 del Código Judicial, que

según la recurrente ha sido violado en concepto de violación directa por omisión, éste Tribunal de Casación discrepa con las consideraciones vertidas por la recurrente, por cuanto que del análisis anterior se desprende claramente, que el tribunal de segunda instancia dió por probada la vinculación de ANTONIO ROJAS GRANADOS ("Rojitas") con la operación de tráfico de cocaína hacia Canadá, apoyándose no solo en la declaración de Carlos Ríos Saldaña, como erróneamente afirma la licenciada Jaen de Salinas. Como queda expuesto, además de tales declaraciones, que resultaron abundantes en detalles y precisas en cuanto al señalamiento directo de los sujetos implicados en la operación, siendo que de ella surge como uno de los partícipes, precisamente el imputado ROJAS GRANADOS, existen en el expediente, otras pruebas que como se ha dicho, fueron evaluadas por el juzgador de segunda instancia. Entre ellas, se tienen los informes de comisión de fojas 7-8, el informe secretarial de fojas 17-18, la cinta videofónica de la entrega de la droga, los documentos que reposan de fojas 207 a 213, las declaraciones indagatorias de los imputados que corrobora que se conocían y que se habían dado varias reuniones entre ellos, lo que de acuerdo con la lógica y la experiencia, permitió deducir los indicios graves de vinculación del procesado. Todos éstos elementos analizados de manera conjunta, sirvieron de sustento a la sentencia que se impugna, por lo tanto, la Sala concluye que la transgresión que se acusa al artículo 905 del Código Judicial no tiene fundamento.

En cuanto a la violación directa por omisión de los artículos 970 y 972del Código Judicial, de la cual se acusa a la sentencia de segunda instancia, la Sala nuevamente ha de discrepar con la recurrente, pues tal como expusimos de manera enjundiosa al examinar la alegada violación de ésta norma, en el mismo concepto, en el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, los indicios graves que emergen de las pruebas que se enuncian como valoradas erróneamente por el "A Quem", resultan no sólo de la convergencia lógica de los elementos que cada uno arroja, si no también de la aplicación de la experiencia, del conocimiento de la naturaleza y modo de operar de éste tipo de empresa o actividad criminal, al igual que de los elementos fácticos que evaluados de conjunto, permiten establecer que ciertamente, ANTONIO ROJAS GRANADOS participó del acuerdo con el agente encubierto Carlos Ríos Saldaña para enviar 23 paquetes de cocaína hacia Canadá, como en efecto se hizo.

En consecuencia, los razonamientos expuestos no conducen a la conclusión de que dichas disposiciones fueron violadas. Muy por el contrario, la Sala aprecia que el "A Quem" partió de la consideración de dichas normas para arribar a la conclusión que dió como resultado la sentencia de 7 de noviembre de 1997.

Finalmente, en cuanto a las disposiciones legales infringidas, como reiteradamente se ha establecido en la jurisprudencia de casación penal, cuando se alegan causales de naturaleza probatoria, al no poderse probar la infracción de las disposiciones de naturaleza adjetiva, siendo que en ellas recae la escencia de la impugnación procesal, tampoco se da la violación de las disposiciones sustantivas, por cuanto que ello se produce como consecuencia de la violación de las primeras. En tal sentido, la Sala concluye que el artículo 255 del Código Penal no resulta violado en el concepto de indebida aplicación como pretende la casacionista.

ÚNICA CAUSAL DE FONDO EN EL RECURSO DE CASACIÓN DE MARIO ALBERTO FUNG POSSO:

La defensa de MARIO ALBERTO FUNG POSSO impugna además el fallo emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, aduciendo que se cometió error de derecho en la apreciación de la prueba sustentando su inconformidad en cuatro motivos numerados primero, segundo, cuarto y quinto.

En esencia, sostiene el casacionista que el error consistió en la valoración que hizo el "A Quem" de las declaraciones de Carlos Ríos Saldaña (fs. 22 - 27, 249 - 251), Ricardo Gutiérrez (fs. 306 - 307), Misael Agner Muñoz (fs. 308 - 310), Elexis Ruben Morales (fs. 233 - 235), al igual que de los informes de comisión de fojas 7 y 8, secretarial de fojas 17 18, del video tomado al

momento de la entrega de la droga, y finalmente de la prueba documental de fojas 207 a 213.

Básicamente, el recurrente expone que de las pruebas señaladas el Segundo Tribunal Superior dedujo indicios que vinculan a su representado con la operación de tráfico internacional de drogas y da por probado que MARIO ALBERTO FUNG POSSO, se reunió con el agente encubierto con la finalidad de realizar dicha operación ilegal.

En relación con el primer motivo en el cual se impugna la evaluación realizada de la declaración del señor Carlos Ríos Saldaña, se aprecia que la disconformidad consiste en que según el casacionista, dicha declaración es el único elemento del proceso que hace referencia a las reuniones sostenidas con la finalidad de transportar droga hacia Canadá.

La Sala discrepa con el licenciado Orlando Moreno Murillo, representante legal de MARIO ALBERTO FUNG POSSO, por cuanto que tal como se expuso al analizar la primera causal de fondo en el recurso interpuesto a favor de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, además de la mensionada prueba, en el proceso existen número plural de elementos de convicción que fueron ponderados de conjunto por el "A Quem" para arribar a la conclusión que el imputado FUNG POSSO era uno de los integrantes de la organización dedicada al tráfico internacional de drogas, con destino a Canadá (fs. 806 a 809).

En tal sentido, a fojas 806 a 809 obseva la Sala la resolución que se impugna en casación, lo cual además de valorar la declaración del agente encubierto Carlos Ríos Saldaña, quien describe con lujo de detalles todos los aspectos discutidos en las reuniones que sostuviera con el imputado, también se enuncian las otras pruebas que fueron consideradas. Así, especialmente resultan ilustrativos los detalles que describe con precisión Carlos Ríos Saldaña a fojas 250 donde afirma que los señores "Chino" (Mario Fung Posso) y Jairo le presentaron a "Rojitas" con el propósito de ver la factibilidad de enviar una droga hacia Canadá. En el mismo sentido, en su declaración jurada que reposa a fojas 22-27, señala que el 20 de enero de 1995 se reunió con "CHINO" y JAIRO en el restaurante Waikiki a las 1:00 p. m., por espacio de treinta minutos para concertar otra reunión que se verificaría en horas de la noche en el Hotel Granada. Precisa el mismo señor Ríos Saldaña que en éste último lugar se habló de diferentes formas de operar y de los distintos lugares al igual que las diferentes líneas aéreas a utilizar.

Abundando en cuando a las pruebas que fueron valoradas por el "A Quem" en la sentencia impugnada, a fojas 7 y 8 se tiene el Informe de Comisión rendido por el Inspector Ronaldo Reina Jaén, de la División de Estupefacientes, en el cual describe haber observado que:

> "Después de permanecer en el lugar por espacio de varios minutos, llegó un vehículo tipo vans de dos tonos de color azul y celeste, matrícula 661015 conducido por un sujeto de tez blanca, mediana estatura, de rasgos asiáticos, quien se acercó al agente encubierto y entabló conversación. Seguidamente se dirigieron al vehículo donde le dá instrucciones de cómo abrir la puerta trasera y le hace entrega de las llaves, seguidamente el agente encubierto procede a darle marcha al vehículo hacia la Avenida 4 de julio, sector de Santa Ana, Chorrillo y finalmente al Club de Yates de Amador, siendo custodiado por nosotros. Seguidamente en el área de los estacionamientos del Club de Yates de Balboa se procede en presencia del funcionario de la Fiscalía de Drogas y del agente encubierto a abrir la puerta trasera del vehículo donde se encontró en el interior una (1) maleta marca SAMSONITE con una calcomanía del nombre y la bandera de Panamá en ambos lados, contentiva de cierta cantidad de ropa variada de hombre y la cantidad de veintitrés (23) paquetes contentivos de la presunta droga cocaína, de los cuales veinte (20) estan forrados con cinta adhesiva color chocolate con el

> distintivo L-6 y los tres (3) restantes estan forrados con cinta adhesiva color roja con la inscripción KALIMAN. Es importante señalar que la presunta droga finalmente sería enviada a CANADA, donde finalizaría la operación con el arresto de miembros de ésta organización criminal. Cabe también informar que durante ésta operación se tomaron videos de los aspectos más relevantes.
>
> Es importante mencionar que el agente en cubierto hizo entrega en el lugar al funcionario de la Fiscalía de Droga, la suma de OCHO MIL DÓLARES ($8,000.00) en billetes de cien dólares los que serían utilizados para el movimiento de la presunta droga. ..."

Por otra parte, en perfecta coincidencia con los elementos probatorios ya expuestos, que además fueron valorados por el "A Quem", se observa de fojas 135 a 142, la declaración indagatoria de MARIO ALBERTO FUNG POSSO, en la cual aporta elementos que resultan coincidentes con los informes rendidos tanto por el agente encubierto, como por el inspector Ronaldo Reina Jaén, relativos a la operación encubierta, vigilancia y seguimiento que se le hacía a los integrantes de la organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Como se aprecia, si bien las declaraciones del agente encubierto Ríos Saldaña aportaron gran cantidad de elementos que confrontados con otros, incluyendo la propia declaración del imputado (fs. 135 a 142), llevan a la conclusión que efectivamente el señor FUNG POSSO formaba parte de la organización delictiva, lo aportado por éste testigo en modo alguno constituyó la única prueba en que se sustentó la sentencia de segunda instancia.

En cuanto al segundo motivo, el recurrente impugna la valoración que se hiciera del informe de comisión de fojas 7-8, del informe secretarial de fojas 17-18, el video tomado al momento de la entrega de la droga al igual que de la prueba documental de fojas 207 -213, por considerar que de su apreciación se deducen indicios para determinar que MARIO FUNG POSSO acordó con Carlos Ríos Saldaña el envío de 23 paquetes de cocaína hacia Canadá.

En relación a los informes de fojas 7-8 y fojas 17-18, así como el video tomado al momento de la entrega de la droga, tal como hemos sostenido al momento de examinar el primer motivo en que se sustenta ésta causal, las pruebas a que hace referencia el recurrente, no fueron en modo alguno las únicas analizadas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y menos aún fueron examinadas de manera aislada. Como se aprecia a fojas 806 de expediente, la resolución que se impugna por ésta vía extraordinaria, en la sección correspondiente a la valoración probatoria, se aprecia que el Tribunal "A Quem" sustento su decisión a partir de consideraciones que demuestran una adecuada aplicación de la técnica procesal. En tal sentido, expuso:

> "1.2 Quedó demostrado a través de los medios probatorios idóneos, nos referimos al informe de comisión suscrito por el Inspector Ronald Reyna Jaén y el detective Franklin Brewster (fs. 7 y 8); informe secretarial suscrito por el señor Sixto Manuel Saavedra Ramírez, Secretario Primero de la Fiscalía de Drogas (fs. 17 - 18), los testimonios de ELEXIS RUBEN MORALES ARAUZ (fs. 233-235), CARLOS RIOS SALDAÑA (fs. 22-27; 249-251), RONALDO ERNESTO REYNA JAEN (fs. 300-302), RICARDO GUTIERREZ PEREZ (fs. 306-307), MISAEL ABNER MUÑOZ CORTEZ (fs. 308-310), GUSTAVO CHOG HON (fs, 311-12), el video tomado al momento de la entrega de la droga y, la prueba documental registrada de fojas 207 a 213, constatando que la maleta contentiva de la droga fue transportada a Canadá y logra detectarla la Policía montada en el Aeropuerto Internacional de Toronto, ..."

Como se aprecia son plurales los elementos de convicción que sirvieron de sustento al juzgador de segunda instancia para deducir de manera indubitable, la vinculación del señor MARIO ALBERTO FUNG POSSO en la organización que pretendía y en efecto envió los 23 paquetes de cocaína a Canadá.

En el segundo motivo el censor alega que el fallo impugnado incurre en error de derecho en la evaluación del informe de comisión de fojas 7-8, el informe secretarial de fojas 17-18, el video tomado al momento de la entrega de la droga y la prueba documental que reposa a fojas 207-213, bajo la premisa que el ad-quem dedujo indicios de estos elementos para determinar la participación de MARIO ALBERTO FUNG POSSO en el ilícito sub-júdice. Más aún, a propósito de lo expuesto en este motivo, la Sala observa que aun cuando el casacionista sugiere un error del ad-quem al deducir indicios de las piezas citadas, no explica en modo alguno en que consiste el yerro probatorio, de que forma el juzgador atribuyó a los medios de prueba un valor que la ley no le reconoce, o le negó el valor que la ley le atribuye, que son las circunstancias en que opera la causal de fondo invocada. Siendo ello así, es evidente que en este motivo el casacionista no logra concretar el vicio de injuridicidad que atribuye a la sentencia impugnada y, en consecuencia, procede desestimarlo. Sumado a lo anterior, vale señalarlo, los elementos probatorios a que se hace referencia, conforme a las reglas de la lógica y el elemental razonamiento acreditan la vinculación de FUNG POSSO con el delito sub-júdice.

En el cuarto motivo, el censor acusa un yerro en la valoración de las declaraciones de los detectives RICARDO GUTIÉRREZ y MISAEL AGNER MUÑOZ, bajo la premisa que el ad-quem, a partir de tales testimonios, dio por acreditado que el sentenciado convino con el agente encubierto para el envío de 23 paquetes de cocaína hacia Canadá, a pesar que estos agentes de la policía nunca estuvieron presentes en las reuniones de RIOS SALDAÑA y FUNG POSSO. Sobre el particular, la Sala observa que en la decisión del Juzgador de segunda instancia no se valora en forma aislada las declaraciones de los detectives de la referencia para acreditar el acuerdo del procesado con el agente encubierto para el tráfico de drogas, pues el fallo impugnado se apoya en otros elementos de prueba, como la video filmación, el informe de vigilancia, la versión del agente encubierto, el decomiso de la droga incautada, entre otros, de los cuales se derivan indicios que razonablemente vinculan al imputado con el hecho bajo examen. Siendo ello así, no se acredita el vicio de injuridicidad propuesto por el recurrente a través de este motivo.

Con relación a lo expuesto por el censor en el quinto motivo, la Sala advierte que el contexto de la argumentación se refiere a un supuesto error del fallo objetado, en cuanto a la evaluación probatoria de la declaración de ELEXIS RUBEN MORALES porque, según el recurrente, a través de este testimonio el ad-quem vincula a JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA con la droga incautada. Prima facie se observa que el cargo de injuridicidad planteado en este motivo, no se refiere a la situación jurídica de MARIO ALBERTO FUNG POSSO, razón por la cual, procede desestimarlo.

Como disposiciones legales infringidas el recurrente cita los artículos 905 y 972 del Código Judicial y el artículo 255 del Código Penal.

Con relación al artículo 905 ibídem, el casacionista aduce su violación directa por omisión, bajo la premisa que Carlos Ríos Saldaña es el único testigo que refiere un acuerdo con FUNG POSSO para el envió de 23 paquetes de cocaína hacia Canadá y que por ello, de acuerdo a la norma transcrita, tal declaración no tiene fuerza para vincular al procesado con el hecho de la referencia. Ciertamente el testimonio unitario carece de eficacia para formar "per se", plena prueba de la vinculación del imputado con el hecho investigado, empero, en la causa bajo examen, la Sala advierte que, a propósito de la participación de MARIO ALBERTO FUNG POSSO en la operación de tráfico internacional de drogas, además del testimonio del agente encubierto, concurren otros elementos que sustentan su responsabilidad penal, como el informe de entrega vigilada de drogas, las pruebas de video filmación y las fotografías visibles a fojas 9-11, medios probatorios de los que se deducen indicios que razonablemente permiten establecer que el procesado FUNG POSSO llevó a cabo la conducta ilícita que se le atribuye en el fallo censurado. Por otro lado, la Sala observa que en la parte final de la explicación que sustenta el concepto de la infracción del artículo 905 del Código Judicial, el recurrente hace referencia a la violación del artículo 970 ibídem,

norma jurídica que no ha sido citada en el epígrafe de las disposiciones legales infringidas. Por las razones anotadas, la Sala desestima la infracción del artículo 905 del Código Judicial.

El casacionista acusa la violación directa por omisión del artículo 972 ibídem, argumentando que el ad-quem no tomó en cuenta la poca gravedad de los indicios derivados de los elementos probatorios a que se hace referencia en los motivos. Sobre este particular, cabe reiterar lo expuesto en líneas anteriores, en el sentido de que con el hecho de la incautación de la droga a MARIO ALBERTO FUNG POSSO, convergen otros elementoscomo la declaración del agente encubierto Ríos Saldaña, la prueba de video firlmación, los informes de vigilancia y los documentos fotográficos que reposan en autos, medios probatorios de los cuales se deducen graves indicios que acreditan la participación del procesado en la operación de tráfico ilícito de drogas sub-júdice. En consecuencia, se desestima la infracción del artículo 972 del Código Judicial.

La doctrina jurisprudencial, a propósito de las causales de naturaleza probatoria, tiene establecido que la infracción de las normas sustantivas se genera de manera indirecta, es decir, como consecuencia de la demostración de la infracción de las normas adjetivas que se refieren a la evaluación de los medios de prueba. Partiendo de esta premisa, se advierte que en el caso bajo examen el recurrente no ha acreditado la alegada violación de los artículos 905 y 972 del Código Judicial, lo que trae como consecuencia que se desestime la infracción del artículo 255 del Código Penal.

DECISIÓN DE LA SALA

Por lo expresado, al no haberse acreditado los cargos de injuridicidad atribuidos a la sentencia de 7 de noviembre de 1997 emitida por el tribunal de segunda instancia, en los recursos de casación interpuestos por la defensa de los señores JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA, ANTONIO ROJAS GRANADOS Y MARIO FUNG POSSO, procede desestimar la pretención de los recurrentes.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO. HUMBERTO A. COLLADO T.

Vierto en este salvamento de voto, las consideraciones que, como Magistrado Sustanciador de la presente causa, me correspondió señalar en el proyecto que presenté a la consideración del resto de mis colegas, las que me llevaron a concluir que procedía casar la sentencia apelada, en cuanto a la causal de forma invocada a favor de los procesados JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS:

"CONSIDERACIONES DE LA SALA

Recursos de casación en la forma propuestos por los defensores de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS.

La sala, por las razones que seguidamente expone, en forma conjunta se referirá a los recursos de casación en la forma propuestos por la defensa de

JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS, señalando previamente lo siguiente. En la vista correspondiente, la Procuraduría General de la Nación expresó la improcedencia del recurso de casación en la forma propuesto por la defensa de ROJAS GRANADOS, dado que en su oportunidad no alegó el hecho que motivó la presentación del recurso de casación, tal como se encuentra previsto en el artículo 2452 del código judicial sin embargo, como ya en ocasión anterior lo ha expresado la sala, como por ejemplo en la resolución de doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho y recientemente en el fallo de 17 de diciembre de 1998, "es criterio jurisprudencial de esta sala penal, en armonía con lo preceptuado por el articulo 1160 del Código Judicial, que una vez admitido el recurso se esta en la obligación de resolverlo en el fondo".

Sentado lo anterior, la Sala aprecia que, en los motivos que sirven de fundamento a la causal de forma alegada, tanto por la defensa de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA como por la defensora de oficio de ANTONIO ROJAS GRANADOS, básicamente se señala que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial carecía de competencia funcional para conocer del proceso sub-judice, en segunda instancia, respecto de la situación jurídica de ambos procesados, que fueron absueltos por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, porque la apelación interpuesta por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra la sentencia de primer grado fue declarado extemporánea por el Tribunal de instancia y contra esta decisión no se ejercieron los remedios procesales que autoriza la ley.

Dentro de este contexto, la Sala procede a examinar si la apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia se presentó dentro del término legal establecido para esa finalidad y si, ante la declaratoria de extemporaneidad del recurso, manifestada por el a-quo a través de la resolución de 21 marzo de 1996, visible a fojas 680-688, se ejercieron las acciones procesales idóneas para llevar el proceso a conocimiento de la segunda instancia.

En ese sentido, precisa señalar que de acuerdo con lo establecido en el articulo 1117 del Código Judicial, aplicable en el proceso penal conforme lo dispone el articulo 2431 ibidem, el recurso de apelación contra la sentencia debe interponerse en el acto de la notificación personal o dentro de los tres días siguientes a la notificación. Por otro lado, el artículo 2305 de la misma excerta legal señala que el agente del Ministerio Público se considera legalmente notificado, transcurrido 48 horas contadas a partir del ingreso del expediente a su despacho.

Partiendo del mandato legal explicado, la Sala observa que en el caso sub-judice el expediente contentivo de la sentencia de primera instancia fue entregado en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el día lunes 26 de febrero de 1996, según consta a fojas 679, para los efectos de la notificación del fallo citado, por lo que transcurridas 48 horas debía considerarse legalmente notificado al agente fiscal.

Ciertamente, en la diligencia de entrega del infolio se omitió la anotación de la hora en que ingresó a la oficina fiscal, no obstante si se registró la fecha. Siendo ello así, resulta evidente que el período de 48 horas a que se refiere el artículo 2305 ibidem quedó cumplido el día miércoles veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996) y por tanto, el término de tres días para interponer el recurso de apelación comenzó a correr el día jueves 29 de febrero y venció el lunes 4 de marzo de 1996.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas devolvió el expediente, con expresión del recurso de apelación, al Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial el día 5 de marzo de 1996 es decir, después de vencido el término que se tenía para interponer recurso de apelación contra la sentencia pronunciada y por esta razón fue legalmente declarada, por el Juzgado del conocimiento, extemporánea la impugnación.

De lo que se deja expresado, se observa que en este proceso, el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas dejó precluir el término legal que tenía para promover recurso de apelación contra el fallo expedido.

En ese orden, el jurista Edgardo Pallares sostiene que la preclusión "es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza". También explica este autor "que el término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal" (Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 5 edición, Editorial Porrua, S.A., Méjico 1966, páginas 574 y 721.

Por su parte, el fallecido maestro Eduardo Couture nos indica que "los plazos son pues, los lapsos dados para la realización de los actos procesales" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Décima Quinta reimpresión inalterada, Ediciones de Palma, Buenos Aires 1990, página 174).

En ese mismo orden, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, Doctor Pedro J. Barsallo, al referirse al principio de preclusión explica: "En síntesis la vigencia de este principio en el proceso hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del tribunal, dentro de fases o períodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia" (Barsallo, Pedro J.). Los Principios Fundamentales del Proceso Civil. Estudios procesales, tomo 1 , compilado por Jorge Fábrega Ponce, Editora Jurídica Panameña, Panamá 1989.

Nuestro Código de Procedimiento recoge el criterio que se deja expuesto, precisando en los artículos 497 y 499 que los términos para la realización de los actos procesales son perentorios e improrrogables y corren por Ministerio de la ley sin necesidad de que el Juez exprese su duración. Improrrogable, señala Marco Antonio Díaz De León: "esta expresión tiene una muy especial vinculación con el tiempo en el proceso y mas aún, con la evacuación de los actos procesales como requisito formal de su producción. Es decir, el tiempo es factor determinante del impulso procesal, pero, sobre todo, es una condición formal de oportunidad de la realización de los actos procesales" y perentorio, sostiene el mismo autor, "procesalmente calificase así al término o plazo improrrogable, es decir, fatal" (Marco Antonio Díaz De León, Diccionario de Derecho Procesal Penal, tomo primero y segundo, páginas 1104 y 1675, Tercera Edición, Editorial Porrua, Avenida República Argentina, 15 Méjico 1997).

De otro modo, la situación procesal planteada frente a la resolución de 21 de marzo de 1996 (fojas 680-688 que negó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Drogas, reclama la aplicación del artículo 1121 del Código Judicial, que en su primer inciso establece lo siguiente:

> La resolución que niega la concesión del recurso de apelación o entrañe su negativa o lo conceda en un efecto distinto al que corresponda, solo admite recurso de hecho (subraya la Sala).

La disposición transcrita expresamente establece que el único instituto procesal que puede proponerse frente a la negativa de un recurso de apelación es el recurso de hecho. Ello también queda evidenciado cuando en el artículo 1137 del Código Judicial, referente al recurso de hecho, aplicable al proceso penal por mandato expreso del articulo 2432 ibidem, se establece que "la parte que intente interponer el recurso de hecho pedirá al Juez que negó la apelación..." las copias de la documentación allí indicaba para concurrir después ante el superior y que este resuelva, a través del recurso de hecho interpuesto, si es del caso conceder la apelación negada por el inferior.

En el caso sub-judice, la Sala advierte que la Fiscalía Especializada en

Delitos Relacionados con Droga no interpuso recurso de hecho contra la resolución de 21 de marzo de 1996, que negó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. El Agente Fiscal, contra la negativa de su apelación, interpuso el recurso de apelación, situación que resulta extraña por completo a las disposiciones que gobiernan el proceso penal panameño, no de ahora, sino desde la vigencia del Código de 1917, pues en aquel ordenamiento jurídico también se establecía - Artículo 1066 de ese cuerpo legal - el recurso de hecho como único medio de impugnación de la resolución donde se niega conceder una apelación.

Los razonamientos expuestos llevan a la Sala a concluir que en el caso bajo examen se ha vulnerado el debido proceso legal, al habilitar irregularmente la segunda instancia, a propósito del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, no sólo porque la impugnación de la referencia fue interpuesta en forma extemporánea sino porque también el agente fiscal no utilizó, contra la negativa de la apelación, el único remedio procesal que comtempla el ordenamiento jurídico frente a esta situación, cual es el recurso de hecho.

De lo expuesto se concluye que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial carecía de competencia funcional para conocer de la decisión del a-quo, en cuanto a la situación jurídica de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS, dado que la vía utilizada para llevar al proceso a la segunda instancia fue habilitada contra legem y siendo ello así, prosperan los cargos atribuidos por los recurrentes y queda acreditada la causal de forma invocada y conforme a lo dispuesto en el artículo 2450 del Código Judicial, se prescinde del examen del resto de las causales alegadas por los defensores de JAIRO ALBERTO BUILES MOLINA y ANTONIO ROJAS GRANADOS".

Esencialmente el criterio que dejo expuesto y las observaciones que, en su oportunidad, presenté al contraproyecto que mayoritariamente quedó aprobado, me mueven a no compartir la decisión finalmente adoptada y a salvar, con todo respeto, mi voto en este fallo.

Fecha: Ut Supra.

(Fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(Fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A CARLOS EDUARDO VERGARA PACHECO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema, entra a decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por el magister ELIÉCER A. PÉREZ SANCHEZ, quien actuando en nombre y representación de CARLOS EDUARDO VERGARA PACHECO impugna la sentencia de 16 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, la que confirma el fallo proferido por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá de fecha 5 de abril de 1999, en la que se condena a su representado a cuarenta (40) meses de prisión.

Analizado el libelo se observa prima facie que el recurrente no presenta de manera correcta la historia concisa del caso, muy por el contrario identifica esta sección de la siguiente manera: "FORMALIZAMOS EL PRESENTE RECURSO EXTRAORDINARIO EN LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES".

La identificación correcta que señala el artículo 2443, numeral 3 es "Historia concisa del caso" y por lo formalista y riguroso de este medio de impugnación, el recurrente debe mostrar total apego a las disposiciones que regulan la forma y títulos en que deberán ser desarrolladas las distintas secciones que el recurso contiene.

Con relación a la causal, el recurrente expresa de manera clara y precisa la denominada: "Infracción de la Ley Sustancial Penal, por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia". Ella se encuentra contenida en el artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial.

En cuanto a los motivos, estos tienen por finalidad sustentar la causal que se invoca, por lo que deben redactarse a continuación, señalando los folios en donde reposa la prueba valorada de manera incorrecta, toda vez que la causal presentada por el casacionista es de carácter probatoria

El recurrente sustenta tres motivos, los dos primeros contienen cargos de injuridicidad, mas el tercero encierra apreciaciones de carácter subjetivas, denotando el recurrente su inconformidad con la sentencia recurrida, pero sin precisar el cargo de injuridicidad que le endilga, lo que se aparta de lo exigido por la técnica casacionista en cuanto a la redacción de los motivos.

Las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido fueron redactadas de manera autónoma, cumpliendo con los requisitos exigidos para la presentación de este recurso. Transcrito el precepto vulnerado, explicó el recurrente seguidamente, el concepto de la infracción de cada norma jurídica violentada.

En tal sentido, señala como normas infringidas los artículos 905, 973 y 1966 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, que se compadece con la causal probatoria invocada porque la causal invocada, de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal se presenta, cuando se acepta un medio probatorio no reconocido por la ley; cuando el medio probatorio reconocido por la ley se le da fuerza probatoria que la ley le niega o cuando al medio probatorio reconocido por la ley se le niega el valor probatorio que la ley le atribuye.

Sin embargo, al señalar el concepto de la infracción de las normas sustantivas el casacionista yerra al señalar que fue por violación directa por comisión, lo que se contradice con la causal invocada.

La violación directa por comisión nace cuando el juzgador aplica correctamente la disposición que regula la situación contemplada en el proceso, pero lo hace de manera incompleta, ocasionando que se solicite el reconocimiento del derecho del imputado desconocido en la sentencia atacada.

En consecuencia, si el recurrente manifiesta que las normas adjetivas de carácter probatoria han sido vulneradas de manera directa por omisión no puede, consecuentemente, señalar la violación directa por comisión de los artículos 185 y 186 del Código penal, ya que en sus explicaciones señala que la conducta desplegada por CARLOS EDUARDO VERGARA PACHECO no se adecua al tipo penal, "ya que el hecho punible no fue cometido por él". El concepto que debió utilizar frente a los planteamientos vertidos es el de indebida aplicación.

Estos defectos impiden la admisión de la presente causal, ya que se incumple con los requisitos establecidos en el artículo 2443, numeral 3 del Código Judicial y por consiguiente, se rechaza el libelo contentivo de este recurso.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo expuesto, la Sala Segunda de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el magister ELIECER A. PEREZ SANCHEZ a favor de CARLOS EDUARDO VERGARA PACHECO.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ITZEL TERESA JAMES DOWNER SINDICADA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 26 de enero de 1999, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación formalizado por la apoderada judicial de ITZEL TERESA JAMES DOWNER, sindicada por delito contra la Salud Pública.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

ANTECEDENTES

De las constancias procesales se observa que en horas de la tarde del 1 de julio de 1996 en el Sector D, Altos del Río, Corregimiento de Río Abajo, Agentes de Policía detuvieron a ITZEL TERESA JAMES DOWNER, quien se encontraba en compañía de su concubino, transitando en actitud sospechosa. Seguidamente fueron llevados a la base en donde la Agente A. Guerra procedió a revisar a ITZEL TERESA JAMES DOWNER, localizándole en su ropa interior una envoltura de papel higiénico, dentro de la cual estaba un sobre plástico dividido en cuatro secciones con un contenido de 46 sustancias sólidas de color cremoso, la que posteriormente se determinó que era cocaína en la cantidad de 13.15 gramos.

Al resolver la causa, el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial la condenó a la pena de 5 años de prisión como autora del delito de compra y venta de droga para fines ilícitos. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al decidir la impugnación interpuesta contra la decisión de primera instancia, confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida, mediante fallo de 20 de julio de 1998, anunciandose y formalizandose oportunamente recurso de casación contra esta decisión. Celebrada la audiencia del caso, corresponde proferir el pronunciamiento que la situación amerita.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS

La recurrente expone una causal para fundamentar el recurso de casación que promovió, indicando un sólo motivo para fundamentarla.

Se alega que el fallo recurrido incurre en "Error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal". (Numeral 8 del Artículo 2434 del Código Judicial).

Para fundamentar la causal, advierte como único motivo de la misma que el Segundo Tribunal califica y afirma la confesión de la procesada "no fue

espontánea ni oportuna y que por tanto no constituye atenuante de responsabilidad penal, con lo cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial incurre en error de derecho", porque según la casacionista la confesión hecha por la imputada con relación a la finalidad de la droga que le fue encontrada permite determinar que estaba destinada a la venta, lo que según la casacionista constituye el único elemento probatorio que permitió declararla responsable del delito.

En conclusión, la casacionista ataca la sentencia pronunciada por no haber tomado en cuenta las atenuantes que la ley consagra en favor de la procesada, tales como la confesión que según la recurrente fue espontánea y oportuna.

Con relación a este único motivo se entiende que el recurrente alega como vicio de injuridicidad el hecho de que el Tribunal Superior no reconoció la confesión a su representado como circunstancia atenuante.

Confesión, en estricto sentido, es la aceptación de la responsabilidad que el sindicado o procesado efectúa ante el agente del Ministerio Público o el tribunal de la causa, según que se trate de un sumario o un plenario. En este caso, "la confesión" no tiene tal connotación porque la aceptación por parte de la procesada de los hechos que se le imputan se produce después de que le fue encontrada la droga en su persona, de lo que se desprende que la comparecencia de la procesada ante la autoridad lo es a consecuencia de su detención, por lo que no puede considerarse como voluntaria, puesto que no se presentó personalmente ante las autoridades a declarar sino que fue detenida por unidades de la Policía Técnica Judicial en los alrededores de Calle D, Altos del Río, Corregimiento de Río Abajo y posteriormente conducida ante la misma. Tampoco es oportuna la confesión, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión sobre la ocurrencia de los hechos, toda vez que al momento en que rinde su declaración indagatoria, ya se contaba en el expediente con graves indicios en su contra que la vinculaban con el ilícito, razón por la que esta Sala considera que el reconocimiento de esta circunstancia atenuante no procede y por tanto, no prospera el argumento planteado en este motivo, al no acreditarse vicio de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia en este aspecto.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, respecto del Código Penal, se alega la infracción del numeral 5 del artículo 66 y el artículo 69, ambos violados en forma directa por omisión.

De lo expresado en la sección de los motivos esta Corporación ya ha manifestado que no se ha producido la violación del numeral 5 del artículo 66 del Código Penal, por lo tanto, no se ha logrado probar los cargos o los vicios de injuridicidad formulados contra la sentencia de 20 de julio de 1998.

En lo que al artículo 69 del Código Penal se refiere, la casacionista considera que "el ad quem no reconoció a la sentenciada la rebaja de la pena de una sexta a una tercera parte" de acuerdo a lo establecido en el artículo supra citado. Con respecto a este planteamiento considera la Sala que esta situación no se produce porque para que el tribunal hubiese hecho este cálculo matemático tendría que haberse reconocido una atenuante, lo que no se da en el caso en estudio, toda vez que se determinó que la confesión espontánea y oportuna (atenuante reclamada) no se configuró como tal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de julio de 1998 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario Sala Penal

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MIGUEL ANGEL MELÉNDEZ, SINDICADO POR DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jonathan Valdés García, en su condición de defensor técnico de Miguel Angel Meléndez, ha presentado recurso de casación en el fondo contra sentencia de 14 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual impone a su defendido la pena de 3 años de prisión, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de la menor Sofía Judith Herrarte Peñalba.

El examen del libelo, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad, permite advertir que el casacionista fundamenta el recurso extraordinario en la causal de casación en el fondo que consagra el numeral 7 del artículo 2434 del Código Judicial, que se refiere al supuesto en que "... se haya procedido por delito que requiere acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiere la ley".

En cuanto al requisito concerniente a los motivos y a las disposiciones legales infringidas, considera la Sala que se presentan de manera deficiente. En efecto, en un solo párrafo, asocia los cargos de injuridicidad con los argumentos que sustenta la única norma legal que se dice vulnerada, en este caso, el artículo 1978 del Código Judicial. Cabe anotar que el recurrente afirma que esa disposición legal ha sido violada por la sentencia atacada, pero no señala si fue en concepto de violación directa por omisión o por comisión. Otro vicio que menoscaba la formalización del recurso extraordinario de casación consiste en que el recurrente no hace mención de la norma sustancial penal que infringió la sentencia atacada.

En síntesis, claramente se desprende que no es posible conocer los motivos o cargos de injuridicidad contra la sentencia impugnada, lo que también sucede en cuanto a las disposiciones legales que se dicen infringidas, por considerar que no se puede apreciar con claridad el concepto de la infracción del artículo 1978 del Código Judicial, y porque se omite la norma de derecho penal sustantivo que se dice vulnerada.

El análisis de la causal invocada demuestra que las deficiencias anotadas desnaturalizan el recurso propuesto, constituyen un obstáculo para formular juicio de valor en cuanto a la causal aducida, y conducen a la no admisión del recurso de casación, por incumplimiento de las formalidades previstas en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo contra sentencia de 14 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual impone a Miguel Angel Meléndez a la pena de 3 años de prisión, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de la menor Sofía Judith Herrarte Peñalba.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MIGUEL ANGEL MELÉNDEZ, SINDICADO POR DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Jonathan Valdés García, en su condición de defensor técnico de Miguel Angel Meléndez, ha presentado recurso de casación en el fondo contra sentencia de 14 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual impone a su defendido la pena de 3 años de prisión, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de la menor Sofía Judith Herrarte Peñalba.

El examen del libelo, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad, permite advertir que el casacionista fundamenta el recurso extraordinario en la causal de casación en el fondo que consagra el numeral 7 del artículo 2434 del Código Judicial, que se refiere al supuesto en que "... se haya procedido por delito que requiere acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiere la ley".

En cuanto al requisito concerniente a los motivos y a las disposiciones legales infringidas, considera la Sala que se presentan de manera deficiente. En efecto, en un solo párrafo, asocia los cargos de injuridicidad con los argumentos que sustenta la única norma legal que se dice vulnerada, en este caso, el artículo 1978 del Código Judicial. Cabe anotar que el recurrente afirma que esa disposición legal ha sido violada por la sentencia atacada, pero no señala si fue en concepto de violación directa por omisión o por comisión. Otro vicio que menoscaba la formalización del recurso extraordinario de casación consiste en que el recurrente no hace mención de la norma sustancial penal que infringió la sentencia atacada.

En síntesis, claramente se desprende que no es posible conocer los motivos o cargos de injuridicidad contra la sentencia impugnada, lo que también sucede en cuanto a las disposiciones legales que se dicen infringidas, por considerar que no se puede apreciar con claridad el concepto de la infracción del artículo 1978 del Código Judicial, y porque se omite la norma de derecho penal sustantivo que se dice vulnerada.

El análisis de la causal invocada demuestra que las deficiencias anotadas desnaturalizan el recurso propuesto, constituyen un obstáculo para formular juicio de valor en cuanto a la causal aducida, y conducen a la no admisión del recurso de casación, por incumplimiento de las formalidades previstas en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo contra sentencia de 14 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual impone a Miguel Angel Meléndez a la pena de 3 años de prisión, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de la menor Sofía Judith Herrarte Peñalba.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PROPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE GRISELDA QUINTANA CUERVO, SINDICADA POR DELITO DE ROBO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO QUEZADA GUERRERO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Asunción Alonso de Montalvo, actuando en su condición de defensora de oficio, ha presentado recurso de casación en el fondo contra la resolución de 30 de julio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a Griselda Quintana Cuervo a la pena de 6 años de prisión, como responsable del delito de robo.

Corresponde en este momento examinar el recurso, con el objeto de resolver sobre el cumplimiento de las exigencias legales que nuestro ordenamiento jurídico exige para su admisión.

Se advierte que la casacionista fundamenta el recurso extraordinario en la causal que consagra el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, por considerar que la sentencia atacada incurre en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Esta Corporación, a través de la jurisprudencia que ha dejado plasmada en otras causas, entiende que esta causal concurre cuando el juzgador "al valorar la prueba, no entra a considerar los factores que rigen las reglas de la sana crítica, como son la lógica ... y las máximas de la experiencia común, sino que de forma caprichosa le da o le niega valor a una prueba, lo que conduce sin duda a un razonamiento equivocado" (Sentencia, 2 de febrero de 1998).

Dos motivos le sirven de sustento a la causal. En el primer motivo, la recurrente expresa que el Tribunal Superior incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba, porque utilizó la diligencia de reconocimiento fotográfico, en la cual el ofendido identificó a su representada como la autora del ilícito (f. 208). En el segundo motivo, manifiesta que el Tribunal Superior condenó a su mandante por atender que no cumplió con la medida cautelar asignada, que no participó en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos y que mintió durante su declaración indagatoria (f. 209). A juicio de la Sala, la recurrente no cumple con el requisito legal de suministrar los cargos de injuridicidad manifiestos de valoración probatoria correspondientes a la causal que invoca. En cuanto al primero de ellos, no explica porqué la diligencia de reconocimiento fotográfico debe ser desestimada como elemento probatorio en esta causa; no define de qué manera esa diligencia vulnera los factores que rigen las reglas de la sana crítica, y que condujo al Tribunal a un razonamiento equivocado. En lo que concierne al segundo, al revisar la sentencia atacada, se advierte con claridad de que el hecho punible no lo comprueba con la ayuda de la conducta anterior o posterior del agente, porque esos factores se atienden al momento de sustentar la individualización de la pena que le corresponda al imputado. En síntesis, los utiliza para declarar a la imputada responsable del hecho punible. Se refiere al ámbito de la culpabilidad del agente, no a la existencia o no del delito.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se observa que el recurrente alega la infracción del artículo 905 del Código Judicial y el artículo 186 del Código Penal (fs. 209-210). Advierte la Sala que el artículo 905 ibídem, se refiere al valor probatorio del testimonio único. Ahora bien, la recurrente sostiene que esa norma legal resultó vulnerada luego de confrontarla con una diligencia de reconocimiento fotográfico. Resulta evidente que es deficiente el argumento que sustenta la infracción de la disposición legal comentada, toda vez que no es posible dirimir sobre la valoración probatoria de una diligencia

pericial con una norma legal que regula la prueba testimonial.

Finalmente, se aprecia que la recurrente advierte la vulneración del artículo 186 del Código Penal, por indebida aplicación, ya que "no se ha logrado acreditar ... que GRISELDA QUINTANA CUERVO haya participado en la ejecución del robo cometido ..." (f. 210). Como se aprecia, la casacionista no expone un razonamiento que apoye la conclusión a que llega. No es suficiente manifestar que su patrocinada no cometió el delito; es necesario que esa afirmación llegue acompañada de sustentación jurídica-técnica. En síntesis, no expone con claridad por qué el comportamiento de la imputada no se adecua al tipo penal que prevé el delito de robo agravado.

En vista de que los defectos advertidos, en cuanto a la alegación que los motivos aducidos como en cuanto a las disposiciones legales que se dicen infringidas no formalizan adecuadamente la causal alegada, es inevitable concluir que el libelo de casación que ahora se examina no puede ser admitido, por incumplimiento de las formalidades establecidas por el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado contra la resolución de 30 de julio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual, previa reforma, condena a Griselda Quintana Cuervo a la pena de 6 años de prisión, como responsable del delito de robo.

Notifíquese y Devuélvse.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACION DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CESAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Argentina Barrera Flores, Fiscal Octava de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, formalizó recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 13 de octubre de 1998 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la cual reformó la sentencia N° 25 del 16 de junio de 1998 proferida por el Juzgado Décimo Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de ABSOLVER a CÉSAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO.

Admitido el recurso interpuesto y ordenado el traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación (fs.409-412); se llevó a cabo la audiencia oral y pública el 14 de julio de 1999 (fs. 433-456); correspondiendo en este momento procesal el análisis de fondo y decisión de este Tribunal de Casación, sobre la pretensión de la postulante.

FUNDAMENTO DE LA CASACIONISTA

La licenciada Barrera Flores solicita que se case la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá y en su lugar se emita una sentencia condenatoria en contra de César Augusto Carrasco Maldonado.

A continuación resumimos el contenido del escrito presentado por la casacionista (fs. 389-400).

HISTORIA CONCISA DEL CASO

En horas de la mañana del 12 de noviembre de 1996 arribaron al aeropuerto Internacional de Tocumen de esta ciudad, procedente de la ciudad de Guayaquil, los ciudadanos ecuatorianos Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñiz.

Luego alquilaron un vehículo y cuando se dirigían a la Zona Libre de Colón, por la altura del puente Don Bosco en Chilibre, fueron interceptados por dos vehículos cuyos ocupantes, ocho en total, se encontraban armados. Siendo despojados de la suma de ochenta y un mil quinientos balboas (B/.81,500.00) en efectivo, un cheque por la suma de tres mil ocho balboas con noventa y nueve centavos (B/.3,008.99) y un reloj Cartier valorado en la suma de mil cien balboas (B/.1,100.00).

Al acudir a la Policía Técnica Judicial, agencia de San Miguelito, practican diligencias de reconocimiento positivo en los Libros de Filiación, en las que resulta reconocido César Augusto Carrasco Maldonado.

Expone la casacionista, que el acta de diligencia en donde es reconocedor Juan Andrés Barreiro (f. 5), señala que el hecho se suscitó a las 10:25 a. m.; en tanto en la que es reconocedor Felipe Vargas Muñiz (f. 11) indica que a las 10:30 a. m. se suscitó el hecho.

Se refiere a que el señor Ricardo Alberto Chavarría declaró que aproximadamente a las diez de la mañana vio a dos sujetos armados, uno con una Ak-47 y el otro con una mini Usi, quienes registraron y golpearon a los sujetos que habían salido del carro gris, percatándose que era un robo (fs. 30-31).

Al practicarse diligencia de registro y Allanamiento en la casa de César Augusto Carrasco Maldonado, ubicada en el sector de Monte Oscuro, corregimiento de Pueblo Nuevo, se encontraron una mini Usi (minimax) calibre 380, marca Maneta (fs. 45-49).

Al ser indagado Carrasco Maldonado niega los hechos que se le imputan, indicando que se encontraba durmiendo en su casa y se levantó aproximadamente a las once de la mañana (fs. 76-81).

Al rendir declaración jurada Rubén Antonio Moore Ruda, seguridad del edificio donde reside Carrasco Maldonado, afirma que vio a éste en su casa como a las once y veinticinco de la mañana (fs. 202-203); igualmente la señora Graciela Maricela Gordón William, vecina del señor Carrasco Maldonado, señala que lo vio como a las once y treinta de la mañana (fs. 204-205).

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, emitió sentencia del 16 de junio de 1998 y declaró culpable al señor Carrasco Maldonado condenándolo a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término de la pena de prisión, como coautor del delito de robo a mano armada (fs. 527-534).

Tal decisión fue revocada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por lo que sostiene la casacionista que incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que le resta valor probatorio a las diligencias de reconocimientos en los libros de Filiación de los señores Barreiro (f. 5) y Muñiz (f. 11). En tanto, le atribuyó excesivo valor probatorio a las declaraciones del señor Moore (fs. 202-203) y la señora Gordon Williams (fs. 204-205).

Igualmente sostiene la casacionista, que el tribunal Ad-Quem incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba ya que deja de valorar la diligencia de allanamiento y registro (fs. 45-49), realizada en la residencia de

Carrasco Maldonado y la declaración de Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31).

CAUSALES INVOCADAS

La recurrente invoca como violadas dos causales de casación en el fondo.

Primera Causal:

"Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal" (art. 2434 numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS

La licenciada Barrera Flores expone dos motivos como sustento de la causal invocada.

En el primero sostiene que el Tribunal Superior le restó valor probatorio a los reconocimientos realizados por los señores Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñiz momentos después de lo sucedido, fundamentado en que eran practicados a la hora en que se sucedían los hechos, situación que estima la casacionista no se ajusta a la realidad.

Explica así, que solamente en la diligencia de reconocimiento positivo cuyo reconocedor es el señor Barreiro (f. 5), se indica que fue practicada a las diez de la mañana. No obstante todas las demás piezas procesales acreditan que el hecho ocurrió aproximadamente entre diez y veinticinco a diez y treinta de la mañana, incluso en la misma diligencia a folio 5 se indica que los hechos se dieron a las diez y veinticinco de la mañana.

Resalta la coincidencia que existe entre ambos reconocimientos (fs. 5-11) en señalar de manera independiente al señor César Augusto Carrasco Maldonado, como uno de los autores del delito de robo, demuestra su participación directa en el delito que se le imputa, con lo cual se acredita el error de derecho en que incurrió el Tribunal Superior al no concederle valor de plena prueba a las citadas diligencias.

En el segundo motivo sostiene la casacionista que la sentencia de segunda instancia le atribuye excesivo valor probatorio a las declaraciones de los señores Rubén Antonio Moore (fs. 202-203) y Graciela Maricela Gordón Williams (fs. 204-205), indicando que a éstos les consta que el acusado estaba en su residencia a las once de la mañana.

No obstante considera que ambos testimonios no prueban que el imputado fue visto a esa hora exactamente, sino de once y veinte a once y treinta de la mañana, y tampoco prueban lo que hacía el acusado al momento de los hechos, sino una hora después.

Situación que en su opinión carece de fuerza probatoria suficiente para enervar lo señalado en los reconocimientos positivos en los libros de Filiación practicados por los ofendidos; incurriendo el Tribunal Superior en error de derecho sobre la apreciación de la prueba.

Como disposiciones legales infringidas en esta primera causal, cita la casacionista los artículos 770 y 2144 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, al indicar que si el Tribunal Ad-Quem hubiera aplicado la sana critica al valorar los reconocimientos efectuados por los señores Barreiro y Muñiz, hubiese llegado a la conclusión que el procesado Carrasco Maldonado es responsable del delito de robo a mano armada.

Igualmente considera, que si el Tribunal Superior hubiese valorado los testimonios del señor Moore y la señora Gordón William con base a la Sana Crítica, no les hubiera reconocido el valor probatorio que les atribuyó.

Finalmente considera violado el artículo 186 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, que tipifica el delito de robo a mano armada.

Sostiene así, que de haberse valorado correctamente las pruebas de Diligencia de Reconocimiento Positivo en los libros de Filiación y de no haberse dado excesivo valor probatorio a las declaraciones del señor Moore y la señora Gordón Williams, el Tribunal de Segunda Instancia, hubiera llegado a la conclusión que esta norma es aplicable al caso concreto y por tanto hubiese condenado a Carrasco Maldonado.

SEGUNDA CAUSAL:

> "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal" (art. 2434 numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS

Como sustento a esta causal expone la casacionista dos motivos.

En el primer motivo afirma que la sentencia recurrida no valora la Diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44) realizada en la residencia de Carlos Augusto Carrasco Maldonado; en la que se incautó entre otras cosas, una Mini Uso (Minimax) calibre 380, marca Maneta.

Incurriéndose por ello, en error de hecho sobre la existencia de la prueba, pues esta prueba se demostró el medio idóneo para cometer el ilícito, ya que se está ante un hecho cometido a mano armada. Y consta en el expediente que una de las armas utilizadas en el robo fue una Mini Usi (fs. 30-31).

En el segundo motivo sostiene también, que no se valoró la Declaración Jurada rendida por Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31), quien presenció los hechos y afirmó que los sujetos que registraron y golpearon a los ofendidos estaban armados, mencionando que portaban una AK-47 y una Mini Usi.

Agrega que al ser registrada la residencia de Carrasco Maldonado (fs. 38-44), en la misma se encontraron diferentes armas de fuego, entre las cuales se destaca una Mini Usi, calibre 38, con lo cual se acredita la vinculación directa del señor Carrasco Maldonado con el delito que se le imputa.

Respecto a esta segunda causal, la licenciada Barrera Flores ha señalado como disposiciones legales infringidas en concepto de violación directa por omisión los artículos 769, 2185 y 770 del Código judicial y el artículo 186 del Código Penal.

Respecto al artículo 769 del Código Judicial sostiene que no se tomó en consideración como medio de prueba la declaración de Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31) ni el resultado de la diligencia de Registro y Allanamiento (fs.38-44), con la cual se acredita que el arma encontrada en la residencia de Carrasco Maldonado fue una de las utilizadas en el asalto según deposición de Chavarría.

En cuanto al artículo 2185 del Código Judicial, indica que se viola porque se desconoció la diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44), efectuada como medio de prueba, en la cual se ubica dentro de la residencia de Carrasco Maldonado una serie de armas, entre ellas una Mini Usi que fue una de las utilizadas en el robo.

Afirma que se violó el artículo 770 del Código Judicial dado que al no tomarse en cuenta la Diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44) ni la declaración de Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31), no se aplicaron las reglas de la Sana Crítica fundamentales para valorar ambas pruebas.

Sostiene que en la mencionada diligencia se encontró una serie de objetos idóneos para la comisión de los hechos ilícitos, cuya tenencia no fue debidamente justificada por el imputado. Indica que el hecho delictivo se cometió por medio de armas de fuego, entre las cuales se pudo identificar una Mini Usi, tal como lo señaló el testigo Chavarría (fs. 30-31), mismo tipo de arma que fue encontrada en la residencia de Carrasco Maldonado.

Respecto al artículo 186 del Código Penal afirma que al no valorarse la Diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44) ni la declaración jurada de Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31), el Tribunal de Segunda Instancia, llega a la conclusión de que no es aplicable esta norma al caso concreto y por tanto, absuelve a César Augusto Carrasco Maldonado, cuando la realidad fáctica demuestra la participación del mismo en el delito de robo cometido en perjuicio de Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñiz.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., luego de examinar lo planteado por la casacionista, mediante vista N° 49 de 3 de junio de 1999 (fs. 413-430) recomienda a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar la sentencia de 13 de octubre de 1998 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por haberse demostrado el quebrantamiento de la ley sustancial penal.

Como fundamento a su opinión, expone su criterio respecto a lo planteado por la casacionista en cada una de las causales invocadas.

Al referirse a los dos motivos planteados en la Primera Causal invocada, concluye que se logra acreditar la existencia de vicios de injuridicidad en la sentencia impugnada.

En cuanto a las disposiciones legales que la postulante estima infringida, la máxima representación del Ministerio Público sostiene que se ha comprobado la infracción de los artículos 770 y 2144 del Código Judicial, dado que dejó de aplicarse las reglas de la sana crítica.

Igual criterio vierte respecto a los dos motivos que sustentan la Segunda Causal, afirmando que al no ser valorada la diligencia de allanamiento practicada a la residencia del señor Carrasco Maldonado y la declaración del testigo Chavarría, quien afirmó que los sujetos que golpearon a los ofendidos tenían una AK-47 y una Mini Usi, tipos de armas que fueron encontradas en el allanamiento, se incurre en un yerro que afecta la juridicidad de la sentencia.

Al referirse a las disposiciones legales indicadas como infringidas por la recurrente, manifiesta que el artículo 2185 del Código Judicial al no contener parámetros de valoración no es susceptible de ser invocada como infringida en las causales probatorias.

Sin embargo, si considera infringidos los artículos 769 y 770 del Código Judicial, indicando que por ello resulta conculcado el artículo 186 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, al dejarse de aplicar esta norma penal que tipifica la conducta ilícita realizada por Carrasco Maldonado.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Se procede a examinar las causales aducidas por la casacionista.

PRIMERA CAUSAL: "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal" (art. 2434 numeral 1 del Código Judicial).

En el primer motivo la casacionista sostiene que se valoraron de manera errónea las diligencias de reconocimiento positivo en los libros de filiación de

la Policía Técnica Judicial donde participaron como reconocedores los señores Juan Andrés Barreiro (f. 5) y Felipe Vargas Muñiz (f. 11).

El fallo censurado destaca que Juan Andrés Barreiro en su denuncia afirma que fueron asaltados a la altura del puente de Don Bosco Chilibre a eso de las 10:30 de la mañana del 12 de noviembre de 1996. Sin embargo, el Tribunal Ad-quem advierte que a eso de las 11:15 de la mañana el señor Barreiro se encontraba en la Policía Técnica Judicial de San Miguelito presentando la denuncia del hecho ocurrido.

En cuanto a las diligencias que se refiere el casacionista en el primer motivo textualmente indica:

> "A fojas 5 y 11 reposan diligencias de reconocimientos fotográficos donde el señor JUAN ANDRÉS BARREIRO a las 10:25 de la mañana y el señor FELIPE VARGAS MUÑIZ a las 10:30 de la mañana, ambos el día 12 de noviembre de 1996, pudieron reconocer a CÉSAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO como uno de los ocho asaltantes del señor BARREIRO, lo que indica que ocurriendo el hecho ilícito y el señor CARRASCO MALDONADO ya era reconocido por el afectado. Dichas diligencias de reconocimiento fotográfico fueron practicadas a petición del inspector ALCIBIADES MEDINA jefe Encargado de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito".

Luego de resaltar el contenido de las Diligencias de Reconocimiento Fotográfico, el Tribunal de Segunda Instancia manifiesta su apreciación sobre esos medios de prueba de la siguiente manera:

> "QUINTO: Luego del estudio de las constancias procesales se quiere dejar plasmado, que el acusado CESAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO fue reconocido en diligencia de reconocimiento fotográfico por los señores JUAN ANDRÉS BARREIRO y FELIPE VARGAS MUÑIZ estando en la Policía Técnica Judicial de San Miguelito a la misma hora en que ocurrió el acto ilícito, o sea, que no concuerdan con modo y tiempo, a pesar que los reconocedores admitieron en su declaración que fueron varios los asaltantes, sólo se pudo reconocer al señor CARRASCO MALDONADO en diligencia de 5 y 11, quedando como única prueba en contra frente a la negativa de CESAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO en la ejecución del delito, lo que implica que el indicio no verificado con otra prueba queda como una sospecha, que no proporciona certeza al Juzgador para proferir una sentencia condenatoria, aunado al hecho que existen testimonios de RUBÉN MOORE (fs. 202-203) y de GRACIELA GORDÓN (FS. 204-205), que les consta que el acusado estaba en su residencia el día 12 de noviembre de 1996 a las 11:00 de la mañana en momentos en que fue detenido. Por tanto se encuentra asidero jurídico a lo manifestado por el Defensor Técnico".

Concluye así, que ante tales incongruencias sobre aspectos de fundamental importancia, se debe invocar el principio in dubio pro reo, y por tanto, revocar el fallo de primera instancia.

De conformidad con la denuncia presentada por el señor Juan Andrés Barreiro (fs. 1-3) fueron asaltados aproximadamente a las 10:30 de la mañana.

Advierte este Tribunal de Casación que ciertamente el documento donde se consigna la diligencia de reconocimiento positivo, cuyo reconocedor fue el señor Juan Andrés Barreiro, establece que la hora en que se realizó la misma fue a las 10:00 a. m.; sin embargo, en ese mismo documento se afirma que el asalto a mano armada ocurrió en Chilibre próximo al Puente Don Bosco ese día, fue a las 10:25 de la mañana.

Obviamente que se trata de un error originado por el funcionario que le

correspondió mecanografiar el citado documento. Error que no puede desvirtuar por si sólo el hecho que en horas de la mañana del martes 12 de noviembre de 1996 se llevó a cabo un robo a mano armada donde fueron víctimas los señores de nacionalidad ecuatoriana Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñoz.

Por otro lado, existen otras pruebas de la ocurrencia del delito de robo a mano armada, como el Informe de Comisión (fs. 12-13) donde los detectives de la Policía Técnica Judicial que realizaron las primeras investigaciones llegaron al lugar de los hechos, incluso cerca del área encontraron abandonados los vehículos, que tanto los afectados como las personas entrevistadas describieron como los vehículos utilizados por los asaltantes.

En cuanto al segundo motivo sostiene la casacionista que se le atribuye excesivo valor probatorio a las declaraciones de Rubén Antonio Moore (fs. 202-203) y Graciela Maricela Gordon Williams (fs. 204-205).

El Tribunal Superior indicó que los citados testigos afirmaron "que César Carrasco Maldonado a eso de las 11:30 de la mañana del 12 de noviembre de 1996, se encontraba en su vivienda con una bulla de un componente, por lo que tuvo que intervenir el seguridad del edificio señor MOORE RUDAS, además indican que desconocen si CARRASCO tiene algún apodo" (fs. 577-578).

Se advierte que lo consignado por el Tribunal de Segunda Instancia fue lo afirmado por el señor Moore Rudas y la señora Morgán Williams, no obstante, el robo a mano armada de que fueron víctimas los señores Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñoz aconteció entre las diez y veinticinco a diez y media de la mañana. Por lo que al momento en que fue visto el señor Carrasco Maldonado en su casa había transcurrido una hora.

Ante lo señalado concluimos que se advierte error por parte del Tribunal Ad-Quem al momento de valorar los medios probatorios.

Corresponde examinar las disposiciones legales que estima infringidas la casacionista.

Primeramente indica como infringido el artículo 770 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión. Esta norma adjetiva obliga al juzgador a apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica.

Ciertamente que si el Tribunal Ad-Quem hubiese valorado las diligencias de reconocimientos positivos en los libros de Filiación practicados por los señores Barreiro y Vargas Muñiz, apreciándolas de manera conjunta con todo el resto del caudal probatorio allegado al proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica, no hubiese tenido dudas en cuanto a la culpabilidad del procesado en hecho ilícito investigado.

También afirma infringido el artículo 2144 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión , que dispone que el testimonio debe apreciarse según las reglas de la sana critica de conformidad con el Libro Segundo del Código Judicial.

Nuevamente se refiere la casacionista a las declaraciones de Rubén Antonio Moore (fs. 202-203) y Graciela Maricela Gordon William (fs. 204-205) indicando que no prueban dónde estaba el procesado a la hora de la comisión del ilícito sino que fue visto aproximadamente entre las 11:20 y 11:30 de la mañana.

Como se dijo al examinar los motivos, el Tribunal de Segunda Instancia no observó que el procesado fue visto en su casa ubicada en Monte Oscuro, corregimiento de Pueblo Nuevo, una hora después de haberse cometido el robo a mano armada ocurrido por el área del Puente Don Bosco en Chilibre.

Es importante indicar que si bien el Tribunal Ad-Quem cometió error al apreciar las pruebas indicadas por la casacionista, tal error por si solo, no

incidió de manera determinante en la parte dispositiva del fallo, tal como se señala en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, como elemento esencial para que pueda considerarse configurada la causal y proceder a casar la sentencia.

Nuestro código de procedimiento penal establece como requisito indispensable para que tenga lugar la causal que se aduce, y con ello se proceda a casar la sentencia impugnada mediante este recurso especial, que el error haya incidido de manera directa y determinante en lo dispositivo de la sentencia, implicando la infracción de la ley sustancial de tal suerte que de no haberse producido dicho error, otro habría sido el fallo.

Es decir, para el caso que nos ocupa, el error en que incurrió el Segundo tribunal Superior de Justicia al apreciar las declaraciones de los señores Rubén Antonio Moore (fs. 202-203) y Graciela Gordón William (fs. 204-205), no tiene la virtualidad de probar la existencia de la causal invocada por la casacionista, toda vez que tales declaraciones por sí solas no incidieron en forma determinante en el fallo recurrido.

En consecuencia, la Sala considera que el artículo 186 del Código Penal no ha sido infringido en el concepto de violación directa por omisión como señala la recurrente, por cuanto que no quedó plenamente configurada y probada la causal invocada por lo cual se hace necesario examinar la segunda casual aducida en el presente recurso extraordinario de casación.

SEGUNDA CAUSAL: "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley sustancial Penal" (artículo 2434 numeral 1 del Código Judicial).

En el primer motivo afirma la casacionista que la sentencia no valoró la Diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44 y 45-49) realizada en la residencia del procesado Carrasco Maldonado. Igualmente en el segundo motivo consigna que tampoco se valoró la declaración del señor Ricardo Chavarría quien presenció los hechos (fs. 30-31).

En efecto, en el apartado de "Fundamentos Legales", el Tribunal de Segunda Instancia no mencionó los medios probatorios aludidos por la casacionista, los cuales tienen existencia material dentro del expediente.

En autos consta que el 18 de noviembre de 1996 a las 11:45 de la mañana se realizó Diligencia de Registro y Allanamiento al apartamento A-6 del edificio Korina ubicado en el sector de Monte Oscuro, corregimiento de Pueblo Nuevo, propiedad del señor Cesar Augusto Carrasco Maldonado (fs. 38-44 y 45-49).

Y tal como lo señala la casacionista, en la mencionada diligencia se incautó, entre otras cosas, una Mini Usi (Minimax) calibre 380, marca Maneta; una pistola calibre 9 mm, marca Jericho 941 FS, con su respectivo cargador con cinco municiones vivas; un cargador para una Minimax con veintiún municiones vivas; una radio de comunicaciones y cargador marca Motorola; una pistola calibre 380, marca Davis con su respectivo cargador con cinco municiones vivas; una hoja a rayas, la cual tiene manuscrito claves de la Policía Técnica Judicial y Policía Nacional; un chaleco anti-bala, marca Parner.

El 14 de noviembre de 1996 rinde declaración jurada Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31 vt), de 21 años de edad, quien afirma que se encontraba manejando su bicicleta por la vía transistmica frente al Pedernal cuando fue testigo del hecho ilícito investigado. Textualmente expresa lo siguiente:

> "alcance a ver un carro color blanco y otro de color gris, del carro blanco se bajo un sujeto de tez morena, estatura alta, contextura gruesa fornido, cabello duro chocolatoso éste portaba en la mano derecha un arma grande parecía un Aka 47, este mismo sujeto saco a dos señores que estaban dentro del carro gris, luego salió un sujeto

> del carro blanco era de tez negra, estatura 170 mts, delgado, cabello duro bajito, portaba una Mini Usi, éste comenzó a registrar y golpear a los sujetos que habían salido del carro gris, a esto vi que era un robo, me regrese hasta la loma del Pedernal, pero antes le dije al Pastor de una iglesia que venía detrás de mi que era un robo que no se acercara, luego vimos pasar al carro blanco y atrás un carro de color gris que iba golpeado en un costado, luego fuimos hasta donde quedaron los sujetos que le habían robado y fue ahí que un sujeto de un Pick Up, nos dijo que si le robaron también y que él venía de San Vicente forcejando con el carro gris o plateado pero como estos le soltaron dos disparos que pegaron en los vidrios perdió el control ahí fue que caí en cuenta que este carro gris había sido golpeado por el Pick Up, luego llegó la policía y comenzaron a hacerle preguntas".

Agrega que los del carro gris le robaron a los del Pick Up y los sujetos del carro blanco a los del carro gris.

Es importante destacar que la causal de error de hecho en la existencia de la prueba surge "cuando el Tribunal de Segunda Instancia desconoce o no le asigna valor a pruebas incorporadas en el proceso que constituyen sin lugar a dudas piezas de convicción" (Sala Penal 10 de diciembre de 1999).

Ahora bien, "evidentemente que un error de este tipo, cuando es trascendental, conduce a que el juzgador falle equivocadamente una causa, toda vez que es muy probable que, al aplicar una norma a unos hechos que han sido distorsionados, se viole la norma de derecho sustantivo" (Sala Penal. Agosto 5 de 1993).

Ciertamente que en el caso bajo examen, el Tribunal de Segunda Instancia desconoció y por tanto no le asignó valor alguno a la diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44 y 45-49) y a la declaración de Ricardo Alberto Chavarría (fs. 30-31).

Luego de examinar el contenido de estos medios probatorios, nos percatamos que en conjunto con las otras pruebas allegadas al proceso se desvirtúa el fallo absolutorio emitido a favor del señor César Carrasco Maldonado. Veamos.

Primeramente el 12 de noviembre de 1996, al presentar denuncia referente al robo a mano armada de que fue víctima, el señor Juan Andrés Barreiro afirmó que los asaltantes portaban armas de fuego, incluso una Ak-47 (fs. 1-3). Situación que también fue corroborada por el señor Felipe Vargas Muñoz, quien junto con el denunciante fueron victimas de ese ilícito (8-9).

Ese mismo día, el procesado César Augusto Carrasco Maldonado, fue identificado en Diligencias de Reconocimientos en los libros de Filiación de la Policía Técnica Judicial, por los afectados con el robo a mano armada, señores Barreiro y Vargas Muñoz (fs. 5 y 11).

Según consta en el Informe de Comisión (fs. 12-13) en horas de la tarde de ese mismo día, se inició la investigación en el lugar de los hechos, y se entrevistó al joven Ricardo Chavarría quien afirma que vio a dos de los sujetos asaltantes y uno tenía un arma AK-47 y otro una Mini Usi.

Dos días después, el 14 de noviembre, Ricardo Alberto Chavarría, bajo juramento narra lo que observó e indica que los sujetos portaban una AK-47 y una Mini Usi (fs. 30-31).

El 18 de noviembre siguiente, se realiza la Diligencia de Registro y Allanamiento (fs. 38-44 y 45-49), donde se encontraron dos armas de fuego entre esas una Mini Usi calibre 380, estilo militar, marca Maneta y una pistola calibre 9 mm, marca Jericho 941FS.

Al rendir declaración indagatoria, el procesado justificó la posesión de las armas afirmando que se las quitó a unos menores de edad por calle quince Río Abajo, con el objeto de cambiarlas por comida, según el programa de la alcaldía (f. 79).

Aunado a lo expuesto, existen indicios recíprocamente corroborantes como por ejemplo: los pasaportes tanto de nacionales como extranjeros encontrados en la residencia del procesado, que éste afirma los encontró dentro de un cartucho negro por un camino; también fueron encontrados un chaleco anti-bala, manuscritos con clave de la Policía Técnica Judicial y un radio de comunicaciones.

Este Tribunal de Casación considera, luego de examinar las pruebas ignoradas por el Tribunal de Segunda Instancia y evaluadas en su conjunto con el resto del material probatorio, que las mismas integran un cuadro unitario y coherente que demuestra la culpabilidad del señor Carrasco Maldonado.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, se señal el artículo 769 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, el cual se refiere a los elementos probatorios aceptados en nuestra legislación procesal.

En ese sentido debemos indicar que tanto la diligencia de Registro y Allanamiento como la declaración de Ricardo Alberto Chavarría, son medios de pruebas allegados al proceso, que de haberse considerado en conjunto con las otras pruebas, hubiesen llevado al Tribunal de Segunda Instancia a emitir un fallo condenatorio, por lo que la Sala estima que el artículo 769 del Código Judicial ciertamente ha sido violado en concepto de violación directa por omisión.

Por otra parte, el artículo 2185 del Código Judicial que se cita infringido en concepto de violación directa por omisión, trata sobre las circunstancias en que se debe realizar la diligencia de allanamiento, quien debe realizarlo y el horario en que debe practicarse.

Cabe indicar, tal como lo señala el señor Procurador, que la norma en comento no contiene parámetros de valoración por tanto no es susceptible de ser invocada como infringida en las causales probatorias.

El artículo 770 del Código Judicial que igualmente se señala violado en forma directa por omisión, se refiere a que el juzgador debe apreciar las pruebas según las reglas de la sana crítica.

Como lo hemos señalado al examinar los dos motivos que sustentan esta causal, al no valorarse la Diligencia de Registro y Allanamiento y la declaración de Ricardo Alberto Chavarría, el Tribunal de Segunda Instancia cometió un error que lo llevó a emitir un fallo absolutorio, toda vez que el contenido de tales pruebas de haber sido valoradas de acuerdo a los parámetros de la citada norma, conjuntamente con el resto del caudal probatorio, habría servido para determinar la culpabilidad del señor Carrasco Maldonado.

Finalmente, la Sala estima que se configura la violación del artículo 186 del código Penal en concepto de violación directa por omisión, porque de haberse valorado las pruebas aludidas por la casacionista, se hubiese declarado culpable al señor Carrasco Maldonado del delito de robo en su modalidad agravada por lo que esta disposición habría sido aplicada.

Por tanto, al demostrarse que la resolución impugnada ha incurrido en error de hecho en la existencia de la prueba lo cual influyó de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, se procede a resolver el recurso, de conformidad con las aspiraciones de la casacionista.

Es así, que este Tribunal de casación condena al señor Carrasco Maldonado como autor del delito de robo a mano armada contemplado en el artículo 186 del Código Penal, cuya sanción oscila entre 5 a 7 años de prisión. Y de conformidad

con los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal, se le aplica la pena base de seis (6) años de prisión. Al no observar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, aquella es la pena a imponer, con igual período de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez haya cumplido la pena de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 13 de octubre de 1998 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y en su defecto, CONDENA al señor CÉSAR AUGUSTO CARRASCO MALDONADO a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS POR IGUAL TÉRMINO una vez haya cumplido la pena de prisión, como autor del delito de robo a mano armada, en perjuicio de Juan Andrés Barreiro y Felipe Vargas Muñoz.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION PRESENTADO A FAVOR DE TERESIN CABALLERO VILLARREAL SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 28 de abril de 1999, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, que condena a TERESIN CABALLERO VILLARREAL a la pena de 3 años de prisión como autor del delito de violación carnal en perjuicio de Kidia Edith Rivera Barría.

Contra esta decisión, la firma forense Murgas y Murgas, en su condición de apoderada judicial del sentenciado, interpuso recurso de casación penal en el fondo, el cual fue formalizado dentro del término legal establecido para esa finalidad.

Corresponde ahora a la Sala el examen del libelo, a efectos de decidir sobre su admisibilidad.

En este sentido, se observa que el escrito mediante el cual se sustenta el recurso de casación, ha sido dirigido a los Honorables Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, situación que contraviene lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial.

Con relación a la historia concisa del caso, se advierte que si bien en principio el recurrente hace un relato sucinto de los hechos juzgados, a partir del último inciso de la fojas 212 del expediente, presenta una serie de argumentaciones subjetivas, dirigidas a cuestionar la valoración probatoria de la causa registrada tanto en primera como en segunda instancia, todo lo cual es ajeno al carácter de síntesis objetiva de los hechos que se exige a propósito de este apartado del recurso.

La primera causal invocada es la de infracción de la ley sustancial, en concepto de violación directa, la cual viene apoyada en 4 motivos.

En el primer motivo, el censor señala que "... la sentencia recurrida no tomó en cuenta las pruebas testimoniales que favorecen la versión exculpatoria de nuestro defendido ..."; en el segundo motivo se aduce que "La sentencia recurrida le acreditó erróneamente fuerza de plena prueba a la declaración acusatoria de la menor Kidia Rivera ..."; en el tercer motivo se sostiene que "El Tribunal Superior erró en su fallo confirmatorio al considerar los indicios de presencia y oportunidad para establecer la responsabilidad de nuestro defendido" ...; y en el cuarto motivo se indica que "La sentencia impugnada le atribuyó erróneamente fuerza probatoria al dictamen pericial del médico forense sobre la desfloración de Kidia Rivera ...".

Como se observa, en los cuatro motivos aducidos para sustentar la causal de infracción de la ley sustancia en concepto de violación directa, el recurrente censura el aspecto probatorio de la causa, lo cual resulta absolutamente incongruente con la causal sub júdice, pues cuando esta se alega, se parte de la premisa que la valoración de la prueba se ha hecho de forma inobjetable y el cargo de injuridicidad demostrable por esta vía, guarda relación exclusivamente con la omisión de la aplicación de la norma sustantiva que reclama el caso concreto (violación directa por omisión) o bien con su aplicación incompleta (violación directa por comisión).

Siendo ello así, a juicio de la Sala, no existe concordancia entre la primera causal invocada y los motivos aducidos para fundamentarla. Asimismo cabe destacar que en el epígrafe de las disposiciones legales que se estiman infringidas, el casacionista acusa la violación de normas adjetivas, relativas a la existencia y valoración de las pruebas, que no guarda relación alguna con la causal de infracción de la ley sustancial en concepto de violación directa.

La segunda causal aducida es la Infracción de la ley sustancial penal por error de derecho en la apreciación de la pruebas. Para fundamentar esta causal, el recurrente presenta 2 motivos, respecto de los cuales se observan las siguientes deficiencias:

1. En ninguno de los dos motivos aducidos, el censor cumple con el requisito de individualizar, a través de las fojas en que aparece en el expediente, los medios de prueba que estima erróneamente valorados.

2. En el primer motivo el casacionista señala, entre otras consideraciones que "... las pruebas testimoniales que no fueron consideradas en el fallo impugnado, demeritan el mérito de tales dictámenes"; en tanto que en el segundo motivo expresa que "... las pruebas testimoniales que no fueron tomados en cuenta por el referido fallo, demeritan el señalamiento directo que le hace dicha menor como autor de su desfloración ...". Tales argumentaciones del casacionista no se relacionan con la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha sido invocada, sino con la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba que se produce entre otros supuestos, cuando el juzgador no toma en cuenta elementos probatorios que han sido válidamente incorporados al proceso.

De otro lado en el epígrafe relativo a las disposiciones legales infringidas, la Sala observa que el recurrente ha omitido citar la disposición sustantiva que, a su juicio, resulta vulnerada como consecuencia de la errónea valoración de las pruebas, lo cual es un requisito indispensable cuando se invocan causales de fondo de naturaleza probatoria. Sobre este particular, el resolución de 13 de febrero de 1997, la Corte expresó lo siguiente:

> "Se observa además, que el recurrente omite mencionar la norma sustantiva que resultó violada a causa de la violación adjetiva de la norma. El casacionista se limita a transcribir la norma adjetiva y explicar el concepto en que ha sido infringida, dejando a un lado un requisito fundamental, cual es que, cuando se trata de causal probatoria, además de la necesidad de señalar y transcribir la norma que contiene el medio probatorio que supuestamente ha sido mal valorado, resulta imprescindible que se señale y se transcriba

igualmente la norma sustantiva que ha resultado violentada y que se explique en concepto de infracción en que lo ha sido. Es decir que cuando se aducen causales probatorias, se requiere que se citen las normas adjetivas de carácter procesal como infringidas y al final debe citarse la o las normas sustantivas penales que consecuentemente resultan violadas".

Las deficiencias señaladas dejan sin sustento lógico jurídico el recurso bajo examen, razón por la que procede declarar su inadmisibilidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad d ela ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA FIRMA FORENSE VILLALAZ Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, LA CUAL CONFIRMA LA PENA IMPUESTA A HORTENCIO GALLARDO RÍOS POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Hortencio Gallardo Ríos ha formalizado recurso de casación en el fondo contra sentencia dictada el 30 de agosto de 1999 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, la cual, previa reforma, impone al sumariado Gallardo la pena principal de 5 años y 4 meses de prisión por la comisión del delito que prevé el párrafo primero del artículo 255 del Código penal, es decir, por tráfico internacional de drogas.

Vencido el término de lista, corresponde decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario, a lo que se pasa.

La recurrente invoca dos causales de casación en el fondo. Se trata de los supuestos en que la sentencia atacada incurre en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable, y el caso en que la sanción impuesta no corresponda a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal del imputado, causales que consagran, respectivamente, los numerales 3 y 12 del artículo 2434 del Código Judicial.

Al confrontar el libelo con los requisitos de forma exigidos por el artículo 2443 del Código Judicial, se comprueba que la resolución impugnada es de aquellas contra las cuales cabe el recurso propuesto, el cual ha sido interpuesto oportunamente y que en él se expone en forma adecuada la historia concisa del caso. Igualmente se precisan las causales invocadas, que los motivos que las sustentan han sido debidamente enumerados y especificados, así como que las disposiciones legales que se aducen infringidas han sido transcritas y están acompañadas del correspondiente concepto de la infracción.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto en esta causa y DISPONE correrlo en

traslado al Procurador General de la Nación, por el término de cinco días.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
Magistrado Sustanciador
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A EUSEBIO EDILBERTO GARCIA NAVARRO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites de admisión, sustanciación y celebración de la audiencia, procede este tribunal a decidir el mérito legal del recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el defensor oficioso del procesado EUSEBIO EDILBERTO GARCIA NAVARRO, licenciado GUILLERMO RIOS VALDÉS, en contra de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El señor GARCIA NAVARRO fue sentenciado por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá sesenta (60) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por haber sido encontrado culpable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor LUIS ALBERTO HERRERA JAEN.

La sentencia impugnada confirma la condena de GARCIA NAVARRO.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El día viernes 7 de noviembre de 1997, a las 9.00 p. m. el señor LUIS ALBERTO HERRERA JAEN fue objeto de un robo a mano armada por parte de dos sujetos, mientras se encontraba en la calle San Roque, Alcalde Díaz, señalando a EUSEBIO EDILBERTO GARCIA NAVARRO, como uno de sus agresores.

Al rendir sus descargos el procesado manifestó que era inocente de los cargos formulados en su contra y expresó que para la fecha y hora en que se cometió el ilícito se encontraba trabajando para la compañía embotelladora Coca Cola, aseveraciones que fueron confirmadas por el empleador quien aportó la tarjeta de asistencia y certificación que acredita que, para la hora y fecha en que se cometió el robo, GARCIA NAVARRO se encontraba laborando.

Considera el recurrente que a esas pruebas no se les otorgó el pleno valor probatorio, ya que el A-Quem, confirmó la sentencia proferida en primera instancia en la que se condenó al procesado a la penal de sesenta (60) meses de prisión como autor del delito de ROBO AGRAVADO, por lo que la sentencia presenta vicios de injuridicidad.

CAUSAL INVOCADA

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado" (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS

El casacionista sustenta la causal de fondo invocada en un sólo motivo.

Considera el recurrente que el vicio de injuridicidad radica en que, el Segundo Tribunal Superior de Justicia no le dio el valor que la ley le designa a la nota remitida por la compañía embotelladora Coca Cola, visible a foja 36 del proceso, en la cual se hace constar que el día 7 de noviembre de 1997 el procesado entró a laborar a las 3:00 p. m. y salió a las 10:30 p. m.; seguidamente certificó que laboró jornada extraordinaria de 10:30 p. m. a 5:30 a. m.

Externa el recurrente que el A-Quem al valorar la nota de marras con la tarjeta de asistencia concluyó que GARCIA NAVARRO "... tuvo un lapso de tiempo libre que no pudo supuestamente justificar, razón por la cual establece que existe el indicio de sospecha y el de mala justificación ..."; y es en este proceso de valoración en el que fundamenta el vicio de injuridicidad.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista señala como infringido el artículo 969 del Código Judicial, al igual que el artículo 186 del Código Penal.

Considera el recurrente que el artículo 969 del Código Judicial fue infringido de manera directa por omisión porque al valorar el caudal probatorio el A-Quem derivó contradicciones, que no existen en el proceso, entre la nota que certifica el horario de trabajo y la tarjeta de asistencia del procesado, remitidos por la compañía embotelladora Coca Cola.

Agrega el recurrente, que si se estudian con detenimiento los documentos remitidos por el empleador no se evidencian contradicciones, por lo que la segunda instancia no le reconoció a los referidos documentos (certificación de trabajo y tarjeta de asistencia) el valor probatorio que la ley les señala, de allí que erróneamente concluyó que EUSEBIO EDILBERTO GARCIA NAVARRO tuvo un lapso justificable para cometer el ilícito endilgado.

En lo que respecta al artículo 186 del Código Penal, el casacionista lo estima infringido en concepto de indebida aplicación.

El recurrente llega a esta conclusión porque al producirse el error de derecho en la apreciación de las pruebas por parte de la segunda instancia no se demostró que GARCIA NAVARRO robó al ofendido LUIS ALBERTO HERRERA JAÉN.

OPINIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R., al proferir su opinión es del criterio, que el casacionista demostró la causal alegada, de allí que la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia debe ser casada.

Se avoca a esta conclusión luego de examinar el recurso y señalar, entre otros elementos, que la nota remitida por la Coca Cola es clara y precisa al certificar, que para la hora y fecha en que se cometió el ilícito GARCIA NAVARRO se encontraba laborando.

Agrega el Señor Procurador que el señalamiento que le hace el ofendido al procesado no es suficiente para declarar la responsabilidad penal de éste, ya que un testigo no puede formar por sí solo plena prueba.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas expresa el Ministerio Público, que el casacionista no explicó "... cuál es el indicio que existe acreditado en el expediente y que el juzgador al valorarlo le desconoció su mérito legal", por lo que a su criterio el censor no explicó la infracción del artículo 969 del Código Judicial.

Con respecto al artículo 186 del Código Penal, considera el licenciado SOSSA RODRIGUEZ que fue infringido en concepto de indebida aplicación porque en el expediente se acreditó que GARCIA NAVARRO se encontraba en lugar distinto el

día y hora en que se cometió el robo, por lo que procede casar la sentencia de 18 de diciembre de 1998.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE CASACION

Corresponde a este tribunal de casación examinar los motivos que sustentan la causal, así como el contenido lógico jurídico que comprueben la infracción de la ley para determinar la existencia o no de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado.

Al respecto debemos señalar, que el único motivo esbozado por el casacionista para fundamentar el cargo de injuridicidad radica en que la sentencia impugnada no le otorgó el valor que la ley le designa a los documentos visibles a fojas 36 y 37 del proceso, en las que el empleador (compañia embotelladora Coca Cola) aporta los documentos que acreditan que GARCIA NAVARRO se encontraba laborado para la fecha y hora en que se cometió el ilícito.

En base a lo anterior la Sala observa que la sentencia impugnada visible a fojas 157-161, no se adentró en el análisis de los documentos remitidos por la compañía embotelladora Coca Cola.

Al examinar la sentencia emitida por el Segundo tribunal Superior de Justicia, observa la Sala que se formula exactamente e tres líneas lo que se considera como "Hechos Probados" señalando, que como quiera "... que la descripción de los hechos contemplados en el fallo de instancia, corresponde al desarrollo de los actos que motivaron el origen y desarrollo de este proceso, por tanto, no es necesario repetirlos."

Luego en cuanto a los "Fundamentos Jurídicos", respecto a la vinculación del procesado con el delito de robo calificado el A-Quem consideró que quedó debidamente acreditado con la denuncia suscrita por Luis Alberto Herrera jaén (fs. 1-3) y sus respectivas ampliaciones, en las cuales se le hace señalamientos directos al prenombrado EUSEBIO GARCIA.

Indicó además que otro indicio grave en contra del procesado lo es el hecho que fue reconocido plenamente por el señor herrera Jaén y por la hermana de éste, señora Yanis Herrera de Jaén.

Se advierte sin embargo que la sentencia no menciona siquiera lo manifestado por el procesado en su declaración indagatoria, siendo éste el acto de defensa más importante que tiene toda persona imputada de haber cometido un delito.

Así como tampoco se hace alusión a las pruebas que presentó el imputado. Siendo que precisamente sobre este aspecto el apelante centró su disconformidad (fs. 143-145), y limitándose el Tribunal A-Quem a decir que en el fallo condenatorio de primera instancia "se hace una correcta evaluación probatoria y aplicación de las normas procesales como sustantivas."

Lo anterior constituye una violación del procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico en lo que concierne a la evaluación que la instancia de apelación debe realizar de la sentencia emitida en primera instancia (art. 2428 del Código Judicial).

En este sentido, resulta pertinente recordar al Segundo Tribunal Superior de Justicia que en cuanto a los "Hechos Probados" en una Sentencia de Segunda Instancia su contenido debe corresponder al relato de "Hechos Probados" de la sentencia de primera instancia, por lo que corresponde realizar una adecuada descripción de tales hechos, así como formular las precisiones que hubiera que hacer respecto a otros elementos de hechos que hayan quedado probados, como parte esencial de la estimación del recurso.

En cuanto a los "Fundamentos Legales", los mismos deben centrarse en el

análisis de las alegaciones procesales y la valoración probatoria, entre otros aspectos importantes como: el hecho punible (delito, grado de ejecución), el grado de intervención del imputado (autoría-participación) y las causas o circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, entre otras. ("Principio del Debido Proceso". Módulo Instruccional en el Área Procesal Penal. Proyecto Regional de Capacitación Judicial Continuada, pág. 141)

Con relación al único motivo que sustenta la causal, el tribunal observa que se aparta por completo de la causal que pretende sustentar, ya que el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo, debe recaer sobre pruebas que fueron consideradas o valoradas por el juzgador de segunda instancia. Sin embargo, siendo que la sentencia que se revisa mediante este recurso extraordinario de casación, ni siquiera evalúo las notas remitidas por la compañía embotelladora Coca Cola, la argumentación presentada por el recurrente resulta absolutamente incongruente.

Dado el contenido de la sentencia emitida por el A-Quem, como se ha dicho, la prueba consiste en la tarjeta de asistencia y certificación que acredita que, para la hora y fecha en que se cometió el robo, GARCIA NAVARRO se encontraba laborando, ni siquiera fue objeto de valoración en ésta instancia; por lo que el casacionista debió aducir el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo.

Con relación a las disposiciones legales que se estiman infringidas el recurrente señala el artículo 969 del Código Judicial, no obstante incurre nuevamente en el desacierto de sustentar el concepto de la infracción en el hecho de que las pruebas no fueron valoradas por el A-Quem, afirmaciones que corresponden a otra causal de naturaleza probatoria y no a la aducida.

Respecto al artículo 186 del Código Penal nos remitimos al criterio jurisprudencial que determina que, en los recursos de casación sustentados en causales de naturaleza probatoria, la violación de la norma sustantiva penal sólo se produce cuando ha tenido lugar la violación de la norma adjetiva, por lo que si ello no ha sido así, no se configura la causal contenida en el artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial, ya que la vulneración se produce de manera indirecta. (Corte Suprema de Justicia, fallo de 20 de febrero de 1997, Registro Judicial de Febrero de 1997, pág. 167.)

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 18 de diciembre de 1998 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A EURI MAXDIEL CEBALLOS Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO DE AUTO). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá interpuso recurso

de Casación en el Fondo contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la que se absuelve del delito de ROBO A MANO ARMADA a EURI MAXDIEL CEBALLOS.

Cabe anotar que el procesado fue condenado en primera instancia a la pena de cinco años de prisión, de la cual apeló, siendo revocado el fallo por el Ad-Quem, quien ordenó su absolución.

Esta decisión no es compartida por la representación social, ya que considera que la segunda instancia incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia e implica infracción de la ley sustancial penal.

HISTORIA CONCISA

Narra el casacionista que EURI MAXDIEL CEBALLOS fue procesado por el delito de ROBO A MANO ARMADA en perjuicio de JUAN CARLOS CORONEL, quien señaló que el día 22 de septiembre de 1997, fue abordado en Carrasquilla por dos sujetos con arma de fuego, quienes le llevaron su automóvil marca Hyundai, modelo Excel, año 1991, colo plateado.

Días después los miembros del orden público, OMAR CAMERO y VICTOR RAÚL VASQUEZ encuentran el automóvil frente a la residencia del procesado, y estaban dentro de el los señores SIXTO DE GRACIA, ROGER CUBILLA y EURI MAXDIEL CEBALLOS.

SIXTO DE GRACIA y ROGER CUBILLA, le formularon cargos a EURI MAXDIEL CEBALLOS y fueron sobreseídos provisionalmente. Ellos narraron detalladamente como se dieron los hechos.

El subteniente OMAR CAMERO y el cabo VICTOR VASQUEZ, por su parte, vincularon de manera directa al procesado; las testigos ANA MARÍA FLOREZ, ESTELA MCCARTY, MARCELA MORAN y GLADYS MORENO coincidieron con los señalamientos que DE GRACIA y CUBILLA le hicieron a CEBALLOS, no obstante, señala el casacionista, este caudal probatorio que milita contra el procesado no fue suficiente, ya que fue absuelto por la segunda instancia.

Cabe anotar que se practica diligencia de reconocimiento en rueda de presos con resultados negativos por parte del ofendido, y aunque la víctima ofreció las explicaciones de por qué del resultado, ello fue desconocido por el ad-Quem.

Por ello considera el casacionista, que la incorrecta valoración de estas pruebas originó la causal invocada en el presente recurso de casación en el Fondo.

CAUSAL INVOCADA:

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia e implica infracción de la ley sustancial" (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial).

MOTIVOS

El recurrente sustenta su recurso en cuatro motivos, los cuales señalaremos a continuación:

PRIMERO: Expresa el casacionista que el Ad-Quem otorgó mayor valor probatorio a la declaración indagatoria del procesado EURI MAXDIEL CEBALLOS (fojas 68-71), que a las declaraciones indagatorias de ROGER CUBILLA (fojas 65-67; 157-162) y SIXTO DE GRACIA (fojas 58-61 y 164-167), y por ende concluye que el procesado era un pasajero en el vehículo porque tenía en brazos a su niña de tres años de edad.

SEGUNDO: En este motivo indica el recurrente, que la segunda instancia cometió error de derecho al no ponderar en toda su extensión los testimonios de OMAR

CAMERO y VICTOR VASQUEZ, (policías)quienes señalaron que CEBALLOS, se encontraba dentro del auto robado, y al percatarse que era vigilado por ellos se introdujo a su vivienda, varió su vestuario y salió con su hija en brazos.

TERCERO: Señala el peticionario, que las declaraciones testimoniales de ANA MARÍA FLOREZ, ESTELA MCCARTY, MARCELA MORAN, GLADYS MORENO y JUAN CARLOS CORONEL no fueron valoradas en toda su extensión, ya que se le otorgó mayor estimación probatoria a la declaración indagatoria del procesado, que se opone diametralmente a lo explicado por las testigos.

CUARTO: Finalmente en su último motivo, indica el casacionista que el Ad-Quem da por sentado en su fallo, que el ofendido JUAN CARLOS CORONEL al no reconocer al procesado conlleva la no participación de este en el ilícito, cuando la víctima explicó que no lo reconoció porque la fisonomía de sus agresores había variado, refiriendose específicamente a los cortes de cabello que tenían los integrantes de la rueda de presos.

En los cuatro motivos arriba expuestos sustenta el recurrente los cargos de injuridicidad.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El fundamento legal que sustenta la causal invocada, de acuerdo al recurrente, son los artículos 904 y 2135 del Código Judicial, así como el artículo 186 del Código Penal.

Al referirse al artículo 904, del Código Judicial expresa el peticionario, que fue infringido de manera directa por omisión, ya que los testimonios de ANA MARÍA FLOREZ (fs. 140); ESTELA MCCARTY (fs 142): MARCELA MORAN (fs. 144); GLADYS ESTHER MORENO (fs. 146); SIXTO DE GRACIA (fs. 58-61- 164-167) y ROGER CUBILLA (fs.65-67 y 157-162) son coincidentes al señalar que EURI MAXDIEL CEBALLOS se presentó a la parada de buses de los Andes No. 1 conduciendo el vehículo robado y solicitando ayuda porque el carro presentaba desperfectos mecánicos.

Agrega además, que no se le otorgó el justo valor a las declaraciones de los policías VICTOR VASQUEZ y OMAR CAMERO, quienes son coincidentes al señalar que CEBALLOS era uno de los tres ocupantes del auto robado.

Con relación al artículo 2135 del Código Judicial, expresa el recurrente que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Segundo Tribunal Superior de Justicia le otorgó a la diligencia de reconocimiento en rueda de presos un valor mayor al que la ley le otorga (fs. 120); además de no valorar adecuadamente el testimonio de la víctima, quien señaló las causas por las que no pudo reconocer a sus agresores.

Y finalmente se enuncia como norma sustantiva violada, el artículo 186 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, pues de haber ponderado la segunda instancia, en toda su extensión las normas procesales señaladas en los párrafos anteriores, hubiera concluido que EURI MAXDIEL CEBALLOS fue la persona que cometió el robo del carro Hyundai Excel, propiedad de JUAN CARLOS CORONEL.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

De fojas 487-503 el Señor Procurador General de la Nación opina jurídicamente sobre este recurso y señala que la sentencia de 16 de octubre de 1998 debe ser casada.

El jefe del Ministerio Público coincide a plenitud con las apreciaciones jurídicas contenidas en las distintas secciones de este recurso de casación. Es del criterio que los cargos de injuridicidad se encuentran debidamente acreditados.

Con respecto a la diligencia de reconocimiento en rueda de presos expresa el Señor Procurador que el Segundo Tribunal Superior de justicia "... le atribuyó en exceso valor probatorio ...", aun cuando el ofendido explicó las causas por las que no reconoció a CEBALLOS.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, observa que son congruentes con los motivos expuestos en el recurso, de allí que es claro que el Ad-Quem se apartó de las reglas de la Sana Crítica al proferir su fallo absolutorio (artículo 904); con relación al artículo 2135 del Código Judicial no coincide con el casacionista, pues es del criterio que esa norma no se vulnera de manera directa por omisión porque "... se está ante una norma que a todas luces no corresponde al Tribunal Superior aplicar en dicha fase del proceso ..."

Concluye señalando, que los vicios de injuridicidad fueron cometidos por el Ad-Quem al valorar el caudal probatorio, por que de no haber actuado así hubiera confirmado la sentencia de primera instancia, por ende el fallo de 16 de octubre de 1998 debe ser casado.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACION

La causal aducida por el casacionista sólo se produce cuando se da un error determinante del tribunal de segunda instancia al valorar el medio probatorio, de tal forma que ese desacierto influya de manera directa en lo dispositivo del fallo.

En esta oportunidad el Fiscal Quinto del Circuito de Panamá, en su calidad de casacionista indica que el Segundo Tribunal Superior de Justicia valoró incorrectamente las pruebas, que de manera directa vinculan a EURI MAXDIEL CEBALLOS con el delito de ROBO A MANO ARMADA en perjuicio de JUAN CARLOS CORONEL.

Con respecto al primer motivo, la Sala observa que la inconformidad en la valoración se encuentra inmersa en los tres testimonios de los imputados, a saber: SIXTO DE GRACIA, ROBER CUBILLA y EURI MAXDIEL CEBALLOS, ya que el fallo censurado le dispensó mayor veracidad a lo que manifestó este último procesado.

Es pertinente, frente a esta aseveración verificar el pronunciamiento contenido en el fallo impugnado.

A fojas 448 indica el Segundo Tribunal Superior de Justicia que:

> "De las declaraciones indagatorias rendidas por los señores SIXTO MANUEL DE GRACIA (fs. 58 y 164) y ROGER ISAAC CUBILLA HO (fs. 65 y 157), se desprende el hecho cierto que el día 22 de septiembre de 1997, EURI MAXDIEL CEBALLOS, se encontraba en posesión del automóvil que a la postre resultó ser robado. Sobre este particular declaran las señoras Ana María Flores Sánchez (fs. 140), Estela Mc Carty Martínez (fs 142), Marcela Morán Cedeño (fs. 44) y Gladys Esther Moreno Huertas (fs 146), todas ellas coinciden en señalar que los señores DE GRACIA y CUBILLAS, se encontraban en la parada de buses ubicada frente a la (sic) Los Andes N 2, cuando un sujeto que viajaba en un auto marca Hyundai, color gris, confrontaba problemas mecánicos. Indican que este sujeto preguntó si alguien tenía conocimiento de mecánica para que lo ayudara con el auto y, fue en ese momento cuando DE GRACIA y CUBILLAS se acercaron a prestarle ayuda, luego de un momento los tres se retiraron abordo del auto."

Los señalamientos aquí contenidos se compadecen con lo manifestado en las declaraciones indagatorias de los señores DE GRACIA y CUBILLAS, por lo que la Sala no observa a prima facie la existencia de vicio de injuridicidad.

Lo cierto es, que al analizar el texto completo de la resolución impugnada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia da como un hecho cierto y probado en su fallo, que lo declarado por los testigos oculares FLORES MCCARTY, MORAN y MORENO,

así como por los otros dos imputados SIXTO DE GRACIA y ROGER CUBILLAS, que el procesado EURI MAXDIEL CEBALLOS era el conductor del vehículo robado, pero posteriormente indica que sólo tenía la calidad de pasajero (foja 449), emergiendo una notable contradicción, ya que otorga un mayor valor probatorio a la declaración de descargos del procesado, en contraposición al resto de los testimonios emitidos bajo la gravedad del juramento y en los que no se acreditó el animo de mentir o faltar a la verdad por parte de los testigos, de allí que se materializa el cargo de injuridicidad señalado por el casacionista pues el Ad-Quem valoró desacertadamente esas pruebas, incurriendo en el error de derecho al estimar el caudal probatorio que reposa en este proceso penal.

En relación al segundo motivo, el fallo censurado indica que las declaraciones del subteniente OMAR CAMERO (fs. 10 y 136) y del Cabo segundo VICTOR RAÚL VASQUEZ (fj.137) explican que al momento de ubicar el vehículo robado era ocupado por tres personas, una de ellas se bajó y se introdujo en la residencia No. 937 (de EURI MAXDIEL CEBALLOS)

Posteriormente concluye señalando el Segundo Tribunal que el procesado se encontraba dentro del vehículo en calidad de pasajero, ya que este se encontraba con su hija en brazos y el subteniente CAMERO expresó a foja 134 que "... el señor MAXDIEL se bajó con una niña aproximadamente de tres años, rápidamente del carro y se introdujo en la planta baja de dicha residencia".

Observa la Sala que esta aseveración se contradice diametralmente con lo manifestado por ese mismo ente colegiado en los primeros párrafos, cuando señala que era un hecho cierto que CEBALLOS se encontraba en posesión del vehículo robado.

En tal sentido, consideramos que la declaración indagatoria de SIXTO MANUEL DE GRACIA MENDEZ, explica la conducta de CEBALLOS. (fojas 59 y 60):

> "... cuando ibamos llegando donde él dijo que vivía se encontraba un auto con un oficial dentro y él le dijo a mi cuñado que aguantara el carro y mi cuñado le dijo que porque y él le dijo no dale recto, cuando él le dijo a mi cuñado que siguiera recto más adelante había un taller le dijo que detuviera el carro allí y espero que el acero (sic) que venía a tras (sic) donde venía el oficial pasara y él se bajó a hablar con unos de los dueños del taller se subió al carro y le dijo a mi cuñado que lo dejara en la casa de él se bajo y bajo un maletín chocolate como en especie de un folder, luego el salió con una niña y nos iba a acompañar para dejarnos en la once de octubre y en eso llegó el vehículo que anteriormente estaba allí con el oficial y otro carro de policía con varios agentes, salió corriendo se metió en la casa con la niña ..." (Lo resaltado es nuestro).

Con relación a este motivo la Sala es del criterio, que sí se configura cargo de injuridicidad, porque si bien el procesado no manejaba el vehículo en el momento de la aprehensión, era la persona que lo conducía hasta la parada de buses de Los Andes No. 1, lugar donde los señores SIXTO DE GRACIA y ROGER CUBILLA lo abordaron.

El tercer motivo, se relaciona de manera directa con el primero, ya que se alude nuevamente a todas las declaraciones testimoniales de los que se encontraban en la parada de buses de Los Andes No. 1, los cuales observaron la llegada de CEBALLOS conduciendo el carro.

Con relación a las apreciaciones vertidas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia al dar por cierto y acreditado que quien conducía el auto era el procesado, nos remitimos a las consideraciones que sobre el particular se emitieron en el primer motivo.

Finalmente con relación al cuarto motivo, que se refiere a la diligencia

de reconocimiento en rueda de presos, el fallo impugnado a foja 449 se pronuncia así:

> "Requerido el señor JUAN PABLO CORONEL, para que en diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos identificara a los sujetos que lo encañonaron y despojaron de su vehículo, según consta a fojas 120, 121 y 122 del sumario, no logró identificar a ninguno de los autores de este hecho. A juicio de la Sala, esta situación resulta determinante en la vinculación o no del justiciable, con el ilícito investigado. En autos se encuentra demostrado que EURI CEBALLOS, estaba en posesión del auto propiedad del denunciante, sin embargo, surge la disyuntiva que la única persona que puede identificarlo como el autor o uno de los partícipes del robo no logra hacerlo a pesar que en su denuncia afirma poder reconocerlos, incluso, por fotografías. (fs.3)." (El resaltado es nuestro)

Esta diligencia se realizó un mes después del robo a mano armada, si bien es cierto el ofendido manifestó poder reconocer a sus victimarios, no obstante, habiéndose efectuado un mes después de la ocurrencia del hecho, la víctima manifestó que el físico del agresor había variado en lo que respecta al cabello, de allí que no pudo reconocer a EURI MAXDIEL CEBALLOS.

No obstante, la Sala discrepa del criterio contenido en la transcripción ut supra, porque nuestro ordenamiento jurídico no señala que ante resultados negativos en esa prueba, desaparecen los cargos que puedan existir contra el procesado.

En esta oportunidad el reconocimiento arrojó resultados negativos pero debieron haber sido valoradas en su conjunto el resto de las pruebas, entre ellas los testimonios de las señoras ANA MARÍA FLOREZ, ESTELA MC CARTY, MARCELA MORAN, GLADYS MORENO; de los miembros de la Policía Nacional OMAR CAMERO y VICTOR VASQUEZ; así como las ratificaciones de cargos que contra CEBALLOS hicieron los procesados SIXTO DE GRACIA y ROGER CUBILLA.

El caudal probatorio debe valorarse en conjunto, el juzgador debe examinar los testimonios, los peritajes, las pruebas documentales, los indicios, etc. y si del conjunto de estas estimaciones emerge la desvinculación del procesado o se acentúan las dudas de la autoría del ilícito, debe vertirse el pronunciamiento que en derecho corresponde.

En este orden de ideas de acuerdo a la doctrina:

> "Se debe analizar la prueba en conjunto, esto es, la valoración de cada medio en función de todos los otros medios. Comparar las testificaciones con los documentos, los documentos con los resultados de las inspecciones judiciales y relacionar estos a su vez con los dictámenes de los peritos, etc., a fin de comprobar si el conjunto forma un todo unitario y coherente" (CABRERA ACOSTA, Benigno, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 6ta. Edición).

En consecuencia, la diligencia de reconocimiento en rueda de presos practicada por el ofendido JUAN CARLOS CORONEL, cuyos resultados fueron negativos, debió valorarse de manera conjunta con el resto de los medios probatorios para obtener una apreciación unitaria y coherente del caudal probatorio.

En cuanto las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, el casacionista señala los artículo 904 y 2035 del Código Judicial, así como el 186 del Código Penal.

El artículo 904 establece que "El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza

de las declaraciones".

La Sana Crítica es el sistema de valoración que rige en la República de Panamá, impone al juzgador el deber de apreciar el caudal probatorio en conjunto como consecuencia del principio de la unidad de la prueba, para ello el juzgador debe manifestar y explicar razonadamente el valor otorgado a cada prueba, en consecuencia debe señalar la estimación que le concede a cada prueba, lo que permite determinar si ha incurrido en una errada valoración del caudal probatorio que influyó en la parte resolutiva del fallo (razón de ser de este recurso).

Expresado lo anterior la Sala observa que el artículo 904 ha sido infringido de manera directa por omisión, tal como lo señala el casacionista porque el proceso contiene las declaraciones de los testigos ANA MARÍA FLOREZ (foja 141), ESTELA MCCARTY (foja 143), MARCELA MORAN (foja 144) y GLADYS MORENO (foja 146); quienes por percepción propia observaron al procesado conduciendo el vehículo robado en la parada de buses la mañana del 22 de septiembre de 1997.

Por su parte, los procesados ROGER CUBILLA (foja 66 y 163) y SIXTO DE GRACIA (foja 59 y 168)ratificaron bajo la gravedad del juramento los cargos formulados a EURI MAXDIEL CEBALLOS y coincidieron con las testigos que el procesado se presentó a la parada de buses de Los Andes No. 1 conduciendo el vehículo robado, el cual presentaba desperfectos mecánicos, buscando el auxilio de un idóneo en esta materia.

Por otro lado existen las declaraciones de los miembros del orden público OMAR CAMERO (10-11 y 134-136) y VICTOR RAÚL VÁSQUEZ (fojas 137-138) quienes señalan las actuaciones desplegadas por CEBALLOS antes de ser detenido, tales como el hecho de introducirse a su vivienda una vez se percató de la presencia policial, el esconder un arma de fuego en su vivienda, el cambiarse de ropa y negarse a salir pese al requerimiento de la autoridad.

Tras la consideración de las citadas pruebas, éste tribunal de Casación estima que el Ad-Quem le otorgó mayor valor probatorio a la declaración indagatoria del procesado, al hecho de tener a su hija en brazos instantes antes de ser detenido y al resultado negativo del reconocimiento en rueda de presos, para concluir que el procesado no es responsable del delito de robo a mano armada.

Se ha acreditado en el proceso, como bien lo manifestó el Ad-Quem en su sentencia, que EURI MAXDIEL CEBALLOS conducía el auto robado, por lo que el fallo recurrido debe ser casado, dada la gravedad de los indicios que contra él emergen.

Con relación a la alegada violación del artículo 2135 del Código judicial, la Sala estima que dicha norma no fue infringida de manera directa por omisión porque ese artículo señala la forma en que debe realizarse la diligencia de reconocimiento en rueda de presos y no contiene pautas de valoración, por lo que no se configura el concepto de la infracción porque lo que se cuestiona es el valor otorgado a la diligencia, no la forma en que ésta se realizó.

En sentencia de 14/7/98,(Registro Judicial de Julio de 1998), la Sala estimó con relación al artículo 2135 del Código Judicial que:

> "En cuanto a la alegada infracción del artículo 2135 del Código Judicial, no parece lógico que se argumente que la resolución impugnada omitió la aplicación de esta disposición legal, puesto que el recurso de casación en el fondo tiene el propósito fundamental de atacar los errores in judicando en los que incurre el juzgador de segunda instancia al proferir su decisión. Este precepto, que versa sobre las diligencias de reconocimiento en rueda de detenidos, de modo alguno pudo haber sido conculcado por el tribunal de segunda instancia."

Finalmente consideramos que la vulneración de la norma adjetiva (artículo 904 del Código Judicial) en las causales de carácter probatoria conlleva la transgresión de la norma sustantiva que regula el delito de ROBO A MANO ARMADA, es decir, se materializó la violación del artículo 186 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, porque el Ad-Quem al proferir su fallo inobservó un precepto cuya aplicación reclama de manera evidente el caso concreto, por lo que procede casar la sentencia.

Es así que se condena a EURI MAXDIEL CEBALLOS como autor del delito de ROBO A MANO ARMADA contemplado en el artículo 186 del Código Penal cuya sanción oscila entre 5 a 7 años de prisión, de allí que conforme a los parámetros establecidos en el artículo 56 del referido código, se le aplica la pena base de cinco (5) años de prisión, y al no observar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, aquella es la pena a imponer, con igual período de inhabilitación para el ejercicios de funciones públicas.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la LEY CASA la sentencia de 16 de octubre de 1998 y en su defecto CONDENA al señor EURI MAXDIEL CEBALLOS a la pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISION E INHABILITACION POR IGUAL PERIODO PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS, como responsable del delito de ROBO A MANO ARMADA.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A OMAR ROBLEDO MOYA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado HECTOR EMILIO RODRIGUEZ, actuando en nombre y representación de JOSÉ MANUEL SUAREZ, ha promovido recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 21 de noviembre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en la que se sanciona a su representado a la pena de cuatro años de prisión como autor del delito de posesión agravada de drogas.

Cabe anotar que la sentencia impugnada modifica la proferida por el juzgador de primera instancia, en la que se condenó a JOSÉ MANUEL SUAREZ, a la pena de dos años y seis meses de prisión, luego de aplicarle las atenuantes de ley.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas realizó diligencia de allanamiento el pasado 7 de agosto de 1996 en el edificio Calimari, calle F, apartamento 13, El Cangrejo, propiedad de JOSÉ MANUEL SUAREZ encontrándosele 99 paquetes contentivos de Cocaína (108,335 gramos).

Al rendir su declaración indagatoria el día 7 de agosto de 1996 JOSÉ MANUEL SUAREZ le formuló cargos a CARLOS CERA y señaló desconocer el contenido de los paquetes que se guardaban en su domicilio.

Posteriormente el 30 de octubre de 1996, al ampliar su indagatoria narró los hechos y aceptó su participación en los mismos, explicando detalladamente lo sucedido, expresando que tenía conocimiento guardaba droga en su domicilio.

El A-Quo al proferir la sentencia, lo sancionó a seis años de prisión, pero le rebajó 1/6 parte por la aceptación de los hechos en la indagatoria y 1/3 por acogerse al proceso abreviado, quedando la pena líquida en dos años seis meses de prisión.

Al revisar la decisión el Ad-Quem le eliminó la rebaja de 1/6 parte, ya que es del criterio, que cuando confesó ya el delito se encontraba clarificado, por lo que la sentencia le fue modificada a cuatro años de prisión.

CAUSAL INVOCADA

"Cuando se cometa error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal". (Artículo 2434, numeral 8 del Código Judicial).

MOTIVOS

El casacionista señala un sólo motivo para sustentar el cargo de injuridicidad a la sentencia impugnada.

Manifiesta el recurrente que el Ad-Quem cometió un yerro jurídico al eliminarle a su representado la rebaja de la pena reconocida en la primera instancia. La segunda instancia consideró que la confesión de JOSÉ MANUEL SUAREZ en su ampliación de indagatoria (folios 542-549) no constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.

Expresa el peticionario que la Ad-Quem cometió un error de derecho al calificar los hechos "... que si son constitutivos de atenuante de responsabilidad criminal, por su similitud con la confesión oportuna y espontánea, conforme lo reconoce la ley."

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Manifiesta el casacionista que las disposiciones legales infringidas son los artículo 66, numeral 8 y 69 del Código Penal.

Con relación al artículo 66, numeral 8 del Código Penal fue vulnerado de manera directa por omisión porque el fallo recurrido expresa que la aceptación de cargos efectuada por SUÁREZ, no amerita la aplicación de las atenuantes contenidas en los artículos penales arriba señalados.

Finalmente, con respecto al artículo 69 del Código Penal expresa el casacionista que fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión, ya que la segunda instancia no le aplicó a su representado la disminución de la pena correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 66, numeral 8 del referido Código.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

En su escrito visible a fojas 789-797 del proceso, el Procurador General de la Nación, licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA recomienda que la sentencia de 21 de agosto de 1998 no sea casada, considera que las circunstancias modificativas de responsabilidad penal contenidas en el artículo 66 se reconocen conforme a la discrecionalidad del juzgador "por lo que no es susceptible tal cuestionamiento debatirlo vía casación, ... "

Con relación al único motivo sustentado por el casacionista, el Señor Procurador expresa, que es escueto y no explica la causa que origina la similitud de los hechos con la atenuante de confesión espontánea y oportuna, ya que la sola

tenencia de la droga es suficiente para establecer la autoría del ilícito en condiciones de flagrancia, por lo que el cargo de injuridicidad no prospera.

Con respecto a las disposiciones legales infringidas y al concepto en que lo han sido, (artículo 66, numeral 8 y 69 del Código Penal) expresa el licenciado SOSSA RODRIGUEZ, que contienen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y por tanto se encuentran dentro del ámbito de discrecionalidad del juzgador, de allí que no es susceptible de impugnar por esta vía.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACION

Antes de esbozar nuestros fundamentos, es necesario aclarar que la sentencia impugnada es la proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, de fecha 21 de agosto de 1998 y no la de 25 de noviembre de 1998, como registra el casacionista en su libelo a fojas 760 del expediente.

Esta Corporación de Justicia ha señalado que la causal invocada, "error de derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal", sobreviene cuando la sentencia impugnada niega o ignora las consideraciones que modifican la responsabilidad que establece la ley sustancial al momento de dosificar la pena a imponer al procesado.

En esta oportunidad el casacionista sustenta el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia en un único motivo.

Considera que el juzgador cometió un yerro jurídico al observar que la aceptación de cargos en la indagatoria y en el acto de audiencia no constituyen circunstancias atenuantes por asimilarlos a la confesión espontánea y oportuna.

Sobre el particular es pertinente remitirnos al fallo impugnado, el cual reposa a folios 732-742 del proceso.

En el folio 736 el Segundo Tribunal Superior de Justicia indica lo siguiente:

> "... El señor Fiscal apelante, refuta que al señor JOSÉ MANUEL SUAREZ se le redujo una sexta de la pena al reconocerle la confesión como atenuante genérica, cuando fue sorprendido en flagrancia, ante ello esta corporación considera que le asiste razón al señor Fiscal, porque la sustancia ilícita en la cantidad de 180.335 gramos de cocaína, fue incautada por la información recibida el 7 de agosto de 1996, aproximadamente a las diez de la mañana (10.00 a.m.), indicando que en el edificio Calimari, situado en Calle F del Cangrejo, se había estacionado un vehículo Four Runner, color verde oscuro, con matrícula No. 0672247, del cual bajaron cuatro individuos, abrieron la puerta trasera, sacaron varias bolsas grandes pesadas que introdujeron al apartamento No.13. Con el propósito de buscar la verdad se practica diligencia de Allanamiento al apartamento aludido y completamente desprevenido, la autoridad descubre en la sala de esa habitación los 99 paquetes contentivos de 180.335.0 gramos de cocaína (fs.444) entonces, esta situación no califica de circunstancia atenuante, las admisiones del procesado aunque desde su inicio se hubiera declarado confeso.
>
> Esto conlleva que la rebaja de la sexta parte de la pena base seis (6) años, amerita eliminarla, quedando el descuento de una tercera (1/3) parte por haberse acogido al proceso abreviado (beneficio procesal), resulta la pena líquida a imponer en cuatro (4) años de prisión."

Al examinar las consideraciones vertidas por el A-Quem, este Tribunal de Casación discrepa con lo expuesto por el casacionista por cuanto que ciertamente

los hechos expuestos no se enmarcan en los presupuestos que demanda nuestro ordena miento jurídico para configurar la atenuante de responsabilidad criminal de la confesión oportuna y espontánea.

Por otro lado, la Sala estima que el recurrente no explica en qué consiste esa similitud que según expresa existe entre la citada atenuante y el reconocimiento hecho por su representado al momento de rendir declaración indagatoria. En consecuencia este tribunal coincide con el criterio del Procurador General de la Nación, cuando expresó en su escrito, que el motivo es escueto y no explica en qué consiste esa similitud entre los hechos y las atenuantes de la confesión.

La confesión de JOSÉ MANUEL SUAREZ no fue espontánea ni oportuna, ni constituyó el fundamento de la rebaja de la sexta parte de su pena, pues de haber sido esa la situación jurídica del procesado la norma penal violada de manera directa por omisión hubiera sido el artículo 66, numeral 5 del Código Penal.

En consecuencia el recurrente no acreditó el cargo de injuridicidad endilgado al fallo impugnado en el motivo señalado.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, se señala el artículo 66, numeral 8 al igual que el artículo 69 del Código Penal.

El artículo 66, numeral 8, de acuerdo al casacionista fue vulnerado de manera directa por omisión, porque en la segunda instancia no se le reconoció al procesado la atenuante cuando aceptó los cargos en la ampliación de indagatoria y en el acto de audiencia oral.

El numeral 8 del artículo 66 del Código Penal considera como atenuante común "Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal debe ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente".

Esta atenuante no se compadece con los argumentos utilizados por el casacionista para sustentar su infracción, ya que no ha señalado "esas otras circunstancias no preestablecidas en la ley" que fueron desconocidas por el A-Quem al proferir su sentencia, por lo que el tribunal no puede concluir que se haya producido la infracción de manera directa por omisión de la referida norma penal.

Muy por el contrario, toda la argumentación en que se apoya su impugnación a la sentencia de segunda instancia, corresponde a la circunstancia preestablecida en el numeral 5 de la misma norma (artículo 66 del Código Penal) la cual no fue aducida por el recurrente.

Es de recordar que la violación directa por omisión de una norma legal se produce cuando el juzgador no utiliza la norma que de manera indefectible exige el caso concreto.

La norma en especial debe contener el mandato del juzgador, de modo que la aplicación de ella sea obligatoria.

Por su parte el artículo 69 establece, que "cada una de las circunstancias atenuantes mencionadas en el artículo 66 da lugar a que se le reconozca al procesado una disminución de la pena de una sexta a una tercera parte. En ningún caso la pena así rebajada será inferior al mínimo señalado en los artículo 47 y 48".

Indica el casacionista que dicha norma fue vulnerada por violación directa por omisión, no obstante la Sala es del criterio que como quiera que el artículo 69 establece los parámetros que tiene el juzgador al efectuar la rebaja de la pena una vez se determine la atenuante contenida en el artículo 66, si no se determina la existencia de atenuante alguna, resulta imposible la disminución de

la pena.

La Sala concluye en consecuencia, que el artículo 69 del Código Penal tampoco ha sido vulnerado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de 21 de agosto de 1998 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en atención al recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado HECTOR EMILIO RODRIGUEZ en representación de JOSÉ MANUEL SUAREZ.

Notifiquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA

DENUNCIA POR DELITO DE FALSEDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA CONTRA IDA ESPERANZA CASTILLERO Y DAVID MIZRACHI RUSSO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

Vistos:

Ante la Fiscalía de Circuito de Panamá de Turno el Licdo. DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA presentó denuncia por delito de falsedad contra IDA ESPERANZA CASTILLERO y MOISES DAVID MIZRACHI RUSSO, con fundamento en los hechos que expuso en su libelo y con las pruebas autenticadas que acompañó con su escrito.

En su oportunidad, el Agente Fiscal que conoció de la acción penal instaurada remitió las sumarias correspondientes al juzgado del conocimiento, solicitando que se ordenara el archivo del expediente, en razón de que había apreciado que se trataba de la misma denuncia que el denunciate DARIO CARRILLO había presentado en la Fiscalía Tercera, en nombre y representación del señor JOSUE LEVY LEVY en contra de IDA ESPERANZA DOMINGUEZ, como representante legal de INVERSIONES EL ARENAL, S. A.

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, acogiendose a la petición fiscal, en resolución de 21 de julio de 1998 declaró "la nulidad de todo lo actuado y en consecuencia el archivo del expediente".

De esa resolución el licdo. CARRILLO GOMILA promovió recurso de apelación y el Segundo Tribunal Superior, al resolver la alzada, considerando que uno de los denunciados, MOISES DAVID MIZRACHI RUSSO ejercía las funciones de directivo de la Autoridad del Canal, "el Juez de Grado carecía de competencia funcional para entrar a resolver lo actuado", declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir de la fojas 64 en adelante y ordenó remitir las sumarias ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, "a quien corresponde conocer de lo actuado", fundándose en derecho para tomar esta decisión en lo previsto por el artículo 95 del Código Judicial.

Contra esa decisión el licdo. DARIO CARRILLO GOMILA anunció y formalizó

recurso de casación y el Segundo Tribunal Superior, en resolución de 26 julio de 1999 rechazó dicha iniciativa procesal, señalando que se trataba "de una resolución que no tiene la calidad de definitiva porque no hace tránsito a cosa juzgada, situación que hace inadmisible el recurso de casación propuesto".

Como consecuencia de este pronunciamiento, se regresó al Juzgado Décimo Quinto las sumarias correspondientes, Tribunal que a su vez, en cumplimiento de lo dispuesto por el Superior, remitió a esta Sala el proceso "para lo que en derecho corresponda".

En diversos pronunciamientos de esta Sala se ha dejado establecido, que el cargo que ostenta el señor MOISES DAVID MIZRACHI RUSSO, denunciado en el presente caso, como miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, no es el de aquellos funcionarios a los que se refiere el artículo 95 del Código Judicial y por tal razón no compete a esta Sala conocer de ninguna causa penal que se siga en su contra. Pueden citarse como fallos confirmatorios de ese criterio, dos expedidos con la misma fecha, 5 de marzo de 1999 y otro de 23 de marzo de 1999, en donde en ellos se imputaba a MOISES DAVID MIZRACHI RUSSO de la comisión de actos ilícitos y la Sala se inhibió de conocerlos, declinando la competencia al caso, precisando en el primero de esos pronunciamientos lo que seguidamente se transcribe:

> Se advierte que en el presente caso, el denunciado lo es, el señor Moisés David Mizrachi Russo, quien mediante resolución del Consejo de Gabinete N° 201 de 27 de agosto de 1997 fue designado como uno de los Directores de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.
>
> La Ley N° 19 de 11 de junio de 1997 establece que la Autoridad del Canal de Panamá es una persona Jurídica Autónoma de Derecho Público (art. 1); que su organización administrativa corresponde a una Junta Directiva (art. 12), compuesta por once directores, de los cuales uno preside la Junta y tiene condición de Ministro de Estado Para Asuntos del Canal (art. 13).
>
> Con respecto al tema de la competencia de Directores de las instituciones autónomas y semiautónomas, es necesario puntualizar lo siguiente:
>
> El artículo 95 del Código Judicial, en su numeral 1 establece que es de competencia de la Sala Segunda de lo Penal, las causas por delitos o faltas cometidas, entre otros, por los Directores y Gerentes de instituciones autónomas y semiautónomas.
>
> Al referirse la norma a los Directores de las instituciones autónomas y semiautónomas, habría que precisar a qué calidad de Directores se refiere, puesto que en la estructura de las entidades públicas panameñas, encontramos que las funciones de administración de mayor jerarquía están asignadas a un funcionario que se identifica a través de diversas denominaciones, pero cuyo rango de autoridad y responsabilidad, al igual que la función de representación legal le son propias.
>
> Así, encontramos entidades autónomas y semiautónomas del Estado en las que tales funciones están a cargo de un Gerente General, un Director General o bien un Administrador General y no de los miembros o directores que integran la Junta Directiva. En consecuencia, es a los primeros, es decir los Gerentes Generales, Directores Generales y Administradores Generales, a los cuales se refiere el artículo 95 del Código Judicial y no a los miembros que en su calidad de Directores, integran la Junta Directiva de las referidas instituciones.

Esta es la opinión mantenida por la Sala, por lo que en el presente caso, se procede a declinar la competencia a la esfera circuital, toda vez que los delitos denunciados: Falsificación de documentos públicos y privados, contemplan pena de prisión que excede de dos años (art. 159, numeral 15 del Código Judicial).

Consecuente con lo que se deja expuesto, no es del caso que la Sala entre a conocer del presente negocio y en consecuencia lo indicado resulta devolver las presentes sumarias al Tribunal de su procedencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley se INHIBE del conocimiento de la presente causa y dispone su remisión al Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR CARLOS GARCÍA CONTRA RUBÉN REYNA, ADMINISTRADOR DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA, Y ANA MARÍA LEGENDRE, DIRECTORA DE ASESORÍA LEGAL, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 92 de 1 de octubre de 1999, ha remitido a esta Sala las sumarias que, por denuncia que presentara Carlos García, fueron instruidas contra Rubén Reyna, Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y Ana María Legendre, Directora de Asesoría Legal de esa institución, por la comisión del delito de abuso de autoridad que prevé el artículo 336 del Código Penal.

Es del caso destacar que resulta un hecho evidente que Rubén Reyna ya no ejerce el cargo de Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, toda vez que el Organo Ejecutivo efectuó otra designación, con fundamento en el decreto ejecutivo No. 201 de 30 de noviembre de 1999 y en la ley No. 62 de 31 de diciembre de 1999, esta última que se refiere al Marco Fundamental de la Gobernabilidad y del Mejor Ejercicio de los Poderes Públicos para agilizar la Administración Pública.

La pérdida de la condición funcional impide a la Sala pronunciarse sobre la situación procesal de Rubén Reyna. De la misma manera, según lo preceptuado por el artículo 95 del Código Judicial, a esta Colegiatura tampoco le compete conocer de las causas por delitos o faltas cometidas por la licenciada Legendre. En consecuencia, el conocimiento de los cargos que se le endilgan a Reyna y a Legendre corresponde a los jueces municipales, en razón de la pena que conlleva el delito imputado.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se INHIBE y DECLINA el conocimiento de las presentes sumarias ante el Juzgado Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, de turno.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA

PROCESO SEGUIDO A ERICK AUGUSTO SÁNCHEZ Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cursa en este despacho el negocio penal contentivo de la querella interpuesta por el Licdo. JACINTO GONZÁLEZ R., ante la Procuraduría General de la Nación, contra NICOLÁS ARDITO BARLETA, Director de la Autoridad de la Región Interoceánica, por la presunta comisión del Delito de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos.

Del análisis efectuado a las piezas que componen el cuaderno sumarial y sin entrar al fondo del asunto, la Sala advierte que la querella fue interpuesta el 14 de julio de 1999 (Reverso foja 6). No obstante, es un hecho público y notorio que, a la fecha, el querellado ha perdido su condición de Director de la Autoridad de la Región Interoceánica y como no tiene la calidad funcional que exige el artículo 95 del Código Judicial, su juzgamiento no corresponde a esta corporación. De allí que es menester declinar competencia ante los jueces municipales del Ramo Penal.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE y DECLINA COMPETENCIA ante el Juzgado Municipal del Ramo Penal del Primer Circuito Judicial, en turno, la querella incoada contra NICOLÁS ARDITO BARLETA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ORDENA EL ARCHIVO DEL CUADERNO PENAL QUE CONTIENE LA QUERELLA PRESENTADA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA & GUERRA ABOGADOS, CONTRA EL LICENCIADO RAFAEL CARLES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal No. 1 de fecha 4 de enero de 2000, la Procuraduría General de la Nación nos remite el expediente que contiene la querella presentada por la Firma Forense GUERRA & GUERRA ABOGADOS, en calidad de apoderados de la Unión Nacional de Centros Educativos de conformidad con el poder conferido por el señor RAFE C. LUCADO DÍAZ, contra el licenciado RAFAEL CARLES, Presidente de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), por la supuesta Comisión de los delitos de Calumnia e Injuria.

En dicha Vista Fiscal, se solicita a la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, se ordene el archivo del expediente, toda vez, que la firma forense querellante presentó formal desistimiento de la pretensión punitiva.

En efecto, a foja 92 del expediente se observa, que la Firma Forense GUERRA & GUERRA ABOGADOS mediante escrito desistió de la querella interpuesta contra RAFAEL CARLES con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1984 del Código Judicial, que señala "Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de ... calumnia e injuria".

Dado lo anterior, debemos ordenar el archivo de la presente encuesta penal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el archivo del cuaderno penal que contiene la querella interpuesta por la firma forense GUERRA & GUERRA ABOGADOS contra el licenciado RAFAEL CARLES, Presidente de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, por la supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RAFAEL AROSEMENA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PERJUICIO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el licdo. ARMANDO FUENTES RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal Cuarto del Primer Circuito Judicial presentó Recurso de Hecho contra la resolución de 18 de octubre del año próximo pasado, proferido por el Segundo Tribunal Superior, donde se niega la concesión del recurso de casación presentado contra el fallo de segunda instancia, en el proceso seguido a RAFAEL AROSEMENA y otros, por delito contra la administración pública cometido el perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

Recibido el presente negocio en el Despacho del ponente, se fijó en lista por el término de tres (3) días para que las partes alegaran lo que estimaran conveniente a sus intereses cumplido lo anterior, procede determinar acerca de su admisibilidad.

En ese orden, observa esta Superioridad que se dan ciertas irregularidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del Recurso de Hecho interpuesto. En ese sentido, en el artículo 1137 del Código Judicial, aplicable al procedimiento penal por mandato expreso del artículo 2432 ibídem se establece la necesidad de que el recurrente solicite las copias oportunamente y señala esta norma que éste se encuentra obligado a pedir al Juez que negó la concesión del recurso de casación, antes de los dos días siguientes al día en que se notificó o se tuvo por notificada la negativa, las copias de la resolución y las demás

piezas procesales que estime convenientes para la formalización del recurso.

Tal como lo expresa el agente del Ministerio Público en el escrito dirigido a esta Sala, donde promueve el recurso de hecho contra la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Superior, de esta decisión fue notificado personalmente el día 28 de octubre de 1999, tal como puede apreciarse a fs. 44 vuelta y de la lectura que se hace de las constancias procesales, no se observa que el agente fiscal haya presentado escrito solicitando copia de los documentos al que se refiere esta norma.

Como esa petición no se hizo, no se siguió el trámite correspondiente en la tramitación del recurso y trajo como consecuencia que no se diera tampoco cumplimiento a lo estatuido por el artículo 1139 del Código de Procedimiento que al respecto señala:

> "Tan pronto las copias estén listas, el Secretario del Juzgado expedirá y mantendrá fijado en la Secretaría del Juzgado por tres días un certificado en el que se dejará constancias que las copias se hayan a disposición del recurrente. El recurrente deberá retirar dichas copias durante el expresado término de tres días y al efecto el Secretario dejará constancia en la respectiva certificación respecto a la fecha de entrega. Dentro de los tres días siguientes a la entrega el interesado debe concurrir con ellas al superior del funcionario que negó el recurso o la consulta, con un escrito de fundamentación".

Ante las consideraciones que se dejan señaladas no es del caso la admisión del recurso interpuesto.

En virtud de lo que se deja expresado, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el presente recurso de hecho, presentado por el Fiscal Cuarto del Primero Distrito Judicial contra la resolución de 18 de octubre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SIBIA DE JESUS SANCHEZ MADRID, SANCIONADO POR EL DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia escrito presentado por SUBIA DE JESÚS SÁNCHEZ MADRID, condenado a la pena de cuatro (4) años de prisión por la comisión de delito de violación carnal en perjuicio de MARGARITA VALDÉS MIRANDA, en donde solicita la revisión del proceso.

En cumplimiento de lo normado en el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que

éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, se remitió la solicitud al Instituto de Defensoría de Oficio de San Miguelito, asignándose a la Licenciada OTILDA DE VALDERRAMA para que formalizara el recurso, si a ello hubiere lugar.

Mediante escrito presentado en la Secretaria de la Sala Penal, la Licenciada DE VALDERRAMA manifiesta lo siguiente:

> "Honorables Magistrados, en el caso que nos ocupa podemos observar que el mismo no encuadra dentro del Recurso solicitado ya que el artículo comentado y que regula el mismo es específico en destacar en contra de que supuestos se puede interponer.
>
> En el presente negocio no se ha aportado prueba posterior que amérite (sic) la interposición del mismo, y no se ha demostrado la existencia en el expediente de prueba falsa que sin ella no hubiere fundamento para establecer la responsabilidad del señor ZUBIA DE JESUS SANCHEZ.
>
> Señores Magistrados, consideramos que en su momento el sindicado tenía otros recursos para hacer valer sus derechos, por lo que podemos concluir que el recurso de Revisión solicitado por el señor ZUBIA DE JESUS SANCHEZ, en Derecho no procede, a pesar de que de la lectura del expediente podamos compartir varias de sus quejas.”.

Toda vez que la defensora de oficio asignada a SUBIA DE JESUS SÁNCHEZ MADRID, al hacer el estudio respectivo del caso, advierte que no hay causal para interponer el recurso, estima esta Sala que no es posible acceder a la solicitud presentada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud formulada por SUBIA DE JESUS SÁNCHEZ MADRID y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE GERMÁN HERNÁNDEZ CASTILLO, SANCIONADO POR DELITO DE INCENDIARISMO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del período señalado para aducir y practicar pruebas, el Licdo. SABINO ELÍAS VARGAS V., apoderado judicial de GERMÁN FERNÁNDEZ CASTILLO, presentó en la Secretaría de la Sala Penal escrito en el que manifiesta formalmente que se ratifica de las pruebas presentadas con el libelo de revisión, a saber:

> 1. Sentencia N° 45 emitida por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, de fecha 10 de febrero de 1995. (Fs. 6-8)
>
> 2. Declaración denuncia formulada por la señora Priscila Pérez, la cual consta en el presente proceso, y en donde Priscila manifiesta

que tenía una relación marital con el señor Germán Fernández. (Fs. 9-11)

3. Certificado de Nacimiento de la menor Priscila Fernández Pérez.

4. Resolución N° 261 de fecha 17 de julio de 1997, emitida por el Juzgado Seccional de Menores de Panamá. (F. 12)

5. Peritaje formulado por la empresa Fire Security de Panamá, (Fs. 13-14) acompañado de la hoja de vida del señor Eduardo González Leblanc quien confeccionó el peritaje. (Fs. 17-19)

6. Expediente clínico de Germán Fernández Castillo, de la Clínica Hospital de Río Abajo, en donde se señala las enfermedades físicas y mentales que padece. (Fs. 20-27)

7. Certificado médico formulado por el doctor Javier E. Ruíz, del Centro Médico Azuero. (F. 28)

Examinadas las pruebas que se aducen como sustento al recurso de revisión interpuesto por el Licdo. VARGAS V., en representación del señor FERNÁNDEZ CASTILLO, debemos pronunciarnos de la siguiente manera:

Se admite Sentencia N° 45 emitida por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, de fecha 10 de febrero de 1995, contenida en el punto 1, y el peritaje formulado por la empresa Fire Security de Panamá, enunciado en el punto 5, las cuales se adjuntaron al escrito sustentatorio del recurso de revisión.

Se rechazan las pruebas contenidas en los puntos 2, 3, 4, 6 y 7 por ser inconducentes y se acepta la renuncia del término para presentación y práctica de pruebas por parte del recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, representada en Sala Unitaria por la Suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE las pruebas documentales consistentes en la Sentencia N° 45 emitida por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, de fecha 10 de febrero de 1995, y el peritaje de la empresa Fire Security de Panamá y la renuncia al término para practicar y aducir pruebas, presentados por el Licdo. SABINO ELÍAS VARGAS V.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA LICENCIADA TERESA IBAÑEZ, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORA DE OFICIO DE ABELARDO CARBONO, HA FORMALIZADO RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA AL IMPUTADO A 4 AÑOS DE PRISIÓN, POR SER RESPONSABLE DEL DELITO DE HURTO DE VEHÍCULOS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Teresa Ibañez, en su condición de defensora de oficio de circuito penal, ha presentado recurso de revisión contra la sentencia de 24 de septiembre de 1998, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Primer Circuito

de Panamá, que condena a Abelardo Carbono a la pena de 4 años de prisión, como responsable del delito de hurto de automóviles cometido en perjuicio de Sara Córdoba de Berrocal.

La recurrente invoca la causal que contempla el numeral 8 del artículo 2458 del Código Judicial, que se refiere al supuesto en que "en el proceso no se haya decretado la acumulación de los procesos sin justificación, existiendo constancia de solicitud de acumulación". Para apoyar esa causal, la defensora de oficio expone cinco motivos y cita, como fundamento de derecho, los artículos 2003, 2291, 2293 del Código Judicial y el artículo 64 del Código Penal (f. 11).

El libelo llegó acompañado por elementos de prueba tales como copia auténtica de Informe de Investigación realizado por la Policía Técnica Judicial, en el que, según la recurrente, se menciona la existencia de cinco casos penales contra el reo Carbono. También se aduce como prueba dos notas emitidas por los Jueces Noveno y Décimo Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá (fs. 12-43).

A juicio de los magistrados de la Sala Penal los planteamientos de la recurrente, confrontados con la documentación que adjunta a la solicitud de revisión, no configuran la causal que invoca, por considerar que no se aporta prueba demostrativa de que se solicitó la acumulación de las causas a las que se refiere y que el juez natural no resolvió esa petición mediante pronunciamiento judicial. También resulta necesario señalar que la revisionista se refiere a dos procesos penales en los cuales el reo Carbono fue sobreseido de los cargos formulados en su contra. Esa situación que no se compadece con el alcance del recurso extraordinario de revisión, pues este procede cuando la sentencia tiene el carácter condenatorio.

A juicio de la Sala, la recurrente no suministra los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten de manera adecuada la causal que invoca. De todo lo anterior se concluye que el recurso presentado no cumple con las formalidades que establecen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, lo que hace improcedente esta iniciativa procesal.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por la licenciada Teresa Ibañez, en su condición de defensora de oficio de Circuito Penal, contra la sentencia de 24 de septiembre de 1998, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Primer Circuito de Panamá, que condena a Abelardo Carbono a la pena de 4 años de prisión, como responsable del delito de hurto de automóviles cometido en perjuicio de Sara Córdoba de Berrocal.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR DANNY AGUSTÍN ÁLVAREZ L. CONDENADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de recurso de revisión solicitado por el señor DANNY AGUSTÍN ÁLVAREZ L., actualmente detenido

en la Cárcel Pública de Santiago, por haber sido condenado a 15 años de prisión luego de haber sido declarado penalmente responsable de los delitos de homicidio y violación carnal.

Tal como lo establece el artículo 2050 del Código Judicial, esta Sala corrió traslado del presente negocio a la defensora de oficio, Licenciada Matilde Alvarenga de Apolayo, a fin de que, formalizara adecuadamente el recurso solicitado, de existir causal para ello.

En su escrito, la Licenciada de Apolayo, luego de hacer un análisis de las distintas causales de interposición del recurso en cuestión, finaliza señalando que "somos del criterio que la solicitud presentada por el reo DANY (sic) AGUSTÍN ÁLVAREZ no procede". (fs. 5-7).

De acuerdo con lo manifestado por la defensora de oficio, esta Sala estima que no es posible ordenar la revisión del proceso bajo estudio, puesto que no se configura ninguna de las causales enumeradas en el artículo 2458 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por DANNY AGUSTÍN ÁLVAREZ L. y por consiguiente, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR GABRIEL GUARDIA REINA, CONDENADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de revisión solicitado por el señor GABRIEL GUARDIA REINA, actualmente recluido en el Centro Penitenciario La Joya, luego de haber sido condenado por delito de homicidio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2050 del Código Judicial, esta Sala corrió traslado del presente negocio al Licenciado Luis Carlos Arosemena, defensor de oficio distrital, a fin de que formalizara adecuadamente el recurso, de existir causal para ello.

El Licenciado Arosemena, en su escrito visible a fs. 4-6 del expediente, luego de hacer un análisis de los hechos alegados por el condenado en su carta manuscrita, expresa que no es posible formalizar el mencionado recurso, puesto que "lo expuesto por mi representado no se adecua (sic) a lo normado por el artículo 2458 del Código Judicial ...".

Ante esa manifestación negativa, opina esta Superioridad que no es posible ordenar la revisión del proceso señalado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión formulada por GABRIEL GUARDIA REINA y por consiguiente,

ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JONNY ERICK RODRÍGUEZ GUTIERREZ, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de la solicitud que formula, mediante manuscrito, Johnny Erick Rodríguez, para que se revise la sentencia No. 45 de 20 de mayo de 1998, dictada por el Juzgado Noveno del Primer Circuito Penal de Panamá, que lo condenó a la pena de 5 a años de prisión, como responsable de delito contra salud pública.

Siendo que esta iniciativa procesal requiere ser formalizada por un profesional del derecho, el despacho sustanciador asignó como defensora de oficio del reo a la licenciada Asunción de Montalvo, con la finalidad de que asumiera su representación en este caso "y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso, si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 6).

En cumplimiento de esta decisión, la defensora de oficio designada ha presentado escrito en el cual solicita se revise la situación jurídica del sentenciado, con fundamento en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial. El numeral en comento se refiere al caso en que, después de la condena impuesta al reo, se descubran nuevos hechos que, por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a su absolución o a una condena menos rigurosa.

La defensora de oficio apoya la causal invocada con ocho hechos. Básicamente, el argumento se refiere a que Johnny Eric Rodríguez Gutiérrez no era la misma persona que el 5 de febrero de 1996, portaba cinco paquetes de cocaína. En tal sentido, señala que las declaraciones rendidas por los agentes de policía Hermógenes Reyes, Eugenio Manuel Jaramillo Bonilla y Raúl Alfredo Sánchez García revelan "contradicciones" sobre la identidad de la persona que portaba los paquetes de cocaína (fs. 8-9). Cabe anotar que el libelo no es acompañado de pruebas que apoyen esos hechos fundamentales.

La Corte es del criterio que el recurso de revisión formalizado por la defensora de oficio no reune las expectativas básicas para sustentar la causal que prevé el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial. En tal sentido, no constituye prueba de los hechos expuestos que tan solo se adviertan contradicciones o incongruencias en determinadas declaraciones allegadas al cuaderno penal. Si la recurrente asegura que existe una persona de nombre Erick Rodríguez, cuyo apodo es Johnny, y quien es portador de "otro número de cédula" (f. 10), entonces, debe presentar prueba, al menos indiciaria, sobre la existencia de esa persona con similar identidad a la del sentenciado.

Con vista del anterior razonamiento, la Sala no puede menos que desestimar la solicitud del defensor de oficio, toda vez que la formalización de este medio extraordinario de impugnación está condicionada al cumplimiento de los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión que formula la licenciada Asunción de Montalvo en representación de Johnny Eric Rodríguez Gutiérrez, y ORDENA el archivo del cuaderno.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA APELADA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A EDILBERTO ESTRADA ARANDA, POR LA COMISIÓN DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSE CASTRO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SEIS (6) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de 11 de junio de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que impuso a EDILBERTO ESTRADA ARANDA la pena de dieciséis (16) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término de la pena principal, al haber sido encontrado culpable por el Jurado de Conciencia de la comisión de los delitos de homicidio y robo perpetrados en perjuicio de JOSE CASTRO HERNANDEZ, conforme a hecho de sangre ocurrido el día 13 de julio de 1996 en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con las constancias procesales, en la fecha arriba expresada se encontraba laborando como agente de seguridad en la mueblería conocida con el nombre de La Alemana, ubicada en el edificio Las Lajas frente a la escuela PEDRO J. SOSA, Calidonia, cuando aproximadamente a las siete y treinta de la noche un sujeto joven se acercó a dicho agente diciéndole "quieto" y en ese mismo instante disparó contra su persona y tendida la víctima en el suelo como consecuencia de la agresión, le quitó el revolver al lesionado, saliendo precipitadamente en fuga, auxiliado por otro sujeto que al parecer le aguardaba en una bicicleta. El herido fue conducido al Hospital y al tenerse conocimiento de su fallecimiento en esa misma fecha, la Fiscalía Auxiliar de la República procedió a la diligencia de reconocimiento del cadáver y continuó con los trámites correspondientes a la investigación, precisándose en el protocolo de necropsia, visible a fojas 127 a 133, como causa de la muerte choque hemorrágico y herida penetrante por proyectil de arma de fuego en el abdomen.

Tanto el sentenciado como su defensor anunciaron recurso de apelación al momento de ser notificados del fallo condenatorio y ambos presentaron escrito sustentando la alzada. Para el imputado, contra su persona se ha cometido una injusticia y cuestiona el testimonio de uno de los testigos que declaró en este proceso, exponiendo otras situaciones que resultan irrelevantes en esta fase del proceso, dado que esos aspectos fueron debatidos en el acto de la audiencia y ya existe un veredicto de culpabilidad pronunciado por el Tribunal de Jurados que, como es sabido, tiene las características de ser autónomo y definitivo.

Por su parte, la defensa del imputado, en su escrito de sustentación visible a fojas 360 se limita a exponer lo siguiente:

"SEGUNDO: Conceptúo Señor Magistrado, que el a-quo no le reconoció

al sancionarlo, circunstancia como la de que es delincuente primario, es decir, jamás se le había condenado por delito o falta alguna, el hecho fáctico de que se trata de una persona muy joven de ímpetus casi incontrolables, amén de la situación social y el medio donde se desenvuelve

Si el a-quo hubiera tomado en consideración estos aspectos, la pena no sería tan elevada o severa, motivo por el cual EDILBERTO ESTRADA ARADNA es merecedor a una condena menos severa (valga la anáfoga)".

Como ya en ocasiones anteriores lo tiene establecido esta Sala, la delincuencia primaria no constituye una atenuante común de las contempladas en el artículo 66 del Código Penal sino un factor que se tome en cuenta para la individualización de la pena en abstracto partiendo de los intervalos fijados por la individualización legal, conforme al artículo 56 del Código Penal.

De otro modo, la Sala, en decisiones anteriores, ha señalado que "nuestro ordenamiento jurídico le asigna al Juzgado discresionalidad para fijar el cuantum de la pena básica" atendiendo a los factores o características de cada hecho punible que señala el artículo 56 del Código Penal" situaciones que se tomaron en cuenta en la decisión apelada, donde se conoce de un homicidio cometido en forma sorpresiva y ejecutado el hecho, inmediatamente su autor se apodera del arma que la víctima utilizaba en sus labores de vigilancia como agente de seguridad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 11 de junio de 1999 dictada por el Segundo Tribunal Superior, mediante el cual impone a EDILBERTO ESTRADA ARANDA la pena de dieciséis (16) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término de la pena principal.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ARMANDO MENA BEITÍA Y DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ, SANCIONADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BONIFACIO FRANCISCO JARQUIN JIMENEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce del recurso de apelación presentado por el Licdo. DANILO MONTENEGRO, abogado defensor de DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ (A) "Diablo" o (a) "Niño", y por la Licda. MIREYA RODRÍGUEZ MONTEZA, abogada defensora de ARMANDO MENA BEITÍA (a) "Mena", contra la sentencia de 15 de enero de 1999, por la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a sus patrocinados a la pena de ocho (8) años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, por considerarlos autores del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de BONIFACIO FRANCISCO JARQUIN JIMÉNEZ.

LOS APELANTES

La defensa técnica de DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ manifiesta que no

comparte el criterio del Tribunal A-quo de aplicar la misma sanción penal a ambos imputados, ya que el autor material del delito es MENA BEITÍA y el fallo da a entender que SANTAMARÍA SÁNCHEZ le pasó el arma a aquél, deduciéndose de la lectura que ambos fueron autores, puesto que en el fundamento de derecho de la resolución impugnada se cita el artículo 38 del Código Penal.

El recurrente señala que el comportamiento de SANTAMARÍA SÁNCHEZ debe enmarcarse en el artículo 40 del citado Código, es decir que debe ser sancionado como cómplice secundario, del hecho punible tal como lo estipula el artículo 61. (F. 458)

Siendo así las cosas, el apelante sustenta su disconformidad con base en las pruebas testimoniales que constan en el expediente, citando una serie de declaraciones juradas en las que se observa una diversidad de manifestaciones contradictorias que hacen emerger serias dudas respecto a si su patrocinado efectivamente entregó o no el arma de fuego que utilizó ARMANDO BEITÍA para ultimar a BONIFACIO JARQUIN. (Fs. 459-460)

Por su parte, la abogada defensora de ARMANDO MENA BEITÍA manifiesta que la pena impuesta a su patrocinado, 8 años de prisión, es injusta ya que el Tribunal Superior no tomó en cuenta ninguna de las atenuantes a las cuales su representado tenía derecho: se entregó voluntariamente a las autoridades y por sus propios medios; confesó oportunamente su responsabilidad en el delito investigado; el procesado no tenía la intención de matar y ha mostrado su arrepentimiento; al haber aceptado su responsabilidad renuncio al juicio con intervención de jurado de conciencia y se acogió a la audiencia en derecho, lo que "debió ser tomado en cuenta al momento de fijar la pena (Artículo 56 del Código Penal)." (Fs. 465-466)

Agrega la letrada que el día de los hechos, el señor MENA BEITÍA no se encontraba en capacidad de razonar sobre su conducta y ha mantenido buena conducta desde que se entregó voluntariamente. Concluye la apelante solicitando que a su patrocinado se le aplique una pena más justa. (F. 466-467)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En escrito de oposición a la apelación, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Licdo. DIMAS E. GUEVARA, emitió su concepto dentro del sumario seguido contra ARMANDO MENA BEITÍA y DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

Con respecto al procesado MENA BEITÍA, el Fiscal manifestó no estar de acuerdo con la causal de confesión libre y espontánea del agente porque no reúne las características que establece el Código Penal, ser voluntaria y espontánea, sustentando su criterio con base en jurisprudencia de la Corte. (Fs. 471-472)

De igual manera, el representante del Ministerio Público discrepa con la recurrente en el sentido de que se le reconozca al procesado la atenuante de haberse acogido a la audiencia en derecho, por no encontrarse tipificada en las circunstancias atenuantes que establece el Código Penal y si bien se permite al Tribunal de la causa cierta amplitud para reconocer situaciones como atenuantes, deben reunirse ciertas características que no concurren en el caso en examen. (F. 473)

Por último, el Fiscal expresa que la buena conducta antes o después de cometido el ilícito no constituye una atenuante "ya que este es el comportamiento normal de toda persona respetuosa de la ley y que acata las normas que rigen a la sociedad." (F. 473)

En cuanto a la situación jurídica del procesado DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ, considera el Fiscal que éste es cómplice primario en virtud de que le entrega el instrumento idóneo al otro procesado, mismo que utilizó para ultimar a BONIFACIO JARQUIN, de donde se desprende que el grado de colaboración que realiza es primordial para la ejecución del delito. (F. 473)

Agrega la Fiscalía que el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. DANILO MONTENEGRO fue presentado extemporáneamente, pues no esperó a que el Tribunal A-Quo le concediera el término para que sustentara su disconformidad con el fallo recurrido. (F. 474)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El día 12 de agosto de 1995, en la Casa N° 109, Sector N°3 La Estrella, comunidad de Samaria, Corregimiento de Belisario Porras, Distrito de San Miguelito, se produjo la muerte violenta de BONIFACIO FRANCISCO JARQUIN JIMÉNEZ por herida de arma de fuego que trajo como consecuencia un "shock" hemorrágico y fueron sancionados como responsables los señores ARMANDO MENA BEITÍA y DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ, cuyo actuar ilícito fue tipificado bajo la figura del homicidio doloso simple, tal como se observa en la resolución que se pretende reformar:

> "La actuación de los imputados están (SIC) enmarcadas como autores, según lo estipulado en el artículo 38 del Código Penal. La conducta desplegada en relación al delito de homicidio, se encuentra normada en el artículo 131, que tiene prevista una sanción que oscila entre los 5 a 12 años de prisión; los imputados se encontraban en estado de ebriedad y el hecho se debió a un estado de ira producto de una discusión entre éstos y el hijo del occiso, lo cual según el criterio de esta Sala, impide el equilibrio y reflexión del hecho que se ejecuta, por tanto partiremos de la pena base de 8 años de prisión para ambos procesado, no se observan circunstancias atenuantes ni agravantes, ya que se bien MENA BEITÍA aceptó la comisión del ilícito y se entregó a las autoridades, dicho acto debe considerarse como extemporáneo ya que existían suficientes elementos que lo señalaban como el autor del hecho, pues la investigación tenía 7 meses de haberse iniciado y ya él estaba plenamente identificado." (Fs. 452-453)

En ese orden de ideas, corresponde entrar a examinar los medios probatorios que existen en el expediente frente a las pretensiones de los recurrentes, con el fin de pronunciarnos si hay lugar a la rebaja de la pena solicitada por los letrados.

SITUACIÓN JURÍDICA DE DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ

El Tribunal de primera instancia, con base en los testimonios que obran en la encuesta penal, concluyó que SANTAMARÍA SÁNCHEZ, al igual que MENA BEITÍA, es autor del homicidio en perjuicio de JARQUIN JIMÉNEZ.

Por su parte, el Fiscal estima que el procesado SANTAMARÍA SÁNCHEZ es cómplice primario, por haber entregado el arma a MENA BEITÍA, y el abogado defensor de oficio señala que su patrocinado es cómplice secundario, lo que infiere de una serie de declaraciones que hacen emerger serias dudas respecto a si éste, efectivamente, entregó o no el arma de fuego que utilizó ARMANDO BEITÍA para ultimar a BONIFACIO JARQUIN.

Siendo así las cosas, se procede al análisis de las declaraciones juradas que constan en la encuesta penal, a fin de determinar el grado de responsabilidad del procesado SANTAMARÍA SÁNCHEZ

Primeramente, se tiene que MARÍA ADILIA FLORES, viuda de JARQUIN JIMÉNEZ,(Fs. 12-15;272-275); MARTÍN LUTHER EDGHIEL BADILLA (Fs. 16-18);RAFAEL VENTURA MARTÍNEZ (Fs. 83-88),ALONSO MARTÍNEZ BADILLA (Fs. 93-97),y YANILKA DEL CARMEN LÓPEZ TORRES (Fs. 134-136), testigos presenciales del hecho, coinciden en que ARMANDO MENA BEITÍA, es el sujeto que hirió de muerte a JARQUIN JIMÉNEZ, pero nada refieren respecto a la participación de SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

Por su parte, los testigos GREGORIO SAAVEDRA CEDEÑO, (Fs. 200-205), y

CERVANDO EVARISTO ESPINOSA FLORES (Fs. 295-297) señalan que el arma la portaba SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

SAAVEDRA CEDEÑO, quien vive en frente de la casa del hoy occiso, señaló que vio cuando MENA BEITÍA le quitó el revólver a SANTAMARÍA SÁNCHEZ., se acercó a donde estaba JARQUIN JIMÉNEZ y le disparó. (F. 201)

ESPINOSA FLORES, sobrino del hoy occiso, expresa que vio cuando "Diablo" (SANTAMARÍA SÁNCHEZ) le pasó el arma a "Mena" (MENA BEITÍA), y él le gritó a su tío "QUITESE DE ALLI, QUE ALLA VIENE EL HOMBRE CON EL REVOLVER", ya estaba MENA cerca y le disparó cuatro veces a su tío. (F. 296)

Estos dos testigos ubican a SANTAMARÍA SÁNCHEZ en el lugar del crimen, pero sus versiones dejan sentada una duda en cuanto al grado de participación del procesado, pues teniendo en cuenta la versión del testigo ESPINOSA FLORES la participación de SANTAMARÍA SÁNCHEZ se ubica en el cómplice primario, ya que al darle el arma de fuego al autor del hecho punible se entiende que le prestó un auxilio sin el cual el hecho no habría podido cometerse. Pero, si se observa lo señalado por el testigo SAAVEDRA CEDEÑO, el procesado acompañaba a MENA BEITÍA y éste le quitó el arma, lo que no configura en modo alguno una ayuda para el autor del homicidio por cuanto que el elemento volitivo se encuentra ausente.

Por otra parte, BONIFACIO FRANCISCO JARQUIN FLORES, hijo del hoy occiso, señaló en su primera declaración que había tenido una pelea con AMETH y estando en la parrillada LENNIS discutieron. JARQUIN FLORES dijo que no iba a discutir y se retiró a su casa. Escuchó un disparo, se apresuró a entrar a la casa y en ese momento su papá bajo por las escaleras y cerró la puerta, momento en el que vio a MENA que le decía a su papá "te voy a matar". Expresa el declarante que fueron dos sujetos los que atacaron a su padre, pero uno fue el que le dio el arma al otro para que disparara." (F. 20)

Posteriormente, JARQUIN FLORES hizo dos ampliaciones de su declaración: en la primera manifestó que cuando salió de la parrillada LENNIS con dirección a su casa, se encontró con MENA y "DIABLO" quienes le preguntaron por AMETH y les contestó que porque no iban a preguntar por él en la parrillada. En ese momento MENA disparó al suelo, JARQUIN FLORES salió corriendo para su casa, su papá salió a cerrar la puerta de verja,. JARQUIN FLORES señala que estaba en el segundo piso de la casa cuando escuchó a su papá que le decía a MENA que dejara eso y allí fue que MENA le disparó a su padre. Manifiesta el declarante que ambos atacantes portaban armas de fuego. (F. 179)

Finalmente, JARQUIN FLORES indicó que le pareció que ambos sujetos portaban armas, pero realmente no sabía sí DIABLO (SANTAMARÍA SÁNCHEZ) le había pasado el arma a MENA (MENA BEITÍA), ya que DIABLO le disparó cerca de los pies y él salió corriendo para adentro de su casa, pero considera que cada uno portaba un arma. (F. 277-278)

AMETH DE GRACIA MERCADO manifiesta que "el señor de la parrillada me dijo que le habían dado un par de tiros al señor BONI" y agrega que escuchó a la esposa del difunto cuando le dijo a los policías que la persona que le había dado el arma de fuego fue su primo NIÑO. (Fs. 36-37).

A foja 181 consta la ampliación de declaración jurada rendida por DE GRACIA MERCADO donde explica que a "BONI ... lo mataron en el cerco de la casa de él, así fue que me comentaron, porque yo no lo ví."

Lo expresado por este declarante carece de fuerza probatoria, pues se trata de un testigo de referencia que depone sobre un hecho que escuchó de otras personas, no estuvo presente cuando se cometió el homicidio (artículo 907 del Código Judicial).

VICENTE BARCO BLANCO, indica en declaración jurada que se encontraba en la Parrillada Lennis y escuchó los disparos. Luego salieron, vio al señor BONI

tirado en el suelo y al sujeto que le llaman "Mena" llevaba un arma de fuego. (Fs. 90 y 92)

Si bien este testigo refiere haber llegado al lugar de los hechos luego de que se suscitó el homicidio, su testimonio no aporta elemento alguno que permita esclarecer lo concerniente al grado de responsabilidad del procesado DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

AMANDA BEITÍA DE SMYTHE, madre del procesado MENA BEITÍA, indicó en declaración jurada que, al preguntarle a su hijo sobre lo sucedido, éste le dijo que "era una pelea, de allí un muchacho que le llaman DIABLO, le dió un revólver, entonces de allí el me dijo que realizó tres (3) disparos contra curry (occiso), después se fue huyendo de allí ..." (F. 237)

El procesado ARMANDO MENA BEITÍA rindió declaración indagatoria en la que manifestó que sacó el revólver y le disparó tres tiros a JARQUIN JIMÉNEZ; después salío huyendo. En cuando al arma de fuego, indica que era de su propiedad, ya que se la había encontrado en un bus. (F. 254-255)

Se advierte que lo declarado por la señora BEITÍA DE SMYTHE entra en contradicción con lo expuesto por su hijo MENA BEITÍA, quien señala que el arma era suya, la llevaba al momento de la comisión del hecho punible y no involucra a SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

Cabe señalar que la Fiscalía ordenó que se le tomara declaración indagatoria a SANTAMARÍA SÁNCHEZ (F. 144), pero no fue posible llevar a cabo la diligencia porque éste se encontraba prófugo.

El procesado SANTAMARÍA SÁNCHEZ hizo uso de la palabra en el Acto de Audiencia y expresó que el día del homicidio llegó a la parrillada en compañía de ARMANDO MENA y un primo suyo, iban a tomarse unas cervezas y éstos dos tuvieron una pequeña pelea, por lo que sacaron a MENA de la parrillada. SANTAMARÍA SÁNCHEZ dice que lo vio muy alterado y salieron varios compañeros a verlo y le dijeron quédate quieto, deja eso. (F. 422)

MENA tuvo una pelea con "Bambi" (El hijo del finado), y SANTAMARÍA SÁNCHEZ lo agarró y se lo llevó hasta cierta parte abajo para evitar el problema, entonces el joven ("Bambi") subió y él se fue atrás de éste y vio cuando MENA le apuntó con el arma al otro muchacho alto, moreno, y le disparó varias veces, cuando se dio cuenta que no tenía más bala salió corriendo, él se mantuvo parado todo el tiempo, una persona correteó a ARMANDO MENA y SANTAMARÍA SÁNCHEZ se fue para su casa. (Fs. 422-423)

La Sala concluye que se infiere de las declaraciones juradas examinadas en las páginas que anteceden que SANTAMARÍA SÁNCHEZ no es el autor del hecho punible, lo que si se ha comprobado es que se encontraba en el lugar de los hechos, lo que es un indicio de presencia y oportunidad que opera en su contra. Ello se infiere de las citadas declaraciones que lo vinculan a la comisión del ilícito, señalándolo como la persona que acompañaba a MENA BEITÍA y portaba un arma de fuego.

No obstante, hay una duda razonable respecto al grado de participación de SANTAMARÍA SÁNCHEZ en el ilícito, pues no queda claro si él le facilitó el arma de fuego a MENA BEITÍA o éste se la quitó, según las versiones de los testigos ESPINOSA FLORES y SAAVEDRA CEDEÑO.

Como quiera que es principio del proceso penal que ante la duda se debe favorecer al reo, se procede a reformar la pena impuesta al procesado SANTAMARÍA SÁNCHEZ.

Antes de entrar a la individualización judicial de la pena, se debe hacer mención a una situación que no podemos pasar por alto, nos referimos a una irregularidad surgida en este proceso y que consta en el Acta de Audiencia, lo

que violenta el principio del debido proceso y que transcribimos a continuación:

> "El Magistrado Presidente de la Audiencia manifiesta lo siguiente: ... Yo creo que es totalmente innecesario hacer ningún resumen de la audiencia, ustedes han tomado suficientes apuntes y van a verificar todas las cosas que en opinión de ustedes sean necesarias verificar. Se le da lectura al Artículo 2362, Numeral 12 del Código Judicial." (F. 445)

El numeral 12 del artículo 2362 del Código Judicial preceptúa que una vez terminados los alegatos, se entregará el proceso y el cuestionario a los jurados para que pasen a deliberar a puerta cerrada; pero antes, el Presidente de la audiencia hará una breve pero clara exposición del caso y luego leerá las siguientes instrucciones.

La norma no le atribuye al Presidente de la Audiencia la potestad de hacer o no la breve relación del caso, éste requisito es parte del procedimiento que la ley ha instituido para los juicios con intervención del Jurado de Conciencia.

Este tipo de actuaciones es contraria a las normas que regulan el proceso penal, pues en el Título I, Libro Tercero del Código Judicial, que trata sobre las Disposiciones Preliminares, se señala en el artículo 1970 que por los hechos punibles previstos en la ley ordinaria, toda persona será investigada, acusada y juzgada por los órganos y mediante el procedimiento establecido en ese Libro. (lo subrayado es nuestro), por lo que le hacemos un llamado de atención al Magistrado Presidente de la Audiencia.

INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

La Sala considera que ante la duda existente, debe aplicarsele al procesado **SANTAMARÍA SÁNCHEZ** la sanción que corresponde al cómplice secundario que, de conformidad con el texto del artículo 61 del Código Penal, no debe ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo del de la pena establecida para el hecho punible, que, en el caso del homicidio simple, cuya sanción oscila entre los 5 y 12 años de prisión, la pena a aplicar debe estar entre los 2 años y 6 meses a 6 años de prisión, razón por la cual se procede a fijar la pena base a cumplir por **DANY HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ** en 6 años de prisión.

La Sala considera que no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes que modifiquen la pena.

SITUACIÓN JURÍDICA DE ARMANDO MENA BEITÍA

Alega la defensa técnica de **MENA BEITÍA**, que a éste no le fueron reconocidas las circunstancias atenuantes que le asisten, pero no señala en qué numeral del artículo 66 del Código Penal se encuentran reguladas. No obstante, de la lectura del libelo de apelación se infiere que son las siguientes:

> Artículo 66: ...
> 2. No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo;
> ...
> 4. El arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha diminuido o intentado disminuir sus consecuencias;
>
> 5. La confesión espontánea y oportuna del agente;

Con relación a la atenuante común del numeral 2, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que "no es posible su aplicación, dada la utilización de un arma letal contra la persona del hoy occiso, cuyo uso implica en sí mismo el dolo en la conducta." (Sentencia de 14 de julio de 1997).

En cuanto a la atenuante común del numeral 4, nuestra legislación establece en forma diáfana que el arrepentimiento se configura cuando se dan actos posteriores a la ejecución del delito con los cuales el agente haya disminuido o intentado disminuir sus consecuencias.

La Sala considera que el actuar del agente no coincide con lo expuesto en el párrafo que antecede, pues el procesado, a contrario sensu, después de herir a la víctima y dejarla en el piso como señalan los testigos, salió huyendo y se retiró del lugar sin prestarle ningún auxilio al agraviado, no hubo de su parte ninguna acción de la cual se infiera la mínima intención de disminuir las consecuencias del hecho.

Por otra parte, esta Alta Colegiatura ha manifestado en reiterada jurisprudencia cuál es el sentido y alcance del numeral 5°, relativo a la confesión resaltando que es espontánea cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal.

En cuanto a la calidad de oportuna, es necesario que no se hayan dado antes, otros elementos probatorios que vinculen al imputado con el delito realizado cuando la confesión es la única forma de conocer la verdad material del hecho. Aunado a lo anterior, se requiere que ambos elementos se den en el acto de la confesión.

La Sala considera que esa atenuante no es aplicable en el caso subjúdice, ya que MENA BEITÍA se dio a la fuga y se entregó a las autoridades el 15 de abril de 1996 (F. 235), cuando ya se le había vinculado al delito de homicidio por las declaraciones de los testigos presenciales y el reconocimiento fotográfico (Fs. 118-120, 123-133).

La recurrente indica que el procesado renunció al juicio con intervención de jurado de conciencia y se acogió a la audiencia en derecho, lo que debió ser tomado en cuenta al momento de fijar la pena. Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido lo siguiente: "Precisa señalar que el procesado se le juzgó en juicio ordinario en derecho ante el respectivo Tribunal Superior y la rebaja que se alega se encuentra establecida solo en los casos de procesos abreviados que se siguen en la esfera circuital y municipal, que no es el caso presente." (Sentencia 21 de julio de 1998)

La abogada defensora de oficio plantea que MENA BEITÍA no estaba en capacidad de razonar sobre su conducta, sin embargo en el examen psiquiátrico forense se dictaminó lo siguiente: "3. Al momento de ocurrir el hecho, el examinado no tenía alterada sus facultades mentales." ..." 7. No existe patología mental que lo ubique en el artículo 24 ó 25 del Código Penal.", lo que desvirtúa el argumento esgrimido por la defensa técnica.

Finalmente, refiere la apelante que el procesado MENA BEITÍA ha mantenido buena conducta desde que se entregó voluntariamente. Al respecto la Corte ha señalado en jurisprudencia anterior que al examinar el tenor de lo establecido en el artículo 56 del Código Penal, el juez tiene la facultad de fijar la pena dentro de los límites que se señalan para cada delito, facultad que es discrecional.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia de 15 de enero de 1999 solo en el sentido de sancionar a HUMBERTO SANTAMARÍA SÁNCHEZ (A) "Diablo" o (a) "Niño" como cómplice secundario a la pena de 6 años de prisión y CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GUSTAVO IVAN ZARRAONANDÍA GONZÁLEZ SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MARIA LUZ BEITIA DE PONCE. MAGISTRADA PONENTE. GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 10 de septiembre de 1999, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, luego que un Jurado de Conciencia en audiencia oral y pública celebrada el 30 de junio de ese año, declarara CULPABLE a GUSTAVO IVÁN ZARRAONANDÍA GONZÁLEZ del homicidio doloso en detrimento de María Beitía de Ponce, le impuso la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS POR IGUAL TÉRMINO (fs.420-432vt).

El fallo en comento, fue apelado al momento de notificarse por el licenciado Edwin Alvarez C., Fiscal Primero Superior del tercer Distrito Judicial y la licenciada Micaela Morales Miranda, Defensora de Oficio. Ambos letrados presentaron en tiempo oportuno los escritos respectivos, por lo que se concedió el recurso en el término que determina la ley procesal. Corresponde así, examinar las pretensiones de los apelantes.

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

El licenciado Alvarez señala que a pesar que el Tribunal A Quo al momento de fijar la pena base expresa que lo hace ajustándose a los ordinales 1, 3, 4, 5, 6, y 7 del artículo 56 del Código Penal y las circunstancias del caso, su decisión no consulta esos factores que establece esa normativa.

Afirma que ello es así, porque optó por casi el mínimo de la pena, no obstante que se trata de un delito que extinguió el bien jurídico más importante del ser humano; además que el victimario mantenía una relación marital con la víctima.

Agrega que el procesado tampoco hizo nada para brindarle los auxilios necesarios a su víctima, no facilitó la oportuna intervención de los agentes policiales en tal sentido y se ausentó inexplicablemente del lugar sin interesarse en lo más mínimo en la suerte de quien hasta ese momento era su mujer.

Por tanto reitera que no consideró el Tribunal de Primera Instancia los factores del artículo 56 del código punitivo a lo cual está obligado por imperativo legal. Y que en su fundamentación por ningún lado pone de relieve estos aspectos que lógica y racionalmente lo hubiesen llevado a fijar como pena base por lo menos la mitad del intervalo penal para este tipo de delito.

Considera la representación del Ministerio Público, que se supervalora el testimonio de Javier Guerra Rodríguez para desvirtuar los testimonios que hablan de las desavenencias entre Zarraonandía González y la señora Beitia de Ponce, cuando está acreditado que dicho testigo es un mitómano.

Finalmente no comparte la opinión del A-Quo de que el uso de arma de fuego en el presente caso es un elemento constitutivo del delito de homicidio, afirmando que no es cierto que su uso es esencial para la comisión de ese ilícito.

Afirma que esta especial agravación que estableció sabiamente el legislador no puede ser desatendida bajo ese criterio, pues sería desconocer el propósito manifiesto de la ley de agravar la comisión del homicidio a través de una arma de fuego, pues ello revela un mayor grado de agresividad y peligrosidad.

Por tales razones, concluye solicitando que se revoque la sentencia impugnada en el sentido de condenar al señor Zarraonandía González por el delito de homicidio agravado conforme al artículo 67, numeral 7 del Código Penal y considerar los factores del artículo 56 al momento de proceder a fijar la pena base correspondiente (fs. 435-437).

Por su parte, la licenciada Morales Miranda, considera, contrario al tribunal A-Quo, que sí existen circunstancias atenuantes que ponderar.

Señala en ese sentido, que su cliente trató de ayudar a la señora Beitia de Ponce cuando la traslada a la casa y pide ayuda a su tía; cuando trata de detener un taxi, lo que no logró dada la hora; cuando trató de llamar una ambulancia pero el teléfono de la casa no se podía marcar; cuando le limpió la cara y trató de que ésta expulsara la bala intentando así que no muriera.

Agrega que incluso intentó su defendido quitarse la vida posteriormente por la propia desesperación de no lograr ayudarla.

Situaciones que en su criterio permiten inferir el arrepentimiento, pesadumbre y pesar por el hecho ocurrido; por lo que considera se debe evaluar esta atenuante al computar la pena.

Por otra parte, afirma que su cliente no tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo, porque consta en autos que hasta inmediatamente antes del hecho tanto Zarraonandía como la señora Beitía de Ponce no tenían problemas y se veían como una pareja enamorada y fue producto de un forcejeo la lesión mortal, lo que no ha sido desacreditado por la doctora Luz Silvera, quien pertenece a la Medicatura Forense.

En virtud de tales consideraciones, solicita se reforme la decisión apelada disminuyendo la pena aplicada al señor Zarraonandía González con base a las atenuantes contenidas en los numerales segundo, cuarto y octavo del artículo 66 del Código Penal (fs. 439-440).

OBJECIONES A LAS PRETENSIONES DE LOS APELANTES

Al dar respuesta al traslado la representación fiscal, representada en esta oportunidad por la licenciada Idalgis Olmos de Sánchez, discrepa de lo señalado por la defensa en su escrito de apelación, afirmado que no se da la atenuante del arrepentimiento.

Señala así, que de la declaración de Carlos Alberto Hurtado González (fs. 48-51) se desprende que fue éste quien al llegar al lugar de los hechos sale de la casa para llamar a un taxi, pero al no pasar ninguno entró nuevamente a la casa y es cuando llegó la policía, y afirmó que cuando llegó al lugar de los hechos su hermano no estaba allí y ninguno le hizo comentario sobre aquel.

En cuanto a lo declarado por el sindicado (fs. 111-120) considera que nada de ello constituye actos que pudieran disminuir las consecuencias del hecho donde perdió la vida la señora Beitía de Ponce.

Agrega que por el contrario, el sindicado abandonó el lugar para dirigirse a la casa de su madre dejando a la hoy occisa en estado moribundo, puesto que cuando la señora Maritza Aparicio y Carlos Hurtado llegaron a la escena, Zarraonandía González no estaba en el lugar.

Concluye indicando que para que el arrepentimiento pueda ser considerado como atenuante debe estar acreditado en autos (fs. 443-446).

Por su parte, la licenciada Morales Miranda, en oposición al escrito de apelación presentado por el representante del Ministerio Público, solicita no se acceda a la solicitud de la agravación de la pena impuesta a su representado.

Sostiene que el Tribunal Superior fijó la pena base dentro de los parámetros que establece el artículo 56 en relación con el artículo 131 del Código Penal, es decir dentro de los límites mínimo y máximo señalados para el delito de homicidio simple.

En cuanto a la agravante contenida en el ordinal 7° del artículo 67 del Código Penal, expresa que el uso de armas sean éstas de fuego, cortantes o punzo cortantes, etc, ha sido considerada por la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, como un elemento esencial al delito de homicidio.

Por tanto, solicita no se acceda a la solicitud de agravación de la pena a su representado Zarraonandía González (fs. 448-451).

ANÁLISIS DE LA SALA

La representación fiscal centra su disensión en dos aspectos. Primero, que al establecer la pena base, el Tribunal A-Quo no consideró debidamente los factores contemplados en el artículo 56 del Código Penal, especialmente los numerales 1, 2, 3 y 6.

En primer lugar, la conducta típica, antijurídica y culpable del procesado fue encuadrada en el artículo 131 del Código Penal que tipifica el homicidio simple y sanciona a su infractor con una pena que oscila entre 5 y 12 años de prisión.

Luego al momento de graduar la pena a imponer, el Tribunal de Primera Instancia manifestó que debía considerar los presupuestos establecidos para tal finalidad en el artículo 56 del Código Penal. Y señaló que al ajustar los ordinales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Código Penal, la pena base debía fijarse en seis (6) años de prisión.

Es así, que al fijar la pena consideró el siguiente cuadro fáctico:

> "... si bien es cierto, en autos no constan declaraciones que señalan por un lado que gustavo Iván Zarraonandía tenía problemas con María Luz Beitía de Ponce y que ésta tenía temor de que le causara la muerte, también es cierto que existen testigos que por el contrario señalan que tenían una buena relación. Testigos algunos que se encuentran vinculados por relaciones familiares con el sujeto activo y con la víctima, y otros que han tenido alguna diferencia para con el señor Gustavo Iván Zarraonandía. Sin embargo, el señor Javier Guerra Rodríguez (fs. 219-221), quien labora en el bar Don Clemen y no se encuentra afectado por ninguna relación con las partes del proceso, indica que Gustavo Iván Zarraonandía González y María luz Beitia de Ponce acudían frecuentemente al bar Don Clement al igual que el día de los hechos y que nunca los vio discutiendo, sino compartiendo. Es decir, que luego al llegar a la casa es que ocurre el hecho del cual el único testigo presencial es el propio Gustavo Zarraonandía González, y su versión del forcejeo no es completamente desvirtuada por la doctora Luz Silvera (fs. 285-287). Con posterioridad a la ejecución del homicidio, según el imputado Gustavo Zarraonandía él trató de darse un tiro con el arma lo cual impidió su hermano, circunstancias éstas que son corroboradas por Carlos Alberto Hurtado González (fs. 302-307). En ese sentido, declaran Ivis Migdalia Morales González (fs. 82-87) e Irvis Damaris Morales González (fs. 88-91) quienes señalan que escucharon cuando Gustavo decía "está muerta y yo me mato", por lo cual se observa la conducta posterior del procesado quien no tiene antecedentes penales, ni policivos según documento expedido por la Policía

> Técnica Judicial (f. 187). Por último, es importantes tomar en consideración, que el hecho cometido vulnera la vida el cual es el bien jurídico mayormente tutelado y el cual permite el disfrute y goce de los demás bienes jurídicos amparado por nuestro ordenamiento penal" (fs. 428-429)

Este Tribunal de Apelaciones a examinado las pruebas citadas y considera que el Tribunal Superior al imponer la pena base, realizó una apreciación correcta de los medios probatorios allegados al proceso, de manera discrecional pero ajustada al ordenamiento jurídico penal.

Por otra parte, le cabe razón a la defensa técnica cuando señala en su escrito de oposición a las pretensiones del señor Fiscal, explica que si el "artículo 131 del Código Penal, establece un mínimo de cinco (5) años como pena de prisión a imponer al que causa la muerte de otra, debemos entonces pensar que el tribunal, luego de valorar los parámetros del artículo 56 del Código Penal (como se efectúo), consideró el aplicar la pena de seis (6) años, ya que dentro de los límites seleccionó ésta, atendiendo al hecho imputado y a la persona que es procesada como autora del hecho" (f. 449).

En relación al artículo 56 del Código Penal esta Sala ha reiterado "que por la interpretación de esta norma la pena base impuesta no es modificable cuando no se observen visos de ilegalidad manifiesta y que por tanto, en aras de la independencia judicial, se debe respetar la discrecionalidad del juzgador primario" (sentencias de 18 de julio de 1996, 20 de mayo de 1998, 20 de enero 30 de agosto de 1999).

En cuanto al otro punto objetado por el señor fiscal, se advierte que en su escrito de apelación el Ministerio Público concluye solicitando se condene al señor Zarraonandía González por "el delito de homicidio agravado conforme al artículo 67, numeral 7 del Código Penal", cuando ello no forma parte de las distintas circunstancias por las cuales el delito de homicidio se agrava según el artículo 132 del Código Penal.

El artículo 67 del Código Penal se refiere a circunstancias agravantes ordinarias comunes, modificativas de la responsabilidad penal cuando no estén previstas como elementos constitutivos o como agravantes específica de un determinado hecho punible.

Ahora bien, se refiere el apelante al reconocimiento de la circunstancia contenida en el numeral 7 del artículo 67 del Código penal, específicamente la que agrava la pena cuando el delito es perpetrado con armas.

Al respecto tenemos que de manera reiterada esta Sala ha manifestado "que en la ejecución del delito de homicidio el arma es un instrumento esencial, ya que sólo por excepción se podría concebir su comisión sin el auxilio de tal recurso" (Fallos de Octubre de 1991, Enero 4 de 1993, Mayo 30 de 1995).

La defensa técnica en su escrito de apelación solicita se reconozcan las circunstancias atenuantes contenidas en los numerales segundo, cuarto y octavo del artículo 66 del Código Penal.

El numeral segundo establece la circunstancia de "no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo".

Al respecto no se puede soslayar, que al ser declarado culpable el joven Zarraonandía González por un Jurado de Conciencia, de la muerte violenta de la también joven María Luz Beitía de Ponce, éste consideró que si tuvo la intención de causar su muerte, lo cual es de suma gravedad.

El numeral cuarto se refiere a la circunstancia del arrepentimiento "cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias".

De conformidad con lo declarado por el procesado, luego del hecho, estuvo esperando un taxi para llevar a la joven herida al hospital, y al no detenerse ninguno, nervioso, cargo a su víctima del portón a la Sala para llamar una ambulancia. Luego se cambió de ropa, tomó el arma y trató de matarse, lo que fue impedido por su hermano. Asustado salió corriendo a la casa de su madre en Pedregal (f. 115).

Como se puede observar, nunca llamó a la ambulancia ni a la policía, lo que hizo fue cambiarse la ropa que estaba manchada de sangre de ropa. Lo anterior, aunado al hecho que el agente intento quitarse la vida luego de lo ocurrido, no son elementos que se adecuen a ninguno de los dos supuestos mencionados en el numeral cuarto.

Esta Sala ha manifestado que "la conducta del agente se toma como arrepentimiento cuando, con posterioridad a la comisión del delito y de manera espontánea, demuestra con sus actos un deseo de reparar o intentar reparar los efectos del mismo" (Resolución de 22 de julio de 1992).

Sin embargo, debemos recordarle a la defensa, que el Tribunal A-Quo tomó como cierto y apreció que el imputado intentó quitarse la vida, como una de las circunstancias para fijar la pena base en seis (6) años, de un delito cuya pena fluctúa entre 5 a 12 años de prisión.

En cuanto a la circunstancia atenuante consignada en el numeral 8° consistente en "cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del tribunal deba ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente", no se advierte aspecto fáctico alguno que permitan disminuirle la pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia.

Luego de las consideraciones expuestas, estima esta Sala que las pretensiones de los apelantes no encuentran asidero jurídico, por lo que el fallo censurado será confirmado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ALBERTO A. PERÉZ HERNÁNDEZ Y OTROS SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE CARLOS HERNÁNDEZ R. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) ENERO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 30 de noviembre de 1998, condenó a los señores MIGUEL CÓRDOBA RÍOS (a) "Tinito" y ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ a la pena de 8 y 12 años de prisión respectivamente, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 2 años, a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad ambulatoria, como responsables del delito de Homicidio Doloso Calificado en perjuicio del CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.

La resolución fue apelada por el procesado ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ, sustentando el recurso en tiempo oportuno y se le corrió traslado a la Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial, Licda. GEOMARA GUERRA DE JONES, quien presentó escrito de oposición.

Surtidos los trámites correspondientes, se concedió el recurso en el efecto suspensivo y corresponde a esta Sala, constituida en Tribunal de alzada, entrar a resolver las pretensiones del recurrente.

EL APELANTE

El procesado estima que, en su caso, las autoridades del Órgano Judicial en un momento dado se han extralimitado en sus funciones al privarlo de libertad y alejarlo de su familia. Señala que no hay motivo, razón ni circunstancia que lo vincule directamente en un homicidio en el que nunca participó sino que un testigo declaró en su contra alegando que tenía que ver con lo acontecido con el finado y luego dijo que no tenía nada que ver con el asunto (Homicidio). (F. 680)

Continúa explicando el apelante que está detenido desde hace cuatro años y quien cometió el hecho punible fue condenado a una pena más baja que la suya, razón por la cual quisiera saber en qué se basan las autoridades competentes para condenarlo a la pena de 12 años, como si hubiera sido el autor principal del hecho. (F. 682)

Manifiesta que en las declaraciones y sumarias consta que es confeso y arrepentido del hecho, lo que no se ha tomado en consideración, motivo por el cual pide que se examine las sumarias para poder deslindar y esclarecer lo ocurrido. (F. 682)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal Segunda Superior señaló que en el acto de audiencia oral quedó demostrada la participación dolosa del procesado PÉREZ HERNÁNDEZ en el hecho punible y la pena impuesta por el Magistrado Sustanciador es cónsona con la realidad procesal de autos y con fundamento en los parámetros que establece el artículo 56 del Código Penal. (F. 696)

En cuanto al testimonio que refiere el recurrente, explica que se examinó al testigo REYNALDO GOODING CENTENO que en ningún momento se contradice en sus declaraciones, sino que aclaró en el interrogatorio realizado en el acto de audiencia oral, lo concerniente a la participación de los dos procesados, lo que el jurado de conciencia consideró válido para fundamentar su veredicto condenatorio respecto a ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ. (F. 696)

Sobre la pena impuesta a MIGUEL CÓRDOBA, al que se le aplicó una sanción más baja, explica la Fiscal que aquél fue condenado a una pena base de 12 años de prisión y la rebaja obedece a que le fueron aplicadas las atenuantes previstas en el artículo 66, numerales 4 y 8 del Código Penal, el arrepentimiento y el interés de contribuir con la administración de justicia al haber solicitado audiencia en derecho.

En virtud de lo anterior, se hizo una disminución de la pena de una sexta parte por cada una de las atenuantes, quedando una pena líquida de 8 años de prisión, lo que no ocurre en el caso del procesado PÉREZ HERNÁNDEZ, pues a criterio de la Fiscal, no existían atenuantes a favor de éste, de allí que la pena aplicada es jurídica y cónsona con la realidad de los hechos examinados en el proceso. (F. 696-697)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La presente causa criminal trata sobre la muerte violenta de CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ocasionada por los señores ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ y MIGUEL CÓRDOBA RÍOS, hecho ocurrido en horas de la noche del 3 de septiembre

de 1995, en la comunidad de Burunga, Calle El Milagro, Sector 8 Norte, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá.

Al tipificar la conducta desarrollada por los imputados, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial consideró que su actuar se adecúa a lo normado en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, es decir, la figura del homicidio agravado por premeditación, cuya sanción oscila entre los 12 y 20 años de prisión, ya que "los procesados actuaron con una programación coordinada, pues días anteriores expresaron que iban a matar al sujeto pasivo a quien identificaban con el sobrenombre de "TULIVIEJA"; actuaron con frialdad de ánimo y transcurrió un tiempo perentorio entre la programación y la comisión del hecho. Los testimonios que sustentan esta característica o circunstancia son los de: REYNALDO JOSÉ GOODING CENTENO y MARTÍN GONZÁLEZ (F. 678)

Corresponde a la Sala examinar el contenido de la sentencia recurrida observando solamente los puntos a que se ha referido el recurrente en el libelo de apelación, tal como lo preceptúa el artículo 2428 del Código Judicial.

Primeramente, indica el procesado que un testigo lo vincula al hecho punible y después alega que no tenía que ver con lo acontecido con el finado.

El único testigo presencial del hecho es el señor REYNALDO JOSÉ GOODING SERRANO quien rindió declaración jurada, primeramente, ante la Policía Técnica Judicial (Fs. 17-19) y luego ante la Agencia de Instrucción (Fs. 144-149; 251-254) y sostiene en las versiones que brindó a las autoridades que, el día de los hechos iba en compañía de CARLOS HERNÁNDEZ, bajando por la Calle El Milagro. Se detuvo en la orilla de la calle a orinar y CARLOS siguió adelante. GOODING CENTENO lo alcanzó y siguieron caminando juntos y vio que le salieron al paso dos sujetos: uno era ALBERTO que venía saliendo de unos árboles de mangos y estaba haciendo disparos al aire; también salió MIGUEL, que venía de la carretera que sale de la bodega "Penonomeña".

GOODING CENTENO y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ se quedaron parados viendo lo que estaba pasando, MIGUEL les apuntó con un revólver 380, luego les disparó al cuerpo y a los pies, como para que no se movieran.

El otro sujeto, ALBERTO, agarró a CARLOS y lo registró, le sacó un revólver calibre 38 que tenía en la cintura, mientras que MIGUEL le apuntaba con el revólver a GOODING CENTENO y le dijo que se mantuviera quieto, que no hiciera ningún movimiento o sino le iba a disparar.

ALBERTO le dijo a CARLOS que no buscara Ley y MIGUEL le dijo a éste "PORQUE NO HACES NADA AHORA" y CARLOS le contestó que dejará eso así y se llevara lo suyo, refiriéndose al revólver que le había quitado ALBERTO. De ahí, MIGUEL le puso una escuadra chica en la cara a CARLOS y le disparó en la boca, sin decirle nada.

ALBERTO le dijo a MIGUEL que porque le había disparado CARLOS, entonces "Fulo" (MIGUEL MEDINA) le dijo que le había disparado nada más en la boca y entonces le apuntó a GOODING CENTENO para dispararle, pero ALBERTO le dijo que no lo hiciera. MIGUEL le dijo a GOODING CENTENO que se tirara al suelo, éste se puso de rodillas con las mano en la nuca, lo patearon y cayó al suelo. ALBERTO le dijo que no buscara Ley.

Luego dejaron ir a GOODING CENTENO quien fue a socorrer a CARLOS HERNÁNDEZ estaba como a unos 20 metros de distancia después de haber sido herido y se cayó al suelo y estaba botando sangre por el cuello. Los atacantes se fueron por los árboles de mango.

Se desprende del testimonio de GOODING CENTENO que PÉREZ HERNÁNDEZ tuvo participación en la comisión del homicidio en perjuicio de CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, pues éste hizo disparos al aire para atemorizar a GOODING CENTENO y a HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y desarmó al hoy occiso dejándolo en indefensión

frente a su agresor.

Cabe señalar que ese testimonio no es el único que vincula a PÉREZ HERNÁNDEZ con la comisión del ilícito, sino que hay otros elementos de prueba de los que se infieren indicios en su contra, como veremos a continuación.

Los cabos CARLOS PASCUALES y ALEJANDRO DELGADO suscribieron informe en el que señalan que tuvieron conocimiento que en la residencia de la señora CANDIDA SAMANIEGO DE LORENZO, la joven AGUSTINA DEL CARMEN LORENZO tenía oculta un arma. Al llegar al lugar, la joven los llevó al patio, por un camino detrás del servicio y debajo de unas piedras, enterrada dentro de dos cartuchos y envuelta en periódico se encontró un revólver calibre 38, con nombre y serie borrado, sin municiones. La joven informó que el arma se la había entregado MARTÍN GONZÁLEZ. (F. 24)

AGUSTINA DEL CARMEN LORENZO SAMANIEGO señaló en declaración jurada que el arma se la entregó MARTÍN, se la llevó como a las seis de la tarde y le pidió el favor de que se la guardara para que nadie la encontrara. Ella envolvió el arma y posteriormente la enterró. (F. 31)

MARTÍN GONZÁLEZ fue entrevistado por detectives de la Policía Técnica Judicial y manifestó que ALBERTO PÉREZ le dijo lo que había pasado, que "Tinito" (MIGUEL CÓRDOBA) le había metido un tiro a "Tulivieja" (CARLOS HERNÁNDEZ), en el pómulo, y le pidió que le cuidara el revólver calibre 38 cañon largo, con seis municiones. GONZÁLEZ se fue a casa de la novia de ALBERTO, la joven AGUSTINA LORENZO, y le dijo que tomara el revólver que era de ALBERTO, se lo entregó en el patio frente a la casa. AGUSTINA tomó el revólver y le pidió que le sacara los proyectiles, él le dejó el arma y se fue. (Fs. 49; 52-54)

De esta declaración se tiene que ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ tenía conocimiento de lo que iba a hacer MIGUEL MEDINA y además pidió ayuda para ocultar el revólver calibre 38, con nombre y serie borrado, que le quitó a CARLOS el día de los hechos y que éste le había quitado a PÉREZ HERNÁNDEZ porque le debía dinero de un robo que habían realizado, como señala el testigo GOODING CENTENO (F. 17).

La Sala debe señalar que el delito por el cual fueron condenados los procesados es el Homicidio Doloso Agravado, contenido en el artículo 132 del Código Penal cuya sanción oscila entre los 12 y 20 años de prisión.

En ese orden de ideas, el Tribunal Superior consideró que la acción llevada a cabo por PÉREZ HERNÁNDEZ y CÓRDOBA RÍOS se dio con premeditación, es decir, que éstos habían planeado la muerte de CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, lo que se desprende de la declaración jurada de MARTÍN GONZÁLEZ, que manifestó que dos semanas antes de que se dieran los hechos, escuchó una conversación entre ALBERTO PÉREZ y MIGUEL CÓRDOBA RÍOS o RENAULT MEDINA, en que decían que iban a "quebrar" a "Tulivieja", es decir, a CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. (F. 55)

Por otro lado, el procesado PÉREZ HERNÁNDEZ manifestó en entrevista ante las autoridades que había tenido problemas con el hoy occiso porque cuatro años atrás habían efectuado un robo en la zona (hoy área revertida) y le debía dinero a CARLOS. Indica que CARLOS también había tenido problemas con "Tini", es decir MIGUEL CÓRDOBA RÍOS, ya que éste había llegado por el lugar (Burunga) con dinero y CARLOS mandó a un sujeto apodado "Moreno" para que le robara.

El entrevistado expresa que MIGUEL le dijo a CARLOS y a REY que se la iban a pagar porque le habían robado su plata; CARLOS y "Tini", es decir MIGUEL, se amenazaban de muerte y después "Tini" se enteró que CARLOS andaba diciendo que lo iba a pelar sea de día o de noche. Estos habían tenido intercambios de bala pero ninguno había salido herido. (F. 67)

El día de los hechos, a eso de las tres de la tarde, PÉREZ HERNÁNDEZ se fue para el río y se encontró con "Tini" y su mujer. Este le dijo que había venido

para el río para ver si se encontraba con esos pelaos (CARLOS y REY) para azotarlos y le manifestó que le había dicho a su mujer que esos pelaos se la tenían velada y que antes de él morirse se moría uno de ellos. Además, MIGUEL le dijo que se metía en el problema de ALBERTO que quería recuperar el revolver y éste le dijo que no se metiera en eso. (F. 68)

En declaración jurada, ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ manifiestó que hizo tiros al aire para asustar a los muchachos (CARLOS y REINALDO) y para que se fueran porque "Tini" tenía pensado agredirlos. El declarante expresa que creyó que ellos se habían ido (CARLOS y REY) pero no se fueron y en ese momento "Tini" aprovechó y encañó a CARLOS en el cachete, mientras que ALBERTO le decía que dejara eso y le decía a REY que se fuera, pero "Tini" también le apuntó a REY y ALBERTO se metió para que los dejara quietos; todavía "Tini" tenía encañonado a CARLOS hasta que disparó el arma. (F. 71)

De estas pruebas se concluye que los procesados ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ y MIGUEL CÓRDOBA RÍOS actuaron con premeditación en la comisión del delito, porque dos semanas antes habían dicho que iban a matar a HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y, el día de los hechos, se reunieron horas antes y hablaron de ello, como señala PÉREZ HERNÁNDEZ.

Por otra parte, los atacantes estaban ocultos, con armas de fuego, esperando al hoy occiso y a su compañero, salieron a su encuentro haciendo disparos y los amenazaron, por lo que éstos no tuvieron oportunidad de repeler el ataque. Aunado a lo anterior, PÉREZ HERNÁNDEZ le quitó el arma a HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ dejandolo en indefensión ante su agresor.

Siendo así las cosas, la Sala considera que la sanción aplicada a los procesados, es decir los 12 años de prisión, es coherente con la realidad de los hechos y se enmarca dentro de los parámetros definidos por la ley para este tipo de conducta reprochable penalmente.

Finalmente, el procesado considera que debió tomarse en cuenta para la aplicación de la pena su confesión y arrepentimiento.

Se debe señalar que la confesión y arrepentimiento son circunstancias que se presentan después de que se ha cometido el delito o hecho punible, los cuales dan lugar a la disminución de la pena a aplicar, pero para que el procesado pueda ser objeto de ese derecho, deben darse las siguientes condiciones:

En el caso del arrepentimiento, éste se presenta cuando el agresor realiza actos posteriores a la ejecución del hecho, los que conllevan a una disminución o intento de disminuir sus consecuencias. (artículo 66, numeral 4, Código Penal)

El procesado PÉREZ HERNÁNDEZ manifestó que luego que MIGUEL CÓRDOBA RÍOS hiriera a HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, este se cayó al suelo, mientras que él se fue y se quedó donde un amigo, regresando a Burunga como a las once de la mañana del día siguiente. (F. 68)

Esta acción es contraria a lo que establece la norma, pues PÉREZ HERNÁNDEZ se retiró del lugar sin prestarle ningún auxilio a la víctima; no hubo de su parte ninguna acción de la cual se desprenda siquiera la intención de disminuir las consecuencias del hecho, por lo tanto no se configuró tal atenuante.

En cuanto a la confesión, atenuante contenida en el numeral 5° del artículo 66 del Código Penal, debe reunir dos requisitos: que sea espontánea y oportuna.

La confesión es espontánea cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente, para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal, y es oportuna cuando no se han dado antes otros elementos probatorios que lo vinculen con el delito realizado.

Lo anterior no ocurre en el caso subjúdice, pues como el mismo PÉREZ

HERNÁNDEZ señala, se fue del lugar en que se suscitó el hecho y regresó al día siguiente siendo detenido por la policía, cuando transitaba cerca de la casa MIGUEL CÓRDOBA RÍOS. (F. 68)

Por otra parte, cuando PÉREZ HERNÁNDEZ fue aprehendido por las autoridades de policía, CEVERINA RODRÍGUEZ, madre del finado, (F. 15-16) y REINALDO JOSÉ GOODING CENTENO (Fs. 17-19) habían rendido declaración jurada ante la Policía Técnica Judicial, señalando a PÉREZ HERNÁNDEZ como uno de los involucrados en el homicidio.

Se observa en informe de la Sub-DIIP que aproximadamente a las 11:30 del 4 de septiembre de 1995, se tenía conocimiento que PÉREZ HERNÁNDEZ mantenía estrecha vinculación con el homicidio de CARLOS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, además de que tenía armas ocultas y no quería cooperar para la localización de dichas armas. (F. 25)

Con base en lo anterior, la Sala considera que no se encuentran fundados los reparos formulados por el recurrente y al no observar visos de ilegalidad en la decisión del Tribunal Superior, es del caso mantener la sanción impuesta a ALBERTO ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 30 de noviembre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CHARLES EDWARDS SUGASTE, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, Licda. GEOMARA GUERRA DE JONES, contra la sentencia de 9 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por la cual se condena a RODRIGO CHARLES EDWARD SUGASTE a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de 2 años, a partir de la pena privativa de libertad ambulatoria.

La pena impuesta tiene su fundamento en la responsabilidad penal que le cabe al procesado por delito de Homicidio doloso agravado en perjuicio del señor LUIS ALBERTO SALAZAR GÓNDOLA.

DISCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE

Plantea la Fiscal que no comparte el criterio de los Magistrados en lo que se refiere a considerar la atenuante de la confesión oportuna y espontánea del agente, así como el reconocimiento del arrepentimiento, por considerar que no operan en el negocio en examen.

En cuanto a la confesión, señala que el imputado, en su declaración indagatoria y a lo largo de la investigación, aceptó la comisión del homicidio y argumentó en su defensa una causa de justificación, la legítima defensa, al señalar que el hoy occiso esgrimió el arma homicida, por lo que se vio obligado a defenderse.

Sin embargo, la excluyente no se acreditó en la encuesta penal, más bien quedó demostrado en la fase sumarial, con el testimonio de DIANET ISEL VELÁSQUEZ VALDÉZ y el protocolo de necropsia, que el hoy occiso se defendió del ataque que inició el procesado con un cuchillo; éste acepta que el arma era de la casa, la describe como un cuchillo de mesa con dientes de serrucho que se llevó para desaparecerlo luego del homicidio, por lo que estima la Fiscal que mal puede considerarse una confesión oportuna tal como exige esta circunstancia atenuante. (F. 284)

Seguidamente, la Funcionaria del Ministerio Público indica que, a su criterio, tampoco se configura el arrepentimiento, toda vez que como el mismo imputado explica en su indagatoria que, luego de tirarle con el cuchillo al hoy occiso, éste salió corriendo por los callejones y él se fue corriendo para calle 9, puso el arma en una casa condenada y luego que guardó el cuchillo salió caminado sin hacerle comentario a nadie sobre lo ocurrido y nunca trató de auxiliar al hoy occiso, ni reparar el daño causado de alguna manera. (F. 285)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Consta en el expediente que en horas de la noche del día 12 de febrero de 1997, LUIS ALBERTO SALAZAR GÓNDOLA fue herido con arma blanca en su casa ubicada en la Calle 10, Domingo Díaz, casa 1,001, cuarto 28, Ciudad de Colón, Provincia de Colón.

De fojas 38 a 50 del expediente, consta el Protocolo de Necropsia donde se observa en las consideraciones médico legales que la causa de muerte del señor SALAZAR GÓNDOLA se debió a un shock hemorrágico, laceración de corazón, por herida producida con arma blanca. (F. 49)

En cuanto a la comisión del hecho punible, se tiene como responsable al señor RODRIGO CHARLES EDWARD SUGASTE, cuyo actuar ilícito fue tipificado bajo la figura del homicidio doloso agravado, tal como se observa en la resolución que se pretende reformar:

> "la conducta reprochable consisten en la acción humana de dar un golpe con un objeto filo cortante, por motivo fútil al sujeto pasivo, produciéndole una herida mortal que le ocasiona la muerte, por tanto se trata de un homicidio doloso, agravado, circunstanciado o calificado, tipificado en el artículo 132 numeral 3 del Código Penal, cuya sanción oscila entre los 12 y 20 años de prisión. Consideramos oportuno señalar que la futilidad consiste en que no había razón para llevar a cabo un acto de tal gravedad, por el solo hecho de que el sujeto pasivo en ocasión anterior había reclamado al sujeto activo que no expresara frases ofensivas contra su hermana." (Fs. 277)

En ese orden de ideas, corresponde entrar a examinar la resolución que se pretende impugnar sólo en los puntos a que se refiere la recurrente y frente a las piezas procesales, a efectos de determinar si hay lugar a la reforma de la sentencia en los términos solicitados por la apelante.

Primeramente, se advierte que el Tribunal A-Quo fijó la pena base a cumplir por el señor EDWARD SUGASTE en 12 años de prisión y le reconoció la rebaja de la sanción con fundamento en la atenuante de la confesión oportuna, arrepentimiento y por solicitar un juicio en derecho, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 66, numerales 4, 5 y 8, disminuyendo la sanción impuesta en una sexta parte por cada una de las atenuantes comunes expuestas, quedando la pena líquida

a cumplir en 6 años de prisión.

Se tiene en el expediente que PETRA SALAZAR GÓNDOLA, que era hermana del hoy occiso, interpuso la denuncia ante las autoridades y manifestó que una amiga de nombre JANETH le contó que RODRIGO había apuñaleado a su hermano y al preguntarsele si tenía conocimiento que el hoy occiso tenía algún tipo de problema con RODRIGO, la denunciante manifestó que el día anterior, 12 de febrero, a eso de las 2:00 a.m su hermano "Lucho" llegó a la casa la agarró por el cabello y le dijo que RODRIGO estaba diciendo que ella era una cochina y le decía a RODRIGO "AHI ESTA DICESELO EN SU CARA" y RODRIGO decía que no había dicho eso y la mamá de éste le dijo "TU DIJISTE ESO" él dijo que no pero que a "Lucho" lo iba a "FOCOPIAR". (F. 16)

Por otra parte, DIANE IZEL VELÁSQUEZ VALDÉS, testigo presencial del hecho, señala que estaba en su casa conversando con "Lucho" (SALAZAR GÓNDOLA) cuando pasó un niño que se llama JOEL y le dijo a aquel que tuviera cuidado porque RODRIGO estaba "daña'o". "Lucho" se echó a reír y dijo que no creía que RODRIGO iba a venir a buscar problema y buscar pelea. (F. 19)

Explica la declarante que le preguntó al hoy occiso a qué se refería y éste le contó que había tenido una discusión con RODRIGO porque éste le había dicho a su hermana que era una cochina.

Luego la señora VELÁSQUEZ VALDÉS siguió conversando con SALAZAR GÓNDOLA y se presentó RODRIGO quien subió unas escaleras que están al lado de la casa de aquella, quien le preguntó: "RODRIGO TU QUE HACER AHI" y éste le contestó que estaba fumando. Al rato vio que RODRIGO tenía a "Lucho" agarrado por el suéter, en la otra mano tenía un cuchillo y le dijo a "Lucho" "VISTE COMO TE GARRO" y le comenzó a tirar con el cuchillo. "Lucho" estaba forcejeando y logró pararse de la silla, continuó forcejeando. La declarante manifiesta que fue a avisarle a los hermanos de "Lucho" que éste había sido apuñaleado por RODRIGO. (Fs. 17-19)

Entrando al examen de las pretensiones de la Fiscal, se observa que ésta considera que en el caso en comento, el A-quo no debió disminuir la sanción con base en la atenuante del arrepentimiento, toda vez que en la misma declaración del imputado se observa que éste no auxilio a su víctima.

Se debe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico penal, la atenuante común del arrepentimiento se presenta cuando el agente, por actos posteriores a la ejecución del hecho, ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. (Artículo 66, numeral 4, Código Penal)

La jurisprudencia concibe que ésta atenuante común se configura cuando el imputado procura anular o disminuir las consecuencias del delito, proporcionando a la víctima atención médica, quirúrgica o asistencial reveladora de un positivo arrepentimiento.

En éste caso, no se advierte que el procesado haya realizado una acción posterior a la comisión del ilícito que permita inferir el arrepentimiento, pues, como señala la testigo VELÁSQUES VALDÉS, el agente hirió a SALAZAR GÓNDOLA y se retiró caminado del lugar, mientras que el herido salió corriendo para su casa. (F. 18)

Por otra parte, en declaración indagatoria, EDWARD SUGASTE manifestó que luego de tirarle con el cuchillo a SALAZAR GÓNDOLA, éste se fue corriendo por los callejones y él salió corriendo para calle 9, dejando el arma en una casa abandona. (F. 31)

Siendo así las cosas, esta Superioridad concluye que EDWARD SUGASTE no realizó acción alguna de la cual se desprenda siquiera la intención de disminuir las consecuencias del hecho, por lo tanto no se configuró la atenuante del arrepentimiento.

En segundo lugar, sostiene la Fiscal que en el caso en examen no concurre la atenuante de la confesión oportuna y espontánea del agente (numeral 5, artículo 66 del Código Penal), porque, si bien EDWARD SUGASTE al rendir indagatoria admitió la comisión del hecho, no menos cierto es que señaló que su actuación se dio en el marco de la legítima defensa, lo que sostuvo a lo largo del proceso pero no pudo probar.

Coincide la Sala con la recurrente en que no se configura la atenuante de la confesión, pero no es porque el argumento de la legítima defensa no llegó a comprobarse, sino porque la doctrina y la jurisprudencia reiterada de esta Corte han establecido las pautas para la correcta compresión de esta circunstancia atenuante común. Así se tiene que la confesión es espontánea cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal y es oportuna cuando no se han dado antes otros elementos probatorios que lo vinculen con el delito realizado, siendo necesario que ambos elementos se den en el acto de la confesión.

Si bien el imputado se entregó a las autoridades el día de los hechos (F. 23), señaló el lugar en donde escondió el arma homicida (F. 24), esto se traduce en actos de colaboración para con las autoridades investigadoras, pero no en una confesión, pues ya existía en su contra una denuncia interpuesta por PETRA SALAZAR GÓNDOLA que era la hermana del hoy occiso y la declaración jurada de la señora DIANE IZEL VELÁSQUEZ VÁSQUEZ quien lo había señalado como la persona que hirió de muerte a SALAZAR GÓNDOLA, señalamiento directo que lo vinculaba al hecho.

Por las consideraciones que anteceden, la Sala concluye que al no concurrir las circunstancias atenuantes que fueron reconocidas por el Tribunal de primera instancia, debe descartarse la disminución de las 2/6 partes de la pena que a tal título fue decretada, por lo que corresponde imponer a EDWARD SUGASTE una pena líquida de 10 años.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, REFORMA la sentencia apelada solo en el sentido de condenar a RODRIGO CHARLES EDWARD SUGASTE a la pena de 10 años de prisión por la comisión del delito de Homicidio Agravado en detrimento de LUIS ALBERTO SALAZAR GÓNDOLA.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A LUCIO ROBLEDO MOYA Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Como consecuencia del veredicto de culpabilidad emitido el 28 de mayo de 1999 por el Jurado de Conciencia, el Segundo tribunal Superior de Justicia mediante sentencia del 6 de agosto de 1999, CONDENÓ a LUCIO ROBLEDO MOYA y a JULIO CÉSAR DE LEÓN DANCINES , de generales conocidas en autos, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS POR IGUAL TÉRMINO, como autores del delito de homicidio agravado en perjuicio de

Alberto Ramos Tesis.

Esa decisión jurisdiccional al momento de notificarse fue apelada por ambos procesados, así como el licenciado Danilo Montenegro, defensor del señor De León Dancines. Por presentado los escritos respectivos corresponde a esta superioridad examinar el motivos de la disensión.

FUNDAMENTO DE LOS APELANTES

Como resumen de los dos manuscritos presentados por el procesado Lucio Robledo Moya, quien afirma ser inocente del homicidio por el cual se le ha condenado, se extrae que tiene 29 años de edad, de los cuales lleva detenido nueve años pagando una condena de 20 años de prisión.

Señala que no puede ser posible que a escasamente 3 a 4 años de ser candidato para el beneficio de libertad condicional, se le condene por un homicidio ocurrido en una de las galería de cárcel Modelo, donde es de todos conocidos que habitan alrededor de cuatrocientos presos.

Además afirma que al momento de los hechos se encontraba en el comedor cuando los anti-disturbios comenzaron a lanzar gases lacrimógenos dentro de la cuarta galería de la cárcel Modelo. Por tanto, solicita a esta Corte Suprema examine su caso (fs. 464-467 y 468-471).

Por su parte, el procesado Julio César De León Dancines sostiene que entre los acusadores, señores Francisco Acevedo y Alberto Bustamante, existe falsedad porque uno indica que los hechos ocurrieron a las 12:45 de la tarde y el otro a las 5:30 de la tarde.

Agrega que en la cárcel Modelo nunca apareció la nota que escribiera el cabo Henry cuando llevaba al hoy occiso al hospital, donde apuntó los nombres de dos personas que según le dijo el hoy difunto, habían cometido los hechos.

Por otro lado, sostiene que no se ha negado a declarar y que la Fiscalía nunca lo llamó a declarar, por lo que las sumarias están incompletas.

Concluyendo que es víctima de una injusticia por parte de las autoridades por lo que pide la mayor atención en su caso (fs. 472-474).

El licenciado Danilo Montenegro, Defensor de Oficio del procesado Julio César de León Dancines, es del criterio que dado que en este proceso penal ni siquiera se logró establecer el móvil del homicidio ni rencilla entre los imputados y occiso, mal podría asegurarse entonces, que hubo premeditación.

Por tanto, solicita se reforme la sentencia apelada en el sentido de calificar el hecho como homicidio simple y se fije la pena con fundamento al artículo 131 del Código Penal (FS. 478-479).

En el mismo sentido manifiesta su disconformidad con el fallo apelado, el licenciado Luis Carlos Arosemena Ramos, Defensor de Oficio del procesado Lucio Robledo Moya.

Sostiene que en la investigación realizada en torno a la muerte de Ramos Tesis nunca se pudo determinar con precisión a todos los involucrados y cuales fueron los motivos para que se originara la reyerta porque los señalados no participaron en las diligencias de indagatorias realizadas. Y los amigos del difunto sólo dijeron sus verdades.

Por tales razones solicita a esta corporación de justicia, se reforme la sentencia apelada y se fije la pena con fundamento en el artículo 131 del Código Penal (fs. 480-482).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial, en su escrito de oposición a las pretensiones de los apelantes, solicita confirmar la sentencia apelada.

Considera que la premeditación debe estar acreditada en el proceso para que la misma sea considerada como agravante. Y que en el presente caso, tal situación se desprende de las declaraciones del testigo Francisco Acevedo Pinilla y de Alberto Rodríguez Bustamante.

Por otra parte indica, que en autos se demostró que el homicidio estaba vinculado con los antecedentes de los homicidios de Felipe Solís Quintero y Troman Camarena, consultables a fojas 325 a 353 del proceso, y que según su criterio se concretizan por motivos de venganza y demostración de fuerza, a los que de una u otra forma, violan el Código del silencio que impera en las cárceles por los líderes de bandas (fs. 484-488).

FUNDAMENTO DE LA SALA

En primer lugar se advierte que los procesados Robledo Moya Lucio y Julio Cesar De León Dancines, no impugnan la condena emitida por el Tribunal Superior sino que centran su disconformidad con el veredicto de culpabilidad proferido por el jurado de conciencia, afirmando que son inocentes del delito por el cual fueron declarados culpables.

Al respecto debemos indicar, que según lo normado en el artículo 2320 numeral 1 del Código judicial, el presente proceso penal fue sometido a los trámites del juicio con la intervención de jurados de conciencia. Y como los procesados Moya Lucio y De León Dancines no renunciaron a ese derecho tal como lo dispone el artículo 2321, se llevó a cabo la audiencia oral y pública el 28 de mayo de 1999.

Luego de escuchar los alegatos a favor y contra los procesados Moya Lucio y De León Dancines, el cuerpo de jurados de conciencia, elegido según las normas de procedimiento, procedió a deliberar a efecto de resolver por mayoría de votos sobre la culpabilidad o inocencia de aquellos.

Es así, que declararon a Moya Lucio y a De León Dancines culpables de haber participado en la muerte de Alberto Ramos Tesis (fs. 371 y 373). Correspondiendo al tribunal de la causa emitir la sentencia respectiva, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 2389 del Código Judicial.

Es importante indicar, que esta Sala como Tribunal de Apelaciones sólo puede realizar modificación al veredicto de culpabilidad emitido por un jurado de conciencia, en circunstancias extremas o excepcionales como cuando se ha violentado el Debido Proceso y ello ha incidido en la decisión. (Cfr. Fallo de 27 de septiembre de 1999).

Afirma el procesado Julio César De León Dancines que la investigación está incompleta porque nunca lo llamaron a declarar.

Al respecto debemos indicar, que la sentencia objeto del examen se hace constar que De León Dancines se acogió al artículo 22 de la Constitución Nacional al ser requerido a rendir declaración indagatoria (fs. 459 y 58-59).

Se observa que se le nombró a la licenciada Mireya Rodríguez Monteza, Defensora de Oficio para que lo representara (fs. 110 y 130).

Sin embargo el señor De León Dancines otorgó poder especial, amplio y suficiente a la licenciada Ana María Madrid Moreno, quien a su favor presentó escrito de pruebas ordinarias (fs. 196-197); incluso solicitó la suspensión de la audiencia programada para el 22 de mayo de 1998 (f. 255), petición acogida por el Tribunal Superior (fs. 256-257).

Posteriormente ante la secretaría del Tribunal el 11 de diciembre de 1998 el procesado De León Dancines solicitó se le designara defensor de oficio (f. 302); y se designó al licenciado Danilo Montengro (f. 303), quien desde ese momento ha defendido los intereses del procesado. En ese sentido presentó escrito (f. 314), alegó a su favor en el acto de audiencia oral y pública (fs. 377-449), e interpuso el recurso de apelación contra la sentencia emitida en su contra (fs. 478-479).

Incluso en el acto de audiencia, el Magistrado Presidente invitó al señor De León Dancines a dirigirse a los señores del Jurado de Conciencia, pero decidió darle la palabra a su abogado defensor (f. 396).

Por otro lado, los abogados defensores de los procesados, coinciden en objetar el fallo apelado en el sentido de afirmar que no se está ante un homicidio agravado por premeditación.

El Tribunal A-Quo manifestó "que es innegable que el homicidio se produjo cuando ROBLEDO MOYA y DE LEÓN DANCINES, hirieron a ALBERTO RAMOS TESIS en medio de una riña simulada y planificada en la desaparecida Cárcel Modelo".

Luego subsumió la conducta ilícita de ambos procesados en el numeral 2° del artículo 132 del Código Penal, al concluir que "no cabe duda que los agentes activos premeditaron la muerte de RAMOS TESIS, pues los mismos tenían armas blancas en sus manos, lo que hace deducir que su intención era ocasionarles la muerte, aunado a ello no existe indicio que se trató de una riña esporádica, por el contrario los testigos señalan que un grupo de personas se congregaron para asesinar al hoy occiso, lo que deja claro que todo el hecho estaba previamente planificado".

También se refirió el Tribunal Ad-Quo a que la participación de Robledo Moya y De León Dancines se acredita con la deposición de los testigos Francisco David Acevedo Pinilla (fs. 19-21), Alberto Rodríguez Bustamante (28-31), y la del agente policial Roberto Francisco Henry Rodríguez (fs. 44-46) quienes los señalan como las personas autoras del hecho.

Interesante es indicar que es Alberto Rodríguez Bustamante quien se refiere al motivo por el cual mataron a Alberto Ramos Tesis. Afirma que se debió a que éste no permitía el abuso que cometían Robledo Moya y De León Dancines (a) "Keky", en el sentido que se dedicaban a robarle a los muchachos en el pasillo, y cuando los detenidos recibían sus visitas, ellos le quitaban el dinero que los familiares le dejaban (fs. 28-31).

Por otro lado, Francisco Acevedo Pinilla es claro cuando afirma que el hoy occiso se encontraba en el pasillo de la galería haciendo la polla (juego de caballo) cuando es llevado por sus victimarios, quienes lo hieren de muerte (fs. 19-21).

Ahora bien, concluye esta superioridad, que en efecto se está ante un homicidio calificado por premeditación, toda vez, que los procesados, incluso acompañados de otros, como se desprende de lo declarado por el señor David Acevedo (fs. 19-21), fueron a buscar al señor Ramos Tesis y lo hirieron de muerte.

Se advierte que hubo un propósito firme y meditado de causarle la muerte al señor Ramos Tesis, acompañado de tranquilidad y frialdad de ánimo, características éstas del homicidio premeditado.

De otra parte, esta Sala advierte que la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia con fecha 11 de febrero de 1998, informa al magistrado sustanciador de esta causa, que en ese tribunal se tramitaba otro proceso penal contra Julio Cesar De León Dancines del cual conoce el Magistrado Andrés Almendral, distinguido con el número de entrada 2241; cuya audiencia fijada para el 4 de febrero de 1998 se suspendió porque según información de la Fiscalía

Tercera Superior el detenido De León Dancines se había evadido de la isla Penal de Coiba (f. 230).

El 6 de agosto de 1998 mediante oficio SG-2086 la Secretaria General de la Policía Técnica Judicial informa al magistrado sustanciador que el imputado De León Dancines fue detenido según lo solicitó en oficio N° 117.

Además le informa que el señor De León Dancines mantiene dos casos pendientes: uno por el homicidio de Felipe Solís Quintero, según consta mediante oficio girado por el Magistrado Andrés Almendral y otro por el homicidio de César Alejandro Trotman según oficio de 18 de mayo de 1998 emanada de la Fiscalía Auxiliar de la República (f. 270). De tales oficios constan copias (fs. 271-272 y 273).

Se advierte así, que en la presente causa se tenía conocimiento de los procesos penales seguidos al señor Julio César de León Dancines, lo que implica un concurso material de delitos (art. 64 del Código Penal) por tanto correspondía la acumulación de esos procesos.

Dada la facultad concedida por la ley al juzgador de segunda instancia, de examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad al resolver un recurso o consulta (art. 2301 del Código Judicial), se hizo necesario informarnos en qué estado procesal se encontraban tales procesos seguidos al señor De León Dancines.

Así, el día 25 de enero de este año a las 10:40 a. m., este despacho vía telefónica se comunicó con el licenciado Encarnación Arrocha, Secretario del Segundo Tribunal Superior de Justicia, quien gentilmente nos informó que respecto al proceso penal seguido a De León Dancines por el homicidio de Felipe Solís Quintero se realizó la audiencia en derecho el 23 de junio de 1999. Y en el proceso por el homicidio de César Alejandro Trotman también se realizó audiencia en derecho en el mes de diciembre del año pasado.

Por tanto, sujetándonos al Debido Proceso, el procesado tiene derecho a que si se emitiera en aquellos procesos un fallo condenatorio en su contra, se acumulen los mismos con el objeto de unificar las penas impuestas, toda vez que "la legislación nacional acoge como mecanismo para concretar la pena imponible en los casos de concurso material el principio de acumulación jurídica, que es un límite a la acumulación material de penas (art. 64 del Código Penal)". (Sala Penal 28 de diciembre de 1999).

La acumulación de procesos tiene lugar "cuando contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones distintas" (art. 2291 del Código Judicial).

Ahora bien, "cuando un imputado cometa otros delitos durante el proceso, el conocimiento de la causa sobre este último toca la Tribunal anterior, y se suspenderá el proceso que se hubiere iniciado primero, hasta poner a todos en estado de que puedan seguirse conjuntamente" (art. 2293 del Código Judicial).

En este sentido debió procederse en el presente caso, toda vez que a el señor De León Dancines estando detenido en la Cárcel Modelo, se le investigó por otro delito cometido en ese centro carcelario, en este caso, por el homicidio del señor Alberto Ramos Tesis, del cual se emitió un veredicto condenatorio por parte de un jurado de conciencia.

También de conformidad con lo normado en el artículo 2003 del Código Judicial:

> "La acumulación de los procesos será dispuesta en los casos de unidad y pluralidad de delitos, de conformidad al Capítulo III, del Título III, del Libro I del Código Penal, a petición de parte o de oficio, en cualquier momento. El Juez tendrá amplias facultades a fin de que el proceso penal se concluya de conformidad a las

disposiciones del presente Código.

Si los expedientes se encontraren en diferentes Tribunales, el de mayor jerarquía, advertido de la existencia de pluralidad de procesos o la no acumulación por los tribunales inferiores, determinará, en cualquier etapa del proceso, el juzgado competente.

Los Servidores Públicos que actúen como jueces, serán responsables por los daños y perjuicios que resulten de no haberse pronunciado sobre la solicitud de acumulación".

Corresponde así, declarar nulo el fallo sólo en cuanto a la pena impuesta por el Segundo Tribunal al procesado De León Dancines, a objeto que se suspenda la emisión de la misma y se proceda a la acumulación de los procesos que tambien se le siguen por el delito de homicidio de Felipe Solís Quintero y César Alejandro Trotman, casos donde ya se celebró audiencia en derecho, a objeto de que si se declara la culpabilidad en tales casos, se unifiquen las penas impuestas en una sentencia única, aplicando las reglas del concurso material.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE lo siguiente:

CONFIRMA la pena impuesta a LUCIO ROBLEDO MOYA;

DECLARA LA NULIDAD SOLAMENTE DE LA PENA IMPUESTA a JULIO CESAR DE LEÓN DANCINES y

ORDENA al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial proceda de conformidad con lo explicado en la parte motiva de esta resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE DAYSI BADILLO M., SINDICADA POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE MARISOL HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresa a esta Corporación Judicial, solicitud de fianza de excarcelación interpuesta a favor de DAYSI BADILLO M., sindicada por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de MARISOL HERNÁNDEZ.

El Fiscal Primero Superior, LIC. JUAN ANTONIO TEJADA, al momento de notificarse de dicha resolución, apela, por lo que se concede en el efecto diferido a fin de que sea resuelta la alzada.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El día 31 de octubre de 1999, en horas de la tarde, la señora DAYSI BADILLO MONTENEGRO, concurrió a la residencia de la señora MARISOL HERNÁNDEZ TEJADA, ubicada en la Barriada Torrijos Carter, Calle Principal, Sector No. 5, Casa # 672-A, le roció la casa y el cuerpo con gasolina y luego prendió fuego, por lo que resultó afectada con quemaduras de segundo y tercer grado, es decir, en el cuello, tórax anterior y posterior, abdomen y miembros superiores e inferiores.

Dichas lesiones ocasionadas a la señora HERNÁNDEZ TEJADA, pusieron en peligro la vida de ésta, además, se le asignó una incapacidad provisional de 90 días.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, debemos realizar un examen de las piezas y elementos probatorios que reposan en el expediente a fin de efectuar una calificación provisional de la conducta realizada por la señora DAYSI BADILLO MONTENEGRO.

Así, se tiene que la señora MARISOL HERNÁNDEZ TEJADA (fs. 65-79), manifiesta, que el día sábado 31 de octubre su exmarido, señor ALCIBIADES HERNÁNDEZ, se presentó a su residencia ubicada en Torrijos Carter, para dejarle el dinero de la pensión a sus hijos. Posteriormente, mientras su exmarido estaba dormido en el sillón, ella planchaba una ropa en su cuarto, de pronto pudo observar a través de la ventana de ornamentales, el reflejo de la señora DAYSI BADILLO, que venía hacia su casa, por lo que fue a la sala a ver lo que pasaba; fue entonces cuando la imputada le roció gasolina en el cuerpo y en toda la casa, y luego prendió un fósforo que tiró en el piso, logrando las llamas alcanzar el cuerpo de la señora HERNÁNDEZ TEJADA.

El menor ALCIBIADES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (fs. 11-12), manifestó que el día de los hechos, iba para el lavamático, cuando de pronto se encontró con la señora DAYSI BADILLO MONTENEGRO, quien le preguntó, que si su mamá (MARISOL HERNÁNDEZ) estaba en casa, y él le contestó que no, debido a que anteriormente habían tenido problemas y que DEYSI la había amenazado. Agrega, que pudo observar por medio de una de las ventanas de su casa, cuando la imputada BADILLO encendía un fósforo para quemar su casa.

Por su parte, la sindicada DAYSI BADILLO MONTENEGRO (fs. 27-30) manifiesta, que el día 31 de julio de 1999, fue a buscar a su marido ALCIBIADES HERNÁNDEZ a la casa de su ex-concubina, señora MARISOL HERNÁNDEZ ubicada en Torrijos Carter, debido a que eran las cuatro de la tarde y todavía no se había presentado a su hogar ubicado en Tocumen. Indica, que al llegar al lugar de los hechos, encontró a su concubino "casi semi desnudo en la cama y ella estaba en toalla sentada en la cama y estaba con una pipa y una vela o encendedor prendiendo la pipa esa y yo llegué y dije "oye ALCIBIADES y ahora que me vas a decir" y él apenas me vio dijo "oye Chomba no es lo que tú piensas" y salió corriendo y la señora MARISOL esa se burlaba de mi diciendo "viste gorda tú bien sabes que estas pasada de moda" y me decía el poco de cosas y cuando yo lo quiera lo voy a tener aquí así", por lo que reaccionó, tirándole un envase de leche Klim que en interior contenía aceite quemado o diesel.

A foja 20 del expediente, se encuentra el informe del Dr. AQUILES ESPINO, médico forense del Instituto de Medicina Legal, en donde señaló, que la señora MARISOL HERNÁNDEZ TEJADA sufrió quemaduras de segundo y tercer grado (cara, cuello, tórax anterior y posterior, abdomen, miembros superiores e inferiores). Además señala, que las lesiones si pusieron en peligro la vida de la afectada, por lo que se le concedió una incapacidad provisional de 90 días.

De las pruebas recabadas en autos, se desprende que la conducta realizada por la señora DAYSI BADILLO MONTENEGRO se ubica dentro del homicidio agravado en grado de tentativa, por lo que de conformidad con el artículo 2181 del Código Judicial, el delito de homicidio en grado de tentativa tanto en su modalidad simple como agravada se encuentra dentro del catálogo de delitos que admiten excarcelación, dado que tienen penalidad inferior a los cinco (5) años de

prisión.

Ahora bien, el Tribunal A-Quo fijó la cuantía excarcelaria de la señora DAYSI BADILLO en B/.2,000.00, sin embargo consideramos que dicha suma resulta excesiva y no consulta los criterios que rigen el derecho de excarcelación legalmente instituido, toda vez, que si bien el delito cometido por la imputada BADILLO reviste una forma agravada, no menos cierto es, que se deben tomar en cuenta otras circunstancias establecidas en el artículo 2166 del Código Judicial, como es el estado económico y social de la imputada.

Siendo así, observa la Sala Penal, que la imputada BADILLO MONTENEGRO, cuenta con 38 años de edad, vive en un sector humilde del Corregimiento de Tocumen (Sector Altos del Lago); realizó estudios hasta sexto grado, y labora como trabajadora manual devengando sesenta dólares (B/.60.00) por quincena.

Además, tiene ocho (8) hijos, de los cuales tres (3) son con su actual marido, señor ALCIBIADES GONZÁLEZ, los cuales según Certificados de Nacimiento expedidos por la Dirección General de Registro Civil responden a los nombres de YASMIN DEL CARMEN GONZÁLEZ BADILLO (10 años), JEAN CARLOS GONZÁLEZ BADILLO (7 años de edad) y NAIROBYS GONZÁLEZ BADILLO (3 años de edad). (fs. 44-46)

Por último, la imputada BADILLO MONTENEGRO, no registra antecedentes penales ni policivos sancionados mediante resoluciones en firme. (f. 59)

Por lo anterior, consideramos, rebajar la cuantía de la fianza de excarcelación a favor de la imputada BADILLO MONTENEGRO, en quinientos balboas (B/.500.00), toda vez, que la excarcelación es un derecho que debe otorgarse a la luz de las circunstancias que rodean a la persona a quien se concede esta libertad caucionada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto de 29 de diciembre de 1999, en el sentido de FIJAR la cuantía excarcelaria a favor de DAYSI BADILLO MONTENEGRO en QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUSTITUCIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA

SOLICITUD DE REEMPLAZO DE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE EMILIO OLIVA LINARES, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD
PERSONAL EN DETRIMENTO DE JORGE L. DELGADO VILLAREAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca Palacios formalizó recurso de apelación contra la resolución calendada 14 de octubre de 1999, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá denegó la solicitud de reemplazar la detención preventiva por otra medida cautelar a favor de Emilio

Eliades Oliva Linares, sindicado por el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de Jorge Luis Delgado Villareal.

El recurrente solicita que se sustituya la detención preventiva por las medidas cautelares que contemplan los artículos 2147-J y 2147-K del Código Judicial, adicionados por la Ley 39 de 1999, por considerar que su defendido confesó que accidentalmente le causó la muerte a Delgado, porque es el único apoyo de su familia y que no es una persona peligrosa (fs. 18-20).

Por conocidos los argumentos del apelante, la Sala pasa a resolver la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en el escrito de apelación, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

La Corte disiente del argumento que expone el apelante y comparte el criterio adoptado por el auto atacado, ya que la actuación del imputado Oliva no tiene adecuación en la figura de la confesión. Esa afirmación está huerfana de oportunidad y de espontaneidad, que son los requisitos esenciales para atender una confesión, toda vez que el sindicado, al momento de manifestar su versión de los hechos a las autoridades, ya existían en el expediente piezas probatorias que lo señalaban como posible autor del ilicíto. Aunado a ello, los antecedentes del caso revelan que el procesado reviste cierto grado de peligrosidad, pues la comisión del hecho punible se dio en el instante en que portaba un arma de fuego y se encontraba en estado de embriaguez. Como quiera que, bajo estas circunstancias, no es posible reemplazar la detención preventiva por otra medida cautelar, que no se han incorporado al expediente nuevos elementos de convicción que puedan variar la situación procesal de Oliva, esta Superioridad no tiene reparos en confirmar el auto apelado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA SALA PENAL, DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto fechado 14 de octubre de 1999, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá denegó la solicitud de reemplazo de detención preventiva por otra medida cautelar a favor de Emilio Eliades Oliva Linares, sindicado por el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de Jorge Luis Delgado Villareal.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PERIERA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

ENERO 2000

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE MOTONAVE DORION, S. A., PARA QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ Y A LA NACIÓN AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE B/.636,670.00, MÁS LOS INTERESES Y GASTOS DE GENERADOS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortés, actuando en nombre y representación de MOTONAVE DORION, S. A., anunció recurso de apelación contra la Resolución de 23 de noviembre de 1999, dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se negó la solicitud previa presentada dentro de la demanda contencioso administrativa que dicha sociedad interpuso para que se condene a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Nación al pago de una indemnización de B/.636,670.00 más los intereses y gastos generados por los daños y perjuicios causados por la deficiente prestación de servicios públicos.

Posteriormente, el 6 de diciembre de 1999, presentó ante la Secretaría de la Sala, escrito de desistimiento de la apelación.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente y debe acogerse sin más trámite, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación anunciado contra la Resolución de 23 de noviembre de 1999, dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo mediante la cual se negó la solicitud previa presentada dentro de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad MOTONAVE DORION, S. A., para que se condene a la Autoridad Marítima de Panamá y a la Nación al pago de una indemnización de B/.636,670.00 más los intereses y gastos generados por los daños y perjuicios causados por la deficiente prestación de servicios públicos.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO DE INTERPRETACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE APELACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Ministro de Economía y Finanzas ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de interpretación para que la Sala se pronuncie sobre la legalidad del acto administrativo contenido en la resolución de 6 de septiembre de 1999, expedida por la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera Administrativa.

Conjuntamente con las prestaciones de la demanda, el Ministro de Economía y Finanzas presentó solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Dicha solicitud de suspensión fue sustentada en los siguientes términos:

> "En vista de los perjuicios notoriamente graves que produciría el acto administrativo cuya interpretación solicitamos, se pide a Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley No. 135 de 30 de abril de 1943, que se sirva ordenar respetuosamente la suspensión de la ejecución del mencionado acto, hasta que se interprete correctamente el mismo.
>
> La referida petición se sustenta en el hecho que el acto administrativo cuya interpretación se solicita, ordena el pago de salarios dejados de percibir por el ex servidor público afectado, además, ordena el pago de costas a cargo del Estado, situación esta que afectaría el equilibrio presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas, al no estar prevista dicha erogación en su presupuesto, tal como exige el artículo 157 de la Ley No. 98 de 21 de diciembre de 1998 (Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1999)." (f. 13)

El Pleno de la Sala Tercera de la Corte Suprema (Contencioso-Administrativa) está facultado, conforme a lo que establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

La Sala considera que en el presente caso no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, ya que los efectos del acto cuya interpretación se pide, fueron suspendidos por la parte actora al interponer la demanda contencioso administrativa de interpretación prejudicial sobre el sentido y alcance de la resolución de 6 de septiembre de 1999, expedida por la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera Administrativa. Esto es así, pues el funcionario judicial o administrativo al interponer este tipo de demandas, suspende de pleno derecho la ejecución del acto hasta que la Sala Tercera se pronuncie sobre su sentido y alcance, razón por la cual dicha suspensión sería innecesaria. Dicha situación también se produce en la demanda contenciosa de apreciación de validez, toda vez que la autoridad encargada de administrar justicia no dictará su decisión hasta que se resuelva lo pedido.

Lo anteriormente expuesto, encuentra su fundamento en los numerales 11 y 12 del artículo 98 del Código Judicial, cuyo texto es el siguiente:

> "Artículo 98. A la Sala Tercera les están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.
>
> En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:
> ...
> 11. De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos cuando la autoridad judicial encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del

negocio o de ejecutar el acto, según corresponda.

12. Conocer prejudicial sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar justicia."

Cabe señalar que la Sala se ha pronunciado en el mismo sentido de lo expuesto anteriormente, mediante la resolución de 27 de agosto de 1999.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la petición de suspensión provisional de los efectos de la resolución de 6 de septiembre de 1999, expedida por la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera Administrativa.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACION, INTERPUESTA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 003 DE 8 DE ENERO DE 1999, EXPEDIDA POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN (RELACIONADO CON EL NOMBRAMIENTO DEL DR. FÉLIX LUCIANI). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación, en su calidad de tal, presentó acción contenciosa de interpretación, con el propósito de que esta Sala se pronuncie sobre el sentido y alcance del acto administrativo contenido en la Nota N° 003 de 8 de enero de 1999, expedida por la señora Procuradora de la Administración, mediante el cual lo conmina a tomar las medidas administrativas que considere convenientes, en lo que respecta al nombramiento del Dr. Félix Luciani, en el Instituto de Medicina Legal, con fundamento en el artículo 344 del Código Judicial.

La parte pertinente de la Nota N° 003 de 8 de enero de 1999, cuyo sentido y alcance pide el recurrente sea interpretado por esta Sala, señala lo siguiente:

"No obstante, en cuanto el hecho de permitir que su cuñado, el Doctor Félix Gabriel Luciani Font, sea alto funcionario del Ministerio Público, usted contesta que el mismo '... labora como Director Administrativo del Instituto de Medicina Legal en el Ministerio Público con un cargo de medio tiempo, al igual que todo el personal médico del Instituto' y que 'El Dr. Luciani no emite dictámenes forenses'.

A lo anterior, puede añadirse lo expuesto en su Aclaración Necesaria de 21 de abril de 1998, de la cual nos envió copia mediante Nota DPG-163-98 de 15 de mayo de 1998, en la cual expresa:

'3. Es una infamia que por el afán de atacar a la persona del Procurador General de la Nación se lancen ofensas e infundios contro terceros. Me refiero al Dr. Félix Luciani, Director Médico del

Instituto de Medicina Legal, profesional de comprobada competencia y capacidad que no necesita de mi defensa, pero que debo aclarar, no me correspondió la acertada decisión de haberlo incorporado al trabajo del Instituto de Medicina Legal ya que cuando asumí el cargo de Procurador General de la Nación, ya el Dr. Luciani desempeñaba las condiciones de trabajo correspondientes y estaba nombrado en el cargo que hoy sigue desempeñando con acierto'.

Sobre este tema, es un hecho de conocimiento público que su nombramiento y ratificación como Procurador General de la Nación fue desde el mes de septiembre de 1994, para ocupar el cargo a partir del 1° de enero de 1995. Si bien está acreditado que el Procurador Valdés fue quien nombró a su cuñado, no es menos cierto que cuando lo hizo (7 de octubre de 1994), usted estaba debidamente nombrado para el cargo por el Consejo de Gabinete (2 de septiembre de 1994) y debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa (8 de septiembre de 1994).

Por otro lado, aún cuando usted no realizó el nombramiento del Dr. Félix Luciani en el Instituto de Medicina Legal, el artículo 344 del Código Judicial claramente establece que no pueden ser empleados subalternos del Ministerio Público, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de dichos Agentes o de los respectivos Secretarios.

Como es parte de nuestras atribuciones oir las quejas que se presenten contra los servidores públicos, procurar que cesen las causas de ellas si las hubieren, y ejercitar las acciones correspondientes, debiendo realizar para esto todas las diligencias y tomar todas las medidas que consideren convenientes, le recomendamos ejecute las medidas administrativas pertinentes a fin de que la situación comentada sea corregida.

En espera de su pronta respuesta y contando con su cooperación ..." (fs. 15 y 16)

Evacuados los trámites de Ley y encontrándose el negocio en estado de resolver, el 25 de enero de 2,000 fue presentada en la Secretaría de la Sala, con el sello y firma del señor Secretario General de la Procuraduría de la Nación impreso el 24 de enero de 2,000, la renuncia del doctor Félix Luciani al cargo administrativo que ostenta dentro del Instituto de Medicina Legal, efectiva a partir del 28 de febrero del año en curso (fs. 45 y 46).

A fojas 47 se lee la fiel copia del original de la Resolución N° 166 de 21 de enero de 2,000, en la cual el señor Procurador General de la Nación acepta la renuncia presentada y declara que dicha resolución regirá a partir del 1° de marzo de 2,000 (f. 47).

Los documentos mencionados fueron remitidos a la Sala y con la Nota PGN-SG-014-2000 de 24 de enero de 2,000, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación quien consideró que "Esta información resulta importante para el proceso de consulta sobre el status laboral del Dr. Luciani, que se encuentra en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia" (f. 48).

Como quiera que se ha acreditado la renuncia del doctor Félix Gabriel Luciani al cargo de Médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público a partir del 1° de marzo de 2,000, debe declararse que se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, porque la Nota N° 003 de 8 de enero de 1999, que motivó la presente demanda contencioso administrativa de interpretación, precisamente recomienda al señor Procurador General de la Nación que tome las medidas que crea convenientes para que él y su cuñado, el doctor Félix Luciani, no laboren en la misma dependencia estatal por prohibirlo la ley.

Como ha dejado de existir el hecho que dió origen a la recomendación plasmada en la Nota N° 003 de 8 de enero de 1999, cuya interpretación se pide, corresponde a esta Superioridad declarar la sustracción de materia y ordenar el archivo del presente expediente.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SE HA PRODUCIDO SUSTRACCION DE MATERIA, en la demanda contencioso administrativa de interpretación, interpuesta por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, para que la Sala se pronuncie sobre el sentido y alcance del acto administrativo contenido en la Nota N° 003 de 8 de enero de 1999, expedida por la Procuraduría de la Administración y ORDENA el cese del procedimiento.

Notifiquese, Cumplase y Archivese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES TROESTCH EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULITPLES PROFESIONALES, R. L. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA D. E. NO. 150/99 DE 25 DE FEBRERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gasparino Fuentes Troestch, sustentó ante el resto de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación anunciado contra el acto contenido en la Nota D. E./ No. 150/99 de 25 de febrero de 1999 dictada por la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Resulta preciso señalar que el término de oposición al recurso de apelación transcurrió sin que la señora Procuradora de la Administración hiciera uso del mismo.

La Magistrada Sustanciadora atendiendo solicitud de la parte actora, previo a la admisión de la demanda, solicitó a la Directora Ejecutiva del IPACOOP que certificara si se había resuelto o no el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto contra la Nota No. 150-99 de 25 de febrero de 1999; frente a este requerimiento la citada funcionaria respondió que había sido resuelto mediante Resolución No. 04R/99 del 13 de mayo de 1999 de la Dirección Ejecutiva y que dicha resolución está pendiente de notificación (cfr. foja 24-28).

Ante este escenario jurídico, la Magda. Sustanciadora no admitió la demanda considerando que la vía gubernativa no ha sido agotada y que, por lo tanto, no debe admitirse ni dársele curso a la presente demanda, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Por su parte el apelante manifiesta lo siguiente:

"... De lo expuesto por la Directora del IPACOOP se desprende que ha faltado a la verdad, puesto que si la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue expedida el 13 de mayo de 1999, por qué razón el 14 de julio (un mes después) no respondió que había que notificarse de dicha resolución, la respuesta es clara, a esa fecha no existía resolución alguna.

Como quiera que está probado el silencio y que la Directora negó en su oportunidad (14 de julio de 1999) la certificación impetrada para probar el silencio administrativo, solicito a los Honorables Magistrados revocar la resolución recurrida y en su lugar admitir la demanda."

Hecho un análisis de la demanda, la resolución recurrida y los argumentos del recurrente, pasa el resto de la Sala a resolver la apelación a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una enmienda en la resolución recurrida.

El apelante argumenta que el silencio administrativo está probado, pues la Directora negó en su oportunidad la certificación solicitada el 14 de julio de 1999.

Sobre este particular es preciso comentar que para que la vía gubernativa se considere agotada por silencio administrativo de conformidad con el ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943, es preciso que haya transcurrido el plazo de dos (2) meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, no obstante, en el caso in examine el silencio administrativo no se ha configurado, toda vez que consta a foja 28 nota suscrita por la Directora Ejecutiva del IPACOOP a través de la cual afirma que la decisión recaída sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado por la parte actora fue resuelto el 13 de mayo de 1999, mediante Resolución No. 04R/99 la cual está pendiente de notificación.

En ese sentido cabe agregar que sin la comprobación del agotamiento de la vía gubernativa no es posible establecer el término para recurrir ante la Sala Tercera.

Si la notificación no se ha llevado a cabo, se colige claramente que no ha sido agotada la vía gubernativa y por lo tanto resulta imposible establecer el término para recurrir ante la Sala Tercera.

La notificación del acto que se impugna es un requisito de importancia exigido por la Ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa y si se ha propuesto dentro de los dos meses siguientes.

Así las cosas, compartimos la decisión de la Magistrada Sustanciadora y concluímos que la vía gubernativa aún no ha sido agotada, razón por la cual resulta prematura la interposición de la demanda ante esta Sala.

Como corolario de lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 25 de agosto de 1999 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Gasparino Fuentes Troestch, en representación de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R. L. para que se declarara nulo por ilegal el acto administrativo contenido en la Nota No. D. E./ No. 150/99 de 25 de febrero de 1999, dictada por la Directora Ejecutiva del Instituto Panameño

Autónomo Cooperativo, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. RODRÍGO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 730-96-D. G. DE 24 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rodrigo Sánchez, actuando en nombre y representación de CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. 730-96-D. G. de 24 de mayo de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

El Magistrado Sustanciador observa que, contra la resolución No. 730-96-D. G. de 24 de mayo de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social mediante la cual se condena a la recurrente a pagar la suma de dieciséis mil noventa y tres balboas con doce centésimos (B/.16,093.12), en concepto de cuotas de Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, caben los recursos de reconsideración ante la Dirección General y de apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Como en el expediente no hay constancia de que la parte actora haya agotado la vía gubernativa, pues no hizo uso oportuno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 de la Ley 135 de 1943, se incumple con lo preceptuado en el artículo 42 de la citada Ley, lo cual causa la inadmisibilidad de la presente demanda.

En consecuencia el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Rodrigo Sánchez, actuando en nombre y representación de CENTRO ELECTROMUEBLES, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. 730-96-D. G. de 24 de mayo de 1996, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA

FIRMA "SHIRLEY Y ASOCIADOS", EN REPRESENTACIÓN DE MARIELA ACOSTA DE BECKFORD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA DE 16 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR EL JURADADO DE CONCURSO DE LA SUBJEFATURA DE ENFERMERÍA-POSICIÓN 593, MINISTERIO DE SALUD, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma SHIRLEY Y ASOCIADOS, en representación de MARIELA ACOSTA DE BECKFORD, para que se declare nula, por ilegal, el Acta de 16 de junio de 1999, dictada por el Jurado de Concurso de la Subjefatura de Enfermería-Posición 593, Ministerio de Salud, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda interpuesta fue admitida por el Magistrado Sustanciador, mediante Providencia fechada 14 de septiembre de 1999.

De este acto procesal presentó recurso de apelación la señora Procuradora de la Administración quien al sustentar la alzada en su Vista Fiscal N° 536 de 16 de noviembre de 1999, señaló básicamente lo siguiente:

> "El acto cuya nulidad por ilegal se impugna no posee la categoría de acto definitivo, ya que el mismo es un acto de carácter instrumental, es decir, que es un acto preparatorio que está encaminado a elegir la persona para ocupar el cargo sometido a concurso; por tanto, no constituye un acto principal, definitivo o que causa estado en el caso subjúdice".

El examen del expediente y el estudio de los argumentos esgrimidos por el recurrente, permite a este Tribunal "ad quem" constatar que, no le asiste la razón a la señora Procuradora de la Administración en sus observaciones, debido que el Acta de 16 de junio de 1999, no es un acto preparatorio o instrumental. Esto lo decimos en virtud de que si bien es cierto el Acta de 16 de junio de 1999, formalmente constituye un informe de la Jefatura de Enfermería, no es menos cierto que en el fondo se decide la descalificación de la Licda. MARIELA ACOSTA DE BECKFORD y de la Licda. Nelda Almillategui del Concurso de Subjefatura de Enfermería-Posición N° 593, basándose en los artículos N° 7 (acápite F), 8 y 20 de los Nuevos Criterios del Concurso, (Fojas 2 y 3), quedando por tanto desierto dicho concurso. Tanto es así, que a foja 4 del expediente, reposa la Nota N° 261-DGS-SE de 17 de junio de 1999 que constituye la notificación de dicha determinación desfavorable para la Licda. ACOSTA DE BECKFORD.

A su vez, la Licda. MARIELA ACOSTA DE BECKFORD interpuso recurso de reconsideración ante el mismo Jurado, manteniendo éste mediante Acta de fecha 29 de junio de 1999, la misma decisión del Acta de fecha 16 de junio de 1999.

Por la circunstancias antes descritas, consideramos que el acto acusado de ilegal no es un acto preparatorio, sino que constituyte el acto principal, que podría tener la potencialidad de lesionar los derechos subjetivos alegados por la parte demandante.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia fechada 14 de septiembre de 1999 que admite la demanda contencioso adminsitrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma SHIRLEY Y ASOCIADOS, en representación de MARIELA ACOSTA DE BECKFORD.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. SERGIO ZUÑIGA, EN REPRESENTACIÓN DE MATIAS MARTINEZ Y VENANCIO MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D. N. 005-99 DE 21 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Sergio Zúñiga, actuando en nombre y representación de MATIAS MARTINEZ y VENANCIO MARTINEZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. D. N. 005-99 de 21 de enero de 1999, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La presente demanda fue admitida, mediante la resolución de 13 de diciembre de 1999, y se le corrió traslado de la misma a la Procuradora de la Administración. De igual forma se le envió copia de la demanda al Director Nacional de Reforma Agraria para que rinda un informe de conducta dentro del término de cinco días.

No obstante, advierte la Sala que el apoderado judicial de la actora solicitó, por medio de escrito fechado el 15 de diciembre de 1999 (f. 44), que se ordene la suspensión provisional de la resolución No. D. N. 005-99 de 21 de enero de 1999, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, pues "ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave a mis representados."

El Pleno de la Sala Tercera de la Corte Suprema (Contencioso-Administrativa) está facultado, conforme a lo que establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". La Sala procede a analizar la gravedad del perjuicio causado por el acto impugnado.

En el presente caso el recurrente no logra probar el perjuicio notoriamente grave y de imposible reparación que le puede causar el acto impugnado. El demandante debió señalar detalladamente en qué consiste el daño que puede causar el acto impugnado y de qué manera dicho perjuicio es grave o de imposible reparación. Por estas razones estima la Sala que no debe acceder a la petición antes mencionada.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de la resolución No. D. N. 005-99 de 21 de enero de 1999, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADO RAMIRO GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL ANTONIO FERNANDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP DOPA 6158 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Ramiro Guerra ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de MANUEL ANTONIO FERNANDEZ, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DP DOPA 6158 de 30 de septiembre de 1999, suscrita por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada certificación que acredite si sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado contra el acto impugnado, ha recaido alguna decisión, a los efectos de acreditar el silencio administrativo como medio de agotamiento de la vía gubernativa.

El recurrente, según consta en el expediente de la foja 3 a la 5, presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio ante la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, contra la Nota DP DOPA 6158 de 30 de septiembre de 1999. Cabe destacar que no hay constancia de pronunciamiento alguno en relación con dicho recurso.

A foja 6 del expediente, se aprecia la solicitud de certificación del silencio administrativo de 6 de diciembre de 1999, dirigida a la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, la cual no fue contestada por la autoridad competente para ello.

Considera quien sustancia que el recurrente cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, de llevar a cabo las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea a la que hace referencia el mencionado artículo, tal como se colige del documento visible a fojas del expediente; pero al resultar infructuosas estas gestiones, solicitó a esta Sala que procediera a oficiar a la entidad demandada para que remita a esta Superioridad la documentación solicitada, ello en atención a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto es del tenor siguiente:

> **"Artículo 46: Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la ceritificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda".**

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE que se solicite al Despacho de la Direccion Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, que certifique si ha recaido decisión sobre recurso de reconsideración interpuesto contra la Nota DP DOPA 6158 de 30 de septiembre de 1999, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE DELZAI, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.082 DE 8 DE ABRIL DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DEL HIPÓDROMO Y OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR, ASI COMO SUS ACTOS CONFIRMATORIOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas Rosas, actuando en nombre y representación de HUMBERTO DELGADO, ha presentado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 082 del 8 de abril de 1999, expedida por el Director de Hipódromos y Otros Juegos de Suerte y Azar, de la Junta de Control de Juegos, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede al análisis de la demanda con el propósito de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida, de conformidad con la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946.

Observa el suscrito, que el apoderado judicial del recurrente señala como acto impugnado la Resolución No. 082 del 8 de abril de 1999, dictada por el Director de Hipódromos y Otros Juegos de Suerte y Azar, de la Junta de Control de Juegos, a través de la cual se sanciona a la sociedad DELZAI, S. A. con multa de mil balboas por infringir el Decreto Ley No. 2 de 10 de febrero de 1998, por vender a sus clientes clubes de mercancías sin contar con la debida autorización de la Junta de Control de Juegos; no obstante, al sustentar lo atinente a las disposiciones violadas y concepto de la infracción este invoca como infringido el artículo 749 del Código Judicial, numeral 5, en donde no alcanza a definir cómo el acto impugnado conculcada directamente dicha norma.

En ese sentido, el recurrente intenta atacar el acto administrativo original a través de una supuesta violación endilgada a la resolución que resuelve el recurso de apelación proferida por el Pleno de la Junta de Control de Juegos, constituyendo esta un acto confirmatorio.

Dentro de este contexto, el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 dispone al respecto que no solamente no es necesario dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, sino que es un requisito sine qua non para la admisibilidad de la demanda dirigirla contra el acto administrativo original, que a juicio de la parte actora es ilegal.

Estima el suscrito que la demanda in examine no está debidamente presentada, ya que el recurso debió enderezarse contra el acto original necesariamente, tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia contencioso administrativa (Cfr. Autos de 31 de agosto de 1981, 6 de enero y 9 de junio de 1997).

La técnica contencioso administrativa impone que la demanda debe acusar, en primer término, los vicios de ilegalidad que tenga el acto que en la vía gubernativa determine la situación jurídica contraria a los intereses o derechos del recurrente en vez de referirse a la ilegalidad de los actos confirmatorios de esa situación.

Como la demanda no cumple con los requisitos establecidos para esta clase de procesos, no debe ser admitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Como corolario de lo antes expresado, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Genarino Rosas Rosas, actuando en nombre y representación de HUMBERTO DELGADO, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 082 del 8 de abril de 1999, expedida por el Director de Hipódromos y Otros Juegos de Suerte y Azar, de la Junta de Control de Juegos, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA TILE Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE MEDIMEX, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 18,339-99-J. D. DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Tile y Rosas, actuando en nombre y representación de MEDIMEX, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 18,339-99-J. D. de 9 de diciembre de 1999, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y para que se haga otras declaraciones.

La parte actora solicita que antes de admitir la demanda, el Magistrado Sustanciador pida al Secretario General de la Caja de Seguro Social copia autenticada de los siguientes documentos:

1. De la Resolución N° DNC-99-02-698 de 12 de febrero de 1999, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

2. De la Resolución N° 312-99 DG de 31 de mayo de 1999, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

3. De la Resolución N° 18,339-99-JD de 9 de diciembre de 1999, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

El demandante prueba que solicitó los documentos antes descritos, mediante el escrito visible a foja 1 del expediente del proceso contencioso administrativo.

Ahora bien, el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo pida el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia y el petente prueba que gestionó la

obtención de dicha copia.

Con fundamento en la disposición citada y como el demandante comprobó que solicitó a la autoridad demandada los documentos pertinentes, es procedente acceder a lo pedido.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada en la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA por Secretaría se solicite a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco días expida y envíe cpia autenticada:

1. De la Resolución N° DNC-99-02-698 de 12 de febrero de 1999, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

2. De la Resolución N° 312-99 DG de 31 de mayo de 1999, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

3. De la Resolución N° 18,339-99-JD de 9 de diciembre de 1999, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con la constancia de su notificación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO THOMAS MONTALVO, PEDRO BERNAL, HERBERTO BERNAL Y MARISOL DE CEDEÑO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS AL NO CONTESTAR SUS SOLICITUDES Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 408 de 23 de agosto de 1999, promovió y sustentó recurso de apelación contra el auto fechado el 17 de junio de 1999, mediante el cual el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el doctor Humberto Ricord en representación de Augusto Thomas Montalvo, Pedro Bernal, Herberto Bernal y Marisol de Cedeño, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, al no contestar sus solicitudes para el pago de prestaciones laborales en concepto de indemnización, vacaciones completas y décimo tercer mes por servicios que prestaron en el Hipódromo Presidente Remón y con motivo de la privatización de dicha entidad.

La señora Procuradora de la Administración fundamenta su recurso señalando que el demandante sólo mencionó las normas que considera infringidas y no transcribió su texto y que tampoco individualizó claramente en qué forma fueron infringidas las normas legales aducidas, indicando solamente que lo fueron en forma directa, sin especificar si por omisión, comisión o indebida aplicación, con lo cual incumplió con el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 (fs. 32 a 36).

El trece de diciembre de 1999 se señaló un término de tres días para que la parte demandante hiciera valer sus objeciones al recurso de apelación interpuesto por la señora Procuradora de la Administración, el cual venció sin que hiciera uso de este derecho (fs. 39 a 40).

Un examen del libelo de la demanda presentada por la parte actora demuestra que en efecto omitió la transcripción literal de las disposiciones que estima infringidas y además, sólo señaló que las violaciones se produjeron en forma directa.

A este respecto, la Sala ha sido consistente al manifestar que el requisito contenido en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, que exige la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación de las mismas, comprende la transcripción literal de dichas disposiciones legales y el señalamiento de los motivos de ilegalidad entre los cuales se encuentra la infracción literal de los preceptos legales, que a su vez puede ser de forma directa: por comisión, por omisión o falta de aplicación, por interpretación errónea y finalmente, por indebida aplicación de la ley.

Mediante el auto dictado el 21 de febrero de 1997, la Sala no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Guillermo Caballero Gaitán contra la Resolución N° 78 de 10 de octubre de 1995, dictada por el Alcalde del Distrito de Dolega, por las siguientes razones:

> "La Sala ha expresado, que para cumplir con los requisitos anteriores, deben transcribirse las disposiciones legales que se estiman violadas, para que de la confrontación con el acto impugnado, con la norma que se considera violada, se pueda apreciar la violación aducida. Además, debe explicarse el concepto en que se considera que la norma ha sido violada por el acto impugnado y señalar por cuál de los motivos de ilegalidad que establece el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, considera el demandante que se ha consumado la violación.
>
> En el caso bajo estudio, el demandante no cumplió con los requisitos señalados porque no transcribió las normas que estima como violadas, ni dió a conocer las causas o los motivos por los que en su opinión las normas fueron violadas por la Resolución N° 78 dictada el 10 de octubre de 1995 por el Alcalde del Distrito de Dolega, por lo que no debe admitirse por expresa prohibición del artículo 31 de la Ley 33 de 1946."

En el presente caso la parte actora omitió señalar de qué manera fueron violadas directamente las cinco normas enunciadas y no transcritas, con lo cual incumple lo exigido en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

Aunado a lo anterior, el resto de los Magistrados observa que el apoderado de los señores Augusto Thomas Montalvo, Pedro Bernal, Herberto Bernal y Marisol de Cedeño solicita en una misma demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que esta Superioridad reconozca y conceda los derechos laborales de vacaciones, décimo tercer mes e indemnización por privatización de los cuatro poderdantes, sin embargo, debió solicitarlo en demandas separadas en virtud que estas pretensiones son individuales, lo que además nos lleva a señalar también que al especificar lo que se demanda, el apoderado judicial no cuantificó las sumas de dinero que a su juicio deben recibir cada uno de los demandantes en concepto de supuestos derechos de vacaciones, décimo tercer mes e indemnizaciones por privatización, sino que lo solicitó de forma genérica como un todo colectivo.

Como las demanda presentada no cumple con los requisitos exigidos por la ley, no debe dársele curso tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En mérito a lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala

Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA del auto de 17 de junio de 1999, NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el doctor Humberto Ricord, en representación de Augusto Thomas Montalvo, Pedro Bernal, Herberto Bernal y Marisol Cedeño, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por la Junta de Control de Juegos, al no contestar sus solicitudes y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS NIETO MEJIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 26 DE 10 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Aida Jurado Zamora, actuando en nombre y representación de CARLOS NIETO MEJIA, presentó demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 26 de 10 de febrero de 1998, dictado por el Presidente de la República, acto confirmatorio; y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda, se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien se opuso a las pretensiones de la parte actora mediante su Vista Fiscal N° 308 de 7 de agosto de 1998.

También se requirió al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta, y así lo hizo a través de su Nota N° 1149 D. L. de 8 de junio de 1998.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Por medio del Decreto N° 26 de 10 de febrero de 1998, el entonces Presidente de la República, Dr. Ernesto Pérez Balladares, ordenó la destitución del señor CARLOS ARTURO NIETO MEJIA del cargo de Subteniente del Servicio Aéreo Nacional.

La autoridad demandada señaló que la adopción de dicha medida obedecía al hecho de que el destituído violó los artículos N° 116, acápite 36, y N° 118, acápites 1 y 2, del Reglamento Disciplinario vigente del Servicio Aéreo Nacional (Resuelto N° 2 del 16 de diciembre de 1984).

II. NORMAS IMPUGNADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

Estima la apoderada judicial del señor NIETO MEJIA que se ha violado, en forma directa por omisión, el artículo 41 del Reglamento Disciplinario del Servicio Aéreo Nacional, el cual establece que:

> "ARTICULO 41. Antes de imponer una sanción se debe escuchar los cargos y los descargos por parte del acusador y acusado

respectivamente. Las Juntas Disciplinarias Locales y Superiores, están en la obligación de investigar e interrogar al inculpado, antes de proponer las sanciones correspondientes."

En relación al concepto de la infracción la parte actora señaló que:

"La norma citada, fue violada de manera directa por omisión, en virtud de que existiendo ésta, el Ministerio de Gobierno y Justicia hace caso omiso de su existencia. Y es que en el caso concreto que nos ocupa, existiendo a juicio del Ministro de Gobierno y Justicia alguna falta de las consagradas en el artículo 118 del aludido Reglamento Disciplinario, por parte de CARLOS ARTURO NIETO, éste debió ser informado de la misma a fin de que hiciese uso del derecho de descargo, lo cual se omitió alevosamente, siendo que la recomendación de destitución que hace llegar EDWIN GUEVARA, Director encargado del Servicio Aéreo Nacional, al señor Ministro de Gobierno y Justicia tiene fecha de 15 de enero de 1998, es decir, durante el período en que el recurrente estaba de vacaciones impuestas por un período continuo de siete meses, a partir del 27 de junio hasta el 22 de enero de 1998, lo cual significa que la pretensión de destitución se fragua en ausencia de mi representado, conculcando el derecho de defensa que reconoce el texto citado." (fs. 23-24)

También considera que se ha violado el numeral 25 del artículo 115 del citado reglamento, que a la letra dice:

"Artículo 115. Las siguientes son faltas leves y se sancionarán con:

a. Advertencia

b. Amonestación

c. Sanciones Internas

d. Arresto Simple: En este caso las sanciones no podrán ser mayores de cinco (5) días de duración, excepto que haya reincidencia en dicha falta, en cuyo caso se incrementará hasta un límite de quince (15) días.

FALTAS LEVES DE PRESENTACION
...
FALTAS LEVES DE SERVICIO
...
FALTAS LEVES DE RESPONSABILIDAD
23.
24.
25. Sobrepasar el conducto regular.
..."

Al explicar el concepto de la infracción, la abogada expresó que:

"La norma transcrita ha sido infringida por violación directa por omisión, siendo el texto claro y aplicable al caso concreto, el Ministro de Gobierno y Justicia omitió su aplicación.

Si la conducta de NIETO MEJIA de dirigirse al Ministro de Gobierno y Justicia como funcionario jerárquicamente superior, es censurable, lo sería desde el punto de vista meramente administrativo-disciplinario en virtud de que debió recurrir previamente a la instalación a él inmediata siguiendo el Conducto Regular. La infracción de estos controles administrativos se subsume en el texto citado, lo cual se describe como una falta leve de responsabilidad y excluye la "baja" como sanción disciplinaria.

No obstante la interpretación errónea que el Ministro de Gobierno y Justicia hizo del artículo 115, numeral 36 del reglamento hizo que omitiese la aplicación del contenido del artículo 115 numeral 25 el cual encaja con precisión en el hecho fáctico planteado." (f. 27)

Asimismo, considera que ha sido vulnerado el numeral 36 del artículo 116 del Reglamento Disciplinario vigente del Servicio Aéreo Nacional, el cual preceptúa lo siguiente:

"Artículo 116. Las siguientes son faltas GRAVES, y se sancionarán con:

a. Arresto simple
b. Arresto severo
c. Reprensión
FALTAS GRAVES DE SERVICIO
...
FALTAS GRAVES DE RESPONSABILIDAD
1.
...
36. Dirigir peticiones al Presidente de la República o Ministros de Estado, haciendo omisión del Conducto Regular.
..."

Al explicar el concepto de la infracción de la norma transcrita, la apoderada judicial de la parte actora señaló que:

"El citado precepto administrativo fue vulnerado por interpretación errónea, considerando que el Ministro de Gobierno y Justicia seleccionó una norma como fundamento de destitución otorgándole un alcance o sentido que la misma no tiene, desvirtuando su naturaleza.

... es evidente que en el caso que nos ocupa se ha desnaturalizado el espíritu de la norma para sustentar la destitución del Subteniente NIETO MEJIA. Debe constar en el expediente contra mi representado memorial suscrito por éste y dirigido al Ministro de Gobierno y Justicia donde hace del conocimiento de éste en su condición de superior inmediato del Director del Servicio Aéreo Nacional, del conflicto laboral que se le presentó luego de que fuera trasladado hacia la base aérea de la provincia de Chiriquí en donde se le profirió trato discriminatorio e injustificado frente al resto de los oficiales que prestaban servicio en la misma, en virtud de que, ni el Comando de la provincia ni el Director Nacional disponían interés de solución.

Significa que la conducta de NIETO MEJIA, en ningún momento estaba dirigida a peticionar o reclamar derechos en el sentido que se infiere del texto cuestionado, puesto que el Ministro de Gobierno y Justicia conforme el Decreto de Gabinete N° 38 de 19 de febrero de 1990 es el superior jerárquico del Director Nacional del Servicio Aéreo, unidad a la que pertenece NIETO MEJIA y por tanto con facultad para conocer los conflictos o la problemática que aqueje a los miembros de la institución y disponer la solución que corresponda.
...
Por otra parte, y en el evento de que la conducta de NIETO MEJIA de dirigirse directamente al Ministro de Gobierno y Justicia como superior inmediato de la Dirección de Servicio Aéreo Nacional fuera interpretada como una falta grave de responsabilidad, la sanción a imponer excluye la "baja" o destitución siendo aplicable, según el propio texto del artículo 116, arresto simple, severo o reprensión, de tal forma que la destitución con fundamento en el precepto citado es arbitraria e ilegal." (fs. 25-26)

Igualmente considera que ha sido violada la parte inicial del artículo 118, en donde se establece que:

"Artículo 118. Las siguientes faltas son causales de investigación por la Junta Disciplinaria Superior y tendrán como sanción:

a. Arresto de Confinamiento.
b. Suspensión del cargo, y
c. Baja"

Sostiene la abogada que éste ha sido infringido directamente, por comisión, por cuanto que el Ministro de Gobierno y Justicia, habiendo seleccionado la norma aplicable al caso, desconoció el contenido de las mismas, ya que siendo el denunciante miembro activo del Servicio Aéreo Nacional con rango de Subteniente y existiendo faltas con causales de investigación por la Junta Disciplinaria Superior, debió conformar la llamada Junta Disciplinaria Superior, cuya función es investigar las faltas descritas en el artículo 118 del Reglamento Disciplinario y recomendar la sanción aplicable en cada caso específico, reconociendo al subalterno el derecho de defensa.

Alega que por el contrario, su poderdante no fue sometido a dicha junta, por faltas contenidas en el artículo 118 del Reglamento, de ahí que el procedimiento fuese violado en perjuicio del recurrente desconociendo con ello el debido proceso. (f. 23)

Finalmente, considera la abogada que se han infringido los numerales 1 y 2 del artículo 118 de ese reglamento, en ellos se indica lo siguiente:

"Artículo 118. Las siguientes faltas son causales de investigación por la Junta Disciplinaria Superior y tendrán como sanción:

a. Arresto de Confinamiento.
b. Suspensión del cargo, y
c. Baja

FALTAS CON CAUSALES DE INVESTIGACION POR LA JUNTA DISCIPLINARIA SUPERIOR

1. Reincidencias en notables faltas graves.
2. No tener enmiendas a pesar de repetidas sanciones.
..."

Sostiene que los mismos han sido violados por indebida aplicación, dado que según ella no existe en la conducta de su representado, pluralidad de comportamientos que permitan subsumir éstas en la norma seleccionada. (f. 24)

III. INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El funcionario demandado, al rendir su informe indicó que:

"El señor Carlos Nieto Subteniente 8272 ... mediante Decreto N° 26 de 10 de febrero de 1998, fue destituído del cargo que ocupaba.

Mediante memorial presentado ante este despacho el señor Carlos Nieto interpuso recurso de reconsideración el cual fue negado por medio de Resuelto N° 115-R-63 de fecha de 22 de abril de 1998.

El referido señor fue destituído en virtud de proceso disciplinario instruido en su contra por la Junta Disciplinaria, por haber incurrido en las siguientes faltas: reincidir en notables faltas graves, omitir el conducto regular al elevar solicitudes al señor Ministro de Gobierno y Justicia y negarse a cumplir una orden superior respectivamente.

> ... al señor Carlos Nieto Mejía se le brindaron todas las garantías de defensa establecidas en la Ley, y el procedimiento disciplinario incoado en su contra cumplió con el debido proceso." (fs. 32-33)

IV. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración en su Vista Fiscal N° 308 de 7 de agosto de 1998 expresó su opinión respecto al caso que nos ocupa.

En este sentido, manifestó que no estima que se haya violado el artículo 41 del Reglamento Disciplinario de la Fuerza Pública, por cuanto que a pesar de que el demandante ocupaba un cargo de carácter discrecional, se le siguió un proceso disciplinario, en el cual expuso sus alegatos cuando se le cuestionó su actuación incorrecta en el ejercicio de sus funciones, tal como consta en el expediente administrativo.

También expresó no coincidir con los argumentos plasmados por la representante judicial del señor NIETO MEJIA, al explicar el concepto de la infracción del artículo 115, numeral 25, del Reglamento de la Fuerza Pública, ya que a lo largo de su vista fiscal dejó evidenciado que el demandante ya había incurrido en conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones, lo cual trajo como consecuencia que se le instaurara una Junta Disciplinaria el día 30 de mayo de 1996 y fuera sancionado con 45 días de arresto, con la observación que si volvía a cometer otra falta disciplinaria sería destituído.

En cuanto a la presunta violación del numeral 36, del artículo 116 del Reglamento Disciplinario de la Fuerza Pública, expresó que el mismo no ha sido indebidamente interpretado, ya que si bien esta disposición legal no contempla la baja como sanción disciplinaria, no se puede obviar que el señor NIETO MEJIA era reincidente en la infracción de este estatuto reglamentario y que por ende la destitución del cargo que desempeñaba en la Fuerza Pública, se ajusta a derecho.

Por otro lado, La señora Procuradora de la Administración opina que no se ha violado el artículo 118, del Reglamento Disciplinario de la Fuerza Pública, por cuanto que la tesis esbozada por la licenciada Aida Jurado carece de sustento legal, ya que al revisar el contenido de la parte considerativa del Resuelto N° 115R-63 fechado 22 de abril de 1998, observó que al señor Carlos Nieto se le instauró una Junta Disciplinaria Superior el día 26 de junio de 1997, en la cual expuso sus descargos contra las causas que se le imputaban.

Además, la señora Procuradora de la Administración considera que el señor CARLOS NIETO MEJIA, infringió el Reglamento Disciplinario de la Fuerza Pública, cuando dirigió la Nota s/n fechada 16 de junio de 1997, al señor Ministro de Gobierno y Justicia, lo cual aunado a otras infracciones cometidas por el señor NIETO hace plenamente justificable su destitución.

Por otra parte, la señora Procuradora de la Administración opina que no se han infringido los numerales 1 y 2 del artículo 118 del Reglamento Disciplinario de la Fuerza Pública, ya que encontró en el expediente administrativo evidencia de que el demandante ha incurrido en otras ocasiones en conducta inapropiada (fs. 33 a 51).

V. DECISION DE LA SALA

Para resolver la Sala debe tomar en consideración lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 135 de 1943 (artículo 17 de la Ley 33 de 1946) en su numeral 3 que textualmente dice: "No son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa: ... 3. Las correcciones disciplinarias impuestas al personal de la fuerza pública y del cuerpo de policía a ella asimilado, excepto cuando impliquen suspensión, postergación para el ascenso o separación del cargo de empleados que sean inamovibles según la Ley."

Esto es así porque en primer lugar, mediante el acto impugnado, fechado el 26 de febrero de 1998, al señor CARLOS NIETO MEJIA, SubTeniente del Servicio Aéreo Nacional, se le impuso una sanción disciplinaria por incurrir en una falta tipificada en el Reglamento Disciplinario Vigente del Servicio Aéreo Nacional; y en segundo lugar porque el demandante no gozaba de inamovilidad cuando fue destituído.

El artículo primero del Decreto de Gabinete N° 42 de 17 de febrero de 1990, preceptúa que el Servicio Aéreo Nacional es parte integrante de la Fuerza Pública (Gaceta Oficial N° 21,485 de 1 de marzo de 1990), y por ende está regido por la Ley N° 20 de 29 de septiembre de 1983, Ley Orgánica de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, actualmente denominada Fuerza Pública (Gaceta Oficial N° 19,909 de 30 de septiembre de 1983), Ley que no contempla en ninguna de sus normas la inamovilidad de los funcionarios al servicio de dicha institución.

Por otro lado, esta Superioridad estima conveniente destacar que en vista de que el Servicio Aéreo Nacional es parte integrante de la Fuerza Pública, debe entenderse que el Reglamento Disciplinario vigente del Servicio Aéreo Nacional es el Reglamento Disciplinario que rige a la Fuerza Pública (Resuelto N° 2 de 16 de diciembre de 1984, expedido por las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá).

Ante esta realidad la Sala debe concluir que la sanción disciplinaria impuesta al demandante, no es acusable ante esta jurisdicción, por lo tanto, lo actuado es nulo por falta de jurisdicción y así debe declararse.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO lo actuado en el proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción promovido por la licenciada Aida Jurado, en representación de CARLOS NIETO MEJIA, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 26 de 10 de febrero de 1998, acto confirmatorio, y se haga otras declaraciones; y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO JOVANE DEL CID, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE ASUNTOS DEL CANAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado JULIO JOVANE DEL CID, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en su propio nombre y representación, para que de declare nula por ilegal, la Resolución S/N de 2 de septiembre de 1999, dictada por el Ministro de Asuntos del Canal, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda se percata el Sustanciador, que consta en el expediente, a foja 8, una solicitud previa mediante la cual se requiere que, antes del trámite de admisión de la misma, se remita copia autenticada del acto

impugnado, así como también de las Resoluciones que deciden los recursos instaurados en la vía gubernativa.

Es importante señalar, que efectivamente el recurrente trató de acompañar el libelo contentivo de la demanda con la documentación necesaria, gestionando ante el respectivo ente administrativo la autenticación de la misma. Tal diligencia fue recibida por el Ministro de Asuntos del Canal el 18 de enero de 2000, y les fue negada. (Ver foja 1)

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, de llevar a cabo todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea; pero al resultar infructuosas estas gestiones, solicitó a esta Sala que procediera a oficiar a la entidad demandada para que remita a esta Superioridad la documentación solicitada, ello en atención a la facultad que le confiere el artículo supra citado, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

De acuerdo a esto, se pueden consultar los Autos de 23 de marzo, 11 de septiembre y 20 de octubre, todos de 1998.

Ante tales circunstancias, es dable acceder a la petición de certificación previa de la negativa tácita de la administración.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que se solicite al Despacho del Ministro de Asuntos del Canal que remita lo siguiente:

1. Copia autenticada del acto impugando, con su respectivo sello de notificación, Resolución S/N de 2 de septiembre de 1999.

2. Copia autenticada del escrito de reconsideración presentada el 20 de septiembre de 1999.

3. Copia autenticada del escrito que resuelve el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, como prueba de haber agotado la vía gubernativa.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS TILE Y ROSAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA D. M. D., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1281-97. DG, DE 26 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Tile y Rosas, actuando en nombre y representación de la empresa Importadora D. M. D., S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos, por ilegales, la Resolución No. 1281-97 D. G, de 26 de junio de 1997, emitida por la Directora General de la Caja de Seguro Social de la época, los actos confirmatorios o, en su defecto, que se condene a la Caja de Seguro Social al pago de una compensación a su favor, en concepto de gastos, por haber participado en el trámite de selección de contratista, producto de la licitación pública No. 36-95, convocada por la institución estatal para el suministro e instalación de 180 camas hospitalarias al Hospital Regional Rafael Hernández, ubicado en David, Provincia de Chiriquí.

I. Argumentos de la parte actora:

El demandante fundamenta lo pedido en una serie de hechos y argumentos que reposan de fojas 19 a 21 de la demandada contenciosa analizada, los cuales son resumidos de la siguiente manera:

1. Que la Caja de Seguro Social, por medio de su Directora General, según Resolución No. 1577-96-DG, de 6 de noviembre de 1996, adjudicó definitivamente la Licitación Pública No. 36-95, Renglón No. 1, a la empresa Importadora D. M. D, S. A., convocada para el suministro de 180 camas hospitalarias, por ser la oferta más ventajosa, y mediante Resolución No. 13668-96-JD, de 7 de noviembre de 1996, esa institución del Estado, previo análisis de lo actuado, autorizó el respectivo gasto;

2. Que el contrato que ampara la licitación fue remitido al CENA para que emitiera concepto favorable en virtud del monto de la contratación, y que este organismo conforme Nota No. CENA/166, de 7 de mayo de 1997, emitió concepto no favorable al Contrato No. 63-97, sustentando su actuación en una nueva evaluación, "ajena a lo dispuesto en el Pliego de Cargos".

3. Que la Caja de Seguro Social en vez de reiterar al CENA la solicitud de concepto favorable pues el acto cumplió los requisitos de ley y ante la "necesidad urgente" de las camas pretende rechazar las ofertas, a pesar de "encontrarse ejecutoriada la resolución que adjudicó el acto público"; y,

4. Que contra la decisión de la entidad pública que rechaza las ofertas, o sea, la Resolución No. 1281-97 DG, de 26 de junio de 1997, interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio para que se revocara esa disposición, se remitiera al CENA el Contrato mencionado o, en su defecto, la Caja de Seguro Social compensara los gastos incurridos por Importadora D. M. D., S. A., según la Ley, derechos que han sido "desconocidos" por la parte demandada.

Igualmente, dentro del término de alegatos, la actora presentó un escrito que corre de fojas 68 hasta la 75 de los autos, en el que reitera los conceptos que apoyan su pretensión.

II. Disposiciones legales que se estiman infringidas y concepto de su infracción:

En opinión del demandante, la actuación de la Caja de Seguro Social viola los artículos 1243 del Código Fiscal, 45, tercer párrafo, y 48 de la Ley 56 de 1995 sobre contratación pública.

El artículo 1243 es del siguiente tenor literal:

> "Artículo 1243. Toda resolución u otro acto administrativo contra el cual no haya lugar a interponer recurso alguno administrativo o no se haya utilizado ninguno de los precedentes, quedará ejecutoriado".

En opinión del actor, esta norma jurídica ha sido infringida de manera

directa por omisión, ya que ha sido inaplicada y la Resolución No. 1577-96-DG, de 6 de noviembre de 1996, que le adjudicó el Renglón No. 1 de la licitación pública 36-95 "se encuentra ejecutoriada", pues no se interpusieron en la vía administrativa, dentro de los términos legales, los recursos pertinentes contra ella.

Expresa, además, que una vez ejecutorida la resolución de adjudicación mencionada, surte sus efectos legales y es de obligatorio y necesario cumplimiento; agregando que esto es así en virtud del principio de presunción de legitimidad del acto administrativo, que conlleva "su ejecutividad y su ejecutoriedad" (foja 22). De seguido cita al administrativista panameño, doctor Olmedo Sanjur, quien explica estos dos aludidos conceptos.

Al concluir este concepto de infracción, la parte actora aduce ciertas obligaciones que como adjudicataria y no mero oferente, previa ejecutoriedad de la Resolución No. 1577-96 DG, derivan a su cargo, tales como:

1. Constituir fianza definitiva o de cumplimiento
2. Suscripción del contrato respectivo, y
3. Mantenimiento de su oferta.

En consecuencia, refuta parte de los argumentos incluidos en la Resolución No. 1621-97 DG, de 18 de agosto de 1997, según los que para que el acto administrativo se perfeccionara y surgieran derechos y obligaciones para las partes se "requería la aprobación del Consejo Económico Nacional".

La segunda disposición aducida es el artículo 45 de la Ley 56 de 1995:

> "Artículo 45. Adjudicación de la licitación pública, del concurso o de la solicitud de precios.
>
> El jefe de la entidad contratante, o el funcionario en quien se delegue, si considerase que se han cumplido las formalides establecidas por la ley, mediante resolución motivada adjudicará, en un plazo perentorio, la licitación pública, el concurso o la solicitud de precios, o lo declarará desierto en los casos señalados en el Artículo 46. La adjudicación se hará a quien haya propuesto el menor precio, si éste constituye el único parámetro de adjudicación, o al proponente que haya obtenido la mayor ponderación de acuerdo con la metodología de ponderación de propuestas señaladas en el pliego de cargos.
>
> La adjudicación no se considerará perfeccionada hasta que haya obtenido las autorizaciones o aprobaciones requeridas. Sin embargo, las personas que se consideren agraviadas con la decisión, podrán recurrir por la vía gubernativa, conforme a las reglas del procedimiento fiscal, sin perjuicio de acudir a la Sala Tercera de la Corte suprema de Justicia, para promover la acción contencioso administrativa que corresponda".

La parte actora afirma que esta norma legal, específicamente, su tercer párrafo, ha sido violado en el concepto de interpretación errónea, ya que "... se le ha dado un alcance o sentido que pugna con su letra, provocando la desnaturalización de su fin".

Arguye que con la adjudicación definitiva concluye la etapa precontractual del proceso licitatorio y se da inicio a la fase integrativa, en la que "comienzan los derechos y obligaciones contractuales", de ahí que, con "posterioridad a la adjudicación -agrega- se puede hablar de la existencia de un contrato administrativo". Cuando la Ley se refiere a la perfección de la adjudicación mediante la obtención de las autorizaciones o aprobaciones, se refiere al "perfeccionamiento del contrato", que surtirá efectos una vez éstas hayan sido concedidas; y de inmediato relaciona esta situación jurídica con un

precedente emitido por esta Corporación de Justicia, fechado el 26 de abril de 1993, dictado a propósito de los efectos del refrendo de un contrato administrativo por parte de la Contraloría General de la República.

La tercera disposición que se afirma infringida preceptúa lo que a continuación se copia:

"Artículo 48. Facultad de entidad licitante

La entidad licitante se reserva el derecho de rechazar una o todas las propuestas, o de aceptar la que más convenga a sus intereses.

La facultad de rechazo podrá ejercerse, siempre que no se haya ejecutoriado la resolución que adjudica el acto público de selección de contratista respectivo.

El acto de adjudicación obliga a la entidad licitante y al adjudicatario; en consecuencia, el adjudicatario o contratista, según fuere el caso, tendrá derecho a la formalización del contrato correspondiente, o a recibir compensación por los gastos incurridos, si la entidad licitante decidiese ejercer la facultad de rechazo dispuesta en el presente artículo, después de encontrarse ejecutoriada dicha adjudicación.

A su vez, la entidad licitante podrá ejecutar la fianza de propuesta, de darse incumplimiento por parte del adjudicatario".

Para el demandante este precepto legal fue también violado en el concepto de interpretación errónea, ya que la facultad que la norma establece en haber de la entidad licitante "... no podrá ejercerse si la resolución adjudicatoria del acto de selección de contratistas se encuentra ejecutoriada, tal y como sucede en el caso in examine". (foja 25).

Asegura que la Caja de Seguro Social como consecuencia de haber ejercido la facultad de rechazo está obligada a pagarle una "compensación" por los gastos que le generó su participación en el acto de selección de contratista.

III. El informe explicativo de conducta de la entidad demandada:

La Directora General de la Caja de Seguro Social, mediante Nota S/N, fechada el 29 de enero de 1998, rindió informe de conducta con relación a la demanda que nos ocupa, y en lo medular se opone a las pretensiones del demandante, porque debido al monto que involucraba la licitación pública No. 36-95, Renglón No. 1, requería "concepto favorable" del CENA "para su eficacia"; al no obtener el mismo, "mal podría generar derechos y obligaciones para las partes". Agrega que la actuación de la Caja de Seguro Social, se enmarca en la regulación corespondiente a la contratación pública. (Cfr. fojas 39-41).

IV. Opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración:

Esta Agencia del Ministerio Público, a través de la Vista No. 121, de 24 de marzo de 1998, se opone a las pretensiones de la demanda, fundamentalmente porque la Caja de Seguro Social al proceder a dejar sin efecto la Resolución que adjudicaba el Renglón No. 1 de la licitación cuestionada a la empresa Importadora D. M. D., S. A. hizo uso de "su facultad de rechazo antes de que se perfeccionara el acto de adjudicación, y por consiguiente, nunca nació para la demandante el derecho a que se formalizara el contrato respectivo o se le compensara por los gastos incurridos" (foja 53).

V. Consideraciones y decisión de la Sala:

Esta Superioridad previa evaluación de los argumentos de las partes y en general de las constancias procesales, considera que no le asiste razón ni

fundamento jurídico a las pretensiones de la demandaten; y que por el contrario la actuación de la Caja de Seguro Social que originó el presente proceso ha sido conforme a derecho, al igual que la opinión de la Procuraduría de la Administración es acorde a la razón jurídica aplicable al presente asunto.

La Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre negocios jurídicos similares al ahora planteado por Importadora D. M. D., S. A., en los que ha expresado que mientras que no se cumplan los requisitos legales que concluyan el proceso precontractual, entre éstas las aprobaciones o autorizaciones de los entes u organismos públicos exigidos por la Ley, no puede reputarse perfecccionada la fase de convocatoria al acto público que se trate, a pesar de mediar el acto de adjudicación definitiva, aunque contra éste no se hayan interpuesto dentro del término establecido las impugnaciones previstas por la Ley o el Reglamento respectivo.

Las normas jurídicas vigentes sobre contratación pública y aquellas complementarias sobre la misma materia son expresas al exigir para cierto tipo de contratos especialmente por los montos económicos o dinerarios involucrados, la aprobación o autorización de organismos como el Consejo de Gabinete y el Consejo Económico Nacional.

Al respecto, el Decreto Ley No. 7, de 2 de junio de 1997, derogó, según su artículo 16, los Decretos Ejecutivos No. 75, de 30 de mayo de 1990, y 32, de 10 de marzo de 1995, y además modificó los artículos 58, 68, 99, 100 y 102 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, sobre contratación con el Estado. A pesar de estar derogado el Decreto Ejecutivo 32 de 1995, es la norma reglamentaria aplicable al presente caso por ser la vigente al tiempo de celebrarse el acto público y de emitirse el concepto no favorable del CENA (foja 38), disposición legal que establece en atención al monto de la contratación el requisito para que el probable contrato con la adjudicataria recibiese previamente el concepto favorable del CENA.

El artículo 2, literal ch, del referido Decreto Ejecutivo No. 32 de 1995 (G. O. 22,785 de ese año) facultaba al CENA para emitir concepto favorable sobre la celebración de contratos, operaciones o transacciones cuya cuantía exceda la suma de B/.150,000.00 y no sobrepase la suma de B/.500,000.00. El acto público custionado asciende a B/.187,920.00 más el 5%, en concepto de impuesto de tranferencia de bien mueble.

Es oportuno recordar que situación similar se presenta por causa de la Constitución de la República y de su Ley Orgánica ante la intervención de la Contraloría General de la República, en su condición de entidad estatal encargada de "Fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo establecido en la Ley". Para cumplir su cometido la propia Norma Fundamental, en el artículo 276, faculta a esta institución para efectuar un control previo o posterior de los actos de manejo. En igual sentido, los artículos 1 y 2 de la Ley 32 de 1984, son consultables en cuanto al objeto de la institución y ámbito de aplicación de sus funciones, respectivamente.

En el presente asunto, al ser la convocatoria a la Licitación Pública 35-96, un acto público cuyo monto era inferior a quinientos mil balboas, requería del concepto favorable del CENA, tal como lo prescribe la norma ut supra de 1995, cuyo efecto estima la Sala es perfeccionar el acto de adjudicación definitivo; mientras ello no ocurra no puede hablarse de ejecutoriedad del acto administrativo, propio de la etapa precontractual con el cual prácticamente culmina esta última, no sin antes recibir la autorización o aprobación del organismo público "asesor financiero" que por la cuantía debía ser el CENA; vale decir que equivalente papel debe cumplir el Consejo de Gabinete, ope legis, ante cuantías dinerarias claramente consignadas en las normas jurídicas copiadas, salvo disposición con rango de Ley en contrario.

Antes de la intervención de los organismos de asesoría financiera

señalados, no es posible entender que jurídicamente existe ejecutoriedad del acto porque no se han cumplido todas las etapas propias para su formación; tampoco existe su ejecutividad, que implicaría el obligatorio cumplimiento del acto, en este caso de adjudicción definitiva; de lo que se desprende que si se emite concepto no favorable a la prosecución del trámite contractal entre el Estado y el licitante, como ha ocurrido en el presente caso, el adjudicatario no puede alegar derechos a la formalización de contrato, ya que la adjudicación no se entiende ejecutoriada sin el correspondiente trámite de aprobación o autorización, y tampoco puede exigir compensación dineraria por los gastos incurridos en el proceso licitatorio.

Esto se hace patente en virtud del artículo 45 de la Ley 56 de 1995, que coincidentemente es invocado por la demandante en concepto de interpretación errónea; esta norma preceptúa lo que se deja transcrito:

> "Artículo 45: Adjudicación de la licitación pública, del concurso o de la solicitud de precios.
> ...
> La adjudicación no se considerará perfeccionada hasta que haya obtenido las autorizaciones o aprobaciones requeridas."

Lo anterior permite a la Sala reiterar los conceptos vertidos en sentencia de 26 de abril de 1999, ante la demanda de plena jurisdicción que interpuso la empresa Importadora D. M. D., S. A., contra un acto administrativo emitido por la Caja de Seguro Social que dejó sin efecto la adjudicación definitiva de un Renglón en un acto de licitación pública, y a través de la que también dicha compañía invocó como violadas las mismas normas aducidas en el presente caso, es decir, los artículos 1243 del Código Fiscal; 45, tercer párrafo, y 48, estos dos últimos de la Ley 56 de 1995. Así expresa la aludida sentencia, sobre los referidos cargos de infracción:

> "Ahora bien, tomando en consideración, por un lado los lineamientos doctrinales expuestos en párrafos anteriores en relación a los requisitos que se deben cumplir para que opere la figura de la ejecutoriedad en materia administrativa y por el otro en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997 que modifica el artículo 68 de la Ley No. 56 de 27 de diciembre de 1995, quienes suscriben consideran que no se ha producido la alegada violación del artículo 1243 del Código Fiscal; toda vez que en el caso que ocupa nuestro estudio se requería indispensablemente contar con la aprobación del Consejo Económico Nacional de la Resolución No. 1651-96-D. G. de 22 de noviembre de 1996 por medio de la cual la Directora General de la Caja de Seguro Social adjudicó definitivamente la Licitación Pública No. 15-95 (Renglón No. 1) a IMPORTADORA D. M. D., S. A. para que la misma quedará (sic) ejecutoriada, adquiera firmeza y en consecuencia surtiera los efectos que le son propios respecto de los contratantes.
>
> En relación a la violación del artículo 45 de la Ley 56 de 1995, la Sala estima que la misma tampoco se ha producido; ya que como señalábamos anteriormente el acto de adjudicación definitiva, se entiende perfeccionado al producirse el pronunciamiento del Consejo Económico Nacional en el sentido que autoriza o aprueba la celebración del respectivo contrato para proceder, entonces, a su formalización ... en el presente caso al no contar con la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA) para celebrar el contrato No. 88-97 entre la Caja de Seguro Social e Importadora D. M. D., S. A., el mismo no se perfeccionó, ni mucho menos se ejecutorió.
>
> Finalmente en relación con la alegada violación al artículo 48 de la Ley 56 de 1995, que instituye la facultad de rechazo de la entidad licitante, que en caso de ser ejercida después de encontrarse

ejecutoriada la adjudicción acarrea la compensación de los gastos incurridos; quienes integran este tribunal colegiado consideran que, ... en el caso que nos ocupa no proceden ninguna de las reclamaciones que hace la empresa IMPORTADORA D. M. D., S. A. a la Caja de Seguro Social; toda vez, la Resolción No. 1651-96-D. G. de 22 de noviembre de 1996 no quedó ejecutoriado al no obtener el concepto favorable del Consejo Económico Nacional."

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara que NO ES ILEGAL la Resolución No1. 1281-96 D. G., de 26 de junio de 1997, emitida por la entonces Directora General de la Caja de Seguro Social, que resolvió, entre otras cosas, dejar sin efecto la Resolución No. 1577-96 DG, de 6 de noviembre de 1996, que adjudicó definitivamente el Renglón No. 1 de la Licitación Pública 35-96 a la compañía Importadora D. M. D. S. A., y NO ACCEDE a las demás pretensiones incluidas en el libelo de demanda.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA PEREIRA & PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ROMERO OROCU, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA GENERAL DE JEAN RENÉ BEAUCHAMP, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP NO. 176-97 DE 21 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SU ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense PEREIRA & PEREIRA ha propuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de DORIS ROMERO OROCÚ, quien actúa en calidad de apoderada general de JEAN RENÉ BEAUCHAMP, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DRP No. 176-97 de 21 de abril de 1997, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, y su acto confirmatorio.

El demandante pide que, como consecuencia, de la nulidad del acto impugnado, la Sala ordene el levantamiento de la medida cautelar decretada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, sobre las cuentas cifradas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros.

Mediante la Resolución DRP No. 176-97 de 21 de abril de 1997, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial negó la solicitud de levantamiento de medida cautelar hecha por Pereira y Pereira, en representación de DORIS ROMERO OROCÚ, apoderada general de JEAN RENÉ BEAUCHAMP, sobre las cuentas a plazo a fijo, cifradas, No. 1640001-4 y 1640002-2.

El demandante alega que, contrario a lo que quiere hacer ver la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el dinero depositado en las citadas cuentas cifradas, no pertenece a las hermanas Noriega Siero, quienes han manifestado en distintas oportunidades que desconocen de la existencia de las cuentas.

Plantea además el demandante, que el ente acusado ha congelado ambas cuentas, a pesar de que existen dudas en el Informe de Antecedentes de la

procedencia de estos fondos, por tanto no han probado que sean producto de lesión patrimonial al Estado.

Sobre este punto el abogado del demandante menciona diferentes documentos donde se plantea la duda sobre la procedencia del dinero congelado.

El demandante cita violado los artículos 4 y 17, primer inciso, del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, 969 del Código Judicial, 2 y 5 de la Ley 18 de 28 de enero de 1959, 1103 del Código Civil, cuyos textos reproducimos a continuación:

DECRETO DE GABINETE No. 36 DE 1990

Artículo 4: Desde el momento en que iniciare el procedimiento indicado, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial está facultada para tomar, en cualquier tiempo o cuando a su juicio hubiere motivos para temer que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, todas las medidas precautorias que estime convenientes sobre todo o parte del patrimonio del sujeto llamado a responder patrimonialmente. También pueden ser objeto de las acciones precautorias, todos aquellos bienes que aunque no figuren como parte del patrimonio del sujeto, respecto de ellos existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del patrimonio del Estado. Las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente que resulten afectadas por las medidas precautorias mencionadas, pueden hacerse parte en el procedimiento señalado, a fin de que tengan oportunidad de hacer valer los derechos legítimos que pudiesen alegar, si ese fuera el caso. Igualmente la Dirección de Responsabilidad Patrimonial los puede considerar como sujetos llamados a responder patrimonialmente dentro del procedimiento que se indica en los artículos 2 y 3 anteriores.

Con las limitaciones y salvedades que se han indicado y en lo que resulten aplicables, se seguirán las reglas del Código Judicial.

Artículo 17: Si los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial consideraren que no hay méritos para determinar y declarar responsabilidad alguna, dictarán Resolución motivada en donde dejarán constancia de ello. Copia de esta Resolución se publicará en la Gaceta Oficial.

CÓDIGO JUDICIAL

Artículo 969: Se llama indicio cierto hecho que indica la existencia de otro. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.

LEY No. 18 DE 28 DE ENERO DE 1959

Artículo 2: La cuenta bancaria cifrada es un contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica mantiene un depósito de dinero o de valores o un crédito en un banco y éste se obliga a cumplir las órdenes de pago de dicho depositante hasta la concurrencia de las cantidades de dinero o de entrega de valores que hubiere depositado, o del crédito que se le hubiere concedido, y a guardar estricto secreto en cuanto a la existencia de la cuenta, su saldo y la identidad del depositante.

Los intereses que, de conformidad, con lo estipulado en un contrato de cuenta bancaria cifrada devengue el depositante forman parte integrante de la cuenta para todos los efectos legales.

Artículo 5: Las informaciones sobre cuentas corrientes bancarias cifradas a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán ser reveladas por los gerentes y demás empleados de las instituciones bancarias, a los funcionarios de instrucción, jueces y magistrados que conozcan de procesos criminales, quienes deberán mantener la información en estricta reserva dado el caso de que ésta no sea conducente a esclarecer los hechos punibles que se investigan.

En los casos en que funcionarios públicos, ya sean del orden judicial o administrativo, distintos de los mencionados en este artículo, soliciten de instituciones bancarias cualesquiera información, o el secuestro o el embargo de cuentas bancarias cifradas, inclusive en los casos de juicios de sucesión, el banco no podrá suministrar la información, ni retener los fondos o valores depositados en cuentas cifradas, y deberá responder el requerimiento manifestando que no le es posible suministrar ninguna información, aún en los casos en que realmente exista la cuenta o los fondos o valores objetos del requerimiento.

CÓDIGO CIVIL

Artículo 1103: Deberá haber un principio de prueba por escrito para acreditar contratos y obligaciones que valgan más de cinco mil balboas (B/.5,000.00). Si no hubiere un principio de prueba por escrito no se admitirá prueba de testigos."

Según el demandante el acto que acusa de ilegal transgrede el artículo 4 del Decreto de Gabinete No. 36 de 10 de febrero de 1990, porque en el proceso de responsabilidad patrimonial no existen motivos fundados que respalden la acción adoptada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de cautelar las cuentas cifradas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros.

En relación al artículo 969 del Código Judicial que define lo que constituye un indicio, el demandante alega que no existe en el expediente ningún hecho cierto y debidamente probado, como lo exige la norma, del cual se derive una presunción seria que los fondos depositados en las cuentas cifradas provienen del Erario Público.

Según el recurrente, el artículo 2 de la Ley 18 de 28 de enero de 1959 estipula que el contrato de cuenta cifrada es un contrato solemne, en virtud del cual el banco se obliga a guardar en estricto secreto la existencia de la cuenta, su saldo y la identidad de su titular, por tanto, al atribuirle la propiedad de las cuentas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros, a las hermanas Noriega Sieiro, con base en la declaración de un imputado, sin considerar que ellas ni siquieran figuran en el contrato, se viola esta norma.

En cuanto al artículo 5 de la Ley 18 de 28 de enero de 1959 el demandante arguye que según esta norma cualquier información de una cuenta cifrada sólo puede ser revelada por los gerentes y empleados del banco y únicamente a funcionarios como jueces y magistrados que conozcan de causas criminales. Por tanto, fuera de esas circunstancias se produce una violación a lo previsto en esta excerta legal.

El actor considera que no es válido "dar por probada la existencia de un contrato bancario de depósito a plazo fijo entre la Caja de Ahorros y la señorita LORENA DEL CARMEN NORIEGA ni de la obligación de la primera de reembolsar a la segunda la suma depositada, que es mayor de B/.5,000.00", con base en la declaración de un testigo, con lo cual se contraviene el texto del artículo 1103 del Código Civil.

Por último señala que, pese a que en este caso no existen pruebas concretas ni suficientes contra Jean René Beauchamp, ni indicios que respalden las acciones tomadas, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial no ha dictado resolución

ordenando el levantamiento de la medida cautelar, con lo cual transgrede lo estipulado en el artículo 17 del Decreto de Gabinete No. 36 de 1990.

Admitida la presente acción, se corrió en traslado al Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y a la Procuradora de la Administración (fs. 82).

En tiempo oportuno el Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, mediante Nota DRP No. 77-C-50 de 29 de septiembre de 1997, rindió el informe explicativo de conducta (fs. 84 a 94).

El funcionario demandado señaló que la negativa de levantar la medida cautelar, solicitada por el demandante, tiene sus fundamentos en las pruebas y serios indicios que apuntan a que el dinero depositado en las cuentas No. 1640001-4 y 1640002-2, pertenecen en realidad a Lorena del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro.

En este informe el Magistrado Sustanciador da un detalle pormenorizado de una serie de transferencias bancarias que les llevaron a esa conclusión.

Además, se refiere a la declaración rendida por Jaime Simmons, otros funcionarios de la Caja de Ahorros y de las contradicciones en las declaraciones de la señora Doris Romero Orocú.

En su Vista Fiscal No. 554 de 10 de diciembre de 1997, la Procuradora de la Administración solicita a la Sala desestimar las pretensiones del demandante (fs. 95 a 108).

La representante del Ministerio Público coincide con los planteamientos enunciados por el funcionario demandado.

Vencida la etapa de alegatos, la Sala entra a conocer de la presente controversia, previas las siguientes consideraciones.

La cautelación de los fondos depositados en las cuentas a plazo fijo, cifradas, No. 01-640001-4 y 01-640002-2, a nombre de Doris Eneida Romero Orocú fue ordenado mediante la Resolución No. 224 de 24 de mayo de 1991, expedida por el Contralor General de la República (fs. 281 a 284 del Tomo 1b del expediente administrativo identificado C-50). En esa misma resolución se ordenó a la Dirección General de Auditoría una investigación sobre el origen de los fondos depositados en las cuentas No. 08-01-13912, a nombre de Thays Nefertitis Noriega Sieiro y No. 08-01-6178, a nombre de Lorena del Carmen Noriega Sieiro.

Legible de fojas 582 a 787 del Expediente C-50 (Tomo 2), consta el Informe de Antecedentes No. 06-30-94-DAG-DEAE, levantado sobre la investigación de las cuentas a plazo fijo cifrado No. 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2.

En el expediente administrativo C-50 (Secuestro 1), de fojas 81 a 83, reposa la solicitud presentada el 20 de abril de 1995, por Escobar, Bethancourt, Pereira & Taboada, en representación de Doris Eneida Romero Orocú, para que se levante la medida cautelar decretada mediante la resolución antes vista, bajo la premisa de que Doris Eneida Romero Orocú es la única titular de las citadas cuentas. Esta solicitud fue rechazada mediante la Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995 (fs. 84 a 98).

La Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995 fue objeto de demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte (ver fs. 794 y 812 del expediente C-50, Tomo 2).

En marzo de 1997, es presentada una nueva solicitud de levantamiento de la medida cautelar decretada por la Resolución No. 224 de 24 de mayo de 1991, sobre las cuentas 1640001-4 y 1640002-2, en esta oportunidad por Pereira y Pereira, en representación de Doris Eneida Romero Orocú, está vez en su condición de

apoderada general de Jean René Beauchamp Galván [Tomo III del expediente administrativo clasificado como C-50 (Secuestro 3), de fojas 1373 a 1378).

A la solicitud se acompañó el poder especial otorgado a Pereira y Pereira (fs. 1380), certificación de Registro Público donde consta la inscripción del Poder General para pleitos (fs. 1379) y la Escritura Pública No. 1881 de 19 de marzo de 1996, otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, por la cual Jean René Beauchamp otorgó poder general para pleitos a favor de Doris Eneida Romero Orocú (fs. 1381 a 1384).

La firma Pereira y Pereira sustenta la nueva solicitud de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre las cuentas cifradas en que el dinero depositado pertenece a Jean René Beauchamp, y que no se ha demostrado que provenga de afectación de fondos públicos, por lo que la medida carece de justificación legal. Alega, que Doris Eneida Romero Orocú actuó únicamente por encargo de Jean René Beauchamp al momento de abrir las cuentas.

Examinado el caudal probatorio que reposa en el expediente, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, concluyó que las pruebas apuntan a que el dinero depositado en las cuentas a plazo fijo cifrado, son propiedad de Lorena del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro. Con base en esta hipótesis, y tomando en consideración, las contradicciones en las declaraciones de Doris Eneida Romero, fue desestimada la solicitud de levantamiento de medida cautelar (Resolución No. 176-97 de 21 de abril de 1997, fs. 1388 a 1397 del Tomo III, del Secuestro, Expediente C-50).

Interpuesto el recurso de reconsideración, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, mediante Resolución DRP No. 289-97, de 16 de junio de 1997 confirmó en todas sus partes la Resolución No. 176-97 de 21 de abril de 1997 (fs. 1402 a 1415 ut supra).

Tanto en el acto impugnado como en la resolución confirmatoria, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, detalla una multiplicidad de transferencias bancarias que tienen, supuestamente, su génesis en dos cuentas de ahorros pertenecientes a Lorena y Thays Noriega Sieiro, hechos que llevaron al Tribunal de Cuentas a la convicción de que existen suficientes elementos que vinculan a las Hermanas Noriega Sieiro con los fondos depositados en las cuentas cauteladas:

El 19 de octubre de 1988, fueron canceladas las cuentas de ahorros 08-01-13912 y 08-01-6178, abiertas por Lorena Del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro en la Caja de Ahorros, sucursal de San Francisco, quienes autorizaron en ese entonces a la señora Nilsa Doris Aparicio Orocú, prima de la doctora Doris Eneida Romero Orocú, a cancelar las cuentas de ahorros mencionadas y, con esos fondos abrir dos cuentas de ahorros nuevas a su nombre, numeradas No. 23337-4 y 23336-6. La nueva cuenta numerada 23337-4, a nombre de Nilsa Doris Aparicio Orocú, fue abierta con los fondos de la Cuenta No. 08-01-13912, a nombre de Thays Nefertitis Noriega, y fue incrementada con dos depósitos en junio de 1989; uno, por B/.70,000.00 y el segundo, por B/.3,021.75. La cuenta No. 23336-6, también a nombre de Nilsa Doris Aparicio Orocú, en la que fue depositado el dinero de la Cuenta No. 08-01-6178, a nombre de Lorena del Carmen Noriega, registra dos depósitos, uno por B/.70,000.00 y otro por B/.2,508.90.

Posteriormente, se efectuaron otras transferencias de los fondos a otras cuentas abiertas por la señora Nilsa Doris Aparicio Orocú (Cuentas No. 1065-9 y 1066-7), hasta el 13 de julio de 1989, que se registra la apertura de las cuentas a los plazos fijos 01640001-4 y 01640002-2, a nombre de la demandante doctora Doris Eneida Romero Orocú.

(Ver detalle en Informe de Antecedentes No. 06-30-94-DAG-DEAE, de fs. 621 a 723 del Expediente C-50, Tomo 2).

Resaltó además la entidad demandada, que los emolumentos recibidos por

Lorena del Carmen Noriega Sieiro, por laborar en el Departamento de Migración, que integraban en aquel entonces las Fuerzas de Defensas, fueron depositados en las cuentas No. 23336-6 y 23337-4 de la Caja de Ahorros, a nombre de Nilsa Doris Aparicio Orocú (ver fs. 403, 405, 406, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 426, 428 y 429 del expediente C-50, Tomo 1, fs. 644 a 698 del Informe de Antecedentes, expediente C-50, Tomo 2).

Agrega, que las cuentas a plazo fijo cifrado, según el Manual de Políticas de Cuentas Cifradas de la Caja de Ahorros, todas las instrucciones escritas del cliente deben ser aprobadas mediante la verificación de la firma convencional. Es por ello, que el Tribunal de Cuentas considera que la firma legal constituye un simple requisito. En este caso la firma de Doris Eneida Romero Orocú, representa una mera formalidad.

Por otro lado, fueron valoradas las declaraciones del algunos funcionarios de la Caja de Ahorros que aseguran que el dinero de las cuentas pertenece únicamente a Lorena Noriega Sieiro (fs. 230 a 233 y 241 a 244 del expediente C-50, Tomo 1).

La Sala observa que la pretensión en este caso, consiste principalmente en el levantamiento de la medida cautelar decretada mediante la Resolución No. 224 de 24 de mayo de 1991, sobre las cuentas cifradas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros.

En fallo fechado el 6 de mayo de 1998 la Sala, al conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por Doris Eneida Romero Orocú, para que se declarara nula, por ilegal, la Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995, a que nos referimos en párrafos anteriores, se pronunció en relación a la medida cautelar decretada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, sobre las cuentas cifradas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros.

Entre los hechos expuestos en la demanda propuesta contra la Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995, reproducimos los siguientes:

> " 1. Que el día trece (13) de julio de 1989 la doctora DORIS ENEIDA ROMERO OROCU, personalmente concurrió a la Caja de Ahorros y, con su firma legal, abrió lascuentas cifradas a palzo fijo números 1640001-4 y 1640002-2, de las que es titular.
>
> 2. Que la demandante ROMERO OROCU, ha declarado tanto ante la Fiscalía Séptima de Circuito, como ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, que el dinero depositado a plazo fijo en las cuentas cifradas números 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, que abrió con su firma legal, lo recibió del Sr. JEAN BEAUCHAMP; estas declaraciones constan en el expediente B-10 de la DRP que contiene el proceso de responsabilidad patrimonial seguido a las Srtas. LORENA DEL CARMEN NORIEGA y THAIS NEFERTITIS NORIEGA, que origina la resolución impugnada.
>
> 3. Que contrariamente a la sospecha o presunción esgrimida por la Contraloría General de la República para tomar la decisión de congelar las cuentas cifradas en referencia, en el expediente B-10 de la DRP que contiene la investigación del caso, no se ha probado plenamente que los fondos depositados en esas cuentas provienen del Erario Público, a pesar de que las investigaciones ordenadas por el señor Contralor duraron 36 meses.
> ...
> 6. Que existen documentos probatorios que reposan en el expediente seguido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a la Doctora ROMERO OROCU, entre los que figuran los documentos contentivos de las contestaciones de las señoritas LORENA DEL CARMEN NORIEGA SIEIRO

> y THAIS N. NORIEGA SIEIRO negando tener los vínculos o la relación que les atribuye la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con respecto a los dineros depositados en las cuentas cifradas de la Caja de Ahorros que han sido congeladas. Ambas manifiestan desconocer la existencia de esos plazos fijos cifrados que motivan el procedimiento de responsabilidad patrimonial seguido en contra de ellas." (Registro Judicial de mayo de 1998, pág. 392).

En aquella oportunidad, al conocer el fondo de la controversia, la Sala declaró que no es ilegal la Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995, mediante la cual la DRP negó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y aclaró que el Tribunal de Cuentas actuó con apego a las disposiciones que lo facultan para decretar medidas cautelares sobre bienes que presumiblemente provengan directa o indirectamente del Erario Público. Entre los considerandos expuestos en esta Sentencia, reproducimos lo siguiente:

> "Así las cosas, esta Superioridad considera que contrario a lo que señala la parte demandante, y dada la existencia de elementos probatorios e indiciarios que demuestran la vinculación de las jóvenes THAYS y LORENA NORIEGA SIEIRO con las cuentas a plazo fijo cifradas con la numeración 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, la adopción de la medida cautelar no conlleva vicio de ilegalidad alguno. Además, la recurrente no ha demostrado la procedencia de los fondos depositados en dichas cuentas bancarias, que es lo que se está tratando de investigar en el proceso seguido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial contra la familia NORIEGA SIEIRO, a fin de determinar si los mismos constituyen fondos prevenientes del Erario Público.

Por las motivaciones expuestas, podemos concluir que hasta tanto no culmine la investigación por parte de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre cuentas identificadas con la numeración 1-64-001-4 y 01-64-002-2 a nombre de Doris Eneida Romero Orocú, resulta prematuro.

Por tanto, la Sala estima que más que infringir los artículos 4° y 17 del Decreto N° 36 de 1990, así como el artículo 967 del Código Judicial, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial actuó precisamente, en apego de las mismas. De la lectura de estas disposiciones se desprende de forma clara la facultad que tiene dicha institución para tomar en cualquier tiempo y cuando a su juicio hubiere motivos para temer que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, todas las medidas precautorias que estime convenientes, sobre todo o parte del sujeto llamado a responder patrimonialmente (ya se trate de personas que a cualquier título hayan tenido acceso a fondos o bienes públicos, se hubiesen aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o en beneficio de un tercero), así como también sobre aquellos bienes que aunque no figuren como parte del patrimonio del sujeto, respecto de ellos existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indirectamente del patrimonio del Estado." (Registro Judicial de mayo de 1998, pág. 397).

En este sentido, el artículo 1014 preceptúa que la sentencia ejecutoriada que en proceso contencioso decide la pretensión tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hay identidad de las partes, la cosa u objeto y de la causa o razón de pedir.

En este caso, como se desprende claramente de los hechos expuestos, existe identidad en la pretensión en ambos casos.

El Doctor Jorge Fábrega al referirse al fenómeno de cosa juzgada expresa lo siguiente:

> "La cosa juzgada significa que se ha examinado y decidido sobre la

> pretensión (el fondo del proceso) que dicha pretensión no puede ser objeto de discusión en un nuevo proceso, ni se puede dictar sentencia en un nuevo proceso que desconozca lo resuelto en el primero."
> (FÁBREGA, Jorge, "Estudios Procesales", Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1990, pág. 789)

Si bien es cierto en este caso la firma forense Pereira & Pereira, representa por interpuesta persona, los intereses de Jean René Beauchamp, como propietario de los fondos depositados en las cuentas congeladas, y en la anterior, Pereira & Pereira actuaba en representación de Doris Eneida Romero Orocú, como titular de las mismas cuentas congeladas; de la revisión de las constancias procesales, se desprende de forma clara e indubitable que la pretensión en ambos casos gira en torno al levantamiento de la medida cautelar decretada por Resolución No. 224 de 24 de mayo de 1991, sobre las mismas cuentas.

Como apreciamos de las transcripciones del citado fallo, la Sala consideró que ordenar el levantamiento de la medida cautelar, antes que culminen las investigaciones, resulta prematuro.

Luego de revisado el caudal probatorio que reposa en los expedientes contentivos del proceso surtido ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, la Sala observa que el punto central tanto en la demanda anterior como en la presente no ha variado, pues la Dirección de Responsabilidad Patrimonial aún no ha concluido las investigaciones sobre este caso, y mientras no se haya esclarecido si el dinero de las cuentas congeladas, No. 1640001-4 y 1640002-2, es el dinero que originalmente había sido depositado en las cuentas de ahorros No. 08-01-13912 y 08-01-6178 en la Caja de Ahorros, Sucursal de San Francisco, por Thays y Lorena Noriega Sierio en 1981 y 1983, respectivamente, y si éste proviene o no del Erario Público, el levantamiento de la medida cautelar resultaría prematuro y hasta riesgoso para los intereses del Estado.

En este caso la sentencia de 6 de mayo de 1998, antes vista, produce efectos de cosa juzgada, porque en dicho fallo se reconoce la legalidad de la Resolución DRP No. 298-95 de 26 de julio de 1995, de negar el levantamiento de la medida cautelar decretada por la Contraloría General de la República, mediante la Resolución No. 224 de 24 de mayo de 1991, sobre las cuentas cifradas No. 1640001-4 y 1640002-2, depositadas en la Caja de Ahorros, a nombre de Doris Eneida Romero Orocú, que es la misma decisión adoptada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, mediante el acto impugnado en la presente causa.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE HAY COSA JUZGADA en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por PEREIRA & PEREIRA, en representación de DORIS ROMERO OROCÚ, apoderada general de JEAN RENÉ BEAUCHAMP, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DRP No. 176-97 de 21 de abril de 1997, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, y su acto confirmatorio.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DÍAZ ORDOÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 30 DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

NACIONAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Díaz Ordoñez actuando en nombre y representación de INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS, INC., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 30 de 1 de noviembre de 1999, expedida por el Director General de la Policía Nacional, y para que se hagan otras declaraciones.

La Sala advierte que la parte actora ha presentado una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente, los efectos de la resolución impugnada, la cual debe ser atendida antes del trámite de admisión de la demanda.

El demandante celebró contrato de suministro con la Policía Nacional el 1 de diciembre de 1998, para la adquisición de 10 pistolas conforme a las especifícaciones de la Orden de Compra No. 3506-98.

Mediante la Resolución No. 30 de 1 de noviembre de 1999 se resuelve lo siguiente:

a) Rescindir de la Orden de Compra No. 3506-98 de diciembre de 1998, mediante la cual se requerían 10 pistolas USP Cal. 9mm x 19 incluyendo 4 cargadores de 15 cartuchos origen Inglaterra/ Alemania;

b) Someter a un nuevo concurso de precios las Pistolas para su adquisición, por requerir con urgencia;

c) Someter al demandado, a la sanción contemplada en los artículos 12 numeral 3 y 105 de la Ley 105 de 1995.

La petición del demandante plantea ante esta Superioridad, la necesidad urgente de que se adopte la medida cautelar requerida, dado el perjurio grave, presente y futuro de carácter económico ya que el demandante no podrá participar en nuevos actos públicos y en las demás que se celebren en el transcurso de los próximos tres (3) meses en la Policía Nacional.

Las razones que han motivado la rescisión del contrato por parte de la Policía Nacional constan en el acto impugnado, visible a foja 1 del expediente, estableciéndose que el demandante incumplió con el término estipulado de 90 días para la entrega de la mercancía, por lo cual solicitó el 20 de agosto de 1999 una extensión de la entrega por 30 días más, argumentando que su proveedor le comunicó que los artículos se encontraban en Bélgica.

Posteriormente, el 14 de septiembre de 1999 se solicita nuevamente una extensión de entrega, señalando que el embarque le estaba llegando el 17 de septiembre en hora de la noche, lo que le impedía la tramitación en Aduana. Esta petición también fue concedida, estableciéndose como fecha límite el 27 de septiembre de 1999.

Mediante nota del 24 de septiembre de 1999, el accionante peticionó ante la Institución la tramitación necesaria para la exoneración del pago del impuesto de la mercancía.

Pese a lo anterior, la Policía Nacional le comunica a la empresa demandante su intención de rescindir el contrato por incurrir la compañía en la violación del artículo 104, numeral 1 de la Ley 56 de 1995, y hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 12, numeral 3 de la misma excerta legal (Nota No. DSG-828-DPC-99 de 4 de octubre de 1999).

En la resolución impugnada también se señala que a pesar de haberse notificado al demandante conforme al artículo 106, numeral 2 de la Ley 56 de 1995, éste no presento prueba que justificara su incumplimiento.

Es la opinión de esta Superioridad, que en esta etapa previa el demandante no ha comprobado adecuadamente la existencia de vicios de ilegalidad manifiestos y evidentes en la actuación adelantada por la Policía Nacional que conlleven a la necesidad urgente de adoptar una medida cuatelar de suspensión.

De igual forma, el recurrente tampoco ha comprobado los perjuicios notoriamente económicos graves endilgados contra la resolución impugnada. En suma, el actor no ha acreditado en su favor, la existencia del "fumus boni iuris", o apariencia del buen derecho, que permitiría al Tribunal acceder a lo pedido.

Es pertinente señalar, que el examen de mérito sobre la actuación administrativa demandada será adelantado por la Sala en su etapa correspondiente.

Del análisis efectuado, este Tribunal concluye que no existe justificación para acceder a la medida cautelar requerida, por lo que conforme a la facultad discrecional conferida a esta Magistratura por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, se procede a negar lo pedido.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución No. 30 de 1 de noviembre de 1999, expedida por el Director General de la Policía Nacional.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCELO A. DE LEÓN PEÑALBA EN REPRESENTACIÓN DE OSMANDO E. AGUILERA P. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA OIRH-48 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999, SUSCRITA POR LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS, EL DECRETO EJECUTIVO N°46 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Marcelo A. De León Peñalba en nombre y representación de OSMANDO E. AGUILERA P., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Nota OIRH-48 de 22 de septiembre de 1999, suscrita por la Jefa de Recursos Humanos, el Decreto Ejecutivo N° 46 del 5 de octubre de 1999, dictada por conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos procedibilidad que exige la ley, para que pueda ser admitida.

Observa el suscrito, que en el libelo la parte actora solicita en el punto

cuya expresión dice: "Lo que se demanda", que se declare nula por ilegal, la Nota OIRH-48 de 22 de septiembre de 1999, aduciéndola como el acto principal, y en un segundo lugar, el Decreto Ejecutivo N° 46 del 5 de octubre de 1999. Este último documento es, para los efectos de esta demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, el acto principal, pues contiene la decisión de destitución del señor OSMANDO A. AGUILERA P., y no la Nota OIRH-48 de 22 de septiembre de 1999, ya que la misma sólo representa la notificación de dicha decisión proferida por la autoridad administrativa.

En adición a esto, cabe destacar que el actor no presenta como prueba, copia de la mencionada nota, pero sí del Decreto Ejecutivo N° 46 del 5 de octubre de 1999, el cual, desafortunadamente, no está autenticado (Ver foja 1), lo que está en evidente contradicción con lo que desconoce la exigencia prevista en los artículos 44 de la Ley 135 de 1943 y 820 del Código Judicial, que perceptúan lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."
>
> "Artículo 820. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley dispone otra cosa." (Subrayado del Ponente)
>
> A propósito de ello, este Tribunal ha sostenido lo siguiente:
>
> Auto de 28 de mayo de 1992:
>
> "La jurisdicción contencioso administrativa requiere que la documentación que se presenta ante el Tribunal conste debidamente autenticada para considerar como fidedignos los escritos presentados. El Código Judicial posee todo un articulado sobre la validez de los documentos, sean públicos o privados, y en ellos se resalta la importancia jurídica de la autenticación de documentos para que éstos puedan admitirse como constancias verdaderas de los hechos."
>
> Auto de 3 de diciembre de 1998:
>
> "... la jurisprudencia reiterada de este tribunal exige que el memorial en comento sea aportado al expediente en su forma original o en su defecto como copia autenticada que pueda requerir al funcionario que recibió tal documento, certificándose de esta forma que dicho memorial es copia auténtica de su original".

Por otro lado, es menester señalar que el actor solicitó en la demanda que previo los trámites correspondientes, la Sala solicitara al Despacho del Ministro del MIDA (Departamento Legal), copia auténtica del Decreto Ejecutivo N° 46 del 5 de octubre de 1999, el cual debía reposar en el expediente del señor OSMANDO E. AGUILERA P.. Sin embargo, no consta en el proceso gestión alguna por parte del demandante que aluda a un despliegue de esfuerzos encaminados a superar cualquier dificultad en aportar dicha copia autenticada. El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 reformada por la Ley 33 de 1946 al respecto indica:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado,

a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Sobre el particular, la Sala ha mantenido el criterio expresado como se colige de los antecedentes que se transcriben a continuación:

Auto de 27 de mayo de 1999:

"Esta Superioridad ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar debidamente autenticado el acto que se acusa de ilegal, y en caso que se imposibilite la obtención del mismo, previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado solicitará expresamente al Magistrado Sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia". (El subrayado es nuestro)

Se concluye en consecuencia, que la presente acción de plena jurisdicción no puede ser admitida conforme a las circunstancias anteriormente descritas.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Marcelo A. De León Peñalba en nombre y representación del señor OSMANDO E. AGUILERA P..

Notifiquesese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANIMA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE DÍAZ ORDOÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 27 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Díaz Ordoñez actuando en nombre y representación de INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS INC., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 27 de 27 de octubre de 1999, expedida por el Director General de la Policía Nacional, y para que se hagan otras declaraciones.

Además acompaña a la demanda una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente, los efectos de la resolución impugnada, previo al trámite de admisión de la demanda.

A través de la orden de compra No. 161-D/99 de 29 de junio de 1999, el demandante celebró contrato con la Policía Nacional para la adquisición de 200 Luces de Bengala.

El acto acusado resuelve lo siguiente:

a) Rescindir de la Orden de Compra No. 161-D/99 de junio de 1999, mediante la cual se requerían 200 Luces de Bengala, fabricadas en los Estados Unidos.

b) Someter a nuevo concurso de precio las Luces para su adquisición, por requerirse con urgencia.

c) Someter a la empresa INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS INC., a la sanción contemplada en los artículos 12 numeral 3 y 105 de la Ley 105 de 1995.

El demandante fundamenta su petición en el hecho que en virtud de la sanción a la que se le somete, no podra participar en Nuevos Actos Públicos y en los demás que se celebren por el período de los próximos tres (3) meses en la Policía Nacional. De allí que, esta sanción le cause un perjurio inminente grave, presente y futuro de carácter económico.

Agrega el accionante, que al requerirse con urgencia los Visores Nocturnos y el no permitirle su participación en los citados Actos Públicos, se evidencia un perjurio grave e inminente de carácter económico para la sociedad. Además que los equipos requeridos por la Institución se encuentran en el Recinto Aduanero desde el 16 de septiembre de 1999.

Consta en la resolución impugnada que la fecha de entrega de las luces de bengalas era el 29 de julio de 1999, ya que se requería con urgencia para el operativo seguridad No. 2 de Darién. Que vencida esta fecha, el demandante solicitó una extensión de entrega de 30 días, argumentando que no habían recibido la confirmación del certificado de usuario final por parte del proveedor, para poder entregar la mercancía. Esta petición fue concedida mediante nota de 2 de agosto de 1999, alargando la entrega hasta el período al 27 de agosto de 1999.

El demandante solicita nuevamente, el 30 de agosto de 1999, una extensión de entrega (con nota fechada 27 de agosto de 1999). Como fundamento de la misma se señala que los documentos de reexportación que requiere el tipo de mercancía estarían lista a mediado del mes de septiembre. Esta petición también fue concedida, estableciendo como fecha límite el 30 de septiembre de 1999.

A pesar de haberse establecido la fecha límite, INTERAMERICAN POLICE SECURITY DISTRIBUTORS INC. mediante la nota de 29 de septiembre de 1999, solicitó una extensión de 45 días en la fecha de entrega. Esta vez, se argumenta que no habían recibido el permiso de exportación que emite el departamento de Estados Unidos.

Como respuesta a esta solicitud, El Director General de la Policía Nacional comunica (mediante nota DSG-831-DPC-99 de 4 de septiembre de 1999) su decisión de rescindir del contrato por incurrir la compañía en la violación de lo contemplado en el artículo 104, numeral 1 de la Ley 56 de 1995, y que así hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 12, numeral 3 de la misma excerta legal.

También se indica en la Resolución No. 27 de 1999 que el demandante no presentó prueba que justificará su incumplimiento, pese de habersele notificado formalmente conforme al artículo 12, numeral 3 de la Ley 56 de 1995.

En estas circunstancias, se aprecia que en el acto impugnado se toma en consideración la situación que se está dando en la frontera de Panamá con Darién, la cual atenta contra el bienestar de los residentes y la seguridad nacional. Que por ello se creó un fondo especial para dotar a los miembros de la Policía Nacional de los equipos necesarios, dado la imperiosa necesidad para la utilización de los mismos en la frontera del Darién.

De acuerdo a lo anterior, es la opinión de este Tribunal que la resolución impugnada se encuentra ampliamente motivada en cuanto a la rescisión del contrato y que aparentemente no muestra la violación de alguna norma.

Por otro lado, esta Superioridad advierte que en esta etapa incipiente del proceso el recurrente no ha comprobado adecuadamente la existencia de vicios de

ilegalidad manifiestos y evidentes en la actuación adelantada por la Dirección General de la Policía Nacional que conlleven a la necesidad urgente de adoptar una medida cautelar de suspensión.

Otro aspecto que debe considerarse, es que la parte actora sólo indica que la sanción que se le impone produce perjuicios notoriamente graves, y que esta situación tampoco ha sido comprobada. El objeto de la suspensión del acto acusado debe ser evitar un perjuicio económico o patrimonial notoriamente grave y de difícil reparación.

En estos términos, debemos manifestar que el actor no ha acreditado en su favor, la existencia del "fumus boni iuris", o apariencia del buen derecho, es decir que la resolución impugnada pueda lesionar la integridad del ordenamiento jurídico. Es requisito esencial para acceder a la suspensión, que el demandante compruebe previamente mediante prueba preconstituída los hechos alegados.

Cabe destacar, que el análisis de tales argumentos será adelantado por la Sala al momento de decidir el fondo de la controversia planteada.

Luego de un exhaustivo examen, esta Superiordad concluye que no existe justificación para acceder a la medida cutelar requerida, por lo que conforme a la facultad discrecional que le confiere el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, se procede a negar lo pedido.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución No. 27 de 27 de octubre de 1999, expedida por el Director General de la Policía Nacional.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. SANTANA GONZALEZ EN REPRESENTACIÓN DE SANTA LIBRADA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 219-04-308 Y 219-04-309 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Santana González, actuando en representación de SANTA LIBRADA S. A., y BANANERA SANTA RITA S. A, el Lcdo. César Sanjur actuando en representación de PUMSA INC., S. A., y BANANERA SANTA CECILIA S. A., y el Lcdo. Generoso Olmos actuando en representación de ANDY ELENA S. A., han presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declaren nulas por ilegales, las Resoluciones N° 219-04-308, 219-04-309 de 20 de marzo de 1997; las Resoluciones N° 219-04-316 y 219-04-317 de 20 de marzo de 1997; la Resolución N° 219-04-314 de 20 de marzo de 1997; la Resolución N° 219-04-303 de 20 de marzo de 1997; y la Resolución N° 219-04-298 de 20 de marzo de 1997, todas expedidas por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

En los actos demandandos se exige a SANTA LIBRADA S. A, el pago de

B/.9,880.09, y B/.12,224.96; a BANANERA SANTA RITA S. A., B/.10,017.59 y B/.17, 272.09; PUMSA INC., S. A., B/.3,714.70; BANANERA SANTA CECILIA S. A., B/.10,382.90; y a ANDY ELENA S. A., B/.13,444.53 en concepto de Impuesto de Timbre, recargos e intereses a favor del Tesoro Nacional, sobre la base de que luego que el Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos ordenara el examen de los libros y documentos de contabilidad de los contribuyentes arriba mencionados, se logró establecer que omitieron el pago del Impuesto de Timbre sobre la facturación por venta de banano.

I. La pretensión y su fundamento.

En las demandas se formula pretensión consistente en que se declare la nulidad de los actos administrativos arriba enunciados, así como también los actos que los confirman, y, que como consecuencia de estas declaraciones, los demandantes no están obligados al pago de Impuesto de Timbre, recargo e intereses a favor del Tesoro Nacional.

La pretensión se fundamenta en el hecho que los demandantes solamente fungían como meros intermediarios, no facturaban ni expedían recibos, todo lo cual indica que no estaban sujetos al impuesto de timbre por facturas de impuestos que nunca existió. A ello añade que el impuesto de timbre no está sujeto a la venta que se factura en el extranjero, como ocurre con el banano que dicho sea de paso tiene un impuesto especial por exportación.

A juicio de los demandantes, las resoluciones acusadas desconocen el artículo 585 del Código Fiscal, que establece que la actividad de exportación no causa impuesto alguno, ya que la única excepción a la norma, como antes se indicó, es un impuesto especial por caja de banano exportado. En razón de ello, la infracción literal de este precepto legal se estima que fue en el concepto de violación directa por comisión.

Se aduce igualmente como violado, el artículo 11 de la Ley 76 de 1976, vigente para el período fiscal de 1982, en virtud de que los demandantes no estaban obligados a expedir facturas por las exportaciones de banano. No obstante, la Dirección General de Ingresos de Chiriquí, no toma en cuenta esta circunstancia y le aplica el impuesto de timbre a los demandantes y que sirve solamente para cuando se expide factura, situación que exige el artículo 967 del Código Fiscal.

También se sostiene que nunca se había exigido el pago de Impuesto de Timbre, aún después de varias auditorías, durante años, situación que origina grandes dudas de si realmente los documentos expedidos por la empresa están sujetos o no a ese impuesto. Es por ello, que en opinión de los demandantes, se violó por violación directa por comisión, el artículo 946, parágrafo II, del Código Fiscal, además que no se ha cumplido con lo establecido en cuanto al procedimiento de consulta en caso de duda del pago del Impuesto de Timbre.

De igual manera se cuestiona la actuación de la entidad demandada de aplicar un impuesto de timbre que solamente se causa cuando se expide una factura, tal como lo regula el artículo 967, ordinal II del Código Fiscal. En este sentido se alega que la mencionada disposición, se violentó de manera directa por comisión, en la medida que el Impuesto de Timbre hubiese sido posible si los documentos o facturas fueran realizadas dentro de la jurisdicción de la República de Panamá.

Los demandantes también invocan como violado de manera directa, el artículo 2 de la Ley 25 de 26 de agosto de 1994, el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1983 y el artículo 36 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991. Se argumenta que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la agricultura no necesitan licencia para poder ejercer la actividad y antes de la Ley 31 de 1991, no se les exigía a los agricultores hacer facturas de sus actividades, lo que demuestra que se les excluía del Impuesto de Timbre por factura. Además, se aduce que la Ley 31 de 1991, se está aplicando

retroactivamente.

Por ultimo, se argumenta que el ordinal 27, del artículo 973 del Código Fiscal, establece que no causarán impuestos todo lo exceptuado por leyes especiales y el banano tiene una ley especial, de manera que la violación a este ordinal es de manera directa por comisión. El numeral 19 de esa misma norma se estima que igualmente se violó de manera directa por comisión, ya que la Dirección Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí al expedir los actos impugnados, tomó información de los Registros de Contabilidad, y esta información no es idónea para cobrar el presente Impuesto de Timbre, en virtud de que se requiere la expedición de facturas sobre la cual se debe adherir los timbres para satisfacer el impuesto

II. El informe explicativo de conducta rendido por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Ante solicitud planteada por el Magistrado Sustanciador, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, rindió el respectivo informe explicativo de conducta en relación a las demandas formuladas, donde se pone de manifiesto que hubo omisión en el pago del Impuesto de Timbre sobre las ventas de banano.

En su informe el funcionario destaca que se confunde el término de intermediario con el de productor, pues, los demandantes siembran y cultivan banano, por lo que carece de validez el argumento de que el banano era entregado sin mediar ningún tipo de negociación, echando por tierra los principios básicos de una compraventa y de una transacción eminentemente mercantil. En cuanto a la excepción que se aduce, en que sólo es obligación de las transnacionales emitir facturas no así el productor individual, la Administración estima que ello no se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento fiscal vigente.

También la Administración desestima lo que se argumenta en cuanto a que nunca se les había cobrado el Impuesto de Timbre, sobre la base de que en materia fiscal, la costumbre no se hace ley.

En el informe también se pone de relieve que las empresas aceptan que sí emitían facturas y recibos de pago, como consecuencia de la venta de banano, y en sentido aclara que esas ventas están sujetas a la jurisdicción de la República porque se perfeccionan dentro del territorio nacional, debido a que se le entregaba a la CHIRIQUI LAND COMPANY el banano, y este pagaba el precio acordado, lo que significa que nada afecta a esta operación de compraventa ya perfeccionada, el destino final que se dio a la fruta.

Con respecto a que no se realizó la consulta previa, prevista en el artículo 946 del Código Fiscal, la Administración puntualiza que es precisamente la Dirección Regional de Ingresos, quien formalmente a través de las resoluciones impugnadas, plasma el criterio de que "sí existe la obligación de pagar Impuesto de Timbre", y que existe facultad para exigir el cobro del mismo hasta quince años hacia atrás, de acuerdo al artículo 1073 del Código Fiscal, por lo que no se trata de la creación de una Ley para cobrar años de forma retroactiva.

Finalmente, la Administración se opone a la tesis de que la exportación de banano tiene un impuesto especial y que ello excluye otro gravamen que se pretenda imponer, sobre la base de que una cosa es gravar la expedición hacia el exterior del banano con Impuesto de Exportación y la otra la obligación que persiste de parte del Contribuyente, llámese exportador, de pagar Impuesto Sobre la Renta, Timbres o cualquier otro tributo que afecte el giro normal de la empresa.

Por otro lado, conforme al trámite procesal se corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que contestara las demandas presentadas y mediante la Vista Fiscal N° 233 de 24 de junio de 1998 que es visible de fojas

303 a 320 del expediente, opinó que no le asiste la razón a los demandantes, razón por la que solicitó a la Sala que desestime sus pretensiones. La Procuradora de la Administración es del criterio que el pago del Impuesto de Timbre es obligatoria y exigible por todo documento en el que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor de diez (B/.10.00) que no tenga impuesto especial en este Capítulo y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República, tal como lo contempla el numeral 2 del artículo 946 del Código Fiscal. Es de allí, según la señora Procuradora, que no se pueda concebir que estas empresas hayan realizado importantes operaciones comerciales sin un documento que defina la cantidad y el precio del banano. Con respecto a ello, señala que ni antes ni después de 1991, tal como se pudo demostrar en las investigaciones realizadas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, estas empresas han emitido una factura por la venta de banano, de lo cual se infiere, a su juicio, que es una práctica reiterada, cuando es necesario para la empresa a quien le suplían ese producto, un documento en el cual conste la cantidad y precio del banano vendido, lo cual en principio debe estar consignado en una factura a la cual se le debe adherir las correspondientes estampillas.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Observa la Sala, que la primera norma que se invoca como violada es el artículo 585 del Código Fiscal, que en su texto expresa:

> "Artículo 585: La exportación no causará impuesto alguno, salvo de los siguientes productos:
> 1 ...
> 2. El guineo o banano, estará sujeto al impuesto de exportación de acuerdo con la siguiente tarifa por cada caja exportada:
>
> Para el año 1996: veinticinco centésimos ...

En opinión de los recurrentes, la actividad de exportación de banano no está sujeta a tributo alguno, salvo el contemplado en la norma arriba citada. La Sala disiente con esta interpretación, toda vez que el hecho de que el banano esté sujeto al impuesto de exportación no excluye al contribuyente al pago de otros impuestos. Esta Sala en sentencias de 15 de septiembre de 1998 y 14 de septiembre de 1999 entre otras, se ha pronunciado al respecto y expresó que "el mandato a que alude el artículo 585 del Código Fiscal no se refiere a que esa exoneración tributaria incluya otros impuestos inherentes a gestiones comerciales distintas a la exportación". En virtud de ello, no prospera este cargo.

El artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el artículo 1 de la Ley 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley N° 31 de 1991, también se señala como violado, y su texto es expresa:

> "ARTICULO 36: El artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el Artículo 1 de la Ley N° 45 de 31 de octubre de 1980, quedará así:
>
> ARTICULO 11: Obligación de Documentar:
>
> a) Es obligatoria la expedición de la factura o documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran la licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptuarán de esta obligación las personas que requieran permisos de operación o permisos municipales

temporales para realizar su actividad.

b) Las personas que trabajen en profesiones, sea en forma independiente o colegiada, deberán documentar sus ingresos generados por las operaciones o servicios que presten, mediante la expedición de facturas o documentos equivalentes.

c) También deben ser documentadas las devoluciones, descuentos ...

PARAGRAFO 1: La documentación se emitirá en formularios de numeración corrida y, por menos, con una copia que debe quedar en los archivos de quien la expida. En los formularios siempre debe figurar impreso el número de Registro Unico de Contribuyente (RUC), así como el nombre, razón social o nombre comercial.

Se entiende por factura el documento que se expida para hacer constar toda operación a que se hace referencia en este artículo. En dicho documento debe aparecer la fecha de la operación, la descripción del bien o servicio objeto de la transacción y el precio o importe total de lo vendido.

En las facturas que se expidan o en los documentos que hagan sus veces, además de los requisitos señalados para los documentos en general, se hará constar, cuando sea el caso, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (I. T. B. M.) y cualquier otro impuesto que incida sobre la venta o servicio.

Parágrafo 2: Además de los documentos mencionados en le parágrafo anterior, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. A los documentos a que hace referencia en este parágrafo del numeral 2 del artículo 967 del Código Fiscal.

Parágrafo 3: Sin perjuicio de las otras sanciones que correspondan, quien incumpla esta obligación será sancionado con multa de ..."

Según la parte actora, no está obligada a expedir facturas por sus actividades relacionadas con la transferencia de venta de bienes y prestación de servicios, sino que la misma surge a partir de la Ley 31 de 1991. La Sala no comparte este criterio, pues, por un lado acepta que emitieron facturas y/o documentos relacionados con la actividad de exportación de banano que sí está sujeta a la expedición de facturas, pero por el otro lado aduce que esta norma no estaba vigente en el período fiscal en el cual se le exigió el pago del Impuesto de Timbre. Debe tenerse presente que la Dirección Regional de Ingresos está facultada para exigir el Impuesto de Timbre, ya que existía al dictarse la Ley N° 31 de 1991, hasta quince años hacia atrás, según lo que contempla el artículo 1073 del Código Fiscal, de manera que de modo alguno la Dirección Regional de Ingresos está aplicando en forma retroactiva la Ley N° 31 de 1991, sino cobrando un impuesto ya creado y que no había prescrito aún. Por tanto, no procede este cargo.

También se invoca como violado el ordinal II del artículo 967 del Código Fiscal, que expresa lo que sigue:

"ARTICULO 967: Llevarán estampillas por valor de diez centésimos balboa (B/.0.10)
1 ...
2. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor de diez balboas (B/. 10.00), que no tenga impuesto especial en este Capítulo y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República, por cada cien balboas (B/.100.00) o fracción de ciento del valor expresado en el documento."

Como argumento para sustentar la violación a la norma citada, se señala que la venta de banano se factura en el extranjero, es decir, que ocurre fuera de la jurisdicción de la República de Panamá. A criterio de la Sala, tampoco prospera la violación que se alega a esta norma, puesto que la exportación de banano necesita de la expedición de documentos contables que respalden esa actividad, aunado a que esas ventas están sujetas a la jurisdicción de la República, pues, se perfeccionan dentro del territorio nacional.

Quienes recurren también alegan la violación del artículo 946 del Código Fiscal, que fue modificado por el artículo 37 de la Ley N° 45 de 14 de noviembre de 1995. Dichas normas son del tenor siguiente:

"ARTICULO 946. Parágrafo II
Para asegurar la correcta interpretación y aplicación del impuesto de Timbres, se establece el procedimiento de consulta previa en los siguientes términos:

Las dudas de los contribuyentes sobre si un documento está sujeto o no al Impuesto de Timbres se consultarán preferiblemente antes de ser puesto en uso. Las consultas sobre documentos ya en uso no afectarán los plazos a pagar, en los casos de pago por declaración.

Para evitar los recursos e intereses a que alude el parágrafo anterior el contribuyente deberá consignar los depósitos del caso.

Las consultas serán dirigidas en papel sellado y por conducto de abogado idóneo, al Director General de Ingresos, debiendo exponerse con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la opinión fundada del consultante. Al escrito de consulta deberá acompañarse el original o un facsímil del documento que la motiva.

El Director General de Ingresos deberá resolver la consulta dentro de un término de treinta (30) días calendarios. En el evento de que se resuelva que los documentos no están sujetos al impuesto, el fisco quedará obligado a la devolución del depósito consignado, o de la suma pagada en estampillas según sea el caso.

En el evento de que se resuelva que el documento objeto de la consulta está sujeto al impuesto, las sumas depositadas ingresarán al Tesoro Nacional o deberán timbrarse todos los documentos expedidos con anterioridad o con posterioridad a la fecha de la consulta.

Las Resoluciones que dicte el Director General de Ingresos en esta materia se notificarán personalmente ..."

"ARTICULO 37: El Artículo 946 del Código Fiscal queda así:

ARTICULO 946: El impuesto de timbre se hará efectivo por medio de papel sellado, estampillas, boletos timbres, declaración jurada, o por cualquier otro sistema o mecanismo que a juicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a través de la Dirección Regional de Ingresos, cumpla con los requisitos de fiscalización y recaudación del impuesto.

Toda persona natural o jurídica que esté obligada a cubrir el impuesto de timbre mediante estampillas, deberá adherirlas, al momento de su expedición, en el original o en la copia del documento que reposarán en sus archivos, salvo que utilice el sistema de pago por declaración o cualquier otro sistema o mecanismo autorizado por la Dirección General de Ingresos.

> PARAGRAFO: El impuesto de timbre en las modalidades a que se refiere este artículo, también podrán pagarse mensualmente, en forma total o parcial ..."

Observa la Sala, que la citada disposición legal prevé el procedimiento a seguir por parte de los contribuyentes en caso de duda sobre el cobro de Impuesto de Timbre. No obstante, de lo allí dispuesto claramente se infiere que, en este caso, fueron precisamente quienes recurren los que no se ajustaron a lo que allí se contempla, puesto que sólo se limitaron a solicitar a la Administración Regional de Ingresos de Chiriquí que elevara dicha consulta a la Dirección General de Ingresos. Vale señalar que esta norma de igual manera expresa que en los casos de pago por declaración, la existencia de la obligación y los plazos de pago no se verán afectados por la consulta. Se desestima este cargo.

Por otro lado, también se invoca la violación al artículo 2 de la Ley 25 de 26 de agosto de 1994; el artículo 172 del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993 y el artículo 36 de la Ley 36 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, que en el orden respectivo son del tenor siguiente:

> "ARTICULO 2: No requerirán licencia las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a: 1. Las actividades del agro, tales como agricultura, ganadería, apicultura, avicultura o agroforestería."

> "ARTICULO 172: Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agro industriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que solo requieran permiso de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

> "ARTICULO 36: Es obligatoria la expedición de factura o documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas o bienes y prestaciones de servicios, por parte de todas las personas que requieran licencia comercial o industrial para operar, así como aquellas personas que realicen actividades agropecuarias y agroindustriales. Se exceptúan de esta obligación las personas que requieran permisos de operación o permisos municipales temporales para realizar su actividad.

> Parágrafo 2: Además de los documentos mencionados en el párrafo anterior, podrán ser utilizados otros comprobantes previamente autorizados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

> A los documentos a que se hace referencia en este parágrafo le será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2 del Artículo 967 del Código Fiscal."

A criterio de los recurrentes, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la agricultura no necesitan licencia para poder ejercer la actividad y desde la Ley 31 de 1991 para atrás, no se les exigía a los agricultores hacer facturas de sus actividades, lo que entonces las excluía del pago de Impuesto de Timbre por factura.

La Sala estima que no se ha dado la violación a las normas antes citadas, pues, se aplica el mismo razonamiento vertido con relación al artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el Artículo 1 de la Ley 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el Artículo 36 de la Ley N° 31 de 1991, en el sentido de que al haberse expedido los documentos relativos a la actividad de venta para la exportación de banano, surge la obligación del pago del Impuesto

de Timbre, y de ahí la facultad de la Dirección Regional de Ingresos para cobrar el mismo. Se desestiman estos cargos.

Finalmente, también se invoca la violación al artículo 973 del Código Fiscal, numerales 19 y 27, sobre la base de que la información utilizada por la Dirección Regional de Ingresos de Chiriquí para imponer el pago del impuesto proviene de los Registros de Contabilidad de esas sociedades. La mencionada disposición es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 973: No causarán impuestos:
> 1. ...
> 19. Cualquier otro documento en el cual únicamente conste un acto o actos que no creen, extingan, modifiquen o transfieran obligaciones o derechos existentes entre dos o más personas naturales o jurídicas, como formularios y registros de contabilidad de carácter interno exclusivamente. Se entiende por tales aquellos documentos cuya única función sea la de contabilizar internamente operaciones efectuadas;
> ...
> 27. Todo lo exceptuado por leyes especiales."

De lo expuesto, la Sala observa que no consta en el expediente cuál fue la documentación utilizada por la Administración Regional de Ingresos y que los demandantes tampoco han demostrado el hecho alegado, por lo que resulta imposible establecer si esa documentación era idónea o no. No obstante ello, la Ley define el concepto de factura, el cual abarca cualquier documento que se expida para hacer constar una operación relativa a transferencias, venta de bienes y prestación de servicios. Al respecto, esta Sala ha manifestado en varias ocasiones que "lo importante no es la denominación del documento, sino la transacción que en éste se acredite."

La postura de la Administración Regional de Ingresos se ubica en que los documentos eran idóneos para acreditar la venta de banano, y los actores no comprobaron lo contrario. De ese modo, a juicio de la Sala, lo importante es que el gravamen haya estado dirigido a la documentación que plasmó la descripción del producto, precio, etc, independientemente que se denominara factura o no.

Por último, debe tenerse presente que conforme a lo previsto en el artículo 967 del Código Fiscal, en concordancia con lo establecido en el artículo 973, numeral 28, párrafo segundo del Código Fiscal, las sociedades demandantes están sujetas al pago del Impuesto de Timbre. El artículo 973 numeral 28 dice:

> "ARTICULO 973: No causarán impuesto:
> 28 ... Se exceptúan de esta disposición los timbres que se causen en las operaciones sujetas al régimen aduanero incluyendo los establecidos en el Parágrafo 2° de la Ley N° 2 de 27 de diciembre de 1972 ... (Subraya la Sala).

Es evidente que la violación al artículo 973 del Código Fiscal, que exonera del pago del Impuesto de Timbre no se configura, toda vez que en el mismo se establece que las operaciones aduaneras, a la que corresponde la exportación de banano, sí están sujetas al impuesto en mención.

Todos los pronunciamientos expuestos por la Sala para el análisis de las violaciones invocadas, ya fueron objeto de estudio en la Sentencia de 28 de septiembre de 1999, expedida dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción propuesto por la Sociedad SANTA ROSALIA S. A., contra el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí.

En virtud de lo antes señalado, la Sala es del criterio que no es dable acceder a las pretensiones formuladas, razón por la que lo procedente es, pues, declarar que no son ilegales las resoluciones demandadas y, por tanto, las sociedades, SANTA LIBRADA S. A., BANANERA SANTA RITA S. A., PUMSA INC., S. A.,

BANANERA SANTA CECILIA S. A., ANDY ELENA, S. A., están obligadas por Ley a pagar el Impuesto de Timbre sobre los comprobantes de venta para la exportación.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, las Resoluciones N° 219-04-308 y 219-04-309 de 20 de marzo de 1997; las Resoluciones 219-04-316 y 219-04-317 de 20 de marzo de 1997; la Resolución N° 219-04-314 de 20 de marzo de 1997; la Resolución N° 219-04-303 de 20 de marzo de 1997, todas dictadas por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE MARTA DE ARROCHA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO CONTENIDO EN LA NOTIFICACIÓN N° 15002 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, en representación de MARTA DE ARROCHA, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal el acto contenido en la Notificación N° 15002 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Posteriormente, el demandante presentó escrito de desistimiento, el cual fue recibido en la Secretaría de la Sala el 7 de enero de 2000.

De dicho escrito de desistimiento se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien se notificó sin oponerse el 20 de enero de 2000.

Como quiera que con fundamento en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, en cualquier estado del proceso es admisible el desistimiento de la pretensión contencioso administrativa, y el apoderado tiene facultad para desistir (foja 5), su petición debe acogerse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE EL DESISTIMIENTO del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por el Licenciado Carlos Ayala, en representación de MARTA DE ARROCHA para que se declare nulo por ilegal el acto contenido en la Notificación N° 15002 de 25 de septiembre de 1997, realizada por la Directora Nacional de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS A, ARAÚZ EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRINO JIMENEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 30-97 DE 16 DE JULIO DE 1997, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Araúz, apoderado judicial de ALEJANDRO JIMENEZ GALASTICA, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 24 de septiembre de 1999, en la que no se admite la demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 30-97 de 16 de julio de 1997, dictado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda in examine por considerar que se está impugnando un acto generador de derechos subjetivos que es impugnable a través de una demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción al estimar que la parte actora es la única afectada por dicho acto. Además, para finalizar, como fundamento central la sustanciadora expresa que la demanda presentada no cumple con las formalidades legales y que, por lo tanto, no debe dársele trámite de conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

El resto de los Magistrados que integran la Sala proceden a examinar los argumentos del apelante y la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

El licenciado Carlos Araúz, fundamenta su apelación, en su parte medular, en los siguientes términos:

> "PRIMERO: En primer lugar la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona, tal como lo estipulan los Artículos 203, No. 1 y 2 de la Constitución Nacional. En consecuencia nuestro representado calificaba para interponer la Acción de Nulidad contra el Acuerdo No. 30-97 del 16 de julio de 1997 dictado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá.
>
> SEGUNDO: En la acción de nulidad, el único requisito que se le exige al recurrente es estar domiciliado en Panamá y nuestro poderdante se encuentra radicado en la República de Panamá. (Artículo 203 de la Constitución Nacional).
>
> TERCERO: Por conocer, precisamente, que mediante el Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción se impugnan actos administrativos que afectan derechos subjetivos, con el fin de que sean anulados y se restablezcan los derechos violados y que el mismo prescribe en dos meses contados a partir de su publicación, notificación o ejecución del acto, fue el fundamento para no interponer dicho proceso sino un proceso Contencioso Administrativo de Nulidad.
>
> CUARTO: La acción de Nulidad se caracteriza por el hecho de que cualquier persona interesada puede intervenir, independientemente del hecho de ser afectada o no. Por otra parte no hemos solicitado en ningún momento que se restituyan derechos subjetivos afectados.

> Lo único solicitado por el demandante ha sido la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 30-97 del 16 de julio de 1997 dictado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, por considerar que se cometieron actos irregulares e ilegales. (Artículo 30 de la Ley 33 de 1946).
>
> QUINTO: Como quiera que no existe término de prescripción para interponer el Proceso Contencioso Administrativo de Nulidad, nuestro representado tiene todo el derecho de interponer, en cualquier momento, independientemente de ser afectado o no ...

Por su parte, la Procuradora de la Administración, se opone al recurso de apelación, mediante la Vista No. 512 de 25 de octubre 1999, en la que señala que, efectivamente, el demandante ha incoado incorrectamente la Acción de Nulidad contra un acto administrativo que afecta derechos subjetivos, y por lo tanto, solicita al resto de los Magistrados que integran esta Superioridad que confirmen el Auto fechado 24 de septiembre de 1999, mediante el cual no se admite la demanda en referencia.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema consideran que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez resulta evidente que el acto acusado de ilegal persigue un interés personal del demandante, constituyéndole perjuicio únicamente a éste, pues se impugna un acto administrativo a través del cual el Consejo Académico de la Universidad de Panamá ratifica el informe que le confiere la cátedra de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos a la Profesora Lourdes Karamañites, resultando el Profesor Alejandrino Jiménez desfavorecido, presentando oposición al mismo.

Dentro de este contexto, es preciso destacar que, en principio la acción pública o de nulidad se refiere al interés público o social de la conservación del orden público y en la privada o de plena jurisdicción, hace relación al particular sujeto del derecho lesionado, como es el presente caso. Asimismo, por sus consecuencias, estas acciones se diferencian, en que la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza inpersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes" , como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no solo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia.

Resulta palmario que la parte actora confundió ambos recursos, recurriendo equivocadamente al recurso de nulidad cuando debió impugnar el acto a través del recurso de plena jurisdicción, razón por la cual concluímos que la demanda presentada no cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 24 de septiembre de 1999, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por el licenciado Carlos Araúz, apoderado judicial de ALEJANDRO JIMENEZ GALASTICA, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo No. 30-97 de 16 de julio de 1997, dictado por el consejo Académico de la Universidad de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO-OESTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO. 6 DE 16 DE JUNIO DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias & López, actuando en representación de la EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO-OESTE, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 6 de 16 dejunio de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Chitré, "por medio del cual se crea un tributo municipal."

En la demanda se eleva una solicitud a la Sala Tercera para que suspenda provisionalmente los efectos del Acuerdo No. 6 de 16 de junio de 1999.

I. Petición de Suspensión Provisional:

El recurrente al fundamentar la petición de esta medida cautelar, señala que debe accederse a la suspensión pues "es evidente que el perjuicio económico que se causaría es grave, actual e inminente, como lo exigen la Ley y la jurisprudencia para acceder a la suspensión, dado que el Acuerdo impugnado autoriza la imposición de un gravamen sobre actividades que ya han sido previamente gravadas por la Nación, y, de permitirse su ejecución, las empresas dedicadas a brindar este servicio público se verían obligadas a pagar un impuesto municipal en adición al tributo nacional que actualmente pagan al ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS."

En virtud de lo anterior, es necesario señalar que el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, estipula que no habrá lugar a suspensión en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas. Si bien es cierto, que la presente acción está enmarcada dentro de lo estipulado por el artículo precedente, la Sala ha mantenido el criterio, que esta excepción sólo es válida en acciones en las que se discute la potestad jurídica del Estado a cobrar un tributo, es decir, sólo recae sobre tributos nacionales.

Aunado a lo anterior, la suspensión en estos procesos de nulidad procede si el acto administrativo viola el principio de separación de poderes o si puede entrañar un perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violar en forma manifiesta normas de superior jerarquía.

Por todo lo anterior, al tratarse el presente caso de la potestad del Consejo Municipal de establecer impuestos, no nos encontramos ante un tributo nacional por lo que, se proceden a analizar los argumentos esgrimidos por la parte actora con la finalidad de determinar si se accede o no a la suspensión.

II. El Municipio no puede gravar lo que ya ha sido gravado por la Nación.

El artículo 17 numeral 8 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 estipula lo siguiente:

> **"Artículo 17. Los Consejos municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:**
>
> **8. Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes, para atender a los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales."**

El artículo precedente, especifica que la facultad de los Consejos Municipales para imponer sanciones de tipo tributarias está supeditada a las leyes, por lo que es obvio que se deben respetar las leyes existentes en esta materia.

El numeral 6 del artículo 21 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 es del tenor siguiente:

"Artículo 21. Es prohibido a los Consejos:
6. Gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación."

Al analizar el precitado artículo es obvio llegar a la conclusión que el Consejo Municipal no puede establecer un tributo municipal cuando ya existe por ley, un tributo nacional.

Esto es así, pues a la empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, ya se le había gravado con un impuesto por el servicio público de electricidad, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley 26 de 1996.

La ley 106 de 8 de octubre de 1973 en su artículo 74 estipula lo siguiente:

"Artículo 74. Son gravables por los municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito."

De la lectura del artículo 74, se infiere claramente que los municipios sólo pueden gravar aquellas actividades que se circunscriban a los límites del distrito, y en el caso que nos ocupa el servicio público de distribución de energía eléctrica trasciende los límites del distrito, es decir, la concesión otorgada a la empresa de Distribución de Energía Eléctrica Metro-Oeste comprende otras provincias del país.

El artículo 79 de la precitada ley, es del tenor siguiente:

"Artículo 79. Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la Nación no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas municipales sin que la Ley autorice especialmente su establecimiento."

El precitado artículo reitera el criterio señalado anteriormente en base a los tributos nacionales y los municipales, es decir, los municipios no pueden gravar lo que ya ha sido gravado por la nación.

Considera la Sala que un examen preliminar del acuerdo acusado revela que éste infringe en forma manifiesta normas de superior jerarquía, como lo son el numeral 8 del artículo 17, el numeral 6 del artículo 21 de la ley 106 de 8 de octubre de 1973 y los artículos 74 y 79 de la ley en mención.

Del texto de los artículos precedentes se colige que está prohibido a los municipios gravar con impuestos lo que ha sido gravado previamente con tributos nacionales, en este sentido la empresa Distribución de Energía Eléctrica Metro-Oeste, paga al Ente Regulador de los servicios públicos una tasa de control, vigilancia y fiscalización, por lo que, el impuesto establecido mediante el Acuerdo No. 6 de 16 de junio de 1999 por el Consejo Municipal de Chitré, sería considerado una doble tributación.

Finalmente, la Sala considera, por las razones antes expuestas, que la medidas cautelares como la suspensión del acto administrativo, proceden, en el evento de que el acto impugnado se compruebe que pueda causar a la parte demandante perjuicios económicos graves y cuando infringe el ordenamiento jurídico.

Sin embrago, la Sala considera necesario advertir que esta suspensión del

acuerdo impugnado no debe considerarse un pronunciamiento adelantado de esta Sala, toda vez que sólo al resolver el fondo de la controversia se determinará la legalidad o ilegalidad del acto acusado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE, los efectos del Acuerdo No. 6 de 16 de junio de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Chitré, mediante el cual se grava con un tributo municipal a las empresas de generación y distribución de energía eléctrica.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE MAYRE GARCIA RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D. N. 9-1588 DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Benedicto De León Fuentes, quien actúa en representación de MAYRE GARCIA RODRIGUEZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución No. D. N. 9-1588 calendada 24 de septiembre de 1996, proferida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y se ordene la Cancelación de la inscripción de la finca No. 20312, inscrita al rollo 20777, documento 19, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Veraguas.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar el libelo incoado con el objeto de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos formales de admisión.

En la demanda bajo estudio el recurrente pretende que se declare la nulidad, por ilegal, de la Resolución No. D. N. 9-1588, librada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con fecha 24 de septiembre de 1996, a través de la cual se adjudica definitivamente a título oneroso a JUANA BELEN HELIBERIA GARCIA DE GOLDSBERRY, JOSE GARCIA RODRIGUEZ y NIGMA DEL SOCORRO GARCIA RODRIGUEZ, una parcela de terreno baldía, ubicada en el Corregimiento de La Yeguada, Distrito de Calobre, provincia de Veraguas, con una superficie de 24 hectáreas más 6374.70 m2, y como consecuencia de esta declaración se solicita la cancelación de la inscripción de la finca No. 20312, inscrita al rollo 20777, documento 19, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Veraguas que aparece a nombre de los señores JUANA BELEN GARCIA DE GOLDSBERRY, JOSE GARCIA RODRIGUEZ y NIGMA DEL SOCORRO GARCIA RODRIGUEZ.

El suscrito observa que la pretensión del actor es el reclamo de derechos subjetivos los cuales son propios de ser demandados a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, por lo que resulta palmario advertir el error incurrido por el recurrente al confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

La acción de nulidad se propone contra actos generales y se busca la protección del orden legal y la sentencia tiene efectos erga omnes; en cambio la acción de plena jurisdicción se propone contra actos administrativos individuales, personales, que afectan derechos subjetivos.

En este orden de ideas, resulta evidente, que en el presente proceso no solo se persigue una sentencia declarativa, que es lo propio en una demanda de nulidad, sino que se pretende que esta Superioridad ordene la cancelación de la inscripción de una finca registrada en el Registro Público, sobre la cual mantiene un interés personal la parte demandante; de lo cual se colige que el apoderado judicial erró al interponer la demanda de nulidad, y en su lugar la acción adecuada era la de plena jurisdicción.

En jurisprudencia reiterada de la Sala se ha manifestado que la demanda de nulidad, no es el conducto para restablecer intereses subjetivos, personales, constituyendo la vía idónea la demanda de plena jurisdicción (Cfr. Auto de 6 de marzo de 1996, Resol. de 11 de noviembre de 1998, Resol. de 24 de septiembre de 1999).

El suscrito arriba a la conclusión de que la parte actora confundió ambos recursos, recurriendo equivocadamente al recurso de nulidad cuando debió interponer uno de plena jurisdicción, razón por la cual la demanda presentada no cumple con las formalidades legales establecidos en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y que, por lo tanto, no debe dársele trámite.

Como corolario de lo antes expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Benedicto De León Fuentes, en representación de MAYRE GARCIA RODRIGUEZ, y por lo tanto, no accede a la petición especial solicitada.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR E. DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIÓN DE PRODUCTORES DE PUBLICIDAD EXTERIOR (UPPEX), PARA QUE SE DECAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 2, 4 Y 5 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 88, DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA RESOLUCIÓN NO. 37, DE 20 DE MAYO DE 1997, DICTADA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado César Díaz, actuando en nombre y representación de la Unión de Productores de Publicidad Exterior (UPPEX), ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 2, 4 y 5, del Decreto Ejecutivo No. 88, de 1 de noviembre de 1995, expedido por el Organo Ejecutivo, a través del Ministro de Obras Públicas, y la Resolución No. 37, de 20 de mayo de 1997, igualmente emitida por dicho Ministro.

Al incoar su pretensión, el actor pidió a la Sala que decretara la suspensión provisional de ambos actos administrativos acusados, con el propósito, a su juicio, de "evitar perjuicios irreparables", que pudieran ser irrogados a

las empresas publicitarias que representa, a las "arcas de los diferentes municipios del país y sobre todo a los cientos de familias que dependen económicamente de la actividad publicitaria", según se aprecia a fojas 48.

Esta petición cautelar fue denegada por improcedente, mediante Resolución de este Tribunal, fechada el 23 de marzo de 1998, porque el análisis de los problemas jurídicos planteados por el demandante consistentes en la violación de los artículos 17, numeral 9, y 43 de la Ley 106 de 1973, ameritan una interpretación integral al momento de resolver la controversia respecto del artículo 855 de Código Administrativo, referente a la facultad del Organo Ejecutivo como autoridad de policía de dictar disposiciones obligatorias en toda la República, complementarias de los preceptos municipales de policía.

Pues bien, el demandante afirma que los actos administrativos acusados violan los artículos mencionados de la Ley 106, de 8 de octubre de 1973, Orgánica del Régimen Municipal, posteriormente modificada por la Ley 52 de 1984.

El primer artículo que se aduce violado es el 17 numeral 9 de dicha Ley, que es del siguiente tenor literal:

> "Artículo 17. Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:
> ...
> 9. Reglamentar el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de solares o lotes y demás bienes municipales que se encuentren dentro de las áreas y ejidos de las poblaciones, y de los demás terrenos municipales;
> ..."

El demandante explica cómo ha operado la supuesta infración de esta disposición afirmando que se produjo de manera directa. El Decreto No. 88, de 1 de noviembre de 1995, y la Resolución No. 37, de 20 de mayo de 1997, violan en ese concepto el artículo copiado de la Ley 106 de 1973. El primer acto administrativo transgrede la norma legal invocada porque en sus artículos 2, 4 y 5 dispone que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas establecer las normas para la instalación de anuncios, además de poder suscribir acuerdos con personas naturales o jurídicas y autorizar la instalación y colocación de anuncios publicitarios en las vías públicas y pasos vehiculares peatonales; igualmente ese Ministerio podrá solicitar al Municipio respectivo la remoción de todos los anuncios publicitarios cuando se produzcan circunstancias que transgredan las normas jurídicas vigentes. (Ver foja 54).

El segundo de los actos mencionados, o sea, la Resolución No. 37 conculca el artículo de 17, numeral 9, ut supra, porque se ha dictado en cumplimiento del artículo 2 del Decreto No. 88 de 1995, que es, según el demandante, "a todas luces ilegal", para ello alude a una sentencia de la Sala fechada el 21 de noviembre de 1997, que según su opinión trata esta materia.

Agrega por último sobre este concepto, que los Consejos Municipales tienen la potestad legal de establecer las normas y criterios sobre publicidad vial. (foja 55).

La segunda norma que se aduce infringida es el artículo 43 de la Ley 106 de 1973, modificado por el artículo 20 de la Ley 52 de 1984, que a seguidas se copia:

> "Artículo 43: Habrá en cada Distrito un Alcalde Jefe de la Administración Municipal, y dos suplentes, elegidos por votación popular directa, por un período de cinco años.
>
> La Ley podrá, sin embargo, disponer que en todos los distritos o en uno o unas de ellos, (sic) los Alcaldes y sus Suplentes sean de libre nombramiento y remoción del Organo Ejecutivo".

El recurrente afirma que esta disposición fue violada de manera directa porque es el Alcalde el jefe de la administración municipal, quien niega las solicitudes que se presenten; que el ejercicio del poder debe darse dentro del marco del principio de legalidad; que la actividad de los anuncios y regulación publicitarias en la vía pública corresponde por Ley a los Consejos Municipales y a los Alcaldes, atribución que no compete ni contitucional ni legalmente al Ministerio de Obras Públicas (fojas 55-56).

La presente demanda de nulidad se corrió en traslado a la Procuraduría de la Administración y la entidad que emitió los actos acusados rindió Informe Explicativo de Conducta, según se constata a fojas 69-73 y 74-82.

La Representante del Ministerio Público se opuso a la pretensión de la demanda fundamentalmente porque el Decreto Ejecutivo y la Resolución acusadas, al reglamentar lo concerniente a la "instalación de anuncios publicitarios dentro de las zonas contiguas a las vías públicas, lo que corresponde al Alcalde es su ejecución por ser éste el Jefe de la Administración Municipal y por tratarse de normas que regulan la materia propia de la policía material. Lo anterior -agrega la funcionaria- se entiende sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde o del Consejo Municipal, para dictar disposiciones de policía especial, que en el presente caso se concretarían en la expedición de reglamentos tendientes a complementar la acción del Ejecutivo Nacional". (foja 80).

Por su parte, el señor Ministro de Obras Públicas en el citado Informe dirigido a la Sala explica que la función programática de la institución a su cargo implica coordinar los planes de acción y ejecución de las obras de construcción de calles, vías y carreteras, revisar la especificación y planeamiento del uso vial, de todas las normas reglamentarias en la colocación de anuncios publicitarios y solicitar a las distintas municipalidades la remoción de los anuncios publicitarios que obstaculizan los trabajos de ensanche vial o dar un plazo a los interesados para su reubicación, por lo que solicita a este Tribunal que deniegue las pretensiones del demandante. (foja 73).

Luego de este recuento de las principales constancias procesales y argumentos esbozados, este Despacho procede a desatar el nudo de la presente controversia donde se tutela la integridad del orden jurídico en abstracto bis a bis los actos administrativos demandados, no sin antes hacer las siguientes consideraciones jurídicas.

El análisis de los planteamientos del derecho invocado por el demandante y la oposición a la pretensión tanto de la Procuraduría de la Administración como de la entidad pública que emitió los actos administrativos demandados, impelen a esta Superioridad a inquirir sobre la competencia y distribución de la misma que ostentan el Municipio y el Ministero de Obras Públicas, sobre la regulación de la materia alusiva a los anuncios publicitarios que se exhiben en las vías o áreas adyacentes al acceso del público, a través de vallas, rótulos, carteles y otros objetos de distintas dimensiones empleados para fines generalmente comerciales de oferta de bienes y servicios a los consumidores.

Sobre este tema, el Decreto No. 88, de 1 de noviembre de 1995, es suficientemente claro al exponer las razones que abrigó el Organo Ejecutivo al dictarlo, señalando en su parte motiva que es menester dotar a los municipios de la facultad de autorizar la instalación de anuncios publicitarios que se vayan a colocar dentro de las zonas contiguas a las vías públicas a nivel nacional y dejar al Ministerio de obras públicas la potestad de establecer las normas que se deberán observar y cumplir al instalarse dichos anuncios, así como facultar a este último para autorizar bajo ciertas condiciones, la colocación de anuncios publicitarios dentro de las zonas antes referidas y la instalación de propaganda en los pasos vehiculares y peatonales a nivel nacional, y de igual forma, para solicitar al Municipio competente la remoción de los anuncios antes mencionados cuando se den cualquiera de las circunstancias que se especifican en ese Decreto.

Como se aprecia, en el segundo considerando del Decreto No. 88, existen dos

móviles esenciales de la normativa que se propone regular el tema de los anuncios publicitarios en las vías públicas, a saber:

1. Facultar a los Municipios para que puedan autorizar a los interesados la instalación de anuncios publicitarios destinados a colocarse en zonas contiguas a las vías públicas en todo el territorio de la República; y,

2. Radicar en el Ministerio de obras públicas las siguientes facultades:

a) Dictar las normas jurídicas que regulen la instalación de anuncios publicitarios;

b) Autorizar, bajo ciertas condiciones, la colocación de tales anuncios dentro de las zonas descritas, así como de propaganda en pasos vehiculares y peatonales a nivel nacional; y,

c) Posibilidad de que esta entidad solicite al Municipio respectivo que proceda a la remoción de anuncios inmersos en los supuestos que el propio Decreto se encarga de identificar en el artículo 5, a través de sus tres numerales.

Estas actividades competencia del Municipio y del Ministerio de Obras Públicas precisamente están detalladas en los artículos 2, 4 y 5 del Decreto No. 88 acusados de ilegales. En efecto, el artículo 2 establece la referida facultad reglamentaria que ha retenido para sí el Ministerio de Obras Públicas; el artículo 4, además de facultar a esta entidad del gobierno central para concertar acuerdos con personas a fin de señalizar las vías públicas, lo autoriza para que otorgue permiso de propaganda en los pasos peatonales y vehiculares, bajo el apercibimiento que el Ministerio debe tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de dichos pasos; y el artículo 5 trata del derecho de pedir la remoción de anuncios incursos en las siguientes condiciones:

1. Por haber sido instalados dentro de la zona contigua a la vía pública sin el correspondiente permiso del Municipio de que se trate;

2. Violación de cualquier norma que establezca el Ministerio de Obras Públicas; y,

3. Cuando la remoción se requiera para hacer obras de mejoramiento vial "que se estén llevando a cabo o que se programen realizar en el futuro".

A juicio de este Despacho, las normas jurídicas contenidas en el Decreto No. 88 de 1995, lejos de propiciar violación de la competencia de dependencias del gobierno local, específicamente del Consejo Municipal y del Alcalde, propenden a la coordinación entre la Administración Municipal y el Ministerio de Obras Públicas en el asunto que corresponde a la construcción e instalación de propaganda y publicidad en las zonas contiguas a las vías públicas de todo el país.

La Sala desea apuntar que no observa un eventual conflicto de competencia al materializar esa coordinación, haciendo la salvedad que el Municipio conserva para sí, por imperio de la Ley, el derecho a la imposición y cobro de los tributos respectivos de acuerdo a su Ley orgánica.

Sobre la complementariedad de las atribuciones que la Ley otorga para el mejor desempeño de la función pública a ambas administraciones públicas (el gobierno central y el gobierno local), en su labor de policía, el artículo 855 del Código Administrativo preceptúa, en la parte pertinente, que "la policía es la parte de la administración pública que tiene por objeto hacer efectiva la ejecución de las leyes y demás disposiciones nacionales y municipales, encaminadas a la conservación de la tranquilidad social, de la moralidad y de las buenas costumbres, y a la protección de las personas y sus intereses individuales y colectivos".

Cabe anotar que la emisión de los actos administrativos demandados obedecen al ejercicio de una potestad de policía tanto general como material. Es de tipo general porque en el caso del Decreto No. 88 de 1995 fue emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministro del Ramo con aplicación a todo el territorio nacional, y material porque se refiere a la instalación o construcción de anuncios publicitarios que bien pueden relacionarse con el ornato, incluso con la comodidad y beneficio material de las comunidades.

El Decreto incluso prevé la colocación de los citados anuncios de tal manera que no enorpezca o impida la construcción actual o futura de vías de comunicación.

Por su parte, la Resolución No. 37 de 1997, que también es objeto de la presente demanda de nulidad, se crea para facilitar la aplicación del mencionado Decreto, al establecer las "normas para la instalación de Anuncios Publicitarios en las área (sic) de Servidumbre Vial a nivel nacional", con basamento expreso en el artículo 2 del Decreto No. 88.

Al facultarse a los Municipios para que puedan autorizar la instalación de anuncios publicitarios en las zonas o áreas adyacentes a las vías públicas y conservando el Ministerio de Obras Públicas la facultad normativa de crear las disposiciones jurídicas reglamentarias de dicha actividad, se requiere una adecuada coordinación entre tales entidades estatales que propicie el correcto cumplimiento de la labor de policía a cada esfera de competencia asignada, que en el caso municipal, es de policía especial.

La Sala es del criterio que los actos administrativos acusados no colisionan con el artículo 17, numeral 9, y el artículo 43 de la Ley 106 de 1973.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justica, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que no son ilegales los artículos 2, 4 y 5 del Decreto No. 88, de 1 de noviembre de 1995, expedido por el Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Obras Públicas, y la Resolución No. 37, de 20 de mayo de 1997, dictada por dicho Ministro.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN A. ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 5,211 DE 7 DE JUNIO DE 1994, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO E ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Ernesto Cedeño Alvarado, actuando en representación del Contralor General de la República, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Escritura Pública N° 5,211 de 7 de junio de 1994, suscrita entre la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano e Ismael Javier Sucre Tejada.

I. La pretensión y su fundamento.

El apoderado judicial de la parte demandante fundamenta su solicitud en que con la Escritura Pública N° 5,211 de 7 de junio de 1994 el Ministro de Desarrollo Agropecuario, actuando en representación de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, materializó la Compraventa de dos globos de lotes de terreno, distinguidos como Globos A y B de la Finca distinguida con los números 48088, de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y los vendió a Ismael Sucre Tejada, a razón de B/.375.00 por hectárea. A juicio del recurrente, el precio de B/.375.00 no se estableció en base al avalúo promedio, resultante de los avalúos realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y a ello añade que dentro de la Legislación de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, no existe un procedimiento especial para la realización de estos avalúos. También expresa el recurrente que el contrato bajo examen nunca fue refrendado por la Contraloría General de la República y que la Escritura contentiva del mismo fue inscrita en el Registro Público sin el refrendo en referencia.

En opinión del Lcdo. Cedeño, el contrato impugnado viola los artículos 7 del Código Fiscal, 17 y 25 del Código Fiscal (reformados por los artículos 97 y 99 del la Ley 56 de 1997, respectivamente) y el artículo 48 de la Ley 32 de 1984 que en su texto expresan:

> "ARTICULO 7: Las disposiciones de este Código, en las materia no especificadas en el artículo anterior, tendrán el carácter de supletorias para los Municipios, Asociaciones de Municipios y entidades autónomas del Estado, en cuanto sean aplicables."
>
> "ARTICULO 17: Los bienes inmuebles que el Estado se proponga adquirir conforme a los dos artículos anteriores deben ser avaluados por tres (3) peritos, uno designado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, uno por la entidad adquirente y uno por la Contraloría General de la República, para determinar el valor de mercado de los mismos.
>
> En caso de permuta se avaluarán, en la misma forma, el bien que el Estado debe entregar y el que deba recibir.
>
> No se podrá pagar o dar en permuta por los bienes que el Estado adquiera, valores mayores que los que se determina en los avalúos o en caso de disparidad de ellos, en le promedio de los mismos."
>
> "ARTICULO 25: En los caso de venta o arrendamiento de bienes nacionales se avaluará el bien o se determinará el canon básico del arrendamiento para la licitación por medio de peritos, conforme a las reglas que señala el Artículo 7 de este Código."
>
> "ARTICULO 48: La Contraloría refrendará todos los contratos que celebren las entidades públicas y que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios. Esta función puede no ser ejercida en aquellos casos en que la Contraloría, por razones injustificadas la considere innecesaria, lo cual debe declarar en resolución motivada del Contralor o Sub-Contralor General de la República.

Según el Lcdo. Cedeño, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Fiscal y debido al hecho que la Ley N° 93 de 22 de diciembre de 1976 (Orgánica de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano) no establece lineamientos especiales y diferentes a los establecidos en el Código Fiscal sobre los pasos a seguir para la venta de bienes inmuebles, como avalúos, autorizaciones para el contrato y otras, es por la que se aplica las disposiciones del Código Fiscal en toda su extensión, en lo atinente a la venta.

El demandante en relación a lo antes señalado expresa que un análisis armónico de los artículos 7, 17 y 25 del Código Fiscal y las demás normas concordantes, evidencia que el espíritu de la Ley es que el Estado, representado

en sus organismos al momento de adquirir, vender o arrendar bienes, respete los avalúos o el promedio de los tales, emitidos por los entes correspondientes (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO) salvo que una ley especial disponga de otro procedimiento, supuesto que no se da en este caso. Así manifiesta que el Artículo 17 del Código Fiscal, hoy reformado por el artículo 97 de la Ley 56 de 1997, establecía la obligatoriedad de respetar los avalúos o el promedio de los mismos que emiten la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro cuando se pretenda adquirir o enajenar bienes y el Artículo 25 del Código Fiscal, hoy reformado por el artículo 99 de la Ley 56, expresaba claramente que en los casos en que el Estado, a través de sus representantes, pretenda vender o arrendar sus bienes debe sujetarse al avalúo o al promedio del mismo, expedido por entes facultados para emitir tales avalúos.

Destaca el apoderado judicial del demandante, que el criterio de precio que usó el entonces Ministro de Desarrollo Agropecuario, no se aplica en estas ventas de propiedades de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, pues, no se está adjudicando tierra nacional con el criterio de Reforma Agraria, sino por el Contrario, son tierras de propiedades que el Gobierno Nacional compró y pagó.

En cuanto al artículo 48 de la Ley 32 de 1984, la parte actora argumenta que para que un Contrato Público que implique afectación de un patrimonio del Estado se considere perfecto, tiene que contar con el refrendo del Ente rector de la fiscalización pública. La figura del refrendo, como requisito sine qua non para el perfeccionamiento del contrato, no le ha sido atribuido a ningún otro ente, llámese Consejo de Gabinete, Organo Ejecutivo, etc. sino que sólo ha sido endilgado exclusivamente en la figura del Contralor General de la República.

II. La oposición a la demanda.

Mediante resolución de veintidós de mayo de 1998, se tiene a la firma Icaza, González-Ruíz y Alemán, como apoderada de ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, para actuar en la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el Lcdo. Ernesto Cedeño Alvarado en representación del Contralor General de la República.

En su oposición, la firma Icaza, González-Ruíz y Alemán aduce la legitimidad de ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA para impugnar la demanda, solicita que se niegue las pretensiones de la demanda, contesta los hechos u omisiones fundamentales de la demanda y alega excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada la sustenta en que existe un pronunciamiento de la Sala Tercera que tiene que ver con la misma cuestión de fondo que se plantea en la presente demanda, puesto que al compararlas, se evidencia que existe identidad de las partes, identidad de la cosa u objeto, identidad de la causa o razón de pedir.

A criterio del tercero opositor existe identidad de las partes, pues, en la demanda anterior el señor Sucre demandó la nulidad de la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994 expedida por el Contralor General de la República y la Nota N° 163-DC-1-F-28 de 26 de mayo de 1994, dirigida por el señor Contralor General de la República al Director General del Registro Público, donde se ordena que se abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue entre otras fincas la N° 48,088 tomo 1134, folio 154, Provincia de Panamá. En la presente demanda, el demandante es el Contralor General de la República, quien dictó el acto administrativo acusado en la demanda anterior; si bien el señor Sucre no es demandado por razones técnicas impuestas por la clase de proceso (contencioso administrativo de nulidad) sí es parte en la demanda, razón por la que se da el elemento de identidad de las partes.

En cuanto a la identidad de la cosa u objeto, se argumenta que en la demanda anterior la cosa u objeto de la controversia era la validez legal del contrato de compraventa de inmuebles segregados de la Finca N° 48,088, inscrita al Tomo N° 1134, Folio 154, Registro de la Propiedad, Sección de la Provincia de

Panamá y vendidos por la Corporación al señor Sucre Tejada mediante la Escritura Pública N° 5211 de 7 de junio de 1994. En la presente demanda la cosa objeto de la controversia lo constituye el mismo contrato de compraventa y la misma Escritura N° 5211, por la cual se instrumentó aquél.

La identidad de la causa o razón de pedir a criterio de la firma Icaza, González-Ruíz y Alemán está presente en ambas demandas y giran en torno a normas sobre ventas de bienes públicos contenidas en el Código Fiscal, en especial las que tienen que ver con avalúos, y este tema fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala Tercera en la Sentencia de 6 de agosto de 1997, donde se declaró nula por ilegal la Resolución N° 33 de 18 de mayo 1994, proferida por el Contralor General de la República, que ordenó la abstención de inscripción en el Registro Público de la Escritura Pública 5211 de 7 de junio de 1994 de la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, suscritas por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano por una parte, y por otra señor Ismael Sucre Tejada, en relación al globo de terreno de la Finca N° 48088, inscrita al Tomo 1134, Folio 154 y se ordena la inscripción definitiva de dicha finca en las porciones determinadas en la Escritura a favor del señor Sucre Tejada.

II1. El informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Desarrollo Agropecuario y La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° DMN-686-98 de 21 de marzo de 1998, que es visible de fojas 77 y 78 del expediente, el Ministro de Desarrollo Agropecuario rindió el informe explicativo de conducta en el cual hace un recuento de las constancias y documentos que reposan en su despacho, pues, los contratos impugnados se celebraron bajo la administración anterior.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 272 de 16 de julio de 1998, en la que se solicita a la Sala que se acceda a las pretensiones del recurrente, pues, a su criterio el preció que por hectárea se fijó para dicha compraventa fue de B/.375.00, suma que no ajustó al avalúo promedio de los realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro; a ello añade que el contrato de compraventa impugnado, nunca fue refrendado por la Contraloría General de la República.

IV. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El asunto medular del caso que nos ocupa, consiste en determinar si el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública N° 5211 de 7 de junio de 1994, es o no ilegal. A juicio del demandante el contrato en referencia es ilegal, porque el precio de los terrenos vendidos a través de ese contrato por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano al señor ISMAEL SUCRE TEJADA, no se estableció en base al promedio de los avalúos dados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y, tampoco se solicitó el refrendo del Contralor General de la República, facultad que no se le ha atribuido a ninguna otra entidad pública, sólo a la Contraloría General de la República. La firma Icaza, González-Ruíz y Alemán se opone a estos argumentos y sostiene que los mismos ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, razón por la que se alega la excepción de la cosa juzgada.

En efecto, la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, al resolver la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, dictó la sentencia de 6 de agosto de 1997, en la cual se declaró nula por ilegal, la Resolución N° 33-94 del 18 de mayo de 1994, expedida por la Contraloría General de la República, por la cual se ordenó al Director del Registro Público, que se abstuviera de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue, entre otras, la Finca N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 154, de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. En esa oportunidad se dejó sentado que el papel

fiscalizador de la Contraloría General de la República en la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, se encuentra previsto en el Artículo 1° de la Ley 93 de 1976, estableciéndose que la Contraloría ejercerá las funciones de fiscalización y control que la Constitución y las leyes establecen. De igual manera se reiteró que el control fiscal que ejerce la Contraloría General debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, a las particularidades que reviste esta institución, y este control se debe ejercer de manera razonable y compatible con el interés público. Siendo así, la Sala en aquella oportunidad estimó que la petición de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano para la excepción de licitación pública y la autorización de la venta directa de ciertos globos de terrenos que se encuentran en ciertas fincas de propiedad de la Corporación a antiguos arrendatarios (entre los que está el señor Sucre Tejada) y expropietarios, fue acogida, respaldada, autorizada e implementada a través de Resoluciones del Consejo de Gabinete (N° 768 de 22 de diciembre de 1993, N° 96 de 9 de febrero de 1994) que sentaron los parámetros para proceder a la venta directa de estos inmuebles, motivadas en el sentido del interés colectivo y del Estado.

En cuanto a la fijación de trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00) como precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación que fue establecido en resolución del Consejo de Gabinete y la omisión de realizar un avalúo conforme lo establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal, puntos estos en los que descansó la medida de cautelación adoptada por la Contraloría, se trajo a colación la sentencia de 6 de julio de 1995, expedida en el caso ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA S. A., y HERNAN DELGADO, donde se puntualizó que el precio fue fijado no de manera improvisada, sino luego de estudios efectuados, donde se le dio participación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Tesoro, que revelaron que la privatización de Alto y Bajo Bayano se realizaría conforme a los lineamientos de la Ley 16 de 1992 que regula la privatización de empresas, bienes y servicios estatales, y obedecía a la incapacidad de la entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el área por razón de la invasión de precaristas, el asentamiento de indígenas y colonos que de hecho ocupaban grandes extensiones de tierra, sumado al abandono de terreno cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar.

Por otro lado, la falta de refrendo por parte del Contralor General de la República de los contratos de compraventa impugnados, también fue objeto de análisis en la sentencia de 6 de julio de 1995, donde se conceptuó que según documentación del expediente, el Contralor General de la República participó en reuniones del Consejo de Gabinete en que fueron discutidas y aprobadas la Resoluciones N° 768 y 96, por lo que conocía de antemano el contenido de las mismas. No obstante, aclara que no existe constancia de que al momento en que se discutiera la aprobación de las autorizaciones de enajenación, incluyendo lo puntos relativos de la categoría de los arrendatarios y el precio de venta, el mencionado funcionario hubiese manifestado su preocupación o desacuerdo con la operación. A ello se añade que tampoco impugna las resoluciones del Consejo de Gabinete, para lo cual estaba facultado, sino que seis meses después procede a cautelar las fincas vendidas, en el momento que muchos de los arrendatarios ya estaban en la etapa final de inscripción y ya habían cancelado al Tesoro Nacional el monto de la adquisición.

No debe perderse de vista que en la Resolución de 6 de agosto de 1997, donde se declaró nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República, se ordena la inscripción definitiva de la de la Escritura Pública N° 5211 de 7 de junio de 1994 de la Notaría Cuarta de Circuito, suscritas por Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano por una parte y por el señor ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA por otra parte, en relación al globo de terreno de la Finca N° 48088, inscrita al Tomo 1134, Folio 154 de la Provincia de Panamá. Conforme a ello y según lo establece el artículo 100 de la Código Judicial, las sentencias que dicte la Sala Tercera

en cumplimiento de las funciones que le establece el artículo 98 del mismo cuerpo legal, son finales, obligatorias y definitivas, por lo cual, procede reiterar los razonamientos hechos en aquella sentencia y declarar que el contrato impugnado no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública N° 5211 de 7 de junio de 1994, suscrito entre Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano e ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA.

Notifiquese, Cumplase y Publiquese En la Gaceta Oficial

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL NO. 122 DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Morgan y Morgan, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo Municipal No. 122 de 21 de octubre de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La firma Morgan y Morgan, junto con las pretensiones de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal No. 122 de 21 de octubre de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Dicha solicitud de suspensión fue sustentada en los siguientes términos:

"VII. SOLICITUD ESPECIAL

Solicitamos respetuosamente al Magistrado ponente a quien le toque en turno esta demanda, previa evaluación de las situaciones violatorias de la ley, del quebrantamiento de las formalidades reglamentarias y la DESVIACION DE PODER, expuestas en los hechos y explicadas en el epígrafe de violación de normas, ORDENE DE INMEDIATO LA SUSPENSION DE LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ACUERDO IMPUGNADO, en vista de que tenemos conocimiento de que el día JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 1999, en curso, se estará firmando el contrato de arrendamiento del Matadero Municipal de Bugaba con la empresa PANACARNES, S. A. y que como anteriormente hemos expuesto, esto traería perjuicios graves e irreparables en el aspecto patrimonial a los bienes e intereses del propio Municipio de Bugaba y del Estado, aunado a que, al mismo tiempo, se violaría el acatamiento al ordenamiento jurídico institucional.

Esto es, tratándose como se trata en el presente caso, que estamos frente a una situación cuya realización plena supondrá, inexorablemente, una lesión tanto en lo netamente patrimonial para el Municipio de Bugaba como en lo institucional -y esto es quizás

> más grave- para el ordenamiento jurídico vigente en materia de regulación de funcionamiento de las contrataciones públicas y los municipios, se impone en derecho y con apego a la justicia, decretar la suspensión provisional del acto atacado por la vía del Recurso de Nulidad. Así lo dispone la ley especial que regula la materia, habiendo sido recogido jurisprudencialmente en numerosas ocasiones casos de suspensión provisional de los efectos de un acto cuya realización suponga, indefectiblemente, un perjuicio." (f. 73)

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

La Sala considera que en el presente caso no le es posible acceder a la petición de suspensión provisional, ya que ello implicaría decidir anticipadamente la pretensión sin que haya surtido el contradictorio entre la parte demandante y la demandada. Además, las infracciones legales invocadas no aparecen como claras e incontrovertibles.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo Municipal No. 122 de 21 de octubre de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALISON GARCÍA VELIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA CONTENDIO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 4,548 DE 21 DE ABRIL DE 1994, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO Y ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA, S. A., (ZACHE). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Alison García Veliz, actuando en representación del Contralor General de la República, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se declaren nulos por ilegales los contratos de compra-venta contenidos en la Escritura Pública N° 2,415 de 2 de marzo de 1994 y la Escritura Pública N° 4,548 de 21 de abril de 1994, suscritos entre la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA, S. A. (ZACHE).

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos por ilegales, los contratos suscritos por el Ministro de Desarrollo Agropecuario actuando en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y la Sociedad Zacata Agro Ganadera Chepana, S. A. (ZACHE), que fueron materializados en las Escritura Pública N° 2415 de 2 de marzo de 1994 y y la Escritura Pública N° 4,548 de 21 de abril de 1994, ambas de la Notaría Décima del

Circuito de Panamá.

La apoderada judicial de la parte demandante fundamenta su solicitud en que con las mencionadas Escrituras Públicas el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, actuando en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, materializó la Compraventa de la Finca distinguida con el número 1455 y un globo de terreno segregado de la Finca 1720 de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y lo vendió a ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA, S. A., (ZACHE). En cuanto al precio consignado, se afirma que no se estableció en base al avalúo promedio resultante de los avalúos realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y en cuanto a ello igualmente se sostiene que dentro de la Legislación de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, no existe un procedimiento especial para la realización de estos avalúos, razón por la que debió solicitarse al Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República que avaluara los bienes. Finalmente se afirma que los contratos bajo examen nunca fueron refrendados por la Contraloría General de la República y que las escrituras contentivas de los contratos objetados, fueron inscritas en el Registro Público sin que a la fecha cuenten con el debido refrendo.

En cuanto a las disposiciones legales alegadas como infringidas, la Lcda. García aduce los artículos 7, 17 y 25 del Código Fiscal y el artículo 48 de la Ley 32 de 1984 que en sus textos expresan:

> "ARTICULO 7: Las disposiciones de este Código, en las materias no especificadas en el artículo anterior, tendrán el carácter de supletorias para los Municipios, Asociaciones de Municipios y entidades autónomas del Estado, en cuanto sean aplicables."
>
> "ARTICULO 17: Los bienes inmuebles que el Estado se proponga adquirir conforme a los dos artículos anteriores deben ser avaluados por tres (3) peritos, uno designado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro, uno por la entidad adquirente y uno por la Contraloría General de la República, para determinar el valor de mercado de los mismos.
>
> En caso de permuta se avaluarán, en la misma forma el bien que el Estado debe entregar y el que deba recibir.
>
> No se podrá pagar o dar en permuta por los bienes que el Estado adquiera, valores mayores que los que se determina en los avalúos o en caso de disparidad de ello, en el promedio de los mismos."
>
> "ARTICULO 25: En los casos de venta o arrendamiento de bienes nacionales se avaluará el bien o se determinará el canon básico del arrendamiento para la licitación por medio de peritos, conforme a las reglas que señala el artículo 7 de este Código."
>
> "ARTICULO 48: La Contraloría refrendará todos los contratos que celebren las entidades públicas y que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios. Esta función puede no ser ejercida en aquellos casos en que la Contraloría, por razones justificadas la considere innecesaria, lo cual debe declarar en resolución motivada del Contralor o Sub-Contralor General de la República."

Según la Lcda. García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Fiscal y debido al hecho que la Ley N° 93 de 22 de diciembre de 1976 (Orgánica de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano) no establece lineamientos especiales y diferentes a los establecidos en el Código Fiscal sobre los pasos a seguir para la venta de bienes inmuebles, como avalúos, autorizaciones para el contrato y otras, es por la que se le aplica las disposiciones del Código Fiscal en toda su extensión, en lo atinente a la venta.

En relación a lo antes anotado, el demanda expresa que un análisis armónico de los artículos 7, 17 y 25 del Código Fiscal y las demás normas concordantes, evidencia que el espíritu de la Ley es que el Estado, representado en sus organismos al momento de adquirir, vender o arrendar bienes, respete los avalúos o el promedio de los tales, emitidos por los entes correspondientes (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO) salvo que una ley especial disponga de otro procedimiento, supuesto que no se da en este caso. Así manifiesta que el Artículo 17 del Código Fiscal, hoy reformado por el artículo 97 de la Ley 56 de 1997, establecía la obligatoriedad de respetar los avalúos o el promedio de los mismos que emiten la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro cuando se pretenda adquirir o enajenar bienes; en cuanto al artículo 25 del Código Fiscal, hoy reformado por el artículo 99 de la Ley 56, expresaba claramente que en los casos en que el Estado, a través de sus representantes, pretenda vender o arrendar sus bienes debe sujetarse al valúo o al promedio del mismo, expedido por entes facultados para emitir tales avalúos.

En cuanto al artículo 48 de la Ley 32 de 1984, la parte actora argumenta que para que un contrato público que implique afectación de un patrimonio del Estado se considere perfecto tiene que contar con el refrendo del Ente rector de la fiscalización pública. La figura del refrendo, como requisito sine qua non para el perfeccionamiento del contrato, no le ha sido atribuido a ningún otro ente, llámese Consejo de Gabinete, Organo Ejecutivo, etc. sino que sólo ha sido endilgado exclusivamente en la figura del Contralor General de la República.

II. La oposición de la demanda.

Mediante resolución de diecinueve de agosto de 1998, se tiene a la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara, como apoderada de ZACATA AGRONADERA CHEPANA, S. A. (ZACHE), para actuar en la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por la Lcda. Alison García Veliz en representación del Contralor General de la República.

En su oposición, la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara sostiene que el precio de venta en ambos contratos fue fijado por la Resolución de Gabinete N° 768 de 29 de diciembre de 1994, que a su vez fue modificada por la Resolución de Gabinete N° 96 de 9 de febrero de 1994. A ello añade que el precio y el procedimiento de avalúo, ya fue objeto de pronunciamiento de la Sala Tercera en la sentencia de 6 de julio de 1995, dictada dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Zacata Agro Ganadera Chepana, S. A., (Zache) y Hernán Delgado, para que se declarara nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, emitida por el Contralor General de la República, donde se estableció que el precio fue establecido siguiendo el régimen especial aplicable a la Corporación para el Desarrollo del Bayano, luego de verificados todos los estudios de rigor "sin oposición alguna".

En cuanto a que los contratos nunca fueron refrendados por el Contralor General de la República, puntualiza que por los efectos de la sentencia de 6 de julio de 1995, que alcanza en general a todos, ello se convirtió tal como lo concibe la demanda, en una exigencia superada, pues, en relación a las operaciones de venta que analizó, define aspectos como la legalidad objetiva y subjetiva del procedimiento para fijar el precio y las normas aplicables para esa fijación.

La firma Endara, Delgado y Guevara de igual manera se opone a los argumentos que sustentan las violaciones legales invocadas. Así sostiene que el artículo 7° del Código Fiscal no es aplicable al acto de disposición de bienes de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano contenido en las Escrituras Públicas impugnadas, porque la materia que esa norma regula, es la "no especificada en el artículo anterior", o sea el artículo 6° del Código Fiscal que se dedica a regular lo referente a "formalidades para disponer a cualquier título de sus bienes", lo que a final de cuentas, quiere decir que el artículo 6°, trata el tema de esas formalidades para disponer y el siguiente (7°) se refiere como supuesto regulado, a materia distinta a la especificada en el artículo anterior.

El artículo 17 del Código Fiscal a criterio de la firma opositora no juega ningún papel en esta controversia, porque el supuesto que esta norma estructura, resulta ser distinto al objeto de este proceso, ya que apunta hacia bienes inmuebles que el Estado se proponga adquirir a través de la compra o permuta, y, este caso trata de contratos de compra venta que la Corporación da en venta.

Lo mismo sucede con el artículo 25 del Código Fiscal, ya que se afirma que el mismo regula lo concerniente a la venta o arrendamientos de bienes nacionales, y lo que se dio en venta no son bienes nacionales, sino bienes inmuebles de la Corporación sujetos a un régimen especial, tal como lo fue reconocido en la sentencia de 6 de julio de 1995.

Finalmente, en cuanto al artículo 48 de la Ley 32 de 1984, se plantea que el refrendo, tal como lo concibe la Ley 32 de 1984, que es una ley especial, es un acto unilateral de fiscalización "de los Actos de Manejo" y en ese orden la Contraloría General de la República lo ejerce aprobando o improbando los desembolsos de fondos públicos y los actos que afecten patrimonios públicos. No obstante aclara que esa facultad podrá ser o no ejercida a condición de que tal abstención se autorice mediante resolución motivada, decisión que puede ser revocada en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen. De esa premisa puntualiza que conforme al artículo 48, esta función es un acto separable por tratarse de aquellos que se dictan en acatamiento de "normas especiales sobre aprobación de contratos", y que por si solo, como actos unilaterales quedan sujetos a anulación conforme al derecho administrativo. Siendo, pues, un acto separable está en situación distinta a los actos que se dan en razón de la preparación y celebración del contrato, a los que se le aplica las normas contenidas en sus leyes orgánicas, además de aquellas sobre licitación pública y concursos de precios.

Finalmente, en cuanto a los motivos o razones de orden legal que pudo tener la Contraloría General de la República para no aprobar las referidas ventas, la firma Solís, Endara, Delgado y Guevara manifiesta que ello ya fue objeto de pronunciamiento de esta Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en la Sentencia de 6 de julio de 1995.

III. El informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Desarrollo Agropecuario y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° DMN-684-98 de 21 de abril de 1998, que es visible de fojas 59 a 60 del expediente, el Ministro de Desarrollo Agropecuario rindió informe explicativo de conducta en el cual hace un recuento de las constancias y documentos que reposan en su despacho, pues, los contratos impugnados se celebraron bajo la administración anterior.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 515 de 23 de diciembre de 1998, visible de fojas 105 a 115 del expediente, solicita a la Sala que se acceda a las pretensiones formuladas, puesto que el precio que por hectárea se fijó para dicha compraventa fue de B/.375.00, suma que no se ajustó al avalúo promedio de los realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro; a ello añade que el contrato de compraventa impugnado, nunca fue refrendado por la Contraloría General de la República.

IV. Decisión de la Sala.

Examinados los trámites legales pertinentes, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El asunto medular del caso que nos ocupa, consiste en determinar si los contratos de compraventa contenidos en la Escritura Pública N° 2,415 de 2 marzo de 1994 y la Escritura Pública N° 4,548 de 21 de abril de 1994, suscritos entre la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA S. A., (ZACHE) son o no ilegales. A juicio del demandante los contratos

en referencia son ilegales, porque el precio de los terrenos vendidos a través de estos contratos, no se estableció en base al promedio de los avalúos dados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y, tampoco se solicitó el refrendo del Contralor General de la República, facultad que no se le ha atribuido a ninguna otra entidad pública, solo a la Contraloría General de la República. La firma Solís, Endara, Delgado y Guevara se opone a los argumentos en los que se apoya la demanda y manifiesta que los contratos de compraventa que se impugnan fueron debidamente autorizados por el Consejo de Gabinete con la participación de la Contraloría General de la República y, en cuanto al precio, procedimiento de avalúo y refrendo de la Contraloría General de la República, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ya ha efectuado pronunciamientos, todo lo cual desvirtúa lo solicitado en la demanda.

En efecto, la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, al resolver la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA, S. A., (ZACHE), dictó la sentencia de 6 de julio de 1995, en la cual declaró nula por ilegal, la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, expedida por la Contraloría General de la República, por la cual se ordenó al Director del Registro Público, que se abstuviera de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue, entre otras, la Finca 1455 inscrita la Tomo 28 Folio 40 y la Finca N° 1720 inscrita al Tomo 31 folio 434 del Registro Público, de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. En esa oportunidad se dejó sentado que el papel fiscalizador de la Contraloría General de la República en la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, se encuentra previsto en el Artículo 1° de la Ley 93 de 1976, estableciéndose que la Contraloría ejercerá funciones de fiscalización y control que la Constitución y las leyes establecen. De igual manera se expuso que el control fiscal que ejerce la Contraloría General debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, las particularidades que reviste esta institución, y este control se debe ejercerse de manera razonable y compatible con el interés público. Siendo así, la Sala en aquella oportunidad estimó que la petición de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano para la excepción de licitación pública y la autorización de la venta directa de ciertos globos de terreno que se encuentran en ciertas fincas de propiedad de la Corporación a antiguos arrendatarios (entre los que está ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA S. A. (ZACHE) y expropietarios, fue acogida respaldada, autorizada e implementada a través de Resoluciones del Consejo de Gabinete (N° 768 de 22 de diciembre de 1993, N° 96 de 9 de febrero de 1994) que sentaron los parámetros para proceder a la venta directa de estos inmuebles, motivadas en el sentido del interés colectivo y del Estado .

En cuanto a la fijación de trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00), como precio de venta por hectárea de las propiedades de la Corporación que fue establecido en resolución del Consejo de Gabinete y la omisión de realizar un avalúo conforme lo establecen los artículos 23 y 25 del Código Fiscal, puntos estos en los que descansó la medida de cautelación adoptada por la Contraloría, se puntualizó que el precio fue fijado no de manera improvisada, sino luego de estudios efectuados, donde se le dio participación a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Tesoro, que revelaron que la privatización de Alto y Bajo Bayano se realizaría conforme los lineamientos de la Ley 16 de 1992 que regula la privatización de empresas, bienes y servicios estatales, y obedecía a la incapacidad de la entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el área por razón de la invasión de precaristas, el asentamiento de indígenas y colonos que de hecho ocupaban grandes extensiones de tierra, sumado al abandono de terreno cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar.

Por otro lado, la falta de refrendo por parte del Contralor General de la República de los contratos de compraventa impugnados, también fue objeto de análisis en la sentencia de 6 de julio de 1995, donde se conceptuó que según

documentación del expediente, el Contralor General de la República participó en reuniones del Consejo de Gabinete en que fueron discutidas y aprobadas las Resoluciones N° 768 y 96, por lo que conocía de antemano el contenido de las mismas. No obstante, aclara que no existe constancia de que al momento en que se discutiera l aprobación de las autorizaciones de enajenación, incluyendo los puntos relativos de la categoría de arrendatarios y el precio de venta, el mencionado funcionario hubiese manifestado su preocupación o desacuerdo con la operación. A ello se añade que tampoco impugna resoluciones del Consejo de Gabinete, para lo cual estaba facultado, sino que seis meses después procede a cautelar las fincas vendidas, en el momento que muchos de los arrendatarios ya estaban en la etapa final de inscripción y ya había cancelado al Tesoro Nacional el monto de la adquisición.

No debe perderse de vista que en la Resolución de 6 de julio de 1995, donde se declaró nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República que ordenaba la abstención de inscripción en el Registro Público, de la Escritura Pública N° 2,415 de 2 de marzo de 1994 y la Escritura Pública N° 4,548 de 21 de abril de 1994 entre otras, se ordenó de igual manera la inscripción definitiva de la Finca N° 1455 inscrita a Tomo 28 Folio 40 y la Finca 1720 inscrita a Tomo 31 Folio 434 del Registro Público. Conforme a ello y según lo establece el artículo 100 del Código Judicial, las sentencias que dicte la Sala Tercera en cumplimiento de las funciones que le establece el artículo 98 del mismo cuerpo legal, son finales, obligatorias y definitivas, por lo cual, procede reiterar los razonamientos hechos en aquella sentencia y declarar que el contrato impugnado no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, los contratos de compraventa contenidos en la Escritura Pública N° 2,415 de 2 de marzo de 1994 y la Escritura Pública N° 4,548 de 21 de abril de 1994, suscritos entre la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO y ZACATA AGRO GANADERA CHEPANA S. A., (ZACHE).

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ADEMIR MONTENEGRO, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARYS RODRIGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO.019 DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VISTOS:

El licenciado Ademir Montenegro, actuando en nombre y representación de DAMARYS RODRIGUEZ, ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 019 de 15 de octubre de 1999, dictado por el Director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Observa el Magistrado Sustanciador que la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible.

En primer lugar, el apoderado judicial de la parte actora, omite señalar

a la Procuradora de la Administración como el funcionario a quien corresponde la defensa del acto impugnado, en representación de la Administración.

En segundo lugar, se observa que el apoderado judicial del recurrente confunde la demanda de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Ello es así, puesto que el objeto de la demanda contencioso administrativa de nulidad es el de impugnar la legalidad de acto de carácter general, protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo, en vías de preservar el orden jurídico abstracto. En el presente caso, quien suscribe, no observa que el Decreto No. 019 de 15 de octubre de 1999, mediante el cual se resuelve dejar sin efecto el nombramiento de la señora Damaris Rodríguez en el cargo de asistente de arquitecto de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, en la posición 1584, con una asignación mensual de B/.540.00, sea un acto de carácter general que afecte intereses de tipo general y abstracto. Lo correcto en este caso es la interposición de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción cuyo fin es la protección de intereses de carácter particular o subjetivo.

De conformidad con la jurisprudencia constante y reiterada de la Sala en esta materia, no procede acceder a la solicitud de la parte actora, como así lo ha expresado en fallos anteriores, entre los cuales citamos parte de la siguiente sentencia que establece claramente las diferencias:

> "19. LOS RECURSOS DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCION. SUS DIFERENCIAS CARACTERISTICAS.
>
> "El recurso de nulidad puede proponerse únicamente contra actos de la administración, tales como Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Resoluciones que contemplen situaciones generales. El contencioso de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos que afecten o vulneren derechos subjetivos. La "acción popular" puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera; la de plena jurisdicción pueden proponerla las personas afectadas por el acto. La primera puede ejercitarse en cualquier tiempo; la segunda, sólo dentro de los dos meses siguientes a la publicación, notificación o ejecución del acto. En la demanda de anulación sólo cabe pedir la declaratoria de ilegalidad del acto acusado; en la de plena jurisdicción cabe con la declaratoria de ilegalidad pedir, a la vez, las prestaciones a que se aspira. La sentencia que le pone fin al recurso de nulidad, se limita a declarar la ilegalidad o legalidad del acto acusado; la sentencia que decide el recurso de plena jurisdicción, llamado también acción privada, declara nulo el acto acusado con la finalidad de restablecer el derecho vulnerado. De todo ello se sigue que el recurso en que se pidió no sólo la ilegalidad del acto, sino también la indemnización o reparación de los daños que el acto ha ocasionado o pueda ocasionar, configura el recurso de plena jurisdicción; "la acción popular", en cambio, está limitada a obtener la declaratoria de ilegalidad del acto, con lo cual se restablece el orden jurídico.
>
> (V. Sentencia de 6 de septiembre de 1961. "Repertorio Jurídico." Año 1961. No. 9. Abril Diciembre. Página 621)."
>
> (MORGAN, Eduardo Los Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad y de Plena Jurisdicción en el Derecho Panameño. Talleres Gráficos. Centro de Impresión Educativa. Panamá. 1982. p. 290."

En virtud de lo anterior, la demanda no debe ser admitida de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, pues la parte actora omitió los requisitos mencionados.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia en nombre

de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Ademir Montenegro, actuando en nombre y representación de DAMARYS RODRIGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 019 de 15 de octubre de 1999, expedida por el Director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS BANQUÉ EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 101-40-22 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sata Tercera de la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el Licenciado Luis Banqué, en representación de la ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLON, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 101-40-22 de 14 de septiembre de 1999, expedida por el Consejo Municipal de Colón.

La demanda interpuesta no fue admitida por el Magistrado Sustanciador, mediante Auto de 20 de diciembre de 1999, alegando que la misma no cumplía con los requisitos mínimos para su admisión, basándose en los siguientes argumentos:

> "... la demanda no debe ser admitida porque la Gaceta Oficial N° 23,910 del 19 de octubre de 1999, en la cual se publicó el acto acusado, no está debidamente autenticada. Por otra parte, se aprecia a foja 28, que el Licenciado Banqué pidió de forma genérica que se declare nulo por ilegal el Acuerdo N° 101-40-22 de 14 de septiembre de 1999, mediante la cual se reestructura la Dirección de Planificación, Arquitectura e Ingeniería Municipal y se crea la Subdirección Administrativa y se le asignan funciones .... es necesario que se confronte el acto o norma que se estima ilegal con la norma o normas legales o reglamentarias que se consideran violadas, de modo que la Sala pueda conocer de forma clara y precisa cuáles son los cargos de ilegalidad que se formulan respecto de cada una de las normas impugnadas por ilegales".

Hilvanados todos los hechos anteriores, cabe señalar que, efectivamente, la Gaceta Oficial N° 23,910 del 19 de octubre de 1999, en la cual se publicó el acto acusado, no está debidamente autenticada, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 135 de 1943 que a la letra dice:

> "Artículo 45: Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicaciones en los periódicos oficiales, debidamente autenticados por los funcionarios correspondientes".

Por otro lado, en relación al segundo cargo por el cual se rechaza la aludida demanda, es cierto que el actor acusa de manera genérica como ilegal el Acuerdo N° 101-40-22 de 14 de septiembre de 1999, sin entrar a detallar que artículos de dicho acto administrativo considera ilegales, es decir, no se

confronta el acto o norma que se estima ilegal con la norma o normas legales o reglamentarias que se consideran violadas.

A propósito de ello, en Auto de 27 de julio de 1991, este Tribunal manifestó lo siguiente:

> "Una exposición clara, detallada y sobre todo individualizada de las normas supuestamente infringidas y el concepto en que lo han sido, permite estudiar el fondo del cargo de ilegalidad, lo que no puede verificarse en este negocio por carecer de la especificidad y la determinación que las demandas en este aspecto relevante requiere."

En mérito de lo expuesto, los Magistrados del resto de la Sala Tercera de la Corte Susprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de 20 de diciembre de 1999, el cual NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Luis Banqué, en representación de la señora MATILDE DE ARDINES, Alcaldesa del Distrito de Colón, contra el Acuerdo Municipal N° 101-40-22 del 14 de septiembre de 1999, expedido por el Consejo Municipal del mismo Distrito.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARYCEL T. RODRIGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE MEDICINA GENERAL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO DEL CONCURSO DE JEFATURA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS DE 5 DE ABRIL DE 1999, EXPEDIDO POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada MARYCEL TAYLOR RODRIGUEZ, actuando en nombre y representación de LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE MEDICINA GENERAL, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declara nulo, por ilegal, el Reglamento para el Concurso de Jefaturas de Servicios Médicos del Hospital Santo Tomás, aprobado por el Consejo Técnico del Hospital Santo Tomás, el 5 de abril de 1999.

La apoderada judicial de la parte actora solicitó, junto con las pretensiones de la demanda, la suspensión de los efectos del Concurso de Jefaturas de Servicios Médicos del Hospital Santo Tomás, aprobado por el Consejo Técnico del Hospital Santo Tomás.

La petición de suspensión fue formulada en los siguientes términos:

> "Nuestra solicitud de suspensión de los efectos del Concurso de Jefaturas de Servicios Médicos del Hospital Santo Tomás, se base en el hecho inequívoco de que el mismo fue llevado a cabo sobre la base de un reglamento dictado por un organismo (Consejo Técnico del Hospital Santo Tomás) sin competencia, lo que constituye una de las causales de ilegalidad del acto administrativo (art. 16 de la Ley 33 de 1946); por lo que la doctrina ha considerado que lo dictado por un funcionario sin competencia es "un no acto".

> El reglamento arriba indicado, establece la metodología para adjudicar el concurso respectivo, lo que a nuestro entender es evidentemente ilegal, en virtud de que ese Consejo carece de funciones, dado que, el Reglamento del Hospital Santo Tomás de 16 de mayo de 1988, nunca recobró vigencia, por lo tanto, la figura del "Consejo" no puede obligar ni vincular a nadie.
>
> En consecuencia de lo anterior, es evidente que el Ministro de Salud procederá a adjudicar los concursos de jefaturas llevadas a cabo por la Dirección Médica del Hospital Santo Tomás, mediante la expedición de los actos administrativos de nombramientos de aquello profesionales que resultaron favorecidos con el Concurso en comento, situación que de darse, conllevaría a que los afectados interpongan las correspondientes demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción, con el legítimo derecho a solicitar la nulidad de dichos nombramientos, por ilegales, basados en que los mismos se dieron como efecto de un Concurso Ilegal.
> ...
> Como podemos apreciar, si el Señor Magistrado Presidente de esa Honorable Corporación de Justicia, no decreta la suspensión provisional de las adjudicaciones de los concursos de Jefaturas Médicas del Hospital Santo Tomás, tanto los funcionarios favorecidos como los no favorecidos y el propio Estado, serán afectados. El perjuicio es notorio por varios aspectos a considerar: por un lado, las espectativas de todos aquellos profesionales idóneos que presentaron la documentación requerida para participar en el Concurso, resultarán frustadas; por otro lado, la adecuada administración del centro hospitalario en términos de eficiencia técnica y humana se verá alterada porque, con las inminentes demandas de plena jurisdicción que seguirán a ésta, necesariamente el resultado será el que se pretende, pero de manera definitiva, es decir, se obtendrá la nulidad de todo lo actuado.
>
> Otro perjuicio notoriamente grave que podemos mencionar es el costo en términos presupuestarios que acarrea para el Estado cada vez que se activa el aparato jurisdiccional, sin dejar de mencionar el problema que representa el cúmulo de negocios que cada día ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Esto constituye nuestro real sentir y entender, el más grave perjuicio que puede sufrir el demandante, porque actuando en ejercicio de la acción popular, precisamente lo que pretendemos es que se restituya el estado de la legalidad, por lo que consideramos inminente y urgente que se adopte la medida de precaución que solicitamos. El Hospital Santo Tomás no verá en acefalía ninguna de las Jefaturas de Servicios Médicos, porque los actuales titulares, por mandato legal, permanecerán en los mismos cargos hasta tanto se convoque y lleven a cabo, válidamente, los correspondientes concursos y se designe a los nuevos Jefes de Servicios.
>
> Suspender Provisionalmente los efectos de la aplicación del acto acusado, evitaría que el demandante, actuando en ejercicio de la acción popular, sufra un mayor perjuicio, por lo que de la manera más respetuoso posible, solicitamos que acceda a la solicitud de suspensión requerida." (Fs. 85-87).

La Sala pasa a examinar los argumentos planteados por la parte actora para decidir conforme a derecho, si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

La suspensión en estos procesos de nulidad procede si el actor prueba a la Sala que con el acto administrativo se pueden causar perjuicios notoriamente graves y de difícil o imposible reparación, si el acto administrativo infringe palmariamente el principio de separación de poderes o si puede entrañar un

perjuicio a la integridad del ordenamiento jurídico por violarse en forma manifiesta una norma jurídica de rango superior.

En el presente caso, la Sala considera que no es posible acceder a la solicitud formulada por el recurrente, en virtud de que prima facie no hay pruebas concluyentes que evidencien de una manera manifiesta y clara que se haya violado la norma positiva o que se infringe el principio de separación de poderes, como tampoco el recurrente ha aportado las pruebas que demuestren los perjuicios graves que se derivan del acto acusado de ilegal; por lo que consideramos, no procede decretar en este momento procesal, la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la Solicitud de Suspensión Provisional de los efectos del Concurso para las Jefaturas de Servicios Médicas del Hospital Santo Tomás, aprobado por el Consejo Técnico del Hospital Santo Tomás, el 5 de abril de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEOFANES LOPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO GRIMALDO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 27 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Teófanes López Avila, sustentó ante el resto de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación anunciado contra el auto dictado el 20 de octubre de 1999 por la Magistrada Sustanciadora de esta causa, mediante el cual no se admitió la demanda contencioso administrativa de protección de derechos humanos, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 3 de 27 de enero de 1998, dictada por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora no admitió la demanda por considerar que la acción promovida estaba prescrita, toda vez que el acto administrativo impugnado es de carácter particular que afecta derechos subjetivos y como tal se sustenta sobre la base de que los procesos contencioso administrativos de derechos humanos deben tramitarse según las normas de las leyes 135 de 1943 y 33 de 1946, y la presente demanda fue promovida después de transcurrido en exceso el término de prescripción de dos meses, señalado en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946. Observa la Sustanciadora que el acto impugnado es de fecha 27 de enero de 1998 y la demanda bajo estudio fue presentada el 13 de septiembre de 1999, es decir, después de un año de haber sido emitido el acto, y por tal razón, la demanda no debe tramitarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

Por su parte, el apelante sustenta su recurso en los siguientes términos:

"... Si bien es cierto que el artículo 27 de la Ley 33 de 1946 señala que prescribe en dos meses el término para interponer las demandas de plena jurisdicción, tal prescripción, por voluntad del legislador, no es aplicable en las acciones de violación de Derechos Humanos Justiciables, debido a que:

a) Según el artículo 98 del Código Judicial, en su numeral 15, el proceso de protección de los derechos humanos se tramitará según las normas de la Ley 135 del 30 de abril de 1943 y de la Ley no. 33 del 11 de septiembre de 1946, pero no se requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa.

El análisis del precepto anterior nos indica, sin lugar a dudas, que cuando el legislador señala que no se requiere por el agraviado el agotamiento de la vía gubernativa con ello nos está indicando que estas clases de acciones son imprescriptibles.

Ello es así porque, de lo contrario, ¿Qué sentido tendría indicar que no se requiere el agotamiento de la vía gubernativa cuando en otro lado se afirma que dicha acción es prescriptible a los dos meses? En materia contencioso administrativa en Panamá las acciones tienen dos efectos: o prescriben o no prescriben. Si prescriben es, en Panamá, a los dos meses y en cuyo caso (sic) necesario agotar previamente la vía gubernativa.

Si no prescriben no hay que agotar la vía gubernativa o a partir de la notificación de la resolución que causa estado. Luego, cabe preguntar, respetuosamente, ¿A partir de cuándo, o de qué fecha, comienza a contarse el término de prescripción si, como dice el legislador, no se requiere el agotamiento previo (ni después añadimos) de la vía gubernativa?

Cuando el Legislador señala que "no se requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa" está asimilando las acciones Contencioso Administrativas de reclamación directa, en donde tampoco se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa y por tanto es imprescriptible. Tanto es así que se dispone en la norma que el Procurador de la Administración intervendrá en interés de la ley.

b) Por ninguna parte del numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial el legislador ha señalado ni ha dado motivos para deducir que aunque no se requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa la acción prescribe a los dos meses; tampoco ha indicado a partir de cuando comienza a correr el término de dos meses. Nos parece que la decisión del auto recurrido sienta un precedente no feliz en estas clases de acciones.

c) El legislador tampoco ha señalado que los procesos de protección de los derechos humanos tienen carácter general y por tanto imprescriptibles o individual, y por tanto prescriptibles, pues en nuestra opinión tal diferencia no se encuentra en la norma ...

Los derechos humanos violados jamás prescriben. La jurisprudencia internacional en todos los aspectos así lo ha señalado.

d) Si también es cierto que el acto impugnado de violación de derechos humanos afecta al demandante, dicho acto también afecta a la comunidad la cual tiene interés en la protección de los derechos humanos ..."

Antes de entrar a ponderar la presente apelación, resulta obligante para el resto de la Sala exponer algunas consideraciones en torno al Contencioso Administrativo de Protección a los Derechos Humanos en nuestro país, para mayor comprensión.

En primera instancia, cabe destacar que dentro de la exposición de motivos que presentó la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Legislativa para

justificar la creación de este nuevo proceso en 1991 y aprobado mediante el artículo 11 de la Ley 19 de 9 de julio de 1991 se consideró, como punto relevante, resaltar que este mecanismo estaría disponible para hacer efectivos los que se designan como derechos humanos justiciables, es decir, exigibles judicialmente frente a la Administración Pública y no incluía derechos económicos, como el derecho al empleo por ejemplo, que no son susceptibles de ser impuestos judicialmente sino que dependen de las políticas económicas que libremente siga el gobierno. En un lugar preponderante de los derechos humanos justiciables se ubicarían las libertades de asociación, expresión y reunión, la libertad y secreto de la correspondencia, el derecho a la intimidad, la libertad religiosa y la residencia, entre otros, de los que se encargaría la jurisprudencia contencioso administrativa de perfeccionar. Además, se estableció que el proceso seguiría las reglas aplicadas a los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción, si se trata de actos administrativos que crean situaciones jurídicas individualizadas o del proceso de nulidad si se trata de actos de carácter general, siendo más expedito este nuevo proceso pues, no se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa.

En ese sentido fue concebido este proceso, dirigido a evitar que los miembros de los diferentes órganos del estado, mediante actos administrativos, puedan lesionar derechos humanos justiciables.

Dentro de este contexto, cabe destacar que en este proceso especial sólo se pueden revisar actos expedidos por autoridades nacionales lo cual incluye tanto al gobierno central como a las instituciones autónomas o semiautónomas y a actos administrativos expedidos por la Asamblea Legislativa o por entidades del Organo Judicial con competencia en todo el país, tal como se infiere del artículo 98, numeral 15 del Código Judicial (Resalta la Sala). Por lo tanto, quedan excluidos, los actos administrativos expedidos por las autoridades provinciales y municipales.

Los requisitos procesales subjetivos son los mismos que en los procesos ordinarios de nulidad o de plena jurisdicción pues se dispuso que a este proceso especial se aplican las leyes 135 de 1943 y 33 de 1946.

En lo atinente a los requisitos objetivos es imprescindible que las pretensiones de las partes se funden en la violación de un derecho justiciable mencionados en párrafos precedentes.

Si se persigue únicamente la anulación del acto administrativo sin que se solicite reparación o restablecimiento del derecho se debe acudir a las normas del proceso de nulidad y si se trata de actos que inciden sobre situaciones jurídicas individualizadas y se solicita el restablecimiento del derecho humano lesionado, se aplicarán las normas aplicables al proceso de plena jurisdicción, adquiriendo relevancia lo relativo a la prescripción, toda vez que si el objetivo es la reparación de un derecho humano conculcado el plazo para presentar la demanda será de dos meses, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Los efectos jurídico-materiales se centran en anular el acto administrativo que ha lesionado derechos humanos justiciables y, cuando proceda, la Sala Tercera puede dictar las medidas de reparación necesarias para restablecer el derecho lesionado.

El resto de la Sala, una vez expuesto los criterios precedentes, pasa al análisis del presente proceso.

Observa el resto de la Sala que el apelante se aferra a establecer que como en el presente proceso no se requiere el agotamiento de la vía gubernativa, ello es indicativo de que la acción es imprescriptible, sustentando que no tendría sentido que sin tener que agotar la vía gubernativa la acción prescriba en dos meses; además cuestiona el hecho de que a partir de cuándo comienza a contarse el término de prescripción, sin es a partir del agotamiento de la vía gubernativa

o a partir de la notificación de la resolución que causa estado.

Frente a estos señalamientos esta Superioridad le manifiesta al apelante, en primer término, que el presente proceso al no requerir el agotamiento de la vía gubernativa se estableció así precisamente para darle mayor impulso al proceso y el afectado o lesionado pueda recurrir directamente a la Sala Tercera, dentro de los dos meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que lesiona un derecho humano justiciable.

Consideramos que los dos meses otorgados dan un margen relativamente amplio para recurrir, sobre todo si lo comparamos con países como España con una basta tradición jurídica y en cuanto a la justicia administrativa, específicamente, poseen una Ley de protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona con características similares al proceso que se estudia, la cual tiene establecido un plazo de diez (10) díaz para interponer el recurso, contados desde el día siguiente a la notificación del acto o publicación de la disposición y además no es necesario el agotamiento de la vía gubernativa.

Dentro de este contexto, resulta obligante señalar que el acto administrativo que se trate de anular a través de este tipo de proceso especial tiene como requisito indispensable que debe ser expedido por una autoridad nacional, con competencia en todo el país, quedando excluidos los actos emanados de autoridades provinciales y municipales, tal como lo constituye el presente caso, en donde el acto que se trata de anular fue proferido por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito (cfr. artículo 98, numeral 15 del Código Judicial).

Ante este escenario jurídico, resulta palmario que la presente demanda no cumple con lo dispuesto en los artículos 50 de la Ley 135 de 1943 y el 98, numeral 15 del Código Judicial, razón por la cual, compartimos la decisión de la Magistrada Sustanciadora y arribamos a la decisión de que la demanda no debe ser admitida.

Como corolario de lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 20 de octubre de 1999 que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de protección de derechos humanos, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 3 de 27 de enero de 1998, dictada por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MURGAS & MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A., AN DE PUY S. A. Y DE PUY GARCIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento del Recurso de Casación Laboral interpuesta por la firma Murgas & Murgas en representación de ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 12 de octubre de 1999, dentro del proceso laboral incoado por JORGE LUIS DE PUY GARCIA, contra aquélla.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su solicitud en el hecho de que su hijo, Rodolfo Aguilera Franceschi, actúo como apoderado judicial del señor JORGE LUIS DE PUY GARCIA en la demanda que éste presentó ante las Juntas de Conciliación y Decisión contra las sociedades ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., cuyas pretensiones se relacionan íntimamente con el proceso laboral en el cual se dictó la resolución recurrida con el presente recurso de casación, situación ésta, que a tenor de lo establecido en el numeral diez (10) del artículo 647 del Código de Trabajo, le prohiben entrar a conocer la presente controversia.

El contenido de la norma en mención es del tenor siguiente:

"Artículo 647: Son causales de impedimento:
...
10. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, perito, depositario, auxiliar de la jurisdicción, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron margen al mismo;
...". (El subrayado es nuestro)

Quienes suscriben, habiendo corroborado la veracidad de las afirmaciones expuestas por la Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, consideran que ha quedado plenamente demostrada la existencia de la referida causal de impedimento, lo cual constituye suficiente motivo para acceder a la presente solicitud.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema (Casación Laboral), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la Lcda. Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, en su condición de Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 655 del Código de Trabajo se designa al Magistrado ROGELIO FABREGA ZARAK de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a la Magistrada impedida.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO CEREZO G., EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE COPFA, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: TRABAJADORES DE COPFA-VS-COMISION DE PANAMA/ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Adán Arnulfo Arjona L. ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación laboral interpuesto por el licenciado Jacinto Cerezo G., en representación de los TRABAJADORES DE COPFA, contra la Sentencia de 15 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: TRABAJADORES DE COPFA-vs-COMISION DE PANAMA/ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRO.

El Magistrado Arjona fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Honorables Magistrados de la Sala Tercera (Casación Laboral):

Con fecha de 17 de enero de 2000, ingresó a mi despacho el recurso de Casación Laboral propuesto por el Licenciado Jacinto Cerezo G., en representación de los TRABAJADORES DE COPFA, contra la Sentencia de 15 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: TRABAJADORES DE COPFA-vs-COMISION DE PANAMA/ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA LA PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRO.

Es importante mencionar, que el representante judicial de la parte demanda, en este asunto de la Jurisdicción de Trabajo, es la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán.

En virtud de lo expresado, respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que integran el resto de la Sala, me separen del conocimiento del presente recurso, en razón de que, pese a que ya no formo parte de la citada firma de abogados pues me separé desde el pasado 30 de diciembre de 1999, considero que esta circunstancia puede configurar un posible motivo de impedimento a tenor de lo que establece el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo, que a la letra dispone:

"Artículo 647: Son causales de impedimento:
...
2. Tener interés directo o indirecto debidamente explicado en el proceso, el Juez o Magistrado, su cónyuge o algunos de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior;" (El resaltado es nuestro)"

A juicio del resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por el Magistrado Adán Arnulfo Arjona L., se adecua a lo establecido en el numeral 2 del artículo 647 del Código de Trabajo y es motivo suficiente para separarlo del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el MAGISTRADO ADAN ARNULFO ARJONA L., lo separan del conocimiento del negocio interpuesto y proceden a llamar al MAGISTRADO ELIGIO A. SALAS, de la Sala Primera, para que integre la Sala.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCION DE PRESCRIPCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARTHA MORA ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DE LIDIA ELENA CANO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS LE SIGUE A LIDIA ELENA CANO, NOEMI GUIZADO, BERTA TORRIJOS Y ANGELA DE ZURITA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Martha Mora Abrego, actuando en nombre y representación de LIDIA ELENA CANO, ha promovido excepción de prescripción de la obligación que se demanda, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos le sigue a Lidia Elena Cano, Noemí Guizado, Berta Torrijos y Angela de Zurita.

La apoderada de la señora CANO fundamento la excepción en los siguientes hechos:

> **"Primero: El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) otorgó un préstamo a la señora Lidia Elena Cano, mediante el contrato de préstamo identificado con el número 5964P de 27 de abril de 1966, correspondiente al Programa de Crédito Educativo por un término de 32 meses, que incluía el pago de 100 balboas mensuales para sufragar sus gastos de ropa, alimentación, alojamiento y demás gastos personales.**
>
> **Segundo: Mi poderdante se comprometió a pagar el valor de las primas de seguro de asistencia médica y de vida, y tendría efecto en abril de 1966 esto devengaría un interés del 5% anual a partir de la finalización de sus estudios y hasta el momento que la deuda sea cancelada en su totalidad.**
>
> **Tercero: Mi poderdante se comprometió a pagar en concepto de capital la suma de B/.4,696.30, al interés del cinco por ciento anual (5%) dentro de un término de 70 meses.**
>
> **Cuarto: Mi poderdante se mantuvo haciendo los abonos a la deuda del contrato de préstamo descrito en el hecho primero, hasta el año de 1983, fecha en que según el historial de cobro (Tarjeta Celeste) de la entidad IFARHU, el prestatario hizo el último pago.**
>
> **Quinto: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley N° 1 de 11 de enero de 1965 reformada, orgánica del IFARHU y el artículo 1701 del Código Civil, alegamos la prescripción del presunto derecho que sustenta la pretensión del demandante IFARHU, en contra de mi poderdante Lidia E. Cano, toda vez que dichas normas establecen el término de quince años, como el transcurso normal de prescripción de las acciones derivadas de la obligación entre las cuales se encuentra el contrato celebrado entre las partes citadas ...**
>
> **Sexto: ... ha transcurrido en exceso el término de la ley, que perfecciona a cabalidad la prescripción de la obligación que alegamos, la cual comenzó a decurrir el año 1983, fecha en que se efectuó el último pago y que hasta el presente momento han pasado dieciséis años, y que por ello la obligación contraída por mi mandante se convirtió, según el pagaré y el contrato suscrito, exigible y de plazo vencido, aunque la acredora no realizó ninguna**

gestión de cobro si no hasta el 23 de junio del año en curso 1999. Es desde el año 1977 el momento en que se computa el término de la prescripción presentada, a la luz de lo normado en el artículo 1708 de Código Civil ...

Séptimo: El acreedor, o sea, el IFARHU a pesar de lo señalado en los hechos anteriores, inició gestiones de cobro a través de su Juzgado Ejecutor, el día 23 de junio de 1999 cuando dictó el Auto s/n, de Mandamiento de Pago en contra de mi poderdante Lidia E. Cano, hasta la concurrencia de B/.1,389.04 balboas, de lo que se puede colegir que el término de preclusión de la acción de cobro se encuentra cumplido en exceso, y por lo tanto es procedente se dictamine la prescripción de la acción instaurada por el IFARHU en contra de mi mandante y en consecuencia se ordene el archivo del expediente ..." (fs. 2-4)

A foja 23 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo consta el auto N° 2009 de 21 de octubre de 1999, mediante el cual la Jueza Ejecutora del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, libró mandamiento de pago contra Lidia Elena Cano Calles, Noemí Edith Guizado, Berta Torrijos y Angela de Zurita, hasta la concurrencia de mil quinientos treinta y tres balboas con treinta y siete centésimos (B/.1,533.37) en concepto de capital, intereses vencidos y seguro de vida, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos que se produzcan hasta la fecha de su cancelación total.

De este auto se notificó la señora Lidia Cano el 30 de noviembre de 1999, según consta a foja 33 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

De acuerdo al artículo 1706 del Código Judicial, el ejecutado puede proponer las excepciones que crea le favorezcan, dentro de los ocho días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, y el artículo 1712 del Código Judicial establece que el Juez dará traslado al ejecutante del incidente de excepciones por el término de tres días, si el ejecutado usare oportunamente del derecho que le concede el artículo 1706.

En tal sentido, la Sala estima que la excepción interpuesta por la licenciada Martha Mora, en representación de la señora Lidia Cano debe rechazarse por extemporánea, porque fue presentada el 14 de diciembre de 1999, excediendo el término de ocho días que la ley concede para ello.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES EXTEMPORANEA Y RECHAZA DE PLANO la excepción de prescripción interpuesta por la licenciada Martha Mora, en representación de LIDIA CANO, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos a Lidia E. Cano, Noemí Guizado, Berta Torrijos y Angela de Zurita.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INVALIDEZ DEL PAGARÉ, DOBLE PETICIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE ERASMO CASTRO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL JUEZ EJECUTOR DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA DE PANAMA S. A., MARCOS FERNANDEZ, ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO Y RAUL ESKILDSEN. MAGISTRADA PONENTE:

MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre y Asociados, actuando en representación de Erasmo Castro, ha interpuesto excepciones de inexistencia de la operación crediticia, inexistencia del título ejecutivo, invalidez o imperfección del pagaré, doble petición de pago y prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

ANTECEDENTES

La Gerencia Ejecutiva de Operaciones del Departamento de Contabilidad Centralizada del Banco Nacional de Panamá, expidió, el 13 de mayo de 1998, una certificación para uso interno de la institución, en donde hizo constar que la sociedad Base-Ball Interamericana de Panamá, registraba para esa época, un saldo deudor de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve balboas con 76 centésimos (B/.154,6549.76).

Posteriormente, El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, área metropolitana, dictó el Auto N° 846 de 1 de octubre de 1998, en el que indicó que, conforme a las constancias documentales que reposaban en el Banco, representadas por el pagaré N° 79A1480, la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., con la codeuda de los señores Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marco Antonio Fernández, recibió la suma de cuarenta mil cuatrocientos setenta y cinco balboas (B/.40,475.00), con intereses al 12 por ciento anual más 1/2 por ciento de Supervisión Técnica, con un plazo de noventa (90) días.

También señaló en ese auto, que la parte deudora había incumplido con el pago de la obligación en los términos acordados, adeudando al Banco la suma de cuarenta mil doscientos seis balboas con 62/100 (B/.40,206.62) a capital, más la suma de ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres balboas con 14/100 (B/.114,443.14) de intereses vencidos calculados al 1 de mayo de 1998, razón por la cual se hacía necesario proceder a la recuperación de los saldos adeudados mediante los trámites del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Ante esto y con el objeto de evitar que el proceso resultase ilusorio, el Juez Ejecutor de dicha entidad bancaria decretó en ese mismo auto formal secuestro a favor del Banco Nacional de Panamá y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., Marco Antonio Fernández, Erasmo Castro, Miguel Abbo y Raúl Eskildsen (fs. 11-13 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Además, dictó el Auto N° 847 de 1 de octubre de 1998, mediante el cual declaró la obligación de plazo vencido y en consecuencia libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del Banco Nacional de Panamá, casa matriz y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, cuyo representante legal es el señor Marco Antonio Fernández, hasta la concurrencia de la suma de cuarenta mil doscientos seis balboas con 62/100 (B/.40,2006.62) a capital, más la suma de ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres balboas con 14/100 (B/.114,443.14) de intereses vencidos calculados al 1 de mayo de 1998 y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de quinientos balboas con 00/100 (B/.500.00), lo que asciende a la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve balboas con 76/100 (B/.155,149.76), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, y contra los señores Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marco Antonio Fernández, cada uno hasta la concurrencia de la suma de cinco mil setecientos cuarenta y tres balboas con 80/100 (B/.5.743.80) a capital, más dieciséis mil trescientos cuarenta y nueve balboas con 02/100 (B/.16,349.02), más los gastos de cobranza, lo cual asciende

a la suma de veintidós mil noventa y dos balboas con 82/100 (B/.22,092.82), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación (fs. 22-24 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

El señor Erasmo Castro se notificó de este auto el 19 de octubre de 1998 (f. 47 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo) y adujo las siguientes excepciones el día 29 de octubre de ese año.

EXCEPCIONES

"II EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA EN QUE SE SUSTENTA EL RECLAMO DEL BANCO:

1. La operación crediticia en que se sustenta el reclamo del Banco Nacional de Panamá no llegó a perfeccionarse.

2. El Banco Nacional de Panamá no ha aportado documentos que sustenten la supuesta operación crediticia en que se sustenta su reclamo.

3. El pagaré que sirve de título ejecutivo accede a una obligación inexistente.

III INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO:

1. El documento que sirve de título ejecutivo para librar el mandato de pago es una fotocopia.

2. No obra en el expediente el original del susodicho título ejecutivo.

IV INVALIDEZ O IMPERFECCION DEL PAGARE:

1. El pagaré que sirve de título ejecutivo para librar el mandamiento de pago carece de las firmas de Roberto Halphen, Virgilio Capriles y Bernardo Benes.

2. El pagaré está incompleto y carece de validez.

V DOBLE PETICION DE PAGO:

1. Mediante auto 847 se libra mandato de pago contra Baseball Interamericana de Panamá, S. A. por ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve balboas con 76/100 (B/.155,149.76); y además, contra Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marco Antonio Fernández, por veintidós mil noventa y dos balboas con 82/100 (B/.22,092.82) cada uno, lo cual suma ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 28/100 (B/.88,371.28).

2. Hasta la referida concurrencia de ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 28/100 (B/.88,371.28) hay una doble petición de pago.

VI PRESCRIPCION:

1. El documento que sirve de título ejecutivo al libramiento de pago por parte del Banco Nacional de Panamá está fechado 4 de junio de 1979, con vencimiento en un plazo de 90 días contados a partir de su fecha.

2. El Banco Nacional de Panamá no realizó gestión alguna de cobro, hasta enero de 1997.

3. A la fecha de la gestión de cobro, habían transcurrido casi 18 años desde el otorgamiento del pagaré.

4. La supuesta obligación está prescrita.

5. El propio Banco Nacional de Panamá transfirió a su "reserva para préstamos incobrables" la referida obligación.

6. Desde la tardía gestión de cobro, en enero de 1997, a la ejecución en octubre de 1998, han transcurrido veinte (20) meses." (fs. 4-5 del cuadernillo de excepciones)".

RESPUESTA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA

El Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, por medio de apoderado judicial, en referencia a la excepciones presentadas señaló lo siguiente:

"II. INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA EN QUE SE SUSTENTA EL RECLAMO DEL BANCO.

No son ciertas y por tanto se niegan las aseveraciones de los excepcionantes por cuanto que la obligación surge del propio pagaré autenticado que sirve de recaudo ejecutivo. Decir lo contrario equivale a negar la teoría de la autonomía de la obligación de los documentos negociables aceptado en nuestro Derecho.

Precisamente la validez de un instrumento negociable está en el hecho de no depender de otra obligación contenida en documento aparte lo que le quitaría la condición de negociable.

La obligación en el presente caso surge del pagaré suscrito por las partes obligadas.

III. INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO.

Las aseveraciones de los excepcionantes no se atienen a la verdad y por tanto se niega.

El documento que sirve de título ejecutivo para librar mandamiento de pago, está debidamente autenticado por la oficina de custodia de documentos del Banco Nacional de Panamá. La copia autenticada fue expedida conforme a lo preceptuado en el artículo 829 del Código Judicial.

Hemos procedido a solicitar el original del pagaré en cuestión, el que adjuntamos para que los Honorables Magistrados puedan constatar la existencia del mismo y su validez.

IV. INVALIDEZ O IMPERFECCION DEL PAGARE.

Si bien es cierto el pagaré que sirve de recaudo ejecutivo para librar mandamiento de pago carece de las firmas de Roberto Halphen, Virgilio Capriles y Bernardo Benes, no es menos cierto que surge la obligación de parte de los que suscribieron la obligación contenida en el referido pagaré.

V. DOBLE PETICION DE PAGO.

La aseveración no es totalmente cierta y por tanto se niega.

En el auto N° 847 en que se libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de la empresa deudora Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., se libró recaudo ejecutivo hasta la totalidad de la obligación

(B/.155,149.76), la cantidad de B/.22,092.82, equivale a la porción proporcional a que se comprometió cada parte al suscribir la obligación por lo que cada uno responde hasta dicha cantidad. Esto último a pesar de que todos aparecen mencionados como codeudores en el documento.

Por lo anterior no existe doble petición de pago.

VI. PRESCRIPCION.

Las alegaciones de la parte actora no nos constan y por tanto las negamos." (fs. 14-17 del cuadernillo de excepciones)

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 49 de 18 de febrero de 1999 (fs. 18 a 27 del cuadernillo de excepciones), expresó su opinión con respecto a las excepciones aducidas por el señor Erasmo Castro.

En este sentido, al referirse a la excepción de Inexistencia de la Operación Crediticia en que se sustenta el Reclamo del Banco, manifestó no compartir el criterio expuesto por el excepcionante, pues, a su parecer, "se encuentra comprobada la existencia de la transacción comercial bancaria que dio origen a la obligación cuyo cumplimiento se exige hoy a la sociedad BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., y otros: el otorgamiento del pagaré N° 79A1480 de 4 de junio de 1979" y por ello considera no probada esta excepción.

Con respecto a la excepción de Inexistencia del Título Ejecutivo, indicó que las aseveraciones hechas por el incidentista carecen de sustento, pues, si bien es cierto el título de crédito ejecutivo que sirve de fundamento en el actual proceso por cobro coactivo, es una fotocopia, ésta se encuentra debidamente autenticada y por ello cumple con los requisitos señalados en el Código Judicial.

Además manifestó que el título ejecutivo no lo constituye el pagaré, sino el estado de cuenta expedido por la Gerencia Ejecutiva de Operaciones, del Departamento de Contabilidad Centralizada, del Banco Nacional de Panamá.

Tampoco considera la señora Procuradora de la Administración que se haya probado la excepción de Invalidez o Imperfección del Pagaré, por cuanto que considera que aun cuando la firma es un requisito esencial de todo documento negociable, y por tanto, ninguna persona puede ser tenida como responsable en un título de crédito si su firma no aparece en éste, en el caso que nos ocupa, las firmas que hacen falta en el pagaré N° 79A1480, no afectan la validez del mismo.

En cuanto a la excepción de Doble Petición de Pago, señaló que fue la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., la que, según el pagaré N° 79A1480 de 4 de junio de 1979, recibió el valor que se promete pagar a través de dicho documento negociable.

Considera que no existe la supuesta codeuda, ya que la intención de las personas naturales que firmaron el pagaré era la de constituirse en fiadores mancomunados hasta una séptima parte de la obligación principal, y que precisamente por ello fue que ante el icumplimiento de la prenombrada sociedad el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento en su contra hasta la concurrencia de la suma de B/.155,149.76 y contra los señores Marco Antonio Fernández, Erasmo Castro, Raúl Eskildsen y Miguel Abbo, hasta la concurrencia de la suma de B/.22,092.82, cuota parte por la que cada uno se obligó ante el no pago del deudor principal.

Finalmente señaló estar de acuerdo con lo expresado por el excepcionante, en el sentido de que la obligación prescribió, pues en efecto, el documento

negociable fundamento del proceso por cobro coactivo está fechado 4 de julio de 1979, con vencimiento en un plazo de noventa días a la fecha del mismo, y de acuerdo con los artículos 908, 909 y 917 del Código de Comercio el plazo de prescripción de las acciones que resulten del pagaré en contra de sus suscriptores es de tres años a partir de la fecha de vencimiento.

DECISION DE LA SALA

Luego de haber examinado las excepciones aducidas por el señor Erasmo Castro, esta Corporación de Justicia ha concluido que la obligación cuyo cumplimiento se persigue a través del presente proceso ejecutivo por cobro coactivo, en efecto, está prescrita.

De hecho, el pagaré N° 79A1480, librado el 4 de junio de 1979, documento que sirve de fundamento al presente proceso, tenía un plazo de vencimiento de 90 días contados a partir de esa fecha.

Al respecto, vale destacar, que el artículo 229 del Código Comercio, en su numeral 1, establece que "Si el plazo se fijase por días, la deuda vencerá el último día del plazo, no contándose el del perfeccionamiento del contrato", por ende, el documento en cuestión venció el 2 de septiembre de 1979.

Por otra parte, en lo que respecta a la prescripción de la acción, esta Superioridad considera que en el caso que nos ocupa se debe aplicar el término de prescripción que señala el artículo 908 del Código de Comercio.

> "Artículo 908. Todas las acciones que resultan de una letra de cambio contra el aceptante prescriben en tres años, a partir de la fecha del vencimiento."

Esto es así porque el artículo 917 del mismo Código establece que "Son aplicables al billete a la orden, mientras no sean incompatibles con la naturaleza de esta obligación, las disposiciones relativas a la letra de cambio", debiéndose entender que tanto el billete como el pagaré constituyen figuras jurídicas idénticas, tal como lo ha señalado la Sala Civil de esta Corporación de Justicia, en fallo de 2 de marzo de 1998 (Ver Registro Judicial de marzo de 1998, pp. 165-168).

De hecho, en dicho fallo la Sala Civil reconoció que:

> "... lo más lejos que se puede llegar en cuanto a la diferencia entre el llamado billete y el pagaré es una meramente de significación semántica. Cuando uno se detiene y analiza cuál es la estructura de estos dos títulos, hay que aceptar y concluir que es la misma. En los dos casos se trata siempre de títulos abstractos, literales, formales, completos y necesarios. Su condición de papel o efecto de comercio es la misma y la función que desempeñan en el ámbito de los negocios los convierte en una promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar, por si mismo o a la orden, una suma determinada de dinero. Ambos, en su calidad de títulos de crédito, serán susceptibles de negociación a mérito de la cláusula a la orden que pueden llegar a ostentar. En suma, y al margen de lo sostenido en fallos anteriores, preciso es concluir que, por tratarse del mismo título, lo que establece el Código de Comercio en relación con el billete debe aplicársele al pagaré, sin excluir lo relativo al término en que prescriben las acciones que se ejerzan contra el aceptante, es decir, al término de (3) años de prescripción a que se refiere el artículo 908 del Código de Comercio respecto a la letra de cambio, aplicable también al billete o al pagaré por disponerlo así el artículo 917 de ese cuerpo legal, cuando expresamente remite a la norma que en primer lugar se ha dejado mencionada."

De todo lo antes expuesto podemos concluir que este pagaré prescribió el 2 de septiembre de 1982, es decir tres años después de su vencimiento.

Por lo demás, no encuentra esta Sala en el expediente del proceso por cobro coactivo evidencia de que el Banco Nacional hubiese hecho alguna gestión de cobro para recuperar dichos créditos en el plazo comprendido desde el 3 de septiembre de 1979 hasta el 1 de octubre de 1998, fecha en la que el Juez Ejecutor del Banco Nacional dictó el Auto N° 846 mediante el cual decretó formal secuestro contra Erasmo Castro, Marco Antonio Fernández, Raúl Eskildsen, Miguel Abbo y la Sociedad Base-ball Interamericana de Panamá.

Igualmente en esa misma fecha dictó el Auto N° 847 a través del cual declaró la obligación de plazo vencido y libró mandamiento de pago contra ellos.

De este último auto se notificó el ejecutado el 19 de octubre de 1998.

Como se observa, desde la fecha en la que se libró el pagaré en cuestión hasta la fecha de la notificación transcurrieron diez y nueve años, de ahí que resulte evidente que la obligación que originó el presente proceso se encuentra prescrita en exceso.

Además, el señor Erasmo Castro adujo dicha excepción el 29 de octubre de 1998, es decir dentro del término señalado en el artículo 1706 del Código Judicial.

Como se ha probado la excepción de prescripción, es innecesario examinar las otras excepciones aducidas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION presentada por la firma Sucre y Asociados en representación de Erasmo Castro, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, a BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO FERNANDEZ, ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO y RAUL ESKILDSEN.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INVALIDEZ O IMPERFECCIÓN DEL PAGARÉ, DOBLE PETICIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA PANAMA S. A., ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO, RAUL ESKILDSEN Y MARCOS ANTONIO FERNANDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre y Asociados, actuando en representación de Marco Antonio Fernández, ha interpuesto excepciones de inexistencia de la operación crediticia, inexistencia del título ejecutivo, invalidez o imperfección del pagaré, doble petición de pago y prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

ANTECEDENTES

La Gerencia Ejecutiva de Operaciones del Departamento de Contabilidad Centralizada del Banco Nacional de Panamá, expidió, el 13 de mayo de 1998, una certificación para uso interno de la institución, en donde hizo constar que la sociedad Base-Ball Interamericana de Panamá, registraba para esa época, un saldo deudor de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve balboas con 76 centésimos (B/.154,6549.76).

Posteriormente, El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, área metropolitana, dictó el Auto N° 846 de 1 de octubre de 1998, en el que indicó que, conforme a las constancias documentales que reposaban en el Banco, representadas por el pagaré N° 79A1480, la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., con la codeuda de los señores Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marco Antonio Fernández, recibió la suma de cuarenta mil cuatrocientos setenta y cinco balboas (B/.40,475.00), con intereses al 12 por ciento anual más 1/2 por ciento de Supervisión Técnica, con un plazo de noventa (90) días.

También señaló en ese auto, que la parte deudora había incumplido con el pago de la obligación en los términos acordados, adeudando al Banco la suma de cuarenta mil doscientos seis balboas con 62/100 (B/.40,206.62) a capital, más la suma de ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres balboas con 14/100 (B/.114,443.14) de intereses vencidos calculados al 1 de mayo de 1998, razón por la cual se hacía necesario proceder a la recuperación de los saldos adeudados mediante los trámites del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Ante esto y con el objeto de evitar que el proceso resultase ilusorio, el Juez Ejecutor de dicha entidad bancaria decretó en ese mismo auto formal secuestro a favor del Banco Nacional de Panamá y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., Marco Antonio Fernández, Erasmo Castro, Miguel Abbo y Raúl Eskildsen (fs. 11-13 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Además, dictó el Auto N° 847 de 1 de octubre de 1998, mediante el cual declaró la obligación de plazo vencido y en consecuencia libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del Banco Nacional de Panamá, casa matriz y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, cuyo representante legal es el señor Marco Antonio Fernández, hasta la concurrencia de la suma de cuarenta mil doscientos seis balboas con 62/100 (B/.40,2006.62) a capital, más la suma de ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres balboas con 14/100 (B/.114,443.14) de intereses vencidos calculados al 1 de mayo de 1998 y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de quinientos balboas con 00/100 (B/.500.00), lo que asciende a la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve balboas con 76/100 (B/.155,149.76), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, y contra los señores Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marco Antonio Fernández, cada uno hasta la concurrencia de la suma de cinco mil setecientos cuarenta y tres balboas con 80/100 (B/.5.743.80) a capital, más dieciséis mil trescientos cuarenta y nueve balboas con 02/100 (B/.16,349.02), más los gastos de cobranza, lo cual asciende a la suma de veintidós mil noventa y dos balboas con 82/100 (B/.22,092.82), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación (fs. 22-24 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

El señor Marco Antonio Fernández se notificó de este auto el 22 de octubre de 1998 (f. 48 del expediente por cobro coactivo) y adujo las siguientes excepciones el día 29 de octubre de ese año.

EXCEPCIONES

"II EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA EN QUE SE SUSTENTA EL RECLAMO DEL BANCO:

1. La operación crediticia en que se sustenta el reclamo del Banco Nacional de Panamá no llegó a perfeccionarse.

2. El Banco Nacional de Panamá no ha aportado documentos que sustenten la supuesta operación crediticia en que se sustenta su reclamo.

3. El pagaré que sirve de título ejecutivo accede a una obligación inexistente.

III INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO:

1. El documento que sirve de título ejecutivo para librar el mandato de pago es una fotocopia.

2. No obra en el expediente el original del susodicho título ejecutivo.

IV INVALIDEZ O IMPERFECCION DEL PAGARE:

1. El pagaré que sirve de título ejecutivo para librar el mandamiento de pago carece de las firmas de Roberto Halphen, Virgilio Capriles y Bernardo Benes.

2. El pagaré está incompleto y carece de validez.

V DOBLE PETICION DE PAGO:

1. Mediante auto 847 se libra mandato de pago contra Baseball Interamericana de Panamá, S. A. por ciento cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve balboas con 76/100 (B/.155,149.76); y además, contra Erasmo Castro, Miguel Abbo, Raúl Eskildsen y Marcos Antonio Fernández, por veintidós mil noventa y dos balboas con 82/100 (B/.22,092.82) cada uno, lo cual suma ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 28/100 (B/.88,371.28).

2. Hasta la referida concurrencia de ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 28/100 (B/.88,371.28) hay una doble petición de pago.

VI PRESCRIPCION:

1. El documento que sirve de título ejecutivo al libramiento de pago por parte del Banco Nacional de Panamá está fechado 4 de junio de 1979, con vencimiento en un plazo de 90 días contados a partir de su fecha.

2. El Banco Nacional de Panamá no realizó gestión alguna de cobro, hasta enero de 1997.

3. A la fecha de la gestión de cobro, habían transcurrido casi 18 años desde el otorgamiento del pagaré.

4. La supuesta obligación está prescrita.

5. El propio Banco Nacional de Panamá transfirió a su "reserva para préstamos incobrables" la referida obligación.

6. Desde la tardía gestión de cobro, en enero de 1997, a la ejecución en octubre de 1998, han transcurrido veinte (20) meses." (fs. 2-4 del cuadernillo de excepciones)".

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 49 de 18 de febrero de 1999 (fs. 9 a 18 del cuadernillo de excepciones), expresó su opinión con respecto a las excepciones aducidas por el señor Marco Fernández.

En este sentido, al referirse a la excepción de Inexistencia de la Operación Crediticia en que se sustenta el Reclamo del Banco, manifestó no compartir el criterio expuesto por el excepcionante, pues, a su parecer, "se encuentra comprobada la existencia de la transacción comercial bancaria que dio origen a la obligación cuyo cumplimiento se exige hoy a la sociedad BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., y otros: el otorgamiento del pagaré N° 79A1480 de 4 de junio de 1979" y por ello considera no probada esta excepción.

Con respecto a la excepción de Inexistencia del Título Ejecutivo, indicó que las aseveraciones hechas por el incidentista carecen de sustento, pues, si bien es cierto el título de crédito ejecutivo que sirve de fundamento en el actual proceso por cobro coactivo, es una fotocopia, ésta se encuentra debidamente autenticada y por ello cumple con los requisitos señalados en el Código Judicial.

Además, manifestó que el título ejecutivo no lo constituye el pagaré, sino el estado de cuenta expedido por la Gerencia Ejecutiva de Operaciones, del Departamento de Contabilidad Centralizada, del Banco Nacional de Panamá.

Tampoco considera la señora Procuradora de la administración que se haya probado la excepción de Invalidez o Imperfección del Pagaré, por cuanto que considera que aun cuando la firma es un requisito esencial de todo documento negociable, y por tanto, ninguna persona puede ser tenida como responsable en un título de crédito si su firma no aparece en éste, en el caso que nos ocupa, las firmas que hacen falta en el pagaré N° 79A1480, no afectan la validez del mismo.

En cuanto a la excepción de Doble Petición de Pago, señaló que fue la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., la que, según el pagaré N° 79A1480 de 4 de junio de 1979, recibió el valor que se promete pagar a través de dicho documento negociable.

Considera que no existe la supuesta codeuda, ya que la intención de las personas naturales que firmaron el pagaré era la de constituirse en fiadores mancomunados hasta una séptima parte de la obligación principal, y que precisamente por ello fue que ante el icumplimiento de la prenombrada sociedad el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento en su contra hasta la concurrencia de la suma de B/.155,149.76 y contra los señores Marco Antonio Fernández, Erasmo Castro, Raúl Eskildsen y Miguel Abbo, hasta la concurrencia de la suma de B/.22,092.82, cuota parte por la que cada uno se obligó ante el no pago del deudor principal.

Finalmente señaló estar de acuerdo con lo expresado por el excepcionante, en el sentido de que la obligación prescribió, pues en efecto, el documento negociable fundamento del proceso por cobro coactivo está fechado 4 de julio de 1979, con vencimiento en un plazo de noventa días a la fecha del mismo, y de acuerdo con los artículos 908, 909 y 917 del Código de Comercio el plazo de prescripción de las acciones que resulten del pagaré en contra de sus suscriptores es de tres años a partir de la fecha de vencimiento.

DECISION DE LA SALA

Luego de haber examinado las excepciones aducidas por el señor Marco Fernández, esta Corporación de Justicia ha concluído que la obligación cuyo cumplimiento se persigue a través del presente proceso ejecutivo por cobro coactivo, en efecto, está prescrita.

De hecho, el pagaré N° 79A1480, librado el 4 de junio de 1979, documento que sirve de fundamento al presente proceso, tenía un plazo de vencimiento de 90

días contados a partir de esa fecha.

Al respecto, vale destacar, que el artículo 229 del Código Comercio, en su numeral 1, establece que "Si el plazo se fijase por días, la deuda vencerá el último día del plazo, no contándose el del perfeccionamiento del contrato", por ende, el documento en cuestión venció el 2 de septiembre de 1979.

Por otra parte, en lo que respecta a la prescripción de la acción, esta Superioridad considera que en el caso que nos ocupa se debe aplicar el término de prescripción que señala el artículo 908 del Código de Comercio.

> "Artículo 908. Todas las acciones que resultan de una letra de cambio contra el aceptante prescriben en tres años, a partir de la fecha del vencimiento."

Esto es así porque el artículo 917 del mismo Código establece que "Son aplicables al billete a la orden, mientras no sean incompatibles con la naturaleza de esta obligación, las disposiciones relativas a la letra de cambio", debiéndose entender que tanto el billete como el pagaré constituyen figuras jurídicas idénticas, tal como lo ha señalado la Sala Civil de esta Corporación de Justicia, en fallo de 2 de marzo de 1998 (Ver Registro Judicial de marzo de 1998, pp. 165-168).

De hecho, en dicho fallo la Sala Civil reconoció que:

> "... lo más lejos que se puede llegar en cuanto a la diferencia entre el llamado billete y el pagaré es una meramente de significación semántica. Cuando uno se detiene y analiza cuál es la estructura de estos dos títulos, hay que aceptar y concluir que es la misma. En los dos casos se trata siempre de títulos abstractos, literales, formales, completos y necesarios. Su condición de papel o efecto de comercio es la misma y la función que desempeñan en el ámbito de los negocios los convierte en una promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar, por si mismo o a la orden, una suma determinada de dinero. Ambos, en su calidad de títulos de crédito, serán susceptibles de negociación a mérito de la cláusula a la orden que pueden llegar a ostentar. En suma, y al margen de lo sostenido en fallos anteriores, preciso es concluir que, por tratarse del mismo título, lo que establece el Código de Comercio en relación con el billete debe aplicársele al pagaré, sin excluir lo relativo al término en que prescriben las acciones que se ejerzan contra el aceptante, es decir, al término de (3) años de prescripción a que se refiere el artículo 908 del Código de Comercio respecto a la letra de cambio, aplicable también al billete o al pagaré por disponerlo así el artículo 917 de ese cuerpo legal, cuando expresamente remite a la norma que en primer lugar se ha dejado mencionada."

De todo lo antes expuesto podemos concluir que este pagaré prescribió el 2 de septiembre de 1982, es decir tres años después de su vencimiento.

Por lo demás, no encuentra esta Sala en el expediente del proceso por cobro coactivo evidencia de que el Banco Nacional hubiese hecho alguna gestión de cobro para recuperar dichos créditos en el plazo comprendido desde el 3 de septiembre de 1979 hasta el 1 de octubre de 1998, fecha en la que el Juez Ejecutor del Banco Nacional dictó el Auto N° 846 mediante el cual decretó formal secuestro contra Erasmo Castro, Marco Antonio Fernández, Raúl Eskildsen, Miguel Abbo y la Sociedad Base-ball Interamericana de Panamá.

Igualmente en esa misma fecha dictó el Auto N° 847 a través del cual declaró la obligación de plazo vencido y libró mandamiento de pago contra ellos.

De este último auto se notificó el ejecutado el 22 de octubre de 1998.

Como se observa, desde la fecha en la que venció el pagaré en cuestión hasta la fecha de la notificación transcurrieron diez y nueve años, de ahí que resulte evidente que la obligación que originó el presente proceso se encuentra prescrita en exceso.

Además, el señor Marco Fernández adujo dicha excepción el 29 de octubre de 1998, es decir dentro del término señalado en el artículo 1706 del Código Judicial.

Como se ha probado la excepción de prescripción, es innecesario examinar las otras excepciones aducidas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION presentada por la firma Sucre y Asociados en representación de Marco Fenández, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, a BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO FERNANDEZ, ERASMO CASTRO, MIGUEL ABBO y RAUL ESKILDSEN.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE LA OPERACIÓN CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO, INEXISTENCIA DE FIANZA SOLIDARIA Y PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE BANCO NACIONAL DE PANAMA, LE SIGUE A BASEBAL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO ANTONIO FERNANDEZ Y BERNARDO BRENES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre y Asociados, actuando en representación de MARCO ANTONIO FERNANDEZ, ha interpuesto excepciones de inexistencia de la operación crediticia, inexistencia del título ejecutivo, inexistencia de fianza solidaria y prescripción, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

ANTECEDENTES

La Gerencia Ejecutiva de Operaciones del Departamento de Contabilidad Centralizada del Banco Nacional de Panamá, expidió, el 13 de mayo de 1998, una certificación para uso interno de la institución, en donde hizo constar que la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, registraba para esa época, un saldo deudor de noventa y siete mil cientonueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.97,109.32).

Posteriormente, El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, área metropolitana, dictó el Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998, en el que indicó que, conforme a las constancias documentales que reposaban en el Banco, representadas por el pagaré N° 7900216, la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., con la codeuda de los señores Bernardo Benes y Charles Pascal, recibió la suma de veinticinco mil balboas (B/.25.000.00), con intereses al 12 por ciento anual, con un plazo de sesenta (60) días.

También señaló en ese auto, que la parte deudora había incumplido con el pago de la obligación en los términos acordados, adeudando al Banco la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) a capital, más la suma de setenta y dos mil ciento nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.72,109.32) por intereses vencidos al día 1 de mayo de 1998, razón por la cual se hacía necesario proceder a la recuperación de los saldos adeudados mediante los trámites del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Ante esto y con el objeto de evitar que el proceso resultase ilusorio, el Juez Ejecutor de dicha entidad bancaria decretó en ese mismo auto formal secuestro a favor del Banco Nacional de Panamá y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., Marco Antonio Fernández, Bernardo Benes y Charles Pascal (fs. 8-9 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Además, dictó el Auto N° 850 de 1 de octubre de 1998, mediante el cual declaró la obligación de plazo vencido y en consecuencia libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del Banco Nacional de Panamá, casa matriz, y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, cuyo representante legal es el señor Marco Antonio Fernández, con la codeuda de los señores Bernardo Benes y Charles Pascal, hasta la concurrencia de la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) a capital, más la suma de setenta y dos mil ciento nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.72,109.32) por intereses vencidos al día 1 de mayo de 1998 y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de quinientos balboas con 00/100 por lo que la obligación contenida bajo el documento 00216 asciende a la suma de noventa y siete mil seiscientos nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.97,609.32), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se siguieran causando hasta el completo pago de la obligación (fs. 13-14 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

El señor Marco Fernández se notificó de este auto el 22 de octubre de 1998 (f. 19 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo) y adujo las siguientes excepciones el día 29 de octubre de ese año.

EXCEPCIONES

"II EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA EN QUE SE SUSTENTA EL RECLAMO DEL BANCO:

1. La operación crediticia en que se sustenta el reclamo del Banco Nacional de Panamá no llegó a perfeccionarse.

2. El Banco Nacional de Panamá no ha aportado documentos que sustenten la supuesta operación crediticia en que se sustenta su reclamo.

3. El pagaré que sirve de título ejecutivo accede a una obligación inexistente.

III INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO:

1. El documeanto que sirve de título ejecutivo para librar el mandato de pago es una fotocopia.

2. No obra en el expediente el original del susodicho título ejecutivo.

IV INEXISTENCIA DE FIANZA SOLIDARIA:

1. En el documento que sirve de título ejecutivo aparece la firma de Marco Antonio Fernández como representante legal de Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., y no como codeudor de la supuesta obligación.

2. Aunque el auto 850, de libramiento de pago, así lo reconoce y acepta; en la diligencia de notificación del auto ejecutivo se notificó a Marco Antonio Fernández como "fiador solidario"; lo cual no es cierto.

V PRESCRIPCION:

1. El documento que sirve de título ejecutivo al libramiento de pago por parte del Banco Nacional de Panamá está fechado 7 de marzo de 1979, con vencimiento en un plazo de 60 días contados a partir de su fecha.

2. El Banco Nacional de Panamá no realizó gestión alguna de cobro, hasta enero de 1997.

3. A la fecha de la gestión de cobro, habían transcurrido casi 18 años desde el otorgamiento del pagaré.

4. La supuesta obligación está prescrita.

5. El propio Banco Nacional de Panamá transfirió a su "reserva para préstamos incobrables" la referida obligación.

6. Desde la tardía gestión de cobro, en enero de 1997, a la ejecución en octubre de 1998, han transcurrido veinte (20) meses." (fs. 3-4)".

RESPUETA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA

El Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, por medio de apoderado judicial, en referencia a la excepciones presentadas señaló que:

"II. INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA EN QUE SE SUSTENTA EL RECLAMO DEL BANCO.

No son ciertas y por tanto se niegan las aseveraciones de los excepcionantes por cuanto que la obligación surge del propio pagaré autenticado que sirve de recaudo ejecutivo. Decir lo contrario equivale a negar la teoría de la autonomía de la obligación de los documentos negociables aceptado en nuestro Derecho.

Precisamente la validez de un instrumento negociable está en el hecho de no depender de otra obligación contenida en documento aparte lo que le quitaría la condición sustancial de negociable.

La obligación en el presente caso surge del pagaré suscrito por las partes obligadas.

III. INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO.

Las aseveraciones de los excepcionantes no se atienen a la verdad y por tanto se niegan.

El documento que sirve de título ejecutivo para librar mandamiento de pago, está debidamente autenticado por la oficina de custodia de documentos del Banco Nacional de Panamá. La copia autenticada fue expedida conforme a lo preceptuado en el artículo 829 del Código Judicial.

Hemos procedido a solicitar el original del pagaré en cuestión, el que adjuntamos para que los Honorables Magistrados puedan constatar la existencia del mismo y su validez.

IV. INEXISTENCIA DE FIANZA SOLIDARIA.

Los hechos enunciados no nos constan y por tanto los negamos.

V. PRESCRIPCION.

Las alegaciones de la parte actora no nos constan y por tanto las negamos." (fs. 14-15)

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 45 de 10 de febrero de 1999 (fs. 16 a 21), expresó lo siguiente:

"Una de las excepciones alegadas, por el incidentista es la "INEXISTENCIA DE FIANZA SOLIDARIA".

No obstante el abogado del incidentista no lo plantea correctamente, se entiende que la excepción que intenta es la de ILEGITIMIDAD SUSTANTIVA, es decir, trata de establecer que su representado no es parte personalmente obligada en la relación jurídica crediticia.

En ese sentido, indica que en el documento negociable que supuestamente sirve de título ejecutivo, aparece la firma de MARCO ANTONIO FERNANDEZ como representante legal de BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., y no como codeudor de la obligación.

Este Despacho comparte la opinión del incidentista, pues, a nuestro parecer, se encuentra probado que el señor MARCO FERNANDEZ firmó el pagaré 700216 en su condición de representante legal de la empresa BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., y no en su propio nombre.

Lo anterior se constata en la copia autenticada del documento negociable de marras, en la que se señala como "deudor" a la compañía BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., verificándose al pie de dicha anotación el nombre del incidentista precedido por la abreviatura "Rep. Legal", línea sobre la cual estampa su rúbrica.

Además, la propia entidad ejecutante reconoce que el señor Fernández, al firmar el documento negociable, lo hizo en representación de la persona jurídica mencionada, pues al librar el Auto de Mandamiento de Pago, indica que lo hace "... en contra de la sociedad BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., Representada Legalmente por el señor MARCO ANTONIO FERNANDEZ ..."
...
Toda vez que el excepcionante actuó en su calidad de Representante Legal de la sociedad BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., esta Procuraduría es del concepto que se encuentra probada la excepción de ILEGITIMIDAD SUSTANTIVA propuesta.

Por otra parte, y en cuanto a las excepciones de INEXISTENCIA DE LA OPERACION CREDITICIA, INEXISTENCIA DEL TITULO EJECUTIVO y PRESCRIPCION propuestas, la Procuraduría de la Administración considera, que al encontrarse probada la excepción de ILEGITIMIDAD SUSTANTIVA el incidentista carece de la LEGITIMIDAD PROCESAL necesaria para proponer estas excepciones ..."

DECISION DE LA SALA

Luego de haber examinado las excepciones aducidas por el señor Marco Fernández, esta Corporación de Justicia ha concluído que la obligación cuyo cumplimiento se persigue a través del presente proceso ejecutivo por cobro

coactivo, en efecto, está prescrita.

De hecho, el pagaré N° 790216, librado el 7 de marzo de 1979, documento que sirve de fundamento al presente proceso, tenía un plazo de vencimiento de 60 días contados a partir de esa fecha.

Al respecto, vale destacar, que el artículo 229 del Código Comercio, en su numeral 1, establece que "Si el plazo se fijase por días, la deuda vencerá el último día del plazo, no contándose el del perfeccionamiento del contrato", por ende, el documento en cuestión venció el 5 de mayo de 1979.

Por otra parte, en lo que respecta a la prescripción de la acción, esta Superioridad considera que en el caso que nos ocupa se debe aplicar el término de prescripción que señala el artículo 908 del Código de Comercio.

> "Artículo 908. Todas las acciones que resultan de una letra de cambio contra el aceptante prescriben en tres años, a partir de la fecha del vencimiento."

Esto es así porque el artículo 917 del mismo Código establece que "Son aplicables al billete a la orden, mientras no sean incompatibles con la naturaleza de esta obligación, las disposiciones relativas a la letra de cambio", debiéndose entender que tanto el billete como el pagaré constituyen figuras jurídicas idénticas, tal como lo ha señalado la Sala Civil de esta Corporación de Justicia, en fallo de 2 de marzo de 1998 (Ver Registro Judicial de marzo de 1998, pp. 165-168).

De hecho, en dicho fallo la Sala Civil reconoció que:

> "... lo más lejos que se puede llegar en cuanto a la diferencia entre el llamado billete y el pagaré es una meramente de significación semántica. Cuando uno se detiene y analiza cuál es la estructura de estos dos títulos, hay que aceptar y concluir que es la misma. En los dos casos se trata siempre de títulos abstractos, literales, formales, completos y necesarios. Su condición de papel o efecto de comercio es la misma y la función que desempeñan en el ámbito de los negocios los convierte en una promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar, por si mismo o a la orden, una suma determinada de dinero. Ambos, en su calidad de títulos de crédito, serán susceptibles de negociación a mérito de la cláusula a la orden que pueden llegar a ostentar. En suma, y al margen de lo sostenido en fallos anteriores, preciso es concluir que, por tratarse del mismo título, lo que establece el Código de Comercio en relación con el billete debe aplicársele al pagaré, sin excluir lo relativo al término en que prescriben las acciones que se ejerzan contra el aceptante, es decir, al término de (3) años de prescripción a que se refiere el artículo 908 del Código de Comercio respecto a la letra de cambio, aplicable también al billete o al pagaré por disponerlo así el artículo 917 de ese cuerpo legal, cuando expresamente remite a la norma que en primer lugar se ha dejado mencionada."

De todo lo antes expuesto podemos concluir que este pagaré prescribió el 5 de mayo de 1982, es decir tres años después de su vencimiento.

Por lo demás, no encuentra esta Sala en el expediente del proceso por cobro coactivo evidencia de que el Banco Nacional hubiese hecho alguna gestión de cobro para recuperar dichos créditos en el plazo comprendido desde el 6 de mayo de 1979 hasta el 1 de octubre de 1998, fecha en la que el Juez Ejecutor del Banco Nacional dictó el Auto N° 849 mediante el cual decretó formal secuestro contra Marco Fernández, Bernardo Benes, Charles Pascal y la Sociedad Base-ball Interamericana de Panamá.

Igualmente en esa misma fecha dictó el Auto N° 850 a través del cual declaró la obligación de plazo vencido y libró mandamiento de pago en contra de ellos.

De este último auto se notificó el ejecutado el 22 de octubre de 1998.

Como se observa, desde la fecha en la que venció el pagaré en cuestión hasta la fecha de la notificación transcurrieron diez y nueve años, de ahí que resulte evidente que la obligación que originó el presente proceso se encuentra prescrita.

Además, el señor Marco Fernández adujo dicha excepción el 29 de octubre de 1998, es decir dentro del término señalado en el artículo 1706 del Código Judicial.

Como se ha probado la excepción de prescripción, es innecesario examinar las otras excepciones aducidas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION presentada por la firma Sucre y Asociados en representación de Marco Fenández, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMA, CASA MATRIZ, a BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO FERNANDEZ, BERANARDO BENES y CHARLES PASCAL.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO INTERPUESTO POR LA FIRMA SUCRE Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS ANTONIO FERNANDEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMA, LE SIGUE A BASEBALL INTERAMERICANA S. A. Y MARCOS FERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre y Asociados, actuando en representación de MARCO ANTONIO FERNANDEZ, ha interpuesto incidente de levantamiento de secuestro, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá.

ANTECEDENTES

La Gerencia Ejecutiva de Operaciones del Departamento de Contabilidad Centralizada del Banco Nacional de Panamá, expidió, el 13 de mayo de 1998, una certificación para uso interno de la institución, en donde hizo constar que la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, registraba para esa época, un saldo deudor de noventa y siete mil cientonueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.97,109.32).

Posteriormente, El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, área metropolitana, dictó el Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998, en el que indicó que, conforme a las constancias documentales que reposaban en el Banco, representadas por el pagaré N° 7900216, la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., con la codeuda de los señores Bernardo Benes y Charles Pascal,

recibió la suma de veinticinco mil balboas (B/.25.000.00), con intereses al 12 por ciento anual, con un plazo de sesenta (60) días.

También señaló en ese auto, que la parte deudora había incumplido con el pago de la obligación en los términos acordados, adeudando al Banco la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) a capital, más la suma de setenta y dos mil ciento nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.72,109.32) por intereses vencidos al día 1 de mayo de 1998, razón por la cual se hacía necesario proceder a la recuperación de los saldos adeudados mediante los trámites del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Ante esto y con el objeto de evitar que el proceso resultase ilusorio, el Juez Ejecutor de dicha entidad bancaria decretó, en ese mismo auto, formal secuestro a favor del Banco Nacional de Panamá y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., Marco Antonio Fernández, Bernardo Benes y Charles Pascal (fs. 8-9 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

Además, dictó el Auto N° 850 de 1 de octubre de 1998, mediante el cual declaró la obligación de plazo vencido y en consecuencia libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del Banco Nacional de Panamá, casa matriz y contra la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, cuyo representante legal es el señor Marco Antonio Fernández, con la codeuda de los señores Bernardo Benes y Charles Pascal, hasta la concurrencia de la suma de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) a capital, más la suma de setenta y dos mil ciento nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.72,109.32) por intereses vencidos al día 1 de mayo de 1998 y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de quinientos balboas con 00/100 por lo que la obligación contenida bajo el documento 7900216 asciende a la suma de noventa y siete mil seiscientos nueve balboas con treinta y dos centésimos (B/.97,609.32), en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se siguieran causando hasta el completo pago de la obligación (fs. 13-14 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo).

El señor Marco Fernández se notificó de este auto el 22 de octubre de 1998 (f. 19 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo) e interpuso el siguiente incidente el día 29 de octubre de ese año.

ICIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO

En el incidente de levantamiento de secuestro, el incidentista señaló que éste es improcedente, y expresó que:

> "1. Mediante Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, área metropolitana-casa matriz, decreta formal secuestro a favor del Banco Nacional de Panamá y en contra de la sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., Marco Antonio Fernández, cédula N° N-14-870, Bernardo Benes, pasaporte N° E19-11190 y Charles Pascal, pasaporte N° E-1730131; hasta la suma de noventa y siete mil seiscientos nueve balboas con 32/100 (B/.97.609.32) en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza.
>
> 2. En el documento que sirve de título ejecutivo aparece la firma de Marco Antonio Fernández como representante legal de Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., y no como codeudor de la supuesta obligación.
>
> 3. Mientras que el Auto 850, de libramiento de pago, así lo reconoce y acepta; en el Auto 849 se decreta secuestro contra él.
>
> 4. El secuestro personal de Marco Antonio Fernández es improcedente." (f. 2)

RESPUESTA DEL BANCO NACIONAL

Mediante nota de 23 de diciembre de 1998, el Juez Ejecutor del Banco Nacional informó, a la Secretaría de la Sala, que estaba haciendo llegar a ésta instancia el Auto N° 1122 de 23 de diciembre de 1998, por medio del cual el Banco Nacional de Panamá, corrigió el Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998, dictado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por el Banco Nacional de Panamá a Base-ball Interamericana de Panamá S. A. y otros, ingresado bajo la entrada N° 682 de 20 de noviembre de 1998 (f. 9).

En dicho auto, visible a fojas 7 y 8 del cuadernillo del incidente, esa autoridad expresó que:

> "Por error involuntario en la parte resolutiva del auto en cuestión, se mencionó a MARCO ANTONIO FERNANDEZ, como codeudor de la obligación y no como representante legal de la sociedad deudora, por lo que el suscrito Juez Ejecutor del Cobro Coactivo del Banco Nacional de Panamá procede a subsanar el error involuntario y corrige el Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998, en el sentido de aclarar que MARCO ANTONIO FERNANDEZ ... comparece en su condición de representante legal y no como codeudor de la obligación. Se hace constar que en ninguna de las notas libradas se le menciona como codeudor de la obligación." (fs. 7-8)

OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

La señora Procuradora de la Administración, en su Vista Fiscal N° 46 de 10 de febrero de 1999, indicó que su despacho comparte la opinión del incidentista, pues considera que se encuentra probado que el señor Marco Fernández firmó el pagaré 700216 en su condición de representante legal de la empresa BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., verificándose que al pie de dicha anotación aparece el nombre del incidentista precedido por la abreviatura "Rep. Legal", línea sobre la cual estampa su rúbrica.

Señala que además, la propia entidad ejecutante reconoce que el señor Fernández, al firmar el documento, lo hizo en representación de la persona jurídica mencionada.

Finalmente expresa que en vista de que el excepcionante actuó en su calidad de representante legal de la sociedad BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., considera probado el incidente propuesto, y que debe rescindirse la medida cautelar decretada en contra del incidentista (fs. 10-14).

DECISION DE LA SALA

Del análisis de las constancias que obran en el expediente del presente proceso ejecutivo por cobro coactivo, ésta Superioridad concluye que debe declararse probado el incidente de levantamiento de secuestro interpuesto en favor de Marco Fernández, por cuanto que ha encontrado prueba plena de que él suscribió el pagaré N° 7900216 en su calidad de representante legal de la Sociedad Base-ball Interamericana de Panamá, S. A., en consecuencia, actuó como mandatario de dicha empresa, y por ende, mal se le puede exigir que responda personalmente de las obligaciones que contrajo a nombre de ésta sociedad.

Al respecto el artículo 1408 del Código Civil señala que:

> "Articulo 1408. El mandatario que obre en concepto de tal no es responsable personalmente a la parte con quien contrata, sino cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de sus poderes."

De conformidad con lo antes expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADO el incidente de levantamiento de secuestro interpuesto por la firma Sucre y Asociados, en representación de MARCO FERNANDEZ dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a BASE-BALL INTERAMERICANA DE PANAMA, S. A., MARCO FERNANDEZ, CHARLES PASCAL y BERNARDO BENES y ORDENA el levantamiento del secuestro decretado contra MARCO FERNANDEZ mediante el Auto N° 849 de 1 de octubre de 1998.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, INTERPUESTO POR LOS LICENCIADOS LUIS DONADÍO Y EDILIA DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES ANTFI, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A INVERSIONES ANTFI, S. A. Y ANTONIO JOSE BORACE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Los licenciados Luis Donadío y Edilia de Montúfar, actuando en nombre y representación de INVERSIONES ANTFI, S. A., han interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a INVERSIONES ANTFI, S. A. y ANTONIO JOSE BORACE.

La actora le solicita a la Sala que declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la resolución de 28 de febrero de 1989, expedida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, que libra mandamiento de pago en contra de la sociedad Inversiones Antfi, S. A. y Antonio Borace por la suma de ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cinco balboas con 27 centésimos (B/.155,405.27). Indica que ello es así, pues dicha resolución le fue notificada al señor Antonio Borace, quien ya no era el representante legal de la sociedad, y que, además, los bienes secuestrados no le pertenecían, tal como lo señala el auto de 28 de febrero de 1989. Finalmente agrega que a pesar de los vicios indicados anteriormente, el Banco de Desarrollo Agropecuario procedió a señalar fecha de remate de los bienes, el cual se celebrará el 24 de febrero de 1999, pero como la resolución que libra mandamiento de pago es nula, el aviso y la notificación del remate también son nulas.

La Sala debe examinar si procede la interposición del incidente de nulidad.

Observa la Sala que de fojas 7 a 20 del expediente que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a Inversiones Antfi, S. A., aparece la Escritura Pública N° 10828 de 16 de julio de 1986, en cuya cláusula décima cuarta la parte deudora renuncia al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo. En este sentido el artículo 1768 del Código Judicial prevé claramente esta situación y señala:

> "Artículo 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede

efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.

Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681." (El subrayado es nuestro)

De lo anterior, se infiere que en caso de renuncia al domicilio y los trámites del proceso ejecutivo, como sucede en este caso, no se podrán proponer incidentes ni otras excepciones que no sean las de pago y prescripción.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el incidente de nulidad que se ventila en esta oportunidad, es manifiestamente improcedente y como tal, según lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, debe ser rechazado de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad de todo lo actuado interpuesto por los licenciados Luis Donadío y Edilia de Montúfar, actuando en nombre y representación de INVERSIONES ANTFI, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a INVERSIONES ANTFI, S. A. y ANTONIO JOSE BORACE.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANGEL PADILLA BELIZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE INOCENCIO CONTRERAS, DENTRO DEL JUICIO EJRCUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL LE SIGUE A INVERSIONES NATO, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Angel Padilla Beliz, en nombre y representación del señor Nicolás Inocencio Contreras, ha presentado desistimiento del recurso de apelación contra la Resolución fechada el día 7 de junio de 1999, expedida por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio que por cobro coactivo prosigue el Juzgado Ejecutor No. 1 de la Caja de Seguro Social, contra la empresa Inversiones Nato, S. A.

La Sala procede a resolver la viabilidad del desistimiento y del recurso de alzada presentados.

Según el artículo 1073 del Código Judicial, toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o "interpuesto un recurso", puede desistir expresa o tácitamente.

El presente desistimiento del recurso de alzada se ha hecho de manera

expresa, con el escrito que corre a fojas 19 del cuadernillo de apelación, y ha sido presentado personalmente por el apoderado judicial del ex-administrador depositario judicial; sin embargo, no debe ser admitido porque él no está facultado expresamente para desistir, tal como lo exige el artículo 1073 en relación con el artículo 631 del Código Judicial.

Por otra parte, observa este Tribunal que la apelación incoada por el apoderado judicial del señor Nicolás Contreras ha sido enfilada contra una Sentencia emitida por esta Sala a raíz del incidente de remoción de administrador depositario de la empresa Inversiones Nato, S. A., cargo que ocupaba el ahora apelante, y ejerció de forma negligente, tal como se deja consignado en la Sentencia recurrida de 7 de junio de 1999, que entre otras cosas ordenó la remoción del señor Nicolás Contreras y autorizó a la autoridad competente el nombramiento de un nuevo depositario administrador para la referida empresa ejecutada.

Según el artículo 1804 del Código Judicial, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Tercera de la Jurisdicción Contenciso Administrativa, "conocerá de las apelaciones, incidentes, excepciones, tercerías y nulidades que fueren presentadas en las ejecuciones por cobro coactivo correspondiéndole sustanciar y resolver los recursos, incidentes, excepciones o tercerías"; esta competencia se ejerce como Tribunal de única instancia y le corresponde al Pleno de la Sala decidir sobre tales acciones, defensas y otras gestiones procesales incoadas en este tipo de juicios ejecutivos.

Al tenor del artículo 203 in fine de la Constitución Política de la República, "Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo -que como es evidente incluye la jurisdicción de lo contencioso administrativo- son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial". Disposición idéntica es reiterada en el artículo 100 del Código Judicial.

Por tanto, el recurso de apelación promovido no es procedente, ya que fue dirigido contra una Sentencia de esta Sala.

En mérito de lo expuesto, la Sala debe abocarse a no admitir el desistimiento y rechazar por improcedente el recurso de apelación promovido contra su Sentencia de 7 de junio de 1999, consultable a fojas 488 a 495 de los antecedentes.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el desistimiento presentado y RECHAZA POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación promovido por el señor Inocencio Contreras, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 7 de junio de 1999 emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio que por vía del cobro coactivo adelanta la Caja de Seguro Social contra la empresa Inversiones Nato, S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁ, EN REPRESENTACIÓN DE NICOLAS ALFREDO ARMELIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: NICOLAS ALFREDO ARMELINO-VS-INVERSIONES G. E., S. A. (INGESA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán, actuando en nombre y representación de NICOLAS ALFREDO ARMELIO, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 22 de junio de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: NICOLAS ALFREDO ARMELINO-vs-INVERSIONES G. E., S. A. (INGESA).

Mediante escrito fechado el 16 de diciembre de 1999, visible a foja 13 del expediente, la parte actora presentó desistimiento del recurso de casación interpuesto contra la mencionada resolución, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, dado que los artículos 941 y 942 del Código de Trabajo señalan que se puede desistir en cualquier estado del proceso con anterioridad a la sentencia siempre que medie facultad expresa para ello y se cuente con la conformidad de la otra parte, la cual se aprecia a foja 15 del expediente que contiene el recurso de casación.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del recurso de casación interpuesto por el licenciado Carlos Herrera Morán, actuando en nombre y representación de NICOLAS ALFREDO ARMELIO, contra la sentencia de 22 de junio de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: NICOLAS ALFREDO ARMELINO-vs-INVERSIONES G. E., S. A. (INGESA) y ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. MARTÍN RUÍZ EN REPRESENTACIÓN DE SULLY SAYAVEDRA DE MORENO, CONTRA LA SENTENCIA DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SULLY SAYAVEDRA DE MORENO -VS-COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Martín Ruíz en nombre y representación de SULLY SAYAVEDRA DE MORENO ha propuesto recurso de casación laboral, contra la Sentencia de 9 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso laboral: SULLY SAYAVEDRA DE MORENO -vs-COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA, S. A.

Del recurso se le corrió traslado a la empresa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y la misma haciendo uso de su derecho,

se opuso a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso común en reclamo de prestaciones y derechos laborales que hiciera la señora DE MORENO, derivadas de la renuncia justificada y del fuero de maternidad. La cuantía que pretendía la parte recurrente era de B/.31,843.25, más las costas, gastos e intereses.

El Tribunal de Primera Instancia que conoció de la causa, fue el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, el cual mediante Sentencia N° 67 de 30 de diciembre de 1998, decidió condenar a la empresa COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA, S. A. (CUPFSA) al pagarle a la señora SULLY SAYAVEDRA DE MORENO, la suma de B/.2,265.60 en concepto de indemnización por haber prestado sus servicios en estado de gravidez dentro del período de descanso anterior al parto, y se le absolvió del resto de las reclamaciones tales como la indemnización por renuncia con causa justificada, diferencia de la prima de antigüedad y la del fuero de maternidad por no asistirle el derecho a ellas.

Disconforme el trabajador con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 19 de diciembre de 1999, por medio de la cual se confirma la decisión del Juzgado Cuarto de Trabajo.

Las razones fundamentales en que se apoyó el Tribunal Superior para coincidir con el criterio expuesto por el Juzgador a-quo son:

1.- Que la carta de renuncia, a pesar de cumplir con los requisitos requeridos por el artículo 222 del Código de Trabajo (constar por escrito, y ser presentada ante el Ministerio de Trabajo), no establece las razones por las cuales la trabajadora da por terminada la relación de trabajo;

2.- Que las normas protectoras del fuero de maternidad, tanto constitucionales, como legales, establecen que la trabajadora tiene derecho a su estabilidad en el empleo un año después del reintegro por dicho fuero; pero que esa protección es renunciable;

3.- Que la trabajadora laboró las seis semanas antes del parto, lo que la hace acreedora del derecho a la indemnización que habla el artículo 108 del Código de Trabajo, y que en este caso asciende a la suma de B/.2,265.60; y por último,

4.- Que la supuesta diferencia en la prima de antigüedad, que es de B/.15.45 no ha sido demostrada en el proceso.

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte de la señora SULLY DE MORENO, por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los artículos 6, 222, 223, numeral 3, 812 y 813 del Código de Trabajo, supuesto éste que la condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

CUESTIONES PREVIAS

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta

Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios.

Para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del interesado debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el casacionista.

Y decimos que parcialmente, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 9 de diciembre de 1999 quebranta una serie de normas, las cuales han sido calificadas por la doctrina como disposiciones adjetivas o de procedimiento, como lo son los artículos 6 (conflicto o duda en cuanto a la aplicación o interpretación de las disposiciones legales), 812 (un testigo no es plena prueba, pero sí gran presunción) y 813 (sana crítica) del Código de Trabajo, y que no son revisables individualmente en esta vía procesal.

Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido tadas. El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928.- Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro)

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, sólo conoceremos de los cargos en relación a los artículos 222 y numeral 3 del artículo 223 del Código de Trabajo.

FONDO

RENUNCIA JUSTIFICADA

La razón fundamental por la cual la parte trabajadora ha interpuesto este recurso de casación, es que considera que la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo quebrantó lo previsto en los artículos 222 y numeral 3 del artículo 223 ibídem, en virtud de que se ha aportado al expediente suficiente material probatorio que acredita que las condiciones laborales de la señora SULLY SAYAVEDRA DE MORENO fueron desmejoradas, y que el contenido de una carta no es el que va a determinar si una renuncia es o no justificada. Además agrega el casacionista, que el artículo 223 sólo describe las condiciones que conducen a que la renuncia sea considerada imputable al empleador, pero que en ningún momento exige el mismo que el trabajador las enumere como causales de justificación de la terminación de la relación laboral.

Las excertas legales bajo estudio sen del tenor siguiente:

"Artículo 223.- Son Causas justas que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo, con derecho a percibir el importe de la indemnización por despido injustificado, las siguientes:
1.- ...
2.- ...
3.- La alteración unilateral por parte del empleador de las condiciones de trabajo;"...

"Artículo 222. El trabajador podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin causa justificada, mediante notificación escrita al empleador con quince días de anticipación, salvo que se trate de trabajador técnico, caso en el cual la notificación debe darse con dos meses de anticipación. La notificación que no fuere firmada con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o delegado, o retificada ante ella, no podrá ser invocada posteriormente por el empleador.

El trabajador responsable de no realizar la notificación previa de que trata el párrafo anterior, quedará obligado a pagarle al empleador una cantidad equivalente a una semana de salarios, suma que podrá ser deducida del importe de la prima de antigüedad de servicios, cuando tuviere derecho a ella".

Este Tribunal de Casación al adentrarse al conocimiento de los hechos acaecidos en el proceso laboral surtido ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia, verificó la actuación a través de sus decisiones y comprobó que la determinación judicial adoptada por ellos, en relación a la reclamación incoada por SULLY SAYAVEDRA DE MORENO, tiene respaldo legal y jurisprudencial.

La afirmación anterior obedece a que la prueba cardinal que demuestra que la renuncia de la señora DE MORENO no se apega a derecho, es la propia carta que data de 9 de octubre de 1997, la cual evidencia su resolución de finiquitar la relación de trabajo que mantenía hasta ese momento con COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA, S. A., y que obra a foja 9 del antecedente del proceso laboral supra citado. La misiva es del tenor siguiente:

"Señor
Eduardo Casal
COMPAÑIA UNIVERSAL DE
PERFUMERIA FRANCESA

Estimado Sr. Casal,

La presente es para comunicarle mi renuncia irrevocable a partir de esta fecha.

Agradeciendo sus atenciones y profesionalismo, me despido,

Atentamente,
(firma)
SULLY S, de MORENO"

Al repasarse el contenido de la carta de renuncia reproducida, coincide esta Sala con las apreciaciones expresadas en la Sentencia de 9 de diciembre de 1999, puesto que la trabajadora, en la misma, no estableció las razones de hecho y de derecho que la obligaron a dar por terminado el vínculo laboral de manera justificada; inclusive agradece a la empresa sus atenciones y profesionalismo, lo que hace pensar a este Tribunal de Casación, que la demandante no tenía hasta ese momento, motivos de peso que la condujeran a renunciar y utilizó el mecanismo mandatorio recogido en el artículo 222 del Código de Trabajo.

Es jurisprudencia reiterada a nivel de esta Corte, que la carta de renuncia

justificada, debe reunir los mismos requisitos que se exigen para las cartas de despido, los cuales consisten en los hechos y fundamentos de derecho que justifican la cesación de la relación de trabajo. En este caso la obligación recaia en la trabajadora, quien debió desde un principio establecer cuáles fueron las circunstancias fácticas violatorias de la ley que la condujeron a renunciar. La Sentencia de 27 de febrero de 1998 recogió el criterio externado en líneas anteriores de esta manera:

> "La carta de renuncia debe reunir los mismos requisitos que se exigen para las cartas de despido, los cuales consisten en los hechos y fundamentos de derecho que ampara los mismos. Si el Tribunal no cuenta con la renuncia por escrito, no puede valorar las motivaciones que tuvo el trabajador para tal decisión"

Agregamos, que si para las renuncia sin causa justificada se requiere que esta situación conste por escrito, cuanto mas para las justificadas, que de comprobarse este hecho se convertiría en un despido indirecto y a su vez se derivarian consecuencias económicas, tal como lo es la indeminización.

Si el Tribunal del conocimiento no cuenta con las razones por escrito que dan lugar a la renuncia, no puede valorar las motivaciones que tuvo el trabajador, en su momento, para dar por terminada la relación de trabajo. No sólo basta señalar que se renuncia y punto, sino que debe hacer las explicaciones pertinente de manera clara, para que el juzgador cuente con todos los elementos de juicio que coadyuvarían a que se profiera una decisión justa y apegada a la normativa laboral vigente, y a la doctrina probable creada para ello. Además cabe aclarar, que carece de transcendencia el argumento esgrimido por el casacionista, en el sentido de que en la demanda explicó las razones del despido indirecto y que las mismas fueron probados en el juicio, puesto que aceptar la tesis de que "renuncio y luego justifico mi actuar" significaría dejar en la indefensión a la parte empleadora de manera premeditada, dado que el mismo no podría prepararse con suficiente antelación para refutar los cargos que se le hagan en razón de esa renuncia justificada.

En estas condiciones podemos concluir, que definitivamente la carta de renuncia de la señora SULLY DE MORENO, no cumplió con los elementos formales que requiere la renuncia justificada, por lo que no prosperan los cargos endilgados a la Sentencia de 9 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial. En este mismo orden de ideas, es importante señalar que si no se ha probado que la renuncia es justificada, mucho menos la trabajadora tiene derecho a la indemnización que habla el artículo 225 del Código de Trabajo.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Casación Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASAN la Sentencia de 9 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso laboral: SULLY SAYAVEDRA DE MORENO -vs- COMPAÑIA UNIVERSAL DE PERFUMERIA FRANCESA, S. A.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE BOLIVAR MORA SAMUDIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: BOLIVAR MORA SAMUDIO -VS- BAMVOL,

S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Edrulfo Espinales Miranda, en nombre y representación de BOLIVAR MORA SAMUDIO ha propuesto recurso de casación contra la Sentencia de 21 de diciembre 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dictada dentro del proceso laboral: BOLIVAR MORA SAMUDIO -vs- BAMVOL, S. A.

Esta Sala de Casación procede a revisar el referido recurso, para verificar si el mismo cumple con los elementos formales para que pueda ser admitido de acuerdo a lo establecido en los artículos 925, 926 y 928 del Código de Trabajo.

Se percata esta Corporación Judicial que el recurso de casación incoado no puede ser admitido, en virtud de que las normas que se estiman infringidas son de aquellas de trámites procesales. Efectivamente, el casacionista considera que la Resolución de 21 de diciembre de 1999, viola los artículos 732 y 735 del Código de Trabajo, los cuales hacen alusión a la sana crítica y a los medios probatorios que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de decidir una controversia laboral.

De acuerdo a lo anterior, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas que tratan sobre pruebas, valoración de pruebas, y presunciones pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados ante esta instancia laboral por medio del recurso extraordinario de casación. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas por el Juzgador de Segunda Instancia. Esto significa que el Tribunal de Casación conoce sólo de errores in judicando y no de errores in procedendo, salvo que se desprenda de las actuaciones, error de hecho en el proceso de valoración de pruebas que llevaron a cabo los Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo. En Sentencias de 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, y 27 de febrero de 1998, se recogió el criterio expuesto en párrafos precedentes esta manera:

> "Esta Superioridad desea destacar el hecho de que el casacionista ha señalado como violada una norma adjetiva de procedimiento, como lo es el artículo 732 (valoración de pruebas), la cual no es revisable en un recurso de casación. La Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas".
>
> "En relación al artículo 732 del Código de Trabajo, el cual trata de la apreciación de la prueba según la sana crítica, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas.
>
> El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de

errores in procedendo"...

> "En relación a los artículos 732 y 735 del Código de Trabajo, los cuales tratan de la apreciación de la prueba según la sana crítica y la carga de la prueba, respectivamente, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido violentadas".

Frente a lo anterior sería también recomendable remitirse a lo señalado en las Resoluciones de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994.

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Esta disposición es del tenor siguiente:

> "Artículo 928.- Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es de la Sala)

Por otro lado es importante resaltar que el juzgador procede a la valoración de pruebas dentro de un proceso, de acuerdo al principio de la sana crítica, que según COUTURE, es `una categoría intermedia entre la prueba legal (tarifa legal) y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, de regular la actividad intelectual del Juez frente a la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.'(COUTURE, Eduardo. citado por Jorge Fábrega en Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña. Panamá 1988 pág. 129) (subrayado es nuestro).

Reiteramos que salvo que exista un error de hecho en la valoración de los elementos probatorios aportados al proceso laboral, este Tribunal procedería a conocer de las supuestas violaciones endilgadas a las decisiones provinientes de los Tribunales Superiores de Trabajo, situación que no se compadece con el contenido del expediente contentivo del caso bajo estudio.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITEN el recurso de casación interpuesto por el licenciado Edrulfo Espinales Miranda, en nombre y representación de BOLIVAR MORA SAMUDIO.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ANDRÉS QUIJANO EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTIN GONZALEZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HENSERV, S. A. VS AGUSTIN GONZALEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISEIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Andrés Quijano, en representación de Agustín González, interpuso recurso de casación laboral contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 1999 por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral incoado por Henserv, S. A. contra Agustín González.

I. CONTENIDO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA CON EL RECURSO DE CASACIóN LABORAL.

Mediante la sentencia recurrida el Tribunal Superior de Trabajo, del Primer Distrito Judicial, revocó la Sentencia N° 8 de 7 de septiembre de 1999, del Juzgado Primero de Trabajo de la Segunda Sección por medio de la cual no concedió la autorización para despedir al trabajador Agustín González, y en su lugar concedió la autorización solicitada por considerar que el mismo sí incurrió en justa causa de despido. El Tribunal Superior fundamentó su sentencia en las siguientes razones:

> "Se probó en las declaraciones de los testigos que el trabajador AGUSTIN GONZALEZ propició la suspensión de labores de sus compañeros dentro de la empresa KENTUCKY FRIED CHICKEN, lugar donde él se desempeña como trabajador, pese a encontrarse en su período de vacaciones sin causa justificada y sin permiso del empleador lo que es contrario a sus obligaciones que como trabajador de la empresa tenía, ocasionando a la misma daños económicos y poniendo en duda el prestigio de la empresa ante sus clientes, producto de la existencia de un conflicto entre ésta y sus trabajadores.
>
> Los testimonios de HECTOR CALDERON y GILBERTO McCOY LOPEZ con los documentos que acreditan los hechos ocurridos el 1 de mayo de 1999, señalan la participación en el paro de hecho del señor AGUSTIN GONZALEZ y demás trabajadores en el KENTUCKY FRIED CHICKEN de Colón lo que da lugar a la empresa para que se autorice el despido solicitado" (fs. 149 del expediente del proceso laboral)

II. NORMAS QUE LA CASACIONISTA CONSIDERA INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

Manifiesta la casacionista que la sentencia impugnada viola, en forma directa, los artículos 214, 734 y 735 del Código de Trabajo, que a la letra disponen:

> "Artículo 214. El empleador debe notificar previamente y por escrito al trabajador la fecha y causa o causas específicas del despido o de la terminación de la relación de trabajo. Posteriormente no podrá el empleador alegar válidamente causales distintas a las contenidas en la notificación.

> Artículo 734. Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieran a los hechos afirmados y no admitidos, así como las legalmente ineficaces.
>
> El Juez puede rechazar de plano los medios de prueba prohibidos por la ley, notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso. También podrá rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes.
>
> Artículo 735. La carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción.
>
> No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la nación, o en los municipios, en las entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas."

El recurrente alega que en este caso el Tribunal Superior de Justicia desconoció un principio de orden público establecido taxativamente en el citado artículo 214, que exige la previa invocación de las causas específicas del despido y por ello no es dable al empleador ni al juez durante el proceso, introducir nuevos elementos o causales que no fueron alegadas o contempladas previamente, tal como ha ocurrido en el caso del trabajador Agustín González, en virtud que la presente causa nada tiene que ver con las causales contenidas en los numerales 2, 6, 7 y 10 acápite A, del artículo 213 del Código de Trabajo.

En cuanto a este cargo de violación, agregó que el Juez que resolvió la apelación no podía inventar otras causales diferentes a las alegadas por la empresa, puesto que ninguna de las que fueron invocadas se enmarcan en las normas citadas en la demanda mediante la cual se solicita autorización para despedir al trabajador González, quien gozaba de inmunidad electoral y no pudo cometer los hechos que se le atribuyen, porque el 1° de mayo de 1999 estaba de vacaciones.

Finalmente señaló que según el numeral 7 del literal A del artículo 213, los daños materiales causados deben ser graves y la culpa del trabajador la sola causa del perjuicio, por lo que le incumbe al empleador probar la existencia del daño, la gravedad y responsabilidad exclusiva del trabajador.

En este último sentido explicó el casacionista que la violación de los artículos 734 y 735 del Código de Trabajo se dió porque el Tribunal Superior de Trabajo invirtió la carga de la prueba en la presente causa, porque corresponde al empleador probar los aspectos tales como la existencia y validez de una Convención Colectiva de Trabajo y de un supuesto Reglamento de Trabajo y que los mismos fueron violados por el trabajador con conocimiento de causa. Manifestó que todo este proceso se ha sustentado en pruebas no convincentes y declaraciones de sujetos sospechosos al tenor del artículo 806 del Código de Trabajo, como lo son los dos gerentes de la empresa quienes han sido los únicos testigos de la parte demandante en perjuicio de su representado.

III. OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL.

La sociedad anónima Henserv, S. A., propietaria del restaurante K. F. C. de Colón, presentó mediante apoderado judicial escrito oponiéndose al recurso de casación laboral interpuesto por el trabajador Agustín González, visible de fojas 14 a 18, en los siguientes términos:

> "En definitiva por más esfuerzo que se ha intentado por justificar el presente recurso, es evidente, en forma objetiva, que la pretensión del recurrente, es de justificar lo injustificable, pues en autos consta que AGUSTIN GONZALEZ, de forma acreditada participó en el cierre del restaurante el día 1° de mayo de 1999.

> Ante esta consideración de un derecho declarado en segunda instancia, la Honorable Corte Suprema debe pronunciarse, en el sentido de no admitir un recurso de casación que de paso emerge a una pretención dilatoria y temeraria por lo actuado por el trabajador demandado." (f. 17)

IV. DECISION DE LA SALA.

Al solicitar la autorización para despedir al señor Agustín González, la empresa aportó al proceso las siguientes pruebas:

1. Original del informe secretarial de la Corregiduría de Cristóbal de Colón, de turno el día 1° de mayo de 1999, en el cual se deja constancia que a las 12:10 p. m. se presentó el señor Héctor Calderón, gerente del restaurante K. F. C. para denunciar la obstrucción de la entrada y auto-rápido del restaurante por moradores del área, por lo cual, a las 12:36 p. m. la señora corregidora se apersonó al lugar donde conversó con el señor Calderón y se percató de la presencia de los señores Agustín González y Juan Chirú como las únicos empleados del restaurante que se encontraban fuera del mismo obstaculizando la entrada con el grupo de moradores. Dicho informe establece también que la señora corregidora no pudo tomar las medidas legales y de hecho necesarias, porque todas las entidades policiales estaban a ordenes del Tribunal Electoral en víspera de las elecciones del 2 de mayo de 1999 (f. 10).

2. Copia autenticada del informe de novedad del Teniente Eric Amaya, agente policial que asistió al restaurante K. F. C. el día 1° de mayo de 1999, en el que narra los hechos acontecidos de la siguiente manera:

> "Siendo aproximadamente las 12:40 del día 1 de mayo recibí una llamada telefónica, en donde el Sr. Héctor Calderón Gerente del restaurante KENTUCKY ubicado en calle 7 y avenida central, me pidió que interviniera ya que había un problema en el establecimiento, que consistía en que los empleados se habían declarado en huelga y no dejaban entrar a los clientes al local, me dirigí al local y pude entrevistarme con los Sres. AGUSTÍN GONZÁLEZ, JUAN CHIRÚ empleados y el Sr. HÉCTOR CALDERÓN (Gerente) del restaurante los empleados manifestaron que habían tomado tal acción debido a la negatividad de tal empresa de aumentarles el sueldo y mejorarle el sistema de trabajo, ante este hecho y haber agotado todos los recursos optaron por paralizar las labores y no dejar entrar a nadie al local.
>
> Estos empleados estaban apoyados por un aproximado de 25 personas entre ellos hombres y mujeres los cuales se postraron en la entrada de forma pasiva los cuales no eran empleados de la empresa sino compañeros del sindicato supuestamente.
>
> El Sr. Calderón (Gerente) fue orientado para que en tal situación procediera a interponer la querella a la autoridad correspondiente y me retiré del lugar.
>
> Aproximadamente a las 14:45 Hrs. del día me llamó la corregidora de Cristóbal, la Licda. Nadya de Scapa de turno ese día informándome que si podía dirigirme a su despacho, al llegar al lugar la Sra. Corregidora se encontraba dialogando con el Sr. Calderón y me manifestó que ella había asistido al local pero que la habían empujado y que casi no la dejan entrar y que en consulta con sus jefes no podía antender el caso.
>
> Luego me dirigí al local del KENTUCKY y me entrevisté con el Sr. Gilberto McCOY, gerente de operaciones del KFC, quien trató de dialogar con los empleados pero estos se negaron. A las 16:00 Hrs. solicité a un delegado electoral puesto que el Sr. McCOY manifestó que la situación tenía visos políticos, al lugar se presentó el Sr.

Romano Emiliani (Delegado Electoral) el cual reunió a las partes en mi presencia y luego de un dialogo calmado y unas llamadas telefónicas que no escuché se decidió por ambas partes reabrir el local y volver a la normalidad, siendo aproximadamente las 17:45 Hrs. me retiré del lugar sin más novedad." (fs. 12 y 13 del expediente del proceso laboral).

3. Memorando dirigido el 12 de mayo de 1999 por el señor Héctor Calderón, gerente de K. F. C. de Colón, al señor Maximiliano Arosemena, gerente general de los restaurantes K. F. C., en el que reporta los incidentes ocurridos el 1 de mayo de 1999 en relación al paro de labores ocurrido en la sucursal de Colón. En dicho informe incluye el reporte de "mermas" o pérdidas promedio de los productos que vende el restaurante:

"'MERMAS'

Presas de pollo	147
Alitas	12
Nuggets	23
Tender (strips)	49

Estos productos como los más notables, no exceptuando los puré, empanadas, pasteles hamburguesas, filetes y otros.

Por medio de este escrito doy por notificado a la empresa, el informe correspondiente a los sucedido el 1 de Mayo de 1999." (f. 16 del expediente del proceso laboral).

4. Informe de mermas del 1 de mayo de 1999, remitido el 28 de mayo de 1999 por el gerente de K. F. C. de Colón al gerente general, que incluye los productos alimenticios perdidos y un estimado de las ventas dejadas de hacer durante el paro de labores, basado en el promedio de las ventas registradas los dos sábados anteriores y dos sábados posteriores al sábado 1° de mayo de 1999, que asciende a la suma de B/.1,599.65 y que sumado a los B/.253.36 de productos dañados, totalizan B/.1,853.36.

5. Ejemplar simple de la Convención Colectiva de Trabajo entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (SITCRA) y la empresa Henserv, S. A. del 16 de marzo de 1999 al 16 de marzo de 2003, y del Reglamento Interno de Trabajo (f. 19 del expediente del proceso laboral).

Al contestar la demanda, el trabajador negó todos los hechos y rechazó todas las pruebas por considerarlas improcedentes y por carecer, a su juicio, de los requisitos legales para su validez. Presentó como pruebas a su favor copia simple y sin firmar de una carta en que la empresa comunica al trabajador que sus vacaciones serán del 2 de abril de 1999 al 1 de mayo de 1999; un talonario del cheque con el que se le pagaron las mismas y dos certificaciones del Tribunal Electoral que acreditan que está amparado por el fuero contemplado en el artículo 232 del Código Electoral a partir del 3 de febrero de 1999 y hasta por tres meses después de cerrado el proceso electoral, en virtud de su condición de candidato a puesto de elección popular (fs. 31 a 34 del expediente del proceso laboral).

El día designado para la celebración de la audiencia la empresa presentó las declaraciones de los señores Héctor Arnulfo Calderón Sandoval, gerente de la sucursal de K. F. C. de Colón, del señor Gilberto McCoy López, gerente de operaciones de K. F. C. y la declaración de parte del señor Agustín González.

Del estudio de las constancias procesales esta Sala Laboral concluye que es una realidad debidamente probada que el señor Agustín González, a pesar de estar en uso y disfrute de sus vacaciones, se apersonó al restaurante K. F. C. de Colón y fue protagonista de una serie de hechos que impidieron la ejecución de las labores normales del establecimiento de expendio de productos alimenticios en el cual laboraba y al hacerlo produjo un daño material grave en los productos,

que en su giro normal, vende su empleador.

En cuanto a la alegación del casacionista de que su representado gozaba de inmunidad electoral al ser despedido, de conformidad con el artículo 232 del Código Electoral, los candidatos a puestos de elección gozan de inmunidad sin perjuicio de que los trabajadores de empresas privadas puedan ser despedidos con causa justificada previa autorización de un tribunal de trabajo.

Las declaraciones rendidas en la audiencia laboral por los señores Héctor Calderón y Gilberto McCoy López, gerentes de la sucursal de Colón y de operaciones respectivamente del restaurante K. F. C., demuestran consistentemente en cuanto al lugar y tiempo, que el trabajador González participó activamente en los hechos ocurridos el 1° de mayo de 1999 en el restaurante K. F. C., provocando el cierre temporal y paralización de las labores y ventas en dicho local comercial (fs. 44 a 52 y 63 a 71 del expediente del proceso laboral), con lo cual se desvirtúa el argumento del trabajador de que no estaba presente durante los acontecimientos descritos por estar en goce de sus vacaciones y en actividades político-partidistas.

El casacionista alega que los testimonios de los gerentes de la empresa no constituyen prueba de lo ocurrido, porque son sospechosos al tenor de lo dispuesto en el artículos 806 del Código de Trabajo, sin embargo en este sentido la Sala ha expresado que la condición de trabajador o representante de la empresa no necesariamente hace su testimonio sospechoso. Recurriendo a la recopilación del licenciado Carlos García Martín titulada "20 años de jurisprudencia de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia años de 1972-1991" (Litografía e Imprenta LIL, S. A., Costa Rica, 1ª ed., 1992, págs. 601 a 602 y 604 a 605), encontramos fragmentos de dos fallos de la Sala de lo Laboral que tratan sobre este tema. En la Sentencia dictada el 17 de enero de 1975 esta Superioridad señaló:

> "'La Sala estima que no es suficiente la circunstancia de que un testigo ocupe algún cargo jerárquico dentro de la empresa empleadora, para que sea calificado su atestado de sospechoso, 'por su interés con relación a las partes', como lo hace la sentencia recurrida con apoyo en el artículo 806 del Código de Trabajo.
>
> No debe perderse de vista, que son las personas vinculadas con la empresa, las que por su relación de trabajo pueden percatarse directamente de las circunstancias y modalidades que se operan dentro del desarrollo del trabajo, ya que se trata de sus compañeros o de sus subalternos. De ello, que los Juzgadores en materia de derecho procesal laboral deban formarse libremente su convencimiento, atendiendo 'las circunstancias de cada caso', como lo quiere el propio artículo 806 en su última parte; y ante todo, que el concepto del Juez se limite a la prudencia y al respeto de todos aquellos principios científicos que guían la crítica de la prueba'."

En el segundo fallo del 19 de noviembre de 1974, la Sala Laboral manifestó lo siguiente:

> "'La circunstancia de que fuese el testigo representante de una de las partes no implica afectar la credibilidad de su declaración y por ende, eso tampoco puede provocar que se le califique de sospechoso, puesto que es precisamente la circunstancia de la relación de trabajo, la que permite al Juzgador observar de modo claro y directo las modalidades propias de la ejecución del trabajo y consecuentemente, las motivaciones de la controversia. Fuera de las facultades amplias de que goza el juzgador para apreciar el testimonio dentro de las reglas de la sana crítica, mantener un criterio de la especie expuesta por el recurrente, llevaría constantemente la sospecha general de todos los testimonios de los

representantes de la parte empleadora, o como puede suceder también, de la trabajadora, y eso sería desvirtuar la finalidad del artículo 806 del Código de Trabajo'."

Por el contrario, antes de calificar como sospechosos los testimonios de los gerentes de la empresa presentes en el lugar y momento de los hechos, esta Superioridad observa que el juzgador de segunda instancia los valoró justamente, sobre todo porque además de coincidir en las circunstancias de lugar, tiempo y sucesos, son congruentes con lo establecido en los informes rendidos por los funcionarios o autoridades públicas que estuvieron presentes y que señalan a los señores Agustín González y Juan Chirú como los trabajadores que encabezaron el cierre y paralización de labores del restaurante K. F. C. de Colón el 1° de mayo de 1999 (copias auténticas de los originales debidamente refrendadas por notario público que constan de fojas 10 a 13 del expediente del proceso laboral).

El hecho de que el trabajador estuviera en disfrute de sus vacaciones no impide que se configuren las causales descritas en los artículos 6 y 7 del literal A del Artículo 213 del Código de Trabajo, puesto que durante el período de vacaciones no se interrumpen o suspenden los efectos del contrato de trabajo, situación que sólo ocurre en los casos taxativamente enumerados en el artículo 199 del Código de Trabajo y que no incluye el tiempo de vacaciones.

Es conveniente destacar que ni siquiera en los casos específicamente citados en el artículo 199 del Código de Trabajo se extinguen los demás derechos y obligaciones emanados del contratos de trabajo, sino que sólo se suspende la prestación del servicio y el pago del salario, cuando la ley no disponga lo contrario.

Visto lo anterior, no tiene ninguna validez el argumento de que mientras el trabajador se encuentra en goce de sus vacaciones no es susceptible o capaz de incurrir en ninguna de las cuasales justificativas de despido enumeradas en el literal A del artículo 213 del Código de Trabajo. Para ello será necesario examinar en detalle la causal de despido atribuida y las circuntancias en que se dieron los hechos que la configuran.

No existe ninguna duda en cuanto a la presencia del señor Agustín González en el restaurante K. F. C. de Colón y que con sus actos propició la paralización de las labores en el mismo. Esto impidió a los clientes entrar al local comercial y como consecuencia el gerente de la sucursal denunció estos hechos a la corregiduría en turno a las 12:10 del mediodía del sábado primero de mayo, y no fue sino hasta las 5:45 de la tarde del mismo día que finalizó el paro de labores y cierre del restaurante.

La interrupción en las labores de un comercio de expendio de comidas rápidas, durante un día normal de trabajo y por espacio de cinco horas en las que normalmente se produce la mayor cantidad de ventas con motivo del almuerzo y cena, tiene forzosamente que constituir un perjuicio económico y material para la empresa, sin necesidad que sea dictaminado por un perito. Sin embargo, la cuantificación del perjuicio económico causado por las ventas dejadas de percibir y la merma de los productos que tuvieron que desecharse por motivo del extenso tiempo en que no pudieron ser consumidos, debe hacerlo quien lleva el control de la administración de los alimentos y ventas.

En este sentido el informe del señor Calderón, gerente de la sucursal de K. F. C. afectada, indica que las mermas o pérdidas de productos listos para la venta y que tuvieron que ser desechados por razones de salubridad asciende a B/.253.36, mientras que las ventas dejadas de percibir pueden calcularse en un aproximado de B/.1,853.36, resultado de un promedio de las ventas de los días sábados anteriores y posteriores al 1° de mayo de 1999. Aunque estas cifras no han sido acompañadas por documentos contables de la empresa, es en concepto de esta Sala lo suficientemente grave la pérdida que ocasionaría a una empresa de esta índole el cierre y paralización por cinco horas un día sábado de fiesta nacional, y cuya evidencia no requiere prueba especializada.

En cuanto a este último tema, parece conveniente señalar que el daño ocasionado a los productos o materiales alimenticios objeto de las ventas a las que se dedica la empresa, así como las ventas que nunca se pudieron hacer con motivo del cierre forzoso del lugar y paralización de sus actividades, reviste la gravedad suficiente para que se considere dentro de las causales de despido contempladas en los numerales 6 y 7 del literal A del Código de Trabajo.

Al márgen de las obligaciones establecidas por el Reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo, pruebas que no fueron debidamente autenticadas por la autoridad correspondiente, los informes de pérdidas y los hechos debidamente acreditados en el proceso, son evidencia de la gravedad de la falta, sobre todo porque el cierre fue ocasionado por un trabajador de la empresa, al márgen de la ley laboral y que se encontraba de vacaciones, hecho que no le releva de cumplir con sus obligaciones generales como trabajador y de dispensarle a su empleador el respeto y debido comportamiento que la relación laboral le exigen, inclusive durante sus vacaciones.

Como los efectos del contrato de trabajo, en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas entre trabajador y empleador siguen vigentes durante el período de vacaciones, no puede alegar el casacionista que su representado no podía cometer las conductas descritas en las causales citadas por la empresa en la demanda interpuesta para solicitar la autorización de despido del trabajador González, amparado por fuero sindical.

Las causales contenidas en los numerales 2 y 10 del literal A del artículo 213 del Código de Trabajo no son aplicables al caso del señor González, pero sí lo son las contenidas en el numeral 6 y 7 del Código de Trabajo, íntimamente relacionadas y por ello no se violó el artículo 214 del Código de Trabajo, en virtud que el empleador y el Tribunal Superior no han fundamentado la autorización del despido en causas distintas a las citadas o invocadas en la demanda.

Probados los hechos y la gravedad del daño material y económico causado, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo tampoco violó los artículos 734 y 735 del Código de Trabajo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada el 3 de diciembre de 1999 por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso laboral promovido por HENSERV, S. A. contra AGUSTÍN GONZÁLEZ.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE ABILIO HIGUERA OSORIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABILIO HIGUERA OSORIO VS GANAGRO INDUSTRIAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Del Cid ha presentado recurso de casación laboral

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, del Primer Distrito Judicial, el día 20 de mayo de 1998, dentro del proceso laboral promovido por su representado, ABILIO HIGUERA OSORIO, contra GANAGRO INDUSTRIAL, S. A.

En el recurso se pide a la Sala que case y revoque la resolución impugnada, y que en su lugar confirme la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia, con la respectiva condena en costas.

La licenciada Maritza Royo, en tiempo oportuno, presentó escrito a través del cual se opone a los argumentos vertidos por el recurrente en el recurso de casación.

El Juzgador de primera instancia condenó a la empresa demandada GANAGRO INDUSTRIAL S. A. al pago de la suma (B/.2,190.24) a favor del demandante ABILIO HIGUERA, en concepto de indemnización por renuncia justificada, no obstante, el Tribunal Superior de Trabajo revocó el fallo y absolvió a la demandada de las reclamaciones formuladas en su contra por el demandante.

Dentro de este contexto, el recurrente considera que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 138, 222 y 223 del Código de Trabajo.

Señala el actor que se ha conculcado el artículo 138, numeral 13 del Código de Trabajo de manera directa por falta de aplicación, pues, "después que el médico le recomendó a la empresa el cambio de funciones laborales dicha empresa lo puso a manejar camiones, así que fue esta situación que ponía en peligro su salud, la que obligó al trabajador ABILIO HIGUERA OSORIO a presentar su renuncia con causa justificada, lo que, a su vez, implicaba su despido indirecto ... porque el aludido fallo omitió su aplicación ...". (cfr. foja 3).

Respecto a este cargo el Tribunal Superior de Trabajo estimó que "... No consta en el proceso ninguna inspección a la empresa para determinar que, efectivamente, el trabajador al reincorporarse a sus labores se le hubiera asignado el mismo trabajo que realizaba con anterioridad al accidente, o que el trabajo que desempeñaba al momento de la terminación de la relación de trabajo fuera de tal naturaleza que empeorara la situación de salud del demandante".

Esta Superioridad comparte el criterio vertido por el Tribunal Superior, pues, al ponderar la documentación que acompaña el presente proceso, no hay constancia de que la empresa demandada le exigiera al trabajador que volviera a realizar su trabajo anterior. En ese sentido, si nos remitimos al material probatorio obrante dentro del proceso in examine en busca de una comprobación de lo afirmado por el casacionista, arribamos a la conclusión de que este no logró probar que el empleador no había cumplido con las recomendaciones del galeno que atendía al trabajador demandante.

En atención a lo antes mencionado, la Sala no encuentra razón alguna para variar el criterio del Tribunal Superior de Trabajo.

En lo atinente a la infracción del artículo 222, el recurrente afirma que esta disposición fue violada por interpretación errónea pues, a su juicio, esta no le exige al trabajador indicar las causas que lo impulsan a dar por terminada la relación de trabajo, posición que asumió el Tribunal Superior de Trabajo al manifestar que "la carta de renuncia con causa justificada imputable al empleador, debe indicar las causas que lo impulsan a dar por terminada la relación de trabajo permitiéndole al empleador prepararse para su defensa en un posible proceso".

Frente a este cargo la Sala concluye que, no le asiste la razón al demandante en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer término, compartimos el criterio del Tribunal Superior de

Trabajo, en el sentido de que al verificar el contenido de la carta de renuncia que obra a foja 49 y 50, en la misma no se manifestó las razones de hecho y de derecho que lo impulsaron a dar por terminada la relación laboral de forma justificada. El trabajador hace referencia en su carta de renuncia al problema físico que lo aqueja. Sobre este punto resulta obligatorio resaltar que parte del diagnóstico médico rendido por el galeno de la Caja de Seguro Social en el caso del señor Higuera hace alusión a que "hay signos de artrosis evolutiva en este momento" (cfr. foja 83) con fecha 21 de octubre de 1991, padecimiento que aunado a lo de la fractura de cadera contribuía a menoscabar progresivamente su salud.

Esta Superioridad en jurisprudencia reiterada ha manifestado que la carta de renuncia justificada, debe congregar los mismos requisitos que se exigen para las cartas de despido, atinentes a los hechos y fundamentos de derecho que justifican la cesación del vínculo laboral.

Ante este escenario jurídico, resulta palmario que el trabajador estaba obligado a describir cuáles fueron las circunstancias o causas contrarias a la ley que lo indujeron a presentar su renuncia justificada, pues, de lo contrario, la Sala no ve de qué manera el juzgador, sin esos elementos esenciales, pueda ponderar en la debida dimensión jurídica de nuestro ordenamiento interno vigente, un proceso laboral como el que nos ocupa (Cfr. sent. de 27 de febrero de 1998).

En cuanto a la violación del artículo 223, numeral 11, la Sala se abstiene de su análisis, toda vez que guarda relación directa con el primero de los cargos formulados a la sentencia de segunda instancia, relativa a la violación del artículo 138, numeral 13, previamente estudiado, donde esta Superioridad lo desestimó por considerar que no fue probado el cargo endilgado, por tanto, no se configuró la aludida infracción, prevaleciendo el criterio del Tribunal Superior de Trabajo.

El recurrente sostiene, por último, que la sentencia de segunda instancia ha violado el artículo 327 de manera directa por omisión o inobservancia, porque esta no le acredita ningún mérito probatorio a los dos dictámenes y recomendaciones del médico ortopeda; y que además la empresa, en lugar de proporcionarle un trabajo de menor esfuerzo físico, como lo exige el citado artículo 327, lo puso a operar un camión que requiere el mismo o mayor esfuerzo físico que el tractor.

En ese sentido, el Tribunal Superior de Trabajo manifestó que "en cuanto a la reiteración que hace el médico ortopeda sobre la reubicación del trabajador, por razón de que la empresa ha hecho caso omiso a la recomendación, este último documento surge de lo que el trabajador ha informado a su médico. No consta en el proceso ninguna inspección a la empresa para determinar que, efectivamente, el trabajador al reincorporarse a sus labores se le hubiera asignado el mismo trabajo que realizaba con anterioridad al accidente, o que el trabajo que desempeñaba al momento de la terminación de la relación de trabajo fuera de tal naturaleza que empeoraba la situación de salud del demandante".

La Sala estima que no se ha probado en el proceso que la empresa demandada exigiera al trabajador la realización de trabajos que pusieran en peligro su salud o su vida. Al respecto obra a foja 54, la declaración de una testigo que afirma que la empresa, a través del señor Ameglio, le ofreció al señor Higuera reubicarlo en otra actividad como la de limpiar corrales o la de ordeño, a lo que éste se negó, prefiriendo manejar un camión volquete.

De las declaraciones del propio demandante (cfr. fojas 65 y 66) se colige que sus funciones fueron modificadas.

En virtud de lo antes expresado la Sala arriba a la decisión que no prosperan los cargos endilgados a la sentencia de 20 de mayo de 1998.

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, NO CASA la sentencia de 20 de mayo de 1998 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral entablado por ABILIO HIGUERA OSORIO -v- GANAGRO INDUSTRIAL , S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

ENERO 2000

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL FISCAL DÉCIMO ADSCRITO A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO 302637 SEGUIDO CONTRA MARIA CANDELARIA SUÁREZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala de Negocios Generales, de la Corte Suprema de justicia, una Solicitud de Asistencia Judicial s/n de 31 de mayo de 1999, librada por el Fiscal Décimo, adscrito a la Unidad de Delitos Financieros de Santa Fé de Bogotá, Colombia dentro del proceso 302637 seguido en contra de MARÍA CANDELARIA SUAREZ.

Dentro de este contexto, de foja 2 a 8 reposan documentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación, a través de los cuales se desprende que la autoridad exhortante está facultada para solicitar pruebas a otras autoridades judiciales en el exterior en virtud de la cooperación recíproca en materia penal entre los Estados que integran la comunidad internacional.

Una vez establecido lo anterior, procede esta Superioridad a analizar el presente suplicatorio a la luz de nuestro ordenamiento interno aplicable a esta tema.

En materia penal, Colombia y Panamá no han suscrito convenio relativo a exhortos o a recepción de pruebas en materia penal, razón por la cual, de prestarse el auxilio judicial requerido, se llevará a cabo a través del principio de reciprocidad y buena fe que deben imperar en los países integrantes de la comunidad internacional. Sobre este particular, cabe señalar que a foja 3-4 la autoridad emisora del presente suplicatorio ofrece reciprocidad a las autoridades panameñas para casos similares.

Al verificar la documentación que acompaña la presente solicitud, la Sala pudo constatar que cumple con los requisitos de legalización que exige nuestra legislación a través del artículo 864 del Código Judicial, toda vez que consta a foja 7, la correspondiente certificación consular.

Por otro lado, se observa que consta entre la documentación aportada por la autoridad exhortante un resumen de los hechos investigados y además, señala la importancia de la información requerida.

Dentro de este orden de ideas, es preciso establecer que de accederse a la práctica de las diligencias solicitadas (cfr. de fojas 2 a 4), estas se practicarán de conformidad con nuestro derecho procesal penal interno como Estado Exhortado.

Dentro de este contexto, resulta pertinente destacar que nuestra legislación penal recoge en el Libro II (De los Delitos), Título IV (Delitos contra el Patrimonio), Capítulo IV, los delitos denominados "De la estafa y otros fraudes", en el artículo 190 que a la letra dice:

> **"ARTICULO 190: El que engañe a una persona, para procurarse o procurar a un tercero un provecho ilícito, con perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y de 50 a 150 días-multa.**
>
> **La prisión será aumentada de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito lo cometen apoderados o administradores en el ejercicio de sus funciones o si se comete es detrimento de la administración**

pública o de un establecimiento de beneficencia." (Código Penal).

Dada la normativa anterior, concluimos que el delito que se investiga en el Estado Exhortante está tipificado como un acto ilícito en nuestro ordenamiento interno penal, de tal forma, que de darse la colaboración solicitada por las autoridades colombianas, no estaríamos confrontando nuestro derecho interno, presupuesto básico y determinante, en el auxilio judicial internacional.

En este orden de ideas, estima la Sala, que procede acceder en forma parcial, a la colaboración solicitada, dentro de los siguientes términos:

-Solicitar al Registro Público si existe o no la Empresa ANJAWE CORPORATION solamente, ya que no reposa en autos ningún documento al que hace alusión las autoridades colombianas para cotejar.

-En cuanto a la declaración del señor Representante Legal, mal puede confirmar constancia alguna si la misma no fue adjuntada. Solo podrá declarar en relación al tipo de negocios que maneja la citada Sociedad.

En vista de que la solicitud librada por el Estado Exhortante se enmarca dentro de la etapa sumarial, y las investigaciones son llevadas a cabo por un funcionario de instrucción competente, resulta evidente que las diligencias a efectuar en nuestro país, tienen que ser practicadas, de igual forma, por un funcionario de instrucción designado para tales efectos, tal como lo establece el Artículo 2071 y concordantes del Código Judicial.

Como corolario de los antes expuesto, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PARCIALMENTE VIABLE en el territorio nacional, la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional sin número fechada el día 31 de mayo de 1999, librada por el Fiscal Décimo, adscrito a la unidad de Delitos Financieros de Santa Fé de Bogotá, Colombia, dentro del proceso 302637 seguida en contra de MARÍA CANDELARIA SUAREZ por el Delito de Fraude Procesal.

Como resultado de lo anterior, ORDENA que la misma sea remitida a la SECRETARIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el objeto de que designe el funcionario de instrucción competente para que lleve acabo el diligenciamiento de la presente solicitud internacional en los términos de la presente resolución.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASISTENCIA JUDICIAL DENTRO DE LA CAUSA N° 99-010853-PE CONTRA STEPHEN A. DRECHSLER Y JAMES CALYBORNE EDWARDS, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE FALSEDAD IDEOLÓGICA EN PERJUICIO DE DANILO PALMA GÓMEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General Encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota No. A: J. No. 1384 exhorto internacional librado por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, dentro de la causa 99-010853-042-PE seguida contra Stephen A. Drechsler y James Clayborne Edwads por el delito de Falsedad Ideológica en

perjuicio de Oscar Danilo Palma Gómez.

En este orden de ideas corresponde a la Sala, en primer lugar, determinar si la República de Panamá y Costa Rica han suscrito convenios o tratados relativos a Exhortos o Cartas Rogatorias.

Dentro de este contexto hemos constatado que se han suscrito dos instrumentos supranacionales denominados "Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias" y la "Convención interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero", dentro de procesos en materias civil o comercial.

El caso bajo estudio versa en materia penal, no obstante, se colige de las convenciones antes citadas que las mismas no son extendibles a materias penales, situación determinante en el estudio de la presente solicitud. Sin embargo, ante la ausencia de un instrumento internacional que avale dicha petición, podría prestarse la ayuda solicitada a través del principio de reciprocidad, no obstante las autoridades exhortantes no la ofrecieron.

Cabe advertir, que la carta rogatoria en estudio no debe violentar el orden público panameño puesto que, de presentarse dicha violación, aún y cuando exista convención suscrita entre el Estado requirente y requerido, se negará la práctica de la diligencia, en aras de salvaguardar nuestro ordenamiento jurídico.

El objeto de la comisión rogatoria en estudio, consiste en que las autoridades panameñas competentes realicen las siguientes diligencias:

> "Para efectos de determinar con certeza la existencia del ilícito denunciado, así como la participación y responsabilidad de cada uno de los imputados, las leyes violadas y procurar la recuperación de la pérdida sufrida por el ofendido se hace indispensable contar con el documento original, ubicado en el Banco Alemán Platina, fechada 5 de abril de 1999, consistente en una orden de transferencia por setenta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América, a debitar de la cuenta 63-01-033790-0, para acreditar en la cuenta No. 86-01-02039 del Banco BFA, Costa Rica, con el Banco Alemán Platina, Panamá, por orden de C. F. O. CAPITAL S. A., Costa Rica; esto con la finalidad de practicar el correspondiente estudio grafológico-comparativo" (cfr. foja 4).

Las autoridades exhortantes expresan a foja 3 que la finalidad de la presente solicitud es la de que las autoridades panameñas secuestren y decomisen la orden de transferencia original supra citada, como elemento probatorio dentro de la causa que se investiga.

En este orden de ideas, resulta imperativo resaltar, que la asistencia aquí solicitada lesiona lo estatuído en nuestra Carta Magna, según se infiere del artículo 29, y que por lo tanto, no es posible acceder, dentro de este marco, a su práctica.

Para mayor comprensión pasamos a transcribir el artículo 29 de la Constitución Nacional, que a la letra dice:

> Artículo 29: La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales. En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del examen.
> ..." (Subraya la Sala)

Los anteriores señalamientos conducen a esta Sala a desestimar esta petición en virtud de que los mismos no están acordes con los procedimientos consagrados en nuestra legislación nacional.

Por otro lado, cabe advertir que las medidas cautelares se excluyen como diligencias practicables a través de exhortos o cartas rogatorias, toda vez que su radio de aplicabilidad está limitada a actos de mero trámite, por lo que no es posible que la Corte sin fundamento legal acceda al secuestro penal que solicita el requirente sobre un documento privado que reposa en una institución bancaria de la localidad, contraviniendo además disposiciones establecidas en el Código de Comercio.

Sobre este punto, el artículo 89 del Código de comercio establece que para obtener datos relacionados con esta materia se requiere que la autoridad competente decrete previamente una acción exhibitoria. Aunado a esto, el mismo artículo señala que dicha acción debe ser propuesta por separado de las demás pruebas ya que esta constituye una acción precautoria. Observa la Sala, que en el exhorto en cuestión no se presentan mayores detalles al respecto, como tampoco se presenta el escrito de parte interesada proponiendo la acción exhibitoria par que así se obtenga la información requerida.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE en la República de Panamá, el diligenciamiento del exhorto internacional librado por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, costa Rica, dentro de la causa 99--010853-042-PE seguida contra Stephen A. Drechsler y James Clayborne Edwards por el delito de delito de Falsedad Ideológica en perjuicio de Oscar Danilo Palma Gómes y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores par que proceda, según lo establecido en los acuerdos internacionales relativos a la materia.

Notifiquese.

(fdo.) MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL PROVENIENTE DE LA FISCALÍA DEL BARRIO DE ZAVODSKY DE LA CIUDAD DE NIKOLAEV, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE UCRANIA, EN EL PROCESO NO. 97900018 SEGUIDO EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ESTATAL "EL ASTILLERO-CHERNOMORKY" POR NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la Nota No. A. J. No. 1755 de 26 de noviembre de 1999, mediante la cual se refiere a la Nota No. NY-113-11-99, por medio de la cual el Consulado General de Panamá en NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, remitió a la Cancillería la Asistencia Judicial Internacional en materia Penal proveniente de la FISCALIA DEL BARRIO DE ZAVODSKY de la ciudad de Nikolaev, dependencia del Ministerio Público de Ucrania, en el proceso No. 97900018 seguido en contra de los funcionarios de la empresa Estatal "El Astillero Chernomorky", por negligencia en el desempeño de sus funciones. Manifiesta la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la remisión de la comisión enunciada en el párrafo UT SUPRA se hace para que este Cuerpo Colegiado determine su diligenciamiento en el territorio Nacional.

El Estado requirente, por medio del suplicatorio in comento solicita se practiquen las diligencias siguientes:

"1. Poner a nuestra disposición la resolución de los órganos judiciales de la firma armadora "L. T. SHIP HOLDING INC" que pertenece al ciudadano noruego BJORN HANSEN.

2. Poner (si lo haya) a nuestra disposición la resolución de los órganos judiciales de la República de Panamá a cerca de reconocer por quebrada "L. T. SHIP HOLDING INC" (de acuerdo con los datos que tenemos tal resolución fue tomada en 1994-1995).

3. Realizar la incautación de los originales de los Certificados de la venta,Aceptaciones de la Venta y Recepción de la venta de los barcos "Igor" y "Starfish" y de los otros documentos adicionales que fueron legalizados el 26.02.1993 por señor Omund Grunstad, el Cónsul General de la República de Panamá en la ciudad de Oslo, Noruega".

Manifiesta el Estado exhortante que, en caso de imposibilidad de cumplir con la solicitud elevada en la comisión que nos ocupa, pide se le exponga las causas y indique las condiciones necesarias para llevar a cabo la petición formulada. Nos manifiesta la Fiscalía del Barrio de Zavodsky de la ciudad de Nikolaev, asegura su disposición de colaborar en cuestiones de la ayuda jurídica en la base mutua.

Atendiendo a lo anterior, y tomando en consideración que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 del artículo 101, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.", procedemos a determinar la viabilidad o no viabilidad de la solicitud en cuestión.

En este orden de ideas, observamos que la solicitud impetrada ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, conlleva a verificar si el Estado Panameño, y el Estado requirente de la República de la Ukrania, forman parte de los convenios internacionales que rigen la materia que ocupa nuestro tiempo; sobre ello vale decir que, a la fecha no ha suscrito nuestro país, convenio o tratado alguno con Ukrania, en lo que se refiere a Exhortos o Carta Rogatoria o a la Recepción de Pruebas en el Extranjero.

Ahora bien, lo anterior nos conduce a de exponer que no existe fundamento jurídico alguno, que permita la realización de lo pedido por la autoridad judicial de Ukrania; sin embargo, este obstáculo puede ser superado en base a otros elementos, como lo son los principios de reciprocidad y auxilio judicial internacional, sin dejar pasar además, la Buena Fe que dimana de los Estados que son miembros de la comunidad internacional y que en el caso in comento, surge al ofrecer reciprocidad a la República de Panamá, el Estado requirente cuando manifiesta " ... les asegura a Uds. en nuestra disposición de colaborar en las cuestiones de la ayuda jurídica en la base mutua ...".

Antes de proseguir, es oportuna la ocasión para decir, que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Cuarta de Negocios Generales, emitió la resolución fechada 3 de agosto de 1998, dentro la solicitud de Asistencia Judicial de la Procuraduría de Ukrania, Federación Rusa No. 119 de 27 de octubre de 1997, sobre las investigaciones penales contra los directivos de la Empresa Estatal Ukraniana "CHERNOMOSRSKIY SUDOSTROINTELNIY ZAVOD", en la cual se DECLARÓ NO VIABLE su diligenciamiento en el territorio nacional.

Vale advertir que, en esa oportunidad el objeto contenido en la Carta Rogatoria, era el mismo que dio origen a la que hoy nos ocupa y en la resolución de 3 de agosto de 1998, citada UT SUPRA, este Cuerpo Colegiado expresó lo siguiente:

"Dentro de este contexto, la Sala Arriba a la conclusión de que no es posible realizar la diligencia solicitada, por no reunir los requisitos necesarios establecidos en nuestra legislación interna.

Cabe advertir que al Estado Exhortante, que al ser subsanada la omisión detallada en párrafos precedentes, puede avocarse a presentar nuevamente la solicitud ante esta Corporación, con el objeto de que sea ponderada la viabilidad de su diligenciamiento.

Al instar esta Corporación de Justicia, a las autoridades solicitantes, que presenten de la manera expresada antes, la carta rogatoria cuyo diligenciamiento no era viable en nuestro territorio, se dio a conocer las causas y se indicó las condiciones necesarias para su viabilidad.

Bajo estas circunstancias y al analizar la documentación que contiene el EXHORTO o CARTA ROGATORIA que en este instante examinamos y que fuera remitida a esta Superioridad, esta Sala es del criterio que, lamentablemente no es factible acceder a ello, en virtud de que según consta en autos, no fueron superadas todas las omisiones que le fueron indicadas en la Comisión cuyo diligenciamiento fuera declarado no viable anteriormente y de la cual hemos hecha referencia en el párrafo inmediatamente superior; puede observarse que los documentos que componen la comisión han sido traducidos a nuestra lengua, el español,más no se encuentra autenticada ni por las personas que tienen bajo su custodia los originales tampoco por la vía consular.

Ante lo expuesto, ha quedado claro que la documentación que conforma la Carta Rogatoria in examine, no cumple con las formalidades mínimas exigidas para que sea viable; esto es que, de conformidad el artículo 821,en concordancia con el artículo 864 del Código Judicial, estos pliegos no pueden tenerse como válidos en nuestro suelo patrio, y ello impide que pueda darsele a la solicitud impetrada, el impulso que requiere, por la condición en que se encuentran los mismos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala De Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el Territorio Nacional de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en materia Penal proveniente de la FISCALIA DEL BARRIO DE ZAVODSKY de la ciudad de Nikolaev, dependencia del Ministerio Público de Ucrania ,en el proceso No. 97900018 seguido en contra de los funcionarios de la empresa Estatal "El Astillero-Chernomorky" por negligencia en el desempeño de sus funciones.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DOMINGO BATISTA CONTRA LA LICENCIADA NIVIA ABREGO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, SIETE (7) DE ENERO DEL DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La licenciada Nivia A. Abrego ha presentado, ante la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, una advertencia de inconstitucionalidad en contra de los artículos 19, 33, 34 y 38 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, mediante la cual se regula la profesión del abogado en la República de Panamá.

Adicionalmente, en su escrito de sustentación, la mencionada letrada también hace mención a algunas conductas dentro del proceso las cuales considera violatorias del artículo 212 de la Constitución Nacional y sobre las cuales también advierte su inconstitucionalidad.

Considera la Sala que, si bien es cierto que la licenciada Abrego se encuentra en el derecho de advertir la inconstitucionalidad de disposiciones legales o reglamentarias dentro del proceso, al tenor de lo preceptuado en el artículo 2549 y subsiguientes del Código Judicial, se requiere que el proceso no se encuentre terminado, tal como es el caso que nos ocupa en esta ocasión.

Puede apreciarse en autos del proceso, que existe una resolución final fechada veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), la cual es irrecurible ya que la Ley aplicable es la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, la cual es una Ley especial y no contempla ningún otro recurso una vez llegada la etapa procesal de decisión.

Se entiende entonces que, existiendo una sentencia de fecha anterior a la interposición del escrito de advertencia de incontitucionalidad, tomando en cuenta que dicha sentencia es irrecurrible y observando que la misma se entiende por notificada una vez se le ha dado la publicidad establecida en el artículo 40 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, se debe considerar el proceso como terminado, teniendo como consecuencia que la solicitud de advertencia de inconstitucionalidad sea improcedente.

Como corolario de todo lo expresado, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la presente solicitud formulada por la licenciada Nivia Abrego dentro del presente proceso.

Notifíquese,

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUERDO N° 174

De 23 de diciembre de 1999

Por medio del cual se nombra a las personas que formarán la lista de Jurados de Conciencia para el próximo período del 2000.

En la ciudad de David, siendo las -2:00- de la tarde de hoy, jueves veintitrés -23- de diciembre de mil novecientos noventa y nueve -1999-, se reunieron en Sala de Acuerdo, los Magistrados que integran el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, licenciado Salvador Domínguez B.; licenciado Asunción Castillo; licenciada Carmen Méndez de Caballero; y, la Secretaria Interina del Tribunal, licenciada Dayra María Navarro Lezcano.

Abierto el acto, el Magistrado Vocal, licenciado Salvador Domínguez B., manifestó que el objeto de la reunión era el de proceder al escogimiento de las personas que integrarán el cuerpo de jurados de conciencia para el próximo período del año 2000, de conformidad con el artículo 2328 del Código Judicial.

Seguidamente se procedió a considerar el procedimiento a seguir, con el fin de renovar la lista actual.

Como paso inicial se remitieron notas a las diferentes oficinas públicas y privadas de esta ciudad, a objeto de que suministrarán un listado del personal

que en ellas laboran y que residen en el perímetro de la ciudad, a fin de reemplazar las que habían sido eliminadas. Asimismo, se eliminó de la lista de 1999, a aquellas personas que no residen en el área de la ciudad; a las de difícil localización, a las fallecidas, y a las que dejaron de laborar en las empresas cuyas listas reposan en este tribunal. Como resultado de la selección, la lista de jurados de conciencia en orden alfabético para el año 2000, es la siguiente:

-A-

1	ABADÍA, Hannia de	BCO. GENERAL	PE-4-15
2	ABREGO, Bladimir	CERV. BARU	4-132-500
4	ABUZEID, Yamila	AUTO-PARTES	4-71-907
5	ACOSTA, Aida	MULTI-IMPRESOS	4-99-949
6	ACOSTA, Alexis	AG. CRUZ DEL SUR	4-285-816
7	ACOSTA, Beira	IPACOOP	8-378-283
8	ACOSTA, Briceida	ESC. LASSONDE	4-84-470
9	ACOSTA, Carlos M.	UNIV. TEC.	4-128-1939
10	ACOSTA, Carlos P.	COOP. JOSE Mª	4-46-76
11	ACOSTA, Carmen	P. CICLO E.UNIDOS	4-132-430
12	ACOSTA, Dania	KENTUCKY	4-287-793
13	ACOSTA, Deidee	MULTI IMPRESOS	4-180-918
14	ACOSTA, Edita de	FOC-mañana	9-62-159
15	ACOSTA, Elba	INST. DAVID	4-67-879
16	ACOSTA, Elsa de	ESC. FRANCIA	4-118-903
17	ACOSTA, Ernesto	CABLE & WIRELESS	4-125-1451
18	ACOSTA, Floridalia	UNACHI-ADMON	4-273-736
19	ACOSTA, Gladys	ESC. LOMA COLORADA	4-102-2309
20	ACOSTA, Idalides de	ESC. SANTA CRUZ	4-104-31
21	ACOSTA, Idelis Y.	DIR. TRABAJO	4-201-948
22	ACOSTA, Irma	ECONOFINANZAS	4-702-1730
23	ACOSTA, Jaime	UNACHI-ADMON.	4-118-2397
24	ACOSTA, Juan José	PRIMER C. E. U	4-720-1052
25	ACOSTA, Juan José	PAZKO	4-125-1541
26	ACOSTA, Kenia	ESC. LOMA COLORADA	9-208-920
27	ACOSTA, Luis	ESC.DOLEGUITA	4-102-2131
28	ACOSTA, Manuel	MINJUVE	4-103-1930
29	ACOSTA, Neftalí	UNIV. TEC.	4-180-165
30	ACOSTA, Rodolfo	MAT. FRAGO	4-170-997
31	ACOSTA, Stalin	CONSA-UNACHI	4-125-1912
32	ACOSTA, Troadio	GUERRA Y CIA.	4-81-420
33	ACOSTA, Yiniva	B D A	4-143-783
34	AGUILAR, Anastacio	EMP. DE LEON	3-73-201
35	AGUILAR, Aquiles	UNACHI	4-71-268
36	AGUILAR, Edilma	LIB. REGIONAL	4-98-1039
37	AGUILAR, Eladio	ERA, S.A.	4-702-391
39	AGUILAR, Delmira	UNIV. TEC.	4-221-629
40	AGUILAR, Erika	BIPAN	4-265-755
41	AGUILAR, Luis	ROMERO	4-102-1849
42	AGUILAR, Kathia	U.LATINA	4-278-550
43	AGUILAR, Rosa de	MORAZAN	4-157-820
44	AGUIRRE, Aníbal	GUERRA Y CIA.	4-130-816
45	AGUIRRE, Damaris	L. REGIONAL	4-736-2307
46	AGUIRRE, Erick E.	COLPAN CHIRIQUI	4-157-248
47	AGUIRRE, José	D. VENT. VIDRIERAS	4-148-383
48	AGUIRRE, Lucila	UNACHI-ADMON	4-243-435
49	AGUIRRE, Próspero	UNACHI	4-44-532
50	AIZPURÚA, Abdiel	MIDA	4-138-1267
51	AIZPURUA, Belxis	ESC. FRANCIA	4-103-2346
52	AIZPURUA, Carlos	FOC-tarde	4-97-818
53	AIZPURUA, Carmen	UNIV. TEC.	4-210-858
54	AIZPURUA, Iris	FINANCOMER	4-235-634
55	AIZPURUA, Julieta de	UNACHI	4-97-1850

56	AIZPURUA, Julio	FOC-TARDE	4-101-2117
57	AIZPURUA, Manuel	C. BÁSICO SAN MATEO	4-253-217
58	AIZPURUA, María	FOC-mañana	9-106-2109
59	AIZPURUA, Marianela	C. BÁSICO SAN MATEO	4-103-2121
60	AIZPURUA, Martha de	C. DE AHORROS-MERC	8-208-1564
61	AIZPURUA, Nicomedes	UNACHI-FOC-tarde	4-122-2423
62	AIZPURUA, Omar	UNIV. TEC.	4-139-2492
63	AIZPURUA, Rocío	ESC. DOLEGUITA	4-141-157
64	AIZPURUA, Yadira de	AG. NORCAL	4-146-361
65	AIZPURUA, Yenmy	DUWEST	4-110-846
66	AIZPURUA, Yiniba	SAN FCO. DE ASIS	4-251-202
67	ALANIS, Alba Rosa	DIST. CH. UNIDA	4-124-2081
68	ALANIS, Anayansi	ANTONIO J.DE SUCRE	4-103-1840
69	ALFU, Patsy de	C. BÁSICO SAN MATEO	4-82-133
70	ALI, Maureem de	FINANCIERA EL SOL	4-146-176
71	ALMENGOR, Abdías	ROMERO	4-139-1946
72	ALMENGOR, Algis	MORAZAN	4-91-564
73	ALMENGOR, Carlos	DUWEST	4-118-915
74	ALMENGOR, Digna	LOTERIA	4-170-713
75	ALMENGOR, Gloria N.	COLABANCO	4-104-1452
76	ALMENGOR, Jamilet de	T. ELECTORAL	4-146-2684
77	ALMENGOR, Lourdes	UNACHI-ADMON	4-153-559
78	ALMENGOR, Luz Betty	FOC-MAÑANA	4-259-562
79	ALMENGOR, Martín	COLPAN	4-154-732
80	ALMENGOR, Mireira	IRHE	4-120-1287
81	ALMENGOR, Nitzia	ESC. LOMA COLORADA	4-161-962
82	ALMENGOR, Patricia de	MIVI	4-268-258
83	ALMENGOR, Rolando	ROMERO	4-169-116
84	ALVARADO, Daniel	INST. DAVID	4-220-858
85	ALVARADO, Esther	ESC. FRANCIA	4-125-169
86	ALVARADO, Ginna de	CONSA	4-126-2637
87	ALVARADO, Guiomar de	VILA HERMANOS	4-72-405
88	ALVARADO, Iván	B. D. A.	4-114-397
89	ALVARADO, Jasmina	MED. MILAGROSA	9-82-2028
90	ALVARADO, José F.	UNACHI	4-119-2012
91	ALVARADO, José Manuel	LIB. REGIONAL	4-151-348
92	ALVARADO, Laura de	U. DEL ISTMO	4-155-906
93	ALVARADO, Luis	CAJA AHORROS	4-240-34
94	ALVARADO, Maricela	ESC. DOLEGUITA	4-103-776
95	ALVARADO, Martha	UNACHI	4-59-346
96	ALVARADO, Yesit	TESA	4-176-152
97	ALVAREZ U., Antonio	A S S A	4-81-276
98	ALVAREZ, Diva de	SUPERMOTORES	4-254-81
99	ALVAREZ, Esther M.	SUPER MOTORES	4-155-1338
100	ALVAREZ, Illiam	IDAAN	4-229-489
101	ALVAREZ, José	ESC.LOMA COLORADA	4-151-737
102	ALVAREZ, Lucila	ESC. LA ESPERANZA	4-103-662
103	ALVAREZ, Nivia	IRHE	4-145-947
104	AMAT, Teófila de	FOC-mañana	4-76-707
106	ANDERSON, César	DIR. ADUANA	1-19-3627
107	ANDERSON, Graciela	BIPAN	4-217-763
108	ANDRADE, Rosario de	SAN AGUSTIN	4-138-1329
109	ANGUIZOLA, Bella Sol	APEDE	4-143-907
110	ANGUIZOLA, Carmen de	UNACHI	8-131-9174
112	ANGUIZOLA, Franklin	UNACHI	PE-2-64
113	ANGUIZOLA, Lizmarie de	CAJA AHORROS	PE-5-157
114	ANGUIZOLA, Margarita	FOC-TARDE	4-94-248
115	ANGUIZOLA, Markela de	C. AHORROS-MERC	4-177-129
116	ANGUIZOLA, Sandra	ESCUELA SAN MATEO	4-105-208
117	ANGUIZOLA, Vielka	UNACHI	4-153-181
118	ANGULO, Arnoldo	MIVI	4-132-117
119	ANTON, Ervin	IDIAP	4-238-352
121	AÑINO, Vilma	MINJUVE	2-85-1725

122	APARICIO, Ana	UNACHI		4-139-883
123	APARICIO, Blanca	IPACOOP		1-29-791
124	APARICIO, Clelia	C.BÁSICO SAN MATEO		4-117-145
125	APARICIO, Damaris	ESC. FRANCIA		4-128-1338
126	APARICIO, Delsiria	IPT A. ARIAS		4-195-143
127	APARICIO, Edgar	UNACHI		4-177-592
128	APARICIO, Elizabeth de	UNACHI		4-196-867
129	APARICIO, Eyda	ADMON-USMA		4-72-458
13O	APARICIO, Fernando	FOC-mañana		4-88-770
131	APARICIO, Ida Y.	KENTUCKY		4-270-940
132	APARICIO, Jorge	CABLE & WIRELESS		4-102-1127
133	APARICIO, Maritza	I R H E		4-118-611
134	APARICIO, Marlyn	UNACHI		4-88-886
135	APARICIO, Meivi	UNACHI		4-45-973
136	APARICIO, Olga	ORG. ELECTORAL		4-180-426
137	APARICIO, Roberto	BCO. GENERAL		4-246-509
138	APARICIO, Rhoderick	SAN AGUSTIN		4-95-320
139	APARICIO, Rubén D.	FERTICA		4-276-928
140	APARICIO, Vielka	ESC. NVO. VEDADO		4-242-622
141	APARICIO, Wilfredo	IMP.LAS PERLAS		4-700-789
142	ARAGON, Joice O. de	UNACHI-ADMON		8-227-896
143	ARAUZ, Abdiel	E.TAGAROPULOS		4-132-400
144	ARAUZ, Aixa de	E R A, S.A.		4-146-179
145	ARAUZ G., Alan Alexis	REGISTRO CIVIL		4-230-177
146	ARAÚZ, Alexander	PASCUAL HNOS.		4-713-890
147	ARAUZ, Amada	ESC. LASSONDE		4-100-1226
148	ARAUZ, Aminta	P.CICLO E. U.		4-102-1886
149	ARAUZ B., Amilcar	CONSA-FOC-TARDE		4-138-167
150	ARAUZ, Andrés A.	MITSUMOTOR		4-166-701
151	ARAUZ, Ariel	F.ICAZA Y CIA		4-43-681
152	ARAUZ, Carmen	UNACHI		4-197-195
153	ARAUZ, Carmen	INST. DAVID		4-118-375
154	ARAUZ, Carmen I.	IFARHU		4-106-370
155	ARAUZ, Didio	MORAZAN		4-100-2432
156	ARAUZ G., Diznarda	FOC-TARDE		4-122-2775
157	ARAUZ, Doris	ESC.LOMA COLORADA		4-117-2298
158	ARAUZ, Elio	UNACHI-ADMON.		4-194-922
159	ARAUZ, Elizabeth	MAQ.REP.OSORIO		4-155-378
160	ARAUZ, Erasmo	UNIV. TEC.		4-142-1083
161	ARAUZ, Francisca M. de	A S S A		4-108-515
162	ARAUZ, Francisco	CAJA AHORROS		4-137-2537
163	ARAUZ B., Franklin	FOC-TARDE		4-104-2130
164	ARAUZ, Guillermo	EMP. DE LEÓN		4-142-1246
165	ARAUZ, Irvin	U. DEL ISTMO		4-706-1021
166	ARAUZ, Itzel Omaira	MULTI-IMPRESOS		4-103-2772
167	ARAUZ, Jorge	BIOTECNICA CH.		4-191-972
168	ARAUZ, José	AEROPERLAS	4-726-863	
169	ARAUZ, José C.	I D A A N		4-166-362
170	ARAUZ, Julio	BIOTECNICA CH.		4-714-1036
171	ARAUZ, Kaila L.	CAFE DURAN		4-700-1443
172	ARAUZ, Laila	DIGEDECOM		4-217-564
173	ARAUZ, Leida	CONSA-ESC.LASSONDE		4-172-561
175	ARAUZ, Liliana	P. CICLO E.UNIDOS		4-102-1386
176	ARAUZ, Lisbeth	CONSA-PRIMARIA		4-136-1270
177	ARAUZ, Lisneth	SAN FCO. DE ASIS		4-702-679
178	ARAUZ, Magaly de	ALCALDIA		4-118-1344
179	ARAUZ, María E. de	UNIV. TEC.		4-210-891
180	ARAUZ, Marileya	MAQ.REP.OSORIO		4-720-267
181	ARAUZ, Martha	TESORERIA MPAL.		4-703-1470
182	ARAUZ, Migdalia	UNACHI-MORAZAN		4-139-1106
183	ARAUZ, Nelfany	UNACHI		4-125-1803
184	ARAUZ, Nelly de	ANTONIO J.DE SUCRE		4-120-169
185	ARAUZ, Nilsa	MIVI		4-224-340

186	ARAUZ, Olda de	UNACHI	1-24-1017
187	ARAUZ, Orlando R.	E R A, S.A.	4-702-466
188	ARAUZ, Reina de	ESC.DOLEGUITA	4-122-253
189	ARAUZ, Reyna	CONSA	4-176-302
190	ARAUZ, Ricardo	ARTEFACTOS CH.	4-143-523
191	ARAUZ, Roberto	COOP. ECASESO	4-175-860
192	ARAUZ, Sandra de	SAN FCO. DE ASIS	4-138-45
193	ARAUZ, Sonia M.	ESC.JOSE M. ROY	4-175-990
194	ARAUZ V., Zuleika	MIGRACIÓN	4-290-862
195	ARAYA, Fátima	UNACHI	8-265-690
196	ARCE, Humberto	UNACHI	4-97-2536
197	ARCHIVOLD, Franklin	VENT. VIDRIERAS	4-190-882
198	ARCHIBOLD, Nena	ANTONIO J.DE SUCRE	4-122-914
199	ARCHIBOLD, Thomas	BANCO UNIVERSAL	9-702-533
200	ARCIA, Alexis	UNACHI	4-113-820
201	ARCIA, Edilvio	FOC-mañana-P.E.U.	4-192-867
202	ARDILA, Guillermo	IDAAN	4-142-192
203	AREVALO, Luis	MORAZAN	4-94-272
204	ARJONA, Edgar L.	SAN AGUSTIN	4-126-773
205	ARJONA, Fátima	ESC. JOSE M.ROY	4-228-451
206	ARJONA, José	M O P	4-117-2511
207	ARJONA, Rocío	CAJA AHORROS	4-151-380
208	ARMUELLES, Mixela	ELECOM	4-250-369
209	AROSEMENA, Jorge	MIDA	2-85-2244
210	AROSEMENA, Marina de	ECON.Y FINANZAS	7-72-669
211	ARRACERA P., Elías	MULTI-IMPRESOS	4-210-541
212	ARROCHA, Clotilde	UNACHI	8-203-1634
213	ARROYAVE, Marianela	CAJA AHORROS	4-137-1150
214	ARROYAVE, Ricardo	CAJA DE AHORROS	4-138-1954
215	ATENCIO, Algis	UNACHI-ADMON.	4-268-69
216	ARROYO, Alma	ECON.Y FINANZAS	4-132-219
217	ATENCIO, Alfonso	ROMERO	4-111-71
218	ATENCIO, Brenda	UNACHI	4-127-852
219	ATENCIO, Ariel	D.W.DIKERSON	4-282-390
220	ATENCIO, Camilo	UNACHI	4-103-100
221	ATENCIO, Carlos Ramón	SUPER BARU	4-138-229
222	ATENCIO, Elizabeth	PASCUAL-USMA	4-108-868
223	ATENCIO, Eonith	CAJA AHORROS	4-267-932
224	ATENCIO, Generoso	MOP	4-111-50
225	ATENCIO, Ignacio	INST. DAVID	4-98-1263
226	ATENCIO, Itza	UNACHI	4-94-19
227	ATENCIO, Lilia	B D A	4-120-1302
228	ATENCIO, Lizneth	TESORERIA MPAL.	4-704-1493
229	ATENCIO, Luz Mireya	CONTABILIDAD MPIO.	4-112-890
230	ATENCIO, Miguel	VENT.VIDRIERAS	4-126-1720
231	ATENCIO, Tania	CONCEJO MPAL.	4-702-682
232	ATENCIO, Víctor R.	MITSUMOTOR	4-118-2101
233	AVENDAÑO, Ciro	IDAAN	4-96-310
234	AVENDAÑO, Evila	MORAZAN	4-106-716
235	AVILA, Ana C. de	MITSUMOTOR	4-118-2128
236	AVILA, Erick	SUPER BARU	4-703-435
237	AVILA, José de la Rosa	CERV. DEL BARU	4-285-512
238	AVILA, Sidia	I D A A N	4-96-2335
239	AVILES, Amílcar	UNACHI	4-174-300
240	AVILES, Dulcina I.	LIB. REGIONAL	4-151-630
242	AYALA, Alexander	MITSUMOTOR	4-721-1025
243	AYALA, Alexis	FOC-TARDE	4-86-695
244	AYALA, Eniczia	FERTICA	4-210-426
245	AYALA, Gabriel	TESA	4-200-447
246	AYALA, Teresa	UNACHI	4-207-864
247	AYARZA, Amyra	SAN FCO. DE ASÍS	3-103-767

-B-

248	BALLESTEROS, Carlos	M O P	4-75-893
249	BALI S., Milixa E.	MOT. DEL BARU	4-119-2096
250	BANDINI, Carmen	FOC-TARDE	4-125-843
251	BANDINI, Gilma de	MULTI CREDIT BANK	8-177-850
252	BARDAYAN, Mónica de	SAN AGUSTIN	4-168-214
253	BARRAZA, Graciela	UNACHI	4-204-137
254	BARRAZA, Sergio	I D A A N	4-141-154
255	BARRERA, Esther	MIGRACIÓN	4-113-414
256	BARRERA, Maruja	ESC.LOMA COLORADA	4-142-588
257	BARRIA, Alba	MORAZAN	4-123-619
258	BARRÍA, Edgar M.	MITSUMOTOR	4-229-14
260	BARRÍA, Eyda J.	ADMON-UNACHI	4-136-1275
261	BARRIA, Irma	ESC. SANTA CRUZ	4-102-773
262	BARRIA, Luis	ESC. LASSONDE	4-118-578
263	BARRIA, Régulo	ECONOFINANZAS	4-84-735
264	BARRÍA, Ricardo	UNIV. TEC.	4-137-2297
265	BARRÍA, Wilfrida	ESC. LOMA COLORADA	4-86-267
267	BARRÍAS, Sandra de	BCO. NACIONAL	7-85-1882
268	BARRIOS, Juvenal	FOC-TARDE	7-92-569
269	BARROSO P., Abdiel	M I V I	4-119-1694
270	BARROW, José	INST. DAVID	8-152-9
271	BARTLETT, Aida A.	F. ICAZA Y CIA.	4-137-1742
272	BATISTA, Alicia de	FINANCOMER	4-88-334
273	BATISTA, Ariadna	UNACHI	4-187-936
274	BATISTA, Aura	CABLE & WIRELESS	4-109-579
275	BATISTA, Blanca de	FOC-mañana	4-124-1041
276	BATISTA, Didio	RODELAG	9-102-2770
277	BATISTA, V. Irving O.	EUROPARTES CH.	4-278-841
278	BATISTA, Manuel	GUERRA Y CIA.	4-219-753
279	BATISTA, Marilin de	ELECOM	4-248-348
280	BATISTA, Mirna	UNACHI	4-152-700
281	BATISTA, Oriana	UNACHI	4-107-937
282	BATISTA, Roderick	MAREASA	4-150-623
283	BATISTA, Sixely	AEROPERLAS	4-245-467
284	BATISTA, Zulma de	CONSA	4-154-318
285	BAUGARDNER, Nellie	INST. DAVID	4-260-981
286	BEITIA, Berta Alicia	MORAZAN	8-171-433
287	BEITIA, Cecilia G. de	UNIV. TEC.	4-133-61
288	BEITIA, Eduardo	UNACHI	4-173-805
289	BEITIA, Fabio	MENDEZ & MENDEZ	4-197-193
290	BEITIA, Julia María	MORAZAN	4-107-27
291	BEITIA, Luis E.	ADMÓN-UNACHI	4-154-259
292	BEJERANO, Cristina	ECASESO	4-717-449
294	BEJERANO Thelma	LOTERIA	4-283-768
295	BELLOSTA, Carmen de	SAN AGUSTIN	1-19-2658
296	BELL, Beatriz	SAN AGUSTIN	4-183-47
297	BELTRÁN, Arturo	VENT.VIDRIERAS	E-4-1722
298	BENAVIDES, Denis	FOC-mañana	4-103-15
299	BERMUDEZ, Lizka	UNACHI-ADMON.	4-714-932
300	BERNAL, José	P. CICLO FRANCIA	4-124-2295
301	BERROA, Eliezer	FERTICA	4-180-58
302	BETHANCOURT, Heriberto	UNACHI-ADMON.	4-203-963
303	BETHANCOURT, Josué	U. LATINA-ADMON.	4-254-845
304	BETHANCOURT, Marlena	ESC. N. VEDADO	8-468-552
305	BETHANCOURT, Rocío	IRHE	4-125-2793
306	BETHANCOURT, Semidia de	IDAAN	4-75-648
307	BIANCO, Maricela de	BCO. NACIONAL	4-139-297
308	BIEBARASH, Marisol	IDAAN	8-202-999
309	BLANCO, Gladys de	ANTONIO J.DE SUCRE	4-111-761
310	BLAS, Ivonne	UNACHI	N-15-590
311	BOLAÑOS, Analida	A S S A	4-198-23

313	BONAGAS, Mayra	B D A	4-120-2685
314	BONILLA, Aracelly	U. TEC. ADMON.	4-151-930
315	BONILLA, Auristela	UNACHI	4-123-840
316	BONILLA, Juan	FOC-TARDE	4-109-198
317	BONILLA, María del C.	INST. DAVID	4-139-2029
318	BONILLA, Mirna	LIB. REGIONAL	4-72-765
319	BONILLA, Octavia de	ESC.LASSONDE	4-121-1706
320	BONILLA, Temístocles	D. ESQUIVEL,S.A.	4-171-194
321	BORREL, María	SUPER MOTORES	8-275-977
322	BOUCHE, Edna	TECNOLOGICA.ADMON	4-175-544
323	BOUCHE, Elva de	BCO. GENERAL	4-181-614
324	BOUCHE, Oscar	BCO. UNIVERSAL	4-164-510
325	BOYA, Urbano	D. ESQUIVEL	1-20-157
326	BOZZY, Edelka	INST. DAVID	4-139-1017
327	BOZZI, Héctor	CABLE & WIRELESS	4-63-281
328	BRAVO, Ana C. de	BCO. GENERAL	4-138-1317
329	BRAVO, Oscar	MORAZAN	7-46-58
330	BRENES, Aura	CABLE & WIRELESS	4-102-501
331	BRICEÑO, Corandino	D. ESQUIVEL,S.A.	4-82-771
332	BROCE, Esperanza	FOC-mañana	4-97-2385
333	BRUGIATI, Josefa	I D A A N	4-88-51
334	BRUGIATTI, Mayulli	SAN FCO. DE ASÍS	4-221-225
335	BRUÑA, Lilith	ESC. LASSONDE	4-104-1430
336	BRUÑA, Zafir	MORAZAN	4-101-18
337	BURKE, Carmen	UNACHI	6-47-1218

-C-

338	CABALLERO, Abimael	GUERRA Y CIA.	4-142-1430
339	CABALLERO, Adriano	CERV. DEL BARU	4-224-77
340	CABALLERO, Alexis	REP. DELTA	4-104-653
341	CABALLERO, Arcenio	C. O. N. S. A.	4-64-956
342	CABALLERO, Aris	ECONOFINANZAS	4-712-1616
343	CABALLERO, Carmen de	MOP	4-132-1763
344	CABALLERO, César	AEROPERLAS	4-716-1859
345	CABALLERO, Cristela	SAN AGUSTIN	4-208-523
346	CABALLERO, Delsa de	ESC. FRANCIA	4-91-912
347	CABALLERO, Digna	ESC. SAN MATEO	4-74-68
348	CABALLERO, Dionisio	CAJA AHORROS	4-76-925
349	CABALLERO, Diznarda	C. BASICO SAN MATEO	4-104-17
350	CABALLERO, Eleuterio	FOC-mañana	4-99-1151
351	CABALLERO, Elsa	UNACHI-ADMON.	2-56-413
352	CABALLERO, Elvia	IPACOOP	4-123-261
353	CABALLERO, Enrique	UNACHI	4-89-632
354	CABALLERO, Enrique	CERV.BARU	4-75-980
355	CABALLERO, Erroll	CABLE & WIRELESS	4-69-316
356	CABALLERO, Francisca de	IRHE	1-15-900
357	CABALLERO, Franklin	TESA	4-261-635
358	CABALLERO, Gladys	SAN FCO. DE ASIS	4-206-155
359	CABALLERO, Gloria de	MOT. DEL BARU	4-148-628
360	CABALLERO, Irma	UNACHI-ADMON.	4-212-462
361	CABALLERO, José	C. AHORROS	4-138-2312
362	CABALLERO, José Angel	D. ESQUIVEL, S.A.	4-173-855
363	CABALLERO, Julio	GUERRA Y CIA.	4-103-836
365	CABALLERO, Kathia	OTEIMA	4-717-1733
366	CABALLERO, Luis	MOP	4-103-2323
367	CABALLERO, Luis	UNACHI-ADMON	4-116-1082
368	CABALLERO, Luis M.	BCO. UNIVERSAL	4-290-398
369	CABALLERO, Manuel	FOC-TARDE	4-235-733
370	CABALLERO, María de	SAN AGUSTIN	E-8-539-89
371	CABALLERO, Miriam	DIR.TRABAJO	4-100-251
372	CABALLERO, Octavio	FOC-UNACHI	4-112-429
373	CABALLERO, Omar E.	MAQ. Y REP. OSORIO	4-263-656

374	CABALLERO, Pedro	UNACHI	4-123-2487
375	CABALLERO, Roberto	CABLE & WIRELESS	8-156-475
376	CABALLERO, Roberto	CHASE MANHATTAN	4-95-925
377	CABALLERO, Rolando	UNACHI	2-46-205
378	CABALLERO, Sandra	FINANCOMER	4-259-730
379	CABALLERO, Soraya	MED. MILAGROSA	4-267-72
380	CABALLERO, Velkys	SAN FCO. DE ASIS	4-141-102
381	CABALLERO, Yadira	CABLE & WIRELESS	4-230-364
382	CABALLERO, Yadira de	P. CICLO E.U.	4-105-718
383	CABALLERO, Yen	U. LATINA	4-276-358
385	CABRERA, Amalia	ESC. LOMA COLORADA	4-104-1265
386	CABRERA, Anabel	IRHE	PE-10-2437
387	CABRERA, Anelida	MORAZAN	4-126-157
388	CABRERA, Arletty	INSTITUTO DAVID	4-118-83
389	CABRERA, Odalys	ANTONIO J. DE SUCRE	4-125-2098
390	CABRERA, Tulvia de	ESC. FRANCIA	4-259-767
391	CACERES, Carmen de	SINAPROC	4-288-935
392	CACERES, Isabel	UNACHI	4-109-557
393	CACERES, Leyla de	INST. DAVID	4-123-382
394	CÁCERES, Luis A.	AGRO PRO	4-126-2292
395	CACERES M., Luis J.	ASESA	4-257-524
396	CACERES, María	ESC. NVO. VEDADO	4-174-647
397	CACERES, Orlando	UNACHI	4-146-1957
398	CACERES, Roberto	D. ESQUIVEL	4-157-616
399	CACERES, Sonia	UNACHI	4-70-503
400	CACERES, Zoila	UNACHI-ADMON.	4-286-209
401	CALDERON, Azucena	AEROPERLAS	4-702-1062
402	CALDERON, Cecilia	UNACHI	8-136-156
403	CALVO, Rubén	COCA-COLA	4-72-121
404	CAMACHO, Vilma de	ESC. LOMA COLORADA	4-116-1863
405	CAMARENA, Aida	ESC. DOLEGUITA	4-164-279
406	CAMARENA, Gloriedna	PASCUAL	4-714-1169
407	CAMARENA P., Irma	KENTUCKY	4-260-98
408	CAMARENA, Pablo	MULTI-IMPRESOS	4-97-2664
409	CAMARGO, Elvia	IFARHU	4-127-1513
410	CAMARGO, Mariana de	UNACHI	8-141-484
411	CAMARGO, Rafael	ASSA	4-271-142
412	CAMAÑO, Iris	B D A	4-132-373
413	CAMAÑO, Luz Mayra	FOC-TARDE	4-132-2744
414	CAMAÑO, Marianela	FOC-mañana	4-120-1279
415	CAMAÑO, Serafín	TESA	4-262-4
416	CAMPAÑA, Alexander	F. MERCANTIL	4-700-273
417	CAMPAÑA, Midiam de	IRHE	4-95-371
418	CAMPAÑA, Sarita P.	ADMON-UNACHI	4-142-1663
419	CAMPOS, Edelsi	ESC. LA ESPERANZA	8-493-450
420	CANALES, Onassis	AUTO PARTES CH.	4-748-1727
421	CANDANEDO, Ariel	GUERRA Y CIA.	4-157-803
422	CANDANEDO, Atalia	UNACHI-ADMON.	PE-12-10
423	CANDANEDO, Carmen	ESC. DOLEGUITA	4-255-989
424	CANDANEDO, César	INST. DAVID	4-255-783
425	CANDANEDO, Erick Elías	SUPER BARU	4-198-185
426	CANDANEDO, Johany	SUPERMOTORES	4-700-2185
427	CANDANEDO, José	TRIB. ELECTORAL	4-142-1450
428	CANDANEDO, Madelaine	MIGRACIÓN	4-203-180
430	CANDANEDO, Mónica	TESA	4-212-630
431	CANDANEDO, Octavio	GUERRA Y CIA.	4-69-247
432	CANDANEDO, Rosalinda de	IPT. A. ARIAS	4-101-100
433	CANDANEDO, Roderick	FOC-mañana	4-136-1316
434	CANDANEDO, Sheila	AGRO PRO	4-190-746
435	CANO, Dulia	GUERRA Y CIA.	4-188-595
436	CANO, Idys	UNACHI	4- 110-469
437	CANO, Isaías	GRUPO SÍLABA	4-137-713
438	CANO, Gisela	C.BASICO SAN MATEO	1-20-325

439	CANO, Roberto	ESC. JOSÉ M. ROY	4-106-758
440	CANTO, Coralia	CACECHI	4-101-2186
441	CANTO, Marta	ESC. FRANCIA	4-121-211
442	CANTO, Milvia de	MORAZAN	4-99-825
443	CANTO, Rafael	UNACHI	4-121-455
444	CAPARROSO, Angel	MORAZAN	4-94-844
445	CAPARROSO, Angela	UNACHI	4-94-844
446	CAPARROSO, Cecilia	MORAZAN	4-106-924
447	CARRACEDO, Juana	ESC. STA. CRUZ	4-114-699
448	CARRASCO, Gloriela	ESC.REP.FRANCIA	4-132-2009
449	CARRASCO, Exman R.	ESC. FRANCIA	4-281-79
450	CARRASCO, Zuleika	UNACHI-ADMON.	8-513-1475
451	CARREÑO, Heraido	UNACHI	4-121-2013
452	CARREÑO, Mayela de	INST. DEL SABER	4-139-1670
453	CARRERA, Alcides	I D A A N	4-166-353
454	CARRERA, Cecilia	UNACHI	4-142-1340
455	CARRERA, Edna	UNACHI-ADMON.	4-150-1004
456	CARRERA, Emérita de	SAN AGUSTIN	4-85-417
457	CARRERA, Irma	ESC. LA ESPERANZA	4-131-2651
458	CARRERA, Larissa	U.TEC. ADMON.	8-461-508
459	CARRERA, Luis	INST. DAVID	4-131-2171
460	CARRERA, Luz María	CABLE & WIRELESS	4-124-922
461	CARRERA, Marlene	AUTO ACC. DAVID	4-138-1338
462	CARRERA, Miriam de	AG. NORCAL	4-222-21
463	CARRERA, Nadia	CONSA	1-19-664
464	CARRERA, Olmedo	C. BASICO SAN MATEO	4-103-2543
465	CARRERA, Rosa Emilia	INST. DAVID	4-97-2065
466	CARRILLO, Daniel	UNACHI	8-419-188
467	CARRILLO, Ereida	ANTONIO J.DE SUCRE	4-215-650
468	CASCANTE, Gisel	GOBERNACION	4-274-137
469	CASCANTE, Jualdo	BCO. NAL.	4-105-36
470	CASTILLO, Abdiel	F. ICAZA Y CIA.	4-281-907
471	CASTILLO, Adela	UNACHI-ADMON.	4-239-558
472	CASTILLO, Alcibíades	EDUCACIÓN	4-90-92
474	CASTILLO, Ana Doris	ANTONIO J.DE SUCRE	4-104-1488
475	CASTILLO, Andrés	VENT. VIDRIERAS	4-114-647
476	CASTILLO, Aurelio	EDUCACION	4-105-229
477	CASTILLO, Aurelio	UNACHI-ADMON	4-132-2626
478	CASTILLO, Avelina de	ESC. LOMA COLORADA	4-106-485
479	CASTILLO, Benigno	ECONOFINANZAS	4-213-224
480	CASTILLO, Bernardino	CARDOZE & LINDO	4-115-300
481	CASTILLO, Carlos	REP. DELTA	4-137-1838
482	CASTILLO, Cecilia de	UNACHI	4-120-918
483	CASTILLO, Damaris de	INSTITUTO DAVID	4-239-905
484	CASTILLO, Davis	ECONOFINANZAS	4-292-416
485	CASTILLO, Dayra del C.	LIB. REGIONAL	4-251-20
486	CASTILLO, Demesio	CERV. BARU	4-104-1717
487	CASTILLO, Denys de	TECNOLOGICA-ADMON.	4-138-249
488	CASTILLO, Diana	ESC. LASSONDE	4-143-929
489	CASTILLO, Diego	F O C	4-119-2692
490	CASTILLO, Dioselina	P. CICLO E. UNIDOS	4-124-1936
491	CASTILLO, Doris	INST. DAVID	4-108-239
492	CASTILLO, Ed	CABLE & WIRELESS	4-74-36
493	CASTILLO, Edanelis	ERA, S.A.	4-136-2050
494	CASTILLO, Edith (de)	FOC-mañana	4-84-744
495	CASTILLO, Edgar	AG. CRUZ DEL SUR	4-202-279
497	CASTILLO, Edwin	W H DOEL	4-151-64
498	CASTILLO, Elizabeth	UNACHI	4-169-608
499	CASTILLO, Emelo	MITSUMOTOR	4-102-1350
500	CASTILLO, Enrique	DIST. DEL NORTE	4-212-45
501	CASTILLO, Eriberto	U. TEC. ADMON.	4-171-215
502	CASTILLO, Esperanza	REGISTRO CIVIL	4-138-1464
503	CASTILLO, Eusebio	ROMERO	4-249-432

504	CASTILLO, Eva H. de	UNIV. TEC.	4-116-1939
505	CASTILLO, Fátima de	UNACHI-ADMON.	8-265-690
506	CASTILLO, Feliciano	VENT.VIDRIERAS	4-243-097
507	CASTILLO, Franklin	CABLE & WIRELESS	4-101-1798
508	CASTILLO, Generoso	D. ESQUIVEL, S. A.	4-132-1053
509	CASTILLO, Gladys	ESC. SAN CRISTOBAL	4-128-849
510	CASTILLO, Gloriela	GASES DE CHIRIQUI	4-262-616
511	CASTILLO, Guillermina	IDAAN	4-132-1436
512	CASTILLO, Heradio	UNACHI-ADMON.	4-165-744
513	CASTILLO, Higinio	SUPER BARU	4-704-2437
514	CASTILLO, Idalia	UNACHI-ADMON.	4-700-372
515	CASTILLO, Irma de	UNACHI-ADMON.	4-148-650
516	CASTILLO, Jorge	INDUSTRIAS WAR	4-170-214
517	CASTILLO, José	CABLE & WIRELESS	4-104-1426
518	CASTILLO, José	DIST.LEON SILESKY	4-200-120
519	CASTILLO, José I.	D. ESQUIVEL, S.A.	4-235-757
520	CASTILLO, José M.	MULTI-IMPRESOS	6-39-816
521	CASTILLO, Julio	I D A A N	4-144-372
522	CASTILLO, Larissa	MED. MILAGROSA	1-35-384
523	CASTILLO, Liliana	LOTERIA	4-116-2017
524	CASTILLO, Lourdes de	IRHE	4-126-1148
525	CASTILLO, Luis	FOC-TARDE	4-99-26
526	CASTILLO, Luis A.	MENDEZ & MENDEZ	4-91-439
527	CASTILLO, Luzmila de	ESC.LOMA COLORADA	4-89-677
528	CASTILLO, Manuel	UNACHI-ADMON	4-138-2468
529	CASTILLO, Margel I.	INST. DAVID	4-125-1279
530	CASTILLO, María	TESORERIA MPAL.	4-189-259
531	CASTILLO, María Esther	DIST. LEON SILESKY	4-211-247
532	CASTILLO, Mario	CABLE & WIRELESS	4-97-2396
533	CASTILLO, Maritza	ESC. LOMA COLORADA	4-197-398
534	CASTILLO, Mary de	COOP. ECASESO	4-167-476
535	CASTILLO, Miguel	ORG. ELECTORAL	4-177-422
536	CASTILLO, Mirna	CABLE & WIRELESS	4-125-1587
537	CASTILLO, Mirna	MIDA	4-118-1172
538	CASTILLO, Mirta M.	IPT A. ARIAS	4-102-317
539	CASTILLO, Moisés	SUPER MOTORES	4-705-2455
540	CASTILLO, Nelda M.	ESC. LOMA COLORADA	4-139-978
541	CASTILLO, Nicolás	UNACHI-ADMON.	4-243-802
542	CASTILLO, Nicolás	USMA	4-148-819
543	CASTILLO, Orelis D.	CONCEJO MPAL.	4-703-264
544	CASTILLO, Ovidio	UNACHI	4-154-759
545	CASTILLO, Rafael	GUERRA Y CIA.	4-702-175
546	CASTILLO G., Ramón	MIGRACION	4-80-829
547	CASTILLO, Raquel	ESC.LOMA COLORADA	4-137-1497
548	CASTILLO, Rita	P.CICLO E. U.	4-215-954
549	CASTILLO, Roberto	UNACHI-ADMON	4-212-400
550	CASTILLO, Rodrigo	CABLE & WIRELESS	4-75-713
551	CASTILLO, Róger	U. LATINA-ADMON.	4-248-221
552	CASTILLO, Rosa	UNACHI-ADMON.	1-52-630
553	CASTILLO, Rosaura de	ORG. ELECTORAL	8-468-399
554	CASTILLO, Roxana	UNACHI-ADMON.	4-169-231
555	CASTILLO, Ruth	UNACHI-ADMON.	4-148-989
556	CASTILLO, Rubén	MIVI	4-143-698
557	CASTILLO, Silvana de	CERV. BARU	4-125-533
558	CASTILLO, Teodomiro	MITSUMOTOR	4-703-2370
559	CASTILLO, Teodora de	ESC. LOMA COLORADA	4-102-1143
560	CASTILLO, Tomás	MINJUVE	4-110-2203
561	CASTILLO, Velkis	SAN FCO. DE ASIS	4-702-1057
562	CASTILLO, Vicente	AUTO SERV. CH.	4-219-741
563	CASTILLO, Virgilio	P. CICLO E. UNIDOS	4-101-1312
564	CASTILLO, Vladimirio	UNACHI	4-63-288
565	CASTILLO, Walter	AG. CRUZ DEL SUR	4-236-116
566	CASTILLO, Wanda	UNACHI	7-58-370

567	CASTILLO, Yarisol	U. TECNOLOGICA	4-270-218
568	CASTELLANO, Gloria de	SAN AGUSTIN	4-149-577
569	CASTRELLON, Berta	INST. DAVID	4-101-2581
570	CASTRELLON, Edwin	MINJUVE	4-124-1385
571	CASTRELLON, Julio	A S S A	8-492-333
572	CASTRELLON, Kilmara	UNACHI-CONTADOR I	4-282-410
573	CASTRELLON, María E.	ESC. LOMA COLORADA	4-102-2576
574	CASTRELLON, Mariela	FOC-mañana	4-75-393
575	CASTRELLON, Martín J.	EUROPARTES CH.	4-149-623
577	CASTRO, Esther	ESC. SAN MATEO	4-82-307
578	CASTRO, José A.	U. TECNOLOGICA	4-74-612
579	CASTRO S., Sergio	CHASE	4-286-142
580	CAZORLA, Ricardo	TESA	8-506-602
581	CEBALLOS, Erick	MIVI	4-229-998
582	CEDEÑO, Adela	INST. DAVID	4-79-974
583	CEDEÑO, Aura	UNACHI-ADMON.	4-221-630
584	CEDEÑO, César	GUERRA Y CIA.	4-118-2024
585	CEDEÑO, Cristina	FOC-TARDE	4-138-2428
586	CEDEÑO, Eduardo	RDS	4-221-672
587	CEDEÑO, Enoris	MIGRACIÓN	4-72-877
588	CEDEÑO, Erodita de	UNACHI-ADMON.	4-226-299
590	CEDEÑO, Iraida	LOTERIA	4-132-1200
591	CEDEÑO, Luis	IDAAN	4-166-581
592	CEDEÑO, Mirla	U. LATINA	4-260-951
593	CEDEÑO, Ninfa	ANTONIO J.DE SUCRE	4-181-704
594	CEDEÑO, Teresa	UNACHI	4-102-2101
595	CENTENO, Celia	CONSA-MORAZAN	4-105-505
596	CENTENO, Dasni	UNACHI-ADMON.	4-121-1245
597	CENTENO, Marilyn	CONSA	8-443-446
598	CERCEÑO, Isael	GUERRA Y CIA.	4-161-894
599	CERRUD, Alcides	BIPAN	4-116-768
600	CERRUD, Amilcar	A S S A	4-101-1485
601	CERRUD, Elisa	P. CICLO E. U.	4-136-2448
602	CERRUD, Enelda de	UNACHI	2-264-378
603	CERRUD, Evelin de	U.TEC. ADMON	4-202-729
604	CERRUD, Harmodio	UNACHI-ADMON.	4-198-330
605	CERRUD, Jorge	M O P	4-138-55
606	CERRUD, Onilda	ADMON-USMA	4-1110-877
607	CERRUD, Róger	U.TECNOLOGICA	7-70-202
608	CERRUD, Omar	INST. DAVID	4-180-968
609	CERVANTES, Nicanor	ADUANA	4-154-245
610	CIANCA, Carmen	FOC	4-101-1604
611	CIANCA, Eduardo	R. DELTA	4-142-324
612	COCHERAN, Elena V. de	USMA	4-97-683
613	COCHERAN, Vicenta de	IRHE	4-79-912
614	CONCEPCION, Alba	MORAZAN	4-192-72
615	CONCEPCIÓN, Albis	D. ESQUIVEL	4-179-459
616	CONCEPCION, Alicia	ESC. LOMA COLORADA	4-109-136
617	CONCEPCION, Bertha E.	IFARHU	4-101-2021
618	CONCEPCION, Elvira	UNACHI	4-706-50
619	CONCEPCION, Esther	UNACHI-ADMON	4-211-483
620	CONCEPCION, José	UNACHI-ADMON.	4-288-859
621	CONCEPCIÓN, Magda de	U. LATINA	4-294-1794
622	CONCEPCIÓN, Nivia R.	REGISTRO CIVIL	4-171-143
623	CONCEPCION, Ramiro	C. BÁSICO SAN MATEO	4-139-1875
624	CONCEPCIÓN, Roderick	LIB. REGIONAL	4-704-1964
625	CONCEPCIÓN, Yessenia	DIR.TRABAJO	4-146-2741
626	CONCEPCION, Youser	BCO. UNIVERSAL	4-225-567
627	CONTRERAS, Bernardo	FINANCIERA EL SOL	4-201-149
628	CONTRERAS, Coralia de	DIST. DEL NORTE	4-101-2186
629	CONTRERAS, Eloísa	CABLE & WIRELESS	4-71-352
630	CONTRERAS, Graciela	DHL	4-220-568
631	CONTRERAS, Hildebrando	BCO. UNIVERSAL	4-290-110

632	CONTRERAS, Isabel de	DIR. TRABAJO	4-68-706
633	CONTRERAS, Jorge G.	UNACHI-ADMON.	4-155-632
634	CONTRERAS, Kathia	MIDA	4-243-804
635	CONTRERAS, Lidia E.	INST. DEL SABER	4-228-15
636	CONTRERAS, María del C.	U. DEL ISTMO	4-216-444
637	CONTRERAS, Onelia	MINJUVE	4-124-781
638	CONTRERAS, Roberto L.	COLABANCO	4-120-1105
639	CONTRERAS, Valerio	GUERRA Y CIA.	4-223-169
640	CONTRERAS, Victoria	AG. NORCAL	4-266-982
641	CÓRDOBA, Aurelia	CABLE & WIRELESS	4-106-403
642	CORDOBA, Claribel	B D A	4-139-709
643	CORDOBA, Marcelino	COLPAN	4-243-574
644	CORELLA, Edgar	ESC. LASSONDE	4-222-293
645	CORIAT, Carola	UNACHI	4-109-334
646	CORONADO, Iris I.	UNIV. TEC.	8-205-1451
647	CORONEL, José	UNACHI	1-24-952
648	CORRALES, Ricardo	IMPORT. LAS PERLAS	4-248-694
649	CORREA, Carlos	SINAPROC	4-165-16
650	CORREA, Delys	ESC. SAN CRISTOBAL	4-115-525
651	CORREA, Eibar	D. ESQUIVEL	4-136-1216
652	CORREDOR, Carlos	UNACHI	4-72-992
653	CORTEZ, Félix A.	BCO. UNIVERSAL	4-190-982
654	CORTES, María	ESC. N. VEDADO	4-78-869
655	CORTEZ, María	UNACHI-SECRETARIA	4-248-9
656	CORTEZ, Romelio	INST. DAVID	4-140-65
657	CORTEZ, Rosa	IPT. A.ARIAS	4-120-2605
658	CRUZ, Adolfo	LOTERIA	1-703-2008
659	CRUZ, Camilo	DIST.LEON SILESKY	4-164-316
660	CRUZ, Eusebia de	COM. e INDUSTRIAS	4-97-2256
661	CRUZ, Gilberto	B D A	4-108-561
662	CRUZ, Maristela	ESC. SAN CRISTOBAL	4-206-494
663	CUBILLA, Cándido	DURMAN ESQUIVEL	4-116-648
664	CUBILLA, Cecilia	MED. MILAGROSA	4-160-646
665	CUBILLA, Eladio	GUERRA Y CIA.	4-120-1355
666	CUBILLA, Enilda	CABLE & WIRELESS	4-104-1596
667	CUBILLA, Gladys de	ROMERO	4-103-584
668	CUBILLA, José	FOC-MAÑANA	4-119-1684
669	CUBILLA, Lorena	C O. N. S. A.	4-220-600
670	CUBILLA, María	UNACHI-ADMON.	4-152-706
671	CUBILLA, Yolanda	CONCEJO MPAL.	4-227-536
672	CUEVAS, Gricelda de	C.BASICO SAN MATEO	4-68-800
673	CUEVAS, Mirtza	P.CICLO E.UNIDOS	4-102-2796
674	CUMBRERA, Iris de	UNACHI	8-143-624

-CH-

675	CHACON, Elider	VENT.VIDRIERAS	4-285-216
676	CHACON, Rubiela	CACECHI, R.L.	4-186-457
677	CHANIS, Elías	INST.DAVID	8-166-239
678	CHANIS, Mabel de	MORAZAN	4-103-478
679	CHAVARRIA, César	AUTO SERV. CH.	4-167-399
680	CHAVARRIA, Enrique	UNACHI ADMON	4-191-284
681	CHAVARRÍA, Evaristo	IMPORT.LAS PERLAS	4-235-287
682	CHAVARRÍA, Flérida	ESC. STA. CRUZ	4-101-2131
683	CHAVARRIA, Ovidio	IDAAN	4-76-114
684	CHAVARRIA, Rosina	ESC. LOMA COLORADA	4-285-559
685	CHAVARRÍA, Sadia	LOTERIA	4-260-457
686	CHAVEZ, Ana L. de	U.LATINA-ADMON.	4-138-2328
687	CHAVEZ, Araceli	ESC. FRANCIA	4-122-2150
688	CHAVEZ, Digna	IDAAN	4-125-1114
689	CHAVEZ, Edgar F.	P.CICLO E.UNIDOS	4-94-299
690	CHAVEZ, Román	CACECHI	4-39-537
691	CHAVEZ, Rubén	MIVI	4-105-325

692	CHAVEZ, Yéssika	BIPAN	4-248-647
693	CHECA, Angélica	ESC. LOMA COLORADA	4-103-1421
694	CHICHACO, Gloria	CAJA AHORROS	4-213-223

-D-

695	DAVILA, Rosaura	IDAAN	4-75-840
696	DEAGO, Carlos	IMPORT. LAS PERLAS	4-268-623
697	DE ARCO, Amarilis	INST. DAVID	4-171-240
698	DE ARCO, Analis de	INST. DAVID	4-92-522
699	DE ARCO, Carlos	UNACHI	4-103-2020
700	DE ARCO, Sara	ESC. N. VEDADO	4-114-716
701	DE ARRIBA, Juan F.	GASES DE CHIRIQUI	4-741-1596
702	DE GRACIA, Ana M.	ESC. LOMA COLORADA	4-138-2044
703	DE GRACIA, Coralia	UNACHI	4-104-752
704	DE GRACIA, Denis de	UNACHI	4-83-971
705	DE GRACIA, Edilma	INSTITUTO DAVID	4-111-123
706	DE GRACIA, Guadalupe	UNACHI-ADMON.	4-274-939
707	DE GRACIA, Leyla de	INST. DAVID	4-115-790
708	DE GRACIA, Marlene	FOC-MAÑANA	4-108-591
709	DE GRACIA, Mayron O.	EUROPARTES CH.	4-181-878
710	DE GRACIA R., Nehil	BRENES Y ASOC.	4-256-930
711	DE GRACIA, Ricardo	KENTUCKY	4-719-655
712	DE GRACIA, Teresa	OTEIMA	4-237-737
713	DE GRACIA, Yaneth	ELECOM	1-42-86
714	DE LA LASTRA, Ramón	FERTICA	8-450-235
715	DE LA TORRE, Edgardo	UNACHI	4-153-525
716	DEL CID, Daira	CAJA AHORROS	4-282-669
717	DEL CID, Daysi	P. CICLO E.UNIDOS	4-117-166
718	DEL CID, Edith	UNACHI	4-94-295
719	DEL CID, Elis	MORAZAN	4-126-2466
720	DEL CID, Elsa de	ANTONIO J.DE SUCRE	2-89-825
721	DEL CID, Ernesto	ADUANA	4-102-9242
722	DEL CID, Geovanna	SUPER MOTORES	4-170-508
723	DEL CID, Iván	IDIAP	4-123-585
724	DEL CID, José Camilo	MAT. OSORIO	4-75-378
725	DEL CID, Juan	U.TEC. ADMON	4-102-1857
726	DEL CID, Juan	UNACHI	4-108-926
727	DEL CID, Lissette	DIST. LEON SILESKY	4-128-1007
728	DEL CID, María Elena	COOP. ECASESO	4-141-4659
729	DEL CID, Maribel	F. RODRIGUEZ	2-263-633
730	DE LEÓN, Carlos	MIDA	4-703-1607
731	DE LEON, Carmen	FOC-MAÑANA	4-113-954
732	DE LEON, Doris	UNACHI	4-161-357
733	DE LEON, Irma	UNACHI	4-169-643
734	DE LEÓN, Isabel	FOC- MAÑANA	4-124-2199
735	DE LEON, Isabel	ESC. JOSE M. ROY	4-116-1094
736	DE LEÓN, Josefa	FOC- MAÑANA	4-116-1049
737	DE LEON, María	IPACOOP	4-122-466
738	DE LEON, Marta	SAN AGUSTIN	4-120-889
739	DE LEÓN, Renzo	ELECOM	9-99-1838
740	DE LEON, Rudis	U.LATINA-ADMON	4-279-573
741	DE LEON, Vianor	M O P	4-72-868
742	DE LEON, Yardelis	UNACHI-ADMON.	4-727-1468
743	DE LISSER, Roberto E.	ARTEFACTOS CH.	4-225-798
744	DELGADO, Alejandro	UNACHI	1-12-494
745	DELGADO, Alex	MORAZAN	4-158-641
746	DELGADO, Benigno	UNACHI-ADMON	4-219-85
747	DELGADO, Cristina	MULTICREDIT BANK	4-705-53
748	DELGADO, Denis de	ALCALDIA	4-247-66
749	DELGADO, Dorila (de)	UNACHI	4-95-716
750	DELGADO, Didia	ESC.NVO.VEDADO	4-119-2744
751	DELGADO, Edith	ESC. SAN CRISTOBAL	4-101-1815

752	DELGADO, Erasmo	DIR. ADUANA	4-132-1316
753	DELGADO, Gilberto	JOSE Mª TORRIJOS	4-117-163
754	DELGADO, Lidia	FOC mañana	4-93-228
755	DELGADO, Roberto	PANAMOTOR	4-103-753
756	DELGADO, Rosaura de	IDAAN	4-97-1897
757	DELGADO, Rosmery	B D A	4-163-143
758	DE LOS RIOS, Ernesto	I D A A N	8-209-1607
759	DEL VALLE, Roberto	ANTONIO J. DE SUCRE	4-108-993
760	DEL VALLE, Xenia S.	C. O. N. S. A.	4-106-413
761	DE PUY, Brenilda de	ESC. FRANCIA	4-126-1578
762	DE PUY, Mizael I.	MULTI-IMPRESOS	4-119-2695
763	DE PUY, Moisés F.	MULTI-IMPRESOS	4-125-499
764	DE ROSAS, Elizabel	NACHI	4-132-85
765	DE ROUX, Melva de	UNIV. TEC.	4-165-871
766	DIAZ, Anel	CONSA	8-359-153
767	DÍAZ, Aura de	ADMON-UNACHI	4-108-315
768	DIAZ, César	COMPRAS MUNICIPIO	3-89-1944
769	DÍAZ, Gloria	UNACHI-ADMON.	4-105-26
770	DÍAZ, Jesús	B D A	4-95-381
771	DÍAZ, Lino	MIVI	8-299-434
772	DIAZ, María	FINANC. EL SOL	4-159-349
773	DIAZ, Maximina	ESC. LOMA COLORADA	7-84-1229
775	DIAZ, María Idalia	ECASESO	PE-5-404
776	DIAZ, Mayela R. de	RDS	4-141-173
777	DÍAZ, Otilio	CERV. DEL BARU	4-189-112
778	DIAZ, Renán Gabriel	RDS	4-113-959
779	DÍAZ N., Roberto E.	COLABANCO	4-118-2061
780	DIAZ, Tomás	TECNOLOGICA-ADMON.	4-109-598
781	DIEZ M., Dania	SAN FCO. DE ASIS	4-199-642
782	DIEZ, Esperanza	UNIV. LATINA	4-155-1324
783	DIEZ, Raúl Javier	CARDOZE & LINDO	4-167-402
784	DONALDS, Enrique	CONSA FOC	3-75-856
785	DONALDS, Esther de	M I V I	4-97-2611
786	DONOSO, Tatiana de	UNIV. TEC.	N-18-349

-E-

787	ECHEVERRIA, José	EMP.DE LEÓN	4-138-2222
789	ELIZONDO, Elvia	MIDA	4-155-2253
790	ELLINGTON, Alfredo	ECONOFINANZAS	1-26-1978
791	ESCALANTE, Jéssica	FOC-TARDE	4-204-748
792	ESCARREOLA, Dallys I.	MORAZAN	4-97-2393
793	ESCOBAR, Eric	CABLE & WIRELESS	8-247-998
794	ESPINO, Eira	FOC-MAÑANA	8-224-311
795	ESPINOSA, Aleida	ESC. JOSE M. ROY	4-113-561
796	ESPINOSA, Aminta	P.CICLO E. UNIDOS	4-294-2344
797	ESPINOSA, Edgardo	MORAZAN	4-113-672
798	ESPINOZA, Eduardo	CABLE & WIRELESS	4-103-1985
799	ESPINOSA, Eliécer	ASSA	4-154-422
800	ESPINOZA, Elidia	MIVI	4-122-854
801	ESPINOSA, Enilda	I.P.T. A. ARIAS	4-80-674
802	ESPINOZA, Erick	ELECOM	4-132-1140
803	ESPINOZA, Eulalio	VENT.VIDRIERAS	4-151-90
804	ESPINOZA, Ileana	MULTICREDIT BANK	4-265-903
805	ESPINOSA, Haydée	M O P	4-227-46
806	ESPINOSA, José F.	MAREASA	4-226-710
807	ESPINOSA, José María	ESC.LA ESPERANZA	4-701-1873
809	ESPINOSA, Julio	C.BASICO SAN MATEO	4-272-423
810	ESPINOSA, Leylis	M O P	4-124-2786
811	ESPINOSA, Luris	MULTI CREDIT BANK	4-287-536
812	ESPINOZA, María de	ESC. JOSE M. ROY	4-146-2780
813	ESPINOSA, María Nely	ESC.LOMA COLORADA	4-232-941
814	ESPINOZA, Miguelina	U. DEL ISTMO	4-706-813

815	ESPINOSA, Rina de	UNACHI	N-18-429
816	ESPINOZA, Rosa	IMP.LAS PERLAS	4-138-1345
817	ESPINOSA, Trinidad de	MORAZAN	4-117-414
818	ESPINOSA, Yolanda	TESORERIA MPAL.	4-280-501
819	ESQUIVEL, Ana Elida	SUPERMOTORES	4-271-598
820	ESQUIVEL, Doris de	FERTICA	4-87-600
821	ESQUIVEL, Erick	GUERRA Y CIA.	4-159-904
822	ESQUIVEL, Evelia	UNACHI	4-122-2745
823	ESQUIVEL, Lutzia	IPT A. ARIAS	4-113-390
824	ESQUIVEL, Mayra de	CABLE & WIRELESS	4-108-853
825	ESQUIVEL, Roberto	U S M A	4-141-179
826	ESQUIVEL, Rodny H.	CH. DE PAPEL	4-174-59
827	ESQUIVEL, Yissel	SAN AGUSTIN	4-248-351
828	ESTRADA, Haideé de	ESC.NVO. VEDADO	4-108-339
829	ESTRADA, Maribel	ESC. LASSONDE	8-229-1954
830	ESTRIBI F., Ilka	MORAZAN	4-101-8636
831	ESTRIBI, Nivia	B D A	4-132-1682

-F-

832	FABREGA, Elena de	MORAZAN	4-93-203
833	FALLAS, Rosilin	COM. e INDUSTRIAS	4-214-870
834	FERNÁNDEZ, Freedman	GUERRA Y CIA.	4-188-524
835	FERNANDEZ, Lucinio	F.ICAZA Y CIA.	4-286-210
836	FERNÁNDEZ, Wilmer	INDUSTRIAS WAR	4-286-211
837	FERNANDEZ, Yaquelín de	ESC.JOSE M. ROY	2-124-653
838	FLORES, Dimas	EDUCACIÓN	4-103-2575
839	FLORES, Juana	SAN AGUSTIN	4-98-857
840	FLORES, Leopoldo	BIOTECNICA CH.	4-200-695
841	FLORES, Ofelia	EDUCACIÓN	4-86-67
842	FLORES, Rosa	LOTERIA	4-139-1185
843	FLORES, Rosalía	INST. DAVID	8-460-67
844	FLORES, Ubaldina	CABLE & WIRELESS	4-105-199
845	FONSECA, Ivis D.	REGISTRO CIVIL	4-116-717
846	FORD, Edgar	A S S A	8-515-529
847	FOSSATTI, Roger	ESC.S.CRISTOBAL	4-267-268
848	FRAGO, Marlenys J.	IFARHU	4-284-381
849	FRAGO, Santiago	GUERRA Y CIA.	4-75-453
850	FRAGO, Vielka	BCO. NAL.	4-146-1872
851	FRAITTS, Miriam de	ECONOFINANZAS	4-72-265
852	FRANCESCHI, Iris C. de	BUDGET	4-138-1369
853	FRANCESCHI, María J.	I.P.T. A. ARIAS	4-103-193
854	FRANCO, María del R.de	FOC-MAÑANA	4-153-904
855	FUENTES, Emir	MIGRACIÓN	4-165-18
856	FUENTES, José	KENTUCKY	4-207-86
857	FUENTES, Judith O.	MULTI-IMPRESOS	4-161-513
858	FUENTES, Luis	INDUSTRIAS WAR	4-136-2235
859	FUENTES, Luisa	KENTUCKY	4-291-945
860	FUENTES, Lusmila	ESC. LASSONDE	4-201-588
861	FUENTES, Nadia de	MIVI	4-102-1959
862	FUENTES, Porfirio	FERTICA	4-122-1347
863	FUENTES, Sabino	KENTUCKY	4-219-848
864	FUENTES, Tamara	UNACHI-ADMON	4-287-4072

-G-

865	GAITÁN, Iliana	MULTI IMPRESOS	4-272-120
866	GAITAN, Jorge	IDAAN	4-193-859
867	GAITAN, María Elena	ORG. ELECTORAL	4-142-72
868	GAITAN, Maribel	EDUCACIÓN	4-239-234
869	GAITAN, Rosa S. de	BRENES Y ASOC.	4-101-703
870	GAITAN, Tomasa	ESC. SAN MATEO	4-124-306

871	GALVEZ, Catherine	COMPRAS MUNICIPIO	9-701-1802
872	GALVEZ H., Lorena	BIOTECNICA CH.	9-172-246
873	GALLARDO, Alonso	FOC-TARDE	4-123-1136
874	GALLARDO, Arnulfo	SAN AGUSTIN	4-166-932
875	GALLARDO, Aura	MINJUVE	4-97-1328
876	GALLARDO, Aurora	FOC-MAÑANA	4-100-2593
877	GALLARDO, Bernabel	GUERRA y CIA.	4-738-228
878	GALLARDO, Cirila	CABLE & WIRELESS	4-122-864
879	GALLARDO, José	ESC. SAN MATEO	1-7-83
880	GALLARDO, José A.	EDUCACION	4-101-2382
881	GALLARDO, Xiomara de	UNIV. TEC.	1-16-206
882	GALLIMORE, Alonzio	FERTICA	1-42-856
883	GALLIMORE, Elida de	LOTERIA	4-139-740
884	GALLIMORE, Gilberto	IPACOOP-UNACHI	1-45-894
885	GALVEZ, Eliseo	MULTI-IMPRESOS	4-254-282
886	GARCIA, Anderson	I R H E	7-74-92
887	GARCIA, Argelia de	FOC-TARDE	8-144-667
888	GARCÍA, Carlos	I P T	9-801-339
889	GARCIA, Carmen C.	FERTICA	4-168-379
890	GARCIA, Graciela	MULTI-IMPRESOS	4-171-842
891	GARCIA, Idalides	MULTI-IMPRESOS	PE-4-539
892	GARCIA, Danays	I.P.T. A. ARIAS	4-97-2095
893	GARCIA, Luis	INST. DAVID	4-144-486
894	GARCÍA, Susana	MIVI	4-294-1914
895	GARCÍA, Vielka	BANCO DEL ISTMO	4-212-243
896	GARIBALDO, Cristóbal	FOC-MAÑANA	4-113-138
897	GARRIDO, Miguel	FOC- MAÑANA	4-111-8
898	GOMEZ, Andrés	CABLE & WIRELESS	4-100-93
899	GOMEZ, Aracelly de	MORAZAN	4-132-831
900	GOMEZ, Ana	CABLE & WIRELESS	4-139-1593
901	GOMEZ, Andy	U S M A	4-202-737
902	GOMEZ, Arquimedes	UNACHI-ADMON.	4-152-3154
903	GOMEZ, Aura del C.	P.CICLO E.U.	4-200-42
904	GOMEZ, Carlos	IDAAN	8-200-2000
905	GOMEZ M., Cecilia	U.TEC.ADMON.	4-120-641
906	GOMEZ, César	FELIPE RODRIGUEZ	4-700-189
907	GOMEZ, Eduardo	GUERRA Y CIA.	4-145-16
908	GOMEZ, Einar	INST. DAVID	4-126-2211
909	GOMEZ, Elda de	CAJA DE AHORROS	4-125-1008
910	GOMEZ, Filiberto	FOC-MAÑANA	4-84-814
911	GOMEZ, Gilma de	I D A A N	4-108-784
912	GOMEZ, Itzela	ESC. SAN CRISTOBAL	4-141-994
913	GOMEZ, José Antonio	GUERRA Y CIA.	4-146-2573
914	GOMEZ, Lil A.	ESC. DOLEGUITA	4-104-321
915	GÓMEZ, Luis A.	MIDA	8-239-265
916	GOMEZ, Magda	C.BÁSICO SAN MATEO	4-102-1263
917	GOMEZ, Marcia de	BCO. NAL.	4-200-573
918	GOMEZ, Melissa	FERTICA	4-201-84
919	GOMEZ, Miriam de	FOC-MAÑANA	4-136-2682
920	GOMEZ, Niurka	TESA	4-126-867
921	GOMEZ, Roberto	FERTICA	4-104-1485
922	GOMEZ, Salvador E.	PAZKO	4-197-15
923	GOMEZ, Yarisa	UNACHI-ADMON.	4-719-1806
924	GONZALEZ, Agustín	RDS	4-146-2211
925	GONZALEZ, Aida	ESC. LASSONDE	4-188-448
926	GONZALEZ, Alcibíades	UNACHI-ADMON.	4-700-202
927	GONZALEZ, Alcides	INST. DAVID	4-99-1884
928	GONZALEZ, Alcira	FOC-MAÑANA	4-237-803
929	GONZALEZ, Alexander	INDUSTRIAS WAR	4-700-158
930	GONZALEZ, Ana C. de	TESA	8-223-1697
931	GONZALEZ, Ana L.	ESC. LOMA COLORADA	4-105-953
932	GONZALEZ, Ana L.	ESC. SAN MATEO	4-257-54
933	GONZALEZ, Anayansi	BANCO. NAL.	8-229-885

934	GONZALEZ, Anayansi de	F.GOVIMAR	4-256-813
935	GONZALEZ, Anayansi	ING.MUNICIPAL	4-115-348
936	GONZALEZ, Aracelly	I.P.T. A. ARIAS	4-80-225
937	GONZÁLEZ, Aristides	FOC- MAÑANA	4-112-87
938	GONZALEZ, Arnold	ESC. SAN MATEO	4-75-573
939	GONZALEZ, Arturo	MITSUMOTOR	4-703-1493
940	GONZALEZ, Angel	IDAAN	4-96-1778
941	GONZALEZ De M., Angel	UNACHI	8-139-347
942	GONZALEZ, Carlos	BANCO. NAL.	4-119-2120
943	GONZALEZ, Carlos E.	FOC-MAÑANA	4-93-818
944	GONZALEZ, Carlos	M O P	4-164-306
945	GONZALEZ, Carmen	UNACHI-ADMON.	4-138-2579
946	GONZALEZ, Darío	CABLE & WIRELESS	4-94-784
947	GONZALEZ, Deyanira	ESC. JOSE M. ROY	4-99-2461
948	GONZALEZ, Diana	INST. DAVID	4-245-895
949	GONZALEZ, Domitila de	ALCALDIA	4-147-2316
950	GONZALEZ, Doris	B D A	4-192-973
951	GONZALEZ, Dovis	MULTI-IMPRESOS	6-58-1065
952	GONZALEZ, Edie	ELECOM	4-174-643
954	GONZALEZ, Eduardo	U. LATINA-ADMON.	1-39-313
955	GONZALEZ, Eira	UNACHI-ADMON.	4-290-874
956	GONZALEZ, Elizabeth de	BANCO NAL.	4-242-173
957	GONZALEZ, Elizabeth	TESA	4-107-936
958	GONZALEZ, Eneida G. de	FOC-TARDE	4-95-550
959	GONZALEZ, Enilda de	MED. MILAGROSA	4-103-693
960	GONZALEZ, Erick	D. ESQUIVEL	4-108-844
961	GONZALEZ, Evangelina	RODELAG	4-96-439
962	GONZALEZ, Faustino	MORAZAN	4-124-6104
963	GONZALEZ, Fidelina	AUTO-PARTES	4-184-735
964	GONZALEZ, Geneth de	DIST.LEON SILESKY	8-485-138
965	GONZALEZ, Genoveva	MED. MILAGROSA	4-203-320
966	GONZALEZ, Guadalupe	ESC.DOLEGUITA	4-101-2349
967	GONZALEZ, Heiddy	UNACHI-ADMON.	4-250-524
968	GONZALEZ, Idalides	FOC-MAÑANA	4-125-1576
969	GONZALEZ, Iria de	TESA	4-105-260
970	GONZALEZ, Isabella	ESC.LOMA COLORADA	4-139-935
971	GONZALEZ, Isaías	DIR. DE ADUANA	4-112-955
972	GONZALEZ, Ismael	ESC. FRANCIA	4-123-1910
973	GONZALEZ, Ismael	UNACHI-ADMON.	4-204-705
976	GONZALEZ, Jennifer	GRUPO BAMBINA	4-701-2033
977	GONZALEZ, Joaquín	CONSA-EDUCACIÓN	2-78-1358
978	GONZÁLEZ, José	AEROPERLAS	4-287-735
979	GONZALEZ, José A.	FOC-MAÑANA	4-79-784
980	GONZALEZ, José del C.	CABLE & WIRELESS	8-175-578
981	GONZALEZ, José D.	UNACHI-ADMON.	4-256-221
982	GONZALEZ, Juana de	IDIAP	4-106-479
983	GONZALEZ, Leonel	IFARHU	4-145-731
984	GONZALEZ, Lidia	LIB. REGIONAL	4-113-335
985	GONZALEZ, Luis	MITSUMOTOR	4-196-335
986	GONZALEZ, Luis Alberto	GUERRA Y CIA.	4-129-1974
987	GONZALEZ, Luis Alberto	SUPER BARU	4-716-2358
988	GONZALEZ, Magda	TESORERIA MPAL.	4-146-2562
989	GONZALEZ, Maiela	MIVI	4-148-1
990	GONZALEZ, Manuel	U. TEC. ADMON.	4-103-1685
991	GONZALEZ, María	CACECHI	4-717-450
992	GONZÁLEZ, María	ESC.NVO. VEDADO	9-129-721
993	GONZALEZ, María	ESC. LASSONDE	4-125-2085
994	GONZALEZ, María	INST. DAVID	4-127-2064
995	GONZALEZ, María	UNACHI-ADMON.	4-121-433
996	GONZALEZ, María E.	ESC. LA ESPERANZA	4-209-32
997	GONZALEZ, Maribel	BCO. GENERAL	2-82-294
998	GONZALEZ, Marina	C.BASICO SAN MATEO	4-102-1995
999	GONZALEZ, Maritza	M O P	4-132-538

1000	GONZALEZ, Martha E.	IPACOOP	4-139-262
1001	GONZALEZ, Martín	DIR. DE ADUANA	4-143-406
1002	GONZALEZ, Maritza	UNACHI	4-126-722
1003	GONZALEZ, Maritza	MINJUVE	4-178-157
1004	GONZALEZ, Marlenys	CAJA DE AHORROS	4-273-95
1005	GONZALEZ, Marlenys de	ANTONIO J.DE SUCRE	4-161-958
1006	GONZALEZ, Marisol de	COMPRAS MUNICIPIO	4-716-1196
1007	GONZALEZ, Mercedes	ESC. N. VEDADO	4-114-671
1008	GONZALEZ, Mitzi	ASESA	4-191-021
1009	GONZALEZ, Nancy de	RDS	4-223-464
1010	GONZALEZ, Nery	ESC. SAN MATEO	4-93-552
1012	GONZALEZ, Odilio	FOC-MAÑANA	4-112-358
1013	GONZALEZ, Olga de	DIST. DEL NORTE	4-98-2163
1014	GONZALEZ, Olivia	FINANCIERA EL SOL	4-160-692
1015	GONZALEZ, Omar G.	RDS	4-162-548
1016	GONZALEZ, Orlando	GUERRA Y CIA.	4-201-764
1017	GONZALEZ, Pedro	UNACHI	4-128-1245
1018	GONZALEZ, Pedro	AUTO CENTRO	4-717-1856
1019	GONZALEZ, Raúl	I D A A N	8-96-830
1020	GONZALEZ, Regino	CACECHI	4-165-803
1021	GONZALEZ, Ricardo	AUTO PARTES CH.	4-155-2504
1022	GONZALEZ, Ricardo	CABLE & WIRELESS	4-101-2346
1023	GONZALEZ, Roger	LOTERIA	4-179-193
1024	GONZALEZ, Rolando E.	AUTO ACC.DAVID	4-257-077
1025	GONZALEZ, Ruth	ROMERO	4-120-769
1026	GONZALEZ, Sheila de	ESC. JOSE M. ROY	4-94-763
1027	GONZALEZ, Telmo	A S S A	4-185-985
1028	GONZALEZ, Valezca	F. EL SOL	1-31-285
1029	GONZALEZ, Verónica	IPACOOP	4-287-167°
1030	GONZALEZ, Yéssica	COMPRAS MUNICIPIO	4-714-2037
1031	GONZALEZ, Yuri E.	DUWEST	4-248-835
1032	GRACIA, Rosmery	L. REGIONAL	4-212-564
1033	GRAEL, Yaniré	SAN AGUSTIN	8-473-882
1034	GRAJALES, Tootsie	MOP	4-137-1954
1035	GRANADOS, Arkel	GRUPO BAMBINA	PE-11-63
1036	GRATACOS, Osirys	OTEIMA	8-446-400
1037	GRIMAS, Carlos A.	IPACOOP	4-139-1519
1038	GRUBER, Heidy G. de	SAN AGUSTIN	4-103-1949
1039	GUARDIA, Kenia	ECONOFINANZAS	2-87-1128
1040	GUERRA, Adays	CACECHI	4-151-3470
1041	GUERRA, Alfredo	FOC-MAÑANA	4-121-1139
1042	GUERRA, Antonio	CAJA AHORROS-MERC.	4-241-940
1043	GUERRA, Ana María	GRUPO SILABA	4-128-1070
1044	GUERRA, Aristides	IDIAP	4-118-2395
1045	GUERRA, Aurelia de	ESC. JOSE M. ROY	4-158-268
1046	GUERRA, Dayra	CABLE & WIRELESS	4-116-2504
1047	GUERRA, Dilsa	ESC. FRANCIA	4-97-899
1048	GUERRA, Diomedes	ROMERO	4-164-345
1049	GUERRA, Edith Y.	ESC. FRANCIA	4-123-82
1050	GUERRA, Edwin	UNACHI-ADMON.	4-106-838
1051	GUERRA, Elga	COOP. ECASESO	4-287-455
1053	GUERRA, Eneida	C.BÁSICO SAN MATEO	4-209-249
1054	GUERRA, Esther	ESC. N.VEDADO	4-98-1245
1055	GUERRA, Felícita	ELECOM	4-147-38
1056	GUERRA F., Guillermo	MITSUMOTOR	4-140-100
1057	GUERRA, Guillermo	ECONOFINANZAS	4-200-412
1058	GUERRA, Jesús	MIDA	1-14-983
1059	GUERRA, Jorge	IDAAN	4-214-242
1060	GUERRA, Jorge Luis	ARTEFACTOS CH.	4-244-947
1061	GUERRA, José	F. RODRIGUEZ	4-702-249
1062	GUERRA, Kenia de	COMERCIO E IND.	2-102-33
1063	GUERRA, Luz	PASAPORTES	4-244-986
1064	GUERRA, Luz Panamá	ESC. SAN CRISTOBAL	4-180-916

1065	GUERRA, María del C.	U.LATINA-ADMON.	1-34-701
1066	GUERRA, Marino	SUPER BARU INT.	4-78-457
1067	GUERRA, Miguel	B D A	4-82-280
1068	GUERRA, Nilka I.	INST. DAVID	4-128-62
1069	GUERRA, Nisla	UNACHI-ADMON.	4-132-2429
1070	GUERRA, Pablo	UNACHI	4-126-1668
1071	GUERRA, Patrocinio	CABLE & WIRELESS	4-75-131
1072	GUERRA, Rosario	FOC-TARDE	4-120-914
1073	GUERRA, Rosa Elena	INST. DAVID	4-110-984
1074	GUERRA F., Santana	UNACHI	4-138-1310
1075	GUERRA, Xenia de	ALCALDIA	4-176-611
1076	GUERRA, Yira	ESC. FRANCIA	4-120-2293
1077	GUERRERO, Abel	GUERRA Y CIA.	4-259-427
1078	GUERRERO, Amparo de	SAN AGUSTIN	E-8-50-522
1079	GUERRERO, Ernesto	TECNOLOGICA-ADMON.	4-190-603
1080	GUERRERO, Oliver	AG. CRUZ DEL SUR	4-207-434
1081	GUEVARA, José Gonzalo	MORAZAN	8-97-282
1082	GUEVARA, Maribel de	UNACHI-ADMON.	4-147-515
1083	GUEVARA, Roberto	UNACHI	4-118-2274
1084	GUEVARA, Rosemary	U.TECNOLOGICA	4-138-1154
1085	GUILBAUTH, Edgardo	LOTERIA	4-142-558
1086	GUILLEN, Celvy de	MORAZAN	4-121-230
1087	GUILLÉN, Marco Tulio	UNACHI	8-442-291
1088	GUILLEN, Onésimo	DIR. ADUANA	4-134-2684
1089	GUILLEN, Rosa	ESC. SAN CRISTOBAL	4-105-998
1090	GUTIERREZ, Alcibíades	MIDA	4-96-44
1091	GUTIERREZ, Aníbal	INDUSTRIAS WAR	4-256-128
1092	GUTIERREZ, Antonia de	FOC-TARDE	4-108-159
1093	GUTIERREZ, Dimas	INDUSTRIAS WAR	4-208-034
1094	GUTIERREZ, Edith	TESORERIA MPAL.	4-102-2325
1095	GUTIERREZ, Edith	ESC.LOMA COLORADA	4-117-1787
1096	GUTIERREZ, Erroy	AEROPERLAS	4-248-695
1097	GUTIERREZ, Gonzalo	UNACHI-ADMON.	4-137-1306
1098	GUTIERREZ, Leonel	I D A A N	4-166-519
1099	GUTIERREZ, Marcelina	MAQ. REP.OSORIO	4-100-1037
1100	GUTIERREZ, Mariel del R.	LIB. REGIONAL	4-700-32
1101	GUTIERREZ, Néstor W.	GUERRA Y CIA.	4-213-446
1102	GUTIERREZ, Noris	UNACHI	4-101-10618
1103	GUTIERREZ, Noris de	I.P.T. A. ARIAS	4-100-579
1104	GUTIERREZ, Omaira	IDAAN	4-295-47
1105	GUTIERREZ, Sonny	ASESA	4-171-856
1106	GUTIERREZ, Teonide	ESC. FRANCIA	4-95-921
1107	GUZMAN, Maricela de	UNACHI-ADMON.	8-172-297

-H-

1108	HALPHEN, Gabriela	MULTI IMPRESOS	4-137-250
1109	HALPHEN, Karina	MULTI IMPRESOS	4-283-382
1110	HARDMAN, Yamileth	AEROPERLAS	4-704-722
1111	HENRIQUEZ, Alfredo	MIDA	4-99-2056
1112	HERNANDEZ, Abdiel	DIST. DEL NORTE	4-164-505
1113	HERNANDEZ, Abraham	BANCO NAL.	4-113-181
1114	HERNÁNDEZ, Adelicia	SAN FCO. DE ASÍS	4-270-226
1115	HERNANDEZ, Ana de	C.BASICO SAN MATEO	4-133-308
1116	HERNANDEZ, Daisi	ANTONIO J.DE SUCRE	4-99-2521
1117	HERNANDEZ, Dayra de	CABLE & WIRELESS	4-101-733
1118	HERNANDEZ, Elena	INST. DAVID	4-101-1069
1119	HERNANDEZ, Felipe	MORAZAN	4-132-196
1120	HERNANDEZ, Franklin	ESC.NVO.AMANECER	4-114-687
1121	HERNANDEZ, Herlinda	SUPER MOTORES	4-178-844
1122	HERNANDEZ, Iván	DUWEST	4-262-429
1123	HERNANDEZ, Jorge	D. ESQUIVEL	4-278-456
1124	HERNANDEZ, Juan	CABLE & WIRELESS	4-142-2258

1125	HERNANDEZ, Juana	FOC-TARDE	2-111-438
1126	HERNANDEZ, Melva de	ORG. ELECTORAL	4-174-103
1127	HERNANDEZ, Orlando	BIOTECNICA CH.	4-114-267
1128	HERNANDEZ, Rodrigo	AG. NORCAL	4-254-302
1129	HERNANDEZ, Sara	IDIAP	1-20-316
1130	HERNANDEZ, Valentín	MORAZAN	4-123-369
1131	HERNANDEZ, Yasmín H.	REGISTRO CIVIL	4-287-662
1132	HERRERA, Alana	INST. DAVID	4-164-871
1133	HERRERA, Elpidio	S. AGUSTIN FOC-T.	7-60-928
1134	HERRERA, Gregoria	ESC.LOMA COLORADA	9-125-489
1135	HERRERA, Lourdes	CABLE & WIRELESS	4-125-998
1136	HERRERA, María G. de	IDAAN	8-519-229
1137	HERRERA, María Y. de	UNACHI	4-88-491
1138	HERRERA, Maribel	FOC-TARDE	4-173-112
1139	HERRERA, Nancy	ESC. SAN CRISTOBAL	4-122-286
1140	HERRERA, Olga	MINJUVE	4-147-107
1141	HERRERA, Oscar	UNIV. TEC.	1-14-677
1142	HERRERA, Pedro	ROMERO	2-15-112
1143	HERRERA, Robinson	IDAAN	7-111-426
1144	HERRERA, Romualda de	EDUCACIÓN	4-97-469
1145	HERRERA, Sandra	IDIAP	2-108-211
1146	HIDALGO, Eva de	IRHE	4-101-235
1147	HIDALGO, Jessica	SAN AGUSTIN	4-263-765
1148	HILS O. Sonya	KENTUCKY	4-144-985
1149	HORNA, Martín	PANABANK	4-149-533
1150	HURTADO, Bolívar	IPACOOP	4-183-779
1151	HURTADO, Eliseo	B D A	4-214-742

-I-

1153	IBARRA, Luis	MIVI	4-168-529
1154	IBARRA, Yemal	INDUSTRIAS WAR	4-220-581
1155	IBARRA, Zoraida de	UNACHI	4-103-1162
1156	ISAACS, Martina	TRIB. ELECTORAL	4-142-388
1157	ISAACS, Nelsy de	ALCALDIA	4-132-901
1158	ITURRALDE, Carmen C.	BANCO UNIVERSAL	4-268-369

-J-

1159	JAEN, Carmen P. de	FOC-MAÑANA	8-155-76
1160	JAEN, Omaira de	CAJA AHORROS	4-116-695
1161	JAEN, Ricardo	U. LATINA-ADMON.	4-281-777
1162	JAEN, Roderico	CACECHI	8-326-515
1163	JARAMILLO, Ana de	CABLE & WIRELESS	4-103-1076
1164	JARAMILLO, Clara	IFARHU	4-167-377
1165	JARAMILLO, Dalys	FOC-TARDE	4-102-2473
1166	JARAMILLO, Itza I.	MED. MILAGROSA	4-294-1299
1167	JARAMILLO, Itzel	UNACHI-ADMON.	4-154-720
1168	JARAMILLO, Itzel	MOP	4-89-628
1169	JARAMILLO, Leila Itzel	DIR. TRABAJO	4-143-710
1170	JARAMILLO, Maribel	COLPAN	4-154-327
1171	JIMÉNEZ, Alexis	UNACHI	7-52-900
1172	JIMENEZ, Emilia M.	ESC. JOSE M. ROY	4-101-1861
1173	JIMÉNEZ, Frank	CABLE & WIRELESS	4-112-487
1174	JIMÉNEZ, Javier	CAJA AHORROS	4-158-185
1175	JIMÉNEZ, Marianela C.	TESA	4-235-855
1176	JIMENEZ, Oscar	AEROPERLAS	PE-9-2443
1177	JIMÉNEZ, Rafael	VENT.VIDRIERAS	4-136-2745
1178	JIMENEZ, Ramiro	UNACHI-ADMON	4-702-489
1179	JIMÉNEZ, Sibelis	MINJUVE	4-122-160
1180	JIMÉNEZ, Thilcia H.	L. REGIONAL	4-141-649
1181	JIMENEZ, Victoria de	INST. DAVID	4-87-929
1182	JIPSION, Gabriel	UNACHI-ADMON	8-435-770

1183	JOLY, Luz G.	UNACHI	3-46-8
1184	JONES, Edgar	ING.MUNICIPAL	4-125-1869
1185	JONES, Jorge Luis	CERV. DEL BARU	4-285-512
1186	JORDAN, Antonino	C O N S A	4-219-636
1187	JORDAN, Edgar	VENT. VIDRIERAS	4-282-861
1188	JORDAN, Rexnel	CERV. DEL BARU	4-211-633
1189	JORDAN, Rocío	L. REGIONAL	4-717-1489
1190	JORGE, Enilda de	FOC-TARDE	4-138-2241
1191	JOVANE, Anamarie	ASSA	4-140-569
1192	JOVANE, Margarita	IRHE	8-155-457
1193	JUAREZ, Angura de	ANTONIO J.DE SUCRE	8-279-868
1194	JUAREZ, Celsa de	ESC. FRANCIA	4-75-280
1195	JURADO, Brixy	OTEIMA	4-703-637
1196	JURADO, Ivis	ALCALDIA	4-141-64
1197	JURADO, María	ESC. N. VEDADO	4-230-399
1198	JURADO, Mitzi Karina	JOYERÍA LA PERLA	4-738-2496
1199	JURADO, Renery	LOTERIA	4-286-67
1200	JURADO, Ricardo M.	FERTICA	4-138-1600
1201	JURADO, Roselia	INSTITUTO DAVID	4-184-874
1202	JUSTAVINO, Arquel	MULTI-IMPRESOS	4-139-2626
1203	JUSTAVINO, Filipina de	ESC. SAN CRISTOBAL	4-120-2231
1204	JUSTAVINO, Mirna	WH DOEL	4-712-2220
1205	JUSTAVINO, Wanda C. de	FOC-TARDE	4-142-643
1206	JUSTINIANI, Enilda	BIPAN	4-209-636

-K-

1207	KAA, Diomedes	ESC.DOLEGUITA	7-76-28
1208	KANT, María de	ROMERO	4-139-2559

-L-

1209	LANDAU, Ilsa	INST. DAVID	4-98-438
1210	LANDERO, Arlettys	MIN. TRABAJO	8-232-162
1211	LANDERO, Damaris	BCO. NAL.	4-139-1791
1212	LANDERO, Lourdes	COMERCIO E IND.	4-112-196
1213	LARA, Bladimiro	MOP	4-82-117
1214	LARA, Luzmila de	LOTERIA	4-106-694
1215	LARA, Maritza de	TESORERIA MPAL.	4-188-91
1216	LARA, Selma A.	ESC. FRANCIA	4-120-2057
1217	LARGAESPADA, Gloribel	ESC. LA ESPERANZA	4-271-347
1218	LAU D., Roberto	BCO. UNIVERSAL	4-81-899
1219	LAY, Omayra de	UNACHI	4-75-454
1220	LEDEZMA, David	F.ICAZA Y CÍA.	4-135-30
1221	LEDEZMA, Diógenes	SAN AGUSTIN	4-147-1181
1222	LEIVA, Nimia de	CONSA	9-70-323
1223	LESCURE, Lorena	AUTO ACC. DAVID	4-227-932
1224	LEZCANO, Celideth	INST. DAVID	4-223-143
1225	LEZCANO, Edith V.	ESC. SAN MATEO	4-118-108
1226	LEZCANO P., Erick D.	COLABANCO	4-100-1281
1227	LEZCANO, Débora de	CAJA AHORROS	4-180-856
1228	LEZCANO, Dilia de	ESC. JOSE M. ROY	4-98-2281
1229	LEZCANO, Esmeralda	SUPER BARU	4-175-505
1230	LEZCANO, Hilda	UNACHI-ADMON.	4-237-44
1231	LEZCANO, Ilka	EL DUPLICADO	4-261-637
1232	LEZCANO, Jorge A.	ESC. FRANCIA	4-115-324
1233	LEZCANO, José	DIR. ADUANA	4-141-71
1234	LEZCANO, Juan	COOP. ECASESO	4-218-538
1236	LEZCANO, Leyda	ESC.LOMA COLORADA	4-113-377
1237	LEZCANO, Magalys	IFARHU	4-181-455
1238	LEZCANO, Maricia	SAN FCO. DE ASIS	4-118-831
1239	LEZCANO, Milciades	ESC. LOMA COLORADA	4-100-1709
1240	LEZCANO, Mirta de	GRUPO BAMBINA	2-58-687

1241	LEZCANO, Modesto	DUWEST	4-143-618
1242	LEZCANO, Nelda de	ESC.LOMA COLORADA	4-139-978
1243	LEZCANO, Olmedo	I P T	4-79-935
1244	LEZCANO, Pamela	SUPER MOTORES	4-702-277
1245	LEZCANO, Rogelio	ARTEFACTOS CH.	6-69-814
1246	LEZCANO, Virna L.	SUPERMOTORES	4-203-895
1247	LEZCANO, Walter	SUPER MOTORES	4-200-123
1248	LINARDO, Gabriel	CABLE & WIRELESS	4-108-961
1249	LIZONDRO, Argelio	GUERRA Y CIA.	4-263-967
1250	LIZONDRO, Harmodio	BCO. GENERAL	4-183-533
1251	LIZONDRO, Rubén	GUERRA Y CIA.	4-106-940
1252	LOAIZA, Alfonso	CABLE & WIRELESS	8-164-1553
1253	LOMBARDO, Oscar	MIDA	9-83-2153
1254	LOPEZ, Arlethys (de)	DIR.TRABAJO	8-232-162
1255	LOPEZ, Carlos	UNACHI-ADMON	4-295-167
1256	LOPEZ, Carmen	BCO. NAL.	4-175-499
1257	LOPEZ, Fernando	P. CICLO E. UNIDOS	4-173-17
1258	LOPEZ, Mitzila	ESC. LASSONDE	4-128-182
1259	LOSILLA, Kimberly de	CONSA	E-4-1747
1260	LUQUE, Angela	SAN AGUSTIN	4-700-55
1261	LUQUE F., Eliécer	COOP. JOSE Mª	4-79-700

-M-

1262	MADRID, Amílcar	IDAAN	4-157-668
1263	MADRID, Carole	UNACHI-ADMON.	4-285-582
1264	MADRID, Eveth de	ESC.S.CRISTOBAL	4-120-2066
1265	MADRID, Gilberto	DIST.LEON SILESKY	4-142-1839
1266	MADRID, Melvin O.	MIGRACIÓN	4-147-1102
1267	MADRID, Neiza de	REGISTRO CIVIL	4-106-581
1268	MAESTRE, Gloria	SAN AGUSTIN	4-149-577
1269	MARAÑA, Idalia	FOC-TARDE	4-125-914
1270	MARAÑA, Yadira de	AGRO PRO	4-155-1516
1271	MARCUCCI, Roque	P. CICLO E.UNIDOS	4-120-964
1272	MARIN, Agzel	UNACHI- ADMON.	4-226-333
1273	MARIN, Betsy	IDIAP	4-183-237
1274	MARIN, Jesús D.	SUPER BARU	4-293-6005
1275	MARQUINEZ, Alberto	AG. NORCAL	4-123-2747
1276	MARQUINEZ, Cielo	A S S A	4-183-764
1277	MARQUINEZ, Hercilia	MORAZAN	4-110-203
1278	MARQUINEZ, Rosa	MED. MILAGROSA	4-236-61
1279	MARTEZ B., Eloy	CARDOZE & LINDO	4-152-88
1280	MARTEZ, José L.	MOP	4-90-139
1281	MARTEZ, Lilia	ESC.JOSE M. ROY	4-167-844
1282	MARTEZ, Luzvenis	ESC. JOSE M.ROY	4-113-440
1283	MARTIN JR., Adrián	COCA-COLA	6-53-855
1284	MARTINEZ, Alma B. de	SAN AGUSTIN	E-4-1744
1285	MARTINEZ, Argelis	AUDITORIA MPAL.	4-139-182
1286	MARTINEZ, Bertilda	UNACHI-ADMON.	2-106-2764
1287	MARTINEZ, Carlos G.	AGRO PRO	4-256-945
1288	MARTINEZ, Delia D.	LIB. REGIONAL	4-220-184
1289	MARTINEZ, Eunomia	C.BASICO SAN MATEO	4-132-610
1290	MARTINEZ, Gloria H. de	UNACHI	4-101-2202
1291	MARTÍNEZ, Ibeth	MED. MILAGROSA	4-186-814
1292	MARTINEZ, José	AG. CRUZ DEL SUR	4-187-443
1293	MARTINEZ, Lourdes	ESC. FRANCIA	4-103-2354
1294	MARTINEZ, Luis	FOC-MAÑANA	4-101-1160
1295	MARTINEZ, Marisol	UNACHI-ADMON.	4-185-35
1296	MARTINEZ, Maritza	ESC.NVO. AMANECER	4-102-6326
1297	MARTINEZ, Miroslava	SUPER MOTORES	4-220-899
1298	MARTINEZ, Oldemar	AG. CRUZ DEL SUR	2-83-899
1299	MARTINEZ, Rodrigo	UNACHI	4-84-242
1300	MARTINEZ, Rosa	AEROPERLAS	4-151-801

1301	MARTINEZ, Rosa de	MIDA	4-147-2483
1302	MARTINEZ, Victoria	CAJA AHORROS	4-179-615
1303	MARTINEZ, Yolanda	EDUCACIÓN	4-146-180
1304	MARTINIS, Mary	ESC. SAN CRISTOBAL	2-78-947
1305	MARTINIS, Regina de	UNACHI	4-106-905
1306	MATOS, Carmen I.	IDAAN	4-143-412
1307	MATOS, Mayda de	UNIV. TEC.	4-142-1669
1308	MATUS, Ileana de	UNIV. TEC.	4-126-47
1309	MATUS, Ricardo	EDUCACIÓN	4-130-546
1310	MATUTE, Ariel	AEROPERLAS	1-43-282
1311	MAYORGA C., Leslie O.	CARDOZE & LINDO	4-147-1
1312	MAYORGA, Luz	MIVI	4-107-679
1313	McKLEAN, Aldo	UNACHI-ADMON.	4-703-98
1314	MEDIANERO, Edenia	MORAZAN	4-98-930
1315	MEDIANERO, Genarina	I.P.T. A. ARIAS	4-98-2113
1316	MEDICA, Jane de	MOP	4-118-485
1317	MEDINA, Alvaro H.	WH DOEL	4-239-214
1318	MEDINA, Dayra de	LIB. REGIONAL	4-217-305
1319	MEDINA, José María	ELÉC. CABALLERO	7-69-2151
1320	MEDRANO, María	MORAZAN	8-149-513
1321	MEJIA, Itzel J.	ALCALDIA	1-43-100
1322	MEJÍA, Nelson	MITSUMOTOR	4-255-647
1323	MELENDEZ E., Anayansi	KENTUCKY	8-515-2366
1324	MELENDEZ, Diva	ECONOFINANZAS	4-263-477
1325	MELENDEZ, Luciano	BIOTECNIA CH.	4-179-212
1326	MELENDEZ, Minerva	P.CICLO E.UNIDOS	4-116-1093
1327	MELENDEZ, Miriam	IFARHU	4-125-2605
1328	MELENDEZ, Víctor	MOT. DEL BARU	4-85-923
1329	MENDEZ, Alba B. de	CONSA FOC-TARDE	4-99-1329
1330	MENDEZ, Cristela	GOBERNACION	4-142-2385
1331	MENDEZ, Denys	ADMON-UNACHI	4-137-1114
1332	MÉNDEZ, Hugo	AUTO SERV. CH.	4-243-1002
1333	MÉNDEZ, José Darío	BANCO NAL.	1-31-834
1334	MENDEZ, Lucila	ESC.NVO. AMANECER	9-175-81
1335	MENDEZ, Mariela	INST. DAVID	4-100-1731
1336	MENDEZ, Nereyda L.	SUPERMOTORES	4-145-240
1337	MÉNDEZ, Nodier	CABLE & WIRELESS	4-82-347
1338	MÉNDEZ, Rosa Nelly	UNACHI	4-125-915
1339	MENDOZA, Esther de	ESC. SAN CRISTOBAL	4-102-2176
1340	MENDOZA, Kathia	AEROPERLAS	1-47-467
1341	MENDOZA, Marcos	CABLE & WIRELESS	4-118-2644
1342	MENDOZA, Rodolfo	UNACHI	8-360-285
1343	MENOCAL Rosa	ESC. JOSE M. ROY	4-125-2216
1344	MERA, Amarilis	TESA	4-263-629
1345	MEZQUITA, María de	SAN AGUSTIN	8-178-490
1346	MIRANDA, Andrés	ECONOFINANZAS	4-264-19
1347	MIRANDA, Aníbal	RDS	8-391-743
1349	MIRANDA V., Auristela	BCO. EXTERIOR	4-148-130
1350	MIRANDA, Aymée	SUPERMOTORES	4-212-578
1351	MIRANDA, Blanca	INST. DAVID	4-139-1697
1352	MIRANDA, Cristino	KENTUCKY FRIED	4-243-226
1353	MIRANDA, Deyanira	MORAZAN	4-111-631
1354	MIRANDA, Efraín	IPACOOP	4-85-757
1355	MIRANDA, Elidio	CABLE & WIRELESS	4-138-1744
1356	MIRANDA, Eliseo	CABLE & WIRELESS	4-97-2396
1357	MIRANDA, Elspith A.	FOC-TARDE	4-138-2624
1358	MIRANDA, Elsy	ADMON-UNACHI	4-195-510
1359	MIRANDA, Emirza F. de	MIGRACION	4-165-18
1360	MIRANDA, Francia	ESC.LOMA COLORADA	4-96-1435
1361	MIRANDA, Franklin	AUTO ACC. DE DAVID	4-153-572
1362	MIRANDA, Federico	VENT.VIDRIERAS	4-158-15
1363	MIRANDA, Graciela	MINJUVE	4-38-530
1364	MIRANDA, Gloria T.	GOBERNACION	4-97-1931

1365	MIRANDA, Haydee M. de	FOC-TARDE	4-101-2044
1366	MIRANDA, Héctor	ARTEFACTOS CH.	4-96-392
1367	MIRANDA, Ilka del C.	ESC.STA. CRUZ	4-142-155
1368	MIRANDA, Isabel	ING. MUNICIPAL	4-127-182
1369	MIRANDA, Ismael	MOTORES DEL BARÚ	4-106-166
1370	MIRANDA, Jorge	CABLE & WIRELESS	4-124-375
1371	MIRANDA, José Domingo	MITSUMOTOR	4-78-675
1372	MIRANDA, Leslia P.	INST. DAVID	4-70-737
1373	MIRANDA G., Leonardo	KENTUCKY	4-192-313
1374	MIRANDA, Lilia	CABLE & WIRELESS	4-97-2275
1375	MIRANDA, Lourdes	BANCO NAL.	4-184-50
1376	MIRANDA, Luis	GUERRA Y CIA.	4-235-769
1377	MIRANDA, Marcia	BANCO NAL.	4-200-573
1378	MIRANDA, María	ECON. Y FINANZAS	8-305-295
1379	MIRANDA, María C. de	CONSA-PRIMARIA	4-118-456
1380	MIRANDA, María del P.	CACECHI	8-804-1830
1381	MIRANDA, Máximo	I D A A N	4-138-2052
1382	MIRANDA, Mirna	INST. DAVID	4-103-1924
1383	MIRANDA, Paciencia de	FOC-TARDE	4-143-153
1384	MIRANDA, Querube	CABLE & WIRELESS	4-141-965
1385	MIRANDA, Romelia	ESC. FRANCIA	4-125-225
1386	MIRANDA, Rosa de	INST. DAVID	4-75-467
1387	MIRANDA, Rosana	U.LATINA-ADMON.	4-190-442
1388	MIRANDA, Nancy de	F.ICAZA Y CIA	4-238-841
1389	MIRANDA, Vielka	ESC. FRANCIA	4-120-2150
1390	MIRANDA, Yira Itzel	FOC-UNACHI	4-81-419
1391	MIRANDA, Yolanda	ADMON-UNACHI	4-82-227
1392	MOJICA, Manuel	COMPRAS MUNICIPIO	4-179-177
1393	MOJICA, María I.	MED. MILAGROSA	4-123-2120
1394	MOJICA, Maritza	MIVI	4-183-228
1395	MOLINA, Dalva A. de	FOC-MAÑANA	8-111-657
1396	MONTALVO, Ima	CAJA AHORROS-MERC.	8-237-253
1397	MONTEMAYOR, Javier	D U W E S T	4-132-529
1398	MONTENEGRO, Amalquí	DIST.DEL NORTE	4-177-619
1399	MONTENEGRO, Aracelly	FELIPE RODRIGUEZ	4-206-214
1400	MONTENEGRO, Ariel	DURMAN ESQUIVEL	4-180-92
1401	MONTENEGRO, Atenay de	MOP	4-132-93
1402	MONTENEGRO, Carlos	LIB. REGIONAL	4-701-884
1403	MONTENEGRO, Celsa	ADMON-UNACHI	4-287-10
1404	MONTENEGRO, Dayra E.	MULTI-IMPRESOS	4-225-139
1405	MOTENEGRO, Denia E.	L. REGIONAL	4-137-1541
1405	MONTENEGRO, Eloy	IDAAN	4-125-224
1406	MONTENEGRO, Emma	CAJA DE AHORROS	4-104-854
1407	MONTENEGRO, Enilda de	MOP	4-106-448
1408	MONTENEGRO, Estela	MORAZAN	4-195-61
1409	MONTENEGRO, Fausto	MIVI	4-274-308
1410	MONTENEGRO, Fulvia Ma.	ADMON-UNACHI	4-90-995
1411	MONTENEGRO, Jacinto	MIDA	4-102-2506
1412	MONTENEGRO, José A.	AGRO PRO	4-106-974
1413	MONTENEGRO, Lucinio	MIDA	4-718-840
1414	MONTENEGRO, Luis	MIVI	4-129-150
1415	MONTENEGRO, Rosa de	TECNOLOGICA-ADMON.	4-1011704
1416	MONTERO, Briseida E.	MAT. MONTERO, S.A.	4-154-661
1417	MONTERO, Denis	I.P.T. A.ARIAS	4-122-619
1418	MONTERO, Doris	DIST. DEL NORTE	4-224-319
1419	MONTERO, Suriani	FOC-MAÑANA	4-103-2571
1420	MONTES, Aida	CABLE & WIRELESS	4-82-347
1422	MONTES, Idalia E. de	I D A A N	4-132-995
1423	MONTES, Elizabeth	MORAZAN	4-79-878
1424	MONTES, Macario	IRHE	4-105-239
1425	MONTES, Pablo	BIOTECNICA CH.	4-16-686
1426	MONTES SAVAL, Rodney	MIGRACIÓN	4-221-751
1427	MONTES R., Santana	COOP. JOSE Mª	4-104-1203

1428	MONTEZUMA, Ismael	SUPER BARU	4-7622079
1429	MONTIEL, Rodolfo	MAREASA	4-702-743
1430	MORA, Amado	INST. DAVID	4-165-559
1431	MORAL, Dalys M. de	FOC-MAÑANA	4-82-64
1432	MORALES, Carlos	CACECHI	4-277-742
1433	MORALES, Clemente	UNACHI	4-176-131
1434	MORALES, Ana Cecilia	COLABANCO	4-245-734
1435	MORALES, Doris Ileana	APEDE	4-271-232
1436	MORALES, Enilsa	INSTITUTO DAVID	4-119-1249
1437	MORALES, Eric	ESC. LASSONDE	4-102-2698
1438	MORALES, Esmeraldo	JOSE Mª TORRIJOS	4-232-962
1439	MORALES, Idalides	C. O. N. S. A.	4-294-903
1440	MORALES, Iliam	CONSA-PRIMARIA	4-258-156
1441	MORALES, Iris	ESC. FRANCIA	4-75-330
1442	MORALES, Isabel	MORAZAN	4-92-43
1443	MORALES, Jorge	FOC-MAÑANA	4-1-2045
1444	MORALES, José A.	MÉNDEZ & MÉNDEZ	4-107-992
1445	MORALES, Josué	UNACHI	4-84-636
1446	MORALES, Lilia de	GOBERNACION	4-97-1931
1447	MORALES, María C.	ESC. REP. FRANCIA	4-126-2391
1448	MORALES, María de	REGISTRO CIVIL	4-173-938
1449	MORALES, María de	ESC. JOSE M. ROY	4-122-2623
1450	MORALES, María de	ECONOFINANZAS	4-244-182
1451	MORALES, María del C.	ESC. JOSE M. ROY	4-102-2182
1452	MORALES, María V. de	I D A A N	4-132-1512
1453	MORALES, Martín	MIVI	4-139-1630
1454	MORALES, Melva	MORAZAN	4-95-853
1455	MORALES, Miriam	ESC. FRANCIA	4-104-2088
1456	MORALES, Narda	ESC. SAN CRISTOBAL	4-120-2190
1457	MORALES, René O.	CH. DE PAPEL	4-121-855
1458	MORALES, Rolando	INST. DAVID	4-155-868
1459	MORALES, Rosa E.	UNACHI	8-274-350
1460	MORALES, Sebastián	GUERRA Y CIA.	4-209-633
1461	MORALES, Vidamides	ESC. LASSONDE	4-100-2360
1462	MORALES, Viena	I.P.T. A. ARIAS	4-118-2308
1463	MORALES, Viviana	UNACHI	4-145-90
1464	MORALES, Yadira	I.P.T. A. ARIAS	4-294-1829
1465	MORANTES, Aracelly de	ESC. JOSE M. ROY	4-120-344
1466	MORENO, Carlos	LIB.REGIONAL	4-215-453
1467	MORENO, Edilberto	SUPER MOTORES	4-713-2146
1468	MORENO, Edilma	ESC. FRANCIA	4-132-5
1469	MORENO, Eneida	MOP	4-110-482
1470	MORENO, Euclides	VENT. VIDRIERAS	4-151-90
1471	MORENO, Héctor	COOP.ECASESO	4-276-959
1472	MORENO, Huguette de	COOP. ECASESO	4-173-814
1473	MORENO, Julia	ANTONIO J.DE SUCRE	4-162-40
1474	MORENO, Irma de	MIVI	4-104-774
1475	MORENO, Laura de	ESC. JOSE M. ROY	2-87-1336
1476	MORENO, Leonides	FOC-TARDE	4-258-74
1477	MORENO, Luis	MAT. FRAGO	4-272-394
1478	MORENO, María A.	INST. DAVID	4-108-253
1479	MORENO S., María del C.	CACECHI	4-102-1862
1480	MORENO, María F.	UNACHI-ADMON.	4-256-925
1481	MORENO, Mireya de	I P T	4-88-56
1482	MORENO, Olmedo	SAN AGUSTIN	6-702-1738
1483	MORENO, Sol A.	AGRO PRO	4-703-939
1484	MORRINSON, Elena	INST. DAVID	4-111-547
1485	MOSES, Dora	ESC. SAN MATEO	8-723-2420
1486	MUÑOZ, Agripina	INST. DAVID	4-127-1778
1487	MUÑOZ, Aurora	FOC-TARDE	4-97-2597
1488	MUÑOZ, Celia Silvia	MORAZAN	4-100-1292
1489	MUÑOZ, Estela	UNIV. TEC.	8-229-844
1490	MUÑOZ, Eulogio	B D A	4-124-2235

1491	MUÑOZ, Josefina	SAN FCO. DE ASIS	9-95-515
1492	MUÑOZ, Lilia	TECNOLOGICA	4-191-642
1493	MUÑOZ, Luis Alberto	SUPER BARU	4-122-215
1494	MUÑOZ, María Elena	PRIBANCO	4-250-585
1495	MUÑOZ, María Piedad de	FERTICA	E-4-1922
1496	MUÑOZ, Mireya	CABLE & WIRELESS	4-75-713
1497	MUÑOZ, Ramón	CABLE & WIRELESS	4-145-499
1498	MURCIA, Luis Carlos	GUERRA Y CIA.	4-704-1606
1499	MURGAS, Deyanira	ESC.NVO.VEDADO	4-112-440
1501	MURGAS, Nellys	UNIV. TEC.	4-160-409
1502	MURGAS, Rafael	DIR. ADUANA	4-210-871
1503	MURILLO, Diana	UNACHI-ADMON.	4-704-1515

-N-

1504	NAVARRO, Absel	CAJA AHORROS	4-262-470
1505	NAVARRO, Analida	F O C-MAÑANA	4-138-1132
1506	NAVARRO, Donald N.	SUPER BARU INT.	4-701-490
1507	NAVARRO, Edilma de	RODELAG	4-152-645
1508	NAVARRO, Erasmo	I D A A N	1-28-658
1509	NAVARRO, Fernando	BANCO NAL.	4-176-615
1510	NAVARRO, Fialeyli	MORAZAN	4-46-221
1511	NAVARRO, Irma de	MIDA	4-126-1388
1512	NAVARRO, María Catalina	FOC-TARDE	4-103-2480
1513	NAVARRO, Rogelio	P.CICLO E.U.	4-124-237
1514	NELSON, Edith	ESC. LASSONDE	4-113-156
1515	NIETO, Elidia	SAN AGUSTIN	8-360-986
1516	NIETO, Jorge	P.CICLO E. UNIDOS	7-71-920
1517	NIETO, Jorge	COLPAN	4-197-407
1518	NIETO, Franklin	GUERRA Y CIA.	4-138-1433
1519	NIETO, Lisla E.	ANTONIO J.DE SUCRE	4-114-10
1520	NIETO, Vielka	ANTONIO J.DE SUCRE	4-246-45
1521	NORORIS, Ledys	IDIAP	4-118-730
1522	NUÑEZ, Diomedes	I.P.T. A. ARIAS	4-105-876
1523	NUÑEZ, Edwin	AGRO PRO	4-716-246
1524	NUÑEZ, Gladys de	MORAZAN	4-117-213
1525	NUÑEZ, Jaime	DIST.LEÓN SILESKY	4-716-667
1526	NUÑEZ, Lorena	F. RODRIGUEZ	4-290-61

-O-

1527	OLAVE, Eivar	FOC-tarde	4-104-1446
1528	OLIVARES, Lesbia de	FOC-MAÑANA	4-74-99
1529	OLIVARES, Manuel S.	CERV. BARU	4-173-461
1530	OLIVARES, Miriam de	LOTERIA NAL.	4-125-1939
1531	OLIVARES, Mirna	ESC. SAN CRISTOBAL	4-124-2673
1532	OLMEDO, Erika	CACECHI	4-268-536
1533	OLMOS, Julieta Esther	REGISTRO CIVIL	1-37-216
1534	OLMOS, Lisseth	ECONOFINANZAS	4-705-225
1535	OLMOS, Telma	ESC. SAN MATEO	4-101-1085
1536	OLMOS, Williams	FOC-TARDE	4-214-879
1537	ON, Cynthia	AG. NORCAL	4-187-824
1538	ON, Iveth Damaris	MULTI-IMPRESOS	4-142-2706
1539	OQUENDO, José	COLPAN	1-7-856
1540	ORDOÑEZ, Ricardo	FINANC. EL SOL	4-189-17
1541	ORO, Néstor	ASSA	4-139-1731
1542	OROCU, Alba	OTEIMA	4-134-1407
1543	OROCU, José	IDIAP	4-177-414
1544	ORRIBARRA, Erick	IDAAN	4-138-2460
1545	ORTEGA, Abdiel	B D A	4-181-375
1546	ORTEGA, Alejandra de	BANCO NAL.	4-105-894
1547	ORTEGA, Angel	UNACHI	4-119-1730
1548	ORTEGA, Aura E.	P. CICLO E. U.	4-136-2622

1549	ORTEGA, Beltrana	INST. DAVID	4-120-1325
1550	ORTEGA, Betzy	P. CICLO E.UNIDOS	4-119-943
1551	ORTEGA, Coralia	MORAZAN	4-100-477
1552	ORTEGA, Crispiliano	FERTICA	4-102-1875
1553	ORTEGA, Dallys	MED. MILAGROSA	4-196-256
1554	ORTEGA, Nestor	MOP	4-145-2
1555	ORTEGA, Odalys	REPUESTOS DELTA	4-714-472
1556	ORTEGA, Rosa I. de	SAN AGUSTIN	4-101-646
1557	ORTEGA, Urracá C.	ESC. FRANCIA	9-182-191
1558	OTERO, Aristides	SAN AGUSTIN	4-116-162
1559	OTERO, Betzaida	IPACOOP	4-175-660
1560	OTERO, Margarita	IDAAN	4-104-2361
1561	OTERO, Natividad	GUERRA Y CIA.	4-192-143
1562	OTERO, Onelio	IDAAN	4-120-1583
1563	ORTIZ, Aladino	INST. DAVID	4-94-861
1564	ORTIZ, Auristela	GOBERNACION	1-39-283
1565	ORTIZ, Balbina	UNACHI-ADMON.	4-115-490
1566	ORTIZ, Elmer	MIDA	4-204-1287
1567	ORTIZ, Francisco	TAGAROPULOS	4-147-1991
1568	ORTIZ, Iris	MORAZAN	4-103-1278
1569	ORTIZ, Iris M. de	UNIV. TEC.	4-177-478
1570	ORTIZ, Isabel	UNACHI-SRIA	4-218-35
1571	ORTIZ, Luris Cielo	DIR. TRABAJO	9-122-976
1572	ORTIZ, María	MORAZAN	4-214-3480
1573	ORTIZ, Mitzila	B D A	4-171-724
1574	ORTIZ, Norma de	UNACHI CONTADOR	9-176-635
1575	ORTIZ, Pablo	IDAAN	8-177-27
1576	ORTIZ, Rosa	IDAAN	4-99-2298
1577	ORTIZ, Shairy de	SAN AGUSTIN	4-104-961
1578	OSORIO, Benjamín	LIB. REGIONAL	4-726-1875
1579	OSORIO, Héctor	UNACHI	4-102-1
1580	OSORIO, O. Moisés	MAQ.REP.OSORIO	4-72-319
1581	OSTIA, Arnaldo	U. LATINA-ADMON.	4-120-314
1582	OTERO, José	SUPER MOTORES	4-234-900

-P-

1583	PACHECO, Samuel E.	F.GOVIMAR	8-526-1437
1584	PALACIOS, Antonio	ROMERO	4-166-624
1585	PALACIO, Celso	GUERRA Y CIA.	4-715-522
1586	PALACIOS, Edna de	ESC. SAN MATEO	4-97-2325
1587	PALACIOS, Lester	GRUPO SÍLABA	4-752-1697
1588	PALACIO, Elvin	CAJA AHORROS	1-49-394
1589	PALACIOS, Eneyda de	USMA	4-139-1669
1590	PALACIOS, Evidelia	COMERCIO E IND.	4-104-1726
1591	PALACIOS, Florencio	ROMERO	4-120-323
1592	PALACIOS, Luis A.	JOSE Mª TORRIJOS	4-120-2295
1593	PALACIOS, Rodrigo	U.LATINA-ADMON.	8-715-498
1594	PALMA, Gabriela de	MULTI-IMPRESOS	4-137-250
1595	PALMA, Gisela	IRHE	4-146-2352
1596	PALMA, Vianet	U.TECNOLOGICA	4-145-508
1597	PALMA, Mayra	MIN. JUVENTUD	4-260-39
1598	PARADA, Yolanda de	AUTO ACC.DAVID	8-125-791
1599	PATIÑO, Eida	ESC. LOMA COLORADA	4-118-1983
1600	PATIÑO, Fernando	ECONOFINANZAS	4-701-1235
1601	PATIÑO, José A.	JOSE Mª TORRIJOS	4-102-1666
1602	PAULETT, Jacqueline de	IDIAP	4-208-515
1603	PERALTA, Gisela	MIVI	4-149-472
1604	PERALTA, Irene de	MIDA	4-114-288
1605	PEÑA, Eliseo	EDUCACIÓN	6-49-1104
1606	PEÑALOZA, Anabel	IPACOOP	1-702-929
1607	PEÑALBA, Cecilia de	CAJA AHORROS	4-184-84

1608	PEREN, Argelis	ESC.LOMA COLORADA	4-139-1075
1609	PEREN, Aristides	UNIV. TEC.	4-139-1673
1610	PEREZ, Agustín	U.TEC.-ADMON.	4-283-550
1611	PÉREZ, Annette	AUTO PARTES CH.	4-142-113
1612	PEREZ, Aristóteles	ESC. JOSE M. ROY	9-203-315
1613	PEREZ, Carlos	ESC. STA. CRUZ	4-113-488
1614	PEREZ, Cecilia de	ALCALDIA	4-137-1076
1615	PEREZ, Fernando	MULTI IMPRESOS	4-175-756
1616	PEREZ M., Ida E.	MIGRACION	4-287-1001
1617	PÉREZ, José	MINJUVE	4-116-287
1618	PEREZ, Marcos	MIVI	4-146-1739
1619	PEREZ, Martha I.	ALCALDIA	4-207-395
1620	PEREZ, Neisa de	ESC.S.CRISTOBAL	4-97-2596
1621	PEREZ, Nora I.	TECNOLOGICA-ADMON.	4-136-1847
1622	PÉREZ H., Rafael	JOYERIA LA PERLA	4-254-312
1623	PEREZ, Roberto	MOTORES DEL BARU	4-70-662
1624	PÉREZ, Trinidad	REGISTRO CIVIL	4-75-808
1625	PEREZ, Zaira	U.LATINA-ADMON.	4-169-249
1626	PIMENTEL, Marlenis	U.LATINA-ADMON.	4-217-397
1627	PINEDA, Bleisy	BCO. UNIVERSAL	4-82-922
1628	PINEDA, Domingo	INST. DAVID	4-105-283
1629	PINEDA, Geovany	SUPER BARU	4-235-934
1630	PINEDA, Ismael	FERTICA	4-158-770
1631	PINEDA, Miguel	MARTIN ALBA	4-127-1049
1632	PINO, Janis	CONSA-PRIMARIA	9-70-1244
1633	PINO O., Juan	CH. DE PAPEL	4-103-1449
1634	PINTO, Javier Q.	MITSUMOTOR	8-294-609
1635	PINTO, Luis	UNACHI-ADMON.	4-147-1296
1636	PINTO, Pablo	INST. DAVID	4-108-346
1637	PINTO, Patricio	IPACOOP	9-135-427
1638	PINZON, Calimerio	ESC. FRANCIA	4-112-2490
1639	PINZON, Carlos	MOTORES DEL BARU	4-205-379
1640	PINZON, Elba R. de	ESC. SAN MATEO	4-95-880
1641	PINZON, Marisela	FOC-MAÑANA	4-117-1510
1642	PINZÓN, Oscar	ADMÓN-UNACHI	2-85-1070
1643	PINZÓN, Vitelio	U.TECNOLOGICA	4-98-1889
1644	PINZON, Yasmín	ESC. JOSE M. ROY	4-103-692
1645	PINZON, Yolanda	TESORERIA MPAL.	4-135-50
1646	PITTI, Adolfo	ECONOFINANZAS	4-186-922
1647	PITTI, Alex	SUPER BARU	4-281-786
1648	PITTY, Alex	MIDA	4-120-1955
1649	PITTI, Alicia de	FOC-MAÑANA	4-86-789
1650	PITTI, Aníbal R.	D.W.DIKERSON	4-197-640
1651	PITTI, Antonio Luis	INST. DAVID	4-142-625
1652	PITTI, Blanca	ESC. JOSE M. ROY	4-216-174
1653	PITTI, Carmen M.	MULTI-IMPRESOS	4-151-376
1654	PITTY, César	GUERRA Y CIA.	4-107-191
1655	PITTI, Darío	CABLE & WIRELESS	4-93-62
1656	PITTI, Edna	FOC- MAÑANA	4-160-981
1657	PITTI, Edita	USMA	4-99-1809
1658	PITTI, Erick	INST. DAVID	4-136-2047
1659	PITTI, Euclides	VENT.VIDRIERAS	4-222-0167
1660	PITTI, Fernando	SUPER BARU	4-195-778
1661	PITTY, Florentino	B D A	4-116-596
1662	PITTI, Graciela	ESC. DOLEGUITA	4-116-1616
1663	PITTY, Heidi	COM. e INDUSTRIAS	4-715-2140
1664	PITTI, José A.	I D A A N	4-140-380
1665	PITTY, Juan José	AG. NORCAL	4-112-879
1666	PITTY, José S.	CABLE & WIRELESS	4-81-354
1667	PITTY, Kathia E.	BRENES Y ASOC.	4-701-710
1668	PITTI, Litabel de	INST. DAVID	4-121-1334
1669	PITTY, Luciano	RDS	1-22-488
1670	PITTI, Nodier H.	AUTO ACC. DAVID	4-256-923

1671	PITTI, Rosa de	CABLE & WIRELESS	4-237-787
1672	PITTI, Wilberto	SAN AGUSTIN	4-106-842
1673	PITTY, Xenia	ESC. SAN MATEO	4-146-532
1674	PITTY, Xiomara de	IRHE	4-116-584
1675	PITTI, Yadira	KENTUCKY	4-212-795
1676	PONCE, Ana T.	I.P.T. A. ARIAS	4-114-361
1677	PONCE, Iván	INDUSTRIAS WAR	4-104-1138
1678	PONCE, Thelma	MIVI	4-97-1153
1679	PONTE, Miriam	ESC. LASSONDE	4-124-848
1680	PORRAS, Fabián	B I P A N	4-102-2087
1681	PORRAS, María del C.	IPACOOP	4-114-555
1682	POTES, Julio E.	BCO. NAL.	8-224-1325
1683	PRADO, Alberto	D. ESQUIVEL	4-253-618
1684	PRADO, Pedro	ECASESO	4-153-485
1685	PUGA, Tomasa	IDIAP	9-63-913

-Q-

1686	QUIEL, Carlos E.	LIB. REGIONAL	4-117-636
1687	QUIEL, Denis	I P T	4-97-2104
1688	QUIEL, Eduardo Elías	AUTO SERV. CH.	4-267-896
1689	QUIEL, Enedina	ESC. SAN CRISTOBAL	4-102-1881
1690	QUIEL, José H.	F. ICAZA Y CIA.	4-225-891
1691	QUIEL, José M.	I R H E	4-94-868
1692	QUIEL, Juan B.	UNIV. TEC.	4-152-720
1693	QUIEL, Juan Ricardo	I D A A N	4-225-695
1694	QUIEL, María de	MED. MILAGROSA	4-111-232
1695	QUIEL, Noris de	BCO. UNIVERSAL	4-199-902
1696	QUIEL, Yolanda	MED. MILAGROSA	4-207-45
1697	QUIJANO, José Luis	ECONOFINANZAS	4-57-150
1698	QUIN, Eva S. de	SAN AGUSTIN	4-102-1308
1699	QUINTANA, Loana I.	CAJA DE AHORROS	4-153-560
1700	QUINTERO, Agustín	PRIBANCO	4-715-81
1701	QUINTERO, Carlos I.	P.CICLO E.UNIDOS	4-101-1621
1702	QUINTERO, Carmina de	ESC. LOMA COLORADA	4-103-1153
1703	QUINTERO, Clara	CONSA-PRIMARIA	9-192-234
1704	QUINTERO, Dallys	MORAZAN	4-94-794
1705	QUINTERO, Darío	MIVI	7-98-401
1706	QUINTERO, Edilberto	I P T	4-81-554
1707	QUINTERO, Edilcia de	MORAZAN	4-100-1819
1708	QUINTERO, Edilma R. de	FOC-TARDE	4-112-920
1709	QUINTERO, Efraín	FOC-MAÑANA	4-56-923
1710	QUINTERO, Elia	MIVI	4-87-70
1711	QUINTERO, Floriselva	FOC-MAÑANA	4-81-283
1712	QUINTERO, Francisca	INST. DAVID	4-210-438
1713	QUINTERO, Guadalupe	LOTERIA	4-97-192
1714	QUINTERO, Gustavo E.	SUPER BARU	4-262-665
1715	QUINTERO, Héctor E.	MITSUMOTOR	4-254-815
1716	QUINTERO, Isaac	UNACHI	4-46789
1717	QUINTERO, José D.	MOP	4-257-519
1718	QUINTERO, Julia	BIBLIOTECA PUBLICA	4-116-880
1719	QUINTERO, Kerly	ECONOFINANZAS	4-278-892
1720	QUINTERO, Luis	U.TECNOLOGICA	4-132-1834
1721	QUINTERO H., Luis A.	COLPAN	4-94-512
1722	QUINTERO, Mayanín	P. CICLO FRANCIA	8-208-2553
1723	QUINTERO, Miceila	ELECOM	4-260-113
1724	QUINTERO S., Milva de	MIN. TRABAJO	8-213-2642
1725	QUINTERO, Mirtha	ING. MUNICIPAL	4-126-1816
1726	QUINTERO, Nelson	COOP. ECASESO	4-124-2532
1728	QUINTERO, Nixia	MINJUVE	4-254-15
1729	QUINTERO, Noris de	MIN. TRABAJO	8-220-339
1730	QUINTERO, Onilsa O.	KENTUCKY	4-230-145
1731	QUINTERO, Ovidio	SAN AGUSTIN	4-122-1969

1732	QUINTERO, Ramiro	ESC. LASSONDE	4-731-2029
1733	QUINTERO, Ramón	R. DELTA	4-197-739
1734	QUINTERO Q., Roberto	CACECHI	4-232-322
1735	QUINTERO, Rosa I.	ESC. FRANCIA	4-103-1527
1736	QUINTERO, Rubiela de	UNIV. TEC.	4-210-397
1737	QUINTERO, Víctor	TECNOLOGICA-ADMON.	4-146-1464
1738	QUINTERO, Yolanda	EDUCACIÓN	4-111-737
1739	QUIROZ, Anel	GUERRA Y CIA.	4-251-238
1740	QUIROZ, Bernardino	FOC-TARDE	4-97-567
1741	QUIROZ, Dioselina	UNACHI-ADMON.	4-256-603
1742	QUIROZ, Duriel	MAT. FRAGO	4-257-461
1743	QUIROZ O., Edita B.	REGISTRO CIVIL	4-233-761
1744	QUIROZ, Jilma Alicia	M. ECONOMIA Y F.	8-364-358
1745	QUIROZ, Jorge	USMA	4-82-896
1746	QUIROZ, Judith	PASAPORTES	4-85-838
1747	QUIROZ, Leyla	IFARHU	4-131-2033
1748	QUIROZ, Noemí de	ESC. SAN CRISTOBAL	4-89-698
1749	QUIROZ, Numy	B D A	4-96-1909
1750	QUIROZ, Xiomara	CACECHI	4-270-1867

-R-

1751	RAMALLI, Linette	SAN AGUSTIN	4-146-2097
1752	RAMIREZ, Javier	AGRO PRO	4-786-428
1753	RAMÍREZ, Marianela	I D A A N	4-105-202
1754	RAMIREZ, Maritza	UNACHI-ADMON	9-90-784
1755	RAMÍREZ, Melvín	DIST.LEÓN SILESKY	4-96-2447
1756	RAMIREZ, Nitzia	ESC.JOSE M. ROY	4-118-2085
1757	RAMÍREZ P., Ovidio	ELECTRICO CABALLERO	4-205-570
1758	RAMÓN, Francisco	UNACHI	7-35-116
1759	RAMOS, Aristides	GUERRA Y CIA.	8-449-047
1760	RANDOLPH, Braci	CABLE & WIRELESS	4-24-1954
1761	RANDOLPH, Oriel J.	TAGAROPULOS	4-146-440
1762	REID, May L.	ESC. SAN CRISTOBAL	4-120-1333
1763	REQUENA, Carmen de	UNACHI	4-142-2467
1764	REQUENA, Héctor	UNACHI	4-101-2704
1765	REQUENA, José M.	MIDA	4-109-383
1766	REQUENA, Pedro	F.ICAZA Y CIA.	4-145-772
1767	REQUENA, Ruth	ANTONIO J.DE SUCRE	4-146-2000
1768	REYES, Carmen	ANTONIO J.DE SUCRE	4-125-1234
1769	REYES, Dagmar	TESA	4-72-838
1770	REYES, Franklin	MORAZAN	4-109-593
1771	REYES, José M.	CABLE & WIRELESS	4-139-1805
1772	REYES, Julio	ROMERO	4-103-1931
1773	REYES S., Manuel A.	JOYERÍA LA PERLA	4-278-7
1774	REYES, Marisabel	RDS	4-702-880
1775	REYES, Maryleila	CABLE & WIRELESS	4-104-1477
1776	REYES, Ruth	ESC. FRANCIA	4-106-44
1777	REYES, Verónica	UNACHI-ADMON.	4-220-606
1778	RIASCO, Javier	CACECHI	1-39-12
1780	RICOY, Isela	MOP	4-243-322
1781	RINCON, Abby	GOBERNACION	4-201-717
1782	RINCÓN, Elia de	INST. DAVID	4-99-1894
1783	RINCON, Itzel de	INST. DAVID	4-88-44
1784	RINCÓN, Kathia	USMA	4-288-35
1785	RINCÓN, Rosaura	MORAZAN	4-103-1083
1786	RÍOS, Adriano	TRIB. ELECTORAL	4-267-115
1787	RÍOS L., Albinia	SUPER BARU	4-211-314
1788	RIOS, Alvaro	COLPAN	4-718-1576
1789	RÍOS, Ana Julia	TESA	4-148-270
1790	RÍOS, Arnulfo	CABLE & WIRELESS	4-108-691
1791	RÍOS, Arturo	UNACHI	4-211-25
1792	RÍOS, Aurelia	CABLE & WIRELESS	4-109-964

1793	RÍOS, Blanca	UNACHI	4-118-1102
1794	RIOS, Deisy	ESC. FRANCIA	4-74-49
1795	RIOS, Fernanda	MED.MILAGROSA	4-119-628
1796	RÍOS, Héctor	MOP	4-121-301
1797	RÍOS, Iris	FOC-mañana	4-103-1418
1798	RIOS, Lucila	I.P.T. A. ARIAS	4-101-2197
1799	RIOS, Luis A.	FERTICA	4-234-37
1800	RIOS, Margarita	INST. DAVID.	4-82-866
1801	RIOS, Marta	SAN AGUSTIN	4-195-27
1802	RIOS, Olinda	UNACHI-CONTADOR	4-139-312
1803	RIOS, Reisa	ESC. SAN CRISTOBAL	4-142-1192
1804	RÍOS, Roberto	I D A A N	4-114-548
1805	RÍOS, Rosa	CAJA AHORROS	1-30-617
1806	RÍOS, Rubén	IDAAN	4-105-204
1807	RIOS, Sélfida	ESC. JOSE M.ROY	4-104-1060
1808	RIOS, Sonia de	LOTERIA NAL.	4-97-1972
1809	RIOS, Viodelda	ESC. DOLEGUITA	4-100-950
1810	RÍOS, Wilmor	VENT.VIDRIERAS	4-272-994
1811	RIVERA, Adelina de	BANCO UNIVERSAL	4-199-602
1812	RIVERA, Alcibiades	AG.CRUZ DEL SUR	4-210-531
1813	RIVERA, Dianeth	ESC. SAN MATEO	4-132-432
1814	RIVERA, Frank	GUERRA Y CIA.	4-272-657
1815	RIVERA, Guillermina	MAQ. Y REP. OSORIO	4-120-543
1816	RIVERA, Javier	MAREASA	4-231-829
1817	RIVERA, Jorge	PRIBANCO	4-153-304
1818	RIVERA, Ida Nelly de	MORAZAN	7-75-535
1819	RIVERA, Mario	ESC. JOSE M. ROY	4-132-207
1820	RIVERA, Miguel	UNACHI	N-18-733
1821	RIVERA, Modesta	MULTICREDIT BANK	4-174-79
1822	RIVERA, Mónica	F.ICAZA Y CIA.	4-700-279
1823	RIVERA, Nélida	IFARHU	4-101-1422
1824	RIVERA, Noel Omar	KENTUCKY	4-237-193
1825	RIVERA, Orys S. de	BIPAN	4-132-125
1826	RIVERA, Sofanor	DIST.LEÓN SILESKY	4-132-1030
1827	RIVERA, Vielka	ALCALDIA	4-169-91
1828	RIVERA, Vielka	CACECHI	4-705-421
1829	RIVERA, Yolanda	UNACHI-ADMON.	4-710-2479
1830	ROBAYO, María del S.	UNACHI	4-106-901
1831	RODRIGUEZ, Abelardo	UNACHI-ADMON.	4-272-503
1832	RODRIGUEZ, Adrián	KENTUCKY FRIED CH.	4-245-914
1833	RODRIGUEZ, Agustina de	ESC. FRANCIA	4-123-145
1834	RODRIGUEZ, Alba Rosa	CONSA	4-205-255
1835	RODRÍGUEZ, Alisa	BIPAN	8-444-738
1836	RODRIGUEZ, Angela de	MORAZAN	8-92-678
1837	RODRIGUEZ, Ariza	U.LATINA-ADMON.	4-228-129
1838	RODRIGUEZ, Atilio	CABLE & WIRELESS	2-87-1175
1839	RODRIGUEZ, Audrey	ECONOFINANZAS	4-710-1181
1840	RODRIGUEZ, Augusta de	LOTERIA NAL.	9-79-159
1841	RODRIGUEZ, Aura	U S M A	2-79-1313
1842	RODRIGUEZ, Beatriz	TRIB. ELECTORAL	4-255-997
1843	RODRIGUEZ C., Carlos	COM. e IND.	4-102-1812
1844	RODRIGUEZ, Carlos	MOTORES DEL BARU	4-114-321
1845	RODRIGUEZ, Carlos	BCO. UNIVERSAL	4-701-2235
1846	RODRIGUEZ, Carmen E.	IFARHU	4-101-2412
1847	RODRIGUEZ, Christian J.	BIO-TECH DE PMA.	4-74-64
1848	RODRIGUEZ, Dalys	ALCALDIA	4-125-2482
1849	RODRIGUEZ, Daniel	DURMAN ESQUIVEL	4-181-918
1850	RODRIGUEZ, Dayra de	UNACHI	4-701-1792
1851	RODRIGUEZ, Diomedes	JOSE Mª TORRIJOS	4-104-2
1852	RODRIGUEZ, Eustaquio	D. ESQUIVEL, S.A.	4-167-255
1853	RODRIGUEZ, Gilberto	P. CICLO E.UNIDOS	3-46-284
1854	RODRÍGUEZ, Héctor	CH. DE PAPEL	4-205-409
1855	RODRIGUEZ, Itza de	B D A	4-101-961

1856	RODRIGUEZ, Iván	BCO. UNIVERSAL	4-710-755
1857	RODRÍGUEZ, Jorge	C.BASICO SAN MATEO	4-101-2049
1858	RODRIGUEZ, José J.	EL DUPLICADO	4-152-85
1859	RODRIGUEZ, José Luis	MIN. TRABAJO	4-173-942
1860	RODRIGUEZ, José Manuel	BCO. NAL.	8-105-176
1861	RODRIGUEZ, Joyce L.	SINAPROC	4-282-484
1862	RODRIGUEZ, Kenny	DIST. DEL NORTE	4-117-261
1863	RODRIGUEZ, Lourdes de	BCO. UNIVERSAL	4-244-941
1864	RODRIGUEZ, Lurdes M.	U. LATINA-ADMON.	4-137-2020
1865	RODRIGUEZ, Luis Olmedo	DIR. ADUANA	4-102-1769
1866	RODRIGUEZ, Luzmila	EDUCACIÓN	4-114-282
1867	RODRIGUEZ, Magda	CONSA	4-191-339
1868	RODRIGUEZ, María	CABLE & WIRELLES	4-174-460
1869	RODRÍGUEZ, María L.	ESC. LOMA COLORADA	4-111-4594
1870	RODRIGUEZ, Mario	ESC. SAN CRISTOBAL	4-101-2102
1871	RODRIGUEZ, Maritza	COOP. ECASESO	4-195-178
1872	RODRIGUEZ, Maritza	MOP	4-104-1770
1873	RODRIGUEZ, Miriam	ALCALDIA	4-132-401
1874	RODRIGUEZ, Mitzy de	SAN AGUSTIN	4-154-660
1875	RODRIGUEZ, Nilva	ESC. REP.FRANCIA	4-101-124
1876	RODRIGUEZ, Odalys de	BIBLIOTECA-USMA	4-124-144
1877	RODRIGUEZ, Olga	CABLE & WIRELESS	4-103-2503
1878	RODRIGUEZ, Onelia J.	MORAZAN	4-104-1769
1879	RODRIGUEZ S., Otoniel	CARDOZE & LINDO	4-221-480
1880	RODRIGUEZ, Pascual	MARTIN ALBA	4-142-1121
1881	RODRIGUEZ, Ramón	TAGAROPULOS	4-89-933
1882	RODRIGUEZ, Rody	AG. NORCAL	4-118-1282
1883	RODRIGUEZ, Rosmery	LLANTAS DE CHIRIQUI	8-305-415
1884	RODRÍGUEZ, Urbano	KENTUCKY	4-219-810
1885	RODRIGUEZ, Xiomara	TRIB. ELECTORAL	1-255-997
1886	RODRIGUEZ, Yajaira	R D S	4-270-217
1887	RODRIGUEZ, Yolanda	ESC. JOSE M. ROY	4-116-731
1888	RODRIGUEZ, Yolanda de	FOC-MAÑANA	4-102-4843
1889	ROJAS, Abigail	IDIAP	4-103-1837
1890	ROJAS, Beverly	CONSA	8-488-228
1891	ROJAS, Damisela	ESC. DOLEGUITA	4-103-1021
1892	ROJAS, Elisa de	ELECOM	4-139-674
1893	ROJAS, Elvira	CABLE & WIRELESS	4-120-468
1894	ROJAS, Liliana de	BIPAN	4-278-814
1895	ROMERO, Emilia	ESC. FRANCIA	4-101-1585
1896	ROMERO, Daysie	UNACHI-ADMON.	4-281-906
1897	ROMERO, Einar	GRUPO SILABA	PE-5-182
1898	ROMERO, José Luis	CERV. DEL BARU	4-75-580
1899	ROMERO, Ricardo	IMP. LAS PERLAS	4-239-400
1900	ROSAS, Amado	BCO. UNIVERSAL	4-211-780
1901	ROSAS L., Dora	BCO. ISTMO	4-215-770
1902	ROSAS, Francisco	IPACOOP	4-89-792
1903	ROVIRA, Miguel A.	I.P.T. A. ARIAS	4-120-2029
1904	ROVIRA, Olga H.	ESC. FRANCIA	4-78-959
1905	ROVIRA, Raúl	ANTONIO J.DE SUCRE	4-118-1343
1906	RUBIO, Agripina	TECNOLOGICA-ADMON.	4-161-831
1907	RUEDA, Aurelia	I.P.T. A. ARIAS	4-104-2607
1908	RUEDA, Marcelino	LIB. REGIONAL	4-102-1446
1909	RUEDA, Rolando	AGRO PRO	4-294-678
1910	RUEDAS, Fredy	COOP. ECASESO	8-399-802
1911	RUILOBA, Elizabeth de	IDIAP	8-147-169
1912	RUIZ, Cinthia	CONSA-PRIMARIA	4-721-31
1913	RUIZ, Jorge	ESC. LASSONDE	9-149-473
1914	RUIZ M., María L.	F.ICAZA Y CIA.	4-137-2294
1915	RUIZ, María Luz	UNACHI-ADMON.	4-155-779
1916	RUIZ, Mario A.	ESC. FRANCIA	4-142-1824
1917	RUIZ, Rosalba	ELECOM	4-142-1691
1918	RUIZ, Santos	CABLE & WIRELESS	4-138-2476

1919	RUIZ, Vielka	ESC.LOMA COLORADA	4-210-646
1920	RUIZ, Xiomara de	UNIV. TEC.	4-125-2716
1921	RUSSO, Carmen de	U. LATINA	8-151-681

-S-

1922	SAAVEDRA, Abdiel	UNIV. TEC.	4-139-629
1923	SAAVEDRA, Jorge	CABLE & WIRELESS	4-103-1731
1924	SAAVEDRA, Nilka	TRIB. ELECTORAL	4-173-847
1925	SAAVEDRA, Rory A.	INST. DEL SABER	4-164-690
1926	SABALOS, Gloria	ESC. SAN MATEO	4-268-396
1927	SAENZ, María de	ESC.S.CRISTOBAL	4-124-1888
1928	SAGEL, Mirian de	MIDA	4-187-661
1929	SALAMANCA, Idalides de	BCO. NAL	4-106-484
1930	SALDAÑA, Aleida de	ESC. JOSE M.ROY	4-113-561
1931	SALDAÑA, Alina	ARTEFACOS DE CH.	4-716-862
1932	SALDAÑA, Arturo	SUPER BARU	4-729-2183
1933	SALDAÑA, Dallys A.	F. GOVIMAR	4-140-755
1934	SALDAÑA, Dilsa	IDAAN	4-169-568
1935	SALDAÑA, Dioselina	C. BASICO SAN MATEO	4-131-961
1936	SALDAÑA, Elba	MORAZAN	4-103-2068
1937	SALDAÑA, Emérita	ESC. SAN MATEO	4-125-2262
1938	SALDAÑA, Emilio	EDUCACIÓN	4-102-1790
1939	SALDAÑA, Esther M.	MIDA-SAN.VEGETAL	4-70-324
1940	SALDAÑA, Gerardo E.	CHASE	4-139-1371
1941	SALDAÑA, Gustavo	AUTO CENTRO	4-755-65
1942	SALDAÑA, Harley	DIST. DEL NORTE	4-30-607
1943	SALDAÑA, Heidis M.	LIB. REGIONAL	4-212-244
1944	SALDAÑA, Horacio	SUPER BARU	4-251-294
1945	SALDAÑA, Idalides	ECONOFINANZAS	4-91-379
1946	SALDAÑA, Isabel de	ESC. N.AMANECER	4-138-90
1947	SALDAÑA, Ismael	GUERRA Y CIA.	4-143-229
1948	SALDAÑA, Ludovina	MORAZAN	4-102-573
1949	SALDAÑA, Luis	IDAAN	4-94-358
1950	SALDAÑA, Marcelina	ESC.DOLEGUITA	4-115-313
1951	SALDAÑA, Ovidio	UNACHI	4-99-924
1952	SALDAÑA, René	UNACHI-ADMON.	4-227-37
1953	SALDAÑA, Rosa	C.BASICO SA MATEO	4-123-1334
1954	SALDAÑA, Rosalina	ESC. LOMA COLORADA	4-122-1250
1955	SALDAÑA, Samuel	BANCO UNIVERSAL	4-208-790
1956	SALGADO, Magda	U.LATINA-ADMON	4-294-1794
1957	SALINAS, Isabel	ESC.STA.CRUZ	4-715-1500
1958	SAMANIEGO, Auristela de	EDUCACIÓN	4-97-2332
1959	SAMANIEGO, Luis	MOP	6-41-206
1960	SAMUDIO, Arquímedez	CABLE & WIRELESS	4-101-282
1961	SAMUDIO, David,	COOP.ECASESO	4-183-050
1962	SAMUDIO, Delitza	ADMÓN-UNACHI	4-140-767
1963	SAMUDIO, Edilberto	ESC.LOMA COLORADA	4-116-2249
1964	SAMUDIO, Edwin	SUPER BARU	4-195-209
1965	SAMUDIO, Elizabeth	ESC. LASSONDE	4-117-26
1966	SAMUDIO, Erick	AEROPERLAS	4-170-436
1967	SAMUDIO P., Fabio	SUPER BARU	4-218-934
1968	SAMUDIO, Freddy	PASCUAL	4-250-253
1969	SAMUDIO, Gladys de	CAJA AHORROS	4-230-960
1970	SAMUDIO, Guillermo	EDUCACIÓN	4-200-36
1971	SAMUDIO, Ivar	CONSA	PE-10-1667
1972	SAMUDIO, Lourdes	CAJA AHORROS	4-704-929
1973	SAMUDIO, Jorge	C.BASICO SAN MATEO	4-102-2298
1974	SAMUDIO, Luzmila	ESC. DOLEGUITA	4-101-720
1975	SAMUDIO, Marissel	SAN AGUSTIN	4-285-948
1976	SAMUDIO, Milagros	P.CICLO E. U.	4-113-64
1977	SAMUDIO, Mirna	INST. DAVID	4-103-1677
1978	SAMUDIO, Otto A.	MAT. FRAGO	4-192-199

1979	SAMUDIO, Octavio	D.ESQUIVEL	4-177-61
1980	SAMUDIO, Roberto A.	AGRO PRO	4-132-447
1981	SAMUDIO, Juana	ESC. N. VEDADO	4-1174-15
1982	SMITH, Javier	FINANCOMER	8-458-529
1983	SANCHEZ, Alexander	UNACHI-ADMON.	4-147-1800
1984	SANCHEZ, Amalia	ESC. STA. CRUZ	4-103-2344
1985	SANCHEZ, Betty de	ADMÓN-UNACHI	4-117-2381
1986	SANCHEZ, César	TECNOLOGICA-ADMON.	4-197-652
1987	SANCHEZ, Corina	DIR. TRABAJO	4-253-61
1988	SANCHEZ, Clara	CABLE & WIRELESS	4-158-480
1989	SANCHEZ, Dimas	TESA	4-113-879
1991	SANCHEZ, Francia de	IDIAP	4-103-438
1992	SANCHEZ, Francisco	MITSUMOTOR	4-95-64
1993	SANCHEZ, Flor	ADMÓN-UNACHI	4-294-699
1994	SANCHEZ, Gabriel	IMP.LAS PERLAS	4-242-236
1995	SANCHEZ, Idalides	IDAAN	4-43-423
1996	SANCHEZ, Irasema	PAZKO	4-703-381
1997	SANCHEZ, Jenniffer	MED. MILAGROSA	4-712-2486
1998	SANCHEZ, José	IDAAN	4-124-793
1999	SANCHEZ, Juan José	M. I. D. A.	4-125-851
2000	SANCHEZ, Julio	JOYERÍA LA PERLA	4-742-291
2001	SANCHEZ, Lorenzo	USMA	4-117-647
2002	SANCHEZ, Luis E.	MITSUMOTOR	4-114-700
2003	SANCHEZ, Luz Marina	AGRO PRO	4-201-709
2004	SANCHEZ, Manuel	FOC-MAÑANA	4-64-445
2005	SANCHEZ, Mariana	ELECOM	8-229-1541
2006	SANCHEZ, Maribel	P.CICLO E.UNIDOS	4-140-292
2007	SANCHEZ, Mariela	P. CICLO E.UNIDOS	4-119-1252
2008	SANCHEZ, Mirna	ESC. SAN CRISTOBAL	4-120-2174
2009	SANCHEZ, Narcelia	MORAZAN	4-108-517
2010	SANCHEZ, Pablo	R D S	4-209-49
2011	SANCHEZ M., Roberto	SWIFT & COMPANY	4-147-387
2012	SANCHEZ, Rosa Elvira	ESC. STA. CRUZ	4-174-314
2013	SANCHEZ, Saidy	BCO. UNIVERSAL	4-270-660
2014	SANCHEZ, Samuel E.	AG. NORCAL	6-53-709
2015	SANCHEZ, Víctor A.	I D A A N	4-103-1991
2016	SANCHEZ, Zaida	ESC. FRANCIA	4-100-1257
2017	SANDOYA, Paola de	USMA	4-142-197
2018	SANJUR, Aurelia de	ESC.DOLEGUITA	4-114-236
2019	SANJUR, Celso	MIN. TRABAJO	4-218-28
2020	SANJUR, Rosita	UNACHI	4-217-424
2021	SAN MARTIN, Abel	IDAAN	4-103-609
2023	SANTAMARIA, Alfredo	AUTO CENTRO	4-714-2010
2024	SANTAMARIA, Argelia de	UNACHI	8-186-5
2025	SANTAMARIA, Danis	MENDEZ & MENDEZ	4-182-927
2026	SANTAMARÍA, Didacio	ESC. SAN CRISTOBAL	4-116-185
2027	SANTAMARIA, Erick	ECONOFINANZAS	4-259-304
2028	SANTAMARIA, Franklin	EDUCACIÓN	4-89-959
2029	SANTAMARIA P., Johny	KENTUCKY	3-96-6
2030	SANTAMARIA, Jorge	AEROPERLAS	4-248-696
2031	SANTAMARIA, José L.	MULTICREDIT BANK	4-235-636
2032	SANTAMARIA, Mercedes	ESC. LASSONDE	4-98-782
2033	SANTAMARIA, Mirla	INST. DAVID	4-98-2581
2034	SANTAMARIA, Ruth	ESC. JOSE M. ROY	1-16-482
2035	SANTAMARIA, Selideth	F. RODRIGUEZ	8-702-1978
2036	SANTAMARIA, Valdemar	TAGAROPULOS	4-208-506
2037	SANTIAGO, Celso	IDAAN	4-112-877
2038	SANTIAGO, José	ALCALDIA	4-217-945
2039	SANTIAGO, Raquel de	ECONOFINANZAS	4-152-725
2040	SANTO, Dallys	ORG. ELECTORAL	4-166-88
2041	SANTOS, Esmeralda	CAJA AHORROS	4-703-367
2042	SANTOS, Domingo	GUERRA Y CIA.	4-17-942
2043	SANTOS, Doris	ESC. STA. CRUZ	4-132-1112

2044	SANTO, Fernando	FERTICA	4-728-242
2045	SARMIENTO, Natividad	D U W E S T	2-115-977
2046	SARMIENTO, Asteria de	MORAZAN	4-92-123
2048	SAUCEDO, Dorila de	CONSA	4-68-998
2049	SAUCEDO, Víctor M.	MULTI-IMPRESOS	4-25-782
2050	SAVAL, Rosa I.	ESC. FRANCIA	4-225-79
2051	SEBALLOS, Manuel	I.P.T. A. ARIAS	4-77-111
2052	SEGOVIA, Einar	ECONOFINANZAS	4-292-46
2053	SEGUIGNOLT, Susett de	ESC. FRANCIA	3-79-961
2054	SERRACIN, Alba	CABLE & WIRELESS	4-147-596
2055	SERRACIN, Benjamín	SUPER BARU INT.	4-237-352
2056	SERRACIN, Cira	UNACHI-ADMON	1-42-952
2057	SERRACIN, Deyaniro	FOC-MAÑANA	4-147-1959
2058	SERRACIN, Elsa de	ESC. STA. CRUZ	4-97-448
2059	SERRACIN, Franklin	MOP	4-71-531
2060	SERRACIN, Iván	ESC. LA PRIMAVERA	4-101-1693
2061	SERRACIN, Juan	I D A A N	4-119-1896
2062	SERRACIN, Maribel	LOTERIA	4-120-2095
2063	SERRACIN, Martha	I.P.T. A. ARIAS	4-120-781
2064	SERRACIN, Norma de	C. O. N. S. A.	4-91-985
2065	SERRACIN, Rodrigo	AG. NORCAL	4-189-30
2066	SERRACIN, Rolando	C. O. N. S. A.	4-261-773
2067	SERRACÍN, Yariela	UNACHI-ADMON.	1-51-470
2068	SERRANO, Aidee de	AUDITORIA MPAL.	4-223-946
2069	SERRANO, Dayra M.	IFARHU	4-140-62
2070	SERRANO, Eliécer	CACECHI	4-714-624
2071	SERRANO, Elma	ESC.LOMA COLORADA	9-175-781
2072	SERRANO, Emigdio	AEROPERLAS	4-229-364
2073	SERRANO, Ericka	MAT. FRAGO	4-705-632
2074	SERRANO, Eusebio	I.P.T. A. ARIAS	1-16-247
2075	SERRANO, Griselda	MORAZAN	4-126-898
2076	SERRANO, Jorge	AEROPERLAS	4-155-1984
2077	SERRANO, José	A S S A	4-98-621
2078	SERRANO, María	MOP	4-103-854
2079	SERRANO, Nilka de	UNACHI-CONTADOR	4-132-1204
2080	SERRANO, Oliver	UNACHI-ADMON.	4-274-663
2081	SERRANO, Ricardo E.	REP. DELTA	8-449-661
2082	SERRANO, Rodrigo	UNACHI-ADMON.	4-215-751
2083	SERRANO, Rubén	BCO. GENERAL	4-257-950
2084	SERRA, Sergio	MIDA	4-98-333
2085	SERRANO, Silvia	ASESA	4-139-932
2086	SERRANO, Yamileth	UNACHI-ADMON.	4-259-250
2087	SEVILLA, Manuel	UNACHI	4-116-2024
2088	SHEFFER C., Teddy	COOP. JOSE Mª	4-270-984
2090	SICILIA, María E.	JOYERÍA LA PERLA	4-81-77
2091	SILAS, Lucas	LOTERIA	4-102-582
2092	SILVERA, Alvin	AG. CRUZ DEL SUR	4-114-725
2093	SILVERA, Domingo	COLPAN CH.	4-137-240
2094	SILVERA, Gloriela	ESC. NVO. VEDADO	4-123-2090
2096	SILVERA, Mirza	CAJA AHORROS	4-101-820
2097	SILVERA, Moisés	UNACHI-ADMON.	4-137-2324
2098	SIRE, Minerva	MED. MILAGROSA	4-280-741
2099	SITTON, Carmen de	I D A A N	4-85-148
2100	SMITH, Amarilis de	I P H E	4-100-1291
2101	SOLANO, Vianka	EDUCACIÓN	8-202-2357
2102	SOLIS, Cristian	ESC. JOSE M. ROY	8-530-1650
2103	SOLIS, Henry	SUPER BARU INT.	4-170-761
2104	SOLIS N., José Luis	MIGRACION	4-166-524
2105	SOTO, José Ramón	SUPER BARU	1-13-5
2106	STAFF, Elia G. de	TRIB. ELECTORAL	4-139-1676
2107	STANZIOLA, Emperatriz	TRIB. ELECTORAL	4-97-2495
2108	SUCRE, Ada	CACECHI	2-150-336
2109	SUIRA, José	UNACHI-ADMON.	4-189-804

2110	SUIRA, Lenys	SUPER MOTORES	4-705-1308
2111	SUIRA, Miriam	IFARHU	4-185-714
2112	SUIRA, Osiris	ALCALDIA	4-212-632
2113	SUIRA, Xiomara	LIB. REGIONAL	4-134-2283

-T-

2114	TAPIA, Carlos	GUERRA Y CIA.	4-101-1222
2115	TAPIA, Edward	C.BASICO SAN MATEO	4-100-135
2116	TAPIA, Eira	INST. DAVID	4-99-1728
2117	TAPIA, Eva	CAJA AHORROS	4-165-936
2118	TAPIA, Lourdes E.	AGRO PRO	4-163-668
2119	TAPIA, Rosa	ESC. JOSE M.ROY	4-122-1766
2120	TAPIERO, Manuel	MAREASA	4-718-82
2121	TAYLOR, Alfredo	BANCO NAL.	4-190-763
2122	TAYLOR, Deika	FELIPE RODRIGUEZ	4-702-1022
2123	TEJADA, Avelino	MIVI	4-149-532
2124	TEJEIRA, Eliseo	ROMERO	4-94-257
2125	TEJEIRA, José Luis	SAN FCO. DE ASÍS	4-101-1775
2126	TEJEIRA, Juan Carlos	SUPERMOTORES	4-700-709
2127	TEJEIRA, Querube	DIR. DE ADUANA	2-58-571
2128	TELLO, Ana Cáceres de	IFARHU	4-103-1718
2129	TELLO G., Dalys E. de	BRENES Y ASOC.	4-208-441
2130	TELLO, Rubén	CERV.BARU	4-104-1062
2131	TEM, Yolanda de	MORAZAN	8-118-39
2132	TERAN, Erick	SUPERMOTORES	4-700-1123
2133	TERAN, Rosemary de	BCO. NAL	4-157-710
2134	TERRADO, Edwin	MOP	4-119-1212
2135	TORIBIO, Nereida	I.P.T. A. ARIAS	4-102-99
2136	TORRES, Abdel	RIEGOS CHIRICANOS	9-124-582
2137	TORRES, Ana	D U W E S T	4-147-2082
2138	TORRES, Ana	ESC. LOMA COLORADA	4-108-921
2139	TORRES, Daysi	UNACHI	4-105-849
2140	TORRES, Elida	ESC. FRANCIA	8-99-37
2141	TORRES, Herlinda	CAJA DE AHORROS	4-94-6
2142	TORRES, Juan B.	FERTICA	2-54-708
2143	TORRES, Leidiana	C.BASICO SAN MATEO	4-142-1421
2144	TORRES, Leidys	UNACHI	4-79-877
2145	TORRES, Mavis de	P. CICLO E.UNIDOS	4-102-999
2146	TORRES, Teodora	P.CICLO DAVID	4-84-753
2147	TOVAR V., Jorge José	COLABANCO	4-266-955
2148	TREJOS, Edilma de	MED. MILAGROSA	4-118-943
2149	TREJOS, Esther Mª de	AG.CRUZ DEL SUR	4-113-231
2150	TREJOS, Graciela	ESC. N. VEDADO	9-156-831
2151	TREJOS, Jorge Iván	SUPER BARU	4-700-344
2152	TRIBALDOS, Amilcar	GUERRA Y CIA.	4-171-758
2153	TROESTCH, Fulvia A.	ESC. FRANCIA	4-126-916
2154	TROESTCH, Nizia	UNACHI-ADMON.	4-139-2221
2155	TROYA, Luis Alfredo	SINAPROC	1-24-1282
2156	TUÑON, Isis de	UNACHI-ADMON.	4-138-2739

-U-

2157	UBIDE, Anela	USMA	4-136-1341
2158	UGARTE, Ana de	OTEIMA	4-96-705
2159	ULATE, Graciela	PASAPORTES	4-101-818
2160	UREÑA, Iván	RDS	4-142-339
2161	UREÑA, Keysa de	CABLE & WIRELESS	4-78-655
2162	URETA, Jorge	UNIV. TEC.	4-138-2374
2163	URIBE, Elida	ECONOFINANZAS	4-727-1830
2164	URIBE, Isabel de	ESC. LOMA COLORADA	4-99-2754
2165	URIBE, Jorge	I.P.T. A. ARIAS	4-103-2049
2167	URRIOLA, Carlos	GASES DE CHIRIQUI	4-157-831

2168	URRIOLA, Edgar	BANCO NAL.	4-101-722
2169	URRIOLA, Lourdes de	I.P.T. A. ARIAS	4-108-874
2170	URRIOLA, Yolanda	RDS	4-212-690
2171	URZAIS, Fernando	USMA	E-4-1876

-V-

2172	VALDES, Alberto	IFARHU	4-95-171
2173	VALDES, Alejandro	EL DUPLICADO	4-136-2137
2174	VALDES, Aracelly	ROMERO	4-97-1672
2175	VALDÉS, Candelario	ESC.NVO.VEDADO	4-118-2773
2176	VALDES, Carmen	ESC. FRANCIA	4-68-950
2177	VALDES, Carolina	ECASESO	4-718-1971
2178	VALDES, Doris de	I.P.T. A. ARIAS	4-115-275
2179	VALDES, Edgar H.	IFARHU	4-138-2067
2180	VALDES, Fabio	RICARDO PÉREZ	4-71-279
2181	VALDES, Flérida de	ESC. STA. CRUZ	4-101-2131
2182	VALDES, Gilberto	INST. DAVID	4-72-307
2183	VALDES, Graciela	TRIB. ELECTORAL	4-71-645
2184	VALDES, Guadalupe A.	REGISTRO CIVIL	8-452-109
2185	VALDES, José	DIST.CH.UNIDA	4-84-76
2186	VALDES, Leonel	CERV.BARU	4-108-616
2187	VALDES, Lilia	ASESA	4-122-1292
2188	VALDES, Luis	INST. DAVID	4-146-441
2189	VALDES, Mercedes	ESC. STA. CRUZ	8-209-1036
2190	VALDES, Omar	UNACHI	4-184-319
2191	VALDES, René	FERTICA	4-100-338
2192	VALDES, Róger	ERA, S.A.	4-147-1859
2193	VALDES, Víctor A.	BUDGET	4-148-399
2194	VALDES, Victorino	EDUCACIÓN	4-80-8
2195	VALDES, Vielca	ANTONIO J.DE SUCRE	4-213-357
2196	VALDES. Virginia	ESC. LOMA COLORADA	4-154-784
2197	VALLEJOS, Lourdes de	AGRO PRO	4-163-668
2198	VALLEJOS, Ruth	SAN AGUSTIN	4-700-29
2199	VANEGAS, David,	MAQ. REP. OSORIO	4-105-69
2200	VARGAS, Alcibíades	FINANC. EL SOL	4-194-469
2201	VARGAS, Angel	F. RODRIGUEZ	4-230-58
2202	VARGAS, César	R D S	4-235-928
2203	VARGAS, Edgardo	LIB. REGIONAL	2-147-71
2204	VARGAS, Flérida	ESC. STA. CRUZ	4-101-2131
2205	VARGAS, Janeth	COOP. ECASESO	4-166-296
2206	VARGAS, Kabiria	CACECHI	4-287-391
2207	VARGAS, Kenelma	BIOTECNICA CH.	8-530-1873
2208	VARGAS, Miguel	CABLE & WIRELESS	4-124-2015
2209	VARGAS, Rodrigo	UNACHI-ADMON.	4-143-877
2210	VARGAS, Rosaira	ESC. LOMA COLORADA	4-103-2475
2211	VARGAS, Víctor	U.LATINA-ADMON.	4-106-282
2212	VASQUEZ, Francisco	UNACHI-ADMON.	4-234-213
2213	VASQUEZ, Gloria	U. LATINA	8-466-624
2214	VASQUEZ, Gloria de	TRIB. ELECTORAL	4-106-434
2215	VASQUEZ C., Carlos A.	MAT. OSORIO	4-142-1673
2216	VASQUEZ, Daniel A.	D.W.DIKERSON	4-202-680
2217	VASQUEZ, Elizabeth de	ESC. LASSONDE	4-104-1305
2218	VASQUEZ, Geovani A.	DIST.LEON SILESKY	4-139-2640
2219	VASQUEZ C., José	CH. DE PAPEL	4-143-878
2220	VASQUEZ, Juan C.	AGRO PRO	4-283-472
2221	VASQUEZ, Luis	BCO. NAL.	4-147-297
2222	VASQUEZ, Miriam de	U. DEL ISTMO	8-282-928
2223	VASQUEZ, Wilfrido	GUERRA Y CIA.	4-070-013
2224	VECES, Adela	INST. DAVID	8-422-799
2225	VEGA, Anarelis	TRIB. ELECTORAL	4-120-391
2226	VEGA, Aracelly	UNACHI	4-101-1036
2227	VEGA, Delia de	IDIAP	4-118-368

2228	VEGA, Denis	GUERRA Y CIA.	4-124-0560
2229	VEGA, Dilma	ESC. SAN MATEO	4-102-957
2230	VEGA, Edda Lin	U.LATINA-ADMON.	4-155-1934
2231	VEGA, Elvira	ESC.JOSE MARIA ROY	4-104-816
2232	VEGA, Filiberto	DIST. DEL NORTE	4-225-349
2233	VEGA, Ira Nadia	ESC. FRANCIA	4-255-819
2234	VEGA, Lucinda	BCO. UNIVERSAL	4-86-651
2235	VEGA, Luis	EL DUPLICADO	4-196-810
2236	VEGA, Luzmila	LOTERIA	4-173-993
2237	VEGA, Mitzila	ESC. SAN MATEO	4-281-23
2238	VEGA, Vielka L.	P. CICLO E.UNIDOS	4-108-914
2239	VEGA, Virgilio	UNACHI-ADMON.	8-98-538
2240	VEGA, Rogelio	UNACHI	4-69-597
2241	VEJERANO, Marcelino	CABLE & WIRELESS	4-2-2660
2242	VELÁSQUEZ, Dionisia	TRIB. ELECTORAL	4-67-440
2243	VELÁZQUEZ, René	C. O. N. S. A.	4-153-423
2244	VELÁZQUEZ, Rita del C.	AGRO PRO	4-237-385
2245	VERGARA, Doris	UNACHI	7-70-2520
2246	VICTORIA, Nidia	ESC.LOMA COLORADA	4-155-913
2247	VIDELA, Eduardo	UNACHI	N-16-486
2248	VIDELA, Milma de	FOC-MAÑANA	8-103-997
2249	VIGIL, Aristides	CHASE MANHATTAN	4-253-316
2250	VILLAFUERTE, Sandra	ESC. FRANCIA	4-103-1811
2251	VILLALAZ, José Alexis	EDUCACIÓN	4-88-478
2252	VILLALÁZ, Magaly	U.TECN.-ADMON.	4-132-346
2253	VILLAMONTE, Aura I.	CABLE & WIRELESS	4-142-682
2254	VILLAMONTE, Eduardo	RODELAG	4-184-16
2255	VILLAMONTE, Harold	USMA	4-146-364
2256	VILLAMONTE, Nodier	MIDA	4-141-496
2257	VILLAMONTE, Velkys	MAT. FRAGO	4-703-340
2258	VILLARREAL, Agustina	ESC. JOSE M. ROY	4-193-61
2259	VILLARREAL, Aixa	F. RODRIGUEZ	4-287-45
2260	VILLARREAL, Alfonso	INST. DAVID	4-95-81
2261	VILLARREAL, Alvinio	U.TEC.-ADMON.	4-104-648
2262	VILLARREAL, Antonino	FINANCIERA EL SOL	4-221-345
2263	VILLARREAL, Dalma	INST. DAVID	4-96-2739
2264	VILLARREAL, Dalma	ECONOFINANZAS	4-243-726
2265	VILLARREAL, Franklin	OSE Mª TORRIJOS	4-104-1035
2266	VILLARREAL, Judy O. de	I D A A N	4-141-178
2267	VILLARREAL, Mitzila	LOTERIA	4-138-525
2268	VILLARREAL, Raúl	U.LATINA-ADMON.	4-158-127
2269	VILLARREAL, Rosa Iris	UNACHI	4-120-10
2270	VILLARREAL, Sandra	FERTICA	4-142-1746
2271	VILLARREAL, Velsy	ECONOFINANZAS	4-700-1239
2272	VILLARREAL, Verónica	CAJA AHORROS	4-704-1912
2273	VILLARREAL, Xiomara	UNACHI-ADMON.	4-204-651
2274	VILLAVERDE, Edgar	ECONOFINANZAS	4-236-314
2275	VILLAVICENCIO, María	UNACHI	4-106-901
2276	VILORIA, Mitzila	MULTI-IMPRESOS	4-125-190
2277	VINDA, Alexis	IRHE	4-178-678
2278	VIQUEZ, Victoria de	FOC- MAÑANA	4-119-736
2279	VISSUETTI, Sol M.	ESC. LOMA COLORADA	2-56-634
2280	VISSUETTU, Yori	UNACHI	4-191-94

-W-

2281	WEDDENBURN, Arturo	FOC-TARDE	4-83-904
2282	WILLIAM, Alberto	MORAZAN	3-69-924
2283	WILLIAMS, Nicolás	MULTI-IMPRESOS	8-265-6
2284	WILSON, Carlos	CONSA FOC-TARDE	4-106-199
2286	WONG, Adelaina de	UNACHI-ADMON.	4-149-926
2287	WONG, Minerva de	CAJA AHORROS	4-98-230
2288	WONG, Siomy	UNACHI	4-111-528

2289 WOODS, Yolanda	MORAZAN	4-113-278

-Y-

2290 YANGUEZ, Jaime	INST. DAVID	4-101-1591
2291 YANGUEZ, Nilda R.	UNIV. TEC.	4-120-5
2292 YANGUEZ, Pablo	U.TEC.-ADMON.	4-224-204
2293 YEE, Roberto R.	TRIB. ELECTORAL	4-104-230

-Z-

2294 ZAMBRANO, EDWARS E.	GRUPO SÍLABA	8-701-2036
2295 ZAPATA, Cecilia	UNACHI-ADMON.	4-741-1079
2296 ZAPATA, Franklin	MOTORES DEL BARU	4-701-620
2297 ZAPATA, Mileydi	ESC. LOMA COLORADA	4-244-762
2298 ZARATE, Luis A.	UNIV. TEC.	PE-6-957
2299 ZELAYA, Miriam de	ADMÓN-UNACHI	4-102-1878
2300 ZURITA, Wilfredo	U. TECNOLOGICA	2-89-1291

Así terminó el acto y para constancia se firma.

(fdo.) SALVADOR DOMINGUEZ BARRIOS
MAGISTRADO PRESIDENTE
(fdo.) ASUNCION CASTILLO (fdo.) CARMEN MENDEZ DE CABALLERO
(fdo.) DAYRA MARIA NAVARRO LEZCANO
SECRETARIA INTERINA